

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA

UNIDAD DE POSGRADO

**La prescripción penal en el Perú (a veinte años de
vigencia del Código Penal de 1991)**

TESIS

Para optar el Grado Académico de Magíster en Derecho con
mención en Ciencias Penales

AUTOR

Alexei Dante SÁENZ TORRES

ASESOR

Pablo SANCHEZ VELARDE

Lima, Perú

2012

«Cuando vemos algo, oímos algo, o en general lo percibimos, sucede de manera regular que lo percibido permanece presente para nosotros un lapso de tiempo, pero no sin modificarse»

**(Edmund Husserl:
Lecciones de fenomenología de la conciencia interna del tiempo, p. 33).**

« (...) la actividad de juzgar tiene naturaleza política»

**(Richard A. Posner:
Cómo deciden los jueces, p. 403).**

**Dedicado: A mi amada MARIA ISABEL, a mi linda hija ENYA, y a
mi recién nacido JESÚS por todas las
privaciones que les ocasioné.**

ÍNDICE GENERAL

Cuadro de abreviaturas	12
Introducción	15
Parte Primera	
Aspectos Generales	22
Capítulo I: Globalización, Política Criminal y Criminalidad Organizada	23
1. La globalización	23
2. La política criminal	27
3. La criminalidad organizada	28
3.1. Definición	29
3.2. Clasificación	31
3.3. Problemas	32
Capítulo II: El Castigo y la Argumentación Jurídico Penal	36
1. El castigo como punto de partida	36
2. La teoría de la argumentación jurídica en materia penal	38
Capítulo III: El Criterio del Tiempo en la Ciencia	41
1. Introducción	41
2. Formulación del problema del tiempo en la prescripción	41
3. Teorías del tiempo	42
3.1. Cronometría	42
3.2. Cronología	42
3.3. Cronografía	43
3.4. Cronosofía	43
4. Categoría y distinciones sobre el tiempo	43
4.1. Tiempo e identidad	43
4.2. Permanencia	43
4.3. Estabilidad vs. Cambio	44
4.4. Medida del tiempo	44
5. Enfoques teóricos	45
5.1. El tiempo según el binbang	45
5.2. El tiempo y la psicología	48
5.3. La teoría de la temporalidad	49
6. Opinión	51
Capítulo IV: Teoría de las Consecuencias Jurídicas del Hecho Punible	53
1. Problemática de las consecuencias jurídicas dentro de la dogmática penal	53
2. Ubicación de la categoría de penalidad o punibilidad	57
2.1. La punibilidad como parte de la teoría del delito	57
2.2. La punibilidad como parte de la teoría de las consecuencias jurídicas	59

Capítulo V: Precisiones Conceptuales	61
1. Condiciones objetivas de punibilidad	61
2. Excusas absolutorias	62
3. Condiciones o requisitos de procedibilidad	63
4. Causales de la extinción de la responsabilidad penal, causas de exclusión de la pena o causas de extinción punitiva del Estado	65
5. Acerca de la clasificación y contenido de las causales o causas de extinción de la responsabilidad penal (CERP)	66
6. Las causales de extinción de la persecución penal	68
6.1. Por el criterio de un hecho natural	68
a. Por muerte del imputado	68
b. Prescripción	68
6.2. Por un acto de gracia	68
a. Amnistía	69
6.3. Por el efecto jurídico de hechos sancionados penalmente	69
a. Cosa juzgada	69
6.4. Por la solución de conflictos privados	69
a. Transacción	70
6.5. Por el comportamiento de la víctima	71
a. Desistimiento	71
7. Acerca de las causales de la extinción de la ejecución de la pena	72
7.1. El criterio de un hecho natural	72
a. Por muerte del condenado	72
b. Por prescripción	72
7.2. Por un acto de gracia	72
a. La amnistía	72
b. El indulto	72
7.3.- Por el comportamiento del autor	73
a. Cumplimiento de la pena impuesta vía sentencia	73
7.4. Por decisión jurisdiccional	73
a. Exención de pena	73
7.5. Por el comportamiento de la víctima	74
a) Perdón del ofendido	74
8. Criminalización - decriminalización	75
9. El Principio de favorabilidad	76
Parte Segunda	
Teoría de la Prescripción y su Aplicación en la Ley Penal	78
Capítulo I: Antecedentes de la Prescripción	79
1. En la historia universal	79
2. En el Perú	80
2.1. Legislación penal y documentos prelegislativos	80
2.1.1. El proyecto de Manuel Lorenzo de Vidaurre de 1828	80
2.1.2. El código penal de Santa Cruz del Estado Sur-Peruano	80

2.1.3.	El código penal de 1863	81
2.1.4.	El anteproyecto de 1877	82
2.1.5.	El anteproyecto de 1900-1902	82
2.1.6.	El proyecto de 1916	84
2.1.7.	El código penal de 1924	85
a.	La ley N° 9014 (Ley de prescripción de la acción penal y de la pena)	85
b.	La ley N° 10203	86
c.	El D. L. N° 17106	87
d.	El D. L. N° 17388	87
e.	El D. Leg. N° 121	87
2.1.8.	El código penal de 1991(D. Leg. N° 635, texto original)	88
a.	Los decretos leyes de emergencia	89
b.	El D.L. N° 25662	89
c.	La ley N° 26314	89
d.	La ley N° 26360	89
e.	La ley N° 26641	90
f.	La ley N° 27939	91
g.	La ley N° 28117	91
h.	La ley N° 28726	91
i.	La ley N° 29407 (concurso de faltas)	92
j.	El D. Leg. N° 1097	97
2.2.	Código Penal Militar Policial (D. Leg. N° 1094, D. Leg. N° 961 y D.L. N° 23214).	97
2.3.	Código de los niños y adolescentes (Ley N° 27337)	99
2.4.	Constitución de 1993	101
Capítulo II: Aspectos Generales de la Prescripción		102
1.	Nomenclatura	102
2.	Naturaleza jurídica	103
2.1.	Teoría material	103
2.2.	Teoría procesal	105
2.3.	Teoría mixta	107
2.4.	Opinión	110
3.	Teorías que fundamentan o proscriben la prescripción	112
3.1.	Teoría positivista del tiempo formalizado	115
3.2.	Teoría de la negación	117
3.3.	Teorías preventivas	117
3.4.	Teoría mixta: Del hecho natural y de la enmienda	118
3.5.	Otras teorías mixtas	119
4.	Definiciones	120
5.	Efectos	121
5.1.	De la persecución penal	121
5.2.	De la ejecución de la pena	125
6.	Técnica legislativa	126
6.1.	Sistemas	126
6.2.	Sistema adoptado por el código penal de 1991	128

7.	Clases de prescripción	129
7.1.	De la persecución penal o acción penal	129
a.	Prescripción Ordinaria	130
b.	Prescripción Extraordinaria	133
7.2.	De la sanción penal o ejecución de la pena	139
a.	Prescripción Ordinaria	140
b.	Prescripción Extraordinaria	142
8.	La interrupción	143
8.1.	De la prescripción de la persecución penal (art. 83)	144
a.	Actuaciones de las autoridades judiciales	144
b.	Actuaciones del ministerio público	144
c.	Si el imputado comete nuevo delito doloso	147
8.2.	De la prescripción de la ejecución de la pena (art. 87)	149
a.	Por el comienzo del cumplimiento	152
b.	Por haber sido aprehendido el condenado a causa de la comisión de un nuevo delito doloso	153
9.	De qué depende el plazo de prescripción de la persecución penal y de la ejecución de la pena	154
10.	La suspensión	159
10.1.	Cuestión previa	159
10.2.	Cuestión prejudicial	160
10.3.	Otro procedimiento	161
10.4.	Suspensión en la prescripción extraordinaria	167
11.	El inicio de la prescripción	171
11.1.	De la persecución	171
a.	Comisión del delito	172
b.	Habitualidad	172
b.1.	Habitualidad como elemento del delito	173
b.2.	Habitualidad como circunstancia agravante genérica	173
c.	Los concursos	174
c.1.	Concurso ideal (Art. 80 tercer párrafo)	174
c.2.	Concurso real (Art. 80 segundo párrafo)	177
d.	La tentativa	178
e.	El delito instantáneo	180
f.	El delito continuado y el delito masa	181
g.	El delito permanente	187
h.	Otros delitos	193
11.2.	De la ejecución	194
a.	Teoría individualista	194
b.	Teoría unitaria	196
12.	La renuncia	196
12.1.	Aceptación	197
12.2.	Renuncia	197
12.3.	Postura de la negación	200
13.	Extinción de la responsabilidad civil	200
13.1.	Teoría Civilista	201
13.2.	Teoría Penal	201

13.3.	Modelo Mixto	203
14.	La imputabilidad restringida o relativa	204
15.	La rehabilitación	208
16.	Las consecuencias accesorias	209
Capítulo III: Otras Cuestiones		211
1.	La prescripción y el conflicto de leyes en el tiempo	211
2.	Casos especiales de prescripción	220
2.1.	De la persecución penal	220
2.2.	De la ejecución de la pena	224
3.	Prescripción de la pena de multa	227
4.	Prescripción de las medidas de seguridad	228
5.	Comentario a la parte final del Art. 99° de la Constitución de 1993 ¿Plazo de caducidad o de prescripción?	231
6.	El plazo de prescripción para funcionarios y servidores públicos	233
7.	Los casos de imprescriptibilidad	247
8.	La contumacia y la prescripción (Ley N° 26641)	257
8.1.	La prescripción según la ley N° 26641 (art. 1°)	257
8.2.	El delito de contumacia (art. 2°)	260
8.3.	La posición de la jurisprudencia y el Tribunal Constitucional	262
9.	La declaración de la prescripción	269
9.1.	De oficio	269
9.2.	Declaración de parte	270
9.3.	Declaración mixta	270
10.	La declaración de prescripción vía acción de revisión	270
11.	La declaración de prescripción vía casación	271
12.	La prescripción y la extradición	273
12.1.	Tratados Multilaterales	274
12.1.1.	El Tratado de derecho penal internacional de 1889	274
12.1.2.	Acuerdo sobre extradición	274
12.1.3.	El código de derecho internacional privado (Código de Bustamante)	275
12.2.	Tratados Bilaterales	275
12.2.1.	Convención para la extradición recíproca de criminales, celebrado con La República Francesa	276
12.2.2.	Convención sobre extradición y declaración referente con el Reino Unido de Bélgica	276
12.2.3.	Tratado de extradición celebrado con el Reino Unido de la Gran Bretaña ampliada a los Estados independientes de Kenya, Malawi, Fiji y Comunidad de las Bahamas según notas intercambiadas con el Perú	276
12.2.4.	Tratado de extradición de criminales con los Estados Unidos del Brasil	277
12.2.5.	Tratado de extradición con Chile	277
12.2.6.	Tratado de extradición con España	278
12.2.7.	Tratado de extradición con Italia	278
12.3.	El código procesal penal del 2004 que derogó lo regulado por la	

Ley N° 24710	279
13.- La prescripción y la asistencia judicial en materia penal	280
14. La Corte Penal Internacional y el Estatuto Penal de Roma	282
15. La convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad	282
16. La convención interamericana contra la corrupción y la convención de las Naciones Unidas contra la corrupción	284
16.1. La convención interamericana contra la corrupción	284
16.2. La convención de las Naciones Unidas contra la corrupción	285
17. La técnica legislativa en la regulación de la prescripción o regla Prescriptivas	286
Parte Tercera	
Contrastación Empírica y Vías Alternativas	287
Capítulo I: Modelo metodológico	288
1. Problemática	288
a. Planteamiento del problema	288
b. Diagnóstico situacional	289
c. Preguntas de investigación	289
2. Objetivos	289
a. Objetivos generales	289
b. Objetivos específicos	289
3. Hipótesis	290
a. Hipótesis	290
b. Variables: Formulación y operacionalización (operativización)	291
b.1. Formulación de variables	291
b.2. Operacionalización de las variables	291
1° Variables analíticas	292
2° Variables empíricas	293
3° Variables instrumentales	294
Capítulo II: Relato empírico	297
1. Relato empírico	297
2. Modelo de ficha de recopilación documental (resoluciones judiciales y otros)	299
3. Modelo de tabla de sistematización de variables	302
Capítulo III: Presentación y análisis de resultados	306
1. Variables analíticas	306
1.1. Aspectos taxativos	306
a. Género de la infracción penal	306
b. Clases de prescripción	307
c. Forma del proceso	309
1.2. Aspectos formales administrativos	312
a. Distrito judicial	312
2. Variables empíricas	314

2.1. Prescripción de la acción penal	314
a. Ordinaria de delitos	314
b. Extraordinaria de delitos	314
c. Plazo legal para delitos y/o faltas	314
2.2. Prescripción de la sanción penal	315
a. Ordinaria para la ejecución de penas impuestas por delitos realizados	315
b. Extraordinaria para la ejecución de penas impuestas por delitos realizados	315
c. Plazo legal para ejecución de penas impuestas realizadas	315
3. Variables instrumentales	315
3.1. Por el cómputo del tiempo	315
a. Según el tipo de infracción penal	316
b. Según el tipo de sanción	318
c. Según las condiciones del agente	319
d. Según la continuidad del plazo de prescripción	323
4. Sobre la argumentación	324
5. La acción civil	325
6. Las sentencias del Tribunal Constitucional	325
Capítulo IV: Presentación de las conclusiones	327
1. Primer problema formulado	327
1.1. Hipótesis confirmada (confirmación afirmativa)	327
2. Segundo problema formulado	327
2.1. Hipótesis confirmada (confirmación negativa)	327
CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS	328
Conclusiones	329
1. Conclusiones de la parte teórica	329
2. Conclusiones de la parte empírica	331
Recomendaciones	334
Propuestas	335
RESUMEN	339
ABSTRACT	341
BIBLIOGRAFÍA	342
ANEXOS	372
1. Textos de los proyectos, anteproyectos, códigos y leyes vigentes y derogadas en la legislación nacional, así como de los documentos prelegislativos	371
1-A Cuadro de proyectos de ley sobre imprescriptibilidad y otros	414
2. Legislación Comparada: códigos penales extranjeros y convenciones	448
3. Cuadro de las ejecutorias de la Corte Suprema de la República (procesadas)	545

4. Cuadro de los acuerdos plenarios (procesados)	634
5. Cuadro de resoluciones del Tribunal Constitucional (procesadas) sobre la problemática hasta la actualidad	671
6. Cuadro de los tratados y convenios de extradición suscritos por el estado del Perú (procesados)	735
7. Cuadro de tratados, acuerdos y convenios sobre asistencia judicial en materia penal suscritos por el estado del Perú (procesados)	742
8. Resoluciones de casos relevantes	748
8.1. CASO: Genaro Delgado Parker, Auto emitido por la Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima de fecha 08 de abril del 2003	749
8.2.CASO: Lucchetti, ejecutoria emitida en el recurso de nulidad N° 4166-2004 por la Corte Suprema de justicia de la República de fecha 27 de abril del 2005	752
8.2.1. CASO: Luksic Craig, Sentencia del TC (H.C. 74-05 Corte Superior de justicia de Lima Fecha: 31 de octubre de 2005)	761
8.3.CASO: Dionisio Romero Seminario, Autoemitido en el incidente N° 014-01-G por la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Lima de fecha 31 de octubre de 2005	775
8.4.CASO: Manuel Hugo Delgado Parker, Ejecutoria emitida en el recurso de nulidad N° 3786-2005 por la Corte Suprema de Justicia de la República de fecha 27 de julio de 2007	781
8.5.CASO: Alan García, Ejecutoria Asuntos varios N°. 21-92 emitida por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de Lima de fecha 26 de diciembre de 2000)	795
8.6.CASO: Aquiles Huamancaja Ramos y otros, Ejecutoria en la consulta N° 1354-2010 por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de fecha 22 de junio de 2010	803
8.7.CASO: Consuelo García Naranjo, Sentencia de Sala Superior, exp.: 11190-1997 de la Corte Superior de justicia de Lima de fecha: 06 de enero de 2012	812
8.8.CASO: Enrique Crousillat, Ejecutoria emitida en recurso de nulidad N° 2674-2004 por la Corte Suprema de justicia de la República, de fecha: 9 de junio de 2005	823
8.9.CASO: Mobotek, Ejecutoria, exp. N°: 20-2003-A.V. de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, de fecha 18 de octubre de 2005)	835
8.10.CASO BTR, Sentencia de sala, exp. N°: 99-09 (527-09) de la Segunda Sala Especializada en lo Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima de fecha 23 de marzo de 2012	839
9. Tabla de resultados de la investigación y sistematización de variables	858
ÍNDICE ANALÍTICO	863

ABREVIATURAS

Anteproy. de CP (1877)	Anteproyecto de Código Penal de 1877
Anteproy. de CP (1900-1902)	Anteproyecto de Código Penal de 1900-1902
Anteproy. de CP (1927)	Anteproyecto de Código Penal de 1927
Anteproy. de CP (2004)	Anteproyecto de Código Penal de 2004
Anteproy. de CP (2010)	Anteproyecto de Código Penal de 2010
Anteproy. CPPG (Bol.)	Anteproyecto de Reforma al Código Penal de Bolivia
	Parte General de los años 2008 y 2009
Anteproy. COGP (Ecu.)	Anteproyecto de Código Orgánico de Garantías Penales de Ecuador
Anteproy. de CP (Sue.)	Anteproyecto de Código Penal de Suecia de 1916
Anteproy. de CP (Suizo de 1916)	Anteproyecto de Código Penal Suizo de 1916
C	Constitución de 1993
CC	Código Civil de 1984
CP (Santa Cruz)	Código Penal de Santa Cruz
CP (1867)	Código Penal de 1867
CP (1924)	Código Penal de 1924
C de Ej P	Código de Ejecución Penal
C de N y A	Código de los Niños y de los Adolescentes
CJM	Código de Justicia Militar derogado
CP	Código Penal de 1991 vigente
C P MP	Código Penal Militar Policial
CH	Código de Hammurabi
CDC	Código de Derecho canónico
C de PP	Código de Procedimientos Penales de 1939
CPP (1991)	Código Procesal Penal de 1991
CPP (2004)	Código Procesal Penal de 2004
CP (Al) o StGB	Código Penal de Alemania
CP (Al de 1870)	Código Penal de Alemania de 1870)
CP (Arg.)	Código Penal de Argentina de 1922
C Ctv (Buenos Aires)	Código Contravencional De la Ciudad de Buenos Aires
PG Proy. de CP Argentino	Parte general del Proyecto de Código Penal para la República Argentina 1937
CP (Aus.)	Código Penal de Austria de 1974
CP (Bav)	Código Penal de Baviera
CP (Bra.)	Código Penal del Brasil
CP (Bra. de 1969)	Código Penal de Brasil de 1969
CP (Bol.)	Código Penal de Bolivia
CP (Ch.)	Código Penal de Chile
CP (Chin.)	Código Penal de China
CP (Col.)	Código Penal de Colombia
CP (Col. de 1980)	Código Penal colombiano de 1980
CP (C.R.)	Código Penal de Costa Rica
CP (C.)	Código Penal de Cuba
CP (C de 1987)	Código Penal de Cuba de 1987
CP (Ecu.)	Código Penal de Ecuador
CP (Esp.)	Código Penal de España
CP (Esp. de 1983)	Código Penal Español de 1983
CP (Est.)	Código Penal de Estonia
CP (El Salv.)	Código Penal de El Salvador
CP (Fr.)	Código Penal de Francia
CICr (Fr.)	Código de Instrucción Criminal francés de 1810

CP (Gua.)	Código Penal de Guatemala
CP (Hod)	Código Penal de Honduras
CP (Ita.)	Código Penal de Italia de 1930 derogado
CP (Ita. de 1889)	Código Penal de Italia de 1899
CP (Jap.)	Código Penal de Japón
CP (Nic)	Código Penal de Nicaragua
CP (Pan.)	Código Penal de Panamá
CP (Pan. de 1986)	Código Penal de Panamá de 1986
CP (Par.)	Código Penal de Paraguay
CP (Por.)	Código Penal de Portugal
CP (Méx. D.F.)	Código Penal de México para el distrito federal
CP (Méx. F.)	Código Penal de México federal
CP (Modelo de P.R.)	Código Penal modelo de Puerto Rico
CP (Sue.)	Código Penal de Suecia
CP (Sui.)	Código Penal de Suiza
CP (Suiza de 1937)	Código Penal de Suiza de 1937
CP (Tos.)	Código Penal de Toscana
CP (T.L.)	Código Penal Tipo para Latinoamérica
CP (P.R.)	Código Penal de Puerto Rico
CP (P.R. 1994)	Código Penal de Puerto Rico de 1994
CP (R. Dom.)	Código Penal de la República Dominicana.
CP (R.)	Código Penal de Rusia
CP (U.)	Código Penal de Uruguay
C de I.C.F.	Código de Instrucción Criminal Francés de 1810
CPC	Código Procesal Civil
CPP (Chile)	Código Procesal Penal de Chile
C. de P.C	Código de Procedimientos Civiles
C. de PP de Colombia	Código de Procedimiento Penal de Colombia del 2004
CCD	Congreso Constituyente Democrático
D. L.	Decreto Ley
D. Leg.	Decreto Legislativo
LECRIM	Ley de Enjuiciamiento Criminal Española
LH	Libro Homenaje
LO (España)	Ley Orgánica 5/2000, de España
N.C.P.P.	Nuevo Código Procesal Penal del 2004
pp.	Página(s)
Prop. Alt. PG de CP España	Propuesta alternativa de la Parte General del Código Penal.
Prop. Anteproy. (España de 1984)	Propuesta de Anteproyecto del nuevo Código Penal de España
Proy. de CP (**)	Proyecto de Código Penal (los dígitos indican el año del citado proyecto)
Proy. de CP (Set. 84)	Proyecto de Código Penal de setiembre de 1984
Proy. de CP (Oct.- Nov. 84)	Proyecto de Código Penal de octubre-noviembre de 1984
Proy. de CP (Ago. 85)	Proyecto de Código Penal de agosto de 1985
Proy. de CP (Mar.- Abr. 86)	Proyecto de Código Penal de marzo-abril de 1986
Proy. de CP (Set. 89)	Proyecto de Código Penal de setiembre de 1989
Proy. de CP (Jul. 90)	Proyecto de Código Penal de julio de 1990
Proy. de CP (Ene. 91)	Proyecto de Código Penal de enero de 1991
Proy. de CP (1916)	Proyecto de Código Penal de 1916
Proy. de CP Alemán	Proyecto de Código Penal alemán de 1962
Proy. Alt. Alemán	Proyecto alternativo alemán de 1966
Proy. de CP Argentino	Proyecto de Código Penal argentino de 1906
Proy. Ref. PG del CP Argentina	Proyecto de reformas de la Parte General del CP de Argentina de 1987
Proy. de CPO (Ecuador)	Proyecto de Código Orgánico Integral Penal del Ecuador

Proy. de CPP (Ecuador)	2010-2011
Proy. de CPP	Proyecto de Código de Procedimiento Penal de Ecuador
Proy. de CP (Salvador)	Proyecto de Código Procesal Penal de Perú de 1996
Proy. de LO de CP (España)	Proyecto de Código Penal de El Salvador de 1994
Proyecto de CPF (Suizo de 1918)	Proyecto de Ley Orgánica de Código penal España
Ob. cit.	Proyecto de Código Penal federal Suizo de 1918
T. Orig. de CP (Brasil)	Obra citada
Trans.	Texto original del Código Penal de Brasil
	Traducido por

INTRODUCCIÓN

La primera década del siglo XXI, signada con cambios notables en el orden económico y político han conmocionado al mundo en general, y el Perú no ha sido ajeno a ello. Así esta influencia se ha caracterizado por un período de importantes reformas y nuevas estrategias en pro del orden social global y regional, a través de la actuación de los distintos mecanismos de control social, los cuales se ha evidenciado también en el derecho en general, así los Estados han adecuado sus legislaciones a través de la suscripción de distintos Acuerdos y Tratados a nivel internacional.

La influencia de estas condiciones macrosociales particularmente ha cobrado relevancia sobre todo en una de las ramas del derecho, como es el derecho penal, y ello se ha materializado a través de reformas en torno a la lucha contra la corrupción, la delincuencia organizada, la inseguridad ciudadana, la delincuencia económica, entre otros.

La configuración de esta reforma se ha llevado a cabo a través de dos procesos que al operar simultáneamente, han generado situaciones contradictorias, por una parte la consolidación de los derechos fundamentales y por otro lado la incorporación de mecanismos de seguridad a todo nivel. Así se generó una tensión constante entre los partidarios de un derecho penal garantista (reforzado con la consolidación de los derechos fundamentales) y los partidarios de un derecho penal emergentista, ahora rebautizado con el nombre de derecho penal de tercera generación o derecho penal del enemigo.

La tendencia garantista, concretizada básicamente en el código penal de 1991 (texto original) ha sido, sin duda, lo más progresista que se ha alcanzado en el Perú en materia de legislación penal, pues en aquella época los planteamientos acogidos provenían de la doctrina dominante a finales de los ochenta, y la reforma se orientó principalmente por tales planteamientos, sin embargo al entrar en vigencia dicho código y regir, prontamente se evidenció que la realidad puso en cuestionamiento la viabilidad de tal progresismo, así varias de las instituciones allí reguladas, pronto se mostraron inaplicables, o su aplicación representaba una debilidad para el sistema penal (crítica constante durante la década de los noventa), pues empezaron a generarse nuevas modalidades delictivas, la inseguridad ciudadana se hacía más intensa, el incremento de los delitos comunes así como sus respectivas modalidades agravadas, el incremento de las actividades terroristas y del tráfico ilícito de drogas, aparecieron nuevas modalidades delictivas, allí nomás se dio el golpe de estado, dándose un giro institucional donde el denominador común fue el incremento de las penas.

La tendencia emergentista, identificada a partir de la vigencia del D.L. N° 25475, se convirtió en permanente, lo que desde la óptica del CP era excepcional. De este modo se produjo una contraposición de prioridades e influencias. En efecto la política penal, y no criminal, estructurada bajo lineamientos de emergencia pasó a ser lo principal, y la orientación del CP lo excepcional. La mejor muestra de esto se tiene en las continuas modificaciones del CP que hasta ahora vienen asfixiando la ya exigua orientación garantista-minimista, con señalar que ya se tiene más de cinco reformas luego de haber

retornado a la democracia referidas a la criminalidad organizada y a la corrupción, en un primer momento y ahora a la inseguridad ciudadana como ya se mencionó.

Así de un modelo de penas leves se viró al otro extremo, al indiscriminado incremento de penas, empero lo común del fracaso de ambas reformas, es que ninguna de ellas se basó en las investigaciones sociojurídicas, cuando lo lógico es que cualquier proceso de reforma serio y a mediano plazo debe ser el producto de una investigación científica, pues esta permite conocer lo mejor posible lo que acontece en la realidad.

Sin embargo, en el campo de las investigaciones sobre derecho penal en el Perú han sido las investigaciones dogmáticas las que mayoritariamente se han realizado, sin embargo estas tienen un escaso valor para orientar este tipo de reformas, pues lo único que buscan es perfeccionar el uso del lenguaje jurídico penal, la coherencia del sistema penal, la consolidación de un paradigma o la teoría penal, empero no para ayudar a controlar o resolver en parte los problemas que la delincuencia diariamente ocasiona, de allí el valor de las investigaciones mixtas en el derecho penal, sin embargo algunos penalistas se resisten a fomentar en los alumnos de pre y postgrado este tipo de investigaciones, y no dejar que sean los sociólogos o los criminólogos los que asuman tal responsabilidad

Así en el Perú existen ejemplos de toma de decisiones equívocas, es el caso de la pérdida de dominio, donde se han dado marchas y contramarchas, y ahora otra vez marchas, o el de la reforma del delito de colusión desleal en medio de la campaña presidencial de junio de 2011 (art. 384 del CP), por lo cual ahora más que nunca surge la imperiosa necesidad de investigar y proponer alternativas, ello con el propósito no sólo de sentirnos parte del problema, sino principalmente ser parte aportante a la solución del mismo, tarea de los estudiosos del derecho hoy en día, más aún si vienen desarrollando nuestra labor en el área de la docencia universitaria, principalmente pública.

Esta perspectiva no es ajena a nuestra realidad, si se asume que el paradigma jurídico dominante en las distintas Facultades de derecho del país e incluso del extranjero, ha sido la predominancia del positivismo, concibiendo al derecho solo como un conjunto de normas o que la única fuente es la ley, situación que hoy va cambiando al asumirse una postura postpositivista por medio de la cual ahora se privilegian los principios o las normas provenientes de la jurisprudencia, sea del Tribunal Constitucional o de la Corte Suprema. Por ende, las fuentes no se reducen a las leyes únicamente, sino también comprende los principios o la misma jurisprudencia.

Algunos todavía sostienen que se legisla y se resuelve bajo una dependencia jurídica externa siguiendo los modelos forjados en otros contextos socioculturales (España, Italia, Alemania, Suiza, entre otros), lo cual sería criticable si sólo se aprecia una mera ley importada (como lo hizo el profesor Hurtado Pozo en su momento). Sin embargo, hoy esto ha ido variando a partir de los aportes de la globalización y el Internet, pues ahora ya no sólo se cuenta con legislaciones extranjeras, sino sobretudo con abundante bibliografía en la que se recogen los postulados teóricos sobre cada tema en particular, así como los aportes de distintas jurisprudencias, tanto de los Tribunales Constitucionales como de las distintas Cortes Supremas, por ende ahora lo que se tiene es el manejo cuidadoso y responsable de la información.

Sin embargo, este proceder no sólo se ha manifestado en el plano de la norma penal, sino también a la doctrina o la teoría. Así es el caso de importar e imponer una teoría o una determinada postura teórica sin considerar nuestra realidad, por ejemplo imponer una exigencia teórica sin el mayor consenso de la comunidad jurídica (por ejemplo, utilizar en una sentencia una postura teórica que no se ha sometido a la comunidad jurídica, o utilizar autores en otra lengua que ni siquiera en su país son aceptados), ya que esta sería una de las nuevas formas en el que la ciencia jurídica se haría criticable y endeble, y por ende, el sistema jurídico deviene en ilegítimo, ello no implica que no se pueden tomar los aportes de estas fuentes, pero siempre considerando nuestra realidad, así se tendría mayor legitimidad social, por ello es importante conocer o aproximarse a la realidad a través de los trabajos de investigación socio-jurídicos, por ello hay una responsabilidad de parte del teórico que asume una teoría, y aunque sobre esto casi no se ha escrito es necesario mencionarlo.

Una muestra de este aspecto doctrinal es la “aparente” dicotomía entre los partidarios de Roxin y los seguidores de Jakobs, así se ha creído que la teoría únicamente se puede desarrollar si es que uno toma partido por una u otra postura, situación nada más falaz e irresponsable, pues se ha pretendido universalizar tal falacia fundamentando que hay sólo dos formas de entender el derecho penal; especialmente en lo referente a la teoría del delito y a la concepción de la pena principalmente, descuidándose otras esferas del derecho penal, que tienen tan igual importancia como las categorías antes descritas.

Y esto se ha apreciado bastante bien a nivel aplicativo, pues los seguidores del modelo de Jakobs con mucha habilidad han marketeado dicho modelo, sin embargo por negación perennizaron el modelo de Roxin. Las consecuencias de esta dicotomía se han hecho de manifiesto en distintas instituciones tales como las diversas instancias del Poder Judicial a través de sus resoluciones, en las Facultades de Derecho de todo el país a partir del desarrollo de congresos, cursos, conferencias, seminarios y otros eventos de corte funcionalista, en la Academia de la Magistratura, concursos que privilegian el modelo de Jakobs, en el Consejo Nacional de la Magistratura, con preguntas orientadas por este modelo, en el Ministerio de Justicia vía distintos proyectos de ley y en el Poder Legislativo a través de los proyectos, dictámenes o exposiciones de motivos de distintas propuestas legales. Pero donde más se ha notado esta influencia ha sido a nivel bibliográfico.

Por qué señalo que la dicotomía es aparente. La respuesta se sustenta en que existen otros paradigmas que explican tan igual, o en algunos casos hasta mejor, las distintas problemáticas del derecho penal, así se tiene otros modelos postulados por autores como Jescheck (uno de los más completos), Maurach, Frister, Hassemer, Schünemann, Hruschka, Baumann, Stratenwerth, Wessels, Kindhäuser, entre otros alemanes o autores italianos tales como Ferrando Mantovani, Fiandaca, o autores como Zaffaroni o Santiago Mir, Quintero Olivares, Berdugo, entre otros.

Esta resistencia no es casual, o no se trata de una mera de opción personal, sino que se refleja más bien un problema de fondo, es decir cuál es el *objeto de estudio* del derecho penal como disciplina científica del conocimiento. En este trabajo no solo se contempla la mera norma como objeto de estudio, o al menos la norma producida por el legislativo, sino también su aplicación o lo que algunos han llamado la norma jurisprudencial, empero por ahora solo dejamos planteada la cuestión para una futura investigación.

Por ello, es necesario reconocer que en el Perú las investigaciones en materia penal empezaron a realizarse fuera del modelo dogmático recién a partir de la segunda década de los noventa, ello debido en primer lugar al reinicio de actividades de la Unidad de Postgrado de la UNMSM, en especial la de Derecho, hoy conocida con las siglas UPGD. Como se recordará ello se debió a la suspensión en el Perú del funcionamiento de los programas de postgrados en la década de los años setenta del siglo XX, así la Unidad de Postgrado de San Marcos reinició sus labores a finales de los ochenta por lo que recién a partir del segundo lustro de los años noventa, se tuvieron nuevamente la realización de investigaciones para la obtención de grados académicos.

En segundo lugar el fomento por parte de los docentes de la UPGD a nivel nacional permitieron que las investigaciones mixtas o sociojurídicas empezaran a ser una opción del conocimiento de la realidad con la única finalidad de ayudar a tomar mejores decisiones y a realizar los correctivos oportunos, o las reformas necesarias para ayudar solucionar los problemas jurídico-penales.

Empero, uno de los problemas que ha generado la investigación sociojurídica y por la cual se le ha criticado, es privilegiar su aspecto puramente cuantitativo, pensándose que las cifras obtenidas luego de un procedimentalismo riguroso justifican la investigación por sí mismas, o por el solo hecho de utilizar la estadística, cuando en este aspecto se deja de lado el aspecto cualitativo. Ello ha originado que de un extremo vaya al otro, al pensar lo que más se necesita es la investigación cualitativa. En todo caso opino que las investigaciones debieran ser cualitativo-cuantitativos, pues el objeto de la investigación es la realidad, y ella no es ni puramente cuantitativa ni puramente cualitativa, sino única.

Aunque en la realidad las investigaciones dogmáticas han seguido y de seguro seguirán, ahora es una opción del investigador saber la limitación de la utilidad de dicha investigación, ahora más que nunca preocupa que los trabajos de investigación presentados y/o publicados no sean considerados dentro de la producción científica en San Marcos, al menos así se ha dejado testimoniado en la última publicación *La producción científica en San Marcos* realizada por el ex-Vicerrector Peña y otros (2011), situación que debiera ser preocupante, pues esto plantea dos opciones generales, una optimista y otra pesimista, la primera implica que los profesores y demás investigadores no comunican de sus investigaciones y publicaciones con lo cual no se las ha considerado por desconocimiento, o la segunda, es que acaso las investigaciones y publicaciones no cumplen los estándares necesarios para ser considerados, situación preocupante dado que frente a esto se tendría que optar por un rediseño de la utilidad de las investigaciones realizadas en la Facultad así como en la Unidad de Post Grado, aunque la idea sería realizar un centro de seguimiento de las publicaciones e investigaciones a fin de que estos trabajos sean conocidos y apreciados en su real valía, sean los que se publican de manera privada (opción voluntaria), y los que se publican en las revistas de la Facultad y la Unidad de Postgrado (cuestión obligatoria), así como las tesis, los Talleres, la Unidad de Investigación y toda revista que lleve el logo de la Universidad (incluso como auspiciadores), sea esta introducción la ocasión para lanzar tal propuesta y que en unos dos o tres años se esté festejando la inclusión de las investigaciones de la Facultad y Unidad de Derecho dentro de la producción científica.

En la actualidad no se puede negar que el debate y la discusión de temas como la categoría de la imputación objetiva, los delitos de infracción de deber, la autoría mediata en aparatos organizados de poder, la omisión, la teoría de la pena, la teoría de la acción entre otros. Aunque lo más interesante de señalar es que estas categorías en muchos casos ha significado un replanteamiento en el derecho penal de temas vinculados a la teoría de las consecuencias jurídicas del delito y sobretodo al tema de tesis aquí planteado como es la prescripción penal, como por ejemplo la prescripción en los delitos de infracción de deber o en los supuestos de criminalidad organizada, o la prescripción en los delitos imputados a personas jurídicas, o delitos culposos entre otros.

De allí que considerando todos estos aspectos me he enmarcado en el estudio e investigación de la cara descuidada y casi desconocida del derecho penal, como lo es la teoría de las consecuencias jurídicas, y siendo este, un trabajo a mediano plazo, sólo se limita a abordar una de las instituciones que comprende tal categoría: ***la prescripción penal***, con el requerimiento mínimo de dos características: a) que fuera de aplicación continua, y b) que respecto a su estudio y conocimiento hubieran escasos trabajos de investigación en el ámbito nacional, pues en la universidad los profesores del pregrado del curso de derecho penal parte general no lo desarrollan dejando al azar su aprendizaje y sobretodo su aplicación (en el año de 1996 realizamos una investigación referida a la prescripción extraordinaria para optar el título de Abogado en la UNMSM, constituyéndose en el primer trabajo de investigación teórica y de campo que abordara la aplicación de esta modalidad como problemática según el código penal de 1991).

El problema de investigación formulado es **¿Cuál es el estado actual de la prescripción penal desde la perspectiva teórica y legislativa, y cuál ha sido el grado de eficacia de la aplicación de la prescripción penal por parte de los magistrados jueces durante los veinte años de vigencia del Código Penal de 1991 en el distrito judicial de Lima y en la Corte Suprema de la República?**

La investigación realizada, contiene en su primera parte aspectos generales que sustentan o enmarcan la presente investigación así se tiene algunas referencias a la globalización, la Política Criminal, la criminalidad organizada y el rol del derecho penal hoy en día, así como la justificación del castigo, la argumentación jurídica y los criterios del tiempo en el binbang, tiempo objetivo, psicológico y la temporalidad, y por último el estudio de la teoría de las consecuencia jurídicas de la infracción penal, así como el contenido de la Punibilidad (Cap. I); también se abordan las causas de extinción de la responsabilidad penal - tanto de la persecución como de la ejecución de la pena -, diferenciándose a su vez éstas de las condiciones objetivas de punibilidad, las excusas absolutorias y las condiciones o requisitos de procedibilidad; además se enfatizan las categorías de criminalización - descriminalización y el principio de favorabilidad (Cap. II).

La segunda parte, se dedica a teorizar los fundamentos de la prescripción y su regulación en nuestra legislación partiendo por los antecedentes legislativos (Cap. I); y los aspectos generales de la prescripción, es decir, su terminología, su naturaleza jurídica, las teorías que la fundamentan, sus conceptos, los efectos, la técnica legislativa utilizada, sus clases, la interrupción, de qué depende su plazo, la suspensión, el momento en que se inicia su

cómputo, la renuncia, la extinción de la responsabilidad civil y la imputabilidad restringida o relativa (Cap. II).

También se han considerado temas específicos en torno a la prescripción, así se tiene la prescripción y el conflicto de leyes en el tiempo, los casos especiales de prescripción (de la persecución y de la ejecución, cuando existen penas conjuntas o alternativas), la prescripción de las medidas de seguridad, la problemática del art. 99 de la Constitución, el plazo de prescripción tratándose de funcionarios y servidores públicos, los casos de imprescriptibilidad, el análisis de la Ley N° 26641 (ley de la contumacia y la prescripción), la declaración de prescripción, y la posibilidad de tal declaración vía una acción de revisión o la casación, y la prescripción en la extradición así como de la asistencia judicial en material penal (Cap. III), las Convenciones contra la corrupción y la técnica legislativa.

El uso de las fuentes provenientes del derecho comparado (legislación de 37 países en el ANEXO 2, jurisprudencia y doctrina), la jurisprudencia de la Corte Suprema (así como los 13 Acuerdos Plenarios, ANEXO 4) y del Tribunal Constitucional, algunas resoluciones de casos significativos en el subsistema anticorrupción, los proyectos (65 documentos, ANEXO 1-A) y anteproyectos de ley sobre la materia, Tratados de Extradición (25 suscritos, en el ANEXO 6) y de Asistencia Judicial en Materia Penal (20 suscritos, en el ANEXO 7) que se encuentran a lo largo de todo este trabajo, en lo que ha resultado pertinente la utilización de todos estos materiales documentales debidamente procesados.

También se consignan los resultados de la investigación de campo de una muestra de 1140 resoluciones de juzgados y ejecutorias de la Corte Suprema, obteniéndose a partir de el procesamiento de 1065 resoluciones correspondientes a 19 de los 40 juzgados especializados en los penal, específicamente a la carga procesal de los años 1997 (508 documentos resoluciones) y 1998 (557 documentos resoluciones). Asimismo se tiene de un total de 760 de las ejecutorias supremas de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de los años 2009 (30 documentos ejecutorias) y 2010 (21 documentos ejecutorias), se utilizaron todas las ejecutorias referidas a prescripción que son en total 51 resoluciones en esta investigación, además se consideró 24 ejecutorias, de las cuales 17 corresponden a la Sala Penal Permanente (años 2007, 2008, 2010 y 2011) y 7 corresponden a la Primera y Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema (años 2004, 2010, 2011), que si bien su procesamiento no altera los datos obtenidos de la Primera Sala Penal Transitoria, no se considera relevante el independizarlas, dado que no se pudo tener acceso al universo de algún año completo en particular, razón por la cual básicamente se utilizó para la parte teórica de esta investigación (de allí que figure en el ANEXO 3). Así de toda esta información se han obtenido resultados relevantes bajo el modelo de la investigación mixta, los mismos que confirman las hipótesis formuladas, y a su vez han permitido establecer las respectivas conclusiones, recomendaciones y sustentar las propuestas de ley (*de lege ferenda*), como aportes al perfeccionamiento de la legislación nacional.

En lo referente al Tribunal Constitucional (ANEXO 5) se tienen 43 resoluciones en materia de prescripción penal, considero las más representativas a partir de la fijación del correctivo de interpretativo de limitación del plazo razonable, básicamente se utilizaron cada uno de estas sentencias en la parte teórica de este trabajo, específicamente en los

capítulos correspondiente a temas como las causales de suspensión, la imprescriptibilidad, entre otros.

Asumiendo la tarea de la docencia y la investigación, las cuales hemos asumido con un pleno compromiso social en estos casi doce años, es también pertinente agradecer a mis alumnos y ex alumnos, por el esfuerzo y colaboración en el desarrollo de estas tareas, fortaleciendo los lazos de amistad, trabajo en equipo, proactivismo, menos procrastinación y más compañerismo, todo esto con la única finalidad de mantener vigente la hermandad sanmarquina y el compromiso con nuestro amado Perú.

Debo también reseñar que nunca olvidaré que el día que se presentó la oportunidad de viajar a hacer un postgrado en España gracias al apoyo y gestión del profesor Víctor Prado Saldarriaga y que por motivos personales no viajé, asumí el compromiso que si me quedaba en nuestro país realizaría mi postgrado de la mejor manera y cómo no conseguirlo con profesores como don Florencio Mixán Mass y Aníbal Ismodes Cairo (ambos en la dicha del Señor), Alejandro Solís Espinoza, Pablo Sánchez Velarde, Víctor Prado Saldarriaga, César Landa Arroyo, Jorge Carrión Lugo, Arsenio Oré Guardia, Javier Villa Stein entre otros por esos cuatro años que pasamos exponiendo, discutiendo y debatiendo, dentro y fuera del horario de clases en nuestro viejo local de la avenida Wilson, o los café en el Casino de Policía, así me enrumbo a cumplir el primer nivel de este postgrado como lo es la Maestría en Ciencias Penales.

Es oportuno el momento para agradecer a mi asesor y maestro sanmarquino doctor Pablo Sánchez Velarde por sus constantes consejos y sugerencias en la realización de este trabajo, a don Florencio Mixan Mass (in memoriam) y al licenciado Mario Portocarrero Quintana, quienes me asesoraron desde la perspectiva metodológica, a la humildad y atención del doctor Mario Amoretti Pachas, a José Antonio Ñique de la Puente quien viabilizó mi rumbo en al docencia universitaria de pregrado en San Marcos, a don Percy Peñaranda Portugal ejemplo de humildad y de constante pertinencia y perfil bajo, y a mi profesor de parte general Felipe Villavicencio Terreros, maestro y amigo, y como un homenaje póstumo al doctor Julio Sáenz Elguera (también en la dicha del Señor) quien me hizo ver el camino de la ciencia y en especial la epistemología, conjuntamente con otro profesor como lo fue el doctor Obando (profesor de introducción a la ciencia en el primer año de facultad).

Finalmente quiero testimoniar, que toda esta labor ha sido posible gracias a mis alumnos, y ex alumnos, de las distintas universidades donde me ha tocado desarrollar la labor docente (UNMSM, UIGV, UNFV, UCV y otras), en estos casi doce años de docencia, así como a los discentes y magistrados de la AMAG y a los colegas del CAL, quienes con sus preguntas en clase, o en los Congresos Nacionales e Internacionales a través de sus ponencias, o con sus tesis o tesinas, o con sus expedientes para la obtención del título de abogado motivaron el realizar y concluir esta investigación que la presento con ocasión del 461 aniversario de mi Alma Mater. Agradezco también a mis ahora colaboradores que seguro más adelante darán que hablar por sus dotes para la investigación y sus valores personales tales como la lealtad y pertinencia, Manuel Edwin Purizaca Alburqueque, Lucía Alvarado La Rosa, Luz Sindy Rivera Sánchez de seguro siempre recordarán el verano y otoño del presente año.

Lima, otoño de 2012.

PARTE PRIMERA
ASPECTOS GENERALES

CAPÍTULO I

GLOBALIZACIÓN, POLÍTICA CRIMINAL Y CRIMINALIDAD ORGANIZADA

1. LA GLOBALIZACIÓN.

La globalización ha significado todo un proceso de cambios que se ha manifestado no sólo en la economía del mundo, sino también en el derecho, y esto debido a la aparición de nuevos hechos sociales tales como el incremento de los negocios internacionales entre los distintos países, los viajes migratorios de una parte del mundo a otra, los conflictos armados sea por el petróleo, los diamantes y recursos naturales, el auge de la economía de China, el resurgimiento de Rusia, la crisis en los Estados Unidos, etc., todo lo cual implica el establecimiento de un nuevo orden mundial, ahora ya diferente al iniciado luego del fin de la guerra fría, donde muchos pensaron que la hegemonía del mundo y por ende de dicho orden significaba el predominio a todo nivel de los Estados Unidos, situación que ahora sólo se limita al ámbito puramente militar.

Por estas razones también el derecho ha tenido que adecuarse como parte de este proceso, que aún se mantiene vigente. Algunos autores como OTFRIED HÖFFE, partiendo de la interculturalidad sostiene que “Si se entiende a la cultura como un conjunto complejo de determinados valores, convicciones y normas de acción, entonces se espera de toda justificación que sea válida siempre en dependencia de su respectiva cultura y, por tanto, nunca más allá de esa cultura. Mi tesis es que ello no es aplicable ni a los fundamentos del derecho penal, ni a todos los delitos, a lo objetivamente ilícito, ni tampoco a los criterios de responsabilidad propia, a la culpa subjetiva, y mucho menos a los principios básicos de procedimientos penales”¹.

Conforme se aprecia, entonces sí es posible compartir algunos aspectos de mutuas exigencias culturales o recíprocas entre las distintas culturas, sobretudo en el aspecto jurídico penal.

Sin embargo, se han limitado los alcances y los efectos de la globalización, estableciendo dos relativizaciones, por un lado el movimiento contrario a dicha globalización basado en “la autoconciencia de ciertas regiones y la formación de corporaciones territoriales, la fragmentación de alguna que otra megalópolis en grupos étnicos y culturales separados y, al menos en las jóvenes democracias, el fortalecimiento del espíritu nacional” y por otra la relativización “de índole histórica”².

De esto se aprecia que el derecho penal se ha convertido en un vehículo donde la influencia de la globalización es trascendente más aún si se considera a la criminalidad como un fenómeno donde se ha alcanzado un vertiginoso crecimiento en lo que hoy se

¹ Höffe (2000), pp. 18 y ss. Acaba de publicarse una segunda edición traducida al castellano.

² Höffe (2000), pp. 225 y ss. Por su parte hay que tomar en cuenta los aportes del profesor Emiliano Borja Jiménez sobre los fundamentos del derecho penal indígena (2001), p. 190.

llama criminalidad global. Sobre este término han surgido algunas posiciones que a continuación se pasará a referir muy brevemente.

FERRAJOLI sostiene que “la existencia de una criminalidad internacional globalizada, en el sentido de que su actividad se desarrolla a escala transnacional e, incluso, planetaria a la par de las actividades económicas de las grandes corporaciones multinacionales”³. Así a partir de esta idea se afirma que “la criminalidad global es causa y efecto de la profunda crisis que (...) sufre el derecho”⁴.

Así mismo, este autor ha establecido una definición jurídica de la globalización al señalar que “la definiría como un vacío del derecho público a la altura de los nuevos poderes y de los nuevos problemas, como la ausencia de una esfera pública internacional, es decir, de un derecho y de un sistema de garantías y de instituciones idóneas para disciplinar los nuevos poderes desregulados y salvajes tanto del mercado como de la política”⁵.

En sentido distinto se ha pronunciado el profesor VOGEL, quien niega que la criminalidad global haya afectado a todo el mundo, así “la globalización, (...) más que modificar la criminalidad ha modificado la percepción de determinadas formas de criminalidad que son consideradas como un problema global aunque en sí mismas no tengan esta dimensión. Esto hace que hechos locales adquieran, a través de la creciente influencia de los *mass media*, resonancia global. Así ocurre, por ejemplo, con los delitos contra la humanidad que por regla general no tienen el carácter de criminalidad global sino local”. De esta forma este autor, aunque acepta que en general las violaciones graves contra el derecho internacional humanitario y los derechos humanos “son consideradas como un problema global”, considera que, por sí mismas, no tienen una dimensión global sino que representan una preocupación global respecto a crímenes locales (“global concern over local crimen”)⁶.

Otro autor que ha definido la globalización es ULRICH BECK, quien sostiene que es “regionalización a nivel sub y supranacional”⁷.

NATACHA VIADA comentando a VOGEL señala “lo cierto es que el término “criminalidad global” no puede ser una mera referencia a aquellos delitos que se cometen comúnmente en cualquier parte del mundo (ya que, de lo contrario, el hurto sería un crimen global), ni aquellos que, simplemente, incluyen elementos de extranjería (que son meros delitos transnacionales). Por el contrario, tal como sostiene Vogel, el término “criminalidad global” lleva implícito un plus de gravedad tanto cualitativo como cuantitativo. Este plus de gravedad es el que está justificando que, en la práctica, se estén adoptando medidas excepcionales tremendamente restrictivas de derechos fundamentales”⁸.

³ Ferrajoli, L. (enero-abril, 2006). *Criminalidad y globalización*; p. 301.

⁴ Viada (2009), p. 32.

⁵ Ferrajoli (2006), p. 302.

⁶ Viada (2009), p. 34, quien comenta la postura del profesor Vogel distanciándose de Ferrajoli.

⁷ Beck (1998), p. 216.

⁸ Viada (2009), p. 34.

Uno de los aspectos importantes a dilucidar es cuándo se prefiere la legislación penal global a la legislación penal nacional y qué criterios se ha de utilizar para ello. Así VOGEL, siguiendo a SCHUNEMANN, “propone desterrar el Derecho penal global que contraviene elementos que son indisponibles en distintas culturas y limitarlo a tres ámbitos:

- Un Derecho penal global de protección de bienes jurídicos globales, como el medio ambiente o los derechos humanos, que ya no pueden ser efectivamente protegidos por los derechos nacionales.
- Un Derecho penal global natural de los tipos comunes a todas las naciones basado más en el reconocimiento mutuo que en la armonización.
- Un Derecho penal global de las «neocriminalizaciones» que sea aceptable para todas las culturas”⁹.

Por su parte FERRAJOLI, desde una postura más universalista, afirma que “la respuesta de los poderes públicos a la nueva criminalidad es totalmente inadecuada ya que los medios tradicionales son ineficaces, y propone un cambio de paradigma, en la dirección tomada por la creación de la CPI [Corte Penal Internacional]. Es decir, desarrollando formas globalizadas de Derecho penal y de protección de los Derechos que estuvieran a la altura de la globalización del crimen”¹⁰.

La ausencia aún de una legislación global conduce a mantener dos opciones, el endurecimiento del derecho penal vía legislación y la inflación del derecho penal no teniendo más opción que incluso aplicar el derecho penal del enemigo.

Sobre el derecho penal del enemigo, una de las nociones más interesantes es la propugnada por MIGUEL POLAINO-ORTS a quien se cita a continuación:

«Todos los Estados democráticos actuales emplean normas de Derecho penal del enemigo para combatir determinadas formas de criminalidad especialmente peligrosa (terrorismo, criminalidad organizada, violencia contra la mujer, etc.). Esas normas son, en ocasiones, excesivas en su rigor. La razón de dicho exceso radica no en que sean normas de Derecho penal del enemigo, sino en que no siempre se delimita correctamente el presupuesto habilitante de tal rigor punitivo, esto es: en que es un Derecho penal del enemigo incorrectamente aplicado: un Derecho penal del enemigo ilegítimo. Por ello, se concede ese contundente tratamiento jurídico a casos que no merecen tal contundencia, sino para los que es suficiente un tratamiento más flexibilizado, acorde a la entidad del delito, a la peligrosidad del autor, y –por tanto– proporcional y justo. Este tratamiento jurídico proporcional y justo es, ni más ni menos, el Derecho penal del enemigo en sentido funcionalista, el cual –no obstante la avalancha de opiniones contrarias que han ofrecido una desenfocada visión de él– propugna y defiende un tratamiento que exige que se compruebe exactamente la peligrosidad

⁹ Viada (2009), p. 43, aquí la autora cita a Schunemann a través de Vogel.

¹⁰ Viada (2009), p. 44.

del sujeto antes de proceder contra él de manera más asegurativa: sin esa previa comprobación es ilegítimo combatir al enemigo como enemigo»¹¹.

Por su parte SILVA SÁNCHEZ utilizando su propia terminología formula la noción de la tercera velocidad de Derecho penal que:

“existe ya, en amplia medida en el Derecho penal socio-económico (...), mi punto de vista es que, en este caso, su ámbito debe reconducirse ya a la primera, ya a segunda velocidad mencionadas. Ahora bien ¿significa esto que no debe quedar espacio alguno para un Derecho penal de tercera velocidad? Esto es ya más discutible, si tenemos en cuenta la existencia, al menos, de fenómenos como la delincuencia patrimonial profesional, la delincuencia sexual violenta y reiterada, o fenómenos como la criminalidad organizada y el terrorismo, que amenazan con socavar los fundamentos últimos de la sociedad constituida en Estado. Sin negar que la “tercera velocidad” del Derecho penal describe un ámbito que debería ser deseablemente reducido a la mínima expresión, aquí se acogerá con reservas la opinión de que la existencia de un espacio de Derecho penal de privación de libertad con reglas de imputación y procesales menos estrictas que las del Derecho penal de la primera velocidad es, seguramente, en algunos ámbitos excepcionales y por tiempo limitado, inevitable”¹².

De esto se aprecia que la categoría del derecho penal del enemigo o el derecho penal de tercera velocidad se ha constituido como una opción muy apetitosa para los gobernantes de turno, ya que permite “justificar” los procesos de maximalización del derecho penal bajo la orientación de una política penal como la concibió FRANCO BRICOLA¹³, quien sostuvo que por política penal ha de entenderse “aquella que se dirige globalmente a la tutela penal de todos los intereses más significativos en un contexto social”.

También se ha manifestado en torno a la globalización que “en su formulación más sencilla, alude a un cambio o transformación en la escala de las organizaciones humanas, que pone en contacto a comunidades alejadas y que acrecienta el alcance de la relaciones de poder por todas las zonas del mundo. El perfil de este cambio puede trazarse examinando cómo aumenta la escala, crece la magnitud, se acelera y acentúa el impacto de los flujos y las pautas de interacción social transcontinentales. Aunque la globalización genera tupidas tramas de actividades y redes transfronterizas –económicas, políticas, legislativas, sociales y medioambientales, entre otras–, no tiene necesariamente que prefigurar la aparición de una sociedad mundial armoniosa o de un proceso de integración entre las naciones y culturas, porque la conciencia de la creciente interconexión no sólo crea nuevas formas de entendimiento, sino que alienta profundas animadversiones y conflictos. Como una proporción considerable de la población mundial se ve en gran medida excluida de los beneficios de la globalización, ésta puede convertirse en un fenómeno enormemente divisivo. La irregularidad de la globalización garantiza que ésta no es en absoluto un proceso universal que experimentan de modo uniforme todos los países.”¹⁴

¹¹ Polaino-Orts (2009), p. 688.

¹² Silva (2011), pp. 183-184.

¹³ Gómez Benítez, J. M. (1982). *Crítica de la política penal del orden público*, p. 51.

¹⁴ Held (2005), p. 23.

Algunos otros autores han enfocado el tema utilizando la categoría de la modernidad y más específicamente un derecho penal moderno, así lo ha planteado LUIS GRACIA MARTÍN para quien “en el momento actual y para el inmediato porvenir se hace preciso construir un nuevo derecho penal con arreglo al criterio rector de que sus contenidos deben estar constituidos en su mayor parte por los comportamientos criminales de la clase poderosa y para la defensa de las demás clases sociales frente a semejante criminalidad”¹⁵.

De todo lo expuesto es preciso indicar que la globalización es un fenómeno social de internacionalización, siendo entonces indispensable que cualquier disciplina del conocimiento tenga que considerarla, obligándose en muchos casos a reformular el objeto de estudio de ésta. El Derecho en general no puede ignorar las consecuencias provocadas por la globalización, sino más bien tiene que adaptarse a ellas a fin de brindar soluciones plausibles y poder lograr el mantenimiento de un orden social. Por ende, el derecho penal también se ha visto en la necesidad de redefinir su objeto de estudio desde una perspectiva global a fin de prevenir las nuevas formas delincuenciales o las formas delincuenciales locales que importan al mundo globalizado.

2. LA POLÍTICA CRIMINAL.

Una de las primeras cuestiones que debemos dejar en claro es lo que se entiende por política, señalando que se trata de la “referencia a la forma de gobierno del Estado, y que está relacionada con la gestión, desde una determinada esfera de poder, de los asuntos públicos, se presenta a través de muy diversas manifestaciones atendiendo a la parcela de la actividad objeto de su administración”, por ejemplo: política económica si es la gestión en la economía, política educativa si es la gestión en educación, etc.

En la doctrina se tienen varias definiciones a partir del sector al que se dirige o como disciplina científica o campo del saber.

Así la política criminal se enmarca dentro de la política y como tal se la define como un “conjunto de medidas y criterios de carácter jurídico, social, educativo, económico y de índole similar, establecidos por los poderes públicos para prevenir y reaccionar frente al fenómeno criminal, con el fin de mantener bajo límites tolerables los índices de criminalidad en una determinada sociedad”¹⁶.

Desde la perspectiva del campo del saber, un sector de conocimiento o una disciplina, se entiende por Política Criminal (con letras mayúsculas), aquella que “estudia la orientación y los valores que sigue o protege, o que debiera seguir o proteger, la legislación penal entendida de forma amplia (material o procesal)”¹⁷. Así por ejemplo se puede señalar que obedecerá a la Política Criminal el apreciar si la prescripción penal extraordinaria ha sido derogada o no, considerando la vigencia del Nuevo Código Procesal Penal del 2004, al

¹⁵ Gracia (2003), p. 217. Sobre el término moderno y derecho penal moderno véanse las pp. 42 y ss.

¹⁶ Borja (2003), p. 22.

¹⁷ Borja (2003), p. 22.

establecer que con la formalización de la investigación preparatoria el plazo de prescripción penal se suspende.

El profesor EMILIANO BORJA JIMÉNEZ, luego de delinear las dos concepciones de política criminal, se muestra partidario de la segunda, es decir con mayúsculas, por ende, Política Criminal como disciplina del conocimiento es “aquel sector del conocimiento que tiene como objeto el estudio del conjunto de medidas, criterios y argumentos que emplean los poderes públicos para prevenir y reaccionar frente al fenómeno criminal”¹⁸.

Por su parte, SILVA SÁNCHEZ también menciona ambas acepciones al precisar que se debe “distinguir entre la praxis de la política criminal y una política criminal teórica. La primera se integra del conjunto de actividades -empíricas- organizadas y ordenadas a la protección de individuos y sociedad en la evitación del delito. La segunda aparece constituida por un conjunto de principios teóricos que habrían de dotar de una base racional a la referida praxis de lucha contra el delito; en donde la clave radica precisamente en determinar qué significa “racional” y cuáles pueden ser los criterios de racionalidad”¹⁹.

Por ende, al no ser éste un trabajo de investigación de sociología o ciencia política sino de derecho penal, asumo la segunda acepción de Política Criminal. Además no hay que olvidar que este año se creó en el Ministerio de Justicia, mediante ley, el Consejo Nacional de Política Criminal, el cual se encargará justamente de diseñar las medidas de política criminal (con minúsculas) que el gobierno aplicará o justificar las medidas que viene aplicando.

3. LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA²⁰.

La criminalidad organizada constituye hoy en día uno de los problemas a los que tiene que hacer frente la sociedad en general, pues su campo de actuación está relacionado con las actividades de la administración de justicia del Estado, empero hoy en día tiene también relación con las otras actividades públicas como lo son: la economía (en su vertiente micro y macro, nacional e internacional), la administración pública a todo nivel y sobre todo las actividades privadas a partir del desarrollo de la empresa privada en su relación con los Estados, o entre ellas, así ahora más que nunca con el proceso de globalización y con la extensión desmedida de la inversión extranjera, pública y privada el rol de determinadas empresas transnacionales representan una preocupación de todos los Estados en su vinculación con las organizaciones criminales.

Aquí se pretende dar algunos alcances en torno a la criminalidad organizada por la significación que tiene hoy en día.

En la actualidad, la importancia de la criminalidad organizada en Europa y el Asia puede explicarse y hasta justificarse de muchas maneras, empero una de estas explicaciones que

¹⁸ Borja (2003), p. 23.

¹⁹ Silva (2000), pp. 21 y ss., este autor agrega sin dejar de desconocer “la evidente “relatividad” o “condicionalidad socio-jurídico” del Derecho penal, se trata de enmarcar la política criminal en el contexto del concepto persona, su dignidad y sus derechos fundamentales; en definitiva, en el marco de una fundamentación objetiva” p. 28.

²⁰ Sobre este tema véase Sáenz, A. (2008) Algunas consideraciones en torno a la criminalidad organizada en el Perú, pp. 733 a 747; del cual hemos tomado algunos párrafos y hemos agregado otros.

me parece significativa es la que sostiene DANIEL ESTULIN²¹, el cual señala que “el aparente final del conflicto armado [guerra fría y el fin del control soviético] marcó el principio de una guerra mucho más terrorífica por la supremacía global” y agrega al comentar su libro “cómo las sociedades secretas más poderosas, unas veces colaborando codo a codo, y otras veces compitiendo entre ellas valiéndose de elementos criminales, la mafia internacional, multimillonarios oligarcas rusos, organizaciones filantrópicas respetables, no gubernamentales, servicios de inteligencia, ex espías, organismos paralelos de inteligencia y las principales instituciones bancarias del mundo, se dedicaron al negocio de crear de forma deliberada y meticulosa el Orden Mundial postcomunista para obtener beneficios personales”.

Es necesario destacar también que no es que la criminalidad organizada se haya desarrollado necesariamente por el avance de la globalización en el mundo, así coincido con MISHA GLENNY al decir que: “No es la globalización en sí misma lo que ha estimulado el espectacular crecimiento de la delincuencia organizada de los últimos años, sino unos mercados mundiales insuficientemente controlados como el sector financiero, o excesivamente regulados, como el sector agrícola y el mercado laboral. Durante los años noventa asistimos al inicio de un régimen de regulación a nivel mundial de los mercados financieros que suscitó la esperanza de que se pudiera mantener bajo control tanto la economía lícita, parcialmente regulada, como la economía sumergida, totalmente exenta de regulación. Sin embargo, desde el nuevo milenio la hostilidad de Estados Unidos, la incompetencia de la Unión Europea, el cinismo de Rusia y la indiferencia de Japón se han sumado a la incontenible ambición de China y la India por inaugurar una época dorada para las empresas mundiales y la delincuencia organizada industrial”.²²

Así se pueden dar muchas explicaciones, empero lo único que se pretende es señalar algunos alcances en torno a la problemática de la criminalidad organizada y la significación que hoy en día tiene para los países como el Perú, y otros en Latinoamérica y el Caribe, más aún si se considera que hoy en día hay un fuerte cuestionamiento a algunos países que en el mundo tienen paraísos fiscales, caso Luxemburgo o algún país caribeño.

3.1 DEFINICIÓN

En la doctrina se ha dado varias definiciones, una de ellas es la de CHOCLÁN MONTALVO que distingue entre la criminalidad organizada en sentido amplio y la criminalidad organizada en sentido estricto. En *sentido amplio*: “La Criminalidad en la Empresa” que abarca todas aquellas acciones que se desarrollan en el contexto de una actividad empresarial (de la que se ocupa principalmente en el rubro económico). En cambio en *sentido estricto*: “Tiene como objeto precisamente el delito (la criminalidad como empresa) que es la que ahora nos interesa”²³.

La definición que utiliza el profesor CHOCLÁN MONTALVO corresponde a la definición del profesor HERRERO HERRERO, para quien “en un plano funcional, la delincuencia organizada es la que se realiza a través de un grupo o asociación criminal

²¹ Estulin (2007), pp. 7 y 8.

²² Misha (2008), p. 475.

²³ Choclán (2000), pp. 8 y ss.

revestidos de las siguientes características: carácter estructurado, permanente, autorrenovable, jerarquizado, destinados a lucrarse con bienes y servicios ilegales o a efectuar hechos antijurídicos con intención sociopolítica, valederos de la disciplina y de toda clase de medios frente a terceros con el fin de alcanzar sus objetivos. El carácter transnacional no es requisito de la organización, ciertamente, aunque su presencia es factor indiciario de la consolidada estructura organizativa de un grupo, y en cualquier caso, es el carácter transnacional el que en realidad preocupa a la Política Criminal”²⁴.

Sin embargo, CHOCLAN MONTALVO establece las condiciones que “deben concurrir en esta empresa criminal para constituir organización en sentido jurídico-penal: 1) la existencia de un centro de poder, donde se toman las decisiones, lo que presenta específicos problemas a la teoría de la autoría, en atención a la distancia espacio-temporal entre toma de decisión y ejecución material del delito; 2) actuación a distintos niveles jerárquicos, de modo tal que los órganos ejecutivos, en su individualidad, desconocen el plan global, conociendo sólo lo parte del plan asumida; 3) aplicación de tecnología y logística, actuando sus componentes con estricta profesionalidad; d) (sic) fungibilidad o intercambiabilidad de los miembros de la empresa criminal que actúan en los niveles inferiores; e) sometimiento a las decisiones que emanan del centro de poder, con pérdida de moral individual y férrea disciplina; f) movilidad internacional; g) apariencia de legalidad y presencia de los mercados como medio de transformación de los ilícitos beneficios”²⁵.

En la jurisprudencia española, el Tribunal Supremo Español ha fijado su concepto de organización criminal basado en los siguientes elementos: a) existencia de una seria planificación y preparación del hecho delictivo, b) la ejecución será realizada por profesionales altamente cualificados, c) las ganancias obtenidas se intentan introducir mediante el blanqueo del dinero en la economía legal, d) los grupos mantienen vínculos fuertemente supra regionales, nacionales e internacionales, e) estructura fuertemente jerarquizada, f) gran poder corruptor, g) sus ámbitos de actuación son del más diverso tipo, h) actitud criminal de grupo, i) cuando se trate de la aplicación concreta de la agravante por organización bastará el carácter transitorio y la finalidad ocasional de difundir los productos del tipo básico o del de precursores”²⁶.

En la jurisprudencia peruana la discusión aún está iniciándose a raíz de la experiencia de los casos Fujimori-Montesinos, así por ejemplo temas tales como la coexistencia entre asociaciones ilícitas²⁷, dentro de una organización criminal, o la interacción o relación entre organizaciones criminales, representan problemáticas en donde aún habrá que definir líneas de acción en toda Latinoamérica y el Caribe. Cabe destacar por ejemplo lo resuelto por la Sala Penal Permanente sobre las organizaciones criminales:

²⁴ Choclán (2000), pp. 8 y ss.

²⁵ Choclán (2000), p. 9. Véase también el concepto dado en su artículo por Joshi, U. (mayo-agosto, 1995): Sobre el concepto de organización en el delito de tráfico de drogas en la jurisprudencia del tribunal supremo; pp. 665 y ss.

²⁶ Joshi, U. (mayo-agosto, 1995): Sobre el concepto de organización en el delito de tráfico de drogas en la jurisprudencia del tribunal supremo; pp. 665 y 666.

²⁷ El contenido de esta decisión judicial corresponde al voto singular del señor Vocal Supremo Dr. Víctor Prado Saldarriaga, en el Recurso de Nulidad N° 3786-2005, a propósito de la decisión de la Sala con fecha Trece de junio del año dos mil siete, pp. 5 y 6.

“que la estructura de las organizaciones criminales no es uniforme, ella varía según su origen, el grado de desarrollo que ha alcanzado, el tipo de actividades delictivas que ejecutan o el número de componentes que la integran, por consiguiente, hay organizaciones con estructuras altamente jerarquizadas y complejas que muestran una composición vertical con los niveles de poder y gestión muy centralizados pero también coexisten otras agrupaciones delictivas con estructuras flexibles y roles de dirección colectiva o descentralizada que constituyen tantas organizaciones criminales diferentes con relación al fin ilícito que persiguen y a la oportunidad de su actuación, siendo lo primordial la presencia de varias estructuras criminales distintas a las que se incorpora el agente, que esta posibilidad es mucho mayor en las **estructuras criminales flexibles** como las de **tipo red** y donde el hombre clave puede constituir varios grupos criminales con propósitos delictivos deferentes (sic), que en el caso sub júdice (sic), nos encontramos ante una amplia **red criminal** que operó con grupos enquistados en las principales instancias del poder político, instituciones castrenses, del sistema de justicia y en algunos medios de comunicación, en la cual fungía como hombre clave el encausado Montesinos Torres, en la cual constituyó e integró de manera simultánea o sucesiva más de una organización criminal destinada a cometer delitos en oportunidades y en contextos diferentes (...)”.

En materia de Tratados, los países han suscrito la Convención de Palermo que en su artículo 2 literal a)²⁸ describe el concepto legal de grupo delictivo organizado y que algunos están proponiendo que se incorpore en el código penal, a fin de ordenar toda la normatividad dispersa que se tiene sobre criminalidad organizada, a lo largo de la parte especial y leyes especiales, pero sólo de manera referencial y de una vez por todas dejarla de confundir con el tipo penal de asociación ilícita para delinquir.

3.2 CLASIFICACIÓN

La clasificación de las organizaciones criminales tiene una gran variedad, así HERRENO HERRERO citado por CHOCLÁN MONTALVO²⁹ establece las siguientes:

“a) *Organizaciones criminales de naturaleza mafiosa*, situando dentro de este grupo a las mafias italianas, las Triadas chinas y los Boryokudan japonesas. Dentro de las mafias italianas, la camorra³⁰, la Ndragheta y la mafia siciliana, en particular la Cosa Nostra; b) *Organizaciones flexiblemente mafiosas*, como los Cártels colombianos; c) *Organizaciones criminales funcionalmente mafiosas*, situando en este grupo, por ejemplo, el Grapo español, o al Ejército Rojo alemán;

²⁸ La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de Naciones Unidas conocida como la Convención de Palermo regula la definición contenida en el artículo 2 literal a) que a la letra dice “Por «grupo delictivo organizado» se entenderá un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio u otro beneficio de orden mundial”.

²⁹ Choclán (2000), p. 7. a pie n° 17

³⁰ Un excelente trabajo de Roberto Saviano lo encontramos en “*Gomorra. Un viaje al imperio económico y al sueño de poder la Camorra*” (2007).

- d) *Organizaciones criminales ambiguamente constituidas*, que fundamentalmente persiguen fines económicos”.

3.3 PROBLEMAS

Un problema que merece ser propuesto es ¿qué concepto o definición será la más indicada para orientar con mayor precisión el contenido de los tipos penales, acaso considerarlo como un elemento descriptivo o como un elemento normativo?

La posición de manejar todo el derecho penal con elementos normativos puede convertir al derecho penal en una suerte de un quehacer erudito o místico, pues dependerá mucho de quién haga la valoración o el contexto en el que éste se realice.

Otra de las interrogantes a plantear es ¿cuál sería la opción penal más eficaz, atacar sus actividades o atacar a la misma organización, o por último ambas? Se propone como opción ambos casos, pero en planos diferentes.

También es pertinente plantearse la interrogante de ¿cuál es la orientación de la legislación nacional vigente o hacia dónde se dirige? Se dirige hacia la represión de las actividades, pero de manera asistemática, es decir sólo con el derecho penal como un hecho desconectado y no desde una perspectiva general, mostrándose que no se tiene una política criminal definida³¹.

Otro problema consiste en señalar si se asume o no la ampliación de mecanismos de lucha de la criminalidad organizada al sector puramente privado, o a lo que algunos denominan corrupción en el sector privado, tema sobre el cual hay mucho por investigar.

A pesar que años atrás lo anotamos, vemos que aún está pendiente el debate para algunos sobre qué concepto o qué contenido o margen de cobertura se le debe dar al elemento del tipo penal funcionario público, cuál de las teorías de la participación se aplicará para el tema de los extraneos, acaso la accesoriedad limitada o extrema, o se aplicará la clasificación de tipos penales de infracción de deber de ROXIN, o los criterios de JAKOBS, qué concepto de autoría en aparatos organizados de poder, o de la autoría mediata, o la de la coautoría, o se continuará aplicando la postura de la Corte Suprema de la República cuando decidió seguir la tesis de ROXIN para los casos de Abimael Guzmán y la Cantuta y Barrios Altos. Además, todavía existe un permanente debate entre los partidarios de un derecho penal mínimo o “del amigo”, o un derecho penal del enemigo, la prescriptibilidad o la imprescriptibilidad de este tipo de delitos, etc., todas estas interrogantes recién empiezan a tomar fuerza en la ciencia penal y en las resoluciones judiciales nacionales, y hasta en las sentencias del Tribunal Constitucional e incluso ahora son materia de discusión en los diversos foros de reforma legislativa así como en los claustros académicos, y en los eventos internacionales de los Estados. Esto empezó en el 2001 y ahora en el 2012 se cuenta con la experiencia necesaria a partir de los casos

³¹ Véase Sáenz, A. (julio, 2007): Algunos comentarios al reciente Decreto Legislativo N° 982, a propósito de la nueva legislación contra la criminalidad organizada; pp. 313 y ss.

Fujimori-Montesinos, por ende es importante compartir estas experiencias con los demás países de Latinoamérica, el Caribe e incluso extenderlo a Iberoamérica.

Otro de los inconvenientes que en su momento se planteó y que aún perdura, está relacionado con la tendencia equivocada de pensar que una organización criminal puede ser subsumida o comprendida dentro del tipo penal de la parte especial de la asociación ilícita para delinquir, art. 317³² del CP. En realidad hacer este “raciocinio”, no es sino una forma de no entender la complejidad de lo que realmente es una organización criminal con todas sus características arriba descritas, así sería contraproducente definir lo que constituye una organización criminal al estilo del art. 317, pues ello originaría un efecto coladera, es decir la imposibilidad de imputar conductas a aquellas organizaciones que no se subsumen a dicha definición, por ello no pongamos límites a la lucha contra éstas, y más bien colaboremos en poder contener sus avances a pesar de todos los recursos y mecanismos tecnológicos de los que se valen, para su eficacia, y esto implica además no descuidar la lucha contra las micro organizaciones criminales. En el año 2011 y 2012 sin embargo se consideró necesario definir los conceptos de banda, asociación ilícita y organización criminal, esta última de una manera genérica y amplia a fin de comprender la mayor cantidad posible de organizaciones atendiendo a su naturaleza y actividad, esto a propósito de la reforma por parte del Poder Judicial para los temas de la lucha contra la inseguridad ciudadana.

En este orden de ideas, la Corte Suprema tiene posiciones discrepantes pues por un lado considera que el delito de asociación ilícita es uno solo y por ende avala la cosa juzgada bajo el argumento “se consuma desde que se busca una finalidad ya inicialmente delictiva” no interesando qué delitos se cometen; sin embargo posteriormente la misma Corte Suprema ha establecido que sí es posible la coexistencia de asociaciones ilícitas, por ello aquí todavía hay que seguir debatiendo para lograr un criterio unificado por parte de la Corte Suprema a través de un nuevo Acuerdo Plenario³³.

³² En el derecho comparado bajo la influencia de un tipo penal de la parte especial se tienen los trabajos de García-Pablos (1977); y Cornejo (1992). Incluso algunos autores nacionales mantienen esta postura, la cual a su vez es el principal argumento que los abogados que defienden procesados en el subsistema anticorrupción a propósito de los casos Fujimori-Montesinos invocan, pues cada vez que son condenados por el delito de asociación ilícita para delinquir en un proceso plantean en otros en los que pueden ser condenados la excepción de cosa juzgada aduciendo que ya fueron condenados y que solo pueden ser condenados una vez por este delito, justificando en que el criterio de asociación para cometer delitos es en abstracto.

³³ Véase el ACUERDO PLENARIO N° 4-2006/CJ-116 puntos 12 al 13, el mismo que señala: “Así queda claro que el indicado tipo legal sanciona el solo hecho de formar parte de la agrupación –a través de sus notas esenciales, que le otorgan una sustantividad propia, de (a) relativa organización, (b) permanencia o estabilidad y (c) número mínimo de personas sin que se materialice sus planes delictivos. En tal virtud, el delito de asociación ilícita para delinquir se consuma desde que se busca una finalidad ya inicialmente delictiva, no cuando en el desenvolvimiento societario se cometen determinadas infracciones; ni siquiera se requiere que se haya iniciado la fase ejecutiva del mismo. Por ello mismo, tampoco cabe sostener la existencia de tantas asociaciones como delitos se atribuya al imputado. La asociación es autónoma e independiente del delito o delitos que a través de ella se cometan –no se requiere llegar a la precisión total de cada acción individual en tiempo y lugar-, pudiendo apreciarse un concurso entre ella y estos delitos, pues se trata de sustratos de hecho diferentes y, por cierto, de un bien jurídico distinto del que se protege en la posterior acción delictiva que se comete al realizar la actividad ilícita para la que la asociación se constituyó. 13. En síntesis, es un contrasentido pretender abordar el tipo legal de asociación ilícita para delinquir en función de los actos delictivos perpetrados, y no de la propia pertenencia a la misma. No se está ante un supuesto de codeinfluencia en la comisión de los delitos posteriores, sino de una organización instituida con fines delictivos que presenta una cierta inconcreción sobre los hechos punibles a ejecutar.” Es interesante la posibilidad de la concurrencia de organizaciones criminales conforme lo señala el ACUERDO PLENARIO N° 8-2007/CJ-116, al diferenciar entre las agravantes que en el delito de robo aluden a la pluralidad de agentes y a la actuación delictiva como integrante de una organización criminal.

Un elemento a valorar en la doctrina nacional es el rol del delito de asociación ilícita para delinquir, pues es un tipo penal de la parte especial cuyo margen de cobertura es sólo para ciertos delitos e incluso su circunstancia agravante (segundo párrafo de dicho artículo) se limita a un determinado grupo de tipos penales tales como el genocidio, la seguridad pública y tranquilidad pública, los delitos contra el Estado y la defensa nacional, los poderes del Estado y el orden constitucional, lo cual lo hace criticable, pues no abarca a los delitos contra la administración pública, tampoco a los delitos económicos, financieros, etc., teniendo entonces la necesidad de realizar una reforma penal, pero además de las mejoras que se podrían incorporar en esta parte se impone también la necesidad de incorporar en la parte general bajo la lógica de un derecho penal de prevención, las figuras de la conspiración y la proposición³⁴, pues dado el estilo o las modalidades del que se vale la organización criminal, estas figuras ayudarían mucho en hacer frente a este flagelo.

En la doctrina, la conspiración tiene los siguientes elementos³⁵:

- a. Unión de voluntades;
- b. Orientación de todas al mismo hecho;
- c. Decisión firme de ejecutarlo, plasmada además en un plan concreto y acabado;
- d. Actuación dolosa de cada concertado; y
- e. Viabilidad del proyecto.

El fundamento de esta figura se ha encontrado en la tesis de la coautoría anticipada, por lo cual “los conspiradores serán todos autores si dan inicio a la ejecución”³⁶. Es de anotar la básica diferencia entre la conspiración y la asociación ilícita para delinquir, y ella se basa en que en la primera no hay ni organización ni permanencia, y su definición se sugiere sistemáticamente formar parte de las reglas de la parte general y los casos en que amerite sanción en la parte especial, en cambio la segunda sólo figura en la parte especial.

En la proposición es relevante la firmeza en la decisión de cometer el delito por parte del que propone cometer el delito (proponente), y ésta es la nota distintiva entre el acto del proponente con el del agente provocador, ya que éste no piensa en cometer delito alguno. De darse el caso que la proposición la acepte el sujeto al que se le hizo la propuesta, dejaría de haber proposición y lo que habría sería conspiración.

Por consiguiente, para incorporar estos nuevos supuestos de actos preparatorios en la parte general como un tercer párrafo del artículo 16, habrá que realizar previamente una evaluación Político Criminal para que se legisle y defina en qué delitos de la parte especial se integren estas figuras.

³⁴ En el derecho penal comparado se tiene el art. 17 del Código Penal español de 1995, que expresa: art. 17

1. La conspiración existe cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo.
 2. La proposición existe cuando el que ha resuelto cometer un delito invita a otra u otras personas a ejecutarlo.
 3. La conspiración y la proposición para delinquir sólo se castigarán en los casos especialmente previstos en la ley.

³⁵ Véase Quintero (1996), p. 457. En la doctrina Tomás Vives Antón discrepa al sustentar como requisitos sólo: concurrencia de dos o más personas, resolución ejecutiva de todos y cada una de ellas, y concierto de voluntades para la realización del delito, véase Vives et al. (1996), p. 104.

³⁶ Quintero (1996), p. 457.

Por supuesto, que estas problemáticas anotadas deben sentar el punto de vista de cómo hacer frente a la criminalidad organizada, ahora que se ha sincerado el problema, así por ejemplo es cierto que las tratativas, consideradas hoy impunes, en el futuro serían consideradas actos punibles de conspiración o proposición, y no sólo reproches morales o pecadillos o errores como algunos lo han denominado. De la misma forma notamos que si se sanciona la conspiración o la proposición, uno de los aspectos a dilucidar es desde qué momento se inicia la prescripción de la persecución penal o se deja el tema para que se resuelva caso por caso, sobre esto los españoles por ejemplo no han investigado.

Sobre este tema hay aún mucho por investigar sobre todo en nuestro país, por tal razón éstas son sólo pinceladas para situar el problema de investigación considerando que sobre la prescripción penal son escasísimos los países que han ideado mecanismos de reforma desde esta institución para la criminalidad organizada, como es el caso de España luego de su reforma del 2010.

CAPÍTULO II

EL CASTIGO Y LA ARGUMENTACIÓN JURÍDICO PENAL

1. EL CASTIGO COMO PUNTO DE PARTIDA.

El derecho penal conforme lo hemos situado en el anterior capítulo, se está redefiniendo, sin embargo cualquiera que fuere el rumbo hacia donde se dirija de conformidad con el orden social, lo cierto es que en los próximos años se tendrán que seguir reelaborando muchas de las construcciones teóricas, pues la realidad cambió y entonces por más que se piense que un determinado campo del saber sea autárquico, ello sería contrario a la realidad, volviendo el derecho penal una disciplina inservible e incapaz de ayudar en los problemas que a diario surgen, con lo cual carecería de utilidad.

Tal vez por ello algunos de los colegas que se hacen llamar dogmáticos en el derecho penal tienen un poco de nostalgia y han difundido irresponsablemente la idea del aislamiento o la atemporalidad del derecho penal, a pesar que el muro de Berlín cayó en el siglo pasado, pues ellos levantaron su propio muro en su parcela del conocimiento humano, produciendo una suerte de muro al más puro estilo del Castillo descrito en el Nombre de la Rosa de Umberto Eco, cuando hoy el conocimiento cambia a cada instante. Y entonces han vivido con la ilusión de que el derecho penal debe seguir siendo sólo derecho penal o dogmática, sin embargo, algunos empezaron a husmear por encima del muro y otros se atrevieron a cruzarlo, empero los francotiradores del muro dogmático empezaron a deslegitimarlos indicando que el que no hace dogmática, a la cual le han agregado el adjetivo de pura, tal vez añorando a Kelsen, aunque lo que olvidan es que por paradójico que parezca es Kelsen el que sustentó el derecho internacional público, es decir no se quedó en el castillo.

Autores como JESCHECK o el mismo KAI AMBOS justamente empezaron a ver el mundo de otra manera y eso se ha ido plasmando en sus respectivos trabajos de investigación aquí citados, por su parte ROXIN esbozó un derecho penal más versátil a la época de cambios suscitado entre las décadas de los ochenta y noventa del siglo pasado, pues se vivieron momentos de dictaduras, siendo necesario recurrir a modelos teóricos que permitieran hacer frente a los abusos del Estado aún latentes, de allí que muchos de sus postulados se afianzaron, incluso en la primera década del nuevo siglo su aporte se vislumbró en casos tan importantes en el ámbito nacional como la autoría mediata.

El propio JAKOBS, hoy no puede negar que muchos de sus postulados son utilizados por los distintos Estados, nunca imaginó que sus ideas iban a tener tanta acogida gracias a la difusión realizada por sus discípulos en parte de España y sobretudo en gran parte de América del Sur y México. La calidad de los postulados de JAKOBS obedece a un modelo bien trabajado pero concebido para un actuar dentro del castillo y no para el mundo, aunque hoy en el mundo se aprovechen sus ideas de cualquier manera, realzando sobretudo las reformas del endurecimiento del sistema penal. Sin embargo, el conocer otras realidades, por las visitas constantes a otros países, debe haber sido importante para que este autor al

igual que Roxin tenga que reevaluar sus postulados, empero allí nomás llegó la jubilación de ambos, por lo cual tal vez los aportes de éstos solo se aprecié a través del desarrollo realizado por sus discípulos.

Por estas razones es mucho más valioso el aporte de JESCHECK, pues en sus trabajos ya se notaba una preocupación por extender sus reflexiones no sólo a la problemática alemana, sino a otros países, así se tiene a España e incluso en América del Sur a Brasil. Tal vez esto se deba a su contacto con extranjeros a través de AIDP o del Max Plank, donde los hispanos planteaban problemas propios de sus realidades obligando a pensar en un derecho penal más allá del castillo, y JESCHECK no sólo salió sino que regresó y repensó el derecho penal, algo que ya no pudo hacer a pesar de los aportes de las comunicaciones en el mundo ni Roxin ni Jakobs, por eso tal vez estas líneas sirvan para recordar a este profesor ya fallecido. No se debe dejar de mencionar que el *Tratado* de este profesor es el más completo y que ahora muchos profesores tratan de tomar como referencia, sino véase el *Tratado* de Jacobo López Barja de Quiroga.

En esta misma línea, pero para cubrir las esferas del derecho penal internacional, se ha enrumado el profesor KAI AMBOS³⁷, incluso es relevante su preocupación por América del Sur y sus aportes son de innegable valía, sobretodo al concebir un *ius puniendi* o poder punitivo de la comunidad internacional que “se encuentra en la actualidad, donde el Estado-Nación se encontraba en los albores de su existencia: en la formación y consolidación de un monopolio de la fuerza en el ámbito del derecho penal internacional, sobre cuya base se puede fundar un *ius puniendi*. La comparación es forzada, en la medida que un monopolio supranacional de la fuerza, al menos a primera vista, parece menos urgente que uno nacional, puesto que los Estados nacionales, en cuanto sujetos de Derecho internacional, son llamados a implementar no solo sus propios requerimientos punitivos, sino también los internacionales”.

Los penalistas, a pesar de haberse dedicado en muchos de sus trabajos al desarrollo de la teoría del delito y en otros a la pena, pocas veces se han preocupado por fundamentar la finalidad del castigo, o lo que algunos llaman el derecho a castigar, entre ellos los hermanos Falcón y Tella.

Al iniciar esta parte es necesario realizar algunas distinciones entre los conceptos de castigo, sanción, pena y punición³⁸:

Por castigo se entiende “como concepto más amplio, lo que se denomina *punishment* en inglés o *châtiment* en francés. Su empleo no es exclusivo del mundo jurídico sino también la Pedagogía, la Medicina, la Psicología, la Sociología, la Literatura”.

Por sanción se entiende “-*punitive practice, sanction pénale*- abarca un ámbito más concreto, referido ya al mundo jurídico, del Derecho, una de cuyas notas principales es precisamente la coactividad”.

³⁷ Ambos (2006), p. 65.

³⁸ Falcón M. y Falcón F. (2005), p.16.

Por pena “-*sentence, peine*- constituye el tercer núcleo de análisis. Se trata aquí de un concepto menos genérico, relativo a aquella parcela del Derecho formada básicamente por el Derecho penal. Constituye ésta la parte central del trabajo y también la más extensa. En ella, a través de una estructura dual, se distingue entre penas y medidas de seguridad, como principales tipos de sanciones penales, con una distinta tradición histórica, diverso fundamento y función y en torno a las cuales se han desarrollado distintos tipos de teorías y escuela- las absolutas de tipo retributivo, y las relativas, de la prevención, tanto general como especial, en sus diferentes modalidades-, amparadas por concepciones del Estado también diferentes”.

Por punición “-*penalty, pénalité*- en otras disciplinas que no son el Derecho penal, especialmente, aunque no exclusivamente, las sanciones administrativas”.

2. LA TEORÍA DE LA ARGUMENTACIÓN JURÍDICA EN MATERIA PENAL.

La argumentación hoy en día no es sólo la exigencia constitucional del art. 139 numeral 5, sino que constituye un estándar de distinción entre los Estados que se hacen llamar de Derecho, desde una perspectiva formal positivista hasta los Estados de Derecho materialmente consolidados desde una perspectiva neopositivista o neoconstitucional. Así la argumentación constituye una exigencia que incluso su no utilización acarrea la nulidad de cualquier resolución.

Uno de los aspectos que hoy en día se aprecia a partir de asumir una concepción del derecho es expresar también una noción de interpretación, para ello considero importante los aportes de la teoría general del derecho; es el caso de aquellos que distinguen entre interpretar las sentencias judiciales y extraer las llamadas normas jurisprudenciales o judiciales, así como la interpretación de los documentos normativos o tradicionalmente denominada interpretación de las normas jurídicas, así se tiene que la interpretación de las normas jurídicas formulada en su reciente publicación por el profesor PIERLUIGI CHIASSONI precisa que “son operaciones que consisten en:

- a. En obtener normas explícitas de disposiciones, en traducir disposiciones a normas explícitas, sobre la base de opciones y operaciones hermenéuticas que se reflejan en premisas interpretativas del razonamiento justificativo judicial.
- b. En obtener normas implícitas a partir de otras normas (explícitas y/o implícitas) por hipótesis ya identificadas, con el auxilio de principios metodológicos igualmente respetados en el razonamiento justificativo judicial, entre los cuales, por ejemplo, se encuentra el principio de la analogía legis y el principio de razonamiento a contrario en función productiva”³⁹.

Sobre estas operaciones, a su vez se precisa que es necesario distinguir entre las operaciones de interpretación textual así como la interpretación metatextual, por la primera entiéndase aquella “caracterizada, de forma estipulativa, como la actividad que consiste en determinar el significado de una disposición –el componente elemental de cualquier texto

³⁹ Chiassoni (2011), pp. 55 y 56.

jurídico normativo: un enunciado, previamente aislado por el interprete, en el discurso de las fuentes –, obteniendo de ésta una o más normas explícitas, acreditadas o acreditables como sus interpretaciones jurídicamente correctas”, y por la segunda se refiere a que “el apelativo interpretación metatextual corresponde grosso modo a «interpretación en sentido amplísimo», o, como también se suele decir, «interpretación jurídica» en el sentido más amplio de la expresión”⁴⁰.

A partir de considerar el rol activo que tiene hoy en día el magistrado juez en la interpretación de la norma jurídica es importante destacar lo señalado por RICHARD POSNER que al fijarle un rol político precisa que “los jueces son reacios a confesar incluso que no son completos eunucos políticamente hablando, que se ocupan sólo de aplicar reglas que no crearon a hechos que consideran probados, al modo de los árbitros de béisbol. La mayoría de ellos creen con toda honestidad que sus decisiones no están influidas ni lo más mínimo por sus tendencias políticas. Esta creencia honesta que está muy extendida puede que sea la más fuerte contraparte de la prueba de que la actividad de juzgar tiene naturaleza política. Pero el teorema de BAYES, al mostrar que las preconcepciones influyen en la toma de decisiones, le da la vuelta. Las preconcepciones son con frecuencia inconscientes. La mayor parte de la actividad de pensar, incluyendo la de los jueces que han de tomar decisiones en condiciones de incertidumbre, es una forma de pensar no analítica – emocional, intuitiva o conforme al sentido común – que no se da paso a paso a partir de premisas explícitas y de allí que ofrezca mucho juego a las preconcepciones que operan de manera no consiente. BAYES absuelve a los jueces de la acusación de hipocresía”⁴¹.

A partir de lo expresado por RICHARD POSNER, es innegable que en el ámbito nacional es perfectamente compatible asumir tales consideraciones, por ende se resalta la importancia del rol que hoy cumplen los jueces en el país, y es gracias a la utilización de la teoría de la argumentación que dicho rol se ha vuelto mucho más legítimo.

La teoría de la argumentación jurídica es hoy en día una herramienta indispensable que permite a los jueces y demás magistrados elaborar resoluciones acorde con el mandato constitucional, y ahora más que nunca es importante conocerla a través de sus distintas versiones, desde las más recientes hasta las más antiguas, así se tiene como representantes a ROBERT ALEXI, AARNIO, MACCORMICK, MANUEL ATIENZA, CHAIL PERELMAN o los diálogos de PLATÓN con el Eutidemo entre otras, cada una de las cuales representa un esquema capaz de ser utilizado, así para efectos de este trabajo se utilizan los conceptos del profesor MANUEL ATIENZA.

En primer lugar, cabe preguntarse ¿a qué se denomina argumentar? siendo la respuesta, el dar razones para justificar; y si la pregunta fuera ¿a qué se denomina argumentación jurídica?, se tendría que responder que es dar razones que justifiquen una decisión jurídica.

A partir de aquí es importante distinguir dos contextos con los que suele operar la ciencia y que ATIENZA incorpora a la teoría de la argumentación, que es el distinguir entre el contexto de descubrimiento así como el contexto de justificación, donde el primero se

⁴⁰ Chiassoni (2011), pp. 56 - 70.

⁴¹ Posner (2011), p. 403.

refiere a todos aquellos elementos que explican cómo se llegó a tomar una decisión, qué elementos o circunstancias fueron relevantes para arribar a una decisión, aunque para efectos de fundamentar una decisión o motivarla como ordena la Constitución, ésta resulta irrelevante. Respecto del segundo, se sostiene que éste es el relevante para efectos de la motivación, pues cada vez que se tome o decida una cuestión jurídica es obvio que habrá que evaluar su justificación, y es a partir de las razones expuestas que se aprecia la calidad y contundencia de la argumentación.

El modelo propuesto por el profesor ATIENZA⁴² es perfectamente aplicable al ámbito penal⁴³, así se considera los siguientes requisitos a fin de superar la parcialidad de la teoría estándar de la argumentación:

- 1° La argumentación hoy en día se refiere al hecho y no sólo al aspecto normativo.
- 2° La argumentación jurídica se encarga no sólo de la interpretación y aplicación del derecho o la dogmática, sino también de la producción del derecho.
- 3° Se preocupa por la resolución de problemas jurídicos.
- 4° El carácter de la argumentación jurídica es tanto prescriptivo como descriptivo.

ATIENZA⁴⁴ considera indispensable diferenciar entre la justificación interna y la justificación externa. Sobre la argumentación interna se dirá que “es tan solo cuestión de lógica deductiva”, así un determinado argumento jurídico está internamente justificado si y sólo si la conclusión o (fallo) se deriva lógicamente de las premisas (normativas y fácticas). Por tanto, la validez lógica de la inferencia, es decir el paso de las premisas a la conclusión será lo relevante”. Por su parte se habla de justificación externa cuando se “somete a prueba el carácter más o menos fundamentado de sus premisas”, por ende consiste en controlar la adecuación o solidez de las premisas.

Los argumentos que se utilizan para la justificación externa según la postura de ROBERT ALEXY⁴⁵ son:

- a. Argumentos interpretativos.
- b. Argumentos dogmáticos.
- c. Argumentos basados en precedentes judiciales.
- d. Argumentos empíricos.

Por último, se deja sentado que estos postulados son los que en gran parte se han considerado, sobretodo para realizar el análisis de las distintas resoluciones procesadas, tanto para la parte teórica como para la parte empírica de esta investigación.

⁴² Atienza (2004), pp. 305 y ss.

⁴³ Sánchez F. (2009), pp. 208 y ss. En este trabajo se puede notar todo el esquema de la teoría de la argumentación jurídica de Robert Alexy y de Manuel Atienza, principalmente así destacan los criterios de racionalidad ética, teleológica, pragmática, jurídico-formal, y lingüística así como la eficiencia.

⁴⁴ Atienza (2004), p. 61.

⁴⁵ Alexy (1989).

CAPÍTULO III

EL CRITERIO DEL TIEMPO EN LA CIENCIA

1. INTRODUCCIÓN.

En los últimos veinte años se han planteado nuevos temas y se han replanteado otros, uno de estos ha sido el tratamiento del tiempo, así solo se pretende expresar algunas de las expresiones más representativas sobre esta materia e incluso considerando algunos ejemplos.

- 1º Qué sucede cuando un sujeto “Pepe” realiza una acción de matar el día de hoy a “Jaimito”, teniendo como circunstancia especial en este caso que el resultado de la acción se produce luego de siete días, acaso del resultado muerte de “Jaimito” se tendrán diversas alternativas de solución. Una de ellas será tomar en cuenta la fecha del delito o la hora de su realización, ya que considerando el modelo adoptado por una determinada legislación penal se tiene como referencia para establecer el momento de la comisión de este delito el de la realización de la acción o el de la producción del resultado, o el de la finalización del delito o de la falta.
- 2º Otro ejemplo es el de “Pedrito”, quien es condenado a tres años de pena privativa de la libertad de manera efectiva, y “Juanito”, su cómplice, quien a su vez es condenado a tres años de pena privativa de la libertad suspendida por el plazo de tres años, al respecto se formula la siguiente interrogante: ¿quién cumplirá su pena más rápidamente? La respuesta va a depender de la perspectiva de cada sujeto y del criterio con el que se evalúe la ejecución de la pena, aquí no hay una sola respuesta posible, ya que no se trata de una disciplina científica formal.

Es justamente esta variedad de posibilidades la que permite apreciar que la categoría del tiempo en el derecho penal obliga a conocer mejor esta categoría, de allí resultará de mucha utilidad para apreciar y mejorar el modelo de legislación penal sobre la prescripción que es el propósito de esta investigación.

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DEL TIEMPO EN LA PRESCRIPCIÓN.

De los ejemplos señalados hay algo en común y éste es el criterio del tiempo, sin embargo este criterio no es único, por lo cual en el presente trabajo se tiene como propósito responder a la interrogante ¿qué criterio temporal es el que se encuentra en la formulación de figuras tales como la prescripción penal de la acción penal, o al momento de la comisión del delito, o para el cumplimiento de la pena privativa de libertad efectiva, etc.; acaso será el criterio temporal externo o el criterio subjetivo, y cuál será la postura ha asumir sobre estos criterios, sea de naturaleza ontológica, normativa o cualquier otra?

3. TEORÍAS DEL TIEMPO.

Las dos formas de vivir el tiempo:

El *tiempo subjetivo* también llamado vivencial o único constituye “una experiencia de todos conocida, y estudiada frecuentemente por filósofos tan clásicos como Bergson, que el tiempo para la conciencia no fluye de la misma manera ni con un ritmo uniforme”⁴⁶

El *tiempo externo*, en general sobre esta forma se ha establecido dos modos, el tiempo religioso y el tiempo civil, “el primero es un tiempo cíclico, ya que todos los años se renuevan las ceremonias y los ritos que lo marcan, Navidad, Semana Santa, Todos los Santos, Día Acción de Gracias, etc.” Algunos lo denominan tiempo primordial; y el segundo “el tiempo civil es aquel por el cual se realizan los horarios y calendarios cotidianos”⁴⁷.

Sin embargo, el tiempo según su modalidad externa puede ser clasificado en cuatro grupos:

3.1. CRONOMETRÍA.

Se denomina cronometría a “todas las formas de medir e instrumentos de medida que corresponden a un tiempo corto, entendiendo por tal el que entra en las dimensiones temporales de la vida humana. Es la que miden los relojes, los calendarios que se utilizan habitualmente. Responde así a una concepción cíclica en la que la forma de medida es la repetición”⁴⁸, por ejemplo los horarios del metropolitano, o los de los aviones de alguna aerolínea, los de atención de la UNMSM, o de un supermercado, sea Plaza Veá, Totus, Metro u otros, el calendario fiscal, el calendario laboral, las vacaciones del Poder Judicial o los feriados que determina el estado.

3.2. CRONOLOGÍA.

“Se trata de un tiempo largo; en este caso ya no es simétrico. Se individualiza un determinado momento por algún acontecimiento clave que, en muchas ocasiones, marca el comienzo de una nueva época”⁴⁹, algunos ejemplos el nacimiento de Jesucristo que marca la fecha para el calendario cristiano, la Hégira para los árabes, la Fundación de Roma para los seres humanos, y podríamos agregarle, la caída del muro de Berlín, la llegada del hombre al espacio o la luna, entre otros. Cabe agregar “como explica Mircea Eliade, lo que subsiste en esta forma de temporalidad es una intención ahistórica, la negativa a conservar la memoria del pasado, aún inmediato, y la necesidad de empezar de nuevo. Es el rechazo a aceptarse como ser histórico, a conceder valor a la memoria y, por tanto a acontecimientos inusitados, es decir, sin modelo arquetípico, que constituyen de hecho, la duración concreta. En ellos se descifra la voluntad de desvalorizar el tiempo y, por tanto, de empezar de

⁴⁶ Mataix (1999), p. 19.

⁴⁷ Mataix (1999), p. 20.

⁴⁸ Mataix (1999), p. 21.

⁴⁹ Mataix (1999), p. 22.

nuevo”.⁵⁰ Este podría ser el criterio utilizado por un condenado resocializado que quiere empezar de nuevo o por aquel cuya odisea de la imputación de un delito acaba de finalizar.

3.3. CRONOGRAFÍA.

Aquí “no necesita de calendario. El tiempo transcurre de manera distinta porque el cronista destaca los acontecimientos esenciales del tiempo vivido en el orden transcurrido, pero sin necesidad de quedar localizados en un año específico. Se trata mas bien de un tiempo cualitativo, discreto y reducido sólo a una relación de anterioridad y posterioridad, aunque entre los acontecimientos a veces transcurren períodos muy largos o, por el contrario muy cortos”.⁵¹ Como ejemplo de esto se tiene a la Biblia, el Corán, la Revolución Francesa, entre otros.

3.4. CRONOSOFÍA.

Trata del futuro. “Comprende, en general, todas las técnicas adivinatorias y prospectivas que analizando el pasado y el presente pretenden descubrir o alcanzar algún conocimiento sobre el porvenir”.⁵² Aquí se tiene a las predicciones de la economía, los horóscopos, la cosmología, entre otros. A veces se utiliza la cronosofía en el derecho penal cuando los periodistas el día que se ha dictado una sentencia o que alguien es detenido se le pregunta, por ejemplo al Dr. Mario Amoretti, cuándo recobrará su libertad el condenado, o cuándo saldría la señora Magaly Medina del penal cuando fue internada.

4. CATEGORÍAS Y DISTINCIONES SOBRE EL TIEMPO.

Se parte por precisar que “el tiempo es la medida, o el número, del movimiento, y es, así, “una unidad temporal de medida””⁵³.

4.1. TIEMPO E IDENTIDAD.

“Es necesario precisar que suprimir el cambio es suprimir el tiempo. Y en esto ha consistido, esencialmente, la gran tarea de la ciencia y de la filosofía a lo largo de los siglos; en buscar realidades en la naturaleza ajenas al cambio, que garanticen la duración, la estabilidad, la permanencia, que pueden ser formuladas en leyes universales y necesarias, ajenas, por tanto, al paso del tiempo”.⁵⁴

4.2. PERMANENCIA.

No se pretende hacer un estudio profundo de la permanencia como categoría⁵⁵, sino únicamente una mención, muy brevemente, a partir de los griegos, en primer lugar con

⁵⁰ Mircea Eliade, quien es citado por Mataix (1999), pp. 22 y 23.

⁵¹ Mataix (1999), p. 23.

⁵² Mataix (1999), p. 24.

⁵³ Mataix (1999), p. 42.

⁵⁴ Mataix (1999), pp. 27 y 28.

⁵⁵ Mataix (1999), pp. 27 y ss.

Aristóteles, luego la postura en la mecánica clásica para finalizar con una distinción entre permanencia y cambio.

Si tendríamos que apreciar la permanencia en el mundo griego se dirá que “la filosofía y la ciencia han tenido una tendencia al sustancialismo, a referir a una sustancia atemporal las propiedades cambiantes y temporales”.

En el mundo de la mecánica se consideró la “idea de sustancia estable, reforzada además por los principios de conservación, se conseguía una finalidad bien distinta. Asegurarse un universo ajeno al tiempo, estable, incambiante en sus elementos fundamentales; un universo que representa el ideal platónico, la idea eterna, que garantice la estabilidad frente al mundo perecedero y cambiante del hombre cotidiano. La mecánica clásica se presenta entonces como un intento de traspasar la temporalidad y trascender la finitud”.⁵⁶

Es importante destacar sobre la permanencia y el cambio que implica una interpretación opuesta “la negación de la idea de sustancia y de todo lo que suponga un universo que trasciende los fenómenos; así el camino iniciado por Heráclito al situar al fuego, por su carácter purificador y destructor, como imagen representativa del principio de las cosas, ha potenciado también una línea que acentúa el cambio frente a la identidad”.⁵⁷

4.3. ESTABILIDAD VS. CAMBIO.

En relación al tiempo, se expresa que el “tema del tiempo está vinculado, pues, a dos cuestiones opuestas: la estabilidad y el cambio. Desde la época de Parménides este problema ha estado polarizado hacia una u otro. Ya Platón hizo un tratamiento del tiempo en el *Timeo* considerándolo el aspecto del cambio que establece un puente entre el universo y su modelo, siendo, por tanto, “la imagen móvil de la eternidad”, muy en consonancia con la tesis platónica de un universo sometido a la regularidad de la ley y el orden. “El modelo de ley fue aportado por un ámbito ideal de formas geométricas que eran eternas y en un perfecto estado de reposo absoluto, como el mundo real de Parménides” (...). La distancia creada por éste entre realidad y apariencia, entre mundo eterno, perfecto, inmutable y el mundo heracliteano del cambio queda plasmada en Platón entre el mundo eidético, racional, inmutable y eterno de las Ideas, y su imagen móvil y cambiante”.⁵⁸

4.4. MEDIDA DEL TIEMPO.

Se defina a la medida del tiempo como “un tiempo mide un movimiento en tanto en cuanto la extensión del movimiento puede ser representada como un múltiplo de algún tiempo dado o unidad temporal. Aristóteles plantea ya este problema en la *Física*: Medimos no solamente el movimiento por el tiempo, sino también el tiempo por el movimiento, porque ellos se determinan recíprocamente, pues el tiempo determina el movimiento, del que es número y el movimiento el tiempo. Y hablamos de mucho o poco tiempo medido por el movimiento, igual que medimos el número por lo numerable”.⁵⁹

⁵⁶ Mataix (1999), p. 33.

⁵⁷ Mataix (1999), p. 35.

⁵⁸ Mataix (1999), p. 41.

⁵⁹ Mataix (1999), p. 43.

5. ENFOQUES TEÓRICOS.

5.1. EL TIEMPO SEGÚN EL BINBANG.

Sobre la evolución del orden social y el orden natural son importantes las expresiones de ROBERT CLARKE, quien en torno al tiempo precisa a partir de una interrogante:

“¿Qué significa el tiempo? Cuando nos remontamos hacia el *big bang*, deja de haber material que se pueda medir. Entonces, ¿en qué se convierte el tiempo? ¿La curvatura del espacio o la densidad de materia en el universo son relojes universales? El tiempo, como hemos visto, nació con nuestro universo, de forma que es una de sus características esenciales. Nos parece evidente que el tiempo transcurre en un solo sentido: no se puede hacer que la flecha del tiempo vaya en sentido inverso, del mismo modo que un río no sube nunca hacia su cabecera. Pero ese transcurrir del tiempo tiene modos variados. Ha permitido que la materia y la vida se organicen en lo que parece ser un movimiento universal del desorden hacia el orden. Sin embargo, la física nos muestra que la flecha del tiempo va, en general, al contrario, hacia el desorden. El principio fundamental de la termodinámica dice que un sistema aislado tiende naturalmente hacia el desorden: una taza de café se enfría, a la larga, pero nunca vuelve a calentarse; una casa, con el tiempo, se convierte en un montón de piedras, y no se reconstruye. Los seres vivos se desorganizan envejeciendo. Es lo que llamamos entropía. No ocurre así, al parecer, con el universo, que da la impresión de seguir muy ordenado al cabo de 15.000 millones de años. Tampoco ocurre con la evolución de los seres vivos, que no indica ningún desorden en su desarrollo. En cualquier caso, este último es irreversible; una vez establecida, la transformación de una especie animal o vegetal no retrocede nunca a su etapa anterior, del mismo modo que la taza de café frío no se recalienta. El tiempo transcurrido queda definitivamente eliminado. La flecha del tiempo es irreversible”⁶⁰.

Sin embargo, el autor reconoce algunas excepciones en torno a este tiempo:

“No obstante, parece que ciertos elementos primordiales de la materia eluden esta flecha del tiempo. Algunos, porque parecen ser eternos, por ejemplo los granos de luz. Hace años que se intenta demostrar que otras partículas esenciales de la materia como los protones –los constituyentes primordiales del núcleo de los átomos–, no son eternos, pero todavía no se ha conseguido. Por lo visto, tienen una duración de vida 10^{20} veces superior a la del universo, lo cual garantiza la estabilidad futura de la materia”.⁶¹

“Otros elementos del universo parecen también escapar a la flecha del tiempo. Si filmamos la Luna mientras gira alrededor de la Tierra y, a continuación, pasamos la película al revés, veremos que gira en el otro sentido pero a lo largo de la misma trayectoria, como si la gravitación fuera insensible a la dirección del

⁶⁰ Clarke (2001), p. 65.

⁶¹ Clarke (2001), p. 66.

tiempo. Lo mismo sucede con las otras grandes fuerzas, como la que garantiza la coherencia de los átomos o la que gobierna los fenómenos eléctricos o magnéticos. Por otro lado, Einstein demostró que no existe un tiempo absoluto, universal, sino sólo un tiempo para cada sistema de referencia. El de la Tierra no es el que podría medir un habitante de otro sistema planetario. Se puede comprender esta relatividad del tiempo a nuestra escala: la luz del sol tarda ocho minutos después, mientras que un venusino o un marciano situados en otro lugar que nosotros con respecto al Sol, lo sabrían en distintos intervalos del tiempo”⁶².

También se señala que “Einstein muestra asimismo que el tiempo varía con el movimiento: el de un observador que va muy deprisa es más lento que el de un observador inmóvil. Esto dio al físico Paul Langevin la idea de la paradoja de los gemelos en el espacio. Imagina que uno despegue en cohete, con un movimiento uniforme y a una velocidad próxima a la de la luz. Cuando vuelve a la Tierra, dos años después -según su reloj-, se encuentra con que su hermano ha envejecido un siglo. La demostración de esta relación del tiempo con la velocidad se llevó a cabo en 1971, con dos relojes muy exactos. Uno, situado en un avión rápido y que dio la vuelta al mundo, indicaba, a su regreso, algunas milmillonésimas de segundo menos que el otro, idéntico y que había permanecido inmóvil. Lo que constituye el presente para el observador inmóvil no es más que un futuro que no existe todavía para el que se desplaza. Por consiguiente, existen tantos sistemas de medir el tiempo como objetos en movimientos uniformes. No hay un patrón absoluto del tiempo. El concepto de tiempo no es universal”⁶³.

“En nuestra vida diaria no tenemos conciencia de ello, porque funcionamos a velocidades muy distintas de la de la luz. Pero, si se colocan dos relojes muy exactos, uno en el Polo Norte y otro en el Ecuador, este último, movido con más rapidez por la rotación del globo, va retrasado respecto al primero. También varía el transcurso del tiempo con la gravedad: es ligeramente más rápido en lo alto de un edificio que en la parte baja. En las estrellas muy densas va el doble de lento que en la Tierra. En los agujeros negros, esos Estados de densidad casi infinita de estrellas que se han hundido sobre sí mismas, el tiempo está eliminado, inmóvil”⁶⁴.

De todo esto se desprende que el que está preso envejece más rápido que el que no lo está, y el derecho penal no ha considerado que el atribuir una pena privativa de la libertad de otra no privativa de la libertad implica justamente por sobre todas las cosas realizar este juicio de valor, aunque en la actualidad se diría que ello no le interesa al derecho penal, o que pensar así es metafísico.

Por otro lado es conveniente vincular el tiempo con la vida a lo que el ROBERT CLARKE la denomina el tiempo de la vida:

⁶² Clarke (2001), p. 66.

⁶³ Clarke (2001), p. 66.

⁶⁴ Clarke (2001), pp. 66 y 67.

“¿Acaso el auténtico tiempo es el de la vida, como pensaba el filósofo Henri Bergson? Uno de los elementos más inquietantes de la organización de la vida es la existencia, en todas las plantas y todos los animales, de sistemas encargados de medir el tiempo. Todos los seres vivos funcionan teniendo en cuenta el momento apropiado para aparearse, poner huevos, florecer, adaptarse a los cambios de estación. El ritmo de actividad de 24 horas y la alternancia entre el día y la noche, que rige nuestro necesario sueño, son visibles en todas partes. Vivimos al ritmo de los astros, en comunicación con el universo, dado que nuestro ritmo esencial se basa en la rotación de la Tierra. Nuestra temperatura, nuestro tono muscular, nuestro sistema de defensa contra los microbios o nuestra alerta intelectual se atenúan de noche, para reforzarse durante el día”.⁶⁵

“Sin embargo, existen muchos otros ritmos biológicos: se ha demostrado que los medicamentos son más o menos eficaces según las horas a las que se administren. Existe un ritmo que rige la fecundidad, otros que gobiernan la secreción de hormonas, la respiración o los latidos del corazón. Un corazón animal extraído del organismo e irrigado por un líquido nutritivo sigue latiendo, a veces durante días. Algunos animales que viven en las playas tienen una existencia sincronizada con arreglo al ritmo de las mareas. Los mejillones que hemos comprado escupen su agua, en nuestra cocina, a la hora de la marea. Los gusanos marinos como los convolutos siguen esos mismos ritmos aunque se encuentren en un acuario alejado del mar. Plantas y animales son sensibles a las variaciones en la duración del día y la noche según las estaciones, y ello condiciona su modo de vida: es lo que provoca tanto la floración como la caída de la hoja, pero también el ciclo reproductor de numerosos animales. La llegada del invierno y el frío causa, según las especies, la migración hacia tierras cálidas y el adormecimiento durante la hibernación. Algunas larvas de cigarras se entierran en el suelo, al pie de los árboles en los que las hembras han puesto sus huevos, y permanecen así durante 13 o 17 años, para luego salir y transformarse en adultos. ¿Cómo saben medir un periodo tan prolongado? ¿Por qué esas cantidades, 13 o 17 años?”⁶⁶

“Los relojes animales son muy precisos: la araña, pase lo que pase, teje su tela desde la medianoche hasta las cuatro de la mañana. En la célula, el tiempo interviene para desencadenar la división o la muerte, tanto de las células como de los organismos. Un microbio está programado para vivir 10 minutos; muchos insectos, para unas cuantas horas o varios días; una secuoya, para 4.000 años. Se ha descubierto la molécula que provoca esta división celular y que funciona como un reloj: es la misma desde la levadura hasta el ser humano, nueva prueba de la asombrosa unicidad de los seres vivos y de que es real la evolución que la ha perpetuado hasta nosotros”⁶⁷.

“Todos los seres vivos poseen uno o varios relojes internos, maravillosamente regulados, generalmente situados en el cerebro, en las especies que lo tienen.

⁶⁵ Clarke (2001), pp. 67 y 68.

⁶⁶ Clarke (2001), p. 68.

⁶⁷ Clarke (2001), p. 69.

Aunque hace poco se han descubierto en una región curiosa, detrás de la rodilla, se ignora dónde se encuentra en las plantas. En el ser humano, este reloj biológico contabiliza la duración del día y la noche, y tienen en cuenta las diferencias que intervienen según las estaciones; se ajusta y se recalibra mediante la alternancia entre el sueño y la vigilia. No se conocen sus mecanismos internos, probablemente asociados a genes concretos que existen desde hace mucho tiempo y permiten a los seres vivos medir y contabilizar el tiempo. Sin embargo, se empiezan a identificar algunos de dichos genes, sobre todo en la mosca. Da la impresión que poseen un sistema oscilante, parecido a la péndola de un péndulo. Un sistema que nos parece complicado porque no hemos descubierto todos sus escondites en las células vivas, pero que seguramente representa la reacción de la naturaleza ante la necesidad de adaptarse a las variaciones del entorno, como la alternancia de las estaciones y la del día y la noche”.⁶⁸

“También existen sistemas de medir el tiempo en el mundo inerte. Una lámina de cristal de cuarzo colocada al vacío, bajo un circuito eléctrico, vibra 32.758 veces por segundo, de forma tan regular que se le ha convertido en un patrón de medir. Este fenómeno tiene su aplicación industrial en los relojes de cuarzo, desde la década de 1960. El segundo, que fue durante mucho tiempo el año solar dividido por 31 millones; ahora se define oficialmente, de forma totalmente esotérica para el común de los mortales, como «la duración de 9.192.631.770 dos niveles hiperfinos (de energía más baja) del estado fundamental del átomo de cesio». Ello ha permitido construir relojes tan exactos que no comente más error que un segundo cada tres millones de años”.⁶⁹

“El tiempo, pues, es un dato común al mundo inerte y el mundo viviente. Como vamos a ver, la aparición de la vida y su desarrollo sólo pudieron producirse teniendo en cuenta el tiempo, y plantean los mismos interrogantes que los que conciernen al universo. ¿Se trata de una serie de azares o de una serie ineluctable y necesaria de combinaciones cada vez más complejas de elementos inertes, que aparecieron por una especie de necesidad interna e intervinieron en una larguísima suma de pruebas y errores?”⁷⁰

5.2. EL TIEMPO Y LA PSICOLOGÍA.

“En el curso de la historia se captan continuamente secuencias de acontecimientos (naturales, o no) que son utilizados como medios para determinar las posiciones personales en la sucesión de los acontecimientos. Pero el aprendizaje social no es la causa de la hominización, su «a priori», si cabe decirlo así. Que el hombre está abocado al aprendizaje social para sobrevivir, etc., es indudable, pero ello no significa *eo ipso* que el aprendizaje social sea la «*conductio sine qua non*» del ser histórico del hombre y también su causa. La condición no debe confundirse con la causa. Por lo demás, la percepción del tiempo y el valor que se le atribuye varían,

⁶⁸ Clarke (2001), p. 69.

⁶⁹ Clarke (2001), pp. 69 y 70.

⁷⁰ Clarke (2001), p. 70.

no sólo con la edad, o en función de otros factores biológicos como las droga sino asimismo con la cultura. Si en nuestra sociedad el tiempo aparece como un producto precioso que no hay que despilfarrar, en otras culturas apenas tiene importancia. En Bali, por ejemplo, o en los alrededores de Guilin, el individuo adulto vive muy a fondo al momento del presente; no esperando nada, puede soportar indefinidamente el desarreglo de sus ocupaciones. Para él, la vida es un presente indefinido que no conduce a ninguna parte”⁷¹.

“Nuestra experiencia del tiempo y su medida se ha originado a lo largo de un dilatado proceso histórico, donde los procesos biológicos y psicológicos se han articulado en términos de unas escalas y de una cronometría que muestran una evidente tendencia a la aceleración. Desde hace siglos el tiempo de la historia se acelera en Occidente y nos arrastra con la fuerza compulsiva de un proceso irreversible, como también lo han hecho en diferentes momentos del proceso el espíritu de cada tiempo o de cada nación. El fenómeno no se da, en cambio, en otras culturas. Goethe escribió una vez que los hombres eran «órganos de su tiempo» y todavía no hay muchos motivos para desautorizarle. Gran parte de los conflictos que enfrentan a los pueblos se deben a la diversidad de sus respectivos *Zeitgeist*; no sólo a ello, desde luego, pero sí en muy buena parte”⁷².

5.3. LA TEORÍA DE LA TEMPORALIDAD.

Realizando un enfoque interesante de torno al tiempo subjetivo en contraste con el objetivo MARIA LUISA PFEIFFER sostiene:

“Pero podemos pensar al tiempo de manera diferente: como una relación con las cosas. Esta perspectiva se plantea desde otro sujeto que el trascendental, cuyas características son la sensibilidad y la particularidad. Este sujeto *usa* el tiempo objetivo y además siente otro tiempo que el que explica o mide, un tiempo que asocia a creencias y acciones cotidianas como cocinar “el tiempo de cocinar una langosta” o creer, “el terremoto duró dos Credos”. Es una vivencia asociada al pasar pero no sólo como algo que “veo” sino como pérdida, separación, distancia, diferencia, ausencia, referidas a otro. Al convertir el tiempo en objeto le quito peso vivencial, el presente, el pasado o el futuro se transforman en momentos de una sucesión exterior, no tienen nada que ver con pérdidas y esperas, presencias y ausencias. Como vimos se puede reducir la experiencia del tiempo a una sucesión mecánica en que aplicando la categoría causal el pasado es la causa del presente y éste la del futuro y ello es posible por la asimilación del tiempo al espacio. La inteligencia opera sobre la realidad perpetuamente móvil, concreta, por medio de esquemas, convirtiéndola en un conjunto de elementos, inmóviles, espaciales, separados. Pero lo real posee en su entraña un elemento huidizo y cambiante que se manifiesta sobre todo en la intuición del tiempo y del carácter temporal de la realidad que detiene o libera. Cuando el espacio es explicado desde criterios hermenéutico- científicos, como la adición de puntos en un cuadrante, ello hace

⁷¹ Pinillos, J. L. (1990). *El estudio psicológico del tiempo*, pp. 63 y 64.

⁷² Pinillos, J. L. (1990). *El estudio psicológico del tiempo*, p. 64.

posible la medida y la ubicación, pero aunque aceptáramos este procedimiento de referencia al espacio, la experiencia nos muestra que el tiempo elude siempre ese tipo de medida, es irreductible a lo cuantitativo y a lo mecánico, es “duración y libertad”. Si bien medimos el tiempo mediante intervalos matemáticos, nuestra experiencia escapa a esa medida, un minuto de una conferencia aburrida no tienen una duración idéntica al mismo minuto de una conferencia interesante. El tiempo de la vejez no es el de la juventud ni siquiera en la misma persona. Tampoco es el mismo el tiempo del vagar que el del trabajo, el del amor que el de la indiferencia, el de la espera que el del logro, el tiempo de mi relación con las cosas que el de mi relación con los otros. MINKOWSKI hace una descripción muy rica de esto que llama el tiempo vivido. Este puede ser estático o dinámico, lento o rápido, corto o largo, continuo o discontinuo, fluyente o detenido (repetitivo) orientado hacia el recuerdo o hacia la esperanza. La sucesión temporal en estas experiencias es más que un pasar, es un transcurrir que me implica. El pasar supone un antes y un después, supone ya el tiempo, supone un lugar (punto espacial) que dejo y otro (punto espacial) al que llego, el transcurrir es en cambio, *un correr a través*, atravesando. No se trata de una sucesión matemática que impide todo tipo de simultaneidad, sino de un transcurrir en que estamos tan insertos que es casi imposible hablar de él, es un fluir que dura y se sucede a sí mismo, en que lo sincrónico y lo diacrónico se superponen. No hay una secuencia, cualquiera que establezcamos por una necesidad objetiva es resquebrajada por un olor, un sabor, un sonido que interrumpe el sentido secuencial único y entremezcla los momentos secuenciales quitándole el carácter de tal; el ayer, el hoy y el mañana conforman un momento plenamente temporal pero sin ahora antes ni después”.⁷³

“Es por ello que los procesos del pensamiento discursivo se manifiestan contrarios a la naturaleza del tiempo hasta el punto de negarlo considerándolo” una nada entre dos nada”, no hay un modo lógico de definir al tiempo. La temporalidad es contradictoria en sí misma por que sólo puede ser explicada mediante el no ser y apenas se introduce éste la explicación es imposible porque el no ser niega la posibilidad del juicio. Explicar el tiempo es contradictorio porque supone que algo permanece mientras cambia, que algo es y no es, es necesariamente convertirlo en un ahora absoluto, objeto trascendentalmente válido. La experiencia del tiempo “subjetivo” no es objetivable más que por metáforas o relatos de situaciones concretas. Lo denominamos *subjetivo* para contraponerlo al objetivo, al observado por nadie desde ningún lugar. Contrariamente éste es el vivido por cada sujeto desde su individualidad propia, su experiencia personal e intransferible, lo que hace que su suceder y sus alteraciones sean singulares y únicas en cada persona. El tiempo no está aquí asociado con una causa objetiva diferenciable clara y distintamente, sino con el sentimiento, el afecto, las fantasías, los deseos, las creencias, los modos de ser, las circunstancias”⁷⁴.

Concluyendo, la autora argentina, que más que el tiempo objetivo y subjetivo lo que interesa es la temporalidad a la que define como:

⁷³ Pfeiffer, M. L. (1998). *Tiempo objetivo, tiempo subjetivo, tiempo trascendental*, pp. 50 y 51.

⁷⁴ Pfeiffer, M. L. (1998). *Tiempo objetivo, tiempo subjetivo, tiempo trascendental*, p. 51.

“Tal vez la pregunta que puede ser clave para concluir es ¿el tiempo es constituido o constituyente? ¿el melancólico constituye su tiempo desde alguna realidad previa o es el tiempo el que va constituyendo su mundo? Antes de responder recordemos lo que dice MERLEAU-PONTY a propósito de la intencionalidad operante en cuanto a que el mundo que aparece con ella no es la explicitación de un ser preexistente sino la fundación de un ser, no es reflejo de una verdad previa, sino la realización de una verdad. La intencionalidad operante constituye mundos temporales, por ello decimos que temporaliza. Según cómo se manifiesten los mundos que habite a nivel temporal, será el sentido que cobren para la persona y los que lo rodean. El tiempo objetivo y subjetivo que es su correlato, son tiempos que ya fueron constituidos, a los que objetivamos recortándolos sobre un modo temporal de intencionar. Podemos llamar a la intencionalidad temporalidad en tanto y en cuanto el análisis se nos parece como movimiento, podemos llamarla especialidad en tanto y en cuanto al analizarla se nos aparece como habitación. El tiempo entonces es constituyente (noesis) en cuanto es un modo de actuar de la intencionalidad, es constituido (noema) en tanto es un “resultado” de la intencionalidad, resultado que se nos aparece como tal cuando cristalizamos el movimiento intencional para limitarlo, para hablar de él, para nombrarlo, valorarlo, medirlo (...).

Al considerar la temporalidad como un modo de intencionar mundos no hablo entonces de un tiempo objetivo ni de un tiempo subjetivo, pero tampoco hablo de un tiempo trascendental, porque éste sería “algo” que posibilitaría la intencionalidad: el tiempo. En realidad hablar de temporalidad no es hablar de tiempo. El tiempo es lo que resulta del ejercicio de la temporalidad.

Puedo pensar un tiempo, dividirlo (tiempo de la ciencia), calificarlo (tiempo vivido o vivenciado), porque soy originariamente tiempo, así como podemos pensar un cuerpo, dividirlo y calificarlo porque somos cuerpo. No vivimos “en el tiempo” sino temporalmente.

Vivimos naciendo y muriendo, hallando y perdiendo, recordando y olvidando, recibiendo y despidiendo, esperando y alcanzando, somos tiempo”⁷⁵.

6. OPINIÓN.

De todo lo expuesto señalo que el tiempo es una categoría indispensable en el desarrollo de la vida humana, y la temporalidad es justamente el resultado o interacción entre esa categoría y la vida humana, que no se limita sólo a lo objetivo o a lo subjetivo, sino que traduce una complejidad. Por lo cual la interacción de estas categorías no es ajena al derecho y más aún al derecho penal.

Así a la larga se considera que en el derecho penal las manifestaciones del tiempo y la temporalidad se expresan por ejemplo cuando un magistrado a la hora de calcular el plazo

⁷⁵ Pfeiffer, M. L. (1998). *Tiempo objetivo, tiempo subjetivo, tiempo trascendental*, p. 57.

de una prescripción o el monto de una pena, coge su calendario y realiza el cálculo correspondiente, en este momento se vale de la cronometría; o la cronología a partir de querer empezar de nuevo y no estar jamás involucrado en un proceso penal como es el caso de un procesado. No se suele utilizar la cronosofía pues como los plazos de prescripción se basan en la pena conminada casi siempre se encuentra determinado el tiempo en que operaría, sin embargo si se utilizara el modelo de prescripción de la ejecución de la pena concreta, aquí sí sería aplicable la cronosofía.

Por otro lado, es importante considerar para el plazo de la prescripción penal lo señalado por Einstein al decir que el tiempo que transcurre para “un observador que va muy deprisa es más lento que el de un observador inmóvil”, por lo cual el plazo de prescripción para un detenido transcurre con menos lentitud que para uno que se encuentra en libertad, o para los que se encuentran prófugos en movimiento, pues en estos casos el tiempo transcurre menos rápido o con más lentitud, por ello el detenido se avejeta más rápido. Hay que aclarar que el prófugo en libertad es el que está en movimiento y no el que está encerrado, pues en este caso es tan igual como el caso del detenido. De allí que a partir de este criterio se señala que no transcurre igual el reloj en una cárcel de Alaska que en una de la Patagonia, o en el Ecuador.

Incluso, desde la perspectiva de la gravedad el tiempo transcurre más rápidamente en la altura de un edificio que en el parte baja, por ende habría que experimentar si el tiempo del cumplimiento de pena de un interno que está en un edificio de veinte pisos transcurre más rápido que el tiempo del que está en el sótano de dicho edificio, considerando la gravedad, esto si se trata de las cárceles o los establecimientos penitenciarios con estructura moderna, como es el caso de los futuros penales al amparo de la privatización de los establecimientos penitenciarios.

Desde la perspectiva de la temporalidad sucede que lo que es relevante para uno, no lo es para otro, el tiempo del joven no es el mismo que el del adulto, lo grato no se disfruta como lo no grato, por tanto será la intencionalidad de los actos la que determine la temporalidad sea como noesis y como resultado, es decir noema.

CAPÍTULO IV

TEORÍA DE LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL HECHO PUNIBLE

1. PROBLEMÁTICA DE LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DENTRO DE LA DOGMÁTICA PENAL⁷⁶.

En la doctrina contemporánea generalmente se estudia la teoría del delito dentro de la dogmática penal, claro está que pueden haber variaciones según las distintas corrientes representadas por los diversos autores. Empero, tales estudios realizados han descuidado la parte relacionada con las consecuencias jurídicas (así en el ámbito nacional la mayoría de manuales sólo desarrollan la teoría del delito⁷⁷). La dogmática no ha alcanzado aún un carácter científico inobjetable, por lo cual resulta importante su desarrollo. Sin embargo, ésta no debe ser la única labor del estudioso del Derecho penal, sino que además debería considerarse el estudio de las consecuencias jurídicas del hecho punible, a fin de no tener instituciones inaplicables o de escasa aplicación (por ejemplo: la exención de pena que desde la entrada en vigencia del principio de oportunidad se ha vuelto inaplicable), que muy bien podrían contribuir a descongestionar la carga procesal de los juzgados, sin acudir al recurso pasivo, facilista e irresponsable de la prescripción.

Este recurso hoy en día, con la dación de la ley N° 26641 y la entrada en vigencia del N.C.P.P., se ha pretendido no restringir al máximo la aplicación de la institución, sino eliminarla, perjudicando de esta manera a todas aquellas personas procesadas que por años y debido a la ineptitud del Estado vienen siendo perseguidas por el sistema penal. Hay que diferenciar la pasividad de algunos irresponsables magistrados, así como la omisión de responsabilidad que tiene el Estado para ayudar a la mejor investigación de las infracciones penales, de las persecuciones penales indefinidas debido a leyes confusas y hasta cierto punto arbitrarias emitidas por el Poder Legislativo.

Resulta necesario precisar la definición que en adelante se utiliza de “dogmática jurídico penal”, aunque algunos la equiparan a ciencia del derecho penal⁷⁸. De acuerdo con ROXÍN es una “disciplina que se preocupa de la interpretación, sistematización y desarrollo de los preceptos legales y las opiniones científicas en el ámbito del derecho penal”⁷⁹. Cabe recordar que el modelo de ROXÍN es teleológico orientado por las finalidades de la política

⁷⁶ En torno a la científicidad de la dogmática penal con criterios epistémicos es de obligatoria consulta la obra de Rojas (1997) pp. 11 y ss.

⁷⁷ El año de 1991 en que inicié mis prácticas en el tercer Juzgado de Instrucción de Lima, hasta mayo de 1992 fui testigo de cómo muchos de los jueces penales no aplicaban ninguno de los sucedáneos a la pena privativa de libertad efectiva, pues no sabían cómo hacerlo, entonces venían al despacho del juez a solicitar modelos.

⁷⁸ Mir (2008), pp. 49, párrafo 28.

⁷⁹ Roxin (1992), pp. 35. Sugerimos considerar la siguiente bibliografía en torno al concepto de dogmática: Luhamman (1983), pp. 27; Silva (1992), pp. 47 y ss; Zaffaroni (1985), pp. 42, 43, 123 y 124; Zaffaroni (1983), pp. 287; Bustos (1986), pp. 225 y 226; Maurach y Zipf (1994), pp. 54; Silva (1995), LH, pp. 15 y 16; Mir (1990), LH, pp. 26.

criminal⁸⁰, así este ha sido el punto de partida para la construcción sistemática de su teoría del delito.

El modelo de ROXÍN abarca también el sistema de sanciones. Así el autor sostiene respecto de la vinculación entre el Derecho penal y la utilidad político-criminal, que “muy claramente se pone esto de relieve en la reforma del sistema de sanciones jurídico-penales y de la ejecución de la pena: resocializar no significa introducir sentencias indeterminadas o disponer a capricho del condenado para tratamientos estatales coactivos. Más bien únicamente satisface la reforma al mandato constitucional, si al mismo tiempo fortalece la situación jurídica del condenado con la introducción de modernos métodos de terapéutica social y se reestructura jurídicamente la especial relación de poder que hasta ahora ha sido poco accesible a la especulación jurídica”⁸¹.

Se habla de las consecuencias jurídicas del hecho punible como el segundo gran objeto de estudio del Derecho penal o de lo que algunos denominan dogmática penal (no en el sentido que en este trabajo se asume). Pero, resulta necesario precisar los términos que conforman esta expresión. Entonces entendemos por consecuencias jurídicas de la sanción penal en general al estudio de la pena (y sus distintas clases) así como a las medidas de seguridad abarcables a todo tipo de infracción penal (delitos y faltas).

En la actualidad resulta necesario fundamentar el estudio de las consecuencias jurídicas del hecho punible. Así se tiene diversos puntos de vista a los que será necesario referirse brevemente.

JESCHECK al reconocer su rango científico e importancia práctica, señala que: “para el condenado mismo y para la colectividad las consecuencias jurídicas ocupan incluso el primer plano, pues la cuestión del tratamiento que por el Estado y la sociedad se da a la persona que delinque es frecuentemente decisiva para su suerte futura, y por eso comienza a interesar cada vez más a una comunidad que ha de entenderse con el delincuente”.

“Las consecuencias jurídicas del delito se dividen en penas, medidas y consecuencias accesorias (...). La configuración de las consecuencias jurídicas del delito es esencial tanto para determinar el rango que un ordenamiento jurídico-penal le corresponda en una comparación a nivel internacional como respecto a la

⁸⁰ Roxin (1992), pp. 77. Para este autor existe una armonía y compatibilidad entre el Derecho penal y la Política criminal así señala que el “Derecho penal es más bien la forma en la que las finalidades político criminales se transforman en módulos de vigencia jurídica. Si se estructura la teoría del delito en este sentido, teleológicamente desaparecerán las objeciones que se formulan contra la dogmática abstracto-conceptual proveniente de los tiempos positivistas. Una desvinculación entre construcción dogmática y exactitud político-criminal es, desde un principio, imposible y también pierde su sentido y voluble procedimiento de aprovecharse de la rivalidad entre la labor criminológica y la dogmática jurídico-penal: pues el transformar los conocimientos criminológicos en exigencias político-criminales y éstas, a su vez, en reglas jurídicas de *lege lata* o *lege ferenda*, es un proceso, cuyos estudios concretos son igualmente importantes y necesarios para el establecimiento de lo socialmente justo”.

⁸¹ Roxin (1992), pp. 33-34. Otra precisión que se considera necesario asumir en este trabajo es la concepción unificadora dialéctica de la pena denominada también prevención general positiva limitadora de Roxin (1976), pp. 11-36. Al respecto sugerimos considerar las precisiones que en torno a la teoría de la pena hacen Mir (1994), pp. 129-140 y más recientemente Silva (1992), pp. 238 y ss.

eficacia del Derecho penal en cuanto medio para el mantenimiento de la paz y la seguridad jurídicas”⁸².

Considero que JESCHECK⁸³ llega a esta conclusión teniendo como presupuesto las proposiciones que él llama “jurídico-penales” y esto se aprecia cuando dice: “que su supuesto de hecho es la descripción de un delito, y sus consecuencias jurídicas son penas o medidas”. Por lo cual para JESCHECK las consecuencias jurídicas del hecho punible están dadas por las penas, medidas, consecuencias accesorias y por los medios de reacción jurídico-criminales como son “la suspensión condicional de la pena (o suspensión de la pena a prueba), la libertad condicional (o suspensión del resto de la pena), la advertencia de reserva de pena, la renuncia a la pena y la compensación”⁸⁴.

En España, uno de los que más ha utilizado la categoría de las consecuencias jurídicas es el profesor GRACIA MARTÍN⁸⁵, quien considera que el sistema de las consecuencias jurídicas del delito está conformado por la pena, medidas de seguridad y reinserción social, las consecuencias accesorias, la responsabilidad civil derivada del delito y la reparación. Empero, este autor distingue aquellas consecuencias de naturaleza eminentemente penal de aquellas otras de naturaleza civil (consecuencia accesoria: la privación de ganancias ilícitas; y la reparación civil) y administrativa (la consecuencia accesoria del comiso).

El CP reguló de manera consistente el hecho punible y las consecuencias jurídicas, pues las diferenció al ubicarlas en lugares separados, por ejemplo, en el caso de las consecuencias jurídicas, señaló a las penas, medidas de seguridad, reparación civil y consecuencias accesorias.

FERNANDO VELÁSQUEZ plantea elaborar “la teoría de las consecuencias jurídicas del hecho punible”, así indica que por su importancia se pretende “la configuración de una nueva rama del saber jurídico dotada de plena autonomía: el derecho de las sanciones o de las consecuencias jurídicas; ello, sin duda, es producto de la necesidad de dotar de racionalidad a una parcela del ordenamiento librada tradicionalmente a la arbitrariedad”, (pp. 1027).

Al respecto señala el autor colombiano que “es bueno advertir que no se trata de elaborar una teoría sobre la “penometría”, sino de construir un derecho que contribuya al fortalecimiento de la seguridad jurídica y de las garantías individuales, más allá de los meros problemas prácticos de determinación y medición de la pena; de allí que se plantee la concurrencia de aspectos constitucionales, procesales y criminológicos en esta realización jurídica”⁸⁶.

⁸² Jescheck (2002), pp. 796.

Nota nuestra: en algunos casos mantendremos la referencia a la edición anterior basado en la indicación que el autor desarrolló más ampliamente los fundamentos que en esta nueva edición, precisando que cuando lo citemos haremos la referencia correspondiente, Jescheck (1993).

⁸³ Jescheck (1993), pp. 53.

⁸⁴ Jescheck (1993), pp. 757. Sin embargo, resulta necesario decir que en la parte referida a las consecuencias del delito aborda además de los temas indicados (la individualización de la pena, los presupuestos procesales, querellas y la prescripción), la rehabilitación y el indulto.

⁸⁵ Gracia (2006), pp. 35 y 36. En esta misma línea de tratamiento Molina (1996), pp.

⁸⁶ Velásquez (2009) pp. 1027 a 1028.

Es interesante también la toma de posición del autor en torno al término punibilidad o penalidad, pues para él, no se trata de una característica más del hecho punible, sino del plano de las consecuencias jurídicas del hecho punible. Así, las consecuencias del hecho punible son: las penas, las medidas de seguridad y las consecuencias jurídicas civiles⁸⁷.

Por su parte, JUAN FERNÁNDEZ CARRASQUILLA resalta “los nuevos planteamientos político-criminales, hasta el punto que puede hoy hablarse legítimamente de una dogmática de la pena que no sólo ha alcanzado el mismo “rango científico” de la que se refiere al delito [el autor se remite a Jescheck en la 3ra. ed., pp.1045, volumen II], sino que ha terminado por marcarle a la última las líneas directrices o finalistas de sus conceptos fundamentales [el autor se remite a ROXÍN: Política criminal, pp. 27]”⁸⁸.

Prosigue el autor afirmando que “desde el punto de vista de una ciencia jurídica dirigida a sus consecuencias sociales [remisión a HASSEMER, fundamentos, pp. 39 y ss.], en efecto, el planteamiento político-criminal consiste básicamente en una revisión de las categorías y conceptos de la teoría jurídica del delito, para adaptarlas a los de necesidad y utilidad de la pena criminal, pero apreciadas histórica y no metafísicamente. Más aún, la doctrina de la pena no puede ya reducirse a una concepción estrictamente jurídico-formal de la misma, sino que tiene que enfrentar su propia justificación política y social a la vista siempre de su proceso de ejecución”⁸⁹.

Uno de los pocos autores que se ha atrevido a formular el contenido del concepto de “consecuencias jurídicas” del hecho punible, es FERNÁNDEZ CARRASQUILLA al decir que se “remite a las cargas de responsabilidad penal y civil que la ley impone al ejecutor (autor o partícipe) del delito. Responsabilidad es, pues, la carga legal (mejor, seguramente, es hablar de carga que de obligación) que recae sobre el autor o partícipe de un hecho punible, carga que consiste en tener que afrontar las consecuencias jurídicas de ese hecho. Se trata, pues, de dar conceptos correlativos: las consecuencias son el contenido o peso de la carga que el responsable ha de afrontar, la responsabilidad es la situación legal en que una persona se ve inmersa para asumir coactivamente esas consecuencias jurídicas como la carga de su obrar”⁹⁰.

En el Perú, uno de los primeros que trató el tema de las consecuencias jurídicas del hecho punible, aunque muy someramente, fue el Dr. RAÚL PEÑA CABRERA⁹¹, en la actualidad gran mérito ha tenido el profesor sanmarquino VÍCTOR PRADO SALDARRIAGA, que es el que más ha escrito y utilizado dicha categoría, así como también en su reciente publicación el profesor HURTADO POZO en coautoría con VÍCTOR PRADO SALDARRIAGA.⁹²

⁸⁷ Debemos precisar que el autor, además de estas consecuencias, incluye la determinación de la sanción penal (pp. 1084 y ss), La causa de extinción de la pretensión punitiva del Estado (pp. 1181 y ss.) y los subrogados penales (la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la libertad condicional) (pp. 1156 y ss.).

⁸⁸ Fernández J. (1989), pp. 439.

⁸⁹ Fernández J. (1989), pp. 439.

⁹⁰ Fernández J. (1989), pp. 441.

⁹¹ Peña, R. (1994), PG, pp. 495 al 588, quien sigue a Figueredo (1988) y a Fernández J. (1989).

⁹² Prado Saldarriaga, V. (2000) y también Hurtado Pozo, J. y Prado Saldarriaga, V. (2011).

Es necesario considerar de suma importancia la distinción hecha por ROXÍN entre la importancia de la teoría del hecho punible y la de las consecuencias jurídicas al afirmar respecto de la primera que: “El “sí” de la punibilidad es, por tanto, el tema central de la teoría general del derecho penal [para nosotros teoría del delito] como de derecho penal material en general”, mientras que la teoría de las consecuencias jurídicas “tiene que ver preponderantemente sólo con el “cómo” de las sanciones penales. Pero con el “sí” y el “cómo” de las reacciones penales se describe dos ámbitos del rango de tareas del mismo rango político jurídico”⁹³.

2. UBICACIÓN DE LA CATEGORÍA DE PENALIDAD O PUNIBILIDAD.

El estudio de esta categoría también ha tenido fuerte discrepancia en la doctrina, incluso de si es o no una categoría, por ello es importante fijar una noción que a su vez sea de suma utilidad para la presente investigación. Algunos sostienen que pertenece a la teoría del delito y otros a la teoría de las consecuencias jurídicas del hecho punible, ello dependerá del contenido o los fundamentos que se le atribuya.

Así SÁINZ CANTERO⁹⁴ señala respecto de la punibilidad tres posiciones:

- 1º “Quienes niegan a la punibilidad no sólo la condición de elemento del delito sino incluso la cualidad de ser necesaria como referencia conceptual para definirlo” como exponentes de esta posición señala a MAYER, WELZEL y RODRÍGUEZ MUÑOZ);
- 2º “La de quienes la consideran simplemente una referencia conceptual necesaria del delito” (MEZGER, GRISPIGNI, ANTOLISEI, MANUEL COBO); y
- 3º “La de aquellos que entienden como elemento importante valor funcional y sistemático” (BATAGLINI, JIMÉNEZ DE ASÚA y la posición de SÁINZ CANTERO).

A continuación se presenta las dos posiciones que actualmente se discuten:

2.1. LA PUNIBILIDAD COMO PARTE DE LA TEORÍA DEL DELITO.

Es interesante la distinción hecha por SÁINZ CANTERO, al decir que “la punibilidad puede ser concebida de dos formas: como una previsión legal y abstracta de la pena para una conducta típica, antijurídica y culpable, bajo cuyo entendimiento sería punible todo hecho conminado con pena por la ley y como posibilidad de aplicar la pena conminada a una conducta típica antijurídica y culpable, en cuyo sentido sería punible sólo el hecho que en el supuesto concreto, puede ser castigado. Existirán según este segundo punto de vista, hechos conminados con pena en abstracto que, en el caso concreto no pueden ser penados”.⁹⁵

⁹³ Roxin (1992), pp. 41.

⁹⁴ Sáinz (1995), pp. 124.

⁹⁵ Sáinz (1995), pp. 123.

Por su parte MUÑOZ CONDE⁹⁶ también se ha manifestado seguidor de esta posición, a pesar de reconocer que la penalidad es una categoría del delito que no siempre se da de manera manifiesta en todos los delitos⁹⁷.

El autor valenciano ha vuelto a tratar el tema y ha considerado que “preferiría utilizar el término más neutral de “penalidad”, que otros llaman “punibilidad”, “merecimiento” o “necesidad de pena”. Continúa este autor señalando: “La penalidad o punibilidad es, por tanto, una forma de recoger y elaborar una serie de elementos o presupuestos que el legislador, por razones utilitarias, diversas en cada caso y ajenas a los fines propios del derecho penal, puede exigir para fundamentar o excluir la imposición de una pena y que sólo tienen en común que no pertenecen ni a la tipicidad, ni a la antijuricidad, ni a la culpabilidad, y su carácter contingente, es decir sólo se exigen en algunos delitos concretos. También en la penalidad existen causas que la fundamentan (las llamadas condiciones objetivas de penalidad) y causas que la excluyen (las llamadas causas de exclusión o anulación de la penalidad o excusas absolutorias). Aunque respecto a alguna de ellas se discute si no pueden integrarse a otras categorías, lo más importante es que, al no ser elementos de la tipicidad, no tienen que ser abarcadas por el dolo, siendo por tanto irrelevante el error del sujeto sobre su existencia. Finalmente trataremos de las causas de extinción de la responsabilidad criminal, de difícil encuadre sistemático en la teoría general del delito, pero que por su carácter excluyente de la imposición o ejecución de la pena pueden estudiarse también aquí”⁹⁸.

En Alemania, STRATENWERTH afirma que “la culpabilidad jurídico-penal captable no justifica por si sola la pena. En todos los casos deberá agregarse todavía la necesidad práctica de hacer uso de la pena para la protección del orden social. Por lo tanto, es posible suponer que, más allá de la realización culpable de lo ilícito típico, existen otros presupuestos de la punibilidad que se refieren precisamente a esta necesidad de protección. Por regla general, las necesidades político-criminales influyen ya en la elección de los comportamientos que la ley amenaza con pena; lo irrelevante o no peligroso queda desde el principio fuera de consideración en la formulación del supuesto de hecho típico (o por lo menos así debería ser). Por lo tanto, con la formalización del tipo se decide, por regla general también sobre la necesidad de protección (...) hay comportamientos en los cuales la necesidad de una intervención punitiva resulta fundamentada por circunstancias que están más allá de lo ilícito y de la culpabilidad. Estas circunstancias pueden obrar también debilitando o directamente excluyendo la necesidad de tal intervención. Este grupo de elementos constituye el último de los presupuestos de la, punibilidad”⁹⁹.

Por su parte MAURACH considera excepcionalmente que: “En determinados casos para que entre en acción el efecto sancionador se requiere más elementos que aquellos que bastan para el ilícito que configure el tipo. En parte, esas inserciones ocasionales de la ley entre la comisión del ilícito y la concreta sanción se adscriben al derecho material; en tales casos se habla de *condiciones* objetivas o externas *de punibilidad*; por otro lado (según su

⁹⁶ Muñoz (1990), pp. 171 y ss.

⁹⁷ Muñoz (1990), pp. 5 - 171 y ss.

⁹⁸ Muñoz y García M. (1993), pp. 360 y ss. (Véase la crítica de Muñoz Conde para Bacigalupo).

⁹⁹ Stratenwerth (1982), pp. 72 y 73 (párrafo 186).

esencia, y no siempre según las *sedes materiae*) constituye parte del derecho procesal, en tales casos se las denominan presupuestos procesales”¹⁰⁰.

En este mismo sentido JESCHECK para quien “injusto y culpabilidad bastan normalmente como presupuestos de la punibilidad, existen sin embargo, casos en los que con ello el merecimiento la pena no queda aún constatado de forma concluyente, y la decisión sobre la punibilidad del hecho sólo se toma atendiendo a elementos que se ubican más allá del injusto y de la culpabilidad. Estos factores adicionales únicamente atañen a la cuestión de la punibilidad cuando pertenecen al derecho penal material. Si, por el contrario se trata de presupuestos procesales o de obstáculos procesales (como querella o la amnistía), no resulta afectada la punibilidad del hecho”¹⁰¹.

La mayoría de estos autores coinciden en afirmar que el contenido de la punibilidad, aunque como *categoría contingente* de la teoría del delito, lo conforman:

- 1º Las condiciones objetivas de punibilidad o penalidad;
- 2º Las causas personales que excluyen la punibilidad, o causas de exclusión, anulación o excusas absolutorias o causal absolutoria o personal de exclusión de pena o excusas legales absolutorias o causa personal de exclusión de la pena;
- 3º Condiciones de procedibilidad o supuestos formales que condicionan la perseguibilidad o presupuestos procesales u obstáculos procesales; y
- 4º Causas de extinción de la responsabilidad penal o causas de exclusión de la pena o causas de la extinción punitiva del estado.

2.2. LA PUNIBILIDAD COMO PARTE DE LA TEORÍA DE LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS

FERNANDO VELÁSQUEZ, desde su primera edición a la más reciente, se ha referido a este tema muy brevemente negando que la punibilidad o penalidad “sea una característica más del delito o hecho punible, como plantea algún sector doctrinario, que confunde planos diferentes de análisis: el del hecho punible y el de las consecuencias jurídicas emanadas de él (sic), por lo cual tal postura debe ser rechazada”¹⁰².

Así mismo el profesor colombiano, seguidor de la teoría de las consecuencias jurídicas del delito o hecho punible, ubica dentro de ésta a la punibilidad y a la determinación de la sanción penal¹⁰³.

Sin embargo, es EUGENIO RAÚL ZAFFARONI quien mejor sistematiza esta posición, desde su llamada teoría de la coerción materialmente penal.

¹⁰⁰ Maurach y Zipf (1994), pp. 371.

¹⁰¹ Jescheck (1993), pp. 593.

¹⁰² Velásquez (2009), pp. 1028.

¹⁰³ Velásquez (2009), pp. 610 y 611.

En Brasil, HELENO CLAUDIO FRAGOSO plantea dentro de la teoría de la pena los casos de extinción de la punibilidad¹⁰⁴. Otro que, considera a la punibilidad como una consecuencia jurídica del delito, es MAYRINK DA COSTA¹⁰⁵.

En el Perú, FELIPE VILLAVICENCIO ha manifestado que el estudio de los presupuestos que apartan la punibilidad, pertenecen a la teoría de la pena¹⁰⁶.

Por ende, el contenido de la posición que considera a la penalidad o punibilidad como categoría del delito, sería o formaría parte de la teoría de las consecuencias jurídicas.

PEÑA CABRERA desarrolló coherentemente las causas de extinción de la acción penal y de la pena dentro de la teoría de las consecuencias jurídicas¹⁰⁷.

La posición que se asume en torno a la punibilidad es que se trata de una categoría del delito, pero de naturaleza contingente, es decir estará presente en algunos casos y será exigible, de tal manera que su ausencia implica que no hay delito. Sin embargo, existe un extremo que no pertenece al delito y es el caso de las llamadas excusas absolutorias, que no son procesales, sino penales y su ubicación es la teoría de las consecuencias jurídicas del delito.

Por tanto, la parte de la punibilidad que pertenece a las consecuencias jurídicas del delito es el de las excusas absolutorias, que en la doctrina recibe el nombre de causas personales de exclusión de la punibilidad, o anulación, o causal personal de exclusión de la pena o excusas legales absolutorias, o condiciones personales de supresión, anulación, levantamiento o remisión de punibilidad (aspecto negativo o condiciones objetivas de punibilidad extrínsecas). *Así el carácter de la punibilidad es transversal a la teoría del delito así como a la teoría de las consecuencias jurídicas.*

Por todo lo señalado en la presente investigación se asumirá que la teoría de las consecuencias del hecho punible, la misma que se encarga del estudio de todos aquellos elementos que no pertenecen a la teoría del delito y ellos son: las excusas absolutorias, las causales de la extinción de la acción penal y de la pena, las penas y medidas de seguridad, las consecuencias civiles y accesorias, las alternativas a la pena privativa de la libertad y los subrogados, la rehabilitación y todos los criterios de la determinación judicial de la pena.

¹⁰⁴ Fragoso (1993), pp. 399.

¹⁰⁵ Mayrink (1995), pp. 721.

¹⁰⁶ Villavicencio (2006), pp. 229.

¹⁰⁷ Peña R. (1994), PG, pp. 563 y ss.

CAPÍTULO V

PRECISIONES CONCEPTUALES

Se propone también en esta parte del presente trabajo la diferenciación de conceptos que muchas veces se tiende a identificar y utilizar indistintamente como si se tratara de sinónimos, es el caso de las condiciones objetivas de punibilidad¹⁰⁸, las excusas absolutorias, los requisitos de procedibilidad y las causas de extinción de la responsabilidad penal.

1. CONDICIONES OBJETIVAS DE PUNIBILIDAD¹⁰⁹.

Se diferencia entre condiciones extrínsecas o propias, “cuando por razones de proporcionalidad y por interés ajeno a los bienes jurídicos concretos se restringe la punibilidad”, e intrínsecas o impropias, cuando se trata de “una circunstancia, que actualice intereses tutelados por el delito o próximos a él, fundamentando el desvalor ético-social del hecho y lesionando el principio de culpabilidad”¹¹⁰.

Las condiciones impropias implican que “una correcta interpretación del delito excluya la relevancia de la relación volitiva entre el autor y una determinada conducta, una circunstancia y un resultado”. En cambio, si “esa relación es exigida por el legislador, el elemento típico en cuestión no puede incluirse en esa figura” (es decir como condición objetiva de punibilidad, así MAPELLI, 1990, pp. 93). Entonces, si esta condición objetiva no se cumple, el juez penal tendrá que declarar la **absolución**.

Así las condiciones objetivas de punibilidad intrínsecas pertenecen al tipo, pero no son abarcadas por el dolo.

Mediante esto se supera los cuestionamientos sistemáticos, pues se prevé que las condiciones impropias pertenecen a la teoría del delito.

Empero, se ha de considerar a las condiciones objetivas de punibilidad extrínsecas como requisitos de procedibilidad, y por ende ubicarlas sistemáticamente en el derecho procesal penal, aunque para este trabajo voy a reiterar lo que ya he sostenido, que la punibilidad es la cuarta categoría del delito, contingente, y que el extremo negativo de las condiciones objetivas de punibilidad, también llamado extrínseco forma parte de la teoría de las consecuencias jurídicas del delito, como ya se indicó.

Se las define como “circunstancias objetivas que por razones de estricta utilidad en relación al bien jurídico protegido condicionan la imposición de la pena, o su medida (...)”

¹⁰⁸ Véase Sáenz (2006), LH, pp. 913 a 925, aquí aprecié de manera detallada la postura mayoritaria de sostener que la punibilidad es la cuarta categoría del delito, aunque con la característica de ser contingente, y algunos la matizan con el merecimiento y la necesidad de pena.

¹⁰⁹ El término “condiciones objetivas de punibilidad” es cuestionada, ya que en realidad lo que hace no es condicionar punibilidad alguna ni pertenecer a ella, sino más bien, se reduce «a la particularidad de constituir elementos ajenos a la voluntad del autor». Véase Mapelli (1990), pp. 93.

¹¹⁰ Mapelli (1990), pp. 29.

tienen un carácter positivo”¹¹¹ y se precisa que si “se hallan fuera del tipo de lo injusto; pertenecen (como «anexo del tipo») a los presupuestos materiales de la punibilidad, a los cuales no es necesario que se extienda el dolo de tipo”¹¹².

“En el proceso penal, la falta de una condición objetiva de punibilidad da lugar a la absolució”¹¹³, siempre y cuando sea intrínseca.

En la doctrina, ZAFFARONI ha expuesto de manera muy didáctica los argumentos para considerar esta figura como inexistente. Este autor objeta que su aceptación vulnera el principio de culpabilidad, siendo un rezago de la responsabilidad objetiva, y en todo caso, o bien pertenece al injusto o se trata de cuestiones procesales¹¹⁴.

Y con la única precisión de que estas condiciones pertenecen al tipo, se tiene al profesor SANTIAGO MIR PUIG, quien es uno de los que ha considerado que las condiciones objetivas de punibilidad corresponden al tipo penal¹¹⁵. En el Perú algunos autores utilizan el concepto, así HURTADO POZO¹¹⁶ considera la presencia de una condición objetiva de punibilidad en el delito de suicidio (art. 113 del CP); y PEÑA CABRERA¹¹⁷, por su parte, considera que en el art. 164 del CP existe una condición objetiva de punibilidad intrínseca que está dada por el perjuicio que se cause a otro.

2. EXCUSAS ABSOLUTORIAS.

La doctrina es unánime al reconocer la existencia de esta figura. Se la define como las “circunstancias personales que por estrictas razones de utilidad en relación a la protección del bien jurídico excluyen la imposición de pena de un delito”¹¹⁸, aunque algunos la denominen condiciones objetivas de punibilidad extrínsecas.

Por su parte ZAFFARONI hace algunos cuestionamientos en torno al término “excusas absolutorias”, para él éstas son causas personales que excluyen la punibilidad¹¹⁹.

Los alemanes distinguen entre *causales personales de exclusión de pena* “que son las circunstancias previstas legalmente cuya existencia produce de antemano la impunidad y que deben haber existido en el momento de la comisión del hecho”¹²⁰ y *excusas absolutorias* o llamadas también por JESCHECK¹²¹ “causas personales de exclusión de la

¹¹¹ Bustos (1989), pp. 255.

¹¹² Wessels (1980), pp. 49.

¹¹³ Wessels (1980), pp. 50. En este mismo sentido Muñoz (1990), pp. 172; Jescheck (1993), pp. 503 y ss.; Jescheck (2002), pp. 598; Maurach y Zipf (1994), pp. 372 al 374; Cury (2005), pp. 348, este autor chileno utiliza el término *impune*; Stratenwerth (1982), pp. 73; y a diferencia de estos autores, otros señalan que forman parte del tipo: Sáinz (1995), pp. 128, siguiendo a Antón Oneca.

¹¹⁴ Zaffaroni (1983), pp. 51 al 58 -Nº 589º.

¹¹⁵ Mir (2008), pp. 170, párrafo 65.

¹¹⁶ Hurtado (1995), pp. 101 y ss.

¹¹⁷ Peña R. (1994), PE, pp. 606.

¹¹⁸ Bustos (1989), pp. 252. En este mismo sentido, véase: Cury (2005), pp. 348 y 468 respectivamente; Mir (2008), pp. 754, párrafo 2; Sáinz (1995), pp. 133 y 134.

¹¹⁹ Zaffaroni (1983), pp. 20 al 22.

¹²⁰ Wessels (1980), pp. 133.

¹²¹ Jescheck (1993), pp. 500 y 501; y (2002), pp. 593 y 594.

pena” y “son circunstancias que se presentan solamente después de la comisión de un hecho punible”¹²².

MUÑOZ CONDE dice que, por su extensión “se trata normalmente de causas vinculadas a la persona del autor y que por lo tanto, sólo le afectan a él y no a los demás participantes en el delito”¹²³.

Es de recordar que al parecer el excongresista de la República JAVIER ALVA ORLANDINI, en su proyecto de Ley N° 389/95, también se basó en esta idea al plantear que la excusa absolutoria del art. 178 del CP no debería incluir a los coautores. Al respecto mi posición es que, por ser la excusa absolutoria una medida de política criminal, debería de abarcar a todos los comprendidos en el supuesto del art. 178, además con esta propuesta se llegaba al absurdo de sostener la situación en la que cada uno de los violadores querría proponerle matrimonio a la víctima, así se le otorgaba a esta el poder de decidir quién se libraba del sistema penal y quién no, lo cual no constituía una solución al conflicto, sino más bien un nuevo problema. Por ende sostengo que la excusa absolutoria debe ser siempre aplicada en sentido amplio, o de lo contrario excluirse su aplicación cuando existan problemas, considerando lo sensible que puede resultar algunos temas, tales como, el delito de violación en el Perú. Un ejemplo de esta línea de exclusión lo constituyó la aprobación del pleno del Congreso del proyecto de ley de BEATRIZ MERINO, hoy convertido en la ley N° 26770, en cuyo art. 2 in fine se suprimió los efectos de la excusa absolutoria para los coautores del delito.

En la doctrina nacional un ejemplo de excusa absolutoria se encuentra en el numeral 1 del art. 133 del CP referido a las injurias recíprocas¹²⁴.

3. CONDICIONES O REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD¹²⁵.

Sobre el concepto de condiciones de procedibilidad y su naturaleza de orden procesal, existe acuerdo en la doctrina y se le define como los elementos “que, condicionan, no la existencia del delito, sino su persecución procesal, es decir, la apertura de un procedimiento

¹²² Wessels (1980), pp. 142 y 143. En nuestro país, Villavicencio la considera como uno de los presupuestos que apartan la punibilidad (2003), pp. 229, aunque este autor la denomina causas personales que excluyen la punibilidad.

¹²³ Muñoz (1990), pp. 173

¹²⁴ Peña R. (1994), PE, pp. 404.

¹²⁵ Conocidos también con el nombre de presupuestos formales que condicionan la perseguibilidad o presupuestos procesales u obstáculos procesales.

En Alemania J. Baumann define tautológicamente a los presupuestos procesales como “los presupuestos para que se pueda dictar en el proceso una decisión sobre el fondo del asunto” (pp. 264), y precisa que el impedimento procesal “es tan solo el concepto invertido del presupuesto procesal. Si éste falta, se da un impedimento procesal” (pp. 257), así sintetiza que “Si existe un impedimento procesal (y ninguna posibilidad para eliminarlo...) el procedimiento se cerrará”. Así la prescripción para este autor es un presupuesto en el sentido de persecución y también es un impedimento por eso concluye que tiene doble naturaleza. Véase Baumann (1986).

Por su parte, Gómez Colomer define el concepto de “presupuesto procesal” (por eso, en el proceso penal alemán el uso de las excepciones es sumamente restringido) siguiendo a Roxin como “aquellas circunstancias de las que depende la admisibilidad de todo el proceso, o de determinadas partes del proceso” (pp. 86), y se precisa que éstos “pueden ser positivos y negativos. Los negativos se denominan impedimentos procesales”. Luego, distingue que la falta de un presupuesto o impedimento procesales acarrea la inadmisibilidad del proceso (pp. 89), en cambio si se trata de una condición objetiva de punibilidad se debe absolver necesariamente (pp. 86). Así la prescripción es un presupuesto procesal relativo a la causa o proceso. Véase Gómez J. L. (1985).

penal. Se trata de obstáculos procesales que en el fondo, tienen la misma función que las condiciones objetivas de penalidad”¹²⁶.

En el Perú, inicialmente fue el profesor DOMINGO GARCÍA RADA, quien citando a LEONE, la definió como “aquellas causas que condicionan el ejercicio de la acción penal y sin cuya presencia no es posible promover o proseguir la acción penal”¹²⁷. Por su parte VILLAVICENCIO se refiere a éstas como condiciones procesales (pp. 229 y 230), pero quien ha realizado un trabajo específico es CÉSAR SAN MARTÍN CASTRO, quien concluye que son presupuestos procesales que “se oponen a la instauración de una relación procesal válida”¹²⁸.

Hasta aquí se han utilizado los términos ‘presupuestos formales de punibilidad’ (STRATENWERTH Ob. cit., pp. 73 N° 190), o presupuestos procesales. Para JESCHECK “los presupuestos procesales responden a las circunstancias que se oponen al desarrollo de un proceso penal”¹²⁹. No hay que olvidar que para este autor la prescripción es un presupuesto procesal. En este mismo sentido MAURACH dice: “Los presupuestos procesales son reglas del procedimiento cuya existencia funda la punibilidad de incoar un procedimiento penal y de dictar una sentencia de fondo” y agrega luego “pertenecen exclusivamente al Derecho procesal penal (...), no afectan ni al contenido del ilícito ni a la punibilidad del hecho, sino que se limitan exclusivamente a condicionar la perseguibilidad; faltando ellas, no procede absolver, sino **sobreseer** el procedimiento”¹³⁰.

A la luz del CP se dice que en el art. 149° hay un requisito de procedibilidad, a pesar que, dicho artículo no lo expresa, sin embargo los entes encargados de aplicar la norma penal, han interpretado que sí, así por ejemplo en el MP es una exigencia que toda denuncia tenga tal requerimiento. Otro requisito de procedibilidad se encontraba en la declaración judicial firme de quiebra (art. 209, hoy modificado), en la actualidad se tiene el antejuicio regulado en los arts. 99° y 100° de la vigente Constitución para delitos cometidos en ejercicios de sus funciones, del cual se ha realizado un abuso en su aplicación, así se tienen los casos de la congresista Chacón y el excongresista Raffo.

A continuación se tienen algunos ejemplos en el art. 215° del CP referido a libramientos indebidos, penúltimo párrafo; en el art. 313° del C de PP para algunos delitos de violación de la libertad sexual en concordancia con el segundo párrafo del art. 178°; en el art. 66° numeral 4° del D. Leg. 052; en el art. 257° del C de PP en concordancia con el CP art. 409°; y en el art. 11 de la ya derogada Ley 23506 (concluido el procedimiento de Hábeas Corpus o Amparo).

¹²⁶ Muñoz (1990), pp. 173; Muñoz y García M. (1993), pp. 361; Mir (2008), pp. 173, párrafo 72; Bustos (1989), pp. 252; Sáinz (1995), pp. 132 y 133; Rodríguez J. M. y Serrano A. (1994), pp. 419 y 685; Zaffaroni (1983), pp. 58 y ss.

¹²⁷ García D. (1984), pp. 30.

¹²⁸ San Martín (diciembre, 1985): Las condiciones objetivas de punibilidad y su tratamiento procesal en el Perú; pp. 360.

¹²⁹ Jescheck (1993), pp. 506; En la quinta edición señala que “se toma en consideración circunstancias que están conectadas con el aseguramiento de la paz jurídica” (2002), pp. 600, y se agrega luego “que ante la falta de un presupuesto procesal el procedimiento se *archiva*”, pp. 600.

¹³⁰ Maurach en Maurach y Zipf (1994), pp. 374 N° 23 y 24°, y no olvidemos que también este autor considera a la prescripción como un presupuesto procesal. Igualmente véase Bauman, quien precisa aún mejor este concepto (1986), pp. 256 y ss.

Otros ejemplos se encuentran en los artículos: 165, 190, 191, 216, 222 a 225, 232 a 240 del CP¹³¹. Con el CP (1924) se tenía como ejemplo de requisito de procedibilidad que acarrearba cuestión previa el art. 212 in fine para los delitos de adulterio; y el art. 5º de la Ley N° 13906, que expresamente exigía el requerimiento; así como la Ley N° 7566 art. 1 y siguientes.

4. CAUSALES DE LA EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL¹³², CAUSAS DE EXCLUSIÓN DE LA PENA O CAUSAS DE EXTINCIÓN PUNITIVA DEL ESTADO¹³³.

Se las define como aquellas que “no guarda relación alguna con la perfección del delito en todos sus elementos técnicos. Lo que sucede es que en esos casos el Estado da por realizada su misión, ya sea porque la sanción penal ha sido cumplida o es de imposible cumplimiento (casos de cumplimiento de condena y de muerte del reo), ya sea porque el particular perjudicado por el delito perdona al autor, perdón que sólo tiene eficacia en algunos delitos, o bien porque particulares sentimientos de justicia determinen al Estado, a través de sus instituciones, a perdonar u olvidar el hecho (indulto), o, por último, porque el espacio de tiempo transcurrido desde la comisión del hecho o la imposición de la pena desaconsejan, por innecesaria, la persecución de aquél o la ejecución de ésta (prescripción del delito y de la pena)”¹³⁴.

Resulta necesario precisar que esta definición sirve para el objeto de nuestra investigación. Así como es sumamente descriptiva y detallista la postura del profesor CURY URZÚA, quien define a las causas de extinción de la responsabilidad penal como “ciertas situaciones que en algunos casos ocasionan efectivamente la exclusión total o parcial de los efectos de una responsabilidad penal previamente existente y ya declarada, pero en otros determinan solamente una imposibilidad de pronunciarse sobre ella, tanto para afirmarla como para negarla”¹³⁵.

No obstante, a pesar de que la gran mayoría de autores coinciden con ella en el contenido, se debe prevenir al lector, que para JESCHECK, MAURACH, STRATENWERTH, WESSELS, ROXIN y más recientemente FRISTER, la prescripción no formaría parte de esta figura, sino que constituiría un presupuesto procesal¹³⁶.

¹³¹ Peña (1994): P. E. III, pp. 234-269.

¹³² Bustos (1989), pp. 411 y ss.; Cury (2005), pp. 783 y ss.; Mir (2008), pp. 754 y ss.; Rodríguez J. M. y Serrano A. (1994), pp. 667, aunque se refiere a ésta como una de las causas de exclusión de pena; Muñoz y García M. (1993), pp. 362 al 365 aunque cambian las palabras penal por criminal; la misma idea Quintero (2007), pp. 769; de igual forma Landrove (1985), pp. 131; empero suprimiendo el término penal está Morillas (1991), pp. 183.

¹³³ Así la denomina Velásquez, diciendo «este fenómeno no sólo afecta la potestad de juzgamiento (la acción penal), sino también la de ejecutar un pronunciamiento dado (la pena o la medida de seguridad)». (2009), pp. 1182.

Fragoso la denomina “extincao da punibilidade”, (1993), pp. 399; Zaffaroni la denomina ‘causas personales que cancelan la punibilidad’, (1983), pp. 20 y ss.

Por su parte De Jesús considera como «causas extintivas da punibilidade», dentro de la cual comprende a la Prescripción (2002), pp. 590, 629 al 657.

¹³⁴ Quintero (1996), pp. 581, aunque este autor las denomina *extinción de la responsabilidad criminal*. También véase Muñoz (1990), pp. 174; Mir (2008), pp. 754, párrafo 3; Bustos (1989), pp. 252; Cury (2005), pp. 784, donde identifica a la prescripción con las excusas absolutorias en el punto d) de dicha página; De Jesús (2002), pp. 590.

¹³⁵ Cury (2005), pp. 783.

¹³⁶ No debemos olvidar que estos autores denominan al tema en cuestión “causas personales de exclusión de pena”, Jescheck (1993), pp. 593-594; y Zaffaroni quien la denomina condiciones personales de la operatividad de la coerción

En el Perú se las ha definido como “un conjunto de circunstancias de carácter político, legal, natural o privado, ajenas al hecho punible, que extinguen la posibilidad de perseguir al responsable (acción penal) o de someterle a una sanción efectiva (ejecución de la pena). Por ello, afirman que estas circunstancias sobrevienen después del delito y anulan la acción penal o la pena”¹³⁷.

5. ACERCA DE LA CLASIFICACIÓN Y CONTENIDO DE LAS CAUSALES O CAUSAS DE EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL (CERP).

La gran mayoría de autores no se toman el trabajo de clasificarlas, sino que las enumeran tal y como aparecen en sus respectivos cuerpos legales, sin embargo muchas veces esta clasificación no obedece a criterios materiales teniendo en cuenta la naturaleza misma de cada causal. Es bueno el intento hecho por QUINTERO OLIVARES, pero considero que FERNANDO MANTOVANI¹³⁸ es quien precisa mejor una clasificación teniendo en cuenta la naturaleza de cada una de las causales.

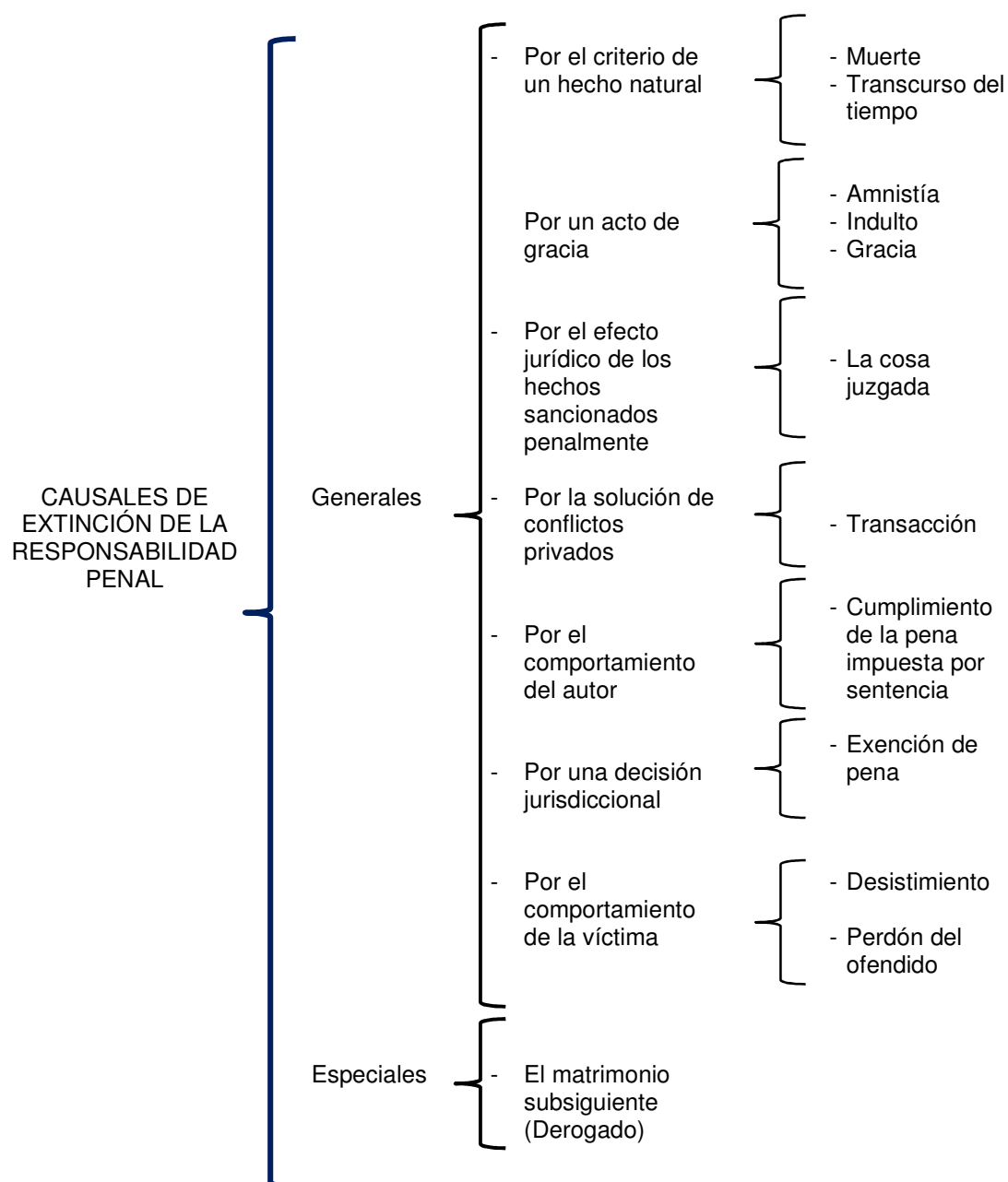
Por consiguiente clasificaremos a las causales, en generales y específicas, teniendo en cuenta que éstas se encuentran tanto en la parte general como en la especial del código penal peruano.

Por el objeto de este trabajo sólo se verán las causales generales, las que a su vez se subclasificarán teniendo en cuenta:

penal y de entre ellas las causa personales que cancelan la penalidad (1985), pp. 637; Roxin, quien lo considera como un presupuesto en particular, y específicamente como un caso de perseguibilidad del hecho concreto (2000), pp. 167, aunque en su parte general usan los términos impedimentos o presupuestos procesales (1997a), pp. 989 a 991; Frister, que la incluye como presupuesto temporal de la persecución y ejecución (2009), pp. 414.

¹³⁷ Hurtado y Prado (2011), pp. 409.

¹³⁸ Mantovani (1992), pp. 828. En España quien sigue a este autor es Morillas Cueva.



6. LAS CAUSALES DE EXTINCIÓN DE LA PERSECUCIÓN PENAL¹³⁹.

6.1. POR EL CRITERIO DE UN HECHO NATURAL.

a. Por muerte del imputado¹⁴⁰ (art. 78 numeral 1 del CP).

Es decir, este fenómeno, como es obvio no sólo pone fin a toda la actividad material del ser humano sino al despliegue de la persecución penal del Estado, pues no tiene sentido procesar penalmente a las personas una vez que han fallecido. El término imputado debemos entenderlo como equivalente al estatus de procesado, es decir como investigado judicialmente o como acusado penalmente.

b. Por prescripción (Véase más abajo su contenido).

6.2. POR UN ACTO DE GRACIA¹⁴¹.

Aquí “advertimos que en los distintos pueblos desde la antigüedad se vio en la necesidad, por razones fundamentalmente políticas o religiosas, de distender la violencia y el odio resultantes de los enfrentamientos entre los distintos sectores, mediante el ejercicio de un “olvido” de ciertos hechos delictivos, que tenía como principal efecto extinguir o suavizar la persecución represiva de sus autores”¹⁴².

“Tal poder de clemencia, que constituía uno de los máximos atributos de la soberanía, asumió distintas formas (amnistía, indulto, gracia, perdón), que, por lo general, no pre-

¹³⁹ No se trata aquí a la prescripción, pues esta es materia de la investigación y será desarrollada más adelante, tampoco se tratan los criterios de oportunidad, pues requiere de otro trabajo de naturaleza procesal, lo cual no es el objetivo propuesto.

Resulta necesario definir el concepto de acción penal de acuerdo con la teoría autónoma abstracta: “Acción es el derecho público, cívico, subjetivo, abstracto y autónomo, que tiene toda persona natural o jurídica, para obtener la aplicación de la jurisdicción del Estado a un caso concreto mediante una sentencia, a través de un proceso, o para pedir que se inicie la investigación penal previa al proceso” Devis (1984), p. 200 y en las siguientes se refiere a los matices de este concepto respecto de la acción en el proceso penal, todo lo cual difiere con relación a quién o quienes pueden ejercerla. Más recientemente se ha dicho que implica que “No es una facultad, un derecho, o mejor una obligación del Estado de utilizar sus mecanismos con el objeto de iniciar, adelantar y terminar las investigaciones o investigaciones encaminadas a establecer una conducta que se presume delictuosa y juzgarla adecuadamente” así es “una obligación estatal que debe cumplirse por conducto de los funcionarios públicos encargados de investigar y juzgar los delitos. El impulso, el motor que permite iniciar, continuar y terminar la investigación de los hechos delictivos, así como la facultad de juzgarlos, radica en el Estado y se conoce como acción penal” Véase Martínez (1996), pp. 61-62. Otros la definen como “el derecho a la iniciación del proceso, a la realización del mismo practicando el juez instructor toda la actividad oportuna para descubrir los hechos y determinar los autores de los mismos, pero nada más”, Montero et al. (1994), p. 31. En este mismo sentido el profesor Oré Guardia quien considera además los fines del proceso (tanto los inmediatos como los mediatos), véase la reciente publicación de este autor (1996), pp. 56 y 57. Así pues considero a la acción penal, desde una visión abstracta, como inextinguible para la persona humana durante su vida, y por estar hoy en día en un sistema hetero compositivo diremos que es una obligación del Estado. De allí que tengamos que la acción como derecho de la persona es inextinguible, pero como pretensión si es extingible. Abarca tanto la acción penal pública como la privada llamada también comúnmente querrela.

¹⁴⁰ Sugerimos ver a Velásquez (2009), p. 1184; quien lo denomina *sindicado* aunque el art. 82 numeral 1 del CP (Col.) señala “muerte del procesado”.

¹⁴¹ Aquí se utiliza el término en sentido lato o como género, para diferenciar la gracia como especie; en este sentido también De Jesús (2002), p. 603.

¹⁴² Lascano (H) (1989), p. 1.

sentaban nítidos perfiles propios que las diferenciaban, y, por el contrario, muchas veces se superponían entre sí”¹⁴³.

a. Amnistía (art. 78 numeral 1 y sus efectos en el art. 89 del CP).

Se define como “un acto de soberanía interna del Estado por el que, fundado en graves razones de orden público, cuya existencia y oportunidad sólo al Poder Legislativo le compete valorar, éste, por medio de una ley con efecto retroactivo, declara el olvido de infracciones de naturaleza penal (delitos comunes o políticos e infracciones contravencionales o disciplinarias), ocurridas con anterioridad, produciendo la extinción de todas sus consecuencias represivas, sin individualizar a los destinatarios del beneficio, quienes no pueden renunciarlo, y una vez reconocido por una resolución judicial basada en la autoridad de la cosa juzgada, es irreversible”¹⁴⁴.

6.3. POR EL EFECTO JURÍDICO DE LOS HECHOS SANCIONADOS PENALMENTE.

a. Cosa juzgada (art. 78 numeral 2 del CP).

“La autoridad de cosa juzgada o *res iudicata* es el principal efecto y eficacia de la actuación jurisdiccional graficada en la sentencia o Declaración de Certeza así como su principal atributo y eficacia, lo que aparece reconocido desde los albores mismos de la civilización. El proceso judicial vincula cuando menos a dos partes y sus efectos jurídicos deben alcanzar cuando menos a esas dos partes (Res Inter Alios Iudicata) que se hallan sometidos a un proceso, sólo a uno, de manera que sea imposible discutir la misma pretensión jurídica indefinidamente”¹⁴⁵.

Es necesario, luego, especificar que el derecho se determina mediante una declaración de certeza con lo cual se logra la definitividad de la cosa juzgada “como autoridad y eficacia de la sentencia judicial cuando no existan medios que permitan modificarla, de allí que sus principales características estén definidas por la inimpugnabilidad, la inmutabilidad y la coercibilidad. Por lo primero se entiende la firmeza de un fallo judicial que impide su revisión, por la segunda la imposibilidad de ulterior modificación, y por lo tercero la posibilidad de cumplimiento, exigencia y ejecución”¹⁴⁶. Sin embargo, no debemos olvidar la acción de revisión como excepción a estos casos (más adelante tratamos este punto).

6.4. POR LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS PRIVADOS.

Aquí se consideran las anteriores causales de extinción penal, según la remisión hecha por el numeral 3 del art. 78 del CP.

¹⁴³ Lascano (H) (1989), p. 1.

¹⁴⁴ Lascano (H) (1989), p. 15.

¹⁴⁵ Quiroga (1989), p. 289 y ss. Resulta interesante además la distinción que hace el profesor Pablo Sánchez entre la cosa juzgada y el *ne bis in idem*, considerando que por éste se impide que una persona sea enjuiciada dos veces por los mismos hechos, mientras que aquella impide una nueva sentencia sobre el mismo objeto enjuiciado anteriormente; Véase Sánchez (1994), p. 91.

¹⁴⁶ Quiroga (1989), pp. 289 y ss.

Pero antes de precisar cada una de estas causales, es necesario definir la *acción privada* o *querrela* como “...un acto procesal de postulación, que asiste al ofendido o a cualquier sujeto del derecho con la capacidad necesaria mediante la cual se solicita del órgano jurisdiccional competente la iniciación del procedimiento y la adquisición del querellante de la cualidad de parte acusadora”¹⁴⁷.

Además, se dice que la querrela es la “facultad conferida por el Estado a los particulares para que a su arbitrio decidan si se inicia o no la correspondiente acción penal, en ciertos casos, lo que constituye una evidente excepción al carácter irrenunciable de tal acción”¹⁴⁸.

a. Transacción (art. 78 numeral 3 del CP).

“Desde el punto de vista jurídico la transacción siempre importa la composición o arreglo del conflicto de intereses por las mismas partes, a base de sacrificios mutuos, donde cada uno renuncia a una parte de sus pretensiones a favor del otro”¹⁴⁹.

“Transacción es el convenio por el cual las partes, dando, prometiendo o reteniendo, cada una alguna cosa, ponen término a un proceso que ha comenzado. Se trata de una verdadera “composición”, cuyo significado jurídico fue el de “transigir” en el primitivo Derecho Penal. Mientras no se vio en el delito más que el daño, la acción penal sólo tuvo por objeto su resarcimiento y allí surgió la práctica de las transacciones penales, que más o menos modificada se mantiene en los grados superiores de la cultura jurídica. Nuestro CP sólo la mantiene en los casos de hechos punibles por acción privada”¹⁵⁰.

Empero, esto no implica que en el sistema penal peruano se admita la transacción como un sistema, sino únicamente como un procedimiento propio de los delitos de acción privada. Distinto es el caso de los sistemas de transacción penal del derecho norteamericano, donde ello constituye todo un modelo procesal. Y aunque algunos países del sistema continental hayan adoptado algunos de estos mecanismos amparados en el principio de oportunidad, como lo es la conformidad¹⁵¹, en el Perú no pasa de ser una mera excepción (incluso este es el caso del proyecto de CPP -en su versión del 07 de marzo de 1996- a pesar que plantea una sistematización de varios procedimientos amparados en el principio de oportunidad: los arts. 2 (principio de oportunidad), 438 y ss. (proceso de conclusión anticipada), 442 (proceso por colaboración eficaz).

¹⁴⁷ Gimeno et al. (1990), pp. 271.

¹⁴⁸ Velásquez (2009), pp. 1185.

¹⁴⁹ Rodríguez J. A. (Julio-1995), Tesis, pp. 64 y 65, donde cita a Vodanovich pp. 10.

¹⁵⁰ Bramont, L.A. y Bramont-Arias, L. A. (1995), pp. 278.

¹⁵¹ Barona (1993); esta autora distingue lo que es la transacción de la conformidad al precisar «en el proceso penal español no existe la posibilidad de transacción» y agrega «que la conformidad no es un convenio o acto en el que se muestra un comportamiento bilateral entre acusado y acusador, sino que nos hallamos ante un acto unilateral del acusado» (pp. 283). Conviene también diferenciar lo que es la conformidad del **plea bargaining: es un «procedimiento de definición de un proceso penal medido entre la acusación y la defensa mediante un acuerdo (agreement) sobre las condiciones a las que se subordina la declaración de culpabilidad. Es decir es un acto mediante el que el imputado admite su culpabilidad, conformándose con el cargo o los cargos que se le imputan, a cambio de una reducción de la condena o de alguna concesión del estado»** (pp. 53), en cambio la conformidad es un acto unilateral (pp. 283).

El CP utilizó la denominación de transacción (al igual que lo dispuesto por la ley N° 9014, art. 1 que modificó el art 118 del CP de 1924), pero el C de PP en su art. 306 dispone la conciliación. En este mismo sentido el Proyecto de CPP en su art. 424 establece como mecanismo del proceso por razón del ejercicio privado de la acción penal la conciliación. Si la intención era la de desaparecer el término transacción por inducir a error en torno a lo que significa, pues no es una causal de extinción de la acción penal sino todo un sistema de resolución de conflictos propio del modelo anglosajón, resultando conveniente utilizar el término conciliación¹⁵², no se comprende por qué en el art. 466 de dicho proyecto, se reintroduce el término transacción. Considero que se debe modificar este artículo, e incluso el art. 78 numeral 3 del CP.

El matrimonio subsiguiente. Ésta es una excusa legal absolutoria, que rige sólo para los delitos contra la libertad sexual. El término “honor” es un rezago de la anterior concepción respecto al bien jurídico protegido por estos delitos, según el CP (1924) en su sección tercera, Título I.

Empero, con la entrada en vigencia de la ley N° 26770, se ha desestimado el desnaturalizado efecto legal de poder extinguir la acción penal que se atribuyó por el texto original del art. 78 a la excusa absolutoria del matrimonio subsiguiente, modificación-supresión la cual comparto, ya que la excusa absolutoria por sí sola constituye una causal personal de exclusión de pena y no una causal de extinción de la persecución penal.

Entonces, ahora el matrimonio subsiguiente, como excusa absolutoria, sólo está regulado como una regla de la parte especial según la nueva redacción de los arts. 78 numeral 3 y 178 in fine del CP cuyos efectos sólo benefician al autor del delito.

6.5. POR EL COMPORTAMIENTO DE LA VÍCTIMA.

a. Desistimiento (art. 78 numeral 3 del CP).

Es una institución mediante la cual “el agraviado con la conducta punible manifiesta su voluntad de renunciar a la acción penal entablada o por entablarse (...)”¹⁵³.

La doctrina distingue distintas clases de desistimiento. Así se tiene que será *procesal* “cuando la petición se presente dentro del mismo proceso, ante el juez respectivo y con el lleno de los requisitos legales correspondientes”; *extraprocesal* “si se realiza por fuera del actuación”; de otro lado también puede ser *expreso* “si se manifiesta mediante un acto público o privado”, y *tácito* “cuando se infiere de los actos realizados por el querellante que denotan su voluntad de desistir”; también se clasifican teniendo en cuenta la manifestación de voluntad es o no libre, en “*espontáneo y provocado*”¹⁵⁴.

¹⁵² Resulta interesante el trabajo de Martínez (1995), en torno a la conciliación en el proceso penal (pp. 55 y ss.), su distinción con la transacción (pp. 34-36) y los delitos a los cuales se le aplica (pp. 89 y ss.).

¹⁵³ Velásquez (2009), pp. 1185. En el ordenamiento penal colombiano se regula el desistimiento en el art. 82 numeral 2 CP (Col.), y su procedimiento en los arts. 77 y ss. del CPP (Col.).

¹⁵⁴ Velásquez (2009), pp. 1186.

El vigente C de PP sólo se refiere, en su art. 307, al desistimiento en caso de inconcurrencia del querellante al comparendo. Por ende tendremos que interpretar que ésta es una forma de desistimiento tácito considerada por la ley.

7. ACERCA DE LAS CAUSALES DE LA EXTINCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA.

7.1. POR EL CRITERIO DE UN HECHO NATURAL.

a. Por muerte del condenado (art. 85 numeral 1 del CP).

Considérese válido lo expresado para la extinción de la acción penal, con la aclaración que quien fallece es un condenado.

b. Por prescripción (Véase más abajo su contenido).

7.2. POR UN ACTO DE GRACIA.

a. La amnistía (art. 89. del CP).

Considérese válido lo expresado para la extinción de la acción penal.

b. El indulto (art. 89. del CP).

“Es un acto de gobierno que implica el perdón concedido por el Poder Ejecutivo a persona o personas determinadas que han sido condenadas a una pena en virtud de haber cometido alguna infracción de naturaleza penal, cuya consecuencia jurídica es la condonación total de los efectos de aquella sanción, la cual subsiste como tal, lo mismo que la existencia de la infracción cometida y la sentencia que así la declaró”¹⁵⁵.

El *indulto* a su vez se diferencia de la gracia (o del denominado indulto a procesados), como causal específica de extinción de la persecución penal, aunque no contemplada en el CP pero sí en la Constitución. La *gracia* es individual y debe ser solicitada; en cambio el *indulto* es colectivo y espontáneo (véase De Jesús... pp. 605 al 607).

En el derecho comparado, específicamente Brasil, se tiene la gracia a nivel constitucional (art. 84), a nivel penal (art. 107) y en la ley de Ejecución penal (art. 187), siendo también aquí una facultad del Presidente de la República. Por lo que nos atrevemos a decir que ésta es la fuente de tal innovación constitucional siendo necesaria una reforma al CP y de ejecución.

¹⁵⁵ Lascano (1989), pp. 33. Sin embargo, la Constitución en su art. 118 numeral 21 concede al Presidente de la República la facultad a fin de dictar el beneficio de la gracia para los procesados en los casos en que la etapa de instrucción haya excedido el doble de su plazo más su ampliatoria.

7.3. POR EL COMPORTAMIENTO DEL AUTOR.

a. Cumplimiento de la pena impuesta vía sentencia (art. 85 numeral 2 del CP).

Toda persona que ha sido sentenciada a cumplir una pena impuesta lo tendrá que hacer conforme lo haya dispuesto la autoridad jurisdiccional (Juez o Sala). Pero no se debe olvidar que cada clase de pena tiene su propia forma de cumplimiento, así pues se tiene:

La pena privativa de libertad: Esta se cumplirá teniendo en cuenta su condición de ser o no efectiva, pues si fuera efectiva su cumplimiento podrá efectuarse observando:

- El plazo por el cual cumplió la medida coercitiva de detención (art. 47 primer párr. del CP); y
- La redención de pena por trabajo y educación (arts. 44 y ss. del C. de Ej. P.).

Si no hubiera ninguna de estas dos formas de obtener el cumplimiento de pena en menor tiempo, entonces el plazo a cumplirse será el consignado en la sentencia

Tratándose de la pena de multa: su cumplimiento se llevará a cabo con el pago de las cuotas señaladas, sin embargo también en este caso se podrá aplicar lo dispuesto por el art. 47 segundo párrafo del CP, es decir, por cada día de detención se computará como cumplidas dos días-multa.

Pena limitativa de derechos: aquí también se considerará lo dispuesto por el art. 47, segundo párrafo del CP.

Si la pena no fuere efectiva sino que se impone los sustitutos penales las formas de cumplimiento variarán, estos son los casos de la reserva de fallo condenatorio, la suspensión de la ejecución de la pena, etc.

7.4. POR DECISIÓN JURISDICCIONAL

a. Exención¹⁵⁶ de pena (art. 68 y art. 85 numeral 3 del CP).

“Es una institución de ejercicio del arbitrio judicial por parte del Tribunal, que se concreta en el pronunciamiento de la condena, pero con decisión de que no se aplique”. “Se fundamenta en el principio de que en determinados supuestos, la pena no es necesaria para el autor del delito, ya que la propia ejecución del mismo ha tenido ya gravísimas consecuencias para él”¹⁵⁷. Sin embargo, en la doctrina alemana¹⁵⁸ se considera que se trata de una “**desaparición de merecimiento de pena**”. En estos casos se dicta la condena pero

¹⁵⁶ El profesor Prado Saldarriaga cuestiona esta terminología debido a que se le suele emplear para diferentes supuestos; sugiere a cambio el término “dispensa” o “renuncia de la pena” (1996), pp. 138.

¹⁵⁷ De Sola, García M. y Hormazabal (1986), p. 41. También De La Cuesta (1993), LH, pp. 319 al 343; y García, C. (1995): Alternativas legales a la privación de libertad clásica, pp. 687 y ss.

¹⁵⁸ Véase Jescheck (1993), pp. 777; pues en la quinta edición el traductor no utiliza el término renuncia sino remisión y ya no se refiere a al merecimiento de pena (2002), pp. 929; aunque en la tercera edición se utilizó el término *falta* y no *desaparición*; habrá que indagar si hay o no diferencias conceptuales o es una consideración de los traductores; también Maurach, Heinz y Zipf (1995), pp. 854 al 857.

no se le impone la pena y debe de satisfacer las costas procesales si las hubo así como la reparación civil¹⁵⁹. Es un sustituto no de la pena sino de su ejecución.

En el ordenamiento procesal peruano se da tanto en la parte general como en la parte especial. No se aplica pues su efecto y fundamento es similar al actual art. 2° del CPP. En la jurisprudencia comparada se ha hecho uso de esta figura para los delitos de tráfico automovilístico.

La fuente de esta figura la encontramos en el art. 60 del vigente StGB y en el art. 74 del CP de Portugal de 1982.

7.5. POR EL COMPORTAMIENTO DE LA VÍCTIMA¹⁶⁰.

a. Perdón del ofendido (art. 85 numeral 4 del CP).

Se le circunscribe a algunos delitos de acción privada, en los que “la persecución penal queda supeditada a que el ofendido o sus representantes se querellen o denuncien el hecho. Sucede esto en aquellos que más afectan a la intimidad personal y familiar (injurias, calumnias, (...) etc.). Fuera de estos casos, la acción penal es pública y puede ser ejercitada al margen de la voluntad del ofendido, salvo que éste con su consentimiento anterior al hecho pueda justificarlo...”¹⁶¹. El perdón tiene que tener los siguientes requisitos: “ha de ser expreso e incondicionado y puede darse en cualquier momento del proceso o de la ejecución de la condena”¹⁶². Como se aprecia para la doctrina española la aplicación es sumamente amplia. En el Perú su aplicación sólo es posible luego de haberse impuesto la pena vía sentencia firme, ya que antes o es desistimiento o es transacción.

En esta causal “el Estado hace una renuncia a su poder punitivo, siempre que exista perdón por parte del ofendido, por entender que en tales delitos el bien jurídico, exclusivamente personal, es de todo punto disponible por su titular en cualquier momento, y en consecuencia, decae también, si aquél se produce, el ius puniendi estatal que se encuentra, por así decir, soldado a un simple interés privado”¹⁶³.

¹⁵⁹ Véase respecto a la reparación civil: Prado (1996), pp. 137 a 140.

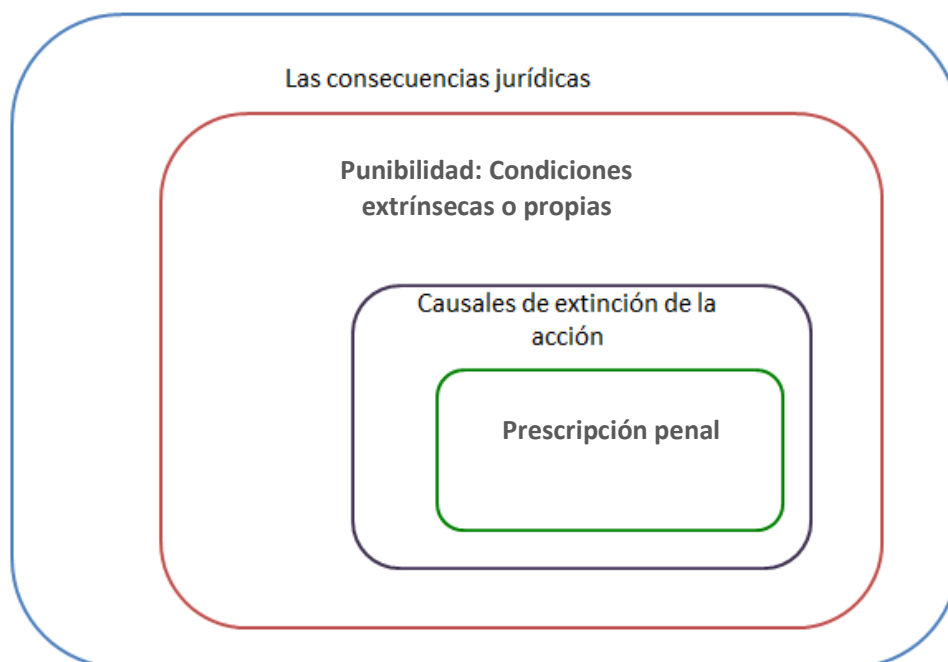
¹⁶⁰ Véase Bustos y Larrauri (1993), pp. ; y la obra de compilación de Esser et al. (1992), pp.

¹⁶¹ Muñoz y García M. (1993), pp. 364 al 365.

¹⁶² Muñoz y García M. (1993), pp. 365.

¹⁶³ Cobo y Vives (1999), pp. 954.

ESQUEMATIZACIÓN DE LA TEORÍA DE LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DE LA INFRACCIÓN PENAL



* Considerando todo lo expuesto hasta aquí ubicamos a la prescripción penal en el presente cuadro.

8. CRIMINALIZACIÓN-DECRIMINALIZACIÓN¹⁶⁴.

Los procesos de criminalización y decriminalización muestran cuál es la tendencia de un determinado sistema penal. En el ámbito nacional la tendencia, o más precisamente la regla, ha sido la criminalización en grado sumo (para otros la sobrecriminalización).

Resulta claro que la tendencia en el ámbito nacional es la de que el derecho penal debe solucionar todos estos conflictos, tergiversándose su naturaleza de subsidiariedad y fragmentariedad. El proceso de decriminalización se ha utilizado equivocadamente para favorecer intereses políticos y económicos, y no por consideraciones político-criminales; un ejemplo de ello lo constituye la supresión del supuesto de **retención de remuneraciones o indemnizaciones de los trabajadores** (de acuerdo con la Tercera Disposición Transitoria del D. Leg. N° 857), para favorecer a los empleadores, dentro de la denominada flexibilización laboral. En otros casos se le ha utilizado con el fin único de enmendar

¹⁶⁴ En torno a los conceptos de criminalización; decriminalización, sea de iure, de facto o de grado; despenalización; y desjudicialización: Véase Ciaramelli, F. (2009), pp. 19 y ss; Aniyar, L. (1989), *Sistema penal y sistema social: La criminalización y decriminalización como funciones de un mismo proceso*, pp. 345 y ss; y con algunas diferencias de enfoque y sobre todo respecto a la despenalización de facto, Ruíz E. (1984), pp. 375 y ss.

errores del régimen de turno, p. ej.: volver a considerar inimputables a los menores de 18 años en los delitos de terrorismo, etc.

9. EL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD.

El Principio del “*favor rei*” o de la “*favorabilidad*” ha sido definido como “un complemento del principio del *in dubio pro reo* que a su vez sustituye parcialmente el de la carga de la prueba en cuanto exige considerar inocente al imputado y al procesado, lo mismo que la absolución del segundo, cuando no se le haya probado plenamente su responsabilidad y por lo tanto impone dicha carga al Estado a través de los jueces y funcionarios de instrucción e investigación (...). Pero el principio del “*favor rei*” o de la *favorabilidad* es más amplio, pues exige no solamente resolver a favor del imputado y procesado las dudas probatorias respecto a su responsabilidad, sino también las que se presenten en la interpretación y aplicación de las normas penales sustanciales y de procedimiento, y exige, además, que la ley sustancial permisiva o favorable al procesado, aun cuando sea posterior al acto ilícito, se aplique con preferencia a la restrictiva o desfavorable, como lo ordena expresamente el segundo inciso del art. 26 de la Constitución y el art. 5º del nuevo C de PP de 1981. En cambio la ley procesal nueva, pero anterior a la iniciación del proceso se aplica siempre sin que importe que el acto ilícito haya ocurrido antes y aun cuando el nuevo procedimiento pueda ser desfavorable al procesado, debido al carácter imperativo que tiene, y cuando el cambio de ley procesal ocurre en el curso del proceso, también se aplica a partir de su vigencia, salvo que ella misma disponga otra cosa” (Véase DEVIS E. pp. 54).

“En materia penal, la aplicación de la nueva ley procesal se rige por iguales principios, la ley que determina la sustancia y ritualidad del proceso se aplicará a partir de su vigencia; pero creemos que las apelaciones y otros recursos ya formulados, los incidentes ya iniciados y los términos, que habrían comenzado a correr, deben seguir su trámite de acuerdo con la ley anterior, a pesar de que la nueva los suprima o cambie el trámite. Pero los beneficios para el imputado y procesado que consagre la ley nueva, favorecen a aquellos aun cuando el momento procesal haya pasado (como excarcelaciones y eliminación de requisitos para obtenerlas); sin embargo, salvo el recurso extraordinario de revisión, las providencias ejecutoriadas no se benefician del nuevo recurso creado”. (DEVIS E., pp. 64).

“Para los procesos ya concluidos antes de la nueva ley ningún efecto tiene ésta; y los iniciados después quedan comprendidos íntegramente por sus disposiciones. Pero el recurso extraordinario de revisión o las nuevas causales para éste creados por la ley procesal nueva, siempre que el término para formularlo que esa nueva ley procesal establezca no haya vencido, contándose a partir de la terminación del proceso, se aplican a procesos concluidos antes de regir dicha nueva ley. Esto como consecuencia del principio de la favorabilidad o del *favor rei*, de origen constitucional” (DEVIS E., pp. 64).

“Las leyes que establecen nuevos medios de pruebas, por ser normas procesales y de orden público, tienen aplicación general e inmediata tanto para

demostrar los hechos que ocurran luego de su vigencia como los sucedidos con anterioridad” (pp. 64 a 65).

“Sería absurdo sostener que existen derechos adquiridos consistentes en que no se puede demostrar un acto o un hecho jurídico sino por determinados medios probatorios. Pero cuando la prueba es *ad substantiam actus*, sólo rige para los actos posteriores a su vigencia; es decir, un documento exigido para que el acto jurídico extrajudicial, como una compraventa o hipoteca sobre inmuebles, tenga existencia o validez sustancial jurídica” (pp. 65).

“También se aplica a los procesos en curso, en ambas instancias, la nueva ley que varía el sistema de valoración o apreciación de las pruebas y la que dé facultades nuevas al juez para decretar pruebas de oficio” (pp. 65).

“La nueva ley que modifique la jurisdicción y la competencia se aplica a los procesos en curso, a menos que la misma ley disponga otra cosa” (pp. 65).

Sin embargo, DEVIS E. refiriéndose al art. 26º de la abrogada Constitución de Colombia y al art. 5º del abrogado CPsP restringe el ámbito de aplicación del principio de favorabilidad únicamente al caso de duda y en el caso del conflicto de las leyes en el tiempo, cuando se trata de excarcelaciones y de la eliminación para obtenerlas, pues éste es hoy un principio constitucional en Colombia (art. 29º de la vigente Constitución); regulado incluso procesalmente (art. 10 del CPsP).

Considero que ésta debe ser la pauta de interpretación para el art. 139º numeral 11 en el campo penal, procesal y de ejecución, por lo que no comparto el criterio de RODRÍGUEZ HURTADO¹⁶⁵ cuando afirma que dicho artículo de la Constitución constituye un retroceso, por el hecho de que el actual artículo no utiliza el término “en el tiempo”, al cual sí se refería el art. 233 numeral 7 de la anterior Constitución. Pienso que esta interpretación no es correcta, más aún si se tiene en cuenta que dicho principio tiene su máxima aplicación justamente para conflictos de la ley en el tiempo, aunque ahora nada impide que se le aplique a los conflictos en el espacio (véase el punto referido a la prescripción y el principio de combinación).

El principio de *favorabilidad* se encuentra en el art. 9º de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en la de la Asamblea Francesa de 1789, y en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes de 1948.

¹⁶⁵ Rodríguez, M. (enero, 1996), La prescripción de la acción penal y el principio de combinación; pp. 265.

PARTE SEGUNDA

**TEORÍA DE LA PRESCRIPCIÓN Y SU
APLICACIÓN EN LA LEY PENAL**

CAPÍTULO I

ANTECEDENTES DE LA PRESCRIPCIÓN

1. EN LA HISTORIA UNIVERSAL.

Históricamente la prescripción penal es una institución muy antigua, por lo que hacer un seguimiento del desarrollo de ésta a través de la historia universal implicaría realizar una monografía completa, lo cual no constituye la finalidad de este trabajo. Empero, esto no es óbice para referirse brevemente a este rubro. El antecedente más remoto de la prescripción de la acción penal data de la época de los griegos (Demóstenes y Lysias) pasando luego por los romanos en la época de Augusto (la *Lex Julia adulteriis*, constituye el antecedente legislativo más antiguo)¹⁶⁶.

En torno a la prescripción de la pena existe consenso en admitir que fue introducida por la ley francesa de 1791, aunque también se admite que por Decreto del Parlamento de París se introdujo ésta el 29 de Abril de 1642. De aquí se extiende a todas las demás legislaciones, aunque obviamente con muchas restricciones¹⁶⁷.

Asimismo, es importante mencionar algunos antecedentes de la imprescriptibilidad¹⁶⁸ propugnada por los romanos para delitos graves como el parricidio, la suposición de parto y la apostasía; en el renacimiento los delitos de duelo y lesa majestad. Así se tiene el Código Napolitano de 1819 que declara como imprescriptible las condenas a la pena de muerte o a la pena perpetua de ergastolo. El Código Albertino declaró imprescriptibles, entre otros, los delitos de ultraje a la religión, los de lesa majestad, parricidio, los delitos contra la seguridad del Estado penados con la muerte, el envenenamiento, el homicidio cometido a traición, el homicidio del empleado público, entre otros; y los delitos sancionados con pena de muerte y con trabajos forzados durante toda la vida, y otros delitos.

Sin embargo, hubo otros códigos durante estos tiempos que no regularon ni la prescripción ni la imprescriptibilidad de la acción penal o las penas (es el caso del art. 95º del código penal para el Gran Ducado de Toscana). El derecho inglés de esa época no consignó regla alguna sobre la prescripción.

¹⁶⁶ Véase el recuento realizado por Pessina (1936) pp. 695 y 696.

¹⁶⁷ Pessina (1936), pp. 696 y 697.

¹⁶⁸ Pessina (1936), pp. 695 y ss.

2. EN EL PERÚ.

2.1. LEGISLACIÓN PENAL Y DOCUMENTOS PRELEGISLATIVOS.

2.1.1. El Proyecto de Manuel Lorenzo De Vidaurre de 1828¹⁶⁹.

Se debe dejar establecido que el antecedente prelegislativo nacional más remoto lo encontramos en el Proyecto de código penal de Manuel Lorenzo De Vidaurre¹⁷⁰ que en su denominada **Leyes Generales en el Código Criminal**, Ley 31, expresaba: «*Los crímenes no reiterados prescriben a los tres años: los atrocismos a los diez: la acción civil a los veinte: no hay prescripción, si hubo sumaria por acusación o delación*».

2.1.2. El Código Penal de Santa Cruz del Estado Nor-Peruano.

Otro de los antecedentes que incluso entró en vigencia fue el **Código Penal de Santa Cruz del Estado Nor-Peruano**¹⁷¹, el cual de manera más amplia reguló la prescripción en su Libro Primero, Tít. II, Cap. V, arts. 103 al 108.

De las reglas que se proponen en este código resulta interesante la distinción realizada en el art. 103 entre los tipos de prescripción. Así, lo que hoy conocemos como prescripción de la acción penal, se encuentra en la primera parte de dicho artículo: «*La prescripción de las penas y de la satisfacción a que son responsables los delincuentes, es la extinción del derecho que concede a la ley para acusarlos o denunciarlos, y para exigir de ello la reparación de los daños que hubiesen causado con su delito o culpa*», y la prescripción de la ejecución de la pena, en su segunda parte: «*Para los reos ausentes o rebeldes, o para los prófugos, la prescripción de las penas es el olvido y perdón de ellas*». En el art. 104 se consignan unos plazos únicos para ambas prescripciones; en el art. 105 se indican los supuestos de interrupción de la prescripción de la acción penal: «*1.º Por que en su curso se hubiere intentado la acusación o la denuncia conforme a las leyes. 2.º Por que en su curso y antes de haberse cumplido el término respectivo, se cometa cualquier otro delito o culpa*» y de la pena «*La interrupción de los términos interrumpe también la prescripción de las penas y de la satisfacción; y empezarán a contarse en el primer caso de este artículo, desde que se hubiere abandonado todo procedimiento criminal, y en el segundo desde la fecha del segundo delito o culpa. La demanda civil por la satisfacción no interrumpe la prescripción de las penas*».

En el art. 106 se configuraba la prescripción para los casos en que se declara absuelto a un reo. En el art. 107 se consigna la duplicación del plazo de prescripción para los ausentes, rebeldes y para el condenado que se ha fugado, siempre y cuando se acredite «*una conducta constantemente honrada*», sin embargo esta prescripción no será para todas las penas, pues se establece que los beneficiados «*no podrán ejercer (...) los derechos de ciudadanía, sin conseguir la rehabilitación y que esta se publique conforme a las leyes*». Y en el art. 108 se

¹⁶⁹ Véase el ANEXO 1, de esta investigación, específicamente el documento N° 1.

¹⁷⁰ Lorenzo De Vidaurre (1928), pp. 210.

¹⁷¹ **Código penal santa-cruz del estado nor-peruano**. Edición oficial. Ed. Imprenta de Eusebio Aranda; Lima-Perú; 1836. pp. 25 al 27.

consigna el derecho que todos tienen a que prescriban las penas y a la satisfacción, amparados por el principio de igualdad.

2.1.3. El Código Penal de 1863¹⁷².

Este código consideró a la institución estudiada en su Libro primero, Sección séptima en sus arts. 95 al 98 «De la prescripción en materia penal». En el art. 95 se establecieron los plazos en los cuales prescribía el derecho de acusar. Así se tenía que para los delitos previstos con pena de muerte, tal derecho se alcanzaba a los ocho años; para los sancionados con pena de penitenciaría o cárcel, a los cinco años; para todos los demás delitos en los que pudieran haber intervenido el Ministerio Fiscal era a los tres años; para los delitos en que dicho Ministerio no intervenía era a los cien días entre los procesados presentes y al año para los ausentes, y finalmente para las faltas, la prescripción se alcanzaba a los treinta días¹⁷³.

En el art. 96¹⁷⁴ se consignaban los plazos de prescripción de la pena, así se tiene que en los delitos sancionados con pena de muerte la prescripción se alcanzaba a los dieciocho años; si se trataba de otras penas, prescribían en el mismo plazo de dicha pena impuesta a la que se le agregaba dos años; en el caso de faltas la prescripción era a los seis meses y tratándose de multas a los cinco años.

El art. 97¹⁷⁵ estuvo dedicado al inicio del cómputo de la prescripción, por lo que tratándose de las acusaciones, el cómputo empezaba desde el momento en que se cometía el delito, y tratándose de penas desde el momento en que se interrumpía su ejecución. Se refería brevemente este artículo en su segundo párrafo a la interrupción de la prescripción, así se consideró que si «antes de vencido el término comete el reo otro delito de la misma especie, ó que merezca igual o mayor pena, la prescripción queda sin efecto».

Y el art. 98¹⁷⁶ precisaba el plazo de prescripción de la acción civil (o como lo denominaba el Código «acción que procede de la responsabilidad civil, por delitos ó faltas») a los diez años respecto de los presentes y a los veinte en el caso de los ausentes. Además, se preveía el caso en que el responsable moría, en el art. 93 («la responsabilidad civil pasa a los herederos, y el derecho de los herederos se trasmite a los herederos del ofendido»).

Luego de haberse hecho una referencia sumaria al código de 1863 se realizaron varios intentos de reforma, los cuales quedaron plasmados en diversos anteproyectos y proyectos de ley, a los que se hará mención muy brevemente.

¹⁷² Véase el ANEXO 1, de esta investigación, específicamente el documento N° 3.

¹⁷³ Véase: Vitervo (1900), pp. 514 al 529, una breve visión comparada de esta institución, en los comentarios al Art. 95.

También véase Seoane (1907), pp. 48 al 52.

¹⁷⁴ Véase los comentarios de Vitervo (1900), pp. 529 al 534.

¹⁷⁵ Es interesante los comentarios de este artículo y su explicación teniendo en cuenta el derecho comparado. Vitervo (1900), pp. 534 al 548.

¹⁷⁶ Amplio comentario respecto de este artículo. Véase Vitervo (1900), pp. 549 al 553.

2.1.4. El Anteproyecto de 1877¹⁷⁷.

El anteproyecto de 1877 incluyó dentro de su libro primero, Tít. III, al cap. 11: «De la extinción de la responsabilidad penal». Dentro del capítulo referido, se consignaba como causales de dicha responsabilidad a la prescripción del delito (art. 109, numeral 5) y a la prescripción de la pena (art. 109 numeral 6). Así en el art. 110, referido al plazo de prescripción de los delitos, se incrementó tanto respecto del máximo que sería el caso de penitenciaría de veinte años, como también del mínimo de dos años para casos en los que no puede procederse de oficio. Y respecto de las faltas se tuvo como plazo de prescripción a los dos meses, mientras que el código consignaba sólo 30 días¹⁷⁸.

En el art. 111, proponía el Anteproyecto agregar el supuesto en el cual si no se conocía el día en que se cometió el delito se debería iniciar el cómputo *«desde que se descubra y se inicie el juicio para el descubrimiento del hecho y de su autor»*. Además, se ampliaba el contenido del art. 97 del código penal vigente en aquel entonces respecto de la interrupción, pues ésta se debería dar *«desde que el procedimiento se dirija contra el culpable, volviendo a correr de nuevo desde que el procedimiento termine sin ser condenado el reo, o se paralice por cualquier otra circunstancia»*.

En relación al art. 96 del código penal de 1863, el anteproyecto (art. 112) sugería que la prescripción de la pena en el caso de penitenciaría se daba a los dieciocho años, incrementándose así el plazo en dos años. En lo referente a las demás penas, el plazo sería igual al de la duración de la pena impuesta con el aumento de un año.

El art. 113 del anteproyecto se precisó que el término de la prescripción se inicia desde el día en que se notifique al reo la sentencia ejecutoriada en que se le ha impuesto la pena, o desde el quebrantamiento de la condena si hubiere comenzado a cumplirse ésta.

En el art. 114 se dispuso de manera clara que la prescripción se interrumpe cuando el reo se presente o sea habido, y por la comisión de un nuevo delito.

Por último, el art. 115 remitía a las leyes civiles tratándose de la responsabilidad civil, tal y cual como cualquier obligación.

2.1.5. Anteproyecto de 1900-1902¹⁷⁹.

Otro de los anteproyectos que por aquella época se plantearon fue el del año 1900-1902 que contenía un Cap. XIV «De la extinción de la responsabilidad penal». Una de sus modificaciones y/o ampliaciones más saltantes fue su art. 100, referido a la prescripción del delito, el cual rebajaba el plazo a diez años tratándose de penitenciaría. Y al haberse planteado distintas clases de penas se tenía que en el caso de los sancionados con pena de cárcel, el plazo sería de cinco años; si era reclusión, dos años y si se trataba de arresto mayor, un año; y en los casos donde no intervenía el Ministerio fiscal se tiene que los

¹⁷⁷ Véase el ANEXO 1, de esta investigación, específicamente el documento N° 4.1.

¹⁷⁸ La reforma del Código penal (anteproyectos de 1877 y de 1900, 1902); pp. 46 y ss.

¹⁷⁹ Véase el ANEXO 1, de esta investigación, específicamente el documento N° 4.2.

plazos de prescripción eran de cien días entre presentes y seis meses entre ausentes, salvo que se tratara de delitos contra la honestidad, en cuyo caso los plazos aumentaban a seis meses para los presentes, y al año, para los ausentes.

En relación con los plazos de prescripción, el art. 101 de este anteproyecto consideró que en todos los delitos dicho plazo empieza a correr desde el día siguiente de cometido el delito, salvo los casos para los delitos de falsificación de documentos o falsificación o alteración de monedas, y los atentados contra la libertad y sustracción de menores. En estos últimos casos el plazo empezaba al día siguiente de la liberación o defunción de la persona contra quien se cometió el delito, y los dos primeros, al día siguiente del uso del cuerpo del delito.

El art. 102 brevemente se refirió a la suspensión de la prescripción por una cuestión prejudicial planteada en el procedimiento, y que a su vez lo paralelizaba (aunque el anteproyecto la denomina “suspensión”).

El anteproyecto en su art. 105, utilizó una fórmula genérica para la prescripción de las penas, la que no abarcaba años diferenciados expresamente para las distintas clases de pena, sino la fórmula *«tiempo igual al de la condena con el aumento de dos años»*. Tratándose de pena menor de dos años el término era el de la condena aumentada en una tercera parte; para la pena de multa el plazo era de tres años.

Además, el anteproyecto (art. 106) estableció que en caso de condenas con más de una pena, el plazo de prescripción a considerar sería el de la pena más grave. Esta misma regla sería de aplicación para la prescripción de delitos.

Resulta interesante el contenido del art. 109, el cual establecía que *“cuando el reo se presente o sea habido después de transcurrida la mitad o más del tiempo necesario para prescribir la acción penal o la pena, según los casos, el juez deberá tener en cuenta dicho lapso, para hacer una disminución prudencial en la pena que corresponda aplicarle o la impuesta por la sentencia”*. Para penas con plazos mínimos, la rebaja se efectuaba aplicando la pena inmediata inferior por un tiempo igual.

Se manifestaba en el art. 111 que la declaración de prescripción se producía de oficio por el juez, aun cuando el reo no la hubiera alegado, con la única condición de que se halle presente en el juicio.

El art. 112 consideró que no debía correr el término de la prescripción cuando la ley prohiba ejercer la acción penal contra funcionarios públicos por tiempo determinado.

El Código de Procedimientos en Materia Criminal de 1919 reguló la prescripción en su Libro Primero, Título I, Disposiciones Generales, art. 7º, tratándola como uno de los supuestos que extingue la acción penal¹⁸⁰.

¹⁸⁰ Este Código fue promulgado el 02 de enero de 1920 y publicado el 05 de esta fecha por Ley N° 4019. En un comentario hecho a este art. en lo que a prescripción se refiere se afirmó que «es un medio de adquirir o de liberarse mediante el transcurso de un tiempo determinado y bajo la condiciones señaladas por la ley. Esta definición dada por el art. 2219 del código de Napoleón, que esta conforme con el artículo 526 de nuestro Código Civil, demuestra que

2.1.6. El Proyecto de 1916¹⁸¹.

El art. 90 numeral 4º de este Proyecto consideró a la prescripción como una de las causales de extinción de la acción penal y de la pena, art. 90 numeral 4º (aunque también se vincule a la prescripción con la *posibilidad de pronunciar condena*).

Los plazos de la prescripción ordinaria de la acción penal dependían de la clase de pena privativa de libertad: «1º.- A los quince años por delitos que merezcan penas perpetuas; 2º.- A los diez años por delitos que merezcan penitenciaría o relegación; 3º.- A los cinco años por delitos que merezcan prisión o expatriación; 4º.- Al año por los demás delitos».

El art. 92 precisó el momento en que se debía iniciar la prescripción de los delitos instantáneos; «*el día en que se cometió el delito*», y de los delitos continuados, «*desde el día en que terminó*».

Los supuestos de la interrupción de la prescripción de la acción penal se encontraban en el art. 93, según el cual ellos serían los «*actos judiciales de instrucción o de juzgamiento, siempre que el acusado tenga conocimiento de ellos por habersele notificado en forma legal*». Además, este artículo reguló los efectos de la interrupción y la prescripción extraordinaria de la acción penal.

El art. 94 trató del supuesto de la suspensión de manera genérica: «*Si el comienzo o la terminación del proceso dependiese de cualquier cuestión que deba resolverse en otro procedimiento, se considerará en suspenso la prescripción hasta que éste quede concluido, salvo lo prescrito en la última parte del artículo anterior*» [que trata de la prescripción extraordinaria de la acción penal].

En el art. 95 se especificó que en esta clase de prescripción se extingue «*el derecho de ejecución de la pena*» y se consignaron distintos plazos atendiendo a la diversidad de penas de privación de libertad: «1.- La pena de internamiento perpetuo, a los veinticinco años; 2.- Las de penitenciaría y relegación de diez años o más, a los veinte años; 3.- Las de penitenciaría y relegación de menos de diez años hasta cinco años, a los diez años; 4.- Las de penitenciaría y relegación de menos de cinco años, a los seis años; 5.- Las de prisión, por un tiempo igual a la condena; 6.- Las otras penas de delitos, a los dos años».

existen dos especies la una de adquirir y la otra de liberarse o liberatoria. La primera no conviene sino a las materias civiles, la segunda a las materias civiles y criminales: porque el acusado o el condenado que prescriben la acción o la pena que pesa sobre ellos se liberan de la una y de la otra. Motivos no menos poderosos que en materia civil han servido de fundamento para establecer la prescripción en materia criminal. Llega, en efecto, un tiempo en que el culpable debe encontrar su absolución en la ley. El legislador ha tenido en consideración las agitaciones que sin cesar experimenta un culpable; la dificultad en reunir las pruebas después de un cierto lapso de tiempo; las incertidumbres que ellas ofrecen en el espíritu de los jueces. Ha pensado que el fin de la pena falta después de una larga impunidad, y que es preferible dejar sin castigo algunos delitos cuyos autores se sustraen a la vigilancia de los magistrados que exponerse a comprometer la inocencia, bajo apariencias engañosas, o a mostrarse demasiado severo no tomando en cuenta el prolongado suplicio que su imaginación ha infligido al culpable presentándole continuamente su delito. Las disposiciones que extinguen la acción o la condena no podían pues dejar de ser establecidas por la Ley» véase Calle J. J. (1920), Nota pie n° 15, pp. 7 y 8.

¹⁸¹ Véase el ANEXO 1, de esta investigación, específicamente el documento N° 5.

El art. 96 contenía diversos puntos a examinar, así se tuvo que establecer que el plazo de prescripción de la pena [diferente al término utilizado en el art. 95] *«comienza a contarse desde el día en que queda ejecutoriada la condena»*; se estableció luego los supuestos de interrupción de la ejecución de la pena *«por el comienzo de la ejecución de la pena o por haber sido aprehendido el condenado para sufrirla»*. Luego se consignó el efecto de toda interrupción.

Se refería también este artículo en su penúltimo párrafo a la prescripción extraordinaria de la pena. Y respecto de los casos de revocación de la libertad condicional se señaló que la prescripción comienza desde el momento en que se dio la revocación.

En el art. 97 se consignó a la reincidencia como un supuesto de interrupción, tanto de la acción penal como de la pena [diferente al término utilizado en el art. 95].

El art. 100 se refirió a que la prescripción es irrenunciable.

2.1.7. El Código Penal de 1924¹⁸².

Este código fue el que por primera vez incorporó al sistema penal peruano la institución de la **prescripción extraordinaria** en sus arts. 121 in fine y 124 tanto para la acción penal como para la ejecución de la pena, esto al parecer influenciado por el Proy. de CP (1916) como se acaba de ver.

a. La Ley N° 9014¹⁸³ (Ley de prescripción de la acción penal y de la pena).

La ley en sus artículos 6 y 7 introdujo varias modificaciones al CP (1924). Entre ellas se tiene la del art. 119 por el cual se *aumentaba el plazo de prescripción de la acción penal*; así los delitos que merezcan penas de internamiento prescribirán a los 25 años, los de penitenciaría o relegación, los de prisión o expatriación a los ocho años, y todos los demás a los tres años. En su art. 10 esta ley *aumentaba en 1/3 el término de la prescripción de la pena* cuando se trataba de *«reincidentes, habituales, homicidas que, por la gravedad del hecho, en sí mismo, la naturaleza de los móviles o sus antecedentes personales se revelan como sujetos peligrosos»*; también este artículo contempló como novedad el *momento de cómputo de la prescripción cuando hay penas alternativas* al expresar que si *«la ley castiga un delito con penas alternativas, la prescripción sólo podrá computarse en el acto del juzgamiento»*.

Otra modificación fue la del art. 120 del código penal en lo concerniente al **inicio del cómputo de la acción penal**, precisándose los ya contemplados por el código penal y agregando otros supuestos: *«la prescripción de la acción criminal comenzará a contarse para los delitos consumados, desde el día en que se cometió el delito; para los delitos tentados, desde el día en que se suspendió su ejecución; y en los delitos continuos desde el día en que se ejecuta el último hecho o se realiza la última acción»*.

¹⁸² Véase el ANEXO 1, de esta investigación, específicamente el documento N° 6.

¹⁸³ Véase el ANEXO 1, de esta investigación, específicamente el documento N° 8.

También se refirió esta ley en su art. 8 a la **ampliación de los supuestos de interrupción de la prescripción de la acción**. Según el nuevo texto, se propuso que *«el término de la prescripción de la acción penal se interrumpe por la orden judicial de detención o de citación para la instrucción o el juzgamiento y las diligencias procesales que les sigan. En los delitos en que no procede la detención, el término se interrumpe por la simple interposición de la denuncia. Después de la interrupción comenzará a correr un nuevo plazo de prescripción. Si no pudiera iniciarse o proseguirse la acción penal sino después de autorización especial, o después de resuelta una cuestión prejudicial, quedará en suspenso la prescripción y no volverá a correr sino desde el día en que se de la autorización o se resuelva la cuestión prejudicial»*; y tal vez lo más significativo de esta reforma, lo constituyó la derogación de la institución de la prescripción extraordinaria contemplada en el art. 121 del texto oficial, aunque ello significó un retroceso en la regulación de la prescripción.

El art. 9, referido a la prescripción de la pena, derogó la prescripción extraordinaria de la pena, las causales de interrupción de ésta, y la revocación de la libertad condicional. Además, el nuevo texto presentó como novedad la inclusión de un nuevo supuesto para el inicio del cómputo de la prescripción de la pena. El nuevo texto señaló: *«El plazo de prescripción de la pena comienza a contarse desde el día en que queda ejecutoriada la condena; o desde el quebrantamiento de la condena, si esta hubiera empezado a cumplirse»*.

Esta ley también presenta en su art. 11 la *conversión de dos días de ausencia por uno para obtener la prescripción*, sea de la acción o de la pena: *«Si el reo se ausentara del territorio de la República sólo podrá prescribir la acción penal o la pena, contándose por uno cada dos días de ausencia, para el computo de los años»*.

Por último, dicha ley también precisó que *los plazos de prescripción de los delitos se aplican para la reparación civil*.

b. La Ley N° 10203¹⁸⁴.

A través de esta ley se derogó muchos de los cambios producidos a raíz de la Ley N° 9014, entre ellos los referidos a los arts. 119, 120, 121, 124 del CP (1924), y lo agregado por los arts. 10 y 11 de la Ley N° 9014.

¿Aquí hay que preguntarse qué sucedía con las normas derogadas; acaso significaba que las normas anteriormente derogadas por la Ley N° 9014 recobran su vigencia o no? ¿O por el contrario, devenía la institución de la prescripción en inaplicable?

La respuesta se dio en este mismo decreto ley al establecerse legalmente que recobren su vigencia las normas del CP (1924) antes de ser modificadas por la Ley N° 9014, con lo cual

¹⁸⁴ Dada el 22 de Junio de 1945 y consta de un solo artículo. Véase el ANEXO 1, de esta investigación, específicamente el documento N° 9.

segúan vigentes las reglas de la prescripción. El texto del decreto ley en comentario precisaba: «*quedando vigente las disposiciones contenidas en el Código Penal*».

c. El D.L. N° 17106¹⁸⁵.

En primer lugar este decreto ley vuelve a modificar el texto originario del código penal, retornando básicamente a las soluciones contenidas en la abrogada Ley N° 9014. Entre ellas cabe mencionar en primer lugar al art. 2 del D.L., el cual se refería al art. 119 del código penal, aumentando los plazos de prescripción de la acción penal; los delitos merecedores de penas de internamiento prescribían ahora a los *20 años*, y a los *10 años los delitos que merezcan prisión o expatriación*. Aquí también se incorporó el momento en que se iniciaba el cómputo de la prescripción cuando un delito era castigado con penas alternativas.

En segundo lugar, el art. 3, refiriéndose al art. 121 del código penal, reintroduce el art. 8 de la ley N° 9014 en su redacción original (que trata de los actos de interrupción y suspensión) con el único agregado del art. 11 de dicha ley (que trata de la prescripción de la acción penal o de la pena para los declarados ausentes; [la ley no utiliza el término “declaración”, sino que es producto de mi interpretación]). Al respecto considérese los comentarios realizados anteriormente sobre esta ley.

d. El D.L. N° 17388¹⁸⁶.

Se trata de una ley especial (para delitos de rapto y contra el honor sexual) que introduce una modificación coherente con la reforma dada por aquel entonces en el país con la incorporación de la pena de muerte, así se hacía necesario un plazo de prescripción para estos casos, y ese es el objetivo del presente D.L., el cual en su art. 6, incorpora al art. 119 del código penal la siguiente disposición: «*Los delitos que merezcan pena de muerte, prescribirán a los 30 años*».

e. El D. Leg. N° 121¹⁸⁷.

Mediante este decreto se modificó y reestructuró algunas reglas penales, entre ellas las referidas a los *plazos de prescripción de la acción penal*, las *causales de interrupción de dicha prescripción*, y la prescripción extraordinaria¹⁸⁸. También se especificó *el momento de cómputo de la prescripción cuando hay penas alternativas* al expresar que si «*la ley castiga un delito con penas alternativas, la prescripción sólo podrá computarse en el acto del juzgamiento*». Entre las novedades se tuvo la *introducción de un plazo adicional de prescripción de la acción penal ordinaria referida a delitos contra el Estado* (será aumentada en una mitad). También, el aumento del número de las causales de interrupción de la acción penal (por denuncia del Ministerio Público, por emitirse acusación escrita del

¹⁸⁵ Promulgado el 08 de Noviembre y publicado el día 09 de Noviembre de 1968. Véase el ANEXO 1, de esta investigación, específicamente el documento N° 10.

¹⁸⁶ Dado el 24 de Enero de 1969. Véase el ANEXO 1, de esta investigación, específicamente el documento N° 11.

¹⁸⁷ Fue dado el 12 de junio de 1981 y sólo dedica a la prescripción su art. 2, por el cual se modifican los artículos 119 y 121 del C.P. de 1924. Véase el ANEXO 1, de esta investigación, específicamente el documento N° 12.

¹⁸⁸ El Dr. Florencio Mixán ha considerado que con la entrada en vigencia del D. Leg. N° 121 y con la derogatoria del D.L. N° 17106 recobra vigencia la prescripción extraordinaria para los supuestos de suspensión, ya que el D. Leg. N° 121 «no mantiene dicha derogatoria ni dispone cosa distinta». (1988), pp. 116 y 117.

Ministerio Público por interponerse recurso de apelación o de nulidad) y algunas especificaciones de las causales como por dictarse auto apertorio de instrucción, por expedirse auto que dispone pasar a Juicio Oral, por dictarse resolución señalando fecha y hora para iniciarse el Juicio Oral y por expedirse orden judicial de citación o captura; las que antes se subsumían dentro de los actos judiciales de instrucción y de juzgamiento.

2.1.8. El Código Penal de 1991¹⁸⁹.

El código penal de 1991, constituyó una novedad en Sudamérica al regular instituciones que otros países no habían incorporado, sin embargo, en el tema de la prescripción penal no se hicieron grandes reformas. Así, en los artículos 78 al 91 regula la prescripción como causal de extinción de la acción penal y de la pena, y en el art. 101 la extinción de la acción civil.

También se vuelve a regular en el sistema penal peruano la institución de la prescripción extraordinaria en el art. 83 in fine aunque en mi opinión únicamente para los casos de la acción penal, a diferencia del anterior código y de los proyectos de ley de enero de 1991:

Ya en los arts. 93 y 94 del Proy. de CP (1916) se consideraron respectivamente las normas de la prescripción extraordinaria para la acción penal y para la pena. De este mismo parecer fue el CP (1924) que recogió dichas normas en sus arts. 121 (referido a la acción penal) y 124 (referido a la pena). Luego, **el Anteproyecto de Cornejo de 1927**¹⁹⁰ también proponía tal figura en sus arts. 68 (acción) y 71 (pena). El proyecto de setiembre de 1984 recogió en sus arts. 95 in fine (acción penal) y 98 (de la pena), pero a diferencia de todas las propuestas anteriores, este proyecto planteó además la prescripción de las medidas de seguridad en su art. 108. Ese mismo año se publicó el proyecto de octubre de 1984, el cual aparte de regular la prescripción extraordinaria en sus arts. 82 in fine (referido a la acción) y 85 (referido a la pena), reiteró la prescripción de las medidas de seguridad en su art. 78, equiparándola a la prescripción de la pena. Esto último también es hecho por el proyecto de agosto de 1985 en sus arts. 90 in fine y 91 respectivamente. Al año siguiente, en abril, se volvió a publicar este proyecto, aunque ahora los artículos serían el 89 in fine (prescripción de la acción) y el 90 (prescripción de la pena). El proyecto de setiembre de 1989 consideró en su art. 86 in fine sólo los casos de prescripción extraordinaria de la acción penal, y en el art. 89 in fine la prescripción ordinaria de la pena. Esta nueva orientación fue la recogida de allí en adelante por los posteriores proyectos. Así el proyecto de Julio de 1990 en sus arts. 87 in fine (prescripción extraordinaria de la acción penal) y 90 in fine (prescripción ordinaria de la pena). Por último el proyecto de enero de 1991, que a larga recogería el texto que hoy tiene el CP en materia de prescripción, se refiere en su art. 83 in fine a la prescripción extraordinaria de la acción penal y en los arts. 86 y 87 a la prescripción ordinaria de la pena.

¹⁸⁹ Véase el ANEXO 1, de esta investigación, específicamente el documento N° 20, donde consta la versión original de dicho código.

Nota: Los proyectos de setiembre de 1984; de octubre de 1984; de agosto de 1985; de abril de 1986; de setiembre de 1989; de julio de 1990; y de enero de 1991, serán comentados y concordados cuando se trate cada uno de los temas consignados en esta investigación.

El anteproyecto de 1927 (también llamado **anteproyecto Cornejo**, que influyó indirectamente en el CP de 1924 vías las reformas a éste y también en el CP de 1991), véase el ANEXO 1, de esta investigación, específicamente el documento N° 7.

a. Los Decretos Leyes de Emergencia.

Aquí se debe tener en consideración toda la normatividad a partir de la vigencia del D.L. N° 25475 mediante el cual se introduce la cadena perpetua (más adelante veremos si hay o no un plazo de prescripción).

b. El D.L. N° 25662¹⁹¹.

Este D.L. (art. 1°) es una regla especial por medio de la cual, en caso de realización de un delito común por parte de miembros de la Policía Nacional, sea que se encuentren *en situación de actividad o dados de baja por medidas disciplinarias*, se les aumentará *al doble de tiempo máximo de la pena fijada en el Código Penal o Leyes Especiales*. Y si fuesen miembros retirados *serán acreedores a la pena máxima, incrementada en un cincuenta por ciento*.

Con la introducción de este D.L. se modificó el monto de la pena privativa de la libertad, ya que al aumentarse el monto de la pena a imponer a las personas que tengan las condición de ser miembros de la Policía Nacional, también el plazo de prescripción va a incrementarse, y además porque este D.L. será el antecedente de la Ley N° 26314 (más adelante se hará referencia a la aplicación o no de la misma).

c. La Ley N° 26314¹⁹².

Sin embargo, el código penal fue modificado el día 28 de mayo de 1994, mediante la publicación de la Ley N° 26314 incorporando vía artículo único un párrafo al art. 80 por el cual se duplicaba el plazo de prescripción cuando los delitos fuesen cometidos «por funcionarios y servidores públicos contra el patrimonio del Estado o de organismos sostenidos por éste».

d. La Ley N° 26360¹⁹³.

A raíz de la legislación especial en materia de terrorismo¹⁹⁴ se restableció en el Perú la cadena perpetua, sin embargo no quedaba claro si existía o no plazo de prescripción de la

¹⁹¹ Véase el ANEXO 1, de esta investigación, específicamente el documento N° 21.

¹⁹² El **proyecto de ley N° 1427/94** de fecha 03 de enero de 1994 del Congresista **Humberto Sambucetti Pedraglio** del FIM constituye el antecedente directo para la adecuación del CP al texto del art. 41 de la Constitución de 1993, pero la reforma opta por ubicar la modificación en el art. 86 referido a la prescripción de la pena, por lo que la Comisión de Justicia en su Dictamen propone que la ubicación sea en el art. 80, como al final queda el texto del art. 80 del CP.

¹⁹³ El antecedente de esta norma es el **proyecto de ley N° 932/93** del 22 de setiembre de 1993 que buscaba adecuar la norma penal a la pena de cadena perpetua para determinados delitos según las leyes N° 26222 y N° 26223. El art. 1 de este proyecto plantea modificar el art. 29 del CP a fin de fijar los límites de la pena privativa de libertad. Sin embargo, es en el Dictamen en donde se propone el actual texto del CP art 29 y del art. 80, pues este dictamen elaboró un texto alternativo que fue aprobado finalmente. Entre las modificaciones que hizo fue la de plantear la distinción entre dos especies de penas privativas de libertad, una cuya denominación fue de pena temporal y sus plazos, y otra de la cadena perpetua. Además se adiciona al párrafo quinto el lapso en el cual prescribe la acción penal para delitos sancionados con cadena perpetua.

¹⁹⁴ Por D.L. N° 25475 (promulgado el 05 de mayo de 1992 y publicado el 06 mayo de 1992) se estableció que el máximo de la pena privativa de libertad sería la cadena perpetua. Esta norma se aplica para los delitos de terrorismo, «traición a la patria», narcoterrorismo (Ley N° 26223), secuestro (art. 152 in fine por Ley N° 26222), violación contra la libertad

acción penal para los delitos que acarreaban dicha sanción, por lo que se formuló como respuesta de acuerdo al art. 80 del CP que esto ocurriría a los veinte años. Ante esto, los legisladores se vieron en la necesidad de establecer, vía una modificatoria, dicha respuesta. Así el día 29 de setiembre de 1994 se dio la Ley N° 26360 que incorpora al art. 80 del CP un nuevo plazo de prescripción: *“tratándose de delitos sancionados con pena de cadena perpetua se extingue la acción penal a los treinta años”*.

Sin embargo, la modificación del art. 29 no quedó allí, sino que siguió variándose su contenido con la dación de otras leyes tales como el D. Leg. N° 895, el D. Leg. N° 982 (publicado el 22 de julio de 2007), que dispone: *“La pena privativa de libertad puede ser temporal o de cadena perpetua. En el primer caso, tendrá una duración mínima de dos días y una máxima de treinta y cinco años”*. Aunque el plazo de prescripción no se volvió a modificar, salvo la precisión interpretativa realizada mediante Acuerdo Plenario N° 9-2007/CJ-116¹⁹⁵, por la Corte Suprema a través del cual consideró que estos plazos eran únicamente para la prescripción ordinaria, pues la extraordinaria sería de 30 años para las penas temporales y 45 para la cadena perpetua.

Por otro lado, se aprovechó esta modificación para incrementar el plazo de prescripción de dos a *tres* años para las penas diferentes a la privativa de la libertad.

e. La Ley N° 26641.

Dejando de lado las connotaciones políticas, que no corresponde tratarlas aquí, el legislador vía Ley Especial N° 26641¹⁹⁶ en su art. 1, establece de manera ambigua pues, no

sexual sobre menor (Art. 173-A, introducido por Ley N° 26293) y para los delitos de robo agravado (Art. 189 in fine, modificado por Ley N° 26630).

¹⁹⁵ A continuación se resalta los fundamentos 8, 9 y 10, así como la conclusión establecida en el numeral 12 del Acuerdo, aprobado por unanimidad: **“12. ESTABLECER** como doctrina legal, conforme a los fundamentos jurídicos seis al diez, los criterios para la interpretación y aplicación de los alcances del párrafo cuarto del artículo 80° del Código Penal, así como sobre la eficacia de dicha disposición en relación a lo dispuesto en el párrafo final del artículo 83° del citado cuerpo legal. A estos efectos, los Jueces y Salas Penales deberán tener en cuenta, obligatoriamente, los criterios indicados en dichos párrafos”. Véase los fundamentos en el ANEXO 4, de esta investigación, específicamente el documento N° 6.

Además, no olvidemos que este problema anteriormene se había planteado en la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema vía R.N. N° 2860-2006, Ancash, donde se evidenció que el texto de aquel entonces del art. 173 del CP, referido a la violación de menores de edad solo contenía límites mínimos en cuando a la pena conminada pero no establecía los límites máximos, ello considerando que este extremo es que sirve para calcular la prescripción de la acción penal, dejando de lado el hecho de solo especificar que el monto señalado en el art. 29 resolvía el problema, situación que se resolvió precisando que “...por el contrario, y –como se ha expuesto precedentemente– por estrictas razones sitemáticas entre las aludidas circunstancias definidas en cada inciso del tipo legal, éste debe corresponder al mínimo legal previsto para el grupo etario precedente; que, por consiguiente, para el inciso tercero el máximo de pena aplicable era el mínimo señalado en el inciso segundo, y para el inciso segundo el máximo legal corresponde al extremo mínimo de pena conminada establecido en el inciso primero, que en relación a este último inciso el máximo legal de la pena conminada sería el genérico que establecía el hoy suprimido artículo veintinueve del Código Penal, también en su texto original, para la pena privativa de libertad y que era de veinticinco años”, véase el ANEXO 3, de esta investigación, específicamente el documento N° 68.

¹⁹⁶ A diferencia de esta ley, su antecedente, el proyecto «sorpresa» del congresista Olivera N° 1420/95 CR, sancionado favorablemente el 12 de Junio de 1996, pretendía establecer la condena en ausencia con el argumento sutil de que el art. 139 numeral 12 de la Constitución no abarcaba a los contumaces. Así el proyecto seguía una interpretación meramente literal (aunque a esto se le llame ‘interpretación auténtica’; en la exposición de motivos) en los artículos primero y tercero, mientras que, en el artículo segundo se precisaba quien era contumaz. Este proyecto nos recuerda al cavernario y antihistórico D.L. 25728 felizmente abrogado por la ley 26248 en su art. 4, que estableció ficticiamente la

queda claro si se trata de una nueva causal de interrupción o suspensión de la prescripción extraordinaria de la persecución penal. De ello se desprende que del empleo de una redacción sumamente trabada y confusa, no se permite establecer a simple vista si el objeto de esta regla era modificar el art. 83 u 84, o ambos del CP.

f. La Ley N° 27939¹⁹⁷.

Mediante esta ley en su art. 8 se estableció la modificación del art. 440 numeral 5 del CP, disponiéndose el incremento del plazo de prescripción de la persecución penal de la falta, de seis meses a un año, lo que implicaba equipararse el plazo de la prescripción de la persecución penal con el de la ejecución de la pena.

g. La Ley N° 28117¹⁹⁸.

Bajo el título de Ley de Celeridad y Eficacia Procesal Penal, se dispuso un sin número de modificaciones al C de PP y al CPP, así en el art. 4° de esta ley se estableció la modificación del art. 80 del CP nuevamente, por lo cual el plazo de prescripción para las penas distintas a la privativa de la libertad, se reduce de tres a dos años, ya que no se debe olvidar que la Ley N° 26360 había establecido que dicho incremento del plazo de prescripción de las penas no privativas de libertad sea de tres años.

h. La Ley N° 28726¹⁹⁹.

En el caso de esta modificación ya el legislador renunció a los patrones básicos de la Exposición de motivos del CP, pues no sólo se incorporó la reincidencia sino que además se adecuó este supuesto para las normas de prescripción de las faltas, por lo que ahora se tiene que un incremento de los plazos de prescripción de las faltas de un año a *dos* (art. 440, numeral 5) en los casos de reincidencia con un plazo muy drástico, aunque ya al incorporarse la reincidencia se pudo haber echado mano de la proporción del tercio a incrementarse como agravante genérica establecido en el art. 46-B del CP, considerando que el mismo art. 440 del CP dispone la aplicación de las disposiciones de la Parte General al libro de faltas, empero el legislador optó por la drasticidad.

No está de más mencionar que sobre esta ley se interpuso una acción de inconstitucionalidad en el expediente N° 0014-2006-PI/TC²⁰⁰, el mismo que por mayoría se declaró infundada.

Otro aspecto que se introdujo mediante esta ley fue la incorporación al art. 440, del

condena en ausencia para los delitos de terrorismo y “traición a la patria”. La fuente de la cual se valen los que elaboraron la modificación del art. 29 es el viejo código penal argentino de 1922 que utiliza tal terminología en sus art. 6 y 9 para las penas de reclusión y prisión respectivamente. Por el contrario el aumento del plazo de prescripción se copia del código penal alemán, pero lo más risible es que se coloca como fundamento el hecho que se diga que la fuente en materia de penas es el código penal alemán, pues entonces para la prescripción también debería ser lo mismo. Véase el antepenúltimo párrafo del Dictamen.

¹⁹⁷ Publicado el 12 de febrero de 2003 mediante la cual se modifica el art. 440 del Código Penal.

¹⁹⁸ Publicada el 10 de diciembre de 2003 la misma que modifica el art. 80 del Código Penal.

¹⁹⁹ Publicada el 09 de mayo de 2006 la misma que modifica el art. 440 del Código Penal.

²⁰⁰ Véase el ANEXO 5, de esta investigación, específicamente el documento N° 42.

numeral 7, que en los casos de reincidencia el magistrado puede incrementar la pena, hasta el doble del máximo legal fijado.

i. La Ley N° 29407²⁰¹ (Concurso de faltas).

La prescripción de las faltas “supone una autolimitación o renuncia del Estado al “ius puniendi” por el transcurso del tiempo, que encuentra también fundamentos en principios y valores constitucionales, pues toma en consideración la función de la pena y la situación del presunto inculpado, su derecho a que no se dilate indebidamente la situación que supone la virtual amenaza de una sanción penal, lo que ha de ponerse en conexión también con el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas”, “el hecho de que los derechos fundamentales sean permanentes e imprescriptibles es compatible, sin embargo, con que el ejercicio de la correspondiente acción que permite reclamar jurisdiccionalmente ante una presunta y determinada violación, esté sujeto a un plazo de prescripción”.²⁰²

El legislador no estableció reglas expresas para el concurso entre faltas penales, razón por la cual si se cometen dos faltas en momentos diferentes nos encontramos ante un supuesto de concurso real, que asumiendo un criterio de interpretación extensiva, se tiene que aplicar el art. 80 segundo párrafo, sin embargo, el legislador al modificar el art. 440, numeral 5 estableció, como se acaba de ver, un nuevo plazo para la prescripción, empero al no depender el plazo de prescripción en las faltas del plazo establecido para la pena conminada privativa de la libertad, pues las penas a imponer son ajenas por mandato del art. 440 numeral 3, es decir que solo se puede imponer a penas no privativas de la libertad, entonces el legislador fijó un límite preciso, como en aquellos códigos penales que establecen plazos específicos, no diferenciando si se trata de un plazo de prescripción ordinario o extraordinario, aunque en la práctica VÍCTOR PRADO SALDARRIAGA ha considerado que el plazo regulado en el art. 440, numeral 5 es el ordinario y por ende es admisible en concordancia con el art. 83 in fine el extraordinario, y en esta línea ha ido la Corte Suprema mediante el **Acuerdo Plenario N° 1-2010/CJ-116²⁰³**, que señala:

“19°. El Libro Tercero del Código Penal está dedicado a las faltas. Esta clase de infracciones penales no incluyen en su penalidad conminada penas privativas de libertad. Ellas son sancionadas sólo con penas principales de multa o de prestación de servicios a la comunidad. En lo que respecta al plazo ordinario de la prescripción de la acción penal y de la pena en las faltas, el inciso 5 del artículo 440° señala de manera específica en un año. Además, dicha disposición consigna también que “la acción penal y la pena prescriben en caso de reincidencia a los dos años.

20°. Sin embargo, el citado artículo no ha precisado cuáles son las reglas especiales sobre los plazos extraordinarios de prescripción de la acción penal ni sobre los presupuestos que identifican la reincidencia en las faltas. Por consiguiente, dado que el mismo numeral 440° *ab initio* establece que: “Son

²⁰¹ Publicada el 18 de setiembre de 2009 la misma que modifica el artículo 46-B, modifica el art. 440 e introduce el art. 50-A del Código Penal.

²⁰² Ayo (2011), pp. 70 y 71.

²⁰³ Véase el ANEXO 4, de esta investigación, específicamente el documento N° 2.

aplicables a las faltas las disposiciones contenidas en el Libro Primero (. . .), es pertinente delinear los alcances de esa regulación supletoria para tales casos.

21°. Al respecto cabe asumir, sin mayor contradicción ni implicaciones normativas, que para efectos los plazos de la prescripción de la acción penal ni sobre los presupuestos que identifican la reincidencia en las faltas. Por consiguiente, dado que el mismo numeral 440° *ab initio* establece que: “Son aplicables a las faltas las disposiciones contenidas en el Libro Primero (...)”, es pertinente delinear los alcances de esa regulación supletoria para tales casos.

22°. Ahora bien, el artículo 440°, inciso 5, señala también que en caso de reincidencia el plazo ordinario de prescripción de la acción penal y de la pena para las faltas es de dos años, por lo que en tales supuestos el plazo extraordinario será de tres años. No obstante, dicho artículo no identifica en su contenido los presupuestos y requisitos que posibilitan la configuración de la reincidencia en las faltas.”

Por ende, si se asume una postura formal, se debe considerar que la regla del concurso real para los casos de prescripción de faltas es viable, ya que alguna(s) falta(s), prescribiría (n) independientemente de la otra(s), aunque su relevancia sería insignificante en el tiempo, por lo corto y uniforme que es el plazo, para todos los casos.

Sin embargo, considerando que con la incorporación de la reincidencia sí sería relevante y posible de aplicar con el concurso real, por citar un ejemplo: si concurren una falta culposa y otra dolosa, donde previamente el faltoso condenado tenía una pena de un año atrás por una falta dolosa anterior, se tendría que la primera falta prescribiría al año y la segunda a los dos años. Empero, si no hubiera reincidencia los plazos sería idénticos, siendo un eufemismo aplicar el art. 80 segundo párrafo del CP.

En el caso del concurso ideal la regla de la prescripción consagrada en el art. 80 tercer párrafo del CP, no es aplicable a las faltas, pues el plazo de prescripción no depende de la pena, sino que es un plazo legal único. En cambio, con la incorporación de la reincidencia sólo sería factible si con una acción se realiza un tipo penal culposo y otro tipo penal doloso de falta, pues el plazo del primero sería de un año y éste se tendría que someter al del segundo, que es de dos años.

Todas estas ideas se tienen que replantear con la entrada en vigencia de la Ley N° 29407, que modificó la reincidencia y la habitualidad, aunque de manera expresa sólo estableció que los presupuestos de la reincidencia le son aplicables a las faltas, así se dispuso que “igual condición tiene quien haya sido condenado por la comisión de faltas dolosas” (art. 46-B) del CP.

Al respecto indicamos que se podía llegar a la misma consecuencia utilizando la remisión del art. 440 del CP, no siendo necesaria la modificación legislativa, sin embargo sí resulta relevante el plazo de los cinco años para calificar una reincidencia²⁰⁴, pues nos parece excesivo, ya que es una suerte de equiparación entre el delito y la falta.

Por su parte la Corte Suprema, sobre este tema, ha planteado el establecer como plazo de prescripción los dos años para considerar relevante la reincidencia mediante el **Acuerdo Plenario N° 1-2010/CJ-116**²⁰⁵, lo cual si bien es una alternativa de solución, no resulta del todo correcta, ya que se sigue afectando el modelo original de la prescripción donde los plazos de la prescripción de la persecución penal y de la ejecución de la pena son similares.

A continuación se señalan los fundamentos expuestos por la Corte Suprema:

“A. La reincidencia en faltas se produce cuando quien habiendo sido condenado como autor o partícipe de esta clase de infracción penal, incurre luego de que la condena adquiere firmeza en la comisión de una nueva falta. Se trata, pues, de una modalidad de reincidencia ficta que no exige que se haya cumplido en todo o en parte la pena impuesta.

B. La reincidencia en faltas determina modificaciones en la pena conminada para la nueva falta cometida. En tal sentido, el máximo de pena originalmente establecido por la ley se convertirá en mínimo y se configurará un nuevo límite máximo que será equivalente a la mitad por encima del máximo original.

C. Para que se configure la reincidencia la nueva falta debe ser cometida en un plazo no mayor a dos años de quedar firme la condena anterior. De esa manera la reincidencia será compatible con los plazos ordinarios de prescripción de la acción penal y de la pena estipulados en la segunda parte del inciso 5 del artículo 440^o²⁰⁶.

Además, podemos observar que el plazo de prescripción de los tipos penales de las faltas reincidentes es de tres años para los casos de prescripción extraordinaria y el plazo de la reincidencia relevante es de dos, es decir hay incoherencias que deberían modificarse por la vía legislativa, considerando el modelo de prescripción en su totalidad y no establecer un sistema de prescripción independiente para las faltas, distinguiéndose entonces de las reglas que rigen para los delitos. E incluso esta interpretación no explica por qué en algunos casos los cinco años se aplique indistintamente al delito leve (por ejemplo lesiones, difamación y otros) o al grave (por ejemplo el robo), o a su agravante (por ejemplo el robo agravado), sino todos tienen el mismo plazo, situación que más adelante tendrá que modificarse con

²⁰⁴ El **Acuerdo Plenario N° 1-2008/CJ-116** precisó en su fundamento 13 referidos a la habitualidad y la reincidencia de los delitos según sus literales d) y g) in fine que: “Esa excepción solo debe ser aplicable a condenas que se haya impuesto y cumplido con posterioridad a la ya citada reforma del numeral 69 del Código Penal. En todo caso, cuando se haya vencido el plazo de prescripción de la reincidencia acordado en cinco años posteriores a la excarcelación (ver literal d), operará definitivamente la cancelación de los antecedentes generados por esa condena” (véase este texto en el anexo de la presente investigación). Véase el ANEXO 4, de esta investigación, específicamente el documento N° 4.

²⁰⁵ Véase en el ANEXO 4, de esta investigación, específicamente el documento N° 2.

²⁰⁶ Este Acuerdo Plenario N° 1-2010/CJ-116, se encuentra en el ANEXO 4, de esta investigación, específicamente el documento N° 2.

plazos escalonados como en este trabajo se propone. Una cosa es darle un trato diferenciado y otra es crearle un régimen independiente, en este trabajo se asume la primera, es decir la de un trato diferenciado, y no la segunda que implicaría crear reglas propias para la prescripción penal de las faltas en todos los casos.

La segunda modificación que introdujo esta ley y que nos interesa destacar fue la del art. 440 numeral 3 del CP, donde estableció que sí era posible incorporar penas privativas de la libertad para casos de reincidencia de faltas dolosas reguladas en los arts. 441 y 444 del CP como *numerus clausus*, reduciendo de esta manera el espectro de aplicación de la reincidencia si se compara con lo dispuesto en la anterior Ley N° 28726.

La tercera reforma consistió en incorporar al CP el art. 50-A que tiene como sumilla el **Concurso real de faltas**, que a la letra señala:

“Cuando se realiza una pluralidad de acciones que deban considerarse como faltas independientes que perjudican a varias personas e infringen el mismo precepto penal o preceptos de igual o semejante naturaleza, será sancionado como autor del delito correspondiente y se le impone la pena privativa de libertad prevista para éste, teniendo en cuenta el perjuicio total causado”.

Las primeras observaciones que se aprecian a simple vista son:

1° ¿Se trata de un concurso real solamente?, pienso que no, pues bastaría con aplicar el art. 50, creo que lo que ha pretendido el legislador es combinar el concurso real con el delito masa, produciéndose un híbrido en el que la concurrencia de dos o más acciones independientes en donde haya un sujeto pasivo masa perjudicado, clarifica la exigencia del primer presupuesto de este híbrido legislativo.

2° También es preciso señalar ¿qué significa infringir el mismo precepto penal o preceptos de igual o semejante naturaleza?; éste representa un supuesto más de los contemplados en el anterior punto, pues los alcances normativos que se otorguen a este supuesto, condicionará el margen de amplitud de cobertura de esta norma. Me hace recordar este supuesto a la problemática que surgió cuando en los años 90 surgió la figura de la determinación alternativa creada en la jurisprudencia alemana y que muy bien la desarrolla el profesor JESCHECK, así considero que la extensión de este supuesto deberá limitarse a los límites fijados por el bien jurídico protegido de manera restrictiva y considerando la interpretación analógica, por ejemplo, una cosa es que una persona realice en momentos distintos un mismo delito, en este caso nos encontramos ante un mismo precepto penal vulnerado, en cambio si se considera que un sujeto comete hoy un hurto y mañana un robo, aquí se trata de preceptos semejantes considerando la naturaleza del bien jurídico protegido; distinto es el caso de querer asemejar un delito de hurto con un delito de daños por más que el bien jurídico genérico sea el mismo cuando la naturaleza de cada caso es diferente, es aquí donde se aprecia el criterio restrictivo.

Al parecer el legislador ha contemplado una postura extensiva, pues permite comprender los casos de falta de hurto, faltas de daños, faltas contra la protección de señales satelitales,

faltas de hurto famélico, faltas de abigeato, faltas de usurpación breve y faltas de ingreso de animales en inmueble ajeno, como aplicación de preceptos de igual naturaleza o preceptos de semejante naturaleza.

3° ¿A qué se refiere el legislador cuando exige que se tenga “en cuenta el perjuicio total de lo causado”? ¿acaso se trata de una exigencia adicional al concurso real y a la aplicación del delito masa, es decir al supuesto de una falta continuada?; pienso que no, y esta frase utilizada por el legislador sólo sería relevante para la determinación e individualización judicial de la pena, no se debe olvidar que las exigencias típicas siempre deben ser respetando la *lex certa*, la *lex scripta* y la *lex stricta*.

4° Cuando se habla de “será sancionado como autor del delito correspondiente”, surgen las siguientes interrogante: ¿se estará refiriendo el legislador al tipo penal básico del delito homologado?, ¿si la infracción realizada considerando el monto del objeto material es de una falta contra el patrimonio, qué sucede si es realizada por dos o más personas?, ¿cuáles son los alcances de la expresión delito correspondiente?; es necesario indicar que para la imposición de la sanción a la falta homologada como delito, considerando los principios de legalidad y favorabilidad, el delito homologado siempre deberá ser el tipo básico, por lo cual, no sería recomendable asumir la postura de aplicar las agravantes de los delitos a los tipos básicos o agravados de las faltas, ya que se trastocaría el modelo de regulación legislativa penal de crear las agravantes específicas o propias para una falta y crear las agravantes específicas o propias para un delito, y no combinarlos pues se rompe la racionalidad legislativa penal, se afecta la *lex certa* y ello sería desfavorable al imputado. Distinto es el caso de las circunstancias agravantes genéricas, pues considerando lo dispuesto en el art. X del Título Preliminar del CP en concordancia con las disposiciones comunes del art. 440, si no se ha establecido de manera expresa la referencia a la aplicación de dicha agravante, no se puede aplicar los efectos de estas circunstancias a los delitos.

5° La más importante de las observaciones es establecer con precisión ¿por qué si se comete una falta se le sanciona como un delito? y ¿qué reglas de prescripción se aplicará para estos casos, la que realmente cometió o la que se le aplicó por disposición del art. 50-A del CP?

Otra de las modificaciones planteadas fue el de considerar de manera excepcional la admisibilidad de la tentativa, ya que tratándose de los dos tipos penales de faltas reguladas por los arts. 441 y 444 del CP sí se le permite, más no en el resto de casos.

Por ende, la aplicación de la regla del concurso real para establecer el plazo de prescripción entre faltas sería inviable como regla general para todos los casos excluidos de los alcances de la Ley N° 29407, toda vez que contradice lo dispuesto por el art. 440, numeral 5 del CP, en virtud del cual, no es posible aplicar la regla del más grave cuando el plazo de prescripción es único cualquiera que fuere la falta cometida, leve o grave.

j. El D. Leg. 1097²⁰⁷.

Aunque este decreto legislativo no modifica las normas sobre prescripción, sino que se refiere a un tratado que tiene implicancias directas a la hora de solucionar controversias jurídico penales en el ordenamiento nacional, es decir problemas de prescripción e imprescriptibilidad, por ello es importante destacar que el ejecutivo avalado por el Congreso de la República dio este decreto legislativo con la idea de fijar el criterio de interpretación desde qué momento o a partir de cuándo se aplicaba la **Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad**, constituyendo este enunciado una disimulada interpretación auténtica vía el mecanismo constitucional de la legislación delegada.

Ante esta arbitrariedad, un grupo de congresistas interpusieron una acción de inconstitucionalidad con el requisito del 25% de Congresistas de la República en el expediente N° 0024-2010-PI/TC, resolviéndose mediante sentencia del 21 de marzo de 2011, la misma que se declaró fundada y se dispuso la inconstitucionalidad de dicha disposición complementaria final, menos mal que el Tribunal actuó a la altura de las circunstancias, de lo contrario éste sería otro motivo más para que el Estado corra el riesgo de verse cuestionado ante los tribunales internacionales.

2.2. CÓDIGO PENAL MILITAR POLICIAL (D. LEG. N° 1094, D. LEG. N° 961 Y D.L. N° 23214)²⁰⁸.

La entrada en vigencia de un nuevo código para la justicia militar denominado Código Penal Militar Policial marcó una exigencia de adecuación de este fuero a los principios consagrados en la Constitución, los Tratados de los Derechos Humanos, las normas del Derecho Internacional Humanitario, así como los aportes de la doctrina, provenientes del moderno derecho penal, las experiencias del subsistema anticorrupción y sobre todo los mandatos del Tribunal Constitucional, sin dejar de reconocer las particularidades propias de este fuero, así pues resultó saludable este avance, no siendo éste el lugar para discutir a profundidad acerca de si era propicio o no la adopción de este modelo.

Dentro de lo que es materia de esta investigación, el nuevo Código contempla supuestos muy semejantes al recogido en el CP, aunque en su versión original con algunos rezagos del CP (1924) como ya lo acotaremos.

²⁰⁷ Publicado el 01 de setiembre de 2010 referido a la imprescriptibilidad. La misma que el Tribunal Constitucional mediante sentencia emitida el 21 de marzo de 2011, en el expediente N° 0024-2010-PI/TC (Véase el ANEXO 5, de esta investigación, específicamente el documento N° 24.) declaró inconstitucional por mayoría lo dispuesto, entre otras disposiciones a la primera disposición complementaria final del D.Leg. N° 1097, señalando el efecto vinculante de esta sentencia (un mayor análisis al respecto es el que se efectúa a la hora de tratar acerca de la imprescriptibilidad a ella nos remitimos).

²⁰⁸ Es necesario precisar que el viejo Código de Justicia Militar vigente por D.L. N° 23214, fue derogado por el Código de Justicia Penal Militar vía D. Leg. N° 961, publicado el 11 de enero del 2006, que es el que se ha venido aplicando y cuyas reglas de prescripción se encuentran comprendidos entre los artículos 54 al 58, 63, 180 y 261, por su parte el nuevo Código de Penal Militar vía D.Leg. N° 1094, publicado el 11 de enero del 2006, que es el que se ha venido aplicando y cuyas reglas de prescripción se encuentran comprendidos entre los artículos 43 al 50, 55, 252 ubicados en el Título IV, de la Parte General.

En el nuevo CPMP se tiene la plasmación de un modelo de prescripción que se basa en la pena conminada para la prescripción de la acción penal, así como para la prescripción de la ejecución de la pena (art.45 primer párrafo).

Un tema que es interesante indicar es que siendo este código mucho más reciente que el N.C.P.P., lo cierto es que la suspensión ha mantenido su esencia tal cual el CP, y en el aspecto procesal no se ha establecido que el inicio del proceso no suspende o interrumpe el plazo de prescripción, así la única norma que se refiere procesalmente es la contemplada en el art. 252 en donde se señala: “La contumacia, ausencia o suspensión por cualquier causa prevista en este Código interrumpirá los plazos de duración del proceso”, y como se aprecia solo tiene consecuencias para el proceso, no para la prescripción.

Otro de los aspectos que interesa destacar es ver si es posible que la prescripción extraordinaria sea aplicable, tanto a la acción penal como a la ejecución de la pena, y la respuesta es que sí, ya que expresamente se ha regulado.

Además, es importante indicar que para la prescripción de la acción penal se incluye un plazo legal, específicamente cuando se trate de delitos cometidos con ocasión de conflicto armado internacional, pues en estos casos la acción penal prescribirá a los treinta y cinco años (art. 45 segundo párrafo).

Por su parte el CJM regulaba en torno a la extinción de la acción penal y de la condena (arts. 59 a 65, Tít. Tercero, Sección II, de las Penas), a la prescripción como una de sus causales (art. 55 y 56, en ambos literal d).

En el art. 59 de dicho código, se estableció que los montos de prescripción de los delitos atendiendo al tipo de pena conminada (se distingue varios tipos de penas privativas de libertad). Así, tratándose de delitos, este plazo va desde los veinte años hasta los tres años (literales a, b, c, d y e), y en el caso de las faltas a los dos años (literal f).

En el art. 60 se precisaba dos casos del inicio de la prescripción ordinaria de la acción penal, uno referido a los delitos instantáneos (*desde la fecha en que se cometió el delito*), y otro a los delitos continuados (*desde el día en que terminó*).

De acuerdo al art. 61, también se establecía que la acción civil proveniente del delito ***prescribe con la acción personal, conforme al Código Civil*** [esta referencia era para el CC de 1936; ahora rige el CC de 1984; art. 2001, numeral 1, según el cual el plazo es de diez años], salvo cuando se trate del término de veinte años de la prescripción de la acción penal, en cuyo plazo se aplica dicho plazo.

Los supuestos de interrupción se consignaban en el art. 62° y son ***«los actos judiciales de instrucción o de juzgamiento»***, se precisó también el efecto de toda interrupción, y por último se reguló a la prescripción extraordinaria de la acción penal.

La condena o las penas impuestas por sentencia ejecutoriada prescribían, según el art. 63°, de manera diferenciada, pues tratándose de *delitos*: ***“a) Las de muerte e internamiento, a los veinticinco años; b) La de penitenciaría, a los quince años; c) La de***

prisión, a los diez años; y, d) Las demás, a los cinco años”, y tratándose de *faltas* a los «dos años».

El art. 64 se refería al momento en que se inicia el plazo de prescripción de la pena [aquí no utiliza el término condena] desde *«que queda ejecutoriada la condena»*. Se indicaba también que en este artículo la interrupción de la prescripción de la condena tenía dos supuestos, uno *«por el comienzo de la ejecución de la pena»* y otro *«por haber sido aprehendido el condenado para sufrirla»*. Por último, se consignaba la posibilidad de la prescripción extraordinaria de la condena, y, en el caso en que se hubiera concedido liberación condicional, *“la prescripción comenzará a correr desde el día de su revocación”*.

En el art. 65 se consideraba varios aspectos relacionados con la prescripción. Se estableció supuestos de interrupción de la prescripción de la acción por *reiterancia*, y de la condena por *reincidencia*; luego se consignó el efecto de la interrupción de la prescripción de la acción cuando *«antes de vencido el término de prescripción comete el acusado otro delito»*. Por último este artículo siguió la tesis de la irrenunciabilidad de la prescripción salvo que se tratase de la excepción de prescripción estipulada por el art. 418 del CJM ya derogado, el cual preveía que: *«si la excepción fuere deducida al término de la instrucción o en la segunda estación del procedimiento, el acusado podrá solicitar que, por el mérito de lo actuado, se dicte auto de sobreseimiento o sentencia absolutoria, por estar comprobada fehaciente-mente su irresponsabilidad»*.

Son interesantes también algunas otras disposiciones de la prescripción de la acción penal como la de desestimación de denuncias según el art. 385 numeral 3, el corte de la secuela de juicio por el art. 560 numeral 2, y el pronunciamiento de la prescripción sea a pedido de parte vía excepción (art. 415 literal b) o de oficio (art. 416), y en cualquier estado del proceso (art. 415 in fine).

2.3. CÓDIGO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES (LEY N° 27337²⁰⁹).

Este Código regula la prescripción en el art. 222, primer párrafo, estableciendo que “La acción judicial prescribe a los dos años de cometido el acto infractor. Tratándose de una falta señalada en el Código Penal prescribe a los seis meses. El plazo de prescripción de la medida socio-educativa es de dos años, contados desde el día en que la sentencia quedó firme”.

De esto se desprende que el plazo de prescripción de la acción penal, así como el plazo de prescripción de la sanción a la medida socio-educativa es de dos años, diferenciándose el caso de las faltas para el cual establece un plazo propio de seis meses. La primera cuestión a comentar es la unificación entre el plazo de prescripción de la acción penal (aunque se utiliza el término “judicial”) con el de la ejecución de la sanción de medida socio-educativa, siguiendo el modelo de pena conminada del CP.

²⁰⁹ Esta ley derogó al D.L. N° 26102.

Aunque al no precisarse si se trata de un plazo único o si es que éste es el plazo de prescripción de la acción penal ordinaria, se deja entrever que supletoriamente se puede aplicar la prescripción extraordinaria.

Otro de los aspectos que merece comentar es si los magistrados de familia competentes para los casos de infracciones penales cometidos por menores de edad, utilizan en sus resoluciones por aplicación supletoria los supuestos que contemplan las causales de interrupción y suspensión de la prescripción reguladas en el CP, ya que el Código de los Niños y Adolescentes no contiene regla expresa. Al respecto se señala que los magistrados de familia no utilizan el CP, por lo cual tampoco aplicar la prescripción extraordinaria de la acción penal, aunque sobre este aspecto no hemos realizado trabajo de campo alguno.

Preocupa también lo regulado en el segundo párrafo del art. 222, ya que establece una remisión al ordenamiento procesal, al señalarse que “el adolescente contumaz o ausente estará sujeto a las normas contenidas en el ordenamiento procesal penal”; de esto resulta relevante establecer a qué se refiere con ordenamiento procesal, pues si se aplica el C de PP, no hay mayor problema debido a que no contempla ninguna regla para establecer si ha o no prescrito una determinada acción penal, empero si se aplica el N.C.P.P., sí se encuentra un serio problema, ya que en el art. 339 numeral 1 de dicho cuerpo jurídico se precisa la suspensión de todo plazo iniciado de prescripción una vez que se ha iniciado la investigación. Otra opción interpretativa que es la que se propone en esta tesis es aplicar supletoriamente las reglas contempladas en el CP de manera preferente y excluyente a las reglas contempladas en el N.C.P.P.

Por tanto, cualquier criterio a adoptar implica asumir una posición sobre la naturaleza de la prescripción penal, es decir de si este instituto es penal, procesal o mixto, ya que de esto se desprende varias consecuencias prácticas aplicables al caso particular como se acaba de mostrar.

En el Código de los Niños y Adolescentes derogado, la prescripción se regulaba en el art. 237, pero se refería también a la acción judicial, la que se producía en el plazo de dos años. Empero, no se manifestaba nada acerca de la prescripción de las sanciones denominadas medidas socio-educativas especialmente. Sobre este punto, se sostuvo²¹⁰ que se debía aplicar supletoriamente las reglas del CP conforme lo permite el D.L. bajo comentario en su art. VI de su título preliminar. Entonces, como el plazo de prescripción de la pena es el mismo que la acción penal diremos que el plazo de prescripción de la sanción será el mismo que el de la acción judicial.

Sobre la conveniencia o no de la prescripción extraordinaria desde la perspectiva asumida en este trabajo, me pronuncio más adelante, pues si se considera que este plazo es único entonces incluso los casos de interrupción o suspensión serán inaplicables a fin de que este tipo de prescripción sea lo más beneficioso posible al menor (véase en la clasificación de la persecución penal).

²¹⁰ Véase Sáenz, A. (1996), Tesis, pp. 67.

2.4. CONSTITUCIÓN DE 1993²¹¹.

La Constitución de 1993 es la que regula por vez primera algunos aspectos relacionados con la prescripción penal; por ejemplo duplicó el plazo de prescripción para los funcionarios y servidores públicos que cometieran delitos contra el patrimonio del Estado (Título I, de la Persona Humana y de la Sociedad, Cap. IV, De la Función Pública, artículo 41º, in fine).

También se precisa en el art. 139 numeral 13 que **la prescripción produce el efecto de cosa juzgada**, aunque con precisión sólo respecto de la acción penal.

²¹¹ Véase el ANEXO 1, de esta investigación, específicamente el documento N° 22.

CAPÍTULO II

ASPECTOS GENERALES DE LA PRESCRIPCIÓN

1. NOMENCLATURA.

En Alemania el StGB utiliza los términos “**prescripción de la persecución penal**” y “**prescripción de la ejecución penal**”²¹².

Otros la denominan *prescripción de la acción penal*, [el CP (Tos.), el CP de la RSFSR²¹³ - hoy ex-Unión Soviética-, el CP (C.), el CP (Col.), el CP (Méx. F.), el CP (Ecu.), el CP (Ch.), el CP (Arg.), el CP (Ita. de 1889), el CP (C. R.), el CP (P. R.), ha sido el caso del Perú a partir del CP (1924) y del Proy. de CP (1916) hasta los publicados al mes de enero de 1991] y de la *prescripción de la sanción* [así el CP (C) y el CP (Méx. F.)].

Para algunos lo que se extingue es el *procedimiento criminal* [CP (Por.)] y la *prescripción de la pena* [el CP (Por.), el CP (Col.), el CP (Esp.), el CP (Ecu.), el CP (Ch.), el CP (Arg.) y el CP (C.R), así en el ya viejo Código de Instrucción Criminal Francés de 1870 y el CP (Fr.). Ésta ha sido la nomenclatura que se ha empleado en el Perú a partir del CP (Santa Cruz), del CP (1863) y de los posteriores, así como los sucesivos anteproyectos y proyectos de código penal; para otro grupo lo que prescribe es el *delito*²¹⁴ (CP (Esp.), y en el Perú éste fue el caso del anteproyecto de 1877, 1900-1902 así como el viejo anteproyecto de código penal sueco de 1916: art. 27 y otros señalan a la *condena*²¹⁵ (CP (Tos.)). Existe

²¹² Maurach, Heinz Y Zipf (1995), pp. 968. [Sin embargo en el Diccionario Jurídico Procesal Penal se habla de prescripción de la persecución penal (Verforgung) y de la prescripción de la ejecución penal (Vollstreckung). Véase Gómez J L (1985), pp. 610, 611 y 614. En la traducción de Espínola se habla de Prescripción de la acción y prescripción de la condena (Además, es importante ver las notas en relación al artículo 78 a 79b de Espínola). En la traducción de Bustos (1983) se traduce como prescripción de la persecución y prescripción del cumplimiento]. Es de recordar que ya el CP (Al. de 1870) utilizaba estas nomenclaturas en los arts. 67 y 70 respectivamente. Por su parte el CP (Aus.) utiliza el término *prescripción de la ejecución de la pena* (§ 59).

²¹³ El art. 48 de dicho código considera que “la persona que haya cometido un delito no puede ser sometida a procedimiento penal en estos tres casos: a) si ya transcurrió el término de la prescripción establecido por la ley; b) si el culpable, en el transcurso del término de la prescripción, no comete un nuevo delito, para la cual, con arreglo a ley, se le puede aplicar privación de libertad por más de dos años; c) si el culpable no elude la investigación preliminar o el enjuiciamiento del tribunal. La existencia de estas condiciones demuestra la pérdida de la peligrosidad social, tanto del delito como de la persona que lo cometió, lo cual sirve de base para la exención de la responsabilidad penal y de la pena”. Véase Zdravomířlov et al. (1970), pp. 373.

²¹⁴ Se rechaza hablar de *prescripción del delito*, “pues, éste, como hecho histórico subsiste siempre como tal, sin que pueda ser borrado por ninguna expresión de la ley. Como dice Maggiore, “ninguna prescripción podrá borrar y extinguir la muerte de César, que siempre será un asesinato”. Y tampoco se extingue como ente jurídico, puesto que de ser así el delito extinguido debería considerarse como si nunca hubiere existido, siendo que, en cambio, mantiene una cantidad de efectos, como el de seguir siendo la fuente de la indemnización del daño material y moral, el de seguir computándose, salvo excepciones, a los efectos de la reincidencia, el de seguir siendo una agravante del próximo delito, etc”. Véase Porto (1956), pp. 14.

²¹⁵ Carrara comparte esta denominación, pues considera que el término prescripción de la pena, entendida como extinción no es correcta pues “¿cómo podría extinguir la pena, si no ha nacido todavía?”, así este autor considera que el término *condena* es más exacto ya que comprende el derecho y la acción para ejecutarla, (1944) pp. 176. En Argentina Porto fundamenta la utilización del término *pena* por el de *condena* al decir que “nos parece preferible la primera, porque la pena extinguida deja siempre de cumplirse, mientras que la condena, en cambio, mantiene su hábito de vida ya que sigue computándose, como se ha dicho, para la reincidencia, la agravación de la pena de un futuro delito, la declaración de habitualidad, las consecuencias civiles del hecho ilícito”..., además refiere este autor que tal término fue recogido en el CP italiano derogado de 1889, CP colombiano de 1930, CP panameño de 1922, el proyecto Preliminar de CP de

también otro grupo que señala que lo que prescribe es *la ejecución de la sentencia condenatoria*, como es el caso del CP de la RSFSR: art. 49²¹⁶.

El código de derecho canónico anterior utilizaba la nomenclatura de prescripción²¹⁷ de la **acción criminal** (referida a lo que hoy conocemos como acción penal, véase el canon 1702, 1703 y 1704) y prescripción de la **acción penal** (véase el canon 2240 en el que se aclara que se refiere a «la acción para ejecutar la pena ya fulminada»).

El CP (Aus.) utiliza *la prescripción de la punibilidad* para las acciones punibles sancionadas (§ 57).

2. NATURALEZA JURÍDICA.

Uno de los puntos más discutibles es el referido a la naturaleza jurídica de la prescripción, e incluso en muchos casos esta discusión tiene repercusiones nacionales, así en Alemania hoy se considera que la naturaleza de la prescripción es eminentemente procesal, en cambio en España o Argentina es eminentemente material, en otros se sigue un eclecticismo (Colombia). En lo que sigue se desarrolla las ideas de los más eximios defensores de cada una de estas teorías, para al final expresar mi opinión.

2.1. TEORÍA MATERIAL.

Los defensores de la teoría material han señalado que “la prescripción del delito como la prescripción de la pena aparecen en el Derecho penal español como instituciones del Derecho sustantivo, en cuanto que, como se ha dicho, suponen una renuncia por parte del Estado al derecho de castigar basada en razones de política criminal aunadas por el transcurrir del tiempo, que incide en que aquél considere extinguida la responsabilidad criminal y, por consiguiente el delito y la pena”²¹⁸.

Por su parte, BORJA MAPELLI comentando el código penal español derogado, en su edición del 2011, mantiene el comentario que señaló anteriormente al expresar que se trata de un instituto penal “no sólo porque se regula en el Código Penal y no en las leyes procesales y porque en el art. 114 [artículo derogado] la vincula a la comisión del delito, aunque no haya habido actuaciones procesales, sino porque es inescindible la pena de la conducta criminal. Una norma que condiciona la eficacia de aquella necesariamente es una norma sustantiva (...). Su naturaleza penal le compromete con las mismas garantías de

Ferri de 1921, y el Proyecto Preliminar de CP del Dr. Peco de 1941; (1956), pp. 15). Para Bettiol no prescribe la **condena**, pues “no es ésta la que desaparece, ya que las penas accesorias y los efectos penales de la condena continúan subsistiendo; es la pena principal la que no puede ejecutarse.” (1965), pp. 742.

²¹⁶ Según este artículo “la sentencia condenatoria no se ejecuta: a) si ya ha transcurrido el término de prescripción previsto por la ley; b) si el culpable no ha cometido un nuevo delito por el cual el tribunal impone una pena de privación de libertad no inferior a un año, o de confinamiento o de destierro por un término no inferior a tres años; c) si el culpable no ha eludido el cumplimiento de la pena”. Véase Zdravomířlov (1970), pp. 375.

²¹⁷ Aunque es necesario precisar que el texto de la traducción española del canon 1702 utiliza el término **caduca**, sin embargo en los retantes cánones y comentarios se hable de prescripción (pp. 645).

²¹⁸ Morillas (1991), pp. 200. Véase más recientemente los comentarios hechos por Gumersindo Guinarte Cabada en la obra colectiva de VIVES et al. (1996), pp. 678.

legalidad y (sic) irretroactividad que se aplica a cualquier otra norma de carácter sustantivo”²¹⁹.

Esta teoría referida a la acción penal considera “a la prescripción como una causal de exclusión de la ejecución penal o del ilícito, al menos como “causal de levantamiento del ilícito”, ordenándola por consecuencia dentro del derecho material” (en Alemania siguen esta teoría ALLFELD, BELING, V. LISZT/SCHMIDT, LOENING, LORENZ, BLOY, HILDE KAUFMANN, V. STACKELBERG, WALDER)²²⁰.

A diferencia de la prescripción de la persecución penal, la **prescripción de la ejecución** “sólo puede justificarse mediante la fundamentación jurídico-material, en el sentido de que la ejecución pierde su razón de ser cuando ya hace tiempo que se perdió el recuerdo del delito y de la sentencia, e incluso el propio reo se ha transformado en otra persona. Naturalmente, la idea de la desaparición de las pruebas no desempeña aquí papel alguno, de manera que respecto de la prescripción de la ejecución resulta imposible cualquier teoría jurídico-procesal. No obstante, la prescripción de la pena es tratada como un obstáculo procesal, dado que el delito ha sido ya castigado en firme y la cuestión sólo se contrae ahora a la ejecución de la pena o medida”²²¹.

En Argentina ZAFFARONI considera “el fundamento común a toda prescripción es la irracionalidad concreta de la pena sea la impuesta (prescripción de la pena) o la conminada (prescripción de la acción), no por que antes fuera racional, sino porque el transcurso del tiempo pone de manifiesto una mayor crisis de racionalidad y además lo hace en acto (ejercicio material del poder punitivo)”²²², sin embargo a la hora de referirse a la prescripción de la acción penal, sostiene el profesor de la UBA “La prescripción de la acción se trata de un instituto de esencia procesal, comparte sus fundamentos con la prescripción de la pena, aunque agregando a éstos los específicamente procedimentales, entre los que corresponde relevar fundamentalmente el derecho a un juzgamiento en tiempo razonable”²²³.

En el Perú ha asumido esta posición VÍCTOR H. ROSSEL ALVARADO (Véase la tesis **La prescripción de la acción penal en el Perú**, pp. 84 conclusión N° 5°), sin embargo, este autor considera también algunos criterios de naturaleza procesal (pp. 86 conclusión N° 16°). Esta postura era seguida por BRAMONT ARIAS-TORRES²²⁴, quien ahora postula una postura mixta.

Se critica a esta teoría (crítica que también se extiende a la teoría mixta) pues, “se opone que un hecho punible no pasa a ser tal por el hecho del inicio de una persecución concreta, sino por encontrarse conminado con pena de manera fundamental y general. Empero, un delito no pierde esta característica por el solo hecho del transcurso del tiempo, del mismo

²¹⁹ Mapelli (2011), pp. 436.

²²⁰ Jescheck (1993), pp. 983, y en Alemania esto autores siguen esta postura, al respecto véase la nota a pie N° 6.

²²¹ Jescheck (1993), pp. 826. Sin embargo, en la quinta edición se asume la naturaleza mixta, por medio de la cual se justifica la naturaleza (2002), pp. 983, empero las demás ideas se siguen conservando (2002), pp. 989.

²²² Zaffaroni (2000), pp. 844.

²²³ Zaffaroni (2000), pp. 859.

²²⁴ Bramont, L.A. y Bramont-Arias, L. A. (1995), pp. 92.

modo que un acto de gracia a su respecto tampoco lo despoja de su ilicitud. Por ello es correcta la concepción de la praxis, según la cual la prescripción de la persecución penal conduce al archivo del procedimiento, en tanto ante la prescripción de la ejecución penal deduce la prohibición de su ejecución”²²⁵.

En Argentina, DANIEL R. PASTOR sostiene en torno a la prescripción de la persecución penal: “Su fundamento no es otro que la aplicación de uno de los tantos criterios de oportunidad o arbitrariedad posibles en el marco de decisión de la administración de la economía del poder penal del Estado. En tal sentido, su naturaleza jurídica no puede ser otra que material, obviamente”²²⁶.

Este autor empero no ignora los roles accesorios de carácter procesal al afirmar que “por un lado, en cierto universo de casos, es el instrumento procesal realizador del derecho fundamental de toda persona perseguida penalmente a que su proceso se defina dentro de un plazo razonable. Por el otro, resulta ser un “estímulo” para la actividad estatal oportuna y efectiva de los órganos encargados de la persecución pública, amenazados por la imposibilidad de realizar el derecho material, más allá de este límite temporal”²²⁷.

Incluso ha habido algunos autores que respecto de las faltas también han precisado la naturaleza jurídica del instituto de la prescripción, es el caso de FRANCISCO IZQUIERDO, quien propone la naturaleza material, la misma que la justifica indicando que “debe operar de manera *automática*, por su propia naturaleza, por ser de orden público, por razones de política criminal, y no puede estar sometida a los avatares del funcionamiento de la Administración de Justicia, o de determinados tribunales integrantes de dicha administración”.²²⁸

2.2. TEORÍA PROCESAL²²⁹.

Fue MAURACH quien sostuvo que la prescripción pertenece al derecho procesal según su sustancia, por ende no se les aplica las reglas de prohibición de la retroactividad. Con ella se trata de “condiciones formales” o “presupuestos procesales”²³⁰.

MAURACH deriva la siguiente consecuencia al decir que “la concepción procesal dominante, es que una posterior extensión de una prescripción aún no incluida es incluso posible mediante una ley federal ordinaria, sin que ello suponga una infracción al artículo 103, numeral 2º, GG; este principio constitucional solo prohíbe las modificaciones ulteriores del derecho penal material en perjuicio del autor (B Verf GE 25, 269)”²³¹.

²²⁵ Maurach, Heinz y Zipf (1995), pp. 969.

²²⁶ Pastor (1993), pp. 51 y 52.

²²⁷ Pastor (1993), pp. 52.

²²⁸ Izquierdo, F. J. (1997), “La prescripción de las faltas: dos interpretaciones encontradas”, pp.1680.

²²⁹ El mejor exponente legislativo de esta teoría lo encontramos en el proyecto de Código de Procedimiento Penal ecuatoriano del Dr. Walter Guerrero Vivanco, presidente 1992 en Quito-Ecuador, artículos 62 al 67, en donde se plasma la regulación de la extinción de la acción penal por prescripción.

²³⁰ Maurach, Heinz y Zipf (1995), pp. 951 y 952 y además véase Maurach y Zipf (1994), pp. 197 y 198. Aunque más adelante el autor los cataloga como “impedimentos procesales” al igual que el indulto, (1995), pp. 969.

²³¹ Maurach, Heinz y Zipf (1995), pp. 969.

Por lo tanto, para esta postura, se afirma a manera de conclusión que “La prescripción, cuya producción debe ser calificada de oficio por las autoridades de persecución penal en cualquier estado del procedimiento (BGH 8, 270, y 13, 128), constituye un impedimento obligatorio para la condena y la ejecución. Luego del curso de la prescripción tampoco es posible imponer medidas [§ 11, in 1º n: 8; 78, in. 1, y 79, in. 1º; (...)]”²³².

Se señala algunos casos de prescripción, así dice “Es posible considerar la existencia de hechos prescritos cuando se trate del establecimiento de la comisión de delitos de industria o habituales. Asimismo también es posible considerar hechos punibles prescritos en el marco de la medición general de la ejecución penal”²³³.

Un aspecto interesante planteado por el autor es el del *in dubio pro reo* cuando afirma “si agotadas los medios de prueba no es posible esclarecer cuándo fue cometido el hecho (...) la duda acerca de la prescripción debe favorecer al acusado (...)”²³⁴.

En Alemania siguen esta postura BINDING, MEZGER (sólo respecto de la prescripción de la ejecución de la pena, pp. 365-366 de su Tratado), BLEI, BOCKELMANN/VOLK, KOHLRAUSCH/LANGE, LK JÄHNKE, MAURACH/GÖSSEL/ZIPF, ROXIN, RÜPING, SCHÖNKE/SCHRÖDER/STREE²³⁵.

Otro partícipe de esta teoría es CUELLO CALÓN para quien “con el transcurso del tiempo se extingue o se debilitan las pruebas del hecho punible. A la buena administración de justicia interesa que las pruebas en los juicios criminales sean frescas y fehacientes pues las que, a causa del tiempo transcurrido desde la comisión de la (sic), han perdido su vigor probatorio pueden originar sensibles errores judiciales”²³⁶. En torno a la prescripción de la pena se afirma “que transcurrido un largo período desde la perpetración del hecho delictivo el recuerdo de éste se borra, y los sentimientos colectivos originados por el delito, la intranquilidad y la alarma, el deseo de dar satisfacción al ofendido, el afán de que el criminal pague su deuda, se atenúan y llegan a extinguirse por completo, y la sociedad sólo debe castigar cuando perduran el malestar y la alarma causados por el hecho criminal”²³⁷.

CESARE BECCARIA, considera a la prescripción como un tema procesal, y si bien resalta la posibilidad de la mejora del reo cuando prescribe una acción penal relaciona esto a su vez con el período de prueba y de investigación. Así afirma: “los delitos menores y oscuros deben quitar con la prescripción la incertidumbre acerca de la suerte de un ciudadano, porque la oscuridad en que hayan estado envueltos durante largo tiempo los delitos elimina el atractivo de la impunidad, mientras que permanece en el reo la

²³² Maurach, Heinz y Zipf (1995), pp. 970.

²³³ Maurach, Heinz y Zipf (1995), pp. 970.

²³⁴ Maurach, Heinz y Zipf (1995), pp. 970.

²³⁵ Jescheck (1993), pp. 983, señala que esta postura se sigue en la jurisprudencia alemana.

²³⁶ Cuello (1948), pp. 642-643. En la edición decimotercera de esta obra se mantiene esta justificación, véase (1981), pp. 789-790. Sic. (En esta edición se reemplaza el término «de la» por «del hecho»).

²³⁷ Cuello (1948), pp. 643. En la edición decimotercera de esta obra se mantiene esta definición, véase (1981), pp. 790, aquí el autor reemplaza el vocablo «alarma» por el de «inquietud». Además, este autor consigna otros argumentos para esta prescripción al pie de página (véase los pie de página nº 4-5, aunque en la edición más reciente sean el 1-2): «el transcurso del tiempo sin haber cometido un nuevo delito constituye una prueba de la corrección del delincuente, por lo cual es ya innecesaria la sanción penal; asimismo se ha dicho que el reo, al sustraerse a la acción de la justicia, lleva una vida azarosa, de sufrimientos análogos a los de la pena».

posibilidad de mejorar”²³⁸. Más adelante el autor se referirá a la posibilidad de que la prescripción opera tanto para los delitos considerados por él como atroces como para los delitos menores; lo que varía es que en un caso el tiempo de prescripción será mayor.

La postura procesal ha resaltado que la prescripción de las infracciones penales, sean estas delitos o faltas, han sido reguladas de manera desigual, al parecer seguidores de la teoría de la independencia y no de la teoría diferenciada que es la que se sostiene en esta tesis, así en el derecho comparado español, AYO FERNÁNDEZ ha precisado lo siguiente: “no creo que nos quepa duda alguna de que, salvo en relación con el sumario ordinario, donde se contiene una minuciosa regulación de los artículos de previo pronunciamiento entre los que se incluye la prescripción, en los demás procedimientos penales básicos esta carencia de regulación origina múltiples problemas interpretativos, sobretudo en relación con los recursos a interponer contra las resoluciones judiciales, por lo que sería deseable que, a la espera de la futura y seguramente lejana reforma procesal se vayan unificando los criterios de los profesionales del derecho, evitándose de esta manera que se produzca situaciones de desigualdad en relación a la posibilidades de recurrir dichas resoluciones según quien sea el órgano decisor en la interpretación que este lleve a cabo ante el vacío legal”.²³⁹

En el Perú se han mostrado partidarios de esta postura PEÑA CABRERA FREYRE y PEÑA FREYRE, al señalar a propósito del caso del ex presidente Alan García Pérez, que la prescripción es una institución de derecho procesal, por lo que “en principio, no rige la prohibición de retroactividad. La prohibición de retroactividad sólo rige respecto al derecho material (artículo 6° del Código Penal). Las leyes procesales penales, siguen el principio *tempus regit actum* –los actos procesales se rigen por las normas vigentes en el momento que deben producirse tales actos. Lo que hace suponer que si se modifica alguna norma procesal luego de la comisión de un delito que ha de enjuiciarse, podrá aplicarse la nueva norma. Consiguientemente, al ser la prescripción una circunstancia completamente ajena al hecho no estaría sujeta a la prohibición de retroactividad.”²⁴⁰

2.3. TEORÍA MIXTA.

De acuerdo con esta teoría ecléctica se combinan argumentos de la teoría material con la teoría procesal y habrá matices, pues en algunos casos primará el componente material y en otros el componente procesal.

CARRARA precisa que la justificación de la prescripción de la **acción** radica en que mientras no haya sentencia judicial la culpabilidad del imputado será incierta (pp. 175). En torno a los criterios que la justifican, este autor sostiene que “conviene extinguir una acción que se ha tenido por tanto tiempo inactiva, y que se pretende restablecer cuando el tiempo ha hecho más difícil el conocimiento de la verdad”²⁴¹.

²³⁸ Beccaria (1984), pp. 65 y 66.

²³⁹ Ayo, M. (1995) El régimen procesal de la prescripción del delito o falta. Especial referencia a los recursos, pp.932

²⁴⁰ Peña, A. R. y Peña, R. A. (febrero, 2001), La prescripción y sus incidencias jurídico-penales, pp.29.

²⁴¹ Carrara (1944), pp. 175.

Por su parte VELÁSQUEZ señala “de lege lata parece viable suscribir las tesis mixtas en torno a la naturaleza del fenómeno -a lo que contribuye su regulación conjunta en los estatutos sustantivo y procesal-, de donde se deriva un fundamento plural, aunque con hincapié en el transcurso del tiempo”²⁴².

Uno de los más excelsos defensores de esta teoría es JESCHECK para quien refiriéndose a la prescripción de la persecución penal “Debe seguirse, no obstante, la teoría *mixta* de la prescripción, que considera a la misma como institución jurídica material y procesal a la vez (...). Apoya esta doctrina, en primer término, la idea de que la necesidad de pena disminuya paulatinamente con el paso del tiempo, hasta desaparecer por completo, y ello tanto desde la perspectiva de la retribución y de la prevención general como desde la óptica de la finalidad resocializadora de la pena. Esa experiencia explica igualmente por qué algunos derechos extranjeros prevén, ya antes de alcanzarse la prescripción total, una atenuación de la conminación penal según el tiempo transcurrido (cfr., por ejemplo, el § 57 I 2 del StGB austríaco). El pensamiento de la *gracia* y la *equidad*, así como la necesidad de la *autolimitación del Estado* frente al factor tiempo y el cambio que éste opera en la personalidad del delincuente, juegan también un papel. Con todo, la prescripción de la persecución penal no descansa sólo en la desaparición de la necesidad de la pena, sino asimismo en la experiencia procesal de que con el creciente distanciamiento temporal entre el proceso penal y la comisión del hecho aumentan progresivamente las dificultades probatorias, de modo que el peligro de sentencias erróneas resulta cada vez mayor. Pese a ello, tal consideración no es decisiva por sí sola, según se infiere de la imprescriptibilidad del genocidio y del asesinato (...), y de la graduación de los plazos según la gravedad de la clase de delito (...). Estas disposiciones únicamente pueden entenderse desde el punto de vista jurídico-material, y no jurídico-procesal. Conforme a la teoría mixta de la prescripción, la referida a la persecución constituye una causa de anulación de la pena, que, sin embargo, se halla configurada jurídico-procesalmente como un obstáculo procesal. El texto del § 78 I 1 se corresponde con el del §127 I E 1,996, que partió de la teoría mixta”²⁴³.

BUSTOS, considerando que el derecho penal y el derecho procesal penal tienen como objeto único la cuestión criminal, sostiene que “En definitiva, lo que aparece claro es que el fundamento de una y otra prescripción es el principio de necesidad de la pena, ya sea de la persecución penal o de la pena, sea que mediatamente se busque una justificación en cualquiera de las teorías de la pena. Lo fundamental es que la persecución o la aplicación de la pena resulten contradictorias con el sentido y función del derecho penal, el que ya no servirá para la protección de bienes jurídicos y que, por el contrario no se cumpliría el fin de liberación y autodeterminación del sujeto”²⁴⁴.

²⁴² Velásquez (2009), pp. 1189 y 1190.

²⁴³ Jescheck (1993), pp. 822. En Alemania siguen esta posición BAR; GESETZSCHULD; BAUMANN; BÖCKENFÖRDE; DREHER; HAFT; LANCKNER; FRANK; GERLAND; HIPPEL; H. MAYER; MOSER; PETERS; LÖWE/ROSENBERG; SCHÄFER; MEZGER, sólo respecto a la persecución penal, (1949), pp. 365; WELZEL (1993), p. 310; S K RUDOLPHI, entre otros). En la quinta edición se señala que “esta figura encuentra su fundamentación material en la desaparición de la necesidad de pena a pesar de la permanencia del merecimiento de pena del hecho; solo así se explica la graduación de los plazos de prescripción (...) en función de la gravedad del tipo realizado, así como la imprescriptibilidad del asesinato y del genocidio” Jescheck (2002), pp. 983.

²⁴⁴ Bustos (1989), pp. 413; y del mismo autor: (Set.-Oct.-Nov.-Dic., 1987). La extinción de la responsabilidad criminal, pp. 373.

En el Perú han asumido esta posición ecléctica con preponderancia del derecho sustantivo JORGE HOWIE SORET:

“La prescripción es institución de derecho sustantivo, material de esencia, de fondo, vale decir, de Derecho Penal, predominante. Debemos, sin embargo, considerar que también intervienen elementos de derecho adjetivo, formal de Derecho Procesal Penal. Esta mixtura de fondo y forma nos lleva a inclinarnos, respecto de la naturaleza jurídica de la institución por una posición 'ecléctica' ” (pp. 166), y fundamenta el lado procesal de su posición al afirmar que “consideramos el impedimento procesal como consecuencia de la extinción de la acción” (Véase Tesis: **De la prescripción en el derecho penal**, pp. 49). Más recientemente siguen esta posición el maestro LUIS E. ROY FREYRE (aunque las denomina tesis “*afirmativa*” con el agregado de “*múltiple*”, pp. 50 y 53), JAVIER VILLA STEIN (refiriéndose en primer lugar la postura procesal de Maurach, luego sigue los postulados propuestos por ROY FREYRE, pp. 528 y 529), sin embargo ya antes RAÚL PEÑA CABRERA se había manifestado por esta postura (pp. 568 de su **P.G.**), también sigue a esta postura L.A. BRAMONT-ARIAS TORRES²⁴⁵, RAÚL PARIONA²⁴⁶.

Algunos amparados en la forma de regulación han establecido que la naturaleza se deduce de la ubicación de la regulación. Así si está en el CP es de derecho penal, y si está en el código procesal es procesal, empero si está en ambos, es mixta.

Considerando la legislación y los códigos citados así como los proyectos y anteproyectos, la tendencia es ubicar a la prescripción en los códigos penales. La excepción lo constituyó el viejo CDC que ubicaba a la prescripción de la acción criminal (ahora comúnmente llamada de la acción penal) en su Libro Cuarto, “De los Procesos”, y en su Libro Quinto, titulado “De los Delitos y de las Penas”, Segunda Parte referida a De las Penas, Sección I De las Penas en General, Título VII De la Remisión de las Penas, y el CICr (Fr.).

Empero, recientemente esta tendencia ha sido contrariada cuando la Corte Suprema de Justicia del Ecuador vía el Proyecto de Código de Procedimiento Penal de 1992 plantea la regulación de la prescripción en este código (arts. 62 numerales 3, 63, 64, 65, 66 y 67).

Ante esto cabe la pregunta ¿resulta casual la ubicación de la prescripción en el código penal o procesal penal? o ¿es que dentro de esta ubicación se encuentra la “tradicional” toma de posición respecto a su naturaleza penal o procesal?

Una primera justificación de esta postura, se encuentra justamente en los comentarios hechos al art. 63 del proyecto de Código Procesal Ecuatoriano al señalarse que «se ha hecho ingresar el régimen de la prescripción al Código Procesal porque, si bien la doctrina

²⁴⁵ Mas recientemente Luis Alberto Bramont-Arias Torres ha señalado que “el fundamento de la prescripción es también muy discutido. Nos parece que se halla, en parte, vinculado a la falta de necesidad de la pena tras el transcurso de cierto tiempo –fundamento material–, y en parte, a las dificultades de prueba que determina el transcurso del tiempo –fundamento procesal–, negando el principio de inmediatez y celeridad de la justicia penal”, (2001, pp. 23).

²⁴⁶ Pariona (2010)

no se ha puesto de acuerdo sobre la naturaleza de este instituto (incluso se habla de una naturaleza mixta), lo cierto es que influye de tal manera en el sistema procesal que es preferible, por razones prácticas incluirlo aquí»²⁴⁷ (Como fuente de este art. se remite al Proyecto de Código Procesal Penal de Guatemala de 1990 art. 19).

Por su parte JOSÉ ANTONIO CHOCLÁN MONTALVO²⁴⁸ precisa la doble naturaleza de la prescripción de la acción penal señalando que “desde un punto de vista *sustantiva* [sic], se contempla la prescripción como causa de anulación de la pena, ya que la necesidad de pena se extingue con el paso del tiempo (teoría jurídico-material de la prescripción); otros autores le atribuyen únicamente un fundamento de orden procesal. La doctrina más moderna le atribuye una naturaleza compleja o mixta, aunque, como hemos dicho no hay que confundir la doble naturaleza de la prescripción con la circunstancia de que sean varias las razones de su eficacia jurídica”.

Sin embargo este autor al tratar la prescripción de la pena y de las medidas de seguridad, señala que “sólo es susceptible de recibir un fundamento jurídico-material, consistente en una renuncia a la ejecución cuando el tiempo transcurrido desde la pena impuesta hace borrar la memoria del delito cometido, con lo que su imposición no incide en el sentimiento de vigencia del ordenamiento jurídico en la comunidad. La duración del plazo de prescripción depende de la entidad de la pena impuesta.”

A pesar de estas opiniones, pienso que la ubicación no es criterio capaz de determinar la naturaleza de estas figuras por lo que deviene en irrelevante, incluso en algunas legislaciones se le *ubica mutuamente en el código penal y en el código procesal* como una excepción (como sería en el caso peruano; en derecho comparado se tiene al CP (Arg.) arts. 62 y ss. y el CPP de la Nación art. 339 numeral 2; o como un *presupuesto procesal*: relativo a la causa, (los arts. 78 y ss. del StGB y el 154e apar. 3 del StPO) o *material* (art. 666.3° de la LECRIM), entre otros. De acuerdo con esta idea se desprende que la prescripción es de naturaleza mixta (más adelante explicaremos nuestra perspectiva y el porqué de la irrelevancia).

2.4. OPINIÓN

Cualquiera de las tres teorías expuestas con anterioridad tiene presupuestos falaces:

1° Decir que prescribe el delito o la falta, implica decir que éste ya existe. Esto no es cierto, pues, para empezar, en realidad lo que hay es un injusto penal. Pero además ¿qué sucede cuando se abre un proceso en el cual el imputado reclama que existe algún supuesto de ausencia de acción, o que su conducta es atípica, o que su conducta se justifica, o que existe algún supuesto de inculpabilidad, y a pesar de todo transcurre el plazo de prescripción?

2° No se debe confundir el contenido de una institución con el instrumento a través del cual se hace valer (pues ello va a depender del sistema procesal que se tenga; así los

²⁴⁷ Proyecto de Código de Procedimiento penal de Ecuador, pp. 30, nota a pie n° 63.

²⁴⁸ Choclán (mayo, 2001) *Prescripción de la acción penal y criminalidad organizada, ¿un modelo de excepción?*, pp.4.

alemanes denominarán a este instrumento “impedimento procesal”, los argentinos “excepciones” -al igual que nosotros-, los españoles²⁴⁹ “cuestión previa”, “excepción” etc.), el cual siempre presupone que la prescripción ya se consiguió. Así pues la teoría procesal admite que existe un transcurso de tiempo, pero no le da relevancia jurídico-procesal a ésta sino en el momento en que se presenta o que de oficio lo observa el juez al iniciarse o durante el proceso penal.

3º A la teoría mixta se le objeta ser demasiado difusa, crítica que dependerá de dar mayor énfasis al elemento material o procesal.

4º La teoría procesal fundamenta sus argumentos en torno a la prescripción de la persecución penal principalmente en la imposibilidad de conseguir los medios de prueba por el transcurso del tiempo, sin embargo esta imposibilidad probatoria puede deberse a distintos motivos y no únicamente por el transcurso del tiempo; entonces su justificación es contingente.

Desde una concepción epistémica toda ciencia tiene principios únicos y el derecho no es ajeno a ella, sin embargo por la evolución que ha tenido este campo del conocimiento ha sido necesario hacer una división a fin de poder realizar sus estudios con más profundidad. Así en un inicio fue el derecho civil, luego el derecho penal, y ahora otras ramas como el derecho genético, etc.

El derecho penal comenzó a conformar sus propias instituciones y su naturaleza obligó a matizar algunos principios (legalidad, irretroactividad, igualdad) y crear un grupo nuevo de principios (favorabilidad, retroactividad *in bonam partem*, prohibición de toda responsabilidad objetiva, etc.). A partir de ese momento toda configuración de una conducta relevante penalmente tendrá en consideración tales principios. Aunque no olvidemos que ahora se propugna la realización de estudios desde un enfoque integral.

Tan importantes son los principios del derecho, que extienden su aplicación a fin de poder resolver controversias particulares, no solo referido a aspectos sustantivos, sino también a las reglas de procedimiento; así pues esta unidad epistémica en ningún momento debe ser soslayada por las llamadas autonomías de las ramas o campos de derecho. De allí que considero un error la discusión en torno a la famosa naturaleza jurídica a partir de una consideración antojadiza y sin sustento epistémico. El derecho penal debe enmarcarse dentro de esta línea de consistencia interna o lógica y no ser ajeno o autárquico.

²⁴⁹ El autor que ha señalado de manera específica las diversas formas en que en el proceso penal cualquiera que fuere el tipo de proceso es Ayo Fernández, incluso precisa las formas tales como la apreciación de oficio, la cuestión previa a instancia de parte a nivel de fase intermedia vía auto desestimatorio, sobreseimiento, aplicables a los delitos y de manera extensiva a las faltas en el que a su vez también se aprecia específicamente vía auto estimatorio de la prescripción antes de la celebración del juicio y a nivel de juicio oral evaluar la prescripción dentro de los fundamentos jurídicos de la sentencia, aunque resalta este mismo autor que “el Juez puede en cualquier momento apreciar de oficio la prescripción, ya sea por auto o bien concluida la vista oral por sentencia”, (1995, pp. 928 y ss.). El régimen procesal de la prescripción del delito o falta. Especial referencia a los recursos.

3. TEORÍAS QUE FUNDAMENTAN O PROSCRIBEN LA PRESCRIPCIÓN²⁵⁰.

Todo Estado tiene el deber de mantener un orden social y para esto recurre a una serie de instrumentos de los cuales destaca el sistema penal. Sin embargo, el *ius puniendi* (como deber o potestad) no es ilimitado sino más bien **limitado**; de lo contrario los controladores de dicho poder harían un uso totalmente arbitrario, lo cual no es compatible con los principios de un Estado democrático o que aspira a serlo. Una de estas instituciones, que incluso llegaron a regular los Estados, otrora más totalitarios, ha sido la prescripción.

Así queda claro que en la prescripción el componente material (o real si se quiere) es el transcurso de un cierto tiempo. Empero, ese transcurso de un determinado tiempo o devenir se vuelve relevante cuando los estamentos (función legislativa o ejecutiva) encargados de diseñar la política criminal del Estado deciden autolimitar su poder, vía el establecimiento de ciertos plazos dentro de los cuales todo Estado realiza la persecución penal a través del ejercicio de la pretensión penal (lo que comúnmente se conoce como prescripción del delito o de la acción penal).

En torno a lo que se conoce como prescripción de la pena, el elemento temporal sigue siendo el mismo y la decisión político-criminal recaerá sobre el deber (la potestad) de ejecutar, vía su cumplimiento, todas las penas impuestas luego de un debido proceso; empero este cumplimiento no debe permanecer latente siempre, sino sólo dentro de un determinado lapso.

Un elemento adicional es que todo beneficio o derecho que en el ámbito penal se adquiere, tiene por fin consolidar una prevención para el futuro, es decir ir evitando paulatinamente, con aspiración a eliminar en forma definitiva, toda futura comisión de delitos, para así poder tener el Estado un control social eficaz. Esto no es ajeno a la prescripción, pues de acuerdo a la gravedad del delito cometido, luego de ir computando un plazo de prescripción, en el futuro se verá si el derecho de prescripción se adquiere con sus mismos plazos (p. ej.: si luego de haber estado incumpliendo la pena que se me impuso, cometo un delito de homicidio culposo, creo que el plazo no deberá de ser incrementado), o si se prolonga su plazo de adquisición (estaba incumpliendo una pena y realizo un delito de robo agravado, aquí el plazo debería de incrementarse).

Por consiguiente, el fundamento de la prescripción es que ninguna persecución puede ser indefinida en el tiempo, sin embargo cuando se altera la finalidad de prevención, estos plazos **pueden** prolongarse si el control social se ve seriamente afectado.

Merece un comentario aparte el que la mayoría de teorías (sobre todo las de naturaleza procesal y en algunos casos las mixtas) hayan tenido como punto de partida una proposición que presume que todo aquél al cual se le apertura un proceso es ya autor de un delito.

²⁵⁰ Sugerimos considerar las diez preposiciones relativas a la prescripción de la persecución penal que elabora Binder, A. (1990) **Prescripción de la acción penal: la secuela de juicio**, pp. 275 y ss.

Sostengo que dicho punto de partida es equívoco, pues ignora que todo proceso tiene como punto de partida la realización, sea por comisión o por omisión, de un injusto mas no de un delito, y de lo que se trata en un proceso es justamente establecer la culpabilidad o inocencia de esta persona a la que se le imputa la realización de un injusto penal para luego imponerle o no, una pena o medida de seguridad (o alguna otra sanción p. ej. en el fuero privativo, o en el derecho de menores).

A partir de esta consideración, sostengo que la prescripción ordinaria de la persecución penal lo que hace, en un primer momento, es impedir que tal comprobación se inicie o realice. Un caso extremo de prescripción ordinaria ocurre cuando se realizó un hecho considerado como un injusto penal, pero que en ningún momento se inició proceso penal alguno, lo cual condujo al archivo del proceso por prescripción ordinaria.

O en un segundo momento, en el cual se inicia el proceso sin que termine, con lo cual tampoco se puede comprobar dicho objetivo (esto puede suceder por prescripción ordinaria o extraordinaria de la acción penal). Cabe aclarar que ésta es una de las formas de concluir un proceso penal, pero no es la única²⁵¹.

En el derecho comparado se ha propuesto expresamente regular la prescripción de la acción penal de dos formas, una referida a la prescripción en el proceso o intraproceso, y otra referida a la prescripción fuera del proceso, así se tiene el art. 56 primer y segundo párrafo, numeral 1 del proyecto del código orgánico integral penal del Ecuador.

Resulta distinto el sustento, respecto del momento, de la prescripción de la ejecución de la pena, pues aquí ya se cuenta con una sentencia condenatoria dictada (la reserva del fallo condenatorio). Entonces, lo que se busca es que se aplique la sanción penal (pena o medida de seguridad) o que se impida la continuación del cumplimiento de dicha sanción.

El elemento común que todos aceptan sin discusión es el temporal, empero en donde surgen los problemas es en fundamentar por qué ese tiempo es relevante penalmente (en sentido amplio) y de dónde proviene ese fundamento (lo que tratamos en el anterior punto acerca de la naturaleza jurídica). Aquí nos referiremos a los fundamentos.

No se debe dejar de considerar que con la constante integración de los Estados en bloques regionales (por razones económicas, políticas, jurídicas, etc.), hoy en día resulta muy difícil que no se pueda efectuar una persecución penal contra cualquier persona (pues se cuenta con los procedimientos de cooperación internacional: asistencia judicial mutua en materia penal, extradición, expulsión y las actuaciones Interpol, ello evidencia que no existan casos de prescripción ordinaria de la persecución penal y de la ejecución de la pena)²⁵², ya sea a corto o mediano plazo, claro que aún existen Estados que no permiten la

²⁵¹ Recordemos que un proceso puede prescribir por lo absurdo de nuestro viejo C de PP incluso en los casos que tengan como supuestos conductas que no sean relevantes penalmente, o conductas atípicas, o justificadas por causales de justificación o toleradas por causales de inculpabilidad, entre otras si se tratara por motivos de derecho penal. Las causales de derecho procesal penal o de derecho premial son otro cúmulo de formas en que puede terminar un proceso penal, pero que son de diferente naturaleza a las nombradas primeramente.

²⁵² Ya García Maldonado refiriéndose a la prescripción penal en general afirmó que “puede asegurarse también, que en el estado actual de adelanto en que se encuentra la civilización, la prescripción criminal raras veces se verifica. En efecto, la buena organización de la policía que consigue casi siempre aprehender al culpable; el telégrafo que permite dar

extradición de connacionales, así es vigente el caso de Schütz Landázuri por no permitir la extradición por parte del Estado de Suiza, algunos podrían objetar esta afirmación si se refiere al procesado general Malca, quien está no habido hace mucho tiempo.

En el Perú, ahora que se ha cumplido veintiún años de la entrada en vigencia del código penal, y considerando la vasta experiencia por parte de los magistrados y de los abogados litigantes en materia penal, sobretudo en el subsistema anticorrupción, y en la Corte Suprema, se ha evidenciado ciertos vacíos en materia de prescripción, tales como los alcances de la prescripción extraordinaria, o su actuación ante supuestos de suspensión de la prescripción, entre otros casos, como se ha puesto en evidencia en la presente investigación.

Por ello, resulta necesario proponer alternativas de solución a fin de evitar que las disfuncionalidades del Sistema Penal y más específicamente del Poder Judicial, de lo contrario los casos de prescripción seguirán constituyendo la vía de escape por excelencia de aquellas personas que cometen delitos o faltas y que valiéndose de estas disfuncionalidades logran escapar del sistema penal.

Uno de los aportes que resalto es la voluntad de mejorar su proceder a través de algunas ejecutorias supremas vinculantes, resoluciones reiteradas, o por la vía de la doctrina jurisprudencial a la cual denominan Acuerdo Plenario.

En el caso de la prescripción extraordinaria, es necesario realizar los correctivos para frenar de un lado la pasividad del sistema penal y de otro el aprovechamiento de los procesados de estas puertas traseras, sin caer ni dejarse influenciar por el derecho penal del enemigo, proponiendo reglas de prescripción que en realidad consolidan un modelo de imprescriptibilidad vulnerándose derechos fundamentales tales como el del plazo razonable o cualquier otra postura de justificación de la prescripción, pues si se opta por un modelo decorativo de las reglas de prescripción, mejor hay que derogarla, por ello, bajo un criterio de ponderación de *ni mano dura, ni mano blanda, sino mano justa*, es necesario hacer los correctivos pertinentes al amparo de los aportes de la doctrina, el derecho comparado, la jurisprudencia nacional, la jurisprudencia extranjera, la jurisprudencia de los tribunales internacionales, los acuerdos plenarios y sobretudo la Constitución con las reglas y principios contenidos en ella. No se debe dejar de reconocer que en la actualidad, la aplicación de las reglas de prescripción penal y sobretudo de la prescripción extraordinaria tienen en la actualidad una alta frecuencia en su aplicación²⁵³.

avisos inmediatos que impidan su fuga; los tratados de extradición que colocan al criminal bajo la acción de la justicia; todo contribuye a asegurar la eficacia de las leyes penales. Hoy pues serían infundados los temores que en su tiempo abrigaba Bentham, acerca de la impunidad de los grandes crímenes", véase García J. (1889), Tesis, pp. 23.

²⁵³ El 19 de diciembre de 1996, al hacer la sustentación de mi tesis para optar el título de abogado, demostré que era la prescripción extraordinaria la que se daba con absoluta regularidad (conclusión 1 de la parte empírica en el aspecto descriptivo, pp. 199) y que la prescripción extraordinaria es "el recurso más facilista que utilizan los juzgados a fin de descongestionar la carga procesal" (1996), Tesis, pp. 199. Posteriormente el profesor Manuel Abanto ha señalado sobre las reglas de prescripción del código penal "mientras tanto, rigen los plazos de prescripción vigentes, así como las reglas para su cómputo; en mi opinión, extremadamente benignas y fomentadoras de la impunidad", (2006), LH, pp. 568.

En torno a la prescripción se han elaborado distintas teorías que de alguna u otra manera han querido fundamentar o proscribir la prescripción. No se debe olvidar lo señalado en la Parte Primera de esta investigación, específicamente en el capítulo tercero.

3.1. TEORÍA POSITIVISTA DEL TIEMPO FORMALIZADO.

La prescripción penal, en su doble aspecto, no representa otra cosa que el reconocimiento del “hecho jurídico” dado a un hecho natural, esto es, **al transcurso del tiempo**²⁵⁴. El efecto de debilitación y de olvido, ocasionado por el correr del tiempo, es un fenómeno tan evidente en el campo de la vida individual y social, que no podía dejar de imponerse también al ordenamiento jurídico penal. La circunstancia de que esta normalidad natural haya sido percibida más o menos exactamente no puede alterar la esencial razón justificante del instituto en examen.

La implacable voluntad de castigar, si puede concebirse como un hecho de psicología individual inferior, no es imaginable como hecho de psicología colectiva, respecto a acciones individuales, como los delitos, en los pueblos civilizados y cuando el tiempo ha alterado las condiciones en que normalmente es ejercitado el poder punitivo público.

Sentado esto, se comprende bien que la prescripción penal sea en todo caso una prescripción extintiva de la potestad del Estado en orden a la represión del hecho concreto; y precisamente, como ya se ha indicado, una renuncia legislativa y preventiva²⁵⁵ por parte del Estado mismo a la potestad represiva, condicionada al ocurrido transcurso continuativo de un cierto período de tiempo. Solamente por efecto de tal renuncia, y no por el simple transcurso del tiempo, el imputado o el condenado adquiere el derecho de no ser juzgado o sometido a pena. No se trata, por consiguiente, bajo ningún aspecto, de prescripción adquisitiva. Este concepto equivocado es conciliable solamente con el criterio que atribuye a la prescripción carácter punitivo de la negligencia o de la mala fe en el ejercicio de la función penal. “Pero, si una idea semejante podía justificarse en el sistema del proceso acusatorio romano, hoy ha perdido todo sentido, en cuanto la función penal crea no sólo potestad, sino además deberes correlativos, los cuales evidentemente no pueden extinguirse mediante incumplimiento”²⁵⁶.

Se puede agregar, de conformidad con MANZINI, que “la base de la prescripción penal la da, pues, una ley natural; la justificación del reconocimiento jurídico de esta normalidad es proporcionada por razones de técnica judicial y de política penal”²⁵⁷.

²⁵⁴ Manzini (1950), p. 145: “El criterio es la fuerza del tiempo (...) el tiempo no es creador de derechos, no es destructor de derechos; pero existe una fuerza en el mismo para modificar los hechos, a la cual se vinculan las relaciones del derecho”, discurso del relator Pessina a la Cámara de los Diputados, a propósito de las Discusiones sobre el Libro I del Cód. Penal de 6 de diciembre de 1877, [Roma, 1877, pp. 80 y ss].

²⁵⁵ Manzini, (1950), quién en la nota a pie n° 33 precisa “en esto está la diferencia entre estos criterios y el erróneo principio ya combatido también por la relación sobre el proyecto (Mancini) de 1876, arts. 98-100, que funda la prescripción penal sobre el presunto abandono o sobre la renuncia a la acción por parte de los órganos competentes para ejercitarla. Según G. Vassalli [1939], pág. 122, la potestad de castigar no es prescriptible, y la prescripción penal es una decadencia, del ejercicio de la potestad de castigar. El Estado, como órgano soberano, fuente de todo derecho, no puede decaer pero puede renunciar”, pp. 145.

²⁵⁶ Manzini (1950), pp. 146.

²⁵⁷ Manzini (1950), pp. 146 y 147. Las teorías político- penales justificadoras de la prescripción se pueden resumir en las siguientes: *Teoría de enmienda*: “Se considera que ya no es necesario castigar, después del transcurso del término

Agrega el maestro italiano que “las primeras entre estas razones son exclusivas de la prescripción extintiva del delito, y consisten en el hecho de que un juicio demasiado tardío no tiene ya probabilidad de conseguir el propio fin (la comprobación de la verdad) con ocasión de la alteración de los medios de prueba y de la relación entre los medios de acusación y de defensa, en cuanto las buenas normas de justicia “aconsejan no abrir procesos y celebrar juicios cuando suelen estar ya dispersas o agotadas las fuentes de las pruebas”²⁵⁸.

Finalmente, señala MANZINI que “las otras se refieren tanto a la prescripción extintiva del delito, como a la extintiva de la pena. Esto es, se ha considerado que el tiempo hace desaparecer la finalidad y la necesidad de la represión, ya que la necesidad de reintegrar el orden jurídico perturbado por el delito y de asegurar a la población acerca de la actuación del derecho, no puede reconocerse ya cuando, por el largo tiempo transcurrido, las cosas han tomado por sí mismas el propio equilibrio, y la memoria del delito se ha debilitado o ha desaparecido en absoluto de la conciencia pública”²⁵⁹. “Ahora bien, si, como hemos visto (vol. I, n. 43), la potestad de castigar se justifica exclusivamente con el criterio de necesidad, todo ejercicio de potestad represiva debe considerarse injustificado cuando no

prescriptivo, porque se presume que entre tanto el delincuente se ha redimido (presunción, como cualquiera ve, que carece de todo fundamento, si no se exigen otros elementos que el correr del tiempo)”; *Teoría de la expiación moral o indirecta*: “Se presume que el culpable, en el tiempo transcurrido, lacerado por los remordimientos, ha expiado suficientemente su culpa (también ésta es una presunción absolutamente arbitraria; y la pena, que no tiene finalidad meramente afflictiva, puede considerarse convenientemente compensada por la impunidad, aunque sea inquieta y dolorosa)”; *Teoría del olvido*: “La sociedad olvida los delitos, aun los más atroces, después de un cierto tiempo; por consiguiente, la reacción penal transcurrido este tiempo, no tendría ya objeto: «Quod Deus ipse dum permiserit crimen tamdiu manere occultum, veniam censeatur concessisse»”. *Teoría del interés disminuido*: “La prescripción tiene por presupuesto la inmanencia de un cierto interés en castigar, el cual va desapareciendo con el tiempo. Si ha transcurrido un tiempo mayor de aquel durante el cual se considera que subsiste dicho interés, la pena no tiene ya finalidad”. *Teoría de la prueba*: Es formulada principalmente por THOMASIIUS, De praescriptione bigamiae, §4: “Praescriptio criminalis non eum in finem est inventa, ut delicta, de quibus aliquis convictus, est, impunita maneant, sed potius, en propter summam factorum incertitudinem ex temporis diuturnitate provenientes innocentes indebita afficiantur poena aut beneficio defensionis priventur”. *Teoría de la extinción de los efectos antijurídicos*: “La potestad de castigar proviene, es verdad, de un delito, pero éste es considerado no ya como una entidad inaferrable de un remoto pasado, sino como un hecho productivo de inmanentes efectos antijurídicos (materiales o morales) que el derecho penal debe reprimir y eliminar. Ahora bien, estos efectos antijurídicos desaparecen aun si la reacción de la pena, por la sola acción suavizante del tiempo”; *Teoría psicológica*: “El transcurso del tiempo va produciendo una laguna que no se puede colmar, eliminando el nexo psicológico entre el hecho y el agente. Cuando esto se haya verificado, la pena pierde su valor y su finalidad. Un recuerdo desdibujado no es suficiente; el mismo debe estar presente en el reo y en la sociedad (véase LOURIE, Die Kriminalverjährung, Breslau, 1914, p. 60 y ss.)”. Otras teorías existen, como aquella, meramente tautológica, de la fuerza extintiva del tiempo; de la falta de finalidad de castigar después de transcurrido un determinado tiempo; de la adaptación, de la analogía civilística, etc.; además de las teorías eclécticas. “Para el jurista todo esto tiene escaso interés, porque importa muy poco conocer la razón política por la cual se adoptó un instituto jurídico, cuando éste actualmente forma parte de la ley. De todos modos, con excepción de las teorías manifestamente fantásticas o insuficientes, hay algo de verdad y de falsedad en todas las otras, como suele ocurrir en cuanto a toda teoría político-penal”.

²⁵⁸ Manzini (1950), pp. 147. “Relación ministerial sobre el proyecto de 1887, n. LXIX; véase, en el mismo sentido, las Relaciones VIGLIANI y MANCINI, sobre los proyectos de 1874 y de 1876”.

²⁵⁹ Manzini (1950), pp. 147. “Relación ministerial sobre el proyecto del Código Penal, I. pp. 206: “El rígido principio de actuación de la justicia, por el cual al delito debería seguir, en todo caso, la pena, no toleraría, idealmente, obstáculo o derogación alguna; tanto menos el que se concreta en el solo transcurso del tiempo. Sin embargo, yo no he considerado conveniente adherirme a una concepción tan rígida. Sería ir contra una ley inexorable de la naturaleza desconocer tal acción corrosiva del tiempo; o aun considerar la relación jurídico-penal entre aquellas, en verdad raras, que el ordenamiento jurídico sustrae a la influencia extintiva del tiempo. Dada la naturaleza estrictamente publicística de tal relación, el problema consiste en no excederse en la valoración de este elemento natural y en no extenderse en la admisión de esta causa de extinción”.

parezca necesario. Es por esto por lo que la voluntad soberana ha admitido las dos especies de prescripción”²⁶⁰.

3.2. TEORÍA DE LA NEGACIÓN.

Es ilustrativa la posición contraria a la existencia de la prescripción. Así CUELLO CALÓN refiriéndose a GARÓFALO afirma que éste “la considera como una institución protectora de los criminales, y la rechaza para los delincuentes incorregibles, aunque la admite para los menos corrompidos cuando hayan demostrado con su conducta que probablemente no volverán a delinquir”²⁶¹. Y al pie de página cita este autor a PRINS, de quien afirma que “se muestra adverso a la prescripción, la cual, dice es pura y simplemente la impunidad y constituye un mal ejemplo para las masas que no se entregan a las consideraciones teóricas de los defensores de la prescripción”²⁶².

La prescripción de la pena históricamente se defendió de manera equívoca recurriéndose a argumentos como el presunto abandono, la expiación presunta, la posesión de impunidad y la cesación de su fin, pero tal vez lo más indefendible sea el explicar esta prescripción en los casos que los condenados ya comenzaron a sufrir la pena, empero se fugaron, con lo que se premia la fuga (como “un ejercicio de la libertad natural que no puede ser censurado”²⁶³).

3.3. TEORÍAS PREVENTIVAS.

En la otrora ex Unión Soviética se justificó la prescripción penal en general por razones que “el cumplimiento de las funciones de la prevención general y especial exige aplicar y ejecutar la pena oportunamente. La demora de juzgar a una persona y en ejecutar la sentencia no produce los debidos efectos educativos y preventivos, y por ello es inconveniente. El culpable por esa época ya puede haberse corregido o haber dejado de ser socialmente peligroso, y por esto no necesita ninguna influencia sobre él por medio de la pena. La inconveniencia de adelantar el juicio penal después de haber transcurrido un lapso considerable de tiempo desde la comisión del delito, se explica por el hecho de que la tardía promoción del juicio penal dificulta el estudio y la correcta solución del caso”²⁶⁴.

²⁶⁰ Manzini (1950), pp. 147 y 148. “Se agregan otros criterios particulares, y precisamente el “principio de libertad y de tutela de la inocencia, que no permite mantener indefinidamente a un ciudadano bajo una imputación delictuosa” (Relación ministerial sobre el proyecto de 1887, cit., loc. Cit.), principio acogido también por el antiguo derecho, como hemos visto. Pero es fácil responder que dicho ciudadano puede eximirse de este peligro presentándose a la autoridad. Es bien cierto que en algún caso él puede estar ignorante de la amenaza judicial, pero no parece que de una excepción tan rara se pueda deducir un principio justificativo general, tanto más que la prescripción, siendo aplicable de oficio, una vez que se ha verificado quita al individuo imputado y aun al condenado en contumacia la posibilidad de disculparse. Igualmente, no puede admitirse, en justificación de la prescripción de la pena, que las calamidades que de ordinario acompañan a la vida del contumaz a la pena, y las ansiedades como suficiente expiación aun de delitos graves” (Relación VIGLIANI, 1874, art. 98). Sería tanto como conceder una eximente al parricida, por su condición de huérfano”.

²⁶¹ Cuello (1948), pp. 643. En la edición decimotercera de esta obra se mantiene esta definición, véase (1981) pp. 790.

²⁶² Cuello (1948), pp. 643, nota a pie número 6. En la edición decimotercera de esta obra se mantiene esta definición, véase (1948), pp. 790, nota a pie número 3.

²⁶³ Carrara (1944), pp. 176 y 178.

²⁶⁴ Zdravomíslav et al. (1970), pp. 372. En la actualidad Bustos sigue esta línea de interpretación (1989), pp. 413-414.

FRANCESCO CARRARA, atenuando su concepción absoluta de la pena, manifiesta que “el bien mayor de los asociados puede ser causa para apartarse del rigor de la justicia; y de esta misma fuente puede nacer una serie de causas que se llaman *extrínsecas* a la pena, y que imponen la cesación o la modificación de ella, por motivos que son más bien inherentes a su *fin último* y a su *fin inmediato*, que a su *naturaleza*,”²⁶⁵ y de esta idea deduce que “puede haber causas *políticas* (o *extrínsecas*) para *disminuir* la pena, pero que no pueden admitirse para *aumentarla*. *La política nunca puede vencer a la justicia* con el fin de castigar más; pero sí puede vencerla con el fin de *castigar menos*, ya que la *justicia abstracta* deja de ser *justicia social* cuando ocasiona desorden.”²⁶⁶ El autor considera entonces a la prescripción como una de las causales políticas determinables teniendo en cuenta que en estas causas “todo está preordenado por la ley, que se ha determinado a coger estas atenuantes, no por motivos de *justicia*, sino por motivos de *utilidad pública*”²⁶⁷; en contraposición a las causas indeterminables (p. e.: el derecho de gracia).

3.4. TEORÍA MIXTA: DEL HECHO NATURAL Y DE LA ENMIENDA.

SOLER, luego de referirse a varios fundamentos de la prescripción de la acción penal, precisa desde una óptica pragmática que el derecho argentino ve “funcionar como base del sistema un doble motivo: el transcurso del tiempo y la conducta observada por el sujeto. No es que el transcurso del tiempo -como lo observa VON LISZT- tenga un poder místico creador o destructivo del derecho; con ello el orden jurídico no hace más que comportarse, como ordenamiento práctico que es, reconociendo el poder de los hechos, ya que es manifiesta la inconveniencia de una represión muy tardía. Pero estos fundamentos son, sobre todo, de política legislativa”²⁶⁸. El mismo SOLER refiriéndose a la prescripción de la pena señala al transcurso del tiempo como fundamento, pero especifica que “es necesaria la existencia de una sentencia definitiva, conforme al sistema constitucional. Lo que por sentencia definitiva se entiende lo fijan las leyes procesales”²⁶⁹.

En torno a la prescripción como extinción de la acción penal o de la pena, PORTO afirma que “ocurren estas extinciones porque el Estado, como titular exclusivo de la potestad punitiva, puede renunciar a ella en forma total o parcial, y absoluta o condicionada, y así lo hace, en efecto, en los casos y con las condiciones que el mismo preestablece, mediante leyes con las que autolimita el ejercicio de su soberanía”²⁷⁰.

²⁶⁵ Carrara (1944), pp. 163.

²⁶⁶ Carrara (1944), pp. 164.

²⁶⁷ Carrara (1944), pp. 165.

²⁶⁸ Soler (1951), pp. 510.

²⁶⁹ Soler (1951), pp. 522-523.

²⁷⁰ Porto (1956), pp. 10.

3.5. OTRAS TEORÍAS MIXTAS.

Se sostiene que la institución de la prescripción “ha de servir a la paz jurídica y salir al paso de la eventual inactividad de las Autoridades en cualquier fase del procedimiento”²⁷¹.

La justificación se basa tanto en razones de derecho material como procesal. Así desde un punto de vista material se afirma que “el transcurso del tiempo morigera la necesidad de expiación de los miembros de la colectividad jurídica, siempre limitada en el tiempo, en alguna medida, hasta extinguirla; por ello, en tales casos, la pena cesa en su función de afianzamiento jurídico relativo, psicológico”. Y también “es posible que las necesidades de prevención especial concurrentes frente a un hecho flagrante, puedan decaer e incluso errar su meta: quien resulta condenado por un hecho ocurrido hace largo tiempo y olvidado, siente, como entregado al *nudum ius*, no intimidación, sino amargura. Por ello, la delimitación temporal de la posibilidad de persecución de la pena estatal, coincide básicamente con la condición jurídica del pueblo”. Desde un punto de vista procesal “la prescripción se justifica con el avance del tiempo, puesto que la investigación del hecho y la culpabilidad se hace más dificultosa y mayor es el peligro de decisiones erradas”²⁷².

Actualmente, se sostiene que la prescripción se fundamenta en las razones de utilidad a la seguridad jurídica y en la realización de los fines de la pena²⁷³. Algunos otros han señalado que “el transcurso del tiempo tiene también efectos extintivos de la responsabilidad penal, por dos razones fundamentales: la seguridad jurídica, incompatible con la posibilidad perpetua de remover el pasado más lejano, y la función preventiva del Derecho Penal, que, en su faceta de prevención general, no requiere de la investigación y castigo de hechos ya borrados de la conciencia colectiva, y que, como prevención especial, tampoco necesita actuar sobre quien, a lo largo del tiempo, ha demostrado con su conducta no delictiva su ausencia de peligrosidad y un grado suficiente de socialización”²⁷⁴.

Por su parte, HURTADO POZO se ha mostrado partidario de un eclecticismo al señalar como fundamento “que la invalidación, por el transcurso del tiempo, tanto del interés represivo y de la alarma social producida por el hecho delictivo, como la extinción de los efectos de este”, se complementa estos fundamentos al señalarse que se trata de fundamentos constitucionales pues “encontraría tanto en los derechos a la presunción de

²⁷¹ Jescheck (1993), pp. 821; en la quinta edición se señala “cuanto más tiempo ha transcurrido desde la comisión de un delito menor es su efecto perturbador de la paz social: las consecuencias del hecho desaparecen, sus circunstancias caen en el olvido y el autor encuentra el camino de vuelta hacia la comunidad jurídica. De allí que, a no ser que a causa de la especial gravedad del hecho, tal y como sucede con el asesinato (§ 211) y el genocidio (§ 220a), el sentimiento de justicia exija todavía muchos años después la aclaración en la autoría y el castigo del culpable, puede renunciarse a la persecución penal de los delitos perpetrados mucho tiempo atrás; ésta ya no es necesaria para el restablecimiento de la paz jurídica e incluso puede, bajo ciertas circunstancias, ser más perjudicial que beneficiosa” (2002), pp. 982.

²⁷² Maurach, Heinz y Zipf (1995), pp. 968.

²⁷³ Véase Boldova Pasamar en Gracia et al. (2006), pp. 402 y 403.

²⁷⁴ Así Mapeli y Terradillos (1996), pp. 227. Como recoge la sentencia del TS. de 21 de mayo de 1992, con el paso del tiempo “la razón de persecución y castigo del hecho delictivo se debilita o, mejor, se extingue, y los fines básicos y fundamentales de la pena resultan prácticamente inalcanzables”; y para la prescripción de la ejecución de la pena. Serrano I (1996), pp. 212; sin embargo, este autor concluye que “por el cúmulo de razones apuntadas (falta de identidad subjetiva en la persona del penado, falta de asociación entre delito y pena, equidad, autolimitación del poder punitivo del Estado...), el C.P. contiene una presunción “*iuris et de iure*” de que pasado el tiempo fijado para cada clase de pena, la ejecución de la condena impuesta - o de la parte que reste - deviene innecesaria y, en consecuencia, ya no puede ejecutarse; con excepción de las penas correspondientes a los delitos de genocidio” pp. 216.

inocencia y a un juicio sin dilaciones indebidas, como en el principio de prohibición de indefensión, todos ellos en conexión con el principio de seguridad jurídica”, por último, le adiciona a sus fundamentos el principio de necesidad de pena “sosteniéndose que, después de transcurrido un determinado tiempo, la pena resulta superflua por razones de prevención general y especial. Por esto, el Estado renuncia a ejercitar el ius puniendi y declara extinguida la acción penal, en razón de criterios de utilidad social”²⁷⁵.

4. DEFINICIONES.

MAURACH define cada una de las formas de prescripción. Así la persecución penal “prohíbe el inicio de un procedimiento penal”²⁷⁶, mientras que la prescripción de la ejecución penal “es aplicable cuando una sentencia condenatoria firme (p. ej.: debido a la huida del condenado) no puede ser ejecutada dentro de un determinado plazo”²⁷⁷.

VELÁSQUEZ la define como “un instituto liberador en cuya virtud, por el transcurso del tiempo y ante la incapacidad de los órganos de persecución penal de cumplir su tarea, el Estado, conocedor de esta situación, autoriza poner fin a la acción penal iniciada o por entablarse”²⁷⁸.

Para CUELLO CALÓN “consiste en la extinción de la responsabilidad mediante el transcurso de un período de tiempo, en determinadas condiciones, sin que el delito sea perseguido o sin ser la pena ejecutada”²⁷⁹.

PASTOR²⁸⁰ sostiene (refiriéndose a la persecución penal) que “la prescripción es el límite temporal autoimpuesto por el Estado para llevar adelante la persecución y castigo de los hechos punibles en el marco del ejercicio de su poder punitivo”.

La definición que postulo es que *la prescripción es el derecho que toda persona adquiere al haber transcurrido cierto tiempo (plazo fijado por una regla penal) con el cual finaliza la persecución penal o la ejecución de sanciones que todo Estado tiene.*

En un inicio este derecho constituye una potestad y hasta un deber (como manifestación del ius puniendi) del Estado, o hasta una sanción al mismo por ser ineficaz en la persecución de las infracciones penales, delitos y faltas. Sin embargo, una vez que se adquiere este derecho constituye un límite que todo Estado tendrá que respetar e incluso la comunidad internacional.

De esto se desprenden dos extremos: uno la necesidad del Estado de ejercer su ius puniendi, y otro, el derecho de la persona luego que tal ejercicio fenezca.

²⁷⁵ Hurtado y Prado (2011), pp. 421.

²⁷⁶ Maurach, Heinz y Zipf (1995), pp. 968 y 969.

²⁷⁷ Maurach, Heinz y Zipf (1995), pp. 969. En nuestro medio uno de los que la definió fue Benítez (1958), pp. 233; y también Bramont L A (1966), pp. 261.

²⁷⁸ Velásquez (2009), pp. 1189.

²⁷⁹ Cuello E. (1948), pp. .En la edición decimoctava de esta obra se mantiene esta definición, véase (1981), pp. 789.

²⁸⁰ Pastor (1993), pp. 51.

Así debe delimitarse de un lado el *ius puniendi*, como la facultad o potestad de todo Estado de ejercer la pretensión o persecución penal o su ejecución o cumplimiento de penas y medidas de seguridad en un determinado plazo, el cual podrá ser incrementado si se vulnera la finalidad de prevención.

De otro lado es el derecho de toda persona (sea natural, imputable o inimputable mayor de 18 años, menor infractor hasta aquellos que se rijan por el CPMP).

El derecho de prescripción tiene el carácter de ser disponible, por lo cual toda persona que lo obtenga podrá hacer uso de él o no (en este caso entiéndase un rechazo o una renuncia de este derecho). No creo que se trate solamente de un beneficio pues éste depende de si el juez lo concede o no; en cambio la prescripción sólo es declarada por el Juez.

En el CP se optó por esta línea de interpretación.

Por su parte en todos estos años el Tribunal Constitucional también ha establecido su propia definición al considerar que “es una causa de extinción de la responsabilidad penal fundada en la acción del tiempo sobre los acontecimientos humanos o la renuncia del Estado al *ius puniendi*, en razón de que el tiempo transcurrido borra los efectos de la infracción, existiendo apenas memoria social de ésta (...)”²⁸¹.

El Tribunal Constitucional no ha tomado posición sobre si la prescripción es un derecho o un beneficio, sin embargo en algunos casos se ha sostenido que se trata de un beneficio, situación poco defendible considerando los antecedentes nacionales así como el derecho comparado, pues los beneficios constituyen potestades que el estado otorga, en algunos casos y en otros no, y que no basta para su otorgamiento con cumplir los requisitos puramente formales, sino se le condiciona a ciertas finalidades, tales como considerar que el interno condenado se ha resocializado o rehabilitado, y le otorga la apreciación al juez penal, como ejemplo de esto se tiene a los beneficios penitenciarios en el derecho de la ejecución penal.

5. EFECTOS²⁸².

5.1. DE LA PERSECUCIÓN PENAL.

Se consideran los siguientes efectos de la prescripción de la persecución penal:

- 1º Considerando los aportes de la doctrina, se señala que “la prescripción de la persecución extingue la facultad del Estado para perseguir el delito o para imponer la pena (cancelación del derecho de persecución). Su efecto no es el de producir la abolición del delito, como sostienen algunos autores, sino únicamente la facultad del Estado para condenar por el hecho cometido, vale decir, para iniciar o proseguir la

²⁸¹ Esta Sentencia del TC N° 6714-2006-PHC/TC, se encuentra en el ANEXO 5, de esta investigación, específicamente el documento N° 26, fundamento 3.

²⁸² El hecho de que se extingan los efectos acto delictivo, ello no implica que se tenga que extinguir el acto en sí. Von Liszt (s/f), pp. 404.

acción criminal” (...) “Lo que ocurre en realidad, es que decae la potestad represiva que emerge del delito, pero sigue produciendo otros efectos de naturaleza civil, administrativos o públicos”²⁸³.

Así luego de haber operado la prescripción y de haberse promovido la acción, el proceso tendrá que archivarse o sobreseerse, o si aún no se ha promovido no podrá iniciarse acción penal alguna.

- 2º La prescripción de lo principal alcanza a lo accesorio; así, “el juez no puede ya decretar medidas de seguridad, de corrección o educativas, con motivo del delito, y si ya hubieren sido impuestas caducan, como así también, las demás consecuencias accesorias dictadas dentro del proceso sean de carácter penal o extrapenal, tales como las detenciones, embargos, etc.”²⁸⁴.
- 3º Se dice que la persecución de la acción no produce efecto alguno sobre la reincidencia; este problema ahora se tiene en el Perú con la reintroducción de dicha figura, al igual que en Argentina (art. 50 del código penal argentino), donde se regula esta figura.
- 4º En algunos países la persecución de la acción no impide que los hechos sean considerados para efectos de la habitualidad (como nuestro caso).
- 5º La persecución de la acción penal no acarrea la prescripción de las obligaciones civiles derivadas del delito, se fundamenta esta idea en que “la prescripción penal no atañe al campo del ejercicio de la acción civil. La acción resarcitoria cuenta con términos propios de prescripción, contenidos en la legislación civil”²⁸⁵.
- 6º Por el **principio de personalidad**, cada vez que se presente algún supuesto de interrupción, entonces ésta se produce únicamente para la persona que realizó dicho supuesto.

Acogen el principio **personal** para cada uno por separado los siguientes códigos: el CP (Al.) art. 78c (IV) interrupción; el CP (Arg.) art. 67 - final (curso, interrupción y suspensión); el CP (Ecu.) art 112; el CP (Méx. F.) art 101; y el CP (T.L) art. 106.

Empero, anteriormente se encontraba en vigencia el **principio** (o efecto) **impersonal u objetivo**²⁸⁶, así existían algunos códigos que consagraban la interrupción para todos los partícipes del delito, a pesar de no haber realizado el acto de interrupción.

El principio (o efecto) **impersonal u objetivo** es acogido por: el CP (Bra.) art. 117 parágrafo 1, interrupción; el CP (Ch.) art. 101; y el CP (Ita.) art. 161.

²⁸³ Vera (2007); pp. 293.

²⁸⁴ Vera (2007); pp. 294-295.

²⁸⁵ Vera (2007); pp. 296-297.

²⁸⁶ En España el código penal derogado planteó el caso del copartícipe rebelde, Zamora (1992), pp. 155 y ss.

Al respecto VERA BARROS cuando se refiere a la posición asumida por el CP (Arg.) concluye que “en el sistema actual cuando la prescripción se interrumpe por la comisión de otro delito, aquella conserva su efecto personal. La acción se interrumpe sólo para el partícipe que ha cometido el nuevo delito. Si la interrupción se produce para actos de procedimiento, se interrumpe para todos los partícipes involucrados en la acción donde operó el acto de persecución. Quedan excluidos los partícipes contra los cuales no ha sido dirigida la acción. Con respecto a ellos cobra imperio la regla general”²⁸⁷. En Argentina se habla de la interrupción por la secuela del juicio.

SOLER, refiriéndose al efecto de la prescripción de la acción penal resalta el carácter estrictamente personal, y manifiesta que “sus efectos no se extienden a todos los copartícipes, sino que corren o se interrumpen separadamente para cada uno de ellos”²⁸⁸; pero donde más se acentúa este carácter es en la prescripción de la pena. En este sentido el art. 67 in fine del CP (Arg.), sin embargo NÚÑEZ²⁸⁹ distinguía que esto no rige para los actos de procedimiento, los que sí son erga omnes (recuérdese que el CP (Arg.) regulaba la fórmula «secuela de juicio»).

En este punto, asumo una *postura mixta*, pues de un lado en la parte inicial del art. 83 se hace referencia a la interrupción por **las actuaciones del Ministerio Público, o de las autoridades judiciales**, en este caso se tendría que aplicar el principio impersonal u objetivo para todos los partícipes (autores y partícipes en sentido estricto: cómplices e instigadores), por el contrario si se produce la comisión de un nuevo delito doloso (sea por acción u omisión, incluso los de comisión por omisión) la interrupción sólo será para aquél que realizó dicha conducta, es decir se aplica el principio personal²⁹⁰.

Las fuentes y antecedentes del art. 88 del CP son: el Proy. de CP (1916) art 93, pero sólo para la interrupción; el Proy. de CP (Ago. 85) art 92, aunque se refiere expresamente a la prescripción de la acción; el Proy. de CP (Mar.-Abr. 86) art 91; el Proy. CP (Set. 89) art. 90; el Proy. CP (Jul. 90) art 91; y el Proy. de CP (Ene.91) art 88.

²⁸⁷ Vera (2007), pp. 299.

²⁸⁸ Soler (1951), pp. 515.

²⁸⁹ Nuñez (s/f), p. 193. Aunque este autor sugiere interpretar restrictivamente la fórmula secuela de Juicio. Sigue esta posición Vera (1960), pp. 151. Por su parte Eduardo Aguirre Obarrio criticando duramente a los que se opusieron a la derogatoria de la secuela de juicio, siguiendo a Carrara, precisa “la prescripción penal no puede ser interrumpida por actos de procedimiento”, dejando en claro que a pesar de todo el art. 67 del CP (Arg.), aún contiene supuestos procesales al afirmar “pero en lugar de esta tan criticada expresión [secuela de juicio], se incluyen ciertos actos procesales interruptorios: el primer llamado a declaración indagatoria, el requerimiento acusatorio (de apertura o elevación a juicio), el auto de citación a juicio (que es una diligencia muy próxima en el tiempo a la anterior), y la sentencia no firme”, (2010) *Prescripción de la acción penal*, pp. 807 y 808.

²⁹⁰ Castañeda Cubas afirma que lo dispuesto en el art. 88 “no sólo porque la responsabilidad penal es personal, sino también porque el artículo 26 del estatuto punitivo consagra el principio de la incomunicabilidad; esto es, que las circunstancias y cualidades que afectan a los autores y partícipes no modifican las de los otros autores y partícipes del mismo hecho punible, vr. gr. la prescripción de un menor de responsabilidad restringida es diferente a la de un mayor de edad, si ambos han participado en el mismo hecho punible”, véase Castañeda, C. (setiembre, 1994) *La prescripción penal*, pp. 11.

La jurisprudencia respecto al principio o efecto impersonal:

1. El plazo de prescripción es igual para todos los procesados vinculados a la comisión del mismo hecho punible. Por tanto, no cabe declarar la extinción de la acción penal por dicha causal de prescripción sólo para los procesados presentes, y reservar el juzgamiento para otros acusados que no concurrieron a la audiencia (Ejecutoria Suprema del 25 de Marzo de 1992. Recaída en la Consulta N° 1286-90 de la Sala Penal de la Corte Suprema. Procede de Lima).

7° En torno al efecto producido por la suspensión y la interrupción, se tiene, respecto a la suspensión, que “se proyecta, pues, hacia el futuro, no actúa sobre el pasado. El término ya corrido conserva todos sus efectos. Cosa distinta ocurre con la interrupción. Su efecto es instantáneo. Actúa en el pasado, haciendo desaparecer todo el término transcurrido hasta entonces. Desde ese momento comienza una nueva prescripción”²⁹¹.

El CP acoge ambos supuestos. Aunque sólo uno de ellos consigna expresamente su efecto, éste es el caso de la interrupción que lo se encuentra regulada en el art. 83, mientras que la suspensión no consigna efecto alguno de manera expresa, por lo cual se hace necesario recurrir a la doctrina o a la jurisprudencia. Esto es todo lo contrario a lo que sucede en Argentina cuyo código penal sí reguló expresamente el efecto de la suspensión (art. 67), más no el efecto de la interrupción.

Un caso que merece atención es el señalado en el Acuerdo Plenario de la Corte Suprema N° 2-2011/CJ-116²⁹² al establecerse como doctrina que el plazo de prescripción en los delitos contra la Administración Pública para los cómplices *extraneus* será el establecido en el delito realizado por el autor, sin agravante alguna, ya que dicha agravante sólo se aplica a los cómplices *intranei*. A continuación se consigna los fundamentos de dicho Acuerdo:

“18°. En suma, los extraneus se regirán por la pena correspondiente al delito ejecutado por el autor -dentro de los comprendidos en el Capítulo II, Título XVIII, del Libro Segundo del CP-, pero para los efectos del cómputo de la prescripción no se les extenderá el término del plazo previsto para los autores, pues a ellos no les alcanza la circunstancia agravante que sólo corresponde al autor (...).

19° (...). En tal virtud, el extraneus no infringe ningún deber jurídico especial que se corresponda con el bien jurídico que es objeto de tutela penal. El principio de proporcionalidad demanda que esa diferencia se justifique en un trato distinto de los plazos de prescripción de la acción penal”.

²⁹¹ Vera (2007), p. 300.

²⁹² Véase el ANEXO 4, de esta investigación, específicamente el documento N° 1, fundamentos 16, 17, 18 y 19.

5.2. DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA.

La prescripción de la ejecución de la pena tiene los siguientes efectos:

- 1º Se considera que el efecto principal de la prescripción de la ejecución de la pena es que una vez que ha operado, ya no podrá ejecutarse en el futuro. “Ello no quiere decir que la condena, como tal, pierda sus efectos. Por el contrario quedan todos ellos subsistentes (...)”. Sin embargo, como dicho condenado no puede ser mejor tratado que un condenado que está cumpliendo su pena, se afirma que tal prescripción no afecta a las consecuencias de dicha pena, por lo que, “aunque prescrita: a) impide conceder la condena de ejecución condicional; b) sigue siendo válida para una posterior declaración de reincidencia, siempre que no hayan transcurrido los términos del art. 50, último párrafo; c) no es obstáculo para la concesión de la libertad condicional, siempre que no haya provocado una declaración de reincidencia; d) no impide la ejecución de las obligaciones civiles derivadas de la condena; e) mantiene las incapacidades que genera. La prescripción no extingue las penas privativas de derechos sino cuando han sido impuestos a título accesorio o complementario”²⁹³.
- 2º La prescripción de la pena carece de influencia sobre las medidas de seguridad, pues éstas prescriben autónomamente.
- 3º La prescripción de la pena tampoco afecta a las obligaciones civiles derivadas de la condena.
- 4º El carácter personal no admite aquí excepción alguna, pues toda sanción impuesta siempre es a título individual, **éste será el criterio que aquí se asume.**

La jurisprudencia respecto al efecto de la prescripción:

1. La prescripción obliga de oficio, impidiendo toda investigación, o anulando todo juzgamiento sobre el hecho cubierto por ella, por lo que, al reconocerse la prescripción resulta implicate todo acto judicial que signifique discriminación del delito o de la responsabilidad del agente (Ej. Sup. de 31 de agosto de 1943.- De Piura. 24- IX- 43).

²⁹³ Vera (2007), pp. 371-372.

6. TÉCNICA LEGISLATIVA.

La técnica legislativa adoptada depende principalmente de la unificación o no del sistema de penas de privación de libertad que tiene todo ordenamiento jurídico penal (en la legislación común y especial, militar y de menores). De allí que existen dos sistemas bien diferenciados con sus variantes que a continuación se exponen.

6.1. SISTEMAS.

Los sistemas de la prescripción penal adoptados en las diversas legislaciones del derecho comparado, tomando como referencia los nuevos códigos penales así como los proyectos más interesantes, correspondientes a esta parte del continente americano, se han ido construyendo a partir de los modelos referenciales, tales como el de optar por el sistema de cláusulas genéricas o un sistema de cláusulas concretas y diferenciadas. Sin embargo, luego de instaurarse en el mundo la aprobación del Estatuto Penal de Roma, los diversos países han ido adaptando sus legislaciones internas a las reglas establecidas en dicho Estatuto.

De allí que hablar de un modelo de prescripción y otro de imprescriptibilidad, seguro va a ser una opción futura, pero a la vez mirando el pasado, pues cada vez hay una tendencia a incorporar más delitos a la imprescriptibilidad. Aunque en la actualidad, es dominante el modelo o paradigma de la prescripción, y excepcionalmente el modelo de la imprescriptibilidad, por ello aún se valida los modelos de prescripción sean estos del sistema de la cláusula genérica o del sistema de la cláusula concreta y diferenciada.

1º *El sistema de la cláusula genérica* es el que precisa un plazo genérico que depende del monto establecido para la pena privativa de la libertad de cada delito que se encuentra en la parte especial del código penal o de una ley especial, es decir, el plazo de prescripción depende del extremo máximo de la pena conminada establecida para cada delito. Esto es aplicable para la prescripción de la persecución penal y en algunos casos para la prescripción de la ejecución de la pena.

P.ej.: el CP (Ita.) art. 157 párrafo segundo si se trata de la acción penal y el CP (T.L.), art. 102 numeral 2 (sólo para la acción penal).

2º *El sistema de las cláusulas concretas y diferenciadas*, precisa en la parte general el plazo específico de prescripción para cada una de las penas reguladas en un determinado código penal, sean privativas de la libertad (en algunas legislaciones todavía tienen diversificadas las penas privativas de la libertad) u otro tipo de penas (por ejemplo, la multa, la prestación de servicios comunitarios entre otras). Esto es aplicable, tanto a la prescripción de la persecución de la acción penal como a la prescripción de la ejecución de la pena.

P. ej.: el CP (Al.) art. 78 numeral 3 y art. 79 numeral 3; el CP (Bol.) art. 101 y art. 105; el CP (Arg.) art. 62 y art. 65; el CP (Bra.) art. 109; el CP (Ch.) art. 94 y art. 97; el CP (C.) art. 64 y art. 65; el CP (Ecu.) art. 101; el CP (Fr.) art. 133-2,3 y 4; y el CP (S.) art. 97 y 99.

Empero, estos sistemas no son puros, sino que tienen sus variantes, así en algunos códigos se precisan los montos específicos en que prescribe la persecución penal; en torno a la prescripción de la ejecución de la pena colocan una remisión a los plazos de prescripción de la persecución penal, sea equiparando o incrementándolos para efectos de la primera; p.ej.: art. 86 del CP.

Algunos códigos precisan por cuestiones de política criminal ciertos límites temporales, sean mínimos (por debajo de estos no opera la prescripción) o máximos (opera la prescripción en estos casos, así la pena sea superior a estos plazos, sobre todo cuando se tienen penas sumamente graves como la pena de muerte o la de cadena perpetua, o penas privativas de libertad con montos superiores al plazo máximo de prescripción como en el caso peruano).

Así p. ej.: el CP (C.R.), art. 84 numeral 2; el CP (Méx. F.), art. 105 y 113; el CP (Ita.), art. 157 en el extremo mínimo de la persecución penal y el art. 172 sólo para la ejecución de las penas; y el CP (T.L.), art 108.

Un grupo de códigos otorgan eficacia irrestricta a los supuestos de interrupción y suspensión, otros en cambio ponen límites a estos supuestos, y un minoritario grupo, tal vez el más progresista, ha consignado una norma por la cual opera la prescripción a pesar de que haya interrupción o suspensión, sea de la acción penal de ambas, o de la ejecución de pena para las interrupciones.

Respecto a los supuestos de interrupción y suspensión algunos utilizan términos *específicos* [P. ej.: para la **interrupción**: el CP (Al.) art. 78c; el CP (Bol.) art. 106; el CP (Bra.) art. 117; el CP (Ch.) arts. 96 y 99; el CP (C.) arts. 64.3 y 65.3; el CP (Ecu.) art. 108; el CP (Pan.) art. 120; el CP (Por.) arts. 121y 126; y el CP (Ita.) arts.160 y 161; y para la **suspensión**: el CP (Al.) arts. 78b y 79a; el CP (Arg.) art. 67; el CP (Ch.) art. 96; el CP (Por.) arts. 120 y 125; el CP (Ita.) arts. 159 y 161; y el CP (S.) art. 99 numeral 2], *genéricos* [P.ej.: el CP (Méx. F.) arts. 110 y 115] o *mixtos -específicos y genéricos-* [P.ej.: el CP (Arg.) art. 67 penúltimo párrafo y el CP (Esp.) art. 132 numeral 2] y otros precisan puntualmente cada uno de ellos.

Uno de los aspectos a destacar, desde la vertiente de los derechos humanos, es que gran parte de los códigos penales adoptando las reglas del Estatuto Penal de Roma, han incorporado expresamente la regla de la imprescriptibilidad. El dilema que se presenta en los Estados sudamericanos y centroamericanos es querer extender el catálogo de delitos a otros casos tales como corrupción (Ecuador y Bolivia ya adoptaron esta postura, en el Perú esto se viene discutiendo) o criminalidad organizada (aún en debate).

El caso del CP (Col.) es el único que no ha incorporado la imprescriptibilidad para los delitos de lesa humanidad y análogos, pues incluso en estos casos ha adecuado su norma a treinta años como plazo de prescripción de la persecución penal. Así mismo, ofrece una particular característica para la prescripción de la ejecución de la pena, pues por un lado, tratándose de la pena privativa de la libertad ha establecido la recurrencia a la pena concreta fijada en la sentencia, estableciendo esta regla general siempre y cuando no sea inferior a cinco años; y por otro lado el plazo de prescripción para las penas distintas a la privativa de

la libertad es también de cinco años. Este modelo adoptado tiene entre uno de sus antecedentes el modelo del CP (T.L.), que establecía el monto de la pena impuesta en la sentencia a la que se le incrementaba un tercio, con los límites no inferior a cinco ni superior a veinticinco años.

Otro modelo a destacar es el consignado en el Proy. de CPO (Ecuador), que ya se mencionó, el mismo que a propósito de la prescripción de la persecución penal, diferencia dos supuestos, uno referido a la prescripción sin proceso (cuya prescripción se basa en la cláusula genérica) y otro referido a la prescripción con proceso (cuya referencia es el máximo de la pena del delito imputado pero a partir de iniciado el proceso).

Así se tendría por primera vez un modelo que hace depender el plazo de prescripción no de una categoría penal clásica como es el delito, sino que ahora sin renunciar al delito estaría estableciendo un requisito condicional que es el momento del inicio del proceso, postura que por cierto enorgullecería a los que siguen la teoría procesal o mixta de la prescripción.

En cuanto a la prescripción de la ejecución de la pena, dicho proyecto sigue la tradición del modelo colombiano básicamente, es decir que el plazo de la pena es el establecido en la sentencia condenatoria.

Hay algunos Estados que no regulan la prescripción para la persecución penal (caso de Francia y El Salvador) adoptando tácitamente la imprescriptibilidad de la persecución penal, sí en cambio para la prescripción de la ejecución de la pena. Y en sentido inverso, hay sistemas que no tienen plazo de prescripción para la ejecución de la pena (es el caso de la República Popular de China), considerando tácitamente la imprescriptibilidad de los condenados.

6.2. SISTEMA ADOPTADO POR EL CÓDIGO PENAL DE 1991.

1º Se adopta el sistema de la cláusula genérica, pues como se sabe el CP unificó las penas privativas de libertad (art. 80 ad initio y art.86). En el caso de las otras penas distintas a la privativa de la libertad (p. ej. multa), el código penal prevé una cláusula genérica, tanto para la prescripción de la persecución penal como de la ejecución. Esta cláusula genérica en el caso peruano coincide con la técnica de las conminaciones punitivas relativamente determinadas (forma de conminación que principalmente acoge el CP), en su extremo máximo.

La jurisprudencia respecto a los plazos de la prescripción de la persecución (Se rigen por la pena conminada).

1. Conforme a la actual legislación penal, la prescripción de la acción penal procede cuando realmente transcurre el plazo señalado en la ley para el delito según el caso con el objeto de extinguir el derecho de ejecutar o de continuar sosteniendo la acción penal; que, transcurrido dicho plazo, ésta produce “ipso jure” su efecto liberatorio, esto se opera de pleno derecho (Ejecutoria Suprema del 31 de mayo de 1994. Recaída en la Causa N° 3084-93. Procede de Lima).

- 2° Se opta por colocar límites máximos para la prescripción de la persecución penal que tranquilamente se extienden a las de ejecución de la pena.
- 3° Se considera el caso de la prescripción extraordinaria dando eficacia relativa o limitada a los supuestos de interrupción o suspensión, (véase la parte de este trabajo en que se analiza dicha figura) de la persecución penal únicamente.
- 4° Agrava el plazo de prescripción para los funcionarios públicos y disminuye en torno a los imputables relativos.
- 5° Establece la teoría de los efectos personales (Ver análisis en la parte correspondiente).
- 6° Establece la renuncia de la prescripción (Ver en análisis correspondiente).
- 7° Coloca la cláusula *genérica* considerando los supuestos de suspensión respecto a la prescripción de la persecución penal; y *mixta* para las de interrupción, pues la primera parte del art. 83 es genérica y la tercera parte es concreta. En cambio para la prescripción de la ejecución de la pena la fórmula para la interrupción es la concreta (Ver análisis que se hace del art. 87 del CP).
- 8° Otra es la extinción de la acción civil (Ver análisis).

7. CLASES DE PRESCRIPCIÓN.

En el derecho penal se plantean dos clases de prescripción:

7.1. DE LA PERSECUCIÓN PENAL O ACCIÓN PENAL.

La prescripción de la persecución o acción penal puede ser dos tipos, una ordinaria y la otra extraordinaria:

a. Prescripción Ordinaria.

Tiene a su vez dos subtipos:

1º Es el derecho que el imputado adquiere antes o durante un proceso penal al transcurrir un plazo que legalmente se ha consignado en una regla penal (normalmente de la parte general de un código penal) dependiendo de la pena conminada para cada tipo penal, esté dentro o fuera del código penal (ésta es la acepción más común, aunque muchos creen que es la única forma en que se manifiesta la prescripción ordinaria). Ésta constituye la *regla general* (art. 80 primer párr. del CP). Su campo de aplicación es para las penas privativas de la libertad.

El antecedente de esta institución en relación a los plazos es el CP (T.L.) art. 102 numerales 2 y 3.

En la jurisprudencia nacional la Corte Suprema ha señalado sobre la prescripción ordinaria en los delitos de falsedad genérica a través de la ejecutoria emitida en el R.N. N° 49-2010 (ANEXO N° 3, documento N° 13) lo siguiente:

"Décimo tercero: Que la conducta del acusado RONALD WILDER CAYOTOPA ACOSTA fue tipificada como delito contra la fe pública, en su modalidad de falsedad genérica, previsto en el artículo cuatrocientos treinta y ocho del Código Penal: se le imputó haber suscrito el acta de recepción de la obra el catorce de marzo de dos mil cuatro; que ese ilícito penal establece una pena privativa de libertad máxima de cuatro años. Décimo cuarto: Que la prescripción ordinaria para el delito de falsedad genérica opera cuando transcurre un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley para el delito ¿cuatro años?, sin embargo al existir actuaciones judiciales y del representante del Ministerio Público el plazo prescriptorio se interrumpe y para que se extinga la acción penal debe adicionarse un tiempo igual a la mitad del plazo ordinario de prescripción ¿dos años, respectivamente?, como estipula el último párrafo del artículo ochenta y tres del Código Penal. Décimo quinto: Que, en ese contexto, a la fecha ha sobrepasado el plazo ordinario y extraordinario de prescripción establecido en la norma sustantiva para el delito imputado, extinguiéndose la acción penal ejercitada en la presente causa contra el citado imputado; que, por tanto, es procedente declarar nula la sentencia en ese extremo y declarar extinguida la acción penal por prescripción", (pp. 15-16).

La jurisprudencia respecto al objeto de la prescripción:

1. La institución de la prescripción tiene por objeto extinguir la autoridad jurisdiccional cesando la acción coercitiva del Estado de la persecución, investigación y juzgamiento de un delito, siendo factor determinante para su procedencia el transcurso del tiempo desde la comisión del evento (Ej. Sup. 18 de Abril de 1994, en normas legales, Revista de legislación y Jurisprudencia; Vol. CCXXXII Set. 1995).

2º Es el derecho que el imputado adquiere antes o durante el proceso penal por el transcurso de cierto tiempo o plazo consignado legalmente, pero a diferencia de la anterior, aquí los plazos no dependen ni guardan proporción directa con ningún tipo penal, sino más bien obedecen a criterios relacionados con la naturaleza y la gravedad de la pena a imponer, así como por la gravedad del injusto realizado, la misma que presenta tres variantes:

- i) Éste es el caso del plazo único para la prescripción de la persecución penal de todos aquellos tipos penales a los que se les conmina con penas principales y únicas de multa, limitativas de derechos, prestación de servicios a la comunidad o inhabilitación. En estos casos, el tiempo de prescripción es desproporcionado porque es mayor que el monto de las penas conminadas). El plazo será de 3 años (art. 80 penúltimo párrafo del CP).
- ii) Por la menor gravedad del injusto se tiene a las faltas, para la cual se ha consignado un plazo único que no guarda proporción con las penas conminadas, cuyo plazo será de un año (art. 440 numeral 5 del CP). Acaso para algunos este caso el considerado como de prescripción con plazo legal o prescripción absoluta, es decir como un tercer tipo de prescripción (véase los alcances realizados en la parte segunda).

Los antecedentes nacionales de este artículo se encuentran en lo referido al plazo de prescripción de la *persecución penal para las faltas* en el Anteproy. de (1877), art. 110 in fine; Anteproy. de (1900-1902), art. 104; CP (1924) art. 383 inc. 4º; Anteproy. De CP (1927), art 62; Proy. de CP (Oct.-Nov. 84), art. 340.5; Proy. de CP (Ago. 85), art. 413.8; Proy. de CP (Mar.-Abr. 86), art. 438.8; Proy. de CP (Jul. 90), art. 409.6; Proy. de CP (Ene. 91), art. 433.5.

En el derecho comparado a nivel de documentos prelegislativos el Proyecto de CPF (Suizo de 1918) reguló la prescripción para faltas en su Libro Segundo, art. 294 donde se señala: «*La acción penal prescribirá a los seis meses y la pena, al año*». Como se aprecia no se decía si estos plazos son únicos, es decir, tanto para la prescripción ordinaria como para la extraordinaria, pero en todo caso también se tiene la disposición del art. 288 que expresaba que «*las disposiciones de la parte general del libro primero se aplicarán a las faltas, teniendo en cuenta las modificaciones contenidas en los artículos siguientes*». Es necesario precisar que si se asume la primera interpretación entonces este sería el origen de la denominada *prescripción absoluta de las faltas*.

Uno de los aspectos a considerar es el que se viene dando en la práctica judicial cuando se abre instrucción por un delito y luego se establece que se ha cometido una falta, entonces los jueces realizan la adecuación y luego declaran la prescripción²⁹⁴. También es posible, aunque no hemos encontrado situación similar, que existan casos en que se procesa por faltas, pero luego se determina que hay delito; sin embargo en estos casos no existiría problema alguno.

Lo curioso es que a la hora de computar los plazos del primer supuesto se argumenta la prescripción extraordinaria con lo cual cabe preguntarse si esta invocación hecha por los jueces es la correcta o debería más bien aplicarse los plazos de la prescripción ordinaria, y por ende no debería haber plazos de interrupción o suspensión por resultar intrascendentes (imaginemos que para operar éstas, tendrían los jueces extrapenales que fallar en un tiempo récord) por el tipo de proceso frente al cual nos encontramos.

Otros han sugerido la idea de plantear la suspensión de la prescripción por la causal de otro procedimiento en aquellos casos en los que una infracción penal de faltas se encuentra ventilándose como delito, de esta manera se evitaría que los jueces de una instancia superior se pronuncia sobre las faltas nada mas que para señalar la prescripción. Sin embargo, en la investigación de campo no se ha encontrado un similar proceder al respecto.

La jurisprudencia sobre prescripción de faltas por derivación procesal:

1. Es nula la sentencia expedida por el Tribunal Correccional, que condena a un acusado, en su condición de doble reincidente, por robo, a la pena de relegación relativamente indeterminado no menor de 6 años ni mayor de 9 años, si los hechos que se le imputan constituyen faltas contra el patrimonio y han prescrito debiendo declararse en consecuencia, extinguida por prescripción la acción penal (Ej. Supr. Del 22 Feb-1985, pp. 2736).

²⁹⁴ En España el Tribunal Supremo “ha venido sosteniendo el criterio de que, en los casos de conexión de una falta con un delito, o de instrucción y calificación de unos hechos como delito, y luego condena como falta, el término de prescripción de la falta no es aplicable, debiendo atenerse al del delito (entre las más recientes, sentencias del T.S. de 12 de abril de 1994 y 22 de junio de 1994)” Véase comentarios hechos por Gumersindo Guinarte Cabada en la obra colectiva de Vives el al. (1996), pp. 682. Así también Diego Ramos Gancedo al precisar que a pesar de ser la postura mayoritaria, no se encuentra de acuerdo, ya que considera que se afecta el principio de legalidad, “teniendo en cuenta que lo que prescribe es la infracción jurídicamente relevante, no la imputada por las partes acusadoras, y que la jurídicamente relevante no es la pretendida por las partes, sino la efectuada por el órgano jurisdiccional, que es el único competente para calificar los hechos enjuiciados objeto de posible prescripción (...), porque lo que prescribe es la infracción realmente cometida y no la imputada por las partes y, como sostiene Manzanares Samaniego, ni resulta oportuno hacer prevalecer la vertiente procesal de la prescripción sobre su aspecto sustantivo, ni debe soportar el acusado los errores en la elección del procedimiento o en la “calificación” inicial”, (pp. 931), se muestra partidario de la postura minoritaria de si el hecho es falta entonces prescribe como falta, véase Conde-Pumpido y López Barja (2007).

iii) En torno a la gravedad del monto de la pena privativa de libertad conminada y a fin de no volver irrealizable el derecho humano de prescripción el legislador ha considerado un plazo final en torno a la pena privativa de la libertad según sea temporal o de cadena perpetua. Aquella será de veinte años y ésta de treinta (art. 80 cuarto párr. del CP). Algunos denominan a este subtipo de prescripción como absoluta. Por lo cual sostengo que este plazo será el del máximo de cualquier clase de prescripción de pena privativa de la libertad, sea ordinaria o extraordinaria e incluso para el caso especial de los funcionarios públicos art. 80 in fine. Sin embargo, la jurisprudencia y la doctrina jurisprudencial ha asumido el criterio de que se trata de un plazo ordinario, por ende este plazo límite no impide que se pueda aplicar el plazo de prescripción extraordinaria de la persecución penal.

La jurisprudencia respecto a la prescripción ordinaria:

1. Es fundada la excepción de prescripción deducida contra la acción penal por delito de apropiación ilícita previsto en la primera parte del art. 240 del CP si la denuncia se formula a los 6 años del hecho que se imputa al inculpado (Ej. 15 Mayo 1948. R de J.P. 1948 pp. 364).

2. Es fundada la excepción de prescripción de la acción penal, cuando se denuncia el delito vencido el plazo legal correspondiente. Aplicación del Artículo. 119, in. III del Código Penal (Ej. Sup. del 8 de julio de 1971, el 7-3-72; pp. 10).

b. Prescripción Extraordinaria.

Definida como el transcurso del plazo ordinario de prescripción de la persecución penal incrementado en una mitad durante el desarrollo del proceso penal aún no terminado con sentencia firme o por auto que puso fin al proceso. Al igual que la prescripción ordinaria se inicia desde que se cometió el injusto penal (art. 83 último párr. del CP).

El antecedente o fuente más antiguo a nivel de derecho comparado lo encontramos en el Anteproy. de CP (Suizo de 1916) art. 72 párr. 3 y art. 75 párr. 2; el **Proyecto de CPF (Suizo de 1918)**²⁹⁵ el cual sugiere la posibilidad de la prescripción extraordinaria para la acción penal y para la prescripción de la ejecución de la pena en su art. 69 último párrafo dedicado, según la sumilla, a la suspensión e interrupción de la prescripción, que expresa «*Esto no obstante, la acción penal prescribirá en todo caso cuando la duración del período ordinario de prescripción haya pasado la mitad*»; y en el art. 72 referido a la interrupción de la prescripción de la pena, en su último párrafo, que a la letra dice «*esto no obstante, la*

²⁹⁵ Este proyecto fue enviado por el Consejo Federal suizo a la Asamblea Federal en 23 de julio de 1918 y desde entonces se haya en tramitación. El dictamen de este proyecto fue aprobado por gran mayoría por el Consejo Nacional teniendo como ponente al Sr. Paul Logoz.

pena prescribirá en todo caso cuando la duración del plazo ordinario de prescripción haya pasado de la mitad».

Esta fórmula obedece a criterios de política criminal debido a que muchos de los procesos una vez empezados no tenían cuando acabar, es decir, implica un tácito reconocimiento de la imposibilidad de actuación de la prescripción ordinaria intraproceso, ya que las interrupciones o suspensiones operaban en cualquier momento antes de materializarse la prescripción ordinaria. El ejemplo común se tiene cuando faltando horas para que prescriba un caso penal (acción aún no formalizada), se presenta la acción penal correspondiente con lo cual se interrumpía el plazo ya ganado. Ante esta incertidumbre, y hasta cierto punto arbitrariedad jurídica se creó la fórmula de la prescripción extraordinaria.

Mediante este tipo de prescripción toda pretensión penal, luego de iniciada, prescribe indefectiblemente en un tiempo igual al término ordinario de prescripción aumentado en una mitad, a pesar de presentarse cualquiera de los supuestos de interrupción o suspensión.

En este mismo sentido HAWIE SORET (pp. 83 y 84). Sin embargo, este autor sólo considera respecto de las causales de interrupción, los actos procesales de instrucción o de juzgamiento, de acuerdo a la redacción original del art. 121 del CP (1924); no se pronuncia en torno a lo consignado en el art. 124 párrafo cuarto del CP (1924).

ROSSEL ALVARADO, por el contrario entendió equivocadamente la prescripción extraordinaria al definirla como:

“Es la prescripción en la cual no se ha producido interrupción alguna y si el tiempo transcurrido sobrepasa en una mitad el término ordinario fijado en el código (Código Penal)” [pp. 33].

A fin de reafirmar mi opinión, sostengo sobre lo expresado por este autor que resulta necesario contrastar la definición anterior con su definición de prescripción ordinaria:

“Es la que corre sin interrupción y para su cumplimiento se necesita los plazos señalados por la ley, tanto en la prescripción de la acción penal como en el de la pena” (pp. 33).

Así pues, la prescripción extraordinaria opera a pesar que se haya presentado algún supuesto de interrupción, en cambio ROSSEL ALVARADO es de opinión contraria. Este autor tampoco se pronuncia acerca de la efectividad de la prescripción extraordinaria respecto de los supuestos de suspensión.

Esta clase de prescripción ha devenido en un eficaz elemento de descongestión de la carga procesal en los diversos estamentos jurisdiccionales del Perú²⁹⁶. Tanto los plazos de prescripción ordinaria como extraordinaria se deducen de los preceptos específicos que el legislador ha establecido para cada delito regulado en el CP o en ley especial preferentemente penal.

²⁹⁶ Sáenz, A. (1996), Tesis, pp. 199.

En la doctrina nacional VÍCTOR PRADO sostiene que la prescripción extraordinaria es aplicable tanto para la prescripción de la acción penal como para la ejecución de la pena, así como para las penas distintas a la privativa de la libertad²⁹⁷.

En el derecho comparado se tiene que el CDC²⁹⁸, el CP (Tos.), el CP (Bol.), el CP (Bra.), el CP (Arg.), [incluso en el proyecto de NESTOR PERL y OSCAR L. FAPPIANO en 1987], el CP (Ch.), el CP (Ecu.), el CP (Esp.), el CP (Fr.), el CP (Gua.), el CP (Ita.), el CP (Pan.), el CP (P.R.), el CP (T.L.), y más recientemente el Proy. de CP (Salvador)²⁹⁹ no contienen disposición alguna sobre la prescripción extraordinaria³⁰⁰.

El **código penal de República Dominicana** no contiene ninguna disposición de la persecución penal y solo en su art. 48 regula la prescripción de la ejecución de la pena.³⁰¹

En cambio en el derecho comparado los países que han adoptado este tipo de prescripción en sus códigos penales son: Alemania, México (para el D.F.), Cuba, Portugal y Colombia. A continuación presentamos los artículos que se refieren a esta prescripción:

Después de haber revisado todos los Códigos y documentos prelegislativos que se consignan en el ANEXO 1 de este trabajo de investigación se tiene que fue el CP (Sui.) el primero de los cuerpos legales que reguló este tipo de prescripción (en el caso peruano fue el CP (1924), en su versión original, así la fórmula utilizada por este código es muy similar a la del actual CP. Los suizos regularon en la versión original de su código penal la prescripción extraordinaria de la acción penal y de la pena es sus arts. 72 último párrafo y 75 último párrafo, respectivamente, para los casos de interrupción, empero respecto de las contravenciones se precisaba que la acción penal prescribía si hubiese transcurrido no la mitad del plazo ordinario, sino el doble, en el texto vigente se ha derogado este supuesto.

El **código penal de México para el Distrito Federal** tiene una fórmula similar al de la prescripción extraordinaria de la acción penal en su artículo 105:

«La acción penal prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa de la libertad que señala la ley para el delito de que se trate, pero en ningún caso será menor de tres años»; y en su artículo 113 «Salvo que la ley disponga otra cosa, la pena privativa de libertad prescribirá en un tiempo igual al fijado en la condena y una cuarta parte más, pero no podrá ser inferior a tres años, la pena de multa prescribirá en un año; las demás sanciones prescribirán en un plazo igual al que deberían durar y una cuarta parte más, sin que pueda ser inferior a dos años; las que no tengan temporalidad, prescribirán en dos años.

²⁹⁷ Prado (2000), pp. 257.

²⁹⁸ Véase los cánones 1702, 1703, 1704, 1705 y 2240 referidos a la prescripción en materia penal. (Código de derecho canónico y legislación complementaria, pp. 645-647 y 816).

²⁹⁹ Proyecto de CP de 1994 elaborado por la Corte Suprema de Justicia que hace suyo el poder ejecutivo vía el ministro de justicia con fecha 25 de Mayo de 1994, con una síntesis explicativa.

³⁰⁰ Tampoco el C. de I.C.F.; el CP (Al. de 1870); el Anteproy. de CP (Sue.) de 1916; y el CP (Aus.).

³⁰¹ La República Dominicana adoptó el código penal francés abrogado y como en este código penal no se regula la prescripción, el primero no tiene disposición alguna sobre esto. Sin embargo, ellos también adoptaron el código de enjuiciamiento criminal francés en el cual sí se regula las reglas de prescripción, aunque hoy en Francia esto se encuentra regulado en el código penal.

Los plazos serán contados a partir de la fecha en que cause ejecutoria la resolución».

Por su parte el **código penal Alemán**³⁰² la regula en lo referido a la persecución penal en su art. 78c numeral III *«Después de cada interrupción comenzará la prescripción de nuevo. La persecución prescribirá, sin embargo, a más tardar, cuando desde el instante señalado en el §78a, haya pasado el doble del plazo legal de prescripción y, si el plazo de prescripción es más breve de tres años de acuerdo a las leyes especiales, hayan pasado al menos tres años. La validez de art. §78b permanecerá».*

Así también el **código penal de Cuba** en su art. 64 numeral 4 *«después de cada interrupción, la prescripción comienza a decursar de nuevo. En estos casos, la acción penal prescribe también al transcurrir el doble del término señalado para su prescripción»* y el artículo 65, numeral 4. *«Después de cada interrupción, la prescripción comienza a decursar de nuevo. En estos casos, la ejecución de la sanción prescribe también al transcurrir el doble del término señalado para su prescripción».*

También el **código penal de Portugal** precisa en su art.121 referido a la interrupción numeral 3 que *«la prescripción del procedimiento criminal siempre tendrá lugar cuando, desde su inicio y descontando el tiempo de suspensión hubiera transcurrido el plazo normal de prescripción aumentado en la mitad. Cuando a causa de disposición especial, el plazo de prescripción fuese inferior a 2 años, el límite máximo de la prescripción corresponderá al doble de ese plazo».* Y en su art. 126 referido también a la interrupción numeral 3 *«la prescripción de la pena tendrá lugar siempre que, desde el principio de aquélla y relevado el tiempo de suspensión, hubiere transcurrido el plazo normal de la prescripción aumentado en la mitad».*

Resulta interesante la fórmula contemplada en el código penal de Colombia de ponerle un límite a la interrupción de la prescripción de la acción art. 86³⁰³: *«producida la interrupción del término prescriptivo, éste comenzará a correr de nuevo por un tiempo igual a la mitad del señalado en el artículo 83. En este evento el término no podrá ser inferior a cinco (5) años, ni superior a diez (10)».*

Este código penal no contiene la prescripción extraordinaria, sin embargo, al referirse a la interrupción de la prescripción de la acción penal en su art. 84 segundo párrafo, se

³⁰² El proyecto alternativo de código penal alemán de 1966 planteó en su § 99 la interrupción de la prescripción: *«2. Después de cada interrupción comenzará a correr nuevamente la prescripción. La prescripción prosigue sin consideración a interrupciones cuando haya transcurrido el doble del plazo legal de prescripción».*

³⁰³ Sin embargo el CP (Ita. de 1889) ya había utilizado esta fórmula en su art. 93. párr. segundo. Es necesario recordar también los antecedentes colombianos, pues este aumento de la mitad del plazo de la prescripción luego que ha operado la causal de interrupción, no fue contemplado en el artículo 107 del abrogado Código Penal colombiano, lo que originó varias interpretaciones: 1) Si se interrumpe el plazo de prescripción este vuelve a correr pero dicho plazo no puede ser mayor que el contemplado en el artículo 105 de dicho código, por lo cual “en realidad el término no se ha interrumpido, y si era de cinco años, al pasar ese plazo de realizado el ilícito, queda prescrito el derecho de la sociedad a adelantar la acción penal por dicho ilícito”. 2) “si el código hubiera quedado, en el artículo 107..., con el complemento «aumentado en una mitad» (el término de la prescripción), que era lo que planeó la comisión acorde con varios antecedentes históricos, ocurría que una prescripción comenzada, si se interrumpiese por el auto de proceder, se volvería a contar de nuevo pero el término total de ella no sería sino el inicial aumentado en una mitad. Es decir, interrumpida de derecho una prescripción, esta, de hecho seguiría su curso y una vez completado el término inicial debería contarse otra mitad. En síntesis, en toda prescripción, la interrupción -que en el fondo no lo es- sólo tendría por objeto aumentar el término en una mitad», en este sentido Fernández E. (1949), LH, pp. 27-30.

precisa que luego de interrumpida la prescripción vuelve a correr sólo la mitad del plazo (ordinario en el caso peruano) de la prescripción, empero la reducción de dicho plazo no podrá ser inferior a cinco años tratándose de delitos. No obstante, se debe tener presente que el art. 84, segundo párrafo, contempla otros supuestos de interrupción como el «equivalente, debidamente ejecutoriado» del auto de proceder (en el caso peruano el auto apertorio). En todo caso si no operara este segundo supuesto se diría que tal fórmula tranquilamente podría alcanzar los supuestos de la prescripción extraordinaria de la persecución penal.

Merece un comentario aparte la curiosa redacción del art. 107 numeral 2 del **código penal de Guatemala** que no especifica la prescripción extraordinaria de la responsabilidad, sino que sólo regula la prescripción ordinaria y considera que tal responsabilidad prescribe por el transcurso de un período igual al máximo de duración de la pena señalada, aumentada en una tercera parte, no pudiendo exceder dicho término de veinte años, ni ser inferior a tres.

Si se nos pregunta ¿existe o no la prescripción extraordinaria para faltas de acuerdo al CP?, tendremos que responder que depende cual sea la interpretación que utilicemos. Entonces, si hacemos uso de un método sistemático, tratándose de la acción penal se dirá que de la concordancia entre los arts. 440 y el 83 in fine, se deduce que la prescripción extraordinaria de la acción penal para faltas operará a los nueve meses. De esta concordancia se desprende subsidiariamente que todas la demás reglas sobre prescripción se aplican a las faltas (por ej.: en lo que se refiere a interrupción y suspensión).

Por su parte la Corte Suprema ha establecido la aplicación de esta clase de prescripción para la infracción delitos³⁰⁴ en reiterada jurisprudencia

La Corte Suprema ha establecido algunos criterios en torno a la prescripción extraordinaria de las faltas, así la ejecutoria emitida en el R.N. N° 3966-2007, Cusco³⁰⁵, señala como fundamentos los siguientes:

“Cuarto: Que del peritaje judicial obrante a fojas ciento cincuenta se advierte que la valorización de los daños atribuidos a los recurrentes asciende a mil doscientos

³⁰⁴ Para los delitos específicos en el ANEXO N° 3, se tienen: receptación en la ejecutoria emitida en el R.N. N° 3002-2007, Lima, específicamente el documento N° 1; para el delito de abuso de autoridad R.N.N°3129-2007 Lima, específicamente el documento N° 2, también el delito contra la fe pública en la ejecutoria emitida en el R.N. N° 3513-2009, Lima, específicamente el documento N° 4; así la ejecutoria emitida en el R.N. N° 381-2009, Puno, el documento N° 5; para las lesiones culposas leves se tiene la ejecutoria emitida en el R.N.N°3974-2009, Lima en el documento N° 6; R.N.N°464-2008 Lima documento N° 7; receptación R.N.N°4072-2007 La Libertad documento N° 8; coacción R.N.N°65-2009 Cajamarca, documento N° 9; falsificación de marcas o contraseñas oficiales R.N.N° 2414-2009 Lima, documento N° 11; apropiación ilícita R.N. N° 723-2007, Junin en el documento N° 12; denuncia calumniosa el R.N. N° 1548-2009, Lima, documento N° 14; falsedad ideológica R.N.N° 1591-2009, Tacna documento N° 15; R.N.N°611-2009, Huanuco, documento N° 23; concusión, abuso de autoridad, delito contra el orden financiero y monetario en la modalidad de omisión, peculado y otros, R.N.N° 3273-2007, Ancash, documento N° 26; abuso de autoridad R.N. N° 3905-2008, Cusco, documento N° 27; tráfico de influencias R.N. N° 3159-2007, Junin documento N° 31; Cohecho impropio R.N.N° 1409-2010 Ancash, documento N° 37; corrupción pasiva de auxiliar jurisdiccional R.N. N° 4607-2008, Cañete, documento N° 42.

³⁰⁵ Esta Ejecutoria emitida por la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de fecha cinco de mayo del 2009, véase en el ANEXO 3, de esta investigación, específicamente el documento N° 43.

veinticinco punto setenta y ocho nuevos soles, cuantía que resultaba inferior a la mínima establecida en el artículo cuatrocientos cuarenta y cuatro del Código penal, modificada por la Ley veintisiete novecientos treinta y nueve, del nueve de febrero del dos mil tres, vigente a la fecha de los hechos, en consecuencia el hecho no constituye delito contra el patrimonio, sino faltas por daños, que a tenor de lo prescrito en el art. 440 de la misma norma sustantiva, el plazo extraordinario de prescripción es de un año y seis meses, el que ha transcurrido en exceso, por lo que a este respecto dicha conducta ya no es pasible de persecución penal”, (pp. 5).

La prescripción en las faltas también tiene algunos aspectos a destacar aunque el Tribunal Constitucional³⁰⁶ ha declarado improcedente aquellas demandas que han tenido como petitorio el oponerse a que se apliquen los supuestos de la prescripción extraordinaria de la persecución penal a las faltas.

De la misma forma le serían aplicables a los casos de prescripción de las penas no privativas de la libertad.

Sin embargo, por la naturaleza de la prescripción extraordinaria no es conveniente aplicarla para hechos punibles de mínima gravedad, pues con ello se tergiversa su finalidad político criminal, ya que serviría de pretexto para prolongar indebidamente el plazo de actuación de estos procesos. Por lo cual planteo que los plazos deben ser los señalados en el art. 440, numeral 5 (ver en interrupción y suspensión).

Jurisprudencia de prescripción extraordinaria de la persecución penal.

1. El hecho denunciado se encuentra previsto y sancionado, por el artículo ciento veintidós (primera parte) del Código Penal, cuya pena máxima es de dos años; y desde la fecha de comisión del hecho delictivo, seis de junio de mil novecientos noventidós, han transcurrido tres años; por lo que el hecho que nos ocupa ha prescrito de conformidad a lo preceptuado por el artículo ochentitrés del Código Penal (Ejecutoria Superior del 20 de octubre de 1995. Recaída en la Causa N° 330-94. Procede de Lima).

2. La comisión del delito de concusión, el mismo que se encuentra tipificado en el artículo trescientos cuarenticuatro del Código Penal de mil novecientos veinticuatro, modificado por el Decreto Legislativo número ciento veintiuno, norma aplicable por ser la más favorable al reo en virtud del inciso undécimo del artículo ciento treintinueve de la Carta Fundamental del Estado vigente, concordante con el artículo sexto del Código Penal actual; que teniendo en cuenta que los hechos se produjeron el cuatro de noviembre de mil novecientos ochentitrés, y estando a la penalidad establecida en la referida norma se colige que se ha extinguido por prescripción la acción penal, conforme se prevé en los artículos ochenta y ochentitrés in fine del Código Sustantivo vigente (Ejecutoria Suprema del 18 de abril de 1994. Recaída en la Causa N° 143-93. Procede de Ica).

El Tribunal Constitucional no ha sido ajeno a resolver temas de prescripción extraordinaria e incluso ha validado su aplicación, en algunos casos declarando

³⁰⁶ Esta Sentencia emitida en el expediente N° 02203-2008-PHC/TC, véase en el ANEXO 5, de esta investigación, específicamente el documento N° 27.

infundada³⁰⁷ y en otros declarando fundada³⁰⁸, aunque no se ha detallado mayores criterios de desarrollo que puedan enriquecer el aspecto conceptual.

Sin embargo, en cuanto al aspecto procedimental, sí ha habido algunos aportes, por ejemplo dicho Tribunal ha establecido que las excepciones surgidas o planteadas durante el proceso no se deben resolver con la sentencia, sino de inmediato, ya que se “transgrede el principio de legalidad procesal e incide en la libertad personal de demandante”³⁰⁹, esto último como *ratio decidendi*, precisando el carácter vinculante (fundamento 12).

7.2. DE LA SANCIÓN PENAL O EJECUCIÓN DE LA PENA.

Este tipo de prescripción se encuentra determinado por el sistema de penas que se tiene en el CP combinado con el sistema de plazos a considerar. Así en la legislación peruana se utiliza el *plazo de prescripción de la pena conminada* (CP de 1991); en cambio en otras legislaciones se tiene por un lado el modelo del *plazo de la pena impuesta en la sentencia* [el CP (Ecu.), art. 107; el Proy. de CP (Salvador), art. 101 ad initio]; y por otro lado el modelo del *plazo legal*, el cual consiste en establecer sobre el monto de la pena concreta impuesta el incremento de un monto adicional [así en algunos casos **la mitad**: Anteproyecto de 1927 art. 71 referido a las penas temporales; en otros **un tercio**: art. 108 del CP (T.L.), el CP (C.R.), art. 84, numeral 1; etc.], en algunos otros modelos mixtos combinarán unos con otros: así por ejemplo se tiene el CP (Esp.) que utiliza como criterio de referencia en primer lugar la pena concreta impuesta por sentencia firme, pero el plazo de prescripción está determinado legalmente, así se regula en el art. 133 numeral 1; en el StGB § 79, 3 y 6; en el CP (Arg.) art. 65 y 66; en el CP (Bol.) art. 105; en el CP (Ch.) art. 97; en el CP (C.R.) art. 84 numeral 1; en el CP (C.), art. 65.

En el derecho comparado también se ha regulado un caso especial de este tipo de prescripción para los casos de penas conjuntas, el cual se rige por el criterio de la *gravedad de la sanción*, y en otros casos se establece el plazo de prescripción de *manera independiente para cada sanción*.

Así a manera de ejemplo se tiene:

- 1° **Para el modelo de las penas conjuntas que prescriben considerando la pena de mayor gravedad:** el CP (Bra.), art. 118; el CP (Ecu.), solo para multa y comiso, (art. 111); el CP (Esp.), art. 131 numeral 3; el CP (Aus.), art. 59 numeral 4; el CP (Por.), art. 121 numeral 2 así como el art. 122 si al delito se le aplican penas de *varias especies*; el CP (Méx. F.), art. 104; y el CP (Ita.), art. 172 segundo párrafo.
- 2° **Para el modelo de las penas conjuntas que prescriben en forma independiente:** el CP (C.R.), art. 85 para *penas diferentes*; el CP (C.), art. 64 numeral 2 para *la acción* y

³⁰⁷ Véase las Sentencias emitidas en los expedientes 3329-2010-PHC/TC, 2466-2006-PHC/TC y 2506-2005-PHC/TC, contenidos en el ANEXO 5, de esta investigación, respectivamente en los documentos N° 1, 2 y 3.

³⁰⁸ Véase la Sentencia emitida en el expediente 2522-2005-PHC/TC, contenida en el ANEXO 5, de esta investigación, específicamente el documento N° 4.

³⁰⁹ Véase la Sentencia emitida en el expediente 2522-2005-PHC/TC, fundamento 10 y el fallo en que se declaró fundada dicha demanda, en el ANEXO 5, de esta investigación, específicamente el documento N° 4.

art. 65 numeral 2 para *penas*; y tratándose de medidas de seguridad que comienzan desde la extinción de la pena se tiene el CP (Esp.), arts. 135 numeral 2 y 135 numeral 3; y el CP (T.L.), arts. 107 y 108 último párrafo.

También se ha considerado un modelo de reglas de prescripción diferenciado, es decir considerando la *distinta naturaleza de cada pena no privativa de la libertad*, empero los montos son determinados con plazos legales preestablecidos para cada una de estas penas, así por ejemplo:

1° **Para la pena de Multa:** el CP (Bra.), art. 114 (disposición propia), el CP (Arg.), art. 65 numeral 4; el CP (C.R.), art. 84 numeral 2; el CP (Méx. F.), art. 104; y el CP (Ita.), art. 157 numeral 4 y art. 172.

2° **Para la pena de Inhabilitación:** el CP (Méx. F.), art. 106.

3° **Para la pena alternativa:** el CP (Por.), art. 117 numeral 3.

4° **Para las penas restrictivas de Derechos:** el art. 109 párrafo único del CP (Bra.).

Una variante de este modelo es el de la *regla única o cláusula general*, es decir que existe una sola regla para todas las penas distintas a la privativa de la libertad, así se tiene el siguiente ejemplo:

El CP (Bol.), art. 101 literal c), que señala «*para los demás delitos* », y el art. 105 numeral 3 que precisa «*si se trata de las demás penas*».

Empero, existen también algunos ordenamientos jurídicos que *no admiten la prescripción de la ejecución de la pena*, tal es el caso de Puerto Rico³¹⁰ y de China como ya lo mencionamos líneas previas.

a. Prescripción Ordinaria.

Se define como el derecho que se obtiene por el transcurso del plazo máximo de la pena conminada con que se sanciona el delito por el cual se juzgó (por sentencia firme o auto de similar valor con el que haya finalizado el proceso).

Puede estar referido:

1° Para todo delito por el cual se impuso la pena única principal diferente a la privativa de la libertad, p.ej.: las penas alternativas de multa³¹¹, prestación de servicios a la comunidad, etcétera.

Las fuentes y antecedentes son: *específicamente* el CP (1863) art 96, in fine (pena de multa); el Anteproy. de CP (1877) art. 112 in fine (precisa los casos de la pena de multa sea

³¹⁰ El CP (P. R.) sólo contiene reglas penales referidas a la prescripción de la acción penal (arts. 77 literal d; 78, 79, 80), mas nó de la prescripción de la ejecución de la pena.

³¹¹ Véase al respecto Navarro, R. (1973) La prescripción en el derecho penal, pp. 320 y ss.

como accesoria, principal o única); el Anteproy. de CP (1900-1902), art. 105 último párr. (pena de multa); *genéricamente sin remisión*: el Proy. de CP (1916), art. 95 numeral 6; el CP (1924), art. 123 numeral 6; el Anteproy. de CP (1927), art. 72 (sólo para la inhabilitación, sea como principal o como accesoria - aquí su plazo se inicia desde que la pena principal ha prescrito o se ha extinguido de otra manera-); el Proy. de CP (Set. 84), art. 97 numeral 6; el Proy. de CP (Oct. -Nov. 84), art. 84 numeral 6; por *remisión*: el Proy. de CP (Ago. 85), art. 84 in fine; el Proy. de CP (Mar.- Abr. 86), art. 83 in fine; el Proy. de CP (Set. 89), art. 83 in fine; el Proy. de CP (Jul. 90), art. 84 in fine; y el Proy. de CP (Ene. 91), art. 80 in fine.

2º Para toda falta a la que se impuso una pena de multa o prestación de servicios a la comunidad, art. 440 numeral 5, aunque excepcionalmente se puede imponer como ya lo dijimos la pena privativa de la libertad para los casos de reincidencia para faltas dolosas contempladas en los arts. 441 y 444 del CP.

Las fuentes y antecedentes son: el CP (1863), art. 96 penúltimo párrafo; el Anteproy. de CP (1877), art. 112 penúltimo párrafo; el Anteproy. de CP (1900-1902), art. 105; el CP (1924), art. 383 numeral 7; el Proy. de CP (Oct.-Nov. 84), art. 340 numeral 5; el Proy. de CP (Ago. 85), art. 438 numeral 8; el Proy. de CP (Mar.-Abr. 86), art. 413 numeral 8; el Proy. de CP (Jul. 90), art. 409 numeral 6; y el Proy. de CP (Ene. 91) art. 433 numeral 5.

3º Para todo delito sancionado cuya pena conminada sea superior a veinte años tratándose de pena temporal y si se trata de la pena de cadena perpetua a los treinta años.

Sin embargo, cabe preguntarse ¿qué sucede si se admite la prescripción extraordinaria de la pena? En la doctrina es de esta opinión VÍCTOR PRADO³¹². Habrá que establecer que dicho plazo se limita de acuerdo a este tipo de prescripción.

La fuente directa es el Proy. de CP (Ene. 91), art 80 penúltimo párrafo, así como el CP (T.L.) art. 108 referido a la pena de prisión.

La jurisprudencia respecto a la prescripción de la ejecución de pena:

1. No habiendo sido capturado un reo condenado en la condición de contumaz a la pena de 6 meses de prisión, y habiendo transcurrido más de 6 años desde la fecha de la sentencia, se ha operado la prescripción del derecho de ejecución de la pena, de acuerdo al art. 123 numerales 5 y 6 del CP Como el condenado equivocadamente solicitó la prescripción de la acción penal, procede declarar de oficio la del derecho de ejecución de la pena (Ej. 4 Julio 1978 R. de J.P. 1978, pp. 645).

Como se sabe recientemente en el Perú incorporó las penas electrónicas en el art. 29-A en el CP, mediante la Ley N° 29499 (publicada el 19 de enero del 2010), por lo que ahora es

³¹² Prado (2000), pp. 257.

posible preguntarse si el sancionado a esta pena lograra zafarse del dispositivo electrónico qué sucede con los días de vigilancia electrónica personal que no se puedan verificar, se entenderá en un hipotético caso que se suman esos días al plazo de prescripción de la ejecución de la pena o no. La experiencia en este supuesto lo apreciaremos apenas se empiece a aplicar dicha sanción penal, por ahora solo planteo el caso.

b. Prescripción Extraordinaria.

Es el derecho que se obtiene al transcurrir el plazo máximo de la pena conminada por el delito que se le juzgó (por sentencia firme o auto de similar valor con el que terminó el proceso) incrementado en una mitad.

Los antecedentes de esta tipo de prescripción lo encontramos en: el Proy. de CP (1916), art. 96 penúltimo párrafo; el CP (1924) art. 124 penúltimo párrafo; el Anteproy. de CP (1927), art. 71 tercer párrafo; el Proy. de CP (Set. 84), art. 98 penúltimo párrafo y para las medidas de seguridad el art. 108 segundo párrafo; el Proy. de CP (Oct.- Nov. 84) art. 85 penúltimo párrafo, y para las medidas de seguridad el art. 78 segundo párrafo; el Proy. de CP (Ago. 85), art. 91 penúltimo párrafo; el Proy. de CP (Mar.-Abr. 86), art. 90 penúltimo párrafo; y en el derogado CJM se tenía el art. 64 primer párrafo.

En el derecho comparado acogía esta fórmula el CP (Sui.), art. 75, último párrafo, del texto de la versión original, pues en la vigente versión ya este texto ha sido modificado.

Empero, por la fórmula que utiliza el art. 87 in fine no queda claro si existe este tipo de prescripción. Esto amerita un comentario. Autores como VÍCTOR PRADO y BRAMONT ARIAS-TORRES la admiten aunque no dicen cómo ni por qué (pp. 93).

La fórmula genérica que utiliza el CP en su art. 87 in fine (dice: «*prescribe en los mismos plazos que la acción penal*») procede del Proy. (Set. 89), art. 87 in fine; Proy. (Jul. 90), art. 90 in fine; y del Proy. (Ene. 91), art. 87 último párrafo.

Condidero que no existe la prescripción extraordinaria de la pena por las siguientes razones:

- 1° Si bien de la interpretación literal y sistemática de los arts. 86 y 80 del CP se tiene que los plazos de prescripción de la ejecución de la pena son los mismos que para la persecución penal, no se puede concluir analógicamente por la simple remisión del art. 87 in fine, que existe la prescripción extraordinaria de la pena.
- 2° No pretendemos que aparezca expresamente en el texto una fórmula específica que autorice la prescripción extraordinaria. Incluso si así fuese (como lo hizo el CP de 1924) estaríamos en contra, pues no se trata de una simple interpretación histórica, que en algunos casos la convalidamos cuando ello coincida con el aspecto teleológico de este tipo de prescripción.

3° De otro lado, el sentido teleológico del art. 87 in fine no puede ser el que se configuraba en el art. 124 del código penal abrogado (interrupción por haber sido aprehendido el condenado para sufrir la pena), ya que ahora se exige para la interrupción de la prescripción ordinaria de la ejecución: el comienzo de la ejecución de la pena o el haber sido aprehendido el condenado a causa de la comisión de un nuevo delito doloso (véase el comentario a estos supuestos), entonces interesa responder a la siguiente interrogante ¿qué sentido tiene aplicar en este caso la prescripción extraordinaria mientras esté el condenado libre o no sea aprehendido, a pesar de cometer un nuevo injusto penal, si el plazo ordinario de prescripción de la ejecución seguiría corriendo?

Toda aceptación de la prescripción extraordinaria iría en contra de su propia finalidad pues no sería beneficiosa siempre para todo condenado, ya que el plazo se incrementaría y con esto se convalidaría aún más la vulneración del principio de proporcionalidad.

La prescripción extraordinaria sólo operaría cuando el condenado esté prófugo considerando que se trata de un caso de interrupción por la causal del comienzo de la ejecución. En todos los demás casos esta figura sería más lesiva o innecesaria (véase la parte pertinente a los supuestos de interrupción de la ejecución de la pena).

Por eso resulta necesario que la parte final del art. 87 del CP sea suprimida puesto que no se justifica su inclusión.

8. LA INTERRUPCIÓN.

Es el supuesto que impide la prescripción de la persecución penal o ejecución de la pena, anulando el transcurso del plazo de prescripción ya obtenido. Si se presenta durante un proceso impedirá la prescripción de la persecución penal; por el contrario, si se presenta una vez culminado este proceso con sentencia condenatoria, entonces impedirá la prescripción de la ejecución de la pena.

Se dice que impide, pues el plazo que estaba corriendo se detiene y anula, con lo cual se tiene que todo plazo que estaba corriendo o que había ganado el procesado o condenado habrá finalizado. Por todo lo cual, el plazo tendrá que volverse a iniciar (no reiniciar como sería el caso de la suspensión).

Sus presupuestos dependerán de si se trata de la persecución o de la ejecución; en el caso del CP se optó por el modelo mixto, ya que, de un lado los presupuestos son genéricos y de otro, específicos.

8.1. DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA PERSECUCIÓN PENAL (ART. 83)³¹³.

a. Actuaciones de las Autoridades Judiciales.

Constituye una causal genérica debido a que cualquier acto que realice el juez penal (en sentido lato: de cualquier instancia) se entenderá que interrumpe la prescripción ordinaria. Así p. ej.: con el auto apertorio únicamente se anularía todo plazo ganado antes de iniciarse el proceso, y el efecto mortal de la interrupción se suscitaría cada vez que el juez emite una resolución debidamente justificada y significativa, y no de mero trámite o mero formalismo.

En la doctrina SILVA SÁNCHEZ siguiendo a la jurisprudencia española señala “que no cabe estimar que se dirija el procedimiento contra el culpable antes de que el órgano instructor dicte una resolución con contenido material en la que se expresen los hechos objeto de la imputación y, de modo determinado o determinable, las personas a quienes éstos se imputan”, así concluye indicando que “sólo el Auto de incoación del sumario o diligencias previas da lugar a la iniciación del procedimiento, y que sólo este Auto puede interrumpir la prescripción, pues desde la fecha en que dicta se inicia el procedimiento contra los presuntos implicados”³¹⁴.

b. Actuaciones del Ministerio Público.

De igual forma interrumpen la prescripción de la persecución penal todas las actuaciones que el fiscal (en sentido lato: de cualquier instancia) realice al iniciarse la persecución penal. El vigente modelo no nos permite diferenciar cuándo se inicia la persecución penal, de la actuación del juez penal, ya que según este modelo es el juez el que investiga y por ende al emitir su auto apertorio de instrucción inicia la persecución penal, en cambio en el nuevo modelo procesal el legislador estableció de conformidad con la Constitución que siendo el representante del Ministerio Público el titular de la acción penal, ésta se promueve justamente con la formalización de la investigación preparatoria, que es a la vez el momento por el cual se inicia el proceso penal. (Según el N.C.P.P.)

Por ende a partir de la formalización de la investigación preparatoria se interrumpe cualquier plazo de prescripción.

Aquí cabe preguntarse ¿en qué casos el plazo de prescripción se interrumpirá debido a las actuaciones de las autoridades judiciales? La respuesta será cada vez que el juez tenga que disponer alguna actuación si ya no está vigente la actuación del representante del Ministerio Público.

³¹³ La jurisprudencia española considera que «Si tales diligencias están documentadas, y se han llevado a la práctica, interrumpen el plazo de prescripción (así, sentencia del T.S. de 30 de setiembre de 1994)», véase comentarios hechos por Guinarte Cabada en Vives et al. (1996), p. 685.

³¹⁴ Silva S., Jesús M. (1999). *¿Cuándo se interrumpe la prescripción del delito? A propósito del fundamento de derecho primero la sentencia de la audiencia provincia de Barcelona (CSECC.3.º) De 22 de enero de 1999*, p. 1828.

Los antecedentes nacionales tanto de las *actuaciones de las autoridades judiciales* como de las *actuaciones del Ministerio Público* los encontramos en: el Anteproy. de CP (1877), art. 111 desde que el procedimiento se dirija contra el culpable; el Anteproy. de CP (1900-1902), art. 103; el Proy. de CP (1916), art. 93; el CP (1924) art. 121; el Anteproy. de CP (1927), art. 67 numeral 2 con notificación; el Proy. de CP (Set. 84), art. 95; el Proy. de CP (Oct.-Nov. 84), art. 82; el Proy. de CP (Ago. 85), art. 90; el Proy. de CP (Mar.-Abr. 84), art. 89; el Proy. de CP (Set. 89), art. 86 primer párrafo; el Proy. de CP (Jul. 90), art. 87; el Proy. de CP (Ene. 91), art. 83 primer y segundo párrafo; así como el CJM en el art. 62 utiliza *actos judiciales de instrucción y juzgamiento*.

En ambos casos y considerando el estado constitucional de derecho, sostengo que toda actuación judicial o del Ministerio Público debería tener como estándar de exigencia que se trate al menos de una persona que indiciariamente resulte responsable de la comisión de un delito, pues la fórmula legal del art. 83 del CP, no contiene especificación o detalle de dicho supuesto normativo (actuaciones), por ende no cualquier actuación puede considerarse justificada, pues ello atentaría contra la presunción de inocencia así como contra la seguridad jurídica de todos los ciudadanos.

En este sentido, la última reforma española modificó el texto del art. 132 numeral 2 que se refería a la mención de si “el procedimiento se dirija contra el culpable”, ahora el nuevo texto de dicho numeral se refiere a si “el procedimiento se dirija contra la persona indiciariamente responsable del delito o falta”. De esta forma se superó las críticas al anterior texto.

Una de las cosas que nos lleva a plantear la posibilidad de aplicar este criterio para las faltas, a lo cual diremos que si se sostiene que la prescripción de las faltas se rige por la postura de la prescripción ordinaria y extraordinaria, sí tendría sentido aplicar la consecuencia del razonamiento antes expuesto, pero si se trata de asumir la posición de que las faltas se rigen por el sistema del plazo legal único, entonces la interrupción no operaría en ningún caso, pues la reincidencia es otro supuesto. Aunque, el hecho que no se aplique la interrupción a las faltas no significa que no se exija el estándar de que toda persona se reputa inocente, pero esto en atención a la Constitución.

Por ende, urge adecuar de lege ferenda el texto del art. 83, esto incluso en consonancia con el nuevo Código Procesal Penal del 2004.

Según este código (art. 336 numeral 1) se exige la individualización al imputado para proceder a la formalización de la investigación preparatoria, y si se considera que no cualquier diligencia o actuación puede interrumpir el plazo de prescripción, pues primero se debe identificar al sujeto y no basarse el supuesto normativo procesal de *todos los que resulten responsables* (frase indeterminada que aún se utiliza al amparo del modelo del C de PP de 1939), situación inapropiada desde la perspectiva del Derecho Constitucional, por tanto toda actuación procesal contra una persona que aún no ha sido reconocida como posible responsable, no interrumpe la prescripción penal³¹⁵.

³¹⁵ Ragués, R. (2012) La prescripción de los delitos y de las penas: una ocasión perdida, pp. 236.

En el derecho comparado se utiliza la expresión “persona (...) determinada” **CP (Esp.)**, art. 132, numeral 2, punto 3), aunque se considera que este dato debe figurar en la respectiva resolución judicial de inicio del proceso (situación semejante al del C de PP) o tratándose del nuevo modelo procesal en la resolución de formalización de la investigación preparatoria, como se ha establecido.

También se contempla el caso de una organización criminal, en cuyo supuesto no sea posible la identificación directa, así se señala que “mediante datos que permitan concretar posteriormente dicha identificación en el seno de la organización o grupo de personas a quienes se atribuye el hecho” (**CP (Esp.)**, art. 132 numeral 2, 3), este es un tema muy excepcional. En otros ordenamientos jurídicos se dispone que si sólo se identificó a unos cuantos sujetos y no a todos los sujetos que forman una organización criminal, el plazo de prescripción iniciará apenas se identifique a los sujetos, mientras tanto no.

En la doctrina española CHOCLÁN MONTALVO ha cuestionado el tratamiento que se debe dar a los casos de la interrupción del plazo de la prescripción en supuestos de criminalidad organizada, llegando a sostener que el tratamiento debe ser conforme al patrón clásico del derecho penal español, esto es, como si se tratara de una modalidad delictiva individual cualquiera, así señala el autor que “las dificultades procesales para identificar a ese autor [autor mediato] no revelan un problema diferente al de la investigación de la autoría en cualquier ilícito penal. No debe confundirse la cuestión del alargamiento de los plazos de prescripción en caso de criminalidad grave, con el diferente problema del establecimiento de un Derecho de prescripción más gravoso en virtud de determinadas dificultades procesales. La prescripción se interrumpe cuando el proceso se ha configurado subjetivamente, sobre la base de que la responsabilidad penal es individual y la acción penal que ejercita el Estado tiene un destinatario concreto. Por ello, no interrumpe la prescripción la acción que se tiene contra un partícipe para declarar su responsabilidad penal, por el ejercicio de otra acción (una diferente) que el Estado tiene contra alguno de los demás partícipes”. Agrega el autor que “la «colectividad» es un categoría extraña a la teoría de la autoría y ninguna consecuencia jurídica puede deducirse en orden a la prescripción de la acción para punir que se sustraiga a las reglas generales de la prescripción en caso de coautoría, aunque la concurrencia de autores mediatos e inmediatos tenga lugar en el contexto de una organización criminal, pues, en definitiva, la delincuencia grupal, «de lege data», debe ser tratada hoy por hoy conforme al patrón clásico de nuestro Código Penal”³¹⁶.

Uno de los supuestos que en el derecho comparado también se discute, es el caso de si la querella o su interposición genera efectos de interrupción o no de los plazos de prescripción tratándose de procesos especiales de acción privada. En España esto ha sido materia de un arduo debate, así se sostiene que “en primer lugar hay que decir que la querella no forma parte del procedimiento. Como dice GIMENO SENDRA, la querella es «la solicitud de que se instaure el proceso y se tenga al querellante como parte actora». Si es petición de que se inicie el procedimiento, ello significa que, por definición, es anterior al comienzo del procedimiento y que, además, la apertura de éste corresponde al órgano judicial a quien va dirigida la solicitud”. También considera el autor que “no se puede

³¹⁶ Choclán (2001), p. 5.

reconocer de manera más clara que la querella, vehículo en este caso de la *notitia criminis*, no es más que un medio *apto* para que se inicie de oficio el proceso penal”, concluyendo el autor en señalar “el proceso no se inicia con el solo traslado de la *notitia criminis*, sino que esta abre las puertas *para que* se inicie el proceso. Pero ¿quién inicia el proceso de oficio? ¿El particular que comunicó la *notitia criminis* o el Juez? Indiscutiblemente, sólo el Juez puede iniciarlo. Por tanto, según el propio texto de la Sentencia que estamos comentando, la querella o denuncia son sólo solicitudes medios *para que* el Juez inicie, en su caso el procedimiento”³¹⁷.

Esta postura es la que sostengo para los procesos por acción privada, ya que no es posible dejar en manos de un particular la interrupción por medio de la mera presentación de un escrito, prefiriéndose que sea el juez el que fije la referencia de la interrupción a través de su auto admisorio de la querella, relevándose de mayor fundamento.

c. Si el Imputado Comete Nuevo Delito Doloso.

Toda infracción penal realizada por el imputado antes de que se le inicie proceso, y luego de iniciado éste, interrumpe cualquier plazo de prescripción obtenido hasta ese momento. Se trata de la realización de un injusto doloso, sea por comisión u omisión. A diferencia de las otras causales de interrupción que operan sólo dentro del proceso penal (supuestos intraproceso), éstas operarán incluso con antelación al inicio del proceso penal (supuestos extraproceso).

Puede darse el caso que un sujeto cometa un primer injusto penal, iniciándose así el plazo de prescripción al no haberse aún iniciado proceso penal alguno, pero este plazo se interrumpirá a partir del momento en que el sujeto activo cometa un segundo injusto penal (y así sucesivamente), incluso a pesar de no iniciarse proceso penal alguno. Así pues todo juez penal tendrá que considerar, al momento de que se le solicite la declaración de prescripción o si lo hace de oficio, estos casos suscitados antes de que se inicie el proceso penal.

No existe unanimidad acerca del momento en que se inicia la interrupción³¹⁸. Para un primer grupo bastará el auto apertorio³¹⁹, para un segundo grupo la denuncia fiscal y para

³¹⁷ Rodríguez Mourullo, G. (2006). Prescripción del delito: Una reforma necesaria, p. 434. Al respecto Alfonso Serrano Gómez realiza una didáctica exposición de las diversas posturas de la denuncia o querella en su artículo titulado: *La interrupción de la prescripción del delito en los códigos penales de Perú y España* (2002, pp. 184 y ss.).

³¹⁸ Por su parte Bacigalupo refleja toda la problemática de la interrupción al comentar la STC 63/2005 y señalar sobre el inicio de la interrupción que “el TC ha tratado como una cuestión del método de interpretación [gramatical] lo que en verdad es un déficit de determinación del texto legal. Por esta vía se ha decidido sobre la interpretación del art. 132.2 CP, como si fuera un Tribunal del orden jurisdiccional penal. Dicho de otra manera: ha insistido en considerar el problema constitucional presentado por el texto del art. 132.2 CP como una cuestión de la aplicación del mismo (lex stricta), en el lugar de abordar el verdadero problema: su compatibilidad con el principio de legalidad por infracción de la exigencia de lex certa. De esta manera ha superado los límites propios de la jurisdicción constitucional, toda vez que ha rechazado como irrazonable una interpretación basada en un método interpretativo aceptable y ha establecido una nueva sin demostrar convincentemente que la interpretación de la Audiencia haya afectado valores constitucionales y con una inconsistente aplicación del método teleológico”, (2009, “*Problemas constitucionales de la prescripción de la acción penal. Notas sobre la STC 63/2005*”. En teoría y práctica del derecho penal. 1 ed., Vol. 2, Madrid - España: Marcial Pons, pp. 910).

³¹⁹ Esta es la postura que en España asumía en el año 2003, Rodríguez Ramos al señalar “la resolución del juez instructor dictando contra el “culpable” (en realidad es solo un “imputado”, que luego se convertirá en acusado) auto de

un tercero, el juzgamiento por delito doloso. Éste es un debate vigente en la doctrina. Asumo la posición de considerar que esta causal de interrupción opera a partir de la emisión del auto apertorio de instrucción, ya que implica una mayor garantía para el procesado; no podría ser ninguna de las demás porque hasta que opere el juzgamiento puede que el anterior delito ya haya prescrito. Tampoco la denuncia fiscal pues es casi siempre muy relativa y más aún porque la Fiscalía no es el órgano encargado de la administración de justicia (según el modelo del C de PP).

Tratándose del nuevo modelo, la referencia del inicio de esta causal de interrupción opera con la formalización de la investigación preparatoria.

Sin embargo, creo que el efecto de la interrupción de esta causal no es necesario, pues el mismo resultado se produciría si existiera otro plazo distinto de prescripción para el nuevo injusto realizado, más aún si se tiene en cuenta lo señalado por las reglas de prescripción referidas al concurso, o por interpretación a la reincidencia, ya que las otras causales de interrupción por ser más genéricas impedirían de manera más efectiva la continuación del plazo de prescripción de dicho nuevo injusto doloso. Por eso sostengo que esta causal sea suprimida.

Los antecedentes nacionales de esta causal se encuentran en los siguientes textos legales legislativos y prelegislativos: Según el supuesto de *la comisión de un nuevo delito doloso* se tiene al CP (Santa Cruz) art. 105; el CP (1863) art. 97; el Anteproy. de CP (1877), art. 111; el Anteproy. de CP (1900-1902), art. 108; el CP (1924, modificado por el D. Leg N° 121, art. 2, art. 121; el Anteproy. de CP (1927), art. 67 numeral 1 que la denomina *nueva infracción o sometido a medida de seguridad*; el Proy. de CP (Set. 84), art. 99; el Proy. de CP (Oct.-Nov. 84), art. 86; el Proy. de CP (Ago. 85), art. 90 primer párrafo; el Proy. de CP (Mar.-Abr. 86), art. 89 penúltimo párrafo; el Proy. de CP (Set. 89), art. 86 tercer párrafo; el Proy. de CP (Jul. 1986), art. 87; y el Proy. de CP (Ene.91), art. 83 segundo párrafo.

Tabla 1: *Causales de interrupción de la persecución penal*

INTERRUPCIÓN	Actuaciones de las Autoridades Judiciales
	Actuaciones del Ministerio Público
	Si el imputado comete nuevo delito doloso

Nota: Aquí se señalan los tres supuestos de la interrupción de la prescripción de la persecución penal.

procesamiento (en el procedimiento ordinario) o de apertura del período intermedio (en el abreviado)”(2003, La prescripción y la estafa en la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de marzo de 2003 ¿derecho penal figurativo, abstracto o surrealista?, pp. 750).

8.2. DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA (ART. 87).

Sobre el inicio del plazo de prescripción de la ejecución de la pena impuesta se debe considerar que la sentencia condenatoria impuesta sea firme (aunque el proyecto de CPP utiliza en su art. III el término **definitivo**³²⁰); consecuentemente constituye cosa juzgada toda resolución que es inimpugnable e inalterable. Entonces, dicha sentencia “produce la eficacia de la cosa juzgada pero sólo en su sentido negativo, es decir, impide una nueva sentencia sobre el mismo objeto penal enjuiciado con anterioridad”³²¹.

La Constitución de 1993 en su art. 139 numeral 13, refiriéndose a la garantía de la cosa juzgada, utiliza en su primer párrafo el término *ejecutoriada* (a diferencia de la Constitución de 1979 art. 233 numeral 11 que utilizó el término *firme*). Preciséndose términos, se aclara que la ejecución de una sentencia condenatoria es consecuencia de haber ganado firmeza, luego de la cual recién se producirá la cosa juzgada. Se define a la ejecución penal como “la actividad ordenada y fiscalizada por los órganos jurisdiccionales para lograr el cumplimiento de los títulos de ejecución”³²². Al respecto el Código de Ejecución Penal es incompleto, ya que no regula la ejecución de la pena de multa ni de los sustitutos de la pena privativa de la libertad [¿es que éstas no se ejecutan, o sí se ejecutan pero de manera diferente?]. La ejecución es similar para todas las penas, y todas tienen el mismo punto de partida para su cómputo.

Así, es indispensable preguntarse si puede haber prescripción de la ejecución antes de que se inicie el cumplimiento de la pena impuesta. El art. 87 del CP proporciona la pauta para afirmar que sí puede iniciarse la prescripción de la ejecución de la pena cuando ésta ha quedado firme, debido a que en este artículo se expresa que se interrumpe la prescripción de la ejecución de la pena con el comienzo de ejecución de la misma. Empero, con este argumento se aprecia que la denominación “prescripción de la ejecución” no es la correcta, ya que se admite la prescripción incluso antes de esta ejecución. Entonces, ¿cómo se debería llamar a este segundo caso? O mejor dicho, en este segundo caso, ¿qué es lo que prescribe, acaso la pena, o se trata de un error del legislador de 1991? En realidad no es un error, sino que la ejecución es abstracta y el cumplimiento es concreto, empero si este caso se da, habrá que ser considerado como una manifestación más de la ejecución.

Si se asume la hipótesis que la prescripción de la ejecución de la pena se inicia después de haberse iniciado la ejecución de la sentencia condenatoria, entonces tendría que haber coincidencia entre el momento de la firmeza de una sentencia condenatoria con el inicio de su ejecución. Luego, mientras no se dé la ejecución de la pena, no podrá haber prescripción

³²⁰ Al respecto es criticable la no distinción de términos que omite hacer Carrión Lugo al identificar **definitivo** con **ejecutoriada** y esta con **cosa juzgada**, por eso es que distinguimos, véase Carrión, J. (setiembre, 1995) El recurso de casación en el proyecto de código procesal penal peruano, pp. 51.

³²¹ Valentin Cortes Domínguez, en la obra compilada de Gimeno et al. (1990), pp. 471; en cambio el efecto positivo se refiere a la influencia de una sentencia firme sobre un segundo proceso, imponiendo al segundo tribunal, condicionar a la primera sentencia la suya propia. En efecto “una sentencia penal firme no determina prejudicialmente el contenido de la segunda sentencia, ni respecto a otro sujeto pasivo (por el mismo hecho) ni del mismo sujeto pasivo (por un hecho distinto, aún conexo o condicionado por él)”, véase Fairen (1990), pp. 518.

³²² Valentin Cortes Domínguez en Gimeno et al. (1990), pp. 746.

de la misma, con lo cual la primera causal de interrupción que señala el art. 87 no es de la ejecución de la pena, pues ésta aún no se ejecuta, sino será de la persecución penal.

Por otro lado, si se asume la hipótesis que distingue entre la firmeza de una sentencia y su ejecución, pueden presentarse dos clases de supuestos para precisar el inicio de la prescripción de la ejecución de la pena:

- 1° La prescripción de la ejecución de la pena se inicia cuando la sentencia con que se condena es firme, sin embargo aún no ha comenzado a cumplirse, así se trata de la prescripción de la ejecución de la pena, pero sin cumplimiento; y,
- 2° cuando iniciada la ejecución de la pena, el condenado deja de cumplir la pena impuesta (en el caso de las penas privativas de libertad efectiva, al fugarse; en las limitativas de derechos, al dejar de acudir los fines de semana; en la multa, al dejar de cumplir con el pago de las cuotas de días-multa).

Tratándose del primer supuesto del inicio de la ejecución de la pena, es decir sin cumplimiento, la interrupción de la misma podrá actuar sólo desde el momento en que se impuso una condena vía sentencia firme, la que fue incumplida y, hasta el momento en que se inicie su cumplimiento (p.ej.: la fuga, o el caso en que nunca se cumplió con pagar ninguna de las cuotas de la multa); y para el segundo supuesto, la causal de interrupción se presentará cuando el condenado, que ya venía cumpliendo su pena, deja de pronto de cumplirla, siendo aprehendido a causa de la comisión de otro delito doloso.

Es indispensable plantearse varios supuestos a fin de ver si es justificable o no la causal de interrupción referida a la *aprehensión por la comisión de otro delito*. Así se aprecia los siguientes casos:

- 1° Si me fugo y no me aprehenden, entonces logro obtener mi prescripción.
- 2° Si me fugo y me aprehenden, entonces sólo cumplo lo que me falta (obtengo vía la integración analógica in bonam partem la consecuencia de la suspensión); otra variante de este caso es que estoy cumpliendo mi pena, me fugo, me aprehenden, vuelvo a cumplir y me vuelvo a escapar, entonces sumando el nuevo plazo que he ganado al anteriormente obtenido, solicito la prescripción. Soy de la opinión de que, de *lege lata*, esto es posible porque en este caso no operaría la causal de interrupción por el comienzo del cumplimiento.
- 3° Me fugué y cometo otro delito, luego puedo obtener la prescripción, pero me abrirán proceso por el nuevo delito realizado. Ésta es una posibilidad que contempla el CP con la regla del art. 87, sin embargo la desestimo.
- 4° Me fugué y me aprehenden por haber cometido otro delito doloso; luego se interrumpe el plazo de pena ya cumplido volviéndose a cumplir el plazo originario de la pena. Aquí queda por precisar qué es aprehensión; si ésta amerita un auto apertorio de instrucción previo en el que se ordene detención, o una detención policial en el caso de flagrancia, o tratándose del N.C.P.P., la formalización de la investigación preparatoria.

- 5° Me fugué, cometo otro delito doloso, me abren proceso y luego me juzgan, entonces recién se obtiene el plazo de interrupción (vale decir que desde que me imponen la pena, corre la interrupción: rige desde este momento o se retrotrae a la comisión del delito³²³). Pero esto deviene en absurdo, ya que no toda imposición de sentencia implica que el procesado-condenado esté presente. Luego, según este supuesto, la gran mayoría de sentenciados ya estaría libre, es decir sólo se podrá interrumpir tratándose de delitos de mediana y alta gravedad.
- 6° O en todo caso se elimina esta causal de interrupción, y con lo cual el hecho de que se cometa otro delito es irrelevante para la obtención de la prescripción. Entonces el delito cometido sigue su curso de manera independiente hasta que se dicte la sentencia. Dentro de este plazo, si aún se está cumpliendo la pena, se tendrá que esperar a que culmine ésta para recién iniciar la ejecución de la otra pena por el ilícito posteriormente cometido -de conformidad con el art. 51 del CP; en cambio si el condenado se encuentra en libertad, tendrá que empezar a cumplir la pena.

Esto constituye un supuesto encubierto de reiterancia o reincidencia al revés, ya que por los mismos hechos juzgados el juez o la Sala que sentenció, ordenará imponer nuevamente dicha pena, ignorándose el plazo ya cumplido de la pena (que sería mayor aún si ya estaba detenido antes de la primera sentencia, art. 47 del CP), lo cual marginalmente también atenta contra la cosa juzgada, pues en términos prácticos constituye una nueva pena (se tendrá que precisar un nuevo plazo de cumplimiento y hasta la modalidad, con lo cual se desvanece la posibilidad de obtener beneficios penitenciarios). Otro elemento en contra es que se atenta contra el principio de proporcionalidad y de culpabilidad. Así, el solo hecho de haber optado por el sistema abstracto de cumplimiento de pena ya significa una vulneración de tales principios y ahora se agrega esta consecuencia desde todo punto de vista rechazable (salvo claro está, el excesivamente retributivo de la pena). Además este sistema de alguna manera legitima la ineficacia de la administración de justicia al establecer estos plazos tan amplios, volviendo más inoperativo la obtención de la prescripción.

Por consiguiente, toda ejecución presupone firmeza, pero no necesariamente la ejecución tiene que haberse iniciado y conforme a ello el inicio del plazo de prescripción de la ejecución comenzará a contarse antes de su cumplimiento o al quebrantarse éste; de lo contrario no se podría hablar de la prescripción de la ejecución de la pena a partir de la sola firmeza (art. 86 del CP); esto no contradice la afirmación anterior. Luego, tanto la firmeza como el quebrantamiento resultan necesarios.

Es de sumo interés lo afirmado por SOLER en torno a la posibilidad de que opere o no la prescripción de la pena cuando ésta se ejecute o no, al señalar que “la prescripción de la pena presupone el incumplimiento de la sentencia, de manera que toda vez que pueda afirmarse que la pena está en ejecución, como por ejemplo, el pago en cuotas de una multa, no importa la ejecución de la pena y, en consecuencia, no interrumpe la prescripción”

³²³ Para los que postulan esta idea, la interrupción tendría que retraerse, produciéndose con la sentencia condenatoria la finalización de la causal de interrupción.

agregando el autor que “el término de prescripción de una pena comienza a correr desde que empieza su inexecución: si la pena no ha empezado a cumplirse, desde la media noche del día en que se notifica al reo la sentencia; si ha comenzado el cumplimiento, desde la media noche del día en que se lo quebranta³²⁴” enviando luego al art. 66 del código penal argentino.

En torno a los quebrantamientos (es decir, los casos de aquellas penas que nunca se cumplieron o, si se venían cumpliendo, de pronto esto se paralizó) se precisa que se produce con *la fuga*, tratándose de penas privativas de la libertad; en los casos de multa con *el no pago de ésta* (sea en cuotas o en bloque, de acuerdo al plazo acordado); si se trata de penas limitativas de derechos, como la prestación de servicios a la comunidad, se da *cuando nunca se prestó los servicios impuestos*, y si los venía prestando, *cuando se dejó de hacerlo*; la de limitación de días libres, cuando *el condenado no permaneció ningún fin de semana*, o, si ya lo había estado haciendo, de pronto *lo incumplió*.

El caso de la inhabilitación es curioso, pues si se trata de una formalidad es improbable que se vulnere. Así por ejemplo, si se me prohíbe mi derecho de sufragio, luego no podré hacerlo en un proceso electoral hasta que la prohibición desaparezca. Sin embargo si se me incapacita para negociar, la cosa cambia, pues puedo estar inhabilitado, pero informalmente realizo actividad comercial.

A la larga se obtiene las mismas consecuencias sin vulnerar los principios garantistas del sistema penal. Así, más bien se tiene que considerar que no opera la prescripción de la ejecución de la pena mientras se esté ejecutando o cumpliendo otra impuesta con anterioridad. Habría que distinguir entre las clases de pena compatibles y respecto de qué delitos, dolosos o culposos, se da esa compatibilidad y determinar si es necesario establecer un monto de pena mínimo como referencia para la prescripción.

Por tanto, creo que los supuestos de interrupción no son siempre necesarios, por lo cual algunos casos, de *lege ferenda* deberían ser suprimidos, sobre todo cuando sus consecuencias sean similares tratándose de injustos penales dolosos de menor gravedad. En cambio, tratándose de la realización de injustos penales de mediana y alta gravedad, el plazo de prescripción debería incrementarse sobre el monto de la condena impuesta (p. ej.: en un tercio).

A continuación, se hace referencia a cada una de las causales de interrupción de la prescripción de la ejecución de la pena:

a. Por el comienzo del cumplimiento.

Este supuesto sólo se justifica cuando el condenado se ha fugado antes de iniciarse la ejecución de su condena; entonces cuando se empieza a ejecutar dicha condena, el plazo que parcialmente obtuvo el condenado de manera inmediata debe ignorarse.

³²⁴ Soler (1951), pp. 523.

¿Qué sucede en los casos en que un condenado se fuga y luego retorna por su cuenta, o porque es aprehendido (capturado)? Se tiene que decir que analógicamente habrá que aplicar la consecuencia de las causales de suspensión, pues como se aprecia en el art. 87, el legislador consideró indispensable referirse a las causales de interrupción de la prescripción de manera expresa. En cambio dio por sobreentendido que la fuga lo que hace es suspender el plazo de prescripción de la pena, pero no impedir que por este lapso de suspensión no se consigne la prescripción de la pena; por eso señalo que parcialmente se recoge la consecuencia de la suspensión. Como se sabe, tanto la suspensión como la interrupción de la persecución penal, impiden la prescripción ordinaria de la acción penal, pero no la extraordinaria; en el caso planteado sólo se recoge la consecuencia de la suspensión con lo cual, luego de reiniciado el cumplimiento de la pena, no se anula el plazo de prescripción ya obtenido.

Resulta necesario señalar que cuando el condenado se ha fugado y no regresa ni es aprehendido, no hay suspensión alguna, operando así la prescripción de la ejecución de la pena.

Cabe aclarar que el cumplimiento de una pena no interrumpe el plazo de prescripción, sino lo que hace es invalidarlo por ser otra de las causales de extinción de la ejecución de la pena tan igual como el indulto, por poner un ejemplo. Así se rechaza toda identificación entre el cumplimiento de la pena y la interrupción. Por esta razón, no comparto la posición adoptada en el CP que hace esta equiparación en su art. 87 (la fuente de este artículo se encuentra en el CP (Bra.), art. 117 numeral 5).

Esta identificación cobra relevancia, como antes se ha expuesto, cuando el plazo de prescripción se reinicia, luego que se ganó parcialmente un plazo de prescripción. De *lege lata* sostengo que ese plazo no debe eliminarse, sino que, a similitud del efecto de la suspensión (que en estos casos no existe para la ejecución de la pena), debe conservarse.

b. Por haber sido aprehendido el condenado a causa de la comisión de un nuevo delito doloso.

Sobre el contenido de esta causal analizada a profundidad es pertinente lo señalado con anterioridad.

Los antecedentes nacionales tanto de uno como de otro los encontramos en: el CP (Santa Cruz) art. 105; el CP (1863) art. 97; el Anteproy. de CP (1877), art. 113 (desde que el procedimiento se dirija contra el culpable); el Proy. de CP (1916), art. 96 (por el comienzo de la ejecución o por haber sido aprehendido el condenado para sufrirla); el CP (1924) art. 124 (comienzo de la ejecución o por haber sido aprehendido el condenado para sufrirla); el Anteproy. de CP (1927), art. 67 numeral 1 (nueva infracción notificación); el Proy. de CP (Set. 84), arts. 98 y 99; el Proy. de CP (Oct.-Nov. 84), art. 86; el Proy. de CP (Ago. 85), art. 91; el Proy. de CP (Mar.-Abr. 86), art. 90; el Proy. de CP (Set. 89), art. 86 segundo párrafo; el Proy. de CP (Jul. 90), art. 90; el Proy. de CP (Ene. 91), art. 87; y el CJM, arts. 64 y 65.

Tabla 2: *Los supuestos de interrupción de la prescripción de la sanción penal*

INTERRUPCIÓN	Por el comienzo del cumplimiento de la pena
	Por haber sido aprehendido el condenado a causa de la comisión de un nuevo delito doloso.

Nota: Aquí se describen cada uno de los supuestos de interrupción de la prescripción de la ejecución de la pena.

9. ¿DE QUÉ DEPENDE EL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE LA PERSECUCIÓN PENAL Y DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA?

No existe claridad tal y como está redactado el art. 80, primer párrafo, del CP respecto a si los montos señalados para las penas conminadas variarán si se tomaran en cuenta en primer lugar las circunstancias agravantes o atenuantes (genéricas o específicas), en segundo lugar el grado de ejecución y en tercer lugar la participación del sujeto activo, a fin de establecerse el plazo de referencia para la prescripción de la persecución penal y la ejecución de la pena. Este artículo utiliza la frase “*máximo de la pena fijada por la ley para el delito*”, por ello se debe entender que se excluye todas las circunstancias atenuantes genéricas, empero ¿qué sucede con las circunstancias específicas?:

P.ej. 1: **A** mata a **B**, pero **B** es su padre, en el proceso se discute si **B** actuó con emoción violenta, ¿acaso el plazo será el del delito de parricidio? o ¿el delito de homicidio por emoción violenta agravada?; 2: **A** y **B** hurtan a **C**, por la noche, dejando en grave situación a la víctima, y **A** es el cabecilla, entonces se tiene las siguientes posibilidades, si **A** cometió hurto será reprimido con el máximo de pena conminada que es de tres años (art. 185), si se considera la circunstancia agravante del momento de comisión por la noche el plazo será de seis años (art. 186 primer grupo de circunstancias agravantes), si se considera la circunstancia agravante de la grave situación en que dejó a la víctima el plazo será de ocho años (art. 186 segundo grupo de circunstancias agravantes) y si se considera su calidad de cabecilla el plazo será de quince años (art. 186 tercer grupo de circunstancias agravantes).

Entonces, sugerimos la interrogante de si es correcto que un autor al cual se le imputa la consumación de un injusto penal, y un cómplice secundario o alguien que actuó en grado de tentativa o bajo alguna coacción, etcétera, tengan el mismo plazo de prescripción de la acción penal y de la pena. En todos estos casos el problema está en quién determina cuál es el delito o injusto que se tomará como referencia; ¿acaso será lo denunciado por el fiscal o lo que dispone el juez en su auto apertorio, o simplemente diremos que se trata de un “problema procesal”?

La cuestión resulta difusa en el caso de la prescripción de la persecución penal en que no se tiene certeza de la imputación hecha al imputado, diferente es el caso del sentenciado para la prescripción de la ejecución de la pena. Sin embargo, para ambos casos la solución es idéntica.

Luego, respecto de la materia de la persecución penal creo que deberá ser la definida por el juez en el auto apertorio de instrucción y en el caso del nuevo modelo procesal, desde el

momento de la formalización de la investigación preparatoria. No hay que olvidar que en este caso será innecesario realizar una prognosis que obedezca a razones axiológicas (SERRANO BUTRAGUEÑO, pp. 223).

Un caso especial se da con los errores que comúnmente cometen los jueces a la hora de investigar por un delito cuando el hecho constituye una falta (injusto penal con la consecuencia de un delito o una falta por el quantum), en estos casos se tendrá que corregir, sin perjuicio de las responsabilidades si éstas las hubieren.

Así el punto de partida de la imputación será el que conste en el auto apertorio de instrucción, es decir la calificación más específica posible sin consideración de las circunstancias agravantes ni atenuantes genéricas. En el ejemplo 2 se tendrá a bien el plazo máximo de la pena más grave si se aperturó por el art. 185 y 186, siempre y cuando este último vaya acompañado del numeral respectivo con la especificación de la circunstancia agravante; si ello no ocurre, se aplicará el plazo máximo más leve de las agravantes (de igual forma para el ejemplo 1, siempre y cuando no haya un concurso, ya que en estos casos tendrá que aplicarse las reglas propias del concurso).

Esta opción de interpretación se justifica de acuerdo con criterios de seguridad jurídica³²⁵, ya que toda investigación está sujeta a muchas circunstancias - aleatoriedad -, sean en beneficio (el caso de los cómplices secundarios o de la tentativa) o en contra del imputado (con esto se impide que el plazo se incremente por encima de lo establecido como en el caso del delito masa, o también se descubran nuevos hechos que agraven la imputación: de una agravante a otra); o incluso cuando todo está definido como es el caso de la flagrancia.

De igual forma, los plazos de prescripción de la ejecución de la pena dependerán del criterio de pena conminada (art. 80 en concordancia con el art. 87 in fine del CP).

En España (posición mayoritaria) se considera la pena que le corresponde al grado de ejecución o participación; e incluso algún sector de la doctrina sugiere también las circunstancias relativas a la determinación de la pena (atenuantes y agravantes)³²⁶.

En el derecho comparado siguen esta tendencia el CP (Ch.), art. 104; el StGB, §78 numeral 4; y el CP (Por.), art. 117 numeral 2. En sentido contrario el CP (Ita.), art. 157 segundo párrafo.

³²⁵ De allí que en la doctrina se plantea la diferenciación de plazos de prescripción de la persecución, es decir que dicho plazo tiene que ser menor que el de la prescripción de la ejecución de la pena, ya que “la responsabilidad criminal está aún sin depurar, sin sustanciar, sin juzgar”, véase Serrano I (1996), pp. 223. En este mismo sentido Gracia et al. (2006), pp. 402.

³²⁶ Véase los comentarios hechos por Gumersindo Guinarte Cabada en la obra colectiva de Vives et al. (1995), pp. 680 y 681; en este mismo sentido Serrano I (1996), pp. 220; Boldova Pasamar en Gracia et al. (2006), pp. 415, precisa que “la determinación de los plazos en función de la pena impuesta por cumplir supone que también hay que atender a otras circunstancias que afectan al cumplimiento de las penas, como es el caso del abono de prisión provisional o la reducción de su duración por la vía del indulto parcial”. Y antes con el derogado código penal español, Morillas (1991), pp. 203 y 204.

En la doctrina española se planteó la posibilidad de *combinar* las causales de extinción de la prescripción de la ejecución de la pena con la de su cumplimiento, desde la época de SILVELA³²⁷. Sin embargo, esta misma posibilidad ha sido replanteada por SERRANO BUTRAGUEÑO, al decir que “para saber el plazo de prescripción aplicable habrá que tener en cuenta la pena concreta, o, en su caso, la parte de pena que efectivamente reste por cumplir”³²⁸.

Resulta interesante el sistema de prescripción gradual que plantea el CP (Méx. D.F.) en su art. 114, (VELA TREVIÑO, pp. 477). El CP (Ch.) regula esta figura en el art. 103, pero exige que se haya cumplido como mínimo un plazo mayor que el de la mitad para que prescriba y que no haya habido causal de interrupción alguna. En el CP (Pan.), art. 119, desde la sentencia ejecutoriada.

En sentido contrario el StGB en su §79 literal b, considera la facultad del juez a pedido de la autoridad judicial para prolongar el plazo de prescripción, considerando que ellos sólo tienen supuestos de suspensión y no de interrupción, en la prescripción de la ejecución de la pena.

Considero que el sistema adoptado en este artículo sobre los plazos máximos de prescripción considerando el criterio de la pena conminada o abstracta no es correcto, ya que éste conduce a una contradicción, según la cual el plazo de cumplimiento de pena (individualización de pena³²⁹) resulta ser más conveniente y benigno que el plazo de prescripción, pues el plazo de detención que sufrió el ahora condenado se le descontará para el cumplimiento de su condena. Pero tratándose del plazo de prescripción éste comenzará desde su inicio como una nueva pena (al ser abstracta, y ello tal vez explique por qué no existen casos de prescripción de la ejecución de la pena, al menos considerando la muestra de esta investigación, por lo menos no se han encontrado casos conforme a las reglas del CP³³⁰ salvo uno).

³²⁷ Serrano I. (1996), pp. 219 cita a Silvela quien sostuvo que “la prescripción de la pena puede aparecer combinándose con el cumplimiento, cuando el reo que la ha extinguido en parte logra sustraerse a ella. Preciso es entonces tener en cuenta uno y otro tiempo, exigiendo para la prescripción de lo que aún faltara menos espacio (...)”

³²⁸ Serrano I. (1996), pp. 219 cita a Álvarez García J., en sus comentarios al art. 115 del anterior código penal. En esta última incluye un excelente y convincente ejemplo para demostrar su aseveración: “Supongamos que un sujeto fue condenado por un delito de homicidio a la pena de ocho años de prisión; que con anterioridad a la firmeza de la sentencia hubiere pasado en prisión preventiva dos años; que una vez firme la resolución, haya purgado tres años más en una institución penitenciaria; y que cuando aún le quedaran tres años para cumplir la condena quebrantara la prisión... Supongamos que en la misma resolución judicial se ha condenado a otro y con idéntica pena, y que el otro sujeto, para evitar el internamiento en prisión, huye en el mismo momento en que la sentencia adquiere firmeza. Pues bien, si como referencia para el cómputo de la prescripción utilizáramos la pena impuesta por la sentencia y no la que quedara efectivamente por cumplir, resultaría que el sujeto que estuvo internado cinco años alcanzaría la prescripción de la pena tres años después que el sujeto que no llegó a pasar en ningún momento por la prisión”. También en este sentido Boldova Pasamar en Gracia et al. (2006), pp. 342.

³²⁹ En los comentarios hechos al art 133 que utiliza el término «impuestas» del código penal español se afirma que «Existe practica unanimidad en estimar que las penas a considerar aquí no son las abstractas previstas para el delito, sino las concretamente impuestas en el fallo a cada condenado. También se ha argumentado convincentemente la conveniencia de referir el computo para la prescripción a la «cantidad» de pena que quede por descontar, restando entonces de la duración nominal impuesta en la sentencia los períodos de prisión preventiva o indultos parciales (Álvarez García)» Véase comentarios hechos por Gumersindo Guinarte Cabada en Vives et al. (1996), pp. 686. En Alemania Maurach indica que este es el criterio que se sigue para la prescripción de la ejecución de la pena, Maurach, Heinz y Zipf (1995), pp. 977.

³³⁰ Véase Sáenz, A. (1996), Tesis, pp. 180 y ss. En España algunos autores consideran que el plazo de prescripción de la ejecución deben ser mayores que los de la persecución, pero no olvidemos que la técnica legislativa que adopta el CP

Así pues, de *lege ferenda*, el criterio objetivo de la seguridad jurídica debe ser desestimado al haber desaparecido la aleatoriedad; por ende, aquí deberá de hacerse una reformar asumiendo el criterio de la pena concreta impuesta en la condena, para lo cual previamente deberá de modificarse el sistema de plazos de la prescripción de la persecución, es decir siempre debería de considerarse la pena conminada pero únicamente del tipo base. Esto posibilitaría que los plazos de prescripción de la ejecución de la pena sean *mayores* que de la persecución considerando las circunstancias agravantes y *menores* considerando las atenuantes.

La Corte Suprema ha señalado algunos criterios para valorar al cómplice secundario, así se tiene lo fundamentado en la siguiente ejecutoria que precisa cuándo se inicia el cómputo de la prescripción para dichos cómplices:

“Séptimo.- Que se atribuye al encausado Alva Odría dos modalidades delictivas similares y con igual propósito:

(i) Haber celebrado cinco contratos de préstamo ideológicamente falsos con la empresa H & Metales SA.... Cabe agregar que similares contratos fueron suscritos por H & E Metales SA con otras dos personas naturales. Los contratos en mención estaban destinados a sustentar una aparente liquidez de la mencionada empresa.

(ii) Haber proporcionado cuatro facturas no reales a la referida empresa H & Metales SA, de fechas uno, dos, tres y veintinueve de marzo de mil novecientos noventa y nueve. Éstas entre otras permitieron que H & E Metales SA obtenga un crédito fiscal...La Compañía Minera Aurífera Pallarniyocc SRL, a cargo del imputado Alva Odría, no registraba la existencia de oro en los ejercicios de mil novecientos noventa y ocho y mil novecientos noventa y nueve (enero-marzo), al punto de permitir la exportación por H & Metales SA exporte oro y solicite una devolución de treinta y un mil cuatrocientos cincuenta y cuatro y sesenta y ocho mil novecientos treinta y siete nuevos soles.

Estas constataciones de la Fiscalización Tributaria no han sido enervadas por el citado imputado, quien inicialmente negó la existencia de los contratos, pero siempre admitió la relación con H & E Metales SA y la encausada contumaz Gambini Velásquez.

Octavo.- Que, por otro lado, el imputado ha deducido una excepción de prescripción. Al respecto, se tiene en cuenta:

a) Que según la partida de nacimiento de fojas seis mil seiscientos noventa y seis nació el veintiséis de diciembre de mil novecientos treinta.

b) Que en la fecha de la entrega de las facturas y de los contratos cuestionados tenía sesenta y siete y sesenta y ocho años, respectivamente. Empero, en los actos

(Esp.) es el de los plazos específicos en la parte general, lo que no se da en el caso peruano, así p. ej.: para Serrano Butragueño “las mayores exigencias de cumplimiento de la pena, en caso de responsabilidad ya declarada determinan un plazo de prescripción mayor que en los casos de la responsabilidad aún sin declarar, (1996), pp. 223.

de cooperación o complicidad el día a quo está en función al momento de la efectiva comisión del delito, del hecho principal o de la actuación del autor. Los actos de cooperación no están sujetos a un plazo autónomo -no puede prescribir aquello que todavía no es delito, esos actos sólo son penalmente relevantes si se comete el hecho principal, por ende, hasta que éste no se lleve a cabo no empezará a prescribir la responsabilidad de los partícipes [RAGÚES Y VALLES, RAMÓN: La prescripción penal, Atelier, Barcelona, dos mil cuatro, página ciento treinta]-. Así, el plazo de la prescripción en el presente caso, como se indicó en la sentencia recurrida, se inició luego del año mil novecientos noventa y nueve, propiamente en enero de dos mil.

c) Que el art. 81° del código penal establece que en estos casos el plazo de prescripción se reduce a la mitad. El delito de defraudación tributaria cometido como cómplice (artículos 1o y 4o, inciso 'a' del D. Leg. número 813) está reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de doce años. En tal virtud, el plazo ordinario de prescripción es de doce años, al que se agrega la mitad por la interrupción sufrida por la incoación de la investigación y el proceso penal (artículos 80 y 83 del código penal), lo que hace un total de dieciocho años, que en el caso del imputado...se reducen a nueve años.

d) Que, entonces, si el plazo prescriptorio se inició en enero de dos mil la acción penal se extinguió por acción del tiempo transcurrido en enero de dos mil nueve - fecha posterior a la sentencia recurrida-. Estando al tiempo transcurrido, pese al recurso impugnatorio, el delito ya prescribió.

En consecuencia, debe ampararse la excepción de prescripción en atención a los motivos específicos antes citados (...)”³³¹, pp. 70, 71 y 72.

Por su parte, El Tribunal Constitucional ha ratificado el criterio de darle al cómplice secundario³³² el mismo plazo de prescripción que le corresponde al autor, mostrando una postura conservadora y formalista.

Sin embargo el debate no se ha zanjado y considero que los plazos de prescripción deben ceñirse de conformidad con las reglas de imputación, diferenciando el tipo base de las agravantes genéricas, el tipo base de las agravantes específicas, el grado de participación del sujeto activo, y el tipo de intervención que se ha tenido en la realización de la infracción penal (delitos o faltas); ello en atención al principio de proporcionalidad abstracta, así como al principio de igualdad, por lo cual se plantea un sistema diferenciado del plazo de prescripción de acuerdo a estos criterios, salvo que se trate de una organización criminal, pues en estos casos el plazo de prescripción debe ser único, considerando las características de este tipo de criminalidad.

³³¹ Véase la ejecutoria suprema en el ANEXO N° 3, documento N° 18.

³³² Véase la Sentencia emitida en el Expediente N° 9291-2006-PHC/TC, en el ANEXO 5, de esta investigación, específicamente el documento N° 7.

10. LA SUSPENSIÓN.

Es aquel supuesto por medio del cual se detiene el plazo de la prescripción ordinaria de la persecución penal en un proceso penal ya iniciado, teniendo como efecto que el plazo ya ganado antes de la suspensión se conserva hasta que la causal de suspensión cese, es decir sea resuelta definitivamente, luego del cual dicho plazo se reinicia. El CP la regula en el art. 84.

Los antecedentes nacionales de este artículo los encontramos en: Utilizando un *término genérico*: el Anteproy. de CP (1900-1902), art. 102 referido a *procedimiento*; el Proy. de CP (1916), art. 94 sólo para la *prescripción de la acción penal*; el CP (1924), art. 122; la Ley N° 9014, art. 8 in fine utiliza *autorización especial o cualquier cuestión prejudicial*; Anteproy. de CP (1927), art. 67. *Suspensión sólo de la prescripción de la acción penal*: en el Proy. de CP (Set. 84), art. 96; y el Proy. de CP (Oct.-Nov. 84), art. 83. *Suspensión de la acción y de la ejecución*: En el Proy. de CP (Ago. 85), art. 89; el Proy. de CP (Mar.-Abr. 86), art. 88; el Proy. de CP (Set. 89), art. 87; el Proy. de CP (Jul. 90), art. 88; y el Proy. de CP (Ene. 91) art. 84.

El art. 84 del CP utiliza el término **cuestión** con el que se hace referencia a una *cuestión previa* y a una *cuestión prejudicial*. Entonces en el ordenamiento nacional se tiene dos causales de suspensión de la persecución penal:

10.1. CUESTIÓN PREVIA.

La cuestión previa se entiende como “un requisito procesal especial y expresamente previsto por la ley para el ejercicio idóneo de la acción penal en ciertos casos. Por consiguiente, en los casos que esté prevista expresamente, la observancia de la cuestión previa es ineludible a efecto de poder formular válidamente una denuncia y, por ende también, para que el auto apertorio de instrucción pueda ser expedido válidamente”³³³.

Por su parte PABLO SÁNCHEZ sostiene que “constituye un medio de defensa técnico dirigido contra la acción penal al haberse inobservado un requisito necesario previsto taxativamente en la ley para iniciar debidamente el proceso judicial”³³⁴.

En España GIMENO SENDRA la define como “artículos de previo y especial pronunciamiento” o cuestiones previas, auténticos presupuestos procesales que han de ser resueltos, con carácter previo al juicio oral, en una audiencia preliminar (...) a fin de poder obtener la *concentración* del juicio oral, eliminando “adlimine” tales obstáculos procesales”. Salvo la “declinatoria” se expresa que “las demás cuestiones previas lo son de *fondo*, por lo que habrán de ocasionar una resolución con los efectos materiales de la cosa juzgada”³³⁵.

³³³ Mixán (1988), pp. 143. Véase Oré (1996), pp. 211 a 215.

³³⁴ Sánchez (), pp. 337.

³³⁵ Gimeno et al. (1990), p. 418. En España son cuestiones previas materiales o de fondo: Cosa juzgada (art. 666.2° de la LECRIM), la prescripción (art. 666.3° de la LECRIM), amnistía e indulto (art. 666.4° de la LECRIM) y la nulidad de actuaciones; y las cuestiones previas procesales 1.- La declinatoria de jurisdicción : a) la falta de jurisdicción de los tribunales españoles para conocer del hecho punible; b) cuestiones de competencia territorial; c) La incompetencia

Se afirma que el imputado tiene la oportunidad para interponer este medio de defensa a partir de haber prestado su declaración instructiva, y en caso del ejercicio privado cuando el juez ha notificado con la denuncia (MIXÁN MASS, pp. 178).

Es interesante decir que el efecto de declarar fundada una cuestión previa amerita la *nulidad de lo actuado* a fin de que el titular de la acción penal subsane la omisión, siempre y cuando no haya prescrito la acción penal (MIXÁN MASS, pp. 180). Por ende, nunca se podrá sobreseer el proceso, admitir esto sería inconstitucional.

Debemos entender que la anterior afirmación se sustenta debido a que en el Perú se tiene sólo la cuestión previa formal, y no la material, pues para lo material se tienen a las excepciones.

Empero, ello no debe conducir a identificarse a la prescripción con el medio de defensa técnico para hacerlo valer: excepción de prescripción, ya que la prescripción se puede dar de oficio.

Tratándose de las cuestiones previas se debe entender que en el momento en que el juez la declare fundada, el plazo de prescripción se suspenderá hasta que se subsane el requisito de procedibilidad³³⁶, si es factible que ello suceda. A veces el cumplimiento de tal requisito acarrea un proceso extrapenal, por lo que se tendrá que esperar a que dicho proceso culmine y se obtenga el efecto de constituir cosa juzgada en la vía judicial, cosa decidida en la vía administrativa o un simple trámite.

10.2. CUESTIÓN PREJUDICIAL.

Sobre la cuestión prejudicial, es vigente lo planteado por el profesor FLORENCIO MIXÁN, quien indicaba que “constituye cuestión prejudicial de naturaleza extrapenal en [el] proceso penal: aquel hecho jurídico o acto jurídico preexistente, autónomo, eventual, que resulta especial e íntimamente vinculado, en situación de antecedente «lógico-jurídico», al auto u omisión (“hecho”) imputado que es objeto de procedimiento penal en concreto; vinculación aquella que genera una *singular duda* sobre el carácter delictuoso del referido hecho imputado; duda que, a su vez, determina la necesidad de suspender (archivar provisionalmente) la instrucción para remitir aquél tema de índole extrapenal a la correspondiente vía jurisdiccional o administrativa para su esclarecimiento y resolución definitiva; solución final que, al ser traído al proceso penal en suspenso, servirá de valioso elemento de juicio para que el juez penal pueda resolver ya sea ordenando el archivamiento definitivo (extinción del proceso) o desarchivamiento y continuación del mismo”³³⁷.

En España GIMENO SENDRA considera que “para que se aplique el sistema del artículo 3 y siguientes de la LECRIM, la norma jurídica penal debe de integrar en su

objetiva por razón de la persona; d) Incompetencia objetiva por razón de materia y procedimiento inadecuado; y 2.- Falta de autorización administrativa para procesar.

³³⁶ Véase lo expresado en la Primera Parte, Cap. II punto 3.

³³⁷ Mixán (1988), pp. 191-192. Véase Oré (1996), pp. 206 a 211.

supuesto de hecho elementos jurídicos de otros órdenes que sean *cuestionables*, es decir, que sean capaces por sí mismos de integrar el objeto de un litigio civil, administrativo, tributario, laboral, etc. Normalmente cuando la ley penal hace referencia a elementos extrapenales para definir los tipos penales, aquellos son cuestiones, es decir puntos jurídicos cuestionables y capaces de integrar el objeto de cualquier litigio jurídico [p. ej.]. Para no salirnos de los conceptos escolásticos los conceptos jurídicos de 'ascendientes' o 'descendientes', que utiliza el artículo 405 del Código Penal [hoy derogado] para definir junto con otros el parricidio, pueden ser cuestiones a las que se refieren los artículos 3 y siguientes de la LECRIM, porque efectivamente cabe un pleito para que la juez decida sobre la paternidad o sobre la filiación de una determinada persona en relación con otra”³³⁸.

En la doctrina se ha planteado también la problemática de si la cosa juzgada en materia extrapenal obliga necesariamente en la vía penal, así p.ej.: se plantea un proceso civil para ver algún requisito de procedibilidad: declaración judicial de quiebra, entonces al prescribir el proceso civil, el proceso penal deviene en imposible de continuar resolviéndose. Es factible que el juez penal se pronuncie sobre esto antes de que prescriba en la vía extrapenal (como algún sector de la doctrina lo plantea en Colombia). Empero, en el ordenamiento penal peruano esto no es factible pues ni el CP ni el C de PP, ni la Ley Orgánica del Poder Judicial han dado facultades al juez penal respecto de asuntos extrapenales.

Por otro lado, no debe confundirse esta facultad con la tesis de la interpretación mixta (autonomía relativa) que se sugiere en el derecho penal especial, pues ésta se refiere a que algunos de los elementos del tipo penal, definidos en la vía civil, pueden ser interpretados por el juez penal según su criterio, p. ej.: el inicio de la vida y su protección jurídica, que en el derecho civil será desde la concepción; en cambio en el Derecho penal, será desde la anidación.

Lo que diferencia el uno del otro es que en la vía extrapenal se define la existencia o no de un elemento que la ley penal exige por estar contemplado dentro del tipo penal; por el contrario, en el caso de las interpretaciones no hay nada que definir acerca de la existencia o no de algo, sino sobre el contenido o la amplitud de éste.

10.3. OTRO PROCEDIMIENTO.

Otro procedimiento implica hacer referencia a otro proceso de naturaleza extrapenal (civil, administrativo, laboral, agrario, etc.), en el cual se tenga que dilucidar un requisito de procedibilidad a través de una cuestión previa o de un elemento importante del tipo penal, e incluso de la antijuricidad, mediante una cuestión prejudicial (véase el art. 4 último párrafo del C de PP; los arts. 4 y 5 del Proyecto de CPP y el art. 5 del N.C.P.P.).

Incluso se discute la posibilidad de comprender temas de competencia a nivel penal, pero cuyo proceso se encuentra en otra instancia (más específicamente en otra competencia), es decir en una etapa distinta del proceso, o por su naturaleza siendo el mismo hecho, algunos de los procesados se encuentran en procesos especiales para

³³⁸ Gimeno et al. (1990), pp. 234.

funcionarios públicos no aforados y otros en procesos especiales para aforados por tratarse de funcionarios públicos de alto nivel, que fue lo que aconteció en muchos de los casos del subsistema anticorrupción, por lo cual si algún elemento del tipo penal viene dilucidándose en un proceso penal que se encuentra en una etapa procesal posterior (juzgamiento) al otro proceso (investigación), es perfectamente posible suspender el plazo de la prescripción de la acción penal de este segundo proceso hasta que se dilucide la cuestión.

Otro de los casos que se incluye aquí es el del fuero privativo militar, donde es conocido que en algunas circunstancias ciertos elementos del tipo pueden depender de algún proceso que se pueda estar llevando en el fuero privativo, razón por la cual el fuero común no puede dilucidar un elemento del tipo penal mientras el fuero privativo no tome la decisión de dilucidar o en otros casos no haga saber de la viabilidad de algún elemento de prueba trascendente para el proceso penal, razón por la cual estos supuestos de incertidumbre pueden suspender el plazo de prescripción de la acción penal.

Aunque lo más grave y preocupante es que este supuesto de hecho y esta constancia de suspensión, luego puede ser utilizado en algún proceso ante algún organismo internacional atribuyéndose su acontecimiento al Estado, con las consecuencias por todos sabido.

Por su parte, el derecho comparado ha incorporado otros supuestos de suspensión. Es el caso de España, que luego de la reforma del año 2010 ha establecido dos casos de suspensión, pero con un determinado plazo, así en primer lugar la presentación de una querrela o una denuncia ante el órgano judicial, acarreando de inmediato la suspensión del plazo de prescripción en curso, con un plazo de seis meses para el delito y dos meses para las faltas, iniciándose el cómputo desde el momento de la presentación, sin embargo si ambas son resueltas como inadmisibles o de no iniciar proceso entonces inmediatamente empieza a computarse otra vez la prescripción. Asimismo, puede acontecer que si dentro de los seis o dos meses se dicta una resolución judicial motivada en que se atribuya a una persona determinada un delito o una falta respectivamente, entonces se produce la interrupción del plazo de prescripción inmediatamente, incluso con efectos retroactivos, quedando sin efecto la suspensión pues dicha interrupción se retrotrae hasta la presentación de la querrela o denuncia³³⁹.

En la doctrina nacional el tema de la suspensión tiene otras aristas de su alcance, así VÍCTOR PRADO, quien considera que la suspensión no permite que corra la prescripción ordinaria así como la extraordinaria³⁴⁰, no precisándose si se tiene o no un límite, lo cual así establecido sería igual que la imprescriptibilidad.

La Corte Suprema, mediante el **Acuerdo Plenario N° 6-2007/CJ-116**, aprobado por unanimidad y con carácter de obligatorio, ha establecido algunos aportes, que a su vez los ha plasmado en diversas ejecutorias³⁴¹ al señalar que en los casos que los justiciables

³³⁹ En este sentido consultese la obra colectiva de Berdugo et al. (2010), pp. 594 y ss.

³⁴⁰ Prado (2000), pp. 258.

³⁴¹ Estas Ejecutorias de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, emitida vía R.N. N° 2547-2007, Callao; R.N. N° 359-2009, Tacna; R.N. N° 392-2009, Lima; R.N. N° 419-2009, Lima; R.N. N° 908-2009, Lima; R.N. N° 251-2008, Lambayeque; R.N. N° 2053-2009, Piura, resuelta en el 2010; R.N. N° 1534-2008, Cusco, la misma que se

interpongan el recurso de queja excepcional³⁴², se considerará suspendido el plazo de la prescripción de la acción penal, razón por la cual dicho plazo una vez que finalice deberá restarse al plazo de prescripción.

Así el **Acuerdo Plenario N° 6-2007/CJ-116**³⁴³, concluyó sobre la queja excepcional lo siguiente:

“12. ESTABLECER como doctrina legal, conforme a los fundamentos seis a diez, que para el cómputo de los plazos de prescripción en los procesos sumarios no se considera el lapso comprendido entre la interposición del recurso de queja excepción-contrala resolución que pone fin a la instancia- y la remisión de la copia certificada de la Ejecutoria Suprema que estima el recurso de queja y concede el recurso de nulidad respectivo al Superior Tribunal. A estos efectos, los Jueces y Salas Penales Superiores deberán tener en cuenta, obligatoriamente, los criterios indicados en dichos párrafos”.

Luego, esta línea argumentativa ha sido recogida en diversas ejecutorias, las mismas que expresan los siguientes fundamentos:

“(…) Quinto: Que el acuerdo plenario número seis-dos mil siete/CJ-ciento dieciséis de fecha dieciséis de noviembre de dos mil siete-Pleno Jurisdiccional de las Salas Permanentes y Transitorias de la Corte Suprema de Justicia, ha señalado que el recurso de queja excepcional es uno de los supuestos materiales de "suspensión de los términos de prescripción" (...); que siendo así, el término de suspensión a criterio de este Supremo Tribunal corresponde a la interposición del recurso de queja excepcional el día treinta de marzo de dos mil seis, hasta la fecha en que la Sala Penal Superior recibió la copia certificada de la Ejecutoria Suprema que declaró fundado el recurso, el veintinueve de mayo de dos mil siete, tiempo que comprende un año, un mes y veintinueve días (...) Sexto: Que los tipos penales materia de la acusación fiscal son ...(Estafa) y (Falsedad Genérica)..que reprimen los hechos delictivos con sanciones no mayores de seis y cuatro años de pena privativa de libertad, respectivamente, términos que se elevarían a nueve y seis años, respectivamente, de conformidad a los alcances del numeral ochenta y tres (...) **Sétimo:** (...) estando a que el término de prescripción extraordinario en el delito de estafa es de nueve años a los que habría de adicionarse el "el plazo de suspensión" (un año, un mes y veintinueve días) se concluye, que desde el veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y ocho a la fecha han transcurrido diez años, un mes y veintinueve días; de manera similar, en el caso del delito de falsedad genérica cuyo término de prescripción extraordinario corresponde a seis años a los que también se tiene que adicionar el

resolvió en el 2010; véase en el ANEXO 3, de esta investigación, respectivamente en los documentos N° 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57 y 58.

³⁴² Figura introducida a nuestro ordenamiento procesal del viejo Código de Procedimientos Penales de 1939, mediante el art. 1 del D. Leg. N° 959, publicado el 17-08-2004. Así se aprecia en el ejecutoria expedida en el Recurso de Queja N°1305-2009, Véase en el ANEXO 3, de esta investigación, específicamente en los documentos N° 3.

³⁴³ Véase en el ANEXO 4, de esta investigación, específicamente en los documentos N° 5.

plazo de suspensión (...), conlleva a colegir que desde el siete de agosto de mil novecientos noventa y ocho, han transcurrido siete años, un mes y veintinueve días, lo que demuestra que a la fecha han vencido en exceso los plazos de prescripción (...), NULA la sentencia que condenó al recurrente por el delito de falsedad genérica y estafa, ya que pese a la suspensión del plazo, este ya ha prescrito (...)", pp. 3, 4 y 5.

También la Corte Suprema ha considerado el antejuicio como otro supuesto de suspensión de la prescripción. Así se tiene la siguiente ejecutoria³⁴⁴ que expresa como fundamento lo siguiente:

"(...) Tercero: Que, el Acuerdo Plenario número uno guión dos mil diez oblicua CJ guión ciento dieciséis, al referirse a la suspensión de la prescripción de un proceso, sostiene que su continuación dependerá de la decisión que arribará por parte de un autoridad extrapenal, que puede ser un Juez del ámbito civil, administrativo, comercial, de familia.

Cuarto: Que, el Tribunal Constitucional en el Expediente número cinco mil sesenta y ocho guión dos mil seis guión PHC oblicua TC, seguido por César Humberto Tineo Cabrera, que tenía la prerrogativa del ante juicio, en el Fundamento Jurídico número doce, indicó que dicho procedimiento parlamentario suspende la prescripción penal (...) "En el caso concreto, dado que el recurrente gozaba de la prerrogativa del antejuicio político, es evidente que aquel era un trámite indispensable, como paso previo, para que se diera inicio al proceso penal". Siendo por ello, que en el Fundamento Jurídico número trece efectúa un análisis del tiempo de la suspensión de la prescripción indicando "(...) si los hechos investigados ocurrieron el catorce de mayo de mil novecientos noventa y siete, y antes de iniciado el proceso penal debía llevarse a cabo el Antejuicio Político en el Congreso de la República, que constituye una 'cuestión' que implica un procedimiento distinto y que por ende constituye un motivo de suspensión del plazo prescriptorio, durante el periodo comprendido en la denuncia formalizada por la Fiscalía de la Nación de fojas sesenta y cinco y siguientes, estos son, ocho de marzo de mil novecientos noventa y ocho en que se expidió el Dictamen Acusatorio de la Subcomisión encargada de la Acusación Constitucional, en los términos aprobados por el Pleno del Congreso de la República de fecha tres de diciembre de mil novecientos noventa y ocho (en cuyo Ínterin operó la suspensión del plazo de la prescripción durante ocho meses y veinticinco días), reiniciándose el conteo del plazo en esta última fecha, por lo que al momento de emisión de la sentencia de vista (el diez de setiembre de dos mil tres) sólo habían transcurrido cinco años seis meses y veintinueve días (lo que se colige de la sumatoria del plazo transcurrido desde la fecha de comisión de los hechos hasta el día en que se

³⁴⁴ Véase la Ejecutoria emitida en el R.N. N° 76-2010, Arequipa, el mismo que se resolvió en el año 2011, en el ANEXO 3, de esta investigación, específicamente el documento N° 69. Otro de los aspectos que regula la Ejecutoria Suprema emitida en el R.N. N° 551-2009, Arequipa, consignado en el documento N° 51 donde se señala: "Cuarto:... que revisados los autos se advierte que carece de objeto la pretensión del encausado recurrente, debido a que...se declaró el quiebre del juicio oral, lo cual acarreó como consecuencia la nulidad de lo actuado desde el inicio del juicio oral, hasta antes de la emisión de la aludida resolución (lo cual incluye la resolución cuestionada)" pp. 2. Se trata de la resolución que declaraba reo contumaz y la suspensión de los plazos de prescripción.

inició la suspensión acotada y el plazo transcurrido después [de] finalizado el periodo de suspensión hasta el momento de la sentencia de vista); por consiguiente no se encontraba prescrita la acción penal y el Estado no perdió su facultad punitiva y, con ello, la posibilidad de investigar y sancionar”.

También la Sala Penal de la Corte Suprema ha establecido otro supuesto de suspensión del plazo de la prescripción de la acción penal, se trata del mal proceder del imputado que origina la suspensión. En este sentido se aprecian los siguientes fundamentos:

"Tercero: Que de la revisión de actuados, se advierte que fue el propio procesado quien se ha mostrado renuente a su juzgamiento -conducta procesal que ha sido la razón para que la causa se dilate- lo cual revela una actividad procesal dilatoria, por lo que la Sala Superior, resolvió declarar al encausado... reo contumaz...no obstante ello, la Sala Superior al momento de expedir la sentencia declaró prescrita la acción penal bajo el argumento que la Ley número veintisiete [sic se decir veintiséis] mil seiscientos cuarenta y uno, vulnera el derecho al plazo razonable, y por ende, no le es aplicable. Sin embargo, conforme al criterio del Tribunal Constitucional en estos casos se permite aplicar la suspensión del plazo prescriptorio sin que constituya inconstitucional la aplicación de la precitada ley, por cuanto no resulta imputable al Órgano Jurisdiccional dicha demora, y por consiguiente, se estaría favoreciendo a un justiciable quien con su conducta ha contribuido a la dilatación del proceso...razón por la cual a consideración de este Supremo Tribunal la acción penal contra el procesado no se encuentra prescrita (...) Nula la sentencia (...) que por mayoría declaró fundada de oficio la excepción de prescripción de la acción penal, a favor del procesado ...por el delito contra la Administración Pública-en agravio del Estado", pp. 3³⁴⁵.

Por su parte, el Tribunal Constitucional también ha establecido algunos supuestos de suspensión de la prescripción de la acción penal; así se tiene el antejuicio³⁴⁶ o la inmunidad³⁴⁷ asimilado como uno de los presupuestos denominado *otro procedimiento* (fundamento 7.7), y el pedido de extradición en el caso del procedimiento de extradición³⁴⁸.

Sobre la inmunidad señala el fundamento 30 de la sentencia emitida en el expediente N° 0026-2006-PI/TC lo siguiente:

“30. Finalmente, debe destacarse que también se ha discutido en el presente proceso sobre si es factible, o no, la suspensión de la prescripción de la acción penal en el caso de los congresistas protegidos por la inmunidad de proceso. Al respecto, el artículo 84 del Código Penal dispone que: Si el comienzo o

³⁴⁵ Véase esta ejecutoria en el ANEXO N° 3 emitida en el R.N. N° 4209-2008, Arequipa, documento N° 40.

³⁴⁶ Véase la Sentencia emitida en el expediente N° 4118-2004-HC/TC, como precedente vinculante, en el ANEXO 5, de esta investigación, específicamente el documento N° 6. Asimismo véase la Sentencia emitida en el expediente N° 5068-2006-PHC/TC resuelto en el año 2006, en el ANEXO N° 5, de esta investigación, específicamente el documento N° 39, así como la sentencia recaída en el Exp. 3509-2009-PHC/TC en el ANEXO N° con el documento N° 25.

³⁴⁷ Véase la Sentencia expedida en el expediente N° 0026-2006-PI/TC, emitida el año 2007, en el ANEXO 5, de esta investigación, específicamente el documento N° 38.

³⁴⁸ Véase la Sentencia expedida en el expediente N° 05048-2009-PHC/TC emitida el año 2009, en el ANEXO 5, de esta investigación, específicamente el documento N° 37.

continuación del proceso penal depende de cualquier cuestión que deba resolverse en otro procedimiento, se considera en suspenso la prescripción hasta que aquel quede concluido (...). Este Colegiado considera que este artículo de la normatividad penal es la norma aplicable para aquel caso de los Congresistas protegidos por la inmunidad de proceso”, (pp. 22).

Y sobre el pedido de la extradición, el fundamento 3 de la sentencia expedida en el expediente N° 05048-2009-PHC/TC emitida el año 2009, señala:

“y al haberse dispuesto por Resolución Suprema N° 099-2007-JUS, de fecha 18 de mayo de 2007, la presentación del pedido de extradición contra la beneficiaria, se habría producido la suspensión del plazo conforme al artículo 84° del Código Penal; en consecuencia, no ha operado la prescripción de la acción ...”, pp. 2.

¿Qué significa que el proceso quede concluido? Aunque el C de PP no lo precise, considero que de *lege lata* debe interpretarse que el proceso extrapenal debe haber terminado con resolución o sentencia firme que acarreé cosa juzgada (art. 5 segundo párrafo del Proy. de CPP) o, tratándose de procedimientos administrativos, cosa decidida.

La extradición como supuesto de suspensión de la prescripción de la acción penal, se ha venido aplicando sobretodo en casos del subsistema anticorrupción, donde ha servido para conceder o rechazar los petitorios de prescripción, así por ejemplo lo resuelto en el procedimiento de extradición de Crousillat López Torres³⁴⁹.

Otro supuesto de suspensión de la prescripción de la acción de la pena, lo constituye el procedimiento de asistencia judicial en materia penal, el cual se desarrolla en la parte pertinente de esta investigación.

La jurisprudencia respecto al momento en que se inicia el cómputo de la prescripción cuando existe una cuestión prejudicial dice:

1. Cuando el ejercicio de la acción dependa de lo que debe resolverse en el procedimiento extra-penal, el plazo de prescripción de la acción penal se suspende mientras tenga lugar la realización de aquél. Por tanto, no es computable el tiempo transcurrido en la vía administrativa hasta que se decidió denunciar los hechos imputados, al Fiscal Provincial en lo Penal (Ejecutoria superior del 28 de mayo de 1992. Recaída en la causa N° 92-92 de la Décimo Primera Sala Penal de la Corte Superior de Lima).

³⁴⁹ En el expediente penal N° 11-2001, llevado a cabo ante la Segunda Sala Superior Penal Especial del subsistema anticorrupción llevado contra el procesado Crousillat López Torres, se declaró infundada la excepción de prescripción de la acción penal al considerarse que se produjo la suspensión de la acción penal en razón de que contra este acusado se tuvo que seguir el procedimiento de extradición activa a la Nación Argentina (punto 11 de la cuestiones preliminares de la sentencia del 08 de agosto del 2006), véase el ANEXO N° 8.

10.4. SUSPENSIÓN EN LA PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA.

Para iniciar este punto es necesario preguntarse: ¿puede o no haber prescripción extraordinaria cuando existan algunos de los supuestos de suspensión? A esta interrogante se responde de la siguiente manera:

- 1° Se señala como primer supuesto de la suspensión el comienzo del proceso penal. Como es obvio, la prescripción extraordinaria nunca actuaría antes de iniciarse el proceso penal, por lo que esa no es su naturaleza ni su función. Además, esta prescripción extraordinaria supone siempre un acto de interrupción de la prescripción ordinaria de la persecución, lo que nos indica que ya se inició el proceso penal, empero, el plazo se suspende ya sea por una cuestión previa o por una cuestión prejudicial.
- 2° El segundo supuesto trata de la continuación del plazo de prescripción constituyendo tal vez la mayor dificultad para que opere la prescripción ordinaria. Si bien es cierto que la interrupción es un acto que *siempre* será presupuesto de la prescripción extraordinaria (y que a la larga vuelve «decorativa» a la prescripción ordinaria), en cambio la suspensión es casi siempre *contingente* para la prescripción ordinaria y extraordinaria, permitiendo que se posibilite la prescripción ordinaria, vía la suma del plazo ya ganado por el procesado, aunque en la práctica es «casi» imposible que el imputado haya podido ganar algún plazo (dentro del proceso) debido a que los supuestos de interrupción lo habrían eliminado inmediatamente. Tampoco es factible que este plazo sea ganado antes de que se inicie el proceso penal, ya que allí no operan los supuestos de interrupción ni los de suspensión debido a que ambas son intraproceso. Por lo que materialmente resulta irrealizable tal ganancia de plazos.

Luego, con todos estos inconvenientes no sería oportuno restringir la aplicación de la prescripción extraordinaria a los supuestos de la suspensión, ya que con ello se restringiría su campo de eficacia y su objetivo político criminal. Además, ¿cómo entender que para lo más grave (entiéndase, por sus consecuencias, a la interrupción) se aplica la prescripción extraordinaria, empero para lo más leve (suspensión) no?

Admitir lo contrario no nos libera, al menos parcialmente, del caso que un proceso extrapenal prescriba y que un proceso penal, en cambio, sólo permanezca suspendido.

Lo que sucede es que no se meditó adecuadamente en el sistema penal peruano, la ubicación sistemática de la prescripción extraordinaria (ver los antecedentes), ubicándola erróneamente en los supuestos de interrupción, porque en el Perú generalmente se aplica las reglas penales haciendo uso de la interpretación literal en vez de realizar procesos de interpretación mucho más integrales a fin de tener una mejor apreciación y comprensión de una determinada institución, no una mera concordancia de reglas (jactándose de aplicar el método sistemático) cuando aquí lo valioso es realizar principalmente una interpretación vía el método teleológico, la aplicación de principios, etc.

Los antecedentes de los supuestos de suspensión que no operan para los casos de prescripción extraordinaria son: el Proy. de CP (1916), art. 94, *referido sólo a la prescripción de la acción*; el CP (1924), art. 122; el Proy. de CP (Set. 84) art. 96, y el Proy.

de CP (Oct.-Nov. 84), art. 83, *referido a la suspensión de la acción y de la ejecución*; el Proy. de CP (Ago. 85), art. 89 y el Proy. de CP (Mar.-Abr. 86), art. 88.

Un tema que también ha despertado polémica en el sistema jurídico penal peruano a partir de la entrada en vigencia del N. C.P. P., es si la investigación preparatoria suspende o interrumpe el plazo de prescripción de la persecución penal, e incluso a nivel de la Corte Suprema ha originado problemas a tal punto que se ha realizado dos acuerdos plenarios, así se tiene lo dispuesto por el **Acuerdo Plenario N° 1-2010/CJ-116**³⁵⁰, en donde los vocales supremos no se han puesto de acuerdo al respecto. A continuación se señala la ratio decidendi del acuerdo mencionado:

32°. En ese contexto, es claro que el plazo de la suspensión del proceso se produce dentro del marco impuesto por la Ley, no es ilimitado y eterno y se corresponde con la realidad legislativa de la nueva norma procesal y el marco de política criminal del Estado. Por tanto, con los límites racionales regulados no habría un exceso de tiempo hasta la culminación del proceso con un pronunciamiento que ponga término del modo más rápido posible a la situación de incertidumbre porque con la previsión de la ley fijando pautas de duración de los procesos no debería existir menoscabo a un juicio justo en un tiempo razonable y donde el derecho de la sociedad a defenderse del delito se armoniza con el del imputado, de modo que no se sacrifica a ninguno de ellos a favor del otro. Con esto debe resaltarse que si bien los actos del procedimiento suspenden el curso de la prescripción de la acción persecutoria, no obstante lo hacen hasta cierto límite”.

De este fundamento del acuerdo mencionado, se desprenden los siguientes aspectos a analizar:

- 1° Una causal de interrupción (acto de interrupción tradicional por actuación del Ministerio Público) se convierte en una causal de suspensión con lo cual se produciría una concurrencia de causales, la misma que se resuelve acudiendo al principio de favorabilidad³⁵¹.
- 2° Si se tratara de una causal de suspensión, cuál sería el contenido de la causal de interrupción, o es que ahora esta causal estaría derogada, al no tener contenido.
- 3° La causal de interrupción subsistente sería el de la comisión de un nuevo delito doloso.
- 4° Si la interrupción de la prescripción sólo subsiste por la causal de la interrupción de la comisión de un delito doloso, cabe preguntarse en primer lugar qué pasaría si un sujeto que cometió un delito, nunca vuelve a cometer otro delito, luego nunca existiría interrupción del plazo de prescripción. En segundo lugar, considerando el punto anterior, cabe preguntarse qué sucedería con el plazo transcurrido desde el día que se cometió el delito hasta el día en que el fiscal formaliza la investigación preparatoria.

³⁵⁰ Uno ordinario y otro extraordinario, apenas publicado el primero.

³⁵¹ Por su parte Panta (2011), pp. 28, que propone que se debe modificar el art. 339 numeral 1 del N.C.P.P. por el cual se reemplaza el término se suspende por se *interrumpe*.

Los seguidores de la postura de la derogación de la interrupción, es decir los que sostienen la suspensión del plazo de la prescripción, si son coherentes tendrían que admitir que ahora ya no hay nada que suspender, que aquel plazo nunca empezó a correr, o todo lo contrario, el plazo corrió formalmente empero el plazo que corre formalmente siempre se tendrá que suspender. Por lo tanto, se debe admitir que el sistema penal peruano adoptó un sistema donde ninguna acción penal prescribiría.

5° Si fuera una causal de suspensión cuál sería su término.

6° Puede o no dicha causal de suspensión eliminar la prescripción extraordinaria.

7° ¿Es posible que una regla procesal penal derogue una regla penal?

8° El decir que sólo porque los chilenos lo tienen, es suficiente razón para que en el sistema penal peruano se acepte la suspensión.

9° La parte procesal Ministerio Público, por un lado tiene constitucionalmente el ejercicio de la acción penal pública y a la vez su actuar, válido o no, eficaz o no; por otro lado, dicho ministerio tiene el control de la prescripción de la acción penal, esto es, con su actuación el hecho de que se suspenda la acción penal de manera indefinida o en algunos casos de manera abusiva, por lo cual se tendría que afirmar como corolario de este argumento que no le falta razón a los que consideran que se afecta el principio de igualdad procesal.

10° Si tanto preocupaba las conductas dilatorias, que en su caso no sólo pueden provenir del procesado, sino también pueden provenir del Estado (por ejemplo: actuaciones inoficiosas del Procurador, o del Ministerio Público), se debió proponer un supuesto de interrupción cualificado o una causal de suspensión con límites expresos (de inicio y final, como lo hacen otros países (caso de España por ejemplo).

Si la efectividad del N.C.P.P. es manifiesta e inobjetable, por qué se estableció una regulación que atente contra la prescripción penal, la misma que contiene plazos amplios y superiores a los que establece dicho código procesal. A qué se le teme, o es que se trata de un error del legislador. El mayor marketing con que se promocionó al N. C. P. P. fue la rapidez de los procesos penales, por lo cual cualquier prórroga, incluso desde la perspectiva procesal, atenta contra el plazo razonable y al mismo tiempo, contra el debido proceso. Por todo esto, discrepo con lo aprobado en el Acuerdo Plenario N° 1-2010/CJ-116³⁵², específicamente con el fundamento número 30, ya que lo correcto hubiese sido que el legislador realice la modificación de la institución de la prescripción en el código penal y no una mera interpretación judicial.

³⁵² El fundamento citado señala: “30°. Por tanto, la suspensión del plazo de prescripción significa que la ley otorga más tiempo a la autoridad para que persiga el delito. Constituye la manifestación de voluntad objetivamente idónea del Estado para asegurar el éxito en la persecución del hecho delictivo y contribuye a consolidar el principio constitucional de obligatoriedad en el ejercicio de la persecución penal que tiene el Ministerio Público prescrita en el artículo 159° de la Carta Política”. Véase en el ANEXO 4, de esta investigación, específicamente el documento N° 2.

Por todas estas razones considero innecesario mantener vigente lo señalado en la regla procesal contenida en el artículo 336 numeral 1, proponiéndose su inmediata derogación, y por ahora postulo la inmediata inaplicación de la misma para los casos que se vienen procesando.

En el segundo Acuerdo Plenario al cual se ha mencionado, se llevó a cabo en el mes de marzo del año 2012, en donde se presentó la ponencia reiterando lo señalado en el anterior Acuerdo que se acaba de analizar, con la finalidad de tratar de salvar lo ya establecido, aunque con algunos aspectos a considerar propuestos por el señor juez supremo Dr. VÍCTOR PRADO SALDARRIAGA, quien sostiene que **“se trata solamente de disposiciones compatibles que regulan, cada una, causales distintas de suspensión de la prescripción de la acción penal que pueden operar de modo secuencial o alternativo**. Efectivamente, la prejudicialidad considerada por la norma sustantiva puede paralizar incluso la continuación de un proceso penal en trámite y donde la formalización de la investigación preparatoria que considera la norma adjetiva, ya decretó la suspensión del plazo de prescripción de la acción penal (...)”³⁵³.

De esto, me pregunto ¿qué significa secuencia o alternativo? Por ahora no se conoce el contenido de estos términos debido a que la redacción de este acuerdo plenario complementario o excepcional viene redactándose, hasta el final de este trabajo no se ha tenido mayor información.

Tabla 3: *Supuestos de suspensión de la prescripción de la acción penal*

SUSPENSIÓN	Cuestión Previa
	Cuestión Prejudicial
	Otro Procedimiento
	Queja Excepcional
	Antejuicio
	Pedido de Extradición
	Asistencia Judicial

Nota: Aquí se consigna los supuestos de suspensión que en el Sistema Penal peruano se han considerado a partir de los aportes de la jurisprudencia, Tribunal Constitucional, y aplicación de Tratados.

11. EL INICIO DE LA PRESCRIPCIÓN.

11.1. DE LA PERSECUCIÓN PENAL.

El inicio del plazo de prescripción es una incertidumbre, por lo que es necesario fijar tal momento para que a partir de él se pueda aplicar son suma claridad en y todos los casos la regla de la prescripción penal. Aún gran parte de la doctrina nacional y algún sector en el derecho comparado se siguen guiando por el criterio de la consumación de la infracción penal, por ende el momento del inicio de la prescripción será al finalizar la consumación formal.

³⁵³ Extracto de la Ponencia del Dr. Víctor Prado Saldarriaga que lleva por título: **SOBRE LA NECESIDAD DE REEVALUAR LA SUSPENSIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL DISPUESTA EN EL ARTÍCULO 339, INCISO 1 DEL CODIGO PROCESAL PENAL DE 2004.**

Al margen de si uno se encuentra o no de acuerdo con los partidarios de la tesis de la consumación, hay que diferenciar claramente entre este momento y el instante en el que se debe iniciar el cómputo del plazo de la prescripción de la persecución penal, así en el vigente art. 82 del código penal no preciso el criterio de referencia.

Algunos han sugerido que se debe computar el mes o el año completo, así por ej.: si no se puede apreciar en el delito de enriquecimiento ilícito el día, pues se atribuye el último día de ese mes, es decir, dependiendo si se trata del 28, 30 ó 31; y si no se puede apreciar el mes, entonces se regula el último día del año aproximado, esto es el 31 de Diciembre.

Por ello, en aras de respetar el principio de favorabilidad y evitar el riesgo de castigar una infracción ya prescrita, es que se propone esta fórmula.

Tabla 4: *Criterios para fijar el inicio de la prescripción de la persecución penal*

INICIO DE LA PRESCRIPCIÓN	HORA	DÍA	MES	AÑO
Certeza	X	X		
Incierto	¿?	¿?	<ul style="list-style-type: none"> - Puede calcularse el mes (p. ej.: un asesino en serie) - Una defraudación - Un peculado - Un enriquecimiento ilícito 	<ul style="list-style-type: none"> - Puede calcularse el año (p. ej.: un asesino en serie) - Un cohecho - Un enriquecimiento ilícito

Nota: Al respecto se propone el siguiente gráfico a fin de proporcionar algunos criterios: sea de la hora, el día, el mes y el año.

Por su parte la Corte Suprema ha establecido el criterio del año al no poderse establecer el plazo de día, ni del mes, en este sentido la ejecutoria emitida en el R.N. N° 381 – 2009 Puno³⁵⁴, fundamento cuarto, señala:

"Cuarto: Que en virtud de lo glosado ut supra, y conforme lo dispuesto en el inciso segundo del numeral ochenta y dos del Código Penal el plazo prescriptorio extraordinario de la acción penal a que se refieren los numerales ochenta tres in fine del citado cuerpo legal, deben computarse a partir de producidos los actos ilícitos del procesado-que según la imputación fiscal datan de los años mil novecientos noventa y dos a mil novecientos noventa y tres-; y que hasta la fecha han transcurrido más de doce años (...)"

Es obvio que todos estos criterios no están ajenos a las críticas, sin embargo es mejor tenerlos como una referencia, pues en la práctica esto constituye todo un problema que muchas veces queda al arbitrio del investigador técnico (p. ej.: Contraloría, Sunat, Policía Nacional, Ministerio Público, Superintendencia de Banca y Seguros, o cualquier otra

³⁵⁴ Véase la Ejecutoria Suprema de la Primera Sala Penal Transitoria, emitida en el R.N. N° 381 – 2009, Puno, en el ANEXO 3, de esta investigación, específicamente el documento N° 5.

dependencia) o de quien formula particularmente la noticia criminal el que al final señala el dato fáctico.

Por su parte el Tribunal Constitucional ha evitado pronunciarse cuando el juez jurisdiccional no ha precisado la fecha de inicio de la comisión del delito, así esto puede convertirse en una arbitrariedad por parte de dicho magistrado, y sí considero que el Tribunal debió manifestarse no esperando que sea la justicia jurisdiccional el que la haga.

La justificación del Tribunal para no pronunciarse es que se “determine la fecha en la cual se habría cometido el hecho activo, así como si el tipo penal por el que fue condenado tiene naturaleza instantánea o permanente; pretensiones que, de acuerdo a los fundamentos expuestos precedentemente, no corresponde resolver a la justicia constitucional”³⁵⁵, pp. 5.

A continuación analizaremos cada uno de los supuestos que establece el CP para referirse al inicio de la prescripción de la acción o persecución penal.

a. Comisión del delito.

Algunos proponen que será el caso concreto (Véase Rey González p.128) el que determine si es la acción o el resultado el criterio a seguir, pues una fórmula a priori no distinguiría si se está ante una tentativa o una consumación, salvo que se adopte una fórmula mixta, lo cual implicaría que sea el magistrado el que deba resolver argumentativamente este problema, solución por demás criticable.

b. Habitualidad.

Al respecto hay que precisar que el legislador reintrodujo esta categoría al sistema penal, pues no se debe olvidar que con la derogación del CP (1924) se dejó de lado esta institución.

Sin embargo, con la publicación de la Ley N° 28726 art. 2, del 09 de mayo de 2006 se reintrodujo la habitualidad, ahora se tiene la necesidad de plantear una nueva regla penal que precise los plazos de prescripción para este nuevo supuesto.

Así en la doctrina se distinguen dos situaciones:

- 1° Apreciar la habitualidad como elemento del delito; y
- 2° la habitualidad como una circunstancia agravante genérica.

Ambos supuestos requieren de ser analizados a fin de clarificar sus matices.

³⁵⁵ Véase la Sentencia del Tribunal Constitucional N° 3523-2008-HC/TC, prevista en el ANEXO 5, de esta investigación, específicamente el documento N° 9. Además se tienen como ejemplos: la Sentencia del EXP.N° 5922-2009- PHC/TC sobretodo los fundamentos 7 y 13; la Sentencia del EXP. N°0331-2007-PHC/TC, sobre uso de documento falsificado, fundamentos 8 y 9; la Sentencia del EXP. 04900-2006-PHC/TC AÑO 2007, sobre el mismo tema en el fundamento 14, y la Sentencia del EXP. N° 5890 – 2006 –PHC/TC resuelto en el año 2006, su fundamento 9.9 segundo párrafo. Véase en el ANEXO 5, de esta investigación, respectivamente en los documentos N° 11, 13, 12 y 41.

Tabla 5: *El tratamiento de la habitualidad.*

HABITUALIDAD			
España		Perú	
Como elemento del tipo	Como reiteración de delitos	Como elemento del tipo	Como reiteración de delitos
art.173 numeral 2	art. 132 segundo párrafo		Artículo 46-C, que regula la habitualidad

Nota: Aquí se fija una comparación entre el caso español y el caso peruano sobre el tratamiento de la habitualidad a partir de ejemplos de la parte general y la parte especial.

b.1. Habitualidad como elemento del tipo.

A partir de la fórmula española contemplada en el art. 132 segundo párrafo de su código penal vigente, se plantea que ciertos delitos contienen a la habitualidad dentro de su estructura típica, tal es el caso del delito de malos tratos regulado en el art.173 numeral 2.

Así el criterio expresado será desde el día que cesó la conducta prohibida, por lo cual para el caso peruano este supuesto podría resolverse con la regla establecida para el delito permanente contenido en el art. 82 numeral 4 del CP.

b.2. Habitualidad como circunstancia agravante genérica.

Aquí cabe preguntarse: ¿es necesario establecer una regla propia para este supuesto de habitualidad en relación al inicio del plazo de prescripción o basta lo establecido en el art. 82, numeral 4 del CP?

La respuesta es que sí resulta necesario establecer una regla propia, en atención a que esta circunstancia agravante se aplica para los casos en que haya una reiterada realización de infracciones penales delitos (¿y las faltas?), p. ej.: para el carterista que a diario roba o hurta, o para el estafador o receptor.

Así se plantea la solución establecida en la regla penal que regula en inicio del plazo de prescripción para los delitos permanentes, pues en éstos se trata de un solo delito, y la permanencia o habitualidad es una característica del tipo, es decir, si no se aprecia este componente la conducta resulta ser atípica.

Por ello, el supuesto de la habitualidad debe tener un plazo independiente de prescripción, p. ej.: un numeral adicional en el art. 82.

c. Los Concursos.

c.1. Concurso Ideal (Art. 80 tercer párrafo).

El criterio elegido es el de la mayor gravedad, ergo, si un solo hecho da lugar a dos o más delitos de diferente naturaleza, entonces la prescripción de la persecución penal se producirá cuando haya transcurrido un plazo igual al correspondiente al delito más grave (art. 80).

Esto es lo que tendría que suceder en casos de prescripción ordinaria, empero quién establece si se está ante un concurso ideal heterogéneo; ello exige determinar que cada vez que se declare este tipo de prescripción, previamente se debe dilucidar si se está o no frente a un concurso.

Para el tipo de prescripción extraordinaria de la persecución penal, el juez penal o la Sala tendría que comparar los montos de pena conminada aumentadas en su mitad, ello con la finalidad de comprobar si ha o no transcurrido el plazo, que este tipo de prescripción exige a fin de que se declare la misma (art. 80 y 83 del CP).

Para este supuesto se tiene como antecedente lo señalado en: el Proy. de CP (Ago. 85), art. 84; el Proy. de CP (Mar. 86), art. 83; el Proy. de CP (Set. 89), art. 83; el Proy. de CP (Jul. 1990), art 84; y el Proy. de CP (En. 91), art. 80.

La Corte Suprema ha establecido su posición en la siguiente ejecutoria³⁵⁶:

“Tercero: Que el denominado concurso aparente de leyes invocado en la sentencia recurrida, se presenta cuando varias disposiciones legales parecieran ser aplicables al mismo hecho, pero en puridad sólo una de ellas corresponde ser aplicada al caso concreto, atendiendo a razones de especialidad, subsidiaridad o consunción; que, el concurso antes aludido tiene como presupuestos básicos: a) la unidad de acción, esto es, que se trate de una sola conducta que encuadra formalmente en varias descripciones típicas; b) que la acción desplegada por el agente persiga una única finalidad; y c) que lesione o ponga en peligro un solo bien jurídico. Cuarto: Que el bien jurídico protegido en el delito de usurpación de funciones, específicamente es el de garantizar la exclusividad en la titularidad y ejercicio de las funciones públicas como garantía del correcto funcionamiento de la Administración Pública, en tanto que en el delito de abuso de autoridad se busca preservar la regularidad del funcionamiento de la administración pública, es decir, la legalidad de los actos administrativos; que, siendo así, en el caso de estudio se lesionaron dos bienes jurídicos distintos, de modo que la conducta atribuida al encausado (...). Debe calificarse como un concurso ideal heterogéneo, pues el avocamiento al proceso de ejecución coactiva y la acción de expedir la resolución que trabó embargo no tienen autonomía ni son independientes entre sí, sino que los actos desplegados constituyen una unidad de acción desde el punto de vista jurídico. Por estos

³⁵⁶ Véase la Ejecutoria emitida en el R.N. N° 1582-2009, Lima, en el año 2010, en el ANEXO 3, de esta investigación, específicamente el documento N° 47.

fundamentos: declararon NULA la sentencia de vista (...), que por mayoría adecuó el delito de usurpación de funciones imputado (...) al delito de abuso de autoridad reformándola declaró fundada la excepción de prescripción (...) por el precitado delito e indicados agraviados; con lo demás que al respecto contiene; ORDENARON se expida nuevo pronunciamiento por otra Sala Superior; y los devolvieron”.

El Tribunal Constitucional al respecto no ha aportado nada en torno a esta regla, limitándose únicamente a aplicar, de manera literal, lo dispuesto por el art. 80 del CP³⁵⁷.

En un caso muy particular, el Tribunal Constitucional en una sentencia³⁵⁸ refiere que al existir un concurso ideal entre el delito de encubrimiento real y asociación ilícita para delinquir, el juez penal consideró aplicar la tesis de la independencia contrariando lo señalado en el art. 80 del CP, es decir cuando se trata de un concurso ideal se considera que la prescripción opera con el monto de pena conminada del delito de mayor gravedad, en este caso la del delito de asociación ilícita para delinquir. En este proceso penal reseñado por el Tribunal la cuestión radica en establecer cuál es el momento de prescripción del delito de asociación ilícita para delinquir, estableciéndose como ratio decidendi que este delito es permanente, por lo que el plazo de prescripción se inicia al cesar la permanencia, es decir confirma lo señalado por el juez penal (fundamento 12.2).

Uno de los aspectos teóricos que se puede plantear es saber si este artículo es extensivo al concurso medial, en el derecho comparado este es uno de los problemas que subyace a la doctrina española, pues para la mayoría la regla del concurso ideal abarca también al concurso medial (salvo Gómez Martín)³⁵⁹.

Aunque en el caso peruano nunca se ha establecido qué significa el supuesto *delito más grave*, en la práctica es la referencia a la pena conminada (en otros sistemas puede darse el caso que se refiera a la pena concreta), aunque mucha veces resulte discutible, así por ejemplo el caso de una tentativa de homicidio, en el que se utiliza el plazo a partir de la pena conminada del delito consumado, cuando de autos aparece una tentativa, ya que la víctima está viva³⁶⁰.

Por otro lado, no es ajena a la realidad el hecho de que se contemplen los casos por los cuales se tienen delitos conexos (señalándose que a esto se refiere y no a la conexidad procesal), en el caso peruano esta posibilidad ha sido ajena ya que ni la legislación, ni la doctrina ni la jurisprudencia han contemplado esta posibilidad, sí en cambio en el derecho comparado, donde incluso se ha planteado una solución, que es la de considerar un plazo único, éste es el caso de España, al amparo del art. 77 del CP (1995), así lo plasmó el Tribunal Supremo, en la Sentencia del 16 de octubre de 2009 que dice:

³⁵⁷ Véase la Sentencia expedida en el expediente N° 0616-2008-HC/TC, emitida el año 2008, en el ANEXO 5, de esta investigación, específicamente el documento N° 36.

³⁵⁸ Véase la Sentencia expedida en el expediente N° 8595-2006-PHC/TC, emitida el año 2006, en el ANEXO 5, de esta investigación, específicamente el documento N° 8.

³⁵⁹ Ragués, R. (2012) La prescripción de los delitos y de las penas: una ocasión perdida, pp. 228.

³⁶⁰ Ragués, R. (2012) La prescripción de los delitos y de las penas: una ocasión perdida, pp. 228.

“Junto a las hipótesis de concurso ideal o medial de delitos (art.77 CP) la doctrina de esta Sala incluye con igual régimen jurídico –los supuestos en que se hace imprescindible contemplar la realidad global proyectada por el autor o autores de los delitos, para la comprensión, enjuiciamiento y sanción del comportamiento delictivo en su totalidad, en cuyas situaciones la prescripción debe entenderse de modo conjunto mientras no prescriba el delito más grave o principal. Se suman pues a los supuestos del art.77 del CP, los caso de conexidad, pero, como tenemos dicho, no entendida en sentido o acepción procesal (art.17 LECrim.), sino con asiento en una base sustantiva o material, de tal suerte que las causas de mera conexidad procesal (art. 17-5. ° LECrim) deberán apreciarse separadamente en orden a la prescripción de los delitos que se enjuician en un sólo proceso.

Podemos incluir dentro de la consideración conjunta de los delitos a efectos de prescripción: a) Concurso ideal de delitos (art.77 CP). b) Concurso medial o instrumental (art.77 CP y 17.3 LECrim.). c) Comisión de un delito para procurar la impunidad de otro u otros (conexión instrumental: art. 17-4 LECrim.). d) Conexión entre los diversos delitos imputados a una persona si se proyectaron y ejecutaron según un plan o diseño conjunto, dentro del mismo contexto espacio-temporal (conexión material: art.17-1. °, 2. ° y 5. ° LE Crim.).Fuera de estas situaciones la imputación conjunta de varios delitos a una persona (art.17-5. ° LECrim.) no puede impedir que en cada uno de ellos opere la prescripción que es propia del delito de que se trate, considerados individualmente”³⁶¹.

Empero, con la incorporación del numeral 5 al art. 131 del cuerpo legal español, surgió una nueva interpretación de la referencia genérica de delitos conexos, así en torno a esta sentencia y a la incorporación se afirma “en todo caso, dado que la interpretación expuesta resulta más restrictiva y tiene efectos beneficiosos para el imputado nada parece oponerse a que mantenga su vigencia con el nuevo texto legal, máxime teniendo en cuenta la dificultad para sostener la necesidad de un plazo único de prescripción en aquellos casos en los que la conexidad se funda en meras razones de oportunidad procesal”³⁶².

Tratándose del concurso ideal no se debe olvidar que se ha modificado la consecuencia jurídica, pues ahora se señala que “se reprimirá hasta con el máximo de la pena más grave, pudiendo incrementarse ésta hasta en una cuarta parte, sin que en ningún caso pueda exceder de treinta y cinco años”. Por ello resulta obsoleta la consecuencia de la prescripción para el concurso ideal de delitos (las acciones prescriben cuando haya transcurrido un plazo igual al máximo correspondiente al delito más grave), válida solo para el concurso homogéneo, ya que ahora debe contemplarse una regla única donde se considere el incremento de la pena conminada con un límite determinado (puede ser 35 años), sea para el concurso ideal homogéneo o heterogéneo.

c.2. Concurso real (Art. 80 segundo párrafo).

El legislador consideró la tesis de la independencia sólo para los casos del concurso real heterogéneo. Especial situación se produce en el caso del concurso real homogéneo, pues

³⁶¹ Ragués, R. (2012) La prescripción de los delitos y de las penas: una ocasión perdida, pp. 229.

³⁶² Ragués, R. (2012) La prescripción de los delitos y de las penas: una ocasión perdida, pp. 230.

esta clase de concursos son irrelevantes para las reglas de prescripción. Así pues, cada uno de los injustos prescribirá de manera similar a un delito único.

Aunque no está demás señalar que al haberse modificado la consecuencia jurídica del concurso real y haberse transformado ahora en una circunstancia agravante genérica queda por definir si la regla de la prescripción se tiene que adaptar a esta nueva consecuencia jurídica. Sostengo que sí, pues ahora sí es relevante que se trate de un concurso real homogéneo o heterogéneo, pues ahora las penas se suman, entonces el plazo de referencia es mayor, sin embargo la actual regla de prescripción es obsoleta pues se tendría que aplicar el criterio de la independencia, es decir que cada delito en cuanto a la acción penal prescribe por su cuenta, siendo esto una incoherencia que debe corregir de inmediato. Por ello sostengo de lege ferenda que se debe modificar el art. 80 y establecer que el plazo de referencia en los concursos es el resultado de la sumatoria con algunos límites para la pena temporal y otro para la cadena perpetua.

Sin embargo, fue el anteproyecto de 1900-1902, art. 106, donde se propuso la tesis de la *mayor gravedad*.

Los antecedentes de esta norma son los siguientes: el Proy. de CP (Ago. 85), art. 84; el Proy. de CP (Mar. 86), art. 83; el Proy. de CP (Set. 1989), art. 83; el Proy. de CP (Jul. 90), art. 84; y el Proy. de CP (Ene. 1991), art. 80.

En el derecho comparado se sigue la fórmula del concurso genérico, con el predominio de la *teoría de la independencia*: así el art. 119 del CP (Bra.) **independencia para cada uno**; el CP (Col.) art. 84 último párrafo **prescripción de varias acciones**; el CP (Méx.F.) art. 108 **más grave**; el CP (Ita.) art. 172 penúltimo párrafo **para cada delito**; y el CP (T.L.) art 107.

La Corte Suprema no ha sentado criterio alguno en sus ejecutorias³⁶³ en torno a este supuesto, así se tiene lo señalado a continuación:

“(...). **Cuarto:** Que según la tesis inmutativa del señor Fiscal Superior los encausados...habrían perpetrado el delito de omisión de deberes funcionales y peculado doloso agravado (...). **Quinto:** Que en el caso de autos, se advierte que concurren dos hechos punibles que deben considerarse como delitos independientes, por lo que opera el concurso real de delitos según lo previsto por el texto original del artículo cincuenta del Código Penal, que acorde con el segundo párrafo del artículo ochenta del citado catálogo punitivo las acciones prescriben separadamente en el plazo señalado para cada uno; que como uno de los hechos delictivos que se les atribuyó a los citados encausados configuraría el delito de omisión de deberes funcionales tipificado en el artículo trescientos

³⁶³ Véase la Ejecutoria Suprema de la Primera Sala Penal Transitoria, emitida en el R.N. N° 4836 – 2007, Ayacucho, resuelta en el año 2009, en el ANEXO 3, de esta investigación, específicamente el documento N° 45. También se aprecia el mismo criterio en las Ejecutorias expedidas en el R.N. N° 5262-2008, Arequipa; en el R.N. N° 262-2010, Piura, resuelto en el 2010, y en la Ejecutoria Suprema de la Primera Sala Penal Transitoria, emitida en el R.N. N° 1643 – 2009, Lima, resuelto en el año 2010. Véase en el ANEXO 3, de esta investigación, respectivamente en los documentos N° 46, 48 y 49.

setenta y siete del Código Penal, este reprime la conducta delictiva que describe con pena privativa de libertad no mayor a los dos años; que conforme al artículo ochenta del acotado Código Penal el plazo ordinario de prescripción de la acción penal es igual al máximo de la pena fijada por la ley para el delito, si es privativa de libertad y, su plazo extraordinario, en tanto la acción se interrumpió por las actuaciones del Ministerio Público y de las autoridades judiciales, opera conforme al artículo ochenta y tres del mismo Código cuando el tiempo transcurrido sobrepasa en una mitad al plazo ordinario de prescripción. **Sexto:** Que, en consecuencia, el plazo extraordinario de prescripción de la acción penal opera en este caso para el delito de omisión de deberes funcionales a los tres años; que tomando en cuenta el tiempo transcurrido en que se habría perpetrado el hecho punible, indicado en los fundamentos jurídicos precedentes, dicho plazo a la fecha venció con exceso, por lo que de oficio debe declararse prescrita la acción penal por el citado delito (...)", pp. 4 y 5.

d. La tentativa (Art. 82 numeral 1).

Interesa de manera especial los casos de tentativa en los delitos de resultado³⁶⁴. Así en estos delitos la tentativa se manifestará, sea inacabada como acabada, desde el momento en que se inició el iter criminis (p. ej.: en el delito de homicidio, el sujeto activo apunta con un arma de fuego al sujeto pasivo, pero en esas circunstancias un tercero interviene y le quita el arma al sujeto activo - tentativa inacabada), hasta el momento en que ya la conducta prohibida se realizó, pero el resultado aún no se produce (p. ej.: en un homicidio, al sujeto pasivo ya le disparó el sujeto activo, hecho del que se percató un tercero que era médico, procediendo a auxiliarlo y a salvarle la vida - tentativa acabada).

En la tentativa inacabada, el plazo de prescripción de la persecución penal comenzará a computarse desde que se inició el iter criminis hasta antes que el sujeto activo del delito realice todos los actos que el tipo penal le exige (sea por acción u omisión), en cambio en la tentativa acabada dicho plazo se computará a partir de la realización de la conducta descrita en el tipo penal (sea por acción u omisión) hasta antes que se produzca el resultado prohibido (manifestación de la conducta prohibida).

Resulta de cuidado la tentativa en ciertas clases de delitos, así se tiene:

- i) En los delitos de *peligro* concreto habrá tentativa sólo cuando “presenten progresión o gradualidad de actos ejecutivos³⁶⁵, de allí que la prescripción de la persecución penal se producirá cuando todos los actos que sean necesarios para configurar el tipo penal no se hallan efectuado.

³⁶⁴ Véase López D. y García M. (1996), pp. 84 quienes afirman comentando el art. 132 del código penal español: “No se establece claramente el momento a partir del cual comienzan a transcurrir los plazos de prescripción del delito. El art. 132 establece que se computarán «desde el día en que se hubiere cometido la infracción punible», lo que (en los delitos cuya realización se prolonga en el tiempo) no aclara cuándo se considera «cometido» el delito, si en el momento de realización de la acción o en el momento de la producción del resultado. Por tanto, nada impide que se siga considerando como momento de «comisión», a estos efectos, el de la producción del resultado, puesto que formando éste parte de la tipicidad por la que se ejerce la acción penal, parece lógico que determine el inicio de su ejercicio”.

³⁶⁵ Rojas (1997), pp. 277.

En el ámbito nacional agrega ROJAS VARGAS que “el peligro no puede concebirse - en el caso de tentativa - a un nivel de hipótesis o de criterio subjetivo como posibilidad potencial, tiene necesariamente que referirse a un nivel concreto, objetivable y previsible de peligro verificable; con ello estamos descartando el peligro abstracto como propios a los actos de ejecución tentados”³⁶⁶.

- ii) En los delitos de *actividad*, también habrá tentativa y por ende el plazo de prescripción de la persecución penal comenzará a correr sólo en “los casos hechos donde se observe fragmentación de actos”³⁶⁷ y será a partir de tales actos de tentativa en que se iniciará el plazo de prescripción.

Los antecedentes nacionales los encontramos en: la Ley N° 9014 en su art. 7°; el Proy. de CP (Oct. - Nov. 84) art. 81 numeral 1; el Proy. de CP (Ago. 85), art. 87 numeral 1; el Proy. de CP (Mar. - Abr. 86), art. 86 numeral 1; el Proy. de CP (Set. 89), art. 85 numeral 1; el Proy. de CP (Jul. 90), art. 86 numeral 1; y el Proy. de CP (Ene. 91), art. 82 numeral 1.

Aquí lo importante será establecer en qué momento se produjo el cese de la actividad delictuosa. Ésta será una consideración hecha por el juez penal al abrir la instrucción o al momento de juzgar.

La Corte Suprema en algunos casos ha distinguido indirectamente la necesidad de especificar el inicio del delito en grado de tentativa, en este sentido se aprecia la ejecutoria³⁶⁸ en su sexto fundamento, que señala:

“**Sexto:** Que, efectuando el cómputo del plazo desde la fecha en que sucedieron los hechos imputados, esto es el día veintitrés de febrero de dos mil seis, y considerando que los hechos descritos se agotaron en ese único día-por haberse visto frustrados por la intervención de terceros-, la acción penal (...) ha prescrito, por haber transcurrido más de tres años desde la comisión de los hechos imputados (...)”, pp.3.

e. El delito instantáneo (Art. 82 numeral 2).

La prescripción de la persecución penal de los delitos instantáneos, se dará a partir del instante en que la conducta prohibida por el tipo penal (resultado) se realice en un solo momento (sea por acción u omisión), a pesar de que sus efectos permanezcan (así p. ej.: la usurpación).

El día en que el delito se consuma es la referencia para iniciar el cómputo de la prescripción, así el primer día sería al día siguiente y no como lo señala REY

³⁶⁶ Rojas (1997), pp. 247.

³⁶⁷ Rojas (1997), pp. 277.

³⁶⁸ Véase la Ejecutoria Suprema de la Primera Sala Penal Transitoria, emitida en el R.N. N°14-2008, Lambayeque, donde se declaró prescrita de oficio la excepción de prescripción de la persecución penal, en el ANEXO 3, de esta investigación, específicamente en el documento N° 21.

GONZÁLEZ³⁶⁹, quién precisa que “el día en que el delito se consuma es ya el primer día del plazo prescriptivo”.

Los antecedentes nacionales los encontramos en: el Proy. de CP (Oct.-Nov. 84), art. 81 numeral 2; el Proy. de CP (Ago. 85), art. 87 numeral 2; el Proy. de CP (Mar.-Abr. 86), art. 86 numeral 2; el Proy. de CP (Set. 89), art. 85 numeral 2; el Proy. de CP (Jul. 90), art. 86 numeral 2; y el Proy. de CP (Ene. 91), art. 82 numeral 2.

También es pertinente referir que en el año de 1998 se estableció un Acuerdo Plenario distrital que señaló los criterios a seguir para determinar la prescripción en los delitos instantáneos, continuados y permanentes, a manera de ejemplo indicaremos que uno de los acuerdos fue el NOVENO que precisó que “Por mayoría, menos un voto, que la figura del inciso primero del artículo 168 del Código Penal corresponde a un delito instantáneo de efectos permanentes”³⁷⁰.

La jurisprudencia respecto al inicio de la prescripción en el delito instantáneo de usurpación:

1. *La característica principal del delito de usurpación es el despojo de la posesión o tenencia de un bien inmueble, de allí que el momento de consumación se da en el acto de despojo, y la ulterior posesión ilícita constituye objetos del mismo, por lo cual se trata de un delito instantáneo, luego, a partir de este momento, se empieza a correr el plazo de prescripción de la persecución penal (Ejecutoria Suprema del 25 de setiembre de 1992. Recaída en la causa N° 1329-92-A. Procede del Cusco).*

2. *El delito de usurpación es un delito instantáneo de efectos permanentes, por lo que la prescripción de la acción penal comienza a verificarse desde que se consumó la acción delictiva que establece el tipo legal, tal como lo dispone el inciso 1° del artículo 82° del Código Penal (Ejecutoria Superior del 24 de junio de 1992. Recaída en la causa N° 255-92 de la Décimo Primera Sala Penal de la Corte Superior de Lima).*

3. *El delito de usurpación como ha quedado establecido en reiteradas Ejecutorias Supremas, es de comisión instantánea el mismo que se materializa en el momento del despojo de la posesión; que, en el caso materia de autos, los hechos a que se contrae la denuncia ocurrieron según manifiesta la propia agraviada, el seis de abril de mil novecientos noventiuno; que, el Fiscal Provincial formuló la denuncia el treintiuño de agosto de mil novecientos noventitrés, cuando la acción penal ya no se encontraba expedita por haber operado la prescripción, teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo ochenta del Código Penal vigente (Ejecutoria Suprema del 21 de noviembre de 1995. Recaída en la causa N° 3847-95. Procede de Lambayeque).*

f. El delito continuado y el delito masa (Art. 82 numeral 3).

Al respecto podemos considerar un concepto simple y genérico o un concepto analítico, así para el primero, el delito continuado se da cuando “existe una unidad objetiva y/o subjetiva que permite ver a distintos actos, por sí solos delictivos y no producidos en forma de «unidad natural de acción»”³⁷¹.

³⁶⁹ Rey, C. (2004) Problemas en torno a la prescripción, pp. 128.

³⁷⁰ Véase los fundamentos del Pleno Jurisdiccional Penal Nacional ICA-1998, en el ANEXO 4, de esta investigación, específicamente en el documento N° 12.

³⁷¹ Mir (2008), pp. 642, párrafo 15; véase también Tomás, J (s/f) El delito continuado en el Código Penal, pp. 121.

En el caso de concepto analítico, el delito continuado “es una realidad jurídica (unidad jurídica de acción) no tributaria de una «concepción natural», en función de la cual una repetición de acciones u omisiones de equivalente significación penal, llevadas a cabo por un mismo sujeto, que en virtud de similares circunstancias favorecedoras se representa unas como continuación de la otras, se consideran, por decisión normativa, un solo hecho en sentido jurídico, que adicionalmente puede conllevar una sola realización típica (unidad de norma penal lesionada) o varias (concurso ideal) dependiendo del carácter, personalísimo o no, del bien jurídico lesionado por cada acción”³⁷².

De este concepto analítico puede considerarse también algunos aspectos que se tienen que aclarar, así CHOCLÁN MONTALVO precisa que en “cualquier caso, la regulación legal de la acción continuada no acepta en su plenitud de efectos la extensión a la acción continuada de la categoría dogmática de la unidad típica de acción por intensificación cuantitativa del injusto. Si el delito continuado fundamenta una sola realización de tipo ampliada cuantitativamente por repetición del mismo tipo legal, debió ser admitido en caso de ataque de bienes personalísimos susceptibles de lesión gradual dirigida contra un solo titular, no justificándose materialmente la restricción del legislador. Ello evidencia la limitada ampliación de la unidad típica de acción, lo que permite deducir algunas consecuencias dogmáticas: demostrada la voluntad de la ley de limitar la extensión de la relación de continuidad, no resulte incoherente no deducir de la unidad de acción por continuación *todas* las consecuencias que habría de deducir de concebir el delito continuado como caso de unidad típica de acción. Así no está impuesto por la ley, por ejemplo la suma de las cuantías de las acciones parciales en las que inciden conceptos cuantitativos de relevancia típica, que en una aplicación consecuente de la idea de intensificación cuantitativa del injusto quizá no pudiera evitarse”³⁷³.

Si algunos consideraron que por razones materiales o procesales la teoría del delito continuado aliviaría la carga procesal se equivocaron, ya que en realidad no se logró tal propósito en los tribunales españoles así CHOCLÁN MONTALVO precisa que las “razones de simplificación procesal que justificaban el recurso a la relación de continuidad se mostraron inciertas en cuanto el delito continuado no producía el efecto de alivio de trabajo de los Tribunales que se pretendía obtener en cuanto el juez debía comprobar, como para el caso de pluralidad de hechos independientes, si en cada hecho particular de la serie está configurado el tipo legal, además de no compensar las importantes desventajas político-criminales a que daba lugar. En ocasiones, nuestra jurisprudencia, olvidando la necesidad de constatar en cada caso individual la realización del tipo, ha adoptado su decisión sobre la base de una representación global de la plural situación fáctica, en contra de las exigencias constitucionales que inspiran nuestro sistema procesal”³⁷⁴.

Así como procesalmente no se pudo justificar la fundamentación del delito continuado desde el punto de vista material tampoco ha sido posible así se dirá que “sólo sería susceptible de recibir una justificación material en la medida que se demuestre que, según el sentido del tipo penal, es una institución necesaria para aprehender correctamente el

³⁷² Choclán (1997), pp. 447.

³⁷³ Choclán (1997), pp. 448.

³⁷⁴ Choclán (1997), pp. 448 y 449.

injusto realizado y la culpabilidad, siendo insuficientes las reglas del concurso real para captar el desvalor del conjunto. La acción continuada, aunque conlleva determinados efectos gravosos para el autor (ejemplo, comienzo de la prestación), se castiga con una sola pena, evitando las reglas de acumulación propias del concurso real, que de ordinario en la praxis – al margen las infracciones patrimoniales- producen un privilegio para el autor de una serie continuada de realizaciones típicas. Ese beneficio no se corresponde con una menor culpabilidad del autor pues, a pesar de la opinión mayoritaria que considera que el sujeto que no es capaz de resistir la tentación de delinquir merece menor sanción por la debilidad demostrada, sin embargo, el argumento de la disminución de la culpabilidad es insostenible dogmáticamente. No existen razones para considerar que el autor de una serie continuada de acciones, que repite el delito ante circunstancias favorecedoras equivalentes, haya padecido cierta anormalidad en el proceso de motivación, no pudiéndose apreciar una reducción de la ilicitud ni un menor disvalor ético-social de los motivos que le llevaron a actuar pues la propensión al delito no es un motivo ético, socialmente valioso. En cualquier caso, aun afirmándose la menor culpabilidad- que no explicaría completamente el delito continuado al no abarcar los supuestos en que el autor obró de acuerdo con un plan preconcebido- todavía habría que decidir la insuficiencia de las reglas penológicas previstas para la pluralidad de hechos independientes para comprender correctamente la culpabilidad por el hecho conjunto. Por el contrario, estas reglas se han considerado suficientes por la ley, en caso de lesión de bienes personalísimos, al rechazar la acción continuada, de manera que es dudoso que el delito continuado resulte imprescindible para tratar de modo adecuado, desde el punto de vista del injusto y culpabilidad, una pluralidad de acciones equivalentes penalmente. En consecuencia, resulta difícil encontrar una justificación material de la figura que permita explicar una unidad jurídica más allá de lo que permite una simple interpretación del tipo penal”³⁷⁵.

Por ende tampoco, la postura material como lo acabamos de ver ha podido justificar la aceptación del delito continuado en la doctrina, aunque si apreciamos que lo relevante es por qué la teoría del delito continuado más bien justificaría el incremento de la sanción penal, en vez de ser un supuesto de atenuación. Desde la perspectiva subjetiva se considera que en el caso del dolo no siguiendo la teoría del dolo global, sino la teoría del dolo de continuación se tendría más argumentos para sustentar la agravación del delito continuado, así lo deja establecido el propio CHOCLÁN MONTALVO quién sostiene que “la equiparación en el tratamiento penal del autor que obra de acuerdo con un plan preconcebido, frente al que obró con dolo de continuación, se encuentra injustificado en opinión de la mayoría de la doctrina en cuanto el delincuente planificador revela una mayor energía criminal que aquel que cede a repetidas tentaciones. Nuestra posición es que ningún caso se justifica materialmente el privilegio que conlleva una sanción más benévola por la repeticiones de acciones equivalentes en su significado jurídico-penal frente al caso en que entre las acciones falta la conexión fáctica que representa el nexo de continuidad”³⁷⁶.

Así definido el delito continuado, el plazo de prescripción de la persecución penal comenzará desde el momento en que cesa el último acto conformante de dicho delito³⁷⁷.

³⁷⁵ Choclán (1997), pp. 449.

³⁷⁶ Choclán (1997), pp. pp. 451.

³⁷⁷ En la doctrina son de la misma opinión Yussef (1987), pp. 60-61; Vela (1983), pp. 422 y ss. Así también Rey, quien incluso precisa que el supuesto contrario sería injusto, (1999), pp.130 problemas.

Las críticas tampoco se han hecho esperar en torno al delito masa y su relación con el delito continuado, pues junto “al sistema de absorción agravada, se establece el régimen específico de asperación obligatoria únicamente aplicable a la infracción patrimonial continuada cuando en atención al daño total producido el hecho revistiere notoria gravedad y hubiere perjudicado a una generalidad de personas”³⁷⁸, incluso se señala que este caso constituye una laguna legal ya que no es delito masa y es cuestionable que se trate de un delito continuado por el injusto producido.

Este problema también se presenta para en el sistema penal peruano, pues a pesar de haberse regulado el delito masa de manera diferente al delito continuado, el delito masa tiene una agravante genérica que establece como consecuencia la proporción de un tercio adicional. No obstante, para algunos este monto deviene en irrelevante respecto al plazo de prescripción de la persecución penal, pues se considera que dicho incremento se aprecia al momento de imponer el monto de la pena, esto es en la determinación judicial de la pena. Sin embargo, creo que aquí también se debe adecuar el plazo de la prescripción de persecución penal para esta agravante, por lo que de lege ferenda debe incorporarse como un nuevo supuesto de prescripción penal.

Los antecedentes nacionales los encontramos en: el Proy. de CP (1916), art 92; el CP (1924) art 120; la Ley N° 9014 en su art. 7; el Proy. de CP (Set. 84), art. 94; el Proy. de CP (Oct.-Nov. 84), art. 81 numeral 3; el Proy. de CP (Ago. 85), art. 87 numeral 3; el Proy. de CP (Mar.-Abr. 86), art. 86 numeral 3; el Proy. de CP (Set. 89), art. 85 numeral 3; el Proy. de CP (Jul. 90), art. 86 numeral 3; el Proy. de CP (Ene. 91), art 82 numeral 3; y el CJM, art 60.

La Corte Suprema ha establecido vía Ejecutoria el momento en el cual se inicia el cómputo de la prescripción de la persecución penal para el delito continuado³⁷⁹ y su concurrencia en concurso real homogéneo, así se tiene los siguientes fundamentos:

“Primero: Que la PARTE CIVIL en su recurso formalizado de fojas ciento setenta y nueve alega que el principio de favorabilidad para aplicar la ley mas benévola al procesado sólo se aplica cuando existe conflicto de normas; que la conducta delictiva del acusado Marcos Landman Rubinger se tipificó en el artículo doscientos sesenta y ocho e inciso dos del numeral doscientos sesenta y nueve del Código Penal por los hechos ocurridos en el periodo fiscal de mil novecientos noventa y cuatro y mil novecientos noventa y cinco, y en los incisos uno y cuatro del Decreto Legislativo numero ochocientos trece por el fáctum acaecido desde el veintiuno de abril de mil novecientos noventa y seis hasta la culminación del año; que, por tanto, se trata de un delito continuado y el plazo de prescripción de la acción penal comienza a computarse desde el día que terminó la actividad delictiva.

³⁷⁸ Choclán (1997), pp. 452.

³⁷⁹ Véase la Ejecutoria emitida vía R.N. N° 4000 -2008, Lima, la misma que se resolvió 2010, en el ANEXO 3, de esta investigación, específicamente en el documento N° 22.

Tercero: Que del conjunto de hechos que sustenta la hipótesis incriminatoria se evidencia un concurso real homogéneo, pues existen varias conductas independientes relacionadas con un elemento jurídico -tipo penal-; que es de precisar que según la imputación el acusado Landman Rubinger se benefició anualmente con el uso de un falso crédito y durante tres años fiscales; que es evidente la presencia de una pluralidad de hechos independientes y autónomos que lesionaron el mismo bien jurídico y norma penal -defraudación tributaria-, en tanto en cuanto, la voluntad criminal culminó al cese de cada año fiscal y se inició nuevamente en el siguiente periodo; que, por tanto, las acciones penales prescribirán separadamente en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley para cada uno de conformidad con el segundo párrafo del artículo ochenta del Código Penal.

Cuarto: Que en el auto de apertura de instrucción de fojas noventa y cuatro se encuadró la conducta como delito de defraudación tributaria, en su modalidad de utilización indebida de crédito fiscal y ocultamiento de ingresos, previstos en el (i) artículo doscientos sesenta y ocho e inciso dos del numeral doscientos sesenta y nueve del Código Penal por los hechos ocurridos en el periodo fiscal de mil novecientos noventa y cuatro y mil novecientos noventa y cinco -conminado con pena no menor de uno ni mayor de seis años- del Código Penal; y en los (ii) incisos uno y cuatro del Decreto Legislativo número ochocientos trece -pena no menor de ocho ni mayor de doce años- por los hechos sucedidos desde el veintiuno de abril de mil novecientos noventa y seis hasta la culminación de este año fiscal.

Quinto: Que la prescripción ordinaria para el delito de defraudación tributaria opera cuando ha transcurrido un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley para el delito -seis años para lo tipos penales contemplados en el punto (i) del fundamento jurídico cuarto, y doce años para los comprendidos en el punto...Sexto: Que, a la fecha, se ha sobrepasado el plazo ordinario y extraordinario establecido en la norma sustantiva para el delito de defraudación tributaria por los hechos sucedidos durante el periodo fiscal de mil novecientos noventa y cuatro y mil novecientos noventa y cinco -comprendidos en el artículo doscientos sesenta y ocho e inciso dos del numeral doscientos sesenta y nueve del Código Penal-, por lo que se ha extinguido la acción penal ejercitada en la presente causa contra el citado encausado por esos hechos, y sólo esta vigente por los hechos sucedidos durante el periodo fiscal de mil novecientos noventa y seis -tipificados en los incisos uno y cuatro del Decreto Legislativo número ochocientos trece...I. Declararon NO HABER NULIDAD en la resolución de fojas ciento setenta y cinco, del veintinueve de agosto de dos mil seis, en el extremo que declaró fundada la excepción de prescripción deducida por el acusado ...por delito de defraudación tributaria por los hechos ocurridos durante el periodo fiscal de mil novecientos noventa y cuatro y mil novecientos noventa y cinco y tipificado en el artículo doscientos sesenta y ocho e inciso dos del numeral doscientos sesenta y nueve del Código Penal. II. Declararon HABER NULIDAD en la misma resolución en cuanto declaró fundada la excepción de prescripción deducida por el citado acusado por delito de defraudación tributaria por los hechos

sucedidos durante el periodo fiscal de mil novecientos noventa y seis y tipificado en los incisos uno y cuatro del Decreto Legislativo número ochocientos trece; reformándola: declararon infundada dicha excepción (...)”, pp. 92 y 91.

También la Corte Suprema ha establecido sobre el delito continuado vía Ejecutoria³⁸⁰ lo siguiente:

“Cuarto: Que, en este sentido, el análisis de los agravios expuestos por los recurrentes se realizará, en primer lugar, en cuanto a la responsabilidad penal por el delito contra la administración pública - corrupción de funcionarios - negociación incompatible con el cargo-; luego, respecto del delito contra la administración pública - malversación de fondos-; y, finalmente, sobre el delito contra la fe pública -falsedad ideológica-. Quinto: Que, teniendo en cuenta que los hechos delictivos descritos en el acápite "a)" del segundo considerando de esta resolución imputados a los indicados encausados y calificados como delito de negociación incompatible con el cargo, previsto en el artículo trescientos noventa y siete del Código Penal -vigente al momento de los hechos, esto es, antes de su modificación por el artículo uno de la Ley número veintiocho mil trescientos cincuenta y cinco, publicada el seis de octubre de dos mil cuatro-, sucedieron desde el año de mil novecientos noventa y siete hasta enero de dos mil dos, conforme se aprecia del contenido del Informe Especial número doscientos noventa y cinco - dos mil tres CG/ORGU de fojas trescientos diez a trescientos catorce -que obra aparte del expediente principal-, constituyendo un delito continuado porque los agentes activos de manera repetida desarrollaron la misma resolución criminal; y advirtiéndose que el indicado delito en su extremo máximo se encontraba conminado con pena privativa de libertad no mayor de cinco años, haciendo el cómputo correspondiente hasta la fecha de expedida la recurrida, ha transcurrido en exceso el plazo extraordinario de prescripción establecido en el artículo ochenta y tres del aludido cuerpo legal -figura penal apreciada por haberse interrumpido el plazo ordinario de prescripción debido a la intervención de la autoridad competente; no resultando aplicable la duplicidad dispuesta en el párrafo "in fine" del artículo ochenta del indicado Código y en el artículo cuarenta y uno de la Constitución Política del Estado, al no ser exigible para la consumación de esta clase de delitos que se "(...) produzca un resultado material o un perjuicio patrimonial", pues no busca tutelar directamente la buena administración del patrimonio estatal, como ocurre con los delitos de peculado, malversación de fondos, entre otros, sino que el objeto de la tutela penal es garantizar "el normal desenvolvimiento y funcionamiento de la administración pública, en cuanto oportunidad y eficacia en el cumplimiento de la función pública"; por tanto, ha operado la extinción de la acción penal del indicado delito y en concordancia con lo establecido por el artículo quinto del Código de Procedimientos Penales, se debe proceder a estimar la solicitud propuesta por los encausados... así mismo, se debe hacer extensiva esta conclusión a favor de la situación jurídica de los encausados... en atención al principio de favorabilidad

³⁸⁰ Véase la Ejecutoria emitida vía R.N. N° 46-2010, Cusco, la misma que se resolvió 2010, en el ANEXO 3, de esta investigación, específicamente en el documento N° 19.

que informa el artículo trescientos uno del Código de Procedimientos Penales, en consecuencia, debe declararse de oficio la prescripción de la acción penal por el indicado delito. pp. 35 - 36 (...) I.- HABER NULIDAD en la sentencia de fojas mil seiscientos treinta y nueve, del veinte de noviembre de dos mil nueve, integrada por resolución de fojas mil setecientos seis, del treinta de noviembre de dos mil nueve, en el extremo que declaró improcedente la excepción de prescripción de la acción penal promovida por los encausados....contra el delito contra la administración pública -corrupción de funcionarios -negociación incompatible con el cargo-en agravio del Estado representado por la Municipalidad Distrital de Santiago: reformándola declararon FUNDADA LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCION DE LA ACCIÓN PENAL (...) por el delito contra la administración pública - corrupción de funcionarios -negociación incompatible con el cargo- en agravio del Estado representado por la Municipalidad Distrital de Santiago (...)", pp. 37 y 38.

En el caso del delito continuado hubieron posturas que justificaron la prescripción de cada infracción individualmente considerada argumentando que “no puede admitirse que la figura del delito continuado se convierta en instrumento para castigar delitos que han prescrito (véase Rey González pp.130 quién cita a María Teresa Castiñeira).

La Corte Suprema en alguna de sus ejecutorias ha precisado la necesidad de referirse al delito instantáneo³⁸¹ para fijar el inicio del cómputo del plazo de la prescripción de la persecución penal, así se tiene:

“Sétimo: Que, efectuando el cómputo del plazo desde la fecha de cese laboral del procesado que el Fiscal atribuyó como última fecha de consumación del delito, esto es, a partir del veintidós de julio de dos mil, y considerando su naturaleza de delito instantáneo, a la fecha en que se expidió la resolución de vista impugnada la acción ya había prescrito...” pp.3.

La Corte Suprema también ha tomado posición sobre si el incremento del monto de la pena conminada por el supuesto del delito continuado implica también el incremento del plazo de prescripción de la persecución penal mediante el **Acuerdo Plenario N° 8-2009/CJ-116**³⁸² en cuyo fundamento 13 concluye que:

“13°. Situación distinta se presenta en el caso de la denominada agravante por pluralidad de personas perjudicadas por el delito continuado -delito masa-, porque si bien se la cataloga como una circunstancia agravante específica del delito continuado, debe tenerse en cuenta que por la forma como ha sido regulada en el artículo 49° CP, constituye ya un delito en sí –delito masa-. Por consiguiente, en su regulación se ha creado un nuevo marco penal abstracto –la pena

³⁸¹ Véase la Ejecutoria Suprema de la Primera Sala Penal Transitoria, emitida en el R.N. N° 2177 – 2008, Puno, donde se declaró fundada la excepción de prescripción de la persecución penal, en el ANEXO 3, de esta investigación, específicamente en el documento N° 20. En este mismo sentido, véase la Ejecutoria emitida en el R.N.N° 14-2008, Lambayeque, en el ANEXO 3, de esta investigación, específicamente en el documento N° 21.

³⁸² Véase el Acuerdo Plenario, que a su vez contiene los otros fundamentos, en el ANEXO 4, de esta investigación, específicamente en el documento N° 3.

correspondiente al delito más grave más el incremento de un tercio de la máxima prevista para dicho delito-, por lo que para determinar la prescripción de la acción penal en esta clase de delitos debe tomarse como base dicho marco punitivo abstracto”.

Sobre este punto ya he manifestado mi posición.

La jurisprudencia respecto al inicio de la prescripción de la acción penal en un delito continuado:

1. El delito continuado se configura cuando el agente en momentos diferentes ejecuta con actos reiterados una misma resolución criminal. Que tratándose de delito continuado, como lo es la reproducción sistemática de fonogramas que se hace sin autorización del titular del derecho intelectual correspondiente, la prescripción de la acción penal comienza a verificarse desde que concluye la actividad delictuosa, tal como lo prescribe el inciso 3° del artículo 82° del Código Penal (Ejecutoria Superior del 10 de julio de 1992. Recaída en la causa N° 194-90 de la Décimo Primera Sala Penal de la Corte Superior de Lima).

2. Si el acusado formuló denuncia contra el Juez de Primera Instancia, que dio origen a la causa criminal respectiva, e insistió en la imputación presentando en el curso de ella diversos escritos y aún interpuso recurso de nulidad contra el auto que se declaró no haber lugar a juicio oral contra el Juez denunciado, el delito contra la administración de justicia cometido por el denunciante tiene carácter continuo, y, en consecuencia, el término de la prescripción corre desde el día siguiente al de la interposición del mencionado recurso de nulidad, conforme al art. 120 del C.P. y 7° de la Ley N° 9014. La reparación civil, a favor del agraviado, debe fijarse con criterio prudencial, tendiendo en cuenta los perjuicios materiales y morales ocasionados³⁸³.

g. El delito permanente (Art. 82 numeral 4).

La explicación del delito permanente se solía realizar por oposición al delito instantáneo, así el resultado o la manifestación de la conducta prohibida por el tipo penal se prolonga en el tiempo en varios momentos, por ende la prescripción de la persecución penal se iniciaba a partir del último acto en que dicho resultado se haya realizado, así p. ej.: el sujeto activo A, realiza un delito de secuestro por 15 días, entonces el plazo de prescripción empezará a contarse a partir del décimo quinto día.

Sin embargo, el derecho penal ha seguido evolucionando al punto que hoy en día el delito permanente es considerado como un delito instantáneo, es decir no es un delito diferente u opuesto, postura insostenible hoy en día, a partir de precisarse que la consumación en el delito instantáneo es una y en el delito permanente es otra, si se considera el criterio de la consumación, ya que ambos son instantáneos.

Así en la doctrina italiana precisa GRISOLIA, según LLORIA GARCÍA, que “la doctrina que identifica la consumación del delito permanente con la continuidad en la

³⁸³ Véase en el Código Penal de Espino Perez, pp. 150, quien a su vez nos remite a la Ejecutoria del 29 de Abril de 1941. R. del F. 1941 pg. 383 R. de los T. 1941 pg. 158.

ejecución *confunde el momento de la consumación con la realización del delito*” y explica LLORIA GARCÍA señalando que “la fundamentación de una figura delictiva viene determinada por la integración de todos los elementos típicos, por lo que resulta esencial su interpretación. La concreta figura de la parte especial es la que informa en qué momento se produce la afección del bien jurídico (y por lo tanto en qué momento se consuma) y también, de si esa afección es susceptible de perdurar en el tiempo. En ese caso podremos calificar al delito como permanente”, precisándose “sin embargo, que el delito *autorice* la permanencia no significa que su ejecución necesariamente haya de ser duradera”³⁸⁴.

Esta postura se complementa con el fundamento “que de las descripciones típicas de las figuras legales que contienen delitos permanentes no se desprende la obligatoriedad del mantenimiento de la afección del bien. Lo que del tipo se infiere en estos casos es el carácter dinámico de la acción, que no se agota necesariamente en un instante, pero nunca la obligación de prolongarla. Esta conclusión además, resulta lógica, si se entiende que el fin primordial del ordenamiento jurídico penal es la evitación del daño o riesgo para los bienes jurídicos. El legislador con la descripción de las conductas típicas señala aquello que queda prohibido indicando, en su caso, qué comportamientos resultan más o menos graves en atención a la prolongación de la situación ilícita, pero no establece, al menos en materia de delito permanente, una obligación de mantenimiento de la lesión o peligro, lo que sería contradictorio a sus propios fines”, concluyéndose que para los delitos permanentes “la consumación es instantánea, surge cuando se produce la afección del bien jurídico y, a partir de ese momento, el sujeto puede continuar con la ejecución hasta la terminación o terminar en ese mismo instante”³⁸⁵.

Así definido el delito permanente postura que aquí vamos a asumir queda por precisar cómo afecta esta concepción en el inicio del cómputo del plazo de la prescripción de la persecución penal.

Algunos han considerado que el inicio del plazo de prescripción será desde el momento de la consumación formal (postura crítica de RODRIGUEZ MOURULLO considerando el término hubiere cometido el delito que regulaba el derogado CP español en su art. 114), otros especifican que será en el momento en que terminó la actividad delictuosa, la misma que la identifican con la consumación formal, para otro grupo no podría ser el momento de la consumación en sí, sino el proceso ejecutivo, y más precisamente al estado post-consumativo (así LLORIA GARCÍA a partir de la formula del CP (Esp.), art. 132, formula que resalta el término *delito cometido*).

En el caso peruano se ha utilizado la formula “cesó la permanencia” y es hay que entenderla a partir no del momento de la consumación formal, sino del proceso ejecutivo o del “estado post-consumativo, con relevancia penal, en el que se mantiene la afección del bien jurídico por el sostenimiento voluntario del comportamiento del sujeto, que termina, por la voluntad del autor o por otras causas, con el levantamiento del estado antijurídico”³⁸⁶.

³⁸⁴ Véase Lloria (2006), pp. 106.

³⁸⁵ Véase Lloria (2006), pp. 108.

³⁸⁶ Véase Lloria (2006), pp. 110.

Éste será el criterio que asumo para apreciar los casos en que concurren supuestos de delito permanente, dejándose en claro que bajo esta explicación no se tendrá el problema de los delitos instantáneos con efectos permanentes, pues queda claro que ambos son instantáneos, y el criterio para el cómputo del inicio del plazo de prescripción de la persecución penal será en el momento de la *finalización del estado post-consumativo*, por ende, en el caso del delito de usurpación regulada en el art. 202, numeral 2 referido a la modalidad del despojo, hoy no sería problemática la solución a este caso, pues el día del inicio de la prescripción será al finalizar el estado post-consumativo.

Aunque en la doctrina nacional se han planteado criterios diferentes basados en la distinción, o falsa dicotomía, entre los delitos instantáneos o permanentes, o esa mezcla ficticia de delitos instantáneos con efectos permanentes planteada por nuestras jueces (en la doctrina PEÑA CABRERA), se plantea la problemática del delito de usurpación, así se sostiene que “se discute mucho respecto al caso del delito de usurpación por despojo (art. 202, numeral 2). Al respecto, el debate gira en torno a determinar si dicha infracción penal es un delito instantáneo o permanente, o si se trate de un delito instantáneo con efectos permanentes. Sobre el particular, debemos mencionar que el acto indicado por el verbo típico del art. 202, numeral 2, es el de “despojar”. Esto es, desposeer mediante violencia, amenaza o abuso de confianza al sujeto pasivo de la conducción de un inmueble. Es decir, la acción acontece de modo inmediato y consiste en privar a la víctima de la posesión del bien. Y esto último determina la consumación del delito y, por ende, el inicio de la prescripción. El que el inmueble se mantenga en poder del agente más o menos tiempo constituye un efecto posterior a la consumación, y que ya no implica despojo. La usurpación, pues, en su forma de despojo es un delito instantáneo pero que puede tener efectos permanentes. Por tanto, es incorrecto equiparar la acción del despojo de carácter instantáneo con al de “ocupar”, de claro sentido permanente y que es la que comanda la conducta típica prevista en el art. 245 del CP español (en el cual, se señala que “al que con violencia o intimidación en las personas ocupare una cosa inmueble o usurpare un derecho real inmobiliario de ajena pertenencia”)³⁸⁷.

Los antecedentes nacionales los encontramos en: Anteproy. de CP (1927), art 64 (utiliza el término sucesivo); Proy. de CP (Oct. - Nov. 84) utilizó el término “cesó la permanencia”, art. 81 numeral 4; al igual que el Proy. de CP (Ago. 85) art. 87 numeral 4; Proy. de CP (Mar. - Abr. 86), art. 86 numeral 4; Proy. de CP (Set. 89), art. 85 numeral 4; Proy. de CP (Jul. 90), art. 86 numeral 4; Proy. de CP (Ene. 91) art. 82 numeral 4.

En torno a los puntos b), c), d) y e), anteriormente en el Perú sólo se utilizaba la fórmula genérica de que la prescripción se inicia *con la comisión del delito*; así p. ej.: el CP (1863) art 97; Anteproy. de CP (1877), art 111; Anteproy. de CP (1900-1902), art. 101; CP (1924), art. 120; Proy. de CP (1916), art. 92; Anteproy. de CP (1927), art 64; Proy. de CP (Set. 84) art. 94 (cometió el delito); CJM art. 60.

³⁸⁷ Hurtado y Prado (2011), pp. 424, nota a pie n° 293.

Sin embargo, algunas veces se utilizó la casuística, sobre todo para los delitos de falsificación:

Así por ejemplo, los antecedentes nacionales tanto de uno como de otro se encuentra en: el Anteproy. de CP (1900-1902), art 101 (además para delitos de sustracción de menores y contra la libertad); y el Anteproy. de CP (de 1927), art 64.

A continuación se presentan algunas jurisprudencias en torno a los puntos tratados en este acápite:

La jurisprudencia respecto al inicio de la prescripción en el delito permanente de usurpación:

1. El delito de usurpación es un delito permanente y la permanencia no desaparece mientras el usurpador se mantiene en posesión ilegítima del bien inmueble que detenta; que, admitir la posición contraria sería aceptar, permitir y consentir la ilícita posesión del usurpador a fin de que éste se legitime en la irregular posesión, en grave perjuicio del agraviado (Ejecutoria Superior del 30 de mayo de 1996. Recaída en la Causa N° 616 de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior. Procede de Lima).

La jurisprudencia en torno al inicio de la prescripción:

1. El plazo para la extinción de la acción penal se computa desde que se produce el hecho delictuoso, y no desde que se formula la denuncia penal respectiva (Ejecutoria Superior del 15 de marzo de 1994. Recaída en la Causa N° 1037-92-B. Procede de Lima).

La jurisprudencia respecto al inicio de la prescripción para los delitos de defraudación:

1. El término de la prescripción en los delitos de defraudación, corre desde la fecha en que se hace uso del documento simulado o suplantado³⁸⁸.

³⁸⁸ Véase en el Código Penal de Espino Perez, pp. 150, quien a su vez nos remite a la Ejecutoria del 8 de Junio de 1932. R. de los T. 1932 pg. 136).

La jurisprudencia sobre el concurso real en la prescripción de la persecución penal:

1. Que el artículo ochenta del mencionado cuerpo legal establece que la acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley para el delito si es privativa de libertad, agregando en el penúltimo párrafo que en el caso de concurso real de delitos, como el de autos, las acciones prescriben independientemente; que, tomándose en cuenta el término de prescripción para cada uno de los delitos juzgados, resulta que en el presente caso, la pena mayor a imponerse es la que corresponde al delito de apropiación ilícita que prevee el artículo ciento noventa del nuevo Código Penal con pena privativa de libertad no menor de dos no mayor de cuatro años, aplicable por ser más favorable (Ejecutoria Suprema del 15 de noviembre de 11991. Recaída en la Causa N° 687-90. Procede de Ica).

La Jurisprudencia respecto a la seducción 1:

1. El término de la prescripción de la acción penal en el delito de seducción comienza a correr desde la fecha en que terminaron las relaciones sexuales³⁸⁹.

La jurisprudencia respecto a la prescripción en la falsificación de documentos:

1. Tratándose de falsificación de documentos, el hecho constituye delito desde el momento en que se hace uso del documento, comenzando a correr desde entonces el plazo de la prescripción de la acción penal³⁹⁰.

La jurisprudencia respecto a la seducción 2:

1. El delito de seducción no es continuado. La prescripción se computa desde la fecha en que fue perpetrado, no desde que terminaron las relaciones convivenciales³⁹¹.

³⁸⁹ Véase en el Código Penal de Espino Perez, pp. 150, quien a su vez nos remite a la Ejecutoria del 26 de Febrero de 1942. R. de los T. 1942 pg. 87.

³⁹⁰ Véase en el Código Penal de Espino Perez, pp. 151, quien a su vez nos remite a la Ejecutoria del 11 de Diciembre de 1950. R. de J.P. 1951, pg. 69; y Ejecutoria del 16 de Agosto de 1951. A.J. 1951 pg. 144.

³⁹¹ Véase en el Código Penal de Espino Perez, pp. 151, quien a su vez nos remite a la Ejecutoria del 23 de Setiembre de 1952 R. del F. 1952, pg. 610.

La jurisprudencia en torno a la prescripción en el delito de violación.

1. *El delito de violación presunta se configura cuando el actor sostiene relaciones sexuales con una menor de 16 años de edad, desde cuya fecha comienza a correr el plazo de la prescripción de la acción penal, aunque las relaciones sexuales hayan continuado tiempo después*³⁹².

2. *La prescripción de la acción penal, comenzará a contarse desde la fecha del primer concubito, en el caso del Artículo. 199 del CP (1924), (Ej. Sup. De 25 de setiembre de 1952, De Junín. R. Del F., 1952, T. XXXIX, N° 3, p. 612-613).*

Por su parte el Tribunal Constitucional también se ha referido a este tema a propósito de los delitos de omisión a la asistencia familiar, señalando que en estos delitos el inicio del plazo de prescripción de la acción penal se dará luego de efectuado el requerimiento de pago:

“e) respecto de la prescripción debe precisarse que al ser el delito de omisión de asistencia familiar un delito instantáneo de efectos permanentes, es válido que el cómputo del plazo de prescripción se realice desde el requerimiento de pago de los alimentos de fecha 12 de noviembre del 2004 (...)”, así el fundamento 5³⁹³.

Por último, así como es importante establecer desde cuándo se inicia el plazo de prescripción de la persecución penal, también importa precisar hasta qué momento se puede computar el plazo de prescripción. La respuesta será hasta el momento en que se impuso la sentencia firme, por lo cual la sentencia condenatoria que aún no es firme no interrumpe la continuación del plazo de la prescripción de la persecución penal (así también lo ha establecido el TC³⁹⁴), pues admitir lo contrario sería incorrecto, puesto que en dicho momento finaliza la posibilidad de la aplicación de la prescripción de la persecución penal y se inicia el cumplimiento de la ejecución de la sanción penal (como causal de extinción de la ejecución de la pena conforme al art. 85 del CP), la misma que puede alterarse por la presencia de los presupuestos de la prescripción de la ejecución de la pena o la sanción penal o la presencia de cualquier otra causal del mismo tipo.

El Tribunal Constitucional, recogió este punto de vista como ratio decidendi en la sentencia N° 6714-2006-PHC/TC³⁹⁵:

“[...] En este orden de ideas se tiene de las instrumentales obrantes en autos que la extinción de la acción penal por prescripción en el presente caso no habría operado si se asume que el plazo prescriptorio se interrumpe con la sentencia que condenó

³⁹² Véase en el Código Penal de Espino Perez, pp.151, quien a su vez nos remite a la Ejecutoria del 25 de Setiembre de 1968, (pg. 1117 R. del F. Abril - Diciembre 1968, pg. 562).

³⁹³ Véase la Sentencia del TC N° 174-2009-PHC/TC, en el ANEXO 5, de esta investigación, específicamente en el documento N° 10.

³⁹⁴ Véase la sentencia del TC N° 6714-2006-PHC/TC, en el ANEXO 5, de esta investigación, específicamente en el documento N° 26.

³⁹⁵ Véase la sentencia del TC N° 6714-2006-PHC/TC, en el ANEXO 5, de esta investigación, específicamente en el documento N° 26.

a los beneficiarios en primera instancia; y de otro lado, que ello sí habría ocurrido si se parte de la premisa de que la prescripción puede operar-debiendo ser declarada de oficio por el juez ordinario-hasta la fecha en que una sentencia condenatoria es declarada firme por el superior (...)", así fundamento 7.

h. Otros delitos.

La clasificación de delitos se ha incrementado en los últimos años, en algunos casos por aparecer nuevos como los delitos de infracción de deber y en otros por tener un nuevo contenido o una redefinición como se acaba de mostrar a propósito del delito permanente.

Tal vez una caso de esto último sea el de los delitos culposos, así sucede que muchas veces el resultado penalmente relevante no se plantea al inicio, sino con posterioridad, por lo que en la doctrina se plantean dos posiciones a fin de señalar desde cuándo se empieza a computar el plazo de prescripción.

Para la posición más conservadora o clásica el cómputo de la prescripción se iniciará al momento de la realización de la conducta negligente o *dies a quo*, esto es con la infracción del deber de cuidado, sin esperar el resultado producido.

Se argumenta en favor de esta postura que "no pueden () sacrificarse principios constitucionales superiores so pretexto de eficacia o vigencia sin límites del ius puniendi. La seguridad jurídica, la legalidad, y el propio sentido del instituto imponen la limitación de dicho plazo prescriptivo mediante la fijación de un momento que, justamente, sea preferible al sujeto del castigo y de la conminación penal y más correctamente a su acción u omisión negligente, que además lo será por la infracción de las más elementales normas de cautela o reglamentos vigentes justo en el momento de su acción y no en el momento en que caprichosamente puede producirse un resultado cuya causa haya desaparecido de la memoria de la sociedad, cuyo nexo causal, en suma, sea de difícilísima prueba"³⁹⁶.

Otro sector de la doctrina considera que "hay que tener en cuenta que la producción del resultado es un elemento coconstitutivo del tipo de injusto de los delitos imprudentes, por lo que el comportamiento solo deviene relevante cuando acaece el resultado típico. Hasta ese momento no se puede decir que exista una infracción penal, por lo que solo a partir de que se produzca el resultado podrá empezar a correr el plazo de prescripción"³⁹⁷. En el Perú se ha asumido la tesis de la consumación a partir del resultado producido, por lo que si este no ha sido inmediato se ha considerado un tema civil o extrapenal. Razón por la cual considero que al menos debería expresarse un plazo para no depender de una frase tan vacía como la inmediatez, pues esta es otra forma de impunidad.

³⁹⁶ Quintanar, M. (1997). *Sobre el cómputo del plazo prescriptivo en los delitos imprudentes*. p. 277.

³⁹⁷ Roca, L. (2007), pp. 632 y 633.

11.2. DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA³⁹⁸ O LA SANCIÓN PENAL.

La doctrina y el derecho comparado han establecido distintos momentos en los cuales se inicia el término o plazo de prescripción de la ejecución de la pena, para lo cual existen dos teorías (tendencias):

a. Teoría Individualista.

Cada una de las cuales plantea distintos momentos de inicio de la prescripción:

1º *La firmeza de la sentencia condenatoria* (el viejo Código de Instrucción Criminal de Francia arts. 635 y 636). En el Perú sigue este criterio PRADO SALDARRIAGA (1996, p. 162).

Por su parte, SOLER afirma que “para hablarse de prescripción de la pena es necesaria una sentencia definitiva, conforme al procedimiento constitucional. Lo que por sentencia definitiva se entiende lo fijan las leyes procesales”, SOLER (1951, pp. 522-523).

Un subtipo de esta teoría exige la notificación de la sentencia firme: p. ej.: el art. 66 de CP (Arg.) [aunque VERA BARROS se opuso a que se notifique al abogado defensor] y el CP (Bol.), art. 105 in fine.

Inicialmente esto se recoge en el art. 86 del CP, cuyos antecedentes y fuentes los encontramos en diferentes textos legales según el término empleado:

En un primer momento se utilizó el vocablo *ejecutoriada*: el Anteproy. de CP (1877), art. 112; el Anteproy. de CP (1900-1902), art. 107 (fue el primero en utilizar el término *firme*); el Proy. de CP (1916) art. 96; el CP (1924) art. 124; el Anteproy. de CP (1927) art. 71; el Proy. de CP (Set. 84), art. 98; el Proy. de CP (Oct.-Nov. 84), art. 85; además se utiliza el término *consentida* en el Proy. de CP (Ago. 85), art. 88; el Proy. de CP (Mar. - Abr. 86), art. 87; y recién se utiliza el término *firme* en el Proy. (Set. 89), art. 88; el Proy. de CP (Jul. 90), art. 89; y el Proy. de CP (En. 91), art. 86.

En el derecho comparado se tiene:

El CP (Al.) art. 79. VI (la prescripción comenzará con la firmeza de la resolución); el CP (Arg.), art. 66; el CP (Bra.), art. 110; el CP (Ch.), art. 98; el CP (Col.), art. 89; el CP (C.R.),

³⁹⁸ Un amplio comentario en torno al art. 66 del CP (Arg.) lo realiza León, C. (1981) **Sobre la prescripción de la pena**, pp. 33 y ss. En la jurisprudencia argentina se ha «Considerado: El condenado presentó un escrito, con su firma certificada por escribano público, dándose por notificado de la sentencia recaída en la causa, y no se trató de un mero trámite formal o ficto, ya que la petición de declaración de prescripción se hizo cuando ya había transcurrido el término de la pena impuesta. Consecuentemente puede en este caso considerarse que dicha notificación ha sido personal, en el sentido de haber tenido el condenado noticia fehaciente de la condena y sus circunstancias. Por ende, no es de aplicación la doctrina de este tribunal citada por el *agio*, y habiendo transcurrido el término de prescripción de la pena sin que hayan existido motivos de suspensión o interrupción, se revoca el auto apelado de fs. 9 y se declara prescrita la pena impuesta en el principal.- José M. Sarabayrouse Varangot.- Alberto S. Martínez.- José M. Ondarcuhu. (Secr.: Federico G. Nieva Woodgate)». Cám. Nac. Crim. y Correc. Cap., causa “Castro, Roberto” Véase Arlasnian (1981) pp. 65.

art. 86; el CP (C.), art. 65 numeral 1; el CP (Ecu.), art. 107 segundo párrafo; el CP (Esp.) art 134; el CP (Fr.), art. 133 numeral 2; el CP (Gua.), art. 110; el CP (Ita.), art. 172 tercer párrafo (la asume cuando es involuntario); el CP (Pan.), art. 119; el CP (Por.), art 121 numeral 4; y el CP (T.L.) art. 109.

2º Desde el quebrantamiento de la condena:

El CP no acoge expresamente esta postura, aunque en algunos documentos prelegislativos se ha manifestado tal posición, así se tiene:

El Anteproy. de CP (1877) art. 113 (aunque disyuntivamente como otro supuesto y en el art 97 desde que se interrumpe su ejecución); el Anteproy. de CP (1900-1902), art. 107; y la Ley N° 9014 art 9.

En el derecho comparado acogen esta postura:

El CP (Arg.), art. 66; el CP (Bol.), art. 105 in fine; el CP (Ch.), art. 98; el CP (C.R.), art. 86; el CP (Esp.), art. 134; el CP (Gua.), art. 110 segundo párrafo; el CP (Ita.) art. 172 tercer párrafo; el CP (Méx. F.) art. 115, la doctrina habla de “prófugo de la justicia”, véase VELA TREVIÑO (1983, pp. 474 y ss.); CP (Pan.), art. 119, y el CP (T.L.), art. 109.

La mayoría de los códigos han *combinado* esta teoría pero desde un punto de vista excluyente, p. ej.: el CP (Arg.), art. 66, el CP (Ita.), art. 172 tercer párrafo, y el CP (Ch.), art. 98.

3º Desde la revocación de la condena de ejecución condicional o libertad condicional. Ésta es acogida por el CP (véase los casos especiales de la prescripción de la ejecución de la pena N° 5).

En el derecho comparado: el CP (C.R.), art. 86; y el CP (Bra.), art. 112, I.

4º Desde que se deba cumplir la pena, siempre y cuando no haya otra pena impuesta anteriormente, pues en este caso se tendrá que cumplir la pena impuesta en primer lugar:

En el derecho comparado se tiene: el CP (C.R.), art. 86; y el CP (Bra.), art. 116 último párrafo.

En el CP (Sui.), art. 100, *el comienzo se da desde el día en que la sentencia sea legalmente exigible.*

5º Por interrupción, debido a cualquier causa, de la ejecución de la condena ya empezada a cumplir.

En el derecho comparado: el CP (Pan.), arts. 98 y 112, II.

b. Teoría Unitaria.

Considera que la firmeza de la resolución judicial se complementa con el momento en que el quebrantamiento de su cumplimiento se produce, antes de esto es imposible afirmar, sin contradecirse, que el plazo de prescripción se ha iniciado. Esta teoría pretende salvar las incoherencias en que se cae con las teorías individualistas de la sentencia firme y del quebrantamiento de su cumplimiento. Pues al asumirse la primera, se tendrá que decir que se inicia el plazo de prescripción siempre que haya una resolución firme, el cual se interrumpe al iniciarse el cumplimiento, dando la sensación de que existe un momento aún diminuto en el que el plazo de prescripción ya había empezado (éste es el caso del art. 87 del CP).

Si se asume la teoría del quebrantamiento se tendrá como presupuesto necesariamente la existencia de una resolución firme; de lo contrario se hablaría de quebrantamiento aun cuando la resolución no tiene la calidad de firme.

Entonces, en la doctrina han sido los mexicanos quienes han regulado como elemento necesario para que opere la prescripción de la ejecución de la pena en el CP (Méx. F.) arts. 103, 113 y 115, dos supuestos:

- 1º La calidad de la sentencia ejecutoriada condenatoria.
- 2º La calidad de prófugo de la justicia.

Con este sistema se evita la discusión de si es o no factible una prescripción de la ejecución de la pena antes de que ésta se venga cumpliendo.

12. LA RENUNCIA (ART. 91).

La renuncia tiene como presupuesto la obtención previa del derecho de prescripción, entonces la renuncia es la facultad de disponer (o la disponibilidad) que tiene el titular del derecho de prescripción.

El CP acogió en su art. 91 la renuncia del derecho de prescripción. Sin embargo, otros ordenamientos legislativos en el derecho comparado acogen el modelo de la irrenunciabilidad del derecho de prescripción.

Considerándose a la prescripción penal como un obstáculo, EUSEBIO GÓMEZ deduce el efecto “que la prescripción no depende de la voluntad de aquel en favor del cual subsiste, sino que es de orden público, y por eso, no sólo puede ser alegada siempre y en cualquier estado de la causa, cuando se refiere a la acción penal, sino que debe ser admitida ex officio por el juez, aun a pesar de la renuncia o el silencio de la parte, cuando se haya verificado”. GÓMEZ E. (1939, p. 679).

El profesor VÍCTOR PRADO ha justificado este derecho como “un reconocimiento a la primacía constitucional de la presunción de inocencia”³⁹⁹.

³⁹⁹ Prado (2000), pp. 258.

La *renuncia* del derecho de prescripción en la legislación nacional, tiene como fuente: el Proy. de CP (Set. 84), art. 102; el Proy. de CP (Nov. 84), art. 89; el Proy. de CP (Ago. 85), art. 95; el Proy. de CP (Mar. 86), art. 94; el Proy. de CP (Set. 89), art. 93; el Proy. de CP (Jul. 90), art. 94; y el Proy. de CP (Ene. 91), art. 91.

La *irrenunciabilidad* de la prescripción tiene como fuente: el Proy. de CP (1916), art. 100; el CP (1924) art. 129; y el CJM art. 65 in fine.

Así las consecuencias de su aceptación o renuncia difieren:

12.1. ACEPTACIÓN.

1º La acción civil o pretensión civil se extingue (art. 100 del CP).

2º No se sabrá si el procesado era o no inocente materialmente.

3º Como el proceso no terminó, tampoco habrá reparación civil, pero ello no excluye que acuda a la vía civil para hacer valer sus derechos por responsabilidad extracontractual.

12.2. RENUNCIA.

1º Recobra o mantiene su vigencia la pretensión civil extinguida (art. 100 del CP).

2º El proceso terminará declarándose culpable o inocente al imputado.

3º Si la sentencia es condenatoria habrá reparación civil.

En torno al punto 1º, señalo que es lo correcto, pues si en el proceso se demuestra que el imputado es inocente entonces no le corresponderá responsabilidad civil alguna, empero ello no será obstáculo para recurrir a la vía civil y entablar una demanda por responsabilidad civil extracontractual.

Aunque en la doctrina nacional contrariamente GÁLVEZ ha planteado la idea de que si se trata de una prescripción de la acción penal ya realizada, donde el procesado renuncia a la obtención de tal derecho como prescripción extintiva, señala que “no obstante, en estos casos de renuncia, ésta tendrá efectos sólo para absolver al procesado, mas no así para condenarlo, por que [sic] si bien es cierto que le asiste al procesado el derecho a renunciar, a fin de que sea “judicialmente declarado inocente”, en salvaguarda de sus derechos fundamentales al honor y al “estado de inocencia”, esta situación no revive el derecho del Estado a concretar una acción penal que ya se ha extinguido, todo esto en armonía con los criterios de *legitimación sustancial* que debe orientar la aplicación del Derecho Penal y la afectación de los derechos fundamentales”⁴⁰⁰.

Reafirmo que si el procesado renuncia, se posibilita la absolución o la condena, (o si se trata de pretensiones complejas, sea inocente en una y culpable en otra, es decir absuelto y

⁴⁰⁰ Gálvez, T. (2004), p. 142.

condenado a la vez), por lo que asumir la postura de GÁLVEZ implica la obligación de la emisión de una sentencia vía un estatus de presunción iure et iure, donde su inocencia sería la regla siendo desde ya innecesario la realización del proceso, pues se estaría condicionando la inocencia, a pesar que fue el procesado por ejemplo el que boicoteó la viabilidad del proceso o alguna otra razón similar, con esta postura todos los que se libraron de los procesos por corrupción tendrían el pasaporte de la inocencia bajo el brazo, y por ende, los pedidos de indemnización contra el Estado, situación que rechazamos justamente por esta y otras consecuencias negativas para el sistema penal. Además, se recuerda que la prescripción no es inocencia, sino imposibilidad de juzgar, si se trate de la prescripción de la acción penal.

Es interesante precisar ¿en qué momento o hasta qué momento se puede ejercer este derecho? En el derecho comparado los colombianos son los que han regulado este supuesto en su CPP, art. 42, además de consignarlo en su CP (art. 85); así se puede renunciar hasta antes de que la resolución sea ejecutoriada o alcance el valor de cosa juzgada («antes de la ejecutoria de la providencia que la declare»)⁴⁰¹.

En el sistema penal peruano, ni el CP ni el C de PP (ni el proyecto de CPP) disponen regla alguna. La renuncia va depender de quién plantea la prescripción:

- 1º Si el juez o la sala la declaran de oficio, se tendrá que notificar de esto al imputado o a su abogado;
- 2º Si el imputado, vía excepción, solicita la prescripción y el juez la declara fundada, tal resultado deberá de notificarse al imputado o a su abogado, y se tendrá que aplicar supletoriamente los plazos para interponer el recurso de apelación: 3 días (art. 7 del D. Leg. 124), caso contrario la oportunidad para renunciar habrá terminado.

En la jurisprudencia nacional no se ha fijado con claridad el criterio a seguir, pues se afirma que ésta se da antes de que se declare, con lo cual se cae en un contrasentido, por ello propongo seguir la línea interpretativa del caso colombiano.

La jurisprudencia respecto a la puesta en conocimiento del procesado a fin de que pueda ejercer o no su derecho de renuncia:

1. Antes de declarar de oficio la prescripción de la acción penal, el Juzgador debe hacer de conocimiento del procesado la eventualidad de dicha decisión, a fin de que pueda hacer uso del derecho de renuncia el artículo 91º del Código Penal vigente. Deviene en nulo el auto que declara de oficio la prescripción de la acción penal sin observar dicho procedimiento (Ejecutoria Superior del 21 de Julio de 1992. Recaída en la causa N° 589-91 de la Décimo Primera Sala Penal de la Corte Superior de Lima).

⁴⁰¹ Véase Martínez G. (1996), pp. 67.

En el derecho comparado regulan de manera más específica la renuncia:

CP (Col.), art. 85; CP (Ita.), art. 157 penúltimo párrafo.

La mayoría de los códigos no hace mención a ninguna de las dos, pero la tendencia es la irrenunciabilidad.

La jurisprudencia respecto a la irrenunciabilidad de la prescripción:

1. La prescripción en materia penal opera como prescripción de la acción o como prescripción de la pena, según el Título XV del Libro Primero del C.P. siendo de naturaleza irrenunciable. Opera de pleno derecho y debe ser declarada aún de oficio, cualquiera que sea el estado de la causa, cuando se ha vencido el plazo ordinario más la mitad (Ej. 11 Mayo 1972. R. J.P. 1972 pp. 1022)

Los efectos de la renuncia de la prescripción de la persecución penal no puede llevar a pensar que se produzca una suerte de imprescriptibilidad de la persecución penal, así pues debería haber un plazo dentro del cual el juez penal resuelva la acción penal dentro del proceso penal, conforme a los principios del plazo razonable y el debido proceso, este plazo será analógicamente⁴⁰² de veinte años para delitos con penas privativas de libertad temporal y de treinta años en los casos de cadena perpetua.

Ello permite concluir que para delitos sancionados con pena privativa de libertad de cadena perpetua y de penas temporales que superen los veinte años, es plausible la renuncia aunque de manera simbólica, tratándose de cualquiera de las clases de prescripción penal, conforme lo permite el art. 91 del CP. Es plausible porque los montos son sumamente altos y habría que ver si el imputado estaría dispuesto a renunciar para someterse a un proceso luego de haber transcurrido tantísimo tiempo.

De *lege ferenda* sostengo que el plazo para los efectos de la renuncia deberá depender:

- 1º De la búsqueda de la verdad de todo proceso penal.
- 2º De los datos estadísticos del tiempo que se demoran en tramitar un proceso penal (ordinario, sumario, faltas, etc.).
- 3º Por consideraciones de política criminal, ya que no se puede mantener por mucho tiempo procesos penales que resultan sumamente costosos.

⁴⁰² Resulta cuestionable que sólo para algunos delitos el beneficiado con el derecho de prescripción tenga la posibilidad de renunciar a la prescripción de la persecución penal, mientras que para otros esta posibilidad no sea factible. Asimismo es cuestionable tener un plazo único y largo que rija los efectos de la renuncia (así tanto para faltas, delitos leves, graves, muy graves), por lo cual será necesario hacer una reforma.

El Tribunal Constitucional por su parte ha establecido, sin discusión alguna, que se trata de un beneficio⁴⁰³ (Fundamento 14), no haciendo mayor alusión a mayor desarrollo conceptual. La naturaleza de un beneficio es que no es disponible (o lo solicito o no), e incluso cuando se concede, puede ser revocado, situación que no ocurre con la prescripción que una vez que se obtiene es irrevocable. Por ende, no hay presupuesto alguno que pueda impedir su ejercicio o ejecución, y desde mi postura ni siquiera vía una ley. Por estas razones es sostenible la tesis de que se trata de un derecho. No está de más indicar que ello no es aplicable a los casos de imprescriptibilidad.

12.3. POSTURA DE LA NEGACIÓN.

Esta postura ha sido asumida por el maestro LUIS E. ROY FREYRE quien sostiene que la renuncia a la prescripción deviene en innecesaria debido a que hoy, con el principio de la presunción de inocencia, ya no es necesario la obtención de una sentencia absolutoria, con lo cual la presunción juris tantum de antes, ahora se convierte en una presunción juris et de jure⁴⁰⁴.

Señala también el maestro sanmarquino que al adolecer de formalismo la renuncia, ésta “tendrá que hacerse oralmente por acta ante el juez o de manera escrita con firma legalizada por el secretario. Opinamos que, con iguales formalidades, es posible desistirse de la renuncia”, p. 98.

Por último, considerando que la dignidad de los políticos, tan puesta en cuestión, puede ser materia de constante cuestionamiento, más aún cuando existen delitos cometidos con ocasión de haber tenido responsabilidad en la administración pública, es acaso la renuncia a la prescripción la forma de preservar la dignidad, así por ejemplo en el caso de la señora ex ministra y actual embajadora del Perú en el Uruguay AIDA DEL CARMEN JESÚS CONSUELO GARCÍA NARANJO MORALES, que ha sido absuelta de los delitos de colusión y otros por hechos ocurridos en el año de 1994, mientras que por hechos contiguos en el mismo proceso anteriores a 1994 se le declaró fundada la prescripción de la acción penal, lo mejor hubiese sido que se acoja a la renuncia, y hoy su absolución y por ende su inocencia hubiesen reivindicado su dignidad como mujer que hace política, pues los efectos de una absolución siempre serán más certeros que el de una prescripción⁴⁰⁵.

13. EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL (ART. 100).

El uso del vocablo acción no hace sino referirse a la pretensión civil, distinto es el caso del derecho que se pretende hacer valer. A continuación se presentarán las posturas en torno a este aspecto de la prescripción.

⁴⁰³ Véase la Sentencia N° 4118-2004-HC/TC, como precedente vinculante, en el ANEXO 5, de esta investigación, específicamente en el documento N° 6.

⁴⁰⁴ Roy (1998), p. 97.

⁴⁰⁵ Sobre los delitos de colusión y otros por hechos producidos en los años de 1992, 1993 y 1994, la Primera Sala Especializada en lo Penal para procesos con reos libres declaró prescrita la acción penal por los hechos anteriores a 1994 entre ellos a la señora Aida Del Carmen Jesús Consuelo García Naranjo Morales y otros, y en lo referente a los hechos de 1994 la Sala la Absolvió, véase la sentencia en el anexo N° 8 de esta investigación.

13.1. TEORÍA CIVILISTA.

Toda acción de pretensión civil debe regirse por las reglas del derecho civil (reglas de prescripción), estén o no en el código civil, ya que lo que importa es la naturaleza de dicha pretensión. Luego, toda acción civil debería extinguirse de acuerdo a los plazos del código civil.

Los antecedentes nacionales, tanto de uno como de otro, los encontramos en: el Anteproy. de CP (1877), art. 115, donde se rige del mismo modo que las demás obligaciones civiles; el Anteproy. de CP (1900 - 1902) art. 113; el CP (1924), pero recién a partir de la modificación del art. 118 segundo párrafo por la Ley N° 9014 en su art. 1, si bien en el art 12 de esta ley se afirma que la prescripción de la reparación civil se rige por los términos de la prescripción de los delitos; el Anteproy. de CP (1927) art. 72 in fine respecto a la acción penal y 73 in fine respecto a la pena; el Proy. de CP (Set. 84) art. 56; el Proy. de CP (Oct. - Nov. 84), art. 104; el Proy. de CP (Ago. 85), art. 107; e indirectamente se tiene: el Proy. de CP (Mar. - Abr. 86) art. 99 numeral 2 y 106; el Proy. (Set. 89), art. 102; y el Proy. (Jul. 90), art. 103.

Prescribe según las reglas del código civil en el derecho comparado:

En el CP (Bol.), art. 107; el CP (C.R.), art. 109; el CP (Ch.), art. 105; el CP (Ecu.), art. 111; el CP (Fr.), art. 133 numeral 6; y el CP (Pan.), art. 128 in fine.

13.2. TEORÍA PENAL.

La pretensión penal es lo que le importa al derecho penal, toda otra acción subsidiaria o que resulte como un efecto de ella no debe sino extinguirse cuando la pretensión penal se ha extinguido⁴⁰⁶.

En mi criterio, el art. 100 del CP sólo sería aplicable si durante todo el plazo de prescripción de la persecución penal el sujeto pasivo no interpuso su pretensión en la vía civil, entonces el legislador ha considerado que se sanciona la negligencia de éste. Empero, si antes que la persecución penal prescriba, el sujeto pasivo (sea o no la víctima) o quien la representa en un proceso (parte civil en sentido amplio), hizo uso de la acción civil, entonces ésta seguirá su trámite de acuerdo a las reglas del código civil.

Sin embargo, si la acción penal aún no ha prescrito, pero los plazos de la acción civil ya se agotaron (prescribieron), entonces ya no se podrá hacer valer esta pretensión en la vía civil. Mientras no se declare la prescripción de la persecución se tendrá habilitada la vía civil.

Luego, si la parte civil obtuvo una *sentencia condenatoria* del procesado, donde se señalaba un monto por reparación civil, pero dicha resolución fue impugnada, y durante su tramitación prescribió la persecución penal, entonces no habrá forma alguna por la cual la

⁴⁰⁶ Sigue esta postura en la doctrina nacional Tomás Gálvez, quien la denomina prescripción de la acción resarcitoria, (1999, p. 263 y 264).

parte civil reclame dicha reparación civil, pues al no alcanzar la sentencia condenatoria los efectos de la cosa juzgada, entonces nunca se consolidó el derecho patrimonial de la reparación civil. Esto obviamente es injusto y es producto de la disfuncionalidad con que se viene efectuando la administración de justicia; ya sea por negligencia en la actuación de las autoridades jurisdiccionales, o por la incorrecta actuación de los abogados con el fin de dilatar los procesos penales.

También se ha planteado el caso de qué sucedería si un procesado es absuelto (*sentencia absolutoria*) luego de cuatro años de proceso penal, quedando la posibilidad de acudir a la vía civil a hacer valer su pretensión, sin embargo, al haber transcurrido más de dos años, conforme a las reglas del CC, ésta ya estaría prescrita. Al respecto, GÁLVEZ enuncia este caso y propone como solución que la acción o la pretensión civil no habría prescrito, indicando que el plazo transcurrido por el proceso penal “no se tendrá en cuenta para efectos del cómputo del plazo prescriptorio, toda vez que durante este tiempo –al estar conociéndose los hechos en el proceso penal–, no se podía iniciar la acción resarcitoria en la vía civil, y por tanto el plazo de prescripción no se habrá iniciado” (pp. 264 y 265).

A primera vista ha de señalarse que se trata de una causal de suspensión de la prescripción civil, aunque el autor no lo mencione, razón por la cual sólo de esta manera se fundamentaría la solución al caso propuesto.

Los antecedentes nacionales tanto de la teoría civilista como de la teoría penal, se encuentran en: el Proy. de CP (Vidaurre), art 31; el CP (1863), art. 98; y el Proy. de CP (Ene. 91) arts. 100 y 101.

El tratadista argentino EUSEBIO GÓMEZ, afirmó en torno a la prescripción de la acción civil que “ésta es una institución del Derecho penal, [y] no se halla sujeta a los requisitos que regulan la prescripción civil. Ésta supone, de un lado, el abandono del ejercicio del propio derecho y es, en el fondo, una renuncia presunta del mismo; de ahí que sea principio aplicable que la imposibilidad, ya de hecho, ya de derecho, de aquel ejercicio, es un obstáculo a la prescripción: contra non valentim agere non currit proscriptio, y de otro lado para aquel en favor de quien subsiste, se reduce a una excepción meramente voluntaria y, por consiguiente es lícito renunciar a sus beneficios”. GÓMEZ E. (1939, p. 678).

Prescriben según las reglas del código penal, en el derecho comparado: el CP (Col.), art. 98 (regla propia).

En España el nuevo código penal no consigna plazo en torno a cuándo prescribe la pretensión civil, a diferencia del código derogado así como del art. 129 del Proyecto de CP de 1992 que en su Cap. IV “Del cumplimiento de la responsabilidad”, art. 129 dispuso:

«La acción para exigir la responsabilidad civil nacida de un delito o falta prescribe a los quince años, salvo que tenga señalado término especial de prescripción.

El deudor en este concepto no puede oponer la compensación que pudiere corresponderle frente al perjudicado por su delito o falta.

El tiempo para la prescripción de la acción se contará desde el día en que pudiere ejercitarse».

13.3. MODELO MIXTO.

La pretensión civil se rige por las reglas del CC, sin embargo, cuando este plazo de prescripción sea menor que el contemplado por el CP, entonces deberá regirse por éste.

Para la tesis mixta, el plazo de prescripción de la pretensión civil será el consignado en el CC, siempre y cuando estos plazos sean mayores que los que se contemplan en el CP, ya que si así no fuera, los plazos serán los consignados para la prescripción de la persecución penal.

Los antecedentes nacionales, tanto de uno como de otro, se encuentran en: CJM art. 61; y el Proy. de CP (Ene. 91), arts. 100 y 101.

Distinto es el caso en el que se hay determinado la reparación civil en una sentencia condenatoria, pues aquí se impone la obligación pecuniaria al condenado. Por su parte, el actor civil al cual se le asignó el derecho solicitará, según esta postura mixta, si lo cree conveniente, al juez penal la ejecución de dicha obligación, para lo cual tendrá un lapso de diez años acorde con los plazos de prescripción del CC, art. 2001 numeral 1, por tratarse de una ejecutoria; transcurrido estos plazos, el juez penal podrá declarar prescrita la obligación del condenado según el CC.⁴⁰⁷ Además, se ha de precisar que en estos casos se regirá por las reglas de la prescripción en materia civil, así es perfectamente aplicable la suspensión o interrupción pero reguladas en el CC.

No está demás señalar que hay que distinguir entre los supuestos de extinción de la acción civil de los supuestos de la exención de la responsabilidad civil, producto de casos tales como la grave alteración de la conciencia, la anomalía psíquica entre otros supuestos regulados en el art. 20 del CP⁴⁰⁸, que son casos totalmente diferentes, pues en los casos de exención se puede solicitar perfectamente la acción civil.

Así en al jurisprudencia española se ha establecido que “no es, para la jurisprudencia, responsabilidad civil «ex delito» (...) la que se deriva del sobreseimiento o de una sentencia penal absolutoria”, agregándose que “el plazo de prescripción no empieza a contar hasta que se notifica al perjudicado el auto de sobreseimiento”⁴⁰⁹.

⁴⁰⁷ No olvidemos que aquí se aplican las reglas del CPC arts. 713 y ss. de acuerdo a la remisión que el viejo CPsP hacía al CPsC artículos 683 al 720 (véase la tercera disposición final del CPC).

⁴⁰⁸ Véase en este sentido López Barja (2010), pp. 1376.

⁴⁰⁹ Quintero, Cabanillas y De Llera (2002), pp. 135.

14. LA IMPUTABILIDAD RESTRINGIDA O RELATIVA (ART. 81).

La imputabilidad restringida o relativa regulada según el CP implica la reducción del monto de pena para el imputado. En materia de prescripción, implica la reducción obligatoria del plazo a que se hace acreedor el menor de veintiún y el mayor de sesenticinco años, consecuencia que considero correcta para el caso de la prescripción de la persecución penal, sea ordinaria o extraordinaria, conforme lo dispones el art. 81 del CP.

Sin embargo, se puede confundir lo señalado en el art. 81 del CP con lo dispuesto en el art. 22 del CP, ya que a pesar que ambos tienen como punto de partida el momento de la comisión del delito, similar supuesto, la consecuencia es distinta, ya que, en *primer lugar*, el art. 81 contiene una regla imperativa por la cual el plazo de prescripción de la persecución (para cualquiera de sus tipos y subtipos) se reduce a la mitad, según la pena conminada, en cambio tratándose del art. 22, este contiene una regla facultativa, que sólo es aplicable en el momento de la determinación concreta de la pena. Luego, estas reglas no se pueden complementar cuando se trate de la prescripción de la persecución penal.

Y en *segundo lugar*, el art. 81 no puede concurrir con el art 22, debido a que, tal y como está configurado el sistema de prescripción para la ejecución de la pena, el art. 81 no se aplica en base a la pena impuesta, sino en base a la pena conminada.

En consecuencia, asumo la postura que el plazo de prescripción para la ejecución de la pena en el CP siempre será superior al de la pena impuesta que deberá cumplir el condenado, salvo que la pena conminada y la impuesta tengan el mismo monto, pero en este caso solo será una coincidencia.

Empero, ello no debe conducir a sostener una propuesta contraria, es decir tener un plazo de prescripción incluso menor que el de la pena impuesta al condenado, ello como resultado de aplicar complementariamente lo dispuesto en el art. 22 del CP en concordancia con el art. 81 de dicho código, así el juez, en primer lugar, refiere un monto de pena, sin considerar lo regulado en el 22 del CP, en segundo lugar, en virtud de este artículo, procede facultativamente a reducir el monto de la pena, obteniendo como resultado la individualización total de la pena, no obstante esta consecuencia, el juez recién ahora fijará el monto del plazo de prescripción de la persecución penal de acuerdo con el art. 81 del CP, obteniéndose así dicho plazo.

Esto último, obviamente conduce a una errada interpretación del art. 22 y del art. 81, al creerse que se pueden aplicar complementariamente, cuando de lo que se trata es que ambos artículos son consecuencias distintas de una misma figura de la parte general, es decir, la imputabilidad relativa, que opera con el art. 22 para procesar a un inculpado, lo cual le permite obtener una serie de beneficios procesales, y cuando está en la instancia de ser condenado, facultativamente a que se le reduzca el monto de pena que le corresponde acorde con el tipo legal que ha cometido, y cuando ya ha sido sentenciado, como consecuencia de esto, el poder obtener más rápidamente sus beneficios penitenciarios.

Sin embargo, tratándose de la prescripción de la ejecución de la pena no podemos utilizar complementariamente las consecuencias de una misma figura, así es correcto

aplicar el art. 22 para la determinación de la pena, empero este plazo producto de dicho beneficio no sirve para determinar el plazo de prescripción de la ejecución de la pena, entonces considero únicamente el plazo que el juez ha determinado en su sentencia condenatoria (sin la reducción que el art. 22 faculta), si es que se sigue el modelo de la pena concreta para la prescripción.

Además, como se ha expresado tal beneficio regulado en el art. 22 es *contingente* por ser una facultad jurisdiccional, con lo cual no se tendría un supuesto uniforme para la aplicación del art. 81 que si es de obligatorio cumplimiento para el juez.

Por consiguiente, el art. 81 se aplicaría sobre la pena concreta que el juez ha determinado (relativamente) sin los descuentos que el art. 22 faculta. De *lege ferenda* se debe optar por el sistema de prescripción de la pena concreta con lo cual se tendría un criterio *unívoco*, en el sentido que los plazos impuestos en dicha pena determinarían el plazo de prescripción de la ejecución de la pena, y tratándose de la imputabilidad relativa la reducción del plazo de prescripción en base a la pena impuesta concretamente (relativa), logrando una aplicación del art. 81 con o sin la aplicación del art. 22 del CP.

La Ley N° 29439 precisó en su artículo 1 la modificación del art. 22, por la cual se estableció una restricción de la aplicación de la imputabilidad restringida para dos casos, el primero, bajo la técnica del *numerus clausus*, para los tipos penales de homicidio culposo y el segundo para las lesiones culposas, cometidos de manera reiterada. El segundo para los supuestos de manera mixta, ya que utiliza la técnica ejemplificadora de *numerus clausus* y luego establece una cláusula de *numerus apertus* limitada.

Dentro del supuesto de *numerus clausus* se incluye al “agente que haya incurrido en el delito de violación de la libertad sexual, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, terrorismo agravado, atentado contra la seguridad nacional y traición a la patria”.

No distinguiendo el legislador en su técnica empleada que en algunos casos expresa el tipo agravado y en otros no, es el caso del terrorismo donde sí lo hace, y en cambio no para el delito de violación, esto traerá problemas que de seguro se tendrá que recurrir a la jurisprudencia vinculante o a un acuerdo plenario, aunque lo mejor sería una modificación a la ley.

Dentro del supuesto de *numerus apertus* limitado, el legislador ha establecido el supuesto genérico de “u otro delito sancionado con pena privativa de libertad no menor de veinticinco años o cadena perpetua”. La primera observación es el hecho de establecer un límite abstracto donde para este caso se tiene que tomar como referencia la pena conminada del tipo base, o la pena imputada (esta es la que considera que se trata de un delito con agravantes o atenuantes, o ambas), por lo cual no parece correcta la especificación de los límites en función de considerar que los montos de pena, son confusos, pues se puede considerar a la conminada (tipo base en abstracto) o a la imputada (la establecida en la denuncia o auto a partir de la aplicación a un caso concreto). Esto refleja que el legislador no tuvo certeza de lo que en sí quería sancionar así que bajo este criterio introdujo el cajón del sastre jubilado, esto es que no le interesa para qué o para quién se aplique dicha norma, pues el ya esta jubilado y no le interesa lo que acontezca.

Problema aparte constituye el hecho que se suscitó con el caso del delito masa y con el caso de la agravante del art. 46-A, donde se tuvo que “definir” el tema en un pleno, a propósito de la prescripción, por lo cual ahora cabe preguntarse si la exclusión de la atenuante genérica regulada en el art. 22 del CP surte efectos para el caso de la prescripción de imputables restringidos, donde el plazo se puede reducir a la mitad conforme lo prevé el art. 81 del CP, situación sobre la que ya fijé posición, además de si esta exclusión solo será para la prescripción ordinaria o también para la extraordinaria.

Sobre esto último nada impide que se aplique, aunque ello dependerá frente a que tipo de prescripción se está, por lo general si es la prescripción ordinaria será perfectamente posible reducir el plazo, lo que no se admite es que si se está frente a una prescripción extraordinaria, primero se fije el plazo de la ordinaria, luego se reduzca (primera reducción), y luego se señale el plazo de la extraordinaria y luego se reduzca nuevamente (segunda reducción) en aplicación del art. 81.

Por ende, lo señalado en el art. 81 se aplica una sola vez, y siempre para fijar el plazo ordinario, no se admite la aplicación de este artículo para la fijación del plazo extraordinario.

Así será la jurisprudencia la que vaya fijando los criterios, aunque lo ideal sería que se modifique o se adapte la regulación de la prescripción a estos nuevos casos contemplados a la luz de la Ley N° 29439 art. 1.

Antecedentes: el Proy. de CP (1916), art 58 numeral 3; el CP (1924), art. 148 numeral 3; el Proy. de CP (Ago. 85), art. 86; el Proy. de CP (Mar. 85), art. 85; el Proy. de CP (Set. 1989), art. 84 (aunque impropriamente se hacía referencia a «*comisión de hecho punible*»); en este mismo sentido el Proy. de CP (Jul. 90), art. 85; y el Proy. de CP (Ene. 91), art. 81.

En el derecho comparado se tiene el CP (Bra.), art. 115.

La jurisprudencia respecto a la prescripción para imputables restringidos:

1. En caso de un delito cometido por un menor de edad de más de dieciocho años, el término de prescripción correspondiente se reduce a la mitad (Ej. Sup. 21 de Junio de 1995.- Arequipa, Rev. Jurídica del Perú. Jul-Set. N° III, p.p. 261-262).

La recurrencia a esta regla de la prescripción ha sido constantemente aplicada en las distintas instancias del Poder Judicial, sobretodo en los procesos del subsistema anticorrupción, así se tiene algunos ejemplos de procesados que se beneficiaron como son Dionisio Romero, Manuel Delgado Parker y Genaro Delgado Parker⁴¹⁰.

⁴¹⁰ En el expediente N° 23-2001, llevado ante la Tercera Sala Penal del subsistema anticorrupción, se imputó al acusado **Genaro Delgado Parker** como instigador del delito de tráfico de influencias en la audiencia de juicio oral de fecha 08 de abril del 2003, donde a pedido de parte se planteó la prescripción de la acción penal invocando el art. 81 del C.P.,

Recientemente la Corte Suprema ha emitido una ejecutoria⁴¹¹ en la que precisa cuándo se aplica lo señalado en el art. 81 del CP:

“Décimo: (...) el citado Ricapa Rojas ha interpuesto ante esta Suprema Sala excepción de prescripción, argumentando que a la fecha cuenta con setenta y tres años de edad, por lo que debe reducirse a la mitad el plazo de prescripción, en tal consideración, habiendo transcurrido desde la fecha del evento delictivo hasta la actualidad once años, la acción penal ha prescrito; que al respecto debe precisarse que no resulta atendible lo alegado por el recurrente, pues el delito de colusión tiene como pena máxima quince años de privación de la libertad y habiéndose sucedido el delito materia de análisis en el año de mil novecientos noventa y siete, resulta evidente que a la fecha no ha transcurrido dicho plazo, ello incluso sin tomaren cuenta el plazo de prescripción extraordinaria y el supuesto de duplicación previsto (...), además, el recurrente a la fecha de los hechos denunciados contaba con sesenta y dos años, por lo que no se encuentra dentro de los alcances del artículo ochenta y uno del citado Cuerpo legal, que para su aplicación establece que el encausado a la fecha del hecho delictivo debe contar con más de sesenta y cinco años, supuesto que no se presenta en el caso sub examine (...), pp. 7-8.

El Tribunal Constitucional no ha establecido criterio alguno sobre este tema limitándose a aplicar sus presupuestos de manera formal o literal⁴¹² (fundamento 14 y fundamento 23 en el que se declara vinculante).

TABLA 6: *Comparación de modelos de aplicación para el plazo de prescripción.*

MODELO DE APLICACIÓN			
Monto de referencia	Pena conminada 10	Pena concreta ya determinada 8	Pena concreta relativa 8
Art. 22	Ø	Ø	Se reduce facultativamente
Art. 81	Reduce a la mitad: ½	Reduce a la mitad: ½	Reduce a la mitad: ½
Plazo de prescripción	5	4	2

Nota: Aquí se aprecia las diversas interpretaciones a fin de calcular el plazo de prescripción en el supuestos de reducción del mismo por los casos de imputabilidad restringida.

sostiéndose que la misma “regula la reducción extintiva a la mitad, beneficio al que se acoge...”; y donde la Sala resuelve primero que se trata de un delito continuado (considerando cuarto y quinto), luego considera que se trata de un caso de prescripción extraordinaria (considerando quinto), y que si es aplicable el art. 81 (considerando segundo y quinto donde utiliza el siguiente enunciado “...por mandato legal el referido plazo se reduce a la mitad, siempre que se presente el hecho de que el agente tenía de sesenticinco años al momento de la comisión del hecho configurante del ilícito penal materia de juzgamiento”), por lo cual la Sala declaró fundada la excepción de prescripción de la acción penal al que denominan confusamente “prescripción extintiva” recurriéndose a autores del siglo XIX, tales como Carrara y Ferri (considerando octavo). Véase en el ANEXO 8, de esta investigación.

⁴¹¹ Véase la Ejecutoria Suprema de la Primera Sala Penal Transitoria, expedida en el R.N. N° 3635 – 2008, Junín, en el año 2009, declarándose infundada la excepción de prescripción, en el ANEXO 3, de esta investigación, específicamente el documento N° 16. En el mismo sentido véase la Ejecutoria vía R.N. N° 1600-2009, Lima, resuelto el 2010, en el ANEXO 3, de esta investigación, específicamente el documento N° 17.

⁴¹² Véase la Sentencia N° 4118-2004-HC/TC, que se declaró fundada, como precedente vinculante, en el ANEXO 5, de esta investigación, específicamente el documento N° 16, y reiterado por Sentencia N° 6063-2006-HC/TC, véase en el ANEXO 5, de esta investigación, específicamente el documento N° 5.

15. LA REHABILITACIÓN.

La rehabilitación⁴¹³ entendida como un derecho se adquiere subsidiariamente a partir del momento en que, de otro modo se ha extinguido la responsabilidad penal del condenado a pena y/o medida de seguridad. Uno de estos modos distintos de extinción lo constituye la prescripción de la ejecución de la pena.

Entonces una vez que se adquiere el derecho de prescripción de la ejecución de la pena también se adquiere la rehabilitación.

El CP (arts. 69° y 70°) cogió el sistema judicial automático, es decir apenas se declara la prescripción de la ejecución de la pena, se tiene que solicitar la rehabilitación, pues esto los jueces penales o las Salas penales no lo otorgan de oficio.

Sin embargo, qué sucede con los antecedentes policiales de una persona que fue detenida por la Policía Nacional, y luego procesada por un determinado delito, que al cabo de cierto tiempo no se juzgó, sino que se archivó dicho proceso al operar la prescripción de la persecución penal. El art. 69 del CP exige que se tenga que declarar previamente la responsabilidad penal del procesado, y esto únicamente puede darse a partir de la emisión de una sentencia condenatoria con efectos de cosa juzgada. Luego, sin sentencia condenatoria no tiene por qué existir rehabilitación. Este caso planteado en torno a los antecedentes penales amerita ser contemplado por nuestra legislación.

De *lege ferenda* en la misma resolución en que se declara prescrita la persecución penal o la ejecución de la pena también se debe declarar la rehabilitación, con lo cual efectivamente si sería automático el sistema acogido.

Jurisprudencia sobre rehabilitación vía prescripción:

1. No procede la rehabilitación si la pena no se cumplió o extinguió por prescripción (Procede de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Lima. Exp. N° 24-86).

Un tema que provoca mucha polémica es la cancelación de los antecedentes penales a propósito de la reincidencia y la reiterancia así MIR PUIG sostiene al respecto que al producirse la cancelación no se tiene en cuenta los antecedentes penales: “Esto último enlaza con la mal llamada «prescripción de la reincidencia». Con anterioridad a 1978, en que se introdujo, nunca desaparecía («prescribía») la posibilidad de apreciar la agravante de reincidencia (o reiteración) en base a una determinada condena anterior. En 1978 se negó la aplicabilidad de la agravante cuando, obtenida la rehabilitación, hubiere transcurrido un

⁴¹³ Véase Manzini (1950), pp. 390 y ss.; Jescheck (1993), pp. 827 y ss. Texto que se mantiene en la quinta edición (2002), pp. 989 y ss.; Muñoz y García M (1993), pp. 533 y 534; Quintero (2007), pp. 779; Mir (2008), pp. 764, párrafo 57, la mencionaba con el anterior código penal, sin embargo, con el nuevo código penal de 1995 ahora se refiere a la cancelación de los antecedentes penales; Berdugo, Ferré y Serrano J. (1994), pp. 194 y 195; y Maurach, Heinz y Zif (1995), pp. 629 y ss.

tiempo doble del previsto para esta o, en cualquier caso, el de diez años (anteriores arts. 10, 14 y 10, 15ª CP). La reforma de 1983 dio un paso más y excluyó la posibilidad de apreciar la circunstancia de reincidencia cuando los antecedentes estuvieren cancelados o hubieren podido serlo (art. 10, 15ª CP). El mismo criterio mantiene el actual art. 22, 8ª CP”⁴¹⁴. Tal vez en el Perú esta sea una idea a meditar.

16. LAS CONSECUENCIAS ACCESORIAS.

Otro de los aspectos que es importante destacar es si las consecuencias accesorias pueden o no prescribir considerando su naturaleza de si es una pena o una medida de seguridad, o si pertenecen al derecho administrativo o civil, pues para algunos puede que no se extingan ni siquiera con la prescripción de la acción penal, y para otros sí.

Se la define como “otro tipo de consecuencia, de un *tertium genus*, distinto de las penas y de las medidas de seguridad, pero con naturaleza penal. Distinto también, por tanto, de la responsabilidad civil”⁴¹⁵.

En torno a su naturaleza se señala que las consecuencias accesorias “no tienen naturaleza penal y ni siquiera sancionadora. A partir de aquí, sin embargo hay que tener en cuenta que no puede encontrarse para todas ellas un único principio fundamentador, pues gozan de muy diversas naturalezas, y cada una de ellas, o bien cada grupo de ellas, se orienta a fines específicos y diferentes a los de otras”⁴¹⁶.

Algunos distinguen entre la licitud e ilicitud de las consecuencias accesorias, por lo que “el comiso se reduce a la pérdida de los efectos e instrumentos del delito, si bien se trata de una pérdida con fines sustitutivos pues si son de lícito comercio, se venderán y su producto se aplicará a cubrir las responsabilidades del penado. A primera vista, parece que en este caso, en el fondo el comiso consiste en colocar a los efectos e instrumentos del delito en primer lugar en el orden a seguir en la vía de apremio. Sin embargo, sus efectos no se reducen a esto, pues, aunque no fuera necesario, porque no hubiera responsabilidades civiles derivadas del delito, o, porque hubieran sido ya satisfechas, en todo caso, la pena de comiso produciría su efecto y acarrearía la pérdida de los efectos e instrumentos del delito. En estos casos, tras la venta, su producto, deberá ingresar en el tesoro público. Incluso, aunque los bienes cuyo comiso procediera hubieran desaparecido o por cualquier circunstancia no fuera posible el comiso, no por ello deba de ejecutarse el comiso, lo que ocurre es que se ejecutará sobre otros bienes que equivalgan en valor a aquellos cuyos comiso correspondía”, y cuando fuera de ilícito “comercio se les dará el destino que se disponga reglamentariamente y, en su defecto, se inutilizarán”⁴¹⁷.

En el caso de la prescripción de la persecución penal queda latente la interrogante de ¿si es o no posible que prescriban las consecuencias accesorias? Al respecto sostengo que sí considerando que su plazo por interpretación extensiva dependería de los plazos de

⁴¹⁴ Mir (2008), pp. 766, párrafo 64.

⁴¹⁵ Roca L. (2007), pp. 575.

⁴¹⁶ Gracia et al. (2006), pp. 402 y 403.

⁴¹⁷ López Barja (2010), pp. 1420.

prescripción de la persecución penal, razón por la cual ya no se podrán imponer las reglas de las consecuencias accesorias, recurriéndose en todo caso a la vía administrativa y en algunos casos a la civil.

Las consecuencias accesorias establecidas en una sentencia consentida o ejecutoriada, implica que se trata de un bien del Estado, es decir que mediante esta sentencia se establece el derecho de propiedad, por ejemplo en el CP (Pan.), el art. 122 precisa que “la extinción de la pena no impide el comiso de los instrumentos con los cuales se cometió el hecho punible y los efectos que de él provengan”. Sin embargo, que pasaría si nunca se hizo efectivo lo dispuesto por la sentencia condenatoria, es posible la prescripción y acaso con las reglas de la prescripción en materia penal, o es que igual que en la responsabilidad por el delito se rige por las reglas del derecho civil, y por ende sí es posible que prescriba.

En la doctrina nacional a propósito de los delitos de lavado de activos se ha planteado la posibilidad que “el derecho del Estado de solicitar a la autoridad judicial competente, la pérdida de los supuestos derechos del agente y su consecuente traslado a la titularidad del Estado, no quedan sujetos a condicionamientos de tiempo o de cualquier otro tipo, por lo que inclusive, la acción para propiciar el decomiso será imprescriptible [sic]”⁴¹⁸.

Considero peligrosa e insostenible la propuesta de GÁLVEZ, ya que los investigadores o teóricos realizan propuestas e interpretaciones de lege lata, y cuando se trata de restringir derechos o aplicar extensivamente la norma penal, ello puede realizarse a través de lo que la política criminal recomienda, es decir formulas de lege ferenda, con lo que se hace necesario plantear una reforma legislativa, empero no se pueda ir contra lege y facilistamente proponer la imprescriptibilidad cuando este tema es estrictamente de *numerus clausus*, e incluso se atentaría contra el atenta contra el plazo razonable, el principio de legalidad entre otros fundamentos excluyentes.

⁴¹⁸ Gálvez, T. (2004), p. 148.

CAPÍTULO TERCERO

OTRAS CUESTIONES

1. LA PRESCRIPCIÓN Y EL CONFLICTO DE LEYES EN EL TIEMPO.

En la doctrina, desde una perspectiva procesal, este tema ha sido tratado por MAIER quien afirma inicialmente respecto a la motivación de las normas jurídicas que:

“Las leyes siempre rigen para el futuro (...) y con razón, pues esa es la única manera de concebir la ley como regla de cálculo de comportamiento humano y como forma general de equiparar el trato que la autoridad brinda a los seres humanos. En efecto, las reglas no pueden cumplir su función de cálculo sobre comportamientos pretéritos, ya sucedidos, si no estaban vigentes a la época del suceso, pues el autor no ha podido determinar su conducta por ellas (...); de allí que las normas, aplicadas a comportamientos pasados, tampoco puede cumplir la función de política que determina su existencia: influir -como uno de los motivos- en las personas para que realicen ciertos comportamientos y prescindan de otros; y, también para que puedan relacionarse entre sí con algún sentido racional. Es evidente, además, que, aunque se pueda valorar un comportamiento pretérito por una regla sancionada con posterioridad a él, tal juicio sólo significa la aplicación de un puro *poder* reglado, pues no es posible atribuir a la decisión del autor de ese comportamiento, tratado en la forma que determina una regla posterior, conformidad o disconformidad con la regla, eventualmente, voluntad de lograr su efecto, al momento de decidir el acto. Es por ello que las normas calificadas como de aplicación retroactiva, sólo representan mandatos para el ejecutor (autoritario) de la ley”.

No obstante, este autor justifica la aplicación retroactiva de la ley procesal cuando afirma: “es perfectamente posible que la ley nueva rija los actos que, en el procedimiento, sean llevados a cabo con posterioridad a su vigencia y que la ley antigua continúe rigiendo los actos realizados según ella, con anterioridad a su derogación, y que, consecuentemente, cada uno de esos actos sea valorado conforme a la ley vigente a la época de su realización; incluso -se debe decir-, ésta sería la situación ideal”⁴¹⁹.

Concluye MAIER afirmando que “De lo explicado se deduce que, en materia procesal penal, no está prohibida (es admisible) que la ley se aplique retroactivamente, según ella misma lo puede establecer, aunque esa forma de aplicación no pueda pretender cumplir una de las principales funciones políticas de la ley en relación a los hechos ya sucedidos: servir de modelo de comportamiento a las conductas humanas, dirigir el comportamiento humano; sin embargo, esa forma de aplicación pretende servir de modelo para valorar esos comportamientos y, con ello, dirigir la manera de comportarse de quienes deben valorar esas conductas. No obstante lo dicho, existe un tópico contenido en el Derecho procesal penal, en el cual no está admitida (está prohibida) la aplicación retroactiva de la ley: se trata de reglas que regulan la competencia penal, pues «nadie puede ser sacado de los jueces

⁴¹⁹ Maier (1989), pp. 281.

designados por la ley antes del hecho de la causa» (CN, 18), regla que sólo reconoce escasa excepciones (principio del juez natural; ver § 7, B, 3)”⁴²⁰.

Por último, MAIER sugiere el problema acerca de si una norma legal referida a las medidas coercitivas puede aplicarse retroactivamente. El autor responde “Si el reglamento [nuevo] establecido para las medidas de coerción se adecúa a los principios que las rigen en un Estado de derecho, no parece que rija la máxima que impide aplicar una ley posterior al momento de la comisión del hecho atribuido; el juez debería decidir según la ley vigente al momento de practicar el acto, esto es, al momento de resolver acerca de la medida de coerción, con lo cual mantiene el principio general de que las leyes rigen para el futuro; no existe una razón plausible, dadas aquellas condiciones, para apartarse de esa regla”⁴²¹.

Sin embargo, a pesar de estar en acuerdo con el autor en muchas cosas (su teoría de la motivación normativa, lo mismo que la vigencia para los actos siempre que estos sean más favorables⁴²² al procesado o imputado) no comparto la conclusión a la cual llega y que lo fundamenta en el párrafo anterior, pues atenta contra el principio de lo *más favorable al reo*. Así las reglas procesales deben ser aplicadas, en el momento en que se encuentren vigentes, más aún cuando se da una nueva ley que restringe directa o indirectamente bienes jurídicos, por ejemplo una ley vigente dispone la detención para delitos cuya pena privativa de libertad conminada es de cuatro años, mientras que según la ley nueva, que para MAIER es la que debiera aplicarse, sólo será necesaria una pena de tres años.

En consecuencia (esta opinión tiene como partida que los principios son únicos para la ciencia penal⁴²³ en sentido amplio: derecho penal, derecho procesal penal, y derecho de ejecución penal), cuando se esté frente a un proceso en trámite y se dicta una nueva ley, ésta se aplicará para los casos que en adelante se acontezcan (principio de irretroactividad de la norma), pero si se comprueba que tal norma no es la más favorable al reo o imputado, entonces se tendrá que aplicar la norma que estuvo vigente cuando se inició el caso (ultractividad). Sin embargo, cuando se demuestre que la nueva ley es la más favorable se aplicará ésta al caso iniciado anteriormente (principio de retroactividad)⁴²⁴.

Por su parte CÉSAR SAN MARTÍN respecto al problema de la aplicación retroactiva de las normas procesales, señala que “resulta claro que nuestro sistema jurídico como regla general, según lo ha establecido el Tribunal Constitucional, acoge la teoría de los hechos cumplidos (descarta por ende la teoría de los derechos adquiridos *-jura quaesita-*), en cuya

⁴²⁰ Maier (1989), pp. 282.

⁴²¹ Maier (1989), pp. 283.

⁴²² Aquí es necesario tener presente que las normas procesales no son neutras sino o son favorables o perjudiciales y por esto es que el principio de favorabilidad debe de considerarse, a pesar de que nosotros no tengamos una regla como sí lo consigna el CPP colombiano, Art. 6 segundo párrafo. En el Perú se tiene el Art. 139 numeral 11, de la Constitución; más abajo se explica la razón de esta idea.

⁴²³ Es de opinión diferente Gumersindo Guinarte Cabada en España al decirnos que “En la actualidad es generalmente admitido por la doctrina y la jurisprudencia (sentencias del T.S. de 15 de enero de 1992 y 4 de diciembre de 1992) que la prescripción es una institución de naturaleza sustantiva, y no meramente procesal (lo que tiene como consecuencia la prohibición de la retroactividad en contra del reo). La prescripción puede ser alegada de oficio y estimada por el juez o tribunal sin necesidad de la alegación de parte” Véase comentarios hechos por Guinarte Cabada en la obra colectiva de Vives et al. (1996), pp. 678.

⁴²⁴

virtud – sobre la base del problema en curso- se dirá que cuando los hechos, situaciones o relaciones se inician durante la vigencia de la normatividad anterior y siguen existiendo o produciendo efectos durante la nueva, así como cuando éstas hayan ocurrido o tenido inicio antes de la nueva Ley para tener consecuencias luego de la entrada en vigor de aquella, regirá el principio de la aplicación inmediata de la nueva normatividad. Esta concepción, desde luego, es plenamente aplicable al caso de las normas procesales, según lo tiene establecido la Segunda Disposición Final del CPC, aunque con algunos matices específicos. Dicho esto, empero, cabe aclarar conjuntamente con RUBIO CORREA que la ley nueva dentro de sus disposiciones transitorias puede permitir expresamente que la que está derogando mantenga su vigencia por un tiempo más a pesar de su derogación, lo que no tiene nada de particular pues la nueva ley está plenamente habilitada para estatuir tal cosa y, por lo demás, no es extraño ni en el Derecho en general, ni tampoco en nuestro sistema jurídico”⁴²⁵

Mi opinión no hace sino coincidir históricamente con la propuesta planteada en el ya viejo Proyecto de Código Penal Suizo de 1918 que en su Título Tercero denominado “Entrada en Vigor y Aplicación del Código Penal”, Capítulo Primero, “Relación entre el código penal y las leyes federales y cantonales”, numeral 3.- “Relación entre el Código Penal y la Legislación Anterior”, art. **354 Prescripción** refería que *«Las disposiciones del presente Código relativas a la prescripción de la acción penal y de las penas, serán aplicables a las infracciones cometidas y a las penas impuestas antes de la entrada en vigor de este Código, siempre que dichas disposiciones sean más favorables al autor de la infracción que las de la ley anterior. Se tendrá en cuenta el tiempo durante el cual haya corrido la prescripción antes de la entrada en vigor del presente código»*. El CP de 1924 optó por tal solución legislativa al decirnos en su art. 396 *«Las disposiciones del Código relativas a la prescripción de la acción penal y de las penas, se aplicarán a las infracciones cometidas y a las penas pronunciadas antes de la vigencia del código, en cuanto tales disposiciones sean más favorables al autor de la infracción. Se tendrá en cuenta el tiempo corrido de la prescripción antes de la vigencia del Código»*.

A esta misma **conclusión** arriba sin deslindar la naturaleza de la prescripción HURTADO POZO, invocando el art. 396 del CP de 1924, que no es sino una traducción del art. 362 del anteproyecto de CP suizo de 1916, por lo que no queda claro si la retroactividad a favor también se da en el campo del derecho procesal, pues en el actual CP no existe tal regla, por eso, reclamamos una toma de posición, con lo cual sería irrelevante que se consigne o no regla alguna en el CP. (1987), pp. 300 a 302.

En cambio, el otro extremo lo constituyen PEÑA CABRERA, quien considera que es mixta pero no se pronuncia al respecto, (1994) PG, pp. 568; y ROY FREYRE (quien la considera mixta así su ponencia presentada en el Congreso Internacional de Derecho Penal: Nueva Dogmática y tratamiento político-criminal moderno del 16 al 20 de setiembre de 1996, organizado por la PUC y la Revista Derecho y Sociedad); y GASTÓN MANRIQUE PACHAS citando el art 396 del CP del 24.

⁴²⁵San Martín Castro, C. (2012). p. 300.

Empero, este último autor tiene un punto que considero contrario al planteado en este trabajo, pues considera que se está ante una institución de carácter penal y no procesal (por la ubicación del art. 396 en el CP) y que de esto depende que se aplique o no retroactivamente la nueva norma penal al caso anterior a su vigencia, por lo que si fuera procesal esto no se podría. Considera además dicho autor posible la aplicación de la *lex tertia* por el juez penal sin vulnerar ningún principio constitucional, véase (abril-mayo, 1990) La prescripción de la acción penal y la *lex tertia*, pp. 55 y ss; en este mismo sentido a pesar que no lo hace expresamente CASTAÑEDA, C. (setiembre, 1994), La prescripción penal, pp. 13.

De opinión contraria son URQUIZO, J. (enero-Junio, 1993), El principio de combinación en el nuevo código penal, pp. 253-259; y CARO, J. (julio-diciembre, 1994)⁴²⁶, La problemática constitucional de la combinación de leyes penales. Discutida posición de la jurisprudencia, pp. 733 y ss.

A continuación se examinan las ideas de este último para luego deslindar posiciones al criticar el art. 6 del vigente CP en lo que se refiere al principio de combinación en oposición al principio de lo más favorable al reo. La cuestión de esta crítica es que el autor no define qué es lo más favorable al reo, sin embargo por oposición afirma dicho autor que lo más favorable al reo no puede ser «combinar leyes», entonces se le pregunta cómo se puede aplicar lo más favorable al reo en casos de leyes que concurren en el tiempo. El autor reflejando un formalismo in extremis invoca a la unidad de la ley y responde que se aplica una sola ley que es la más favorable, entonces me pregunto ¿es esto posible siempre? Creo que no, ya que en toda aplicación retroactiva de la norma nueva a un caso anterior por ser lo más favorable se consideran siempre más de una norma a la hora de solucionar dicho caso:

- 1° La ley A que califica el delito y tiene una pena (esta pena es p. ej.: de 8 años).
- 2° La ley B (que no siempre es igual el tipo legal, así sí sería inconstitucional aplicar al agente un nuevo tipo que difiere en algo al imputado, pues no es válido hacerlo ni siquiera a título de analogía) y que tiene una pena de 6 años (más favorable); ambas tienen un supuesto similar (y casi siempre será similar y por eso habrá que mantener el supuesto original a menos que el nuevo supuesto sea más favorable que el anterior p. ej.: que se suprima alguna circunstancia agravante o que cree una atenuante) pero una consecuencia diferente.
- 3° Acaso no se toma el supuesto de la primera, que luego se adecúa y se toma la pena de la segunda, debido a que aplicar una sola norma en su integridad nos conduciría a arbitrariedades de recalificación de conductas. Estas mismas reglas serían las que habrá que aplicar para la *prescripción*, sean del CP abrogado o del actual, siempre lo más favorable y no necesariamente ligar estas reglas a las figuras y las penas que cada código contiene so pretexto de la unidad normativa, así p. ej. se tiene un caso que se inició con la ley X que tipifica una conducta y la sanciona con 10 años y las reglas de prescripción

⁴²⁶ Este autor ha vuelto a publicar sobre el tema con el título “*Combinación de leyes penales*”, en la prestigiosa revista del profesor Hurtado Pozo, Anuario de Derecho Penal N° 5, pp. 333 a 351, empero reafirmando su postura.

indican que ésta prescribe a los 12 años, luego se da una ley **Y** donde la conducta tipificada de manera similar (no igual) plantea una pena de 8 años, pero las reglas de prescripción admiten que tal conducta pueda prescribir a los 15 años, entonces si somos lógicos diremos que por aplicación del principio de unidad normativa se considerara o la una o la otra (así CARO). Empero, de mi parte afirmo que se aplique la norma **X** en cuanto a su supuesto más favorable, luego la sanción de la ley **Y** por ser la más favorable y finalmente en torno a las reglas de prescripción las reglas de la ley **X**, **por ser las más favorables** (ya que se debe tener presente que las reglas de prescripción no son accesorias, sino independientes⁴²⁷, por eso pienso que es un mal ejemplo el que consideró CARO para hacer valer su idea, pues el considera que la prescripción es siempre accesoria). **Por último, no estoy de acuerdo con que exista el famoso principio de combinación, sino creo que es una opción que tienen los jueces para en algunos casos hacer factible la aplicación del principio de lo más favorable.** Esta interpretación discrepa con el mero formalismo y hace viable la real aplicación de lo más favorable al reo siempre (incluso para los delitos considerados de mayor gravedad) y no meros formalismos, que consideran al juez como un simple aplicador de leyes sin capacidad de pensar o interpretar (al menos con la libertad que un estado social y democrático de derecho exige), así que no creo que esto vulnere legitimidad democrática alguna, salvo que se entienda esto bajo criterios formalistas (lo cual implica también definir y tener en claro otros criterios de ley, norma e interpretación, etc., a fin de consolidar esta posición).

El título preliminar del CPP (D. Leg. 638 ⁴²⁸) consignó en el artículo IX: «*La Ley Procesal Penal es de orden público, se aplica en el territorio nacional desde su vigencia, inclusive para lo que resta del proceso por un delito cometido con anterioridad y cuya sentencia no ha quedado firme, siempre que se trate de disposiciones más favorables al imputado*».

Así se configuró el principio de la retroactividad en materia procesal sólo cuando sea más beneficiosa, excluyéndola cuando la ley retroactiva sea más perjudicial, por ej.: que amplíe un proceso que se ha llevado regularmente conforme a las reglas del debido proceso.

⁴²⁷ Un caso curioso en la doctrina nacional es el que propone Gálvez Villegas, siguiendo a la nueva versión de la postura de Caro Jhon sobre este tema, al afirmar como enunciado general sobre el principio de combinación que “a la fecha ya no es posible sostener una interpretación en este sentido, no solo por razones sistémicas, sino y sobre todo, por razones normativas” haciendo referencia este autor a la que la Constitución de 1993 en su numeral 11 que refiere *la ley más favorable* y no como la Constitución de 1979 que utilizaba la frase *lo más favorable*, y lo curioso radica en afirmar que para la prescripción penal si sería aplicable, entiéndase como una excepción, así señala “sin embargo, para el caso de la prescripción de la acción penal o de la pena, supuesto que ordinariamente no se encuentra previsto en la misma ley o norma penal, podría resultar de utilidad este criterio de combinación. Al parecer en este sentido ha interpretado la Comisión Revisora del Código Penal, que entre sus conclusiones propone volver al criterio de “*lo más favorable*” en lugar de “*la ley más favorable*”, pese (sic) las inconveniencias anotadas. En todo caso, si se quisiera establecer un criterio en este sentido, lo preferible sería hablar de aplicación de “*la norma más favorable*”, y no lo más favorable o la ley más favorable, porque de este modo se podría combinar normas contenidas en una misma ley o en otra, claro está, que no se puede combinar los presupuestos o elementos de la propia norma penal configurativa de tipos penales, tanto a nivel del supuesto de hecho así como respecto a la consecuencia jurídica aplicable” (Gálvez, pp. 145 y 146).

⁴²⁸ Dado el 27 de abril de 1991 y que solo se dispuso la entrada en vigencia de algunos artículos quedando todo lo demás en vacatio legis, aunque ahora está derogado según lo dispuesto por el N.C.P.P.

Este art. IX estaba acorde con lo dispuesto por el art. 187 de la Constitución de 1979 (en concordancia con la décimo sexta disposición final y transitoria y el art. 101 y siguientes de dicha Constitución) señala que se admite la retroactividad, solo en materia de legislación penal (entiéndase derecho penal, procesal penal y de ejecución penal), siempre que sea más favorable.

Así mismo, se tiene la interpretación que ha realizado el Comité de Derechos Humanos (de acuerdo al Pacto Internacional) para la imposición de la pena capital, por ejemplo en el caso Mberge C. Zaire ha considerado que dicha disposición “exige que tanto las leyes sustantivas como procesales en virtud de las cuales se haya impuesto la pena de muerte no sean contrarias a las disposiciones del Pacto y, además que la pena de muerte se haya impuesto de conformidad con esas leyes y, de conformidad con las disposiciones del Pacto”⁴²⁹, argumentos relacionados con el principio de legalidad y no de retroactividad que contiene el artículo 4, numeral 2 de la Convención Americana de DDHH⁴³⁰.

Estoy de acuerdo con esta posición, porque rescata la primacía del principio de legalidad y la irretroactividad de toda ley penal en sentido amplio (penal, procesal y de ejecución), aunque de manera también excepcional acepto la aplicación retroactiva de dicha ley sólo cuando sea más favorable al procesado.

Sin embargo, luego de reiteradas prórrogas de la *vacatio legis* del CPP, se publicó el jueves 06 de abril de 1995 el Proyecto de CPP⁴³¹ el cual repite la redacción del artículo IX, con las únicas modificaciones de cambiar los términos «orden» por «carácter» e «imputado» por «procesado».

La opinión de MONROY GÁLVEZ, es similar a la aquí adoptada, al comentar este artículo IX del proyecto afirma que “la única hipótesis que al legislador le interesa quede clara, es aquella en la cual, habiendo un proceso en trámite, se expide una nueva norma procesal. Quiere decir que en tal caso la nueva norma sólo será utilizada dentro del proceso iniciado, si es más favorable al procesado. En tal mérito proponemos la siguiente redacción: «ARTÍCULO IX.- *La Ley Procesal es de naturaleza pública y se aplica en el territorio nacional, incluso a los procesos en trámite, siempre que sea más favorable para el procesado*”⁴³².

Luego, de este proyecto, el día 13 de octubre de 1995, el Congresista de la República JAVIER ALVA ORLANDINI vía Proyecto de Ley N° 468/95-CR plantea un nuevo Proyecto de Ley que reubica el art. IX del anterior Proyecto, y ahora será el artículo VII

⁴²⁹ O'Donnell (1989), pp. 57.

⁴³⁰ También denominado Pacto de San José de Costa Rica que el Perú ratificó el 28 de Julio de 1978, así véase el art. 4 (2) que refuerza la idea de la irretroactividad.

⁴³¹ Por Ley N° 26299 de abril de 1994 se dispuso la creación de una comisión encargada de revisar la conformidad del texto del CPP con los postulados de la Constitución de 1993. El CCD no aprobó este proyecto.

En el Proyecto de Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Procedimiento Penal se regula como uno de los principios generales del proceso en el Art. 4° inciso 3) «*Toda persona tendrá derecho a ser juzgado por los Tribunales de Justicia Ordinarios con arreglo a procedimientos legalmente establecidos*» Véanse Reglas Mínimas de Proceso Penal, Reglas de Mallorca. ONU, Subdivisión de prevención del delito y justicia penal, 1992, p. 25.

⁴³² Monroy, J. (). *Comentarios al título preliminar del proyecto de código procesal penal*, pp. 20-21.

con la sumilla «*Carácter imperativo*» y ahora se remplace los términos «*público*» por «*imperativo*» y se suprime el adjetivo «*más*».

Con fecha 14 de Dic de 1995 se envió al Congreso el dictamen de la Comisión aprobando el Proyecto de Código Procesal Penal. Aquí se volvió a modificar el artículo VII del Proyecto de ALVA ORLANDINI con la siguiente redacción: «*La Ley Procesal Penal es de carácter imperativo y se aplica en el territorio nacional, **inclusive para el proceso en trámite** siempre que sea más favorable al imputado*»⁴³³.

La regla será que todo proceso iniciado con determinadas normas procesales deberá concluir con éstas (Principio de Irretroactividad). Empero, en el caso en que hayan problemas de aplicación temporal tendremos que los Congresistas peruanos han optado por la aplicación de la retroactividad de conformidad con el artículo 103, segundo párrafo de la Constitución de 1993, y de la ultractividad legal en los determinados casos que se especifican en el proyecto de CPP, Disposiciones Complementarias: por ej. Segunda y Cuarta (primer párrafo); y Transitorias: por ej. Sexta, Séptima (incisos 1, 2, 3, 4, 5 al menos hasta una cierta etapa en algunos casos).

El N.C.P.P. también ha regulado esta disposición en el Título Preliminar específicamente para la norma procesal en el art. VII, numerales 1 (aplicación inmediata), 2 (Ley procesal referida a derechos individuales que sea más favorable al imputado, expedida con posterioridad a la actuación procesal, se aplicará retroactivamente, incluso para los actos ya concluidos, si fuera posible), 3 (La Ley que coacte la libertad o el ejercicio de los derechos procesales de las personas, así como la que limite un poder conferido a las partes o establezca sanciones procesales, será interpretada restrictivamente. La interpretación extensiva y la analogía quedan prohibidas mientras no favorezcan la libertad del imputado o el ejercicio de sus derechos) y 4 (en caso de duda insalvable sobre la Ley aplicable debe estarse a lo más favorable al reo).

La jurisprudencia respecto a la prescripción y principio de la irretroactividad penal:

1. Ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivo, salvo que la misma así lo disponga. El precepto constitucional, art. 132 (195), podría tener como excepción doctrinaria a toda ley de carácter procesal penal. El D.L. 17106 no tiene este carácter, porque sus preceptos se refieren a la Ley sustantiva. Como el Instituto de la prescripción incide en lo sustantivo y no en lo procesal, dicho D.L. que no tiene carácter retroactivo, no es aplicable a hechos anteriores a su vigencia, por lo que no cabe elevar el plazo de la prescripción, por el hecho de haberse promulgado antes de la sentencia (Ej. 1º de Octubre 1973. R. de J.P. 1973 p. 1376).

⁴³³ En el dictamen que elabora la Comisión de Justicia sobre el Proyecto de Ley N° 468-95-CR y considerando además el proyecto elaborado por la Comisión Revisora, se forma en la Comisión de Justicia una Sub-Comisión en la cual fue aprobado un texto sustitutorio, el que, a su vez, fue aprobado por el pleno del Congreso de la República, empero fue observado por el Ejecutivo regresando al Congreso el 08 de enero de 1996, el cual se subsanó el 1º de marzo de 1996, y hasta la fecha se encuentra en el Congreso para que sea éste el que lo promulgue.

La Corte Suprema ha sentado criterio en varias ejecutorias⁴³⁴ en torno a no aplicar las normas de prescripción retroactivamente en este proceso por delito de peculado, así se tiene los siguientes fundamentos:

“Primero: (...) b) que en el caso de autos nos encontramos ante un delitos continuado cuyos hechos ocurrieron entre el período del treinta setiembre de mil novecientos noventa y dos al cuatro de febrero de mil novecientos noventa y nueve; (...) Quinto: (...) resulta claro que temporalmente no corresponde a dichos hechos la aplicación del segundo párrafo del artículo ochenta y siete (sic) del Código Penal, ni el último párrafo del artículo ochenta del mencionado Código, que permitiría extender el plazo de prescripción de la acción penal, pues constitucionalmente está proscrita la retroactividad de la ley Penal contra reo. En tal virtud, se advierte que el accionar del procesado (...) se encuentra previsto en el artículo ochenta y siete del Código Penal en su texto original, que sancionaba al agente con pena privativa de libertad no mayor de ocho años, a la que adicionándole una mitad a dicho máximo punitivo en virtud a lo dispuesto por el artículo ochenta y tres del Código Penal, la acción prescribe a los doce años, plazo que ha transcurrido con exceso en el caso de autos (...),” [Nota: debe decir trescientos ochenta y siete].

Cabe indicar que en esta ejecutoria no se precisa el supuesto por el cual si estando ante un delito continuado se debió computar el plazo de conformidad con lo señalado por el art. 82 numeral 3, es decir desde el día en que terminó la actividad delictuosa y no desde el inicio de la comisión del delito, pues se asumió que se trataba de un delito instantáneo cuando en realidad era un delito continuado.

Por otro lado invocándose los principios de combinación y de favorabilidad se aprecia la siguiente ejecutoria⁴³⁵:

“Tercero: Que, se advierte de la denuncia fiscal y dictamen del Fiscal Superior de fojas ciento siete y mil sesenta y nueve, respectivamente, que la conducta imputada a la procesada (...) se encuentra subsumida en el tipo penal previsto en el artículo cincuenta y cinco-A del Decreto Legislativo número ciento veintidós, (vigente al momento de suscitarse los hechos investigados), dispositivo penal, que preveía la pena de internamiento o penitenciaría no menor de quince años **“Cuarto (...)** a) el Código Penal de mil novecientos veinticuatro regula en su Título décimo quinto, la extinción de la acción penal y de la pena, estableciéndose en el inciso tercero del artículo ciento diecinueve, que la acción penal prescribe "a los diez

⁴³⁴ Véase la Ejecutoria expedida en el R.N. N° 3273-2007, Ancash, emitida en el año 2009, en el ANEXO 3, de esta investigación, específicamente el documento N° 24; así también véase la Ejecutoria emitida en el R.N. N° 4065-2007, Puno, resuelta en el año 2009 por unanimidad, en el ANEXO 3, de esta investigación, específicamente el documento N° 44.

⁴³⁵ Véase la Ejecutoria expedida en el R.N. N° 4998-2007, Callao, en el ANEXO 3, de esta investigación, específicamente el documento N° 59; en este mismo sentido véase la Ejecutoria del R.N. N° 5213-2008, Lima, en el ANEXO 3, de esta investigación, específicamente el documento N° 61. En torno al principio de favorabilidad se tiene la Ejecutoria expedida en el R.N. N° 5057-2008, Lima; la Ejecutoria emitida en el R.N. N° 2960-2009, Junín; la Ejecutoria expedida en el R.N. N° 1305-2005, Lima, y la Ejecutoria expedida en el R.N. N° 2426-04, Tumbes; véase en el ANEXO 3, de esta investigación, respectivamente en los documentos N° 60, 62, 66 y 67.

años por delitos que merezcan penitenciaría o relegación" (...) b) el Código Penal de mil novecientos noventa y uno regula en su Título quinto, la extinción de la acción penal y de la pena, estableciendo el artículo ochenta, que "la acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley para el delito, si es privativa de libertad" (...) **Quinto:** Que, el Acuerdo Plenario de las Salas Penales Permanentes y Transitorias número dos-dos mil seis/CJ-ciento dieciséis, de fecha trece de octubre de dos mil seis, establece como doctrina legal, que resulta posible elegir entre dos leyes penales sucesivas en el tiempo los preceptos más favorables, en virtud al "principio de combinación "que permite al juzgador poder establecer una mayor benignidad penal a favor del reo (...) **Sexto:** Que, siendo ello así, resulta aplicable al presente caso, la legislación sobre prescripción de la acción penal regulada en el Código Penal de mil novecientos veinticuatro (...) **Sétimo:** (...) establece que en caso de delitos que merezcan penitenciaría como el presente caso,-por ser la pena más favorable- la acción penal prescribe a los diez años (plazo ordinario); plazo al cual, conforme al artículo ciento veintiuno del mismo texto legal, al haberse producido la interrupción de la acción penal por intervención de los operadores jurisdiccionales, corresponde aumentar como máximo en una mitad (plazo extraordinario), esto es, que en el presente caso debe transcurrir quince años para que opere la prescripción de la acción penal, lo que a la fecha ha transcurrido en exceso (...) **NO HABER NULIDAD** en el extremo que declaró de oficio extinguida la acción penal por prescripción ..En el proceso penal seguido en su contra por el delito contra la Salud Pública-tráfico ilícito de drogas (...)", Pág. 2, 3 y 4.

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado mediante una sentencia⁴³⁶ sobre la retroactividad en sentido favorable al declararla fundada, claro que no como posición unánime y menos aún con efectos vinculantes, así expresamos algunos de los fundamentos más resaltantes:

"9.En el presente caso se advierte de las instrumentales que corren en los autos que el Cuarto Juzgado Penal de Terrorismo, mediante resolución de fecha 12 de mayo de 2003, amplió la instrucción N ° 327-03 en contra del recurrente, como presunto autor del delito de terrorismo, atribuyéndole la calidad de "responsable o mando político", por hechos realizados entre agosto y octubre de 1992 (...), de otro lado mediante resolución de fecha 10 de mayo, declaró infundada la excepción de prescripción de la acción penal (...) considerando que: "en los delitos sancionados con cadena perpetua la acción penal se extingue a los treinta años (...)" Pág. 5.

"10. De lo antes glosado se aprecia que la Sala Penal Nacional demandada, a efectos de confirmar la resolución que declara infundada la excepción de prescripción de la acción penal deducida, aplicó la modificatoria aludida cuando ésta no estaba vigente al momento de los hechos que se imputan al demandante. Por lo tanto corresponde ampara la demanda, en este extremo, al haberse

⁴³⁶ Véase la Sentencia expedida en el expediente N° 10302-2006-PHC/TC, emitida en el año 2008, en el ANEXO 5, de esta investigación, específicamente el documento N° 39.

acreditado que la resolución impugnada vulnera los derechos a la motivación, irretroactividad de la ley y libertad personal del recurrente, debiéndose dictar nueva resolución conforme a la ley (...)”, pp. 5.

2. CASOS ESPECIALES DE PRESCRIPCIÓN.

2.1. DE LA PERSECUCIÓN PENAL.

Se plantean los siguientes casos de prescripción (sea ordinaria o extraordinaria) en donde no se ha establecido regla penal expresa:

1º Cuando la regla penal establece dos penas principales de aplicación excluyente que se les identifica por tener en su texto la disyunción “o” (*conminación disyuntiva o “alternativa”*)⁴³⁷.

P. ej.: art. 110, art. 111, primer párrafo, art. 114, art. 127, art. 130, art. 143, art. 148, art. 149, art. 387 cuarto párrafo del CP.

En la doctrina se plantean dos posiciones para resolver este primer caso: para unos la persecución penal prescribe con la pena de naturaleza más grave, así VERA BARROS (2007, p. 202); BOLDOVA PASAMAR en GRACIA MARTÍN (2006, p. 408); y, para otros la prescripción se producirá cuando transcurre el mayor plazo de prescripción y no necesariamente la pena de naturaleza más grave, así NUÑEZ (p. 175); CALVETE (1989, p. 58); MAPELLI CAFFARENA y TERRADILLOS BASOCO (1996, p. 229).

El art. 80 del CP establece plazos genéricos y no contempla expresamente una solución al supuesto planteado por lo que, amparados en las posturas doctrinales, opto por señalar que la prescripción se debe entender materializada cuando haya transcurrido el plazo de la pena principal conminada de mayor gravedad en el tiempo (prescripción mayor), sea o no privativa de libertad, siempre y cuando la pena que tenga menor plazo también ya haya prescrito.

A continuación presento una serie de variante del primer supuesto:

i) Entre una pena privativa de la libertad cuyo plazo de prescripción es mayor que el de cualquier otra pena principal no privativa de la libertad, así por ejemplo el art. 110 del CP.

⁴³⁷ Debe precisarse que el uso del término “alternativas” se refiere a la posibilidad de escoger entre dos penas, y no al de medidas de sustitución o alternativas a la pena privativa de libertad, contenidas en el CP de 1991, pero indistintamente emplearemos el término aplicación disyuntiva (en Alemania se le denomina “conminación alternativa”; así véase Maurach, Heinz Y Zipf (1995), pp. 647, N° 29) en razón al uso del conectivo lógico “o” que utiliza el CP, para referirnos a aquellos delitos que tienen dos penas principales. Así Calvete (1989), pp. 58, que manifiesta que algunos utilizan el término paralelas; o como Terradillos Basoco que las denomina compuestas en Mapelli y Terradillos (1996), pp. 229.

- ii) Entre una pena principal no privativa de la libertad con un plazo superior al de la pena privativa de la libertad, así por ejemplo: el de los artículos 111 primer párrafo, 114, 127, 143 y 148 del CP.

Sin embargo, a veces surgen supuestos que hacen inaplicables este criterio, así entre dos penas principales disyuntivas distintas a la pena privativa de la libertad o entre una pena privativa de la libertad y otra no privativa, debido a que en estos casos por más que la prescripción se dé independientemente una de otra por tener ambas el mismo plazo, la prescripción coincidirá entre ambas penas. Así por ejemplo, este es el caso de los artículos 130 y 149 (para la prescripción ordinaria) del CP.

En el caso de las faltas no tendrá sentido plantearse tal disyuntiva ya que existe una regla única de plazo de prescripción, cualquiera sea la pena conminada (una o más penas).

- 2º Cuando la regla penal plantea dos supuestos de penas conjuntas⁴³⁸, se le identifica por tener en su texto la conjunción «y» *acumulativa*).

P. ej.: art. 111 tercer párrafo, art. 122, art. 124 primer, segundo, tercer, cuarto y quinto párrafo, art. 132 primer, segundo y tercer párrafo, art. 141 primer párrafo (modalidad dolosa), art. 142, art. 144 segundo párrafo, art. 150, 153-A primer párrafo del CP.

En la doctrina este caso suscita polémica, así existen hasta tres posiciones:

Para un primer grupo, las penas conjuntas prescriben de manera *separada o independiente*, así YUSSEF (1987, p. 108). Para un segundo grupo, el plazo de prescripción estará determinado por la *pena de mayor gravedad*, así SOLER (1951, p. 529); VERA BARROS (2007, p. 202); MIR PUIG (1990, p. 859)⁴³⁹ y MORILLAS CUEVAS (1991, p. 202). Este criterio ha sido recogido en el Acuerdo Plenario de Arequipa de 1997⁴⁴⁰. Para un tercer grupo, al parecer una variante del segundo, las penas conjuntas

⁴³⁸ En la doctrina actualmente se utilizan los términos penas *compuestas*, Rodríguez J y Serrano A (1994), pp. 934, “La pena abstracta que señala la ley puede formarse con (...) dos o más de las que la escala general contiene, que pasan así a formar «una pena compuesta»: *Acumulativas*, Gracia et al. (1996), pp. 86: “Llamaremos penas *cumulativas* a aquéllas que están constituidas por la acumulación de dos o más penas de distinta naturaleza; que deberán aplicarse conjuntamente”; *conjuntas*, López Barja (1991), pp. 118: El código «En otras ocasiones impone varias penas para que todas ellas [generalmente 2 ó 3 y de distinta naturaleza] sean impuestas”. En el Perú Prado Saldarriaga lo utiliza, (1996), pp. 159; *acumulativas compuestas*, MOLINA (1996), pp. 42: “Dos o más penas (...)”; y *concurrentes*, Manzini, (1949), pp. 49: Refiriéndose como ejemplo a los artículos 73, 74 y 78 [reclusión y arresto] cuando se trata de penas concurrentes de la misma especie y al art. 137 en el cual existe concurrencia de penas de distinta especie como la pena temporal de detención con una pena pecuniaria. Pero este autor preferencialmente en las pp. 5, 49 y 51 utiliza los términos “acumulativo”, de “duración conjunta” y “aplicada acumulativamente”. Sin embargo, en la doctrina se plantea utilizar el término *concurrentes* cuando se impone una pena privativa de libertad acompañada de una medida de seguridad, véase Molina (1996) pp. 86. Finalmente en Alemania se utilizan la frase *conminación acumulativa*, así Maurach, Heinz y Zipf, pp. 647, N° 30. Propongo, de conformidad con el conectivo lógico “y” ó “e” que se utiliza en el CP, la frase *conminación conjunta*.

⁴³⁹ Aquí el autor se refiere al código penal español derogado, criterio mantenido por este autor considerando que el actual CP español tiene una regla expresa que soluciona el problema de las penas compuestas precisándose que se regirá por la que “exija mayor tiempo para la prescripción”, Mir (2008), pp. 760.

⁴⁴⁰ Véase el ANEXO 4, documentos N° 9 y 11 de esta investigación, además son importantes de destacar las críticas a este Acuerdo por parte de Vícto Prado Saldarriaga, quién primero ejemplifica vía una paradoja “a) el delito de lesiones leves, por tener penas alternativas y a pesar de ser un ilícito menos grave, prescribiría ordinariamente a los tres años, y extraordinariamente a los cuatro años y seis meses, pues su “plazo más largo” es aquél que deriva de la pena de multa

prescribirán de acuerdo a la pena que no necesariamente sea la más grave, sino la que tiene un mayor plazo de prescripción, así NUÑEZ (p. 175); CALVETE (1989, p. 58); y BOLDOVA PASAMAR en GRACIA MARTÍN (2006, pp. 407 y 408).

La prescripción se producirá considerando el mayor plazo de la pena fijado por la regla penal (prescripción mayor), siempre y cuando el plazo de la otra pena conjunta haya transcurrido; estos casos se dan entre una pena privativa de la libertad y otra no privativa de la libertad.

A continuación se plantean las siguientes variantes de este caso:

- i) Cuando la norma penal dispone como consecuencia una pena privativa de la libertad cuyo plazo de prescripción es mayor que la otra u otras penas principales distintas a la privativa de la libertad. Tal es el caso de la pena privativa de la libertad con una de inhabilitación, según los artículos 111 tercer párrafo, 141, 144 segundo párrafo, 153-A primer párrafo del CP; o de una privativa de la libertad con una de multa según lo dispuesto por el artículo 150 del CP.

En la doctrina nacional, VÍCTOR PRADO ilustra este caso con un ejemplo a partir de la sanción del delito de receptación que establece una pena privativa de la libertad y otra de multa sosteniendo que “en estos casos la prescripción de la acción penal deberá contabilizarse en función de las dos o más penas alternativas o conjuntas que el legislador fija para la sanción de un mismo delitos”, y el mismo autor termina de fundamentar su posición al señalar que “en consecuencia, pues, la extinción de la acción penal por prescripción ordinaria o extraordinaria, sólo será posible cuando se hayan vencido, paralela o secuencialmente, los diferentes plazos de prescripción que correspondan a todas las penas alternativas o conjuntas. En tal sentido, no estimamos correcto considerar la prescripción solamente en atención a los plazos de las penas privativas de libertad. Sobre esto último hay que recordar que las penas no privativas de libertad no son más benignas que aquellas, sólo se trata de penas de distinta naturaleza”⁴⁴¹.

- ii) Cuando el plazo de prescripción de la pena privativa de la libertad es menor que el de la pena alternativa de multa. Así se tiene lo regulado en los artículos 122 primer párrafo, 124 segundo párrafo, 132 primero, segundo y tercer párrafo del CP.

Por su parte también aquí es ilustrativo el ejemplo de VÍCTOR PRADO al precisar que “el hecho que el tiempo transcurrido desde la comisión del delito alcance el plazo de prescripción de la pena privativa de libertad que concurre como sanción alternativa con una pena no privativa de libertad, cuyo plazo de prescripción no ha vencido, no inhabilita al juzgador a decidir en la sentencia la imposición de una pena privativa de libertad. Esta

(sesenta a ciento veinte días-multa). b) El delito de lesiones graves sancionable con penas conjuntas y perseguible de oficio por implicar una mayor afectación de la salud del sujeto pasivo, prescribiría ordinariamente a los dos años y extraordinariamente a los tres años, pues esos serían los límites generados por la pena privativa de libertad (no mayor de dos años)”, y luego concluye que “tanto en penas conjuntas como en penas alternativas, la prescripción de la acción penal sólo pueden ser declarada si en el caso concreto se ha vencido todos los plazos que correspondan a las penas conminadas en la ley” Prado (2000), pp. 268.

⁴⁴¹ Prado (2000), pp. 260.

interpretación es compatible con la función de la prescripción de la acción penal, cual es extinguir el derecho de persecución penal del Estado ante el delito cometido, y no la extinción de la pena que, como ya se ha mencionado, sólo se produce en función de los plazos a que alude el art. 86. Plazos que, por lo demás, recién se contabilizan con posterioridad a la emisión de la sentencia condenatoria correspondiente”⁴⁴².

La jurisprudencia en la prescripción de penas “alternativas” en procesos ordinarios:

1. *Que, cuando la ley castiga un delito con penas alternativas, el plazo para la prescripción se computará en el acto de juzgamiento al apreciarse las circunstancias del delito* (Ej. Sup. del 18 Diciembre de 1987 en Jurisprudencia Penal, en Normas Legales Trujillo-Perú 1994, pp. 23).
2. a) *Prescribiendo el artículo 364 del CP que el delito de falsificación de documentos se reprime con penas alternativas de penitenciaría o prisión, y aunque el Fiscal sólo ha pedido esta última para el acusado, sólo en la sentencia puede declararse la prescripción.*
 b) *Si el delito fuera con prisión al no haber transcurrido los siete años y medio para la prescripción de la acción, es infundada la excepción propuesta* (Ej. Sup. de 8 de junio de 1962.- Ancash, Rev. Jurídica del Perú, Jul-Set. 1962, N° 3, pp. 213-214).

La jurisprudencia respecto a la prescripción de penas concurrentes en procesos sumarios:

1. *La exigencia prescrita en el artículo ciento diecinueve, último párrafo del Código Penal corresponde a un procedimiento ordinario, donde existen las etapas de investigación y juzgamiento. Tratándose de un sumario, como en el presente, al no haber debate oral se debe tener en cuenta lo actuado en la instrucción* (Ej. Sup. 26 de Julio de 1989. Anales Judiciales. Lima, 1993, LXXVII, p. 230).

La jurisprudencia respecto a que la pena señalada por el fiscal es la que se considera para iniciar el cómputo de la prescripción:

1. *En los delitos sancionados con penas alternativas, la pena señalada en la acusación fiscal, sirve de base para hacer el cómputo del término de la prescripción, siendo innecesario ir al juicio oral* (Ej. 1° Julio 1950. R. de J.P. 1950, p. 617).

⁴⁴² Prado (2000), pp. 261.

En este caso, también la Corte Superior llevó a cabo su I Pleno Jurisdiccional Penal de 1997⁴⁴³, estableciendo como criterio que se rigen por el delito que tenga la pena más grave (primer acuerdo).

2.2. DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA.

Aquí se puede distinguir varios casos, de acuerdo al CP, en donde no se ha establecido regla penal expresa:

1º Caso en el que se imponga una pena conjunta, sea una de ellas principal privativa de la libertad con una o más penas principales no privativas de la libertad, como:

TABLA 7: *Caso de las penas conjuntas.*

PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD VS. OTRAS PENAS PRINCIPALES	
Con pena de multa	Art. 122 primer párrafo; art. 132 y art. 150
Con pena de inhabilitación	Art. 111 tercer párrafo; art. 141, art. 142, art. 144 segundo párrafo y art. 153-A primer párrafo
Con pena de multa e inhabilitación	Art. 229 primer párrafo y art. 398 tercer párrafo

Nota: La concurrencia de penas, por un lado la privativa de la libertad con otras penas distintas a la privativa de la libertad: multa, inhabilitación, y multa e inhabilitación.

De la misma forma que en la prescripción de la persecución penal, en la prescripción de la ejecución de la pena se plantea hasta tres posiciones en torno a ¿cuándo prescriben en los casos de penas conjuntas?

- i) Así se tiene a quienes manejan la tesis de la *independencia*, es decir, que cada pena prescribe de manera separada la una de la otra, así YUSSEF, p. 108; SERRANO BUTRAGUEÑO, p. 220, siguiendo a JOSÉ LUIS MANZANARES SAMANIEGO).
- ii) Para otro grupo, la prescripción se alcanzará recién cuando haya transcurrido el *plazo de la pena de mayor gravedad* (FONTÁN BALESTRA p. 453; VERA BARROS, 2007, pp. 333; MORILLAS CUEVA, p. 209; así ALEJANDO DEL TORO MARZAL citado por SERRANO BUTRAGUEÑO⁴⁴⁴, p. 220).
- iii) Un tercer grupo de autores sostienen la tesis que la prescripción de la ejecución de la pena se producirá cuando haya transcurrido el *plazo de la pena de prescripción mayor*, pues no necesariamente la pena de naturaleza más grave es la que dispone un mayor plazo de prescripción (NUÑEZ, p. 544).

⁴⁴³ Véase el Acuerdo Plenario N° 5/97, donde se consigna los principales fundamentos, en el ANEXO 4, de esta investigación, específicamente el documento N° 11.

⁴⁴⁴ Sin embargo, algunos autores exigen además de esto que el inicio del plazo de prescripción de una de las penas impuestas empezará cuando alguna o algunas de las otras previamente se hayan extinguido, así Serrano I (1996), pp. 225 y 226; y Boldova Pasamar, en Gracia et al. (1996), pp. 415.

En cualquiera de los dos casos la prescripción se producirá cuando haya transcurrido el plazo de la pena principal, siempre y cuando éste no sea menor que el de las penas accesorias, ya que en este caso el plazo a considerar sería de éstas. De opinión diferente es el profesor PRADO SALDARRIAGA quien plantea que las penas prescriben separada o secuencialmente según los plazos de cada una de las penas impuestas (1996, pp. 159 y 160).

2º Caso en el que se imponga una pena privativa de libertad y se la convierta a una pena de multa.

La conversión es el medio a través del cual el juez ha considerado pertinente hacer que la pena impuesta se ejecute de otra forma. Luego, el plazo de prescripción de toda pena privativa de la libertad de tres años que puede ser convertida, deberá tener como referencia el plazo de prescripción de la pena conminada establecida originariamente en la condena. A veces este plazo de la pena privativa de la libertad, puede coincidir con el monto de la pena ya convertida (alternativa), con lo cual tal vez para algunos sería irrelevante cualquiera de los dos plazos. Sin embargo, sostengo que esto no es así, ya que la conversión a pena de multa no es nada más que una forma distinta de cómo se tiene que ejecutar la pena ya impuesta. En estos casos no sería correcto imponer el plazo de la pena ya convertida, pues se atentaría contra la regla del CP, esto es la pena conminada para el tipo penal, siendo irrelevante la superioridad o inferioridad del monto de la pena convertida.

3º Caso en el que se imponga una pena privativa de la libertad y se la convierta a una pena de prestación de servicios a la comunidad. Aquí remítase a la solución propuesta en el punto 2º por ser también aplicable.

4º Caso en el que se imponga una pena privativa de la libertad y se la convierta a una pena de limitación de días libres. La solución es la misma que se ha afirmado para el punto 2º.

5º Caso en el que se imponga la suspensión de la ejecución de la pena para un delito sancionado con una pena privativa de la libertad.

Este beneficio procesal que se concede al condenado implica una ficción de la ejecución de la pena impuesta; luego, el plazo a considerar para la prescripción comenzará a contarse a partir del momento de la revocación de dicho beneficio.

Los antecedentes de este criterio recogido en el tercer párrafo del art. 87 CP, se encuentran en:

El Proy. de CP (Oct. – Nov. 84) art. 85 in fine; el Proy. de CP (Ago. 85) art. 91 in fine; el Proy. de CP (Mar.- Abr. 86) art. 90 in fine; el Proy. de CP (Set. -1989) art. 89 tercer párrafo; el Proy. de CP (Jul. 90) art. 90 penúltimo párrafo; y el Proy. de CP (Ene. 1991) art. 87 penúltimo párrafo.

6º Caso en el que se imponga la reserva de fallo condenatorio para un delito sancionado con privativa de la libertad o multa.

Los legisladores y miembros de la comisión revisora del CP establecieron la ficción legal de considerar como dictada la pena (art. 87) para los casos en que se haya emitido la sentencia con reserva del fallo condenatorio. Esto conduce a afirmar que no es procedente la prescripción extraordinaria de la persecución penal. Lo que se pretende con dicha ficción es convalidar el plazo de cumplimiento de la pena efectiva que le correspondería cumplir si el fallo se hubiese emitido.

Entonces resulta coherente que el plazo de prescripción se inicie desde el momento de la revocación de este sustituto.

Si al sentenciado se le condena por un delito que tiene una pena privativa de la libertad como pena principal (sea que se trate de una norma que establezca como sanción, una pena unitaria, disyuntiva o conjunta), el plazo de prescripción será el de la pena conminada.

Las fuentes de este tercer párrafo del art. 87 del CP, referido a la reserva del fallo, son:

El Proy. de CP (Set. 89) art. 89 tercer párrafo; el Proy. de CP (Jul. 90) art. 90 penúltimo párrafo; y el Proy. de CP (Ene. 91) art. 87 penúltimo párrafo.

7º Caso en el que se imponga una pena de prestación de servicios a la comunidad, cuando la norma penal también establece como sanción una pena privativa de la libertad.

El plazo de prescripción de la pena impuesta estará determinado de acuerdo a la regla general. Por ende, de acuerdo con el sistema acogido, será válido para establecer el plazo de la prescripción de la persecución penal, el monto de la pena conminada, si es más grave, sea o no privativa de la libertad, p. ej.: el art. 110 del CP.

8º Caso en el que se imponga una pena privativa de la libertad, cuando la norma penal también establece como sanción una pena de prestación de servicios a la comunidad.

Para determinar el plazo de prescripción de la pena impuesta, se tendrá que ver cuál de ellas tiene el plazo mayor de prescripción, así, si la pena privativa de la libertad tiene un plazo menor que el de la pena de prestación de servicios a la comunidad, se aplicará la regla subsidiaria de las penas alternativas. Por ejemplo el art. 111 primer párrafo del CP que contempla la pena privativa de dos años o prestación de servicios a la comunidad, entonces el plazo de prescripción será el de la pena alternativa (tres años).

Por eso, sostengo que de *lege ferenda* se debe optar por el sistema de la condena impuesta, a fin de evitar todas estas injusticias.

9º Caso en el que se imponga una pena restrictiva de derechos. En este caso rige perfectamente la regla general.

10º Si se impone una pena privativa y una medida de seguridad, también se debe aplicar la regla general (véase lo señalado en el acápite siguiente).

La Corte Suprema ha establecido, mediante ejecutoria suprema⁴⁴⁵, alguna referencia a la prescripción de la pena accesoria, así se tienen los siguientes fundamentos:

“(...) Primero: Que, el impugnante en su recurso fundamentado de fojas cuarenta y cuatro, sostiene que la pena accesoria de inhabilitación por el plazo de un año sostiene que la pena accesoria de inhabilitación por el plazo de un año-que se le impuso, a la fecha habría prescrito, en razón de que la sentencia fue dictada con fecha veintiséis de julio de dos mil cinco. **"Tercero:** Que, la prescripción de la pena implica la imposibilidad jurídica de materializar la sanción penal impuesta al responsable de una infracción y la extinción, por tanto, de responsabilidad criminal adquirida (...) **Cuarto:** Que, en ese contexto, en el caso de autos, la sentencia que definió la situación jurídica del encausado quedó firme luego de expedida la Ejecutoria Suprema ya citada de fojas diecisiete, que la norma vigente al momento de los hechos fue la Ley número veintiséis mil trescientos catorce que duplica el plazo de prescripción en los delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos contra el patrimonio del Estado, y que la pena impuesta al sentenciado fue de dos años de pena privativa de libertad e inhabilitación por el término de un año, a la que se debe adicionar la duplicidad que prescribe el último párrafo del artículo ochenta del Código Penal, es de concluir que aún no se ha cumplido el plazo prescriptorio que alude el recurrente”, (pp. 2).

3. PRESCRIPCIÓN DE LA PENA DE MULTA.

La prescripción de la pena de multa⁴⁴⁶ como pena principal, permite distinguir dos casos:

- 1º Caso en el que se impuso una pena de multa vía resolución judicial, sin embargo ésta nunca empezó a cumplirse, entonces el inicio de la prescripción será a partir de la fecha en que la sentencia haya adquirido la condición de firme, si coincide con la fecha del inicio de su cumplimiento, de lo contrario a partir de la fecha en que debió dar o iniciar el cumplimiento a su obligación patrimonial⁴⁴⁷.
- 2º Caso en el que se impuso una pena de multa por cuotas y se estuvo cumpliendo, pero de pronto se interrumpe dicho cumplimiento (en doctrina se le llama ejecución iniciada), entonces la prescripción empezará a correr a partir del momento del quebrantamiento de la sentencia condenatoria (p. ej.: al día siguiente al de la fecha fijada para el pago de la cuota no cumplida).

⁴⁴⁵ Véase la Ejecutoria emitida en el R.N.Nº 89-2009, Apurímac, en el ANEXO 3, de esta investigación, específicamente el documento N° 72.

⁴⁴⁶ Manzanares (1983), pp. 225 y ss.

⁴⁴⁷ En España Serrano Butragueño considera que “el inicio del cómputo se refiere, pues, por un lado a la propia fecha del encabezamiento de la sentencia firme y no a la de notificación de la misma, ni a la notificación de la ejecutoria” (1996), pp. 225.

Muy interesante resultaba lo planteado por el Tribunal alemán de la ex-República Democrática⁴⁴⁸ al exigir que la ejecución de la multa se haga teniendo en cuenta los plazos prescriptorios, porque una vez alcanzada la prescripción, la multa no puede cobrarse.

4. PRESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD.

La medida de seguridad ha sido definida en la doctrina como “consecuencias jurídicas del delito, de naturaleza penal, fundadas en la peligrosidad criminal del sujeto y dirigidas a la realización de fines preventivo-especiales”⁴⁴⁹.

No faltarán quienes crean que por el hecho de que no figura expresamente en el CP regla alguna acerca de la prescripción de las medidas de seguridad, éstas son imprescriptibles.

En Argentina, VERA BARROS, influenciado por la doctrina italiana [cita a Gavier y envía a MANZINI (1950, p. 212)], afirma categóricamente que las medidas de seguridad son imprescriptibles, así sustenta su opinión en que “nuestra legislación penal nada ha previsto al respecto. No poseemos tampoco una sistematización de las medidas de seguridad en general”⁴⁵⁰.

Por su parte, FONTÁN BALESTRA, asumiendo un criterio mixto (de un lado legal y de otro material), sostiene que “tampoco prescriben las medidas de seguridad. Con criterio dogmático, porque la ley no las menciona. Tomando en cuenta la naturaleza de esas medidas, porque ellas se fundamentan en determinadas condiciones personales y su aplicación interesa mientras persistan tales condiciones; inversamente, desaparecidas las causales que motivaran la medida, ellas no se aplicarán, pero por esa razón, y no porque hayan prescrito”⁴⁵¹.

Creo que no hay obstáculo legal alguno que prohíba la prescripción de las medidas de seguridad. Además he considerado que lo que prescribe es la ejecución o cumplimiento de la sanción, sea pena o medida de seguridad. Sería curioso que la pena de cadena perpetua tenga un plazo de prescripción mientras que la medida de seguridad no. La prescripción es un derecho y no tiene porqué ser restringida, aun cuando se trate de una medida de seguridad.

Si se acude a criterios de “peligrosidad” con el fin de mantener la imprescriptibilidad de estas medidas, entonces los legisladores peruanos habrían caído en una contradicción a la hora de precisar el plazo tratándose de la cadena perpetua.

En la doctrina se desestima el criterio de peligrosidad, así TERRADILLOS BASOCO considera que “la peligrosidad, por consistir en un estado relativamente permanente y dinámico de la persona, no puede, al contrario que el delito - comportamiento concreto

⁴⁴⁸ Manzanares (1983), pp. 228.

⁴⁴⁹ Urruela (2009), pp. 4.

⁴⁵⁰ Vera (2007), p. 383.

⁴⁵¹ Fontán (s/f), pp. 449. En Colombia es contraria la opinión de Sandoval, E. (1983), *La prescripción de la pena en el nuevo código penal colombiano*, pp. 187 y ss.

enmarcable en el espacio y en el tiempo -, prescribir. Pero sí pueden hacerlo las medidas de seguridad”⁴⁵².

En el Perú se dieron propuestas en este sentido: el Proy. de CP (Set. 84), art. 108 segundo párrafo; el Proy. de CP (Oct. - Nov. 84), art. 78; y el Anteproy. de CP (2010), art. 88.

Si se trata de precisar en qué momento prescribe la medida de seguridad, tendrá que remitirse a la regla general de la prescripción de la ejecución de la sanción penal, con lo cual la prescripción se derivará del plazo que establece la pena conminada del delito por el cual se venía procesando (inimputable) o por el que se sentenció (imputable relativo) a la persona.

MAPELLI CAFFARENA por su parte ha señalado que cuando se trate de medidas de seguridad de aplicación sucesiva, el inicio del cómputo del plazo de prescripción será desde que “debió de iniciarse el cumplimiento”⁴⁵³ de la medida de seguridad.

Otro tema que amerita una reflexión es el caso en el que se impone una pena y una medida de seguridad, ya que el plazo de prescripción de la ejecución de la medida de seguridad siempre regirá cuando se haya extinguido la pena impuesta, así, una vez iniciada la ejecución de la medida de seguridad y se quebrante su ejecución, el plazo de prescripción empezará a correr desde este momento⁴⁵⁴.

Existe también el caso de la concurrencia entre una pena y una medida de seguridad⁴⁵⁵. Así se tiene:

1º La *interpretación de la aplicación conjunta*; por la cual se condena a una pena no privativa de la libertad (así p. ej.: si a **X** se le condenó a la pena de multa y a su vez a la medida de seguridad de tratamiento ambulatorio, según el art. 76 del CP); e incluso se tiene la posibilidad de la concurrencia entre penas de limitación de días libres o la de prestación de servicios a la comunidad con una medida de seguridad de tratamiento ambulatorio; en todos estos casos la prescripción de la ejecución se dará cuando haya transcurrido el plazo señalado para la correspondiente pena conminada, como un criterio supletorio. Cabe recordar que no hay regla expresa de prescripción de las medidas de seguridad.

2º La *interpretación de la aplicación diferida*, según la cual se condena a una pena privativa de la libertad y a una medida de seguridad privativa de la libertad (así p. ej.: si a **X** se le condenó a cinco años de pena privativa de la libertad y a 2 años de medidas de seguridad de internamiento, según los arts. 74 y 75 del CP), en estos casos se aplicará la

⁴⁵² Mapelli y Terradillos (1996), pp. 230.

⁴⁵³ Mapelli (2011), pp. 444.

⁴⁵⁴ Mapelli (2011), pp. 444.

⁴⁵⁵ Molina (1996), pp. 86.

pena privativa de la libertad antes o después que la medida (art. 77 del CP). En ambos casos la prescripción de la medida dependerá del plazo de la pena conminada⁴⁵⁶.

En torno al inicio de la prescripción resulta aplicable lo dispuesto para la prescripción de la ejecución de la pena.

Tal vez se crea que por el hecho de que no terminó el proceso en el caso de un inimputable se tenga que hablar de la prescripción de la persecución penal. No comparto esta idea, pues la medida de seguridad es una sanción y tratándose de la internación, ésta se ejecuta debido a que el proceso no puede terminar. De *lege ferenda* pienso que sí es acertado utilizar el plazo de prescripción de la persecución penal basado en la pena conminada; en cambio respecto del tratamiento ambulatorio, sería el de la pena por la cual se sentenció.

En el derecho comparado se ha entendido así, de allí que países como Colombia, Alemania, Bolivia y España lo hayan regulado (así también el Proyecto de código penal federal suizo de 1918).

La Constitución Política de Colombia regula en su art. 28 último párrafo, la prescripción de las medidas de seguridad, a pesar de que el código penal de dicho país no la menciona.

El Proyecto de CPF (Suizo de 1918) también reguló la prescripción de las medidas de seguridad de internamiento para delincuentes habituales en el artículo 100.

El Código Penal de Alemania también acogió la prescripción de las medidas de seguridad en el §79 (IV) de manera excepcional, pues la regla es que la ejecución de la medida de internamiento en un establecimiento de seguridad de carácter preventivo no prescribe, reservando los casos de prescripción sólo para los supuestos de vigilancia orientadora o el primer internamiento en un establecimiento de desintoxicación o de las restantes medidas de seguridad.

El Código Penal de Bolivia regula de manera expresa la institución de la prescripción de las medidas de seguridad en su art. 108 (Sanciones accesorias y medidas de seguridad) “*Las sanciones accesorias prescribirán en tres años, computados desde el día en que debían empezar a cumplirse, y las medidas de seguridad, cuando su aplicación, a criterio del juez y previo los informes pertinentes, sea innecesaria, por haberse comprobado la readaptación social del condenado*”.

El código penal de España de 1995 en su art. 135 se refiere a la prescripción de las medidas de seguridad y se precisa que lo que prescribe es «la posibilidad de *ejecutar* la medida, sin paralelo en la prescripción de su presupuesto, es decir, del estado peligroso

⁴⁵⁶ En España se ha optado por una interpretación distinta, empero a razón de que el nuevo código penal español lo regula expresamente en su art. 135.3, así Terradillos Basoco, afirma que “En los casos en que el cumplimiento de la medida de seguridad sigue al de la pena, el plazo de prescripción se computará desde la extinción de ésta (art. 135.3)” Mapelli y Terradillos (1996), pp. 230; sin embargo no está demás recordar que para este autor la pena a considerar es la *impuesta*.

(como ocurre con la prescripción de los delitos). Ello se explica recordando que los únicos estados peligrosos que fundamentan medidas de seguridad son post-delictuales (art. 95.1. ª), es decir manifestados en una comisión previa de un hecho delictivo, a cuyos plazos de prescripción específicos hay que remitirse»⁴⁵⁷. Según el artículo 135, se dispone diversos plazos considerando las escalas establecidas para las penas privativas de la libertad. Establece también este código que el inicio de la prescripción será desde que la resolución que impuso la medida sea firme, y tratándose del caso del cumplimiento sucesivo, desde el momento en que debió empezar a cumplirse. Otro caso es el de la medida de seguridad impuesta con posterioridad a la pena, en este caso, el plazo de prescripción de la medida empezará a computarse a partir de la extinción de la pena.

5. COMENTARIO A LA PARTE FINAL DEL ART. 99 DE LA CONSTITUCIÓN DE 1993: ¿PLAZO DE CADUCIDAD O DE PRESCRIPCIÓN?

Es necesario plantearse las siguientes interrogantes:

¿Qué sucede si a un ex-Presidente no se le acusa por algún delito durante el ejercicio de su función dentro de los cinco años que prevé el art. 99 de la Constitución? y ¿este plazo es de prescripción o de caducidad?

Antes de responder se hacen dos precisiones:

- 1º Salvo los demás funcionarios que señala el art. 99 de la Constitución, el caso del Presidente de la República es privilegiado pues sólo puede ser acusado (en el sentido del procedimiento de acusación constitucional) luego de haber terminado su mandato, excepto que se trate de los casos señalados en el artículo 117 de la Constitución. Pero, es distinto el caso de delitos comunes en que basta la comunicación al Congreso durante el mandato, sea quien sea el funcionario que lo haya cometido.
- 2º Respecto del término “acusado” pienso que se refiere a la obtención del requisito de procedibilidad (pues éste se consolida cuando la acusación constitucional ha sido aprobada por el pleno del Congreso). Así el Fiscal de la Nación se obliga a denunciar en los términos en que se aprobó la acusación constitucional, empero una vez que se inició el proceso, tanto los vocales supremos como el Fiscal de la Nación son totalmente autónomos.

A las interrogantes formuladas se dará respuesta a continuación:

- i) El antejuicio⁴⁵⁸ es para todos los delitos cometidos en el ejercicio de la función, sean flagrantes o no. Sin embargo, cuando sean flagrantes se puede solicitar de manera inmediata el levantamiento de las inmunidades contra el arresto y proceso (art. 16 del Reglamento del Congreso).

⁴⁵⁷ López D. y García M. (1996), pp. 84.

⁴⁵⁸ Una explicación interesante véase Paniagua, V. (1995) ¿Acusación Constitucional, antejuicio o juicio político?, pp. 125-138.

- ii) Cuando se trate de delitos comunes, sean estos flagrantes o no, pero no cometidos en el ejercicio de sus funciones, se precisa que no será necesario el antejuicio, sino que bastará la solicitud que realice el juez penal a la Comisión Permanente, pues este tipo de delitos no tienen el privilegio de la inmunidad.

No pienso que se trate de un plazo de prescripción penal, pues sería incongruente de un lado, que se realicen delitos de función sobre bienes del Estado por cualquiera de los funcionarios que consigna el art. 99 de la Constitución, y que tengan un plazo de prescripción excesivamente ínfimo, e incluso menor al de cualquier otro delito que se haya cometido. Por otro lado, tratándose de otros funcionarios que realicen las mismas conductas, pero que no tengan el beneficio del antejuicio, el plazo de prescripción sería el doble del injusto penal que se le pretende atribuir, lo que desde mi posición sería absolutamente incorrecto.

Si se tratara de un plazo de prescripción se tendría que responder que éste es un privilegio exagerado y que atenta contra el principio de igualdad, pues, ¿cómo es posible que los funcionarios que cometan delitos de función sean privilegiados de esta manera? Con ello se daría una situación de inmunidad exagerada, la que, en resumen, sería contrario al art. 41 in fine de la Constitución de 1993 en concordancia con el art. 80 in fine del CP.

Por ende, sostengo que se trata de un plazo de caducidad, por los siguientes fundamentos:

- 1º El plazo se refiere a un requisito de procedibilidad a examinar en el procedimiento extrapenal del Control político⁴⁵⁹.
- 2º Quien declara la caducidad es el Congreso. Este mismo será el encargado de emitirla. Por lo cual, resulta criticable que los congresistas actúen como juez y parte. Más grave aún sería la situación si se tratara de un congresista que tiene el apoyo de la mayoría en el Congreso, y en el caso de otros funcionarios de la misma tendencia política.

Político criminalmente esto es injustificable, ya que se fomenta la impunidad para todo aquél que por este período realizó un injusto penal, vulnerándose el principio de igualdad de todo estado de derecho democrático, pues no se aplica el tratar de igual a los iguales, y desigual a los desiguales.

- 3º Todo requisito de procedibilidad debe ser analizado y regirse por las reglas del proceso extrapenal. El proceso de acusación constitucional se regirá por el art. 16 y 89 del Reglamento del Congreso y en concordancia con el art. 99 y 100 de la Constitución.

Sin embargo, si bien los efectos prácticos aparentemente serían los mismos, en el caso de ser un plazo de prescripción tendría el funcionario beneficiado el derecho a renunciar, en cambio si se tratara de un plazo de caducidad, esta renuncia no sería posible.

⁴⁵⁹ Es preciso de *lege ferenda* una disposición por la cual el proceso penal respetará la cosa juzgada o decidida (en otros procesos extrapenales).

Por consiguiente, se trata de un plazo de caducidad que al cumplirse indirectamente deja inoperante a toda persecución penal, sin embargo en la práctica tanto el Tribunal Constitucional como la Corte Suprema han considerado a este procedimiento como un supuesto de suspensión de la prescripción de la persecución penal, y a ella, ya se ha hecho referencia al momento de desarrollar los supuestos de suspensión, así por ejemplo se tiene el caso de la Congresista Chacón.

6. EL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS.

Como se sabe, la Constitución de 1993 introdujo en su art. 41 in fine la duplicación del plazo de prescripción cuando los funcionarios o servidores públicos cometan delitos contra el patrimonio del Estado.

Resulta interesante recordar lo dispuesto en el art. 112 del Anteproy. de CP (1900-1902) que señala: *«No correrá el término de la prescripción cuando la ley prohíba ejercer la acción penal contra funcionarios públicos por tiempo determinado»*.

De la misma forma, el art. 119 del CP (1924) aumentaba en una mitad el plazo de prescripción, tratándose de delitos en agravio del Estado. Luego se tuvo la tristemente célebre experiencia de lo dispuesto por el D.L. N° 25662⁴⁶⁰ en su art. 1 que ordenaba la duplicación del plazo máximo de la pena conminada tratándose de delitos cometidos por miembros de la Policía Nacional en actividad y del cincuenta por ciento para sus miembros retirados, rezago de una pura responsabilidad objetiva. Todo lo cual desembocó en la modificación del art. 80 in fine del CP, a fin de adecuarse al art. 41 de la Constitución.

En principio creo que esta disposición del CP es inadecuada, debido a que se basa en la condición de la persona respecto a la afectación del patrimonio del Estado. A continuación expreso los siguientes fundamentos:

- 1° Hoy en día el patrimonio del Estado se ha reducido notablemente, debido al proceso de privatización, realizado por la dictadura de los noventa;
- 2° ¿Por qué el bien jurídico patrimonio del Estado recibe un tratamiento privilegiado en relación a otros bienes jurídicos? Si, por ejemplo, un funcionario ordena la comisión de un homicidio o un secuestro, o cualquier otro delito común, en donde se lesionan bienes jurídicos personalísimos, aquí regirán las reglas de prescripción comunes, es decir no habrá duplicación de plazos.
- 3° Tal y como se ha hecho referencia al art. 99 de la Constitución, a los funcionarios públicos aforados no se les podría aplicar tan fácilmente lo dispuesto en el art. 41 de la Constitución, debido a que ellos cuentan con inmunidad parlamentaria, y el plazo que consigna el art. 99 es de caducidad como arriba se ha expresado (requisito de procedibilidad), de allí que en este caso se recurre a la suspensión del plazo de prescripción a fin de evitar la prescripción y hasta la caducidad, este fue el supuesto del

⁴⁶⁰ Derogado por Ley N° 26758 (publicada el 14 de marzo de 1997).

caso del excongresista Carlos Raffo, quien apenas terminó su mandato pudo ser sentenciado o el actual caso de Congresista Cecilia Chacón, quién tiene que someterse al proceso penal, aunque lo curioso es que en ambos casos estaban fuera de los alcances del art. 99.

- 4° El concepto de funcionario o servidor público, debido a la restructuración del Estado, tiene que redefinirse, pues no existe claridad en algunos casos⁴⁶¹, así el art. 425 del CP resulta demasiado genérico e impreciso, siendo necesario incluir en la redefinición el caso de los particulares que desarrollan labor de actividad empresarial privada con consecuencias sociales, así por ejemplo el caso de los administradores de AFP para los casos de peculado por extensión.
- 5° También señalo que referirse a «todo delito contra el patrimonio del Estado» o a «organismos sostenidos por éste» resulta difuso, debido a que el patrimonio del Estado se puede afectar de distintas maneras a través de un delito común o por un delito de función. Sin embargo, este segundo caso es más difícil que se produzca, ya que el plazo de prescripción dependerá del delito que se cometió por parte del funcionario o servidor público, y el incremento adicional del objeto material sobre el cual recae la conducta punible y no el bien jurídico en sí, así por ejemplo el caso del delito de peculado, concusión, enriquecimiento ilícito, colusión desleal, etcétera, aunque la formula del art. 41 es discutible por los supuestos que contiene, sin embargo ayudó mucho a la lucha contra la corrupción, sin embargo tal vez que mejorar la fórmula para comprender a los extraneus que fácilmente se libran del sistema con el beneficio mal habido correspondiente.

Por todo esto, considero de *lege ferenda* debiera modificarse sus supuestos para comprender a los familiares extraneus de los autores o coautores y no recurrir a las fórmulas del lavado de activos o en todo caso dejar que este sea el recurso final, es el caso de delitos tales como el enriquecimiento ilícito, colusión desleal y otros.

La jurisprudencia respecto a la prescripción en delitos cometidos en agravio del Estado⁴⁶²:

1. El término para computar la prescripción de los delitos en agravio del Estado de acuerdo con la parte final del Artículo. 119 del Código penal, tiene que computarse considerando el término normal como de 7 años y medio, más una mitad que da un resultado de 11 años y 3 meses (Ej. Supr. del 05 de Julio de 1985. N. Leg. N° 140-141. p. 260).

⁴⁶¹ El concepto penal de funcionario o servidor público lo encontramos en el art. 425 del CP, pero hasta ahora no es pacífica su interpretación, más aún a raíz de su modificación por Ley N° 26713 (art. 1) que redefine su numeral 3 ante lo cual se plantea la interrogante ¿esta modificación amplía o restringe el contenido del concepto funcionario o servidor público?

La jurisprudencia respecto a la agravación por la condición de ser miembro de la Policía Nacional por D. Ley 25662:

1. Constituye agravante en la comisión del delito la circunstancia de que el autor sea miembro de la Policía Nacional-General, por haber sido nombrado para proteger a la sociedad (Ej. Suprema del 02 de mayo de 1990, Exp. N° 477-90 Arequipa).

En la actualidad esta regla de la duplicidad se ha venido aplicándose de manera muy discutida o contingente, sobretodo en relación con la prescripción extraordinaria, así los magistrados han optado por diversos criterios, no únicos por cierto. Al respecto se señalan algunos casos:

- 1° Se aplica la duplicidad de la pena privativa de la libertad, y luego se incrementa el cincuenta por cierto del plazo establecido por la prescripción extraordinaria.
- 2° Se aplica la duplicidad de la pena distinta a la privativa de la libertad, y luego se incrementa el cincuenta por cierto del plazo establecido por la prescripción extraordinaria.
- 3° Se aplica la duplicidad de la pena en los casos de penas conjuntas principales en el extremo de la más grave (sea o no privativa de la libertad), y luego se incrementa el cincuenta por cierto del plazo establecido por la prescripción extraordinaria.
- 4° Se aplica la duplicidad de la pena en los casos de penas alternativas en el extremo más grave de la pena privativa de la libertad o de penas distintas a la privativa de la libertad donde se tiene un plazo legal establecido (sea privativa de la libertad o no correspondientemente), y luego se incrementa el cincuenta por cierto del plazo establecido por la prescripción extraordinaria; y,
- 5° Se aplica la duplicidad de la pena en los casos de penas conjuntas, esto es entre una principal y una accesoria, considerando el extremo de la más grave o el plazo legal establecido (sea privativa de la libertad o no correspondientemente), y luego se incrementa el cincuenta por cierto del plazo establecido por la prescripción extraordinaria.

Algunos magistrados optaron por aplicar la duplicidad de manera diferente, pues primero consideraron el plazo de la prescripción ordinaria o de plazo especial (cualquiera sea la pena), y luego le incrementaron el plazo establecido para la prescripción extraordinaria, procediendo después a la duplicidad (un ejemplo de esto se aprecia en lo

⁴⁶² Como se aprecia esta ejecutoria se refiere a la prescripción ordinaria a la cual no necesariamente se le agrega el plazo de la prescripción extraordinaria, sino únicamente el plazo de prescripción que se señala para delitos en agravio del Estado.

resuelto en el recurso de nulidad N° 3443-2001, donde se tomó como referencia la pena distinta a la privativa de la libertad por tener un plazo mayor, luego se le incrementó la mitad de dicho plazo previo, y finalmente se duplicó).

La aplicación indiscriminada de la duplicidad del plazo de prescripción desde la perspectiva penal, puede ser tomado como un caso de responsabilidad objetiva per se, razón por la cual es necesario limitar dicha aplicación, ello considerando que la racionalidad de una norma penal debe tratar de desperjuiciarse de la coyuntura. Es la racionalidad lo que hace posible que una norma pueda resistir el paso de cierto tiempo en su vigencia, por ende hay que desterrar los criterios de responsabilidad penal objetiva, ya que son más fáciles de manipular, ergo se debe excluir toda referencia a la coyuntura en el momento que se aplique la duplicidad del plazo de prescripción.

El primer caso que planteó la discusión de aplicar el plazo de prescripción ampliado de la persecución penal considerando la consecuencia de la circunstancia agravante regulada en el art. 46-A, a los no funcionarios o no servidores públicos, se suscitó en el proceso contra Andrónico Luksic Craig⁴⁶³, pues se consideró que al imputarse el delito de tráfico de influencias en calidad de instigador, y habiéndose creado una circunstancia agravante para funcionarios y servidores públicos, dicha modificación del monto de pena conminada posibilitaba el incremento del plazo de prescripción de la persecución penal para los particulares, sin embargo se resolvió declarando prescrita la persecución penal.

A continuación se citan los argumentos más relevantes esgrimidos al momento de resolverse definitivamente este proceso en torno a la prescripción:

“Segundo: (...) que a continuación, la aludida sentencia, expresa su discrepancia con la ejecutoria suprema del veintisiete de abril del dos mil cinco precisando que:
a) el delito de tráfico de influencias del artículo cuatrocientos del Código Penal es un delito común y que la agravante del artículo cuarenta y seis –A del citado

⁴⁶³ En el expediente N° 4166-2004, llevado ante la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, vía recurso de nulidad, el cual se interpuso ante la resolución de primera instancia emitida por la Sala Penal Especial A (de fecha 07 de diciembre de 2004) que declaró infundada la excepción de prescripción deducida por el encausado Andrónico Mariano Luksic Craig (y por efecto extensivo los encausados Gonzalo Menéndez Duque y Luis Fernando Pacheco Novoa), al mismo que se le imputaba ser instigador del delito de tráfico de influencias, por lo que por mayoría a excepción del voto del Magistrado Robinson Gonzáles Campos declararon no haber nulidad de la resolución de la Sala Penal Especial A de la Corte Suprema, ante esto el encausado interpone su acción de habeas corpus, el mismo que en el juzgado se le declara infundado el proceso constitucional de habeas corpus (06 de octubre del 2005), luego el mismo encausado interpone su recurso de apelación ante la Sexta Sala Penal con Reos Libres, la misma que revocando la sentencia, **“REFORMANDOLA: DECLARARON FUNDADO el proceso constitucional de habeas corpus interpuesto... consecuentemente: NULA la resolución de fecha veintisiete de abril del dos mil cinco...MANDARON:** Que se emita nuevo pronunciamiento teniendo en consideración lo expuesto por este órgano jurisdiccional que, en el presente asunto, actúa como órgano o instancia constitucional; **ORDENARON:** Se remita copias de la presente a los órganos de control respectivos del Poder Judicial y Ministerio Público” (31 de octubre del 2005), por lo cual se remitieron los autos a la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, la misma que emitió su ejecutoria suprema del 27 de enero del 2006 donde **“DECLARARON: HABER NULIDAD en la resolución...fecha siete de diciembre del dos mil cuatro, que declara infundada la excepción de prescripción deducida por el imputado Andrónico Mariano Luksic Craig... y, reformándola,** declararon: FUNDADA dicho medio de defensa deducido a favor de **Andrónico Mariano Luksic Craig**, en consecuencia, **PRESCRITA LA ACCIÓN PENAL** incoada contra el antes citado”. Véase en el ANEXO 3, de esta investigación, específicamente en el documento N° 38, las anteriores resoluciones relevantes sobre este caso se encuentran en el ANEXO N° 8 de esta investigación.

Código se aplica a todo aquel que se aprovecha de su condición especial de funcionario público para cometer el delito, con lo que tal agravante debe aplicarse sólo al autor o partícipe que tenga calidad de funcionario público, condición ajena al encausado Luksic Craig (considerando octavo); **b)** que por lo anterior no puede aplicarse al citado encausado al referida agravante del artículo cuarenta y seis- A para el cómputo del plazo de prescripción, porque de lo contrario se violaría el principio de incomunicabilidad del artículo veintiséis del Código Penal, el principio de legalidad penal, se asumiría una interpretación in malam partem, contrario al principio “Favor rei”(considerando noveno) y se violaría el principio de culpabilidad al extenderse “la condición gravosa de la pena respecto del autor a los partícipes del delito, sin tomar en cuenta que la responsabilidad es por el hecho”(considerando décimo), razones por las cuales la sentencia de habeas corpus entiende que la prescripción extraordinaria opera para el procesado Luksic Craig a los seis años necesariamente (...) ;c) por otra parte, la sentencia indica que conforme a la doctrina “el delito de tráfico de influencias es de comisión instantánea” y que “no requiere la consumación de la influencia para que se tipifique el delito, el cual se produjo por parte de los acusados Andrónico Luksic y Montesinos Torres con sólo la entrevista realizada por ambos el seis de marzo de mil novecientos noventa y ocho”, por lo que la prescripción debería computarse desde esa fecha y no desde el momento en que la empresa Lucchetti obtuvo la licencia de funcionamiento por parte de la Municipalidad de Chorrillos, es decir desde el veintinueve de diciembre del año mil novecientos noventa y ocho (considerando décimo) (...)”, pp. 1, 2 y 3.

“**Tercero:** (...) señalando además que “la sentencia que ordena la realización de una prestación de dar, hacer o no hacer”, como en este caso en que se ordena dictar nueva resolución, “es de actuación inmediata”, razón por la cual no corresponde en este caso cuestionar el sentido de la sentencia de hábeas corpus sino ejecutarla y en consecuencia asumir que la acción penal incoada contra el procesado Andrónico Luksic Craig ha prescrito y por tanto se ha extinguido la acción penal desde el seis de marzo del año dos mil cuatro (...)”, pp. 3.

“**Quinto:** Que además, si bien a través de la presente ejecutoria se da cumplimiento a lo ordenado en la misma, ello no es óbice para que este Supremo Tribunal, por mayoría...exprese que no comparte el criterio asumido por el órgano constitucional en cuanto se refiere a la aplicación de la agravante contenida en el artículo cuarentiséis – «A»,...; es decir, el Órgano Constitucional entiende que no es aplicable al caso concreto el artículo cuarentiseis «A» por la calidad del agente – los procesados no son funcionarios públicos-lo que, contrario sensu, posibilitaría la aplicación del citado artículo para los efectos del cómputo de los plazos prescriptivos de concurrir dicha calidad en el agente, sin embargo, consideramos que tal interpretación no es correcta habida cuenta que el artículo cuarentiseis «A» se encuentra vinculado a la determinación judicial de la pena, es decir, a la individualización que hace el juez de la pena concreta a imponerse al condenado en la sentencia, ello en virtud de los siguientes argumentos: a) aceptar que la agravante genérica descrita en el artículo cuarenta y seis “A” del Código Penal influye en la determinación de los plazos de prescripción, conduciría a

admitir que todas las agravaciones y atenuaciones, previstas en la ley penal...; b) de extender los efectos de la agravante genérica antes descrita se afectaría **el principio de seguridad jurídica**, (...) en virtud del cual la predecibilidad de las conductas (en especial, la de los poderes públicos) frente a los supuestos previamente determinados por el Derecho, es la garantía que informa a todo el ordenamiento jurídico...c) calcular el plazo de la prescripción tomando como objeto de referencia la agravante genérica del artículo cuarenta y seis “A” del Código Penal atenta también contra **el principio de legalidad penal sustantiva**, en tanto la determinación del plazo de prescripción se funda en la pena previamente determinada por el legislador (pena abstracta), y no en una circunstancia accidental del delito”, pp. 4, 5 y 6.

“Sexto: Que, en cuanto al efecto extensivo del pronunciamiento emitido a través de esta resolución, solicitado por los co-procesados de Luksic Craig, Luis Fernando Pacheco Novoa y Gonzalo Menéndez Duque, no resulta al caso admitir esta pretensión, debido a que esta Sala no se encuentra procesalmente habilitada para atender dicho pedido, dado que la pretensión es ajena al grado y al recurrente Luksic Craig (pues en la presente este Supremo Tribunal actúa como órgano ejecutor); debiendo, en todo caso, el Tribunal Superior, en su oportunidad, pronunciarse sobre la situación jurídica de ambos procesados (...)”, pp. 6.

Otro caso que luego presentaría el mismo problema, pero esta vez no para un instigador, sino para un cómplice primario del delito de tráfico de influencias, fue el de Manuel Hugo Delgado Parker, vía R.N. N° 3786-2005, resuelto mediante ejecutoria suprema del 26 de julio de 2007⁴⁶⁴ por el que se declaró prescrita la acción penal por prescripción extraordinaria, a continuación se citan los principales considerandos:

“Quinto: (...) y el plazo de prescripción en el caso de los delitos instantáneos - como es el de tráfico de influencias comienza a computarse a partir del día en que éstos se consumaron; que respecto a la aplicabilidad del artículo cuarenta y seis guion A del Código Penal, cabe precisar que si bien constituye una circunstancia agravante de la responsabilidad penal (aplicable cuando el autor se aprovecha de su condición de miembro de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, autoridad, funcionario o servidor público para cometer un hecho punible), sin embargo, el incremento de la pena por dicha circunstancia -aumento de la pena hasta un tercio por encima del máximo legal- es de carácter facultativo -el juez puede, por razones que debe explicitar, no imponerla o imponerla en menor grado- y no imperativo, lo que se colige de la expresión “podrá aumentar la pena hasta en un tercio por encima del máximo legal”; que, además, dicha circunstancia agravante es aplicable no cuando se verifica que el autor tiene la condición especial exigida en la ley, sino cuando se comprueba que se aprovechó o prevaleció de dicha condición para cometer un delito, lo que corresponde establecerse en una resolución final de fondo, por lo que anticipar su concurrencia para otorgarle efectos sobre la prescripción de la acción penal implicaría transgredir el principio de presunción de inocencia -en tanto implica un trato de condenado a quien aún esté siendo

⁴⁶⁴ Véase el ANEXO N° 8 de este trabajo donde se ha consignado la ejecutoria completa.

procesado-; que, asimismo, los efectos agravantes -modificativos del máximo legal- de esta circunstancia deben sopesarse con las demás circunstancias atenuantes -modificativas del mínimo legal- previstas en la ley, cuya efectiva concurrencia corresponde verificarse cuando se determina la pena en la sentencia que pone fin a la instancia; que, por ende, partiendo de que el artículo cuarenta y seis guion A del Código Penal no afecta los plazos de prescripción de la acción penal incoada contra el autor, menos se puede tomar en cuenta para ampliar los términos prescriptorios que corresponden al partícipe (al cómplice Manuel Hugo Delgado Parker); que, en tal sentido, si se toma en cuenta el tiempo transcurrido desde la comisión del hecho punible -esto es, el veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y nueve- y la pena privativa de libertad prevista para el delito de tráfico de influencias -no menor de dos ni mayor de cuatro años, conforme al artículo cuatrocientos del Código Penal (texto original)-, se infiere que el plazo extraordinario de prescripción a la fecha se encuentra vencido con relación al encausado Manuel Hugo Delgado Parker.

Sexto: Que, respecto a la excepción de prescripción deducida por los abogados defensores de los encausados Montesinos Torres y Schütz Landázuri o Schütz Mertz, se observa que el comportamiento imputado a los citados encausados configura un concurso ideal de delitos al presentarse, en una unidad de acción, los elementos típicos de los delitos de asociación ilícita para delinquir y tráfico de influencias (ver tercer fundamento); que tal como lo precisa el párrafo tercero del artículo ochenta del Código Penal, tratándose de estos supuestos el plazo de prescripción se contabiliza en función de las penas conminadas para el delito más grave, que en este caso es el de asociación ilícita para delinquir; que, en tal sentido, al tomar en cuenta el tiempo transcurrido desde la comisión del evento delictivo -esto es, el veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y nueve- y la pena privativa de libertad prevista para el delito de asociación ilícita para delinquir -no menor de tres ni mayor de seis, conforme al artículo trescientos diecisiete del Código Penal-, cabe inferir que el plazo extraordinario de prescripción a la fecha no se encuentra vencido; que si bien la acusación fiscal señala que se configura un concurso real de delitos, debe entenderse que se refiere al que existe entre los delitos de asociación ilícita para delinquir y peculado, en tanto la entrega del dinero del Estado del encausado Montesinos Torres al encausado Schütz Landázuri o Schütz Mertz se produjo una vez conformada la organización delictiva, como parte de los acuerdos adoptados; que a mayor abundamiento fluye de autos que el encausado Schütz Landázuri o Schütz Mertz tiene la calidad de reo contumaz, por lo que se ordenó la suspensión de los términos prescriptorios de la acción penal instaurada en su contra (...)."

Esta discusión incluso obligó a que la Corte Suprema aprobara el **Acuerdo Plenario N° 8-2009/CJ-116**, por el cual se estableciera que si bien se incrementó el monto de pena conminada consignada para la circunstancia agravante que regula el art. 46-A, ello no implica que se debe también incrementar el plazo de prescripción, al menos ésta fue la posición que la mayoría adoptó, pues hubo una minoría que sí opinó por la extensión de dicho plazo de prescripción.

A continuación se señalan las dos posturas, primero la conclusión de la mayoría y luego la de la minoría:

“12°. En este sentido, la circunstancia prevista en el artículo 46°-A CP viene a ser una agravante genérica del delito por la condición del sujeto activo –funcionario público- y, como tal, se trata de un elemento accidental dentro de la estructura del delito, que influye en la determinación judicial de la pena –pena concreta-, mas no en la pena abstracta. Su carácter accidental implica que no constituye el injusto ni la responsabilidad del sujeto. Por eso hay que diferenciarla de aquellas circunstancias que han pasado a formar parte del injusto del respectivo delito. Sin duda, el artículo 46°-A CP prevé un incremento punitivo que mira las especiales calidades del sujeto activo de la conducta típica y antijurídica, a quien se ha investido de especiales deberes de lealtad para con la organización social, lo cual implica un mayor desvalor de acción, que se traduce, al mismo tiempo, en un más elevado desvalor de resultado. Empero, tal incremento punitivo sólo se expresa al momento de la determinación de la pena por el Juez, específicamente cuando corresponde verificar la presencia de circunstancias que concurren al caso concreto. De modo que el incremento de pena que implica dicha agravante no puede ser adicionado para efectos de determinar el plazo de prescripción de la acción penal. Por tanto, el único momento donde puede estar justificado su análisis e injerencia es al determinar judicialmente la pena” (postura mayoritaria).

Los jueces supremos César San Martín, Víctor Prado Saldarriaga y Hugo Príncipe Trujillo⁴⁶⁵ sustentaron la postura minoritaria:

“3° (...) Por consiguiente, no puede haber pena concreta posterior que difiera de los límites precedentes de una pena conminada o básica. El juez sólo puede evaluar y aplicar procesalmente la pena que la ley considera (en abstracto) como posibilidad cierta y previamente regulada para el caso global imputado (delito y circunstancias). En tal sentido, si la posibilidad de extensión de la pena se amplía por las circunstancias agravantes calificadas también debe ampliarse el plazo de persecución del delito circunstanciado cometido. Siendo así, resulta coherente y legal sostener que la presencia formal en la imputación de las circunstancias agravantes del artículo 46°-A CP crea un nuevo marco penal abstracto o conminado cuyo extremo máximo corresponde a un tercio por encima del máximo de la pena fijada para el delito imputado. Por tanto, para determinar la prescripción de la acción penal en tales supuestos deberá tomarse también como base ese nuevo marco punitivo abstracto o conminado.

Ahora bien, será menester exigir que el Fiscal en su denuncia o acusación escrita refiera expresamente que le son también imputadas al procesado las circunstancias del artículo 46°-A CP, para que el juez evalúe, en tales casos, la prescripción de la acción penal en función a los efectos que aquellas producen en la pena conminada del delito.

⁴⁶⁵ Véase el voto singular a partir de la página 9 del **Acuerdo Plenario N° 8-2009/CJ-116**, consignado en el ANEXO 4, de esta investigación, específicamente en el documento N° 3.

4°. Por otro lado, es del caso reiterar que similares razonamientos corresponde al artículo 49° *in fine* CP. Ambas circunstancias agravantes, por la manera como han sido reguladas por el legislador, han creado un nuevo marco penal abstracto -la pena abstracta o conminada en estos casos corresponde a un tercio por encima del máximo de la pena fijada para el delito imputado- o del delito más grave en el delito masa cuando los actos realizados por el agente fueran de diferente naturaleza”.

El hecho de que los procesados por criminalidad organizada, criminalidad mediana o mínima, o los casos de corrupción o de delitos contra la administración pública en general como una variante de la criminalidad organizada, hayan salido bien librados del sistema penal, no con una sentencia considerando su culpabilidad o inocencia, y no por medio de un auto de juzgado, sala o vía ejecutoria penal, no es atribuible al instituto de la prescripción penal, pues el argumento no es circular, sino que esta recurrencia es por la debilidad e incoherencia del sistema penal de manera integral, no solo en el plano normativo y teórico doctrinal (como un mero problema de posturas o de interpretaciones), sino en los otros planos de aplicación y ejecución, y sobretodo de política criminal, es decir que el Estado asuma la responsabilidad al no aprovechar las experiencias acumuladas a lo largo de la primera década del siglo XXI vía la dinámica de los procesos contra la corrupción en sentido amplio y en algunos casos hasta la seguridad ciudadana.

Por ello, el replanteamiento de las reglas de la prescripción penal no bastan para luchar contra las diversas modalidades de criminalidad, simple u organizada, hoy en día, ya que se requiere una decisión política o una política de estado orientada por la Política Criminal y no puramente Penal o de represión pura, para poder replantear el sistema penal, de lo contrario se seguirán investigando parcelas del problema, posturas meramente terrenales como los cuellos de botella, las coyunturas del desprestigio, o se establecerá y legitimará el desenvolvimiento de un estado que en apariencias realiza o trata de resolver los problemas de criminalidad, cuando lo que realmente el sistema necesita es un enfoque holístico de la criminalidad en todas sus variantes dentro de un orden global, con la redefinición de las agencias de control social en general, pues la delincuencia no es un problema solamente jurídico.

Otra de las vertientes contempladas por la Corte Suprema en diversas ejecutorias⁴⁶⁶ ha sido el establecer una interpretación restrictiva de los alcances de la duplicación del plazo de prescripción para funcionarios y servidores públicos regulados en el art. 80 *in fine*.

A continuación se aprecian los fundamentos más relevantes:

“ (...) **Sexto:** Que, los hechos imputados habrían sucedido durante el año mil novecientos noventa y siete, siendo la última con fecha veintidós de diciembre del año referido; en ese sentido, conteniendo el delito de cohecho activo específico la

⁴⁶⁶ Véase la Ejecutoria expedida por la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema en el R.N. N° 939-2009, Lima, resuelta por unanimidad, en el ANEXO 3, de esta investigación, específicamente en el documento N° 25, en igual sentido véase la Ejecutoria emitida en el R.N. N° 4833-2007, en Ucayali M; la Ejecutoria vía R.N. N° 1587-2010, Arequipa, resuelto el 2011 y la Ejecutoria emitida en el R.N. N° 238-2009, Puno, resuelta el 2010, en el ANEXO 3, de esta investigación, específicamente en los documentos N° 28, 29 y 35.

pena abstracta máxima de ocho años de pena privativa de la libertad (artículo trescientos noventa y ocho del Código Penal modificado por la Ley número veintiséis mil seiscientos cuarenta y tres, vigente al momento de sucedidos los hechos), ha operado la prescripción ordinaria y extraordinaria del ejercicio de la acción penal, pues para que se configure la última, conforme al artículo ochenta y tres, in fine, del Código Penal, se necesitaría el lapso de doce años, plazo que ha sido satisfecho, no siendo aplicable lo establecido en el artículo ochenta, in fine, por cuanto, la duplicidad establecida se corresponde con supuestos en los que las funciones o roles de los servidores o funcionarios públicos están ligados directamente con el manejo de dinero u otros bienes patrimoniales del Estado, tales como peculado y malversación de fondos...**HABER NULIDAD** en la sentencia...que condenó a Vladimiro Montesinos Torres como autor del delito contra la Administración Pública-en la modalidad de cohecho activo agravado (...) **REFORMÁNDOLA** declararon de oficio prescrita la acción penal a favor del imputado Vladimiro Montesinos Torres por el delito contra la Administración Pública (...).”

Aunque a nivel distrital se llevó a cabo el **II Pleno Jurisdiccional Distrital** 2009 en la Ciudad de Ica⁴⁶⁷, por el cual se optó de entre varias posiciones, la siguiente:

“En caso de delitos cometidos por Funcionarios Públicos contra el patrimonio del Estado, conforme lo establece la norma pertinente de la Constitución y el artículo 83° del Código Penal, el plazo ordinario de prescripción es el mismo fijado por la ley por el delito y cuando se alude al plazo extraordinario, este debe ser estimado no en función al último párrafo del precitado artículo 83°, que establece la sumatoria de la mitad del término ordinario, sino, el doble de dicho plazo, ya que de lo contrario se estaría afectando el principio de favorabilidad que asiste al reo, además, que de asumirse una posición distinta se estaría generando un plazo especial y por ende ya extraordinario sobre los extraordinarios existentes. Ya la Constitución fija un plazo extraordinario para ese tipo de delitos”.

En otras ejecutorias⁴⁶⁸ la misma Corte Suprema ha aplicado la duplicidad de plazos dispuesto por la Constitución y el CP, para lo cual se ha valido de la regla penal señalada en el art. 80 in fine, así como de la prescripción extraordinaria.

A continuación se aprecia un ejemplo de este proceder:

⁴⁶⁷ Véase las conclusiones de este Acuerdo, en el ANEXO 4, de esta investigación, específicamente en el documento N° 10. Recientemente sobre los delitos de colusión y otros por hechos producidos en los años de 1992, 1993 y 1994, la Primera Sala Especializada en lo Penal para procesos con reos libres declaró prescrita la acción penal por los hechos anteriores a 1994 entre ellos a la señora Aida Del Carmen Jesús Consuelo García Naranjo Morales y otros, y en lo referente a los hechos de 1994 la Sala la Absolvió, véase la sentencia en el anexo N° 8 de esta investigación.

⁴⁶⁸ Véase la Ejecutoria expedida por la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema en el R.N. N° 3122-2007, Madre de Dios, resuelta por unanimidad; así como la Ejecutoria resuelta en el R.N. N° 3561-2007, Ayacucho, en el ANEXO 3, de esta investigación, respectivamente en los documentos N° 30 y 34. Además considero que ya en el año 2004 la Segunda Sala Penal Transitoria vía ejecutoria en el R.N. N° 2212-04 resuelto en el año 2005, como precedente vinculante de la adecuación del delito de peculado por extensión al delito de rehusamiento a la entrega de bienes a la autoridad, por lo cual al no ser considerada como autora del delito de rehusamiento a la entrega de bienes a la autoridad se encuentra prescrita la acción penal (fundamento sétimo y noveno), véase en el ANEXO 3, de esta investigación, específicamente en el documento N° 36.

“**Cuarto:** Que debemos considerar como fecha de realización del delito el trece de julio de mil novecientos noventa y cuatro, y no el veintiuno de mayo de mil novecientos noventa y tres, como erróneamente lo consignó la Sala Penal Superior, por cuanto, en aquella fecha se suscribió el convenio número mil doscientos treinta y uno-noventa y cuatro, entre el núcleo Ejecutor y FONCODES, (...) siendo el caso que a partir de ella, recién, se podía disponer de los caudales públicos otorgados para la ejecución de la obra (...) **Quinto:** "Que, resulta aplicable los artículos ochenta-última parte - y ochenta y tres del Código Penal, haciéndose mención además a la duplicidad del plazo ordinario cuando se afecte al patrimonio del Estado del Código Penal, en consecuencia, habiéndose producido el hecho ilícito el trece de julio de mil novecientos noventa y cuatro conteniendo el tipo penal de peculado agravado la pena abstracta máxima de diez años de pena privativa de libertad, y en aplicación de los artículos señalados al introito del presente considerado se necesitaría un plazo de treinta años para la prescripción del ejercicio de la acción penal, lapso que aún no se ha satisfecho, por cuanto, a la fecha han transcurrido catorce años y diez meses (...)", pp. 2 y 3.

Por su parte el Tribunal Constitucional no ha sido ajeno a pronunciarse en torno a los alcances de esta regla constitucional y legal, sobretodo por establecer si se trata de una interpretación amplia que implica a todos los delitos en agravio del Estado o si se trata de una interpretación restrictiva, por la cual sólo se considera a los delitos que afecten únicamente al patrimonio del Estado, al parecer ésta sería la postura que ha adoptado el Tribunal Constitucional como *precedente vinculante*, expedido mediante sentencia, en el expediente N° 1805-2005-HC/2005⁴⁶⁹:

“La redacción del texto constitucional no es clara; pareciera que se refiere a todos los delitos cometidos en agravio del Estado, pero consideramos que no es así, ya que, por el principio de legalidad y seguridad jurídica, debe entenderse tal plazo de prescripción en el contexto de todo el artículo, y mejor aún, en el contexto de todo el capítulo que trata exclusivamente de los funcionarios y servidores públicos.

18.18. Este Supremo Colegiado considera que duplicar el plazo de prescripción en todos los delitos cometidos en agravio del Estado, sería atentar contra el principio de legalidad, de cuya interpretación pro homine se infiere que aplicarlo a todos los imputados a los que se procese es extender in *malam parte* lo que pudiera afectar a este, cuando por el contrario su aplicación debe ser in *bonam parte*. En consecuencia, dicha duplicidad solo es aplicable en el caso de delitos cometidos contra el patrimonio del Estado de organismos sometidos por este, de conformidad con el artículo 41ª, in fine, de la Constitución.” (...).

20.20. Es decir, se imputa al recurrente el haber formado parte de una agrupación ilícita para delinquir por el hecho de haber contribuido a la concertación de los altos oficiales del Ejército Peruano con los efectivos de su institución integrantes del Grupo Colina, pues en su condición de comandante EP, Jefe de Economía del

⁴⁶⁹ Véase la Sentencia emitida en el Expediente N° 1805-2005-HC/2005, en el ANEXO 5, de esta investigación, específicamente en el documento N° 14.

Servicio de Inteligencia habría autorizado beneficios económicos como gastos operativos y la remuneración de dichos efectivos, así como financiar sus "propias estrategias", consistentes en seguimiento, detención, interrogación mediante tortura, aniquilamiento y desaparición física." (pp. 4 y 5).

21.21. Los delitos contra la tranquilidad pública se encuentran previstos en el título XIV del Código Penal, y la modalidad del presente caso está precisada en el segundo párrafo del artículo 137⁴⁷⁰, que establece "que cuando la organización esté destinada a cometer los delitos de genocidio, contra la seguridad y tranquilidad públicas [...], la pena será no menor de 8 años y no mayor de 35 años."

22.22[...]En tal sentido, si los hechos investigados ocurrieron el día 24 de junio de 1992, a la fecha han transcurrido 12 años y 10 meses de la presunta comisión del delito, de lo cual se colige que no ha vencido el plazo ordinario de prescripción por delito de asociación ilícita para delinquir agravada. En consecuencia, la resolución judicial cuestionada que desestima la excepción de prescripción de la acción penal deducida por el favorecido no vulnera sus derechos fundamentales", (pp. 5-6).

Es obvio que la resolución sólo se contenta con establecer la distinción entre el género y la especie, al distinguir entre los delitos en agravio del estado (que sería el género), de los delitos contra el patrimonio del estado (que sería la especie). Pero esta aparente precisión aún resulta imprecisa o difusa, es decir no dice nada, ya que no se puede establecer límites que permitan aplicar tal regla de manera garantista.

Aunque esta postura adoptada por el Tribunal tampoco está exenta de críticas, así es necesario precisar qué significa "el patrimonio del estado", sobre esto puede haber varias derivaciones, como el criterio del *bien jurídico* o el criterio de algún *elemento normativo* del tipo penal como el perjuicio. Sea cual fuere la postura considerada, lo primero que hay que dejar sentado es que el punto de partida es si estamos ante un delito puramente patrimonial o si estamos ante un delito complejo, dentro del cual esté considerado el patrimonio.

El tema ha sido tan polémico que incluso se tuvo que dar el **Acuerdo Plenario N° 1-2010/CJ-116**⁴⁷¹ en el que se establece el criterio unificado de la Corte Suprema, es decir los límites dentro de los cuales se establezcan los alcances de la duplicidad del plazo de la prescripción para los funcionarios o servidores públicos que cometen el delito afectando el patrimonio del Estado o de organismos sostenidos por éste.

⁴⁷⁰ Sic., aunque lo correcto es art. 317 del CP.

⁴⁷¹ Véase los fundamentos que justifican este acuerdo, en el ANEXO 4, de esta investigación, específicamente en el documento N° 2. Por su parte Alonso Peña señala comentando este acuerdo que "en estos ilícitos si bien su perpetración implica una merma al patrimonio estatal, ello no debe entenderse como la patrimonialización del bien jurídico tutelado, en el sentido de que su sustantividad no ha de contemplarse en términos de un perjuicio económico al erario estatal, sino en los principios inherentes al cargo público, de modo que el desvalor de la acción exprese una vulneración a los principios constitucionales de la Administración Pública" (2011, pp. 31).

A continuación se señalan los principales fundamentos:

“12°. El legislador incrementó el plazo de prescripción —duplicó— en el último párrafo del artículo ochenta del Código Penal y destacó la mayor gravedad cuando el delito es cometido por un funcionario o servidor público contra el patrimonio del Estado, ello en concordancia con el último párrafo del artículo 41° de la Constitución Política del Perú —"el plazo de prescripción se duplica en caso de delitos cometidos contra el patrimonio del Estado por funcionarios y servidores públicos"—. La ley consideró que tenía que reconocerse un mayor reproche, traducido en el plazo de la prescripción, por tratarse de un atentado contra el normal funcionamiento de la Administración Pública, la seguridad de los bienes pertenecientes a la Administración Pública y la inobservancia del deber de fidelidad del funcionario o servidor público hacía el patrimonio público desde la perspectiva de las obligaciones del cargo o función que ejerce y abusa. En tal sentido, el ataque contra el patrimonio público es ejecutado por personas que integran la Administración Pública a las que se le confió el patrimonio y se colocó al bien en una posición de especial vulnerabilidad por aquéllos. Esto implica un mayor desvalor de la acción —como conducta peligrosa para los bienes jurídicos— complementado con el desvalor de resultado derivado de la específica función de protección que tienen esas personas respecto del patrimonio del Estado, de la lesión que proviene de la acción desvalorada y de la mayor posibilidad que tienen para encubrir sus actividades ilícitas (...).”

“15°. Si el fundamento esencial de la duplicidad de la prescripción es la lesión efectiva del patrimonio del Estado realizada por los funcionarios o servidores públicos, es necesario que exista una vinculación directa entre estos. Tal fundamento exige el concurso de tres presupuestos concretos:

A. Que exista una relación funcionarial entre el agente infractor especial del delito —funcionario o servidor público— y el patrimonio del Estado.

B. El vínculo del funcionario o servidor público con el patrimonio del Estado implica que este ejerza o pueda ejercer actos de administración, percepción o custodia sobre bienes públicos.

C. Puede servir como fuente de atribución de dicha posición y facultad funcionarial una orden administrativa y, por tanto, es posible que a través de una disposición verbal se pueda también transferir o delegar total o parcialmente el ejercicio de funciones concretas de administración, percepción o custodia sobre bienes públicos al funcionario o servidor que originalmente por su nivel y facultades específicas no poseía”.

“17°. Debe destacarse que los bienes sobre los cuales puede recaer la acción material pueden ser del Estado, parcialmente del Estado o de propiedad privada.

A. En cuanto a la primera modalidad, se trata de bienes íntegramente del Estado.

B. La segunda modalidad se refiere a bienes de Sociedades de economía mixta donde el Estado tiene parte por estar integrado con capital proveniente tanto del sector público como del sector privado y se comparte la propiedad de los bienes. Este tipo de Régimen Económico está reconocido en el artículo 40° y 60° de la Constitución Política del Perú y en el artículo 2° del Decreto

Legislativo número 674, del 27 de setiembre de 1991, que contiene las normas sobre la promoción de la inversión privada en las empresas del Estado.

C. La tercera modalidad se refiere a bienes de propiedad privada que se encuentren en posesión directa del Estado, que ejerce la administración temporal para fines institucionales o de servicio a través de un acto jurídico legalmente válido.

18°. El patrimonio del Estado, parcialmente del Estado o privado está constituido por bienes muebles o inmuebles con valor económico, como los caudales y efectos, lo que se traduce en la presencia de un perjuicio patrimonial real y efectivo en la entidad estatal”.

Uno de los primeros aspectos que se extrae de este acuerdo plenario es el alcance de la duplicidad del plazo de prescripción para los casos de los “intraneus”, que no son ni extraneus ni intraneus, me refiero al peculado por extensión. Así, hay que precisar que:

- 1° Si a una persona se le designa administradora de una AFP, ¿esta designación la convierte en funcionario público o no?, al respecto señalo que con la mera designación se adquiere la condición de funcionario público, lo cual puede implicar un caso de responsabilidad objetiva.
- 2° Otro aspecto que interesa destacar, es el hecho que luego que el Estado se deshiciere de gran parte de las empresas públicas y con la entrada en vigencia de la Constitución de 1993, se estableció un rol de vigilancia subsidiaria de la actividad empresarial privada, por tal razón, en el caso del administrador de la AFP, su rol no es una simple actividad privada, ya que el manejo del fondo privado de pensiones de millones de personas se encuentra en sus manos, por lo cual el Estado no puede omitir su rol de vigilancia de esta actividad. De esta manera, el legislador ha considerado que el administrador sea comprendido dentro de los supuestos del art. 392 del CP.

Se han planteado dos posiciones antagónicas a fin de resolver este problema, por un lado están los que sostienen una postura de restringir los alcances del art. 392 es decir que se considere a estas personas (administrador y otros) como partícipes del delito, pero a no extender el plazo de prescripción a la duplicidad; por otro lado están quienes sostienen que los administradores sí pueden cometer el delito regulado por extensión en el art. 392, entonces sí se les aplica lo dispuesto en el art. 80 y en el art. 41 último párrafo de la Constitución.

Asumiendo el modelo de estado social y democrático de derecho, considero que el Estado debe hacer valer su rol tuitivo, así, en todos los casos contemplados en el art. 392 (administrador de una AFP y otros) en que se maneje recursos de los ciudadanos u otros en general, se tiene que homologar su rol al del funcionario público, por lo cual, el cargo que ostenta en la actividad privada acarrea responsabilidad pública. Por tanto, el “intraneus” debe ser considerado como un verdadero intraneus.

Otro problema a tratar es el caso del si es posible o no aplicar la duplicación del plazo de prescripción para los funcionario públicos que atenten contra el patrimonio del estado en el

delito de lavado de activos a propósito de la publicación del D. Leg. N° 1106⁴⁷². Primero sostengo, que si se trata de prever que el delito precedente se vincula a afectación del patrimonio del estado vía enriquecimiento, colusión o algún otro tipo penal, afirmo que sí es posible, pues el lavado de activos lo que busca es lavar dicho activo y no otro, por ende en este marco de referencia atendiendo a la pluriofensividad de los delitos de lavado de activos, así como a la mediatez del bien jurídico como lo es el sistema económico, y la inmediatez como lo puede ser el patrimonio del estado, el funcionario o servidor público involucrado en esta modalidad delictiva se hace “acreedor” de esta duplicación del plazo si es que tiene la calidad exigida.

7. LOS CASOS DE IMPRESCRIPTIBILIDAD⁴⁷³.

La historia contiene innumerables ejemplos sobre hechos con relevancia penal que no tienen por qué prescribir (sobretudo los casos de exterminio, delitos de lesa humanidad, genocidio, desapariciones forzadas, y últimamente los delitos de corrupción o la discusión si se puede extender a delitos comunes tales como violación sexual de menor de edad). La Segunda Guerra Mundial, la guerra de Bosnia, la guerra de Irak (la primera y la segunda), los conflictos de Guatemala y otros países de Centroamérica, los sucesos de Afganistán, o los abusos del Talibán, o las matanzas en el África, y en el caso peruano la experiencia del subsistema Telmo anticorrupción y los casos de derechos humanos en todo el Centroamérica y Sudamérica (llama la atención por ejemplo que Videla reconociera los delitos que cometió o el caso de Hurtado sobre la matanza de niños, ancianos y adultos en Accomarca⁴⁷⁴).

De las distintas teorías de la pena, la teoría retributiva de la pena es la que proporciona los mayores cuestionamientos a la prescripción penal, por lo que una de las consecuencias de asumir esta teoría es la inexistencia de la prescripción o la imprescriptibilidad, que para efectos prácticos es lo mismo; de allí que en muchos de los códigos penales en donde se asumió esta teoría, algunos también regularon la prescripción (eclecticismo legislativo), cuyas consecuencias jurídicas fueron: establecer como regla general la prescripción de la gran mayoría de tipos penales y penas; y excepcionalmente la imprescriptibilidad de los determinados tipos penales de mayor gravedad (p. ej.: los tipos de *lesa humanidad*). Con esta concepción se legitimó la actuación de los Tribunales de Nuremberg y Tokio, básicamente por consideraciones políticas.

Sin embargo, al asumir un esquema preventivo clásico acerca de la función del derecho penal, se rechaza a la imprescriptibilidad, pues constituye un obstáculo para la misma. Al

⁴⁷² Este decreto legislativo publicado el 19 de abril de 2012, contempla en su art. 4 numeral 1, el caso de la circunstancia agravante por la condición del funcionario y servidor público, luego de derogar la Ley N° 27765, así como el D. Leg. 986 que la modificó. En la doctrina nacional considerando la ley derogada N° 27765 (art. 3 literal a), Gálvez Villegas se ha manifestado como contrario a admitir la duplicación del plazo de prescripción para los delitos de lavado de activos olvidando la naturaleza del bien jurídico, pues sí es posible que en la inmediatez de este se afecte también el patrimonio del Estado (Gálvez, p. 141).

⁴⁷³ Véase Sáenz, A. (2002). El retorno a la imprescriptibilidad de la persecución penal, pp. 317 a 337.

⁴⁷⁴ Véase el Diario El Comercio que en su sección a 29 del día domingo 15 de abril del 2012, bajo el epígrafe “Videla admite crímenes de dictadura argentina”, señala que se hizo esta confesión en el libro del periodista argentino Ceferino Reato, sobre el robo de bebés y el asesinato de siete u ocho mil personas durante los años 1976 y 1983. Así como también las declaraciones de Telmo Hurtado en la audiencia del día martes 12 de abril de 2012 ante la Sala Penal Nacional, en el Penal Castro Castro, véase el diario La República en su edición del 13 de abril.

respecto, me he opuesto a la imprescriptibilidad desde esta perspectiva, prefiriendo asumir un modelo de fortalecimiento de la prescripción, por las siguientes razones:

- 1° Los plazos de prescripción para estos tipos penales de lesa humanidad y similares son muy altos, por lo cual el plazo para la persecución o ejecución por parte del Estado es bastante amplio.
- 2° Si el imputado volviera a cometer otros delitos entonces, o bien se le interrumpe los plazos de prescripción o bien se vuelve a contar un nuevo plazo por el nuevo tipo penal (por lo que el Estado amplía su *ius puniendi*).
- 3° Si a esto se agrega considerar la necesidad de adecuar las nuevas consecuencias jurídicas referidas a las diversas reformas penales producidas en los últimos veinte años sobre la prescripción penal, ello ha implicado una serie de incrementos de los plazos o una restricción de su aplicación.

Por ende, si se considera las nuevas circunstancias agravantes tales como la condición de funcionarios públicos que se valen de su rol para realizar estos tipos penales (art. 46-A), los concursos (arts. 48 y 50), la reiterancia y la reincidencia (arts. 46-B y 46-C), el incremento de los márgenes de la pena privativa de la libertad (art. 29), la exclusión de algunos tipos penales para la aplicación de la atenuante genérica en los casos de imputabilidad restringida (art. 22), así como las reformas penales referidas a las faltas, se tiene que redefinir las consecuencias jurídicas aplicables a la prescripción de la persecución penal y de la ejecución de la pena.

Entonces, si el objetivo sigue siendo el de prevenir la comisión de tipos penales, toda imprescriptibilidad acaso no rompe con esta finalidad, y por tanto cabe preguntarse si no estaremos cayendo en un rezago de esas viejas concepciones retribucionistas extremas.

El debate aún continúa, aunque con posturas más contemporáneas del esquema preventivo general se ha optado por asumir la imprescriptibilidad de manera excepcional. Así BUSTOS RAMÍREZ⁴⁷⁵ señalaba que “la necesidad de la pena no es un planteamiento en abstracto, sino en concreto, luego no se puede generalizar respecto de todo hecho delictivo; es necesario considerar la naturaleza y las circunstancias de los diferentes tipos de delitos. En este sentido, hay tipos penales que por su propia naturaleza no pueden quedar abarcados por la necesidad de la pena, pues ello significaría desvirtuar el sentido y función del derecho penal. Tal es el caso de ciertos tipos penales básicos que atacan contra la expresión más elemental de los derechos fundamentales. Se trata de tipos penales como el genocidio, la tortura, la desaparición forzada de personas. En estos casos la pena aparece siempre como necesaria, ya que su necesidad es función no de un individuo, sino de la humanidad y de la historia de todo un pueblo. Luego, tales delitos no pueden ser amnistiados, ni indultados ni tampoco ser prescriptibles. Aceptar una tesis contraria sería el reconocimiento y aceptación de la arbitrariedad y autoritarismo en las relaciones sociales”.

⁴⁷⁵ Bustos, J. (set.- oct.- nov.- dic., 1987.) La extinción de la responsabilidad criminal, pp. 373 y 374.

A continuación este autor propuso que la responsabilidad debería extinguirse “por prescripción de la persecución penal y de la pena, sin embargo, en los delitos contra la Humanidad no podrá tener lugar la amnistía, ni el indulto ni la prescripción”.

Siendo BUSTOS postulador de un derecho penal mínimo y defensor implícito de los derechos humanos, no resulta coherente postular un retribucionismo perpetuo a nivel de la categoría de necesidad de pena, puesto que ello deviene en el fondo no en una afección de las relaciones sociales, sino en una venganza sustentada en “razones de estado”, es decir criterios políticos. Entonces cabía preguntarle a BUSTOS: ¿Qué mayor arbitrariedad y autoritarismo que perseguir perpetuamente a una persona con el único fin de vengar un tipo penal, aún en los casos de mayor gravedad?

Ante tales argumentos, pienso que las penas con plazos altos de por sí ya justifican una persecución penal, y no habría la necesidad de incluir la imprescriptibilidad en un Estado que respeta los principios democráticos, más aún ahora que existen los medios de colaboración internacional como la extradición, la asistencia judicial, la expulsión, etc. que hacen viables una persecución a nivel global.

Empero, esta opinión se debe matizar con dos aspectos que hoy en día han obligado a redefinir gran parte de las instituciones de la ciencia penal, por un lado la consolidación de los derechos fundamentales en el sistema jurídico constitucional y por otro lado la actividad y rol que desarrollan las organizaciones criminales en este mundo global. De esto se deriva la urgente necesidad de adecuar la legislación penal al respeto de los *derechos fundamentales*⁴⁷⁶ que es una necesidad de todo el sistema penal así como afrontar la lucha contra la *criminalidad organizada*, y la prescripción no está ajena a tales redefiniciones.

Por tanto, la redefinición de la prescripción debe estar orientada por estos dos aspectos de una nueva política criminal, donde la imprescriptibilidad es admisible aunque de manera muy excepcional.

En el derecho comparado, los códigos han ido avanzando poco a poco en la regulación de la imprescriptibilidad, así se tuvo en primer lugar el viejo Código para el Gran Ducado de Toscana que estableció expresamente en su art. 95 que “contra las condenas no se dará prescripción”.

El hoy llamado «principio» de la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y contra la humanidad con efectos retroactivos in malam partem fue consagrado por la Convención

⁴⁷⁶ Chocano, R. (2006), p. 117, este autor está de acuerdo con la imprescriptibilidad para este tipo de delitos asumiendo criterios de prevención general y utilizando lenguaje funcionalista, y no se debe dejar de mencionar que para este autor se justifica la prescripción desde su óptica material jacobiana al señalar que es específicamente “En mi opinión, la prescripción, como causa de extinción de la acción penal regulada en sus plazos, condiciones y circunstancias, debe verse en un contexto normativo y social concreto. La prescripción por transcurso del tiempo convierte al injusto en un «asunto pasado», y sin la persecución de la infracción de la norma (delito) se extingue el derecho de persecución del Estado, porque el tiempo extingue la necesidad del restablecimiento de la vigencia de la norma y ella se restablece por el transcurso del tiempo, por sí misma” (p. 95).

sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los Crímenes de Lesa Humanidad⁴⁷⁷.

En el derecho internacional público, se tiene el art. I de la presente Convención, la misma que señala qué crímenes son considerados *imprescriptibles*, así como dispone que no importa la fecha de la comisión del delito, es decir, se aplica para *cualquier fecha*:

- a. Los crímenes de guerra, según la definición dada en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Núremberg (de 8 de Agosto de 1945), y de éstas las «infracciones graves» enumeradas en la Convención de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 para la protección de las víctimas de la guerra; y
- b. Los crímenes de *lesa humanidad* cometidos tanto en tiempo de guerra, según la definición dada por el Tribunal Militar de Núremberg, así como la expulsión por ataque armado u ocupación y los actos inhumanos debido a la política del apartheid y el delito de genocidio⁴⁷⁸; todos estos actos serán imprescriptibles aun cuando no constituyan una violación del derecho interno del país donde fueron cometidos.

Posteriormente los principales códigos penales europeos han considerado de manera excepcional la imprescriptibilidad de algunos delitos y de algunas penas⁴⁷⁹, aunque ahora muchos están adecuando su legislación a la incorporación de estas excepciones.

En Alemania la posición mayoritaria ha considerado la aplicación retroactiva del aumento de los plazos de la prescripción⁴⁸⁰, en oposición a la declaración de la

⁴⁷⁷ Adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su Resolución 2391 (XXIII), de 26 de Noviembre de 1968. Entra en vigor el 11 de Noviembre de 1970, de conformidad con el artículo VIII (Véase: **Derechos Humanos Recopilación de Instrumentos Internacionales. Cuadragésimo Aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos 1948-1988**. Centro de Derechos Humanos de Ginebra. Naciones Unidas. Nueva York, 1988. pp. 147 a 150.

⁴⁷⁸ La convención de prevención y sanción del delito de genocidio, adoptada y abierta a firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General en su resolución 260 A (III), del 09 de Diciembre de 1948, el Perú la aprobó por Resolución Legislativa N° 13288 del 28 de Diciembre de 1959. En el art. II se define al genocidio como «los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal: a) Matanza de miembros de grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo. Y en el art. III se castiga los siguientes actos: a) El genocidio [obviamente doloso]; b) La asociación para cometer genocidio; c) La instigación directa y pública a cometer genocidio; d) La tentativa de genocidio; e) La complicidad en el genocidio». Un excelente artículo sobre este delito es el que escribió Beltrán, E. (1978), El delito de genocidio (estudio del artículo 137 bis del Código Penal español), pp 54 y ss; este artículo fue elaborado en 1978 con el ya derogado CP español y por eso afirmaba que se admitía la prescripción del delito de genocidio, pues dicho CP no se manifestaba sin embargo, a la fecha esto ha variado pues el CP español de 1995 considera en su artículo 131 inc. 4° la imprescriptibilidad del genocidio (art. 607, Título XXIV Delitos contra la Comunidad Internacional).

⁴⁷⁹ A pesar de esta tendencia el **Proyecto de CP Internacional** en su art. X no recoge el principio de imprescriptibilidad, aunque indica la posibilidad de llegar a esta consecuencia cuando se trate de la pena de prisión o cadena perpetua.

⁴⁸⁰ De opinión contraria Jescheck (1993), pp. 125, véase la nota a pie n° 42; y en la quinta edición manteniendo las mismas ideas y citas pero se agrega que “partidario de la aplicación de la prohibición de la retroactividad a las disposiciones sobre prescripción sin consideración a su carácter procesal o jurídico-material”, (2002), pp. 149, nota a pie n° 57.

imprescriptibilidad. Sin embargo, el BGH alemán opina que “el acortamiento del plazo de prescripción opera retroactivamente según el § 2 III (BGH 21, 367, [370])”⁴⁸¹.

En esta investigación se considera que no son contrarias ambas posiciones, sino que están vinculadas, pues de un lado con respecto a la primera se tendría que decir que cada vez que un caso está a punto de prescribir, entonces será necesario modificar nuevamente los plazos y hacerlos de aplicación retroactiva, con lo cual se tiene una cadena de modificaciones hasta que de alguna manera se constate que ya no hay la probabilidad de que algún criminal se libere de ser procesado (ésta fue la postura que se adoptó en Alemania, en el §79b). Por otro lado, nos conduce a este resultado de manera más rápida la segunda opción. Así en Alemania no prescriben, ni el genocidio ni el asesinato de los § 220 a y 211 del StGB (respecto de la persecución y de la ejecución véase §78 [2] y 79 [2]), y tampoco los delitos con penas de cadena perpetua, y menos aún el cumplimiento de las medidas de seguridad (§79[4]).

MAURACH precisó que “la imprescriptibilidad del genocidio y del asesinato constituye un ulterior argumento para la teoría procesal de la prescripción”⁴⁸².

Por otro lado, CARRARA afirmó que “las doctrinas modernas están de acuerdo en que, aun cuando se admita, según la distinta *naturaleza y gravedad* de los delitos, alguna diferencia en el tiempo necesario para prescribir, ya no se reconocen los delitos llamados *imprescriptibles*, es decir, *exceptuados* para siempre de este beneficio, a causa de su atrocidad”⁴⁸³.

Mas recientemente ZAFFARONI ha señalado que “por ende, no es en modo alguno satisfactoria la respuesta de que los crímenes de guerra son imprescriptibles porque así lo dispone la costumbre y al respectiva convención internacional. Ésa no es una respuesta científica; no lo sostendría un positivismo jurídico razonable, pues se trataría de una proposición puramente formal. Además, si bien es improbable que se derogue la ley internacional, no es imposible y, por ende, en tal caso, automáticamente sería menester reconocer que las acciones por crímenes de guerra y de lesa humanidad serían prescriptibles”⁴⁸⁴.

El CP de Suiza ha regulado la imprescriptibilidad de algunos delitos en el art. 101, entre estos se tiene al genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y delitos graves entre otros supuestos (véase el ANEXO N° 2, el documento N° 15.).

El CP de Austria establece la imprescriptibilidad genérica, así para los casos de la persecución no considera a la clase de delitos, sino el monto y gravedad de la pena conminada, de allí que la persecución por la pena, del §51, 1) dispone que «*las acciones punibles sancionados con pena privativa de la libertad de diez a veinte años o perpetua, no prescriben*», y para la ejecución de la pena, el §59, 1), expresa que «*la ejecución de una*

⁴⁸¹ Jescheck (1993), pp. 125, véase la nota a pie n° 42 y similar en la quinta edición (2002).

⁴⁸² Maurach, Heinz y Zipf (1995), pp. 971.

⁴⁸³ Carrara (1944), pp. 175, véase la nota 1, último párrafo.

⁴⁸⁴ Zaffaroni, E. (2001), “*Notas sobre el fundamento de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad*”, p. 439.

pena privativa de libertad perpetua o por más de diez años, y el internamiento en un centro de infractores mentalmente anormales o reincidentes peligrosos, no prescriben».

Últimamente una de las innovaciones que trae el CP de España es la imprescriptibilidad del delito de genocidio y de su pena (art. 131 numeral 4 y el art. 133 numeral 2) originariamente, empero en los últimos años se ha ampliado estos supuestos a otros casos más: “4. Los delitos de lesa humanidad y genocidio y los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, salvo los castigados en el artículo 614, no prescribirán en ningún caso”. Y se señala también que “Tampoco prescribirán los delitos de terrorismo, si hubieren causado la muerte de una persona”.

En relación a la imprescriptibilidad de la pena también se han incorporado modificaciones tales como las impuestas por delitos de lesa humanidad, genocidio, por los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, salvo los castigados en el artículo 614 del CP, no prescribirán en ningún caso. Se agregó recientemente a las penas impuestas por el delito de terrorismo, si estos hubieren causado la muerte de una persona.

En América se tiene el código penal de Puerto Rico que considera la imprescriptibilidad de la acción penal para ciertos delitos regulados en el art. 100 tales como los delitos graves de primer grado, genocidio, crimen de lesa humanidad, asesinato, secuestro y la agravante secuestro de menores, malversación de fondos públicos, falsificación de documentos públicos y todo delito grave tipificado en este código o en ley especial cometido por un funcionario o empleado público en el desempeño de la función pública.

No olvidemos, que dicho código no considera la prescripción de la ejecución de la pena, por lo cual se concluye que la ejecución de la pena es imprescriptible.

También el código penal de Cuba dispone la imprescriptibilidad de la acción penal para los delitos que tienen pena de muerte y los delitos de lesa humanidad (art. 64 numeral 5); en cuanto que la prescripción de la ejecución de la pena considera únicamente a los delitos de *lesa humanidad* (art. 65 numeral 5).

En el Perú no se tenía disposición alguna acerca de la imprescriptibilidad aunque sí hubo algunas propuestas (anteproyectos y proyectos de ley), en la actualidad ya se tiene legislación al respecto sea en por la Convención de la Imprescriptibilidad y el Estatuto Penal de Roma.

Proyecto de Vidaurre Ley 31: Anteproy. de CP (1927) art. 70, hablan de la imprescriptibilidad (ver texto: La pena de presidio e inhabilitación perpetua, no prescriben en ningún tiempo); el Proy. de CP (Set. 84) art. 93 in fine, para los delitos de terrorismo. Otro que regula es el Anteproy. de CP (2004) art. 88 último párrafo y el Anteproy. de CP (2010) art. 88.

Es relevante recordar aquí que a raíz del proyecto de ley N° 521/85-S presentado por el Senador DELGADO BARRETO en torno a la interpretación del art. 282 de la Constitución

de aquél entonces se emitió un dictamen que fue aprobado por el senado el 11 de diciembre de 1986. Así se propuso que los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales cometen delitos comunes cuando no estén en servicio tales como «el genocidio, las torturas, el arresto secreto, el desaparecimiento forzado de personas, el homicidio calificado, la violación sexual» (art. 1º del proyecto). Y en el artículo 7º literal b) se expresaba para estos delitos «la acción penal como la pena impuesta son imprescriptibles»⁴⁸⁵.

En el caso peruano, a pesar de haber aprobado el Perú la Convención de Prevención y sanción del delito de genocidio en 1959, no se modificó el texto del CP (1924). Tampoco el CP consideró dicha Convención, por lo cual debemos preguntarse: si alguien realiza un injusto penal calificado como genocidio (art. 129 del CP) cuya pena es no menor de 20 años, ¿a los cuántos años prescribirá la persecución penal o la ejecución de la pena?

La respuesta, antes de la entrada en vigencia de la Convención sobre Imprescriptibilidad o del Estatuto Penal de Roma, se encontraba en los artículos 80 y 29 del CP, pues el genocidio tiene una pena temporal no menor de 20 años, aunque no se precisa el máximo, y la prescripción para estos casos, tanto de la acción penal como de la pena, será indefectiblemente a los veinte años.

Pero, ¿esto nos indica tal vez que para estos casos no existe diferencia entre la prescripción ordinaria y la extraordinaria? Creo que este plazo taxativo, que algunos denominan prescripción absoluta, opera tanto para los casos de prescripción de la persecución penal ordinaria como para la extraordinaria. En lo que respecta a la prescripción de la ejecución de la pena no habría problema alguno, aunque claro está que si se imponen penas privativas de libertad superiores a los veinte años, éstas sólo se reducirían a este plazo, con lo cual se diría que resulta recomendable este tipo de prescripción.

Se deja sentado que la interpretación propuesta no sólo se justifica por basarse en los criterios que nos brinda el método sistemático, sino también considerando los principios del y del derecho penal, como el de última ratio entre otros (tal vez el más saltante, es el de lo más favorable al reo o procesado).

Así todas las condenas que se hayan dictado por delito de terrorismo o “Traición a la Patria” ameritan que se les pueda aplicar las reglas de la prescripción.

A propósito de este tema quiero recordar el caso de la matanza de los penales, que fue el que puso en cuestión la falta de adecuación del CP (1924), pues a los que cometieron tales injustos se les procesó por el delito de asesinato. Hubo la posición de algunos que exigían que se procese a los responsables por el delito de genocidio amparándose en la

⁴⁸⁵ Véase los archivos del Congreso de la República, específicamente el Proyecto de Ley N° 521/85 del aquél entonces senador Dr. César Delgado Barreto. El Dictamen de la Comisión de Justicia N° 14-C/JUS-86, del 11 de Diciembre de 1986, que aprobaba el proyecto sustitutorio de las Comisiones de Constitución y Justicia, entre ellos el art. 7 con algunas modificaciones irrelevantes en relación a la imprescriptibilidad. Pero también se presentó un Dictamen Conjunto de Minoría de las Comisiones de Justicia elaborado por el entonces Senador Javier Diez Canseco, de fecha 02 de Diciembre de 1986 que ahora ubicaba la regla en el art. 10 como una Disposición Común, la cual de forma genérica se refería a que la acción y la pena son imprescriptibles. Entonces, dado que incrementó la lista de delitos, la consecuencia era que los supuestos de imprescriptibilidad también aumentaron.

Constitución de 1979 (arts. 101 y 105), ya que la Convención sobre el genocidio es un tratado y este prevalece sobre el CP. Otra posición consideró que como el genocidio no se recogió en el CP (1924) las conductas que constituían genocidio sólo podían haber sido sancionadas como aspectos de cualquier otro delito común (p ej. asesinato). Como esta fue la posición que primó, luego se creyó necesaria la tipificación en el CP del art. 129 [Proyectos de CP (Oct - Nov. 84), art 112; (Ago. 85), art 117.; (Mar.-Abr. 86), art 116; (Jul. 1990), arts. 128 y 129; (Ene. 91), art 129 y 130].

En el Perú hubo pronunciamientos que anunciaron la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, así se tiene el caso de Mantilla⁴⁸⁶ que declaró infundada la excepción de prescripción.

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre este aspecto en diversas resoluciones, sentando el criterio que en materia de delitos de lesa humanidad la persecución penal es imprescriptible, a continuación es importante destacar la ratio decidendi de la sentencia dada en el expediente N° 03693-2008-PHC/TC⁴⁸⁷ emitida en el año 2011 que señaló:

“(...) 14. Así, la prescripción de la acción penal, que supone la defensa del individuo contra los excesos del Poder estatal, no puede ser utilizada con la finalidad de avalar el encubrimiento que el Estado haya realizado de hechos que deben ser investigados...”, (pág.4).

“17. De este modo, como ya lo ha sentado este Colegiado en la sentencia recaída en el expediente N° 00218-2009-PHC/TC, referida a la pretendida prescripción de la acción penal de un coprocesado del accionante, una interpretación conforme con la Constitución de las normas de prescripción de la acción penal a la que ha arribado este Tribunal implica dejar de contabilizar todo el lapso en que se sustrajeron los hechos de una efectiva investigación, a través de órganos judiciales incompetentes y leyes de amnistía inconstitucionales. A su vez, en caso que se determine que tales hechos constituyen crímenes de lesa humanidad no opera el plazo de prescripción de la acción penal. Así lo ha reconocido este Tribunal constitucional (Exp. N°024-2010-PI/TC) (...)” “19. Conforme consta de los actuados judiciales adjuntados al expediente de hábeas corpus, se sigue proceso contra el favorecido por delito de asesinato (fojas 14), previsto en el artículo 152 del Código Penal de 1924-vigente en el momento en que se habrían cometido los hechos delictivos-con pena de internamiento...en principio, una prescripción de la acción penal de veinte años, que se reduciría a la mitad, en aplicación del artículo 148 de dicho cuerpo normativo, por haber tenido al momento de la comisión de los hechos menos de 21 años.”

⁴⁸⁶ Véase el auto emitido por el Cuarto juzgado penal supraprovincial, Expediente N° 2007-00935-62, que con fecha agosto del 2009 declaró infundada la prescripción de la acción penal.

⁴⁸⁷ Véase el texto más ampliado de dicha Sentencia en el ANEXO 4, de esta investigación, específicamente en el documento N° 3, en este sentido también se tiene la Sentencia emitida en el expediente N° 00218-2009-PHC/TC, fundamentos 7, 13, 14, 17 y 19 como ratio decidendi, véase en el ANEXO 5, de esta investigación, específicamente en el documento N° 35. También se tiene la sentencia del Exp. 0024-2010-PI/TC en el ANEXO N° 5 documento N° 30.

“20. Sin embargo, según lo interpretado por este Tribunal, los obstáculos para el procesamiento de los hechos fueron recién removidos por el Estado en enero de 2002, cuando se anuló el proceso seguido ante el Fuero Militar. En efecto, conforme a lo ya mencionado supra, no pueden contabilizarse los plazos de prescripción de la acción penal cuando el ordenamiento jurídico o el accionar del Estado representen un obstáculo para el procesamiento de hechos tan graves como los que motivan el proceso penal que se cuestiona en la demanda. Ahora bien, cualquiera que sea la opción interpretativa que se tome, esto es, considerar la imprescriptibilidad de los delitos que se imputan, o bien la aplicabilidad de las normas de prescripción a partir de enero de 2002, a la fecha, la acción penal se encuentra todavía vigente, por lo que la demanda debe ser desestimada (...)”, (p. 5).

Aunque es interesante el comentar las dos posibilidades que ambiguamente plantea el TC, al considerar que, sino opera la imprescriptibilidad (apreciación contingente), otorga una salida “opcional”, que a la larga puede ser la salida a todos estos casos, ya que considera que si se han removido los obstáculos el plazo se vuelve a computar, es decir que estaría suponiendo un supuesto de suspensión del plazo de prescripción, al respecto considero que esta aparente salida es contingente, puesto que con ella no se daría seguridad jurídica al ordenamiento constitucional penal.

La posición asumida, tendría que ser previa apreciación correcta de los hechos de manera uniforme, es decir si se trata de un delito diferente al de lesa humanidad, la regla debiera ser la prescripción (regla general), en cambio y de manera excepcional si se trata de delitos de lesa humanidad, la regla restrictiva es la imprescriptibilidad (excepción).

Así es oportuno preguntarse: ¿qué hacer con el supuesto de suspensión fáctico de la prescripción para cualquier tipo de delito, cuando el Estado es el que pone trabas para llevar a cabo un proceso penal justo?

Se responderá a esta interrogante señalando que si se trata de un delito de lesa humanidad se tiene una regla excepcional a aplicar, pero si se trata de otro tipo de delito, común o contra el Estado como corrupción de funcionarios, se adolece de solución, así sobre este supuesto aún hay que seguir debatiendo, aunque una alternativa puede ser aplicar una interpretación analógica, pues si para los casos más graves se ha planteado con más razón para los mas graves que no tengan connotación internacional, o de lo contrario se producirá la postura de seguir incrementando los delitos a la regla de la excepción.

Por ello, es oportuno recordar lo sostenido por ZAFFARONI, al decir que “no puede sostenerse razonablemente que sea menester garantizar la extinción de la acción penal por el paso del tiempo en crímenes de esta naturaleza, en razón de una intolerable irracionalidad en caso contrario. No hay una irracionalidad intolerable en el ejercicio de una acción penal contra un criminal de lesa humanidad por mucho que hayan pasado los años; sólo existe la irracionalidad propia de todo poder punitivo, que es extremadamente selectivo y productor del mismo hecho sobre cuyo autor recae. El derecho penal no está

legitimado para exigir la prescripción de las acciones emergentes de estos delitos; por el contrario: si lo hiciese sufriría un grave desmedro ético”⁴⁸⁸.

En la actualidad el tema de la imprescriptibilidad ha sido un tema que incluso estuvo presente en la agenda política de las elecciones presidenciales del año 2011, así en los últimos años, diversos sectores han planteado que se debe incorporar esta figura para los delitos contra la administración pública a fin de que sean imprescriptibles⁴⁸⁹.

Finalmente, en un último caso relevante nuestra Corte Suprema de la República sentó criterio a favor de la imprescriptibilidad, pues en el pedido de extradición del ciudadano peruano Francisco Morales Bermúdez Cerruti (expediente de extradición pasiva N° 23-2012) por parte de Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número cinco de la República de Argentina, la Sala Penal Permanente con fecha quince de marzo de dos mil doce resolvió mediante ejecutoria por unanimidad la improcedencia de tal solicitud, teniendo como uno de los fundamentos de la ratio decidendi que los hechos imputados constituye la calificación del delito de secuestro, por lo que estos “se condicen con los alcances del delito de lesa humanidad”, siendo relevante que la imprescriptibilidad haya sido el único criterio que ha permitido que la Sala Suprema deje la posibilidad que la Jurisdicción Nacional puede hacerse cargo de dichos hechos imputados⁴⁹⁰.

⁴⁸⁸ Zaffaroni, E. (2001), “*Notas sobre el fundamento de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad*”, p.445.

⁴⁸⁹ Véase el anexo pertinente de esta investigación donde se tiene un recuento de los 46 proyectos de ley presentados desde el año de 1996 a la actualidad, siendo el primero el del congresista Elferes Vidarte Correa, proyecto de ley N° 1445 de fecha 14 de junio de 1996, al plantear que se incorpore un párrafo en el art. 80 con el siguiente texto: “En caso de delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos contra el patrimonio del Estado o de organismos sostenidos por éste, el plazo para la acción penal es imprescriptible”. Véase en el ANEXO 1-A, de esta investigación, específicamente en el Cuadro de Proyectos de Ley N° 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 64 y 65. En la doctrina nacional incluso se ha escrito sobre “La imprescriptibilidad de los delitos de corrupción”, título que sin embargo no desarrolla el tema propuesto, sino que se refiere solo a la posibilidad de señalar las “bondades” de la ley N° 26641, y a acoger las propuestas que propone el profesor Manuel Abanto en el año 2003, sin embargo le recuerdo al autor de este artículo que se fije en la tesis para la obtención del Título de Abogado que sustenté en el año de 1996, donde ahí se postuló muchas de las ideas que resalta (Sánchez, 2010, pp. 481 a 493).

⁴⁹⁰ El fundamento décimo cuarto textualmente refiere: “**Decimo cuarto:** Que, en consecuencia, sobre la base de los antecedentes jurídicos y fácticos expuestos, este Supremo Tribunal llega a la conclusión que los hechos imputados contra el requerido Morales Bermúdez Cerruti y que se han tipificado como delito de secuestro, se condicen con los alcances del delito de lesa humanidad, por tanto, su persecución es imprescriptible, en concordancia con el artículo 29° del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y contra la humanidad adoptada por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas del 26 de noviembre de 1968 - al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos no sólo ha confirmado el carácter consuetudinario de la regla de imprescriptibilidad, sino que, además, ha afirmado que la imprescriptibilidad constituye una norma de ius cogens, en efecto, en el caso La Cantuta, la Corte ha señalado que “... Aún cuando [el Estado] no ha [ya] ratificado dicha Convención (sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y contra la humanidad), esta Corte considera que la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad surge como categoría de norma de Derecho Internacional General (ius cogens), que no nace de tal Convención sino que está reconocida en ella. Consecuentemente [el Estado] no puede dejar de cumplir esta norma imperativa (...)” [Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso La Cantuta vs. Perú. Sentencia sobre fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C N° 162, par. 225, pág. 108] -, los Convenios de Ginebra de 1949. La Ley de crímenes de guerra belga de 1993 - que consagró la jurisdicción universal y la imprescriptibilidad -, así como la vasta jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otras fuentes del Derecho Penal Internacional que acoge al Derecho no convencional o ius cogen - en virtud a la Convención de Viena del 23 de mayo de 1969 sobre el Derecho de los Tratados”.

8. LA CONTUMACIA Y LA PRESCRIPCIÓN (LEY Nº 26641).

8.1. LA PRESCRIPCIÓN SEGÚN LA LEY Nº 26641 (ART. 1º).

Para analizar esta regla penal en primer lugar voy a descomponerla. Así la consecuencia jurídica del art. 1 es: «*El juez encargado del proceso declara la condición de contumaz y la suspensión de la prescripción*»; empero el problema radica en establecer el supuesto de esta regla. Al descomponerla tiene los siguientes supuestos:

1º Respeto del «principio de la función jurisdiccional de no ser condenado en ausencia» el cual no se vulnera, según la interpretación auténtica.

Por interpretación auténtica entiéndase la que “efectúa el legislador, pero no en la fundamentación o exposición de motivos de la ley ni haciéndola constar en los diarios de sesiones parlamentarios, lo que carece en ambos casos de fuerza vinculante, sino expresando el auténtico sentido que quiere dar a un concepto o expresión legal en el texto de la propia ley [*éste es el caso más conocido y practicado en el derecho comparado (España) en nuestro caso tenemos el art. 425 del CP*] o de otra ley distinta [*éste es el caso del art. 3 de la ley 26491 que interpreta el art. 1 de la ley 26479*], pero en cualquier caso con total fuerza vinculante por ser la propia ley quien efectúa la interpretación. Dado el principio de legalidad penal, en derecho penal es la única vinculante a efectos de creación o agravación de la responsabilidad criminal”⁴⁹¹.

Genéricamente, la interpretación auténtica es la que hace “el propio legislador que ha concebido y formulado una norma. Es, pues, el mismo legislador quien explica lo que el mismo quiso decir. Así, en el caso de leyes y resoluciones legislativas dadas por un Congreso ordinario, el legislador, que es el Congreso. Pero en caso de una disposición constitucional, el legislador ya no es el Congreso, sino la Asamblea Constituyente que confeccionó dicha disposición”⁴⁹². Por consiguiente el Congreso de la República no puede interpretar ninguna ley constitucional”.

Por tanto, la interpretación auténtica a que hace referencia el art. 1 de la ley bajo comentario no interpreta en absoluto ningún elemento que teleológicamente se vincule con la prescripción, pues, ¿qué relación jurídica puede tener ésta con el principio de no ser condenado en ausencia? Entonces, creo que no hay nexo causal alguno entre esta parte del supuesto con la consecuencia que el art. 1 consigna.

La única explicación y razón de ser de esta interpretación era establecer la condena del contumaz argumentando la interpretación literal de que el principio invocado sólo prohíbe la condena del ausente, pero no del contumaz.

Los cuestionamientos formales a esta interpretación radican en que no se precisa qué ley es la que se interpreta. No obstante es sabido por todos que la presente ley se refiere al

⁴⁹¹ Luzón (1996), pp. 163. La afirmación entre [...] es nuestra.

⁴⁹² Wieland, H. (1996) *La reelección presidencial: análisis de la disposición constitucional y su ley interpretativa*, p. 209 y ss.

principio constitucional de no ser condenado en ausencia (art. 133 numeral 12 de la Constitución); por ello la presente ley devendría en inconstitucional por la forma, si es que se aprobó con la votación de una ley común, y no como lo requiere toda norma constitucional art. 81 literal a) del Reglamento del Congreso de la República⁴⁹³.

2º La persona debe realizar la conducta para que se le considere contumaz (y esto no vulnera el principio de no ser condenado en ausencia).

3º Cuando se declare contumaz al procesado, entonces se debe interrumpir los plazos en que opera la prescripción.

Con lo cual se constituye un supuesto que no tiene fuente ni antecedente alguno, tanto desde la perspectiva del derecho comparado como de la doctrina (véase en el anexo de este trabajo los textos de los códigos penales revisados).

Por consiguiente, apenas se declare la contumacia, todo plazo ordinario de la prescripción de la persecución que pudiera haberse ido computando en beneficio del imputado, se considerará extinguido (bajo un esquema de interrupción).

Sin embargo, somos de la idea que esto no afecta el curso de la prescripción extraordinaria, **primero** porque la ley no lo dispone expresamente (principio de legalidad); **segundo** porque esta institución tiene como finalidad terminar con los excesos de una interrupción demasiado prolongada, y tercero, porque la presente ley no vulnera en lo más mínimo la plausibilidad de la prescripción.

4º Tal interrupción *«opera desde que existen evidencias irrefutables que el acusado rehúye del proceso y [dura] hasta que él mismo se ponga a derecho»*.

Esta causal precisa un nuevo supuesto de interrupción específico con lo cual se amplía el modelo mixto de causales de interrupción que estableció el CP. Empero, lo curioso es que esta «nueva» causal ya se encontraba subsumida por la causal genérica del art. 83 del CP: *«actuaciones (...) de las autoridades judiciales»*, pues ¿acaso la declaración de contumacia no es un acto que se ejecuta vía resolución judicial (que es el medio por excelencia de actuación de todo juez)? Luego, estos no constituyen novedad alguna, ya que los efectos siguen siendo los mismos.

Claro que algún “riguroso” intérprete diría que la novedad está en la manifestación de la permanencia en el tiempo de dicha causal, debido a que se inicia la causal de interrupción al declararse contumaz al imputado, cesando al momento en que éste se ponga a derecho, es decir se reiniciaría el plazo de prescripción. Considero que esto no es correcto debido a que la tercera causal de interrupción del art. 87 ya contempla, como una de sus posibilidades, la comisión de un delito de naturaleza permanente (P. ej.: el secuestro), en donde el plazo de

⁴⁹³ Este cuestionamiento también se sostiene en torno a la ley N° 26657, pues una modificación constitucional de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 206 de la Constitución y no como una simple ley ordinaria. Wieland, H. (1996) p. 209.

prescripción se iniciará al terminar la permanencia, pues antes estaría operando la causal de interrupción.

En síntesis, la premisa se reduciría a:

1º Si una persona realiza la conducta calificada de contumaz (obviamente desde que el juez la declara);

La consecuencia será:

2º Se debe interrumpir los términos prescriptorios hasta que se ponga a derecho (efectos permanentes).

Empero, todo esto es un contrasentido del legislador, cuando al final del art. 1 de la ley bajo análisis, dispone que «*el juez encargado del proceso declara la condición de contumaz*» (supuesto) y la «suspensión de la prescripción» (consecuencia). Así nos encontraríamos ante un nuevo supuesto de suspensión, por lo cual el plazo de prescripción que se había ganado se detiene, y no se pierde, permaneciendo inalterable hasta que cese dicha causal, reanudándose a partir de este momento el plazo antes suspendido.

Así planteadas las cosas, esta causal resulta similar a las otras, debido a que en vez de esperar que los procesos extra penales terminen, de lo que se trata ahora es que el imputado se ponga a derecho.

Es preciso afirmar si se considera este supuesto como suspensión al igual que en el caso de la interrupción, la prescripción extraordinaria de la persecución debe de seguir corriendo (según el principio de legalidad, finalidad de la norma y para no vulnerarse la institución de la prescripción) a pesar de que el imputado contumaz no se ponga a derecho o no sea habido, lo contrario sería atentar contra el plazo razonable y crear un supuesto de imprescriptibilidad disimulado o tácito.

Entonces, se tiene un mismo supuesto para dos consecuencias excluyentes, por lo cual percibimos una contradicción en la que ha incurrido el legislador, lo cual haría inaplicable la norma, pues no se precisa cuál ha sido la intención del legislador (voluntas legislatoris).

En torno a la aplicación de lo dispuesto por el art. 1 de esta regla penal se tienen tres casos:

- i) Se inició el proceso penal y se declaró contumaz al procesado antes de la entrada en vigencia de la ley;
- ii) Se inició el proceso penal antes de la entrada en vigencia de la ley, pero luego de dicha vigencia el imputado es declarado contumaz; y,
- iii) Entra en vigencia la ley y se inicia un nuevo proceso penal en donde al imputado se le declara contumaz.

¿Para cuál de estos casos se aplicaría la ley? En nuestra opinión sólo para el tercer caso, pues si se aplicara para los otros casos se vulneraría el principio de lo más favorable, ya que se estaría aplicando la regla penal de manera retroactiva (*in malam partem*).

Interpretar lo dispuesto por el art. 1 de la ley como un supuesto de suspensión amparado en lo más favorable al reo es equivocado, porque lo más favorable no se hace en relación a los supuestos de una sola regla penal, sino cuando existe conflicto en el tiempo o en el espacio, por ende lo que se debe hacer aquí es inaplicar el art. 1 por no tener plasmado una finalidad coherente con todo el grupo de reglas de la prescripción de la persecución.

Así tal vez políticamente se justifique esta ley (algo mejor que el proyecto del congresista OLIVERA, obviamente), pero jurídicamente es una aberración.

Hasta dónde llegará la aberración de dicho ley, que según su art. 2, materia de análisis, se tendría que volver a abrir instrucción a todos aquellos que se encuentran siendo procesados y por supuesto a todos los encausados en procesos en que haya futuros contumaces. Si no queda clara la aplicación del artículo 1 de esta ley, la creación del tipo penal que contiene el artículo 2º ya de por sí implica una suerte de ampliación de la responsabilidad penal que veremos a continuación en el siguiente acápite.

En la actualidad se ha aplicado como un supuesto de suspensión y no de interrupción, aunque en muchos de los casos se ha cuestionado seriamente el hecho de no establecer un límite, aunque antes ya postulamos la idea de la inaplicación o por último que este plazo no impedía la prescripción extraordinaria, lo cierto es que ahora esta posición va cobrando fuerza al menos eso se tradujo en el último Acuerdo Plenario de marzo del presente año referido a si la suspensión que estableció el N.C.P.P. y que sería perfectamente aplicable a este supuesto.

No puedo dejar de desconocer la utilidad de esta norma en la lucha contra la corrupción, sin embargo, considero aún contingente este tratamiento así como cuestionable, por ello en todo caso sería necesario establecer un plazo mayor para estos casos en la regla penal, y así evitar recurrir a reglas procesales que pueden ocasionar abusos, si no se las restringe como en esta tesis se postula, así no comparto lo señalado por algunos que han querido defenderla teóricamente, y las razones ya han quedado expuestas.

8.2. EL DELITO DE CONTUMACIA.

A continuación se realiza de este otro extremo de la ley N° 26641:

1º **Bien jurídico:** Se tipifica una conducta que no vulnera bien jurídico alguno (salvo que uno asuma una postura formalista en donde se prescinde de todo bien jurídico, p. ej.: JAKOBS, pp. 14, **P.G.**). La falta de terminación regular de un proceso es una disfuncionalidad de la administración de justicia debido a su lentitud e ineficacia, lo cual se quiere encubrir trasladando a los procesados considerados contumaces toda la responsabilidad. Así pues hoy se tiene un retorno disimulado a la responsabilidad objetiva.

2º Los elementos del tipo: Se aprecia: - *Que todo agente se sustraiga a la acción de la justicia*. Lo cual es difuso pues o se admite que se trata de una ley penal en blanco⁴⁹⁴ o se tiene que reconocer que estamos ante un elemento normativo de un tipo formalmente cerrado (aunque en este caso devendría en inaplicable por ser demasiado amplio).

Particularmente me inclinó por la ley penal en blanco, pues el D. Leg. N° 125 art. 3 definió los casos en que una persona es declarada contumaz: art 3º.- «Se declara contumaz:

- a. Al que habiendo prestado su declaración instructiva o estando debidamente notificado, rehúye el juzgamiento en manifiesta rebeldía o hace caso omiso a las citaciones o emplazamiento que le fueran hechos por el Juez o Tribunal;
- b. Al que hallándose con libertad provisional o vigilada incurre en las actitudes descritas anteriormente;
- c. Al que estando detenido en las dependencias policiales o en un centro de reclusión se fugue para evadir la acción judicial».

Entonces, cada vez que una persona realice cualquiera de los actos contemplados por el art. 3º del D. Leg. N° 125 realizará el acto genérico de la sustracción de la justicia, luego se imposibilitaría la prescripción extraordinaria de la persecución, posibilitándose únicamente la prescripción ordinaria de la persecución (aunque en la práctica no se han presentado estos casos).

Otro elemento del tipo resulta ser *la declaración del estado de contumacia*, para lo cual tendría que suscitarse la notificación de la respectiva resolución. En estos casos el juez o la Sala tendrán que evaluar previamente.

3º ¿Qué clase de delito es la contumacia?

Considero que se trata de un delito permanente⁴⁹⁵. Ya que se puede dar el primer supuesto del tipo penal, pero aún no se habrá consumado el tipo penal, entonces para alcanzar la consumación será necesario que se haya declarado vía una resolución judicial el estado de contumaz, del sujeto activo.

Y además este delito tiene el carácter de ser de lesión y de resultado.

Desde todo punto de vista es rechazable lo dispuesto por el art. 3 de la Ley N° 26641, pues dispone indirectamente la aplicación retroactiva in malam parte en torno a las reglas de prescripción como al delito de contumacia lo cual es inconstitucional.

4º El sistema jurídico penal es único por lo que todas sus disposiciones son compatibles y concuerdan. Si esto es así, ¿por qué los arts. 87, 368 y 413 del CP contienen supuestos en los cuales se permite la libertad del imputado y del sentenciado, sin que sean responsables a menos que a la hora de huir cometan otro delito o, si estaban presos, que

⁴⁹⁴ Quintero (1996), pp. 24 y ss. Cuando se traten de normas del mismo rango véase Luzón (1996), pp. 148 y 149, quien incluso al referirse a una norma penal en blanco afirma que es una norma incompleta por su contenido (pp. 147).

⁴⁹⁵ Luzón (1996), pp. 312-316; quien bajo el criterio de “por el bien jurídico y el modo de afección del bien jurídico” agrupa a los delitos en: de lesión y de peligro, así como a los delitos instantáneos, permanentes y de estado.

la evasión se produzca mediante violencia o amenaza? Y sin embargo, cuando se trata de la prescripción de la persecución penal, el imputado es declarado contumaz, entonces cometería por ficción otro delito. Sinceramente esto no es sino otra sin razón del legislador.

- 5° Se afecta el fundamento mismo de la prescripción penal, pues el transcurso del tiempo deteriora la realización jurídico penal, al perder el juez manejo del caso. Lo mismo el fiscal, y la cada vez más defectuosa actividad probatoria, todo lo cual origina una inseguridad jurídica.
- 6° Se afecta el principio constitucional de irretroactividad de la norma penal al crear un supuesto basado en una conducta anterior, y, haciendo una interpretación muy ligera, se diría que se trata de un delito permanente, el cual prescribiría al cesar la permanencia.
- 7° Se dirá, por extensión, que hay una afectación del principio del “ne bis in idem”. Esta afirmación se hace ampliando el supuesto de que se trate de un mismo hecho con relevancia penal, considerando que en el delito de contumacia no hay bien jurídico protegido (no se vulnera el principio de lesividad), e incluso la pena así como su juzgamiento, dependen del mismo juez que se encuentra resolviendo sobre el delito inicialmente imputado.

Además, debemos de considerar todo esto para evitar el absurdo de la tipificación de la contumacia por la contumacia y así sucesivamente. Luego, la única forma de remediar este absurdo mientras no se derogue la Ley N° 26641, sería inaplicar respecto de su art. 2 y considerar que materialmente se trata de un mismo hecho con relevancia penal, pues en realidad el acto de vulnerar o sustraerse de la justicia no tiene porqué ser considerado un hecho punible con lo cual se afectaría el principio del non bis in idem. Distinto hubiese sido si en el art. 1° de la ley se hubiera reintroducido el caso de una ampliación del plazo de prescripción.

En torno a la contumacia en el derecho comparado se tiene el caso de Francia por el cual en el art. 133 numeral 5 de su código penal regula expresamente los supuestos de la contumacia o rebeldía [o por incomparecencia], pero relacionándola con la prescripción de la pena. Caso distinto es el de Alemania e Italia, pues en el primero el §78b 1, se considera como supuestos de la suspensión de la prescripción de la persecución penal, y en el caso del segundo, el art. 159 del CP (Ita.) también acoge este supuesto de manera genérica al referirse a la suspensión del curso de la prescripción.

8.3. LA POSICIÓN DE LA JURISPRUDENCIA Y EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

Resulta necesario examinar cómo se ha venido procediendo en el ámbito nacional después de entrar en vigencia la ley N° 26641:

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema se ha pronunciado por la aplicación de la ley N° 26641, en su resolución, aprobada por mayoría, del seis de setiembre de mil

novecientos noventa y seis (Exp. N° 21-92), contra el inculpado ALAN GABRIEL GARCÍA PÉREZ: Se ha observado lo siguiente:

- 1° Que dicha ley no afecta los principios de legalidad e irretroactividad;
- 2° En los considerandos se hace mención indistinta a la interrupción como un supuesto de declararse contumaz al acusado, y luego se concluye la suspensión⁴⁹⁶ de la prescripción de la acción penal («la prescripción de la acción penal se interrumpe desde que existen evidencias irrefutables que el acusado rehúye a la acción de la justicia y hasta que el mismo se ponga a derecho, en atención a ello en (sic) Juez declarará la condición de contumaz y, como consecuencia, la suspensión de la prescripción hasta que el procesado se presente ante el órgano jurisdiccional correspondiente y absuelva los cargos que se formulan» pp. 4);
- 3° También se afirma que el principio de no ser condenado en ausencia no se vulnera en relación a los contumaces (pp. 3); y, 5°) por último también es curiosa la parte final resolutive pues se remite copias al Fiscal de la Nación a fin de abrir instrucción por el «delito de contumacia».

En el voto singular se considera:

- 1° Se toma posición en torno a la naturaleza de la prescripción al decir que es un instituto de carácter penal-sustantivo, pues está normado en el código penal;
- 2° Considerando el anterior argumento se concluye que no es aplicable la duplicación del plazo de prescripción al caso concreto que establece la Constitución en su art. 41 in fine;
- 3° Otra cuestión que considero contradictoria es la mención implícita del principio de favorabilidad respecto a las normas procesales ¿Por qué hablar de la aplicación retroactiva de éstas si se ha reconocido a la prescripción como una institución de carácter sustantivo y no procesal? La única necesidad de hablar de esto sería con el fin de que no se le aplique para los ya declarados contumaces, pero diremos que tal declaración tiene un doble marco, no respecto a la declaración de contumacia, sino a la consecuencia que ello acarrea, como es a) considerarlo supuesto de un tipo penal y b) que al declarado contumaz se le suspenderá el plazo de prescripción; y,
- 4° En la parte resolutive se menciona los principios de legalidad e irretroactividad, a fin de no aplicarse la ley N° 26641 para los procesados que han sido declarados contumaces, ni la suspensión del plazo de prescripción.

⁴⁹⁶ En este mismo sentido la resolución de fecha cuatro de abril de 1997 de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, Exp. 08-96. En el Exp. N° 21-92 con fecha veintiséis de diciembre del 2000, por voto en mayoría se declaró fundada la excepción de prescripción de la acción penal deducida por la defensa de Alan Gabriel García Pérez, poniéndose fin a este proceso iniciado contra el ex-Presidente, por los fundamentos similares a las resoluciones anteriormente mencionadas.

Un aspecto anecdótico en la historia penal que quiero dejar testimoniado es que fue en el gobierno del ex-Presidente Alberto Fujimori Fujimori que se dio la ley N° 26641, sin embargo en el año 2006 A.V 45- 2003 (cuaderno principal) a este mímico se le aplicó esta ley declarándose contumaz y suspendiéndose el plazo de prescripción (Sánchez, 2000, pp. 491 a 493). Aquí se cumplió el dicho que Guillot murió guillotinado.

Pero de aquí se deduce que esta suspensión no atenta contra el plazo de prescripción extraordinaria, pues si así no fuera, tendríamos que preocuparnos de la posibilidad que bajo este supuesto de permanencia a diferencia de los otros (que pueden prescribir en la vía extrapenal) sólo podría darse la prescripción de acuerdo al plazo máximo de la denominada prescripción absoluta. Por eso, es que más arriba hemos concluido que no se afecta a la prescripción extraordinaria.

Luego de esta resolución las salas han interpretado que se suspende el plazo de prescripción y se remiten las órdenes de captura a los juzgados capturadores (ahora denominados juzgados que ven procesos en reserva, informando al fiscal de turno a fin de que formalice denuncia ante la mesa única por el delito de contumacia. No obstante, no conocemos de casos concretos, en los cuales se haya formalizado denuncia penal por contumacia.

Lo absurdo: ¿Es factible la contumacia de la contumacia? considerando que el delito inicial prescribió, luego de lo cual se apersona al proceso por “delito de contumacia” el imputado contumaz, pero nuevamente no se apersona por lo cual se le declara nuevamente contumaz y se le abrirá otro proceso y así sucesivamente.

Sin embargo, ha resultado controvertido y hasta divergente el tenor de la resolución⁴⁹⁷ (firmada por los vocales supremos GONZÁLES, SEMINARIO, TINEO y ALMEIDA) con el informe del vocal RONCALLA:

1º En lo que se refiere a la prescripción de la persecución penal:

- El tenor de la resolución es la suspensión del plazo de prescripción (pp. 1), en cambio el informe en su considerando 7) expresa la interrupción del plazo de prescripción «Que la ley veintiséis mil seiscientos cuarentiuno prevé la declaración de contumacia como un nuevo supuesto de interrupción de la prescripción de la acción penal» (pp. 3).
- Es interesante el considerando 10) pues se recoge la tesis de la aplicación de la unidad de la ley, lo cual no comparto (véase lo referido a la prescripción y el conflicto de leyes en el tiempo). Así se tiene: «10) *Que la ley más favorable es aquella cuya aplicación, En (sic.) el caso concreto, produce para el reo un efecto más benigno, y para determinar cuál es la ley cuya aplicación conduce a ese efecto es preciso tener en cuenta no sólo la parte de la norma que contiene la sanción, sino también la parte que contiene el precepto, y, por lo mismo, los elementos constitutivos de cada una de las figuras criminosas, así como las condiciones a que está subordinada la penalidad del hecho o la procedibilidad las circunstancias, las causas de exclusión y la extinción del delito y la pena*» (pp. 4).

2º En torno al delito de contumacia: - la resolución explica por qué a este caso le es aplicable la ley N° 26641 (art. 2):

⁴⁹⁷ Emitida por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema con fecha cuatro de abril de 1997 en el Exp. 08-96.

«VISTOS, de conformidad con el dictamen del Señor Fiscal Supremo; y CONSIDERANDO además que, una conducta puede venir siendo realizada por las personas sin que tuviera carácter delictuosa, pero si el Estado dentro de su Política Criminal; y ejerciendo su potestad Ius Puniendi la tipifica como delito, dicho comportamiento queda incorporado como tal a la Legislación Penal Sustantiva si reúne los elementos del tipo, que exige la norma que la punibiliza y ello no atenta ni al principio de legalidad ni irretroactividad, que el artículo segundo de la Ley veintiséis mil seiscientos cuarentiuno tipifica el delito de Contumacia para los encausados que estando debidamente informados, emplazados y declarados como contumaces no se ponen a disposición del Órgano jurisdiccional legalmente constituido que los requiere, incurriendo así por sustracción o rehusamiento en los alcances del tipo aludido, que el artículo tercero de esta ley dispone que se aplique a los procesos penales en giro, situación jurídica que es la del caso de autos, por lo que declararon NO HABER NULIDAD en la resolución de fojas tres mil quince, su fecha seis de setiembre de mil novecientos noventa y seis, en la que se declara reo contumaz al acusado Alan Gabriel García Pérez» (p. 1).

Lo que se ignora en este caso es que toda ley penal que tipifica un delito se da para regular conductas futuras, asimismo se considera que en el momento en que la ley entra en vigencia por criterios de prevención general se les ofrece a los ciudadanos la potestad de no cometer actos que antes estaban sancionados penalmente.

Esto es claro tratándose de delitos y conductas instantáneas o permanentes que recién van a empezar a realizarse. Empero, es inconcebible aplicarlas a conductas que ya se venían realizando con anterioridad y que incluso no eran reprimidas penalmente. Puesto que, se trataban de actos que no lesionan bienes jurídicos, luego cómo crear la ficción de que se lesiona un «bien jurídico» que ahora recién se ha creado, ante esto nos preguntamos en qué momento se lesionó el «nuevo» bien jurídico, si la conducta ya venía realizándose, cuando se dieron los actos preparatorios, cuando empezó el iter criminis y cuándo se consumó.

Entonces, en el caso bajo comentario se ha ignorado todos estos aspectos de un análisis dogmático, pues se declaró contumaz a quien ya venía en un estado de ausente, pero ahora se le abrirá proceso por el delito de contumacia.

Por su parte de manera mas reciente la Corte Suprema también ha ido aplicando esta figura así se tiene lo resuelto a través de la ejecutoria emitida en el R.N. N° 3944-2008⁴⁹⁸, Arequipa, donde se señala:

"Sétimo: Que en cuanto a la viabilidad de suspender los plazos de prescripción del reo contumaz, la impugnada consideró que la Ley veintiséis mil seiscientos cuarenta y uno colisiona con los artículos ochenta y ochenta y tres del Código Penal, y solucionó el aparente conflicto aplicando el principio de favorabilidad y escogiendo las normas del código sustantivo...Al respecto emerge de la sesión de juicio oral de fecha treinta de abril del dos mil ocho...que la Sala Penal Superior

⁴⁹⁸ Véase el ANEXO N° 3, documento N° 39.

declaró reo contumaz...Ahora bien el artículo uno de la Ley número veintiséis mil seiscientos y cuarenta y uno, introduce como causal de prolongación el plazo de prescripción la declaración de contumacia del imputado...Jurisprudencia consolidada interpreta que un supuesto absolutamente legítimo de prolongar el plazo de prescripción es la fuga o alejamiento del imputado, pues lo indebido del retraso se relaciona causalmente, como factor preponderante, con la actitud del imputado...Debemos precisar que la Ley número veintiséis mil seiscientos cuarenta y uno,...constituye una excepción a la prescripción ordinaria como mecanismo de extensión temporal de la persecución penal, en tanto, se integró legalmente como una causa adicional de suspensión de la acción penal y no de interrupción... de lo que se desprende además que la declaración de contumacia no aparejada por la suspensión de la prescripción constituye una omisión meramente formal, pues se trata de un efecto jurídico necesario de la prolongación del plazo de prescripción, de suerte que declarada la contumacia automáticamente se une, por ministerio de la ley, el efecto de la suspensión del plazo de prescripción....En consecuencia, al considerar incorrecta la interpretación efectuada por el Colegiado Superior en este extremo, corresponde admitir los argumentos del Fiscal Superior recurrente y revocar la decisión, en mayoría, de la Sala Penal Superior de declarar No Ha Lugar la solicitud del Ministerio Público de suspender los plazos de prescripción", (pp. .6, 7 y 8).

También el Tribunal Constitucional se ha pronunciado al respecto y ha señalado que esta suspensión no puede atentar contra el plazo razonable, pues al declarar en suspenso el plazo de prescripción de la persecución penal, en realidad no se tendría certeza de cuándo prescribiría por esa razón el Tribunal Constitucional ha limitado la aplicación de esta disposición de la Ley N° 26641, así se tiene los fundamentos de la sentencia recientemente emitida a propósito del caso del procesado contumaz ERNESTO CÉSAR SCHÜTZ LANDÁZURI emitida en el EXP. N° 03681-2010-PHC/TC⁴⁹⁹ que señala:

“OCTAVO: En atención al principio de favorabilidad y a la circunstancia de que el juzgamiento del acusado depende de la extradición, resulta legítimo optar por suspender el plazo prescriptorio de la acción penal conforme a lo previsto en el artículo 84 del Código Penal, pues el imputado, conocedor de las consecuencias de su conducta procesal, incurrió en la causal de contumacia legislada anteladamente, y por ende, consciente de su prohibición y efectos jurídicos.

NOVENO: No está de más señalar que con esta opción, no se vulnera derecho constitucional reconocido al imputado, en la medida que no se restringe de manera arbitraria su libertad personal ni derechos conexos a ella; por lo que resulta razonable y compatible con la potestad punitiva del Estado, suspender el plazo prescriptorio de la acción penal, desde el momento de la declaratoria de contumacia que nos ocupa” (pp. 3 y 4).

“5. La motivación esgrimida en la Resolución de fecha 21 de noviembre de 2006 no es conforme con el supuesto previsto en el artículo 84° del Código Penal, para que legítimamente se declare la suspensión de la prescripción de la acción penal. Este Tribunal considera que su motivación es arbitraria, por cuanto no justifica

⁴⁹⁹ Véase esta sentencia en el ANEXO 5 de este trabajo de investigación, específicamente el documento N° 18A.

adecuadamente las razones por las cuales debe suspenderse el plazo de prescripción de la acción penal y porque la contumacia no puede ser entendida como otro procedimiento ajeno y distinto al proceso penal, para que pueda justificarse la suspensión de la prescripción de la acción penal. Tampoco resulta racional considerar que la contumacia en el caso del favorecido incida en la iniciación del proceso penal que se le sigue (...)"

"6. En tal escenario, este Tribunal considera que la Resolución de fecha 21 de noviembre de 2006 vulnera el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, en la medida que su argumentación no es acorde con lo prescrito en el artículo 84° del Código Penal, ya que ordenó -mecánicamente- la suspensión del plazo de prescripción de la acción penal sobre la base de una declaratoria de contumacia, sin tener presente que en la STC 04959-2008-PHC/TC se precisó que "la Ley N° 26641.[sic] que dispone la suspensión de los plazos de prescripción de la acción penal para los reos contumaces, sólo puede ser de aplicación en caso la misma no resulte vulneratoria del derecho al plazo razonable del proceso" (pp. 4 y 5).

Empero, el precedente más importante que dio el Tribunal Constitucional en esta materia fue a través de la sentencia expedida en el expediente 04959-2008-PHC/TC⁵⁰⁰ cuyos principales fundamentos señalaron lo siguiente:

"12. En el presente caso, tal como consta de autos, se imputa al recurrente el delito de difamación previsto en el tercer párrafo del artículo 132° del Código Penal, el cual tiene prevista una pena privativa de libertad de tres años, por lo que conforme con el artículo 80° del Código Penal, el plazo ordinario de prescripción sería de tres años, y el plazo extraordinario de prescripción, de cuatro años y medio, conforme al artículo 83° in fine del Código Penal (...)", (p.3).

"14. Por otro lado cabe señalar que si bien la contabilización del plazo de prescripción desde el momento en que -conforme se ha determinado en el proceso penal- se cometió el hecho materia de querella, el plazo extraordinario de prescripción habría vencido el 22 de diciembre de 2008, es preciso señalar que el artículo 1° de la Ley N° 26641 dispone la suspensión de los plazos de prescripción de la acción penal para los reos contumaces. En efecto, conforme consta a fojas 127 de autos, con fecha 4 de octubre de 2007, se declaró contumaz al recurrente, disponiéndose, entre otras medidas, la suspensión de los plazos de prescripción hasta que el querellado sea puesto a disposición del juzgado o se presente de forma voluntaria (...)"

⁵⁰⁰ Véase esta sentencia en el ANEXO N° 5 de este trabajo de investigación, específicamente el documento N° 18; así también la sentencia emitida en el Exp. 4118-2004-HC en el documento N° 6, Exp. 1279-2010-PHC/TC en el documento N° 15, Exp. 4532-2009-PHC/TC en el documento N° 16, Exp. 2857-2009-PHC/TC en el documento N° 17, Exp. 872-2009-PHC/TC en el ANEXO con el N° 19, Exp. 552-2003-PHC en el ANEXO con el N° 16, Exp. 7451-2005-PHC/TC en el ANEXO con el N° 20, Exp. 552-2003-PHC/TC en el ANEXO con el N° 21, Exp. N° 3509-2009-PHC/TC en el ANEXO con el N° 25, Exp. 3711-2011-PHC/TC en el ANEXO con el N° 16, y últimamente en el Exp. 03681-2010-PHC/TC en los documentos N° 18a, 24a y 24b del ANEXO N° 5 para el caso Shutz en donde por mayoría el TC hizo respetar su decisión con argumentos de naturaleza procesal así el voto de Calle Hayen.

“16. En este sentido este Tribunal Constitucional considera que la Ley N° 26641, que dispone la suspensión de los plazos de prescripción de la acción penal para los reos contumaces, sólo puede ser de aplicación en caso la misma no resulte vulneratoria del derecho al plazo razonable del proceso (...).”

“19. En el presente caso cabe señalar que en cuanto a la actividad del órgano jurisdiccional, del análisis de lo actuado, no se advierte dilaciones causadas por el propio órgano jurisdiccional. Por otro lado, respecto del criterio atinente a la complejidad del proceso se advierte que éste, por sus características no reviste mayor complejidad...Sin embargo, respecto de la actividad procesal del querellado se advierte que habiéndose fijado fecha de lectura de sentencia para el 23 de julio de 2007, la que no se pudo llevar acabo y ha tenido que ser reprogramado en varias oportunidades por la incomparecencia del propio recurrente (...) por lo que puede afirmarse que en el presente caso la dilación que ha sufrido el proceso es imputable al propio procesado, por lo que no se configura una vulneración del plazo razonable del proceso”, (pp. 3, 4 y 5).

“22. Asimismo, del análisis efectuado es posible afirmar en el presente caso que la suspensión del plazo de prescripción en virtud de la ley N°26641 no resulta vulneratoria del derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas y en tal sentido resulta aplicable al caso. Y es en aplicación de dicha suspensión del plazo de prescripción de la acción penal que el referido plazo aun no ha vencido, por lo que la pretensión debe ser desestimada”, (pp. 5).

El tema del plazo razonable se ha convertido en indispensable para resolver los problemas de la prescripción sobretudo en los casos de la suspensión, así por ejemplo la Cuarta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres 01 de julio de 2009 inaplicó la ley N° 26641 en torno al supuesto de desconocer la suspensión del plazo de prescripción vía control difuso, la misma que elevada en consulta ante la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente desaprobó la resolución consultada que había declarado inaplicable el art. 1 de la ley N° 26641⁵⁰¹.

El derecho fundamental del plazo razonable ha tenido que invocarse en diversas sentencias del TC y a la vez utilizadas argumentativamente en varias ejecutorias a fin de resolver los excesos provocados por la irracional aplicación de las reglas penales de suspensión de la prescripción sea de la provocada por el art. 339 numeral 1 del N.C.P.P., así como de los alcances de la ley N° 26641 art. 1, poniéndose en tela de juicio incluso a la misma prescripción penal.

Sin embargo, pienso que el rol de este derecho fundamental sirvió y sigue sirviendo para frenar los excesos de los magistrados que valiéndose de una postura positivista o ideológica (los activistas) aplicaron literalmente la suspensión de la prescripción de la persecución penal, situación inadmisibles bajo un esquema neoconstitucional o postpositivista.

⁵⁰¹ Véase la Ejecutoria Suprema emitida a propósito de la Consulta en el Exp. N° 1354-2010-Lima que la adjuntamos en el ANEXO N° 8 de esta investigación.

A pesar de reconocer este uso abusivo de la suspensión por parte de los magistrados no se colige que es el sistema de la prescripción penal adoptado por el CP, el que está cuestionado o en crisis, pues si se tuviera jueces que hicieran su trabajo a tiempo, si el Estado actuara con prontitud al procesar los medios de prueba necesarios para imputar acciones penales, y si los fiscales actuaran con prontitud, o si los congresistas legislaran responsablemente y no basados en la coyuntura, es lógico que no habrían casos de prescripción, por lo tanto la relevancia del plazo de prescripción no cuestiona el modelo del CP, sino el de la ley N° 26641, así como el de N.C.P.P., por ende recuerdo que el plazo razonable no se invocaba para la aplicación o inaplicación de la institución de la prescripción penal, sino más bien para justificarla (posición de Pastor en argentina).

9. LA DECLARACIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN.

9.1. DE OFICIO.

Si se parte de la indisponibilidad del derecho de prescripción, entonces primará la declaración de oficio⁵⁰².

En la doctrina JULIO BANACLOCHE⁵⁰³ bajo la perspectiva procesal de la prescripción, sostiene “que produce efectos en el proceso, y derivativamente, fuera de él. Dentro de las categorías procesales, es una excepción procesal penal fundada en la existencia de un obstáculo que impide el normal desarrollo del juicio oral y el pronunciamiento de una sentencia justa. En cuanto a tal excepción puede ser apreciada de oficio en cualquier momento del proceso, y ello por mor [sic] del interés público tutelado en el proceso penal y de las peculiaridades que la acción tiene en dicho proceso. De esta forma, desde el instante mismo en que se aprecie la prescripción, el Juez debe dictar una resolución que ponga fin al proceso, resolución que pone de manifiesto la imposibilidad presente y futura de que exista un pronunciamiento judicial sobre ese objeto del proceso.”

En el derecho comparado se tiene: el CP (Ch.), art. 102; y el C.P. (Méx.F.), art. 101, párrafo tercero.

<p>La jurisprudencia respecto a la declaración vía sentencia de la prescripción extraordinaria de la acción penal:</p>

<p><i>1. Si al momento de emitir sentencia se han vencido los plazos ordinario y extraordinario de prescripción de la acción penal; y si no media renuncia expresa del procesado a la prescripción, el juzgador debe declararla en la sentencia y archivar lo actuado definitivamente (Ejecutoria Superior del 22 de Noviembre de 1992. Reaída en la causa N° 733-91 de la Décimo Primera Sala Penal de la Corte Superior de Lima).</i></p>

⁵⁰² Los defensores de esta posición la justifican amparados en el criterio de “orden público”. Así Gómez E (1936), pp. 679; Fontán (s/f), pp. 487; Nuñez (sin fecha), pp. 540. Para otros por razones que la prescripción es de derecho material Mapelli y Terradillos (1996), pp. 228.

⁵⁰³ Banacloche, J. (1997) *Algunas reflexiones críticas en torno a la prescripción penal*, pp. 312. Algo anecdótico de esta investigación es que toda esta cita aparece corregida en la página 44 de la monografía titulada “El tratamiento procesal penal de la prescripción del delito” de Juan Ramón Medina Cepero, quien no señala ni entre comillas la cita del autor Banacloche Palao.

9.2. DECLARACIÓN DE PARTE.

La declaración de prescripción se puede dar también a pedido de parte (esquema privatista del proceso), pero hoy en día no se sigue esta propuesta.

9.3. DECLARACIÓN MIXTA.

Se denomina “mixta”, pues se considera que la prescripción puede declararse de oficio o a pedido de parte.

Éste es el modelo que se acoge en el ordenamiento penal peruano.

En el derecho comparado se tiene: el CP (Ecu.), art. 114; el C.P. (Méx. D.F.), art. 106; el CP (Pan.), art. 100; y el CP (T.L.), art. 111.

El modelo mixto permite que la declaración de la prescripción se pueda dar a pedido de parte, la misma que se hace valer a través del medio de defensa técnico denominado “excepción de prescripción de la acción penal” sea ordinaria o extraordinaria, y puede declararse también de oficio. Pero hay que establecer que cuando la declara el juez de oficio lo hace como un acto de oficialidad. Pues el juez tiene que fijarse si los llamados presupuestos procesales se cumplen o no de acuerdo a ley; entonces, sólo teniendo como punto de partida esto, es que se podrá justificar dicha declaración.

Como se sabe, esta declaración se resuelve a través de un auto. Empero, es costumbre que los jueces lo hagan a la hora de emitir sentencia, con lo cual hay que determinar si esto es correcto o no, pues como se sabe es un gran gasto realizar todo un proceso para que al final lo manden al archivo, cuando anticipadamente pudo evitarse tal gasto.

También resulta importante establecer que la prescripción de la pena se resuelva por medio de un auto en el cual se declare rehabilitado al procesado, previa solicitud de parte (vía un escrito) o de oficio por el Juez.

La jurisprudencia respecto la prescripción de oficio:

1. «...declararon de oficio FUNDADA la excepción de prescripción en consecuencia EXTINGUIDA la acción penal incoada contra...» (Ej. Sup del 18 de Abril de 1994. En Normas Legales Ob. cit. pp. J-32)

10. LA DECLARACIÓN DE PRESCRIPCIÓN VÍA ACCIÓN DE REVISIÓN.)

Al respecto, la Corte Suprema fijó posición en el ordenamiento jurídico con el CP (1924) en concordancia del C de PP de 1939, al establecer que se declare la prescripción de la acción penal vía la procedencia de un recurso de revisión, así señaló que «*la prescripción es medio de defensa que la ley concede al procesado con el objeto de extinguir la acción instaurada en su contra, se basa exclusivamente en el transcurso del tiempo, puede ejercitarse en cualquier etapa del proceso y funciona de oficio. Procede el recurso de*

revisión de la sentencia que condena al recurrente a la pena de prisión después de 9 años de perpetrado del delito en el que se le ha considerado como cómplice, es decir, que se le ha condenado por un delito cuya acción estaba prescrita» (Res. de sala Plena de la Corte Suprema de 17 Setiembre 1973. R. de J.P. 1973, pp. 1395).

Sin embargo, mi opinión contrasta con la asumida por la Corte Suprema por las siguientes razones:

- 1º La interposición de medios de defensa técnico (excepción de prescripción), sólo se avoca a procesos, empero el recurso de revisión se otorga una vez finalizado el proceso.
- 2º Las causales para que proceda el recurso de revisión no contemplan la interposición de medios de defensa (excepción de prescripción).

De ahí que al amparo de el C de PP de 1939, se tenga que admitir la existencia de una laguna o vacío jurídico que de *lege ferenda* tendría que regularse, situación que pretendió resolverse mediante la propuesta regulada en el art. 400 numeral 3 del Proyecto de Código Procesal Penal de 1996, al haberse previsto este caso dentro de los supuestos de la acción de revisión, así se estableció que *«la revisión de sentencias condenatorias procede, en todo tiempo, en los siguientes casos: (...)3. Cuando se hubiese dictado sentencia en un plazo que no debía promoverse, o no debió proseguirse, al haberse operado la prescripción de la acción penal u otra causal de extinción»*.

En el derecho comparado también se ha contemplado a la prescripción de la acción penal como un supuesto de procedencia, así lo precisa el art. 192 numeral 2 del C de PP de Colombia.

11. LA DECLARACIÓN DE PRESCRIPCIÓN VÍA CASACIÓN.

El órgano encargado de casar una resolución puede declarar prescrita una acción penal, en el marco de su función casatoria⁵⁰⁴, cuando se le consulta acerca de la denegatoria de la extinción de la acción penal o de la ejecución de la pena. Pero esto no significa que la Sala de casación esté administrando justicia o aplique su función jurisdiccional (así por ejemplo, que declare prescrita la acción o la pena tomando como referencia el plazo transcurrido durante su interposición), ya que la extinción de la acción penal o de la ejecución de la pena sólo se declara por haberse interpretado o aplicado equívocamente la regla penal o la unificación de la jurisprudencia, sea por el cómputo de los plazos, sea por las causales, por la aplicación de los supuestos del art. 1 de la ley 26641, etc.

⁵⁰⁴ Carrión, J. (1995) El recurso de casación en el proyecto de código procesal penal peruano, pp. 52. A modo de ejemplo véase Bernal, M. (1955) Prescripción de la acción penal. La causal primera de casación. Términos de la prescripción. Cómputo de máximo de acuerdo con la especie del delito, pp. 18 y ss.

Jurisprudencia de la declaración de prescripción vía casación:

*1. La Suprema Sala Penal haciendo uso de la facultad de casación de la que está investida; declara **NO HABER NULIDAD** en la sentencia recurrida a fojas seiscientos, su fecha veinticuatro de febrero del año en curso, en el extremo que revocando la apelada de fojas quinientos setentiséis, su fecha diecinueve de julio de mil novecientos noventiuno declara extinguida por prescripción la acción penal incoada (Ejecutoria Suprema del 25 de setiembre de 1992. Recaída en la causa N° 1329-92-A. Procede del Cuzco).*

En el derecho comparado, específicamente el caso de Colombia, se ha contemplado este supuesto, considerando que “la casación procede contra toda clase de sentencia de segunda instancia por toda clase de delitos, algunos con una pena menor, por lo que no en pocas oportunidades lograría la prescripción de la acción penal, se introdujo este filtro contra la impunidad”⁵⁰⁵.

Por ende, si en un proceso penal se interpone el recurso de casación, el plazo de prescripción se suspende desde la interposición hasta que se resuelva, suspensión que no será mayor a cinco años como plazo máximo, así se contempla en el art. 189 del C de PP de Colombia que señala: “proferida la sentencia de segunda instancia se suspenderá el término de prescripción, el cual comenzará a correr de nuevo sin que pueda ser superior a cinco (5) años”, sin embargo se propuso “agregar que si no se resuelve dentro de determinado tiempo, debe procurarse una sanción para el Estado consistente en (que) reinicie los términos de prescripción (...)”⁵⁰⁶.

La casación ha sido regulada en el N.C.P.P. en el Perú, así se ha contemplado dentro de sus presupuestos la posibilidad de ser declarado procedente aquellos casos en las causales de extinción de la acción penal y de la ejecución de la pena, por lo que es perfectamente posible que los casos de prescripción penal se vislumbre vía el recurso de casación, sea que se declaren vía auto o sentencia.

La prescripción penal puede ser vista a través de la casación en dos casos:

- 1° Desde la perspectiva de haberse concedido la prescripción como supuesto de extinción de la acción penal o como supuesto de extinción de la ejecución de la pena.
- 2° Desde la perspectiva de haber sido denegado el pedido de prescripción de la acción penal o el pedido de la prescripción de la ejecución de la pena.

Sin embargo, se puede vislumbrar un tercer caso a partir de los supuesto de denegatoria de prescripción penal, pues se puede replantear los supuestos de hecho que se habían denegado por no haber prescrito a la fecha de su petición, en un momento posterior tales como al día siguiente de la denegatoria de la prescripción e incluso el día de la vista de la causa, situación que puede ser aprovechada por las deficiencias legislativas.

⁵⁰⁵ Rodríguez O. (2008), pp. 195 y 196.

⁵⁰⁶ Rodríguez O. (2008), pp. 196.

De allí que al no haberse regulado el supuesto de suspensión del plazo de prescripción de la acción penal o de la ejecución de la pena, entonces es posible que se pueda conceder, por lo que urge de inmediato una reforma de este supuesto en el NCPP y no creo que esto se solucione con un acuerdo plenario.

Luego de la entrada en vigencia del N.C.P.P., por el cual se reguló el recurso de casación y que se encuentra vigente en dieciséis distritos judiciales, a la fecha aún no ha existido ningún caso de prescripción por casación⁵⁰⁷.

12. LA PRESCRIPCIÓN Y LA EXTRADICIÓN.

La extradición es un procedimiento especial cuya regulación se encuentra en el Código Procesal Penal del 2004 (D. Leg. N° 957), la misma que derogó la Ley N° 24710, como regla subsidiaria, en defecto o en ausencia de convenios y/o tratados de derecho internacional. El Perú adoptó el sistema mixto de extradición.

El extradición ha sido definida desde diversas perspectivas sean estas formales, descriptivas y en algunos casos siguiendo a la euroorden⁵⁰⁸.

Una definición *formal*, asumida por la mayoría de penalistas, considera que se trata de “el acto formal a través del cual un Estado entrega a otro Estado a un sujeto procesado o condenado por la comisión de un hechos delictivo, con el propósito que el Estado solicitante lo juzgue o ejecute la totalidad o parte de la pena impuesta”⁵⁰⁹.

Una definición *descriptiva* es la que formula MANUEL ÁLVAREZ CHAUCA, para quien la extradición “constituye no solo el acto de entrega o la solicitud formal de requerimiento de entrega, sino también el procedimiento encaminado desde el Estado requiriente que se materializa con la presentación de una petición de carácter formal al Estado requerido, con el fin que le entregue a una persona ubicada en su territorio, para ser juzgada o que cumpla una sanción impuesta por sus autoridades competentes, a su vez importa la activación de una serie de actos en el Estado requerido, destinados al estudio, análisis y decisión de la petición formulada, que podría acabar con la aprobación favorable del requerimiento de entrega y el posterior traslado del sujeto al Estado requiriente para el cumplimiento de los fines reclamados”⁵¹⁰.

Es interesante la perspectiva, que en el derecho español, plantea BEATRIZ GARCÍA SÁNCHEZ, quien realiza una seria evaluación de la extradición luego de la euroorden, en la que considera que la extradición “puede constituir un instrumento eficaz en la lucha contra la delincuencia compatible con el respeto de los derecho fundamentales de todos los individuos, si los Estados tienen voluntad de ello y facilitan los medios adecuados a las

⁵⁰⁷ Al respecto ha sido interesante la investigación realizada por Cesar San Martín Castro al realizar una evaluación de la casación desde el año 2007 hasta el 18 de enero de 2010, en el se confirma esta afirmación. (2011), pp. 502 y ss.

⁵⁰⁸ García B. (2005), pp. 477.

⁵⁰⁹ Álvarez (2009), pp. 41.

⁵¹⁰ Álvarez (2009), pp. 42.

administraciones de justicia correspondientes”⁵¹¹, mostrando además su rechazo tajante a remplazar la extradición por la simple entrega o cualquier otra forma de aprehensión. Por último, esta autora destaca a la extradición como un nuevo sistema de cooperación jurídica internacional (algunos utilizan el término mecanismo en vez de sistema, así ÁLVAREZ, p. 42), en donde la lucha contra la delincuencia y la protección de los derechos fundamentales coexistan.

Siendo los tratados y convenios internacionales instrumentos que regulan las relaciones entre países, en materia de extradición esto no es ajeno realizar un recuento únicamente de aquellos Tratados que han regulado expresamente el supuesto de la prescripción penal.

12.1. TRATADOS MULTILATERALES.

12.1.1. El Tratado de Derecho Penal Internacional de 1889⁵¹².

En su artículo 14 se refiere a que «la prescripción se rige por las leyes del Estado al cual corresponde el conocimiento del delito». Y respecto a la extradición, dicho tratado exige como uno de los requisitos, en su Art. 19 inc. 4º «que el delito no está prescrito con arreglo a la ley del país reclamante».

También se dio otro Tratado de Derecho Penal Internacional⁵¹³, el cual en su art. 16 exige que *«la prescripción de la acción y de la pena se juzgarán por los jueces o tribunales y con arreglo a las leyes del Estado al que corresponde el conocimiento del delito»* y respecto de la extradición, en el art. 20 literal h) se afirma que no se concederá *«si la acción o la pena estuvieran prescritas según las leyes del Estado requirente antes de la prisión del inculcado»*, y esto se complementa con lo dispuesto en su art. 22 cuando se afirma que *«cuando el individuo reclamado se hallare privado de su libertad en virtud de procesamiento o cumplimiento de condena en el Estado requerido, su entrega podrá ser diferida hasta después de levantada la restricción de su libertad o de extinguida la condena, quedando suspendida, mientras tanto, la prescripción de la acción y de la pena»*.

12.1.2. Acuerdo de extradición adoptado por el Congreso Internacional de Caracas⁵¹⁴.

El art. V del acuerdo se refiere a la no procedencia de la extradición cuando opera la prescripción, así el texto de dicho artículo refiere: *«Tampoco se acordará la extradición en los casos siguientes: b) Cuando según las leyes del Estado al cual se dirige la solicitud hubiere prescrito la acción o la pena a que estaba sujeto el enjuiciado o condenado»*.

⁵¹¹ García B. (2005), pp. 471 y ss.

⁵¹² Como parte de los Tratados de Montevideo de 1889 suscritos por el Perú. García-Calderón (1969), pp. 97.

⁵¹³ Que forma parte de los Tratados de Montevideo de 1940, pero que el Perú no ratificó, García-Calderón (1969), pp. 129-130.

⁵¹⁴ Firmado en Caracas, el 18 de julio de 1911 y ratificado por el Perú el 22 de agosto de 1915; su acuerdo interpretativo fue firmado en Quito el 10 de agosto de 1935, véase en el ANEXO 6, de esta investigación, específicamente el documento N° 22.

12.1.3. El Código de Derecho Internacional Privado (Código de Bustamante)⁵¹⁵.

El cual precisa en su libro tercero: Derecho Penal Internacional, Cap. IV, arts. 312 y 313 que: art. 312.- *«La prescripción del delito se subordina a la ley del Estado a que corresponda su conocimiento»* y el art. 313.- *«La prescripción de la pena se rige por la ley del Estado que lo ha impuesto»*.

La Convención Interamericana sobre Extradición, aprobada por la Conferencia Especializada Interamericana sobre Extradición llevada a cabo en Caracas con fecha 25 de febrero de 1981, consigna en sus arts. 4 y 11 breves referencias en torno a la prescripción.

Así el art. 4 trata de la improcedencia de la extradición: *«La extradición no es procedente: 2.- Cuando esté prescrita la acción penal o la pena, sea de conformidad con la legislación del Estado requirente o con la del Estado requerido, con anterioridad a la presentación de la solicitud de extradición»*; y en su art. 11 indica el documento de prueba que se debe adjuntar a la solicitud de extradición: *«Con la solicitud de extradición deberán presentarse los documentos que se expresan a continuación debidamente autenticados en la forma prescrita por las leyes del Estado requirente: b) Texto de las disposiciones legales que tipifican y sancionan el delito imputado, así como las referentes a la prescripción de la acción penal y de la pena»*.

12.2. TRATADOS BILATERALES⁵¹⁶.

Los diversos Tratados bilaterales de manera más reciente han adoptado formas en la expresamente regulan la prescripción de la persecución penal así como de la ejecución de la pena como causal de denegación de la extradición, así también han establecido expresamente la regla que señala que el aplazamiento de la entrega suspende el plazo de prescripción de la persecución penal del proceso que motivó la extradición en el país requirente, es decir tendríamos otro supuesto de suspensión dentro de la causal de “otro procedimiento”, al igual que el antejuicio. Este es el caso de los Tratados con Argentina, Paraguay, Uruguay y El Salvador (véase el anexo correspondiente donde figura el texto de cada uno de estos Tratados).

Otro supuesto de suspensión se encuentra en el Tratado con Corea, el mismo que precisa en su art. 3, bajo la sumilla de denegación de extradición, numeral 3, que:

"3. Cuando un procesamiento o la pena por delito por el cual la extradición es solicitada hubiere prescrito de acuerdo a lo establecido por la ley de la Parte

⁵¹⁵ Este Código fue ratificado por el Perú el 19 de agosto de 1929, véase en el ANEXO 6, de esta investigación, específicamente el documento N° 23.

⁵¹⁶ Francia, Bélgica, Gran Bretaña e Irlanda, Corea del Sur, Panamá, Italia, Estados Unidos, China, México, España, Brasil, Uruguay, Guatemala, El Salvador, Bolivia, Costa Rica, Argentina, Ecuador Paraguay, Chile son los países con los que el Perú ha suscrito Tratados de Extradición (véase el anexo correspondiente de esta investigación), véase en el ANEXO 6.

Requerida para la comisión del mismo delito. Los hechos o circunstancias que suspenderían la prescripción bajo la ley de la Parte Requiriente serán acogidos por la Parte Requerida, en este caso la Parte Requiriente proveerá de una declaración escrita exponiendo sus disposiciones legales relevantes en relación a la prescripción."

En los Tratados más antiguos y en algunos más recientes se sigue la cláusula específica solo como causal de denegación de la extradición de la persecución penal así como de la ejecución de la pena. Así por ejemplo: Francia, Bélgica, Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda, Chile, España, México, Ecuador, China, Estados Unidos, Italia, Panamá, Brasil, Costa Rica, Bolivia y Guatemala⁵¹⁷.

A continuación se muestra el análisis de algunos de los Tratados:

12.2.1. Convención para la Extradición recíproca de criminales, celebrado con la República Francesa⁵¹⁸.

Esta Convención precisa en su art. 9: *«No podrá verificarse la extradición si después de los hechos imputados del proceso o la condena ha pasado tiempo suficiente para que el perseguido o condenado pueda oponer la prescripción de la pena o de la acción según las leyes del país donde se ha refugiado».*

12.2.2. Convención sobre Extradición y Declaración referente con el Reino Unido de Bélgica⁵¹⁹.

La improcedencia de la extradición es recogida en el art. V de esta Convención cuyo texto expresa: *«La extradición no podrá tener lugar en el caso en que hubiese expirado el término fijado para la prescripción de la acción o de la ejecución de la sentencia, por las leyes del país en que el individuo se ha refugiado».*

12.2.3. Tratado de extradición celebrado con el Reino Unido de la Gran Bretaña⁵²⁰ ampliada a los Estados independizados de Kenya, Malawi, Fiji y Comunidad de las Bahamas según notas intercambiadas con el Perú⁵²¹. Tratado de extradición celebrado con el Reino Unido de la Gran Bretaña ampliada a los Estados bajo mandato Británico: Palestina, Camerouns, Tanganika, Nueva Guinea, Samoa Occidental, África Occidental, Nauru; los protectorados de Zanzibar y de las Islas

⁵¹⁷ Véase en el ANEXO 6, de esta investigación, los textos correspondientes a dichos Tratados.

⁵¹⁸ Está vigente desde el 19 de enero de 1876, véase en el ANEXO 6 de esta investigación, específicamente el documento N° 1.

⁵¹⁹ Vigente desde el 23 de octubre de 1890, véase en el ANEXO 6 de esta investigación, específicamente el documento N° 2.

⁵²⁰ Firmado el 26 de enero de 1904, véase en el ANEXO 6 de esta investigación, específicamente el documento N° 3.

⁵²¹ Las notas intercambiadas con la República de Kenya es del 15 de Mayo de 1965, la cual fue aceptada por el Perú el 19 de junio de 1965; con la República de Malawi el 09 de agosto de 1967, aceptada por el Perú el 06 de setiembre de 1967; con la República de Fiji el 14 de julio de 1972, aceptada el 31 de mayo de 1973; y la Comunidad de Las Bahamas de fecha 07 de marzo de 1978, aceptada el 02 de agosto de 1978 y Canadá de fecha 20 de Octubre de 1993. Véase en el ANEXO 6, de esta investigación, específicamente el documento N° 3.

Británicas de Salomón así como los Estados independizados de Kenia, Malawi, Fiji, Comunidad de las Bahamas y Canadá, según notas intercambiadas con el Perú.

El cual dispone en su art. V que *«No se concederá la extradición, si después de la perpetración del crimen, o instauración del juicio criminal, o de ser declarado convicto el reo, resultare éste exento de enjuiciamiento o castigo, por haber transcurrido el tiempo de la prescripción, según las leyes del Estado solicitante o solicitado».*

12.2.4. Tratado de Extradición de criminales con los Estados Unidos del Brasil⁵²².

Aquí se establece que en su capítulo IV.- “De la denegación facultativa (...) Art. 7.- *La prescripción de la acción o de la pena de los delitos por las cuales se solicita la extradición será regulada por la ley de la parte requerente. La parte requerida además, podrá denegar la extradición si la acción o la pena hubiere prescrito según su legislación*”.

12.2.5. Tratado de Extradición con Chile⁵²³.

También se considera en este Tratado como improcedente la extradición en su art. V, cuyo texto expresa: *«No será procedente la extradición:*

2º Cuando, según las leyes del país requerido, la pena o la acción se encontraran prescritas».

Asimismo su art. VI establece que: *«Si el individuo reclamado se encontrara procesado o cumpliendo una condena por delito distinto y cometido con anterioridad al que motiva la solicitud de extradición, no será entregado sino después de concluido el juicio definitivo y cumplida la condena en el país de refugio.*

Si el delito hubiese sido cometido con posterioridad al que motiva la extradición, el individuo será entregado si el último delito cometido no mereciese mayor pena, quedando en caso contrario pendiente el pedido de extradición.

La entrega se hará aun cuando para entonces estuviere prescrita la acción penal o la pena, conforme a la legislación del país requerido».

Empero, resulta indispensable aclarar que el último párrafo de este artículo es polémico, ya que estaría dando la posibilidad de suspender la prescripción, sin embargo, esta posibilidad debemos descartarla de plano, pues el mismo artículo ya reconoce que ha operado la prescripción.

⁵²²Firmado el 13 de febrero de 1919 en Río de Janeiro, entrando en vigencia el 22 de mayo de 1922, véase en el ANEXO 6, de esta investigación, específicamente el documento N° 14.

⁵²³ Firmado el 05 de noviembre de 1932 y vigente desde el 31 de julio de 1936, véase en el ANEXO 6, de esta investigación, específicamente el documento N° 4.

Al parecer lo que sucede es que aquí se deja de lado lo dispuesto en el art. V del Tratado bajo comentarios o se relativiza, si se quiere, para los supuestos contemplados por el art. VI del mismo Tratado.

12.2.6. Tratado de Extradición con España⁵²⁴.

Este documento considera en su art. 9 como improcedente la extradición cuando se ha extinguido la acción penal o la pena: *«No se concederá la extradición: (...) b) Cuando de acuerdo a la ley de alguna de las partes se hubiera extinguido la pena o la acción penal correspondiente al delito por el cual se solicita la extradición».*

Además, en su art. 15 exige: *«2) A la solicitud de extradición deberá acompañarse: d) Copia o transcripción de los textos legales que tipifican y sancionan el delito con expresión de la pena o medida de seguridad aplicable, los que establecen la competencia de la Parte requirente para conocer del mismo, así como también los referentes a la prescripción de la acción y de la pena o medida de seguridad».*

12.2.7. Tratado de Extradición con Italia⁵²⁵.

En su artículo 4 precisa que: *«La extradición no es concedida: b) Si a la fecha de recepción de la solicitud hubiera prescrito según la ley de una de las Partes, la pena o la acción penal correspondiente al delito por el cual se solicita la extradición».*

Luego de exponer este conjunto de reglas de los Convenios y Tratados diré que en éstos, la extradición no constituye un supuesto de interrupción ni de suspensión de la persecución penal, a diferencia de los países que suscribieron los Tratados de Montevideo de 1940.

Por ende, la única forma de relacionar a la prescripción penal con la extradición es en primer lugar para saber si es o no procedente dicho procedimiento, en el segundo cuál de las reglas penales de los países reclamantes o reclamados se aplica, y en el tercero, para ver si se suspende o no el plazo de la prescripción. No hay que olvidar que en España se deniega la extradición por disposición de la orden europea (ley española 3/2003 en su art. 12.2 i) para los casos en que el delito en que se funda la orden europea o la pena impuesta han prescrito.

⁵²⁴ Suscrito en junio de 1989, aprobado por Resolución Legislativa N° 25347 de fecha 31 de octubre, y su canje y ratificación con fecha 17 de diciembre de 1993, entrando en vigencia el 31 de enero de 1994, véase en el ANEXO 6, de esta investigación, específicamente el documento N° 5.

⁵²⁵ Suscrito en Roma el 24 de noviembre de 1994, aprobado por Resolución Legislativa N° 26579 con fecha 06 de marzo de 1997 y ratificado vía D.S. N° 011-97-RE de fecha 21 de marzo de 1997, vigente desde el 23 de marzo de 1997, en el ANEXO 6, de esta investigación, específicamente el documento N° 10.

12.3. EL CÓDIGO PROCESAL PENAL DEL 2004 QUE DEROGÓ LO REGULADO POR LA LEY N° 24710⁵²⁶.

En este código se considera a la prescripción penal como uno de los supuestos para que la extradición pasiva no tenga lugar, así lo señala el art. 517 numeral 2, literal c, también se consideran dos elementos adicionales que se regulan en el mismo 517, numeral 3, al diferenciarse dos supuestos que se relaciona con la prescripción, esto es si “el Estado requirente no diere seguridades de que se computará el tiempo de privación de libertad que demande el trámite de extradición”, y “el tiempo que el extraditado hubiese sufrido en el curso del proceso que motivó el requerimiento”.

Se formula la siguiente interrogante: ¿Qué sucede si un extraditado extranjero cometió un delito sancionado con pena de 4 a 8 años, el mismo que lleva 2 años de detención y 3 años de fuga, sin embargo, al sexto año se solicita su extradición de este otro país, la misma que se solicita el último día del sexto año, en el país requerido Perú donde es detenido también mientras se resuelva la extradición, sin embargo la acusación era por 6 años? El país requirente considera que el sujeto va a cumplir los años que le falta, descontando solo los dos años que fue detenido, ¿ha prescrito o no la acción penal por el delito imputado?

Al respecto cito como ejemplos de prescripción de la persecución penal y de la ejecución de la pena activos los casos de José Enrique Crousillat López Torres⁵²⁷ y Alberto Fujimori Fujimori⁵²⁸, en donde se hicieron algunos aportes desde la perspectiva de cada país, en el primer caso reinterpretando el art. 81 del CP, y en el segundo aplicando el art. 100 del código penal de Chile.

Es importante señalar que se puede diferenciar en los Tratados de Extradición, para efectos de la legislación a utilizar y de entre ellos la institución de la prescripción, algunos modelos que consideran aplicable la legislación del país requirente (Argentina, Costa Rica, Bolivia, Estados Unidos), en otros casos la del país requerido (Bélgica, Francia, Chile) y solo en algunos casos un modelo acumulativo (Italia, Panamá, Brasil, Uruguay, Guatemala, España y México), es decir del país requirente y requerido. Aunque algunos consideran

⁵²⁶ Esta ley dada el 26 de Junio de 1987, abrogó a la Ley de Extradición de 188 y a los arts. 345 al 348 del C. de P.P. La ley N° 24710 se complementa para su tramitación con el D.S. N° 044-93-JUS del 14 de diciembre de 1993.

⁵²⁷ Este pedido de extradición se resolvió declarándose **improcedente** la extradición pasiva de José Enrique Crousillat López Torres por el delito de asociación ilícita para delinquir mediante resolución del 18 de abril de 2006 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, considerándose que la reducción planteada en el art. 81 del CP, se aplica tanto al plazo contemplado en la prescripción ordinaria como al plazo de prescripción extraordinaria con lo cual los plazos serían menores al requerimiento hecho por la justicia del Perú, es decir se invocó la edad así como las razones humanitarias (véase con más detalle Manuel Álvarez Chauca, ...pp. 136 y 137, así como la referencia a otros casos de la jurisprudencia colombiana, pp. 134 y ss.).

⁵²⁸ Este pedido se declaró **procedente** por parte de la Corte Suprema de Justicia de Chile del 21 de setiembre del 2007, como se recuerda esta extradición pasiva, sin embargo hubieron algunos aspectos vinculados a la prescripción que es interesante resaltar como el hecho de la aplicación del art. 100 del CP de Chile que viabiliza la duplicación del plazo de prescripción por ausencia del territorio de la República, el mismo que se justificó en el considerando DÉCIMO: “En otras palabras se duplican los plazos de prescripción. Su fundamento se soporta en que dicha institución corre en la medida en que el Estado quiera y pueda perseguir el delito e imponer la pena; y, se justifica porque cuando el afectado sale del territorio estatal, su persecución se dificulta. Por ello, hay mayores facilidades para eludir la acción de la justicia, imposibilitando el desarrollo del procedimiento, toda vez que existe una garantía propia de un Estado de Derecho, que es la imposibilidad de realizar el juzgamiento en ausencia del acusado, por lo que es lógico que se haga exigencias temporales más estrictas para la consolidación de la situación jurídica del inculpaado;...”. Demás está precisar que en ningún caso operó la prescripción.

(CALAZA LÓPEZ⁵²⁹), que no sería admisible aplicar las reglas de prescripción del delito o de la ejecución de la pena del país requerido y no del requiriente, y para ello se basan en el **Convenio establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea relativo a la extradición entre los Estados miembros de la Unión Europea, hecho en Dublín el 27 de septiembre de 1996 que en su art. 8 señala:**

“Artículo 8. Prescripción.

1. No se podrá denegar la extradición por el motivo de que la acción o la pena hayan prescrito con arreglo a la legislación del Estado miembro requerido.
2. El Estado miembro requerido tendrá la facultad de no aplicar el apartado 1 cuando la solicitud de extradición esté motivada por hechos en los que sea competente dicho Estado miembro, según su propio Derecho penal.”

Pienso que por ahora no es conveniente asumir este criterio, y sí en cambio los Tratados bilaterales que acogen actualmente el criterio del modelo acumulativo.

En segundo lugar (art. 17 literal b), como un elemento de prueba, es decir, como uno de los documentos que acompañan a la solicitud de extradición, la copia de la ley penal relativa a la prescripción de la persecución de la ejecución de la pena.

13. LA PRESCRIPCIÓN Y LA ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL

El mecanismo de Asistencia Judicial o Jurídica en materia penal constituye una forma de cooperación internacional entre los estados a fin de lograr resolver los procesos penales con más eficacia, o de obtener información relacionada con éstos. Para el Perú este mecanismo ha cobrado mucha relevancia a tal punto que incluso se ha convertido en un mecanismo vía suscripción de Convenio, Tratado o Convención, y en esta materia tampoco la prescripción de la persecución penal y de la ejecución de la pena no han resultado ajenos.

Sin embargo, ni la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal (aprobada por D.S. N° 0695-RE con carácter multinacional⁵³⁰), ni los Convenios o Tratados bilaterales, suscritos por el Perú sobre Asistencia Judicial⁵³¹ en materia penal expresamente han contemplado el específico supuesto de prescripción como causal de extinción de la persecución penal y de la ejecución de la pena Colombia (vía D.S. N° 24-94-RE), la Confederación Suiza (D.S. N° 028-97-RE), El Salvador (D.S. N° 029-96-RE), Bolivia (D.S. N° 034-97-RE), Paraguay (D.S. N° 039-96-RE), Italia (D.S. N° 048-96-RE), entre otros, han

⁵²⁹ Autor colombiano citado por Álvarez (2009), pp. 75.

⁵³⁰ El Convenio Europeo de Asistencia Judicial; en Materia Penal de 1959 tampoco considera a la prescripción dentro de sus requisitos para denegar la asistencia judicial (este Convenio rige en Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Israel, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Suecia, Suiza y Turquía). Véase: **Derecho procesal penal. Enjuiciamiento penal. Legislación.** Ed. Mc. Graw-Hill, Madrid-España, 1996.

⁵³¹ De los Tratados o Convenios suscritos por el Perú con Colombia, El Salvador, Bolivia, Paraguay, Italia, Suiza, Argentina, Guatemala, Cuba, Brasil, Canadá, Ecuador, México, España, República Dominicana, China, Tailandia, Panamá, Uruguay, Finlandia y Australia (estos dos últimos aún no se han dispuesto sus textos o al menos no se han dado a conocer), ninguno establece expresamente la referencia a la prescripción de la persecución penal o de la ejecución de la pena. Véase la referencia a cada uno de estos Tratados en el ANEXO N° 7 de esta investigación.

regulado expresamente dentro de sus reglas jurídicas a la prescripción como un requisito necesario para la denegación de la Asistencia Judicial en materia penal.

TABLA 8: *Países que tienen fórmulas tácitas de no admitir casos prescritos.*

PAÍS Y ARTÍCULO	PRECEPTO NORMATIVO
China: art. 5 literal 2	"La solicitud de asistencia podrá ser ejecutada por la Parte Requerida en la forma solicitada por la Parte Requirente, <u>siempre que no sea contraria a su ordenamiento jurídico interno</u> "
Brasil: art. 6, numeral 1, literal a	"La solicitud de asistencia judicial sea <u>contraria a su ordenamiento jurídico o no sea conforme a las disposiciones de este acuerdo</u> "
España: art. III, numeral 1, literal a	"Si el Estado requerido estima que la ejecución del pedido pudiera atentar contra la soberanía, la seguridad, el orden público u otros intereses fundamentales de su país"
Tailandia: art. 6, numeral 1	"Las solicitudes de asistencia deberán ser ejecutadas con celeridad de acuerdo con la Ley del Estado requerido y, en la medida que no fuera prohibido por la misma, en la forma solicitada por el Estado requirente"

Nota: Aquí se muestran las diversas fórmulas de los Tratados de Asistencia Judicial en Materia Penal, que los países tienen de forma tácita.

En todas estas fórmulas se considera que tácitamente se no admitiría la solicitud de Asistencia Judicial para los casos prescritos, más aún si en todos estos países se regulan la prescripción como causal de extinción de la acción penal y de la pena, por ello pienso que es perfectamente posible rechazar el pedido de Asistencia Judicial en materia penal.

Por ende, la prescripción de la persecución penal debe considerarse un requisito indispensable para conceder o denegar la Asistencia Judicial en materia penal, más aun si se recuerda que su efecto es de naturaleza similar a la cosa juzgada.

¿Qué sucede con una persona que se encuentra con proceso penal en el país requerido (o requiriente) y necesita ser trasladada vía el mecanismo de la asistencia judicial en materia penal al país requiriente (o requerido)? Considero que el plazo que demore este mecanismo de ida, así como el tiempo que tomen las actuaciones y el regreso, se computarán como plazo de prescripción suspendido, en atención a ser considerado dentro del supuesto *otro procedimiento*.

Por último, se considera acertado lo dispuesto en el Proyecto de Ley N° 2616 ⁵³²sobre Asistencia Mutua en Materia Penal, en su artículo 6°, numeral 1, al establecer como un requisito denegatorio de la solicitud de Asistencia Judicial cuando «hubiere prescrito la acción penal o la ejecución de la pena conforme a la legislación peruana».

⁵³² Tiene como autores a los congresistas José Barba Caballero y a Samuel Reyna Farje Abensur, empero este proyecto fue enviado por la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial y fue realizado por el Dr. Víctor Prado Saldarriaga.

Por tanto, de *lege ferenda* se espera que tal disposición entre en vigencia y se considere como parte de los futuros Tratados o Convenciones de Asistencia Judicial en materia penal.

14. LA CORTE PENAL INTERNACIONAL Y EL ESTATUTO PENAL DE ROMA.

Uno de los aspectos que hoy cobra importancia es el la entrada en vigencia del Estatuto Penal de Roma, suscrito por el Estado del Perú y puesto en vigencia desde el año 2003, mediante resolución legislativa N° 27517, promulgada el 15 de setiembre del 2001, el mismo que en su art. 29 establece que los crímenes de la competencia de la Corte *no prescribirán*, es decir los crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, crímenes de agresión. Una de las consecuencias de este Estatuto justamente ha sido la adecuación de los dos últimos anteproyectos de código penal, pues en ambas se ha considerado su aporte.

15. LA CONVENCIÓN SOBRE IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LOS CRÍMENES DE GUERRA Y DE LOS CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD.

La “Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad” suscrito por el Estado del Perú y promulgado el 11 de junio del 2003, que dispone en su art. IV que se tenga que abolida las reglas de prescripción para los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Esta Convención ha sido motivo de acciones ante el Tribunal Constitucional, así se tiene la sentencia emitida en el expediente N° 00018-2009-PI/TC⁵³³ en el año 2010, por la cual se declaró improcedente la pretensión de inconstitucionalidad.

Por otra parte uno de los temas de mayor discusión es si se puede hablar de delitos de lesa humanidad antes de que el Estado del Perú se adhiriera a dicha Convención esto motivó que el Congreso de la República aprobara vía legislación delegada al ejecutivo el D. Leg. N° 1097 el cual disponía en su primera disposición complementaria final que:

“Para efectos procesales, precísase (sic) que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, aprobada por Resolución Legislativa N° 27998, surte efectos y rige para el Perú a partir del 09 de noviembre de 2003, conforme a la declaración realizada por el Perú al momento de adherirse a la citada Convención, al Fundamento N° 15 de la Resolución del Tribunal Constitucional del 23 de marzo de 2010 recaída en el Expediente N° 00018-2009PI-TC, y a la declaración expresa contenida en la indicada Resolución Legislativa”.

Esto dio lugar a que se interpusiera una acción de inconstitucionalidad para dilucidar si era posible o no aplicar la Convención a delitos cometidos con anterioridad a su adherencia, así el Tribunal tuvo que pronunciarse estableciendo como ratio decidendi la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad para los casos anteriores a la adherencia del Estado del Perú, derogándose lo dispuesto por el D. Leg. N° 1097, aquí

⁵³³ Véase la Sentencia en el ANEXO 5, de esta investigación, específicamente en el documento N° 28, la misma que se declaró improcedente.

consignamos algunos de los aspectos más resaltantes de la sentencia⁵³⁴ que tiene el carácter de vinculante:

“C) "42. La segunda parte del artículo 6.4 del Decreto Legislativo N° 1097, establece que las reglas de prescripción de la acción penal, en los procesos penales seguidos contra militares y policías acusados de la comisión de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud previstos en el Código Penal de 1991, se rigen por “la ley penal aplicable a la fecha de ocurrencia de los hechos a investigar. Por su parte, la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1097 establece lo siguiente: Para efectos procesales, precítese (sic) que la Convención de Lesa Humanidad, aprobada por Resolución Legislativa N° 27998, surte efectos y rige para el Perú a partir del 09 de noviembre de 2003, conforme a la declaración realizada por el Perú a partir del 09 de noviembre de 2003” (pp.24).

53. La esencial ontología de los derechos humanos afectados por los crímenes de lesa humanidad, y las graves condiciones y circunstancias que caracterizan la realización de estos, lleva a considerar que , en estos casos, la necesidad de la averiguación de la verdad, así como el procesamiento y posterior sanción de los responsables, constituye una norma de *jus cogens*, es decir, una norma imperativa de Derecho Internacional susceptible de aplicarse *erga omnes* y que no admite pacto en contrario (...). ”.

54. 1. *"Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional...2.Nada de lo dispuesto en este artículo se opondrá al juicio ni a la condena de una persona por actos u omisiones que, en el momento de cometerse, fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional"*.

“Como se aprecia, el precepto alude claramente a la posibilidad de procesar y condenar penalmente por la comisión de un acto, a pesar de no encontrarse previamente prohibido y penado por el Derecho escrito , siempre que tal acto resulte delictivo “según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional (...). ”.

“62. (...) debe quedar claro que la regla de imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, y consecuentemente, el mandato de su persecución, con prescindencia de la fecha en que aquellos se hayan cometido, no tiene vigencia en el ordenamiento jurídico peruano como consecuencia de la entrada en vigor de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crimines de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad (9 de noviembre de 2003), sino que surge en virtud de una norma imperativa de derecho internacional general (...). En definitiva, aunque la pena aplicable a la conducta típica es la que se encontraba vigente en el tiempo en que ella se produjo (a menos que sobrevenga una más favorable), si tal conducta reviste las característica de un crimen de lesa humanidad, por el mandato

⁵³⁴ Véase la Sentencia emitida en el expediente N° 0024-2010-PI/TC, en el año 2011, en el ANEXO 5, de esta investigación, específicamente en el documento N° 30.

constitucional e internacional, la acción penal susceptible de entablarse contra ella, con prescindencia de la fecha en que se haya cometido, es imprescriptible” (pp. 32 - 33).

16. LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN.

16.1. LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN.

La suscripción de la Convención Interamericana contra la Corrupción firmada en la ciudad de Caracas en Venezuela el 29 de marzo de 1996, por parte del Estado del Perú, implicó la necesidad que los estados tengan que definir una política de lucha contra la corrupción.

En este marco es de recordar que apenas iniciado el primer proceso de corrupción en el año 2001, luego del famoso video Kouri-Montesinos, del 14 de septiembre, uno de los temas que se discutió arduamente en los foros académicos ante la opinión pública fue la interrogante desde cuándo se es funcionario o servidor público y más específicamente si un congresista electo es o no funcionario público para el derecho penal.

La respuesta de unos fue desde el momento en que el funcionario o servidor público es electo, otros dijeron desde el momento en que juramenta, y otros menos desde el momento en que el elegido asume específicamente sus funciones, y aunque hubieron otras posturas creo que estas fueron las principales.

Recordaré que con la maestría y humildad que lo caracterizaba don FLORENCIO MIXÁN MASS sostuvo que aquí no había nada que discutir, pues está claro que se debe aplicar de inmediato la Convención Interamericana contra la Corrupción, pues en el artículo I de dicho documento se expresa que por funcionario público, oficial gubernamental o servidor público se entiende a “cualquier funcionario o empleado del Estado o sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos”, respuesta que fue la que finalmente acogió la Corte Suprema en el caso Kouri y en adelante.

Utilizando este caso emblemático también podemos decir que en el tema de la prescripción se han dispuesto algunas medidas que son de mucha utilidad para hacer frente a la corrupción, considerando que en el Perú muchos procesos terminaron con declarándose la persecución penal prescrita, razón por la cual es importante destacar el contenido de esta Convención y sus aportes en materia de prescripción penal.

Del contenido de su art. 29 podemos extraer dos reglas las cuales las vamos a independizar:

1º La entrada en vigencia de esta Convención no afectará el principio de irretroactividad de la ley penal.

Sobre esta disposición señalo que cualquier modificación de cualquiera de las reglas penales referidas a la prescripción no se aplicarán retroactivamente, salvo que sean más favorables, ello en función de la irretroactividad de la ley penal.

De esta regla también se puede considerar la naturaleza de la prescripción penal, es decir que indudablemente se asume el criterio de que se trata de una institución de naturaleza sustantiva y no procesal, de lo contrario sería innecesaria lo precisado en torno a la irretroactividad.

2° La aplicación de la Convención no interrumpirá los plazos de prescripción en curso, relativos a los delitos anteriores a la fecha de la entrada en vigor de la Convención.

En relación a esta disposición, cabe destacar más nítidamente que en el numeral anterior toda modificación de las reglas de prescripción no implica la modificación de las persecuciones penales iniciadas con reglas anteriores, salvo que las nuevas reglas le sean más favorables a los procesados.

16.2 LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN.

La Convención de Naciones Unidas considera en primer término no a la indeterminación de los plazos de prescripción, es decir la imprescriptibilidad de las infracciones penales, sino específicamente la ampliación de sus plazos a través de dos fórmulas:

1° Regulando mayores plazos de prescripción:

Sobre este punto es de considerar que el sistema penal debe contemplar el circunscribirse a un modelo de prescripción o no, y en el caso nacional, el Perú sí lo hizo, asumiéndose entonces solo de manera muy excepcional el recurso de la indeterminación o imprescriptibilidad, por lo cual la propuesta de la imprescriptibilidad planteada por el actual gobierno no resulta muy satisfactoria que digamos considerando este marco de referencia internacional, por lo tanto hay que tener cuidado, pues en el supuesto que se aprobaran más adelante, tendríamos que ventilar estos temas ante la Corte Interamericana con los posibles o probables resultados que todos conocemos, al derrota del Estado vía soluciones amistosas o sentencias que reparar.

2° Potenciar los mecanismos de interrupción de la prescripción de la persecución penal:

El legislador internacional ha tenido buen tino en precisar que se trata de potenciar los mecanismos de interrupción, y no los de suspensión, pues estos muchas veces son de aplicación incierta o indefinida como el caso del art. 339 numeral 1 del N.C.P.P., aunque como lo he dejado en claro para esta investigación serían ambos, siempre y cuando se tenga un límite claro y definido, y no la incertidumbre en sí, pues ello atenta contra el plazo razonable.

17. LA TÉCNICA LEGISLATIVA EN LA REGULACIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN O REGLAS PRESCRIPTIVAS.

Hoy en día es indispensable hablar de una técnica legislativa propia de las reglas prescriptivas o de prescripción penal en los distintos ordenamientos jurídicos, y que en gran medida incluso pueden ser exportadas a las regulaciones multilaterales a través de tratados o convenciones. Sin embargo, las distintas regulaciones sobre esta materia en el mundo siguen haciéndolo de manera parcial y disgregada, incluso se tiene el caso de los códigos que más recientemente han entrado en vigencia, p. ej. se tiene a Colombia, o la reforma española del 2010, o las propuestas de ley recientes en Latinoamérica, como es el caso del Proy. de CPO (Ecuador) y el Anteproy. CPPG (Bol.)

Aunque, como lo ha dejado en claro el profesor MORILLAS CUEVA⁵³⁵ al hablar de leyes prescriptivas pasa por una toma de posición en torno a la naturaleza de las reglas de prescripción penal, pues sus implicancias no son las mismas si se considera como una regulación de carácter procesal, para esta investigación como se ha dejado establecido la prescripción penal tiene una naturaleza eminentemente penal sustantiva o principalmente sustantiva, por lo cual toda referencia interpretativa de una regla penal se regirá por los principios y preceptos del CP.

Solo por poner un ejemplo sobre este extremo de la problemática, qué sucede cuando un magistrado de provincia tiene que resolver un tema de prescripción penal (un caso difícil) hoy en día, pues primero tiene que tener su legislación penal interna al día, en segundo lugar tiene que tener al día las sentencias vinculantes o no del Tribunal Constitucional, en tercer lugar tiene que tener la jurisprudencia penal de la Corte Suprema, entre ellas las ejecutorias vinculantes, además tiene que estar al día con los Acuerdos Plenarios, luego tiene que tener sus reglas de los Tratados y Convenios tanto multilaterales como bilaterales, y seguro podemos citar otras fuentes.

La sola complejidad de utilizar el CP, que regula la prescripción por un lado de manera desordenada, pues las faltas están en el art. 440 numeral 5, la extinción de la acción civil en el art. 100, la imprescriptibilidad fuera del CP, y las reglas de prescripción del delito en el art. 78 y siguientes del CP, ya condiciona al error, y por otro lado si a ello le sumamos el proceso de formación positivista de la mayoría de magistrados, entonces se tiene como resultado lo que esta investigación justamente presenta como resultados.

La técnica legislativa propuesta, a partir de la posición adoptada sobre la naturaleza de la prescripción penal, considera para tomar en cuenta para la regulación de las reglas de la prescripción penal es que en principio se deben regir por el criterio de la unidad sistemática, de certeza, de *lex stricta* y de *lex scripta*, ello a fin de tener en claro un modelo coherente que regule todas las implicancias y vacíos que hemos podido encontrar en las distintas legislaciones comparadas, de este modelo se obtendría el beneficio de tener la interpretación de las reglas de prescripción penal de la manera más completa y a la vez este modelo permitiría dejar de lado lagunas o antinomias, así se tiene los casos de conflictos de la ley penal en el tiempo y en algunos casos hasta en el espacio si precisamos las reglas de prescripción vinculadas a extradición o asistencia judicial.

⁵³⁵ Morillas (2010), pp. 267.

PARTE TERCERA

**CONTRASTACIÓN EMPÍRICA Y VÍAS
ALTERNATIVAS**

CAPÍTULO I

MODELO METODOLÓGICO

1. PROBLEMÁTICA

a. Planteamiento del problema.

El estudio de la prescripción penal es el objeto de esta investigación, para lo cual no se escatimarán esfuerzos en responder a una serie de interrogantes desde una óptica teórico descriptiva (cuál es el estado actual de la prescripción penal, o en qué criterios se fundamenta hoy en día), en algunos casos teórico explicativa (a qué se debe que los funcionalistas no hayan incursionado en la prescripción penal), empírico explicativa (si se tiene en cuenta el sentido de los presupuestos de la prescripción penal, es decir el grado de eficacia en su aplicación) y desde el punto de vista tecnológico (qué mejoras se pueden plantear a través de los proyectos de ley y en qué aspectos se requiere de nueva regulación).

Así pues, a continuación se presenta un conjunto de interrogantes que sirven para orientar el desarrollo de esta investigación de naturaleza teórico-práctica (tecnológica) o mixta:

- 1° ¿Qué es la prescripción penal?, ¿cuál es el fundamento o sustento de la existencia de esta categoría en el derecho penal hoy en día?, ¿es plausible mantener la prescripción con los criterios de hace tres décadas?, ¿es necesario plantear supuestos de imprescriptibilidad para determinados delitos o se debe ampliar esta excepción?,
- 2° ¿Está consistentemente regulada la prescripción penal en el Perú, hoy en día, después de haber transcurrido más de veinte años de vigencia del Código Penal?
- 3° ¿Cuál es el grado de eficacia en la aplicación de la prescripción de la persecución penal, tanto en su tipo ordinario como extraordinario?
- 4° ¿Cuál es el grado de eficacia en la aplicación de la prescripción penal de la ejecución de la pena?

Por lo tanto, el problema de investigación se sintetiza en:

¿Cuál es el estado actual de la prescripción penal desde la perspectiva teórica y legislativa, y cuál ha sido el grado de eficacia de la aplicación de la prescripción penal por parte de los magistrados jueces durante los veinte años de vigencia del Código Penal de 1991 en el distrito judicial de Lima y en la Corte Suprema de la República?

b. Diagnóstico situacional

Hoy en día la prescripción penal es una de las instituciones que más modificaciones ha sufrido a lo largo de estas dos décadas, e incluso hasta el día de hoy no se precisan la reformas necesarias que el legislador de 1991 omitió, por lo que es necesario realizar tal adecuación pues durante este período el mundo ha cambiado y el conocimiento científico también, entonces es hora de adecuar la prescripción a estos cambios.

Aunque, se podría decir que la institución de la prescripción penal se aplica todos los días, en los diversos juzgados y salas de la justicia del país, lo curioso es que luego de la contienda electoral del 2011, uno de los temas que cobró relevancia no es la prescripción penal sino su contrario, es decir los supuestos de imprescriptibilidad, o mejor dicho su ampliación a casos diferentes a los de derechos humanos, con lo cual queda claro que el tema sigue en vigencia y es merecedor de una investigación como la que proponemos.

c. Preguntas de investigación.

¿Cómo está regulada la prescripción en el C. P. y cuál ha sido el grado de eficacia de la prescripción de la persecución como de la ejecución de la pena, durante los veinte años de vigencia del CP de 1991 en el distrito judicial de Lima y en la Corte Suprema de la República?

2. OBJETIVOS

La investigación realizada se fijó los siguientes objetivos:

a. Objetivos generales:

- 1° Describir el estado actual de la prescripción penal en la teoría y en la legislación nacional y comparada.
- 2° Conocer cuál ha sido el grado de eficacia de la aplicación de la prescripción penal por parte de los magistrados del distrito judicial de Lima durante los últimos veinte años de vigencia del Código Penal de 1991.

b. Objetivos específicos:

1° Del primer objetivo general:

- i) Analizar las distintas posturas teóricas que se han planteado acerca de la prescripción penal, en cualquiera de sus clases y tipos.
- ii) Describir los problemas que han surgido en la teoría y en la legislación sobre la prescripción penal en cada una de sus tipos y clases.
- iii) Estudiar la viabilidad o no de la imprescriptibilidad para determinados delitos, extendiéndola o reduciéndola según las modalidades delictuales.
- iv) Formular una propuesta teórica acerca de la prescripción penal en el modelo peruano.

- v) Formular una propuesta pre legislativa, lege ferenda, acerca de la prescripción penal en el modelo peruano.

2° Del segundo objetivo general:

- i) Corroborar qué clase y tipo de prescripción es la que más se aplica en el distrito judicial de Lima por parte de los magistrados jueces, así como en la Sala Penal de la Corte Suprema, para todos los casos.
- ii) Identificar la(s) causales de interrupción o suspensión que más se aplican por parte de los magistrados jueces.
- iii) Mostrar qué tipo de argumentos suelen usar los magistrados jueces para aplicar la prescripción penal.
- iv) Comparar el grado de eficacia de la prescripción penal ordinaria y extraordinaria como causal de extinción de la persecución penal.
- v) Comparar el grado de eficacia de la prescripción penal ordinaria como causal de extinción de la ejecución de la pena.

3. HIPÓTESIS

En esta investigación existen dos áreas, por lo cual las hipótesis postuladas serán dos:

La primera que se refiere a la problemática conceptual (área teórica), y otra, referida a la eficacia de ésta institución en su aplicación, es decir, a su aspecto empírico (área práctico) en la administración de justicia.

a. Hipótesis:

Las áreas de formulación de las hipótesis a postular son:

- i) La hipótesis planteada en el área teórica requiere de una investigación de cada uno de sus supuestos que regulan la prescripción, a fin de articular sus fundamentos y consecuencias asumidas deductivamente. (La formulación de esta hipótesis se desarrollará en el rubro de las conclusiones de la Tesis).
- ii) Las hipótesis referidas a la segunda área, requieren de una investigación empírica que permita saber el grado de eficacia real que tiene la aplicación de las distintas reglas sobre prescripción penal en el sistema penal peruano. Lo que a la vez permitirá plantear medidas técnicas para superar las deficiencias o dificultades existentes en la actualidad. (La contrastación de esta hipótesis se realizará en el Capítulo IV de la Parte tercera de la Tesis).

A continuación se postula las siguientes hipótesis:

- 1° Teórica: La teoría sobre la prescripción penal sigue suponiendo el tiempo como categoría fundamental, cuando ésta viene siendo replanteado desde diversas perspectivas extrañas al derecho penal, el cual aún no ha considerado seriamente en realizar tales

incorporaciones que de hacerse brindarían una mayor validez argumentativa en cuanto al sustento de dicha institución.

2° Empírica: El nivel de la frecuencia de eficacia de la prescripción de la persecución penal es altamente significativo, constituyéndose así en el principal medio de eliminación elusiva de la carga procesal (descongestión) que se utiliza en el sistema penal por parte de los magistrados jueces de primera instancia del distrito judicial de Lima, así como los jueces de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de la República.

3° Empírica: El nivel de la frecuencia de eficacia de la prescripción penal de la ejecución de la pena es insignificante o casi nulo, constituyéndose así en un mecanismo inutilizable por parte de los magistrados jueces de primera instancia del distrito judicial de Lima, así como los jueces de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de la República debido a que en la realidad no acontece.

Se toma la palabra frecuencia como número de eventos en un período.

b. Variables: formulación y operacionalización (operativización).

b.1. Formulación de variables.

Considerando el tipo de investigación mixta, dentro de las investigaciones de carácter social como corresponde al derecho, se tuvo que formular una matriz de variables aplicando el principio epistémico de atingencia, vale decir que el objeto de investigación solo podrá ser estudiado a partir de las características propias condicionadas por el campo de estudio y el marco teórico correspondiente.

La prescripción penal es una institución jurídica cuya realidad deviene como norma de las decisiones políticas que regulan el orden social concreto. Sin propósito de redundar el objeto de esta investigación no tiene las características de un fenómeno natural y de una relación social primaria, por lo tanto la matriz de variables utilizada corresponderá a las componentes de las mencionadas decisiones.

Cuando el legislador tuvo que instituir la prescripción en favor de la persona de los imputados se tomó en cuenta básicamente aspectos analíticos, empíricos e instrumentales que implican el derecho de la prescripción, que claramente se pueden esquematizar de la lectura de la redacción en los instrumentos legales (normas legislativas y normas jurisprudenciales).

Estos aspectos esenciales son por tanto los atingentes al estudio de la prescripción.

b.2. Operacionalización de las variables.

Ahora pasaré a expresar la operativización de las variables arriba descritas, para ello se diseñó una pequeña tabla con los criterios de: qué, con qué y cómo se operativiza, la misma que se muestra a continuación:

1° Variables Analíticas.

VARIABLES ANALÍTICAS:	CRITERIOS		
	¿Qué?	¿Por qué?	¿Con qué instrumento?
INDICADOR: 1° Aspectos taxativos.	Aquí se pretende obtener información en torno a los indicadores utilizados:		La obtención de los indicadores y subindicadores va a ser posible mediante la ficha de análisis documental que se ha confeccionado para cada uno de ellos respectivamente, así se tiene por cada indicador o subindicador el ítem de análisis correspondiente.
	1° Género de la infracción.	1° Es importante dejar establecido que dependiendo de la clase de infracción, falta o delitos, es que se podría establecer en cuál de las infracciones se producen más casos de prescripción.	
	2° Tipo de la prescripción.	2° En torno al tipo de prescripción penal es que a su vez se distinguirá los casos de prescripción de la acción penal o prescripción de la sanción penal.	
	3° Tipo de proceso.	3° Por el tipo de proceso se podrá establecer en qué procesos se dan los mayores casos de prescripción penal: sumario, ordinario, querrela, falta o algún otro.	

Entre las variables analíticas también se considera:

VARIABLES ANALÍTICAS	CRITERIOS		
	¿Qué?	¿Por qué?	¿Con qué instrumento?
INDICADOR: 1° Aspectos formal administrativo.	En este variable se pretende diferenciar los casos de prescripción correspondiente a los juzgados penales, de los que son competencia de la Sala Transitoria de la Corte Suprema.	Es importante dejar establecido la distinción de los casos que prescriben a nivel de los juzgados penales de los que prescriben a nivel de la Corte Suprema.	La obtención de los indicadores y subindicadores va a ser posible mediante la ficha de análisis documental que se ha confeccionado para cada uno de ellos respectivamente, así se tiene por cada indicador o subindicador el ítem de análisis correspondiente.

2° Variables Empíricas.

VARIABLES EMPÍRICAS	CRITERIOS		
	¿Qué?	¿Por qué?	¿Con qué instrumento?
INDICADOR: 1° Prescripción de la acción penal.	Es importante distinguir del indicador correspondiente a la prescripción de la acción penal y los tipos de prescripción penal.	Porque dependiendo de a qué clase pertenece es que se podrán diferenciar sus supuestos de aplicación con los subindicadores de prescripción ordinaria, extraordinaria y la del plazo legal.	La obtención de los indicadores y subindicadores va a ser posible mediante la ficha de análisis documental que se ha confeccionado para cada uno de ellos respectivamente, así se tiene por cada indicador o subindicador el ítem de análisis correspondiente.

VARIABLES EMPÍRICAS	CRITERIOS		
	¿Qué?	¿Por qué?	¿Con qué instrumento?
INDICADOR: 2° Prescripción de la sanción penal.	Es importante distinguir del indicador correspondiente a la prescripción de la sanción penal y las clases de prescripción penal.	Porque dependiendo de a qué clase pertenece es que se podrán diferenciar sus supuestos de aplicación con los subindicadores de prescripción ordinaria, extraordinaria y la del plazo legal.	La obtención de los indicadores y subindicadores va a ser posible mediante la ficha de análisis documental que se ha confeccionado para cada uno de ellos respectivamente, así se tiene por cada indicador o subindicador el ítem de análisis correspondiente.

3° Variables Instrumentales.

VARIABLES INSTRUMENTALES	CRITERIOS		
	¿Qué?	¿Por qué?	¿Con qué instrumento?
INDICADOR: 1° Cómputo del tiempo según el tipo de la infracción penal.	Partiendo del indicador según el tipo de infracción penal, sea que se trate de un delito o de una falta, lo que interesa precisar es qué características o qué casuística presenta cada uno de estos subindicadores.	Porque no será el mismo caso un supuesto de tentativa que el de una infracción penal instantánea, continuada, permanente o algún otro caso.	La obtención de los indicadores y subindicadores va a ser posible mediante la ficha de análisis documental que se ha confeccionado para cada uno de ellos respectivamente, así se tiene por cada indicador o subindicador el ítem de análisis correspondiente.

VARIABLES INSTRUMENTALES	CRITERIOS		
	¿Qué?	¿Por qué?	¿Con qué instrumento?
INDICADOR: 2° Cómputo del tiempo según los distintos tipos de sanción penal.	Partiendo del indicador según el tipo de sanción penal lo que interesa precisar es qué características o qué casuística presenta cada uno de esto subindicadores.	Porque no será lo mismo un caso de una pena con el de una medida de seguridad, o la posibilidad de la combinación de ambas.	La obtención de los indicadores y subindicadores va a ser posible mediante la ficha de análisis documental que se ha confeccionado para cada uno de ellos respectivamente, así se tiene por cada indicador o subindicador el ítem de análisis correspondiente.

VARIABLES INSTRUMENTALES	CRITERIOS		
	¿Qué?	¿Por qué?	¿Con qué instrumento?
INDICADOR: 3° Cómputo del tiempo según las condiciones del agente.	Partiendo del indicador según las condiciones presentadas por el agente, sea que se trate de la edad del imputado, la cantidad de sujetos, el concurso de dos a más tipos penales cometidos por el sujeto, la habitualidad, reincidencia o por la función que desempeña el agente en su relación con el Estado.	Porque los subindicadores que se derivan de cada uno de los indicadores representan supuestos cualificados de cada uno de los casos, así por ejemplo: la edad del imputado es relevante en materia penal para los casos de imputabilidad restringida, participación, concurso, o etc.	La obtención de los indicadores y subindicadores va a ser posible mediante la ficha de análisis documental que se ha confeccionado para cada uno de ellos respectivamente, así se tiene por cada indicador o subindicador el ítem de análisis correspondiente.

VARIABLES INSTRUMENTALES	CRITERIOS		
	¿Qué?	¿Por qué?	¿Con qué instrumento?
INDICADOR: 4° Cómputo del tiempo según la continuidad o no del plazo de prescripción.	Partiendo del indicador continuidad o no del plazo de la prescripción, sea que se trate de la interrupción o la suspensión del plazo de prescripción.	Porque no resulta lo mismo entre un plazo de interrupción de la prescripción de la acción penal o de la ejecución de la sanción penal; y otro caso es el de la suspensión del plazo de la acción penal y si es posible la suspensión de la ejecución de la sanción penal.	La obtención de los indicadores y subindicadores va a ser posible mediante la ficha de análisis documental que se ha confeccionado para cada uno de ellos respectivamente, así se tiene por cada indicador o subindicador el ítem de análisis correspondiente.

CAPÍTULO II

RELATO EMPÍRICO

1. RELATO EMPÍRICO.

El procesamiento de la información documental se llevó a cabo en dos momentos:

- 1° En primer lugar respecto a las resoluciones judiciales (autos que pone fin al proceso, sentencias y ejecutorias) se confeccionó una base de datos en Access versión Office 2010, a través de la ficha de recolección documental (FICHA DE RECOPIACIÓN DOCUMENTAL), en la que se consignaron las variables con sus respectivos indicadores y subindicadores.

En algunos casos los ítems de la ficha tienen opciones de respuesta cerrada, en otros casos con opciones de respuesta abierta, y en ciertos casos con respuesta mixta; un ejemplo de respuesta única es el indicador número del expediente. Este procesamiento se realizó con cada uno de los documentos utilizados conforme se aprecia en la base de datos.

Es necesario indicar que la ficha de recolección de información sirvió como guía para la recolección y selección de los documentos, y a su vez, los documentos sirvieron para retroalimentar el diseño de la ficha.

- 2° En segundo lugar, en cuanto a las sentencias del Tribunal Constitucional utilizando la ficha como referencia se recabó y se seleccionó las principales resoluciones emitidas, sea las que se declararon fundadas, infundadas o improcedentes en los procesos constitucionales de acción de inconstitucionalidad, así como de acciones de habeas corpus.
- 3° En tercer lugar se realizó la selección de los distintos acuerdos plenarios sobre la prescripción penal, por lo que se tuvo que revisar todos los acuerdos plenarios emitidos por la Corte Suprema hasta la fecha, así como los realizados por las otras instancias inferiores. También aquí se utilizó la ficha de recolección documental.
- 4° En cuarto lugar se llevó a cabo la recolección y selección de los distintos Tratados de Extradición suscritos por el Estado del Perú, de tal manera que se hizo una búsqueda en el Diario Oficial El Peruano, en la Biblioteca de Relaciones Exteriores, así como algunos textos publicados sobre la materia de los autores nacionales como Javier Valle Riestra y Manuel Álvarez Chauca, y otros extranjeros, luego de lo cual se procedió al análisis de cada uno de los Tratados y Convenios referidos a la prescripción penal, para lo mismo también se consideró de manera referencial la ficha de recolección.
- 5° Así mismo, se realizó la recolección y selección de los Tratados y Convenios de asistencia judicial en materia penal suscritos por el Estado del Perú, por lo que se hizo

una búsqueda en el Diario Oficial El Peruano, en la Biblioteca de Relaciones Exteriores, luego de los cuales se procedió a seleccionar los referidos a la prescripción penal, y a su correspondiente análisis.

Luego que se recabó y procesó la información relevante para esta investigación, se procedió a la correspondiente tabulación, para lo cual se confeccionó la tabla de sistematización de variables, indicadores y subindicadores, en donde se consignaron los resultados más significativos, después de un arduo procesamiento de la información.

Con los resultados que se obtuvieron se elaboraron tablas y gráficos, así para realizar toda esta labor se consideraron los siguientes aspectos:

1° La selección de la muestra, por períodos de tiempo, referidos a la prescripción penal en los distintos juzgados y la Sala Transitoria de la Corte Suprema. En el primer caso las resoluciones emitidas correspondientes a los años 1997 y 1998; y en el segundo caso las ejecutorias corresponden a los años 2008 y 2009.

Aunque en algunos casos se consideraron ejecutorias de otros períodos para comprender mejor la evolución del tratamiento de la prescripción penal e incluso resoluciones del subsistema anticorrupción, que por su relevancia eran de indispensable valía.

2° Obtenida la información recabada se realizó el agrupamiento y correlación entre los datos obtenidos a partir de los subindicadores e indicadores con sus respectivas variables.

3° Una vez que se tuvieron los resultados agrupados correspondió realizar el análisis de cada uno de los datos obtenidos a fin de agruparlos y vincularlos cualitativamente con el tratamiento de la institución de la prescripción penal, según los aportes de la doctrina, la legislación nacional y comparada, así como en materia de justicia constitucional, tratados y convenios bilaterales y multilaterales.

4° De los resultados obtenidos se estableció principalmente la confirmación de la hipótesis formulada, así como otros aspectos interesantes como la confirmación de que hay algunos supuestos de prescripción que son inaplicables. En fin, esto se detalla con mayor profundidad en la parte correspondiente a las conclusiones.

al día de hoy 20 de abril - Base de datos (Access 2007 - 2010) - Microsoft Access

Inicio Crear Datos externos Herramientas de base de datos

Archivo Ver Portapapeles Vistas

Cortar Copiar Copiar formato Pegar Filtro Ordenar y filtrar

Ascendente Descendente Avanzadas Quitar orden Alternar filtro

Herramientas de base de datos

Nuevo Guardar Actualizar todo Eliminar Más

Totales Reemplazar Ir a Seleccionar Buscar

Revisión ortográfica Más Registros

Formato de texto

Ficha de Recopilación Documental (Resoluciones Judiciales)

Forma de resolver:

¿Qué fecha se ha tomado en cuenta como referencia para el cómputo de la prescripción?:

Se precisó la fecha con:

La fecha se conoció por noticia criminal vía:

¿Qué tipo de prescripción de la persecución penal se dió?:

¿En qué etapa del proceso se dió?:

¿Se interrumpen o se suspenden?:

¿Hay argumentación jurídica externa?:

Inicio del cómputo de los plazos de prescripción:

Concurso y prescripción:

Se precisa la separación de los plazos de prescripción para cada procesado o condenado:

Hay algún caso de revocación de condena condicional o de reserva de fallo donde se precise que comienza a correr el plazo de prescripción:

Se precisa supuestos de reducción de los plazos de prescripción por edad (menor de 21 años y/o más de 65 años):

Caso de contumacia, con la prescripción, opera o no:

Casos de duplicidad de plazos de prescripción:

Casos de imprescriptibilidad de la persecución penal o de la pena:

Casos de suspensión de la persecución penal o de la pena:

Registro: 1134 de 1134 Sin filtro Buscar

Vista Formularios

Panel de navegación

Bloq Num 07:45 p.m. 22/05/2012

al día de hoy 20 de abril : Base de datos (Access 2007 - 2010) - Microsoft Access

Inicio Crear Datos externos Herramientas de base de datos

Archivo Ver Vistas Portapapeles Copiar Copiar formato Pegar Filtro Ordenar y filtrar Ordenar y filtrar

Inicio Sistema

Proceso

Ficha de Recopilación Documental (Resoluciones Judiciales)

Panel de navegación

Registro: 1134 de 1134 Sin filtro Buscar

Formato de texto

Reemplazar Ir a Buscar Seleccionar Buscar

Totales Guardar Actualizar todo Eliminar Más Revisión ortográfica Registros

Casos de prescripción de otras penas:

Casos de faltas por la persecución penal:

Casos de faltas por prescripción de la ejecución de la pena:

Otros casos de prescripción de la persecución penal de otras penas distintas a la privativa de libertad:

Renuncia a la prescripción de la persecución penal:

Prescripción de la reparación civil:

Inicio del plazo de prescripción de la ejecución de la pena:

¿Opera la prescripción extraordinaria para las faltas?:

¿Opera la prescripción extraordinaria de la pena en las faltas?:

¿Opera la prescripción en las medidas de seguridad?:

Bloq Num 07:46 p.m. 22/05/2012

Vista Formulario

3. MODELO DE TABLA DE SISTEMATIZACIÓN DE VARIABLES.

CUADRO DE SISTEMATIZACIÓN DE VARIABLES					
clasificación de variables	VARIABLES	INDICADORES	SUBINDICADORES		RESULTADOS
VARIABLES ANALÍTICAS	ASPECTOS TAXATIVOS	Género de la infracción	delito		
			falta		
		Clase de prescripción	de la acción penal		
			de la sanción penal		
		Tipo del proceso	sumario		
			ordinario		
			querrela		
			falta		
			otros		
	ASPECTOS FORMAL-ADMINISTRATIVOS	Distrito judicial	Lima		
			Otros		
		Juzgados	de primera instancia		
			Suprema		
VARIABLES EMPÍRICAS	PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL	Jueces penales			
		expedientes			
		T. Ordinaria			
		T. Extraordinaria			
		T. Plazo legal	delitos-	penas diferentes a la privativa de la libertad	
			faltas	penas temporales	
	PRESCRIPCIÓN DE LA SANCIÓN PENAL	T. Ordinaria	delitos	cadena perpetua	
			delitos	para primarios	
		T. Extraordinaria	delitos	para reincidentes	
			delitos	pena conminada	
		T. Plazo legal	delitos	de la pena conminada	
			faltas	para primarios	

CUADRO DE SISTEMATIZACIÓN DE VARIABLES					
clasificación de variables	VARIABLES	INDICADORES	SUBINDICADORES		RESULTADOS
VARIABLES INSTRUMENTALES	Cómputo del tiempo	Según el tipo de infracción penal	delito	para reincidentes	
				tentativa	
				instantáneo	
				continuado	
				permanente	
				otros	
			falta	tentativa para los casos del art. 441 y 444, primer y segundo párrafo	
				instantáneo	
				continuado	
				permanente	
				otros	
		Según los tipos de sanción	pena	delitos	
			faltas		
		Según las condiciones del agente	medida de seguridad para delitos		
			pena y medida de seguridad para delitos		
			Por la edad del imputado	más de 18 y menos de 21 años	
				más de 65 años	
			Por la cantidad de sujetos	autor	
				coautor	
				cómplice primario	

CUADRO DE SISTEMATIZACIÓN DE VARIABLES							
clasificación de variables	VARIABLES	INDICADORES	SUBINDICADORES		RESULTADOS		
				cómplice secundario			
				Instigador			
				cómplice psicológico			
		Por concursos		concurso ideal			
				concurso real			
				concurso ideal y real			
				concurso real e ideal			
		Habitualidad					
		Reincidencia					
		Por la función desempeñada		funcionario público			
				servidor público			
		Según la continuidad o no del plazo de prescripción	Interrupción	acción penal		NO PRECISA=40 8	000 0
				de la sanción penal			

CUADRO DE SISTEMATIZACIÓN DE VARIABLES						
clasificación de variables	VARIABLES	INDICADORES	SUBINDICADORES		RESULTADOS	
					0	
			Suspensión	acción penal		
					0	

CAPÍTULO III

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

A continuación se realiza el análisis de las variables que se han utilizado en esta investigación, a partir de los indicadores obtenidos luego del recojo y procesamiento de la información:

1. VARIABLES ANALÍTICAS.

1.1. ASPECTOS TAXATIVOS.

a. Género de la infracción penal.

Los resultados obtenidos de ambos subindicadores respecto del indicador género de infracciones penales son los siguientes:

- Que los juzgados y la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema prioritariamente conocen de delitos y subsidiariamente pueden conocer de faltas penales, aunque en un número muy insignificante, si se considera todo el volumen de la carga procesal de cada uno de los órganos competentes.
- De manera diferenciada se puede señalar:

1° Sobre la infracción delito.

Los procesos penales en los que se ventiló los delitos cometidos son aproximadamente en total 1097, es decir con una alta frecuencia de incidencia, en términos porcentuales se tiene un alto porcentaje de 96.23 % respecto de la muestra elegida.

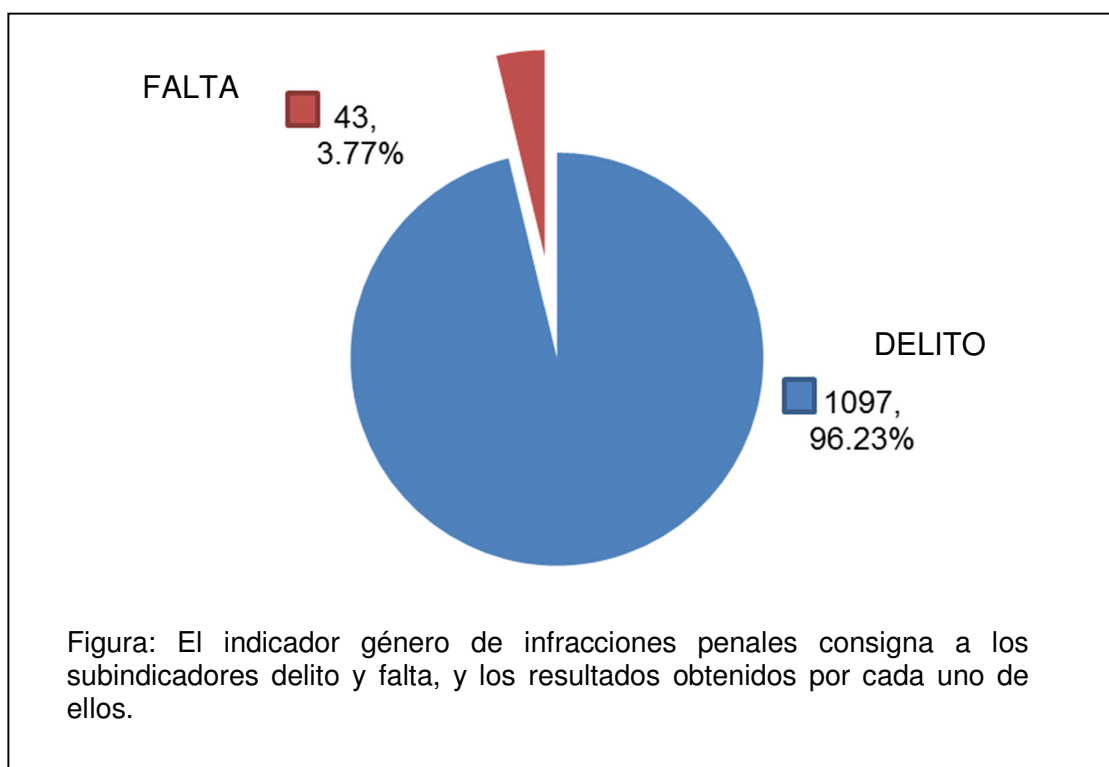
Cabe aclarar que en muchos de estos procesos también se vislumbraron más de un delito, por lo que una cosa es la cantidad de procesos por delitos cometidos y otra es la cantidad de delitos cometidos, las cifras obtenidas se refieren al primero y no al último de los elementos que se acaban de describir.

2° Sobre la infracción falta penal.

De la misma forma que los delitos, aquí solo se vislumbran los procesos penales por faltas cometidas que son 43, y eso que éstas son las que se derivan de procesos penales iniciados como infracciones delictuosas, pero luego de una apreciación rigurosa y considerando en muchos casos la cuantía del objeto material se apreció como una falta penal, con un porcentaje mínimo del 3.77 % en torno al total de la muestra elegida.

GRÁFICA N° 1

ASPECTOS TAXATIVOS: DELITO vs FALTA



b. Clases de prescripción

1° De la acción penal

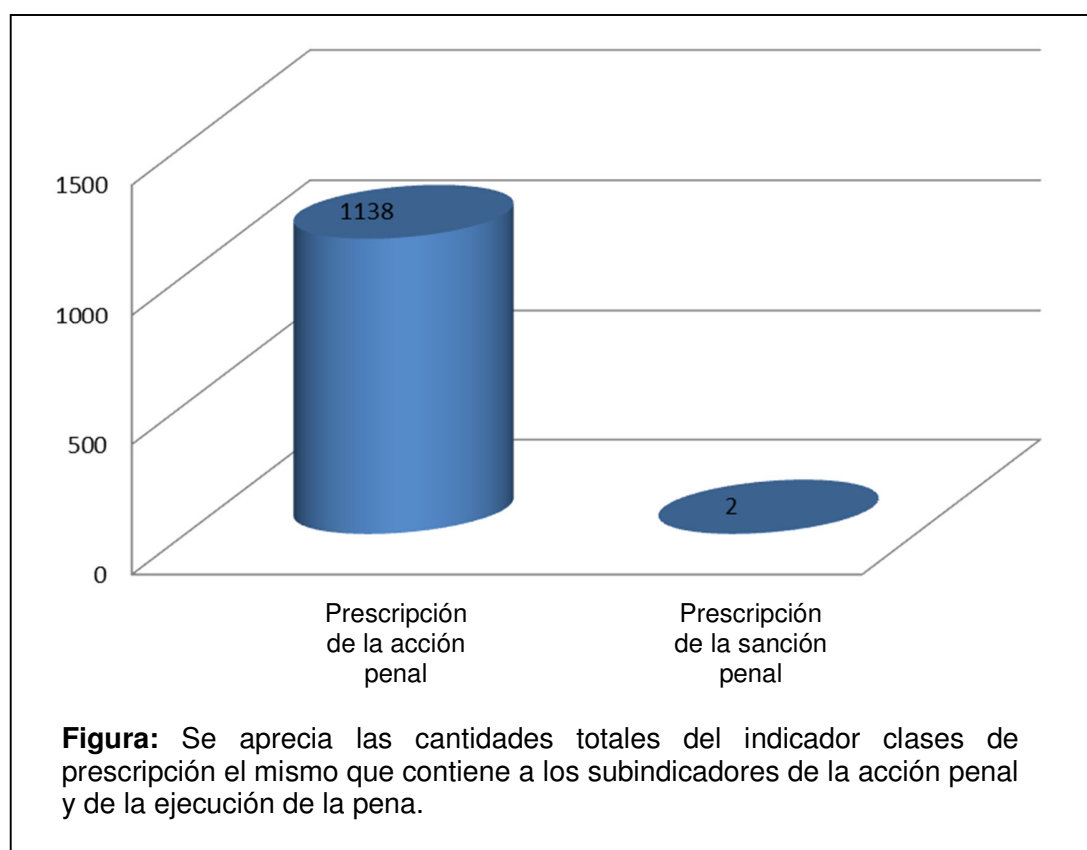
Por la clase de prescripción de la acción penal de las infracciones penales se ha obtenido 1138 casos, representando el indicador con mayor frecuencia considerando el total de la muestra de la investigación, y en términos porcentuales representa el 99.82 %, excepto por dos casos, que a su vez representa el 0.18 %, eso refleja que esta clase de prescripción es la que más se utilizó.

Cabe aclarar que aquí aún no se puede diferenciar si del total de casos de prescripción de la acción penal cuántos corresponden a casos de prescripción ordinaria, cuántos a prescripción extraordinaria o cuántos contemplan otro tipo de prescripción.

2° De la sanción penal

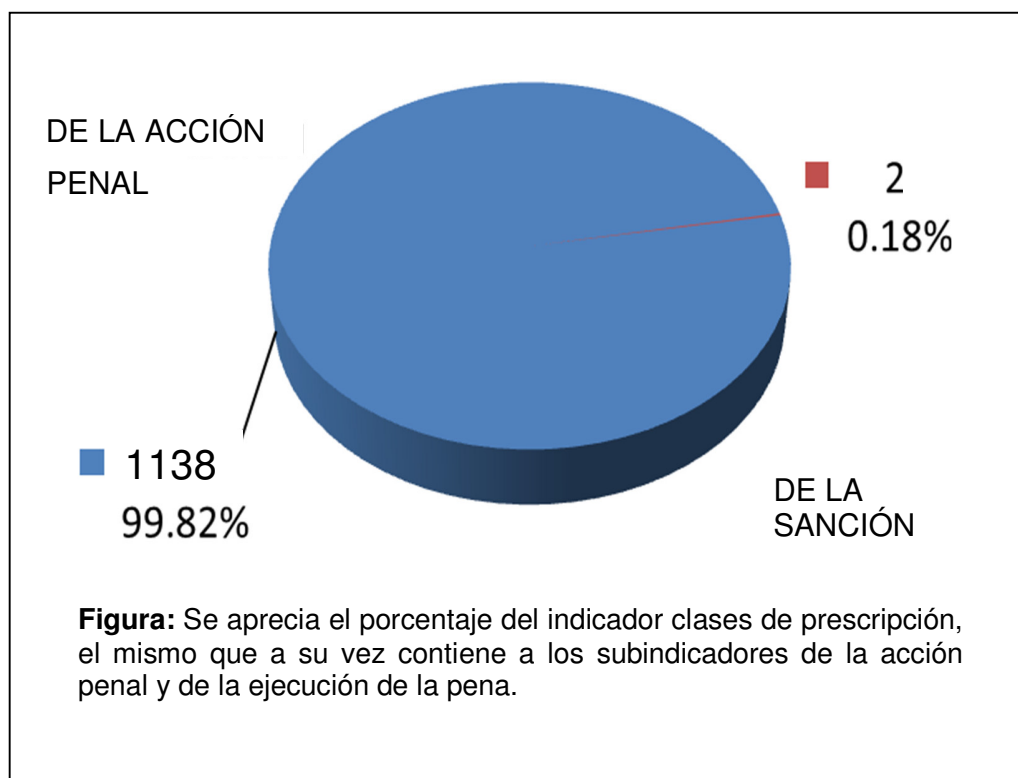
Por la clase de prescripción de la sanción penal, precisando que se trata de la pena y no de otra de las sanciones penales, se han obtenido sólo 2 casos, deviniendo tal cantidad en insignificante, si se la compara con el total de casos de prescripción penal de la ejecución de la pena, no encontrándose ningún otro tipo de sanción penal, así esto se aprecia en números enteros o unidades en la Gráfica N° 2 y en términos de cifra porcentual en la Gráfica N° 2A.

GRÁFICA N° 2 ASPECTOS TAXATIVOS: CLASES DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL VS. PRESCRIPCIÓN DE LA SANCIÓN PENAL



GRÁFICA N° 2A

ASPECTOS TAXATIVOS: CLASES DE PRESCRIPCIÓN



c. Forma de proceso

1° Sumario

El tipo de proceso penal sumario es donde se produce la mayor cantidad de casos de prescripción de la acción penal, así en este tipo de procesos es donde acontece la más alta frecuencia de incidencia en el Distrito judicial de Lima, y eso se refleja atendiendo a la cantidad de prescripciones obtenidas, 988 casos, significando el 86.67 % del total de procesos, ello atendiendo al indicador tipo de infracción delito.

No hay que dejar de mencionar que este tipo de proceso no fue considerado el modelo tipo del ordenamiento procesal penal peruano, pues el modelo tipo lo constituyó el proceso penal ordinario, empero luego de la entrada en vigencia del D. Leg. N° 124, este proceso cuantitativamente es hoy el más relevante al menos desde este criterio.

2° Ordinario

Los casos de prescripción de la acción penal proveniente de procesos sumarios arroja como resultado un índice de frecuencia de 100 procesos ordinarios, representando en porcentaje el 8.77 %, por lo cual siendo estos procesos generalmente los que corresponden a los delitos de mayor gravedad, es indispensable señalar que sí se producen casos de prescripción e incluso teniendo estos procesos mayores plazos para realizar las distintas etapas del proceso (investigación preliminar sin plazo, investigación judicial y juzgamiento con plazos determinados aunque casi siempre incumplidos, es el caso de los procesos ordinarios en el sistema anticorrupción. Así por ejemplo se tiene el caso del general Chacón)⁵³⁶, aunque en el subsistema anticorrupción se aprecian también casos de prescripción penal.

3° Querella

Los delitos denominados de acción privada son los que se rigen por el proceso penal de querella, constituyendo en lo que a delitos se refiere el tercer proceso en los que con más frecuencia se realizan los casos de prescripción, así se tienen 8 casos representando un porcentaje de 0.70 %.

4° Falta

Las infracciones penales faltas encontradas en la investigación tienen un índice de frecuencia de 43 casos, representando en porcentaje el 3.77 %, es decir se trata del tercer caso significativo de la muestra procesada.

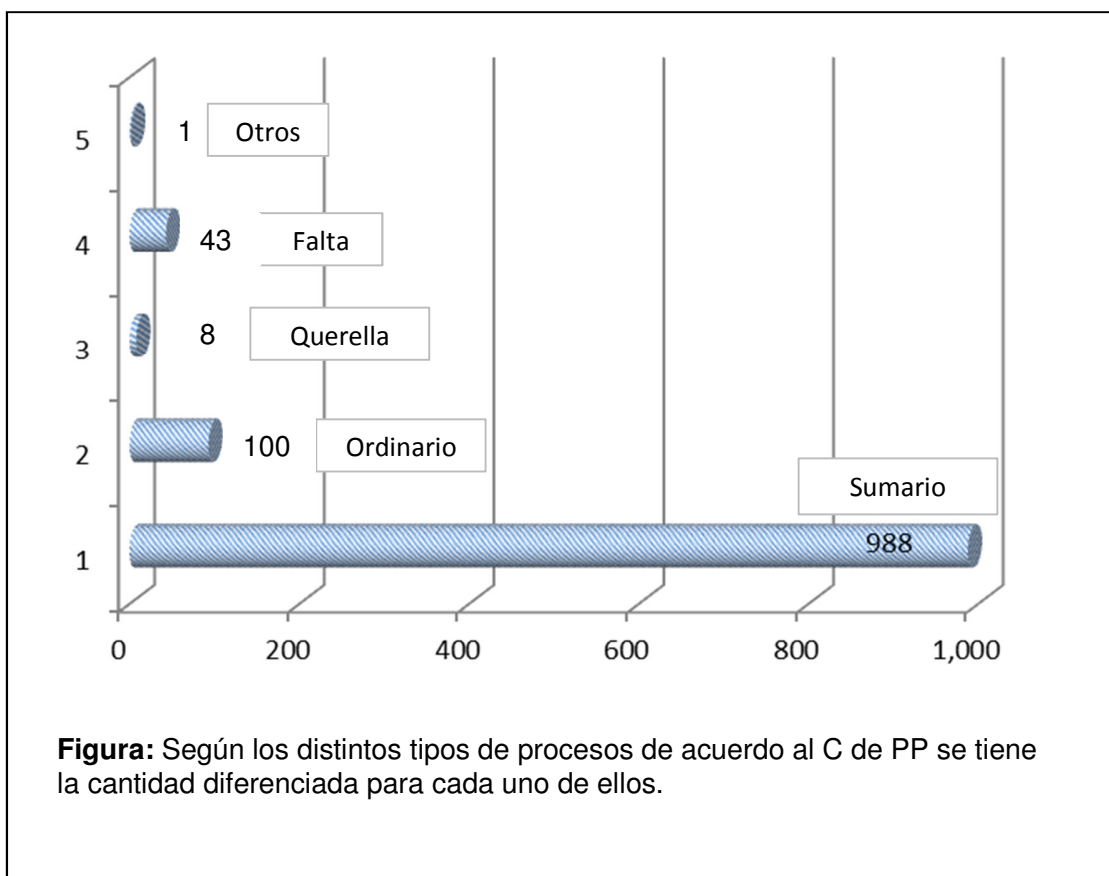
5° Otros

De todos los casos de prescripción suscitados en esta investigación se ha encontrado sólo 1 caso de un tipo de proceso diferente al de los anteriores, aunque puede tratarse de casos que pueden constituirse al margen de error, por no estar precisados.

⁵³⁶ Véase el Anexo N° 5 correspondiente a la Sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N° 4118-2004-HC/TC, de fecha lunes, 06 de junio de 2005, aprobada por unanimidad.

GRÁFICA N° 3

ASPECTOS TAXATIVOS: POR LA FORMA DEL PROCESO



En resumen, atendiendo al indicador tipos de proceso y de conformidad con el código de procedimientos penales de 1939, se considero los siguientes procesos: el proceso ordinario, sumario, querella, falta u otros, obteniéndose como resultado que la gran mayoría de procesos en los que se han planteado los casos de prescripción son en los procesos sumarios, luego vienen los procesos ordinarios, las faltas, las querellas, y por último otro tipo de proceso, o también puede tratarse del margen de error.

1.2. ASPECTOS FORMALES ADMINISTRATIVOS

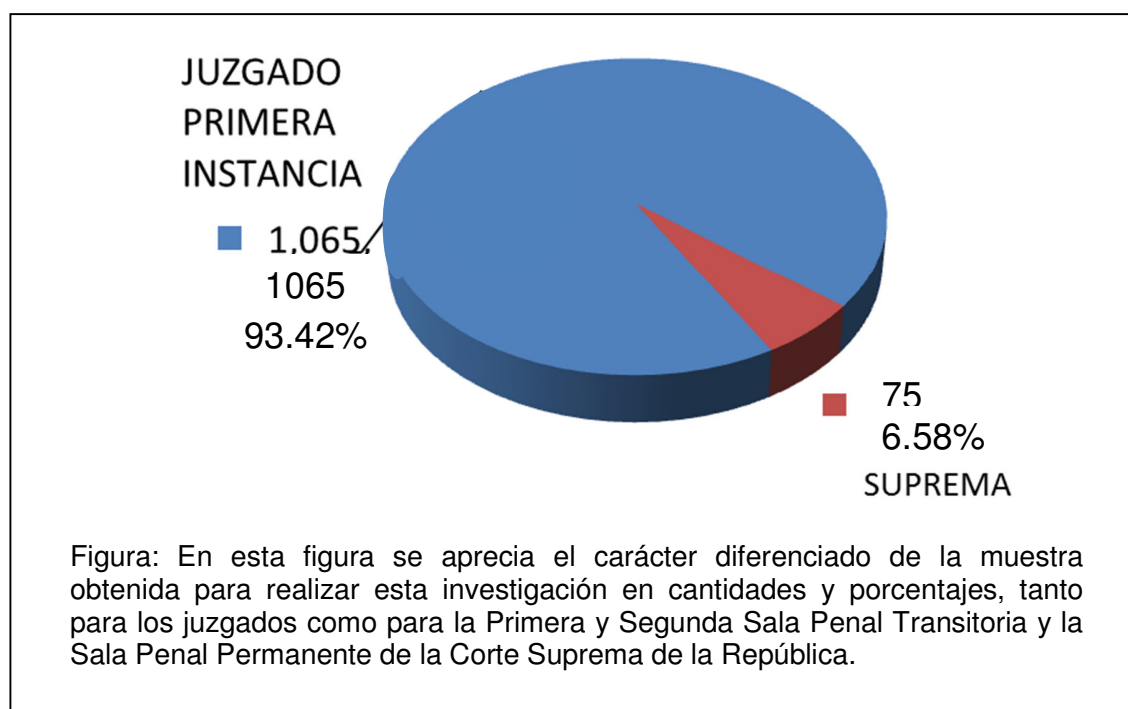
a. Distrito Judicial

El recojo de la información se llevó a cabo en dos instancias del Poder Judicial:

- 1° En el caso de los juzgados de primera instancia se ha llevado a cabo en el distrito judicial de Lima, tratándose de juzgados penales, en donde se utilizaron 1065 expedientes, o casos (o procesos penales), los mismos que representan el 93.42% del total de la muestra utilizada en los años 1997 y 1998.
- 2° En el caso de la Corte Suprema se han considerado únicamente los expedientes que han sido materia de competencia de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema con 51 casos correspondientes a los años 2009 y 2010; de la Primera y Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema con 7 casos correspondientes a los años 2004, 2010 y 2011; y de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema con 17 casos correspondientes a los años 2007, 2009, 2010 y 2011; individualizándose así una totalidad de 75 expedientes o casos (o procesos), con un índice de frecuencia del 6.58% del total de la muestra.

GRÁFICA N° 4

ASPECTOS FORMAL-ADMINISTRATIVOS: JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA VS. CORTE SUPREMA

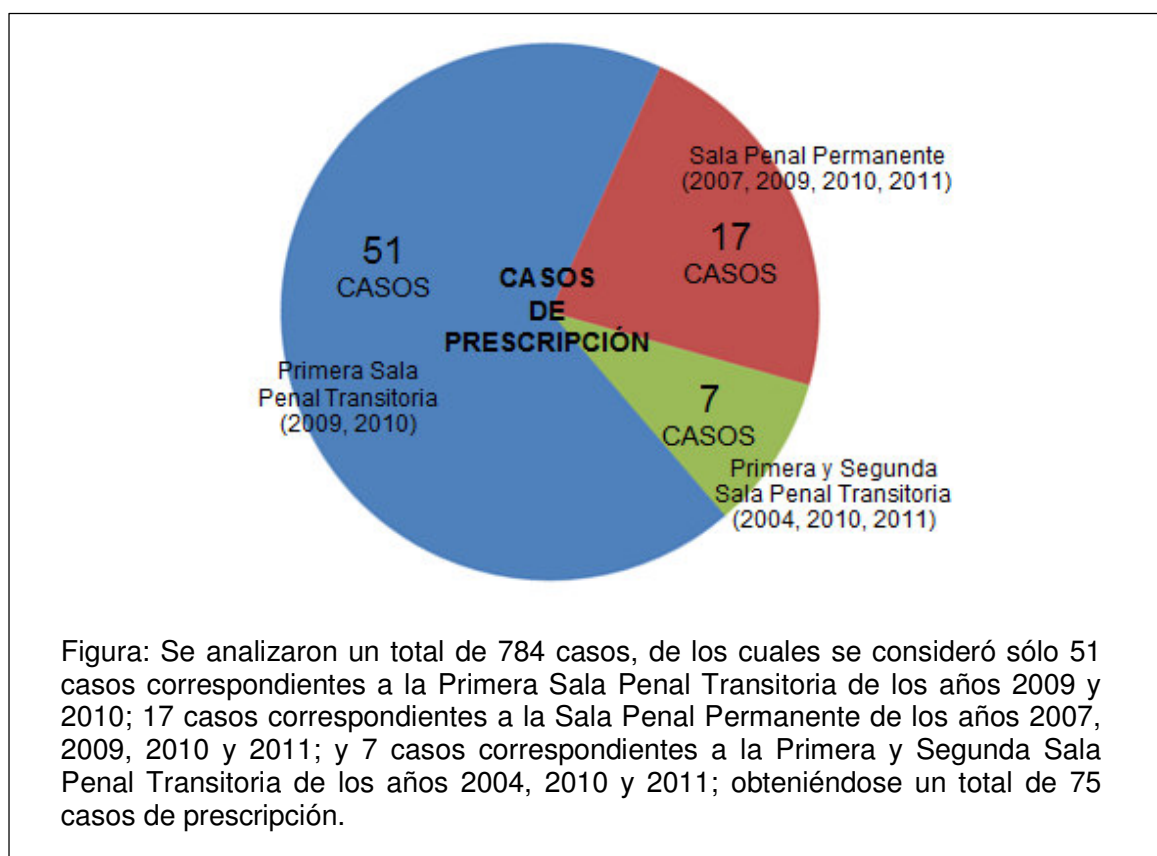


En síntesis del total de la muestra estratificada de esta investigación (se trabajó con resoluciones de diversos juzgados penales de primera instancias de los años 1997 y 1998, así como con ejecutorias de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema correspondiente a los años 2009 y 2010), este gráfico sólo demuestra la cantidad de las resoluciones procesadas en esta investigación, la misma que sirve para distinguir los resultados correspondientes a los juzgados en un período determinado, de los resultados correspondientes a la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, pues se trata de otro período.

La comparación entre ambas porciones de la muestra tiene su utilidad desde una perspectiva puramente cualitativa, considerando que en la Primera Sala de la Corte Suprema se producen los casos con mayor significado argumentativo, aunque no se puede dejar de mencionar que en la parte teórica de esta investigación se ha realizado el análisis de otras resoluciones que no forman parte de la muestra, ello considerando una perspectiva, reitero puramente cualitativa.

GRÁFICA N° 4-A

ASPECTOS FORMAL-ADMINISTRATIVOS: CORTE SUPREMA



2. VARIABLES EMPÍRICAS

2.1. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL

a. Ordinaria de delitos

El resultado obtenido precisa que este tipo de prescripción tiene una baja incidencia al momento de aplicarse, pues si se considera el total de los procesos, en realidad sólo en 11 de ellos se aplicó la prescripción ordinaria, representando una frecuencia del 0.96 %.

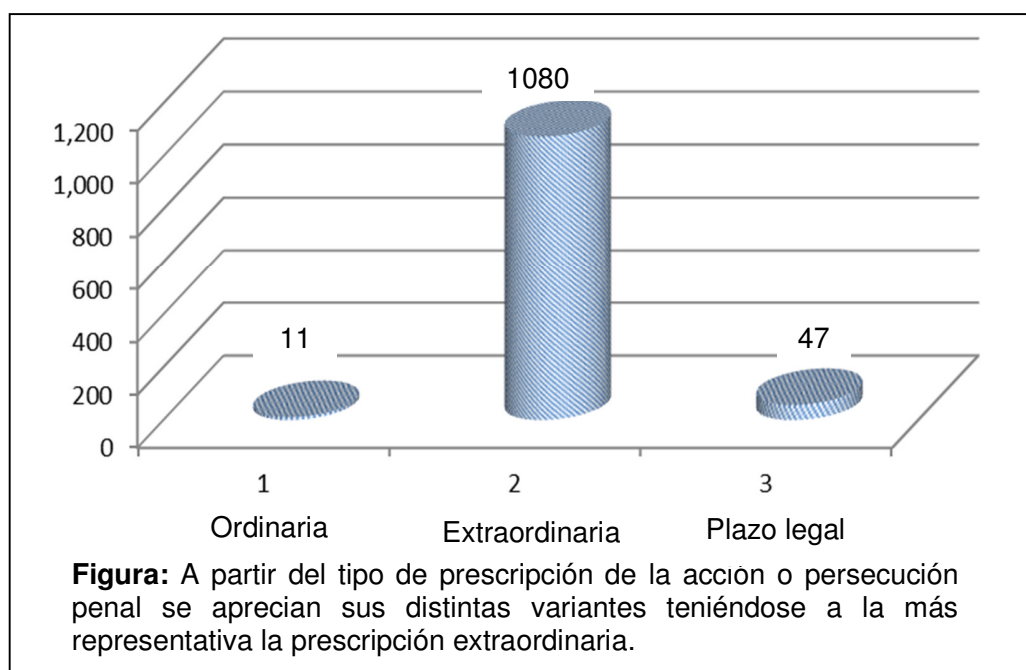
b. Extraordinaria de delitos

El resultado obtenido precisa que este tipo de prescripción tiene la más alta incidencia al momento de aplicarse, pues si se considera el total de los procesos, en realidad se trata de 1080 de ellos, así se aplicó la prescripción extraordinaria, representando una frecuencia del 94.74%, porcentaje sumamente significativo si se considera el total de la muestra.

c. Plazo legal para delitos y/o faltas

El resultado obtenido precisa que este tipo de prescripción tiene una baja incidencia al momento de aplicarse, pues si se considera el total de los procesos, en realidad sólo en 47 de ellos se aplicó la prescripción con plazo legal sea que se trate de delito y/o faltas, representando una frecuencia del 4.12 %, lo cual resulta insignificante considerando el total de la muestra.

GRÁFICA N° 1
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL (ORDINARIA,
EXTRAORDINARIA Y DEL PLAZO LEGAL)



2.2. PRESCRIPCIÓN DE LA SANCIÓN PENAL.

En esta investigación sólo se ha podido encontrar dos casos de prescripción de la sanción penal pena, por lo cual resulta insignificante analizar este indicador. Tal vez sólo es necesario dejar sentado que este tipo de prescripción no se presenta.

a. Ordinaria para la ejecución de penas impuestas por delitos realizados.

Es insignificante el resultado alcanzado, pues sólo se consiguieron en dos procesos.

b. Extraordinaria para la ejecución de penas impuestas por delitos realizados.

No se consiguieron resultados.

c. Plazo legal para ejecución de penas impuestas por faltas realizadas.

No se consiguieron resultados.

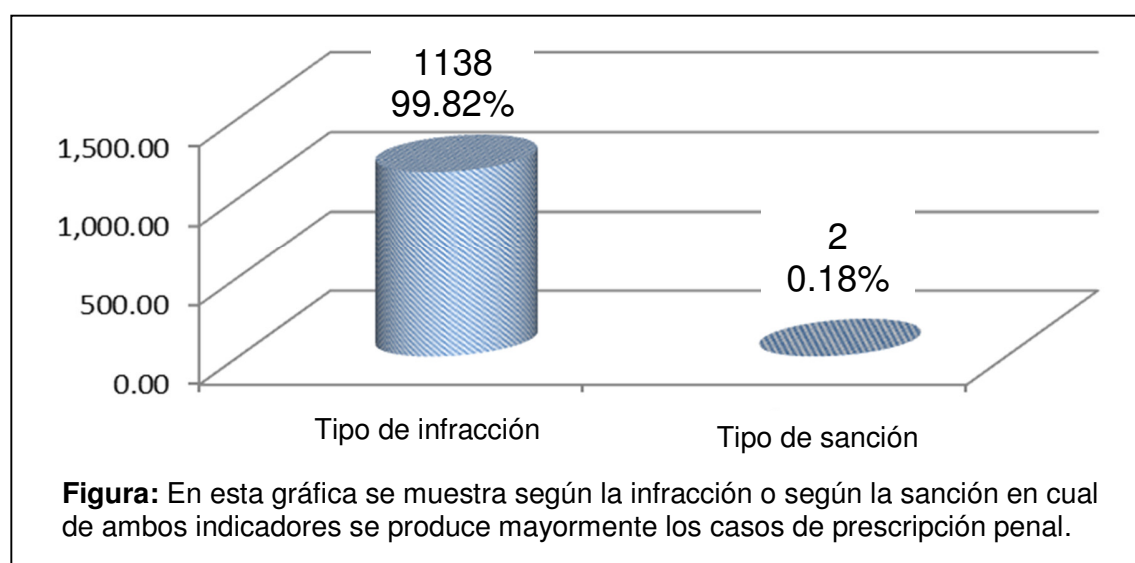
3. VARIABLES INSTRUMENTALES

3.1. POR EL CÓMPUTO DEL TIEMPO

Según este indicador del cómputo del tiempo, sea que se trate del subindicador tipo de infracción penal o del subindicador la sanción penal, se obtuvo como resultado del subindicador de prescripción de la infracción penal, 1138 casos, sean estos delitos o faltas.

En el caso del indicador de prescripción de la sanción penal el resultado obtenido resulta insignificante, pues sólo se registraron 2 casos.

GRÁFICA N° 2
CÓMPUTO DEL TIEMPO: INFRACCIÓN PENAL VS. SANCIÓN PENAL



a. Según el tipo de infracción penal (delito y falta).

De los casos que constituyen la infracción penal se tiene que 1095 se refieren a delitos y 43 a faltas.

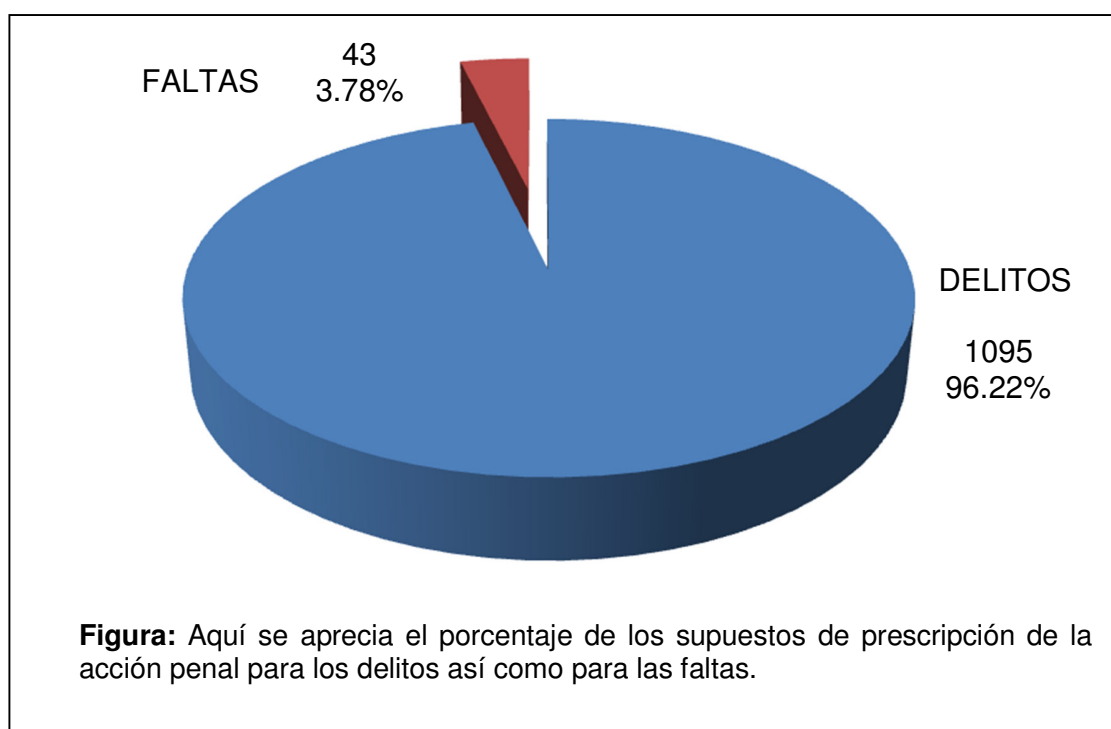
Cabe precisar que los magistrados jueces de primera instancia del distrito judicial de Lima cuando tienen que apreciar las faltas, sólo se limitan a computar el plazo, sea del art. 440 numeral 5, y en algunos casos acuden a señalar que se aplica el art. 83 in fine por extensión.

1° Delito

2° Falta

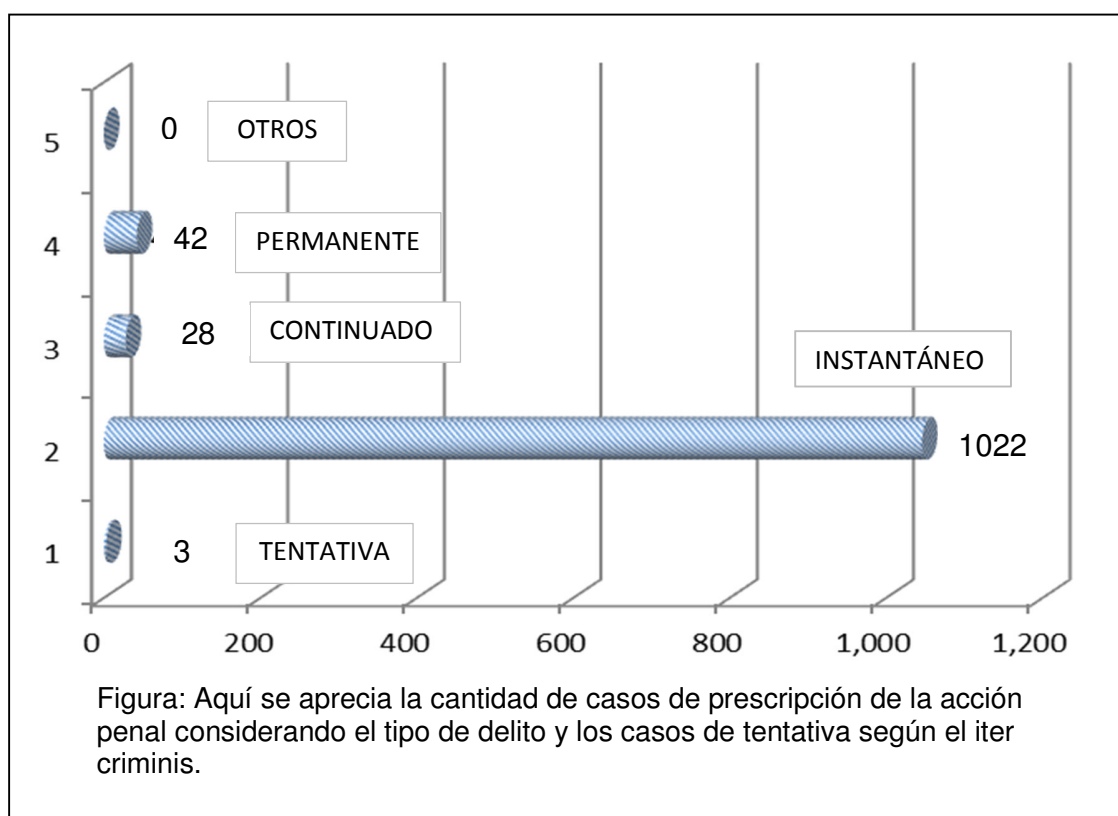
Del total de los indicadores referidos a la infracción penal, se tiene 1095 de prescripción de la acción penal de delitos constituyendo el índice de frecuencia del 96,22%, y en el caso de las faltas se tiene 43, constituyendo el 3,78%, esto de manera subsidiaria, pues es necesario precisar que el objeto de la presente investigación está dirigida a los delitos.

GRÁFICA N° 2-A
CÓMPUTO DEL TIEMPO, INFRACCIÓN PENAL: DELITOS VS FALTAS



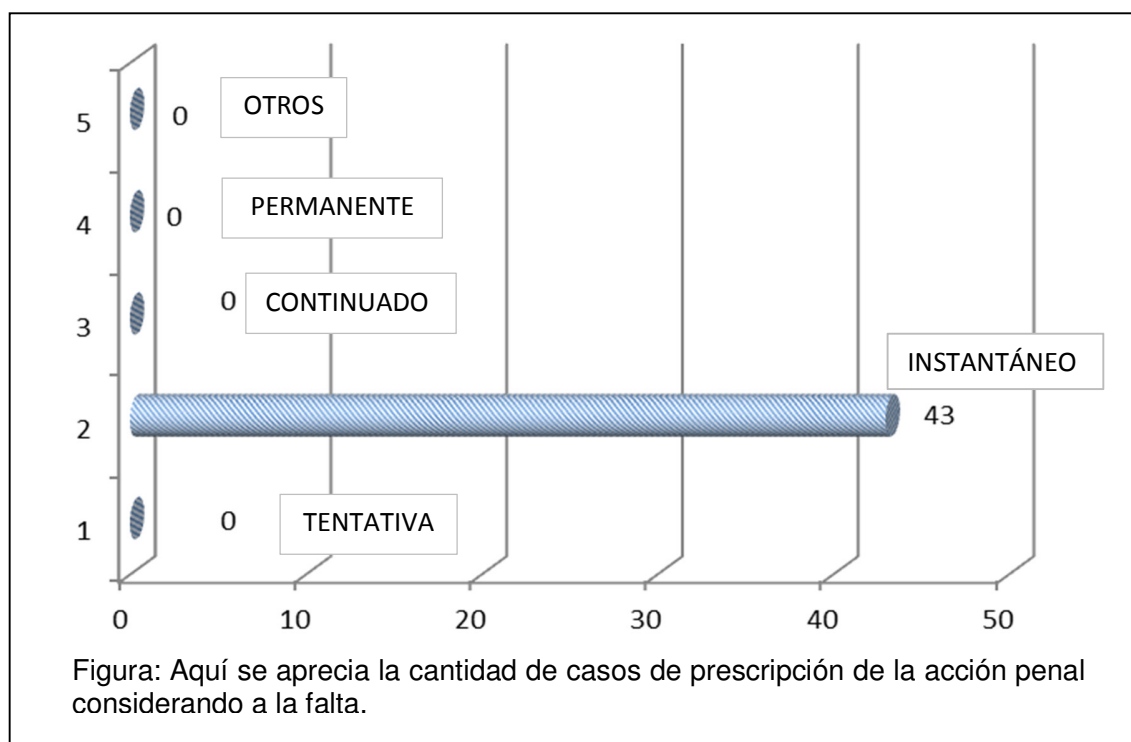
Del indicador de la prescripción de la infracción penal de delitos se aprecia a partir de los subindicadores consignados en el art. 82 del CP que es el criterio de la comisión de delito el que se considera interpretativamente y a partir de este resultado se distingue 1022 casos de prescripción de la acción penal por delitos instantáneos, en segundo lugar 42 casos de prescripción de la acción penal por delitos permanentes, en tercer lugar 28 casos por prescripción de delito continuado; y 3 casos por prescripción de casos de tentativa.

GRÁFICA N° 2-A-1° **CÓMPUTO DEL TIEMPO: INFRACCIÓN PENAL DE** **DELITOS**



Del indicador de la prescripción de la infracción penal de faltas se aprecia a partir de los subindicadores consignados en el art. 82 del CP, que es el criterio de la comisión de la falta el que se considera interpretativamente, y a partir de este resultado se distingue 43 casos de prescripción de la acción penal por faltas instantáneas únicamente, y sobre los supuestos de tentativa no se aprecia, ya que en las faltas no son relevantes penalmente estos supuestos.

GRÁFICA N° 2-A-2° CÓMPUTO DEL TIEMPO: INFRACCIÓN PENAL DE FALTAS



b. Según el tipo de sanción

La prescripción de la ejecución de la pena es el tipo de prescripción sobre el cual en la práctica no se presentan casos, sosteniéndose que en el distrito judicial de Lima y en la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema se cumplen las penas impuestas, dejando en claro que otra cosa es cómo se cumplen, ya que eso llevaría a realizar otra investigación.

La prescripción de la ejecución de la pena por el bajo índice de frecuencia que presenta, permite afirmar que en el Perú las penas se cumplen, aunque se trate de una forma de cumplimiento simbólica o formal.

1° Penas.

De los resultados obtenidos se tienen sólo dos casos de prescripción de la sanción referido a la pena privativa de la libertad.

2° Medidas de seguridad para delitos.

No se obtuvieron resultados.

3° Penas y medidas de seguridad para delitos.

No se obtuvieron resultados.

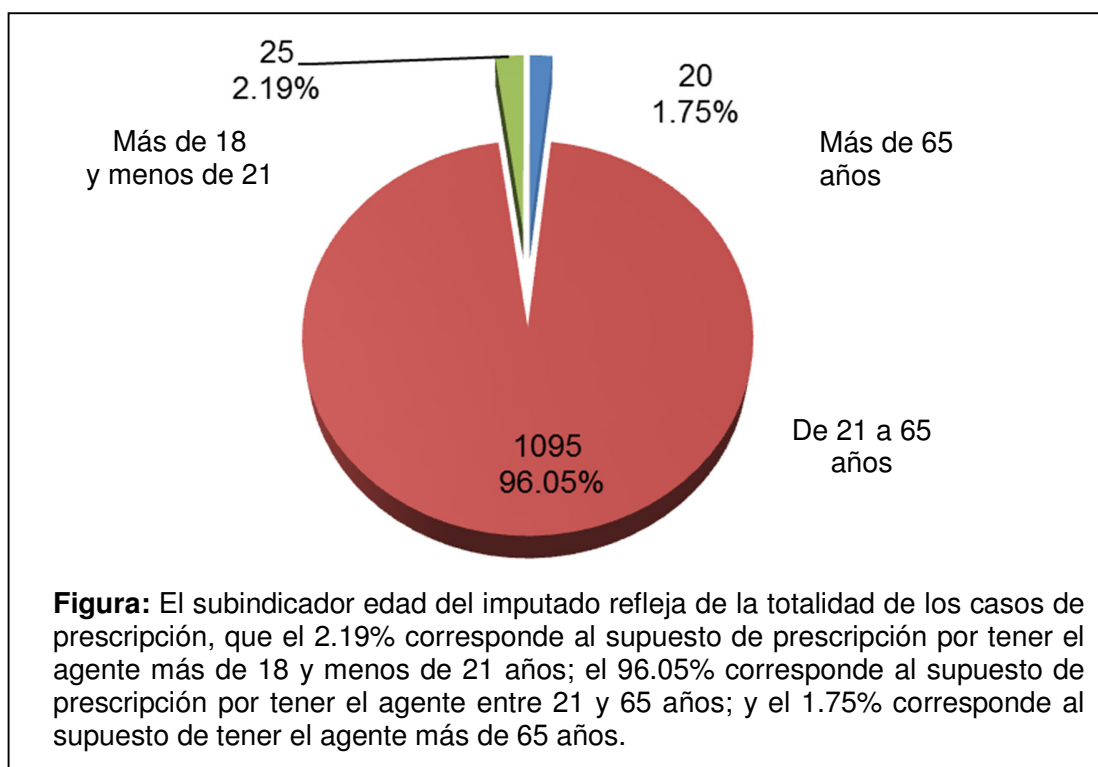
c. Según las condiciones del agente.

Los resultados obtenidos en torno a este indicador precisan situaciones relevantes. En primer lugar por el subindicador edad del imputado, en segundo lugar por el criterio de la cantidad de sujetos (1040 casos de prescripción), y en tercer lugar por el subindicador referido a los casos de prescripción mediante concursos sean estos ideales o reales.

1° Por la edad del imputado.

De los resultados obtenidos sobre este subindicador, es necesario precisar que este supuesto de modificación del plazo de prescripción de la acción penal es uno de los que se aplica con relativa significación, sin embargo no se debe desconocer que su efecto implica que los plazos resultan más cortos para alcanzar dicha prescripción.

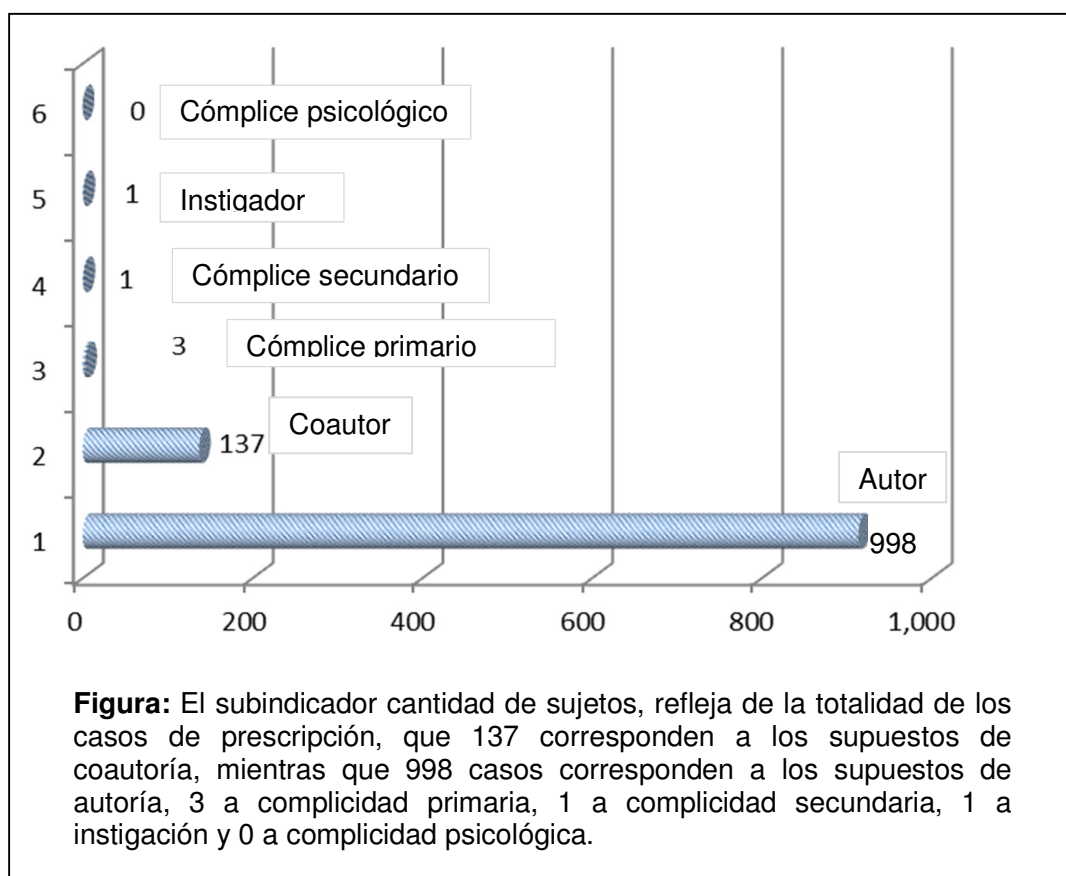
GRÁFICA N° 3
CÓMPUTO DEL TIEMPO: SEGÚN LA CONDICIÓN DEL AGENTE
EDAD DEL IMPUTADO



2° Por la cantidad de sujetos.

De los resultados obtenidos sobre este subindicador, es necesario precisar que este supuesto de modificación del plazo de prescripción de la acción penal es el que más se aplica con relativa significación, sin embargo no se debe desconocer que su efecto es insignificante en términos de alteración del plazo de prescripción de la acción penal, pues en el CP no se contempla consecuencia diferenciada alguna en materia de prescripción, siendo esto importante a considerar de *lege ferenda* en un proceso de reforma inmediata, pues no es lo mismo la comisión del delito por parte de una persona que la realizada vía una organización criminal, una banda, una asociación ilícita, o una pluralidad de agentes significativa.

GRÁFICA N° 3-A CÓMPUTO DEL TIEMPO: SEGÚN CONDICIÓN DEL AGENTE CANTIDAD DE SUJETOS



3° Por los concursos.

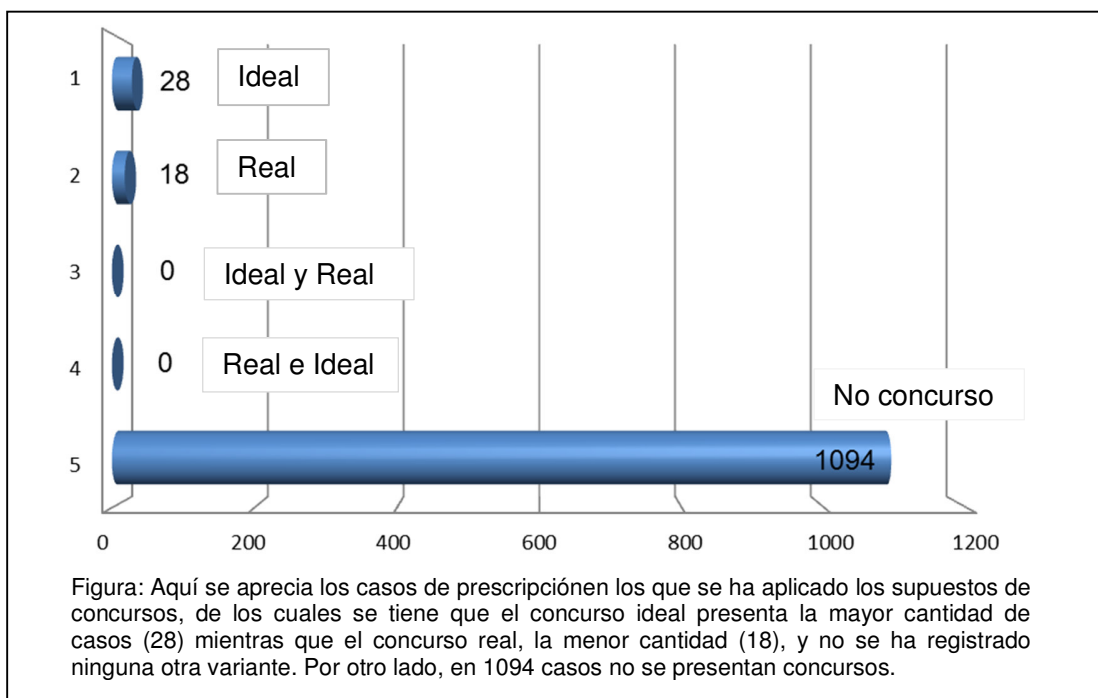
De los resultados obtenidos sobre este subindicador, es necesario precisar que este supuesto de modificación del plazo de prescripción de la acción penal es uno de los que se aplica con relativa significación, sin embargo no se debe desconocer que su efecto implica que los plazos resultan más cortos para alcanzar dicha prescripción, pues ello depende de si se está ante un concurso ideal donde la consecuencia es que se sanciona sólo los casos de concurso ideal heterogéneo con el criterio de la pena conminada de mayor gravedad, frase por demás complicada de interpretar atendiendo a que no siempre una pena privativa de la libertad puede ser más grave que una pena de inhabilitación, razón por la cual este supuesto acarrea dificultades en la aplicación de las reglas de prescripción, pues en la práctica los magistrados siguen concibiendo a la pena privativa de la libertad como la más grave.

En el caso del concurso real, es indiferente el hecho de tratarse de un concurso real homogéneo, pues en teoría siempre tendrán el mismo plazo de prescripción al tener el mismo plazo de pena conminada. Por el contrario, el supuesto del concurso real heterogéneo sí traerá consecuencias diferenciadas atendiendo a que las penas pueden ser diferenciadas al igual que lo que sucede en el concurso ideal, teniéndose como consecuencia que por un delito el plazo será una cantidad determinada, mientras que por otro el plazo podrá ser similar o diferente dependiendo del tipo de pena establecido.

Sin embargo como se ha explicado frondosamente en la parte teórica de esta investigación, al haberse ahora considerado otras consecuencias mucho más gravosas para los concursos, ideal y real, de *lege ferenda* reitero su inmediata modificación.

GRAFICA N° 3-B

CÓMPUTO DEL TIEMPO: SEGÚN CONDICIÓN DEL AGENTE CONCURSOS



4° Por la habitualidad.

No se tienen casos.

5° Por la reincidencia.

No se tienen casos.

6° Por la función desempeñada.

No se tienen casos.

d. Según la continuidad o no del plazo de prescripción.

De acuerdo a este indicador, se tiene como resultado que en una mayoría casi absoluta, la interrupción es el supuesto que más concurre en los casos de prescripción de la acción penal, con una totalidad de 1086 considerando sólo delitos y 1129 cuando se consideran delitos y faltas; mientras que en los supuestos de suspensión de prescripción de la acción penal sólo se tiene un monto de 9 casos.

De ello se desprende que la cantidad de supuestos de interrupción de la prescripción de la acción penal se corresponde perfectamente con los casos de prescripción extraordinaria de la acción penal, pues como se sabe, la interrupción impide que se concrete la prescripción ordinaria de la acción penal.

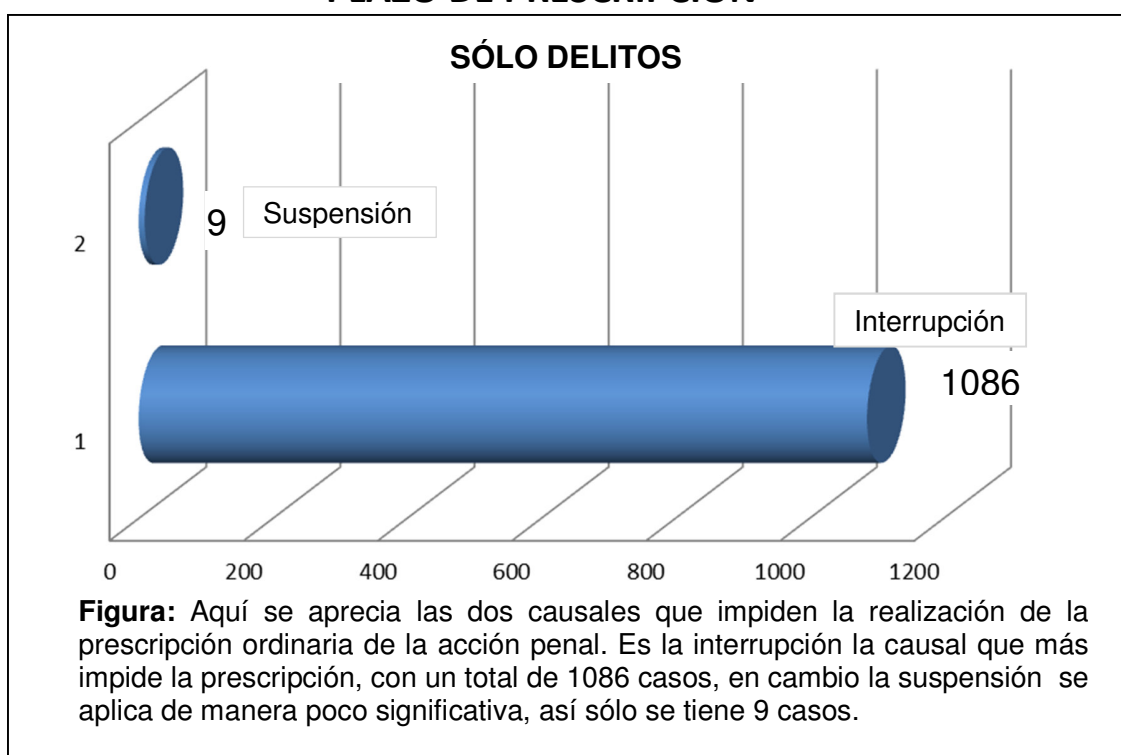
1° La interrupción

Se obtuvieron 1086 casos sólo en delitos, y 1129 casos considerando delitos y faltas.

2° La suspensión

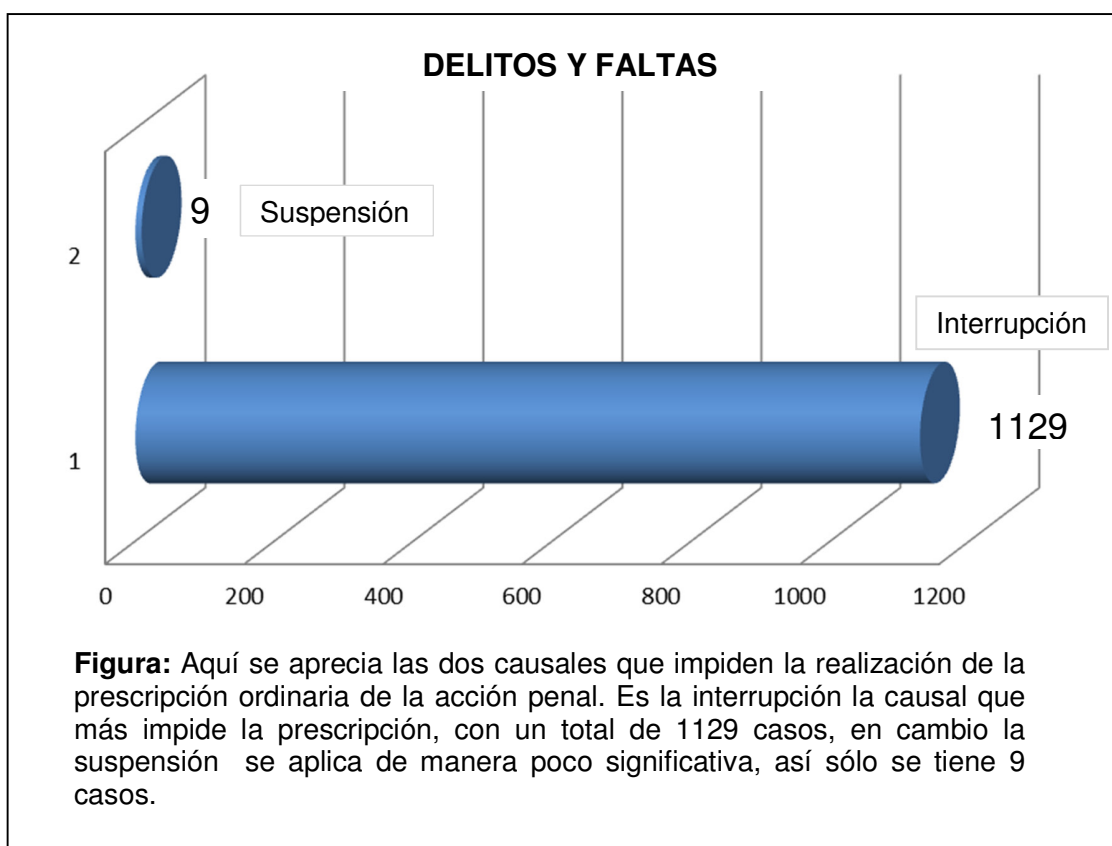
Se obtuvieron 9 casos.

GRÁFICA N° 4 CÓMPUTO DEL TIEMPO: SEGÚN LA CONTINUIDAD O NO DEL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN



GRÁFICA N° 4-A

CÓMPUTO DEL TIEMPO: SEGÚN LA CONTINUIDAD O NO DEL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN



4. Sobre la argumentación.

El derecho a una motivación de las resoluciones judiciales se ha convertido en una marca distintiva y cualitativa del tipo de Estado que es el Perú, pues si los magistrados no motivan sus resoluciones, entonces se le podrá denominar de mil formas diferentes, sin embargo seguirá siendo un Estado de derecho formalista positivista.

Por eso, en lo que concierne a esta investigación, se ha constatado que los magistrados de las distintas instancias no motivan sus resoluciones judiciales al momento de resolver los petitorios que se refieren a la prescripción penal, en cualquiera de sus variantes, razón por la cual inicialmente se podía suponer que ello se debía a la escasa información, empero hoy en día esto ya no es así, y este trabajo es una muestra de ello por la existencia de abundante información recabada en la bibliografía. La razón de esta falencia es que se considera a los diversos temas vinculados a la prescripción penal tan nimios e insignificantes que no es

necesario argumentar, basta la mera aplicación de la ley, dispensándose de la exigencia constitucional antes referida.

Otra de las razones que justifica la no motivación es que se trata de una mera cuantificación, es decir que para resolver temas de prescripción penal basta únicamente realizar conteos o verificar fechas. Situación nada más equivocada hoy en día en que este tema incluso muchas veces obliga a apreciar la evaluación de todos los niveles de argumentación, desde la ley penal nacional hasta los Tratados o Convenios multilaterales y bilaterales, y no sólo tratándose de temas como la imprescriptibilidad en materia de derechos humanos o temas de derecho internacional humanitario, sino a asistencia judicial, extradición, corrupción, delincuencia organizada, entre otros. E incluso en el caso del Tribunal Constitucional y la jurisprudencia, se ha tenido que acudir al derecho fundamental del plazo razonable, a fin de poder subsanar estos defectos de aplicación formalista sea para aceptarla o negarla.

Tal vez lo más resaltante a destacar en la argumentación jurídica, sea el extremo de la justificación externa, atendiendo a que en las distintas resoluciones se aprecia un ausentismo de las exigencias argumentativas, sobre todo a nivel de juzgados penales.

Esto se diferencia a la argumentación interna que a la vez resulta ser mucho más compleja y que en la práctica suele ser muchas veces solapada por los magistrados, salvo en casos excepcionales de algunos magistrados que realizan un análisis exhaustivo por ejemplo de los criterios lógicos. Sin embargo esto requeriría de otra investigación que por ahora no resulta del propósito señalado, por lo que esta investigación sólo se circunscribe a la justificación externa.

5. La acción civil.

En materia de la extinción de la acción civil, los jueces penales no la mencionan ni siquiera haciendo referencia al art. 100 del CP, asumiéndose tácitamente o llegando a suponer, que si la acción penal ha prescrito, entonces la acción civil se ha extinguido, aunque esto no lo afirman, quedando en el limbo tal situación.

La prescripción de la reparación civil impuesta es un supuesto desconocido en el ámbito del derecho penal, pues en los juzgados penales no existe pronunciamiento al respecto, dejando en claro que una vez que ésta se emite, se rige por las reglas del CC.

6. Las sentencias del Tribunal Constitucional.

Al revisar las 42 sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional referidas a la prescripción penal, en la parte teórica de esta investigación (Anexo 5), y más específicamente los supuestos de prescripción penal tratados en la competencia del Tribunal Constitucional, fue necesario realizar un análisis cualitativo pormenorizado de los aspectos argumentativos de cada una de estas sentencias referidas. Así se tuvo que estudiar y analizar, encontrándose aspectos arduamente significativos, los cuales se han reflejado en a parte teórica de esta investigación, sin embargo fue necesario incorporar en esta parte los elementos referidos al indicador argumentación jurídica, puesto que estas sentencias tenían

un alto nivel de argumentación jurídica, lo cual contrasta con las sentencias emitidas por la justicia jurisdiccional. En síntesis, éste aspecto ha devenido en importante para esta investigación por circunstancias de derivación, sea por un lado de la parte teórica de esta investigación o sea porque algunas de las sentencias jurisdiccionales remiten a ellas o porque las mismas sentencias del Tribunal remiten a otras del mismo Tribunal.

CAPÍTULO IV

CONTRASTACIÓN DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA

1. PRIMER PROBLEMA FORMULADO.

¿Cuál es el grado de eficacia en la aplicación de la prescripción de la persecución penal, tanto en su tipo ordinario como extraordinario?

1.1. HIPÓTESIS CONFIRMADA (Confirmación afirmativa).

El nivel de la frecuencia de eficacia de la prescripción de la acción penal es altamente significativo, constituyéndose así en el principal medio de eliminación elusiva de la carga procesal (descongestión) que se utiliza en el sistema penal por parte de los magistrados jueces de primera instancia del distrito judicial de Lima, así como los jueces de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de la República.

2. SEGUNDO PROBLEMA FORMULADO.

¿Cuál es el grado de eficacia en la aplicación de la prescripción penal de la ejecución de la pena?

2.1. HIPÓTESIS CONFIRMADA (Confirmación negativa).

El nivel de la frecuencia de eficacia de la prescripción penal de la ejecución de la pena es insignificante o casi nulo, constituyéndose así en un mecanismo inutilizable por parte de los magistrados jueces de primera instancia del distrito judicial de Lima, así como los jueces de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de la República debido a que en la realidad no acontece.

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS

CONCLUSIONES

La investigación finalizada permitió arribar a las siguientes conclusiones que para efectos didácticos, las dividiremos en dos partes:

1. CONCLUSIONES DE LA PARTE TEÓRICA

- 1° Concluimos que la prescripción es el derecho que toda persona adquiere al haber transcurrido cierto tiempo (plazo fijado por una regla penal) con el cual finaliza la persecución penal o la ejecución de sanciones que todo Estado tiene.
- 2° Concluimos que desde un punto de vista formal, la prescripción penal se basa en el criterio del tiempo calendario o de la cronometría, sin embargo hay otras formas de apreciar el tiempo, tales como la cronología y la cronosofía. Así mismo se debe considerar no sólo la categoría del tiempo, que es incluso previa a la aparición del hombre, sino también el criterio de temporalidad que es consustancial al ser humano.
- 3° Concluimos que el modelo de prescripción de la acción penal asumido en el CP es de naturaleza mixta, es decir que para los delitos opera el criterio de pena conminada y para las faltas el criterio del plazo legal lo mismo que para los delitos que tienen penas distintas a la privativa de la libertad, y estos mismos criterios son los que también rigen para la prescripción de la ejecución de la sanción penal.
- 4° Concluimos que hoy no resulta plausible sostener el modelo de prescripción del CP en su totalidad, por lo cual se hace necesario adecuarlo a las nuevas circunstancias agravantes, así como a los nuevos tipos de penas, y sobre todo al auge del flagelo de la criminalidad organizada, al aporte de los derechos fundamentales y a las instituciones de cooperación internacional en materia penal.
- 5° Concluimos que más allá de lo preceptuado por la legislación internacional en materia de derechos fundamentales, es inapropiado extender los supuestos de imprescriptibilidad a otra clase de delitos, pues sólo se admite ésta de manera muy excepcional y con *numerus clausus*.
- 6° Concluimos que hoy en día no existe consistencia en la regulación de la prescripción penal en el sistema penal peruano, ya que los supuestos de prescripción se regulan tanto en el CP desde una perspectiva y en el N.C.P.P. desde otra perspectiva, rompiéndose el principio de coherencia intrasistemática.
- 7° Concluimos que el modelo de prescripción penal establecido en el CP para las infracciones penales delitos que tienen como consecuencia una pena privativa de la libertad, sea esta principal unitaria, principal conjunta o disyuntiva, sigue siendo un modelo de *pena conminada*, tanto para la prescripción ordinaria como para la extraordinaria, a pesar de las reformas legales realizadas en los más de veinte años de vigencia por el Congreso de la República, sin embargo desde la perspectiva de la Corte

Suprema se han planteado ciertas interpretaciones por las que se ha ido considerando la ampliación de los plazos, mientras que el Tribunal Constitucional ha recurrido al derecho fundamental plazo razonable para limitar y por ende fijar las extensiones de dichos plazos.

- 8° Concluimos que el modelo de prescripción penal establecido en el CP para las infracciones penales faltas que tienen como consecuencia una pena no privativa de la libertad, sea esta principal unitaria, principal conjunta o disyuntiva, sigue siendo el del *plazo legal*, por lo cual no se puede hablar ni de prescripción ordinaria ni de prescripción extraordinaria, a pesar de las reformas legales realizadas en los más de veinte años de vigencia por el Congreso de la República, sin embargo desde la perspectiva de la Corte Suprema se han planteado ciertas interpretaciones por las que se ha ido considerando la ampliación de los plazos al establecer que puede haber una prescripción ordinaria y extraordinaria.
- 9° Concluimos que es un error identificar la posibilidad de sanción de las faltas con pena privativa de la libertad con el plazo de la prescripción, pues como se reafirma ésta no depende del plazo de pena conminada, sino de un *plazo legal*, que es la que utilizan la mayoría de países en el derecho comparado penal.
- 10° Concluimos que la ubicación de la causal de prescripción de la acción penal así como de la prescripción de la ejecución es el correspondiente a la teoría de las consecuencias jurídicas del hecho punible.
- 11° Concluimos que las medidas de seguridad, al ser un tipo de sanción penal, también debe tener reglas de prescripción, sin embargo en esta investigación no se han encontrado casos en los que se tenga que aplicar dichas reglas, por lo que ello no implica que se deje de dar una solución no sólo de lege lata vía interpretación analógica sino de lege ferenda, tal como se propuso en el art. 88 del Anteproyecto de código penal peruano de 2010.
- 12° Concluimos que en la doctrina nacional así como en la jurisprudencia en materia de faltas no hay uniformidad en torno a la aplicación de la regla de la prescripción extraordinaria, pues ésta tiene un plazo de prescripción autónomo o propio, conocido también como prescripción con plazo legal o único, supuesto distinto al de la prescripción ordinaria; por ello el legislador le estableció su propio plazo, tanto para la prescripción de la acción penal como para la prescripción de la ejecución de la pena.
- 13° Concluimos que es indispensable acudir a un sistema de prescripción de la ejecución de la pena donde sea la sentencia la que fije la pena (modelo de la pena concreta), agregándosele un plazo determinado de prescripción. No nos olvidemos que el sistema de penas de tercios o cuartos es uno de los temas planteados en las últimas propuestas de reforma penal. Por ende, las reglas de prescripción penal deben también adecuarse a dicha reforma, siguiendo por ejemplo a los españoles en su sistema de tercios, donde se agrega un plazo legal adicional al monto de pena individualizada judicialmente para la prescripción, y no como los colombianos que adoptaron el sistema de cuartos, empero a

la hora de fijar sus reglas de prescripción sólo señalaron el criterio de la pena concreta, estableciendo únicamente un plazo mínimo que en ningún caso podrá ser inferior a 5 años.

14° Concluimos que no son recomendables establecer supuestos procesales de ampliación de los plazos de la prescripción tales como la contumacia, pues ello sólo trae problemas al momento de la aplicación de la ley procesal en el tiempo, por tal razón nos inclinamos a asumir criterios penales en atención a resolver cualquier problema de conflictos en el tiempo acudiendo al principio de favorabilidad.

15° Concluimos que ha resultado inútil la regulación de los supuestos de interrupción y suspensión para las faltas, por lo cual debe quedar inafecto.

2. CONCLUSIONES DE LA PARTE EMPÍRICA

1° Concluimos que de los casos de prescripción penal que se suscitan en los juzgados especializados en lo penal de primera instancia, así como en la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de la República, la clase de prescripción que generalmente se aplica sigue siendo la prescripción extraordinaria de la acción penal.

2° Concluimos por contraste que los casos de prescripción ordinaria de la acción penal resultan ser insignificantes ya que generalmente los supuestos de interrupción impiden su aplicación.

3° Concluimos que los magistrados, en los casos de prescripción penal, no aplican o aplican de manera insignificante los supuestos de tentativa para establecer el inicio del plazo de prescripción.

4° Concluimos que los jueces penales del Distrito Judicial de Lima generalmente obviaron en sus resoluciones los distintos supuestos de prescripción de la acción penal, considerando el tipo de delito, esto es, si se trata de un delito instantáneo, permanente o continuado.

5° Concluimos que los jueces penales del Distrito Judicial de Lima, cuando fueron competentes, obviaron en sus resoluciones los distintos supuestos de prescripción de la acción penal, considerando el tipo de falta, esto es, si se trata de una falta instantánea, permanente o continuada.

6° Concluimos que son los jueces de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema los que sí realizan en sus resoluciones la distinción de los supuestos de prescripción de la acción penal para el delito continuado.

7° Concluimos que la prescripción de la ejecución de la pena considerando el bajo índice de frecuencia obtenido, permite afirmar que en el Perú las penas se cumplen, aunque se trate de una forma de cumplimiento simbólico o formal.

- 8° Concluimos que los magistrados aplican de manera significativa la regla de prescripción penal, sin distinguir las diversas calidades que tiene el sujeto activo de acuerdo a la participación (autor de coautor, de cómplice primario, de cómplice secundario, de instigador, de cómplice psicológico).
- 9° Concluimos que los magistrados no aplican las reglas penales de prescripción referido a los concursos, ideal, real, ideal y real, o real e ideal, a fin de determinar cuándo se produce la prescripción en estos casos.
- 10° Concluimos que los jueces, al momento de aplicar las reglas penales, no realizan una evaluación de la calidad del sujeto activo funcionario o servidor público, lo cual constituye un error que a la vez deviene de la falta de distinción al momento de calificar por parte de los fiscales.
- 11° Concluimos que los jueces penales de primera instancia así como los de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, al momento de utilizar la regla penal de interrupción de la prescripción, omiten mencionar cuál de los supuestos es el que materializa dicha interrupción.
- 12° Concluimos que los jueces penales de primera instancia así como los de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, al momento de utilizar la regla penal de la suspensión de la prescripción, omiten mencionar cuál de los supuestos es el que materializa dicha suspensión.
- 13° Concluimos que los jueces de la Corte Suprema motivaron escasamente sus ejecutorias penales al momento de resolver pretensiones de prescripción penal, en muchos casos limitándose únicamente a citar los artículos del CP, o a realizar procesos simples de subsunción de la regla penal referidos a la prescripción.
- 14° Concluimos que los jueces de primera instancia del Distrito Judicial de Lima no motivaron sus resoluciones judiciales en mayor grado, limitándose únicamente a realizar una aplicación de las reglas penales consignadas en los artículos 78 y 80 para los escasos supuestos peticionados de prescripción ordinaria, y el art. 83 sólo para mencionar la causal de interrupción sin realizar ninguna argumentación, ya que en la práctica la interrupción se suponía; además, de la parte final del referido art. 83, tratándose de las peticiones de prescripción extraordinaria de la prescripción penal. En un menor grado, es decir poquísimas veces para referirse al art. 84 que regula la suspensión de la prescripción de la acción penal. De esta forma los jueces de primera instancia han obviando olímpicamente el tratamiento de problemáticas tales como: el inicio del plazo de prescripción considerando el tipo de delito en particular (no todos los delitos tienen el mismo inicio del plazo de la prescripción y tampoco el mismo final), los supuestos específicos regulados para cada una de las causales de interrupción y suspensión de la prescripción de la acción penal, los supuestos de los concursos, la prescripción de la pretensión civil, y la regulación de las reglas de prescripción para las faltas.
- 15° Concluimos que los magistrados del Tribunal Constitucional realizaron motivaciones complementarias o tangenciales en sus distintas sentencias, en las que se han sustentado

temas vinculados a la prescripción de la acción penal únicamente, ya que al momento de resolver, se vinculó el tema de la prescripción con la infracción contitucional del plazo razonable, teniéndose como aporte el haber establecido los límites a la causal de suspensión de la prescripción para los casos de extradición, el antejuicio, dilaciones maliciosas, entre otros.

RECOMENDACIONES

1. Realizar eventos académicos a fin de sensibilizar a la comunidad jurídica que la argumentación puede ser una forma en que los abogados del país ayudemos a que nuestro sistema penal y por ende a nuestras instituciones de justicia para que tengan mas cuidado a la hora de resolver las distintas pretensiones jurídicas, es decir ayudar a consolidar la legitimidad de justicia, pues esto enmarcaría un hábito de control de las decisiones de nuestros magistrados jueces civiles y militares, fiscales, miembros del tribunal constitucional y todo aquel que tenga entre sus competencias administrar este tipo de decisiones (Tribunal Fiscal, Indecopi, Contraloría, Osce, etc.).
2. Replantear los supuestos de la suspensión de la prescripción penal, pues esta causal no puede tener o generar efectos ilimitados, a la par de la imprescriptibilidad, para ello debe establecerse un plazo o sino señalar expresamente que la suspensión afecta a la prescripción extraordinaria de la acción penal.
3. Regular un plazo de prescripción para la ejecución de la pena, aunque por ahora ello sólo es admisible a partir de la interpretación analógica de las reglas de prescripción de la acción penal basadas en la pena conminada.

PROPUESTAS

1. Se propone que los delitos que constituyan supuestos de criminalidad organizada y corrupción tengan un plazo de prescripción amplio, de manera excepcional mayor al que fija en la actualidad el CP, ello puede ser de manera directa creando supuestos especiales de interrupción o suspensión o de manera indirecta ampliando el monto de pena.
2. Se propone un Proyecto de ley a fin de realizar las mejoras en nuestro sistema penal en materia de prescripción penal.
3. Se propone que la suspensión sea perfectamente aplicable para casos de contumaces, así tratándose de delitos leves se tenga un plazo único, a diferencia de los delitos graves donde se establezca un plazo mayor, pero siempre posibilitando la aplicación de la regla de prescripción extraordinaria en ambos casos.
4. Se propone cambiar por técnica legislativa la redacción de los supuestos de suspensión de los plazos de prescripción de la persecución penal del art. 84, utilizando un sistema reglado, y si se quiere por último combinándolo con una regla general, pero dejando en claro que los efectos de la suspensión no impiden que se dé la aplicación de la prescripción extraordinaria de la acción penal.
5. Se propone como regla general que todas las reglas jurídicas que modifiquen la prescripción penal deben estar contenidas en el código penal, desechándose cualquier modificación mediante leyes procesales o leyes especiales como ocurrió con el N.C.P.P. y la Ley N° 26441, ya que como se ha apreciado en esta investigación, se originaron problemas, por un lado de aplicación de la ley en el tiempo, y por otro lado problemas de interpretación en torno a la ampliación de supuestos de suspensión de la prescripción de la acción penal.
6. Se propone que la regulación de las reglas de prescripción establecidas en nuestro sistema penal distinto al código penal, se realicen excepcionalmente; ello considerando a su especialidad en una legislación distinta, como es el caso del código de justicia penal militar y policial, código del Niño y de los Adolescentes y legislación de procedimientos administrativos sancionadores, sin olvidar la aplicación subsidiaria de las reglas penales establecidas en el código penal, por ser éste el modelo que guía la regulación de la prescripción en el Perú.
7. Se propone la incorporación de supuestos de ampliación de los plazos de prescripción para las circunstancias agravantes genéricas, esto es para la reincidencia, el delito masa, el concurso ideal, el concurso real, la calidad de funcionario o servidor.
8. Se propone la regulación de un plazo de suspensión de la prescripción penal específico, de 5 años para delitos menos graves y de 10 años para delitos graves, sobretudo para los casos de la prescripción extraordinaria de la acción penal, de tal forma que no resulta necesario acudir al plazo razonable.

9. Se propone la derogación de la ley N° 26641, pues ha traído más perjuicios que beneficios, y en su remplazo se debe regular en los supuestos de interrupción de la acción penal un nuevo supuesto de interrupción.
10. Se propone que en el caso de la prescripción de la acción penal los plazos de prescripción deben ser escalonados, los plazos mayores para los delitos más graves, y los menores para los delitos menos graves, y por debajo de estos plazos los de las faltas, y por debajo de estos plazos aún el correspondiente a las sanciones del derecho administrativo sancionador.
11. Se propone que en los casos del fuero privativo militar policial los plazos de prescripción de la acción penal deben ser equivalentes a los plazos de los delitos, faltas o contravenciones.
12. Se propone que en el caso del derecho de menores, el Código del Niño y de los Adolescentes debe fijar una regla estableciendo un plazo semejante al de las faltas para las infracciones penales.
13. Se propone ampliar los supuestos de interrupción de la prescripción de la persecución penal para el caso del art. 339 numeral 1 del N.C.P.P., como lo hacen la mayoría de códigos en los ordenamientos comparados extranjeros, por lo que se debe derogar la mención de la suspensión del N.C.P.P., más aún si se considera que las reglas de interrupción y suspensión deben estar en el CP.
14. Se propone de manera gráfica un modelo de regulación de la prescripción penal en nuestro sistema:

TABLA 9: Propuesta de un modelo de prescripción penal para el sistema penal peruano

CP	CPMP	CNA	LEGISLACIÓN ADMINISTRATIVA
Delito grave	Delito grave		
Delito menos grave	Delito menos grave		
Falta grave o no grave (plazo legal único)	Falta grave o no grave (plazo legal único)	Infracción penal (plazo legal único)	
Contravención	Contravención		Plazo legal único
<i>Nota:</i> Aquí se tiene el modelo de prescripción para el sistema penal.			

	PRESCRIPCION ORDINARIA	PRESCRIPCION EXTRAORDINARIA	PRESCRIPCION CON PLAZO LEGAL
Plazo	Pena conminada	Incremento sobre pena conminada	Plazo único
Art. 82	Reduce	Se ve reducida como consecuencia del primero	Inafecto
Agravantes: -Concursos -Reincidencia -Habitualidad -Criminalidad organizada -Delito masa -Delito continuado	Incremento y modificación del plazo ordinario	Se ve reducida como consecuencia del primero	
Interrupción			Inafecto
Suspensión: *Agregar un límite máximo para : -Actos dilatorios de autor -Hasta la mayoría de edad para delitos sexuales contra menores *Precisar causales -Por queja excepcional -Por antejuicio -Por ser declarado contumaz -Por organizaciones criminales -Por pedido de extradición -Por pedido de asistencia judicial -Por cuestión previa -Por cuestión prejudicial -Por otro procedimiento	Suspensión por un período corto. Puede ser 5 años y para organizaciones criminales 10 años.	No suspende *Sólo se aplica de manera excepcional para el caso del cumplimiento de la mayoría de edad del menor víctima para delitos sexuales.	Inafecto
Nota: Aquí se presentan las propuestas de reforma.			

TABLA 11: *Modelo de prescripción de la sanción penal*

PENA	Sistema Mixto de pena concreta con plazo legal	-Incremento de X años para delitos graves -Incremento de X años para delitos menos graves
MEDIDA DE SEGURIDAD	Sistema Único de pena concreta con plazo legal	-Incremento de X años para delitos graves -Incremento de X años para delitos menos graves
CONSECUENCIAS ACCESORIAS	Sistema Único de pena concreta con plazo legal	-Incremento de X años para delitos graves -Incremento de X años para delitos menos graves

Nota: Aquí se aprecian las propuestas para la prescripción de la sanción penal.

RESUMEN

La investigación realizada se refiere a la aplicación del instituto de la prescripción penal y los distintos enfoques que se han planteado tanto en la doctrina como en la jurisprudencia.

El trabajo de investigación trata fundamentalmente de demostrar ¿Cuál es el estado actual de la prescripción penal desde la perspectiva teórica y legislativa, y cuál ha sido el grado de eficacia de la aplicación de la prescripción penal por parte de los magistrados jueces durante los veinte años de vigencia del Código Penal de 1991 en el distrito judicial de Lima y en la Corte Suprema de la República?

De allí que la investigación, metodológicamente, se haya dividido en dos partes, una para tratar la primera parte del problema formulado, es decir el tratamiento del estado actual de la prescripción desde la perspectiva teórica y legislativa.

La segunda parte de esta investigación está dedicada a la eficacia aplicativa de la institución de la prescripción penal en los Juzgados especializados en lo penal y en la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de la República.

Se obtuvo la confirmación de la hipótesis formulada, es decir el nivel de la frecuencia de eficacia de la prescripción de la acción penal es altamente significativo, constituyéndose así en el principal medio de eliminación elusiva de la carga procesal (descongestión) que se utiliza en el sistema penal por parte de los magistrados jueces de primera instancia del distrito judicial de Lima, así como los jueces de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de la República.

Para realizar esta segunda parte de la investigación se tuvo que analizar un total de 1849 resoluciones judiciales, de las cuales fueron relevantes para esta investigación 1140, y de estas 1065 resoluciones corresponden a 19 juzgados especializados en lo penal del más importante distrito judicial del país como lo es Lima, específicamente a la carga procesal de los años 1997 (508 documentos resoluciones) y 1998 (557 documentos resoluciones). Asimismo, en lo referente a las ejecutorias supremas emitidas por la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de la República en el año 2009 se procesaron 30 ejecutorias y en el año 2010, 21 ejecutorias.

Los resultados alcanzados en torno al aspecto empírico permitieron apreciar la correlación entre los distintos indicadores y sub-indicadores obtenidos a partir de las variables, obteniéndose algunas conclusiones relevantes en torno a la aplicación del instituto de la prescripción durante los primeros veinte años de vigencia del Código Penal.

En esta investigación se ha considerado en la bibliografía, información actualizada tanto fuentes nacionales como de derecho comparado, libros, artículos de revistas, comentarios a jurisprudencias, entre otros.

En esta investigación también se ha consignado un frondoso anexo donde se recogen los textos legislativos y pre-legislativos, nacionales y extranjeros, las ejecutorias y acuerdos plenarios así como las sentencias del Tribunal Constitucional, entre otros.

ABSTRACT

This research refers to the application of the institution of prescription and the various approaches that have been appointed not only by doctrine but also by precedent.

This research tries fundamentally to demonstrate the current state of the Statute of limitations from a theoretical and legal perspective? And what is the degree of the application efficiency of prescription on the judges part during the 1991 Penal Law twenty-year-validity in the judicial district of Lima and in the Supreme Court of the Republic?

So the research methodology has been divided in two parts, the first one designed to address the first formulated problem; in other words the treatment of the current state of prescription from the legal and theoretical perspective; nevertheless the use of other sources have not been neglected such as the sentences of the Constitutional Right's Court, the plenary Agreements, and the International Public Right through treaties and conventions referred to prescription, imprescriptibility, extradition and judicial assistance in penal matters.

The second part of this research is dedicated applicative efficiency of the institution of penal prescription in the penal specialized Courts and to the First Penal Court of the Supreme Court.

The confirmation of the formulated hypothesis was obtained, so the level of the efficiency frequency of prescription of the penal action is highly significant, becoming in this way the principal means of elusive elimination of procedural load (decongestion) which is used in the penal system on the first instance judges' part, so as the judges of the First penal Transitory Supreme Court of the Republic.

To carry out the second part of this research an analysis of a total of 1849 court decisions had to be analyzed from which 1140 were relevant to this research, and from this group 1065 court decisions correspond to 19 specialized penal courts from the most important judicial district, which is Lima, specifically procedural loads in 1997 (509 resolutions) and 1998 (557 resolution documents). Likewise, referring to supreme finals emitted by the First Transitory Penal Court of the Supreme Court of the Republic in 2009 30 finals were processed and in 2010, 21 finals.

The reached results regarding the empirical aspect allowed to appreciate the relationship between the various indicators and sub-indicators obtained from the variables, obtaining some relevant conclusions about the application of the institute of prescription during the first twenty-year validity of the Penal Law.

In this research a large annex has also been attached where legislative and pre-legislative texts, national and international, have been considered, finals and plenary agreements, sentences of the Constitutional Right's Court as well, among others.

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA

I. Libros

A. Biblioteca de libros generales.

1. Autores nacionales:

- Álvarez Chauca, M. (2009). *Extradición. Teoría, procedimiento, jurisprudencia*. Lima – Perú: Ed. Idemsa.
- Benites Sánchez, S. (1958). *Derecho penal peruano (Comentarios a la parte general del código penal)*. (2 ed.). Lima-Perú.
- Bramont Arias, L.A. (1966). *Código penal anotado*. Lima-Perú: Editado por la Comisión Administradora del Fondo Editorial de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
- Bramont Arias, L.A. y Bramont-Arias Torres, L. A. (1995). *Código penal anotado*. (1 ed.). Lima-Perú: Ed. San Marcos.
- Calle, J. J. (1920). *El código de procedimientos en materia criminal. Promulgado por el poder ejecutivo el 2 de enero de 1929. Anotado y Concordado*. Librería e imprenta Gil, Lima-Perú.
- Cornejo, Á. G. (1936). *Parte general del derecho penal título de la obra (Síntesis de las lecciones dictadas en la cátedra de la universidad de san marcos)*. (1 ed. Tomo I). Lima-Perú: Ed. Librería e imprenta De Domingo Miranda, filipinas 546 sucursal: Parque Universitario 858;
- Gálvez Villegas, T. (2004). *El delito de lavado de activos. Criterios penales y procesales penales análisis de la nueva ley N° 27765*. Lima-Perú: Ed. Grijley.
- García Rada, D. (1984). *Manual de derecho procesal penal*. (8 ed.). Lima-Perú: Ed. Eddili.
- Hurtado Pozo, J. (1987). *Manual de derecho penal. Parte general.*, ed. segunda, Lima-Perú: Ed. EDDILI
- _____. (1995). *Derecho penal. Parte especial 1*. 2 ed. Lima-Perú: Ed. Juris,
- Hurtado Pozo, J. y Prado Saldarriaga, V. (2011). *Manual de derecho penal. Parte general*. (4 ed. Tomo II). Lima-Perú: Ed. Idemsa.
- Mixán Mass, F. (1988). *Derecho procesal penal (Tomo III)*. ed. corregida y aumentada; Buenos Aires-Argentina Impreso en Lima-Perú: Ed. Ediciones Jurídicas.
- Oré Guardia, A. (1996). *Manual de derecho procesal penal*. (1 ed.). Lima –Perú: Ed. Alternativas.
- Peña Cabrera, R. (1994). *Tratado de derecho penal. Estudio programático de la parte general*. (5 ed.). Lima-Perú: Ed. Grijley.
- _____. (1994). *Tratado de derecho penal. Parte especial I*, (2 ed.). Lima-Perú.
- _____. (1994). *Delitos económicos. Parte especial III*. Ed. Jurídicas.
- Peña, V.; Rivera, P.; Schulz, P. y Tápia, J. (2011). *La producción científica en San Marcos. Hechos, cifras y estándares internacionales (2002-2010)*. Lima-Perú: Ediciones de Vicerrectorado académico.
- Prado Saldarriaga, V. (1996). *Todo sobre el código penal*. (2 tomos) pp. 369 (tomo I) y 696 (tomo II). Lima-Perú: Ed. Idemsa.
- Prado Saldarriaga, V. (2000). *Las consecuencias jurídicas del delito en el Perú*. Ed. Gaceta Jurídica.
- Quiroga León, A. (1989). *Las garantías constitucionales de la administración de justicia. En La constitución diez años después*. Lima-Perú: Fundación Friedrich Neumann, AA.VV.
- Rojas Vargas, F. (1997). *Actos preparatorios tentativa y consumación del delito. Doctrina. Análisis Jurídico. Casos prácticos. Jurisprudencia. Derecho comparado*. (1 ed.). Lima-Perú: Ed. Grijley.
- Roy Freyre, E. L. (1998). *Causas de la extinción acción pena y pena. Comentarios al código penal art.78-9.1* (2 ed.). Lima -Perú: Grijley.
- San Martín Castro, C. (2012). *Estudios de Derecho Procesal Penal*. Lima-Perú: Ed. Grijley.
- Sánchez Velarde, P. (1994). *Comentarios al código procesal penal*. Lima-Perú: Ed. Idemsa.
- _____. (2004). *Manual de derecho procesal penal*. Lima-Perú: Ed. Idemsa.
- Villastein, J. (2008). *Derecho Penal. Parte general*. (3era ed.). Lima-Perú: Ed. Grijley.
- Villavicencio Terreros, F. (2006). *Derecho penal. Parte general*. (1 ed.). Lima-Perú: Ed. Grijley.

2. Autores extranjeros de habla hispana:

- Andrés Domínguez, A. C. (2006). *Derecho penal internacional*. (1 ed.). Valencia - España: Tirant lo blanch.
- Armenteros León, M. (2007). *Las faltas: Derecho sustantivo y procesal. Comentarios y jurisprudencia*. Valencia: Tirant Lo Blanch.
- Atienza, M. (2004). *Las razones del derecho*. Lima – Perú: Ed. Palestra.
- Ayo Fernández, M. (2011). *Las faltas en el código penal y el juicio de faltas*. (7 ed.) España: Editorial Aranzadi, Thomson Reuters.
- Barona Villar, S. (1993). *La conformidad en el proceso penal*. Valencia-España: Ed. Tirant lo Blanch.
- Blásquez M^a. Concepción (1996). *La aplicación de la pena. Estudio práctico de las consecuencias jurídicas del delito.*, 1 ed. Barcelona-España: Ed. Bosch.
- Berdugo Gómez De La Torre, I.; Ferré Olivé, J. C.; Serrano Piedecabras, J. R. (1997). *Manual de derecho penal III. Parte general. Consecuencias jurídicas del delito*. (1 ed.). Barcelona-España: Ed. Praxis S.A.
- Berdugo Gómez De La Torre, I. y otros. (2010). *Curso de derecho penal. Parte general* (2 ed.). España: Ediciones Experiencia. Con la coordinación de Eduardo Demetrio Crespo, Cristina Rodríguez Yagüe.
- Borja Jiménez, E. (2001). *Introducción a los fundamentos del Derecho penal indígena*. Ed. Tirant lo Blanch, Valencia – España.
- Borja Jiménez, E. (2003). *Curso de política criminal*. Valencia – España: Ed. Tirant lo Blanch.
- Bustos Ramírez, J. (1983). *Derecho penal latinoamericano comparado*, tomo III, apéndice: Parte general de los códigos y proyectos. Buenos Aires- Argentina: Ed. Depalma.
- _____ (1986). *Introducción al derecho penal*. Ed. Temis
- _____ (1989). *Manual de derecho penal. Parte general*. 3 ed. Barcelona-España: Ed. Ariel.
- Bustos Ramírez, J. y Larrauri, E. (1993). *Victimología: Presente y Futuro*. Bogotá-Colombia: Ed. Temis.
- Choclán Montalvo (1997). *El Delito continuado*. (1 ed.). Editorial Marcial Pons; Madrid-España.
- _____ (2000). *La organización criminal. Tratamiento Penal y Procesal*. Ed. Dykinson: Madrid – España.
- Cobo Del Rosal, M. y Vives Antón, T. S. (1990). *Derecho penal. Parte general*. (3 ed.). Valencia - España: Ed. Tirant lo Blanch.
- _____ (1999). *Derecho penal. Parte general*. (5ta ed.). España-Valencia: Tirant lo blanch.
- _____ (2000). *Compendio de derecho penal español* (1 ed.). Barcelona - España: Marcial Pons.
- Conde-Pumpido Tourón, C. & López Barja de Quiroga, J. (2007). *Comentarios al código penal* (1 ed. Vol. 2). España: Editorial Bosch.
- Cornejo, A. (1992). *Asociación ilícita*. Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires – Argentina.
- Cuello Calón, E. (1948). *Derecho penal (Conforme al “código penal, texto refundido de 1944”)*. tomo I. Parte general. (9 ed.). México D.F.-México: Ed. Nacional.
- _____ *Derecho penal (Parte general)*, tomo I, (1981). (Revisada y puesta al día por César Camargo Hernández, 18 ed. Vol. II). Barcelona-España: Ed. Bosch.
- Cuello Contreras, J. y Mapelli Caffarena, B. (2011). *Curso de Derecho Penal. Parte General*. Ed. Tecnos, 1era Edición, España-Madrid.
- Cury Urzua, E. (1982). *Derecho penal. Parte general* (Tomos I y II). Santiago de Chile-Chile: Ed. Jurídica de Chile,
- _____ (2005). *Derecho penal. Parte general* (8 ed.). Chile: Ediciones Universidad Católica de Chile.
- De la Pava Marulanda, R. (2009). *Causales de ausencia de responsabilidad penal* (1 ed.). Colombia: Grupo Editorial Ibáñez.
- De Sola, Á. ; García Arán, M.; Hormazabal Mala-Ree, H. (1986) *Alternativas a la prisión. Penas sustitutivas y sometimiento a prueba*, Ed. PPU, Barcelona-España.
- Devis Echandía, H. (1984). *Teoría general del proceso*. (Tomo I). Buenos Aires-Argentina: Ed. Universidad.
- _____ (1993). *Teoría general de la prueba judicial*. (4ta ed.): Biblioteca jurídica Dike.
- Fairen Guillén. V. (1990). *Doctrina general del derecho procesal (hacia una teoría y ley procesal general)*. Barcelona-España: Ed. Bosch.
- Falcón y Tella, M. J. y Falcón y Tella F. (2005): *Fundamento y finalidad de la sanción ¿Un derecho a castigar?* Ed. Marcial Pons, primera edición, Madrid-España.
- Fernández Carrasquilla, J. (1989). *Derecho penal fundamental. Teoría general del delito y punibilidad*. Tomo II. 2 ed. Bogotá-Colombia: Ed. Temis.

- _____ (2011). *Derecho penal. Parte general*. 1 ed. Bogotá - Colombia: Ibañez.
- Fontán Balestra, C. (s/f). *Tratado de derecho penal. Parte general* (Tomo II. 2 ed.) corregida y aumentada. Buenos Aires-Argentina: Ed. Abeledo-Perrot.
- García-Pablos De Molina, A. (1977). *Asociaciones ilícitas en el código penal*. Barcelona –España: Ed. Bosch.
- García Sánchez, B. (2004). *Límites a la ley penal en el espacio*. España: Ed. Atelier.
- _____ (2005). *La extradición en el ordenamiento interno español, internacional y comunitario*. Granada – España: Ed. Comares.
- Gimeno Sendra, V.; Moreno Catena, V. y otros. (1990). *Derecho procesal (El proceso penal)* -Tomo II. (3 ed.). Valencia- España: Ed. Tirant lo Blanch.
- Gimeno Sendra, V., & López Coig, J. C. (2003). *Los nuevos juicios rápidos y de faltas* (1 ed.). Madrid - España: Editorial Centro de Estudios Ramón Areces.
- Gisbert, L. (1891). *Instituciones políticas y jurídicas de los pueblos modernos*. Complemento al tomo III. El nuevo código penal italiano. Madrid-España: Ed. José Góngora y Álvarez.
- Gómez Colomer, J.-L. (1985). *El proceso penal alemán. Introducción y normas básicas* (1 Ed.). Barcelona-España: Ed. Bosch.
- Gómez, E. (1939). *Tratado de derecho penal* (Tomo I). Buenos Aires-Argentina: Ed. Compañía Argentina de Editores.
- Gracia Martín, L. (1998). *Las consecuencias jurídicas del delito en el nuevo código penal español*. Valencia-España: Ed. Tirant lo Blanch.
- _____ (2003). *Prolegómenos para la lucha por la modernización y expansión del derecho penal y para la crítica del discurso de resistencia. A la vez, una hipótesis de trabajo sobre el concepto de derecho penal moderno en el materialismo histórico del orden del discurso de criminalidad*. Valencia - España: Tirant lo blanch
- _____ (2005). *El horizonte del finalismo y el "derecho penal del enemigo"* (1 ed.). Valencia - España: Tirant lo blanch.
- _____ (2006). *Fundamentos de dogmática penal. Una introducción a la concepción finalista de la responsabilidad penal* (1 ed.). Barcelona - España: Atelier.
- _____ (2007). *La modernización del derecho penal y el derecho penal del enemigo*. (1 ed.). Lima - Perú: Idemsa.
- Gracia Martín, L. (Coord.) y otros. (1996). *Las consecuencias jurídicas del delito en el nuevo código penal español*. Valencia-España: Ed. Tirant lo Blanch.
- Gracia Martín, L.; Boldova Pasamar, M. Á. & Alastuey Dobón, C. (1998). *Lecciones de consecuencias jurídicas del delito. El sistema de penas, medidas de seguridad, consecuencias accesorias y responsabilidad civil derivada del delito*. (1 ed.). Valencia-España: Tirant Lo Blanch.
- Gracia Martín, L. y otros. (2006). *Tratado de las consecuencias jurídicas del delito en el nuevo código penal español*. Ed. Tirant lo blanch. Valencia-España.
- Guzmán Dalbora, J. L. (2009). *La pena y la extinción de la responsabilidad penal* (1 ed.). Argentina: B de f.
- Landrove Diaz, G. (1985). *Las consecuencias jurídicas del delito*. Madrid-España: Ed. Tecnos.
- Lascano (H), Carlos J. (1989). *La amnistía en el derecho argentino*. (1 ed.). Córdoba - Argentina: Marcos Lerner Editora Córdoba.
- Lloria García, P. (2006). *Aproximación al estudio del delito permanente*. Granada – España.
- López Barja De Quiroga, J. (1991). *Teoría de la pena*. Madrid España: Ed. Akal.
- _____ (2010). *Tratado de Derecho Penal. Parte General*. España: Ed. Civitas
- López Garrido, D. y García Arán, M. (1996). *El código penal de 1995 y la voluntad del legislador. Comentario al texto y al debate parlamentario*. Madrid-España: Ed. Eurojuris.
- Luzón Peña, D. -M. (1996). *Curso de derecho penal. Parte general I*. Madrid-España: Ed. Universitas.
- _____ (2002). *Aspectos esenciales de la legítima defensa* (2 ed.). Buenos Aires - Argentina: B de f.
- _____ (2010). *Derecho penal del Estado social y democrático de derecho*. Libro homenaje a Santiago Mir Puig (1 ed.). España: La ley.
- Maier, J. (1989). *Derecho procesal penal argentino*. tomo 1 Fundamentos. (2 ed. Vol. a). Buenos Aires- Argentina: Ed. Hammurabi.
- Manzanares Samaniego, J. L. (1983). *Las penas patrimoniales en el código penal español (Tras la ley orgánica 8/1983)*. (1 ed.). Barcelona –España: Ed. Bosch, Casa editorial, S.A
- Mapelli Caffarena, Borja. (1990). *Estudio jurídico-dogmático sobre las llamadas condiciones objetivas de punibilidad*. Madrid- España: Ministerio de Justicia, Secretaría General Técnica, Centro de Publicaciones.

- _____. (2005). *Las consecuencias jurídicas del delito* (4 ed.). España: Thomson.
- _____. (2011). *Las consecuencias jurídicas del delito* (5 ed.). España: Ed Aranzadi, Civitas.
- Mapelli Caffarena, Borja y Terradillos Basoco, J. (1996). *Las consecuencias jurídicas del delito* (3 ed., primera reimpresión). Madrid-España: Ed. Civitas.
- Martínez Rabelo, G. (1995). *Conciliación en el procedimiento penal colombiano*. (1 ed.). Medellín-Colombia: Ed. Biblioteca Jurídica Diké.
- _____. (1996). *Procedimiento penal colombiano. Decreto 2700 de 1991, ley 81 de 1993. Procedimiento penal contravencional (ley 228 de 1995)*. 9 ed. Santa Fe de Bogotá-Colombia: Ed. Temis.
- Mataix Loma, C. (1999). *El tiempo cosmológico* (1 ed.). España: Síntesis.
- Maza Martín, J. M. (2007). *Circunstancias que excluyen o modifican la responsabilidad criminal (eximentes, atenuantes, agravantes y circunstancia mixta de parentesco)*. Madrid-España: La Ley.
- Millan, A. S. (1958). *Amnistía penal. Monografías Jurídicas 5*. Argentina: Ed. Abeledo-Perrot.
- Mir Puig, S. (1982). *Derecho penal y ciencias sociales* (1 ed.). Barcelona- España: Servicios de publicaciones de la Universidad Autónoma de Barcelona.
- _____. *Derecho penal. Parte general*. 3 ed. corregida y puesta al día. (1995). Barcelona-España: Ed. PPU Barcelona-España: Ed. J.B.
- Mir Puig, S. (1994). *El derecho penal en el Estado social y democrático de derecho*: Segunda parte, Cap. II, Función fundamentadora y función limitadora de la prevención general positiva. Ed. Ariel, Barcelona-España, ed. Primera.
- _____. (2002). *Derecho penal. Parte general* (6ta edición ed.). Barcelona-Madrid: Editorial Reppertor.
- _____. (2008). *Derecho penal. Parte general*. Ed. Reppertor; ed. Octava. Barcelona – España.
- Mir Puig, S., y Corcoy Bidasolo, M. (2007). *Política criminal y reforma penal* (1 ed.). Argentina: B de f.
- Mir Puig, S., y Corcoy Bidasolo, M. (2008). *Seguridad vial y derecho penal. Análisis de la LO 15/2007, que modifica el código penal en materia de seguridad vial* (1 ed.). Valencia - España: Tirant lo blanch.
- Molina Blásquez M^a C. (1996). *La aplicación de la pena. Estudio de las consecuencias jurídicas del delito*. (1ed.). Barcelona - España: Ed. Bosch.
- Montero Aroca, J. y otros. (1994). *Derecho jurisdiccional III, proceso penal*. Barcelona-España: Ed. J
- Morillas Cueva, L. (1991). *Teoría de las consecuencias jurídicas del hecho punible*. Madrid-España: Ed. Tecnos S.A.
- _____. (1991). *Metodología y ciencia penal* (2 ed.). Granada - España: Servicio de publicaciones de la Universidad de Granada.
- _____. (2010). *Derecho penal. Parte general. Fundamentos conceptuales y metodológicos del derecho penal, la ley*. (2 ed.). Madrid - España: Dykinson.
- Muñoz Conde, F. (1990). *Teoría general del delito*. Bogotá Colombia: Ed. Temis reimpresión.
- _____. (1996). *Derecho penal. Parte Especial* (11 ed.). Valencia - España: Tirant lo blanch.
- _____. (2008). *De nuevo sobre el "Derecho penal del enemigo* (2 ed.). Buenos Aires - Argentina: Hammurabi.
- Muñoz Conde, F. y García Arán, M. (1993). *Derecho penal (Parte general)*. (1 ed.). Valencia- España: Ed. Tirant lo Blanch;
- Nuñez R. *Derecho penal argentino*. Parte general (Tomo II). Buenos Aires-Argentina: Ed. Bibliográfica Omeba.
- O'Donnell, Daniel (1989). *Protección internacional de los derechos humanos*. Lima-Perú: Ed. Comisión Andina de Juristas.
- Ortíz De Filippi, H. (1990). *De la extinción de la responsabilidad penal*. Santiago-Chile: Ed. Ediar Conosur.
- Polaino-Orts, M. (2009). *Derecho penal del enemigo. Fundamentos, potencial de sentido y límites de vigencia*. 1 ed. Barcelona-España: Ed. Bosch,
- Porto, J. E. (1956). *Causas de extinción de la acción penal y de la pena (Características y efectos)*. Buenos Aires-Argentina: Ed. Librería Jurídica Valerio Abeledo. Colección de Monografías de Derecho XXX.
- Quintero Olivares, G. (1996). *Curso de derecho penal. Parte general (Acorde con el nuevo código penal de 1995)*. Con la colaboración de Fermín Morales Prats y Miguel Prats Canut (1 ed.). Barcelona-España: Ed. Cedeas.
- _____. (2007). *Parte general del derecho penal* (2 ed.). España: Thomson - Aranzadi.
- Quinteros Olivares, G., & Valle Muñiz, J. M. (1996). *Comentarios a la parte especial del Derecho Penal* (1 ed.). España: Aranzadi.

- Quintero Olivares, G., Cabanillas Múgica, S., y De Llera Suárez Bárcena, E. (2002). *La responsabilidad civil "Ex delicto"* (1 ed.). España: Aranzadi.
- Rivarola, R. (1910). *Derecho penal argentino. Parte general (Tratado general y de la legislación actual y comparada. Con las reformas proyectadas y con legislaciones de lengua española)*. (1 ed.). Madrid-España -aunque no lo especifica- : Ed. Casa editorial "Hijos de Reus";
- Roca Agapito, L. (2007). *El sistema de sanciones en el derecho penal español*. Barcelona-España: Bosch Editor.
- Rodríguez Chocontá, O. A. (2008). *Casación y revisión penal. Evolución y garantismo*. Bogotá-Colombia: Ed. Temis S.A.
- Rodríguez Devesa, J. M. y Serrano Gómez, A. (1994). *Derecho penal español (Parte general)*. (17 ed.). Madrid- España: Ed. Dykinson.
- Romero Girón, V. y García Moreno, A. (1889). *Colección de las instituciones jurídicas y políticas de los pueblos modernos*. Tomo Quinto. Instituciones y códigos franceses (Tomo II). Madrid-España: Ed E. Maroto y Hermano.
- Ruíz Vadillo, E. *Descriminalización y despenalización. Reforma penal y descriminalización*. En Reformas Penales en el Mundo de Hoy. Universidad Complutense de Madrid, 1984, pp. 375 y ss.
- Sáinz Cantero, J. A. (1995). *Lecciones de derecho penal. Parte general*. Vol. III. Barcelona-España: Ed. Bosch.
- Sánchez Lázaro, F.G. (2009). *Una teoría de la argumentación jurídico-penal. Un segundo desarrollo, de la mano de algunos problemas del miedo insuperable*. Granada – España: Editorial Comares.
- Serrano Butragueño, I. (1996). *Las penas en el nuevo código penal. Ley orgánica 10/1995, 23 de noviembre. Doctrina, jurisprudencia, derecho comparado y casos prácticos*. Granada-España: Ed. Comares.
- Silva Sánchez, J. M. (1992). *Aproximación al derecho penal contemporáneo* (1 ed.). Barcelona - España: J. M. Bosch.
- _____. (1999). *La expansión del derecho penal. Aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales* (1 ed.). España: Civitas.
- _____. (2000). *Política criminal y persona*. Ed. Ad-Hoc, primera edición, Buenos Aires-Argentina.
- _____. (2003). *Normas y acciones en el derecho penal* (1 ed.). Buenos Aires: Hammurabi.
- _____. (2004). *Estudio sobre los delitos de omisión* (1 ed.). Lima - Perú: Grijley.
- _____. (2011). *La expansión del derecho penal. Aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales* (1 ed.). Buenos Aires - Argentina: B de f.
- Silva Sánchez, J. M., Baldó Lavilla, F. y Corcoy Bidasolo, M. (1997). *Casos de la jurisprudencia penal con comentarios doctrinales. Parte general*. (2da edición. ed.). Barcelona-España: J.M. Bosch editor.S.L.
- Silva Sánchez, J. M., y Suárez González, C. J. (2001). *La dogmática penal frente a la criminalidad en la administración pública y otros problemas actuales del derecho penal* (1 ed.). Lima - Perú: Grijley.
- Soler, S. (1951). *Derecho penal Argentina*. (2 ed. Tomo II) Buenos Aires-Argentina: Ed. Tipográfica editora argentina.
- Tamarit Sumalla, J. M. (1998). *La víctima en el derecho penal. De la víctima-dogmática a una dogmática de la víctima*. Navarra-España: Ed. Aranzadi
- Urruela Mora, A. (2009). *Las medidas de seguridad y reinserción social en la actualidad. Especial consideración de las consecuencias jurídico-penales aplicables a sujetos afectados de anomalía o alteración psíquica. Estudios de derecho penal y criminología 106*. Albolote (Granada): Ed. Comares, SL.
- Velásquez Velasquez, F. (2009). *Derecho Penal. Parte general* (4 ed.). Bogotá - Colombia: Comlibros.
- Viada, N. G. (2009). *Derecho penal y globalización. Cooperación internacional*. Madrid-España: Ed. Marcial Pons.
- Vives Antón, T. S. (Coord.) y otros. (1996). *Comentarios al código penal de 1995*. Vol. I (arts. 1 al 273). Valencia-España: Ed. Tirant lo Blanch.
- VodanovichH., A., *Contrato de transacción*. Cono Sur: Ed. Jurídico EDIAR-
- Zaffaroni, E. R. (1983). *Tratado de derecho penal (Parte general)*. (Vol. V) Buenos Aires-Argentina: Ed. Ediar.
- _____. (2000). *Derecho penal. Parte general* (1 ed.). Buenos Aires-Argentina: Ediar.
- _____. (1985). *Manual de derecho penal (Parte general)*. (4 ed.). Buenos Aires-Argentina (1990 reimpresión): Ed. Ediciones Jurídicas.
- _____. (2005). *En torno a la cuestión penal* (1 ed.) Buenos Aires – Argentina: B de f.
- _____. (2009). *Estructura básica del derecho penal* (1 ed.). Buenos Aires - Argentina: Ediar.

3. Autores extranjeros traducidos:

- Alexy, R. (2007). *Teoría de la argumentación jurídica. La teoría del discurso racional como teoría de la fundamentación jurídica*. (Manuel Atienza e Isabel Espejo, Trans.) Tit. Orig. *Theorie der Juristischen Argumentation*. Lima: Ed. Palestra.
- Alexy, R. (1989). *Teoría de la argumentación jurídica*. Madrid-España: Centro de Estudios Constitucionales. Tit. Orig. *Theorie der juristischen Argumentation*. (M. Atienza, e Isabel Espejo, Trans.). Frankfurt a. M., Surkamp, 1978, reimpresión 1989.
- Ambos, K. (2006). *Temas de derecho penal internacional y europeo. Derechos humanos. Fines de la pena. Ius puniendi. Responsabilidad individual. Crímenes más graves. Derecho penal y guerra. Proceso penal internacional y europeo. Inmunidades*. Madrid-España: Ed. Marcial Pons.
- Baumann, J. (1986). *Derecho procesal penal. Conceptos fundamentales y principios procesales* (3 ed.) Buenos Aires-Argentina: Ed. Depalma. (Conrado Finzi, Trans. 1976).
- Beccaria, C. (1984). *De los delitos y de las penas*. Buenos Aires-Argentina: Ed. Orbis S.A. Tit. Or.: *Dei delitti e delle pene* (1764) (Tomas y Valiente, Francisco, Trans.), 1 ed. Vol. 38 de la colección Hyspamérica. reimpresión de la versión de 1969 Ed. Aguilar S.A
- Beck, U. (1998). *¿Qué es la globalización?. Falacias del globalismo, respuestas a la globalización*. Tit. orig. *Was is Globalisierung? Irrtümer des Globalismus - Antworten auf Globalisierung* (1 ed.) España: Paidós Ibérica, S.A. (Bernardo Moreno (partes I y II) y M.^a Rosa Borràs (partes III y IV), Trans. (1997))
- Bettiol, G. (1965). *Derecho penal parte general*. (4 ed.) Bogotá-Colombia. Ed. Temis. Tit. Or.: *Diritto penale* (parte general) Ed. G. Priulla; (José León Pagano Trans. 1958) Palermo.
- Carrara, F. (1944) *Programa del curso de derecho criminal. Parte general* (Volumen II). Tit. Orig.: *Programma del Corso di Diritto Criminale*; ed. Italiana (Sebastián Soler, Trans. 11 ed.). Buenos Aires - Argentina: Ed. Depalma.
- _____. *Programa de derecho criminal. Parte general*. (1979). Tit. Orig.: *Programma del corso di diritto criminale di ttonella Regia Università di Pisa*; ed. Se tuvieron en cuenta las ediciones italianas, quinta de Lucca, sexta de Firenze, y séptima de Lucca. (José J. Ortega Torres Y Jorge Guerrero, Trans. 3 ed. Vol. II). Bogotá-Colombia: Ed. Temis.
- Chiassoni, P. (2011). *Técnicas de interpretación jurídica*. Madrid-España: Marcial Pons. Tit. Or. *Tecnica dell'interpretazione giuridica*, Bologna: Il Mulino. (Pu Luque Sánchez, Maribel Narváez Mora Trans. 2007).
- Ciaramelli, F. (2009). *Instituciones y normas* (Juan Ramon Capella, Trans. 1 ed.). Madrid - España: Trotta.
- Decriminalización. Informe del comité europeo sobre problemas de la criminalidad*. Consejo de Europa. Estraburgo 1980. (Marianao Alberto Crafardini y Mirta Liliana Bondanza Trans. 1987). Buenos Aires-Argentina: Ed. Ediar.
- Clarke, R. (2001). *Los nuevos enigmas del universo*. Madrid-España: Alianza Editorial (M.^a Luisa Rodríguez Tapia, Trans.)
- De Jesus, D. E. (1994). *Direito penal. Parte geral* (18 ed. Vol. I) revista e actualizada São Paulo-Brasil: Ed. Saraiva.
- _____. (2002). *Imputacao objetiva* (2da ed.). Sao Paulo-Brasil: Editora Saraiva.
- Eser, A. y otros. (1992). *De los delitos y las víctimas*. Compilador Julio Maier. (1 ed.). Buenos Aires-Argentina: Ed. Ad-Hoc.
- Estulin, Daniel (2007). *Los señores de las sombras. La red de gobiernos y servicios de espionaje que dirige en secreto el tráfico de drogas y el terrorismo internacional*. Barcelona-España: Ed. Planeta. (Diana Hernández Aldana, Eva M.^a Robledillo Carro y Francisco Martín Arribas, Trans. 1 ed.).
- Figueredo Dias, J. D. (1988). *Direito penal 2, Parte geral. As consecuencias jurídicas do crime*. Brasil.
- Fragoso, H.C. (1993). *Lições de direito penal. Parte geral*. (Revista e atualizada por Fernando Fragoso, 14 ed.). Rio de Janeiro-Brasil: Ed. Forense.
- Frister, Helmut (2009). *Derecho Penal. Parte general*. Tit. Orig. *Strafrecht Allgemeiner Teil. Ein Studienbuch*. (Marcelo A. Sancinetti y María de la Mercedes Galli, Trans. 4 ed.). Buenos Aires-Argentina: Ed. Hammurabi.
- Giddens, A. (1996). *Más allá de la izquierda y a la derecha. El futuro de las políticas radicales*. Tit. orig. *Beyond Left and Right. The future of Radical Politics*. (Luisa Rodríguez Tapia, Trans. 1 ed. 1994). España: Ediciones Cátedra S.A.
- _____. (1997). *Política, sociología y teoría social. Reflexiones sobre el pensamiento social clásico y contemporáneo*. Tit. orig. *Politics, sociology and social theory. Encounters with classical and contemporary social thought*. (Carles Salazar Carrasco Trans. 1 ed. 1995). España: Paidós Ibérica, S.A.

- _____. (1984) *Fundamentos de derecho penal*. (Francisco Muñoz Conde, pp. 215-402 y Luis Arroyo Zapatero, pp.1-215, Trans.). Barcelona-España: Ed. Bosch.
- _____. (1999). *Persona, mundo y responsabilidad. Bases para una teoría de la imputación en derecho penal*. (Francisco Muñoz Conde & Díaz Pita del Mar, Trans. 1 ed.). Valencia-España: Tirant lo blanch.
- Hassemer, W., & Muñoz Conde, F. (1995). *La responsabilidad por el producto en el derecho penal*. Valencia - España: Tirant lo blanch.
- Held, D. (2005). *Un pacto global. La alternativa socialdemócrata al consenso de Washington*. Madrid-España: Ed.Taurus (trans. Cuellar, Jesús, Tit. Orig. Global Covenant. The Democratic Alternative to the Washington Consensus, trans. 2004) 1 ed.
- Heinz (1987) *Derecho penal. Parte general*. 1ed. Buenos Aires – Argentina: Ed. Astrea, traducción 7^{ma}. Edición.
- Höffe, O. (2000): *Derecho intercultural*. Ed. Gedisa. Acaba de publicarse una segunda edición traducida al castellano.
- Jakobs, G. (1994). *La imputación objetiva en el derecho penal* (Manuel Cancio Meliá, Trans. 1 ed.). Colombia: Departamento de publicaciones de la Universidad Externado de Colombia
- _____. (1995). *Derecho penal. Parte general. Fundamentos y teoría de la imputación*. Madrid-España: Ed. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas S.A. Tít. Orig.: Strafrech Allgemeiner Teil. Die Grundlagen und die Zurechnungslehre. (1991). (Joaquin Cuello Contreras Y José Luis Gonzalez De Murillo, Trans. 2 ed.)
- _____. (1997a). *Derecho penal. Parte general*. (2 ed.). Madrid - España: Marcial Pons.
- _____. (1997b). *Derecho penal. Parte general*. (2 ed.). Madrid - España: Marcial Pons.
- _____. (1997c). *Estudios de derecho penal* (1 ed.). Madrid - España: Civitas.
- _____. (2004). *Sobre la normativización de la dogmática jurídico-penal* (Manuel Cancio Meliá & Bernardo Feijóo Sánchez, Trans. 1 ed.). Colombia: Universidad Externado de Colombia.
- _____. (2011). *Falsedad documental. Revisión de un delito de engaño* (Jacobo López Barja de Quiroga & Luis Carlos Rey, Trans. 1 ed.). Madrid - España: Marcial Pons.
- Jakobs, G. & Polaino Navarrete, M. (2006). *El derecho penal ante las sociedades modernas. Dos estudios de dogmática penal y política criminal* (1 ed.). Lima - Perú: Grijley.
- Jakobs, G. & Polaino Navarrete, M. (2009). *Delitos de organización: un desafío al Estado* (1 ed.). Lima - Perú: Grijley.
- Jakobs, G. & Polaino - Orts, M. (2009). *Delitos de organización: un desafío al Estado* (1 ed.). Lima - Perú: Grijley.
- Jescheck, H.-H. (1993). *Tratado de derecho penal (Parte general)*. (1 ed. de la 4 ed. completamente corregida y ampliada); Tít. Or. : Lehrbuch des Strafrechts: All. Teil. (1988). (José Luis Manzanares Samaniego, Trans. 4 ed.). Granada-España: Ed. Comares.
- _____. (2002). *Tratado de derecho penal. Parte general*. Tít. Or. : Lehrbuch des Strafrechts: All. Teil. (Miguel Olmedo Cardenete, Trans. 5 ed.). Granada - España: Editorial Comares.
- Luhmann, N. (1983). *Sistema jurídico y dogmática jurídica*. Tit. orig. Rechssystem Und Rechtsdogmatik. (Ignacio De Otto Pardo, Trad.). Madrid-España: Ed. Centro de Estudios Constitucionales.
- Mantovani, F. (1992). *Diritto penale. Parte generale*. Padova-Italia: Ed. Cedam; ed. Terza
- _____. (2009). *Diritto penale. Parte generale* (6 ed.). Italia: Cidam.
- Manzini, V. (1949). *Tratado de derecho penal*. Tomo 4. Teorías generales, Volúmen IV. Traduc. Santiago Sentís Melendo, Ed. Ediar, Buenos Aires-Argentina Tit. orig: TRATTATO DI Diritto Penale Italiano. Nuova edizione completamente aggiornata. Volume terzo Penas-Sanciones civiles.- Medidas administrativas de seguridad. Editrice Torinese 1942
- _____. (1950). *Tratado de derecho penal (Primera parte teorías generales)* - (Vol. V) Buenos Aires-Argentina: Ed. Ediar. Tít. Or. en italiano: Trattato di Diritto Penale Italiano. (1942). (Santiago Sentís Melendo, Trad. 9 ed.). Con notas de Ricardo C. Nuñez y Ernesto R. Gavier. Torino-Italia: Ed. Editrice Torinese.
- Maurach, R. y Zipf, H. (1994). *Derecho penal. Parte general. Teoría general del derecho penal y estructura del hecho punible*. Vol I. (Nº15). Buenos Aires-Argentina: Ed. Astrea. Tít. Or. en alemán: Strafrechtsallgemeiner. Teilband 1, Grundlehren des strafrechts y und Aufbau der Straftat. C.F. Müller Juristischer Verlag Tamlt Heildelberg, 7. Auflage (1987). (Jorge Boffil Genzsch Y Enrique Aimone Gibson, Trans.).

- Maurach, R.; Heinz Gössel, K.; y Zipf H. (1995). *Derecho penal. Parte general*. Tomo 2. Buenos Aires-Argentina: Ed. Astrea. Tít. Or. en alemán: Strafrecht Allgemeiner Teil. Teilband 2. Erscheinungsformen des Verbrechens und Rechtsfolgen der Tat. C.F. Müller Juristischer Verlag GmbH, Heidelberg, 7. Auflage, (1989). (Trad: Jorge Bofill Genzsch).
- Mayrink Da Costa, Á. (1995). *Direito penal. Parte general*. 5 ed. Vol. I. tomo II. Rio de Janeiro- Brasil: Ed. Forense
- Mezger, E. (1949). *Tratado de derecho penal*. Tomo II. (2 ed.). Madrid-España: Ed. Revista de derecho privado. Revisada y puesta al día; Munich (1933). (Trad. José Arturo Rodríguez Muñoz).
- _____ (1957). *Derecho Penal. Parte General. Libro De Estudio*. (Conrado A. Finzi Y Ricardo C Núñez, Trad. 6 ed. de la edición alemana de 1955). Buenos Aires-Argentina: Ed. Din.
- Misha G. (2008). *Mc Mafia. El crimen sin fronteras*. Tít. Orig. "McMafia. Crimen Without Frontiers, (Joan Trujillo Trans.). México: Ediciones Destino México.
- Pessina, E. (1936). *Elementos de derecho penal. Anotada conforme a la legislación vigente y adicionado con las doctrinas científicas modernas por Eugenio Cuello Calón* (Hilario Gonzales Del Castillo Y Félix De Aramburu Y Zuloaga., Trad. 4 ed.) Madrid-España: Ed. Reus.
- Posner, R. A. (2011) *Cómo deciden los jueces*. Madrid-España: Marcial Pons. Tít. Or. en inglés: How Judges Think. Harvard University Press (2008). (Victoria Roca Pérez trans.).
- Roxin, C. (1972). *Política criminal y sistema del derecho penal*. (Francisco Muñoz Conde. Trans.) Ed. Bosch, Barcelona-España.
- _____ (1976). *Problemas básicos del derecho penal. Sentido y límites de la pena estatal*. (Trad. Diego Manuel Luzón Peña). Madrid-España: Ed. Reus.
- _____ (1981). *Culpabilidad y prevención en derecho penal* (Francisco Muñoz Conde, Trans. 1 ed.). Madrid-España: Instituto Editorial Reus S.A.
- _____ (1992). *Política criminal y sistema de derecho penal. Barcelona-España: Ed. Bosch. Política criminal y estructura del delito. Elementos del delito en base a la política criminal*. (Diego Manuel Luzón Peña trans.). Colección Iuraz, Barcelona-España: Ed. PPU
- _____ (1992). *Política criminal y estructura del delito. Elementos del delito en base a la política criminal*. Colección Iura 3, Ed., PPU., Barcelona-España, (Juan Bustos Ramírez y Hernán Hormazábal Malarée. Trans.)
- _____ (1997a). *Derecho penal. Parte general* (Diego-Manuel Luzón Peña, Miguel Díaz y García Conlledo & Javier de Vicente Remesal, Trans. 1 ed. Vol. I). España: Civitas.
- _____ (1997b). *La imputación objetiva en el derecho penal* (Diego-Manuel Luzón Peña, Trans. 1 ed.). Lima Perú: Idemsa.
- _____ (1999). *Derecho Penal parte general. Fundamentos. La estructura de la teoría del delito* (Diego Manuel Luzón Peña, Miguel Díaz, García conlledo & Javier de Vicente Remesal, Trans. 1 ed.). Madrid - España: Thomson.
- _____ (2000). *Derecho procesal penal* (Gabriela E. Córdoba, Daniel R. Pastor & Julio B. J. Maier, Trans. 25 ed.). Buenos Aires - Argentina: Editores del Puerto.
- _____ (2004). *Problemas actuales de la dogmática penal* (Manuel A. Abanto Vásquez, Trans. 1 ed.). Lima - Perú: Ara Editores.
- Roxin, C., J., G., Schünemann, B., Wolfgang., F., & Michael, K. (2000). *Sobre el estado de la teoría del delito* (Jesús María Silva Sánchez, Castiñeira Palou María Teresa, Ostiz Gutiérrez Pablo Sánchez, Felipe Saborit I David, Vallés I Ragués Ramon, Robles Planas Ricardo & Gómez -Trelles Sánchez-Vera Javier, Trans. 1 ed.). Madrid- España: Civitas ediciones.
- Saviano, R. (2007) *Gomorra. Un viaje al imperio económico y al sueño de poder la Camorra*. (Teresa Clavel y Franciso J. Ramo. (Trans). Editorial Debate, Barcelona-España.
- Schünemann, B. (1991). *El sistema moderno del derecho penal: cuestiones fundamentales. Estudios en su Honor de Claus Roxin en su 50º Aniversario*. (Jesús María Silva Sánchez. Trans.). Ed. Tecnos.
- Stratenwerth, G. (1982). *Derecho penal. Parte general I. El hecho punible*. Madrid-España: Ed. Edersa. Tít. or.: Strafrecht, Allgemeiner Teil I. Die Straftat. (1976). (Gladys Romero, trad. 2 ed.).
- Valiente, F. (FALTA TÍTULO) Buenos Aires-Argentina: Ed. Orbis S.A. (Trad. 1 ed. Vol. 38 de la colección Hyspamérica). reimpresión de la versión de 1969 Ed. Aguilar S.A.
- Von Liszt, F. (s/f). *Tratado de derecho penal*. 2 ed, Tomo III. Madrid de España: Ed. Reus (S.A.). Tít. Or.: Título en otro idioma (Luis Jimenez De Asua, y Quintiliano Saldaña, Trans. 20 ed.).
- Welzel, Hans (1993) *Derecho penal alemán. Parte general*. 4 ed. (Bustos Ramírez, Juan y Yanez Perez, Sergio, Trans. 21 ed.). Santiago-Chile: Ed. Jurídica de Chile.

- Wessels, J. (1980). *Derecho penal. Parte general* (Conrado A. Finzi, Trans.). Buenos Aires-Argentina: Ed. Depalma.
- Zdravomislov y otros. (1970). *Derecho penal soviético. Parte general*. Bogotá-Colombia: Ed. Temis.

B. Biblioteca de libros por especialidad

1. Autores nacionales

- Chocano Rodríguez, R. (2006). *Instigación al delito e interrupción de la prescripción penal. A propósito del «caso Lucchetti» - Montesinos en la resolución de la Corte Suprema*. Lima-Perú: Ed. Grijley.

2. Autores extranjeros de habla hispana:

- Calvete, A. (1989). *Prescripción de la acción penal*. 1 ed. Tomo 1. Buenos Aires-Argentina: Ed. Din.
- González Tapia, M. I. (2003). *La prescripción en el derecho penal* (1 ed.). Madrid - España: Dykinson.
- La Rosa, Mariano R. (2008). *La prescripción en el derecho penal* (1 ed.). Argentina: Astrea.
- Medina Cepero, J. R. (2001). *El tratamiento procesal penal de la prescripción del delito* (1 ed.). Madrid - España: Dykinson.
- Pastor Alcoy, F. (1995). *La prescripción del delito la falta de pena. Análisis jurisprudencial sistematizado. Comentarios y formularios* (1 ed.). Valencia - España: Practica de derecho, s. l.
- _____ (1996). *La prescripción en el código penal de 1995 y su aplicación retroactiva. Comentarios y formularios* (1 ed.). Valencia - España: Práctica de derecho.
- Pastor, Daniel R. (1993). *Prescripción de la persecución penal y código procesal penal (Hacia un cambio de paradigma en la definición de los actos del procedimiento que interrumpen la prescripción de la persecución penal*. Buenos Aires-Argentina. Ed. Editores Del Puerto S.R.L.
- Pedreira González, F. M. (2004). *La prescripción de los delitos y de las faltas. Doctrina y jurisprudencia* (1 ed.). Madrid - España: Centro de estudios Ramón Areces.
- Rey Gonzáles, C. (1999). *La prescripción de la infracción penal. En el código de 1995*. (2 ed.). Madrid - España: Marcial Pons.
- Serrano Gómez, A. (2003). *La prescripción del delito. Tres cuestiones*. (1 ed.). Madrid - España: Dykinson.
- Vela Treviño, S. (1983). *La prescripción en materia penal*. (1 ed.). primera reimpression (1985). México D.F.- México; Ed. Trillas.
- Vera Barros, Oscar Nicolás (1960). *La prescripción penal en el código penal (Leyes especiales-Tratados internacionales)*. Buenos Aires - Argentina: Ed. Bibliográfica Argentina.
- _____ (2007). *La prescripción penal en el código penal. Leyes especiales y tratados internacionales* (2 ed.). Córdoba - Argentina: Lerner.
- Yuseff Sotomayor, G. (1987). *La prescripción penal*. 1 ed. Santiago-Chile: Ed. Jurídica de Chile.
- _____ (1995). *La prescripción penal*. 2 ed. Santiago-Chile: Ed. Jurídica de Chile.
- Zugaldía Espinar, J.M., & Moreno-Torres Herrera, M. R. (2010). *Fundamentos del derecho penal. Parte general* (4 ed.). Valencia - España: Tirant lo blanch.

II. Revistas, Libros Homenaje (LH) y Libros de ponencia.

A. Revistas Generales

1. Nacionales

- Caro Jhon, J. A. (Mayo, 2006). “¿Combinación de leyes penales?”. En Anuario de Derecho Penal 2005. Interpretación y aplicación de la ley penal, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. pp. 333-351.
- Caro Jhon, J. A. (Julio, 1994). “La problemática constitucional de la combinación de leyes penales. Discutida posición de la jurisprudencia”. En Revista Peruana de Ciencias Penales. Año II, Julio-Diciembre 1994, Ed. Grijley. pp. ?

- Carrión Lugo, J. (Setiembre, 1995). “*El recurso de casación en el proyecto de código procesal penal peruano*”. En: Revista Jurídica Magistri et Doctores, año I, Volumen I., Lima-Perú, pp. ?
- Castillo Alva, J.L. (FALTA EL MES, 2001). “*El caso Alan García: El problema de las leyes penales que suspenden la prescripción y el principio de irretroactividad. Algunas observaciones sobre la ejecutoria suprema*”. En dialogo con la jurisprudencia, N° 29, pp. 33-42.
- García Valdés, C. (FALTA EL MES, 1995) “*Alternativas legales a la privación de libertad clásica*”. En materiales de enseñanza de la U.N.M.S.M. Ed. Grijley. Tomado de la Revista Poder y Control N° 0; Ed. PPU; Barcelona-España. pp. 687 y ss.
- Monroy Gálvez, J. () “*Comentarios al título preliminar del proyecto de código procesal penal*”. En *Temas de Derecho*. pp. ¿? N° ¿?
- Paniagua Corazao, V. (1995). “*¿Acusación constitucional, antejuicio o juicio político? En la Constitución de 1993*”. En Análisis y Comentarios II, serie Lecturas sobre Temas Constitucionales 11. CAJ, pp?
- Sáenz Torres, A. D. (Julio, 2007). “*Algunos comentarios al reciente Decreto Legislativo N° 982, a propósito de la nueva legislación contra la criminalidad organizada*”. En Jus Legislación. Especial. N° 7/2007. Ed. Grijley. pp. 313-316
- Sáenz Torres, A. D. (2005). “*El estado actual de la punibilidad en la ciencia penal*”. En LH – Raúl Peña Cabrera. *El Derecho Penal Contemporáneo*. Coordinador Efraín Montes Flores y otros. 1 ed. Ed. ARA Editores. pp. 913-925.
- _____ (2008). “*Algunas consideraciones en torno a la criminalidad organizada en el Perú*”. VVAA. En *Cuestiones actuales del sistema penal. Crisis y desafíos*. Ed. ARA Editores, pp.733-747.
- San Martín Castro, C. (diciembre, 1985). “*Las condiciones objetivas de punibilidad y su tratamiento procesal en el Perú*”. En: Derecho, Revista de la Pontificia Universidad Católica, N° 39. Diciembre de 1985, pp. 355-368.
- Urquiza Olaechea, J. (Enero- junio, 1993). “*El principio de combinación en el nuevo código penal*”. En Revista Peruana de Ciencias Penales, Lima, N°. 1, Enero-Junio, pp. ¿
- Wieland Conroy, H. (1996). “*La reelección presidencial: análisis de la disposición constitucional y su ley interpretativa*”. En la Constitución de 1993 y Comentarios III, Serie Lecturas sobre Temas Constitucionales 12. CAJ, pp. 209 y ss.

2. Extranjeras

- Aniyar De Castro, L. (1989). “*Sistema penal y sistema social: la criminalización y decriminalización como funciones de un mismo proceso*”. En Cuadernos de Política Criminal N° 14, Madrid-España, pp. 345 y ss.
- Beltrán Ballester, E. (1978). “*El delito de genocidio (Estudio del artículo 137 bis del Código penal español)*”. En Cuadernos de política criminal, Núm. 6, pp. 23-58.
- Borja Jiménez, E. (enero- abril, 1995). “*La terminación del delito*”. En Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. Tomo XLVIII, fascículo I, Enero-Abril, MCMXCV, España, pp. 89-185.
- Bustos Ramírez, J. (Octubre-Noviembre-Diciembre, 1987). “*La extinción de la responsabilidad criminal*”. En Debate Penal N° 3, Año I, Setiembre- Octubre-Noviembre-Diciembre, Lima-Perú, pp. 365-374.
- Córdoba Roda, J. (1999). “*El "Estatuto del Contribuyente y la prescripción de los delitos contra la hacienda pública: un debate actual*”. En Revista Jurídica de Catalunya, Año XCVIII - Núm. 4, pp. 983-995.
- De La Cuesta Arzamendi, J. L. (1993). “*Alternativas a las penas cortas privativas de libertad en el proyecto de 1992*”. En Política Criminal y Reforma Penal. Homenaje a la memoria de Juan del Rosal. Ed. Edersa, Madrid-España, pp. 319 al 343.
- Fernández Botero, E. (1949). “*El auto de enjuiciamiento y la prescripción*”. En Derecho. Año XXIV, tomo IX, N° 75, Medellín. Colombia, pp¿?
- Ferrajoli, L. (2006). “*Criminalidad y globalización*”. En Boletín Mexicano de Derecho Comparado. (Miguel Carbonell Trans.). Nueva Serie. Año XXXIX, N° 115, enero – abril, pp. 301-316.
- Gómez Benites, J. Manuel. “*Crítica de la política criminal del orden público*”. En Cuadernos de Política Criminal. N° 12, Madrid-España, pp. 49-92.
- Joshi Juber, U.: “*Sobre el concepto de organización en el delito de tráfico de drogas en la jurisprudencia del tribunal supremo*”. En Anuario de Derecho Penal y Ciencias Sociales, Tomo XLVIII, fascículo II, mayo –agosto, MCMXCV, pp. ¿?.

- Mir Puig, S. (1990). “*El sistema del derecho penal en la Europa actual*”. En LH - Claus Roxín. Fundamentos de un sistema europeo del derecho penal. Ed. Española J.M. Silva Sánchez. Coordinadores B. Shünemann y J. Figueiredo Dias. 1 ed. Ed. José María Bosch Editor. S.A., pp. 25-35.
- Pinillos, J. L. (1990). “El estudio psicológico del tiempo”. En Simposio sobre el tiempo. Madrid- España: Ed. Universidad Complutense, pp. 49-69.
- Pfeiffer, M. L. (1998). “*Tiempo objetivo, tiempo subjetivo, tiempo trascendental*”. En Temporalidad. Buenos Aires-Argentina: Ed. Lugar, pp. 45-58.
- Ragués i Vallès, R. (2010). “*Recurso de Revisión penal y jurisprudencia constitucional. A propósito del acuerdo del pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 26-2-2009*”. En LH- Mir Puig. Derecho Penal del Estado Social y Democrático de Derecho. Director Diego Manuel Luzón Peña. 1 ed. Ed. La Ley, pp. 1041-1064.
- Ruíz Vadillo, E. (1984). “*Descriminalización y despenalización. Reforma penal y descriminalización*”. En Reformas Penales en el Mundo de Hoy. Universidad Complutense de Madrid, pp. 375 y ss.
- Sancinetti, Marcelo A. (2004). “*Las leyes argentinas de impunidad y el artículo 29 de la constitución de la nación argentina. Dogmática y ley penal*”. En LH - Enrique Bacigalupo. Tomo I, Madrid – España, Editorial Marcial Pons, pp. 811-826.
- Tomás Tio, José M^a-(s/f) “*El delito continuado en el código penal*”. En Cuaderno de Política Criminal. N° 31, pp. 121.

B. Revistas por especialidad

1. Autores nacionales:

- Abanto Vásquez, M. A. (2006). “*Acerca de la naturaleza de la prescripción*”. En LH - Raúl Peña Cabrera. El derecho penal contemporáneo. Tomo I, 1 ed. Lima - Perú: Ara Editores, pp. 543-568
- Bramont-Arias Torres, L. A. (2001). “*La prescripción de la acción penal en el caso de Alan Gabriel García Pérez*”. En Dialogo con la jurisprudencia. Director Walter Gutiérrez. Año 7. N° 29. Lima-Perú, pp. 23-25.
- Castañeda Cubas, C. (1994). “*Prescripción penal*”. En Revista Universitaria de Derecho. Año 1, N° 5. Setiembre 1994, Trujillo-Perú, pp. 1-16.
- Castillo Alva, J. L. (2010). “*La prescripción de la persecución penal. Comentario a propósito de la sentencia del Exp. N° 1805-5005-PHC/TC*”. En Comentarios de los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional. Directora Susana Castañeda Otsu. Ed. Grijley. 1 ed. Lima- Perú, pp. 639-747.
- Elejalde Estenssoro, C. (1999). “*La prescripción de la acción penal. A propósito del caso BCCI*”. En Diálogo con la jurisprudencia. Director Walter Gutiérrez Camacho. Año 5. N° 10, pp. 11-15.
- Manrique Pachas, G. (1990). “*La prescripción de la acción penal y la lex tertia*”. En Derecho y Sociedad. Revista de derecho público, Año 2, N° 2. Abril / Mayo 1990, pp. 55-57.
- Meini, I. (2009). “*Sobre la prescripción de la acción penal. Imputación y responsabilidad penal*”. En ensayos de derecho penal. 1 ed. Lima - Perú: Ara Editores, pp. 277-305
- Pariona Arana, R. (2010). “*La prescripción en los delitos contra la administración pública*”. En Gaceta Penal. Director Arsenio Oré Guardia. N° 10, abril, Tomo 10, pp. 149-158.
- Peña Cabrera Freyre, A., (2011). “*La duplicación del plazo de prescripción en los delitos cometidos por funcionarios públicos según el acuerdo plenario N° 7*” * 2040) CJ -116. En la prescripción en el acuerdo plenario N° 01-2010/CJ-116. En Gaceta Penal. N° 20, pp. 30-32.
- Peña Cabrera Freyre, A. R., & Peña Freyre, R. A. (febrero, 2001). “*La prescripción y sus incidencias jurídico-penales. En el caso del ex presidente Alan García Pérez*”. En Dialogo con la jurisprudencia., N° 29, pp. 27-32.
- Rodríguez Hurtado, M. (1996) “*La prescripción de la acción penal y el principio de combinación. En Comisión Especial de Análisis del CAL. Crítica de las Resoluciones y Sentencias Judiciales del CAL (1994-1995). Autos & Vistos*”. En Comentarios Jurisprudenciales. Ed. Gaceta Jurídica, Lima-Perú; enero de 1996, pp. ¿?
- Sáenz Torres, A. D (2002). “*El retorno a la imprescriptibilidad de la persecución penal*”. En Revista Peruana de Doctrina y Jurisprudencia Penales. N° 3. Ed. Grijley, pp. 317-337.

- Sánchez Mercado, Miguel Ángel. (2010). "Imprescriptibilidad de los delitos de corrupción". En cuestiones de derecho penal, proceso penal y política criminal. 1 ed., Lima - Perú: Ara Editores, pp. 481- 493.
- Serrano Gómez, A. (2002). "*La interrupción de la prescripción del delito en los códigos penales de Perú y España*". En Revista peruana de ciencias penales. Edición especial sobre el Código Penal Peruano. Director José Urquiza Olaechea. Edi. Idemsa. N° 12. Lima-Perú, pp. 184-192.
- Urtecho Navarro, A. (2011). "*La prescripción extraordinaria en las faltas*". En la prescripción en el acuerdo plenario N° 01-2010/CJ-116. Gaceta Penal. N° 20, pp. 13-22.

2. Autores extranjeros:

- Aguirre Obarrio, E. (2010). "*Prescripción de la acción penal*". En la revista jurídica argentina La Ley. Derecho Penal. Doctrinas Esenciales. Director Edgardo A. Donna. Tomo I, pp. 793-809
- Arslanian, León C. (1981). "*Sobre la prescripción de la pena*". En Doctrina Penal. Teoría y Práctica en Ciencias Penales. Año 4, N° 13 a 16, Buenos Aires-Argentina, pp. 33 -66.
- Ayo Fernández, M. (1995). "*El régimen procesal de la prescripción del delito o falta. Especial referencia a los recursos*". En La Ley N° 1/1995, pp. 926-932.
- Aniyar de Castro, L. (1989). "*Sistema penal y sistema social: La criminalización y descriminalización como funciones de un mismo proceso*". En Cuadernos de Política Criminal N° 14, Madrid-España.
- Bacigalupo, E. (2009). "*Problemas constitucionales de la prescripción de la acción penal (Notas sobre la STC 63/2005)*". En teoría y práctica del derecho penal. 1 ed., Vol. 2, Madrid - España: Marcial Pons, pp. 899 - 914.
- Banacloche Palao, J. (1997). "*Algunas reflexiones críticas en torno a la prescripción penal*". En Revista de Derecho Procesal, N°2, Ed. Edersa, Madrid, pp. 281-319.
- Bernal Cuellar, J. (1977). "*La prescripción*". En Revista de Derecho Penal y Criminología. Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad Externado de Colombia. Año 1, N° 1, Bogotá-Colombia, Diciembre de 1977, pp. 81 - 95.
- Bernal Medina, M. (1955). "*Prescripción de la acción penal*" La causal primera de casación. Términos de la prescripción. Cómputo de máximo de acuerdo con la especie del delito". En Revista de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Año XXIV, N° 170, Bogotá-Colombia, pp. 18 - 24.
- Binder, A. (1990). "*Prescripción de la acción penal: la secuela del juicio*". En Doctrina Penal, Teoría y Práctica de las Ciencias Penales. Año N° 13, Buenos Aires-Argentina, pp. 275 - 285.
- Choclán Montalvo, J.A. (mayo, 2001). "*Prescripción de la acción penal y criminalidad organizada, ¿un modelo de excepción?*". En Actualidad jurídica. Año XI. N° 488. Ed. Aranzadi. Madrid- España, pp. 1-6.
- Gómez de la Escalera, J. J. (mayo-agosto, 1995). "*El computo temporal en la duración de las penas y en la prescripción de las infracciones penales*". En Anuario de derecho penal y ciencias penales. Madrid – España, pp. 465-502.
- _____. (1996). "*Novedades en la prescripción de las infracciones penales y de sus penas*". En revista La Ley 1996/2, Madrid-España, pp.1313-1322.
- _____. (1993). "*La prescripción del delito por paralización del procedimiento*". En Revista Jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía., pp. 919-932.
- Huerta Tocildo, S. (2005). "*A vueltas con la prescripción penal*". En LH- Dr. Gonzalo Rodríguez Mourullo. 1 ed. España: Civitas. , pp. 513-530.
- Iglesias Río, M. A. (2011). "*Caso de «los Albertos»*". En revista La Ley 2011, Madrid-España, pp. 781-822
- Izquierdo Escudero, F. J. (1997). "*La prescripción de las faltas: dos interpretaciones encontradas*". En La Ley 1997-3, pp. 1679-1682.
- Medina Cepero, J. R. (2000). "*La prescripción del delito: hacia un nueva regulación procesal penal*". En Revista del Poder Judicial, N° 59, tercera época, 2000-III, pp. 301-371.
- Navarro García, R. (1973). "*La prescripción en el derecho penal*". En Revista Criminalia. Año 9-10, México D.F.-México, pp. 294 - 324.
- Olaizola Nogales, I. (1998). "*La prescripción del delito en supuestos de concursos de delitos*". En Actualidad Penal, N° 37, tomo 1998-2, pp. 741-765.
- Quintanar Diez, M. (1997). "*Sobre el cómputo del plazo prescriptivo en los delitos imprudentes. (Comentarios a la sentencia de 21 de abril de 1989 de la Sala II del Tribunal Supremo) (*)*". En Notas Jurisprudenciales. N° 61, pp. 253-278.

- _____ (1997). “Prescripción, homogeneidad de bienes jurídicos penalmente protegidos y principio acusatorio. (Comentario a la sentencia número 1054/1996, de 21 de diciembre de 1996, de la Sala Segunda del Tribunal Supremo)”. En Cuaderno de política criminal, N° 63, pp. 731-753.
- Panta Cueva, D. F. (2011). “Análisis, críticas y perspectivas de solución”. En la prescripción en el acuerdo plenario N° 01-2010/CJ-116. Gaceta Penal. N° 20, pp. 23-29
- Ragués Vallés, R. (2012). “La prescripción de los delitos y de las penas: una ocasión perdida”. En la obra colectiva el nuevo código penal, Comentarios a la reforma. Coordinadores Jesús María Silva Sánchez y Nuria Pastor Muñoz. 1 ed. Madrid-España, pp. 221-242.
- Rey González, C. (2004). “Problemas en torno a la prescripción”. En tratado de derecho penal. Desafíos del derecho penal contemporáneo. 1 ed. Trujillo - Perú: Editora Normas Legales, pp. 117-142.
- Rodríguez Mourullo, G. (2006). “Prescripción del delito: una reforma necesaria”. En LH - Antonio González - Cuéllar García. Derecho y justicia penal en el siglo XXI. 1 ed., Madrid - España: Colex, pp. 431-451.
- Rodríguez Ramos, L. (2003). “La prescripción y la estafa en la sentencia del Tribunal Supremo de: ¿Derecho Penal figurativo, abstracto o surrealista?”. En LH -Enrique Bacigalupo Zapater. Sistemas Penales Iberoamericanos. Director Manuel Jaén Vallejo. 1 ed. Ed. ARA Editores, pp. 745-763.
- _____ (2005). “Sobre el plazo de prescripción del delito (Comentario a la STC 63/2005 de 14 de marzo)”. En LH - Cobo del Rosal. Estudios Penales. Coordinador Juan Carlos Carbonell Mateu y otros. 1 ed. Ed. Dykinson, pp. 787-794.
- Sandoval Huertas, E. (1983). “La prescripción de la pena en el nuevo código penal colombiano”. En Revistas de Derecho Penal y Criminología. Revista del Instituto de Ciencias Políticas y Criminología de la Universidad Externado de Colombia. Volumen VI, N° 20, Bogotá-Colombia, Mayo- Agosto 1983. (pp. 167 a 191).
- Silva Sánchez, J.M. (1999). “¿Cuándo se interrumpe la prescripción del delito?”. A propósito del fundamento de derecho primero de la sentencia de la audiencia provincial de Barcelona (Secc. 3.ª) de 22 de enero de 1999”. En la ley N° 6/1999, pp. 1825-1828.
- _____ (1995). Sobre las posibilidades y límites de una dogmática superracional del derecho penal. Fundamentos de un sistema de derecho penal. Libro homenaje a Claus Roxin, con ocasión de su doctorado honoris causa por la Universidad de Coimbra. Barcelona-España: Ed. J.B. (FALTA PAGINAS)
- Terán Lomas, Roberto A. M. (2010) “La prescripción de un “delito” interruptor de la prescripción de otro delito: Problemas técnicos que plantea”. En la revista jurídica argentina La Ley. Derecho Penal. Doctrinas Esenciales. Director Edgardo A. Donna. Tomo I. pp. 631-635.
- Zaffaroni, E. R. (2001). “Notas sobre el fundamento de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad”. En Nueva doctrina penal. Director Julio B.J. Maier. 1 ed., Buenos Aires - Argentina: Editores del Puerto, pp. 437- 446.
- Zamora Moreno, M. Á. (1992). “La prescripción del delito en el copartípe rebelde”. En Revista Jurídica de Cataluña N° 4, Barcelona-España, pp. 155 - 165.

III. Tesis:

- García Maldonado, J. (1889). *Prescripción criminal*. (Tesis doctoral). Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima-Perú.
- Hawie Soret, J. (1963). *De la prescripción en el derecho penal y de su presencia en la legislación positiva peruana*. (Tesis Bachiller). Lima- Perú.
- Rossel Alvarado, V. H. (1975). *La prescripción de la acción penal en el Perú*. (Tesis Bachiller) Facultad de derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima-Perú.
- Rodríguez Delgado, J. A. (1995). *Transacción en los delitos patrimoniales*. (Tesis Abogacía) Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima-Perú.
- Sáenz Torres, Alexei Dante (1996). *La prescripción extraordinaria de la acción penal en el sistema penal peruano (a cinco años de vigencia del código penal de 1991)*. (Tesis Abogacía). Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima-Perú.

IV. Legislación

A. Legislación Nacional

1. Constitución, Tratados, Convenios y otras reglas internacionales

1.1. Constituciones

Constitución Política del Perú de 1979

Constitución Política del Perú de 1993 (promulgada el 29 de diciembre de 1993 y entró en vigencia el 30 de diciembre de 1995). La primera publicación la hizo el diario oficial "El Peruano", en una separata oficial el día 07 de setiembre de 1993).

1.2. Tratados Bilaterales

Convención de extradición con Francia

Convención de extradición con el Reino Unido de Bélgica.

Tratado de extradición con el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda

Tratado de extradición con la República de Chile

Tratado de extradición entre la República del Perú y el Reino de España

Tratado de extradición entre la República de Perú y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos

Tratado de extradición entre la República de Perú y la República del Ecuador

Tratado de extradición entre la República de Perú y la República Popular de China

Tratado de extradición entre la República de Perú y Los Estados Unidos de América

Tratado de extradición entre el Gobierno de la República de Perú y el Gobierno de la República Italiana

Tratado de extradición entre la República del Perú y la República de Panamá

Tratado de extradición entre la República de Perú y la República de Corea

Tratado de extradición entre el Gobierno de la República de Perú y el Gobierno de la República de Paraguay

Tratado de extradición entre la República de Perú y la República Federativa del Brasil

Tratado de extradición entre la República del Perú y la República de Argentina

Tratado de extradición entre la República del Perú y la República de Costa Rica

Tratado de extradición entre la República del Perú y la República de Bolivia

Tratado de extradición entre la República del Perú y la República de El Salvador

Tratado de extradición entre la República del Perú y la República de Guatemala

Tratado de extradición entre la República del Perú y la República Oriental del Uruguay

1.3. Tratados Multilaterales

Tratado de Derecho Penal de Montevideo de 1889

Acuerdo de Extradición adoptado por el Congreso Internacional de Caracas

Código de Derecho Internacional Privado - "Código Bustamante"

Tratado de extradición y protección contra el anarquismo

Convención Interamericana sobre la extradición

1.4. Asistencia Judicial

Convenio entre la República del Perú y la República de Colombia sobre asistencia judicial en materia penal
 Convenio sobre asistencia judicial en materia penal entre la República del Perú y la República de El Salvador
 Convenio entre la República del Perú y la República de Bolivia sobre asistencia judicial en materia penal
 Convenio entre la República del Perú y la República del Paraguay sobre asistencia judicial en materia penal
 Tratado de asistencia judicial en materia penal entre el gobierno de la República del Perú y el gobierno de la República Italiana
 Convenio de asistencia judicial en materia penal entre la República del Perú y la Confederación Suiza
 Acuerdo de asistencia judicial en materia penal entre la República del Perú y la República de Argentina
 Convenio entre la República del Perú y la República de Guatemala sobre asistencia judicial en materia penal
 Tratado de asistencia judicial en materia penal entre la República del Perú y el República de Cuba
 Acuerdo de asistencia judicial en materia penal entre la República del Perú y la República Federativa de Brasil
 Tratado de asistencia judicial en materia penal entre el gobierno de la República del Perú y el gobierno de Canadá
 Acuerdo de asistencia judicial en materia penal entre la República del Perú y la República del Ecuador
 Convenio entre la República del Perú y los Estados Unidos Mexicanos sobre asistencia jurídica en materia penal
 Tratado de asistencia judicial en materia penal entre la República del Perú y el Reino de España
 Acuerdo de asistencia judicial en materia penal entre La República Dominicana y la República del Perú
 Tratado entre el gobierno de la República del Perú y el gobierno del Reino de Tailandia sobre asistencia mutua en materia penal
 Tratado entre la República del Perú y la República Popular China sobre asistencia judicial en materia penal
 Tratado de asistencia jurídica en materia penal entre la República de Panamá y la República del Perú
 Tratado de asistencia jurídica mutua en Asuntos Penales entre la República del Perú y la República Oriental del Uruguay
 Convención Interamericana sobre asistencia mutua en Materia Penal

2. Leyes ordinarias, Decretos Legislativos, Decretos Leyes, Resoluciones Legislativas.

2.1. Legislación Penal

a. Códigos

El Proyecto de Manuel Lorenzo de Vidaurre de 1828: Proyecto de un código penal. Contiene una explicación prolija de la entidad de los delitos en general y de la particular naturaleza de los más conocidos, se señalan las penas que parecen proporcionadas, al último se agrega una disertación sobre la necesaria reforma del clero. Impresa en Boston por Hiram Tupper; 1928
 Código Penal de Santa Cruz del Estado Sur-Peruano.
 Código Penal del Perú 1863
 Ley 4868, por el cual se promulgó el abrogado C.P. de 1924.
 Ley 9014. Ley de prescripción de la acción penal y de la pena
 Ley 10203
 D. L. N° 17106 del 8 de Noviembre de 19 (Publicado el 19 de Noviembre de 1968)
 D. L. N° 17388 (del 24 de Enero de 1969)
 El D. Leg. N° 121 (del 12 de Junio de 1981)
 Código penal de 1991 (Edición oficial).- Decreto Legislativo N° 635. Código penal de 1991 (promulgado el 03 de abril de 1991 y publicado el 08, 09, 10 de abril de 1991, vigente al décimo sexto día después según la Constitución de 1979, es decir el 26 de abril de 1991).
 El D. L. 25662 del 12 de Agosto de 1992 (Hoy derogado).

Ley 26314, de fecha sábado, 28 de mayo de 1994, que modifica el artículo 80 del Código Penal
 Ley 26360, de fecha jueves, 29 de septiembre de 1994, que modifica el artículo 80 del Código Penal
 Ley 26641
 Reglamento del Congreso de la República (Promulgado el 23 de junio de 1995, publicada el 26 de junio de 1995 y vigente a partir del 27 de junio de 1995).
 Reglamento del Congreso de la República (edición oficial), de agosto de 2005
 Ley 26770, de fecha martes, 15 de abril de 1997, que modifica el artículo 78 del Código Penal
 Ley 26993, de fecha martes, 24 de noviembre de 1998, que modifica el artículo 78 del Código Penal
 Ley 28117, de fecha miércoles, 10 de diciembre de 2003, que modifica el artículo 80 del Código Penal
 Ley 27939, de fecha miércoles, 12 de febrero de 2003, que modifica el artículo 440 del Código Penal
 Ley 28726, de fecha martes, 09 de mayo de 2006, que modifica el artículo 440 del Código Penal

2.2. Legislación Procesal y de ejecución penal

Código de Procedimientos Penales de 1939 (Dado por Ley N° 9014).
 Proyecto de Código Procesal Penal (El presente texto corresponde a la última versión del Proyecto Código D. Leg. N° 638. Código procesal penal de 1991 -en vatio legis- (Promulgado el 25 de abril de 1991 y publicado 27 de abril de 1991).
 D. Leg. N° 654. Código de ejecución penal de 1991 (Promulgado el 30 de julio de 1991 y publicado el 02 de agosto de 1991).
 Procesal Penal de fecha 05 de Marzo de 1996, la diferencia con los anteriores textos solo es en algunos casos de numeración, empero en torno al D. Leg. 638, si difiere pues el art. 10 de éste no precisa el caso de las excepciones en los actos preparatorios).
 Nuevo Código Procesal Penal del 2004 (D. Leg. 957).

2.3. Legislación militar

Código de Justicia Penal Militar (D. Leg. N° 961).
 Código Penal Militar y Policial (D. Leg. N° 1094) vigente

2.4. Código de los niños y adolescentes (Ley 27337).

3. Proyectos y anteproyectos de ley

3.1. Anteproyectos

Anteproyecto de 1877 (La reforma del Código penal (anteproyectos de 1877 y de 1900, 1902). Tomo I. Ed. Imprenta y Librería de San Pedro; Lima-Perú, 1918)
 Anteproyecto de 1900-1902 (La reforma del Código penal (anteproyectos de 1877 y de 1900, 1902). Tomo I. Ed. Imprenta y Librería de San Pedro; Lima-Perú, 1918)
 Primer Anteproyecto de Código Penal de la comisión parlamentaria nombrada conforme a la ley N° 5168
 Anteproyecto de ley del Código Penal, Parte General. Elaborado por la Comisión revisora del C.P. por ley N° 27837 en el año 2002, publicado en el año 2004.
 Anteproyecto de ley del Código Penal, Parte General. Elaborado por la Comisión revisora del C.P. por ley N° 29153 en el año 2007, concluyendo sus labores en el año 2010, luego que se prorrogara su funcionamiento por ley 29295 y 29435.

3.2. Proyectos

Proyectos antes de abril de 1991:
 Proyecto de Código Penal de Setiembre 1984
 Proyecto de Código Penal de Noviembre de 1984
 Proyecto de Código Penal de Agosto de 1985

Proyecto de Código Penal de Abril de 1986

Proyecto del libro primero: parte general del Código Penal de Setiembre de 1989

Proyecto de 1916.

Proyecto de Código Penal. Aprobado por la Comisión Revisora (Publicado en separata especial del diario “El Peruano” el día diecisiete de Julio de 1990)

Proyecto de Código Penal de enero de 1991

Proyectos después de abril del 1991:

Proyecto de Ley N° 1445 de fecha viernes, 14 de junio de 1996, presentada por el Congresista Elferes Vidarte Correa

Proyecto de Ley N° 2275 de fecha lunes, 25 de noviembre de 1996, presentada por el Congresista Elferes Vidarte Correa

Proyecto de Ley N° 4533 de fecha viernes, 26 de febrero de 1999, presentada por el Congresista Roger Cáceres Velásquez

Proyecto de Ley N° 4849 de fecha jueves, 27 de mayo de 1999, presentada por el Congresista Carlos Torres y Torres Lara

Proyecto de Ley N° 1289 de fecha miércoles, 24 de enero de 2001, presentada por el Congresista Jorge Samuel Chávez Sibina

Proyecto de Ley N° 1340 de fecha jueves, 01 de febrero de 2001, presentada por el Congresista Fernán Romano Altuve-Febres Lores

Proyecto de Ley N° 1522 de fecha jueves, 08 de marzo de 2001, presentada por el Congresista Ana Elena Luisa Cristina Townsend Diez-Canseco

Proyecto de Ley N° 1569 de fecha viernes, 16 de marzo de 2001, presentada por el Congresista María Cecilia Laura Martínez Del Solar Salgado de Franco

Proyecto de Ley N° 1671 de fecha lunes, 16 de abril de 2001, presentada por el Congresista Luis María Santiago Eduardo Solari De La Fuente

Proyecto de Ley N° 1672 de fecha lunes, 16 de abril de 2001, presentada por el Congresista Luis María Santiago Eduardo Solari De La Fuente

Proyecto de Ley N° 00105 de fecha viernes, 27 de julio de 2001, presentada por el Congresista Marcial Ayaipoma Alvarado

Proyecto de Ley N° 119 de fecha viernes, 27 de julio de 2001, presentada por el Congresista Luis Solari De La Fuente

Proyecto de Ley N° 00501 de fecha martes, 28 de agosto de 2001, presentada por el Congresista Javier Diez Canseco Cisneros

Proyecto de Ley N° 00719 de fecha martes, 18 de septiembre de 2001, presentada por el Congresista Gloria Helfer Palacios

Proyecto de Ley N° 00896 de fecha miércoles, 03 de octubre de 2001, presentada por el Congresista Ana Elena Townsend Diez Canseco

Proyecto de Ley N° 1236 de fecha jueves, 08 de noviembre de 2001, presentada por el Congresista Dora Núñez Dávila

Proyecto de Ley N° 2094 de fecha martes, 26 de febrero de 2002, presentada por el Congresista Dora Núñez Dávila

Proyecto de Ley N° 02121 de fecha viernes, 01 de marzo de 2002, presentada por el Congresista Alejandro Oré Mora

Proyecto de Ley N° 02162 de fecha miércoles, 06 de marzo de 2002, presentada por el Congresista Michel Martínez González

Proyecto de Ley N° 04314 de fecha martes, 22 de octubre de 2002, presentada por el Congresista Heriberto Benítez Rivas

Proyecto de Ley N° 5055 de fecha miércoles, 18 de diciembre de 2002, presentada por el Congresista Alberto Cruz Loyola

- Proyecto de Ley N° 5144 de fecha martes, 07 de enero de 2003, presentada por el Congresista Rosa Yanarico Huanca, Jaimes Serkovic Santos y Jorge Mera Ramírez
- Proyecto de Ley N° 5166 de fecha miércoles, 08 de enero de 2003, presentada por el Congresista Manuel Bustamante Coronado
- Proyecto de Ley N° 05566 de fecha martes, 11 de febrero de 2003, presentada por el Congresista Hildebrando Tapia Samaniego y José Barba Caballero
- Proyecto de Ley N° 5987 de fecha lunes, 17 de marzo de 2003, presentada por el Congresista Rafael Valencia-Dongo Cárdenas
- Proyecto de Ley N° 07002 de fecha viernes, 30 de mayo de 2003, presentada por el Congresista Dora Núñez Dávila
- Proyecto de Ley N° 07781 de fecha lunes, 11 de agosto de 2003, presentada por el Congresista Enith Chuquival Saavedra
- Proyecto de Ley N° 09415 de fecha jueves, 15 de enero de 2004, presentada por el Congresista Dora Núñez Dávila
- Proyecto de Ley N° 09478 de fecha miércoles, 21 de enero de 2004, presentada por el Congresista Emma Vargas de Benavides
- Proyecto de Ley N° 9621 de fecha jueves, 05 de febrero de 2004, presentada por el Congresista Jacques Rodrich Ackerman
- Proyecto de Ley N° 09720 de fecha lunes, 16 de febrero de 2004, presentada por el Congresista Emma Vargas de Benavides
- Proyecto de Ley N° 9745 de fecha miércoles, 18 de febrero de 2004, presentada por el Congresista Ernesto Aranda Dextre
- Proyecto de Ley N° 10632 de fecha viernes, 21 de mayo de 2004, presentada por el Congresista Alcides Chamorro Balvín
- Proyecto de Ley N° 11178/2004-CR de fecha lunes, 16 de agosto de 2004, presentada por el Congresista Alcides Llique Ventura
- Proyecto de Ley N° 11801/2004-CR de fecha miércoles, 27 de octubre de 2004, presentada por el Congresista Gonzalo Jiménez Dioses
- Proyecto de Ley N° 12076/2004-CR de fecha miércoles, 01 de diciembre de 2004, presentada por el Congresista José Taco Llave
- Proyecto de Ley N° 12295/2004-CR de fecha jueves, 27 de enero de 2005, presentada por el Congresista Javier, Diez Canseco Cisneros
- Proyecto de Ley N° 12891/2004-CR de fecha martes, 03 de mayo de 2005, presentada por el Congresista Héctor Hugo Chávez Chuchón
- Proyecto de Ley N° 13051/2004-CR de fecha viernes, 20 de mayo de 2005, presentada por el Congresista Luis Gonzáles Reynoso
- Proyecto de Ley N° 13077/2004-CR de fecha martes, 24 de mayo de 2005, presentada por el Congresista Manuel Bustamante Coronado
- Proyecto de Ley N° 13884/2005-CR de fecha viernes, 14 de octubre de 2005, presentada por el Congresista Mario Ochoa Vargas
- Proyecto de Ley N° 574/2006-CR de fecha martes, 31 de octubre de 2006, presentada por el Congresista Daniel Fernando Abugattás Majful
- Proyecto de Ley N° 00667/2006-CR de fecha martes, 14 de noviembre de 2006, presentada por el Congresista Edgardo Reymundo Mercado
- Proyecto de Ley N° 00679/2006-CR de fecha martes, 14 de noviembre de 2006, presentada por el Congresista Edgardo Reymundo Mercado
- Proyecto de Ley N° 00953/2006-CR de fecha lunes, 05 de febrero de 2007, presentada por el Congresista Mario Peña Angulo

- Proyecto de Ley N° 01019/2006-CR de fecha viernes, 09 de febrero de 2007, presentada por el Congresista Lourdes Alcorta Suero
- Proyecto de Ley N° 01082/2006-CR de fecha miércoles, 14 de marzo de 2007, presentada por el Congresista Víctor Ricardo Mayorga Miranda
- Proyecto de Ley N° 2415/2007-CR de fecha sábado, 19 de mayo de 2007, presentada por el Congresista José Macedo Sánchez
- Proyecto de Ley N° 1567/2007-CR de fecha jueves, 06 de septiembre de 2007.
- Proyecto de Ley N° 01801/2007-CR de fecha viernes, 26 de octubre de 2007, presentada por el Congresista Carlos Alberto Torres Caro
- Proyecto de Ley N° 1954/2007-CR de fecha jueves, 06 de diciembre de 2007, presentada por el Congresista Carlos Alberto Torres Caro
- Proyecto de Ley N° 2400/2007-CR de fecha jueves, 08 de mayo de 2008, presentada por el Congresista Edgardo Reymundo Mercado
- Proyecto de Ley N° 3711/2009-CR de fecha viernes, 27 de noviembre de 2009.
- Proyecto de Ley N° 4633/2010-CR de fecha miércoles, 26 de enero de 2011, presentada por el Congresista Álvaro Gutiérrez Cueva
- Proyecto de Ley N° 079/2011-CR de fecha lunes, 22 de agosto de 2011, presentada por el Congresista Carmen Omonte Durand
- Proyecto de Ley N° 00090/2011-CR de fecha martes, 23 de agosto de 2011, presentada por el Congresista Modesto Julca Jara y Renan Samuel Espinoza Rosales
- Proyecto de Ley N° 091/2011-CR de fecha martes, 23 de agosto de 2011, presentada por el Congresista Natalie Condori Jahuira
- Proyecto de Ley N° 00134/2011-CR de fecha jueves, 01 de septiembre de 2011, presentada por el Congresista Amado Romero Rodríguez
- Proyecto de Ley N° 133/2011-CR de fecha jueves, 01 de septiembre de 2011, presentada por el Congresista Amado Romero Rodríguez
- Proyecto de Ley N° 00151/2011-CR de fecha lunes, 05 de septiembre de 2011, presentada por el Congresista Jaime Rubén Valencia Quiroz
- Proyecto de Ley N° 150/2011-CR de fecha lunes, 05 de septiembre de 2011, presentada por el Congresista Jaime Rubén Valencia Quiroz
- Proyecto de Ley N° 00182/2011-CR de fecha martes, 13 de septiembre de 2011, presentada por el Congresista Heriberto Benítez Rivas
- Proyecto de Ley N° 00203/2011-CR de fecha miércoles, 14 de septiembre de 2011, presentada por el Congresista Javier Diez Canseco Cisneros
- Proyecto de Ley N° 238/2011-CR de fecha martes, 20 de septiembre de 2011
- Proyecto de Ley N° 00286/2011-CR de fecha martes, 04 de octubre de 2011, presentada por el Congresista César Elmer Yrupailla Montes

B. Legislación Comparada

1. Tratados

- Derecho procesal penal. Enjuiciamiento penal. Legislación.* Ed. Mc. Graw Hill, Madrid-España 1996.
- Derechos humanos. Recopilación de Instrumentos Internacionales. Cuadragésimo Aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos 1948-1988.* Centro de Derechos Humanos de Ginebra, Naciones Unidas. Nueva York, 1988.
- O'DONNELL, DANIEL:** *Protección internacional de los derechos humanos.* Ed. Comisión Andina de Juristas; ed. segunda; Lima-Perú (1989). p. 752.

GARCÍA CALDERÓN KOECHLIN, MANUEL: *Derecho internacional privado*. Imprenta de la U.N.M.S.M.; Lima-Perú, 1969.

LEGISLACION DE LAS NACIONES UNIDAS.-

IUS COGENS

Declaración Americana de los derechos y deberes del hombre

Declaración Universal de los derechos humanos

Declaración Universal sobre desapariciones forzadas

Principios relativos a las ejecuciones extra-judiciales naciones unidas.

PROCEDIMIENTOS ACEPTADOS O FIRMADOS O RATIFICADOS

Convención para la prevención y sanción del delito de genocidio (1948).

Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad (1968).

Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes (1984).

Convención interamericana sobre desapariciones forzadas de personas (....)-sólo esta firmada-.

Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales (1966).

Pacto internacional de derechos civiles y políticos (1966).

Convención americana sobre derechos humanos: "Pacto de San José de Costa Rica"- Perú lo ratificó el 28jul78, y la fecha de aceptación de la corte fue el 21 de enero de 1981.

CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN

2. Códigos vigentes

Código Penal Alemán, Emilio Eiranova Encinas (coord.). España: Ed. Marcial Pons.

Código Penal Argentino, de 1922 promulgado por El Decreto 3992 de 1984. Código penal de la nación argentina y legislación complementaria (Texto ordenado por decreto 3,992/84). Dirección Lima Quintana, Omar. Colaboración y compilación Alvarez, Adolfo. Ed. Ediar; Tucumán-Argentina (1985).

Código Penal de Austria, (Ley Federal sobre acciones sancionadas judicialmente con penas). Promulgado el 23 de enero de 1974.

Código Penal de Bolivia, promulgado el 23 de agosto de 1972 (D. Ley N° 10426 ó 14426. "La Gaiba" y el Juicio de Responsabilidades, modificaciones y actualizaciones de ley 2494 de 04 de agosto de 2003). Servando Serrano Torrico Edictor Autorizado. Ed. Serrano Ltda. Cochabamba-Bolivia.

Código Penal de Brasil, del 07 de diciembre de 1940 (Ley N° 2848): Código penal. Legislação Brasileira. Decreto-lei n° 2.848, de 7-12-1940, atualizadopelasleisns. 7.209, de 11-7-84 (nova redação dos arts. 1a 120), e 7.251, de 19-11-1984 (nova redação do art. 245 e parágrafos), acompanhado de Exposição de Motivos da nova Parte Geral, de Legislação Complementar especial e Índices Sistemático e Alfabético-Remissivo do Código Penal e Cronológico e Alfabético da Legislação Complementar. De Oliveira, Juarez. E d. Saraiva;e d. segunda; São Paulo-Brasil (1987). Este documento legislativo se encuentra traducido por Francisco Muñoz Conde en Derecho Penal y Criminología, Vol. IX-N° 32-33, 1987, Revista del Instituto de Ciencias Penales y Criminología de la Universidad Externado de Colombia, Librería el Profesional (pp. 111-114).

Código Penal de La República Popular China, de 1979. Parte general del Código penal de la República Popular China en su versión de 1997. Traducido por el profesor Francisco Muñoz Conde de la Universidad de Sevilla. Revisión del Código penal aprobado en la Segunda Sesión del 5° Congreso nacional del pueblo el 1 de julio de 1979, realizada por la nueva dirección del Partido Comunista, en la 5ª Sesión del VIII. Congreso Nacional del Pueblo el 14 de marzo de 1997, promulgada por Orden n° 83 del

- Presidente de la República China también el 14 de marzo de ese año, entrando en vigor en esa misma fecha.
- Código Penal Colombiano*, De 24 de julio de 2000. (Ley 599 de 2000) --- (Vallejo, 2011)
- Código Penal Chileno*, (Publicado el 12 de noviembre de 1874. Vigente desde 1 de marzo de 1875. Actualizado con la Ley 19617) (Código Penal. Edición oficial, 1999)
- Código Penal de Costa Rica*, de 1970 (Ley N° 4573, con las modificaciones del 2007). Penal (con índice alfabético y declaraciones de inconstitucionalidad). Ed. Porvenir S.A.; ed. décima; San José-Costa Rica (1994).
- Código Penal Cubano*, de 1988 (Ley N° 62 del 30-12-87).
- Código Penal de Ecuador*, de 22 Enero de 1971. Código penal del Ecuador: Códigos- penal- ejecución de Penas. (Vol. 1). Ed. Corporación de Estudios y Publicaciones; ed. 34 ª; Quito - Ecuador (Actualizado a Septiembre, 1992).
- Código Penal de El Salvador*, de 1997, de 26 de abril de 1997 (Decreto Legislativo N° 1030, Reformas: Decreto Legislativo No. 310 de fecha 24 de marzo de 2010)
- Código Penal de España* De 23 de noviembre de 1995 (25444 Ley Orgánica 10/1995) (García, 2011). Publicado en el Boletín Oficial del Estado N° 281, el día 24 de noviembre de 1995. pp. 33987 al 34058. Ley Orgánica 5/2000, De 12 De Enero (Jefatura Del Estado), Reguladora De La Responsabilidad Penal De Los Menores
- Código Penal de Estonia*, de 2002 de la Traducción Del Ingles. Publicado el 06 de junio 2001, entro en vigencia el 1 de septiembre del 2002.
- Código Penal de Francia*, (Ley n° 92-683 del 22 de Julio de 1992 (portando las reformas de las disposiciones generales del Código penal) El Código Penal francés no fue aprobado por una única ley, si no por varias: Las Leyes núm. 92-683 (Libro I), 92-684 (Libro II), 95-685 (Libro III), 92-686 (Libro IV), todas ellas de 22 de julio de 1992, La Ley núm. 92-1336, de 16 de diciembre de 1992 (conocida como “Ley de Adaptación”, y además varios Decretos del concejo de Estado, entre los que destaca el núm. 93-726, de 29 de marzo de 1993. (Carlo Aránguez Sánchez, 2003) (entró en vigencia el 1° de marzo de 1994).
- Código Penal para el Gran Ducado de Toscana*, (Dado en Florencia a los 20 días del mes de junio de 1854). Programa de derecho criminal. Parte general (volumen 10). Ed. Temis; ed. Tercera reimpresia; Bogotá-Colombia (1978). Tít. Orig.: Programma del corso di diritto criminale de ttatonella Regia Universita di Pisa ; ed. Se tuvieron en cuenta las ediciones italianas, quinta de Lucca, sexta de Firenze, y sétima de Lucca. Trad.: José J. Ortega Torres y Jorge Guerrero, (a partir de la p. 338).
- Código Penal de Guatemala*, de 5 de Junio de 1973 (Decreto N° 17-73 y todas sus reformas incluidas) (Código Penal, 1996b)
- Código Penal De Honduras*, De 1983 (Decreto N° 144-83)
- Código Penal Italiano*, vigente desde el 1° de Julio de 1931. Modificado por Ley N° 251, de 05 De diciembre de 2005, publicado en el Diario Oficial N° 285 de 07 de diciembre de 2005. Codicepenale. Ed. Esselibri-Simone; Napoli-Italia (1995).
- Código Penal Japonés*, de 24 de abril de 1907 (Ley Nro. 45) (Vílchez, 1999)
- Código Penal de México para el D.F. - (Législación Penal D.F. y Federal, 2005)*. Ed. PORRUA; ed. 51ª, México D.F.-México, 1993.
- Código Penal de Nicaragua*, del 2007 (LEY N° 641)
- Código Penal De Panamá*, del 2007 (Ley N° 14 de 2007 y adiciones introducidas por la Ley 26 de 2008, la Ley 5 de 2009, la Ley 68 del 2009 y la Ley 14 de 2010)
- Código Penal de Paraguay*, de 1997 (Ley N° 1160)
- Código Penal de Portugal*, del 23 de septiembre de 1982 (Decreto Ley N° 400/82):
- Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico*, del 18 de junio de 2004 (Ley N° 149)
- Código Penal de la República Dominicana*, promulgado por decreto del 20 de agosto de 1884. Actualizado por la Comisión nombrada mediante Decreto N° 826 del 26 de febrero de 1983 del Presidente de la República Dr. Salvador Jorge Blanco con ocasión de los actos conmemorativos del Centenario de la

adopción en el país de los Códigos Franceses. (Modificado por la ley N° 12-07 del 05 de enero del 2007, promulgada por el poder ejecutivo de fecha 24 de enero del 2007). Ed. Onap; Santo Domingo- República Dominicana (1984).

Código Penal de la Federación Rusa, traducido por Viviana Natalia Saravia Bonifacio. (1996) Aprobada por la Duma del Estado el 24 de Mayo de 1996 y confirmada por el Consejo de la Federación el 5 de Junio de 1996.

Código Penal de Suecia, Ds.1999:36. El Código Penal de Suecia fue adoptado en 1962 y entró en vigor el 1 de enero de 1965.

Código Penal De Suiza, Código Penal suizo, de 21 de diciembre de 1937 (Situación al 1 de enero de 2012).

Código Penal de Uruguay, promulgado por Ley 9,155

Código Penal Tipo para Latinoamérica, (Publicado bajo la dirección del Profesor Gissolía, Ed. Jurídica de Chile, Año 1974 Abril, Santiago de Chile).

*Código Penal para el Reino de Baviera de 1813*⁵³⁷. Promulgado por el Rey Maximiliano José en Múnich, el 16 de mayo de 1813.

Código de Hammurabi

Código de Derecho Canónico, del año 1983.

Convención Interamericana contra la corrupción.

La Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción

3. Códigos derogados

Código Penal alemán, de 1870 (Derogado)

Código Contravencional De La Ciudad De Buenos Aires, Promulgado el día 25 de octubre de 2004

Código Penal de Brasil, de 7 de Diciembre de 1940 (Decreto ley 2848, Reformado por Ley N° 7209 del 11.7.1984)

Texto original del Código Penal de Brasil, promulgado por Decreto lei 2848, De 7 de Dezembro de 1940 (Con las modificatorias introducidas por la lei 6416, del 24 de mayo de 1977) Derogado.

Código Penal del Brasil, de 1969 (Decreto lei 1004, de 21 de Outubro de 1969. *Todavía está en suspenso su entrada en vigencia.

Código de Procedimiento Penal de Colombia, promulgado por Ley 906 de 2004.

Código Penal colombiano, de 1980 (Decreto Número 100 de 1980, del 23 de enero de 1980). *Código Penal de Colombia*, Código de procedimiento penal. De Luis César Pereira Monsalve. E d. Poligráficas; e d. actualización de Febrero de 1995; Medellín-Colombia (1995).

Código penal chileno, Edición Oficial. Aprobado por Decreto N° 531, de 24 de marzo de 1994, del Ministerio de Justicia. Cuenta con un apéndice actualizado a enero de 1995. Ed. Jurídica de Chile; ed. decimocuarta; Santiago de Chile-Chile (1995).

Código Procesal Penal de Chile

Código Penal de Cuba, (Ley 21 Código Penal, hoy ya derogado).

Código penal de Cuba, el nuevo código penal cubano. Legislación extranjera. Por Serrano -Gomez, Alfonso (Quien hace una reseña). En Doctrina Penal, Teoría y Práctica de las Ciencias Penales. Año N° 14, Buenos Aires-Argentina, 1991-A. pp. 229 a 321.

Código penal del Ecuador, Códigos- penal- ejecución de Penas. (Vol. 1). Ed. Corporación de Estudios y Publicaciones; ed. 34 ª; Quito - Ecuador (Actualizado a Septiembre, 1992).

Código Penal español, (Texto refundido de 1983 -hoy derogado).(Alfonzo Arroyo de las Heras, 1994). Código penal. N° 2 de la colección. Abrogado Con concordancias y notas a cargo de Arroyo de las Heras, Alfonso y Muñoz Cuesta, José. E d. Aranzadi; ed. actualizada a setiembre de 1994, Navarra (Pamplona)-España.

⁵³⁷ Promulgado por el Rey Maximiliano José en Múnich, el 16 de mayo de 1813.

- Código de Instrucción Criminal francés*, del año 1810
- Código Penal italiano*, de 1889 (Derogado).
- Código Penal de México Federal de 1993*, Código Penal para el distrito federal.
- Código Penal de Panamá*, código penal de panamá, procedimiento penal, instituciones de garantías y ley 23 de 30 de diciembre de 1986) Ed. Pérez y Pérez S.A.; 1987.
- Código Penal de Portugal*, reseña del código penal de Portugal. En *Doctrina Penal, Teoría y Práctica de las Ciencias Penales*. Año N° 9, Buenos Aires-Argentina. (Nelson R. Pessoa). Trans. 1986. pp. 183 a 299
- Código Penal de Puerto Rico*, vigente desde el 22 de enero de 1975 (Peña, 1994)
- Código penal de Puerto Rico y leyes especiales usuales*. Ed. Forum; estudio preliminar y edición a cargo de Jaime E. Granados Peña. Impreso en Santa Fe de Bogotá-Colombia (1994).
- Código Penal Modelo. (Apéndice; Texto en español de la Parte General del C. P. M. [*]) Puerto Rico.- Ernesto Chiesa Aponte y Jaime E. Granados Peña. Trans.). En *Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales*. Tomo XLVI, Fascículo Y, Enero-Abril, MCMXCIII; Madrid-España. pp. 223 a 235.
- Código Penal de suiza*, del 21 de diciembre 1937
- Código penal suizo*, Code pénal suisse. Edité par la Chancellerie fédérale, 1988.
- Código de derecho canónico y legislación complementaria*, texto latino y versión castellana. Lorenzo Miguelez D., Sabino Alonso Moran y Marcelino Cabrereros De Anta. Con el prólogo de José López Ortiz. Ed. católica, ed. sexta. Madrid-España -MCMLVII- España 1957.

4. Proyectos

- Proyecto alternativo alemán de 1966
- Proyecto alemán de 1962
- Proyecto de reforma de la parte general del código penal. Por Arnedo, Miguel Angel. En *Doctrina Penal, Teoría y Práctica de las Ciencias Penales*. Año N° 11, Buenos Aires-Argentina, 1988. (p. 145 a 169).
- Proyecto de reformas de la Parte General del C.P. de Argentina de 1987. Por Miguel Angel Arnedo.
- Parte general del Proyecto de Código Penal para la República argentina 1937. Elaborado por los Doctores Jorge Eduardo Coll y Eusebio Gómez. (Véase el apéndice del tratado de derecho penal de Eusebio Gómez (pp. 724-727).
- Parte general del proyecto de código penal de 1906. Véase el apéndice de derecho argentino de Rodolfo Rivarola (pp. 633-634).
- Código penal chileno: Código penal (República de Chile). Edición Oficial. Aprobado por Decreto N° 531, de 24 de marzo de 1994, del Ministerio de Justicia. Cuenta con un apéndice actualizado a enero de 1995. Ed. Jurídico de Chile; ed. decimocuarta; Santiago de Chile-Chile (1995).
- Proyecto alternativo de código penal de 1966. Véase Bustos Ramírez, *Derecho penal latinoamericano comparado*,
- Proyecto de 1962. Véase Bustos Ramírez, *Derecho Penal Latinoamericano Comparado*, Pp. 741-743. (Es De Chile).
- Proyecto De Código Orgánico Integral Penal del Ecuador. (2010-2011).
- Proyecto de Código de Procedimiento Penal (Dr. Walter Guerrero Vivanco, Presidente 1992 Quito – Ecuador, Corte Suprema de Justicia).
- Proyecto de Código Penal de El Salvador Corte Suprema de Justicia. República de El Salvador, 1994 (Proyecto de Código Penal, 1994).
- Proyecto de Ley Orgánica del Código Penal. Ministerio de Justicia, Secretaria General de Publicaciones 1992. Madrid-España.
- Proyecto alternativo de la parte general del código penal para España. Presentada por el Grupo Parlamentario Comunista como artículo primero de la enmienda a la totalidad al Proyecto de L.O. de Reforma parcial del

C.P. de 26 de febrero de 1982, elaborado por MIR PUIG, SANTIAGO y MUÑOZ CONDE, FRANCISCO. En Cuadernos de Política Criminal, N° 18.

Proyecto preliminar de código penal para los delitos (Proyecto Ferri de 1921). Véase Enrique Ferri, principios de derecho criminal (pp. 767-770).

Proyecto de Código Penal Federal Suizo de 1918. (Proyecto de 1918): Está traducido, pero no se precisa la fuente.

5. Anteproyectos

Anteproyecto de reforma al código penal de bolivia parte general de los años 2008 y 2009.

Anteproyecto de Código Orgánico de Garantías Penales para la República del Ecuador del 09 de marzo del 2009

Propuesta de Anteproyecto del nuevo Código Penal de 1984. Ed. Ministerio de Justicia, Secretaría General Técnica. Madrid-España (1984).

El Anteproyecto de Código Penal sueco de 1916. Estudio crítico seguido del texto íntegro de la Parte General del Anteproyecto, traducido directamente del sueco. Trad. LUÍS JIMÉNEZ DE ASÚA. Ed. Hijos de Reus. Madrid-España (1917).

Anteproyecto para suiza de 1916. Avant-projet de code pénal suisse. Texte adopté par la deuxième commission d'experts. October 1916 (bilingüe, en francés y alemán).

V. Jurisprudencia y Plenos Jurisdiccionales

A. Jurisprudencia

1. Nacional

- * Ejecutorias de la corte suprema en materia penal (contiene dictamen fiscal, sumillado, concordado e índices analítico alfabético).- Volumen I. Por Ramos Bohorquez, Miguel. E d. Berrio, e d. primera (no oficial). Lima-Perú (1995). pp. 462.
- * Jurisprudencia peruana. Poder judicial, consejo ejecutivo (Índice. Ejecutorias-Resoluciones 1984 a 1994). Ed. Normas Legales, Trujillo-Perú (1994). pp. 239.
- * Jurisprudencia penal II (corte superior de justicia). Ed. Cultural Cuzco. Lima-Perú (1988). pp. 451.
- * Anales judiciales de la corte suprema de justicia de la república. Año judicial 1990. Tomo LXXVIII. Publicación oficial. Lima-Perú (1993). pp. 196.
- * Anales judiciales de la corte suprema de justicia de la república. Año judicial 1991. Tomo LXXIX. Publicación oficial. Lima-Perú (1993).
- * Repertorio de jurisprudencia penal. Por Andía Chávez, Juan. E d. Grijley, Lima-Perú (1996). pp. 272.
- * Jurisprudencia penal I. Ed. Normas legales; Trujillo-Perú (1994). p. 309.
- * Jurisprudencia Nacional. Código Procesal Penal. Decreto Legislativo N° 597. Por Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Comisión especial de implementación del Código Procesal Penal. Tomo I. Ed. Corrección Reforma. Enero (2012).

CASO: Núñez Barriga, Carlos Felix Vs. Estado Peruano

EXP. 00091-2011-2-1826-JR-PE-01

Sala Superior de Justicia de Lima

Jueces: Castañeda Otsu, Salinas Siccha, Maita Dorregaray

CASO: Segundo Gumerindo Gonzales Polo Vs. Dennys Diego Guzmán Mendoza

EXP. 4430-2008-19

Sala Superior de Justicia de La Libertad

Juez: Giammpol Taboada Pilco

CASO: Adolfo Quispe Yujra Vs. Dirección Sub Regional de Transportes de Apurímac

R.N. N° 89-2009-APURIMAC

Corte Suprema de Justicia de la República

Fecha: 5 de abril de 2010

CASO: Isidro Pedro Andamayo Milián Vs. Eiclides Amilcar Flores Caballero

R.N. N° 65-2009-CAJAMARCA

Corte Suprema de Justicia de la República

Fecha: 9 de abril de 2010 (MENTIONADA SÓLO EN ANEXO-NO TESIS)

CASO: Gaudencio Huamán Carrasco

R.N. N° 2860-2006-Ancash

Corte Suprema de Justicia de la República

Fecha: 13 de octubre de 2006

CASO: Morales Bermudez

EXTRADICCIÓN PASIVA N° 23-2012

Corte Suprema de justicia de la República

Fecha: 15 de marzo de 2012 (menciona en la tesis-no en anexo)

B. Plenos Jurisdiccionales**1. Nacional**

Plenos Jurisdiccional 116-2011

Plenos Jurisdiccional 116-2010

Plenos Jurisdiccional 116-2009

Plenos Jurisdiccional 116-2008

Plenos Jurisdiccional 116 06-2007

Plenos Jurisdiccional 116 09-2007

Plenos Jurisdiccional 116 09-2005

Plenos 1999

Plenos 1998

Plenos 1997

Acuerdo Plenario 5/97

2. Extranjera**VI. Resoluciones expedidas por el Tribunal Constitucional**

Sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N° 0795-2002-AA/TC, de fecha miércoles, 29 de enero de 2003, aprobada por unanimidad.

Sentencia del Tribunal Constitucional EPX. N° 552-2003-HC/TC, de fecha jueves, 10 de abril de 2003, aprobada por unanimidad.

Sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N° 016-2002-AI/TC, de fecha miércoles, 30 de abril de 2003, aprobada por unanimidad.

Sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N° 2209-2002-AA/TC, de fecha lunes, 12 de mayo de 2003, aprobada por unanimidad.

Sentencia del Tribunal Constitucional EPX. N° 2488-2002-HC/TC, de fecha jueves, 18 de marzo de 2004, aprobada por unanimidad.

- Sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N° 0023-20031-AI/TC, de fecha miércoles, 09 de junio de 2004, aprobada por unanimidad.
- Sentencia del Tribunal Constitucional EPX. N° 2798-2004-HC/TC, de fecha jueves, 09 de diciembre de 2004, aprobada por unanimidad.
- Sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N° 962-2005-PHC/TC, de fecha jueves, 17 de marzo de 2005, aprobada por unanimidad.
- 1 Sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N° 1805-2005-HC/TC, de fecha viernes, 29 de abril de 2005, aprobada por unanimidad.
- 2 Sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N° 4118-2004-HC/TC, de fecha lunes, 06 de junio de 2005, aprobada por unanimidad.
- 3 Sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N° 2522-2005-PHC/TC, de fecha jueves, 09 de junio de 2005, aprobada por unanimidad.
- Sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N° 2305-2004-HC/TC, de fecha viernes, 01 de julio de 2005, aprobada por unanimidad.
- Sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N° 7451-2005-PHC/TC, de fecha lunes, 17 de octubre de 2005, aprobada por unanimidad.
- Sentencia del Tribunal Constitucional EPX. N° 4587-2004-AA/TC, de fecha martes, 29 de noviembre de 2005, aprobada por decisión dividida, con el voto singular del magistrado Vergara Gotelli.
- Sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N° 0004-2006-PI/TC, de fecha miércoles, 29 de marzo de 2006, aprobada por unanimidad.
- Sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N° 047-2004-AI/TC, de fecha lunes, 24 de abril de 2006, aprobada por unanimidad.
- 4 Sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N° 2466-2006-PHC/TC, de fecha lunes, 17 de julio de 2006, aprobada por unanimidad.
- 5 Sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N° 4900-2006-PHC/TC, de fecha lunes, 05 de febrero de 2007, aprobada por unanimidad.
- Sentencia del Tribunal Constitucional EPX. N° 679-2005-PA/TC, de fecha viernes, 02 de marzo de 2007, aprobada por unanimidad.
- 6 Sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N° 0026-2006-PI/TC, de fecha jueves, 08 de marzo de 2007, aprobada por decisión dividida, con el voto singular del magistrado Alva Orlandini.
- 7 Sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N° 6714-2006-PHC/TC, de fecha viernes, 23 de marzo de 2007, aprobada por unanimidad.
- 8 Sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N° 9291-2006-PHC/TC, de fecha martes, 27 de marzo de 2007, aprobada por unanimidad.
- 9 Sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N° 0331-2007-PHC/TC, de fecha viernes, 30 de marzo de 2007, aprobada por unanimidad.
- 10 Sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N° 2506-2005-PHC/TC, de fecha lunes, 02 de julio de 2007, aprobada por unanimidad.
- 11 Sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N° 10302-2006-PHC/TC, de fecha sábado, 09 de agosto de 2008, aprobada por decisión dividida, con los votos singulares de los magistrados Vergara Gotelli y Gonzales Ojeda.
- 12 Sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N° 0616-2008-HC/TC, de fecha lunes, 08 de septiembre de 2008, aprobada por unanimidad.
- 13 Sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N° 02203-2008-PHC/TC, de fecha viernes, 12 de septiembre de 2008, aprobada por unanimidad.
- 14 Sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N° 6063-2006-HC/TC, de fecha domingo, 19 de octubre de 2008, aprobada por unanimidad.
- Sentencia del Tribunal Constitucional EPX. N° 2320-2008-PHC/TC, de fecha lunes, 05 de enero de 2009, aprobada por unanimidad.

- Sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N° 2593-2006-PHC/TC, de fecha lunes, 05 de enero de 2009, aprobada por unanimidad.
- 15 Sentencia del Tribunal Constitucional EPX. N° 3523-2008-PHC/TC, de fecha miércoles, 07 de enero de 2009, aprobada por unanimidad.
- 16 Sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N° 174-2009-PHC, de fecha lunes, 06 de abril de 2009, aprobada por unanimidad.
- Sentencia del Tribunal Constitucional EPX. N° 872-2009-PHC/TC, de fecha martes, 05 de mayo de 2009, aprobada por unanimidad.
- 17 Sentencia del Tribunal Constitucional EPX. N° 4959-2008-PHC/TC, de fecha martes, 01 de septiembre de 2009, aprobada por unanimidad.
- Sentencia del Tribunal Constitucional EPX. N° 2857-2009-PHC/TC, de fecha jueves, 03 de diciembre de 2009, aprobada por unanimidad. (en anexo pero no en tesis)
- 18 Sentencia del Tribunal Constitucional EPX. N° 5048-2009-PHC/TC, de fecha viernes, 04 de diciembre de 2009, aprobada por unanimidad.
- Sentencia del Tribunal Constitucional EPX. N° 4352-2009-PHC/TC, de fecha jueves, 18 de marzo de 2010, aprobada por unanimidad.(en anexo pero no en tesis)
- 19 Sentencia del Tribunal Constitucional EPX. N° 0018-2009-PI/TC, de fecha martes, 23 de marzo de 2010, aprobada por decisión dividida, con los votos singulares de los magistrados Vergara Gotelli y Calle Hayen.
- Sentencia del Tribunal Constitucional EPX. N° 1279-2010-PHC/TC, de fecha lunes, 18 de octubre de 2010, aprobada por unanimidad. (en anexo pero no en tesis)
- Sentencia del Tribunal Constitucional EPX. N° 00021-2010-PHC/TC, de fecha jueves, 21 de octubre de 2010, aprobada por unanimidad.
- 20 Sentencia del Tribunal Constitucional EPX. N° 218-2009-PHC/TC, de fecha jueves, 11 de noviembre de 2010, aprobada por decisión dividida, con los votos singulares de los magistrados Beaumont Callirgos, Vergara Gotelli y Álvarez Miranda.
- 21 Sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N° 03329-2010-PHC/TC, de fecha lunes, 22 de noviembre de 2010, aprobada por unanimidad.
- 22 Sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N° 05922-2009-PHC/TC, de fecha lunes, 29 de noviembre de 2010, aprobada por unanimidad.
- 23 Sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N° 0024-2010-PI/TC, de fecha lunes, 21 de marzo de 2011, aprobada por decisión dividida, con los votos singulares de los magistrados Álvarez Miranda, Vergara Gotelli y Calle Hayen.
- 24 Sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N° 03693-2008-PHC/TC, de fecha jueves, 05 de mayo de 2011, aprobada por unanimidad.
- Sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N° 00849-2011-PHC/TC, de fecha jueves, 09 de junio de 2011, aprobada por unanimidad.
- Sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N° 03019-2011-PHC/TC, de fecha lunes, 26 de septiembre de 2011, aprobada por unanimidad.
- Sentencia del Tribunal Constitucional EPX. N° 3711-2011-PHC/TC, de fecha miércoles, 19 de octubre de 2011, aprobada por unanimidad.
- Sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N° 03891-2011-PA/TC, de fecha lunes, 16 de enero de 2012, aprobada por decisión dividida, con el voto singular del magistrado Vergara Gotelli.
- Sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N° 03681-2010-PHC/TC, de fecha martes, 22 de mayo de 2012, que con el voto del magistrado Fernando Calle Hayen recién hubo mayoría conjuntamente con los magistrados Urviola Hani, Vergara Gotelli y Beaumont Callirgos; y con el voto singular de minoría del magistrados Álvarez Miranda, Mesía Ramírez y Eto Cruz.
- 26 Sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N° 8595-2006 PHC/TC, de fecha jueves, 23 de febrero de 2006, aprobada por unanimidad.

Sentencia del Tribunal Constitucional N° EXP. N° 3509-2009 PHC/TC, de fecha lunes, 19 de octubre de 2009, aprobada por unanimidad.

Sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N° 03173-2008 PHC/TC, de fecha Jueves, 11 de diciembre de 2008 , aprobada por decisión dividida, con el voto singular de los magistrados Beaumont Callirgos y Landa Arroyo.

27Sentencia del Tribunal Constitucional EXP. 5890 – 2006 PHC/TC, de fecha martes, 11 de setiembre de 2006, aprobada por unanimidad.

28Sentencia del Tribunal Constitucional EXP. 0014 – 2006 PI/TC, de fecha viernes, 19 de enero de 2007, aprobada por unanimidad.

29Sentencia del Tribunal Constitucional EXP. 5068-2006-PHC/TC de fecha jueves, 15 de noviembre de 2006, aprobada por unanimidad.

VII. Resoluciones de casos relevantes

1. CASO: Genaro Parker
EXP. 0023-2001
Corte Superior de justicia de Lima
Fecha: 08 de abril del 2003
2. CASO: Lucchetti
R. N. N° 4166-2004
Corte Suprema de justicia de la República
Fecha: 27 de abril del 2005
- 2.1. CASO: Luksic Craig
H.C. 74-05
Corte Superior de justicia de Lima
Fecha: 31 de octubre de 2005
- 2.2. CASO: Luksic Craig
R. N. N° 4166-2004
Corte Suprema de justicia de la República
Fecha: 27 de abril de 2005
3. CASO: Diomisio Romero Seminario
INC. N° 014-01-G
Corte Superior de Justicia de Lima
Fecha: 31 de octubre de 2005
4. CASO: Manuel Hugo Delgado Parker
R. N. N° 3786-2005
Corte Suprema de justicia de la República
Fecha: 27 de julio de 2007
5. CASO: Alan García
Asuntos varios N°. 21-92

Sala penal especial
Fecha: 26 de diciembre de 2000

6. CASO: Alan García
EXP.: 21-92
Sala Penal Especial de la Corte Suprema
Fecha: 4 de abril de 1997
7. CASO: Aquiles Huamancaja Ramos y otros
CONSULTA EXP. N° 1354-2010
Corte Suprema de justicia de la República - Sala de Derecho Constitucional y Social
Permanente
Fecha: 22 de junio de 2010
8. CASO: Consuelo García Naranjo
EXP.: 11190-1997
Corte Superior de justicia de Lima
Fecha: 06 de enero de 2012
9. CASO: Enrique Crousillat
R. N. N° 2674-2004
Corte Suprema de justicia de la República
Fecha: 9 de junio de 2005
10. CASO: Mobotek
EXP. N°: 20-2003-A.V.
Sala Penal Especial de la Corte Suprema
Fecha: 18 de octubre de 2005
11. CASO: BTR
EXP.N°: 99-09 (527-09)
Segunda Sala Especializada en lo Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima
Fecha: 23 de marzo de 2012

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS°

(Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA)

ESCUELA DE POST GRADO

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA

UNIDAD DE POST GRADO



TESIS

**«LA PRESCRIPCIÓN PENAL EN EL PERÚ (A
VEINTE AÑOS DE VIGENCIA DEL CÓDIGO
PENAL DE 1991)»**

TOMO II

(PROFESOR ASESOR: Dr. PABLO SANCHEZ VELARDE)

PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE
MAGISTER EN DERECHO CON MENCIÓN EN
CIENCIAS PENALES

PRESENTADA POR EL BACHILLER:

ALEXEI DANTE SÁENZ TORRES

LIMA, 2012

ANEXOS

**ANEXO 1: TEXTOS DE LOS
PROYECTOS, ANTEPROYECTOS,
CÓDIGOS Y LEYES DEROGADOS Y
VIGENTES EN LA LEGISLACIÓN
NACIONAL.**

ANEXO 1: TEXTOS DE LOS PROYECTOS, ANTEPROYECTOS, CÓDIGOS Y LEYES DEROGADAS Y VIGENTES EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL⁵³⁸.

I. LEGISLACIÓN NACIONAL

A. LEGISLACIÓN PENAL COMÚN

1. El Proyecto de Manuel Lorenzo de Vidaurre de 1828.-

Leyes Generales en el Código Criminal

Ley 31. Los crímenes no reiterados prescriben a los tres años: los atrocismos a los diez: la acción civil a los veinte: no hay prescripción, si hubo sumaria por acusación o delacion.

2. Código Penal de Santa Cruz del Estado Sur-Peruano.-

LIBRO PRIMERO

TÍTULO II

CAPÍTULO V: DE LA PRESCRIPCIÓN DE LAS PENAS Y DE LA SATISFACCIÓN, Y DEL ASILO DE LOS EXTRANJEROS EN EL ESTADO

Artículo 103.- La prescripción de las penas y de la satisfacción a que son responsables los delincuentes, es la extinción del derecho que concede la ley (sic) para acusarlos o denunciarlos, y para exigir (sic) de ellos la reparación de los daños que hubieren causado con su delito o culpa. Para los reos ausentes o rebeldes o para los prófugos, la prescripción de las penas es el olvido y perdón de ellas.

Artículo 104.- Las penas y la satisfacción se prescriben en los términos siguientes: por los delitos de injurias en treinta días pasados desde el día en que se hubieren cometido, o en que hubieren llegado a noticia del injuriado: por los delitos que comprenden los capítulos de desacato de los hijos y de los menores de edad a sus padres, tutores, curadores o parientes a cuyo cargo estuvieren, de desavenencias y escándalos en los matrimonios, y de los adulterios en el término de un año, corrido desde el día de la perpetración del delito: por los delitos que no merezcan pena corporal, ni infamia, ni privación de empleo, ni inhabilitación para ejercer profesión o cargo público, en tres años contados desde el día de su perpetración; y por los delitos o culpas mas graves, que no sean de los funcionarios públicos, en ocho años, corridos desde el día en que se cometieron. Si además de estas merecieren pena corporal o de infamia, las prescribirán en el mismo término que los demás delincuentes que por sus delitos las merezcan.

Artículo 105.- Estos términos son fatales y corren de momento a momento, y se interrumpen: 1° Por que en su curso se hubiere intentado la acusación o la denuncia conforme a las leyes. 2° Por que en su curso y antes de haberse cumplido el término respectivo, se cometa cualquier otro delito o culpa. La interrupción de los términos interrumpe también la prescripción de las penas y de la satisfacción; y empezarán a contarse en el primer caso de este artículo, desde que se hubiere abandonado todo procedimiento criminal, y en el segundo desde la fecha del segundo delito o culpa. La demanda civil por la satisfacción no interrumpe la prescripción de las penas.

Artículo 106.- Los reos a quienes se hubiese absuelto del juicio conforme a las leyes de Procedimientos, empezarán a prescribir las penas y la satisfacción, por los delitos o culpas de que fueren juzgados, desde el día en que se les hubiese notificado la sentencia de su absolución. El término para estos será la mitad de los designados en este capítulo en los casos respectivos. Los reos que sean absueltos definitivamente prescriben la pena y la satisfacción desde el acto en que se les notifique la sentencia de absolución que cause ejecutoria,

⁵³⁸ Es necesario precisar qué criterio ordenador de los documentos nacionales códigos, proyectos, anteproyectos y otros, es el cronológico con la indicación que va de los más antiguos a los más recientes.

de manera que desde este momento no pueden ser juzgados por el mismo delito o culpa de que han sido absueltos.

Artículo 107.- El reo condenado por sentencia final, aunque sea en ausencia y rebeldía, y el que notificado de ella y antes de sufrir la pena, o después de empezar a sufrirla fugare sin cometer otro delito, aunque no prescriba la satisfacción, prescribe sin embargo las penas a que fue condenado en términos duplos de los asignados respectivamente en este capítulo; siempre que en el curso de dichos términos no hubiese cometido otro delito o culpa cualquiera, y que además acredite haber tenido desde la perpetración del delito por el que fue juzgado, o desde su fuga, una conducta constantemente honrada. Los reos comprendidos en este artículo que hubiesen sido juzgados o condenados por delitos que merezcan pena corporal o de infamia, y que en los términos respectivos las hubiesen prescrito, no podrán ejercer sin embargo los derechos de ciudadanía, sin conseguir la rehabilitación y sin que esta se publique conforme a las leyes.

Artículo 108.- Toda persona, sin distinción de clase ni de fuero, tiene el derecho de prescribir las penas y la satisfacción, en los términos y con los requisitos prevenidos en este capítulo.

3. Código Penal del Perú de 1863.-

LIBRO I: DE LOS DELITOS, DE LOS DELINCUENTES Y DE LAS PENAS EN GENERAL

SECCIÓN VII: DE LA PRESCRIPCIÓN EN MATERIA PENAL

Artículo 95.- El derecho de acusar prescribe:

1. Por delitos que merecen pena de muerte, a los ocho años.
2. Por delitos que merezcan penitenciaría o cárcel a los cinco años;
3. Por los demás delitos en que el Ministerio fiscal tiene obligación de acusar los tres años;
4. Por los delitos en que no debe intervenir el Ministerio fiscal, a los cien días entre presentes y al año entre ausentes;
5. Por las faltas a los treinta días.

Artículo 96.- La pena de muerte prescribe a los diez y ocho años.

Las otras penas, por un tiempo igual al de la condena, con el aumento de dos años.

Las penas aplicadas por las faltas, a los seis meses.

La multa, a los cinco años.

Artículo 97.- El término de la prescripción comienza a contarse: para las acusaciones desde el día en que se comete el delito; para las penas desde que se interrumpe su ejecución.

Si antes de vencido el término comete el reo otro delito de la misma especie, o que merezca igual o mayor pena, la prescripción queda sin efecto.

Artículo 98.- La acción que procede de la responsabilidad civil, por delitos o faltas, prescribe a los diez años entre presentes y a los veinte entre los ausentes.

En caso de muerte del responsable se observará lo dispuesto en el artículo 93.”

4. Los Ante-proyectos de 1877 y 1900-1902.

4.1.- Ante-proyecto de 1877

LIBRO I: DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LOS DELITOS Y LAS FALTAS, LAS PERSONAS RESPONSABLES Y LAS PENAS

TÍTULO III: DE LAS PENAS

CAPÍTULO XI: DE LA EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL

Artículo 109.- La responsabilidad penal se extingue:

1. Por el cumplimiento de la condena;
2. Por la amnistía que extingue la pena y todos sus efectos;
3. Por indulto;
4. Por el perdón de la persona agraviada, en aquellos casos que no dan lugar al procedimiento de oficio.
5. Por la prescripción del delito;
6. Por la prescripción de la pena.

Artículo 110.- Los delitos prescriben a los quince años, cuando la pena que la ley les señala es la de penitenciaría por veinte años.

A los diez años, en los demás casos en que la ley dispone pena de penitenciaría en cualquier grado.

A los cinco años, en todos los demás delitos en que el ministerio fiscal tiene obligación de acusar.

A los dos años, en los casos en que según la ley no puede procederse de oficio.

Las faltas prescriben a los dos meses.

Artículo 111.- El término de la prescripción comenzará a correr desde el día en que se cometió el delito; y si no fuese conocido entonces desde que se descubra y se inicie el juicio para el descubrimiento del hecho y de su autor.

Esta prescripción se interrumpirá desde que el procedimiento se dirija contra el culpable, volviendo a correr de nuevo desde que el referido procedimiento termine sin ser condenado el reo, o se paralice por otra circunstancia.

Artículo 112.- La ejecución de las penas impuestas por sentencias ejecutoriadas prescribe:

1. La de penitenciaría en cualquier grado y caso por un tiempo igual al de la condena con el aumento de dos años.
2. Las demás penas por un tiempo igual al de su duración con el aumento de un año.
3. Las penas por faltas a los seis meses.
4. La multa, como pena accesorio, por el mismo tiempo que la pena principal; y cuando sea única a los cinco años.

Artículo 113.- El término de la prescripción comenzará a correr desde el día en que se notifique al reo la sentencia ejecutoriada en que se le ha impuesto la pena, o desde el quebrantamiento de la condena si hubiera comenzado a cumplirse ésta.

Artículo 114.- Se interrumpirá la prescripción:

1. Cuando el reo se presente o sea habido;
2. Cuando cometiere el culpable un nuevo delito antes de cumplirse el término de la prescripción que estaba corriendo.

Artículo 115.- La responsabilidad civil se extingue del mismo modo que las demás obligaciones regidas por las leyes civiles.

4.2.- Ante-proyecto de 1900-1902

CAPITULO XIV: DE LA EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL

Artículo 95.- La responsabilidad penal se extingue:

1. Por el cumplimiento de la condena;
2. Por amnistía;
3. Por indulto;
4. Por el perdón de la parte ofendida;
5. Por la muerte del reo;
6. Por prescripción el delito;
7. Por prescripción de la pena;^{*539}

⁵³⁹ Sic.

Artículo 100.- El delito prescribe:

1. A los diez años si merece pena de penitenciaría.
2. A los cinco años si merece pena de cárcel.
3. A los dos años si merece pena de reclusión.
4. Al año si merece pena de arresto mayor.

En los delitos en que no debe intervenir el Ministerio Fiscal, si son contra la honestidad a los seis meses entre presentes y al año entre ausentes; en los demás casos a los cien días entre presentes y a los seis meses entre ausentes.

Artículo 101.- Comenzará a correr el plazo de la prescripción desde el día siguiente al que el delito se haya cometido, salvo en los casos siguientes:

1. En los de falsificación de documentos o falsificación o alteración de monedas, comenzará a correr la prescripción el día siguiente al en que se haya hecho uso del cuerpo del delito.
2. En los atentados contra la libertad y sustracción de menores el día siguiente al de la concesión de la libertad o defunción de la persona contra quien se haya cometido el delito.

Artículo 102.- La suspensión del procedimiento por una cuestión prejudicial suspenderá también la prescripción.

Artículo 103.- El tiempo de prescripción se interrumpirá desde que se inicie procedimiento directo contra el culpable, volviendo a correr de nuevo, desde que se paralice su prosecución por cualquiera circunstancia⁵⁴⁰.

Artículo 104.- Las faltas prescribirán a los dos meses.

Artículo 105.- Las penas impuestas por sentencia ejecutoriada prescriben:

- Las de penitenciaría, cárcel, reclusión, arresto mayor, destierro, inhabilitación absoluta y especial, destitución de empleo o cargo y suspensión de empleo, cargo o derecho políticos, por un tiempo igual al de la condena con el aumento de dos años.
- Cuando la pena sea menor de dos años, el término de la prescripción será el de la condena, con más la tercera parte.
- Las aplicadas por faltas, a los seis meses.
- La de multa, a los tres años.

Artículo 106.- La condena a más de una pena prescribirá en el plazo establecido por la más grave. La misma regla se observará con relación a la prescripción de la acción.

Artículo 107.- El tiempo de la prescripción comenzará a correr desde que la sentencia quede firme, por no ser admisible contra ella, ningún recurso; o por el quebrantamiento de la condena, si hubiera ésta empezado a cumplirse.

Artículo 108.- La prescripción queda sin efecto si antes de vencido el término comete el reo otro delito de la misma especie o que merezca igual o mayor pena sin perjuicio de que comience a correr de nuevo.

Artículo 109.- Cuando el reo se presente o sea habido después de transcurrida la mitad o más del tiempo necesario para prescribir la acción penal o la pena, según los casos, el juez deberá tener en cuenta dicho lapso de tiempo, para hacer una disminución prudencial en la pena que corresponda aplicarle o la impuesta por la sentencia.

Si esta pena tuviere el plazo mínimo, la rebaja se hará aplicando la pena inmediata inferior por un tiempo igual.

Lo dispuesto en este artículo no se extiende a las prescripciones, cuyo término no exceda de un año.

Artículo 110.- La disminución a que se refiere el artículo anterior, no podrá exceder de la tercera parte de la pena impuesta al reo, o del tiempo que le falte para cumplirla.

⁵⁴⁰ Sic.

Artículo 111.- La prescripción será declarada de oficio por el juez, aún cuando el reo no la aleje, con tal que se halle presente en el juicio.

Artículo 112.- No correrá el término de la prescripción cuando la ley prohíba ejercer la acción penal contra funcionarios públicos por tiempo determinado.

Artículo 113.- La prescripción de la responsabilidad civil proveniente del delito se rige por las disposiciones del Código Civil.

5. Proyecto de 1916.-

LIBRO I: DISPOSICIONES GENERALES

TÍTULO XIII: EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL Y DE LA PENA

Artículo 90.- La posibilidad de iniciar acción penal o de pronunciar condena, cesa:

1. Por muerte del culpable;
2. Por amnistía;
3. Por autoridad de la cosa juzgada;
4. Por prescripción.

Artículo 91.- La acción penal prescribe:

1. A los quince años por delitos que merezcan penas perpetuas;
2. A los diez años por delitos que merezcan penitenciaría o relegación;
3. A los cinco años por delitos que merezcan prisión o expatriación;
4. Al año por los demás delitos.

Artículo 92.- La prescripción de la acción criminal comenzará a contarse desde el día en que se cometió el delito o, si éste fuere continuo, desde el día en que terminó.

Artículo 93.- La prescripción de la acción se interrumpe por los actos judiciales de instrucción o de juzgamiento, siempre que el acusado tenga conocimiento de ellos por habersele notificado en forma legal. La interrupción tendrá efecto solamente para el inculcado a quien se refieren directamente los actos judiciales que la producen.

Después de la interrupción comenzará a correr un nuevo plazo de prescripción.

Sin embargo, la acción penal prescribe, en todo caso, cuando la duración del término ordinario de prescripción sobrepasa en una mitad.

Artículo 94.- Si el comienzo o la terminación del proceso dependiese de cualquiera cuestión que deba resolverse en otro procedimiento, se considerará en suspenso la prescripción hasta que éste quede concluido, salvo lo prescrito en la última parte del artículo anterior.

Artículo 95.- Se extingue con la prescripción el derecho de ejecución de la pena. Los plazos de esta prescripción serán los siguientes:

1. La pena de internamiento perpetuo, a los veinticinco años;
2. Las de penitenciaría y relegación de diez años o más, a los veinte años;
3. Las de penitenciaría y relegación de menos de diez años hasta cinco años, a los diez años;
4. Las de penitenciaría y relegación de menos de cinco años, a los seis años;
5. Las de prisión, por un tiempo igual a la condena;
6. Las otras penas de delitos, a los dos años.

Artículo 96.- El plazo de la prescripción de la pena comienza a contarse desde el día en que queda ejecutoriada la condena.

Se interrumpe el plazo, por el comienzo de la ejecución de la pena o por haber sido aprehendido el condenado para sufrirla.

Una vez interrumpida la prescripción comenzará a correr de nuevo, si hubiese lugar a ello, como si antes no hubiese comenzado.

Sin embargo, la pena prescribe en todo caso cuando la duración del término ordinario de prescripción sobrepasa en una mitad.

En los casos de revocación de la libertad condicional, la prescripción comenzará a correr desde el día de la revocación.

Artículo 97.- La prescripción de la acción y de la pena se interrumpen por la reincidencia.

Artículo. 98.- La amnistía suprime legalmente el hecho punible a que se refiere e implica el perpetuo silencio respecto de él. El indulto suprime la represión del hecho punible.

La amnistía y el indulto dejan subsistentes las acciones de reparación civil.

Nadie podrá ser perseguido por segundo vez, por razón de un hecho punible fallado respecto de él en última instancia.

Artículo 99.- La muerte del condenado extingue el derecho de ejecución de la pena.

Artículo 100.- La prescripción es irrenunciable.

6. Código Penal de 1924.-

LIBRO I: DISPOSICIONES GENERALES

TÍTULO XV: EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL Y DE LA PENA

Artículo 118.- La posibilidad de iniciar acción penal o de pronunciar condena, cesa:

1. Por muerte del imputado;
2. Por amnistía;
3. Por autoridad de la cosa juzgada;
4. Por prescripción;
5. Por renuncia del agraviado en los delitos de acción privada.

Artículo 119.- La acción penal prescribe:

1. A los veinte años por delitos que merezcan internamiento;
2. A los diez años por delitos que merezcan penitenciaría o relegación;
3. A los cinco años por delitos que merezcan prisión o expatriación;
4. Al año por lo demás delitos.

Artículo 120.- La prescripción de la acción criminal comenzará a contarse desde el día en que se cometió el delito, o, si éste fuere continuo, desde el día en que terminó.

Artículo 121.- La prescripción de la acción se interrumpe por los actos judiciales de instrucción o de juzgamiento.

Después de la interrupción comenzará a correr un nuevo plazo de prescripción.

Sin embargo, la acción penal prescribe, en todo caso, cuando la duración del término ordinario de prescripción sobrepasa en una mitad.

Artículo 122.- Si el comienzo o la terminación del proceso dependiese de cualquiera cuestión que deba resolverse en otro procedimiento, se considerará en suspenso la prescripción hasta que este quede concluido, salvo lo prescrito en la última parte del artículo anterior.

Artículo 123.- Se extingue con la prescripción el derecho de ejecución de la pena. Los plazos de esta prescripción serán los siguientes:

1. La pena de internamiento indeterminado, a los treinta años;
2. Las de penitenciaría y relegación de diez años o más, a los veinticinco años;
3. Las de penitenciaría y relegación de menos de diez años hasta cinco años, a los veinte años;
4. Las de penitenciaría y relegación de menos de cinco años, a los quince años;
5. Las de prisión, por más de un año, a los diez años;
6. Las otras penas de delitos, a los cinco años.

Artículo 124.- El plazo de la prescripción de la pena comienza a contarse desde el día en que queda ejecutoriada la condena.

Se interrumpe el plazo, por el comienzo de la ejecución de la pena o por haber sido aprehendido el condenado para sufrirla.

Una vez interrumpida la prescripción, comenzará a correr de nuevo, si hubiese lugar a ello, como si antes no hubiese comenzado.

Sin embargo, la pena prescribe en todo caso cuando la duración del término ordinario de prescripción sobrepasa en una mitad.

En los casos de revocación de la libertad condicional, la prescripción comenzará a correr desde el día de la revocación.

Artículo 125.- La prescripción de la acción y de la pena se interrumpen por la reincidencia.

Artículo 126.- La amnistía suprime legalmente el hecho punible a que se refiere e implica el perpetuo silencio respecto de él. El indulto suprime la represión del hecho punible.

La amnistía y el indulto dejan subsistentes las acciones de reparación civil.

Artículo 127.- Nadie podrá ser perseguido pro segunda vez, por razón de un hecho punible, fallado respecto de él definitivamente.

Artículo 128.- La muerte del condenado extingue el derecho de ejecución de la pena.

Artículo 129.- La prescripción es irrenunciable.

LIBRO III: FALTAS

TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 383.- Son aplicables a las faltas las disposiciones contenidas en el Libro Primero, con las modificaciones siguientes:

1. Las faltas sólo se reprimirán en el caso de estar consumadas, sin atender más que al hecho mismo, sin consideración a si hubo intención o negligencia;
2. De las faltas sólo responden los autores;
- ...
7. La acción penal prescribe a los seis meses; la pena, al año.

LIBRO IV: VIGENCIA Y APLICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL

TÍTULO I: RELACIÓN ENTRE EL CÓDIGO PENAL Y LA LEGISLACIÓN ANTERIOR

Artículo 396.- Las disposiciones del Código relativas a la prescripción de la acción penal y de las penas, se aplicarán a las infracciones cometidas y a las penas pronunciadas antes de la vigencia del Código, en cuanto tales disposiciones sean más favorables al autor de la infracción. Se tendrá en cuenta el tiempo corrido de la prescripción antes de la vigencia del Código.

7. Primer Anteproyecto de Código Penal de 1927 por la comisión parlamentaria nombrada conforme a la ley N° 5168.

LIBRO PRIMERO: PRECEPTOS GENERALES

SECCIÓN PRIMERA:

TÍTULO II ⁵⁴¹: QUE TRATA DE LA LEY PENAL EN RELACIÓN AL TERRITORIO

⁵⁴¹ Se proponen las siguientes incorporaciones véase el anexo de Enmiendas al Libro Primero del Anteproyecto que contiene los preceptos generales del Código Penal. En Código penal. Primer anteproyecto de la comisión parlamentaria nombrada conforme a ley N° 5618 (Libro segundo), p. III.

Art. ...- La prescripción del delito se subordina a la ley del Estado al que corresponde su conocimiento.

Art. ...- La prescripción de la pena se rige por la ley del Estado que la ha impuesto.

Art. ...- Cesa la extraterritorialidad de las leyes penales nacionales:

2. Si la acción penal se ha extinguido conforme a la ley del país donde se cometió la infracción.
3. Si el acusado fue juzgado y absuelto en otro Estado, o si condenado, cumplió su pena, o le fue esta remitida, o está prescrita.

SECCIÓN TERCERA⁵⁴²: DE LAS SANCIONES PENALES

TÍTULO IV: DE LA EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN Y DE LA CONDENA PENALES

Artículo59.- La muerte del inculcado imposibilita la iniciación o prosecución de la acción penal, y, en su caso, la ejecución de la pena; pero no obsta a las responsabilidades civiles derivadas de la infracción o anexas a la pena impuesta por ejecutoria, ni al decomiso de los instrumentos con que se ejecutó la infracción, y de las cosas o provechos provenientes de la misma, en idéntico caso.

Artículo60.- Salvo los casos de revisión, nadie podrá ser encausado por segunda vez por razón de un hecho fallado respecto a él, en última instancia.

El juzgamiento en el extranjero tendrá el mismo efecto en los casos previstos en el inc. 3 del artículo. 10.

Artículo61.- La prescripción extingue los efectos penales de la infracción e imposibilita la iniciación o prosecución de la acción.

Artículo62.- Tratándose de delitos consumados, la acción prescribe:

1. A los veinte años, si la pena específica es de duración indeterminada.
2. Por un tiempo igual al máximun de la pena específica si es éste el señalado para la infracción.
3. Por un tiempo igual a la semisuma del máximun absoluto y del mínimun de la pena específica, si es éste el que se fija para la infracción.

Si la pena específica es de multa, la acción penal prescribe en el tiempo necesario para extinguir la multa conmutada por arresto a razón de dos días por cada sol de la misma, y, en todo caso, a los dos años.

Las faltas prescriben a los sesenta días.

Artículo63.- Tratándose de delito frustrado, el tiempo de la prescripción se reduce a los dos tercios, y a la mitad, si la acción fué simplemente tentada.

Artículo64.- El tiempo de la prescripción empieza desde el día de la consumación del delito, y si éste es sucesivo, o si fué simplemente tentado, desde el día del último acto de ejecución.

En los delitos de falsificación de instrumentos o monedas, comienza a correr, desde el día en que se haya hecho uso de la moneda o documento falsos.

En las infracciones cuya calificación depende de sus consecuencias posteriores, y en aquellas cuyos efectos se prolongan en el tiempo, desde el día en que se produce la consecuencia calificativa, o en que cesan dichos efectos.

Artículo65.- El tiempo de la prescripción se cuenta por años, meses y días enteros, y no se estima vencido, sino en el último instante del día en que expira.

Artículo66.- Si hubiese transcurrido el término de la prescripción sin iniciarse la acción, ninguna autoridad podrá practicar actos de instrucción o persecución contra el inculcado, y cualquiera de dichos actos deberá suspenderse, en el momento en que el vencimiento del término quede comprobado.

Si la instrucción estuviera abierta, se sobreseerá si se alega y comprueba la prescripción.

La prescripción deberá hacerse valer de oficio por el juez o tribunal respectivo.

⁵⁴² Código penal. Libro primero. Preceptos generales pp. 19-23.

Artículo67.- El término de la prescripción se interrumpe:

1. Si durante su curso el inculpa-do incurre en nueva infracción o es sometido a medidas de seguridad.
2. Si se han practica-do actos de instrucción o persecución por la justicia o por las autoridades respectivas, siempre que dichos actos hayan sido notificados al inculpa-do.

El emplazamiento público en forma legal, a los prófugos, produce el mismo efecto que la citación.

Cesa el efecto suspensivo de los actos de instrucción o emplazamiento, si el proceso permanece paralizado por más de dos años.

Artículo68.- Interrumpida la prescripción, comienza a correr un nuevo plazo. Sin embargo, la acción penal prescribe, en todo caso, cuando ha transcurrido un tiempo que supere, un conjunto, en una mitad al de la prescripción ordinaria. Pero si se ha pronunciado sentencia condenatoria, no podrá invocarse la prescripción de la acción penal, aunque -durante los trámites posteriores- se venciere el término indicado en este artículo.

Si el tiempo de la prescripción es menor de dos años, queda interrumpido por cualquier acto del procedimiento, pero la acción se extingue sino se pronuncia sentencia condenatoria dentro de los dos años de iniciada la instrucción.

Artículo69.- La interrupción tiene efecto para todos los participantes en el delito, aunque los actos interruptivos se refieran a uno solo.

Artículo70⁵⁴³.- La pena de presidio y la inhabilitación perpetua son imprescriptibles. Pero el condenado podrá alcanzar la remisión de toda o parte de la condena, si, habiendo observado conducta irreprochable, se encontrare en uno de estos casos:

1. Que hubieren transcurrido más de treinta años desde la fecha de la condena.
2. Que el condenado tuviere, a la fecha de su aprehensión, más de sesenta años, si se trata de la pena de presidio.
3. Que se hubiere recomendado a la consideración pública por actos reconocidamente heroicos o beneméritos, o por relevantes servicios a la patria, a la sociedad, a la ciencia o a las artes.

Artículo71.- Las penas temporales prescriben en un tiempo igual al de la condena, aumentado en la mitad para los reos comunes, en dos terceras partes para los reincidentes; y en un tanto igual a la condena para los habituales⁵⁴⁴.

La prescripción de la pena corre desde el día en que la sentencia queda ejecutoriada, o desde aquel en el cual se haya interrumpido, de cualquier manera, la ejecución ya comenzada de la condena.

Cualquier acto de la autoridad competente encaminado a la ejecución de la sentencia, interrumpe la prescripción. Pero la pena queda extinguida, en todo caso, cuando transcurre un tiempo que supere en conjunto, en la mitad al de la prescripción ordinaria.

En los casos de revocación de la libertad condicional, la parte de pena no cumplida, prescribe en un tiempo igual a la mitad del que correspon-da a la condena, y comenzará a correr desde el día de la revocación.

Artículo72.- La pena de inhabilitación, impuesta por tiempo determinado, como accesoria o como principal, prescribe en un término igual al señalado a la incapacidad, interdicción o suspensión, y este término corre sólo desde el día en que la pena principal quede cumplida prescrita o extinguida de otro modo.

La extinción de la acción penal, no perjudica la acción civil para la indemnización del daño, salvo que la remisión de la parte lesionada, la comprenda expresamente.

Artículo73. La extinción de la pena no extingue, por si sola, la responsabilidad civil.

Artículo74.- La amnistía y el indulto extinguen la acción penal, y hacen cesar, en su caso, la ejecución de la condena y sus efectos penales.

⁵⁴³ Texto con la nueva redacción, véase el anexo de Enmiendas al Libro Primero del Anteproyecto que contiene los preceptos generales del Código Penal. En Código Penal. Primer anteproyecto de la comisión parlamentaria nombrada conforme a ley N° 5168 (Libro segundo), pp. VI y VII.

⁵⁴⁴ Con el texto de la enmienda. Ob. cit., p. VII.

Artículo 75.- La renuncia expresa o presunta del ofendido o agraviado en las infracciones que requieren acción de parte, extingue la acción penal; y el perdón del mismo agraviado y ofendido manifestado en forma expresa y fehaciente, remite la pena e impide o hace cesar su ejecución.

La remisión privada hecha en favor de parte de los imputados, podrá ser extendida de oficio por el juez o tribunal que corresponda, aun cuando el remitente no lo solicite o se oponga a ello, a todos los codelincuentes por la misma infracción, si estima que los no perdonados por el ofendido, no son peligrosos.

La remisión de la pena, es, en todo caso, irrevocable.

SECCIÓN SÉPTIMA: DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

TÍTULO III: DE LA APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

Artículo 174.- Las medidas de seguridad pueden imponerse, o en sustitución de la pena, o a la par que ella, y en este caso, para que se ejecuten antes o después de la extinción.

Se imponen en conmutación de la pena, cuando el infractor es un incapaz y cuando la ley lo autoriza expresamente. Se imponen junto con la pena, cuando el infractor padece incapacidad incompleta; y pueden imponerse después de extinguida la condena, cuando el penado no hubiera pasado, durante su reclusión, del ciclo disciplinario, y se presume que persisten las causas de su delincuencia.

8. Ley N° 9014

Artículo 1.- Modifícase el artículo 118° del Código Penal, (1) quedando en los términos siguientes:

«La acción penal pública se extingue:

1. Por prescripción, amnistía, o muerte del culpable.

Subsiste en estos casos, la acción civil, que se hará efectiva en esta vía. Conservan su eficacia en el procedimiento que se instaure ante la jurisdicción civil, las pruebas que se hubieran actuado en la instrucción o en el juicio correspondiente».

Artículo 6.- Modifícase el artículo 119° del Código Penal, (1) en los términos siguientes:

«La acción Penal prescribe:

1. A los 25 años que merezcan internamiento.

2. A los 15 años por delitos que merezcan penitenciaría o relegación.

3. A los 8 años por delitos que merezcan prisión o expatriación.

4. A los 3 años por los demás delitos.

Cuando la Ley castigue un delito con penas alternativas, la prescripción sólo podrá computarse en el acto del juzgamiento».

Artículo 7.- Modifícase el Artículo 120° del Código Penal (1) cuya redacción quedará en los términos siguientes: «La prescripción de la acción criminal comenzará a contarse para los delitos consumados, desde el día en que se cometió el delito, para los delitos tentados, desde el día en que se suspendió la ejecución; y en los delitos continuos desde el día en que se ejecuta el último hecho o se realiza la última acción».

Artículo 8.- Modifícase el artículo 121° del Código Penal (1) el que quedará en los términos siguientes: « El término de la prescripción de la acción penal se interrumpe por la orden judicial de detención o de citación para la instrucción o el juzgamiento y las diligencias procesales que les sigan.

En los delitos en que no proceda la detención el término se interrumpe por la simple interposición de la denuncia.

Después de la interrupción comenzará a correr un nuevo plazo de prescripción.

Si no pudiera iniciarse o proseguirse la acción penal sino después de autorización especial, o después de resuelta una cuestión prejudicial, quedará en suspenso la prescripción y no volverá a correr sino desde el día en que se dé la autorización o se resuelva la cuestión prejudicial».

Artículo 9.- Modifícase el primer párrafo del artículo 124° del Código Penal, (1) en los términos siguientes: « El plazo de la prescripción de la pena comienza a contarse desde el día en que quede ejecutoriada la condena; o desde el quebrantamiento de la condena, si esta hubiera empezado a cumplirse».

Artículo 10.- El Término de la prescripción se elevará en un tercio cuando se trata de delincuentes reincidentes, de los habituales y de los homicidas que, por la gravedad del hecho, en si mismo, la naturaleza de los móviles o sus antecedentes personales se revelen como sujetos peligrosos.

Artículo 11.- Si el reo se ausentara del territorio de la República sólo podrá prescribir la acción penal o la pena, contándose por uno cada dos días de ausencia, para el cómputo de los años.

Artículo 12.- Rigen para la prescripción de la reparación civil los mismos términos que para la prescripción de los delitos.

9. Ley N° 10203.-

Artículo Único.- Derógase los artículos 6°, 7°, 8°, 9°, 10° y 11° de la Ley N° 9014, quedando vigentes las disposiciones contenidas en el Código Penal.-

10. Decreto ley N° 17106 del 8 de Noviembre de 19 (Publicado el 19 de Noviembre de 1968).-

2° Modifícase el Artículo 119° del Código Penal en los Términos siguientes:

La acción Penal prescribe:

- 1.- A los 25 años por delitos que merezcan internamiento;
- 2.- A los 20 años por delitos que merezcan penitenciaría o relegación;
- 3.- A los 10 años que merezcan prisión o expatriación;
- 4.- A los 3 años por los demás delitos.

Cuando la ley castigue un delito con penas alternativas, la prescripción sólo podrá computarse en el acto del juzgamiento.

3.- Modifícase el Artículo 121° del Código Penal el que quedará en los términos siguientes:

“El término de la prescripción de la acción penal se interrumpe por la orden judicial de detención o de citación para la instrucción o el juzgamiento y las diligencias procesales que le sigan.

En los delitos en que no proceda la detención el término se interrumpe por la simple interposición de la denuncia.

Después de la interrupción comenzará a correr un nuevo plazo de prescripción.

Si no pudiera iniciarse o perseguirse la acción penal sino después de autorización especial, o después de resuelta una cuestión prejudicial, quedará en suspenso la prescripción y no volverá a correr si no desde el día en que se dé la autorización o se resuelva la cuestión prejudicial»

Si el reo se ausentara del territorio de la República sólo podrá prescribir la acción penal o la pena contándose por uno cada dos días de ausencia, para el computo de los años.

11. Decreto Ley N° 17388 (del 24 de Enero de 1969).-

Artículo 6.- Adiciónase al art. 119 del Código Penal, modificado por el art 2° de la Ley N° 17106, la siguiente disposición:

Los delitos que merezcan pena de muerte, prescribirán a los 30 años.

12. D. Leg. 121 (del 12 de Junio de 1981).-

Artículo 2.- Modifícanse los artículo 119 y 121 del Código Penal en los siguientes términos :

Artículo 119.- La acción penal prescribe:

1. A los veinticinco años por delitos que merezcan pena de muerte;
2. A los veinte años por delitos que merezcan internamiento;
3. A los diez años por delitos que merezcan penitenciaría o relegación;
4. A los cinco años por delitos que merezcan prisión o expatriación;
5. A los dos años por delitos que merezcan multa o inhabilitación.

El plazo de la prescripción se aumentará en una mitad tratándose de delitos en agravio del Estado.

Cuando la ley castigue un delito con penas alternativas, el plazo para la prescripción sólo se computará en el acto de juzgamiento al apreciarse las circunstancias del delito.

Artículo 121.- La prescripción de la acción penal se interrumpe:

1. Por denuncia del Ministerio Público;
2. Por dictarse auto de apertura de instrucción;
3. Por emitirse acusación escrita del Ministerio Público;
4. Por expedirse auto que dispone pasar a Juicio Oral;
5. Por dictarse resolución señalando fecha y hora para iniciarse el Juicio Oral;
6. Por interponerse recurso de apelación o de nulidad;
7. Por expedirse orden judicial de citación o de captura.

Sin embargo, la acción penal prescribe, en todo caso, cuando la duración del plazo ordinario de la prescripción sobrepasa en una mitad.

Artículo 12.- Deróganse los decretos leyes 17106 y 17388 en su artículo 6°.

13. Proyecto de Código Penal de Setiembre 1984.-

DISPOSICIONES GENERALES

TÍTULO XIV: EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL Y DE LA PENA

Artículo 92.- La acción penal se extingue:

1. Por autoridad de cosa juzgada, prescripción, amnistía o muerte del imputado.
2. En los delitos sólo perseguibles por denuncia de la parte agraviada se extingue, además de lo establecido en el inciso anterior por desestimiento⁵⁴⁵ o transacción, y en los delitos contra el honor sexual, también por matrimonio subsiguiente.

Artículo 93.- La acción penal prescribe:

1. A los 20 años por delitos que merezcan pena de internamiento.
2. A los 10 años por delitos que merezcan pena de prisión no menor de 10 años.
3. A los 5 años por delitos que merezcan pena de prisión menor de 10 años.
4. A los 2 años para los demás delitos.

Cuando la ley castigue un delito con penas alternativas, la prescripción sólo podrá declararse por sentencia en el acto del juzgamiento.

La acción penal en los delitos de terrorismo es imprescriptible.

Artículo 94.- La prescripción de la acción penal comenzará a contarse desde el día en que se cometió el delito, o, si éste fuere continuado, desde el día en que terminó.

Artículo 95.- La prescripción de la acción se interrumpe por los actos judiciales de instrucción o de juzgamiento.

Después de la interrupción comenzará a correr un nuevo plazo de prescripción.

Si el imputado se ausentara del territorio de la República sólo podrá prescribir la acción penal o la pena, contándose como uno cada dos días de ausencia, para el cómputo de los años.

Sin embargo, la acción penal prescribe en todo caso cuando la duración del término ordinario de prescripción sobrepasa en una mitad.

Artículo 96.- Si el comienzo o la terminación del proceso dependiese de cualquier cuestión que deba resolverse en otro procedimiento, se considerará en suspenso la prescripción hasta que éste quede concluido, salvo lo prescrito en la última parte del artículo anterior.

⁵⁴⁵ Sic.

Artículo 97.- Se extingue con la prescripción el derecho de ejecución de la pena. Los plazos de esta prescripción serán los siguientes:

1. Las penas de internamiento a los 30 años;
2. Las penas de prisión no menores de 10 años a los 25 años;
3. Las penas de prisión menores de 10 años y mayores de 5 años, a los 15 años;
4. Las penas de prisión menores de 5 años y mayores de 2 años, a los 10 años;
5. La pena de prisión no mayor de 2 años, a los 5 años; y
6. Las otras penas a los 3 años.

Artículo 98.- El plazo de la prescripción de la pena comienza a contarse desde el día en que quede ejecutoriada la sentencia condenatoria.

Se interrumpe el plazo, por el comienzo de la ejecución de la pena o por haber sido aprehendido el condenado para sufrirla.

Una vez interrumpida la prescripción, comenzará a correr de nuevo, si hubiese lugar a ello, como si antes no hubiese comenzado.

Sin embargo, la pena prescribe en todo caso cuando la duración del término ordinario de prescripción sobrepase en una mitad.

En los casos de revocación de la libertad condicional, la prescripción comenzará a correr desde el día de la revocación.

Artículo 99.- La prescripción de la acción y de la pena se interrumpe por la comisión de un nuevo delito.

Artículo 100.- La amnistía suprime legalmente el hecho punible a que se refiere o implica el perpetuo silencio respecto a él. El indulto suprime la represión del hecho punible.

La amnistía y el indulto dejan subsistente la acción de reparación civil.

Artículo 101.- Nadie podrá ser perseguido por segunda vez, por razón de un hecho punible, fallado respecto de él definitivamente. El auto de sobreseimiento no hace cosa juzgada.

La sentencia ejecutoriada dictada en la jurisdicción civil impide, también, la acción penal respecto del hecho declarado lícito en esa sentencia entre las personas que fueron partes en el juicio o derivan de éste su derecho.

Procederá la acción civil contra los terceros obligados a la reparación e indemnización derivada del delito, cuando la sentencia dictada en la jurisdicción penal no alcanza a dichos terceros por no haber sido éstos citados desde el principio de la instrucción.

Artículo 102.- El imputado tiene derecho a renunciar a la prescripción de la acción penal.

TÍTULO XV: MEDIDAS DE SEGURIDAD

Artículo 105.- Las medidas de internación tendrán una duración máxima de 15 años. La privación de la libertad se cumplirá en los lugares que la ley determine, procurando ejercer sobre el internado una acción readaptadora.

Las medidas de vigilancia tendrán una duración máxima de 10 años.

Artículo 108.- Las medidas de seguridad no se extinguirán por amnistía ni por indulto.

Las medidas de internación y vigilancia prescribirán en los términos y formas señaladas para la prescripción de las penas.

14. Proyecto de Código Penal de Noviembre de 1984.-

LIBRO I: PARTE GENERAL

TÍTULO IV: MEDIDAS DE SEGURIDAD

Artículo 74.- Las medidas curativas se aplican por tiempo indeterminado. Dejan de aplicarse por resolución judicial, previo dictamen de peritos que establezca que la persona sujeta a la medida haya dejado de constituir peligro para sí y para terceros.

Artículo 75.- Las medidas de internación tienen una duración máxima de 15 años. Las de internación se cumplen en los lugares que la ley determina, procurando ejercer sobre el interno a una acción readaptadora.

Artículo 78.- Las medidas de seguridad no se extinguen por amnistía ni por indulto. Las medidas de internación y vigilancia prescriben en los términos y formas señaladas para la prescripción de las penas.

TÍTULO V: EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL Y DE LA PENA

Artículo 79.- La acción penal se extingue:

1. Por sentencia absolutoria, prescripción, amnistía o muerto⁵⁴⁶ del imputado; y
2. Por desistimiento o transacción en los delitos perseguibles por acción privada, y, en los delitos contra el honor sexual, además, por matrimonio subsiguiente.

Artículo 80.- La acción penal prescribe:

1. A los 20 años por delitos que merezcan penas de prisión mayor de veinte años;
2. A los 10 años por delitos que merezcan pena de prisión no menor de 10 años ni mayor de veinte años;
3. A los 5 años por delitos que merezcan pena de prisión menor de 10 años; y
4. A los dos años para los demás delitos.

Cuando la ley castiga un delito con penas alternativas, la prescripción sólo puede declararse por sentencia en el acto del juzgamiento, salvo si el agente sufre detención mayor que la pena solicitada por el Fiscal o si está en libertad provisional.

Artículo 81.- La prescripción de la acción penal comienza a correr:

1. En la tentativa, desde el día en que cesó la actividad delictuosa;
2. En el delito instantáneo, desde el día en que éste se consumó;
3. En el delito continuado, desde el día en que terminó la actividad delictuosa; y
4. En el delito permanente, desde el día en que cesó⁵⁴⁷ la permanencia.

Artículo 82.- La prescripción de la acción se interrumpe por los actos judiciales de instrucción o de juzgamiento.

Después de la interrupción comienza a correr un nuevo plazo de prescripción.

Si el imputado se ausenta del territorio de la República sólo prescribe la acción penal o la pena contándose como un día por cada dos de ausencia.

Sin embargo, la acción penal prescribe, en todo caso, cuando la duración del término ordinario de prescripción sobrepase en una mitad.

Artículo 83.- Si el comienzo o la continuación del proceso depende de cualquier cuestión que deba resolverse en otro procedimiento; se considera en suspenso la prescripción hasta que aquél quede concluido, salvo lo prescrito en la última parte del artículo 82.

Artículo 84.- Se extingue, con la prescripción, el derecho de ejecución de la pena. Los plazos de esta prescripción son los siguientes:

1. La pena de prisión mayor de 20 años, a los 30 años;
2. La pena de prisión mayor de 10 años, a los 25 años;
3. La pena de prisión mayor de 5 años, a los 15 años;
4. La pena de prisión mayor de 2 años, a los 10 años;
5. La pena de prisión no mayor de 2 años, a los 5 años; y
6. Las otras penas a los 3 años.

Artículo 85.- El plazo de la prescripción de la pena comienza a correr desde el día en que quede ejecutoriada la sentencia condenatoria.

⁵⁴⁶ Sic.

⁵⁴⁷ Sic.

Se interrumpe el plazo por el comienzo de la ejecución de la pena o por haber sido aprehendido el condenado para sufrirla.

Una vez interrumpida la prescripción, comenzará a correr de nuevo, si hay lugar a ello, como si antes no hubiese comenzado.

Sin embargo, la pena prescribe, en todo caso, cuando la duración del término ordinario de prescripción sobrepase en una mitad.

En los casos de revocación de la libertad condicional o de la suspensión condicional de la pena, la prescripción comienza a correr desde el día de la revocación.

Artículo 86.- La prescripción de la acción y de la pena se interrumpe por la comisión de nuevo delito.

Artículo 87.- La amnistía suprime legalmente el hecho punible a que se refiere e implica el perpetuo silencio respecto a él. El indulto suprime la represión del hecho punible.

La amnistía y el indulto dejan subsistente la acción de reparación civil.

Artículo 88.- Nadie puede ser perseguido por segunda vez, por razón de un hecho punible, fallado respecto de él definitivamente. El auto de sobreseimiento no hace cosa juzgada.

La sentencia ejecutoriada dictada en la jurisdicción civil impide, también, la acción penal respecto del hecho declarado lícito en esa sentencia entre las personas que fueron parte en el juicio o derivan de éste su derecho.

Artículo 89.- El imputado tiene derecho a renunciar a la prescripción de la acción penal.

TÍTULO VI: REHABILITACIÓN

Artículo 92.- La rehabilitación se concede si concurren conjuntamente los siguientes requisitos:

1. Después de seis años de haberse extinguido la pena principal impuesta; o de doce años, si se trata de delincuente habitual.

Si se impuso al condenado una medida de seguridad de internación subsiguiente a la pena, el plazo se cuenta desde el término de dicha medida;

TÍTULO VII: CONSECUENCIAS CIVILES DE LA CONDENA

Artículo 104.- La prescripción de la responsabilidad civil proveniente del delito se rige por el Código Civil.

Las causas de extinción de la acción penal y de la pena no se extiende a las obligaciones civiles derivadas del delito.

LIBRO TERCERO: FALTAS

TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 340.- Son aplicables a las faltas las disposiciones contenidas en el Libro Primero, con las modificaciones siguientes:

...

5. La acción penal prescribe a los seis meses la pena, al año.

15. Proyecto de Código Penal de Agosto de 1985.-

LIBRO PRIMERO: PARTE GENERAL

TÍTULO V: EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL Y DE LA PENA

Artículo 83.- La acción penal y la pena se extinguen por:

1. Muerte del imputado, prescripción, amnistía, indulto o cumplimiento de la pena;
Subsiste en estos casos la acción civil que se hará efectiva en esta vía.

2. En los casos en que sólo procede la acción privada, ésta se extingue, además de las establecidas en el inciso 1, por desistimiento o transacción; y, en los delitos contra el honor sexual por matrimonio subsiguiente; y

3. Por autoridad de cosa juzgada.

La sentencia ejecutoriada dictada en la jurisdicción civil impide la acción penal respecto del hecho declarado lícito en esa sentencia entre las personas que fueron partes en el juicio o derivan de éstas su derecho.

Lo resuelto en la jurisdicción penal impide cualquier acción que pueda derivarse del hecho materia del juzgamiento. Empero, procede la acción civil contra los terceros obligados a la reparación e indemnización derivada del delito, cuando la resolución dictada en la jurisdicción penal no alcance a dichos terceros por no haber sido éstos citados desde el principio del proceso.

Artículo 84.- La acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley para el delito si es privativa de libertad pero, en ningún caso, será interior a tres ni excederá de veinte años.

Cuando la ley reprime un hecho punible con penas alternativas o compuestas se estará a la que exija mayor tiempo para la prescripción.

En el caso de concurso real de delitos las acciones prescriben separadamente en el plazo señalado para cada uno.

En el caso de concurso ideal de delitos, las acciones prescriben cuando haya transcurrido un plazo igual al máximo correspondiente al delito más grave.

La acción penal de las otras penas prescriben a los cinco años.

Artículo 85.- Los plazos de prescripción del derecho de ejecución de la pena son los establecidos en el artículo 84. Se aumentará en un tercio si el condenado es reincidente o habitual.

Artículo 86.- Los plazos de prescripción se reducen en una mitad cuando el agente tenía menos de veintiún años al tiempo de la comisión del hecho punible o más de setenta años en la fecha de pronunciarse la sentencia.

Artículo 87.- La prescripción de la acción penal comienza a correr:

1. En la tentativa desde el día en que cesó la actividad delictuosa;
2. En el delito instantáneo, desde el día en que éste se consumó;
3. En el delito continuado, desde el día en que terminó la actividad delictuosa; y
4. En el delito permanente, desde el día en que cesó la permanencia.

Artículo 88.- El plazo de la prescripción de la pena comienza a correr desde el día en que quede consentida o ejecutoriada la sentencia condenatoria.

Artículo 89.- Si el comienzo o la continuación del proceso penal depende de cualquier cuestión que deba resolverse en otro procedimiento, se considera en suspenso la prescripción hasta que aquél quede concluido, salvo lo establecido en los artículo 90, último párrafo, y 91, tercer párrafo.

Artículo 90.- La prescripción de la acción se interrumpe por las actuaciones del Ministerio Público o de la autoridad judicial que se practique en la investigación del hecho punible o por la comisión de un nuevo delito, quedando sin efecto el tiempo transcurrido.

Después de la interrupción comienza a correr un nuevo plazo de prescripción, a partir del día siguiente de la última diligencia.

Sin embargo, la acción penal prescribe en todo caso, cuando la duración del plazo ordinario de prescripción sobrepasa en una mitad.

Artículo 91.- Se interrumpe el plazo de prescripción de la pena, quedando sin efecto el tiempo transcurrido, por el comienzo de ejecución de la misma o por haber sido aprehendido el condenado o por la comisión de un nuevo delito doloso.

Una vez interrumpida la prescripción, comenzará a correr de nuevo, si hay lugar a ello, como si antes no hubiese comenzado.

Sin embargo, la pena prescribe en todo caso, cuando la duración del plazo ordinario de prescripción sobrepase en una mitad.

En los casos de revocación de la libertad condicional o de la suspensión condicional de la pena, la prescripción comienza a correr desde el día de la revocación.

Artículo 92.- La prescripción corre, se suspende o se interrumpe separadamente para cada uno de los partícipes del hecho punible.

Artículo 93.- La amnistía suprime legalmente el hecho punible a que se refiere e implica el perpetuo silencio respecto a él. El indulto suprime la represión del hecho punible. La amnistía y el indulto dejan subsistente la acción de reparación civil.

Artículo 94.- Nadie puede ser perseguido por segunda vez, por razón de un hecho punible, fallado respecto de él definitivamente.

Artículo 95.- El imputado tiene derecho a renunciar a la prescripción de la acción penal.

TÍTULO VI: REHABILITACIÓN

Artículo 96.- El que ha cumplido la pena o medida de seguridad que le fue impuesta o que de otro modo ha extinguido su responsabilidad queda rehabilitado, siempre que haya cumplido con pagar o garantizar suficientemente la reparación civil.

La rehabilitación produce los siguientes efectos:

1. Restituye a la persona en los derechos que se le privó o restringió en la sentencia. No produce el efecto de reponer en los cargos, comisiones o empleos de los que se le privó;
2. La cancelación de antecedentes penales, judiciales y policiales. Los certificados correspondientes no pueden ser utilizados en contra del liberado.

Artículo 97.- La rehabilitación queda revocada si el rehabilitado comete nuevo delito doloso. En este caso, los antecedentes recobran todos sus efectos penales.

Artículo 98.- Producida la rehabilitación, los registros o anotaciones de cualquier clase relativos a la conducta impuesta no pueden ser comunicados a ninguna entidad o persona, con excepción de las autoridades policiales, judiciales o del Ministerio Público.

TÍTULO VII: CONSECUENCIAS CIVILES DE LA CONDENA

Artículo 107.- La prescripción de la responsabilidad civil proveniente del hecho punible se rige por el Código Civil.

Las causas de la extinción de la acción penal y de la pena no se extienden a las obligaciones civiles derivadas del hecho punible.

LIBRO TERCERO: FALTAS

TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 438.- Son aplicables a las faltas las disposiciones contenidas en el Libro Primero, con las modificaciones siguientes:

...

8. La acción penal prescribe a los seis meses; la pena, al año.

16. Proyecto de Código Penal de Abril de 1986.-

LIBRO PRIMERO: PARTE GENERAL

TÍTULO V: EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL Y DE LA PENA

Artículo 82.- La acción penal y la pena se extinguen por:

1. Muerte del imputado, prescripción, amnistía, indulto o cumplimiento de la pena:
Subsiste en estos casos la acción civil que se hará efectiva en esta vía.

2. En los casos en que sólo procede la acción privada, ésta se extingue, además, de las establecidas en el inciso 1, por desistimiento o transacción; y, en los delitos contra el honor sexual por matrimonio subsiguiente; y

3. Por autoridad de cosa juzgada.

La sentencia ejecutoriada dictada en la jurisdicción civil impide la acción penal respecto del hecho declarado lícito en esa sentencia entre las personas que fueron partes en el juicio o derivan de éstas su derecho.

Lo resuelto en la jurisdicción penal impide cualquier acción que pueda derivarse de hecho materia del juzgamiento. Empero, procede la acción civil en esta vía contra los terceros obligados a la reparación e indemnización derivada del delito, cuando la resolución dictada en la jurisdicción penal no alcance a dichos terceros por no haber sido éstos citados desde el principio del proceso.

Artículo 83.- La acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley para el delito si es privativa de libertad pero, en ningún caso, será inferior a tres ni excederá de veinte años.

Cuando la ley reprima un hecho punible con penas alternativas, o compuestas, se estará a la que exija mayor tiempo para la prescripción.

En el caso de concurso real de delitos las acciones prescriben separadamente en el plazo señalado para cada uno.

En el caso concurso ideal de delitos, las acciones prescriben cuando haya transcurrido un plazo igual al máximo correspondiente al delito más grave.

La acción penal de las otras penas prescriben a los cinco años.

Artículo 84.- Los plazos de prescripción del derecho de ejecución de la pena son los establecidos en el artículo 83. Se aumentará en un tercio si el condenado es reincidente o habitual.

Artículo 85.- Los plazos de prescripción se reducen en una mitad cuando el agente tenía menos de veintiún años al tiempo de la comisión del hecho punible o más de setenta años en la fecha de pronunciarse la sentencia.

Artículo 86.- La prescripción de la acción penal comienza a correr:

1. En la tentativa, desde el día en que cesó la actividad delictuosa;
2. En el delito instantáneo, desde el día en que éste se consumó;
3. En el delito continuado, desde el día en que terminó la actividad delictuosa; y
4. En el delito permanente, desde el día en que cesó la permanencia.

Artículo 87.- El plazo de la prescripción de la pena comienza a correr desde el día en que quede consentida o ejecutoriada la sentencia condenatoria.

Artículo 88.- Si el comienzo o la continuación del proceso penal depende de cualquier cuestión que deba resolverse en otro procedimiento, se considera en suspenso la prescripción hasta que aquél quede concluido, salvo lo establecido en los artículos 89, último párrafo, y 90, tercer párrafo.

Artículo 89.- La prescripción de la acción se interrumpe por las actuaciones del Ministerio Público o de la autoridad judicial que se practique en la investigación del delito, quedando sin efecto el tiempo transcurrido.

Después de la interrupción comienza a correr un nuevo plazo de prescripción, a partir del día siguiente del la última diligencia.

Se interrumpe igualmente la prescripción de la pena por⁵⁴⁸ la comisión de un nuevo delito doloso.

Sin embargo, la acción penal prescribe, en todo caso, cuando la duración del plazo ordinario de prescripción sobrepasa en una mitad.

Artículo 90.- Se interrumpe el plazo de prescripción de la pena, quedando sin efecto el tiempo transcurrido, por el comienzo de ejecución de la misma o por haber sido aprehendido el con⁵⁴⁹ pena por la comisión de un nuevo delito doloso.

⁵⁴⁸ Sic.

⁵⁴⁹ Sic.

Una vez interrumpida la prescripción, comenzará a correr de nuevo, si hay lugar a ello, como si antes no hubiese comenzado.

Sin embargo, la pena prescribe, en todo caso, cuando la duración del plazo ordinario de prescripción sobrepase en una mitad.

En los casos de revocación de la libertad condicional o de la suspensión condicional de la pena, la prescripción comienza a correr desde el día de la revocación.

Artículo 91.- La prescripción corre, se suspende o se interrumpe separadamente para cada uno de los partícipes del hecho punible.

Artículo 92.- La amnistía suprime legalmente el hecho punible a que se refiere e implica el perpetuo silencio respecto a él. El indulto suprime la represión del hecho punible.

La amnistía y el indulto dejan subsistente la acción de reparación civil.

Artículo 93.- Nadie puede ser perseguido por segunda vez, por razón de un hecho punible, fallado respecto de él definitivamente.

Artículo 94.- El imputado tiene derecho a renunciar a la prescripción de la acción penal.

TÍTULO VI: REHABILITACIÓN

Artículo 95.- El que ha cumplido la pena o medida de seguridad que le fue impuesta o que de otro modo ha extinguido su responsabilidad queda rehabilitado.

El pago de la reparación civil que pudiera hallarse pendiente se rige por el Código Civil.

La rehabilitación produce los siguientes efectos:

1. Restituye a la persona en los derechos que se le suspendió o restringió en la sentencia. No produce el efecto de reponer en los cargos, comisiones o empleos de los que se le privó;
2. La cancelación de antecedentes penales, judiciales y policiales. Los certificados correspondientes no pueden ser utilizados en contra del liberado.

Artículo 96.- La rehabilitación queda revocada si el rehabilitado comete nuevo delito doloso. En este caso, los antecedentes recobran todos sus efectos penales.

TÍTULO VII: CONSECUENCIAS CIVILES DE LA CONDENA

Artículo 106.- Las causas de extinción de la acción penal y de la pena no se extienden a las obligaciones civiles que pudieran derivarse del hecho punible.

LIBRO TERCERO: FALTAS

TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 413.- Son aplicables a las faltas las disposiciones contenidas en el Libro Primero, con las modificaciones siguientes:

8. La acción penal prescribe a los seis meses; la pena, al año.

17. Proyecto del libro primero: parte general del Código Penal de Setiembre de 1989.

LIBRO PRIMERO: PARTE GENERAL

CAPÍTULO VII: REHABILITACIÓN

Artículo 72.- El que ha cumplido la pena o medida de seguridad que le fue impuesta o de otro modo ha extinguido su responsabilidad será rehabilitado.

El pago de la reparación civil que pudiera hallarse pendiente se rige por el Código Civil.

La rehabilitación origina los efectos siguientes:

1. Restituye a la persona en los derechos que se le suspendió en la sentencia. No produce el efecto de reponer en los cargos, comisiones o empleos de los que se le privó.
2. La cancelación de los antecedentes penales, judiciales y policiales. Los certificados correspondientes no deben expresar la pena rehabilitada ni la rehabilitación.

TÍTULO IV: DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

Artículo 80.- Cuando se necesite aplicar una medida de internación a un imputable relativo, el juez dispondrá que ella tenga lugar antes de la pena. El período de internación se computará como tiempo de cumplimiento de la pena, sin perjuicio que el juez pueda dar por extinguida la condena o reducir su duración en atención al éxito del tratamiento.

TÍTULO V: DE LA EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL Y DE LA PENA

Artículo 81.- La acción penal se extingue por:

1. Muerte del imputado, prescripción, amnistía, indulto o cumplimiento de la pena, Subsiste en estos casos la acción civil que se hará efectiva en esta vía.
2. En los casos en que sólo proceda la acción privada, éste se extingue además por las establecidas en el inciso 1, por desistimiento o transacción; y en los delitos contra la libertad y el honor sexuales, por matrimonio subsiguiente; y
3. Por autoridad de cosa juzgada.

Artículo 82.- Se impide la acción penal si de la sentencia ejecutoriada dictada en la jurisdicción civil, resulte que el hecho imputado como delito es lícito.

Lo resuelto en la jurisdicción penal impide cualquier acción que pueda derivarse del hecho materia del juzgamiento. Empero, procede la acción civil en esta vía contra los terceros obligados a la reparación e indemnización derivada del delito cuando la resolución dictada en la jurisdicción penal no alcanza a dichos terceros por no haber sido éstos citados desde el principio del proceso.

Artículo 83.- La acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley para el delito si es privativa de libertad.

En caso de concurso real de delitos las acciones prescriben separadamente en el plazo señalado para cada uno. En el caso de concurso ideal de delitos las acciones prescriben cuando haya transcurrido un plazo igual al máximo correspondiente al delito más grave.

En los delitos que merezcan otras penas la acción prescribe a los tres años.

Artículo 84.- Los plazos de prescripción se reduce en una mitad cuando el agente tenía menos de 21 años al tiempo de comisión del hecho punible.

Artículo 85.- Los plazos de prescripción de la acción penal comienzan:

1. En la tentativa, desde el día en que cesó la actividad delictuosa;
2. En el delito instantáneo, desde el día en que se consumó;
3. En el delito continuado, desde el día en que terminó la actividad delictuosa; y
4. En el delito permanente, desde el día en que cesó la permanencia.

Artículo 86.- La prescripción de la acción se interrumpe por las actuaciones del Ministerio Público o de la autoridad judicial que se practiquen durante el proceso, quedando sin efecto el tiempo transcurrido.

Después de la interrupción comienza a correr un nuevo plazo de prescripción, a partir del día siguiente de la última diligencia.

Se interrumpe igualmente la prescripción de la pena por la comisión de un nuevo delito doloso.

Sin embargo, la acción penal prescribe en todo caso, cuando el tiempo transcurrido sobrepasa en una mitad al plazo ordinario de prescripción.

Artículo 87.- Si el comienzo o la continuación del proceso penal depende de cualquier cuestión que deba resolverse en otro procedimiento, se considera en suspenso la prescripción hasta que aquél quede concluido.

Artículo 88.- El plazo de prescripción de la pena es el mismo que fija la ley para la prescripción de la acción penal. El plazo se computará desde el día en que quedó firme la sentencia condenatoria.

Artículo 89.- Se interrumpe el plazo de prescripción de la pena, quedando sin efecto el tiempo transcurrido por el comienzo de ejecución de la misma o por haber sido aprehendido el condenado por la comisión de un nuevo delito doloso.

Una vez interrumpida la prescripción, comenzará a correr de nuevo, si hay lugar a ello, como si antes no se hubiese iniciado.

En los casos de revocación de la condena o de la suspensión de la reserva condenatoria, la prescripción comienza a correr desde el día de la revocación.

Sin embargo la pena prescribe en todo caso, en los mismos plazos en que prescribe la acción penal.

Artículo 90.- La prescripción corre, se suspende o se interrumpe separadamente para cada uno de los partícipes del hecho punible.

Artículo 91.- La amnistía suprime legalmente el hecho punible a que se refiere o implica el perpetuo silencio respecto a él. El indulto suprime la pena impuesta.

Artículo 92.- Nadie puede ser perseguido por segunda vez en razón de un hecho punible sobre el que se ha fallado definitivamente.

Artículo 93.- El imputado tiene derecho a renunciar a la prescripción de la acción penal.

TÍTULO VI: DE LA REPARACIÓN CIVIL Y CONSECUENCIAS ACCESORIAS

CAPÍTULO I: REPARACIÓN CIVIL

Artículo 102.- Las causas de extinción de la acción penal y de la pena no se extienden a las obligaciones civiles que pudieran derivarse del hecho punible.

18. Proyecto de Código Penal. Aprobado por la Comisión Revisora (Publicado en separata especial del diario “El Peruano” el día diecisiete de Julio de 1990).-

LIBRO PRIMERO: PARTE GENERAL

TÍTULO IV: DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

Artículo 79.- La duración de la medida de internación no podrá exceder el tiempo de duración de la pena privativa de libertad que hubiere correspondido aplicarse por el delito cometido.

Sin perjuicio de que el Juez lo solicite, cada seis meses la autoridad del centro de internación deberá remitir al Juez una pericia médica, a fin de darle a conocer si las causas que hicieron necesaria la aplicación de la medida han desaparecido.

En este último caso, el Juez hará cesar la medida de internación impuesta.

Artículo 81.- Cuando se necesite aplicar una medida de internación a un imputable relativo, o a un toxicómano o alcohólico imputable, el Juez dispondrá que ella tenga lugar antes de la pena. El período de internación se computará como tiempo de cumplimiento de la pena, sin perjuicio que el Juez pueda dar por extinguida la condena o reducir su duración atendiendo al éxito del tratamiento.

TÍTULO V: EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL Y DE LA PENA

Artículo 82.- La acción penal se extingue:

1. Por muerte del imputado, prescripción, amnistía, indulto o cumplimiento de la pena.

Subsiste en estos casos la acción civil que se hará efectiva en la vía correspondiente.

2. En los casos en que sólo proceda la acción privada, ésta se extingue, además de las establecidas en el inciso 1, por desistimiento o transacción; y en los delitos contra la libertad y el honor sexuales, por matrimonio subsiguiente; y
3. Por autoridad de cosa juzgada.

Artículo 83.- Se impide la acción penal si de la sentencia ejecutoriada dictada en la jurisdicción civil, resulte que el hecho imputado como delito es lícito.

Lo resuelto en la jurisdicción penal impide cualquier acción que pueda derivarse del hecho materia del juzgamiento. Empero, procede la acción civil en la vía correspondiente contra los terceros obligados a la reparación dictada es la jurisdicción penal no alcanza a dichos terceros por no haber sido citados desde el principio del proceso.

Artículo 84.- La acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley para el delito, si es privativa de libertad.

En caso de concurso real de delitos las acciones prescriben separadamente en el plazo señalado para cada uno.

En el caso de concurso ideal de delitos las acciones prescriben cuando haya transcurrido un plazo igual al máximo correspondiente al delito más grave.

En los delitos que merezcan otras penas la acción prescribe a los tres años.

Artículo 85.- Los plazos de prescripción se reducen a la mitad cuando el agente tenía menos de 21 años al tiempo de la comisión del hecho punible.

Artículo 86.- Los plazos de prescripción de la acción penal comienzan:

1. En la tentativa, desde el día en que cesó la actividad delictuosa;
2. En el delito instantáneo, a partir del día en que se consumó;
3. En el delito continuado, desde el día en que terminó la actividad delictuosa; y
- 4.- En el delito permanente, a partir del día en que cesó la permanencia.

Artículo 87.- La prescripción de la acción se interrumpe por las actuaciones del Ministerio Público o de las autoridades judiciales practicadas durante el proceso, quedando sin efecto el tiempo transcurrido.

Después de la interrupción comienza a correr un nuevo plazo de prescripción, a partir del día siguiente de la última diligencia.

Se interrumpe igualmente la prescripción de la pena por la comisión de un nuevo delito doloso.

Sin embargo, la acción penal prescribe, en todo caso, cuando el tiempo transcurrido sobrepasa en una mitad al plazo ordinario de prescripción.

Artículo 88.- Si el comienzo o la continuación del proceso penal depende de cualquier cuestión que deba resolverse en otro procedimiento, se considera en suspenso la prescripción hasta que aquél quede concluido.

Artículo 89.- El plazo de prescripción de la pena es el mismo que alude o fija la ley para la prescripción de la acción penal. El plazo se contará desde el día en que la sentencia condenatoria quedó firme.

Artículo 90.- Se interrumpe el plazo de prescripción de la pena, quedando sin efecto el tiempo transcurrido, por el comienzo de ejecución de la misma o por haber sido aprehendido el condenado a causa de la comisión de un nuevo delito doloso.

Una vez interrumpida la prescripción, comenzará a correr de nuevo, si hay lugar a ello, como si antes no se hubiese iniciado.

En los casos de revocación de la condena condicional o de la reserva del fallo condenatorio, la prescripción comienza a correr desde el día de la revocación.

Sin embargo, la pena prescribe, en todo caso, en los mismos plazos de la acción penal.

Artículo 91. - La prescripción corre, se suspende o se interrumpe separadamente para cada uno de los partícipes del hecho punible.

Artículo 92.- La amnistía elimina legalmente el hecho punible a que se refiere e implica el perpetuo silencio respecto a él. El indulto suprime la pena impuesta.

Artículo 93.- Nadie puede ser perseguido por segundo vez en razón de un hecho punible sobre el cual se falló definitivamente.

Artículo 94.- El imputado tiene derecho a renunciar a la prescripción de la acción penal.

TÍTULO VI: DE LA REPARACIÓN CIVIL Y CONSECUENCIAS ACCESORIAS

CAPÍTULO I: REPARACIÓN CIVIL

Artículo 103.- Las causas de extinción de la acción penal y de la pena no se extienden a las obligaciones civiles que pudieran derivarse del hecho punible.

LIBRO TERCERO: FALTAS

TÍTULO I: DISPOSICIONES FUNDAMENTALES

Artículo 409.- Son aplicables a las faltas aquellas disposiciones contenidas en el Libro Primero, con las modificaciones siguientes:

6. La acción penal prescribe a los seis meses. La pena prescribe al año.

19. Proyecto de Código Penal de enero de 1991.-

LIBRO PRIMERO: PARTE GENERAL

TÍTULO V: DE LA EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL Y DE LA PENA

Artículo 78.- La acción penal se extingue:

- 1.- Por muerte del imputado, prescripción y amnistía;
- 2.- Por autoridad de cosa juzgada;
- 3.- En los casos que sólo proceda la acción privada, esta se extingue, además de las establecidas en el inciso 1, por desistimiento o transacción; y, en los delitos contra la libertad y el honor sexuales, por matrimonio subsiguiente.

Artículo 79.- Se extingue la acción penal si de la sentencia ejecutoriada dictada en la jurisdicción civil, resulte que el hecho imputado como delito lícito.

Artículo 80.- La acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley para el delito, si es privativa de libertad.

En caso de concurso real de delitos las acciones prescriben separadamente en el plazo señalado para cada uno.

En caso de concurso ideal de delitos las acciones prescriben cuando haya transcurrido un plazo igual al máximo correspondiente al delito más grave.

En ningún caso, la prescripción será mayor a veinte años.

En los delitos que merezcan otras penas la acción prescribe a los tres años.

Artículo 81.- Los plazos de prescripción se reducen a la mitad cuando el agente tenía menos de veintiún o más de sesenticinco años al tiempo de la comisión del hecho punible.

Artículo 82.- Los plazos de prescripción de la acción penal comienzan:

- 1.- En la tentativa, desde el día en que cesó la actividad delictuosa;
- 2.- En el delito instantáneo, a partir del día en que se consumó;
- 3.- En el delito continuado, desde el día en que terminó la actividad delictuosa; y
- 4.- En el delito permanente, a partir del día en que cesó la permanencia.

Artículo 83.- La prescripción de la acción se interrumpe por las actuaciones del Ministerio Público o de las autoridades judiciales, que dando sin efecto el tiempo transcurrido. Después de la interrupción comienza a correr un nuevo plazo de prescripción, a partir del día siguiente de la última diligencia.

Se interrumpe igualmente la prescripción de la acción por la comisión de un nuevo delito doloso.

Sin embargo, la acción penal prescribe, en todo caso, cuando el tiempo transcurrido sobrepasa en una mitad al plazo ordinario de prescripción.

Artículo 84.- Si el comienzo o la continuación del proceso penal depende de cualquier cuestión que deba resolverse en otro procedimiento, se considera en suspenso la prescripción hasta que aquel quede concluido.

Artículo 85.- La ejecución de la pena se extingue:

- 1.- Por muerte del condenado, amnistía, indulto prescripción;
- 2.- Por cumplimiento de la pena;
- 3.- Por exención de la pena; y
- 4.- Por perdón del ofendido en los delitos de acción privada.

Artículo 86.- El plazo de prescripción de la pena es el mismo que alude o fija la ley para la prescripción de la acción penal. El plazo se contará desde el día en que la sentencia condenatoria quedó firme.

Artículo 87.- Se interrumpe el plazo de prescripción de la pena quedando sin efecto el tiempo transcurrido, por el comienzo de ejecución de la misma o por haber sido aprehendido el condenado a causa de la comisión de un nuevo delito doloso.

Una vez interrumpida la prescripción, comenzará a correr de nuevo, si hay lugar a ello, como si antes no se hubiese iniciado.

En los casos de revocación de la condena condicional o de la reserva del fallo condenatorio, la prescripción comienza a correr desde el día de la revocación.

Sin embargo, la pena prescribe, en todo caso, en los mismos plazos de la acción penal.

Artículo 88.- La prescripción, corre, se suspende o se interrumpe separadamente para cada uno de los partícipes del hecho punible.

Artículo 89.- La amnistía elimina legalmente el hecho punible a que se refiere e implica el perpetuo silencio respecto a él. El indulto suprime la pena impuesta.

Artículo 90.- Nadie puede ser perseguido por segunda vez en razón de un hecho punible sobre el cual falló definitivamente.

Artículo 91.- El imputado tiene derecho a renunciar a la prescripción de la acción penal.

TÍTULO VI: DE LA REPARACION CIVIL Y CONSECUENCIAS ACCESORIAS

CAPITULO I: REPARACION CIVIL

Artículo 100°.- La acción civil deriva del hecho punible, no se extingue mientras subsista la acción penal.

Artículo 101°.- La reparación civil se rige además, por las disposiciones pertinentes del Código Civil.

CAPÍTULO VII: REHABILITACIÓN

Artículo 69.- El que ha cumplido la pena o medida de seguridad que le fue impuesta, o que de otro modo ha extinguido su responsabilidad, queda rehabilitado sin más trámite.

La rehabilitación produce los efectos siguientes:

- 1.- Restituye a la persona en los derechos suspendidos o restringidos por la sentencia. No produce el efecto de reponer en los cargos, comisiones o empleos de los que se le privó.
- 2.- La cancelación de los antecedentes penales, judiciales y policiales. Los certificados correspondientes no deben expresar la pena rehabilitada ni la rehabilitación.

LIBRO TERCERO: FALTAS

TÍTULO I: DISPOSICIONES FUNDAMENTALES

Artículo 433.- Son aplicables a las faltas las disposiciones contenidas en el Libro Primero, con las modificaciones siguientes:

- 1.- No es punible la tentativa.
- 2.- Sólo responde el autor.
- 3.- Las penas que pueden imponerse son las restrictivas de derechos y multa.
- 4.- Las días multa no serán menos de diez ni más de ciento ochenta.
- 5.- La acción penal prescribe a los seis meses. La pena prescribe al año.
- 6.- La investigación está a cargo de la autoridad policial; y el juzgamiento corresponde a los Jueces de Paz, Letrados o no Letrados.

20. Código penal de 1991 (Edición oficial).-

LIBRO PRIMERO: PARTE GENERAL

TÍTULO IV: DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

Artículo 75.- La duración de las medidas de internación no podrá exceder el tiempo de duración de la pena privativa de libertad que hubiera correspondido aplicarse por el delito cometido.

Sin perjuicio de que el Juez lo solicite cada seis meses, la autoridad del centro de internación deberá remitir al Juez una pericia médica a fin de darle a conocer si las causas que hicieron necesaria la aplicación de la medida han desaparecido.

En este último caso, el Juez hará cesar la medida de internación impuesta.

Artículo 77.- Cuando se necesite aplicar una medida de internación a un imputable relativo, el Juez dispondrá que ella tenga lugar antes de la pena. El período de internación se computará como tiempo de cumplimiento de la pena sin perjuicio que el juez pueda dar por extinguida la condena o reducir su duración atendiendo al éxito del tratamiento.

TÍTULO V: EXTINCIÓN DE LA ACCION PENAL Y DE LA PENA

Artículo 78.- La acción penal se extingue:

- 1.- Por muerte del imputado, prescripción y amnistía;
- 2.- Por autoridad de cosa juzgada;
- 3.- En los casos que sólo proceda la acción privada, ésta se extingue, además de las establecidas en el inciso 1, por desistimiento o transacción; y, en los delitos contra la libertad y el honor sexuales, por matrimonio subsiguiente.

Artículo 79.- Se extingue la acción penal se de la sentencia ejecutoriada dictada en la jurisdicción civil, resulte que el hecho imputado como delito es lícito.

Artículo 80.- La acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley para el delito, si es privativa de la libertad.

En caso de concurso real de delitos las acciones prescriben separadamente en el plazo señalado para cada uno. En caso de concurso ideal de delitos las acciones prescriben cuando haya transcurrido un plazo igual al máximo correspondiente al delito más grave.

En ningún caso, la prescripción será mayor a veinte años.

En los delitos que merezcan otras penas la acción prescribe a los tres años.

Artículo 81.- Los plazos de prescripción se reducen a la mitad cuando el agente tenía menos de veintiún o más de sesenticinco años al tiempo de la comisión del hecho punible.

Artículo 82.- Los plazos de prescripción de la acción penal comienzan:

- 1.- En la tentativa, desde el día en que cesó la actividad delictuosa;
- 2.- En el delito instantáneo, a partir del día en que se consumó;
- 3.- En el delito continuado, desde el día en que terminó la actividad delictuosa; y,
- 4.- En el delito permanente, a partir del día en que cesó la permanencia.

Artículo 83.- La prescripción de la acción se interrumpe por las actuaciones del Ministerio Público o de las autoridades judiciales, quedando sin efecto el tiempo transcurrido.

Después de la interrupción comienza a correr un nuevo plazo de prescripción, a partir del día siguiente de la última diligencia.

Se interrumpe igualmente la prescripción de la acción por la comisión de un nuevo delito doloso.

Sin embargo, la acción penal prescribe, en todo caso, cuando el tiempo transcurrido sobrepasa en una mitad al plazo ordinario de prescripción.

Artículo 84.- Si el comienzo o la continuación del proceso penal depende de cualquier cuestión que deba resolverse en otro procedimiento, se considera en suspenso la prescripción hasta que aquel quede concluido.

Artículo 85.- La ejecución de la pena se extingue:

- 1.- Por muerte del condenado, amnistía, indulto y prescripción;
- 2.- Por cumplimiento de la pena;
- 3.- Por exención de pena; y
- 4.- Por perdón del ofendido en los delitos de acción privada.

Artículo 86.- El plazo de prescripción de la pena es el mismo que alude o fija la ley para la prescripción de la acción penal. El plazo se contará desde el día en que la sentencia condenatoria quedó firme.

Artículo 87.- Se interrumpe el plazo de prescripción de la pena quedando sin efecto el tiempo transcurrido por el comienzo de ejecución de la misma o por haber sido aprehendido el condenado a causa de la comisión de un nuevo delito doloso.

Una vez interrumpida la prescripción, comenzará a correr de nuevo, si hay lugar a ello, como si antes no se hubiese iniciado.

En los casos de revocación de la condena condicional o de la reserva del fallo condenatorio, la prescripción comienza a correr desde el día de la revocación.

Sin embargo, la pena prescribe, en todo caso, en los mismos plazos de la acción penal.

Artículo 88.- La prescripción corre, se suspende o se interrumpe separadamente para cada uno de los partícipes del hecho punible.

Artículo 89.- La amnistía elimina legalmente el hecho punible a que se refiere e implica el perpetuo silencio respecto a él. El indulto suprime la pena impuesta.

Artículo 90.- Nadie puede ser perseguido por segunda vez en razón de un hecho punible sobre el cual se falló definitivamente.

Artículo 91.- El imputado tiene derecho a renunciar a la prescripción de la acción penal.

TÍTULO VI: DE LA REPARACIÓN CIVIL Y CONSECUENCIAS ACCESORIAS

CAPÍTULO I: REPARACIÓN CIVIL

Artículo 100.- La acción civil derivada del hecho punible no se extingue mientras subsista la acción penal.”

LIBRO TERCERO: FALTAS

TÍTULO I: DISPOSICIONES FUNDAMENTALES

Artículo 440.- Son aplicables a las faltas las disposiciones contenidas en el Libro Primero, con las modificaciones siguientes:

- 1.- No es punible la tentativa.
- 2.- Sólo responde el autor.
- 3.- Las penas que pueden imponerse son las restrictivas de derechos y multa.
- 4.- Los días-multa no serán menos de diez ni más de ciento ochenta.
- 5.- La acción penal prescribe a los seis meses. La pena prescribe al año.
- 6.- La investigación está a cargo de la autoridad policial y el juzgamiento corresponde a los Jueces de Paz, Letrados o no Letrados.

21. El Decreto Ley 25662 del 12 de Agosto de 1992 (Hoy derogado).

Artículo 1.- Los miembros de la Policía Nacional, en situación de actividad o dados de baja por medidas disciplinarias, que incurran en la comisión de hechos punibles calificados como delitos comunes, serán acreedores al doble de tiempo máximo de la pena fijada en el Código Penal o Leyes Especiales. Los miembros de la Policía Nacional retirados que incurran en la comisión de hechos punibles calificados como delitos comunes, serán acreedores a la pena máxima, incrementada en un cincuenta por ciento.

Artículo 2.- Modifícanse o deróganse, según sea el caso las disposiciones que se opongan al presente Decreto Ley.

22. Anteproyecto de ley del Código Penal, Parte General. Elaborado por la Comisión revisora del C.P. por ley N° 27837 en el año 2002, publicado en el año 2004.

TÍTULO V EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL Y DE LA PENA CAUSALES DE EXTINCIÓN

ARTÍCULO 80°.- La acción penal se extingue:

- 1° Por muerte del imputado, prescripción, amnistía y el derecho de gracia;
- 2° Por autoridad de cosa juzgada;
- 3° En los casos que sólo proceda la acción privada, ésta se extingue, además de las establecidas en el inciso 1), por desistimiento o transacción.

EN LA VÍA CIVIL

ARTÍCULO 81°.- Se extingue la acción penal si de la sentencia ejecutoriada dictada en la jurisdicción civil, resulte que el hecho imputado como delito es lícito.

TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN EN DELITO CON PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD

ARTÍCULO 82°.- La acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley para el delito, si es privativa de libertad.

En caso de concurso real de delitos, las acciones prescriben separadamente en el plazo señalado para cada uno.

En caso de concurso ideal de delitos, las acciones prescriben cuando haya transcurrido un plazo igual al máximo correspondiente al delito más grave.

La prescripción no será mayor a veinte años. Tratándose de delitos sancionados con pena de cadena perpetua se extingue la acción penal a los treinta años.

En los delitos que merezcan otras penas, la acción prescribe a los dos años.

En caso de delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos contra el patrimonio del Estado o de organismos sostenidos por éste, el plazo de prescripción se duplica.

En los delitos de genocidio, desaparición forzada y tortura la acción penal es imprescriptible.

TERMINOS DE PRESCRIPCIÓN EN CASOS DE RESPONSABILIDAD RESTRINGIDA

ARTÍCULO 83°.- Los plazos de prescripción se reducen a la mitad cuando el agente tenía menos de dieciocho o más de sesenticinco años al tiempo de la comisión del hecho punible.

INICIO DEL PLAZO

ARTÍCULO 84°.- Los plazos de prescripción de la acción penal comienzan:

- 1° En la tentativa, desde el día en que cesó la actividad delictuosa;
- 2° En el delito instantáneo, a partir del día en que se consumó;

3° En el delito continuado, desde el día en que terminó la actividad delictuosa; y

4° En el delito permanente, a partir del día en que cesó la permanencia.

INTERRUPCIÓN Y PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA

ARTÍCULO 85°.- La prescripción de la acción se interrumpe por las actuaciones del Ministerio Público o de las autoridades judiciales, o por la comisión de un nuevo delito doloso quedando sin efecto el tiempo transcurrido.

Después de la interrupción comienza a correr un nuevo plazo de prescripción, a partir del día siguiente de la última diligencia. En todo caso, la acción penal prescribe cuando el tiempo transcurrido sobrepasa en una mitad al plazo ordinario de prescripción.

SUSPENSIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN

ARTÍCULO 86°.- Si el comienzo o la continuación del proceso penal dependan de cualquier cuestión que deba resolverse necesariamente en otro procedimiento judicial, se suspende la prescripción hasta que aquél quede concluido. Igualmente en los casos previstos en la Constitución para levantarla inmunidad.

EXTINCIÓN DE LA PENA

ARTÍCULO 87°.- La ejecución de la pena se extingue:

1° Por muerte del condenado, amnistía, indulto y prescripción; 2° Por cumplimiento de la pena;

3° Por dispensa de pena; y

4° Por perdón del ofendido en los delitos de ejercicio privado de la acción penal.

PLAZO ORDINARIO DE PRESCRIPCIÓN DE LA PENA

ARTÍCULO 88°.- El plazo de prescripción de la pena es el mismo que establece o fija la ley para la prescripción de la acción penal. El plazo se contará desde el día en que la sentencia condenatoria quedó firme. En los casos de revocación de la suspensión condicional o de la reserva del fallo condenatorio, la prescripción comienza a correr desde el día de la revocación.

En los delitos de genocidio, desaparición forzada y tortura, la pena es imprescriptible.

INTERRUPCIÓN Y PLAZO EXTRAORDINARIO -DE PRESCRIPCIÓN

ARTÍCULO 89°.- Se interrumpe el plazo de prescripción de la pena, quedando sin efecto el tiempo transcurrido, por el comienzo de ejecución de la misma o por haber sido aprehendido el condenado a causa de la comisión de un nuevo delito doloso.

Una vez interrumpida la prescripción, comenzará a correr de nuevo, si hay lugar a ello, como si antes no se hubiese iniciado. En todo caso la pena prescribe, en el mismo plazo extraordinario de la acción penal.

INCOMUNICABILIDAD

ARTÍCULO 90°.- La prescripción corre, se suspende o se interrumpe separadamente para cada uno de los partícipes del hecho punible.

AMNISTÍA E INDULTO

ARTÍCULO 91°.- La amnistía elimina legalmente el hecho punible a que se refiere e implica el perpetuo silencio respecto a él. El indulto suprime la pena impuesta.

RENUNCIA A LA PRESCRIPCIÓN

ARTÍCULO 92°.- El imputado tiene derecho a renunciar a la prescripción de la acción penal.

(...)

TÍTULO VI

DE LA REPARACIÓN CIVIL Y CONSECUENCIAS ACCESORIAS

CAPÍTULO I

REPARACIÓN CIVIL

VIGENCIA DE LA ACCIÓN CIVIL

ARTÍCULO 101°.- La acción civil derivada del hecho punible no se extingue mientras subsista acción penal.

APLICACIÓN COMPLEMENTARIA DEL CÓDIGO CIVIL

ARTÍCULO 102°.- La reparación civil se rige, además, por las disposiciones pertinentes del Código Civil.

23. Anteproyecto de ley del Código Penal, Parte General. Elaborado por la Comisión revisora del C.P. por ley N° 29153 en el año 2007, concluyendo sus labores en el año 2010, luego que se prorrogara su funcionamiento por ley 29295 y 29435.

TÍTULO V

DE LA EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL Y DE LA PENA

ARTÍCULO 80°.-CAUSALES DE EXTINCIÓN

La acción penal se extingue:

Por muerte del imputado, prescripción, amnistía y el derecho de gracia.

Por autoridad de cosa juzgada.

En los casos que solo proceda la acción privada, esta se extingue, además de las establecidas en el numeral 1, por desistimiento o transacción.

ARTÍCULO 81°.-DE LA EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR SENTENCIA CIVIL

Se extingue la acción penal si de la sentencia ejecutoriada dictada en la jurisdicción civil resulte que el hecho imputado como delito es lícito.

ARTÍCULO 82°.-FORMA DE CÓMPUTO Y PLAZOS DE PRESCRIPCION

La acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley para el delito, si es privativa de libertad.

En caso de concurso real de delitos, las acciones prescriben separadamente en el plazo señalado para cada uno.

En caso de concurso ideal de delitos, las acciones prescriben cuando haya transcurrido un plazo igual al máximo correspondiente al delito más grave.

La prescripción no será mayor a 20 (veinte) años. Tratándose de delitos sancionados con pena de duración indeterminada, se extingue la acción penal a los 30 (treinta) años.

En los delitos que merezcan otras penas, la acción prescribe a los 3 (tres) años.

En caso de delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos contra el patrimonio del Estado o de organismos sostenidos por este, el plazo de prescripción se duplica.

En los delitos de genocidio, en los delitos de lesa humanidad, en los crímenes de guerra y en los crímenes de agresión, la acción penal es imprescriptible.

ARTÍCULO 83°.-REDUCCION DE LOS PLAZOS DE PRESCRIPCION

Los plazos de prescripción se reducen a la mitad cuando el agente tenía menos de 21 (veintiuno) o más de 65 (sesenta y cinco) años al tiempo de la comisión del hecho punible.

ARTÍCULO 84°.-INICIO DE LOS PLAZOS DE PRESCRIPCION

Los plazos de prescripción de la acción penal comienzan:

En la tentativa, desde el día en que cesó la actividad delictuosa

En el delito instantáneo, a partir del día en que se consumó.

En el delito continuado, desde el día en que terminó la actividad delictuosa.

En el delito permanente, a partir del día en que cesó la permanencia.

ARTÍCULO 85°.-INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL

La prescripción de la acción se interrumpe por las actuaciones del Ministerio Público o de las autoridades judiciales, quedando sin efecto el tiempo transcurrido.

Después de la interrupción, un nuevo plazo de prescripción comienza a correr a partir del día siguiente de la última diligencia.

Se interrumpe igualmente la prescripción de la acción por la comisión de un nuevo delito doloso.

Sin embargo, la acción penal prescribe, en todo caso, cuando el tiempo transcurrido sobrepasa en una mitad al plazo ordinario de prescripción.

ARTÍCULO 86°.-SUSPENSIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN

Si el comienzo o la continuación del proceso penal dependan de cualquier cuestión que deba resolverse en otro procedimiento, se considera en suspenso la prescripción hasta que aquel quede concluido.

ARTÍCULO 87°.-EXTINCIÓN DE LA EJECUCION DE LA PENA.CASOS

La ejecución de la pena se extingue:

Por muerte del condenado, amnistía, indulto y prescripción.

Por cumplimiento de la pena.

Por exención de pena.

Por perdón del ofendido en los delitos de de acción privada.

ARTÍCULO 88°.-PLAZO ORDINARIO DE PRESCRIPCIÓN DE LA PENA y MEDIDA DE SEGURIDAD

El plazo de prescripción de la pena o medida de seguridad es el mismo que establece o fija la ley para la prescripción de la acción penal. El plazo se contará desde el día en que la sentencia condenatoria quedó firme. En los delitos de genocidio, en los delitos de lesa humanidad, en los crímenes de guerra y en los crímenes de agresión, la pena es imprescriptible.

ARTÍCULO 89°.-INTERRUPCIÓN DEL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE LA PENA

Se interrumpe el plazo de prescripción de la pena, quedando sin efecto el tiempo transcurrido, por el comienzo de ejecución de la misma o por haber sido aprehendido el condenado a causa de la comisión de un nuevo delito doloso.

Una vez interrumpida la prescripción, comenzará a correr de nuevo, si hay lugar a ello, como si antes no se hubiese iniciado.

En los casos de revocación de la condena condicional o de la reserva del fallo condenatorio, la prescripción comienza a correr desde el día de la revocación.

Sin embargo, la pena prescribe, en todo caso, en los mismos plazos de la acción penal.

ARTÍCULO 90°.-INDIVIDUALIZACION DE LA PRESCRIPCION

La prescripción corre, se suspende o se interrumpe separadamente para cada uno de los partícipes del hecho punible.

ARTÍCULO 91°.-AMNISTÍA E INDULTO. EFECTOS

La amnistía elimina legalmente el hecho punible a que se refiere e implica el perpetuo silencio respecto a él. El indulto suprime la pena impuesta.

ARTÍCULO 92°.-COSA JUZGADA

Nadie puede ser perseguido por segunda vez en razón de un hecho punible sobre el cual se falló definitivamente.

ARTÍCULO 93°.-RENUNCIA A LA PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL

El imputado tiene derecho a renunciar a la prescripción de la acción penal.

TÍTULO VI**DE LA REPARACIÓN CIVIL****ARTÍCULO 102°.- COEXISTENCIA DE LA ACCION CIVIL Y LA ACCION PENAL**

La acción civil derivada del hecho punible no se extingue mientras subsista acción penal.

ARTÍCULO 103°.-APLICACIÓN SUPLETORIA DEL CÓDIGO CIVIL Y DEMAS NORMAS

La reparación civil se rige, además, por las disposiciones pertinentes del Código Civil y demás normas sustantivas o procesales complementarias.

LIBRO CUARTO**FALTAS****TÍTULO I****DISPOSICIONES GENERALES****ARTÍCULO 532°.-DISPOSICIONES COMUNES**

Son aplicables a las faltas las disposiciones contenidas en el Libro Primero, con las modificaciones siguientes: La acción penal y la pena prescriben al año. En caso de reincidencia, prescriben a los dos años.

24. Texto de la Constitución.-

a) Constitución Política del Perú de 1993

TÍTULO I: DE LA PERSONA Y DE LA SOCIEDAD

CAPÍTULO IV: DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Artículo 41.- Los funcionarios y servidores públicos que señala la ley o que administran o manejan fondos del Estado o de organismos sostenidos por éste deben hacer declaración jurada de bienes y rentas al tomar posesión de sus cargos, durante su ejercicio y al cesar en los mismos. La respectiva publicación se realiza en el diario oficial en la forma y condiciones que señala la ley.

Cuando se presume enriquecimiento ilícito, el Fiscal de la Nación, por denuncia de tercero o de oficio, formula cargos ante el Poder Judicial.

La ley establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como el plazo de su inhabilitación para la función pública.

El plazo de prescripción se duplica en caso de delitos cometidos contra el patrimonio del Estado.

Artículo 99.- Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso al Presidente de la República; a los representantes a Congreso; a los Ministros de Estado; a los miembros del Tribunal Constitucional; a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura; a los vocales de la Corte Suprema; a los fiscales supremos; al Defensor del Pueblo; y al Contralor General por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado en éstas.

Artículo 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional:

13. La prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada. La amnistía, el indulto, el sobreseimiento definitivo, y la prescripción producen los efectos de cosa juzgada.”

b) Constitución Política del Perú de 1979

25. Legislación Militar

a) Código Penal Militar y Policial (Decreto Legislativo N° 1094) vigente.

TÍTULO IV

DE LA EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL Y DE LA CONDENA

Artículo 43.- Causales de extinción de la acción penal

La posibilidad de iniciar acción penal o de pronunciar condena se extingue:

- 1.- Por muerte del imputado;
- 2.- Por amnistía;
- 3.- Por derecho de gracia;
- 4.- Por prescripción; y

5.- Por cosa juzgada.

Artículo 44.- Causales de extinción de la pena

La ejecución de la pena se extingue:

- 1.- Por muerte del condenado;
- 2.- Por amnistía;
- 3.- Por indulto;
- 4.- Por cumplimiento de la pena; y,
- 5.- Por prescripción.

Artículo 45.- Plazos de prescripción

La acción penal o la posibilidad de ejecutar la pena prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley para el delito, si es privativa de la libertad.

Si el delito es cometido con ocasión de conflicto armado internacional, la acción penal prescribirá a los treinta y cinco años.

Artículo 46.- Inicio del plazo de prescripción

1. Los plazos de prescripción de la acción penal comienzan:
 - a. A partir del día en que se consumó, en el delito instantáneo;
 - b. A partir del día en que terminó la actividad delictuosa, en el delito continuado;
 - c. A partir del día en que cesó la permanencia, en el delito permanente; y,
 - d. A partir del día en que cesó la actividad delictuosa, en la tentativa.
2. El plazo de prescripción de la pena comienza desde el día en que la sentencia condenatoria quedó firme.

Artículo 47.- Prescripción en concurso Las acciones prescriben:

1. En caso de concurso real de delitos, separadamente, en el plazo señalado para cada uno de los delitos; y,
2. En el caso de concurso ideal de delitos, cuando haya transcurrido un plazo igual al máximo correspondiente al delito más grave.

Artículo 48.- Interrupción de la prescripción de la acción penal

La prescripción de la acción penal se interrumpe por las actuaciones de las autoridades judiciales o de la Fiscalía Militar Policial, quedando sin efecto el tiempo transcurrido.

Después de la interrupción comienza a correr un nuevo plazo de prescripción, a partir del día siguiente de la última diligencia.

Igualmente, la prescripción de la acción penal se interrumpe por la comisión de un nuevo delito doloso.

Sin embargo, la acción penal prescribe, en todo caso, cuando el tiempo transcurrido sobrepasa en una mitad al plazo ordinario de prescripción.

Artículo 49.- Suspensión de la prescripción de la acción

Si el comienzo o la continuación del proceso penal dependiese cualquier cuestión que deba resolverse en otro procedimiento, la prescripción queda en suspenso hasta que aquel quede concluido.

Artículo 50.- Interrupción del plazo de prescripción de la pena

El plazo de prescripción de la pena se interrumpe y queda sin efecto el tiempo transcurrido por el comienzo de su ejecución o haber sido aprehendido el condenado a causa de la comisión de un nuevo delito doloso.

Una vez interrumpida la prescripción, comienza a correr de nuevo, si hay lugar a ello, como si antes no se hubiese iniciado.

En los casos de revocación de la condena condicional, la prescripción comienza a correr desde el día De la revocación.

Sin embargo la pena prescribe, en todo caso, en los mismos plazos que la acción penal.

TÍTULO V

DE LA REPARACIÓN CIVIL

Artículo 51.- Reparación civil

La reparación civil se establece en la sentencia conjuntamente con la pena. Esta obligación comprende:

1. La restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor; y,
2. La indemnización por los daños y perjuicios.

Artículo 52.- Restitución del bien

La restitución del bien se hace con el mismo bien aunque se halle en poder de terceros, sin perjuicio del derecho de éstos de interponer los reclamos o acciones judiciales correspondientes.

Artículo 53.- Responsabilidad solidaria

La reparación civil es solidaria entre los responsables del hecho punible y los terceros civilmente obligados.

Artículo 54.- Condenado insolvente

En caso que el condenado no tenga bienes realizables, el juez señalará hasta un tercio de los ingresos de éste para el pago de la reparación civil.

Artículo 55.- Acciones civiles

La acción civil derivada de la conducta punible no se extingue mientras subsista la acción penal en la jurisdicción militar policial. Procede la acción civil contra terceros cuando la sentencia dictada no les alcance. La reparación civil se rige, además, por las disposiciones del Código Civil.

(...)

Capítulo IV**Control de la duración del procedimiento****Artículo 252.- Duración máxima**

Todo procedimiento tendrá duración máxima e improrrogable de tres años, contados desde la apertura de la investigación, salvo que el término de prescripción sea menor, sin perjuicio del tiempo necesario para resolver el recurso extraordinario.

La contumacia, ausencia o suspensión por cualquier causa prevista en este Código interrumpirá los plazos de duración del proceso.

b) Código de Justicia Penal Militar (Decreto Legislativo N° 961).

TÍTULO III: DE LA EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL Y DE LA CONDENA

Artículo 55.- La posibilidad de iniciar acción penal o de pronunciar condena se extingue:

- a) Por muerte del encausado;
- b) por autoridad de cosa juzgada;
- c) Por amnistía; y,
- d) Por prescripción.

Artículo 56.- La condena penal se extingue:

- a) Por cumplimiento de pena;
- b) Por muerte del condenado;
- c) Por indulto; y,
- d) Por prescripción.

Artículo 57.- Ninguna persona puede ser nuevamente juzgada por razón de delito respecto del cual se haya expedido sentencia ejecutoria.

Artículo 58.- La amnistía suprime legalmente el hecho punible a que se refiere e implica el perpetuo silencio respecto de él. El indulto suprime la represión del hecho punible. Sólo extingue la pena o penas que expresamente indique la correspondiente resolución.

La amnistía y el indulto dejan subsistentes las acciones de reparación civil.

Artículo 59.- La posibilidad de iniciar acción penal o de pronunciar condena prescribe:

- a) Por delito que merezca pena de muerte o de internamiento, a los veinte años.
- b) Por delito que merezca pena de penitenciaría, a los doce años;
- c) Por delito que merezca pena de prisión, expulsión de los Institutos Armados o separación absoluta del servicio, a los ocho años;
- d) Por delito que merezca pena de reclusión militar o separación temporal del servicio, a los cuatro años;
- e) En los demás casos, a los tres años; y,
- f) Por faltas, a los dos años.

Artículo 60.- Corre el término de prescripción de la acción penal desde la fecha en que se cometió el delito, y si éste fuese continuo, desde el día en que terminó.

Artículo 61.- La acción civil proveniente del delito prescribe con la acción personal, conforme al Código Civil, salvo el mayor término previsto en este Código para la prescripción de la acción penal.

Artículo 62.- La prescripción de la acción se interrumpe por los actos judiciales de instrucción o de juzgamiento.

Después de la interrupción volverá a correr un nuevo plazo de prescripción. Sin embargo, la acción penal prescribe en todo caso cuando la duración del término ordinario de prescripción sobrepasa a una mitad.

Artículo 63.- Las penas impuestas por sentencia ejecutoriada prescriben:

- a) Las de muerte e internamiento, a los veinticuatro años;
- b) La penitenciaría, a los quince años;
- c) La de prisión, a los diez años; y,
- d) Las demás, a los cinco años, salvo para las faltas, en las que el término es de dos años.

Artículo 64.- El plazo de la prescripción de la pena comienza a contarse desde el día en que queda ejecutoriada la condena. Se interrumpe por el comienzo de la ejecución de la pena o por haber sido aprehendido el condenado para sufrirla. Interrumpida la prescripción, comenzará a correr de nuevo. Sin embargo, la pena prescribe en todo caso cuando la duración del término ordinario de prescripción sobrepasa en una mitad.

Si se hubiese concedido liberación condicional, la prescripción comenzará a correr desde el día de su revocación.

Artículo 65°.- La prescripción de la acción se interrumpe por la reiteración y la de la pena por reincidencia. Si antes de vencido el término de la prescripción comete el acusado otro delito, la prescripción queda sin efecto. La prescripción es irrenunciable, salvo lo prescrito en el artículo 418° de este Código.

26. Código de los Niños y Adolescentes (Ley N° 27337).-

La acción judicial prescribe a los dos años de cometido el acto infractor. Tratándose de una falta señalada en el Código Penal prescribe a los seis meses. El plazo de prescripción de la medida socio-educativa es de dos años, contados desde el día en que la sentencia quedó firme.

El adolescente contumaz o ausente estará sujeto a las normas contenidas en el ordenamiento procesal penal.

27. Legislación Procesal.-

a. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DE 1939 (DADO POR LEY N° 9014).

Artículo 5.- Contra la acción penal pueden deducirse las excepciones de naturaleza de juicio, naturaleza de acción, cosa juzgada, amnistía y prescripción.

La excepción de prescripción podrá deducirse cuando por el transcurso del tiempo, conforme a los plazos señalados, por el Código Penal, se extingue la acción o la pena.

Las excepciones pueden deducirse en cualquier estado del proceso y pueden ser resueltas de oficio por el juez. Si se declara fundada la excepción de naturaleza de juicio, se regularizará el procedimiento de acuerdo al trámite que le corresponda. Si se declara fundada cualquiera de las otras excepciones, se dará por fenecido el proceso y se mandará archivar definitivamente la causa.

Artículo 271.- Todas las cuestiones incidentales que surjan en las audiencias se plantearán verbalmente, pero las conclusiones deben presentarse por escrito. El tribunal las resolverá inmediatamente, o las aplazará para resolverlas en la sentencia.

Artículo 301.- Si la Corte Suprema no considera fundada la sentencia condenatoria o resulta que la acción penal ha prescrito o que el reo ha sido ya juzgado y condenado o absuelto por el mismo delito, puede anular dicha sentencia y absolver al condenado, aun cuando este no hubiese opuesto ninguna de estas excepciones.

b. Proyecto de Código Procesal Penal⁵⁵⁰.-

LIBRO PRIMERO: LA JUSTICIA PENAL (Artículos 1° al 91°)

TÍTULO I

CAPÍTULO I: DEL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL

Artículo 6.- Excepciones.- Las excepciones que pueden deducirse son las siguientes:

5. Prescripción, cuando por el vencimiento de los plazos señalados por el Código Penales haya extinguido la acción penal o el derecho de ejecución de la pena.

En caso que se declare fundada la excepción de naturaleza de juicio, el proceso se adecuará al trámite reconocido en el auto que la resuelva. Si se declara fundada cualquiera de las excepciones previstas en los cuatro últimos incisos, el proceso será sobreseído definitivamente.

Artículo 7.- Oportunidad de los medios de defensa.- Las cuestiones previas, cuestiones prejudiciales y excepciones se plantean en la etapa de la investigación o al contestar la querella ante el juez. En estos casos correrán en cuadernos separados y se resolverán necesariamente antes de la sentencia.

Las que se presenten después de la terminación de la investigación o con posterioridad a la cuestión de la querella, serán considerados como argumentos de defensa.

Las cuestiones previas y excepciones también pueden deducirse en los actos preparatorios al Juzgamiento, debiendo tramitarse de conformidad con el artículo 292 de este Código.

Los medios de defensa referidos en este dispositivo. Pueden ser declarados de oficio.

Artículo 346.- Sentencia Absolutoria.- La motivación de la sentencia absolutoria destacará especialmente la existencia o no del hecho imputado, la fundamentación de que ese hecho no constituye delito o de que existe una causa que lo extingue o de que el acusado no ha intervenido en la perpetración del hecho o de que los medios probatorios no son suficientes para establecer la culpabilidad del acusado o de que subsiste una duda o de que está probada la causal que exime la responsabilidad penal.

c. Nuevo Código Procesal Penal del 2004

LIBRO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

SECCIÓN I

LA ACCIÓN PENAL

Artículo 6 Excepciones.-

1. Las excepciones que pueden deducirse son las siguientes:

a) Naturaleza de juicio, cuando se ha dado al proceso una sustanciación distinta a la prevista en la Ley.

b) Improcedencia de acción, cuando el hecho no constituye delito o no es justiciable penalmente.

⁵⁵⁰ El presente texto corresponde a la última versión del Proyecto Código Procesal Penal de fecha 05 de Marzo de 1996, la diferencia con los anteriores textos solo es en algunos casos de numeración, empero en torno al D. Leg. 638, si difiere pues el art. 10 de éste no precisa el caso de las excepciones en los actos preparatorios.

c) Cosa juzgada, cuando el hecho punible ha sido objeto de una resolución firme, nacional o extranjera contra la misma persona.

d) Amnistía.

e) Prescripción, cuando por el vencimiento de los plazos señalados por el Código Penal se haya extinguido la acción penal o el derecho de ejecución de la pena.

Artículo 7 Oportunidad de los medios de defensa.-

1. La cuestión previa, cuestión prejudicial y las excepciones se plantean una vez que el Fiscal haya decidido continuar con las investigaciones preparatorias o al contestar la querella ante el Juez y se resolverán necesariamente antes de culminar la Etapa Intermedia.

2. La cuestión previa y las excepciones también se pueden deducir durante la Etapa Intermedia, en la oportunidad fijada por la Ley.

3. Los medios de defensa referidos en este dispositivo, pueden ser declarados de oficio.

Artículo 8 Trámite de los medios de defensa.-

1. La cuestión previa, cuestión prejudicial y las excepciones que se deduzcan durante la Investigación Preparatoria serán planteadas mediante solicitud debidamente fundamentada ante el Juez de la Investigación Preparatoria que recibió la comunicación señalada en el artículo 3, adjuntando, de ser el caso, los elementos de convicción que correspondan.

2. El Juez de la Investigación Preparatoria, una vez que ha recabado información del Fiscal acerca de los sujetos procesales apersonados en la causa y luego de notificarles la admisión del medio de defensa deducido, dentro del tercer día señalará fecha para la realización de la audiencia, la que se realizará con quienes concurren a la misma. El Fiscal asistirá obligatoriamente y exhibirá el expediente fiscal para su examen inmediato por el Juez en ese acto.

3. Instalada la audiencia, el Juez de la Investigación Preparatoria escuchará por su orden, al abogado defensor que propuso el medio de defensa, al Fiscal, al defensor del actor civil y al defensor de la persona jurídica según lo dispuesto en el artículo 90 y del tercero civil. En el turno que les corresponde, los participantes harán mención a los elementos de convicción que consten en autos o que han acompañado en sede judicial. Si asiste el imputado tiene derecho a intervenir en último término.

4. El Juez de la Investigación Preparatoria resolverá inmediatamente o, en todo caso, en el plazo de dos días luego de celebrada la vista. Excepcionalmente, y hasta por veinticuatro horas, podrá retener el expediente fiscal para resolver el medio de defensa deducido, que se hará mediante auto debidamente fundamentado.

5. Cuando el medio de defensa se deduce durante la Etapa Intermedia, en la oportunidad fijada en el artículo 350, se resolverán conforme a lo dispuesto en el artículo 352.

6. La cuestión previa, cuestión prejudicial y las excepciones deducidas a favor de uno de los imputados beneficia a los demás, siempre que se encuentren en igual situación jurídica.

Artículo 9 Recurso de Apelación.-

1. Contra el auto expedido por el Juez de la Investigación Preparatoria procede recurso de apelación.

2. Concedido el recurso de apelación, el Juez de la Investigación Preparatoria dispondrá, antes de la elevación del recurso a la Sala Penal Superior, que dentro del quinto día se agreguen a los actuados formados en sede judicial las copias certificadas pertinentes del expediente fiscal. Si transcurre el plazo sin que se haya agregado las copias correspondientes, el Juez inmediatamente elevará los actuados a la Sala Penal Superior, la

que sin perjuicio de poner este hecho en conocimiento del Fiscal Superior instará al Fiscal Provincial para que complete el cuaderno de apelación.

Artículo 12 Ejercicio alternativo y accesoriedad.-

1. El perjudicado por el delito podrá ejercer la acción civil en el proceso penal o ante el Orden Jurisdiccional Civil. Pero una vez que se opta por una de ellas, no podrá deducirla en la otra vía jurisdiccional.
2. Si la persecución penal no pudiese proseguir, ya sea que se disponga la reserva del proceso o se suspenda por alguna consideración legal, la acción civil derivada del hecho punible podrá ser ejercida ante el Orden Jurisdiccional Civil.
3. La sentencia absolutoria o el auto de sobreseimiento no impedirá al órgano jurisdiccional pronunciarse sobre la acción civil derivada del hecho punible válidamente ejercida, cuando proceda.

TÍTULO IV

LA VÍCTIMA

CAPÍTULO I

EL AGRAVIADO

Artículo 94 Definición.-

1. Se considera agraviado a todo aquél que resulte directamente ofendido por el delito o perjudicado por las consecuencias del mismo. Tratándose de incapaces, de personas jurídicas o del Estado, su representación corresponde a quienes la Ley designe.
2. En los delitos cuyo resultado sea la muerte del agraviado tendrán tal condición los establecidos en el orden sucesorio previsto en el artículo 816 del Código Civil.
3. También serán considerados agraviados los accionistas, socios, asociados o miembros, respecto de los delitos que afectan a una persona jurídica cometidos por quienes las dirigen, administran o controlan.
4. Las asociaciones en los delitos que afectan intereses colectivos o difusos, cuya titularidad lesione a un número indeterminado de personas, o en los delitos incluidos como crímenes internacionales en los Tratados Internacionales aprobados y ratificados por el Perú, podrán ejercer los derechos y facultades atribuidas a las personas directamente ofendidas por el delito, siempre que el objeto social de la misma se vincule directamente con esos intereses y haya sido reconocida e inscrita con anterioridad a la comisión del delito objeto del procedimiento.

Artículo 95 Derechos del agraviado.-

1. El agraviado tendrá los siguientes derechos:
 - a) A ser informado de los resultados de la actuación en que haya intervenido, así como del resultado del procedimiento, aun cuando no haya intervenido en él, siempre que lo solicite;
 - b) A ser escuchado antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal, siempre que lo solicite;

TÍTULO III

LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA

Artículo 334 Calificación.-

1. Si el Fiscal al calificar la denuncia o después de haber realizado o dispuesto realizar diligencias preliminares, considera que el hecho denunciado no constituye delito, no es justiciable penalmente, o se presentan causas de extinción previstas en la Ley, declarará que no procede formalizar y continuar con la Investigación Preparatoria, así como ordenará el archivo de lo actuado. Esta Disposición se notificará al denunciante y al denunciado.

(...)

Artículo 339.- Efectos de la formalización de la investigación.-

1. La formalización de la investigación suspenderá el curso de la prescripción de la acción penal.

SECCIÓN V

EL RECURSO DE CASACIÓN

Artículo 427 Procedencia.-

1. El recurso de casación procede contra las sentencias definitivas, los autos de sobreseimiento, y los autos que pongan fin al procedimiento, extingan la acción penal o la pena o denieguen la extinción, conmutación, reserva o suspensión de la pena, expedidos en apelación por las Salas Penales Superiores.

(...)

Artículo 436 Improcedencia de recursos.-

1. La sentencia casatoria no será susceptible de recurso alguno, sin perjuicio de la acción de revisión de la sentencia condenatoria prevista en este Código.

2. Tampoco será susceptible de impugnación la sentencia que se dictare en el juicio de reenvío por la causal acogida en la sentencia casatoria. Sí lo será, en cambio, si se refiere a otras causales distintas de las resueltas por la sentencia casatoria.

SECCIÓN VII

LA ACCIÓN DE REVISIÓN

Artículo 442 Efectos.- La interposición de la demanda de revisión no suspende la ejecución de la sentencia. Sin embargo, en cualquier momento del procedimiento, la Sala podrá suspender la ejecución de la sentencia impugnada y disponer, de ser el caso, la libertad del imputado, incluso aplicando, si correspondiere, una medida de coerción alternativa.

SECCIÓN II

EL PROCESO POR RAZÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

TÍTULO I

EL PROCESO POR DELITOS DE FUNCIÓN ATRIBUIDOS A ALTOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS

Artículo 449 Disposiciones aplicables.- El proceso penal contra los altos funcionarios públicos taxativamente designados en el artículo 99 de la Constitución por los delitos que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de haber cesado en él, se regirá por las reglas del proceso común, salvo las que se establecen en este Título.

Artículo 450 Reglas específicas para la incoación del proceso penal.-

(...)

9. El plazo que se refiere al artículo 99 de la Constitución no interrumpe ni suspende la prescripción de la acción penal de conformidad con el artículo 84 del Código Penal.

LIBRO SEXTO LA EJECUCIÓN Y LAS COSTAS

SECCIÓN I

LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA

Artículo 491 Incidentes de modificación de la sentencia.-

1. El Ministerio Público, el condenado y su defensor, según corresponda, podrán plantear, ante el Juez de la Investigación Preparatoria incidentes relativos a la conversión y revocación de la conversión de penas, a la revocación de la suspensión de la ejecución de la pena y de la reserva del fallo condenatorio, y a la extinción o vencimiento de la pena.

TÍTULO II

LA DETENCIÓN Y ENTREGA DE PERSONAS Y LA DETENCIÓN PROVISIONAL

Artículo 557 Recepción y trámite.-

(...)

6. Si el detenido contestara la solicitud de entrega, alegando la ocurrencia de cosa juzgada, sin perjuicio de la continuación del trámite, el Juez de la Investigación Preparatoria formará cuaderno con copia certificada de lo actuado y lo elevará a la Fiscalía de la Nación, la cual inmediatamente consultará a la Corte Penal Internacional para que informe si hubo decisión de admisibilidad de la causa. El expediente principal, en el estado en que se encuentre, quedará suspendido hasta la respuesta de la Corte Penal Internacional. En este caso:

a) Si la causa fue admitida, la autoridad judicial dará curso al pedido de detención y entrega;

b) Si estuviese pendiente la decisión sobre la admisibilidad, la autoridad judicial podrá determinar la suspensión del procedimiento de entrega, a la espera de la decisión de la Corte Penal Internacional.

ANEXO 1-A
CUADRO DE PROYECTOS DE LEY
SOBRE IMPRESCRIPTIBILIDAD Y
OTROS

CUADRO DE PROYECTOS DE LEY SOBRE IMPRESCRIPTIBILIDAD Y OTROS

Nº	Proyecto de ley	Fecha	Agrupación	Materia	Autor	Reforma Constitucional	Regla Propuesta	
1	1445	14/06/1996		Imprescriptibilidad	Elferes Vidarte Correa	No	<p>Código Penal:</p> <p>"Artículo 80.- La acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley para el delito, si es privativa de libertad. En caso de concurso real de delitos, las acciones prescriben cuando haya transcurrido un plazo igual al máximo correspondiente al delito más grave. En ningún caso, la prescripción será mayor a veinte años, salvo en los delitos contra el patrimonio del Estado. En los delitos que merezcan otras penas la acción prescribe a los tres años. En caso de delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos contra el patrimonio del Estado o de organismos sostenidos por éste, el plazo para la acción penal es imprescriptible"</p> <p>"Artículo 89.- La amnistía elimina el hecho punible a que se refiere e implica el perpetuo silencio respecto a él. El indulto suprime la pena impuesta. Estas medidas de gracia no son aplicables en los delitos contra el patrimonio del Estado".</p>	Palabra clave
2	2275	25/11/1996		Imprescriptibilidad	Elferes Vidarte Correa	No	<p>Código Penal:</p> <p>"Artículo 80.- La acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley para el delito, si es privativa de libertad. En caso de concurso real de delitos, las acciones prescriben cuando haya transcurrido un plazo igual al máximo correspondiente al delito más grave. En ningún caso, la prescripción será mayor a veinte años, salvo en los delitos contra el patrimonio del Estado. En los delitos que merezcan otras penas la acción prescribe a los tres años. En caso de delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos contra el patrimonio del Estado o de organismos sostenidos por éste, el plazo para la acción penal es imprescriptible".</p> <p>"Artículo 89.- La amnistía elimina el hecho punible a que se refiere e implica el perpetuo silencio respecto a él. El indulto suprime la pena impuesta. Estas medidas de gracia no son aplicables en los delitos contra el patrimonio del Estado".</p>	Delitos contra el patrimonio del Estado por funcionarios y servidores públicos.

CUADRO DE PROYECTOS DE LEY SOBRE IMPRESCRIPTIBILIDAD Y OTROS

Nº	Proyecto de ley	Fecha	Agrupación	Materia	Autor	Reforma Constitucional	Regla Propuesta	
3	4533	26/02/1999		Prescripción	Roger Cáceres Velásquez	No	<p>Código Penal: "Artículo 80.- (...) "En los delitos contra el honor -calumnia-, la acción prescribe a partir de que haya quedado debidamente consentida y ejecutoriada aquella sentencia que condena o exime de responsabilidad penal, en todo o en parte a quien se atribuyó falsamente la comisión de un hecho delictivo".</p> <p>"Artículo 82.- (...) "En los delitos contra el honor -calumnia-, la acción prescribe conforme a lo dispuesto en el párrafo final del Art.80° del presente texto".</p>	De la acción en delitos contra el honor.
4	4849	27/05/1999		Prescripción	Lara Carlos Torres y Torres	No	<p>Código Penal "Artículo 84.- (...) Durante el mandato de un Congresista se interrumpen todos los plazos de prescripción previstos en este Código, en relación con los delitos que se le imputen, proceda o no proceda el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, conforme al artículo 93° de la Constitución".</p>	Se interrumpe en delitos cometidos contra un congresista.

CUADRO DE PROYECTOS DE LEY SOBRE IMPRESCRIPTIBILIDAD Y OTROS

Nº	Proyecto de ley	Fecha	Agrupación	Materia	Autor	Reforma Constitucional	Regla Propuesta	
5	1289	24/01/2001		Prescripción	Jorge Samuel Chávez Sibina	No	<p>Código Penal:</p> <p>“Artículo 80.- La acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley para el delito, si es privativa de libertad. En caso de concurso real de delitos las acciones prescriben separadamente en el plazo señalado para cada uno. En caso de concurso ideal de delitos las acciones prescriben cuando haya transcurrido un plazo igual al máximo correspondiente al delito más grave.</p> <p>La prescripción no será mayor a veinte años. Tratándose de delitos sancionados con pena de cadena perpetua se extingue la acción penal a los treinta años.</p> <p>En los delitos que merezcan otras penas la acción prescribe a los tres años.</p> <p>En caso de delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos contra el patrimonio del Estado o de organismos sostenidos por éste el plazo de prescripción se duplica.</p> <p>En el caso de delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos señalados en el segundo párrafo del artículo 393º no será aplicable este artículo”.</p> <p>Constitución política:</p> <p>“Artículo 41.- Los funcionarios públicos que señala la ley o que administran o manejan fondos del Estado o de organismos sostenidos por éste deben hacer declaración jurada de bienes y rentas al tomar posesión de sus cargos, durante su ejercicio y al cesar en los mismos. La respectiva publicación se realiza en el diario oficial en la forma y condiciones que señala la ley.</p> <p>Al finalizar el desempeño de su cargo todos los funcionarios públicos que señala la ley y que no estuvieren comprendidos en el artículo 99 quedarán sujetos a un juicio de residencia iniciado por la Contraloría General de la República ante un Tribunal Mayor de Cuentas, conforme ley.</p> <p>Cuando se presume enriquecimiento ilícito, el Ministerio Fiscal, de oficio o por denuncia de terceros, formula cargos ante la Autoridad Jurisdiccional. La ley establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como el plazo de su inhabilitación para la función pública. El plazo de prescripción se duplica en caso de delitos cometidos contra el patrimonio del Estado.”</p>	Se duplica el plazo de prescripción en caso de delitos cometidos por funcionario público contra el patrimonio del Estado.
6	1340	01/02/2001	No Agrupado	Prescripción	Fernán Romano Altuve-Febres Lorez	Si		

CUADRO DE PROYECTOS DE LEY SOBRE IMPRESCRIPTIBILIDAD Y OTROS

Nº	Proyecto de ley	Fecha	Agrupación	Materia	Autor	Reforma Constitucional	Regla Propuesta	
7	1522	08/03/2001	Somos Perú	Imprescriptibilidad	Ana Elena Luisa Cristina Townsend Diez- Canseco	Si	<p>Constitución Política:</p> <p>"Artículo 41.- Los funcionarios y servidores públicos que señala la ley o que administran o manejan fondos del Estado o de organismos sostenidos por éste deben hacer declaración jurada de bienes y rentas al tomar posesión de sus cargos, durante su ejercicio y al cesar en los mismos. La respectiva publicación se realiza en el diario oficial en la forma y condiciones que señala la ley.</p> <p>Cuando se presume enriquecimiento ilícito, el Fiscal de la Nación, por denuncia de terceros o de oficio, formula cargos ante el Poder Judicial. La ley establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como el plazo de su inhabilitación para la función pública. El plazo de prescripción se duplica en caso de delitos cometidos contra el patrimonio del Estado y no prescriben si los autores son funcionarios públicos".</p>	Delitos contra el patrimonio del estado por funcionarios contra el patrimonio del Estado
8	1569	16/03/2001	Grupo Parlamentario Independiente	Prescripción	María Cecilia Laura Martínez Del Solar Salgado de Franco	A	<p>Constitución Política:</p> <p>"Artículo 41.- (...)</p> <p>"El plazo de prescripción se triplicará en caso de delitos cometidos contra el patrimonio del Estado, salvo aquellos de delitos cometidos por funcionarios públicos cuyas penas máximas sean superiores a los diez años, en los que el plazo de prescripción se entenderá no mayor de treinta años".</p> <p>Código Penal:</p> <p>"Artículo 80.- (...)</p> <p>En casos de delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos contra el patrimonio del Estado o de organismos sostenidos por éste, el plazo de prescripción se triplica, exceptuándose los casos de aquellos delitos en los que la pena máxima supere los diez años, en los que la prescripción se entenderá como no mayor de treinta años".</p> <p>"Artículos 398, 398-A, 399 y 400.- (...)</p> <p>En el caso del presente artículo, para la prescripción de la acción penal, será de aplicación el último párrafo del artículo 80º del Título V del Libro Primero del Código Penal".</p>	Se triplica el plazo de prescripción en caso de delitos cometidos por funcionario público contra el patrimonio del Estado, cuando la pena exceda los diez años.

CUADRO DE PROYECTOS DE LEY SOBRE IMPRESCRIPTIBILIDAD Y OTROS

Nº	Proyecto de ley	Fecha	Agrupación	Materia	Autor	Reforma Constitucional	Regla Propuesta	
9	1671	16/04/2001	Perú Posible	Imprescriptibilidad	Luis María Santiago Eduardo Solari De La Fuente	Si	Constitución política: “Artículo 41.- Los funcionarios y servidores públicos que señala la ley o que administran o manejan fondos del Estado o de entidades, organismos o empresas del Estado o sostenidos por éste deben hacer declaración jurada de bienes y rentas al tomar posesión sus cargos, durante su ejercicio y al cesar en los mismos. La respectiva publicación se realiza en el diario oficial en la forma y condiciones que señala la ley. Cuando se presume enriquecimiento ilícito, el Fiscal de la Nación, por denuncia de terceros o de oficio, formula cargos ante el Poder Judicial. La Ley establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como el plazo de su inhabilitación para la función pública. Los delitos de enriquecimiento ilícito y los cometidos contra el patrimonio del Estado son imprescriptibles.”	
10	1672	16/04/2001	Perú Posible	Imprescriptibilidad	Luis María Santiago Eduardo Solari De La Fuente	No	Código Penal: “Artículo 80.- (...) Son imprescriptibles los delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos contra el patrimonio del Estado o de entidades, organismos o empresas del Estado o sostenidos por éste.”	
11	00105	27/07/2001	Perú Posible	Imprescriptibilidad	Marcial Ayaipoma Alvarado	Si	Constitución política: “Artículo 41.- Los funcionarios y servidores públicos que señala la Ley o que administran o manejan fondos del Estado o de organismos sostenidos por éste deben hacer declaración jurada de bienes y rentas al tomar posesión de sus cargos, durante su ejercicio y al cesar en los mismos. La respectiva publicación se realiza en el diario oficial en la forma y condiciones que señala la Ley. Cuando se presume enriquecimiento ilícito, el Fiscal de la Nación, por denuncia de terceros o de oficio, formula cargos ante el Poder Judicial. En caso de delitos cometidos contra el patrimonio del Estado, la acción penal es imprescriptible. Además de la pena privativa de la libertad correspondiente, se aplicará al funcionario y servidor público responsable la pena de inhabilitación perpetua para la función pública, así como la confiscación de los bienes obtenidos o derivados de la comisión de delitos contra el Patrimonio del Estado, sin perjuicio de la reparación civil respectiva.”	

CUADRO DE PROYECTOS DE LEY SOBRE IMPRESCRIPTIBILIDAD Y OTROS

Nº	Proyecto de ley	Fecha	Agrupación	Materia	Autor	Reforma Constitucional	Regla Propuesta	
12	119	27/07/2001	Perú Posible	Imprescriptibilidad	Luis Solari De La Fuente	Si	<p>Constitución política:</p> <p>“Artículo 41.- Los funcionarios y servidores públicos que señala la ley o que administran o manejan fondos del Estado o de entidades, organismos o empresas del Estado o sostenidos por éste deben hacer declaración jurada de bienes y rentas al tomar posesión sus cargos, durante su ejercicio y al cesar en los mismos. La respectiva publicación se realiza en el diario oficial en la forma y condiciones que señala la ley.</p> <p>Cuando se presume enriquecimiento ilícito, el Fiscal de la Nación, por denuncia de terceros o de oficio, formula cargos ante el Poder Judicial.</p> <p>La Ley establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como el plazo de su inhabilitación para la función pública.</p> <p>Los delitos de enriquecimiento ilícito y los cometidos contra el patrimonio del Estado son imprescriptibles.”</p>	
13	00501	28/08/2001	Unión Parlamentaria Descendralista	Prescripción	Javier Diez Canseco Cisneros	No	<p>Código Penal:</p> <p>"Artículo 80.-</p> <p>(...)</p> <p>En casos de delitos cometidos por funcionarios públicos, servidores públicos o particulares contra el patrimonio del Estado, el plazo de prescripción se duplica".</p>	Se duplica el plazo de prescripción en caso de delitos cometidos por funcionario público contra el patrimonio del Estado.

CUADRO DE PROYECTOS DE LEY SOBRE IMPRESCRIPTIBILIDAD Y OTROS

Nº	Proyecto de ley	Fecha	Agrupación	Materia	Autor	Reforma Constitucional	Regla Propuesta	
14	00719	18/09/2001	Perú Posible	Imprescriptibilidad	Gloria Helfer Palacios	Si	<p>Constitución Política:</p> <p>"Artículo 41.- Los funcionarios y servidores públicos que señala la Ley o que administran o manejan fondos del Estado o de organismos sostenidos por éste deben hacer declaración jurada de bienes y rentas al tomar posesión de sus cargos, durante su ejercicio y al cesar en los mismos. La respectiva publicación se realiza en el diario oficial en la forma y condiciones que señala la Ley.</p> <p>Cuando se presume enriquecimiento ilícito, el Fiscal de la Nación, por denuncia de terceros o de oficio, formula cargos ante el Poder Judicial.</p> <p>La ley establece la responsabilidad de funcionarios y servidores públicos, así como el plazo de su inhabilitación para la función pública.</p> <p>Los delitos que generen actos de corrupción son imprescriptibles y la inhabilitación de 10 años sin perjuicio de las sanciones judiciales y/o administrativas que correspondan".</p>	Delitos que generen actos de corrupción.
15	00896	03/10/2001	Perú Posible	Imprescriptibilidad	Ana Elena Townsend DiezCanseco	Si	<p>Constitución política:</p> <p>"Artículo 41.- Los funcionarios y servidores públicos que señala la ley o que administran o manejan fondos del Estado o de organismos sostenidos por éste deben hacer declaración jurada de bienes y rentas al tomar posesión de sus cargos, durante su ejercicio y al cesar en los mismos. La respectiva publicación se realiza en el diario oficial en la forma y condiciones que señala la ley.</p> <p>Cuando se presume enriquecimiento ilícito, el Fiscal de la Nación, por denuncia de terceros o de oficio, formula cargos ante el Poder Judicial.</p> <p>La ley establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como el plazo de su inhabilitación para la función pública.</p> <p>El plazo de prescripción se duplica en caso de delitos cometidos contra el patrimonio del Estado y no prescriben si los autores son funcionarios públicos."</p>	

CUADRO DE PROYECTOS DE LEY SOBRE IMPRESCRIPTIBILIDAD Y OTROS

Nº	Proyecto de ley	Fecha	Agrupación	Materia	Autor	Reforma Constitucional	Regla Propuesta	
16	1236	08/11/2001	Frente Independiente Moralizador	Imprescriptibilidad	Dora Núñez Dávila	A	<p>Constitución Política: "Artículo 41º.- (...) No prescribirán los delitos cometidos por los altos funcionarios del Estado, comprendidos dentro de los alcances del artículo 39º de la Constitución Política, en el ejercicio de sus funciones."</p> <p>Código Penal: "Artículo 80º-A.- La acción penal no prescribirá, en caso de delitos cometidos por el Presidente de la República, los representantes al Congreso, los Ministros de Estado, los miembros del Tribunal Constitucional, los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, los vocales de la Corte Suprema, los Fiscales Supremos, el Defensor del Pueblo, el Contralor General, los representantes de organismos descentralizados y Alcaldes, durante el ejercicio de sus funciones."</p>	
17	2094	26/02/2002	Frente Independiente Moralizador	Imprescriptibilidad	Dora Núñez Dávila	Si	<p>Constitución política: "Artículo 41.- (...) El plazo de prescripción se duplica en caso de delitos cometidos contra el patrimonio del Estado; y no prescribe para dichos delitos, si el autor se encuentra comprendido en el artículo 99º de la Constitución Política."</p>	

CUADRO DE PROYECTOS DE LEY SOBRE IMPRESCRIPTIBILIDAD Y OTROS

Nº	Proyecto de ley	Fecha	Agrupación	Materia	Autor	Reforma Constitucional	Regla Propuesta	
18	02121	01/03/2002	Perú Posible	Imprescriptibilidad	Alejandro Oré Mora	A	<p>Constitución Política:</p> <p>"Artículo 41.- Los funcionarios y servidores públicos que señala la ley o que administran o manejan fondos del Estado o de organismos sostenidos por éste deben hacer declaración jurada de bienes y rentas al tomar posesión de sus cargos, durante su ejercicio y al cesar en los mismos. La respectiva publicación se realiza en el diario oficial en la forma y condiciones que señala la ley.</p> <p>Cuando se presume enriquecimiento ilícito, el Fiscal de la Nación, por denuncia de terceros o de oficios, formula cargos ante el Poder Judicial.</p> <p>La ley establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como el plazo de su inhabilitación para la función pública.</p> <p>El plazo de prescripción se duplica en caso de delitos cometidos contra el patrimonio del Estado y no prescriben si los autores son funcionarios públicos".</p> <p>Código Penal.-</p> <p>"Artículo 80.- La acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley para el delito, si es privativa de libertad. En caso de concurso real de delitos, las acciones prescriben separadamente en el plazo señalado para cada uno.</p> <p>En caso de concurso ideal de delitos, las acciones prescriben cuando haya transcurrido un plazo igual al máximo correspondiente al delito más grave.</p> <p>La prescripción no será mayor a veinte años. Tratándose de delitos sancionados con pena de cadena perpetua se extingue la acción penal los treinta años.</p> <p>En los delitos que merezcan otras penas, la acción prescribe a los tres años.</p> <p>En casos de delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos contra el patrimonio del Estado o de organismos sostenidos por éste la acción penal no prescribe".</p>	Delitos contra el patrimonio del Estado por funcionarios y servidores públicos.

CUADRO DE PROYECTOS DE LEY SOBRE IMPRESCRIPTIBILIDAD Y OTROS

Nº	Proyecto de ley	Fecha	Agrupación	Materia	Autor	Reforma Constitucional	Regla Propuesta	
19	02162	06/03/2002	Unión Parlamentaria Descentralista	Imprescriptibilidad	Michel Martínez González	A	<p>Constitución Política: "Artículo 41.- (...) En caso de los delitos cometidos contra el patrimonio del Estado, la acción penal será imprescriptible".</p> <p>Código Penal: "Artículo 80.- (...) La imprescriptibilidad tendrá lugar en casos de delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos contra el patrimonio del Estado o de organismos sostenidos por estos".</p>	Delitos contra el patrimonio del Estado por funcionarios y servidores públicos.
20	04314	22/10/2002	Frente Independiente Moralizador	Imprescriptibilidad	Heriberto Benítez Rivas	No	<p>Código Penal: "Artículo 80.- (...) En los delitos de genocidio, desaparición forzada y tortura la acción penal es imprescriptible".</p> <p>"Artículo 89.- No procede la amnistía, ni el indulto en favor de los responsables de los delitos de genocidio, desaparición forzada y tortura".</p>	Delitos contra la Humanidad.

CUADRO DE PROYECTOS DE LEY SOBRE IMPRESCRIPTIBILIDAD Y OTROS

Nº	Proyecto de ley	Fecha	Agrupación	Materia	Autor	Reforma Constitucional	Regla Propuesta	
21	5055	18/12/2002	Perú Posible	Imprescriptibilidad	Alberto Cruz Loyola	Si	<p>Constitución política:</p> <p>“Artículo 41°.- Los funcionarios y servidores públicos que señala la ley o que, bajo cualquier título, administran o manejan fondos del Estado o de organismos sostenidos por éste deben hacer declaración jurada de bienes y rentas al tomar posesión de sus cargos, durante su ejercicio y al cesar en los mismos. Los órganos correspondientes del Sistema Nacional de Control supervisan el cumplimiento de esta obligación, así como de la publicación y veracidad de su contenido, y hacen efectiva la responsabilidad que determine la ley.</p> <p>La condena por delitos de corrupción y contra el patrimonio del Estado es causal de destitución y de inhabilitación definitiva para el desempeño de cargos públicos en cualquier condición o modalidad. La destitución e inhabilitación se extiende a los funcionarios que conociendo de la comisión de delitos incurrir en omisión de denuncia.</p> <p>Los delitos de corrupción y contra el patrimonio del Estado son imprescriptibles.”</p>	
22	5144	07/01/2003	Multiparlamentario	Imprescriptibilidad	Rosa Yanarico Huanca, Jaimes Serkovic Santos y Jorge Mera Ramírez	Si	<p>Constitución Política:</p> <p>“Artículo 41.- Los funcionarios y servidores públicos que señala la ley o que administran o manejan fondos del Estado o de organismos sostenidos por éste deben hacer declaración jurada de bienes y rentas al tomar posesión de sus cargos, durante su ejercicio y al cesar en los mismos. La respectiva publicación se realiza en el diario oficial en la forma y condiciones que señala la ley.</p> <p>Cuando se presume enriquecimiento ilícito, el Fiscal de la Nación, por denuncia de terceros o de oficio, formula cargos ante el Poder Judicial. La ley establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como el plazo de su inhabilitación para la función pública. No prescriben los delitos cometidos en agravio del Estado”.</p>	Delitos en agravio al Estado.

CUADRO DE PROYECTOS DE LEY SOBRE IMPRESCRIPTIBILIDAD Y OTROS

Nº	Proyecto de ley	Fecha	Agrupación	Materia	Autor	Reforma Constitucional	Regla Propuesta	
23	5166	08/01/2003	Frente Independiente Moralizador	Imprescriptibilidad	Manuel Bustamante Coronado	A	<p>Constitución Política: “Artículo 41.- Los funcionarios y servidores públicos que señala la ley o que administran o manejan fondos del Estado o de organismos sostenidos por éste deben hacer declaración jurada de bienes y rentas al tomar posesión de sus cargos, durante su ejercicio y al cesar en los mismos. La respectiva publicación se realiza en el diario oficial en la forma y condiciones que señala la ley. Cuando se presume enriquecimiento ilícito, el Fiscal de la Nación, por denuncia de terceros o de oficio, formula cargos ante el Poder Judicial. La ley establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como el plazo de su inhabilitación para la función pública. Los delitos de enriquecimiento ilícito y contra el patrimonio del Estado son imprescriptibles”.</p> <p>Código Penal: “Artículo 80.- La acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley para el delito, si es privativa de libertad. En caso de concurso real de delitos, las acciones prescriben separadamente en el plazo señalado para cada uno. En caso de concurso ideal de delitos, las acciones prescriben cuando haya transcurrido un plazo igual al máximo correspondiente al delito más grave. La prescripción no será mayor a veinte años. Tratándose de delitos sancionados con pena de cadena perpetua se extingue la acción penal a los treinta años. En los delitos que merezcan otras penas, la acción prescribe a los tres años. En los delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos por enriquecimiento ilícito y contra el patrimonio del Estado o de organismos sostenidos por éste, la acción penal no prescribe”.</p>	Delitos contra el patrimonio del Estado y por enriquecimiento ilícito cometidos por funcionarios y servidores públicos.

CUADRO DE PROYECTOS DE LEY SOBRE IMPRESCRIPTIBILIDAD Y OTROS

Nº	Proyecto de ley	Fecha	Agrupación	Materia	Autor	Reforma Constitucional	Regla Propuesta	
24	05566	11/02/2003	Unidad Nacional	Prescripción	Hildebrando Tapia Samaniego y José Barba Caballero	No	Código Penal: "Artículo 100.- La acción civil resarcitoria derivada del hecho punible prescribe en el mismo plazo que la acción penal, dependiendo del caso concreto, siempre y cuando éste sea mayor de dos años; en caso que el plazo de prescripción del delito sea menor, será de aplicación el plazo previsto en el artículo 2001 Numeral 4 del Decreto Legislativo N° 295 – Código Civil".	Prescripción de la acción civil.
25	5987	17/03/2003	Unidad Nacional	Prescripción	Rafael Valencia-Dongo Cárdenas	A	Constitución Política: "Artículo 41.- (...) El plazo de prescripción se duplica en caso de delitos cometidos contra la administración pública o contra el patrimonio del Estado". Código Penal: "Artículo 80.- (...) En casos de delitos cometidos por funcionarios, servidores públicos o particulares contra la administración pública o contra el patrimonio del Estado o de organismos sostenidos por éste, el plazo de prescripción se duplica".	Se duplica el plazo de prescripción en caso de delitos cometidos por funcionario público contra el patrimonio del estado.
26	07002	30/05/2003	Frente Independiente Moralizador	Prescripción	Dora Núñez Dávila	No	Código Penal: "Artículo 81.- Los plazos de prescripción se reducen a la mitad cuando el agente tenía mas de setenta años al tiempo de la comisión del hecho punible".	Reducción del plazo de prescripción de personas de mas de 70 años.

CUADRO DE PROYECTOS DE LEY SOBRE IMPRESCRIPTIBILIDAD Y OTROS

Nº	Proyecto de ley	Fecha	Agrupación	Materia	Autor	Reforma Constitucional	Regla Propuesta	
27	07781	11/08/2003	Perú Posible	Prescripción	Enith Chuquival Saavedra	No	<p>Código Penal:</p> <p>“Artículo 80.- La acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley para el delito si es privativa de libertad. En caso de concurso real de delitos las acciones prescriben separadamente en el plazo señalado para cada uno. En caso de concurso ideal de delitos las acciones prescriben cuando haya transcurrido un plazo igual al máximo correspondiente al delito más grave.</p> <p>La prescripción no será mayor a veinte años. Tratándose de delitos sancionados con pena de cadena perpetua se extingue la acción penal a los treinta años.</p> <p>En los delitos que merezcan otras penas la acción prescribe a los tres años.</p> <p>En caso de delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos en agravio del Estado, el plazo de prescripción se duplica”.</p>	Se duplica el plazo de prescripción en caso de delitos cometidos por funcionario público contra el patrimonio del Estado.
28	09415	15/01/2004	Frente Independiente Moralizador	Imprescriptibilidad	Dora Núñez Dávila	No	<p>Código Penal:</p> <p>“Artículo 80-A.- La acción penal no prescribirá, en caso de delitos cometidos por el Presidente de la República, los representantes al Congreso, los Ministros de Estado, los miembros del Tribunal Constitucional, los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, los Vocales de la Corte Suprema, los Fiscales Supremos, el Defensor del Pueblo, el Contralor General, los Representantes de Organismos Descentralizados y Alcaldes, durante el ejercicio de sus funciones”.</p>	Delitos de algunos de los Funcionario Público.

CUADRO DE PROYECTOS DE LEY SOBRE IMPRESCRIPTIBILIDAD Y OTROS

Nº	Proyecto de ley	Fecha	Agrupación	Materia	Autor	Reforma Constitucional	Regla Propuesta	
29	09478	21/01/2004	Unidad Nacional	Imprescriptibilidad	Emma Vargas de Benavides	Si	<p>Constitución Política:</p> <p>“Artículo 41.- Los funcionarios y servidores públicos que señala la ley o que administran o manejan fondos del Estado o de organismos sostenidos por éste deben hacer declaración jurada de bienes y rentas al tomar posesión de sus cargos, durante su ejercicio y al cesar en los mismos. La respectiva publicación se realiza en el diario oficial en la forma y condiciones que señala la ley. La verificación de la declaración jurada es obligatoria y exhaustiva mediante auditoría personal.</p> <p>La Ley establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como el plazo de su inhabilitación para la función pública.</p> <p>Los delitos de lesa humanidad y corrupción cometidos por funcionarios y servidores públicos son imprescriptibles en la acción y la pena”.</p>	Delitos contra la humanidad y de corrupción cometidos por Funcionarios y servidores Públicos.
30	9621	05/02/2004	Perú Posible	Imprescriptibilidad	Jacques Rodrich Ackerman	Si	<p>Constitución política:</p> <p>“Artículo 41.-</p> <p>(...)</p> <p>Los delitos cometidos contra el patrimonio del Estado son imprescriptibles.”</p>	
31	09720	16/02/2004	Unidad Nacional	Imprescriptibilidad	Emma Vargas de Benavides	Si	<p>Constitución Política:</p> <p>"Artículo 2.- Toda persona tiene derecho:</p> <p>(...)</p> <p>24.- A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia:</p> <p>(...)</p> <p>f. Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. El detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente dentro de las veinticuatro horas o en el término de la distancia.</p> <p>En casos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas, no se aplican plazos, son imprescriptibles en la acción y la pena.</p> <p>En tales casos, las autoridades policiales deben dar cuenta al Ministerio Público y al Juez el plazo que requieren para las investigaciones preliminares, pudiendo la autoridad judicial asumir jurisdicción en el momento que considere pertinente”.</p>	Delitos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas.

CUADRO DE PROYECTOS DE LEY SOBRE IMPRESCRIPTIBILIDAD Y OTROS

Nº	Proyecto de ley	Fecha	Agrupación	Materia	Autor	Reforma Constitucional	Regla Propuesta	
32	9745	18/02/2004	Perú Posible	Imprescriptibilidad	Ernesto Aranda Dextre	Si	Constitución política: "Artículo 41.- Son imprescriptibles los delitos cometidos contra el patrimonio del Estado."	
33	10632	21/05/2004	Frente Independiente Moralizador	Imprescriptibilidad	Alcides Chamorro Balvín	No	Código Penal: "Artículo 80.- La acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley para el delito, si es privativa de libertad. En caso de concurso real de delitos, las acciones prescriben separadamente en el plazo señalado para cada uno. En caso de concurso ideal de delitos, las acciones prescriben cuando haya transcurrido un plazo igual al máximo correspondiente al delito más grave. La prescripción no será mayor a veinte años. Tratándose de delitos sancionados con pena de cadena perpetua se extingue la acción penal a los treinta años. En los delitos que merezcan otras penas, la acción prescribe a los dos años. En casos de delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos contra el patrimonio del Estado o de organismos sostenidos por éste, el plazo de prescripción se duplica. En casos de delitos de genocidio, desaparición forzada y tortura, la acción penal es imprescriptible". "Artículo 89.- La amnistía elimina legalmente el hecho punible a que se refiere e implica el perpetuo silencio respecto a él. El indulto suprime la pena impuesta. En casos de los delitos de genocidio, desaparición forzada y tortura, no procede la amnistía ni el indulto a favor de los autores de estos delitos".	Delitos contra la Humanidad.

CUADRO DE PROYECTOS DE LEY SOBRE IMPRESCRIPTIBILIDAD Y OTROS

Nº	Proyecto de ley	Fecha	Agrupación	Materia	Autor	Reforma Constitucional	Regla Propuesta	
34	11178/20 04-CR	16/08/2004	Perú Posible	Imprescriptibilidad	Alcides Llique Ventura	A	<p>Constitución Política: "Artículo 41.- (...) En caso de los delitos cometidos contra el patrimonio del Estado la acción penal será imprescriptible".</p> <p>Código Penal: "Artículo 80.- (...) En casos de delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos contra el patrimonio del Estado no prescriben".</p>	Delitos contra el patrimonio del Estado. Delitos de Funcionario Público.
35	11801/20 04-CR	27/10/2004	Somos Perú- Acción Popular- Unión por el Perú	Imprescriptibilidad	Gonzalo Jiménez Dioses	No	<p>Código Penal: "Artículo 80.- (...) En casos de delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos contra el patrimonio del Estado o de organismos sostenidos por éste, la acción penal no prescribe".</p>	Delitos contra el patrimonio del Estado por funcionarios y servidores públicos.
36	12076/20 04-CR	01/12/2004	Perú Posible	Prescripción	José Taco Llave	No	<p>Código Penal: "Artículo 440.- Son aplicables a las faltas las disposiciones contenidas en el Libro Primero con las modificaciones siguientes; 1. No es punible la tentativa, salvo en el caso de las faltas previstas en el primer y segundo párrafos de los artículos 441 y 444. 2. Solo responde el autor. 3. Las penas que pueden imponerse en las contenidas en el artículo 28. 4. Los días-multa no serán menos de diez ni más de trescientos sesenta días. 5. La acción penal prescribe al año y la pena prescribe a los dos años".</p>	Aumento del plazo de prescripción.
37	12295/20 04-CR	27/01/2005	Somos Perú- Acción Popular- Unión por el Perú	Imprescriptibilidad	Javier, Díez Canseco Cisneros	Si	<p>Constitución Política: "Artículo 41.- (...) Los delitos cometidos contra el patrimonio del Estado son imprescriptibles."</p>	Delitos contra el patrimonio del Estado.

CUADRO DE PROYECTOS DE LEY SOBRE IMPRESCRIPTIBILIDAD Y OTROS

Nº	Proyecto de ley	Fecha	Agrupación	Materia	Autor	Reforma Constitucional	Regla Propuesta	
38	12891/20 04-CR	03/05/2005	Grupo Parlamentario Democrático Independiente	Imprescriptibilidad	Héctor Hugo Chávez Chuchón	Si	<p>Constitución Política: "Artículo 41.- Los funcionarios y servidores públicos que señala la ley o que administran o manejan fondos del Estado de organismos sostenidos por éste deben hacer declaración jurada de bienes y rentas al tomar posesión de sus cargos, durante su ejercicio y al cesar en los mismos. La respectiva publicación se realiza en el diario oficial en la forma y condiciones que señala la ley. Cuando se presume enriquecimiento ilícito, el Fiscal de la Nación, por denuncia de terceros o de oficio, formula cargos ante el Poder Judicial. La ley establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como el plazo de su inhabilitación para la función pública. Son imprescriptibles los delitos cometidos contra el patrimonio del Estado".</p>	Delitos contra el patrimonio del Estado.
39	13051/20 04-CR	20/05/2005		Imprescriptibilidad	Luis Gonzáles Reynoso	Si	<p>Constitución política: "Artículo 41.- Los funcionarios y servidores públicos que señala la ley o que administran o manejan fondos del Estado o de organismos sostenidos por éste deben hacer declaración jurada de bienes y rentas al tomar posesión de sus cargos, durante su ejercicio y al cesar en los mismos. La respectiva publicación se realiza en el diario oficial en la forma y condiciones que señala la ley. Cuando se presume enriquecimiento ilícito, el Fiscal de la Nación, por denuncia de terceros o de oficio, formula cargos ante el Poder Judicial. La ley establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como el plazo de su inhabilitación para la función pública. Los delitos contra el patrimonio del Estado, son imprescriptibles."</p>	

CUADRO DE PROYECTOS DE LEY SOBRE IMPRESCRIPTIBILIDAD Y OTROS

Nº	Proyecto de ley	Fecha	Agrupación	Materia	Autor	Reforma Constitucional	Regla Propuesta	
40	13077/20 04-CR	24/05/2005	Frente Independiente Moralizador	Imprescriptibilidad	Manuel Bustamante Coronado	Si	<p>Constitución Política:</p> <p>"Artículo 41.- Los funcionarios y servidores públicos que señala la ley o que administran o manejan fondos del Estado o de organismos sostenidos por éste deben hacer declaración jurada de bienes y rentas al tomar posesión de sus cargos, durante su ejercicio y al cesar en los mismos. La respectiva publicación se realiza en el diario oficial en la forma y condiciones que señala la ley.</p> <p>Cuando se presume enriquecimiento ilícito, el Fiscal de la Nación, por denuncia de terceros o de oficio, formula cargos ante el Poder Judicial. La ley establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como el plazo de su inhabilitación para la función pública.</p> <p>Los delitos de enriquecimiento ilícito y contra el patrimonio del Estado cometidos por los funcionarios y servidores públicos son imprescriptibles".</p>	Delitos contra el patrimonio del Estado por funcionarios y servidores públicos.
41	13884/20 05-CR	14/10/2005	Unión Parlamentaria Descentralista	Prescripción	Mario Ochoa Vargas	Si	<p>Constitución Política:</p> <p>"Artículo 99.- Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso: al Presidente de la República; a los representantes a Congreso; a los Ministros de Estado; a los miembros del Tribunal Constitucional; a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura; a los vocales de la Corte Suprema; a los fiscales supremos; al Defensor del Pueblo y al Contralor General por infracción de la Constitución expresamente establecida en la ley y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que haya cesado en éstas.</p> <p>El plazo de prescripción no corre sino hasta que los funcionarios a que se refiere el párrafo precedente se pongan a derecho ante el órgano jurisdiccional competente para el conocimiento de los delitos materia de acusación constitucional".</p>	Condición para inicio del cómputo de prescripción en caso de los funcionarios públicos.

CUADRO DE PROYECTOS DE LEY SOBRE IMPRESCRIPTIBILIDAD Y OTROS

Nº	Proyecto de ley	Fecha	Agrupación	Materia	Autor	Reforma Constitucional	Regla Propuesta	
42	574/2006 -CR	31/10/2006	Nacionalista Unión por el Perú	Imprescriptibilidad	Daniel Fernando Abugattás Majful	L	"Ley que declara imprescriptibles los delitos cometidos por funcionarios públicos de la alta jerarquía estatal y los delitos de lesa humanidad"	
43	00667/20 06-CR	14/11/2006	Nacionalista Unión por el Perú	Prescripción	Edgardo Reymundo Mercado	No	<p>Código Penal:</p> <p>“Artículo 80.- La acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley para el delito, si es privativa de libertad. En caso de concurso real de delitos, las acciones prescriben separadamente en el plazo señalado para cada uno. En caso de concurso ideal de delitos, las acciones prescriben cuando haya transcurrido un plazo igual al máximo correspondiente al delito más grave.</p> <p>La prescripción no será mayor a veinte años. Tratándose de delitos sancionados con pena de cadena perpetua se extingue la acción penal a los treinta años.</p> <p>En los delitos que merezcan otras penas, la acción prescribe a los tres años.</p> <p>En casos de delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos en agravio del Estado o de organismos sostenidos por éste, contenidos en las secciones II, III y IV del capítulo II del Título XVIII del Código Penal, el plazo de prescripción se duplica”.</p>	Se duplica el plazo de prescripción en caso de delitos cometidos por funcionario público contra el patrimonio del Estado.
44	00679/20 06-CR	14/11/2006	Grupo Parlamentario Nacionalista	Prescripción	Edgardo Reymundo Mercado	CPP	<p>Código Procesal Penal:</p> <p>“Disposiciones Transitorias- Primero: (...) Efectos de la formalización de la investigación Preliminar, ordenada por el Fiscal: 1. La formalización de la investigación preliminar, ordenada por el Ministerio Público suspenderá el curso de la prescripción de la acción penal. (...)”</p>	

CUADRO DE PROYECTOS DE LEY SOBRE IMPRESCRIPTIBILIDAD Y OTROS

Nº	Proyecto de ley	Fecha	Agrupación	Materia	Autor	Reforma Constitucional	Regla Propuesta	
45	00953/20 06-CR	05/02/2007	Alianza Parlamentaria	Imprescriptibilidad	Mario Peña Angulo	A	<p>Constitución política: "Artículo 41.- (...) Los delitos cometidos por funcionarios y servidores publicas contra los caudales o efectos que pertenecen al Estado u organismos sostenidos por este, siempre que se encuentren bajo su administración, percepción, custodia, guarda, depósito o bajo cualquier otra modalidad confiada por razón de sus cargos, son imprescriptibles."</p> <p>Código Penal: "Artículo 80.- (...) Los delitos cometidos por funcionarios y servidores publicas contra los caudales o efectos que pertenecen al Estado u organismos sostenidos por este, siempre que se encuentren bajo su administración, percepción, custodia, guarda, depósito o bajo cualquier otra modalidad confiada por razón de sus cargos, son imprescriptibles."</p>	Delitos contra el patrimonio del Estado por funcionarios y servidores públicos.
46	01019/20 06-CR	09/02/2007	Unidad Nacional	Prescripción	Lourdes Alcorta Suero	No	<p>Código Penal: "Artículo 82.- Los plazos de prescripción de la acción penal comienzan: 1. En la tentativa, desde el día en que cesó la actividad delictuosa; 2. En el delito instantáneo, a partir del día en que se consumó; 3. En el delito continuado, desde el día en que terminó la actividad delictuosa; 4. En el delito permanente, a partir del día en que cesó la permanencia; y 5. En los delitos tipificados en el Libro Segundo, Título IV, Capítulos IX, X y XI, cuando la víctima fuera menor de edad, el plazo de prescripción empezará a correr desde el día en que éste alcance la mayoría de edad. Si la víctima falleciera antes de la mayoría de edad, el plazo de prescripción correrá a partir de la fecha del fallecimiento".</p>	Plazo de prescripción para delitos de violación de la libertad sexual y otros en agravio de menores de edad.

CUADRO DE PROYECTOS DE LEY SOBRE IMPRESCRIPTIBILIDAD Y OTROS

Nº	Proyecto de ley	Fecha	Agrupación	Materia	Autor	Reforma Constitucional	Regla Propuesta	
47	01082/20 06-CR	14/03/2007	Grupo Parlamentario Nacionalista Unión por el Perú	Imprescriptibilidad	Víctor Ricardo Mayorga Miranda	No	<p>Constitución política:</p> <p>"Artículo 41.- Los funcionarios y servidores públicos que señala la ley o que administran o manejan fondos del Estado o 'de organismos sostenidos por éste deben hacer declaración jurada de sus bienes y rentas al tomar posesión de sus cargos, durante su ejercicio y al cesar en los mismos. La respectiva publicación se realiza en el diario oficial en la forma y condiciones que señala la ley.</p> <p>Cuando se presume enriquecimiento ilícito, el Fiscal de la Nación, por denuncia de terceros o de oficio, formula cargos ante el Poder Judicial. La ley establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como el plazo de su inhabilitación para la función pública.</p> <p>En el caso de delitos cometidos contra el patrimonio del Estado, por los funcionarios comprendidos en el artículo 99 de la Constitución y los que determine la ley orgánica, la acción penal es imprescriptible."</p>	
48	2415/200 7-CR	19/05/2007		Imprescriptibilidad	José Macedo Sánchez	Si	<p>Constitución Política:</p> <p>"Artículo 41.- Los funcionarios y servidores públicos que señala la ley o que administran o manejan fondos del Estado o de organismos sostenidos por éste deben hacer declaración jurada de bienes y rentas al tomar posesión de sus cargos, durante su ejercicio y al cesar en los mismos. La respectiva publicación se realiza en el diario oficial en la forma y condiciones que señala la ley.</p> <p>Cuando se presume enriquecimiento ilícito, el Fiscal de la Nación, por denuncia de terceros o de oficio, formula cargos ante el Poder Judicial. La ley establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como el plazo de su inhabilitación para la función pública.</p> <p>Los delitos de corrupción por funcionarios y servidores públicos y aquellos cometidos contra el patrimonio del Estado son imprescriptibles".</p>	Delitos contra el patrimonio del Estado por funcionarios y servidores públicos.

CUADRO DE PROYECTOS DE LEY SOBRE IMPRESCRIPTIBILIDAD Y OTROS

Nº	Proyecto de ley	Fecha	Agrupación	Materia	Autor	Reforma Constitucional	Regla Propuesta	
49	1567/2007-CR	06/09/2007	Unidad Nacional	Imprescriptibilidad		Si	<p>Constitución política:</p> <p>“Artículo 41.- Los funcionarios y servidores públicos que señala la ley o que administran o manejan fondos del Estado o de organismos sostenidos por éste deben hacer declaración jurada de bienes y rentas al tomar posesión de sus cargos, durante su ejercicio y al cesar en los mismos. La respectiva publicación se realiza en el diario oficial en la forma y condiciones que señala la ley.</p> <p>Cuando se presume enriquecimiento ilícito, el Fiscal de la Nación, por denuncia de terceros o de oficio, formula cargos ante el Poder Judicial. La ley establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como el plazo de su inhabilitación para la función pública. Los delitos cometidos contra el patrimonio del Estado son imprescriptibles.”</p>	
50	01801/2007-CR	26/10/2007		Imprescriptibilidad	Carlos Alberto Torres Caro	No	<p>Código Penal:</p> <p>“Artículo 80.- La acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley para el delito, si es privativa de libertad. En caso de concurso real de delitos, las acciones prescriben separadamente en el plazo señalado para cada uno.</p> <p>En caso de concurso ideal de delitos, las acciones prescriben cuando haya transcurrido un plazo igual al máximo correspondiente al delito más grave.</p> <p>La prescripción no será mayor a veinte años. Tratándose de delitos sancionados con pena de cadena perpetua se extingue la acción penal a los treinta años.</p> <p>En los delitos que merezcan otras penas, la acción prescribe a los tres años.</p> <p>En casos de delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos contra el patrimonio del Estado o de organismos sostenidos por éste, el plazo de prescripción se duplica.</p> <p>Las disposiciones establecidas en el párrafo anterior no rige para los delitos de corrupción de funcionarios públicos, tales como cohecho propio, cohecho impropio, corrupción pasiva, corrupción de auxiliares jurisdiccionales, aprovechamiento indebido del cargo y enriquecimiento ilícito, contenidos en los artículos 393, 394, 395, 396, 397 y 401 del presente Código, respectivamente. Para dichos delitos no se aplica la prescripción, siendo delitos de naturaleza imprescriptible”.</p>	Delitos contra el patrimonio del Estado por funcionarios y servidores públicos.

CUADRO DE PROYECTOS DE LEY SOBRE IMPRESCRIPTIBILIDAD Y OTROS

Nº	Proyecto de ley	Fecha	Agrupación	Materia	Autor	Reforma Constitucional	Regla Propuesta	
51	1954/2007-CR	06/12/2007	Grupo Parlamentario Especial Demócrata	Imprescriptibilidad	Carlos Alberto Torres Caro	Si	<p>Constitución Política:</p> <p>"Artículo 41.- Los funcionarios y servidores públicos que señala la ley o que administran o manejan fondos del Estado o de organismos sostenidos por éste deben hacer declaración jurada de bienes y rentas al tomar posesión de sus cargos, durante su ejercicio y al cesar en los mismos. La respectiva publicación se realiza en el diario oficial en la forma y condiciones que señala la ley.</p> <p>Cuando se presume enriquecimiento ilícito, el Fiscal de la Nación, por denuncia de terceros o de oficio, formula cargos ante el Poder Judicial. La ley establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como el plazo de su inhabilitación para la función pública.</p> <p>El plazo de prescripción se duplica en caso de delitos cometidos contra el patrimonio del Estado. Dicha regla no se aplicará para delitos de lesa humanidad calificados como tales en los acuerdos internacionales sobre la materia en los que el Estado peruano sea parte. Asimismo, no regirá para los delitos de corrupción de funcionarios que la ley penal determine como delitos imprescriptibles.</p> <p>Artículo 102.- Son atribuciones del Congreso:</p> <p>(...)</p> <p>6. Ejercer el derecho de amnistía, excepto en los casos de delitos de lesa humanidad y de corrupción de funcionarios públicos.</p> <p>Artículo 118.- Corresponde al Presidente de la República:</p> <p>(...)</p> <p>21. Conceder indultos y conmutar penas, excepto en los casos de delitos de lesa humanidad y de corrupción de funcionarios públicos. Ejercer el derecho de gracia en beneficio de los procesados en los casos que la etapa de instrucción haya excedido el doble de su plazo más su ampliatoria".</p>	Delitos de corrupción de funcionario público.

CUADRO DE PROYECTOS DE LEY SOBRE IMPRESCRIPTIBILIDAD Y OTROS

Nº	Proyecto de ley	Fecha	Agrupación	Materia	Autor	Reforma Constitucional	Regla Propuesta	
52	2400/2007-CR	08/05/2008	Nacionalista Unión por el Perú	Imprescriptibilidad	Edgardo Reymundo Mercado	Si	<p>Constitución Política: "Artículo 41.- Los funcionarios y servidores públicos que señala la ley o que administran o manejan fondos del Estado o de organismos sostenidos por éste deben hacer declaración jurada de bienes y rentas al tomar posesión de sus cargos, durante su ejercicio y al cesar en los mismos. La respectiva publicación se realiza en el diario oficial en la forma y condiciones que señala la ley. Cuando se presume enriquecimiento ilícito, el Fiscal de la Nación, por denuncia de terceros o de oficio, formula cargos ante el Poder Judicial. La ley establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como el plazo de su inhabilitación para la función pública. En casos de delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos contra el patrimonio del Estado o de Organismos sostenidos por éste, no operan plazos de prescripción.</p>	Delitos contra el patrimonio del Estado por funcionarios y servidores públicos.
53	3711/2009-CR	27/11/2009		Imprescriptibilidad		Si	<p>Constitución política.- "Artículo 41.- Los funcionarios y servidores públicos que señala la ley o que administran o manejan fondos del Estado o de organismos sostenidos por éste deben hacer declaración jurada de bienes y rentas al tomar posesión de sus cargos, durante su ejercicio y al cesar en los mismos. La respectiva publicación se realiza en el diario oficial en la forma y condiciones que señala la ley. Cuando se presume enriquecimiento ilícito, el Fiscal de la Nación, por denuncia de terceros o de oficio, formula cargos ante el Poder Judicial. La ley establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como el plazo de su inhabilitación para la función pública. El plazo de prescripción se duplica en caso de delitos cometidos contra el patrimonio del Estado. Cuando un delito sea cometido por un funcionario público o servidor público en agravio del patrimonio del Estado, este será imprescriptible."</p>	

CUADRO DE PROYECTOS DE LEY SOBRE IMPRESCRIPTIBILIDAD Y OTROS

Nº	Proyecto de ley	Fecha	Agrupación	Materia	Autor	Reforma Constitucional	Regla Propuesta	
54	4633/2010-CR	26/01/2011	Alianza Nacional	Imprescriptibilidad	Álvaro Gutiérrez Cueva	A	<p>Constitución Política:</p> <p>“Artículo 41.- Los funcionarios y servidores públicos que señala la ley o que administran o manejan fondos del Estado de Entidades, Empresas, y de Organismos sostenidos por éste deben hacer declaración jurada de bienes y rentas al tomar posesión de sus cargos, durante su ejercicio y al cesar en los mismos. La respectiva publicación se realiza en el diario oficial en la forma y condiciones que señala la ley.</p> <p>Cuando se presume enriquecimiento ilícito, el Fiscal de la Nación, por denuncia de terceros o de oficio, formula cargos ante el Poder Judicial.</p> <p>En caso, de delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos contra el Patrimonio del Estado, la acción penal es imprescriptible.</p> <p>La condena por sentencia consentida o ejecutoriada al funcionario(s) y/o servidor (es) público(s) por delito(s) contra el Patrimonio del Estado es causal de destitución y de inhabilitación definitiva para el desempeño de los cargos públicos en cualquier condición o modalidad. La destitución e inhabilitación se extiende a los funcionarios que tengan conocimiento de la comisión de delitos contra el Patrimonio del Estado y que en su oportunidad no hayan formulado la respectiva denuncia ante la autoridad jurisdiccional competente”.</p> <p>Código Penal:</p> <p>“Artículo 80.- La acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley para el delito, si es privativa de libertad.</p> <p>En caso de concurso real de delitos, las acciones prescriben separadamente en el plazo señalado para cada uno.</p> <p>En caso de concurso ideal de delitos, las acciones prescriben cuando haya transcurrido un plazo igual al máximo correspondiente al delito más grave.</p> <p>La prescripción no será mayor a veinte años. Tratándose de delitos sancionados con pena de cadena perpetua se extingue la acción penal a los treinta años.</p> <p>En los delitos que merezcan otras penas, la acción prescribe a los dos años.</p> <p>Los delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos contra el patrimonio del Estado o de entidades, empresas y organismos sostenidos por éste, son imprescriptibles”.</p>	Delitos contra el patrimonio del Estado por funcionarios y servidores públicos.

CUADRO DE PROYECTOS DE LEY SOBRE IMPRESCRIPTIBILIDAD Y OTROS

Nº	Proyecto de ley	Fecha	Agrupación	Materia	Autor	Reforma Constitucional	Regla Propuesta	
55	079/2011 -CR	22/08/2011	Alianza Parlamentaria	Imprescriptibilidad	Carmen Omonte Durand	Si	<p>Constitución Política:</p> <p>"Artículo 41.- Los funcionarios y servidores públicos que señala la ley o que administran o manejan fondos del Estado o de organismos sostenidos por éste deben hacer declaración jurada de bienes y rentas al tomar posesión de sus cargos, durante su ejercicio y al cesar en los mismos. La respectiva publicación se realiza en el diario oficial en la forma y condiciones que señala la ley.</p> <p>Cuando se presume enriquecimiento ilícito, el Fiscal de la Nación, por denuncia de terceros o de oficio, formula cargos ante el Poder Judicial. La ley establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como el plazo de su inhabilitación para la función pública.</p> <p>Son imprescriptibles los delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos y aquellos cometidos contra el patrimonio del Estado".</p>	Delitos contra el patrimonio del Estado por funcionarios y servidores públicos.
56	00090/20 11-CR	23/08/2011	Alianza Parlamentaria	Imprescriptibilidad	Modesto Julca Jara y Renan Samuel Espinoza Rosales	Si	<p>Constitución Política:</p> <p>"Artículo 41.- Los funcionarios y servidores públicos que señala la ley o que administran o manejan fondos del Estado o de organismos sostenidos por éste deben hacer declaración jurada de bienes y rentas al tomar posesión de sus cargos, durante su ejercicio y al cesar en los mismos. La respectiva publicación se realiza en el diario oficial en la forma y condiciones que señala la ley.</p> <p>Cuando se presume enriquecimiento ilícito, el Fiscal de la Nación, por denuncia de terceros o de oficio, formula cargos ante el Poder Judicial. La ley establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como el plazo de su inhabilitación para la función pública.</p> <p>En caso de delitos cometidos por funcionarios o servidores públicos contra los caudales o efectos del Estado la inhabilitación para ejercer función o cargo público será perpetua, así mismo, dichos delitos son imprescriptibles".</p>	Delitos contra el patrimonio del Estado por funcionarios y servidores públicos.

CUADRO DE PROYECTOS DE LEY SOBRE IMPRESCRIPTIBILIDAD Y OTROS

Nº	Proyecto de ley	Fecha	Agrupación	Materia	Autor	Reforma Constitucional	Regla Propuesta	
57	091/2011 -CR	23/08/2011	Grupo Parlamentario Nacionalista	Imprescriptibilidad	Natalie Condori Jahuir	No	<p>Código Penal:</p> <p>"Artículo 80.- La acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley para el delito, si es privativa de libertad. En caso de concurso real de delitos, las acciones prescriben separadamente en el plazo señalado para cada uno. En caso de concurso ideal de delitos, las acciones prescriben cuando haya transcurrido un plazo igual al máximo correspondiente al delito más grave.</p> <p>La prescripción no será mayor a veinte años. Tratándose de delitos sancionados con pena de cadena perpetua se extingue la acción penal a los treinta años.</p> <p>En los delitos que merezcan otras penas, la acción prescribe a los dos años.</p> <p>En casos de delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos contra el patrimonio del Estado o de organismos sostenidos por éste, contenidos en los artículos 393º, 394º, 395º, 396º, 397º, 398º, 399º, 400º y 401º del Código Penal, no se aplicará la prescripción, por lo que se les considerará delitos de naturaleza imprescriptible".</p>	Delitos contra el patrimonio del Estado por funcionarios y servidores públicos.
58	00134/2011-CR	01/09/2011	Gana Perú	Imprescriptibilidad	Amado Romero Rodríguez	Si	<p>Constitución Política:</p> <p>"Artículo 41.- Los funcionarios y servidores públicos que señala la ley o que administran o manejan fondos del Estado o de organismos sostenidos por éste deben hacer declaración jurada de bienes y rentas al tomar posesión de sus cargos, durante su ejercicio y al cesar en los mismos. La respectiva publicación se realiza en el diario oficial en la forma y condiciones que señala la ley.</p> <p>Cuando se presume enriquecimiento ilícito, el Fiscal de la Nación, por denuncia de terceros o de oficio, formula cargos ante el Poder Judicial. La ley establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como el plazo de su inhabilitación para la función pública.</p> <p>El plazo de prescripción se duplica en caso de delitos contra el patrimonio del Estado.</p> <p>Los delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos son imprescriptibles. Cuando se trate de este tipo de delitos, el juez deberá aplicar inhabilitación definitiva para ejercer cualquier cargo público".</p>	Delitos contra el patrimonio del Estado por funcionarios.

CUADRO DE PROYECTOS DE LEY SOBRE IMPRESCRIPTIBILIDAD Y OTROS

Nº	Proyecto de ley	Fecha	Agrupación	Materia	Autor	Reforma Constitucional	Regla Propuesta	
59	133/2011 -CR	01/09/2011		Inhabilitación	Amado Romero Rodríguez	no	<p>Código Penal: "Artículo 37º.- inhabilitación principal o accesoria.- La pena de inhabilitación puede ser impuesta como principal o accesoria.</p> <p>El Juez deberá aplicar inhabilitación definitiva para ejercer cualquier cargo público cuando se trate de delitos de corrupción de funcionarios, regulados en los artículos 393", 394", 395", 396", 399º, 400º último párrafo y 401" del Código Penal.</p> <p>Artículo 80.- Plazos de prescripción de la acción penal La acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley para el delito, si es privativa de libertad.</p> <p>En caso de concurso real de delitos, las acciones prescriben separadamente en el plazo señalado para cada uno.</p> <p>En caso de concurso ideal de delitos, las acciones prescriben cuando haya transcurrido un plazo igual al máximo correspondiente al delito más grave.</p> <p>La prescripción no será mayor a veinte años. Tratándose de delitos sancionados con pena de cadena perpetua se extingue la acción penal a los treinta años.</p> <p>En los delitos que merezcan otras penas, la acción prescribe a los dos años.</p> <p>En casos de delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos contra el patrimonio del Estado o de organismos sostenidos por éste, el plazo de prescripción se duplica."</p> <p>La disposición establecida en el párrafo anterior no es aplicable a los delitos de corrupción de funcionarios contenidos en los artículos 393º, 394º, 395", 396", 399º, 400º último párrafo y 401º del presente Código. En dichos casos los delitos son imprescriptibles".</p>	

CUADRO DE PROYECTOS DE LEY SOBRE IMPRESCRIPTIBILIDAD Y OTROS

Nº	Proyecto de ley	Fecha	Agrupación	Materia	Autor	Reforma Constitucional	Regla Propuesta	
60	00151/2011-CR	05/09/2011		Imprescriptibilidad	Jaime Rubén Valencia Quiroz	Si	<p>Constitución Política:</p> <p>"Artículo 41.- Los funcionarios y servidores públicos que señala la ley o que administran o manejan fondos del Estado o de organismos sostenidos por éste deben hacer declaración jurada de bienes y rentas al tomar posesión de sus cargos, durante su ejercicio y al cesar en los mismos. La respectiva publicación se realiza en el diario oficial en la forma y condiciones que señala la ley.</p> <p>Cuando se presume enriquecimiento ilícito, el Fiscal de la Nación, por denuncia de terceros o de oficio, formula cargos ante el Poder Judicial. La ley establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como el plazo de su inhabilitación para la función pública.</p> <p>El plazo de prescripción se duplica en caso de delitos contra el patrimonio del Estado y no prescriben si los autores son funcionarios públicos".</p>	Delitos contra el patrimonio del Estado por funcionarios.
61	150/2011-CR	05/09/2011		Inhabilitación	Jaime Rubén Valencia Quiroz	Si	<p>Constitución Política:</p> <p>"Artículo 41.- Los funcionarios y servidores públicos que señala la ley o que administran o manejan fondos del Estado o de organismos sostenidos por éste deben hacer declaración jurada de bienes y rentas al tomar posesión de sus cargos, durante su ejercicio y al cesar en los mismos. La respectiva publicación se realiza en el diario oficial en la forma y condiciones que señala la ley.</p> <p>Cuando se presume enriquecimiento ilícito, el Fisco de la Nación servidores públicos, siendo inhabilitados a perpetuidad para el ejercicio de la función pública.</p> <p>El plazo de prescripción se duplica en caso de los delitos cometidos contra el patrimonio del Estado".</p>	
62	00182/2011-CR	13/09/2011	Solidaridad Nacional	Prescripción	Heriberto Benítez Rivas	L	Ley que determina la obligación de presentar una declaración jurada renunciando de manera irrevocable a la prescripción de la acción penal pública	Renuncia de la prescripción.

CUADRO DE PROYECTOS DE LEY SOBRE IMPRESCRIPTIBILIDAD Y OTROS

Nº	Proyecto de ley	Fecha	Agrupación	Materia	Autor	Reforma Constitucional	Regla Propuesta	
63	00203/20 11-CR	14/09/2011	Gana Perú	Imprescriptibilidad	Javier Diez Canseco Cisneros	Si	<p>Constitución Política:</p> <p>"Artículo 41.- Los funcionarios y servidores públicos que señala la ley o que administran o manejan fondos del Estado o de organismos sostenidos por éste deben hacer declaración jurada de bienes y rentas al tomar posesión de sus cargos, durante su ejercicio y al cesar en los mismos. La respectiva publicación se realiza en el diario oficial en la forma y condiciones que señala la ley.</p> <p>Cuando se presume enriquecimiento ilícito, el Fiscal de la Nación, por denuncia de terceros o de oficio, formula cargos ante el poder Judicial. La ley establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como de cualquier persona que participe en los delitos cometidos por estos. El plazo de si inhabilitación para la función pública es fijado por ley.</p> <p>Los funcionarios, servidores o cualquier persona que haya participado en la comisión de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y delitos que afecten gravemente el patrimonio del Estado se encuentran inhabilitados definitivamente para ejercer cargo o función pública."</p> <p>"Art. 102.- (...) 6. Ejercer el derecho de amnistía. Salvo en caso de delitos que configuran crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos, en los cuales la amnistía es impropcedente."</p> <p>"Art. 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional: (...) 13. La prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada. La amnistía, el indulto, el sobreseimiento definitivo y la prescripción producen los efectos de la cosa juzgada. Los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y los delitos cometidos contra el patrimonio de Estado son imprescriptibles"</p>	Delitos contra la Humanidad.

CUADRO DE PROYECTOS DE LEY SOBRE IMPRESCRIPTIBILIDAD Y OTROS

Nº	Proyecto de ley	Fecha	Agrupación	Materia	Autor	Reforma Constitucional	Regla Propuesta	
64	238/2011 -CR	20/09/2011	Alianza Parlamentaria	Imprescriptibilidad		A	<p>Constitución Política:</p> <p>"Artículo 41.- Los funcionarios y servidores públicos que señala la ley o que administran o manejan fondos del Estado o de organismos sostenidos por éste deben hacer declaración jurada de bienes y rentas al tomar posesión de sus cargos, durante su ejercicio y al cesar en los mismos. La respectiva publicación se realiza en el diario oficial en la forma y condiciones que señala la ley.</p> <p>Cuando se presume enriquecimiento ilícito, el Fiscal de la Nación, por denuncia de terceros o de oficio, formula cargos ante el Poder Judicial. La ley establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como el plazo de su inhabilitación para la función pública.</p> <p>Todas las modalidades de delitos de corrupción son imprescriptibles y conllevan la inhabilitación permanente para ejercer función pública.</p> <p>Código Penal:</p> <p>"Artículo 80.- La acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley para el delito, si es privativa de libertad. En caso de concurso real de delitos, las acciones prescriben separadamente en el plazo señalado para cada uno.</p> <p>En caso de concurso ideal de delitos, las acciones prescriben cuando haya transcurrido un plazo igual al máximo correspondiente al delito más grave.</p> <p>La prescripción no será mayor a veinte años. Tratándose de delitos sancionados con pena de cadena perpetua se extingue la acción penal a los treinta años.</p> <p>En los delitos que merezcan otras penas, la acción prescribe a los dos años.</p> <p>En casos de delitos de corrupción en todas sus modalidades, cometidos por las autoridades detalladas en el artículo 99 de la Constitución, por los funcionarios y servidores públicos de todas las jerarquías del Gobierno Nacional, Parlamento, Poder Judicial, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, dichos delitos son imprescriptibles".</p>	Delitos contra el patrimonio del estado por funcionarios y servidores públicos.

CUADRO DE PROYECTOS DE LEY SOBRE IMPRESCRIPTIBILIDAD Y OTROS

Nº	Proyecto de ley	Fecha	Agrupación	Materia	Autor	Reforma Constitucional	Regla Propuesta	
65	00286/2011-CR	04/10/2011	Gana Perú	Imprescriptibilidad	César Elmer Yrupailla Montes	No	<p>Código Penal:</p> <p>"Art. 80.- La acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley para el delito, si es privativa de libertad. En caso de concurso real de delitos, las acciones prescriben separadamente en el plazo señalado para cada uno.</p> <p>En caso de concurso ideal de delitos, las acciones prescriben cuando haya transcurrido un plazo igual al máximo correspondiente al delito más grave.</p> <p>La prescripción no será mayor a veinte años. Tratándose de delitos sancionados con pena de cadena perpetua se extingue la acción penal a los treinta años.</p> <p>En los delitos que merezcan otras penas, la acción prescribe a los tres años.</p> <p>No prescriben los delitos comprendidos en los artículos 393º, 394º, 395º, 396º, 397º, 398º, 399º, 400º y 401º del Código Penal cuando el autor se encuentre comprendido en el artículo 39 de la Constitución Política".</p> <p>Código de Ejecución Penal:</p> <p>"Art. 42.- Los beneficios penitenciarios son los siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permiso de salida. 2. Redención de pena por el trabajo y la educación. 3. Semi-libertad. 4. Liberación Condicional. 6. Otros beneficios. <p>No son de aplicación los beneficios contemplados en los incisos 2, 3, 4 del presente artículo, en el caso de los delitos contemplados en los artículos 393º, 394º, 395º, 396º, 397º, 398º, 399º, 400º y 401º del Código Penal cometidos por funcionarios y servidores del Estado".</p>	Delitos de Funcionario Público.

**ANEXO 2: LEGISLACIÓN
COMPARADA: CÓDIGOS PENALES
EXTRANJEROS.**

ANEXO 2: LEGISLACIÓN COMPARADA: CÓDIGOS PENALES EXTRANJEROS⁵⁵¹.

1. CÓDIGO PENAL ALEMÁN

SECCIÓN QUINTA: PRESCRIPCIÓN

CAPÍTULO PRIMERO: PRESCRIPCIÓN DE LA PERSECUCIÓN

§ 78 (Plazo de prescripción)

I. La prescripción impedirá la punición del hecho y la disposición de medidas (§ 11, apartado I, número 8). El artículo 76a, apartado II, frase primera, número 1, permanecerá válido.

II. Los crímenes del § 220a (genocidio) y del 211 (homicidio) no prescribirán.

III. En la medida en que la persecución prescriba, el plazo de prescripción supondrá

1. treinta años, en el caso de hechos castigados con pena privativa de libertad de por vida.
2. veinte años, en el caso de hechos que como máximo sean castigados con pena privativa de libertad de más de diez años
3. diez años, en el caso de hechos que como máximo sean castigados con pena privativa de libertad de más de cinco años hasta diez años
4. cinco años, en el caso de hechos que como máximo sean castigados con pena privativa de libertad de más de un año hasta cinco años.
5. tres años, en el resto de los casos.

IV. El plazo se registrará de acuerdo a la ley penal cuyo tipo haya realizado el hecho, sin consideraciones de agravantes o atenuantes que sean previstas de acuerdo a las prescripciones de la parte general o para casos especialmente graves o menos graves.

§78a (Comienzo)

La prescripción comenzará tan pronto como el hecho haya finalizado. Cuando primero deba considerarse el resultado posterior del tipo, la prescripción comenzará en este instante.

§78b (Suspensión)

I. La prescripción se suspenderá

1. hasta el cumplimiento del décimo octavo año de vida de la víctima en el caso de delitos de los §§ 176 a 179,
2. en tanto, de acuerdo a la ley, no pueda ser comenzada o continuada la persecución. Esto no será de aplicación sólo cuando el hecho no pueda ser perseguido por falta de querella, autorización o exigencia de pena.

II. Cuando se procese a un autor que sea miembro del Parlamento federal o de un órgano legislativo de un Estado federado, comenzará la suspensión de la prescripción con el cumplimiento del día en el que

1. la fiscalía o una autoridad o un funcionario del servicio de policía requiera conocimiento del hecho y de la persona del autor, o
2. sea presentada una denuncia o una querella contra el autor (§ 158 de la Ley de Enjuiciamiento Penal).

III. Cuando antes del cumplimiento del plazo de prescripción sea pronunciada una sentencia de la primera instancia, el plazo de prescripción no correrá desde el instante en el que el proceso sea conducido en firme.

IV. Cuando la ley penalice en casos especialmente graves con pena privativa de libertad agravada de más de cinco años, y haya sido iniciado el proceso por el tribunal territorial, la prescripción de los casos del § 78, apartado III, número 4, recomenzará desde la apertura de la vista, por un periodo máximo, no obstante, de cinco años. El apartado III permanecerá válido.

§78c (Interrupción)

I. La prescripción se interrumpirá por

1. el primer interrogatorio del acusado, la notificación de que se ha incoado el sumario contra él, o la disposición de este interrogatorio o notificación,
2. todo interrogatorio judicial del acusado o su disposición,
3. todo encargo del tribunal o de la fiscalía a un perito, cuando previamente el acusado haya sido interrogado o se le haya notificado la incoación del sumario,
4. todo embargo u orden de registro judicial y decisiones judiciales que los fundamenten,

⁵⁵¹ Es necesario precisar que el criterio ordenador de los códigos comparados y otros documentos que se sigue es el orden alfabético y cuando hay más de un material el cronológico.

5. la orden de detención, la orden de internamiento, la orden de comparecencia y las decisiones judiciales que las fundamenten,

6. la acusación por el fiscal,

7. la apertura de la vista,

8. todo señalamiento de un juicio oral,

9. la orden penal u otra decisión correspondiente al juicio,

10. el sobreseimiento provisional del proceso por razón de la ausencia del acusado, así como por toda orden del juez o del fiscal que recaiga de acuerdo a un sobreseimiento provisional o en procesos contra ausentes para investigar la residencia del acusado, o para el aseguramiento de pruebas,

11. el sobreseimiento provisional del proceso por razón de incapacidad del acusado para negociar, así como toda orden del juez o fiscal que recaiga de acuerdo a un sobreseimiento provisional para comprobar la incapacidad del acusado para negociar, o

12. toda petición judicial de realizar una acción investigadora en el extranjero.

En el procedimiento para la declaración y revisión de las medidas de seguridad y en procedimientos independientes, la prescripción se interrumpirá por las acciones correspondientes de la primera frase para llevar a cabo el procedimiento de seguridad o el procedimiento independiente.

II. La prescripción se interrumpirá en el instante en que, en caso de una orden o decisión escrita, la orden o decisión sea firmada.

III. Después de cada interrupción comenzará la prescripción de nuevo. La persecución prescribirá, sin embargo, a más tardar, cuando desde el instante señalado en el § 78a haya pasado el doble del plazo legal de prescripción y, si el plazo de prescripción es más breve de tres años de acuerdo a las leyes especiales, hayan pasado al menos tres años. La validez del § 78b permanecerá.

IV. La interrupción tendrá efectos sólo frente a aquellos a los que se refiera la acción.

V. Cuando una ley que es válida en el momento de finalización del hecho sea alterada antes de la decisión, y con ello se abrevie el plazo de prescripción, permanecerán efectivas acciones de interrupción que antes de la entrada en vigor de la nueva ley hayan sido llevadas a cabo, también cuando en el instante de la interrupción la prosecución, de acuerdo al nuevo Derecho, ya hubiese prescrito.

CAPÍTULO SEGUNDO: PRESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN

§ 79 (Plazo de prescripción)

I. Una pena o medida (§ 11, apartado I, número 8) impuesta con firmeza no podrá ser ya ejecutada después de expirar el plazo de prescripción.

II. La ejecución de penas por genocidio (§ 220a) y de penas privativas de libertad de por vida no prescribirá.

III. El plazo de prescripción será de

1. veinticinco años en caso de penas privativas de libertad superiores a diez años,

2. veinte años en caso de penas privativas de libertad superiores a cinco años hasta diez años,

3. diez años en caso de penas privativas de libertad superiores a un año hasta cinco años,

4. cinco años en caso de penas privativas de libertad de hasta un año y en caso de multa de más de treinta días-multa,

5. tres años en caso de multa de hasta treinta días-multa.

IV. La ejecución del internamiento de seguridad (preventivo) no prescribirá. En el caso de las medidas restantes, el plazo de prescripción será de diez años. Cuando la vigilancia orientadora o el primer internamiento en un establecimiento de desintoxicación sean ordenados, el plazo de prescripción será de cinco años.

V. Cuando se condene al mismo tiempo a pena privativa de libertad y a multa o, junto a una pena, a una medida privativa de libertad, incautación, confiscación y destrucción, la ejecución de una de las penas o medidas no prescribirá antes que las otras. Sin embargo, un internamiento preventivo ordenado al mismo tiempo no obstaculizará la prescripción de la ejecución de la pena o de otras medidas.

VI. La prescripción comenzará con la firmeza de la resolución.

§ 79a (Suspensión)

La prescripción se suspenderá

1. en tanto la ejecución no pueda iniciarse o proseguirse de acuerdo con la ley,

2. en tanto le sea concedido al condenado

a) aplazamiento o interrupción de la ejecución,

b) remisión condicional por decisión judicial o por vía de gracia, o

c) facilidades de pago en caso de multa, incautación, confiscación,

3. en tanto el condenado sea custodiado en una institución en territorio nacional o en el extranjero.

§ 79b (Prolongación)

El tribunal podrá prolongar una vez en plazo de prescripción, antes de su cumplimiento, a petición de la autoridad ejecutiva, en la mitad del plazo legal de prescripción, si el condenado se encuentra en un territorio en el que no pueda obtenerse su extradición o entrega.

1.1.- Código Penal alemán de 1870 (Derogado).

PARTE PRIMERA

TÍTULO IV: DE LAS CIRCUNSTANCIAS EXIMENTES O ATENUANTES

Art. 66°.- La persecución de las infracciones y la ejecución de las penas, se extinguen por la prescripción.

Art. 67°.- La persecución prescribe:

A los veinte años, cuando se trata de crímenes castigados con la pena de muerte o de reclusión perpetua;

A los quince años, cuando se trata de crímenes cuyo máximo de pena corporal exceda de diez años.

A los diez, cuando se trate de crímenes castigados con una pena corporal de menos duración.

La persecución de los delitos castigados como máximo con prisión de más de tres meses, prescribe a los cinco años, y a los tres la de los demás delitos.

La persecución de las contravenciones o faltas prescribe a los tres meses.

El tiempo de la prescripción comenzará a contarse desde el día en que se cometió la infracción.

Art. 68°.- La prescripción se interrumpirá por todo acto del Juez dirigido contra el autor de la infracción, por razón de la misma.

Esta interrupción sólo tendrá lugar respecto del inculcado contra quien se hayan dirigido las actuaciones.

Una vez interrumpidas éstas, comienza a correr una nueva prescripción.

Art. 69°.- Si el comienzo o la continuación del proceso dependiesen de la resolución de una cuestión prejudicial que deba resolverse en otro procedimiento, quedará en suspenso la prescripción hasta que éste quede ultimado.

Art. 70°.- La ejecución de las penas pasadas en autoridad de cosa juzgada prescribirá:

1°. A los treinta años, cuando se trate de la pena de muerte o de la de reclusión o detención perpetuas;

2°. A los veinte años, cuando se trate de la reclusión o detención por más de diez años;

3°. A los quince años cuando se trate de reclusión hasta diez años, de detención de cinco a diez años o de prisión por más de cinco años (1);

4°. A los diez años, cuando se trate de la detención o prisión de dos a cinco años, o de una multa que exceda de 200 thalers;

5°. A los cinco años, cuando se trate de una detención o prisión de menos de dos años y de una multa de 50 a 2.000 thalers.

6°. A los dos años, cuando se trate de la pena de arresto o de una multa de menos de 50 thalers.

La prescripción comenzará a contarse desde el día en que sea firme la sentencia.

Art. 71°.- Cuando una sentencia imponga a la vez por la misma infracción la pena de multa con la corporal correspondiente, no prescribirá la primera hasta que prescriba la última.

Art. 72°.- La prescripción quedará interrumpida por cualquier acto de la autoridad competente que tenga por objeto hacer cumplir la fuerza, así como también por la detención del condenado.

Una vez interrumpida la prescripción comenzará a correr ésta de nuevo, si hubiese lugar a ello, como si antes no hubiese comenzado.

1.2.- Proyecto alemán de 1962

SECCIÓN V: PRESCRIPCIÓN

TÍTULO I: PRESCRIPCIÓN DE LA PERSECUCIÓN

§ 127.- Plazo de prescripción

1. Por medio de la prescripción se excluye el castigo del hecho y la inscripción de medidas (§ 11, párrafos 1, n° 5)⁵⁵².

2. El plazo de prescripción importa:

1) Treinta años para hechos que son conminados con presidio perpetuo;

⁵⁵² § Conceptos materiales.

5) medida: toda medida de corrección y seguridad, de confiscación, secuestro y de inutilización.

- 2) Veinte años para hechos que son conminados con presidio de más de diez años;
 - 3) Diez años para hechos que son conminados con presidio de hasta diez años o prisión de más de cinco años;
 - 4) Cinco años para hechos que son conminados con prisión de más de un año y hasta cinco años;
 - 5) Tres años para el resto de los hechos.
3. El plazo se rige por la conminación penal de la ley, cuyo tipo realiza el hecho, sin consideración de agravantes o atenuantes que se prevean según preceptos de la parte general o para casos especialmente graves y menos graves.

§ 128. Comienzo.

La prescripción comienza tan pronto como la conducta punible se ha acabado. Si se produce sólo más tarde un resultado perteneciente al tipo, la prescripción comienza a partir, de ese momento.

§ 129.- Suspensión⁵⁵³.

1. La prescripción se suspende en tanto según la ley no se pueda iniciar o continuar la persecución. Esto no rige cuando el hecho no pueda perseguirse por la sola razón de faltar denuncias, la autorización o la requisitoria que para ello es necesaria.
2. Si antes del término del plazo de prescripción se hubiese dictado sentencia de primera instancia, el plazo de prescripción no correrá antes del momento que el procedimiento haya sido terminado con autoridad de cosa juzgada.

§ 130.- Interrupción.

1. La prescripción se interrumpirá por:
 - 1) Interposición de querrela pública o presentación de su correspondiente denuncia en juicio preventivo o en un proceso autónomo;
 - 2) Apertura del juicio principal;
 - 3) Convocatoria de la vista en procedimiento acelerado;
 - 4) Mandato penal o alguna otra resolución que equivalga a sentencia;
 - 5) La orden de arresto, de internamiento, de comparecencia y sentencia jurídica que mantengan dichas medidas;
 - 6) La suspensión judicial y provisional de procedimiento a causa de ausencia del inculpado;
 - 7) Cualquier decisión judicial que se dicte para el aseguramiento de....en el proceso contra el ausente o después de la suspensión provisional del proceso;
 - 8) El decreto de embargo de bienes en el proceso contra el ausente;
 - 9) Cada petición judicial destinada a realizar actos de instrucción en el extranjero.
2. Después de cada interrupción comenzará a correr desde el principio la prescripción. La persecución penal estará prescrita no más allá de cuando a partir del momento previsto en el § 128 haya transcurrido el doble del plazo de prescripción legal y, cuando el plazo de prescripción de conformidad con leyes especiales es más corto que tres años, hayan transcurrido por lo menos cinco años. El §129 permanece inalterado.

TÍTULO II: PRESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO

§ 131.- Plazo de prescripción.

1. Una pena o medida de seguridad (§11, inc. 1, n°5), impuesta y con autoridad de cosa juzgada, no debe ser cumplida después del transcurso del plazo de prescripción.
2. El plazo de prescripción importa
 - 1) Treinta años para presidio perpetuo
 - 2) Veinticinco años para presidio de más de diez años.
 - 3) Veinte años para presidio de más de cinco años hasta diez años;
 - 4) Diez años para presidio de hasta cinco años y prisión de más de un año;
 - 5) Cinco años para prisión de hasta un año, para la detención y para las multas de más de treinta cuotas diarias;
 - 6) Tres años en los de multas de hasta treinta cuotas diarias.
3. Para las medidas el plazo de prescripción asciende a diez años. El plazo asciende a cinco años si se ha impuesto una vigilancia de seguridad, el primer internamiento de un establecimiento de deshabitación o de trabajo.

⁵⁵³ ¿Qué sucede en el caso que hay una cuestión prejudicial que se vea en la vía extrapenal? Hay ¿interrupción o suspensión?

4. Si se ha impuesto al mismo tiempo una pena privativa de libertad, una confiscación, un comiso o una inutilización, la ejecución de una de las penas o medida no prescribe antes que las otras.
5. La prescripción comienza con la sentencia ejecutoriada.

§ 132.- Suspensión.

La prescripción se suspende:

- 1) En tanto de conformidad con la ley el cumplimiento no ha podido comenzar o continuar;
- 2) En tanto se haya concedido al condenado.
 - a) Aplazamiento o interrupción del cumplimiento,
 - b) Suspensión condicional de la pena o por la vía de la gracia;
 - c) Facilidades de pago en el caso de multa, confiscación o comiso;
- 3) En tanto que el condenado esté internado en un establecimiento por orden de la autoridad en el interior del país o en el extranjero.

§ 133.- Ampliación

El tribunal puede ampliar el plazo de prescripción antes que empiece su transcurso a solicitud de la autoridad encargada para el cumplimiento, por una vez, en la mitad del plazo de prescripción legal, cuando el condenado permanezca en un territorio desde el cual no se pueda obtener su extradición o comparecencia.

1.3.- Proyecto alternativo alemán de 1966

CAPITULO VI: DENUNCIA PENAL Y PRESCRIPCIÓN

TÍTULO I: DENUNCIA PENAL, AUTORIZACIÓN, REQUISITORIA

§ 93. Denuncia penal.

1. Un hecho cuya persecución sólo procede por denuncia, es perseguible cuando el titular presenta una denuncia dentro del plazo de tres meses.
2. Titular de la denuncia es la víctima del hecho. El derecho de denuncia se transmite a los parientes sólo cuando la ley lo establezca.
3. El representante legal de los incapaces es titular de la denuncia.

El incapaz relativo que no ha agotado el décimo octavo año de vida es titular de la denuncia juntamente con su representante legal.

4. Si hay varios titulares de la denuncia, cada uno puede presentarla independientemente.

§ 94. Comienzo y final del plazo de la denuncia.

1. El plazo del § 93, inc. 1 comienza con el transcurso del día en que el titular toma conocimiento del hecho y de la identidad de los participantes.
2. Si hay varios titulares de la denuncia o partícipes en el hecho, el plazo corre en favor y en contra de cada uno por separado.
3. Si por hechos recíprocos un partícipe interpone denuncia penal, se extingue el derechos denuncia de los otros partícipes con el cierre del juicio de primera instancia.

§ 95. Retiro de la denuncia.

El titular puede retirar la denuncia hasta la dictación de una sentencia condenatoria. Una denuncia retirada no puede ser presentada otra vez.

§ 96. Autorización y requisitoria.

Si un hecho sólo es perseguible con autorización o previa requisitoria, rigen en lo pertinente los § 93 hasta 95.

TÍTULO II: PRESCRIPCIÓN

§ 97. Plazo de prescripción

1. Después de la llegada de la prescripción no se puede interponer las consecuencias jurídicas de esta ley
2. El genocidio no prescribe
3. El plazo de la prescripción importa
 - 1) Treinta años para hechos que son conminados con pena privativa de libertad perpetua;
 - 2) Veinte años para hechos que son conminados con pena privativa de libertad de más de diez años
 - 3) Diez años para hechos que son conminados con pena privativa de libertad de más de tres años,
 - 4) Cinco años para hechos que son conminados con pena privativa de libertad de más de un año.
 - 5) Tres años para el resto de los hechos.
4. El plazo comienza tan pronto como la conducta punible se acaba. Si sobrevive posteriormente un resultado perteneciente al tipo, la prescripción comienza en ese momento.

§ 98. Suspensión de la prescripción.

La prescripción se suspende en tanto, según la ley, no se puede iniciar o continuar la persecución. Esto no rige cuando el hecho no pueda ser perseguido sólo por faltar una denuncia penal, una autorización o una requisitoria.

§ 99. Interrupción de la prescripción.

1. La prescripción se interrumpirá por:

- 1) La interposición de la querella pública o la interposición de denuncia en proceso autónomo,
- 2) Apertura de juicio principal, el pronunciamiento de una sentencia en primera instancia o la convocatoria de la vista en procedimiento acelerado;
- 3) Mandato penal o disposición penal;
- 4) Orden de arresto u otro de internamiento;
- 5) Suspensión judicial a causa de ausencia del inculpado;
- 6) Decisión judicial para aseguramiento de pruebas o para el embargo de bienes en el proceso contra el ausente.

2. Después de cada interrupción comenzará a correr nuevamente la prescripción. La prescripción prosigue sin consideración a interrupciones cuando haya transcurrido el doble del plazo legal de prescripción.

2. CÓDIGO PENAL ARGENTINO DE 1922⁵⁵⁴**LIBRO PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES****TÍTULO VIII: REINCIDENCIA**

Artículo 51.- Todo ente oficial que lleve registros penales se abstendrá de informar sobre datos de un proceso terminado por sobreseimiento o sentencia absolutoria. En ningún caso se informará la existencia de detenciones que no provengan de la formación de causa, salvo que los informes se requieran para resolver un hábeas corpus o en causas por delitos de que haya sido víctima el detenido.

El registro de las sentencias condenatorias caducará a todos sus efectos:

- 1° Después de transcurridos diez años desde la sentencia (art. 27) para las condenas condicionales;
- 2° Después de transcurridos diez años desde su extinción para las demás condenas a penas privativas de la libertad;
- 3° Después de transcurridos cinco años desde su extinción para las condenas a pena de multa o inhabilitación.

En todos los casos se deberá brindar la información cuando mediare expreso consentimiento del interesado. Asimismo, los jueces podrán requerir la información, excepcional, por resolución que solo podrá fundarse en la necesidad concreta del antecedente como elemento de prueba de los hechos en un proceso judicial.

Los tribunales deberán comunicar a los organismos de registro la fecha de caducidad:

- 1° Cuando se extingan las penas perpetuas;
- 2° Cuando se lleve a cabo el cómputo de las penas temporales, sean condicionales o de cumplimiento efectivo;
- 3° Cuando se cumpla totalmente la pena de multa o, en caso de su sustitución por prisión (art. 21, párr. 2°), al efectuarse el cómputo de la prisión impuesta.
- 4° Cuando declaren la extinción de las penas en los casos previstos por los arts. 65, 68 y 69.

La violación de prohibición de informar será considerada como violación de secreto en los términos del art. 157, si el hecho no constituyere un delito más severamente penado.

TÍTULO X: EXTINCIÓN DE ACCIONES Y DE PENAS

Artículo 59.- La acción penal se extinguirá:

- 1° Por la muerte del imputado;
- 2° Por la amnistía;
- 3° Por la prescripción;
- 4° Por la renuncia del agraviado, respecto de los delitos de acción privada.

Artículo 60.- La renuncia de la persona ofendida al ejercicio de la acción penal, sólo perjudicará al renunciante y a sus herederos.

Artículo 62.- La acción penal se prescribirá durante el tiempo fijado a continuación:

- 1° A los quince años, cuando se tratare de delitos cuya pena fuere la de reclusión o prisión perpetua;

⁵⁵⁴ Decreto 3992 de 1984.

2° Después de transcurrido el máximo de duración de la pena señalada para el delito, si se tratare de hechos reprimidos con reclusión o prisión, no pudiendo, en ningún caso, el término de la prescripción exceder de doce años ni bajar de dos años;

3° A los cinco años, cuando se tratare de un hecho reprimido únicamente con inhabilitación temporal;

4° Al año, cuando se tratare de un hecho reprimido únicamente con inhabilitación temporal;

5° A los dos años, cuando se tratare de hechos reprimidos con multa.

Artículo 63.- La prescripción de la acción empezará a correr desde la media noche del día en que se cometió el delito o, si éste fuere continuo, en que cesó de cometerse.

En los delitos previstos en los artículos 119, 120, 124, 125, 125 bis, 128, 129 –in fine-, y 130 –párrafo segundo y tercero- del Código Penal, cuando la víctima fuere menor de edad, la prescripción de la acción comenzará a correr desde la medianoche del día en que éste haya alcanzado la mayoría de edad.

Si como consecuencia de cualquiera de los delitos indicados, hubiere ocurrido la muerte del menor de edad, la prescripción de la acción penal comenzará a correr desde la media noche del día en que aquél hubiera alcanzado la mayoría de edad. (Segundo párrafo incorporado por el artículo 1° de la ley numero 26.705 B.O. 5/10/2011).⁵⁵⁵

Artículo 64.- La acción penal por delito reprimido con multa se extinguirá en cualquier estado de la instrucción y mientras no se haya iniciado el juicio, por el pago voluntario del mínimo de la multa correspondiente y la reparación de los daños causados por el delito.

Si se hubiese iniciado el juicio deberá pagarse el máximo de la multa correspondiente, además de repararse los daños causados por el delito.

En ambos casos el imputado deberá abandonar a favor del Estado, los objetos que presumiblemente resultarían decomisados en caso de que cayera en condena.

El modo de extinción de la acción penal previsto en este artículo podrá ser admitido por segunda vez si el delito ha sido cometido después de haber transcurrido ocho años a partir de la fecha de la resolución que hubiese declarado la extinción de la acción penal en la causa anterior.

Artículo 65.- Las penas se prescriben en los términos siguientes:

1° La de reclusión perpetua, a los veinte años;

2° La de prisión perpetua, a los veinte años;

3° La de reclusión o prisión temporal, en un tiempo igual al de la condena;

4° La de multa, a los dos años.

Artículo 66.- La prescripción de la pena empezará a correr desde la medianoche del día en que se notificare al reo la sentencia firme o desde el quebrantamiento de la condena, si ésta hubiere empezado a cumplirse.

Artículo 67.- La prescripción se suspende en los casos de los delitos en cuyo juzgamiento sea necesaria la resolución de cuestiones previas o prejudiciales, que deben ser resueltas en otro juicio. Terminada la causa de la suspensión, la prescripción sigue su curso.

La prescripción también se suspende en los casos de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, para todos los que hubiesen participado, mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público.

El curso de la prescripción de la acción penal correspondiente a los delitos previstos en los arts. 226 y 227 bis, se suspenderá hasta el restablecimiento del orden constitucional.

La prescripción se interrumpe solamente por:

La comisión de otro delito;

El primer llamado efectuado a una persona, en el marco de un proceso judicial, con el objeto de recibirle declaración indagatoria por el delito investigado;

El requerimiento acusatorio de apertura o elevación a juicio, efectuado en la forma que lo establezca la legislación procesal correspondiente;

El auto de citación a juicio o acto procesal equivalente; y

El dictado de sentencia condenatoria aunque la misma no se encuentre firme.

⁵⁵⁵ Según INFOLEG que es la base de datos del Centro de Documentación e Información (CDI), del Ministerio de Economía y Finanzas de Argentina.

La prescripción corre, se suspende o se interrumpe separadamente para cada delito y para cada uno de sus partícipes, con la excepción prevista en el segundo párrafo de este artículo.

Artículo 68.- El indulto del reo extinguirá la pena y sus efectos, con excepción de las indemnizaciones debidas a particulares.

Artículo 69.- El perdón de la parte ofendida extinguirá la pena impuesta por delito de los enumerados en el art. 73.

Artículo 70.- Las indemnizaciones pecuniarias inherentes a las penas, podrán hacerse efectivas sobre los bienes propios del condenado, aun después de muerto.

TÍTULO XII: DE LA SUSPENSIÓN DEL JUICIO A PRUEBA

Artículo 76 ter.- El tiempo de la suspensión del juicio será fijado por el tribunal entre uno y tres años, según la gravedad del delito. El tribunal establecerá las reglas de conducta que deberá cumplir el imputado, conforme las previsiones del art. 27 bis.

Durante ese tiempo se suspenderá la prescripción de la acción penal.

La suspensión del juicio será dejada sin efecto si con posterioridad se conocieran circunstancias que modifiquen al máximo de la pena aplicable o la estimación acerca de la condicionalidad de la ejecución de la posible condena.

Si durante el tiempo fijado por el tribunal el imputado no comete un delito, repara los daños en la medida ofrecida y cumple con las reglas de conducta establecidas, se extinguirá la acción penal. En caso contrario, se llevará a cabo el juicio y si el imputado fuere absuelto se le devolverán los bienes abandonados a favor del Estado y la multa pagada, pero no podrá pretender el reintegro de las reparaciones cumplidas.

Cuando la realización del juicio fuese determinada por la comisión de un nuevo delito, la pena que se imponga no podrá ser dejada en suspenso.

La suspensión de un juicio a prueba podrá ser concedida por segunda vez, si el nuevo delito ha sido cometido después de haber transcurrido ocho años a partir de la fecha de expiración del plazo por el cual hubiera sido suspendido el juicio en el proceso anterior.

No se admitirá una nueva suspensión de juicio respecto de quien hubiese incumplido las reglas impuestas en una suspensión anterior.

Artículo 76 quáter.- La suspensión del juicio a prueba hará inaplicables al caso las reglas de prejudicialidad de los arts. 1101 y 1102 del Código Civil, y no obstará a la aplicación de las sanciones contravencionales, disciplinarias o administrativas que pudieran corresponder.

LIBRO SEGUNDO: DE LOS DELITOS

TÍTULO III: DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL

Artículo 132.- En los delitos previstos en los arts. 119: 1º, 2º, 3º párrafos, 120: 1º párrafo y 130 la víctima podrá instar el ejercicio de la acción penal pública con el asesoramiento o representación de instituciones oficiales o privadas sin fines de lucro de protección o ayuda a las víctimas. Si ella fuere mayor de dieciséis años podrá proponer un avenimiento con el imputado. El tribunal podrá excepcionalmente aceptar la propuesta que haya sido libremente formulada y en condiciones de plena igualdad, cuando, en consideración a la especial y comprobada relación afectiva preexistente, considere que es un modo más equitativo de armonizar el conflicto con mejor resguardo del interés de la víctima. En tal caso la acción penal quedará extinguida; o en el mismo supuesto también podrá disponer la aplicación al caso de lo dispuesto por los arts. 76 ter y 76 quáter del Código Penal.

2.1. Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires⁵⁵⁶

LIBRO I: DISPOSICIONES GENERALES

TÍTULO III: EXTINCIÓN DE LAS ACCIONES Y LAS SANCIONES

Art. 40.- Extinción. La acción se extingue por:

1. Conciliación o autocomposición homologada judicialmente.
2. Muerte del imputado o condenado.
3. Prescripción.
4. Cumplimiento de la sanción o del compromiso establecido en el artículo 45.

⁵⁵⁶ Ley N° 1472 – BOCBA N° 2055 del 28/10/04. Sanción ocurrida el 23 de setiembre de 2004. Promulgado el día 25 de octubre de 2004.

5. La renuncia del damnificado respecto a las contravenciones de acción pendiente de instancia privada. En el caso del inciso 5 es necesario el consentimiento del imputado, sin perjuicio de la facultad del juez de revisar el acto cuando tuviere fundados motivos para estimar que la denuncia fue falsa o que algunos de los intervinientes ha actuado bajo coacción o amenaza.

La sanción se extingue en los supuestos establecidos en los incisos 2), 3) y 4) estipulados precedentemente.

Art. 41.- Conciliación o autocomposición:

Existe conciliación o autocomposición cuando el imputado/a y la víctima lleguen a un acuerdo sobre la reparación del daño o resuelven el conflicto que generó la contravención y siempre que no resulte afectado el interés público o de terceros.

La conciliación o autocomposición puede concretarse en cualquier estado del proceso. El fiscal debe procurar que las partes manifiesten cuáles son las condiciones en que aceptarían conciliarse o llegar a la autocomposición.

Cuando se produzca la conciliación o autocomposición el juez debe homologar los acuerdos y declarar extinguida la acción contravencional.

El juez puede no aprobar la conciliación o autocomposición cuando tenga fundados motivos para estimar que algunos de los intervinientes no está en condiciones de igualdad para negociar o ha actuado bajo coacción o amenaza.

Mediación. El fiscal puede solicitar el asesoramiento y el auxilio de personas o entidades especializadas para procurar el acuerdo de las partes en conflicto o instar a los interesados para que designen un mediador.

El juez y/o el fiscal deben poner en conocimiento de las víctimas la existencia de estos mecanismos alternativos de resolución de conflictos.

Art. 42.- Prescripción de la acción:

La acción prescribirá a los dieciocho meses de cometida la contravención o de la cesación de la misma si fuera permanente. En los casos de contravenciones de tránsito o de las del Título V la prescripción de la acción se producirá a los dos (2) años.

Art. 43.- Prescripción de la sanción:

La sanción prescribe a los dieciocho meses de la fecha en que la sentencia quedó firme o desde el quebrantamiento de la condena, si ésta hubiera empezado a cumplirse. La prescripción será a los dos años en los casos de contravenciones de tránsito y de las del Título V.

Art. 44.- Interrupción de la prescripción:

La prescripción de la acción sólo se interrumpe por la celebración de la audiencia de juicio o por la rebeldía del imputado/a. En ambos casos corren y se interrumpen separadamente para cada uno de los partícipes de la infracción.

Art. 45.- Suspensión del proceso de prueba:

El imputado/a de una contravención que no registre condena contravencional en los dos (2) años anteriores al hecho, puede acordar con el Ministerio Público Fiscal la suspensión del proceso a prueba sin que ello implique admitir su responsabilidad.

El juez resuelve sobre el acuerdo, teniendo la facultad de no probarlo cuando tuviere fundados motivos para estimar que alguno de los intervinientes no estuvo en igualdad de condiciones para negociar o que ha actuado bajo coacción o amenaza.

El imputado/a debe abandonar a favor del Estado los bienes que necesariamente resultarían decomisados en caso que recayere condena.

El acuerdo debe contemplar el compromiso de cumplir, por un lapso que no excederá de un año, una o más de las siguientes reglas de conducta:

1. Fijar residencia y comunicar a la Fiscalía el cambio de esta.
2. Cumplir con las citaciones o requerimientos que la fiscalía o el Juzgado hiciere.
3. Realizar tareas comunitarias.
4. Abstenerse de concurrir a determinados lugares o de tomar contacto con determinadas personas.
5. Abstenerse de realizar alguna actividad.
6. Abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas.
7. Cumplir instrucciones especiales que se le impartan.

Cumplido el compromiso sin que el imputado/a cometa alguna contravención, se extinguirá la acción. En caso contrario, se continuará con el proceso.

La suspensión del proceso a prueba suspende el curso de la prescripción. También lo suspende la iniciación de un nuevo proceso contravencional, si en éste caso se dicta sentencia condenatoria.

Art. 46.- Condena en suspenso:

En los casos de primera condena si el juez/a, atendiendo a los antecedentes personales, modo de vida, naturaleza, modalidades y móviles de la contravención, presume que el condenado/a no volverá a incurrir en una nueva contravención de la misma especie, podrá dejar en suspenso su cumplimiento.

Al suspender la ejecución de la condena el juez/a dispone que el condenado cumpla una o más de las reglas de conducta prevista en el tercer párrafo del artículo 45, durante un lapso que no puede exceder del allí estipulado, en tanto resulten adecuadas para prevenir la comisión de nuevas contravenciones.

Las reglas de conducta pueden ser modificadas por el juez/a según resulte conveniente el caso. Si el condenado/a no cumple con alguna regla de conducta el juez/a puede revocar la suspensión de la ejecución de la condena y el condenado/a debe cumplir la totalidad de la sanción impuesta.

Si dentro del término de dos (2) años de la sentencia condenatoria el condenado/a no comete una nueva contravención, la condena tendrá por no pronunciada. En caso contrario, se hará efectiva la primera sentencia, además de la segunda, y el contraventor/a será considerado como reincidente si reúne los requisitos establecidos por el artículo 17.

Art. 47.- Eximición de la sanción:

El juez/a puede eximir mediante sentencia la sanción, siempre que el imputado no registre condena contravencional anterior, cuando exista alguna circunstancia de atenuación, y por ello la sanción mínima a aplicar resulte demasiado severa.

El beneficio de la eximición judicial no rige a los fines de la reincidencia.

2.2.- Proyecto de Código Penal de 1906)⁵⁵⁷.

LIBRO PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES

TÍTULO X: EXTINCIÓN DE ACCIONES Y DE PENAS

Artículo 63.-Causas de extinción.- La acción penal se extinguirá:

1. Por la muerte del imputado;
2. Por la amnistía;
3. Por la prescripción;
4. Por la renuncia del agraviado, respecto de los delitos de acción privada.
5. Por retractación pública o explicación satisfactoria del acusado por delito contra el honor, siempre que la retractación o explicación tuvieron lugar antes de contestarse la querella, y se ofreciere al pago de costas y perjuicios.

Artículo 64.-Renuncia de la persona ofendida.- La renuncia de la persona ofendida, el ejercicio de la acción penal, sólo se perjudicará al renunciante y a sus herederos.

Artículo 65.-Amnistía.- La amnistía extinguirá la acción penal, y hará cesar la condena y todos sus efectos, con excepción de las indemnizaciones debidas a particulares.

Artículo 66.- Prescripción de las acciones.- La acción penal se prescribirá por la buena conducta del imputado, durante el tiempo fijado a continuación:

- 1) A los quince años, cuando se tratare de delitos cuya pena fuere la de muerte o presidio;
- 2) Después de transcurrido el máximum de duración de la pena señalada para el delito, si se tratare de hechos reprimidos con prisión o detención, no pudiendo, en ningún caso, el término de la prescripción, exceder de doce años ni bajar de dos meses;
- 3) A los cinco años, cuando se tratare de un hecho reprimido únicamente con inhabilitación perpetua;
- 4) Al año, cuando se tratare de un hecho reprimido únicamente con inhabilitación temporal;
- 5) A los dos años, cuando se tratare de hechos reprimidos con multa de quinientos a dos mil pesos;
- 6) Al año, cuando se tratare de hechos reprimidos con multa de quinientos a dos mil pesos;
- 7) A los seis meses, cuando se tratare de hechos reprimidos con multa que no excediere de quinientos pesos.

Artículo 67.-Desde cuando corre.- La prescripción de la acción empezará a correr desde la media noche del día en que se cometió el delito, o si este fuere continuo, en que cesó de cometerse.

Artículo 68.-Acción por delito reprimido con multa.- La acción penal por delito reprimido con multa, se extinguirá en cualquier estado del juicio, por el pago voluntario del máximum de la multa correspondiente al delito, y de las indemnizaciones a que hubiere lugar.

Artículo 69.-Prescripción de las penas.- Las penas se prescribirán por la buena conducta del condenado, en los términos siguientes:

⁵⁵⁷ De Rodolfo Rivarola.

- 1) La de muerte o presidio, a los veinte años;
- 2) La de deportación o prisión por tiempo indeterminado, a los quince años;
- 3) La de prisión, en un tiempo igual al de la condena;
- 4) La pena de multa mayor de dos mil pesos, a los tres años;
- 5) La pena de multa que no excediere de dos mil pesos, al año.

Artículo 70.-a) Desde cuando corre.- La prescripción de la pena empezará a correr desde la media noche del día en que notificare al reo la sentencia firme, o desde el quebrantamiento de la condena, si ésta hubiere empezado a cumplirse.

Artículo 71.-b) Separadamente para cada partícipe.- La prescripción correrá o se interrumpirá separadamente, para cada uno de los partícipes de un delito.

Artículo 72.-Indulto.- El indulto del reo extinguirá la pena y sus efectos, con excepción de las indemnizaciones debidas a particulares.

Artículo 73.-Perdón del ofendido.- El perdón de la parte ofendida, extinguirá la pena impuesta por delito de los enumerados en el art. 77.

Si hubiere varios partícipes, el perdón en favor de uno de ellos, aprovechará a los demás.

Artículo 74.-Las indemnizaciones pecuniarias.- Las indemnizaciones pecuniarias inherentes a la pena, podrán hacerse efectivas sobre los bienes propios del condenado, aún después de su muerte.

2.3.- Parte general del Proyecto de Código Penal para la República argentina 1937⁵⁵⁸.

DISPOSICIONES GENERALES

TÍTULO X: EXTINCIÓN DE LAS ACCIONES Y SANCIONES

Artículo 103.- La acción penal se extingue:

- 1) Por la muerte del imputado.
- 2) Por la amnistía.
- 3) Por la prescripción.
- 4) Por la renuncia del agraviado, respecto de los delitos de acción privada.

Artículo 104.- La renuncia de la persona agraviada sólo tendrá efecto en relación al renunciante y a sus herederos.

Artículo 105.- La amnistía no extingue el derecho a la indemnización del daño causado por el delito.

Artículo 106.- La acción penal se prescribirá:

- 1) A los veinticinco años, cuando se tratare de delitos para los que estuviere establecida la reclusión perpetua.
- 2) Después de transcurrido el máximo de duración de la sanción señalada para el delito, si fuere la de reclusión temporal o la de prisión.

El término de la prescripción no podrá exceder, sin embargo de quince años, ni ser inferior a cinco años.

- 3) A los cinco años, cuando se tratare de un hecho para el cual estuviere establecida, como única sanción, la de inhabilitación.

- 4) A los cinco años, cuando se tratare de un delito para el cual estuviere establecida la multa en cantidad superior a cinco mil pesos. A los dos años, si fuere inferior a dicha suma.

Los términos precedentes se aumentarán en la mitad si el condenado hubiere revelado habitualidad, establecida en una sentencia anterior y en la forma que preceptúa el inciso e) del artículo 20, o si fuere reincidente en condiciones de peligrosidad declarada en una sentencia anterior, conforme al inciso f) del mismo artículo.

Artículo 107.- La prescripción de la acción empezará a correr desde la media noche del día en que se consumó el delito y, si éste fuere permanente, en que cesó de cometerse. Si el delito fuere continuado, el término de la prescripción se contará desde la media noche del día en que se cometió la última de las violaciones a la ley penal, que lo constituyan.

La prescripción, en el caso de tentativa, comenzará a correr desde la media noche del día en que fue cometido el último acto de ejecución.

En caso de delitos que, para perfeccionarse, requieran el cumplimiento de una condición, el término de la prescripción empezará a correr desde la media noche del día en que la condición se verificó.

La prescripción de la acción por el delito de quiebra comenzará a correr desde la medianoche del día en que haya quedado firme el auto declarativo de la falencia.

⁵⁵⁸ Elaborado por los Doctores Jorge Eduardo Coll y Eusebio Gómez.

La acción por el delito que prevé el artículo 239 se contará desde la media noche del día en que quede firme el auto declarando al concurso civil del deudor.

Artículo 108.- La prescripción se suspende en caso de delitos para cuyo juzgamiento sea necesaria la resolución de cuestiones previas o prejudiciales, que deban ser resueltas en otro juicio. Terminada la causa de la prescripción sigue su curso.

Artículo 109.- La prescripción de la acción se interrumpe:

- 1) Por la comisión de otro delito.
- 2) Por la secuela del juicio.

Artículo 110.- La prescripción corre, se suspende o se interrumpe separadamente para cada uno de los partícipes del delito.

Artículo 111.- Las sanciones se extinguen:

- 1) Por la amnistía.
- 2) Por el indulto, si se trata de las de reclusión, prisión, expulsión del país, inhabilitación y multa. Los tribunales, al producir el informe prescrito por el artículo 86, inciso 6° de la Constitución nacional, expresarán cual o cuales de las circunstancias especificadas en el artículo 20 concurren respecto del condenado. El indulto no extingue el derecho a la indemnización del daño causado por el delito.
- 3) Por el perdón del ofendido, cuando la condena se haya pronunciado en razón de un delito de acción privada. El perdón en favor de uno de los partícipes aprovechará a todos.
- 4) Por la prescripción, si se trata de las de reclusión, prisión, inhabilitación y multa, cuando hayan corrido los términos señalados en el artículo siguiente.

Artículo 112.- Las sanciones se prescriben por el transcurso de los términos que a continuación se expresan:

- 1) La de reclusión perpetua, a los veinticinco años.
- 2) La de reclusión o prisión por tiempo indeterminado, a los veinticinco años.
- 3) Las de reclusión y prisión temporales, cuando haya corrido el doble del tiempo por el cual fueron impuestas. El tiempo para la prescripción, en este caso no será inferior a cinco años ni excederá de veinticinco años.
- 4) La de multa, a los seis a años, si fuera superior a cinco mil pesos. En los demás casos, a los tres años.

Artículo 113.- La internación, ya sea en un manicomio o en un establecimiento adecuado para el tratamiento y curación del delincuente, no se prescribe.

Artículo 114.- La prescripción de la sanción empezará a correr desde la media noche del día en que se notificare al reo la sentencia firme o desde el quebrantamiento de la condena, si ésta hubiere empezado a cumplirse.

2.4.- Proyecto de reformas de la Parte General del C.P. de Argentina de 1987⁵⁵⁹.

LIBRO PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES

TÍTULO IX: DE LOS EFECTOS DE LA CONDENACIÓN

CAPÍTULO IV: DE LA EXTINCIÓN DE LA PUNICIÓN

Artículo 70.- Extinción de la punición. La punición se extingue separadamente para cada una de las personas que hubiesen tomado parte en el hecho, por cumplimiento de la pena, por muerte del penado, por prescripción de la punición y por indulto. La punición se extingue conjuntamente para todos los que hubiesen tomado parte en el hecho, por amnistía y por el perdón de la parte ofendida en los casos de acción privada.

Las indemnizaciones debidas a particulares se extinguen conforme a la ley civil.

Artículo 71.- Prescripción de la punición. La punición máxima se extingue por prescripción a los veinte años y las restantes en un plazo igual al de la prisión impuesta. La punición que no implique prisión se prescribe a los tres años. No se prescribe la punición impuesta por delitos contra la humanidad ni por delitos de tortura, tormentos o que importen desaparición forzada de personas.

Cuando no hubiese comenzado a cumplirse la pena correspondiente a la punición, la prescripción comenzará a correr desde el día del pronunciamiento de la sentencia condenatoria. Si hubiese comenzado su cumplimiento, correrá a partir del día del quebrantamiento de la condena.

La prescripción de la punición se interrumpirá con la comisión de un nuevo hecho penal en el país o en el extranjero, siempre que estuviere también previsto como tal en la ley argentina.

La prescripción de la punición se suspenderá mientras la ejecución de las penas se encuentre legalmente diferida o mientras el condenado se hallase cumpliendo otra pena con privación de libertad en el país o en el

⁵⁵⁹ Por Miguel Angel Arnedo.

extranjero, salvo que el hecho por el cual se le hubiese impuesto no estuviese penalmente previsto en la ley argentina.

TÍTULO XI: DEL EJERCICIO Y DE LA EXTINCIÓN DE LAS ACCIONES

Artículo 76. Extinción de las acciones. La acción penal se extinguirá:

- 1) Por la muerte del imputado;
- 2) Por la amnistía;
- 3) Por la prescripción;
- 4) Por la renuncia del agraviado, respecto de los delitos de acción privada;
- 5) Por declaración judicial, en caso de suspensión a prueba del trámite de la causa.

La renuncia de la persona ofendida al ejercicio de la acción penal, sólo perjudicará al renunciante y a sus herederos.

La amnistía extinguirá la acción penal y hará cesar la condena y todos sus efectos, con excepción de las indemnizaciones debidas a particulares.

La acción penal por delito reprimido con multa se extinguirá en cualquier estado del juicio por el pago voluntario del máximo de la multa correspondiente al delito y de las indemnizaciones a que hubiere lugar.

Artículo 77.- Prescripción de las acciones. La acción penal se prescribirá durante el tiempo fijado a continuación:

- 1) A los quince años, cuando se tratare de hechos a los que corresponda punición máxima;
- 2) Después de transcurrido el máximo de duración de la pena señalada para el delito, si se tratare de hechos reprimidos con prisión, no pudiendo, en ningún caso, el término de la prescripción exceder de doce años ni bajar de dos años;
- 3) A los tres años cuando se tratare de hechos reprimidos únicamente con inhabilitación;
- 4) A los dos años cuando se tratare de hechos reprimidos únicamente con multa.

La prescripción de la acción empezará a correr desde la medianoche del día en que se cometió el delito, o si éste fuere continuo y continuado, en que cesó de cometerse.

La prescripción se suspende en los casos de los delitos para cuyo juzgamiento sea necesaria la resolución de cuestiones previas o prejudiciales, que deban ser resueltas en otro juicio. Terminada la causa de la suspensión, la prescripción sigue su curso.

La prescripción también se suspende en los casos de delitos previstos en los capítulos 6, 7, 8, 9, bis y 10 del título II, libro 2º de este código, mientras cualquiera de los que hayan participado se encuentre desempeñando un cargo público.

El curso de la prescripción de la acción penal correspondiente a los delitos previstos en los arts. 226 y 227 bis, se suspenderá hasta el restablecimiento del orden constitucional.

La prescripción se interrumpe por la comisión de otro delito.

La prescripción corre, se suspende, o se interrumpe, separadamente para cada uno de los partícipes del delito.

3. CÓDIGO PENAL DE AUSTRIA⁵⁶⁰ (Ley Federal sobre acciones sancionadas judicialmente con penas).

PARTE GENERAL

TÍTULO SEXTO: PRESCRIPCIÓN

§ 57. Prescripción de la punibilidad

1) Las acciones punibles sancionadas con pena privativa de libertad perpetua y con pena privativa de libertad de diez a veinte años o perpetua no prescriben. Sin embargo, transcurrido un plazo de veinte años se sustituirá la pena de prisión perpetua señalada por la ley, por la de diez a veinte años. Para el cómputo de los plazos se aplicará, respectivamente, lo dispuesto en el apartado 2 y en el § 58.

2) La punibilidad de otros hechos se extingue por prescripción. El plazo de la prescripción comienza tan pronto concluye la actividad sancionada con una pena o cesa la conducta sancionada con una pena.

3) El plazo de prescripción es de veinte años si la acción no está sancionada con prisión perpetua, pero si con más de diez años de privación de libertad; diez años si la acción está sancionada con pena privativa de libertad de más de cinco y un máximo de diez años; cinco años si la acción está sancionada con más de un año, pero con un máximo de diez años de privación de libertad; tres años si la acción está sancionada con más de seis meses, pero con un máximo de un año de privación de libertad; un año si la acción está sancionada con pena privativa de libertad no superior a seis meses o con pena de multa.

⁵⁶⁰ De 23 de enero de 1974.

4) Cuando se dé la prescripción no podrán imponerse tampoco medidas preventivas.

§ 58. Prolongación del plazo de prescripción

1) Si un resultado perteneciente a la figura de delito no se produce sino después de haber concluido la actividad o de cesar la conducta sancionada con una pena, el plazo de prescripción no concluirá hasta que se haya producido la aparición del resultado o haya transcurrido desde el momento señalado en el § 57, apartado 2, un tiempo superior a la mitad pero no inferior a tres años.

2) Si el autor comete durante el transcurso del plazo de prescripción una acción sancionada con una pena en virtud de la misma tendencia nociva, la prescripción no se producirá antes de que transcurra el plazo de prescripción de tal hecho.

3) No se computarán para el plazo de prescripción: 1º, el tiempo durante el cual no pudiera iniciarse o proseguirse la persecución en virtud de un precepto legal, siempre que no dispongan lo contrario la ley constitucional federal en su redacción de 1929 y el apartado 4; 2º, el tiempo durante el cual esté pendiente un proceso contra el autor por causa del hecho en cuestión.

4) Si el hecho no es perseguible sino en virtud de denuncia, querrela o autorización de quien esté legitimado para ello, no se paralizará la prescripción en el caso de falta de denuncia, querrela o autorización.

§ 59. Prescripción de la ejecución de la pena

1) La ejecución de una pena privativa de libertad perpetua o por más de diez años y el internamiento en un centro para infractores mentalmente anormales o reincidentes peligrosos, no prescriben.

2) La ejecución de otras penas, penas accesorias y medidas preventivas se extingue por la prescripción. El plazo comenzará a contarse a partir del momento en que sea firme la resolución en que se imponga la pena que se ha de ejecutar, la pena accesoria o la medida preventiva.

3) El plazo será de: quince años si la pena impuesta es superior a un año, pero inferior a diez; diez años si se ha impuesto una pena privativa de libertad de más de tres meses, pero no superior a un año o una pena de multa estableciendo una privación de libertad sustitutiva de más de tres meses; cinco años para los restantes casos.

4) Si se imponen al mismo tiempo varias penas o varias medidas preventivas para la prescripción de todas las penas o medidas se tomará en cuenta el plazo más largo de prescripción previsto. Si se impone al mismo tiempo una pena privativa de libertad y una pena de multa, para calcular el plazo de prescripción se añadirá a la pena privativa de libertad la pena sustitutiva de privación de libertad.

§ 60. Prolongación del plazo para la prescripción de la ejecución

1) Si durante el plazo de prescripción se imponen al condenado una nueva pena o medida preventiva, la prescripción de la ejecución no comenzará antes de que se extinga la ejecutabilidad de esta pena o medida preventiva.

2) No se computan para el plazo de prescripción: 1º. El período de prueba en el caso de condena condicional o de internamiento en un centro de deshabitación o de libertad condicional; 2º. El tiempo de suspensión de la ejecución de una pena privativa de libertad a no ser por causa de idoneidad para la ejecución, o el tiempo que haya garantizado el pago de una pena de multa; 3º, el tiempo que el condenado haya estado detenido en virtud de disposiciones oficiales; 4º, el tiempo que el condenado haya estado en el extranjero.

3) La ejecución de la pena privativa de libertad o de una medida preventiva que implique privación de libertad interrumpe la prescripción. Cuando cese la interrupción sin que el condenado sea puesto de modo definitivo en libertad, comienza de nuevo a correr el plazo de prescripción sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2.

4. CÓDIGO PENAL DE BOLIVIA (D. Ley N° 10426, modificaciones y actualizaciones de ley 2494 de 04 de agosto de 2003)⁵⁶¹

LIBRO PRIMERO: PARTE GENERAL

TÍTULO I: LA LEY PENAL

Art. 63.- (Extinción de la pena).- Si la suspensión no hubiere sido revocada durante el período de prueba, la pena quedará extinguida.

Art. 64.- (Perdón judicial).- El juez podrá conceder, excepcionalmente. El perdón judicial al autor de un primer delito cuya sanción no sea mayor a un año cuando por la levedad especial del hecho y los motivos determinantes existan muchas probabilidades de que no volverá a delinquir.

⁵⁶¹ De 23 de agosto de 1972.

Art. 65.- (Responsabilidad civil).- La suspensión condicional de la pena y el perdón judicial no comprenden la responsabilidad civil, que deberá ser siempre satisfecha.

TÍTULO VII: EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL Y DE LA PENA

CAPÍTULO ÚNICO

Art. 100: (Extinción de la acción penal): La potestad para ejercerla acción, se extingue:

1. Por muerte del autor.
2. Por la amnistía.
3. Por la prescripción.
4. Por la renuncia o el desistimiento del ofendido en los delitos de acción privada.

Art. 101.- (Prescripción de la acción).- La potestad para ejercerla acción, prescribe:

- a. En ocho años. Para los delitos que tengan señalada una pena privativa de libertad de seis o más de seis años;
- b. En cinco años, para los que tengan señaladas penas privativas de libertad menores de seis y mayores de dos años;
- c. En tres años, para los demás delitos.

En los delitos sancionados con penas indeterminadas, el juez tomará siempre en cuenta el máximo de la pena señalada.

Art. 102: (Comienzo del término de la prescripción): La prescripción empezará a correr desde la media noche del día en que se cometió el delito, siempre que no se hubiere iniciado la instrucción correspondiente. En caso de que se hubiera dado ya comienzo, el término de la prescripción de la acción se computará desde la última actuación.

Art. 103: (Efectos de la renuncia del ofendido).- En caso de ser varios los ofendidos, la renuncia o desistimiento de uno de ellos no tendrá efecto con respecto a los demás.

La renuncia o desistimiento a favor de uno de los partícipes del delito, beneficia a los otros.

Art. 104: (Extinción de la pena): La potestad para ejecutar la pena impuesta por sentencia ejecutoriada se extingue:

1. Por muerte del autor.
2. Por la amnistía
3. Por la prescripción
4. Por el orden judicial y el de la parte ofendida en los casos previstos en este Código.

Art. 105: (Términos para la prescripción de la pena).- La potestad para ejecutar la pena prescribe.

1. En diez años, si se trata de pena privativa de libertad mayor de seis años.
2. En siete años, tratándose de penas privativas de libertad menores de seis años y mayores de dos.
3. En cinco años, si se trata de las demás penas.

Estos plazos empezarán a correr desde el día de la notificación con la sentencia condenatoria, o desde el quebrantamiento de la condena, si esta hubiera empezado a cumplirse.

Art. 106.- (Interrupción del término de la prescripción).- Tanto el término de la prescripción de la acción como el de la pena, se interrumpen por la comisión de otro delito, con excepción de los políticos.

Art. 107.- (Vigencia de la responsabilidad civil): La amnistía y la prescripción de la pena no dejan sin efecto la responsabilidad civil, la misma que podrá prescribir de acuerdo con las reglas del Código Civil.

Art. 108.- (Sanciones accesorias y medidas de seguridad).- Las sanciones accesorias prescribirán en tres años, computados desde el día en que debían empezar a cumplirse, y las medidas de seguridad, cuando su aplicación, a criterio del juez y previos los informes pertinentes sea innecesaria, por haberse comprobado la readaptación social del condenado.

4.1. ANTEPROYECTO DE REFORMA AL CÓDIGO PENAL DE BOLIVIA PARTE GENERAL DE LOS AÑOS 2008 Y 2009:

Artículo 78.- (Extinción de la condena) Si durante los tres años posteriores a la condena condicional el condenado no perpetrara un nuevo delito sancionado con prisión, la condena se tendrá como no pronunciada, salvo a los efectos que expresamente se señalan en el inciso 3º del artículo anterior. En caso contrario, la penalidad se unifica conforme a lo dispuesto en el artículo 30.

La condena condicional no afectará la reparación del daño, las consecuencias accesorias ni las penas de inhabilitación e interdicción.

Artículo 80.- (Extinción de la acción penal). Al resolver la paralización, el tribunal fijará prudencialmente un plazo de prueba no inferior a seis meses ni superior a tres años, durante el cual el procesado se sujetará a un régimen análogo al de la pena de sometimiento a instrucciones judiciales. Vencido el plazo de prueba sin que la paralización sea revocada, el tribunal declarará extinguida la acción penal.

Artículo 81.- (Violación de las condiciones). Cuando el procesado violase las instrucciones o perpetrare un nuevo delito sancionado con prisión, o cuando antes de la declaración de extinción de la acción penal se conozca una condena o suspensión anterior que, de haber sido conocida oportunamente, habría obstado a ella, se revocará la paralización y la causa continuará su curso.

Artículo 84.- (Postergación de la ejecución de penas). El tribunal podrá suspender la ejecución de todas o de alguna de las penas que determine en los casos de penalidad leve o menor, cuando surgieren fundadas razones de salud o cuando se tratare de una mujer embarazada, por un plazo que no excede de nueve meses. Igualmente, podrá suspenderla hasta seis meses, cuando la inmediata ejecución implique un daño de magnitud extraordinaria para el penado o para personas que de él dependan, siempre que de la suspensión no surgieran importantes consecuencias negativas para la víctima o para sus allegados.

Capítulo Quinto: De la extinción de la penalidad

Artículo 91.- (Causas). La penalidad se extinguirá separadamente para cada una de las personas que hubiesen tomado parte en el delito, por cumplimiento de la pena, por muerte del penado, por prescripción de la penalidad o por indulto.

La penalidad se extinguirá conjuntamente para todos los que hubiesen tomado parte en el delito, por amnistía y por perdón de la parte ofendida en los casos de delitos de acción privada.

Las indemnizaciones debidas a particulares se extinguirán conforme a la ley civil.

El tribunal declarará extinguida la penalidad en cualquier momento del cumplimiento de las penas, cuando se acredite pericialmente que el penado padece una enfermedad incurable en período terminal.

Artículo 92.- (Prescripción). La penalidad se extinguirá por prescripción en un plazo igual al de la prisión impuesta. La penalidad que no implique prisión prescribirá a los tres años. No prescribe la penalidad impuesta en los casos en que así lo dispone el derecho internacional convencional o consuetudinario.

Cuando no se comenzó a cumplir la pena correspondiente a la penalidad, la prescripción comienza a correr desde el día del pronunciamiento de la sentencia condenatoria. Si hubiese comenzado, el plazo correrá a partir del día del quebrantamiento de la condena y se imputará a aquél el tiempo de la penalidad que se hubiere cumplido.

La prescripción de la penalidad se interrumpe con la comisión de un nuevo delito.

La prescripción de la penalidad se suspende mientras la ejecución de las penas se encuentre legalmente diferida o condicionada o mientras el condenado se hallase cumpliendo otra pena con privación de la libertad, en el país o en el extranjero, salvo que el delito por el cual hubiere sido impuesta no estuviese penalmente previsto en la ley boliviana.

La prescripción se suspende igualmente en el caso del primer párrafo del artículo 83.

La penalidad por contravenciones prescribe en noventa días y no se interrumpe ni suspende.

Capítulo Sexto: De la cancelación de los antecedentes penales

Artículo 93.- (Términos y prohibiciones) A toda institución oficial que registre los antecedentes penales y a los tribunales se le prohíbe informar sobre datos de un proceso concluido por sobreseimiento o por sentencia absolutoria. En ningún caso informará sobre la existencia de detenciones que no provengan de formación de causa, salvo que los informes sean requeridos para resolver una acción de libertad o en causas por delitos de que haya sido víctima el detenido.

En todos los casos se deberá informar cuando mediare expreso pedido o consentimiento del interesado.

Los antecedentes penales caducarán a todos los efectos una vez transcurridos cinco años de la extinción de una condena condicional o de una penalidad. Los tribunales deberán comunicar a los organismos de registro la fecha de caducidad o de extinción de la penalidad; cuando no lo hicieren éstos deberán consultar al tribunal antes de expedir una información. La violación de la prohibición de informar será considerada como violación de secreto por funcionario público en los términos de este código, a no ser que el hecho constituya un delito más severamente penado.

5. CÓDIGO PENAL DE BRASIL (Ley N° 2848)⁵⁶²:

TÍTULO VIII: DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

Extinção da punibilidade

Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

- I - pela morte do agente;
- II - pela anistia, graça ou indulto;
- III - pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso;
- IV - pela prescrição, decadência ou perempção;
- V - pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação privada;
- VI - pela retratação do agente, nos casos em que a lei a admite;
- VII - (Revogado pela Lei nº 11.106, de 2005)
- VIII - (Revogado pela Lei nº 11.106, de 2005)
- IX - pelo perdão judicial, nos casos previstos em lei.

Art. 108 - A extinção da punibilidade de crime que é pressuposto, elemento constitutivo ou circunstância agravante de outro não se estende a este. Nos crimes conexos, a extinção da punibilidade de um deles não impede, quanto aos outros, a agravação da pena resultante da conexão. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109 - A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

- I – em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;
- II – em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;
- III – em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;
- IV – em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;
- V – em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;
- VI – em dois anos, se o máximo da pena é inferior a um ano.

Prescrição das penas restritivas de direito

Parágrafo único - Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º - A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de impróprio seu recurso, regula-se pela pena aplicada. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º - A prescrição, de que trata o parágrafo anterior, pode ter por termo inicial data anterior à do recebimento da denúncia ou da queixa. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Termo inicial da prescrição antes de transitar em julgado a sentença final

Art. 111 - A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, começa a correr: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

- I - do dia em que o crime se consumou; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
- II - no caso de tentativa, do dia em que cessou a atividade criminosa; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
- III - nos crimes permanentes, do dia em que cessou a permanência; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

⁵⁶² De 07 de diciembre de 1940.

IV - nos de bigamia e nos de falsificação ou alteração de assentamento do registro civil, da data em que o fato se tornou conhecido. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Termo inicial da prescrição após a sentença condenatória irrecorrível

Art. 112 - No caso do art. 110 deste Código, a prescrição começa a correr: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da interrupção deva computar-se na pena. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Prescrição no caso de evasão do condenado ou de revogação do livramento condicional

Art. 113 - No caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Prescrição da multa

Art. 114 - A prescrição da pena de multa ocorrerá: (Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada; (Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada. (Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Redução dos prazos de prescrição

Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Causas impeditivas da prescrição

Art. 116 - Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - enquanto não resolvida, em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência do crime; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - enquanto o agente cumpre pena no estrangeiro. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único - Depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela sentença condenatória recorrível; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena; (Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência. (Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Art. 118 - As penas mais leves prescrevem com as mais graves. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Reabilitação

Art. 119 - No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Perdão judicial

Art. 120 - A sentença que conceder perdão judicial não será considerada para efeitos de reincidência. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

5.1. Código Penal de Brasil (Decreto ley 2848, Reformado por Ley N° 7209 del 11.7.1984)⁵⁶³

PARTE GENERAL

TÍTULO VIII: DE LA EXTINCIÓN DE LA PUNIBILIDAD

Artículo 107.-Extinción de la punibilidad.- Se extingue la punibilidad cuando:

1. Por la muerte del agente;
2. Por amnistía, gracia o indulto;
3. Por retroactividad de la ley que no considere más el hecho como delictivo;
4. Por prescripción, decadencia o
5. Por renuncia al derecho a presentar querrela o por el perdón aceptado, en los delitos privados;
6. Por la retractación del agente, en los casos en los que la ley lo admite;
7. Por matrimonio del agente con la víctima, en los delitos contra las costumbres, definidos en los Capítulos I, II y III del Título IV de la Parte Especial de este Código;
8. Por matrimonio de la víctima con un tercero, en los delitos citados en el inciso anterior, cuando fueren cometidos sin violencia real o grave amenaza y siempre que la ofendida no haya solicitado la prosecución de la investigación policial o de la acción penal en el plazo de 60 (sesenta) días a contar desde la celebración;
9. Por perdón judicial, en los casos previstos en la ley.

Artículo 108.- La extinción de la punibilidad de un delito que sea presupuesto, elemento constitutivo o circunstancia agravante de otro no se extenderá a éste. En los delitos conexos, la extinción de la punibilidad de uno de ellos no impedirá, en cuanto a los otros, la agravación de la pena resultante de la conexión.

Artículo 109.-Prescripción antes de que la sentencia sea firme.- La prescripción, antes de que la sentencia final sea firme, salvo lo dispuesto en los parágrafos 1° y 2° del artículo 110 de este Código, se regula por el máximo de pena privativa de libertad determinada al delito, verificándose:

1. En 20 (veinte) años, si el máximo de pena es superior a 12 (doce);
2. En 16 (dieciséis) años, si el máximo de la pena es superior a 8 (ocho) años y no excede de 12 (doce);
3. En 12 (doce) años, si el máximo de la pena es superior a 4 (cuatro) y no excede de 8 (ocho);
4. En 8 (ocho) años, si el máximo de pena es superior a 2 (dos) años y no excede de 4 (cuatro)
5. En 4 (cuatro) años, si el máximo de pena es igual a 1 (un) año o, siendo superior, no excede de 2 (dos);
6. En 2 (dos) años, si el máximo de pena es inferior a 1 (un año).

Parágrafo único. Prescripción de penas restrictivas de derechos.- Se aplicarán a las penas restrictivas de derechos los mismos plazos previstos para las privativas de libertad.

Artículo 110.-Prescripción después que la sentencia sea firme.- La prescripción después que la sentencia condenatoria sea firme se regula por la pena aplicada y se verifica en los planes fijados en el artículo anterior, los cuales se aumentarán en un tercio, si el condenado es reincidente.

Parágrafo 1° La prescripción, después que la sentencia condenatoria sea firme para la acusación, o después de que sea desestimado un recurso, se regulará por la pena aplicada.

Parágrafo 2° La prescripción de que trata el artículo anterior, podrá tener por término inicial fecha anterior al del recibimiento de la renuncia o querrela.

Artículo 111.-Término inicial de prescripción antes de que la sentencia final sea firme.- La prescripción antes de que la sentencia final sea firme, comienza a correr:

1. Desde el día en que el delito se consumó;
2. En caso de tentativa, desde el día en que cesó la actividad delictiva;
3. En delitos permanentes, desde el día en que cesó la permanencia;
4. En los delitos de bigamia y de falsificación o alteración de asentamiento del registro civil, desde el día en que el hecho se conoció.

Artículo 112.-Término inicial de prescripción después de que la sentencia condenatoria sea irrecorrrible.- En el caso del artículo 110 de este Código, la prescripción comienza a correr:

1. Desde el día en que la sentencia es firme, para la parte acusadora, o en que se revoca la suspensión condicional de la pena o la libertad condicional;
2. Desde el día en que se interrumpe la ejecución, salvo cuando el tiempo de la interrupción deba computarse en la pena.

Artículo 114.-Prescripción de la multa.- La prescripción operará en dos (2) años, cuando la pena única conminada, la única que fue aplicada o la que todavía no fue cumplida, sea la pena de multa.

⁵⁶³ De 7 de Diciembre de 1940.

Artículo 115.-Reducción de los plazos de prescripción.- Los plazos de prescripción serán reducidos a la mitad cuando el delincuente sea, en el momento de cometer el delito, menor de 21 (veintiún) años o, en el momento de la sentencia, mayor de 70 (setenta) años.

Artículo 116.-Causas impeditivas de la prescripción.- Antes de que la sentencia final sea firme, la prescripción no correrá:

1. En tanto no haya sido resuelta, en otro proceso, la cuestión de la que depende el reconocimiento de la existencia del delito;
2. Mientras el agente cumple pena en el extranjero.

Parágrafo único. Después que la sentencia condenatoria sea firme, la prescripción no correrá durante el tiempo en que el condenado estuviere preso por otro motivo.

Artículo 117.-Causas de interrupción de la prescripción.- El curso de la prescripción se interrumpirá:

1. Por recibimiento de la denuncia o la querella;
2. Por el procesamiento;
3. Por auto confirmatorio del procesamiento;
4. Por sentencia condenatoria recurrible;
5. Por el inicio o continuación del cumplimiento de la pena;
6. Por la reincidencia.

Parágrafo 1º Exceptuados los casos de los incisos V y VI de este artículo, la interrupción de la prescripción produce efectos respecto a todos los autores del delito. En los delitos conexos que sean objeto del mismo proceso, se extenderá a los demás la interrupción relativa a cualquiera de ellos.

Parágrafo 2º Interrumpida la prescripción, salvo la hipótesis del inciso V de este Artículo, todo plazo comenzará a correr, nuevamente, desde el día de la interrupción.

Artículo 118.- Las penas más leves prescriben con las más graves.

Artículo 119.- En el caso de concurso de delitos, la extinción de la punibilidad incidirá sobre la pena de cada uno, aisladamente.

Artículo 120.-Perdón judicial.- La sentencia que conceda el perdón judicial no será considerada a los efectos de la reincidencia.

5.2. Texto original del Código Penal de Brasil⁵⁶⁴ (Con las modificatorias introducidas por la ley 6416, del 24 de mayo de 1977) Derogado.

PARTE GENERAL

TÍTULO VIII: DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

Art. 108.- Extingue-se a punibilidae:

- 1) pela morte do agente;
- 2) pela anistia, graça ou indulto;
- 3) pela retroatividade da lei que não mais considera o fato como criminoso;
- 4) pela prescrição, decadência ou perempção;
- 5) pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes ação privada;
- 6) pela reabilitação;
- 7) pelo casamento do agente com ofendida, nos crimes contra os costumes, previstos nos capítulos I, II e III, do título VI, da parte especial;
- 8) pelo casamento da ofendida com terceiro, nos crimes referidos no inciso anterior, salvo se cometidos com violência ou grave ameaça e se la não requerer o prosseguimento da ação penal no prazo de sessenta dias a contar de celebração;
- 9) Pelo ressarcimento do dano, no peculato culposo.

Párag. Único. A extinção da punibilidade de crime que é presuposto elemento constitutivo ou circunstância agravante de outro não se estende a este. Nos crimes conexos, a extinção da punibilidade de um deles não impede, quanto aos outros, a agravção de pena resultante da conexão.

Art. 109.- A prescrição antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no parág. Único do art. 110, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

- 1) em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;
- 2) em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito e não excede a doze;

⁵⁶⁴ Decreto lei 2848, De 7 de Dezembro de 1940.

- 3) em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;
- 4) em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;
- 5) em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou sendo superior, não excede a dois;
- 6) em dois anos, se o máximo da pena é inferior a um ano.

Art. 110.- A prescrição, depois de transitar a julgado a sentença condenatória regula-se, também, pela pena imposta e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§1. A prescrição, depois da sentença condenatoria com trânsito em julgado para a acusação, regula-se também pela pena aplicada e verifica-se nos mesmos prazos.

§2. A prescrição, de que trata o parágrafo anterior, importa, tão-somente, em renúncia do estado de pretensão executória da pena principal, não podendo, em qualquer hipótese, ter por termo inicial data anterior à do recebimento da renúncia.

Art. 111. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final começa a correr:

- a) do dia em que o crime se consumou;
- b) no caso de tentativa, do dia em que cessou a atividade criminosa;
- c) nos crimes permanentes ou continuados, do dia em que cessou a permanência ou a continuação;
- d) nos de bigamia e nos de falsificação ou alteração de assentamento do registro Civil, da data em que o fato se tornou conhecido.

Art. 112. No caso de art. 110, a prescrição começa a correr:

- a) do dia em que passa em julgado a sentença condenatoria ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional.
- b) do dia em que se interpele a execução, salvo quando o tempo da interrupção deva computar-se na pena.

Art. 113. No caso de evadir-se o condenado ou revogar-se o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena.

Art. 114. A prescrição opera-se em dois anos, quando a pena de multa foi a única imposta ou é a que ainda não foi cumprida.

Art. 115.- São reduzidos de metade os prazos da prescrição, quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 ou maior de 70 anos.

Art. 116. Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre:

- 1) enquanto não resolvida, em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência do crime;
- 2) enquanto o agente cumpre pena no estrangeiro.

Párag. único. Depois de passada em julgado a sentença condenatoria, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo.

Art. 117. O curso da prescrição interrompe-se:

- 1) pelo recebimento da renúncia ou da queixa;
- 2) pela pronúncia;
- 3) pela decisão confirmatória da pronúncia.
- 4) pela sentença condenatoria recorível.
- 5) pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
- 6) pela reincidência.

§ 1. salvo o caso do nº 6, a interrupção da prescrição produz efeito relativamente a todos os autores do crime; Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.

§2. Interrupção da prescrição, salvo a hipótese do nº V, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

Art. 118. As penas mais leves prescrevem com as penas mais graves.

Párag. único. É imprescritível a pena acessória imposta na sentença ou resultante da condenação.

Art. 119.- A reabilitação alcança quaisquer penas impostas por sentença definitiva.

§ 1. A reabilitação poderá ser requerida decorridos cinco anos do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena principal ou terminar sua execução e do dia em que terminar o prazo da suspensão condicional da pena ou do livramento condicional, desde que o condenado:

- a) tenha tido domicílio no país no prazo acima referido;
- b) tenha dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado;
- c) tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre a absoluta impossibilidade de o fazer até o dia do perdão, ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da dívida.

§ 2. A reabilitação não pode ser concedida:

- a) em favor dos presumidamente perigosos pelos nºs I,II,III, e V do art. 73 deste Código, salvo prova cabal em contrário;
- b) em relação à incapacidade para o exercício do pátrio poder, tutela ou curatela, ou autoridade marital se imposta por crime contra os costumes, cometido pelo condenado em detrimento de filho, tutelado ou curatelado, ou por crime de lenocínio.

§ 3. Negada a reabilitação, não pode ser novamente requerida senão após o decurso de dois anos.

Art. 120.- A reabilitação será revogada de ofício ou a requerimento do Ministério Público, se a pessoa reabilitada for condenada, por decisão definitiva, ao cumprimento da pena privativa de liberdade.

Parágrafo único. Os prazos para o pedido de reabilitação serão contados em dobro no caso de reincidência.

5.3.- Código Penal del Brasil de 1969 (Decreto lei 1004, de 21 de Outubro de 1969. **Todavía está en suspenso su entrada en vigencia.*

TÍTULO VIII: DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

Art. 107.- Extingue-se a punibilidade:

- 1) pela morte do agente;
- 2) pela anistia ou indulto;
- 3) pela retroatividade da lei que não mais considera o fato como criminoso;
- 4) pela prescrição, decadência ou perempção;
- 5) pelo perdão judicial;
- 6) pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito nos crimes de ação privada;
- 7) pela reabilitação;
- 8) pela retratação do agente, nos casos em que ele a admite;
- 9) pelo casamento do agente com ofendida, nos crimes contra os costumes, previstos nos capítulos I, II e III, do título VI, da parte especial;
- 10) Pelo ressarcimento do dano, no peculato culposos.

Art. 108.- A extinção da punibilidade de crime que é presuposto elemento constitutivo ou circunstância agravante de outro não se estende a este. Nos crimes conexos, a extinção da punibilidade de um deles não impede, quanto aos outros, a aplicação de pena resultante da conexão.

Art. 109.- A prescrição refere-se à ação penal ou à execução da pena.

Art. 110.- A prescrição de ação penal, salvo o disposto no §1 deste artigo, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

- 1) em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;
- 2) em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito e não excede a doze;
- 3) em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;
- 4) em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;
- 5) em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou sendo superior, não excede a dois;
- 6) em dois anos, se o máximo da pena é inferior a um ano.

§ 1. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se, também, pela pena imposta e verifica-se nos mesmos prazos.

§ 2. A prescrição da ação penal começa a correr:

- a) do dia em que o crime se consumou;
- b) no caso de tentativa, do dia em que cessou a atividade criminosa;
- c) nos crimes permanentes ou continuados, do dia em que cessou a permanência ou a continuação;
- d) nos de bigamia e nos de falsidade ou alteração de assentamento do registro Civil, da data em que o fato se tornou conhecido.

§ 3. No caso de concurso de crimes ou de crime continuado, a prescrição é referida, não à pena unificada, mas à de cada crime considerado isoladamente.

§ 4. A prescrição da ação penal não corre:

- 1) enquanto não resolvida, em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência do crime;
- 2) enquanto o agente cumpre pena no estrangeiro.

§ 5. O curso da prescrição da ação penal interrompe-se:

- 1) pela instauração do processo;
- 2) pela pronúncia;

3) pela decisão confirmatória da pronúncia.

4) pela sentença condenatoria recorível.

§ 6. A interrupção da prescrição produz efeito relativamente a todos os autores do crime; e nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, a interrupção relativa a qualquer deles estende aos demais.

Art. 111.- A prescrição da execução da pena privativa de liberdade ou da medida de segurança que a substitui (art 93) regula-se pelo tempo fixado na sentença e verifica-se nos mesmos prazos estabelecidos no art. 110. os quais se aumentam de um terço, se o condenado é criminoso habitual ou por tendência.

§ 1. começa a correr prescrição:

a) do dia em que passa em julgado a sentença condenatória ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou livramento condicional;

b) do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da interrupção deva computar-se na pena.

§ 2. No caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se ou livramento ou desinternação condicionais, a prescrição se regula pelo restante tempo da execução.

§ 3. O curso da prescrição da execução da pena suspende-se enquanto o condenado está preso por outro motivo, e interrompe-se pelo início ou continuação do cumprimento da pena, ou pela reincidência.

Art. 112.- Interrompida a prescrição, salvo o caso do § 3, 2ª parte, do artigo anterior, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

Art. 113.- São reduzidos de metade os prazos da prescrição, quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de vinte e um ou, ao tempo da sentença, maior de setenta anos.

Art. 114.- A prescrição opera-se em dois anos, quando a pena de multa foi a única imposta ou é a que ainda não foi cumprida.

Art. 115.- É imprescritível a execução das penas acessórias.

Art. 116.- A reabilitação alcança quaisquer penas impostas por sentença definitiva.

§ 1. A reabilitação poderá ser requerida decorridos cinco anos do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena principal ou terminar a execução desta ou da medida de segurança aplicada em substituição (art 93), e do dia em que terminar o prazo da suspensão condicional da pena ou do livramento condicional, desde que o condenado:

a) tenha tido domicílio no país no prazo acima referido;

b) tenha dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado;

c) tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre a absoluta impossibilidade de o fazer até o dia do perdido, ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da dívida.

§ 2. A reabilitação não pode ser concedida:

a) em favor dos que foram reconhecidos perigosos, salvo prova de cessação de periculosidade;

b) em relação à inhabilitação para o exercício do pátrio poder, tutela ou curatela, se imposta por crime contra os costumes, cometido pelo condenado em detrimento de filho, tutelado ou curatelado.

§ 3. Negada a reabilitação, não pode ser novamente requerida senão após a decurso de dois anos.

§ 4. Os prazos para o pedido de reabilitação serão contados em dobro no caso de criminoso habitual ou por tendência.

Art. 117.- A reabilitação será revogada de ofício ou a requerimento do Ministério Público, se a pessoareabilitada for condenada, por decisão definitiva, ao cumprimento da pena privativa de liberdade.

Art. 118.- Declarada a reabilitação, serão cancelados, mediante averbação, os antecedentes criminais.

Art. 119.- Concedida a reabilitação, o registro oficial de condenações penais não pode ser comunicado senão à autoridade policial ou judiciária, ou ao representante do Ministério Público, para instrução de processo penal que venha a ser instaurado contra o reabilitado.

6. CÓDIGO PENAL DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA⁵⁶⁵ de 1979⁵⁶⁶

Art. 77.- Si durante el período de prueba el condenado cuya pena fue suspendida cometiera otro delito, o se descubre que éste se había cometido antes de la sentencia y que no fue tenido en cuenta en ésta, la suspensión será revocada y se volverá a realizar otro juicio para juzgar el nuevo delito o el delito descubierto. La nueva

⁵⁶⁵ Parte general del Código penal de la República Popular China en su versión de 1997. Traducido por el profesor Francisco Muñoz Conde de la Universidad de Sevilla.

⁵⁶⁶ Revisión del Código penal aprobado en la Segunda Sesión del 5º Congreso nacional del pueblo el 1 de julio de 1979, realizada por la nueva dirección del Partido Comunista, en la 5ª Sesión del VIII. Congreso Nacional del Pueblo el 14 de marzo de 1997, promulgada por Orden nº 83 del Presidente de la República China también el 14 de marzo de ese año, entrando en vigor en esa misma fecha.

pena se determinará teniendo en cuenta la pena del delito anterior y la pena fijada para el nuevo delito en los términos del art. 69 de este Código.

Si, durante el período de prueba impuesto por la suspensión de la sentencia, el condenado cuya condena ha sido suspendida, infringe la ley, disposiciones administrativas o las instrucciones relativas a la supervisión y control de la suspensión acordadas por el departamento de seguridad pública del Consejo de Estado, y si las circunstancias son graves, la suspensión será revocada y la pena original será ejecutada.

SECCIÓN 6.- CONMUTACIÓN DE LA PENA

Art. 78.- Al condenado a vigilancia pública, detención criminal, prisión por plazo determinado o prisión perpetua podrá serle conmutada la pena si, durante el período de su cumplimiento, conscientemente observara los reglamentos de la prisión, acepta su educación y reforma por el trabajo o mostrara verdadero arrepentimiento o tuviere una conducta meritoria. La pena será conmutada si el condenado realiza alguno de los siguientes servicios meritorios:

- (1) Evitar que otros lleven a cabo actividades criminales importantes;
- (2) Informar de actividades criminales importantes realizadas por otras personas dentro o fuera de la prisión y verificadas por la investigación;
- (3) Haber inventado o innovados importantes técnicas;
- (4) Haber salvado a otro incluso con riesgo de su propia vida;
- (5) Haber realizado importantes servicios en la lucha contra desastres naturales o accidentes graves; o
- (6) Haber hecho importantes contribuciones al país y la sociedad.

En todo caso, para los condenados a la pena de vigilancia pública, detención criminal o prisión por tiempo determinado, el plazo de la pena que debe ser efectivamente cumplido no podrá ser, después de la conmutación, inferior a la mitad del plazo inicialmente fijado; no pudiendo ser en el caso de los condenados a prisión perpetua inferior a diez años.

Art. 79.- Si la pena del condenado debe ser conmutada, el órgano competente deberá solicitarlo por escrito del Tribunal popular o del Tribu.

SECCIÓN 8.- PRESCRIPCIÓN

Art. 87(sic.).- No será incoado procedimiento penal por delitos respecto a los que hayan transcurrido los siguientes plazos:

- (1) Cinco años cuando la pena máxima legalmente prevista sea de prisión por plazo determinado inferior a cinco años;
- (2) 10 años cuando la pena máxima prevista legalmente sea de prisión por plazo determinado no inferior a cinco años, pero inferior a 10;
- (3) 15 años cuando la pena máxima legalmente prevista sea de prisión por plazo determinado no inferior a 10 años;
- (4) 20 años cuando la pena máxima legalmente prevista sea de prisión perpetua o pena de muerte. Si se considera que el proceso penal debe ser incoado una vez transcurridos los 20 años, el caso será sometido al examen y la aprobación de la Fiscalía Suprema Popular.

Art. 88.- Una vez que el proceso ha sido incoado por el Tribunal Popular, por la Fiscalía Popular o por el órgano de seguridad pública, si el acusado huye sustrayéndose a la investigación o al juicio, no habrá límite temporal para su persecución.

Tampoco habrá límites para la persecución si el caso hubiera debido ser archivado, pero no lo fue por el Tribunal popular, la Fiscalía popular o el órgano de seguridad pública, después de que la víctima presentó denuncia durante el período en el que era todavía perseguible.

Art. 89.- El plazo para el procedimiento penal será contado a partir de la comisión del delito; si la conducta delictiva fuere continuada, el plazo será contado a partir del momento en que cesó la actividad delictiva.

Si fuere cometido cualquier otro crimen durante el plazo en el que todavía es posible la persecución penal, el plazo para perseguir el delito anterior será contado a partir de la fecha en que fue cometido el nuevo delito.

7. CÓDIGO PENAL DE COLOMBIA⁵⁶⁷ (Ley 599 de 2000) --- (Vallejo, 2011)

LIBRO PRIMERO: PARTE GENERAL

TÍTULO IV: DE LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DE LA CONDUCTA PUNIBLE

CAPÍTULO QUINTO: LA EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN Y DE LA SANCIÓN PENAL

Artículo 82.- Son causales de extinción de la acción penal:

La muerte del procesado.

⁵⁶⁷ De 24 de julio de 2000.

El desistimiento.

La amnistía propia.

La prescripción.

La oblación.

El pago en los casos previstos en la ley.

La indemnización integral en los casos previstos en la ley.

La retractación en los casos previstos por la ley.

Artículo 83.- La acción penal prescribirá en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley, si fuere privativa de la libertad, pero en ningún caso será inferior a cinco (5) años, ni excederá de veinte (20), salvo lo dispuesto en el inciso siguiente de este artículo.

El tiempo para la prescripción para las conductas punibles de genocidio, desaparición forzada, tortura y desplazamiento forzado, será de treinta (30) años.

En las conductas punibles que tengan señalada pena no privativa de la libertad, la acción penal prescribirá en cinco (5) años.

Para este efecto se tendrá en cuenta las causales sustanciales modificadoras de la punibilidad.

Al servidor público en ejercicio de sus funciones, de su cargo o con ocasión de ellos realice una conducta punible o participe en ella, el término de prescripción se aumentará en una tercera parte.

También se aumentará el término de prescripción, en la mitad, cuando la conducta punible se hubiere iniciado o consumado en el exterior.

En todo caso, cuando se aumente el término de prescripción, no se excederá el límite máximo fijado.

Artículo 84.- En las conductas punibles de ejecución instantánea el término de prescripción de la acción comenzará a correr desde el día de su consumación.

En las conductas punibles de acción permanente o en la que solo alcancen el grado de tentativa, el término comenzará a correr desde la perpetración del último acto.

En las conductas punibles omisivas el término comenzará a correr cuando haya cesado el deber de actuar.

Cuando fueren varias las conductas punibles investigadas y juzgadas en un mismo proceso, el término de prescripción correrá independientemente para cada una de ellas.

Artículo 85.- El procesado podrá renunciar a la prescripción de la acción penal. En todo caso, si transcurridos dos (2) años contados a partir de la prescripción no se ha proferido decisión definitiva, se decretará la prescripción.

Artículo 86.- La prescripción de la acción penal se interrumpe con la resolución acusatoria o su equivalente debidamente ejecutoriada.

Producida la interrupción del término prescriptivo, éste comenzará a correr de nuevo por un tiempo igual a la mitad del señalado en el artículo 83. En este evento el término no podrá ser inferior a cinco (5) años, ni superior a diez (10).

Artículo 87.- El procesado por conducta punible que sólo tenga pena de unidad multa, previa tasación de la indemnización cuando a ello haya lugar, podrá poner fin al proceso pagando la suma que el Juez le señale, dentro de los límites fijados en el artículo 39.

Artículo 88.- Son causas de extinción de la sanción penal:

La muerte del condenado.

El indulto.

La amnistía impropia.

La prescripción.

La rehabilitación para las sanciones privativas de derechos cuando operan como accesorias.

La exención de punibilidad en los casos previstos en la ley.

Las demás que señala la ley.

Artículo 89.- La pena privativa de libertad, salvo lo previsto en tratados internacionales debidamente incorporados al ordenamiento jurídico, prescribe en el término fijado para ella en la sentencia o en el que falte por ejecutar, pero en ningún caso podrá ser inferior a cinco (5) años.

La pena no privativa de la libertad prescribe en cinco (5) años.

Artículo 90.- El término de prescripción de la sanción privativa de la libertad se interrumpirá cuando el sentenciado fuere aprehendido en virtud de la sentencia, o fuere puesto a disposición de la autoridad competente para el cumplimiento de la misma.

Artículo 91.- El término prescriptivo de la pena de multa se interrumpirá con la decisión mediante la cual se inicia el procedimiento de ejecución coactiva de la multa o su conversión en arresto.

Producida la interrupción el término comenzará a correr de nuevo por un lapso de cinco (5) años.

Artículo 92.- la rehabilitación de derechos afectados por una pena privativa de los mismos, cuando se imponga como accesoria, operará conforme a las siguientes reglas:

Una vez transcurrido el término impuesto en la sentencia, la rehabilitación operará de derecho. Para ello bastará que el interesado formule la solicitud pertinente, acompañada de los respectivos documentos ante la autoridad correspondiente.

Antes del vencimiento del término previsto en la sentencia podrá solicitarse la rehabilitación cuando la persona haya observado intachable conducta personal, familiar, social y no haya evadido la ejecución de la pena; allegando copia de la cartilla biográfica, dos declaraciones, por lo menos, de personas de reconocida honorabilidad que den cuenta de la conducta observada después de la condena, certificado de la entidad bajo cuya vigilancia hubiere estado el peticionario en el periodo de prueba de la libertad condicional o vigilada y comprobación del pago de los perjuicios civiles.

En este evento, si la pena privativa de derechos no concurriere con una privativa de la libertad, la rehabilitación podrá pedirse dos (2) años después de la ejecutoria de la sentencia que la impuso, si hubiere transcurrido la mitad del tiempo impuesto

Si la pena privativa de derechos concurriere con una privativa de la libertad, sólo podrá pedirse la rehabilitación después de dos (2) años contados a partir del día en que el condenado haya cumplido la pena privativa de libertad, si hubiere transcurrido la mitad del término impuesto.

Cuando en la sentencia se otorgue la suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de la libertad, y no se exceptúa de ella la pena accesoria, ésta se extinguirá con el cumplimiento del periodo de prueba fijado en el respectivo fallo.

Cuando, por el contrario, concedido el beneficio en mención, se exceptúa de éste la pena accesoria, su rehabilitación sólo podrá solicitarse dos (2) años después de ejecutoriada la sentencia en que fue impuesta, si hubiere transcurrido la mitad del tiempo impuesto..

No procede la rehabilitación en el evento contemplado en el inciso 5° del artículo 122 de la Constitución Política.

Artículo 93.- Las reglas anteriormente enunciadas se aplicarán a las medidas de seguridad, en cuanto no se opongan a la naturaleza de las mismas.

CAPÍTULO SEXTO: DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA CONDUCTA PUNIBLE

Artículo 98.- La acción civil proveniente de la conducta punible, cuando se ejercita dentro del proceso penal, prescribe, en relación con los penalmente responsables, en tiempo igual al de la prescripción de la respectiva acción penal. En los demás casos, se aplicarán las normas pertinentes de la legislación civil.

7.1. Código de Procedimiento Penal de Colombia de 2004⁵⁶⁸

Artículo 76.- Desistimiento de la querrela. En cualquier momento de la actuación y antes de concluir la audiencia preparatoria, el querellante podrá manifestar verbalmente o por escrito su deseo de no continuar con los procedimientos.

⁵⁶⁸ Ley N° 906 de 2004.

Si al momento de presentarse la solicitud no se hubiese formulado la imputación, le corresponde a la Fiscalía verificar que ella sea voluntaria, libre e informada, antes de proceder a aceptarla y archivar las diligencias.

Si se hubiere formulado la imputación le corresponderá al juez de conocimiento, luego de escuchar el parecer de la Fiscalía, determinar si acepta el desistimiento.

En cualquier caso el desistimiento se hará extensivo a todos los autores o partícipes del delito investigado, y una vez aceptado no admitirá retractación.

Artículo 77.- Extinción. La acción penal se extingue por muerte del imputado o acusado, prescripción, aplicación del principio de oportunidad, amnistía, oblación, caducidad de la querella, desistimiento, y en los demás casos contemplados por la ley.

NOTA: Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-828 de 2010, en el entendido que el juez de conocimiento debe decidir oficiosamente o a petición de interesado, independientemente de que exista reserva judicial, poner a disposición u ordenar el traslado de todas las pruebas o elementos probatorios que se hayan recaudado hasta el momento en que se produzca la muerte, para que adelanten otros mecanismos judiciales o administrativos que permitan garantizar los derechos de las víctimas.

Artículo 78.- Trámite de la extinción. La ocurrencia del hecho generador de la extinción de la acción penal deberá ser manifestada por la Fiscalía General de la Nación mediante orden sucintamente motivada. Si la causal se presentare antes de formularse la imputación el fiscal será competente para decretarla y ordenar como consecuencia el archivo de la actuación.

A partir de la formulación de la imputación la Fiscalía deberá solicitar al juez de conocimiento la preclusión.

Texto subrayado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-591 de 2005

Parágrafo.

El imputado o acusado podrá renunciar a la prescripción de la acción penal dentro de los cinco (5) días siguientes a la comunicación del archivo de la investigación. Si se tratare de solicitud de preclusión, el imputado podrá manifestar su renuncia únicamente durante la audiencia correspondiente.

Artículo 79.- Archivo de las diligencias. Cuando la Fiscalía tenga conocimiento de un hecho respecto del cual constate que no existen motivos o circunstancias fácticas que permitan su caracterización como delito, o indiquen su posible existencia como tal, dispondrá el archivo de la actuación.

Sin embargo, si surgieren nuevos elementos probatorios la indagación se reanudará mientras no se haya extinguido la acción penal.

Artículo 80.- Efectos de la extinción. La extinción de la acción penal producirá efectos de cosa juzgada. Sin embargo, no se extenderá a la acción civil derivada del injusto ni a la acción de extinción de dominio.

Artículo 81.- Continuación de la persecución penal para los demás imputados o procesados. La acción penal deberá continuarse en relación con los imputados o procesados en quienes no concurran las causales de extinción.

Capítulo IX

Casación

Artículo. 189.- Suspensión de la prescripción. Proferida la sentencia de segunda instancia se suspenderá el término de prescripción, el cual comenzará a correr de nuevo sin que pueda ser superior a cinco (5) años.

Capítulo X

Acción de revisión

Art.192.- Procedencia. La acción de revisión procede contra sentencias ejecutoriadas, en los siguientes casos:

(...)

2. Cuando se hubiere dictado sentencia condenatoria en proceso que no podía iniciarse o proseguirse por prescripción de la acción, por falta de querrela o petición válidamente formulada, o por cualquier otra causal de extinción de la acción penal.

(...)

Título III

Formulación de la imputación

Capítulo Único

Disposiciones generales

Artículo 292.- Interrupción de la prescripción.- La prescripción de la acción penal se interrumpe con la formulación de la imputación.

Producida la interrupción del término prescriptivo, este comenzará a correr de nuevo por un término igual a la mitad del señalado en el artículo 83 del Código Penal. En este evento no podrá ser inferior a tres (3) años.

Ley 589 de 2000: Por medio del cual se tipifica el genocidio, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado y la tortura; y se dictan otras disposiciones.

Artículo 14.- Los delitos que tipifica la presente ley no son amnistiables ni indultables.

Ley 733 de 2002: Por medio de la cual se dictan medidas tendientes a erradicar los delitos de secuestro, terrorismo y extorsión, y se expiden otras disposiciones.

Artículo 13.- Amnistía e indulto. En ningún caso el autor o participe de los delitos de terrorismo, secuestro o extorsión, en cualquiera de sus modalidades, podrá ser beneficiado con amnistías e indultos, ni podrán considerarse como delitos conexos con el delito político, dada su condición de atroces.

8. CÓDIGO PENAL CHILENO⁵⁶⁹ (Vigente desde 1 de marzo de 1875. Actualizado con la Ley 19617) (*Código Penal. Edición oficial*, 1999).

LIBRO PRIMERO

TÍTULO III: DE LAS PENAS

Artículo 19. El perdón de la parte ofendida no extingue la acción penal, salvo respecto de los delitos que no pueden ser perseguidos sin previa denuncia o consentimiento del agraviado.

TÍTULO V: DE LA EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL

Artículo 93. La responsabilidad penal se extingue:

1° Por la muerte del procesado, siempre en cuanto a las penas personales, y respecto de las pecuniarias sólo cuando a su fallecimiento no hubiere recaído sentencia ejecutoria.

2° Por el cumplimiento de la condena.

3° Por amnistía, la cual extingue por completo la pena y todos sus efectos.

4° Por indulto.

La gracia de indulto sólo remite o conmuta la pena; pero no quita al favorecido el carácter de condenado para los efectos de la reincidencia o nuevo delinquiramiento y demás que determinan las leyes.

5° Por el perdón del ofendido cuando la pena se haya impuesto por delitos respecto de los cuales la ley sólo concede acción privada.

6° Por la prescripción de la acción penal.

7° Por la prescripción de la pena.

Artículo 94. La acción penal prescribe:

1) Respecto de los crímenes a que la ley impone pena de muerte o de presidio, reclusión o relegación perpetuos, en quince años.

2) Respecto de los demás crímenes, en diez años.

3) Respecto de los simples delitos, en cinco años.

4) Respecto de las faltas, en seis meses.

⁵⁶⁹ Publicado el 12 de noviembre de 1874.

Cuando la pena señalada al delito sea compuesta, se estará a la privativa de libertad, para la aplicación de las reglas comprendidas en los tres primeros acápites de este artículo; si no se impusieren penas privativas de libertad, se estará a la mayor⁵⁷⁰.

Las reglas precedentes se entienden sin perjuicio de las prescripciones de corto tiempo que establece este Código para delitos determinados.

Artículo 95. El término de la prescripción empieza a correr desde el día en que se hubiere cometido el delito.

Artículo 96. Esta prescripción se interrumpe, perdiéndose el tiempo transcurrido, siempre que el delincuente comete nuevamente crimen o simple delito, y se suspende desde que el procedimiento se dirige contra él; pero si se paraliza su prosecución por tres años o se termina sin condenarle, continúa la prescripción como si no se hubiere interrumpido.

Artículo 97. Las penas impuestas por sentencia ejecutoria prescriben:

La de muerte y la de presidio, reclusión y relegación perpetuos, en quince años.

Las demás penas de crímenes, en diez años.

Las penas de simples delitos, en cinco años.

Las de faltas, en seis meses.

Artículo 98. El tiempo de la prescripción comenzará a correr desde la fecha de la sentencia de término o desde el quebrantamiento de la condena, si hubiere ésta principiado a cumplirse.

Artículo 99. Esta prescripción se interrumpe, quedando sin efecto el tiempo transcurrido, cuando el condenado, durante ella, cometiere nuevamente crimen o simple delito, sin perjuicio de que comience a correr otra vez.

Artículo 100. Cuando el inculcado se ausentare del territorio de la República sólo podrá prescribir la acción penal o la pena contando por uno cada dos días de ausencia, para el cómputo de los años.

Para los efectos de aplicar la prescripción de la acción penal o de la pena, no se entenderán ausentes del territorio nacional los que hubieren estado sujetos a prohibición o impedimento de ingreso al país por decisión de la autoridad política o administrativa, por el tiempo que les hubiere afectado tal prohibición o impedimento.

Artículo 101. Tanto la prescripción de la acción penal como las de la pena corren a favor y en contra de toda clase de personas.

Artículo 102. La prescripción será declarada de oficio por el tribunal aun cuando el procesado no la alegue, con tal que se halle presente en el juicio.

Artículo 103. Si el inculcado se presentare o fuere habido antes de completar el tiempo de la prescripción de la acción penal o de la pena, pero habiendo ya transcurrido la mitad del que se exige, en sus respectivos casos, para tales prescripciones, deberá el tribunal considerar el hecho como revestido de dos o más circunstancias atenuantes muy calificadas y de ninguna agravante y aplicar las reglas de los artículos 65, 66, 67 y 68 sea en la imposición de la pena, sea para disminuir la ya impuesta.

Esta regla no se aplica a las prescripciones de las faltas y especiales de corto tiempo.

Artículo 104. Las circunstancias agravantes comprendidas en los números 15 y 16 del artículo 12, no se tomarán en cuenta tratándose de crímenes, después de diez años, a contar desde la fecha en que tuvo lugar el hecho, ni después de cinco, en los casos de simples delitos.

Artículo 105. Las inhabilidades legales provenientes de crimen o simple delito sólo durarán el tiempo requerido para prescribir la pena, computado de la manera que se dispone en los artículos 98, 99 y 100. Esta regla no es aplicable a las inhabilidades para el ejercicio de los derechos políticos.

La prescripción de la responsabilidad civil proveniente de delito, se rige por el Código Civil.

8.1. Código Procesal Penal

Libro Primero: Disposiciones Generales

Artículo 233. Efectos de la formalización de la investigación.- La formalización de la investigación producirá los siguientes efectos:

- a) Suspenderá el curso de la prescripción de la acción penal en conformidad a lo dispuesto en el artículo 96 del Código Penal;
- b) Comenzará a correr el plazo previsto en el artículo 247, y

⁵⁷⁰ Inciso sustituido, por el que aparece en el texto, por el artículo décimo noveno, N° 4, de la Ley N° 18.857, de 06 de diciembre de 1989. Esta disposición empezó a regir 90 días después de su publicación en el Diario Oficial.

c) El Ministerio Público perderá la facultad de archivar provisionalmente el procedimiento.

9.- CÓDIGO PENAL DE COSTA RICA⁵⁷¹ (Ley N° 4573, con las modificaciones del 2007)

LIBRO PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES

TÍTULO IV: PENAS

SECCIÓN V: CONMUTACIÓN

Caso en que puede aplicarse

Art. 69.- Cuando a un delincuente primario se le imponga pena de prisión que no exceda de un año, el juez podrá conmutarla por más multa, cuyo monto fijará atendiendo a las condiciones económicas del condenado.

TÍTULO VI: REHABILITACIÓN

Cuando se puede o no conceder rehabilitación

Art. 70.- El condenado podrá solicitar su rehabilitación, después de transcurrido la mitad del término fijado para la pena de inhabilitación impuesta en sentencia firme; el juez reintegrará al condenado en el ejercicio de sus derechos.

El reincidente, el habitual o el profesional, no podrá ser rehabilitado sino seis años después de extinguida la pena o la medida de seguridad.

Para que se pueda conceder la rehabilitación es necesario que quien la solicite haya observado buena conducta y satisfecho la responsabilidad civil, salvo que justifique la imposibilidad de hacerlo. En todo caso el juez pedirá un informe al Instituto de Criminología sobre el comportamiento del solicitante.

La rehabilitación quedará revocada por la comisión de un nuevo delito.

TÍTULO V: EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL Y DE LA PENA

SECCIÓN ÚNICA: CAUSAS QUE EXTINGUEN LA ACCIÓN PENAL Y LA PENA

Art. 80.-*(Derogado por el Artículo 26 de la Ley de Reorganización Judicial No. 7728 del 15 de diciembre de 1997, excepto para los casos que deban continuar tramitándose conforme al Código de Procedimientos Penales de 1973).*

Perdón Del Ofendido

Art. 81.-*(Derogado por el Artículo 26 de la Ley .de Reorganización Judicial No. 7728 del 15 de diciembre de 1997, excepto para los casos que deban continuar tramitándose conforme al Código de Procedimientos Penales de 1973).*

Art. 81.bis.-*(Derogado por el Artículo 26 de la Ley .de Reorganización Judicial No. 7728 del 15 de diciembre de 1997, excepto para los casos que deban continuar tramitándose conforme al Código de Procedimientos Penales de 1973).*

(Nota: En el artículo 51 de la Ley No. 7771, de 29 de abril de 1998 se modificó el presente artículo, ello a pesar de encontrarse derogado expresamente según se indicó por Ley No. 7728 de cita, en atención al principio de razonabilidad de la ley, la modificación de una Ley inexistente, debe tener esa misma condición).

Art. 82.-*(Derogado por el Artículo 26 de la Ley .de Reorganización Judicial No. 7728 del 15 de diciembre de 1997, excepto para los casos que deban continuar tramitándose conforme al Código de Procedimientos Penales de 1973).*

Art. 83.-*(Derogado por el Artículo 26 de Ley .de Reorganización Judicial No. 7728 del 15 de diciembre de 1997, excepto para los casos que deban continuar tramitándose conforme al Código de Procedimientos Penales de 1973).*

Prescripción de la pena

Art. 84.- La pena prescribe:

- 1) En un tiempo igual al de la condena, más un tercio, sin que pueda exceder de veinticinco años ni bajar de tres, si fuere prisión, extrañamiento o interdicción de derechos;
- 2) En tres años, tratándose de días multa impuesta como consecuencia de los delitos; y
- 3) En un año si se tratare de contravenciones.

Prescripción de penas de diferentes clases

Art. 85.- La prescripción de las penas de diferentes clases o de distinta duración impuestas en una misma sentencia, se cumplirán separadamente en el término señalado para cada una.

⁵⁷¹ De 1970.

Momento a partir del cual corre la prescripción

Art. 86.- La prescripción de la pena comienza a correr desde el día en que la sentencia quede firme, o desde que se revoque la condena de ejecución condicional o la libertad condicional, o desde que deba empezar a cumplirse una pena después de compurgada otra anterior o desde el quebrantamiento de la condena.

Interrupción de la prescripción en curso

Art. 87.- Se interrumpe la prescripción de la pena quedando sin efecto el tiempo transcurrido, en el caso de que el reo se presente o sea habido o cuando cometiere un nuevo delito antes de completar el tiempo de la prescripción.

Declaración de oficio y prescripción separada de la pena en caso de varios delitos

Art. 88.- *(Derogado por el Artículo 26 de Ley .de Reorganización Judicial No. 7728 del 15 de diciembre de 1997, excepto para los casos que deban continuar tramitándose conforme al Código de Procedimientos Penales de 1973).*

Amnistía

Art. 89.- La amnistía que sólo puede ser concedida por la Asamblea Legislativa en materia de delitos políticos o conexos con éstos extingue la acción penal así como la pena impuesta.

Indulto

Art. 90.- El indulto, aplicable a los delitos comunes, implica el perdón total o parcial de la pena impuesta por sentencia ejecutoria, o bien su conmutación por otra más benigna y no comprende las penas accesorias.

El indulto sólo podrá ser concedido por el Consejo de Gobierno, el cual previamente a resolver, oír el criterio del Instituto de Criminología. Consultará también a la Corte Suprema de Justicia, únicamente, cuando la solicitud del indulto se fundamente en una crítica a la sentencia judicial. Dichos organismos deberán pronunciarse en un término no mayor de treinta días naturales, y si no contestaren dentro de ese término, el Consejo de Gobierno podrá resolver lo que corresponda.

(Así reformado por la Ley No. 6726 del 10 de marzo de 1982).

Recomendación judicial de indulto

Art. 91.- Los jueces podrán, en sentencia definitiva, recomendar el otorgamiento del indulto.

Matrimonio del procesado o condenado con la ofendida.

Art. 92.- (DEROGADO, por el artículo 3° de la Ley No. 8590 de 18 de julio de 2007).

Perdón judicial

Art. 93.- También extingue la pena, el perdón que en sentencia podrán otorgar los jueces al condenado, previo informe que rinda el Instituto de Criminología sobre su personalidad, en los siguientes casos:

- 1) A quien siendo responsable de falso testimonio se retracte de su dicho y manifieste la verdad a tiempo para que ella pueda ser apreciada en sentencia;
- 2) A quien mediante denuncia dirigida o declaración prestada se inculpa a sí mismo de un delito doloso que no ha cometido para salvar a su ascendiente, descendiente, cónyuge, hermano, bienhechor, o a su concubinario o manceba con quien haya tenido vida marital por lo menos durante dos años continuos inmediatamente antes de la comisión del hecho.
- 3) A quien haya incurrido en los delitos de encubrimiento, hurto, robo con fuerza en las cosas, estafa, daños o lesiones leves, cuando lo solicite el ofendido que tenga los mismos lazos de parentesco o relación con el reo a que se refiere el inciso anterior;
- 4) A quien haya causado un aborto para salvar el honor propio o lo haya producido con ese fin a una ascendiente o descendiente por consanguinidad o hermana;
- 5) A la mujer que hubiere causado su propio aborto si el embarazo ha sido consecuencia de una violación;
- 6) A quienes en caso de homicidio piadoso, se compruebe que accedieron a reiterados requerimientos de la víctima y el propósito además fue el de acelerar una muerte inevitable;
- 6) A quienes en caso de homicidio piadoso, se compruebe que accedieron a reiterados requerimientos de la víctima y el propósito además fue el de acelerar una muerte inevitable;
- 7) (Este inciso fue derogado mediante el artículo 3° de la ley N° 8590 del 18 de julio del 2007).
- 8) (Este inciso fue derogado mediante el artículo 3° de la ley N° 8590 del 18 de julio del 2007).
- 9) A quien por móviles de piedad haya declarado ante el Registro Civil como su hijo a una persona que no lo es o hubiere usurpado el estado civil de otro o por un acto cualquiera lo hiciere incierto, lo alterare o suprimiere;
- 10) A los autores de contravenciones, previa amonestación por parte de la autoridad juzgadora; y
- 11) A quien injuriare a otro si la injuria fuere provocada o a quien se retracte de su dicho injurioso antes de contestar la querella o en el momento que la contesta. A quienes se injuriaren recíprocamente. No procede el

perdón judicial cuando la injuria conlleva una imputación a un funcionario público, con motivo de sus funciones.

12) A quien fuera sindicado por el Ministerio Público como autor en el tráfico de las sustancias o drogas reguladas por la Ley de Psicotrópicos, Drogas de Uso no Autorizado y Actividades Conexas, Ley No. 7093 que diera información correcta, la cual permitiera el descubrimiento del delito y sus autores, mas allá de su participación en él o también cuando pusiera, espontáneamente, en conocimiento de la autoridad, lo que él supiera sobre la comisión de los delitos mencionados anteriormente y lo hiciera con tiempo suficiente para impedir la comisión de éstos.

(El inciso 12 fue adicionado por Ley No. 7233 del 8 de mayo 1991).

Art. 94.- Cuando fueren varios los acusados, el juez podrá otorgar el perdón a uno de ellos, a varios o a todos los responsables del hecho delictuoso, siempre que se encuentren comprendidos en los casos de los artículos anteriores.

El perdón no puede ser condicional ni a término

Art. 95.- El perdón que otorguen los jueces no puede ser condicional ni a término y no podrá concederse sino una vez. En todo caso, para su otorgamiento, los jueces requerirán un informe del Instituto de Criminología.

Los beneficios que indica este título no afectan la responsabilidad civil ni el comiso.

Art. 96.- El otorgamiento de la amnistía, el indulto, la rehabilitación, el perdón judicial, la condena de ejecución condicional y la libertad condicional no afectan la responsabilidad civil ni el comiso.

La extinción de la acción penal y de la pena no producirá efectos con respecto a la obligación de reparar el daño causado, ni impedirá el decomiso de los instrumentos del delito.

TÍTULO VI: DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

SECCIÓN I: DISPOSICIONES GENERALES

Duración, no extinguidad por amnistía o indulto, ni suspensión pero posibilidad de que se reanuden las medidas de seguridad.

Art. 100.- Las medidas curativas de seguridad son de duración indeterminada.

Cada dos años el Tribunal se pronunciará sobre el mantenimiento, la modificación o la cesación de la medida de seguridad impuesta, sin perjuicio de hacerlo en cualquier momento, mediante informes del Instituto de Criminología.

Las medidas de seguridad no se extinguen por amnistía ni por indulto.

Tampoco pueden suspenderse condicionalmente. El quebrantamiento de una medida de seguridad, implica la posibilidad de que se reanude el tratamiento a que estaba sometido el sujeto.

(Texto modificado por Resolución de la Sala Constitucional No. 88-92 de las 11 horas del 17 de enero de 1992).

TÍTULO VII: CONSECUENCIAS CIVILES DEL HECHO PUNIBLE

SECCIÓN ÚNICA: EXTINCIÓN DE LA REPARACIÓN CIVIL Y EFECTOS CIVILES DE LA SENTENCIA CONDENATORIA EXTRANJERA

Art. 109.- Las obligaciones correspondientes a la reparación civil se extinguen por los medios y en la forma determinada en el Código Civil y las reglas para fijar los daños y perjuicios, lo mismo que la determinación de la reparación civil subsidiaria o solidaria, serán establecidas en el Código de Procedimientos Civiles.

Con excepción de lo dispuesto en el artículo 9: de este Código, la sentencia condenatoria dictada por Tribunales extranjeros producirá en Costa Rica todos sus efectos civiles, los que se registrarán por la ley nacional.

10. CÓDIGO PENAL CUBANO⁵⁷²(Ley N° 62 del 30-12-87).-

LIBRO I: PARTE GENERAL

TÍTULO VIII: LA EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL

Artículo 59.- La responsabilidad penal se extingue:

- a) Por muerte del reo;
- b) Por haber cumplido la sanción impuesta;
- c) Por haber transcurrido el período de prueba correspondiente a la remisión condicional de la sanción;
- ch) Por amnistía;

⁵⁷² De 1988.

- d) Por indulto;
- e) Por sentencia absolutoria dictada en procedimiento de revisión;
- f) Por prescripción de la acción penal;
- g) Por prescripción de la sanción;
- h) Por desistimiento del querellante en los delitos perseguibles sólo a instancia de parte;
- i) Por el desistimiento del denunciante en los delitos en que así se disponga en la Parte Especial de este código;
- j) Por la expulsión del territorio nacional del extranjero sancionado, en el caso a que se refiere el apartado 3 del art. 46.

Artículo 60.- La muerte del reo extingue la responsabilidad penal; pero la responsabilidad civil se extingue sólo cuando el sancionado muere en estado de insolvencia.

Artículo 61.- 1. La amnistía extingue la sanción y todos sus efectos, aunque no se extiende a la responsabilidad civil, a menos que en la ley respectiva se disponga otra cosa.

2. El sancionado por delitos unidos en conexión sustantiva, sólo se considerará amnistiado cuando en la ley de amnistía se incluyan todos los delitos que integran el concurso. Caso contrario, cumplirá la sanción correspondiente al delito o delitos que no han sido objetos de amnistía.

Artículo 62.- 1. El indulto no extingue más que la sanción principal y nunca las sanciones accesorias, ha menos que hayan sido incluidas expresamente en el mismo.

2. El indulto no puede comprender la responsabilidad civil ni puede extenderse a la cancelación de los antecedentes penales del reo en el Registro Central de Sancionados, a menos que aquél tenga carácter definitivo y estos efectos se dispongan expresamente en la resolución en que se acuerde.

Artículo 63.- La sentencia absolutoria dictada en procedimiento de revisión extingue la responsabilidad penal y civil.

Artículo 64.- 1. La acción penal prescribe por el transcurso de los términos siguientes, contados a partir de la comisión del hecho punible:

- a) Veinticinco años, cuando la ley señala al delito una sanción superior a diez años de privación de libertad;
- b) Quince años cuando la ley señala al delito una sanción de privación de libertad de seis años y un día hasta diez años;
- c) Diez años, cuando la ley señala al delito una sanción de privación de libertad de dos años y un día hasta seis años;
- ch) Cinco años, cuando la ley señala cualquier otra sanción de privación de libertad;
- d) Tres años, cuando la ley señala cualquier otra sanción.

2. Cuando se trate de delitos para los cuales la ley señala más de una sanción, se estará a los efectos del cómputo de los términos anteriores, a la cualitativamente más severa, y dentro de ésta al límite máximo que para el delito tenga previsto la ley.

3. La prescripción se interrumpe:

- a) Desde que el procedimiento se inicie contra el culpable;
- b) Por todo acto del órgano competente del estado, dirigido a la persecución del autor;
- c) Si en el autor, en el curso de la prescripción, comete un nuevo delito.

4. Después de cada interrupción, la prescripción comienza a decursarse nuevo. En estos casos, la acción penal prescribe también al transcurrir el doble del término señalado para su prescripción,

5. Las disposiciones sobre la prescripción de la acción penal no son aplicables en los casos en que la ley prevé la sanción de muerte y en los delitos de lesa humanidad.

Artículo 65.- 1. Las sanciones impuestas por sentencia firme prescriben y no pueden ser ejecutadas por el transcurso de los plazos siguientes:

- a) Treinta años cuando la sanción impuesta es la de muerte;
- b) Veinticinco años cuando la sanción impuesta es superior a diez años de privación de libertad;
- c) Veinte años cuando la sanción impuesta es de seis años y un día a diez años de privación de libertad;
- ch) Diez años cuando la sanción impuesta es de seis años o menos de privación de libertad;
- d) Cinco años, respecto a todas las demás.

2. Si se hubiere impuesto más de una sanción, se estará a la más severa a los efectos del cómputo de los anteriores términos.

3. La prescripción se interrumpe:

- a) Durante el tiempo en que, por disposición de la ley, la ejecución de la sanción no puede efectuarse;
- b) Por toda disposición del tribunal, dirigida a lograr que la sanción se ejecute.

4. Después de cada interrupción, la prescripción comienza a decursar de nuevo. En estos casos, la ejecución de la sanción prescribe también al transcurrir el doble del término señalado para su prescripción.
5. Las disposiciones sobre la prescripción de la sanción no son aplicables con respecto a los delitos de lesa humanidad.

10.1.- Código Penal de Cuba (*Ley 21 Código Penal, hoy ya derogado*)

LIBRO I: PARTE GENERAL

TÍTULO VIII: DE LA EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL

Artículo 59.- La responsabilidad penal se extingue:

- a) Por muerte del reo;
- b) Por haber cumplido la sanción impuesta;
- c) Por haber transcurrido el período de prueba correspondiente a la revisión condicional de la sanción;
- ch) Por amnistía
- d) Por indulto;
- e) Por sentencia absolutoria dictada en procedimiento de revisión;
- f) Por prescripción de la acción penal;
- g) Por prescripción de la sanción;
- h) Por desistimiento del querellante en los delitos perseguibles sólo a instancia de parte
- i) Por perdón presunto de la ofendida en el delito de estupro;
- j) Por la expulsión del territorio nacional del extranjero sancionado, en el caso a que se refiere el apartado 3 del art. 46.

Artículo 60.- La muerte del reo extingue la responsabilidad penal, pero la responsabilidad civil se extingue sólo cuando el sancionado muere en estado de insolvencia.

Artículo 61.- 1. La amnistía extingue la sanción y todos sus efectos, aunque no se extiende a su responsabilidad civil, a menos que en la ley respectiva se disponga otra cosa.

2. El sancionado por delitos unidos en condición sustantiva sólo se considerará amnistiado cuando en la ley de amnistía se incluyen todos los delitos que integran el concurso. Caso contrario, cumplirá la sanción correspondiente al delito o delitos que no han sido objeto de amnistía.

Artículo 62.- 1. El indulto no extingue más que la sanción principal y nunca las sanciones accesorias, a menos que hayan sido incluidas expresamente en la misma.

2. El indulto no puede comprender la responsabilidad civil ni puede extenderse a la cancelación de los antecedentes penales del reo en el registro central de sancionados, a menos que aquel tenga carácter definitivo y estos efectos se dispongan expresamente en la resolución en que se acuerde.

Artículo 63.- La sentencia dictada en procedimiento de revisión extingue la responsabilidad penal y civil.

Artículo 64.- La acción penal prescribe por el transcurso de los términos siguientes contados a partir de la comisión del hecho punible:

- a) Veinticinco años, cuando la ley señala al delito una sanción superior a diez años de privación de libertad;
- b) Quince años, cuando la ley señala el delito una sanción de privación de libertad de seis años y un día hasta diez años;
- c) Diez años cuando la ley señala al delito una sanción de privación de libertad de dos años y un día hasta seis años;
- ch) Cinco años, cuando la ley señala cualquier otra sanción de privación de libertad;
- d) Tres años, cuando la ley señala cualquier otra sanción..

2. Cuando se trata de delitos para los cuales la ley señala más de una sanción, se estará, a los efectos del cómputo de los términos anteriores, a la cualitativamente más severa, y dentro de ésta al límite máximo que para el delito tenga prevista la ley.

3. La prescripción se interrumpe:

- a) Desde que el procedimiento se inicie contra el culpable;
- b) Por todo acto del órgano competente del estado, dirigido a la persecución del autor;
- c) Si el autor, en el concurso de la prescripción, comete un nuevo delito.

4. Después de cada interrupción, la prescripción comienza a decursar de nuevo. En estos casos, la acción penal prescribe también al transcurrir el doble del término señalado para su prescripción.

5. Las disposiciones sobre la prescripción de la acción penal no son aplicables en los casos en que la ley prevé la sanción de muerte y en los delitos de lesa humanidad.

Artículo 65.- 1. Las sanciones impuestas por sentencia firme prescriben y no pueden ser ejecutadas por el transcurso de los plazos siguientes:

- a) Treinta años, cuando la sanción impuesta es la muerte;
 - b) Veinticinco años, cuando la sanción impuesta es superior a diez años de privación de libertad;
 - c) Veinte años, cuando la sanción impuesta es de seis años y un día a diez años de privación de libertad;
 - ch) Diez años, cuando la sanción impuesta es de seis años o menos de privación de libertad;
 - d) Cinco años, respecto a todos los demás.
2. Si hubiese impuesta más de una sanción, se estará a la más severa a los efectos del cómputo de los anteriores términos.
3. La prescripción se interrumpe:
- a) Durante el tiempo en que, por disposición de la ley, la ejecución de la sanción no pueda efectuarse;
 - b) Por toda disposición del tribunal, dirigida a lograr que la sanción se ejecute.
4. Después de cada interrupción, la prescripción comienza a decursar de nuevo. Es estos casos, la ejecución de la sanción prescribe también al transcurrir el doble del tino señalado para su prescripción.
5. Las disposiciones sobre la prescripción de la sanción no son aplicables con respecto a los delitos de lesa humanidad.

11.- CÓDIGO PENAL DE ECUADOR⁵⁷³

LIBRO PRIMERO: DE LAS INFRACCIONES, DE LAS PERSONAS RESPONSABLES Y DE LAS PENAS EN GENERAL

TÍTULO IV: DE LAS PENAS

CAPÍTULO I: DE LAS PENAS EN GENERAL

Art. 70.- Las obligaciones civiles derivadas de las infracciones, no se extinguen por la muerte del reo.

CAPÍTULO III: DEL EJERCICIO DE LAS ACCIONES Y DE LA EXTINCIÓN Y PRESCRIPCIÓN DE LAS MISMAS Y DE LAS PENAS.

Art. 94.- El perdón de la parte ofendida o la transacción con ésta, no extingue la acción pública por una infracción que debe perseguirse de oficio.

Art. 95.- El delito cometido en perjuicio de varias personas será reprimido aunque la acusación o denuncia sea propuesta sólo por una de ellas.

Art. 96.- La muerte del reo, ocurrida antes de la condena, extingue la acción penal.

Art. 97.- Toda pena es personal y se extingue con la muerte del penado.

Art. 98.- La acción penal se extingue por amnistía, o por remisión de la parte ofendida en los delitos de acción privada, o por prescripción.

La renuncia de la parte ofendida al ejercicio de la acción penal, sólo perjudica al renunciante y a sus herederos.

Habiéndose propuesto acusación o denuncia, en su caso, por varios ofendidos por un mismo delito, la remisión de uno de ellos no perjudicará a los demás.

Art. 99.- La amnistía no solamente hará cesar la acción penal sino también la condena y todos sus efectos, con excepción de las indemnizaciones civiles.

Art. 100.- La pena se extingue también por declaración de la Cámara del Senado, rehabilitando la honra y estableciendo la inocencia de los condenados injustamente, de acuerdo con lo que disponga la Constitución Política del Estado y el Código de Procedimiento Penal. *La Cámara del Senado fue suprimida, actualmente sólo existe el Congreso Nacional.*

Art. 101.- Toda acción penal prescribe en el tiempo y con las condiciones que la Ley señala.

En el ejercicio del derecho que la prescripción establece, se observarán las reglas que siguen:

Tanto en los delitos de acción pública como en los delitos de acción privada se distinguirá ante todo si, cometido el delito, se ha iniciado o no enjuiciamiento.

A excepción de los casos de imprescriptibilidad de las acciones y de las penas previstas en el último inciso del número 2 del artículo 23 y en el segundo inciso del artículo 121 de la Constitución Política de la República, en los demás delitos reprimidos con reclusión mayor especial, la acción para proseguirlos prescribirá en quince años. Tratándose de delitos reprimidos con prisión, la acción para prescribirlos prescribirá en 5 años. El tiempo se contará a partir de la fecha en que la infracción fue perpetrada.

En los mismos delitos de acción pública de haber enjuiciamiento iniciado antes de que aquellos plazos se cumplan, la acción para continuar la causa prescribirá en los mismos casos, contados desde la fecha del auto cabezade proceso.

⁵⁷³ De 22 Enero de 1971.

Si el indicado se presentare voluntariamente a la justicia en el plazo máximo de seis meses posteriores al inicio de la instrucción, los respectivos plazos se reducirán a diez años en los delitos reprimidos con reclusión mayor especial; a ocho años en los demás delitos reprimidos con reclusión; y, a cuatro años a los delitos reprimidos con prisión. En estos casos, los plazos se contarán desde la fecha de inicio de la instrucción. No surtirá efecto esta regla en caso de reincidencia.

En los delitos de acción privada, la acción para perseguirlos prescribirá en el plazo de ciento ochenta días, contados desde que la infracción fue cometida.

Iniciada la acción y citado el querellado, antes del vencimiento de ese plazo, la prescripción se producirá transcurridos dos años a partir de la fecha de la citación de la querella.

La acción penal por delitos reprimidos sólo con multa se extinguirá en cualquier estado del juicio, por el pago voluntario del máximo de la multa correspondiente al delito, y de las indemnizaciones, en los casos en que hubiere lugar.

Si la prescripción se hubiese operado por la falta de despacho oportuno de los jueces, éstos serán castigados por el superior con la multa de cuarenta y cuatro a cuatrocientos treinta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América, quedando a salvo la acción de daños y perjuicios a que hubiere lugar contra dichos funcionarios, de conformidad con lo prescrito en el Código de Procedimiento Civil.

En la misma pena incurrirán los funcionarios del ministerio público y secretarios de cortes y juzgados por cuya negligencia se hubiere operado la prescripción.

De haber acusador particular, o de tratarse de querella, la multa se dividirá en iguales partes entre la administración de justicia y el acusador. La parte de multa que corresponda a la administración de justicia será invertida por la Corte Suprema en su caso, o por la respectiva Corte Superior que hubiere impuesto la multa, en gastos generales de la administración de justicia.

Art. 102.- Si dictada por el superior la sentencia que cause ejecutoria, no es enviado el proceso al juez encargado de ejecutarla en un tiempo igual o mayor del necesario para la prescripción de la pena, los empleados o funcionarios responsables del retardo incurrirán en la sanción establecida en el artículo precedente.

Art. 103.- Las incapacidades anexas a ciertas condenas, por ley o sentencia judicial, no cesan por el indulto que se concediere con arreglo a la Constitución y las leyes, a no ser que lo consigne expresamente el decreto de gracia.

Art. 104.- Todo condenado a reclusión mayor o menor que obtenga indulto o conmutación de la pena, quedará bajo la vigilancia especial de la autoridad, hasta por el término de diez años, si el decreto de gracia no dispusiere otra cosa.

Art. 105.- La interdicción civil cesará cuando el condenado haya conseguido indulto de la pena, o cuando se haya conmutado ésta con otra que no lleve tal interdicción.

Art. 106.- La autoridad designada por la Constitución podrá perdonar, o conmutar, o rebajar las penas aplicadas por sentencia judicial ejecutoriada, sujetándose a las disposiciones especiales de la Constitución y de la Ley de Gracia.

El perdón, la conmutación, o la rebaja de la pena no se extenderán a exonerar al culpado del pago de los daños y perjuicios y costas al Fisco, o a terceros interesados.

Art. 107.- Las penas privativas de la libertad, por delito, prescriben en un tiempo igual al de la condena, no pudiendo, en ningún caso, el tiempo de la prescripción ser menor de seis meses.

La prescripción de la pena comenzada a correr desde la media noche del día en que la sentencia quedó ejecutoriada y se imputará al tiempo necesario para la prescripción el que el delincuente hubiere estado recluso, preso o detenido por motivo del mismo delito.

Se exceptúan los casos en que fueren violadas las garantías constitucionales por parte de funcionarios o empleados públicos, conforme a lo prescrito en la Constitución Política.

Art. 108.- Tanto la prescripción de la acción como la de la pena se interrumpen por el hecho de cometer el reo otra infracción que merezca igual o mayor pena, antes de vencerse el tiempo para la prescripción.

Art. 109.- La acción y la pena de policía prescriben en los plazos que señala el Libro III de este Código.

Art. 110.- Todo condenado a pena de reclusión que hubiere prescrito quedará, de hecho y por diez años, sujeto a la vigilancia especial de la autoridad, y no podrá residir en el lugar en que cometió el delito, si en él habitan el agraviado o sus parientes.

Art. 111.- Las penas de multa y de comiso especial prescribirán en los plazos señalados para la prescripción de las penas principales; y las condenas civiles impuestas por una infracción prescribirán según las reglas del Código Civil.

Cuando sólo se hubiere impuesto multa o comiso especial, prescribirá en un año.

Art. 112.- La prescripción correrá o será interrumpida, separadamente, para cada uno de los participantes en un delito.

Art. 113.- Por el perdón de la parte ofendida cesa la pena al tratarse de las infracciones de adulterio e injuria calumniosa y no calumniosa grave.

Si hubieren varios partícipes, el perdón en favor de uno de ellos aprovecha a los demás.

Art. 114.- La prescripción puede declararse a petición de parte, o de oficio, necesariamente, al reunirse las condiciones exigidas en este Código.

Art. 114-a.- Las personas que hubieren permanecido detenidas sin haber recibido auto de sobreseimiento o de apertura al plenario por un tiempo igual o mayor a la tercera parte del establecido por el Código Penal como pena máxima para el delito por el cual estuvieren encausadas, serán puestas inmediatamente en libertad por el juez que conozca el proceso.

De igual modo las personas que hubieren permanecido detenidas sin haber recibido sentencia, por un tiempo igual o mayor a la mitad del establecido por el Código Penal como pena máxima por el delito por el cual estuvieren encausadas, serán puestas inmediatamente en libertad por el tribunal penal que conozca el proceso. Se excluye de estas disposiciones a los que estuvieren encausados, por delitos sancionados por la Ley sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.

Nota: Artículo agregado por Ley No. 4, publicada en Registro Oficial Suplemento 22 de 9 de Septiembre de 1992.

Nota: Declarar la inconstitucionalidad por razones de fondo y suspender los efectos de la última frase de este Artículo, que dice: "Se excluye de estas disposiciones a los que estuvieren encausados, por delitos sancionados por la Ley sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas". Dado por Resolución Tribunal Constitucional No. 119, publicado en Registro Oficial Suplemento 222 de 24 de Diciembre de 1997.

Nota: El Artículo 32 de la Ley de Control Constitucional, publicada en Registro Oficial 99 de 2 de Julio de 1997, establece el recurso de Habeas Corpus ante el Alcalde del Cantón, para dar cumplimiento al derecho del detenido regulado por este Artículo agregado al Código, con recurso de apelación al Tribunal Constitucional de la negativa del Alcalde.

CONCORDANCIAS:

- CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008, Arts. 77

Art. 114-b.- En uno u otro caso, el director del centro de rehabilitación social en que se encuentre el detenido, comunicará al día siguiente de aquel en que se cumplan los plazos señalados en el artículo anterior, al juez o tribunal de la causa, dicha circunstancia, para que ordene la inmediata libertad del detenido.

En caso de que no recibiera la orden de libertad emitida por el juez o tribunal dentro de las veinte y cuatro horas siguientes al aviso dado a éstos, el director del centro de rehabilitación pondrá en libertad al detenido de inmediato, lo que comunicará por escrito al juez o tribunal penal y al Presidente de la Corte Superior del distrito.

Nota: Artículo agregado por Ley No. 4, publicada en Registro Oficial Suplemento 22 de 9 de Septiembre de 1992.

CONCORDANCIAS:

- CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008, Arts. 77

Art. 114-c.- La Corte Suprema de Justicia de conformidad con las disposiciones presupuestarias, dentro del plazo de seis meses, a contarse desde la vigencia de esta Ley, basándose en la estadística y recursos de que dispone, creará, en los distritos judiciales en donde fuere necesario, tanto juzgados y tribunales de lo penal, como se requiera para que cada una de aquellas dependencias tenga que despachar cuando más cuatrocientas causas anuales.

Nota: Artículo agregado por Ley No. 4, publicada en Registro Oficial Suplemento 22 de 9 de Septiembre de 1992.

Art. 114-d.- Los jueces y miembros de los tribunales de lo penal que no despachen las causas a su cargo dentro de los plazos establecidos en los artículos 231, 251, 260, 271 y 324 del Código de Procedimiento Penal, serán inmediatamente sancionados por el Presidente de la Corte Superior de Justicia respectivamente con multa igual al cincuenta por ciento del valor del salario mínimo para los trabajadores en general en cada una de las tres primeras veces en que incurran en tal retardo y con la destitución del cargo en la siguiente vez, quedando inhabilitado para reintegrarse por un lapso de cinco años.

Estas sanciones serán impuestas en el mismo día en que el Presidente de la Corte Superior conozca del retardo, bajo su responsabilidad personal y pecuniaria.

Nota: Artículo agregado por Ley No. 4, publicada en Registro Oficial Suplemento 22 de 9 de Septiembre de 1992.

LIBRO TERCERO: DE LAS CONTRAVENCIONES

TÍTULO II: DISPOSICIONES ESPECIALES RESPECTO DE LAS CONTRAVENCIONES

CAPÍTULO ÚNICO

Art. 608.- En todo lo relativo en la punibilidad, responsabilidad o prescripción de las contravenciones, que no estuviese reglamentado de una manera especial, se observarán las disposiciones del Libro I de este Código. No rigen, sin embargo, para las contravenciones, las reglas de los artículos 82 y 87.

LEY DE GRACIA⁵⁷⁴

Art. 1.- El derecho de gracia se ejerce perdonando, conmutando o rebajando las penas impuestas por sentencia judicial, y requiere petición del interesado que, por escrito, dirigirá al Presidente de la República, después de ejecutoriada la sentencia.

11.1. Proyecto de Código Orgánico Integral Penal del Ecuador de 2010-2011

LIBRO PRIMERO: DE LA INFRACCIÓN PENAL

TÍTULO II: De las Penas

CAPÍTULO SEXTO: De la extinción y prescripción de la acción y la pena.

Art. 55.- Extinción de la acción penal.- La acción penal se extingue en los siguientes casos:

1. Muerte de la persona infractora;
2. Amnistía;
3. Perdón de la parte ofendida en las infracciones de acción privada;
4. Acuerdo reparatorio y aplicación del principio de oportunidad por parte de las Fiscalía; y
5. Prescripción.

Art. 56.- Prescripción de la acción penal.- La prescripción podrá ser declarada por la Jueza, Juez o tribunal de garantías penales, de oficio o a petición de parte. La prescripción operará en el tiempo y condiciones que se establecen en este Libro.

Respecto de las infracciones que no se hubiere iniciado proceso penal se seguirán las siguientes reglas:

1. La acción penal en las infracciones de acción pública prescribirá en el mismo tiempo de la máxima sanción del tipo penal, contados desde que la infracción fue cometida, salvo que se exprese una regla especial al respecto;
2. En las infracciones de acción privada la acción para perseguirlos, prescribirá en el plazo de ciento ochenta días, contados desde que la infracción fue cometida. Iniciada la acción y citado el querellado antes del vencimiento de ese plazo, la prescripción se producirá transcurridos dos años a partir de la fecha de la citación de la querella;
3. La prescripción de la acción en el caso de infracciones levísimas será de noventa días, contados desde que la infracción fue cometida;
4. En los procesos seguidos contra adolescentes presuntamente en conflicto con la ley penal, la acción penal prescribirá en dos años cuando se trate de infracciones graves y gravísimas; en un año cuando se trate de infracciones medias y leves; y, en ciento ochenta días en las levísimas;
5. La prescripción se aplicará separadamente, para cada una de los partícipes de la infracción; y,
6. Si la prescripción hubiere operado por falta de despacho de las y los servidores judiciales, éstos serán sancionados de acuerdo a lo previsto en la ley de la materia.

De haberse iniciado el proceso penal, la prescripción de la acción operará en los plazos señalados en los numerales 1, 2 y 3 de este artículo; y, serán contados desde la fecha de inicio del respectivo proceso.

La acción penal por infracciones sancionadas solo con multa se extinguirán en cualquier estado del juicio, por el pago voluntario del máximo de la multa correspondiente a la infracción, y las indemnizaciones, en los casos que hubiere lugar.

No prescribirá la acción penal en las infracciones de agresión de un Estado contra otro, genocidio; lesa humanidad; desaparición forzada de personas y crímenes de guerra, infracciones graves a los derechos humanos; enriquecimiento privado no justificado, peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito; e, infracciones contra el medio ambiente y el patrimonio cultural.

Art. 57.- Trámite de la extinción de la acción penal.- La extinción de la acción penal deberá tramitarse de acuerdo a las siguientes reglas:

⁵⁷⁴ L S/N; R.O. 183; del 30 de Septiembre de 1976.

1. La parte procesada solicitará a la jueza, juez o tribunal de garantías penales que declare la extinción de la acción penal y ordene el archivo de lo actuado. La solicitud deberá estar debidamente motivada e incluirá la causal de extinción invocada; y,
2. La acción penal deberá continuarse en relación con las personas procesadas respecto de las que no concurran las causales de extinción.

Art. 58.- Formas de extinción.- Las penas y las medidas socioeducativas o de seguridad se extinguirán por cualquiera de las siguientes causas:

1. Cumplimiento integral en cualquiera de sus formas;
2. Aplicación de una ley posterior más favorable a la persona infractor;
3. Muerte de la persona sentenciada;
4. Amnistía, que no solamente hará cesar la acción penal si no también la condena y todos sus efectos, con excepción de las indemnizaciones civiles. No será admisible la amnistía en las infracciones de agresión de un Estado contra otro, genocidio, lesa humanidad, desaparición forzada de personas y crímenes de guerra, infracciones graves a los derechos humanos; enriquecimiento privado no justificado, peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito; e, infracciones contra el medio ambiente y el patrimonio cultural;
5. Indulto; y,
6. Prescripción.

La transformación, fusión, absorción o escisión de una persona jurídica no extinguirá su responsabilidad penal, que se trasladará a la entidad o entidades en las que se transforme, quede fusionada o sea absorbida y se extenderá a la entidad o entidades que resulten de la escisión. La jueza o juez de garantías penitenciarias podrá moderar el traslado de la pena a la nueva persona jurídica, en función de la vinculación que la persona jurídica originariamente responsable de la infracción guarde para con ella.

No extingue la responsabilidad penal la disolución encubierta o meramente aparente de la persona jurídica. Se considerará, en todo caso, que existe disolución encubierta o meramente aparente de la persona jurídica cuando se continúe su actividad económica y se mantenga la identidad sustancial de clientes, proveedores y/o empleados, o de la parte más relevante de aquellos.

El perdón de la parte ofendida o la transacción con esta no extinguirá la acción pública por una infracción que deba perseguirse de oficio.

Artículo 59.- Prescripción de la pena.- Las penas y las medidas socioeducativas o de seguridad prescribirán de conformidad con las siguientes reglas:

1. Las penas privativas de libertad prescribirán en un tiempo igual al de la condena;
2. La prescripción comenzará a correr desde el día en que la sentencia quedare ejecutoriada;
3. Las medidas socioeducativas privativas de libertad dictadas contra los adolescentes en conflicto con la ley penal prescriben en cuatro años, cuando la medida fuere mayor de este tiempo;
4. La prescripción se interrumpirá cuando a la persona sancionada se le imponga una nueva pena o medida socioeducativa o de seguridad privativa de libertad; y,
5. No prescribirá la acción penal en las infracciones de agresión de un Estado contra otro, genocidio; lesa humanidad; desaparición forzada de personas y crímenes de guerra, así como en la demás infracciones de agresión de un Estado contra otro, genocidio; lesa humanidad⁵⁷⁵; desaparición forzada de personas y crímenes de guerra, infracciones graves a los derechos humanos; infracciones graves a los derechos humanos; enriquecimiento privado no justificado, peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito; e, infracciones contra el medio ambiente y el patrimonio cultural.

11.2. Anteproyecto de Código Orgánico de Garantías Penales para la República del Ecuador⁵⁷⁶

LIBRO I: LA INFRACCIÓN PENAL

CAPÍTULO V: EXTINCIÓN DE LA PENA

Art. 36.- Formas de extinción.- La pena, medida socioeducativa y medida de seguridad se extinguen por cualquiera de las siguientes causas:

1. Cumplimiento integral de la pena en cualquiera de sus formas.
2. Extinción del delito o de la pena por ley posterior más favorable.

⁵⁷⁵ Sic.

⁵⁷⁶ 09 de marzo del 2009.

3. Sentencia o sobreseimiento penal anterior por los mismos hechos y contra las mismas personas.
4. Muerte de la persona condenada.
5. Amnistía. No será admisible la amnistía en los delitos de agresión de un Estado a otro, genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra, en las demás comisiones punibles graves a los derechos humanos ni las cometidas por servidoras o servidores públicos.
6. Indulto.
7. Recurso extraordinario de revisión de la pena, cuando fuere favorable.
8. Perdón de la víctima, excepto en casos de delitos contra la humanidad y graves violaciones a los derechos humanos ni en los delitos cometidos contra la administración pública.

Art. 37.- Prescripción de la pena.- La pena se considerará prescrita de conformidad con las siguientes reglas:

1. Las penas restrictivas de libertad prescriben en un tiempo igual al de la condena.
2. La prescripción de la pena comenzará a correr desde el día en que la sentencia quedó ejecutoriada y se imputará el tiempo en el que la persona condenada estuvo privada de libertad por el mismo delito.
3. Las penas privativas de libertad dictadas contra adolescentes infractores prescriben en dos (2) años, cuando la pena fuere mayor de este tiempo.
4. La prescripción de la pena se interrumpe cuando la persona condenada ha sido nuevamente condenada a pena de privación de libertad.
5. La prescripción no requiere ser declarada.
6. No prescribirán las penas determinadas en las infracciones de agresión de un Estado a otro, el genocidio, los delitos contra la humanidad, los delitos contra el Derecho Internacional Humanitario, las graves violaciones a los derechos humanos.

Art. 38.- Aplicación de leyes sobre divulgación o arrepentimiento eficaz.-

La revelación de violaciones de derechos humanos cometidas por el autor o por otros participantes, con la finalidad de beneficiarse de leyes relativas al arrepentimiento o divulgación de violaciones, en ningún caso eximirá su responsabilidad.

En estos casos la revelación de hechos y datos solo podrá ser causal de reducción de la pena, como resultado de su contribución al derecho a la verdad de las víctimas.

Cuando las revelaciones de violaciones pudieren poner en peligro la vida o integridad de la persona, podrá concederse asilo como excepción al principio general de prohibición de asilo.

11.3. Proyecto de Código de Procedimiento Penal (Dr. Walter Guerrero Vivanco, Presidente 1992 Quito – Ecuador).

CAPITULO III: EXTINCIÓN

Artículo 62.- Motivos. La acción penal se extingue:

- 1) Por la muerte del imputado;
- 2) Por la amnistía;
- 3) Por la prescripción;

Artículo 63.- Prescripción. De no haberse iniciado el proceso penal, la acción penal prescribe:

- 1) Después de transcurridos diez años cuando se trate de infracciones reprimidas con una pena superior a cinco años y después de transcurridos cinco años cuando se trate de infracciones reprimidas con una pena menor;
- 2) A los 2 años en los delitos penados sólo con multa;
- 3) A los 30 días, si se trata de contravenciones.

La prescripción se rige por la pena principal y extingue la acción aun respeto de cualquier consecuencia penal accesoria.

El plazo comienza a correr desde que se produjo el resultado o, en defecto de este, desde que se realizó la acción prohibida o se omitió la acción mandada.

Si se trata de un delito permanente, el plazo comienza a correr desde que cesó el resultado o se dejó de cometer⁵⁷⁷.

⁵⁷⁷ Se ha hecho ingresar el régimen de la prescripción al Código Procesal porque, si bien la doctrina no se ha puesto de acuerdo sobre la naturaleza de este instituto (incluso se habla de una naturaleza mixta), lo cierto es que influye de tal manera en el sistema procesal que es preferible, por razones prácticas, incluirlo aquí.
P.C.P.P. GUATEMALA (1990): 19.

Artículo 64.- Prescripción durante el proceso. Si se ha iniciado el proceso contra una persona determinada, los plazos del artículo anterior quedan reducidos a la mitad.

El plazo comienza a correr desde la fecha del decreto de inicio de la instrucción fiscal⁵⁷⁸.

Artículo 65.- Suspensión. El curso de la prescripción se suspende:

- 1) Cuando en virtud de una disposición constitucional o legal el proceso no pueda ser promovido o proseguido; esta disposición no rige cuando el proceso no puede ser iniciado porque falta la instancia particular;
- 2) En los casos de delitos cometidos por funcionarios públicos en ejercicio o con ocasión de sus funciones, mientras cualquiera de quienes hayan participado siga desempeñando la función pública;
- 3) En los delitos contra la seguridad interna del Estado, cuando se haya quebrado el orden institucional, hasta su restablecimiento;
- 4) Mientras dure, en el extranjero, el trámite de extradición;
- 5) Durante el plazo de cumplimiento de las condiciones, cuando se suspenda el proceso penal;
- 6) En los casos previstos en el inciso 2 del artículo 35 mientras dure la suspensión del ejercicio de la acción penal.

Terminada la causa de la suspensión, la prescripción sigue su curso⁵⁷⁹.

Artículo 66.- Interrupción. La prescripción se interrumpe por la rebeldía del imputado, sólo cuando ésta imposibilite el desarrollo del proceso penal.

Desaparecida la causa de interrupción, el plazo comienza a correr íntegramente⁵⁸⁰.

Artículo 67.- Efectos. La prescripción corre, se suspende o interrumpe separadamente, para cada uno de los partícipes en el delito⁵⁸¹.

Artículo 68.- Desistimiento. El ofendido, su representante legal o guardado pueden desistir de la instancia particular, sólo hasta el comienzo del juicio.

12. CÓDIGO PENAL DE EL SALVADOR DE 1997⁵⁸² (Decreto Legislativo N° 1030, Reformas: Decreto Legislativo No. 310 de fecha 24 de marzo de 2010)

LIBRO I: PARTE GENERAL

TÍTULO V: EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL Y SUS EFECTOS

CAPÍTULO I: DE LAS CAUSAS QUE EXTINGUEN LA RESPONSABILIDAD PENAL

CAUSAS DE EXTINCIÓN

Art. 96.- Son causas de extinción de la responsabilidad penal:

- 1) El cumplimiento de la condena o del respectivo período de prueba en los casos de suspensión condicional de ejecución de la pena o de la libertad condicional;

⁵⁷⁸ De este modo, se hace que los plazos de prescripción actúen como un límite absoluto del proceso penal. Este principio es derivación del derecho que toda persona tiene a que su situación sea resuelta en un plazo razonable, tal como lo establece la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José).

C.A.D.H.: 8, Nro. 1; P.I.D.C. y P. (O.N.U.): 9, Nro. 3; C.P.P. CÓRDOBA: 342 y 344; C.P.P. COSTA RICA : 325 Y 327, MOD ; P.C.P.P. GUATEMALA (1990) : 20.

⁵⁷⁹ A los casos tradicionales de suspensión se han incorporado dos de gran importancia: uno, la suspensión de la prescripción en los delitos cometidos por funcionarios públicos mientras permanezca en el ejercicio de la función; otro, en los delitos contra la seguridad interna del Estado (en especial en la rebelión triunfante), mientras dure la fractura institucional. En el primer caso se trata de evitar la influencia que pueda ejercer el funcionario público; en el otro, se rompe con la idea de que una rebelión triunfante se legitima por el solo triunfo: al contrario, sigue siendo un delito que se juzgará cuando se restablezca el régimen constitucional.

P.C.P.P. GUATEMALA (1990): 21.

⁵⁸⁰ Sólo la rebeldía del imputado puede interrumpir la prescripción (ningún acto de procedimiento puede hacerlo) por las mismas razones que fundan la posibilidad de la prisión preventiva: según el régimen constitucional, la ausencia del imputado impide el juicio.

P.C.P.P. GUATEMALA (1990): 22.

⁵⁸¹ La prescripción tiene siempre efectos personales; así, la interrupción respecto de uno de los partícipes no se puede extender a los otros.

C.P.P. ECUADOR: 112; P.C.P.P. GUATEMALA (1990): 23.

⁵⁸² De 26 de abril de 1997.

- 2) La muerte del condenado;
- 3) La prescripción;
- 4) La amnistía;
- 5) El indulto;
- 6) El perdón del ofendido;
- 7) El perdón judicial;
- 8) El padecimiento de enfermedad incurable en período terminal; y,
- 9) Los demás casos expresamente señalados por la ley.

EXTINCIÓN INDIVIDUAL Y CONJUNTA

Art. 97.- La pena se extingue en forma individualizada para cada una de las personas que hayan tomado parte en el hecho, excepto en los casos de perdón, en los cuales se extingue conjuntamente para todas.

MUERTE DEL CONDENADO

Art. 98.- La muerte del condenado extingue la pena impuesta, incluso la multa no satisfecha.

PRESCRIPCIÓN DE LA PENA

Art. 99.- La pena privativa de libertad impuesta por sentencia firme se extingue por prescripción en un plazo igual al de la pena impuesta más una cuarta parte de la misma, pero en ningún caso será menor de tres años. (9)

La pena no privativa de libertad prescribe a los tres años.

La pena impuesta por una falta prescribe en un año.

No prescribe la pena en los casos siguientes: tortura, actos de terrorismo, secuestro, genocidio, violación de las leyes o costumbres de guerra, desaparición forzada de personas, persecución política, ideológica, racial, por sexo o religión, siempre que se trate de hechos cuyo inicio de ejecución fuese con posterioridad a la vigencia del presente Código.

INICIACIÓN DEL TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN

Art. 100.- Cuando no se ha comenzado a cumplir la pena correspondiente, la prescripción de ella comenzará a correr desde la fecha en que la sentencia quede firme. Si hubiese comenzado su cumplimiento, correrá a partir del quebrantamiento de la condena.

SUSPENSIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN

Art. 101.- La prescripción de la pena se suspenderá mientras su ejecución se encuentre legalmente diferida o mientras el condenado esté cumpliendo otra pena con privación de libertad en el país o en el extranjero.

INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN

Art. 102.- La prescripción de la pena impuesta se interrumpe con la comisión de un nuevo delito, quedando sin efecto el tiempo transcurrido. A partir de ese momento comenzará a correr de nuevo el término de prescripción.

PRESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

Art. 103.- Las medidas de seguridad prescriben a los cinco años, si son privativas de la libertad y a los tres años, si no lo son.

El término de la prescripción comenzará a correr desde que quede firme la resolución que impuso las medidas de seguridad o en caso de cumplimiento sucesivo, desde que debió empezar a cumplirse.

AMNISTIA

Art. 104.- La amnistía extingue la acción penal y hace cesar la ejecución de la condena y todas las consecuencias penales de la misma.

La amnistía puede ser absoluta o restringida, esta última deja subsistente la responsabilidad civil.

INDULTO

Art. 105.- El indulto es la extinción de la pena impuesta por sentencia ejecutoriada dejando subsistente la responsabilidad civil.

PROHIBICIÓN DE EXTINCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD

Art. 106.- Las medidas de seguridad no se extinguen por amnistía ni por indulto.

REGIMEN DEL PERDÓN

Art. 107.- El perdón del ofendido extinguirá la responsabilidad penal en los delitos de acción privada o de acción pública previa instancia particular, y operará en los casos determinados por la ley.

En los casos de perdón judicial, se estará a lo dispuesto en los artículos 82 y 372 de este Código.

ENFERMEDAD INCURABLE EN PERIODO TERMINAL

Art. 108.- El juez o tribunal declarará extinguida la pena impuesta en cualquier momento del cumplimiento de la misma, cuando se acredite mediante peritos, que el condenado padece una enfermedad incurable en período terminal. Sometiéndolo a tratamiento médico ambulatorio o vigilancia, según el caso. Esta forma de extinción no afecta la responsabilidad civil.

EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL

Art. 125.- La extinción de la responsabilidad penal no lleva consigo la extinción de la civil, la cual se rige por las leyes civiles.

LIBRO TERCERO: PARTE ESPECIAL. LAS FALTAS Y SUS PENAS

TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES

REGLAS DE APLICACIÓN

Art. 371.- Son aplicables a las faltas las disposiciones contenidas en el Libro Primero de este Código con las modificaciones siguientes:

- 1) La ley penal sólo se aplicará a las faltas cometidas en territorio nacional;
- 2) Las faltas sólo se sancionarán si fueren consumadas;
- 3) De las faltas sólo responderán los autores; y,
- 4) Las penas que podrán imponerse por faltas son: arresto de fin de semana, la de arresto domiciliario, la de prestación de trabajo de utilidad pública y la de multa.

PERDÓN JUDICIAL

Art. 372.- El juez podrá perdonar en la sentencia condenatoria al que por primera vez cometiere una falta, previa amonestación por parte de la autoridad juzgadora.

El perdón judicial extingue la pena, no podrá ser condicional ni a término y solo se concederá una vez para el mismo sujeto.

12.1. Proyecto de Código Penal de El Salvador⁵⁸³(Proyecto de Código Penal, 1994)

LIBRO I: PARTE GENERAL

TÍTULO VI: EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL Y SUS EFECTOS

CAPÍTULO I: DE LAS CAUSAS QUE EXTINGUEN LA RESPONSABILIDAD PENAL

Artículo 98.-Causas de extinción.- Son causas de extinción de responsabilidad penal:

- 1) El cumplimiento de la condena o del respectivo período de prueba en los casos de suspensión condicional de ejecución de la pena o de la libertad condicional;
- 2) La muerte del condenado;
- 3) La prescripción;
- 4) La amnistía;
- 5) El indulto;
- 6) El perdón del ofendido;
- 7) El perdón judicial;
- 8) El padecimiento de enfermedad incurable en período terminal; y,
- 9) Los demás casos expresamente señalados por la ley.

Artículo 99.-Extinción individual y conjunta.- La pena se extingue en forma individualizada para cada una de las personas que hayan tomado parte en el hecho, excepto en los casos de perdón, en los cuales se extingue conjuntamente para todas.

Artículo 100.-Muerte del condenado.- La muerte del condenado extingue la pena impuesta, incluso la multa no satisfecha.

Artículo 101.- Prescripción de la pena.- La pena privativa de libertad impuesta por sentencia firme se extingue por prescripción en un plazo igual al de la pena impuesta, pero en ningún caso será menor de tres años.

La pena no privativa de libertad prescribe a los tres años.

La pena impuesta por una falta prescribe en un año.

No prescribe la pena impuesta por delitos de genocidio, tortura, o desaparición forzada de personas.

⁵⁸³ Corte Suprema de Justicia. República de El Salvador, 1994.

Artículo 102.-Iniciación del término de prescripción.- Cuando no se ha comenzado a cumplir la pena correspondiente, la prescripción de ella comenzará a correr desde la fecha en que la sentencia quede firme. Si hubiese comenzado su cumplimiento, correrá a partir del quebrantamiento de la condena.

Artículo 103.-Suspensión de la prescripción.- La prescripción de la pena se suspenderá mientras su ejecución se encuentre legalmente diferida o mientras el condenado está cumpliendo otra pena con privación de libertad en el país o en el extranjero.

Artículo 104.-Interrupción de la prescripción.- La prescripción de la pena impuesta se interrumpe con la comisión de un nuevo delito, quedando sin efecto el tiempo transcurrido. A partir de ese momento comenzará a correr de nuevo el término de prescripción.

Artículo 105.- Prescripción de las medidas de seguridad.- Las medidas de seguridad prescriben a los cinco años, si son privativas de la libertad y a los tres años, si no lo son.

El término de la prescripción comenzará a correr desde que quede firme a resolución que impuso las medidas de seguridad o en caso de cumplimiento sucesivo, desde que debió empezar a cumplirse.

TÍTULO VII: CONSECUENCIAS CIVILES DEL HECHO PUNIBLE

CAPÍTULO III: DE LAS FORMAS DE CUMPLIR CON LA RESPONSABILIDAD CIVIL

Artículo 127.- Extinción de la responsabilidad civil.- La extinción de la responsabilidad penal no lleva consigo la extinción de la civil, la cual se rige por las leyes civiles.

LIBRO III: PARTE ESPECIAL

TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 373.- Perdón judicial.- El juez podrá perdonar en la sentencia condenatoria al que por primera vez cometiere una falta, previa amonestación por parte de la autoridad juzgada.

13. CÓDIGO PENAL DE ESPAÑA⁵⁸⁴ (Ley Orgánica 10/1995)(García, 2011)

LIBRO I: DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LOS DELITOS Y LAS FALTAS, LAS PERSONAS RESPONSABLES, LAS PENAS, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y DEMÁS CONSECUENCIAS DE LA INFRACCIÓN PENAL

TÍTULO VII: DE LA EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL Y SUS EFECTOS

CAPÍTULO I: DE LAS CAUSAS QUE EXTINGUEN LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL

Artículo 130.- 1.La responsabilidad criminal se extingue:

1. ° Por la muerte del reo.
2. ° Por el cumplimiento de la condena.
3. ° por remisión definitiva de la pena, conforme a los dispuesto en el artículo 85.2 de este Código.
4. ° Por el indulto.
5. ° Por el perdón del ofendido, cuando la Ley así lo prevea. El perdón habrá de ser otorgado de forma expresa antes de que se haya dictado la sentencia, a cuyo efecto el juez o tribunal sentenciador deberá oír al ofendido por el delito antes de dictarla.

Los delitos o faltas contra menores o incapacitados, los jueces o tribunales, oído el Ministerio Fiscal, podrán rechazar la eficacia del perdón otorgado por los representantes de aquéllos, ordenando la continuación del procedimiento, con intervención del Ministerio Fiscal, o el cumplimiento de la condena.

Para rechazar el perdón a que se refiere el párrafo anterior, el juez o tribunal deberá oír nuevamente al representante del menor o incapaz.

6. ° Por la prescripción del delito.
7. ° Por la prescripción de la pena o de la medida de seguridad.
2. La transformación, fusión, absorción o escisión de una persona jurídica no extingue su responsabilidad penal, que se trasladaría a la entidad o entidades en que se transforme, quede fusionada o absorbida y se extenderá a la entidad o entidades que resulten de la escisión. El juez o tribunal podrá moderar el traslado de la pena a la persona jurídica originariamente responsable del delito guarde con ella.

No extingue la responsabilidad penal la disolución encubierta o meramente aparente de la persona jurídica. Se considerará en todo caso que existe disolución encubierta o meramente aparente de la persona jurídica cuando se continúe su actividad económica y se mantenga la identidad sustancial de clientes, proveedores y empleados, o de la parte más relevante de todos ellos.

⁵⁸⁴ De 23 de noviembre de 1995.

Artículo 131.- 1. Los delitos prescriben:

- A los veinte años, cuando la pena máxima señalada al delito sea prisión de quince o más años.
- A los quince, cuando la pena máxima señalada por la Ley sea inhabilitación por más de diez años, o prisión por más de diez y menos de quince años.
- A los diez, cuando la pena máxima señalada por la Ley sea la prisión o inhabilitación por más de cinco años y que no exceda de diez.
- A los cinco, los demás delitos, excepto los de injuria y calumnia, que prescriben al año.

2. Las faltas prescriben a los seis meses.

3. Cuando la pena señalada por la Ley fuere compuesta, se estará, para la aplicación de las reglas comprendidas en este artículo, a la que exija mayor tiempo para la prescripción.

4. Los delitos de lesa humanidad y genocidio y los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, salvo los castigados en el artículo 614, no prescribirán en ningún caso.

Tampoco prescribirán los delitos de terrorismo, si hubieren causado la muerte de una persona.

5. En los supuestos de concurso de infracciones o de infracciones conexas, el plazo de prescripción será el que corresponda al delito más grave.

Artículo 132.- 1. Los términos previstos en el artículo precedente se computarán desde el día en que se haya cometido la infracción punible. En los casos de delito continuado y delito permanente, así como las infracciones que exijan habitualidad, tales términos se computarán, respectivamente, desde el día en que se realizó la última infracción, desde que se eliminó la situación ilícita o desde que cesó la conducta.

La tentativa de homicidio y en los delitos de aborto no consentido, lesiones, contra la libertad, de torturas y contra la integridad moral, la libertad e indemnidad sexual, la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, cuando la víctima fuere menor de edad, los términos se computarán desde el día en que ésta haya alcanzado la mayoría de edad, y si falleciera antes de alcanzarla a partir de la fecha de fallecimiento.

2. La prescripción se interrumpirá, quedando sin efecto el tiempo transcurrido, cuando el procedimiento se dirija contra la persona indiciariamente responsable del delito o falta, comenzando a correr de nuevo desde que se paralice el procedimiento o se termine sin condena de acuerdo con las reglas siguientes:

1.ª Se entenderá dirigido el procedimiento contra una persona determinada desde el momento en que, al incoar la causa o con posterioridad, se dicte resolución judicial motivada en la que se le atribuya su presunta participación en un hecho que pueda ser constitutivo de delito o falta.

2.ª No obstante lo anterior, la presentación de querella o la denuncia formulada ante un órgano judicial, en la que se atribuya a una persona determinada su presunta participación en un hecho que pueda ser constitutivo de delito o falta, suspenderá el cómputo de la prescripción por un plazo máximo de seis meses para el caso de delito y de dos meses para el caso de falta, a contar desde la misma fecha de presentación de la querella o formulación de la denuncia.

Si dentro de dicho plazo se dicta contra el querellado o denunciado cualquier otra persona implicada en los hechos, alguna de las resoluciones judiciales mencionadas en el apartado anterior, la interrupción de la prescripción se entenderá retroactivamente producida, a todos los efectos, en la fecha de presentación de la querella o denuncia.

Por el contrario, el cómputo del término de prescripción continuará desde la fecha de presentación de la querella o denuncia si, dentro del plazo de seis o dos meses, en los respectivos supuestos de delito o falta, recae resolución judicial firme de inadmisión a trámite de la querella o denuncia o por la que se acuerde no dirigir el procedimiento contra la persona querellada o denunciada. La continuación del cómputo se producirá también si, dentro de dichos plazos, el Juez de Instrucción no adoptara ninguna de las resoluciones previstas en este artículo.

3.ª A los efectos de este artículo, la persona contra la que se dirige el procedimiento deberá quedar suficientemente determinada en la resolución judicial, ya sea mediante su identificación directa o mediante datos que permitan concretar posteriormente dicha identificación en el seno de la organización o grupo de personas a quienes se atribuya el hecho.

Artículo 133.- 1. Las penas impuestas por sentencia firme prescriben:

- A los treinta años, las de prisión por más de veinte años.
- A los veinticinco años, las de prisión de quince o más años sin que excedan de veinte.
- A los veinte, las de inhabilitación por más de diez años y las de prisión por más de diez y menos de quince.
- A los quince, las restantes penas graves.
- A los cinco, las penas menos graves.

- Al año, las penas leves.
 - 2. Las penas impuestas por delitos de lesa humanidad y genocidio y por los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, salvo los castigados en el artículo 614, no prescribirán en ningún caso.
- Tampoco prescribirán las penas impuestas por delitos de terrorismo, si estos hubieren causado la muerte de una persona (141).

Artículo 134.- El tiempo de la prescripción de la pena se computará desde la fecha de la sentencia firme, o desde el quebrantamiento de la condena, si ésta hubiese comenzado a cumplirse.

Artículo 135.- 1. Las medidas de seguridad prescribirán a los diez años, si fueran privativas de libertad superiores a tres años, y a los cinco años, si fueran privativas de libertad iguales o inferiores a tres años o tuvieran otro contenido.

- 2. El tiempo de la prescripción se computará desde el día en que haya quedado firme la resolución en la que se impuso la medida o, en caso de cumplimiento sucesivo, desde que debió empezar a cumplirse.
- 3. Si el cumplimiento de una medida de seguridad fuese posterior al de una pena, el plazo se computará desde la extinción de ésta.

13.1. Ley Orgánica 5/2000, de 12 de Enero (Jefatura del Estado), Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores

ARTÍCULO 15.- De la prescripción.- 1. Los hechos delictivos cometidos por los menores prescriben:

- 1.º Con arreglo a las normas contenidas en el Código Penal, cuando se trate de los hechos delictivos tipificados en los artículos 138, 139, 179, 180 y 571 a 580 del Código Penal o cualquier otro sancionado en el Código Penal o en las leyes penales especiales con pena de prisión igual o superior a diez años.
- 2.º A los cinco años, cuando se trate de un delito grave sancionado en el Código Penal con pena superior a diez años.
- 3.º A los tres años, cuando se trate de cualquier otro delito grave.
- 4.º Al año, cuando se trate de un delito menos grave.
- 5.º A los tres meses, cuando se trate de una falta.

2. Las medidas que tengan una duración superior a los dos años prescribirán a los tres años. Las restantes medidas prescribirán a los tres años, excepto la amonestación, las prestaciones en beneficio de la comunidad y permanencia de fin de semana, que prescribirán al año.

13.2.- Código Penal Español (Texto refundido de 1983 -hoy derogado). (Alfonzo Arroyo de las Heras, 1994)

TÍTULO V: EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD Y DE SUS EFECTOS

CAPÍTULO I: DE LAS CAUSAS QUE EXTINGUEN LA RESPONSABILIDAD

Artículo 112. La responsabilidad penal se extingue:

- 1º Por muerte del reo
 - 2º Por cumplimiento de la condena
 - 3º Por amnistía, la cual extingue por completo la pena y todos sus efectos.
 - 4º Por indulto. Será aplicable al indultado, por el tiempo que a no haberlo sido debería durar la condena, lo dispuesto para el desterrado sobre lugares de entrada prohibida.
 - 5º Por perdón del ofendido, cuando la pena se haya impuesto por delito solamente perseguibles mediante denuncia o querrela del agraviado.
- En los delitos contra menores o incapacitados, el Tribunal podrá rechazar la eficacia del perdón otorgado por los representantes de aquellos, ordenando la continuación del procedimiento o el cumplimiento de la condena, con intervención del Ministerio Fiscal.
- 6º Por prescripción del delito.
 - 7º Por prescripción de la pena.

Artículo 113. Los delitos prescriben: a los veinte años, cuando la ley señalare al delito la pena de reclusión mayor.

A los quince, cuando la ley señalare al delito la pena de reclusión menor.

A los diez, cuando señalare una pena que exceda de seis años.

A los cinco, cuando señalare cualquier otra pena.

Exceptuánse los delitos de calumnia e injuria, de los cuales los primeros prescribirán al año, y los segundos, a los seis meses.

Las faltas prescriben a los dos meses.

Cuando la pena señalada sea compuesta, se estará a la mayor para la aplicación de las reglas comprendidas en este artículo.

Artículo 114. El término de la prescripción comenzará a correr desde el día en que se hubiere cometido el delito.

Esta prescripción se interrumpirá desde que el procedimiento se dirija contra el culpable, volviendo a correr de nuevo el tiempo de la prescripción desde que aquél termine sin ser condenado o se paralice el procedimiento.

Artículo 115. Las penas impuestas por sentencia firme prescriben:

- Las de reclusión mayor, a los treinta años.
- Las de reclusión menor, a los veinticinco.
- Las demás penas, cuya duración exceda de seis años, a los quince.
- Las penas superiores a un año y que no exceda de seis, a los diez.
- Las restantes penas, con excepción de las leves, a los cinco años.
- Las penas leves, al año.

Artículo 116. El tiempo de la prescripción de la pena comenzará a correr desde la fecha de la sentencia firme o desde el quebrantamiento de la condena, si esta hubiese comenzado a cumplirse.

Se interrumpirá, quedando sin efecto el tiempo transcurrido, cuando el reo cometiere otro delito antes de completar el tiempo de la prescripción, sin perjuicio de que pueda comenzar a correr de nuevo.

Artículo 117.- La responsabilidad civil nacida del delito o falta se extinguirá de igual modo que las demás obligaciones, con sujeción a las reglas del derecho Civil.

13.3.- Propuesta Alternativa de la Parte General del Código Penal⁵⁸⁵

LIBRO I:

TÍTULO IV: DE LA EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL Y SUS EFECTOS

CAPÍTULO I: DE LA PRESCRIPCIÓN

Artículo 77 (104).- Los delitos prescriben:

- A los veinte años, cuando la pena señalada al delito sea de prisión de diez o más años.
- A los quince, cuando la pena señalada por Ley fuere de inhabilitación por más de diez años o prisión por más de cinco y menos de diez.
- A los diez, los restantes delitos graves.
- A los cinco, los delitos menos graves. Exceptuándose los delitos de calumnia e injuria, de los cuales los primeros prescriben al año y los segundos a los seis meses.
- (Las faltas prescriben a los dos meses.)
- Cuando la pena señalada al delito fuere compuesta, se estará a la que exija mayor tiempo para la prescripción.

Artículo 78 (105).- El tiempo de prescripción del delito comenzará a correr desde el día en que se hubiere consumado. Si el delito fuere intentado, desde el momento en que cesó la actividad delictiva. Para el continuado y permanente, desde el día en que se realizó la última infracción.

Esta prescripción se interrumpirá, quedando sin efecto el tiempo transcurrido, desde que el procedimiento se dirija contra el culpable, volviendo a correr de nuevo el tiempo de la prescripción desde que aquél termine sin ser condenado o se paralice.

Artículo 79 (106).- Las penas impuestas por sentencia firme prescriben:

- A los veinticinco años, las de prisión de diez o más años.
- A los veinte, las de inhabilitación por más de diez años o prisión por más de diez años o prisión por más de cinco y menos de diez.
- A los diez, las restantes penas graves.
- A los cinco, las penas menos graves.
- (Las penas leves, al año).

Artículo 80 (107).- El tiempo de la prescripción de la pena comenzará a correr desde la fecha de la sentencia firme, o desde el quebrantamiento de la condena, si ésta hubiese comenzado a cumplirse.

⁵⁸⁵ Presentada por el Grupo Parlamentario Comunista como artículo primero de la enmienda a la totalidad al Proyecto de L.O. de Reforma parcial del C.P. de 26 de febrero de 1982.

Se interrumpirá, quedando sin efecto el tiempo transcurrido, cuando el reo cometiere otro delito antes de completar el tiempo de la prescripción, sin perjuicio de que ésta pueda comenzar a correr de nuevo.

13.4.- Propuesta de Anteproyecto del nuevo Código Penal de 1984. *(Propuesta de anteproyecto del nuevo código penal, 1984)*

TÍTULO V: DE LA EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL Y SUS EFECTOS

CAPÍTULO I: DE LAS CAUSAS QUE EXTINGUEN LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL

Art. 107°.- La responsabilidad criminal se extingue:

1° Por la muerte del reo.

2° Por el cumplimiento de la condena.

3° Por el indulto particular.

Se podrá aplicar al indultado por el tiempo que, de no haberlo sido, debiera durar la condena, lo dispuesto en el artículo 102 sobre prohibición de volver al lugar en que hubiere cometido un delito o en que resida la víctima o su familia, si fueren distintos.

4° Por el perdón del ofendido, cuando la pena se haya impuesto por delitos solo perseguibles mediante denuncia o querrela del agraviado y la ley lo permita expresamente.

En ningún otro caso el perdón de la parte ofendida extingue la acción penal o la pena impuesta.

5° Por prescripción del delito.

6° Por prescripción de la pena.

Art. 108°.- 1. Los delitos prescriben:

A los veinte años, cuando la pena señalada al delito sea de prisión de diez o más años.

A los quince, cuando la pena señalada por la ley fuera de inhabilitación por más de diez años o prisión por más de cinco y menos de diez.

A los diez, los restantes delitos graves.

A los cinco, los delitos menos graves.

Se exceptúan los delitos de calumnia e injuria, de los cuales los primeros prescriben al año y los segundos a los seis meses.

Las faltas prescriben a los dos meses.

2. El delito de genocidio no prescribirá en ningún caso.

3. Cuando la pena señalada al delito fuere compuesta, se estará a la que exija mayor tiempo para la prescripción.

Art. 109°.- 1. El tiempo de prescripción del delito comenzará a correr desde el día en que se hubiera consumado. Si el delito fuere intentado, desde el momento en que cesó la actividad delictiva. Para el continuado y permanente desde el día en que se realizó la última infracción o se eliminó la situación ilícita.

2. La prescripción se interrumpirá, quedando sin efecto el tiempo transcurrido, desde que el procedimiento se dirija contra el culpable, volviendo a correr de nuevo el tiempo de la prescripción desde que aquél termine sin ser condenado o se paralice el procedimiento.

Art. 110°.- 1. Las penas impuestas por sentencia firme prescriben:

A los veinticinco años, las de prisión de diez o más años.

A los veinte, las de inhabilitación por más de diez años o prisión por más de cinco y menos de diez.

A los diez, las restantes penas graves.

A los cinco, las penas menos graves.

Las penas breves, al año.

2. Las penas impuestas por delito de genocidio no prescribirán en ningún caso.

Art. 111°.- El tiempo de prescripción de la pena comenzará a correr desde la fecha de la sentencia firme.

Art. 112°.- 1. Las medidas de seguridad prescribirán:

A los diez años, si se tratare de una medida privativa de libertad.

A los cinco, si se tratare de cualquier otra medida.

2. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día en que quedó firme la resolución en que se impuso la correspondiente medida o, en caso de cumplimiento sucesivo, desde que debió empezar a cumplirse aquella de que se trate.

3° Si el cumplimiento de una medida de seguridad fuere posterior al de una pena se computará el plazo desde la extinción de ésta.

13.5.- Proyecto de Ley Orgánica del Código Penal (Ministerio de Justicia, 1992).

LIBRO I

CAPÍTULO IV: DEL CUMPLIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y DEMÁS RESPONSABILIDADES PECUNIARIAS

Artículo 129°.- La acción para exigir la responsabilidad civil nacido de un delito o falta prescribe a los quince años, salvo que tenga señalado el término especial de prescripción.

El deudor de este concepto no puede oponer la compensación que pudiera corresponderle frente al perjudicado por su delito o falta

El tiempo para la prescripción de la acción se contará desde el día en que pudiera ejercitarse.

TÍTULO VII: DE LA EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL Y SUS EFECTOS

CAPÍTULO I: DE LAS CAUSAS QUE EXTINGUEN LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL

Artículo 136.- La responsabilidad penal se extingue:

1. Por la muerte del reo.
2. Por el cumplimiento de la condena.
3. Por el indulto particular.

Se podrá aplicar al indultado por el tiempo que debiera durar la condena, la prohibición de que el mismo vuelva al lugar en que hubiere cometido el delito o en que resida la víctima o su familia, si fueren distintos, atendiendo a la gravedad de los hechos, y al peligro que la presencia del delincuente suponga.

4. Por el perdón del ofendido, cuando la pena se haya impuesto por delitos sólo perseguibles mediante denuncia o querrela del agraviado, y la Ley lo permita expresamente.

En los delitos contra menores o incapacitados, los Jueces o Tribunales, oído el Ministerio Fiscal, podrán rechazar la eficacia del perdón otorgado por los representantes de aquéllos, ordenando la continuación del procedimiento, con intervención del Ministerio Fiscal, o el cumplimiento de la condena.

5. Por la prescripción del delito.
6. Por la prescripción de la pena.

Artículo 137.- 1. Los delitos prescriben:

- A los veinte años, cuando la pena máxima señalada al delito sea prisión de diez o más años.
- A los quince, cuando la pena máxima señalada por la Ley sea inhabilitación por más de diez años, o prisión por más de cinco y menos de diez años.
- A los diez, los restantes delitos graves.
- A los cinco, los delitos menos graves.

Quedan exceptuados los delitos de calumnia e injuria, que prescriben al año.

2. El delito de genocidio no prescribirá en ningún caso.

3. Las faltas prescriben a los seis meses.

4. Cuando la pena señalada por la Ley fuere compuesta, se estará, para la aplicación de las reglas comprendidas en este artículo, a la que exija mayor tiempo para la prescripción.

Artículo 138.- 1. Los términos previstos en el artículo precedente se computarán desde el día en que se hubiera cometido la infracción punible. En los casos de delito continuado y delito permanente, tales términos se computarán respectivamente, desde el día en que se realizó la última infracción y desde que se eliminó la situación ilícita.

2. La prescripción se interrumpirá, quedando sin efecto el tiempo transcurrido, cuando el procedimiento se dirija contra el culpable, comenzando a correr de nuevo el término de la prescripción cuando aquél termine sin ser condenado o se paralice el procedimiento.

Artículo 139.- 1. Las penas impuestas por sentencia firme prescriben:

- A los treinta años, las de prisión de diez o más años.
- A los veinte, las de inhabilitación por más de diez años y las de prisión por más de cinco y menos de diez años.
- A los diez, las restantes penas graves.
- A los cinco, las penas menos graves.
- Al año, las penas leves.

2. Las penas impuestas por delito de genocidio no prescribirán en ningún caso.

Artículo 140.- El tiempo de la prescripción de la pena se computará desde la fecha de la sentencia firme, o desde el quebrantamiento de la condena, si ésta hubiese comenzado a cumplirse.

Artículo 141.- 1. Las medidas de seguridad prescribirán a los diez años, si fueren privativas de libertad, y a los cinco, si tuvieren otro contenido.

2. El tiempo de la prescripción se computará desde el día en que hubiese quedado firme la resolución en la que se impuso la medida o, en caso de cumplimiento sucesivo, desde que debió empezar a cumplirse.
3. Si el cumplimiento de una medida de seguridad fuere posterior al de una pena, el plazo se computará desde la extinción de ésta.

14.- CÓDIGO PENAL DE ESTONIA DE 2002⁵⁸⁶ de la traducción del inglés

PARTE GENERAL

CAPÍTULO 1: DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO 6: PRESCRIPCIÓN

§ 81. Plazo de prescripción de delito.

(1) Nadie podrá ser condenado o sancionado por la comisión de un delito si los siguientes términos han transcurrido entre la comisión del delito y la entrada en vigor de la sentencia judicial correspondiente:

1) diez años en el caso de comisión de un delito en primer grado;

2) cinco años en el caso de la comisión de un delito en segundo grado.

(2) Los delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y delitos de los que esté prevista la cadena perpetua no tienen fecha de vencimiento.

(3) Un delito menor expira después de haber transcurrido dos años transcurrido entre la comisión de los mismos y la entrada en vigor de la sentencia correspondiente o de la decisión.

(4) En el caso de un delito intermitente, el período de prescripción se contará a partir de la comisión del último acto. En el caso de un delito continuo, el plazo de prescripción se contará a partir de la finalización del acto continuo.

(5) El plazo de prescripción de una infracción penal se interrumpe con el rendimiento de los siguientes actos procesales en el proceso penal:

1) aplicación de una medida preventiva en relación con el sospechoso o acusado, o la incautación de sus bienes, o los bienes que son objeto, si el lavado de dinero;

2) el enjuiciamiento de los acusados;

3) el aplazamiento de la audiencia de un asunto en el caso de que el acusado no comparece;

4) el interrogatorio de los acusados en la audiencia del tribunal;

5) orden de evaluación de los expertos o pruebas adicionales en la audiencia en la corte.

(24/01/2007 entró en vigor el 03/15/2007 - RT I 2007, 13, 69)

(6) Si el plazo de prescripción de una infracción penal se interrumpe el plazo de prescripción se iniciará de nuevo con la realización del acto procesal previsto en el inciso (5) de esta sección. Una persona no debe sin embargo ser condenado o sancionado por la comisión de un delito si el período transcurrido entre la comisión del delito y la entrada en vigor de la sentencia judicial correspondiente es cinco años más que el término previsto en el inciso (1) de esta sección.

(24/01/2007 entró en vigor el 03/15/2007 - RT I 2007, 13, 69)

(7) El plazo de prescripción del delito se interrumpe:

1) en el caso de un sospechoso, acusado o persona sujeta a la fuga del procedimiento de diligencias previas, procedimientos extrajudiciales o judiciales, hasta que la persona está detenida o se presenta ante el órgano que dirige las actuaciones;

2) tras la apertura de un procedimiento penal en cuestión de un acto con elementos de un delito menor, hasta la terminación del proceso penal;

3) sobre la comisión de un delito contra la autodeterminación sexual contra una persona menor de dieciocho años de edad, hasta que la víctima cumpla 18 años de edad o menos que la razón de las actuaciones penales se hizo evidente antes de la víctima alcanzado la edad de tales.

(24/01/2007 entró en vigor el 03/15/2007 - RT I 2007, 13, 69)

(8) En los casos previstos en las cláusulas (7) 1) y 2) de esta sección, el plazo de prescripción no se reanuda si hay más de cinco años han pasado desde la comisión del delito o de más de tres años han pasado desde el comisión del delito.

(24/01/2007 entró en vigor el 03/15/2007 - RT I 2007, 13, 69)

§ 82. Plazo de prescripción para la ejecución de la sentencia o resolución

(1) La sentencia no se ejecutará si los términos siguientes han expirado después de la entrada en vigor de la sentencia:

⁵⁸⁶ Publicado el 06 de junio 2001, entro en vigencia el 1 de septiembre del 2002.

- 1) cinco años a partir de la entrada en vigor de una decisión de justicia en un asunto relativo a un delito en primer grado;
- 2) tres años desde la entrada en vigor de una decisión de justicia en un asunto relativo a un delito en segundo grado;
- 3) dieciocho meses a partir de la entrada en vigor de una sentencia o decisión tomada con respecto a un delito menor.

(15/06/2005 entró en vigor el 21/07/2005 - RT I 2005, 20, 126)

(2) El plazo de prescripción para la ejecución de la sentencia se suspende:

- 1) para el período durante el cual la persona que evade el servicio o el pago de la sanción impuesta a él o ella;
 - 2) por un período de libertad condicional impuesta sobre la base de lo dispuesto en el § 73 o 74 de este Código;
 - 3) para el período durante el cual la ejecución de la pena impuesta a la persona que se aplaza o por el cual la duración de la sanción se ha ampliado;
 - 4) para el período durante el cual la persona está en un estado extranjero y no puede o no ser extraditado.
- (3) El plazo de prescripción para la ejecución de una condena no caduca si la cadena perpetua se ha impuesto como castigo.

15. CÓDIGO PENAL DE FRANCIA⁵⁸⁷: (Ley N° 92-683 del 22 de Julio de 1992 (portando las reformas de las disposiciones generales del Código penal).

LIBRO PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES

TÍTULO III: DE LAS PENAS

CAPÍTULO II: DEL REGIMEN DE LAS PENAS

SECCIÓN 1.ª: DE LAS PENAS APLICABLES EN CASO DE CONCURSO DE INFRACCIONES.

Art. 132-6. Cuando una pena haya sido objeto de indulto o eliminación, se tendrá en cuenta, para la aplicación del cumplimiento simultáneo, la pena resultante de aquella medida o decisión.

La eliminación de una pena otorgada después de haberse decidido el cumplimiento simultáneo se aplicará a la pena establecida tras haber decretado el cumplimiento simultáneo.

La duración de la eliminación de la pena se aplicará a la duración de la pena que se vaya a cumplir, en su caso, tras haber decretado el cumplimiento simultáneo.

SECCIÓN 2.ª: DE LAS PENAS APLICABLES EN CASO DE REINCIDENCIA

§ 1. Personas físicas.

Art. 132-9. En el caso que una persona física, que haya sido condenada en sentencia firme por un delito grave o por un delito castigado con diez años de prisión por Ley, cometa, en el plazo de diez años a partir del cumplimiento o de la prescripción de la pena anterior, un delito menos grave castigado con la misma pena, el límite máximo de las penas de prisión y de multa establecidas será doblado.

Cuando una persona física, que ya ha sido condenada en sentencia firme por un delito grave o por un delito castigado con diez años de prisión por Ley, cometa en un plazo de cinco años a partir del cumplimiento o de la prescripción de la pena anterior, un delito menos grave castigado con una pena de prisión de una duración superior a un año e inferior a diez años, el límite máximo de las penas de prisión y de multa previstas será doblado.

Art. 132-10. En el caso que una persona física, que haya sido condenada en sentencia firme por un delito menos grave, cometa, en el plazo de cinco años a partir del cumplimiento o de la prescripción de la pena anterior, bien el mismo delito, o bien un delito que le es equiparado de acuerdo con las reglas de la reincidencia, el máximo de las penas de prisión y de multa establecidas será doblado.

Art. 131-11. En aquellos casos previstos por Reglamento, cuando una persona física, que ya ha sido condenada en sentencia firme por multa de quinta clase, cometa, en el plazo de un año a partir del cumplimiento o de la prescripción de la pena anterior, la misma falta, el máximo de la pena de multa prevista alcanzará los 20.000 F.

§ Personas jurídicas

⁵⁸⁷ El Código Penal francés no fue aprobado por una única ley, si no por varias: Las Leyes núm. 92-683 (Libro I), 92-684 (Libro II), 95-685 (Libro III), 92-686 (Libro IV), todas ellas de 22 de julio de 1992, La Ley núm. 92-1336, de 16 de diciembre de 1992 (conocida como “Ley de Adaptación”, y además varios Decretos del concejo de Estado, entre los que destaca el núm. 93-726, de 29 de marzo de 1993. (Carlo Aránguez Sánchez, 2003).

Art. 132-13. Si una persona jurídica fue condenada en sentencia firme por un delito grave o menos grave, el cual es castigado por Ley con 700.000 F de multa en los casos en los que es cometido por una persona física, y esta persona jurídica incurre de nuevo en responsabilidad penal por un delito menos grave castigado con la misma pena en el plazo de diez años a partir del cumplimiento o de la prescripción de la pena anterior, la cuantía máxima de la multa aplicable será diez veces superior al previsto por la Ley que castiga este delito.

Si una persona jurídica fue condenada en sentencia firme por un delito grave o menos grave, el cual es castigado por Ley con 700.000 F de multa en los casos en los que es cometido por una persona física, y esta persona jurídica incurre de nuevo en responsabilidad penal en el plazo de cinco años a partir del cumplimiento o de la prescripción de la pena anterior, por cometer un delito menos grave castigado por la Ley, en cuanto a las personas físicas, con una pena de multa de al menos 100.000 F, la cuantía máxima de la multa aplicable será diez veces superior a la prevista por la Ley que castiga este delito.

En los casos previstos por los párrafos anteriores, la persona jurídica podrá ser castigada, además, con las penas señaladas en el artículo 131-39, con reserva de las disposiciones del último párrafo de este artículo.

Art. 132-14. Cuando una persona jurídica, que ya ha sido condenada en sentencia firme por un delito, incurre en responsabilidad penal por ese mismo delito menos grave, o bien un delito menos grave que le es equiparado conforme a las reglas de reincidencia en plazo de cinco años a partir del cumplimiento o de la prescripción de la pena anterior, la cuantía máxima de la multa aplicable será diez veces superior a la prevista por la Ley que castiga este delito menos grave en lo que se refiere a las personas físicas.

Art. 132-15. En los casos previstos por el Reglamento, cuando una persona jurídica, que haya sido condenada en sentencia firme por una falta de 5.ª clase, incurre en responsabilidad penal en plazo de un año a partir del cumplimiento o de la prescripción de la pena anterior con la misma falta, la cuantía máxima de la multa aplicable será diez veces superior a la prevista por el Reglamento que castiga esta falta en lo que se refiere a las personas físicas.

CAPÍTULO III: DE LA EXTINCIÓN DE LAS PENAS Y DE LA CANCELACIÓN DE LOS EFECTOS DE LAS CONDENAS

Artículo 133-1. El fallecimiento del condenado o la disolución de la persona jurídica, salvo en los casos en que ésta sea impuesta por el juez o Tribunal penal, el indulto y la amnistía, impiden o detienen la ejecución de la pena. Sin embargo, se podrá proceder al cobro [de la multa y]⁵⁸⁸ de las costas procesales, así como a la ejecución del comiso tras la defunción del condenado o la disolución de la persona jurídica hasta el cierre de las operaciones de liquidación.

La prescripción de la pena impide su ejecución.

La rehabilitación cancela los efectos de la condena.

SECCIÓN 1.ª DE LA PRESCRIPCIÓN

Artículo 133-2. Sin perjuicio de las disposiciones del artículo 213-5⁵⁸⁹, las penas impuestas por delito grave prescriben al cabo de veinte años transcurridos desde la fecha en que la sentencia fue firme.

Artículo 133-3. Las penas impuestas por un delito menos grave prescriben a los cinco años transcurridos a partir de la fecha en la que la sentencia fue firme.

Artículo 133-4. Las penas impuestas por falta prescriben a los dos años desde la fecha en la que la sentencia fue firme.

Artículo 133-5. Los condenados en rebeldía⁵⁹⁰[contumacia o incomparecencia] cuya pena haya prescrito no cumplirán la pena ni podrán recurrirla.

Artículo 133-6. Las obligaciones de naturaleza civil derivadas de una decisión penal firme prescriben según las reglas del Código civil.

SECCIÓN 2.ª DEL INDULTO

Art. 133-7. El indulto sólo conlleva la dispensa de ejecutar la pena.

Art. 133-8. El indulto no será obstáculo para que la víctima obtenga la reparación del perjuicio causado por la infracción.

⁵⁸⁸ El texto entre corchetes ha sido añadido por la Ley núm. 92-1336, de 16 de diciembre de 1992.

⁵⁸⁹ Según este artículo, el genocidio y los crímenes contra la Humanidad (artículos 211-1 a 212-3 CPF) son imprescriptibles.

⁵⁹⁰ En Francia se distingue entre rebeldía *par contumace* o *par défant*, según el reo sea, respectivamente, acusado o parte en un proceso. Tal distinción no existe en nuestro Derecho según Carlos Aránguez Sánchez y Esperanza Alarcón Navío, 2003; [sin embargo nosotros hemos agregado entre corchetes los términos *contumacia* o *incomparecencia*, considerando la primera edición de este libro y algunas traducciones libres].

SECCIÓN 3.ª DE LA AMNISTÍA

Art. 133-9. La amnistía cancela los efectos de las condenas impuestas. Conlleva, sin que pueda dar a restitución, la remisión de todas las penas. Devuelve el beneficio de la remisión condicional que había podido ser concedida en una condena anterior al autor o al cómplice de la infracción.

Art. 133-10. La amnistía no podrá perjudicar a terceros.

Art. 133-11. A toda persona que, en el ejercicio de sus funciones, haya tenido conocimiento de sanciones penales, disciplinarias o profesionales o bien privaciones de derechos, inhabilitaciones e incapacidades extinguidas por la amnistía, le estará prohibido recordar su existencia de cualquier forma o mantener su constancia en cualquier documento. No obstante, las actas originales de los juicios, sentencias y otras decisiones se excluyen de esta prohibición. Además, la amnistía no impedirá la ejecución de la publicación de la decisión ordenada a modo de reparación.

SECCIÓN 4.ª DE LA REHABILITACIÓN

Art. 133-12. Toda persona castigada con una pena grave, menos grave o leve podrá beneficiarse de la rehabilitación de pleno derecho en las condiciones previstas en la presente sección, o de la rehabilitación judicial concedida en las condiciones previstas por la ley de Enjuiciamiento Criminal.

Art. 133-13. La rehabilitación se adquiere por la persona física condenada que, en los plazos determinados a continuación, no haya sido condenada nuevamente a una pena grave o menos grave.

1.º Por una condena a multa o a la pena de días-multa, tras un plazo de tres años contado a partir del día del pago de la multa o de la cuantía global de los días-multa, o bien del cumplimiento del arresto sustitutorio o del periodo de encarceramiento previsto en el artículo 131-25 o de la prescripción cumplida.

2.º Por una condena única, bien a prisión no superior a un año, bien a una pena distinta de la reclusión, la detención, la prisión, la multa o el día multa, tras un plazo de cinco años contado a partir ya sea de la ejecución de la pena, ya sea de la prescripción cumplida;

3.º Por la condena única a prisión no superior a diez años o por condena múltiples a prisión cuyo conjunto no exceda los cinco años, tras un plazo de diez años contando a partir bien del cumplimiento de la pena impuesta, bien de la prescripción cumplida.

Art. 133-14. La rehabilitación queda adquirida de pleno derecho para la persona jurídica condenada que, en los plazos determinados a continuación, no haya sido condenada nuevamente a una pena grave o menos grave:

1.º Por una condena a multa, tras un período de cinco años contado a partir del día del pago de multa o de la prescripción cumplida;

2.º Por una condena a una pena distinta de la multa o de la disolución, tras un plazo de cinco años contando a partir, bien de la ejecución de la pena, bien de la prescripción cumplida.

Art. 133-15. Las penas cuyo cumplimiento simultáneo haya sido concedido serán consideradas como constitutivas de pena única para las aplicaciones de las disposiciones de los artículos 133-13 y 133-14.

Art. 133-16. La rehabilitación produce los mismos efectos que prevén los artículos 133-10 y 133-11 para la amnistía. Anula todas las inhabilitaciones y privaciones de derechos resultantes de la condena.

Sin embargo, cuando la persona ha sido condenada a la vigilancia socio judicial prevista en el art. 131-36-1 o la pena de inhabilitación para ejercer una actividad profesional o de voluntariado que implique un contacto habitual con menores, la rehabilitación sólo desplegará sus efectos al finalizar la ejecución de la medida.

Art. 133-17. Para la aplicación de las reglas sobre rehabilitación, la remisión sobre rehabilitación, la remisión graciosa de una pena equivale a su ejecución.

15.1.- Código de Instrucción Criminal francés de 1810

LIBRO II: DE LA JUSTICIA

TÍTULO VII: DE ALGUNAS MATERIAS DE INTERES PÚBLICO Y DE SEGURIDAD GENERAL

CAPÍTULO V: DE LA PRESCRIPCIÓN

Art. 635º.- Las penas impuestas por sentencias ó fallos pronunciados en materia criminal se prescribirán por veinte años cumplidos, á contar desde la fecha de las sentencias ó fallos.

No obstante, el condenado no podrá residir en el departamento donde viviesen, ya el que ó contra la propiedad del que el crimen hubiese sido cometido, ya sus herederos directos.

El Gobierno podrá designar al condenado el lugar de su domicilio.

Art. 636º.- Las penas impuestas por las sentencias ó fallos pronunciados en materia criminal se prescribirán por cinco años cumplidos, á contar de la fecha de la sentencia ó fallo dictado sin apelación; y respecto de las

penas impuestas por los Tribunales de primera instancia, á contar del día en que no puedan ser impugnadas por la vía de apelación.

Art. 637°.- La acción pública y la acción civil resultante de un crimen que se castigue con pena de muerte ó con penas aflictivas perpetuas, ó cualquier otro crimen que se castigue con pena aflictiva ó infamante, se prescribirán después de diez años cumplidos, á contar del día en que el crimen haya sido cometido, si, en este intervalo, no se hubiese practicado diligencia alguna de instrucción ni de persecución.

Si se hubiesen practicado en este intervalo actos de instrucción ó de persecución no seguidos de sentencia, la acción pública y la acción civil no prescribirán más que después de diez años cumplidos, á contar del último acto, aún respecto de personas que no estuviesen comprendidas en esta actuación de instrucción ó de persecución.

Art. 638°.- En los dos casos expresados en el artículo precedente, y según las distinciones de épocas en él establecidas, la duración de la prescripción se reducirá á tres años cumplidos, si se tratase de un delito que se castigue correccionalmente.

Art. 639°.- Las penas impuestas por las sentencias dictadas en las contravenciones de policía se prescribirán después de dos años cumplidos, á saber en las penas pronunciadas por sentencia o fallo sin apelación, á contar del día de la decisión; y, respecto de las penas pronunciadas por los Tribunales de primera instancia, á contar del día en que no puedan ser atacadas por la vía de apelación.

Art. 640°.- La acción pública y la acción civil por una contravención de policía se prescribirán después de un año cumplido, á contar del día en que se cometiese, aún cuando hubiese existido acta, conocimiento de un Tribunal, instrucción ó persecución, si en este intervalo no recayera condena; si se hubiere dictado resolución definitiva en primera instancia, contra la cual quepa el recurso de apelación, la acción pública y la acción civil se prescribirán después de un año cumplido, á contar de la notificación de la apelación interpuesta.

Art. 641°.- En ningún caso los condenados por no asistencia ó rebeldía, cuya pena haya prescrito, podrán ser admitidos á presentarse para subsanar la no asistencia o la rebeldía.

Art. 642°.- Las condenas civiles impuestas en las sentencias ó fallos irrevocables dictados en materia criminal, correccional ó de policía, se prescribirán según las reglas establecidas en el Código Civil.

Art. 643°.- Las disposiciones del presente capítulo no derogan las leyes particulares relativas á la prescripción de las acciones resultantes de ciertos delitos o de ciertas contravenciones.

DISPOSICIONES PRELIMINARES

Art. 2°.- (...)

La acción civil para la reparación del daño podrá ejercitarse contra el procesado y sus causa-habientes. Una y otra acción se extinguirán por la prescripción, según lo dispuesto en el libro II título VII, capítulo V, *De la prescripción*.

16. CÓDIGO PENAL PARA EL GRAN DUCADO DE TOSCANA (Dado en Florencia a los 20 días del mes de junio de 1854).

LIBRO I

TÍTULO IX: DE LA EXTINCIÓN DE LA PENA

Artículo 86.- La muerte del delincuente extinguirá la acción penal y la pena; pero la sentencia que se hizo exequible cuando él vivía, y que lo condenó a multa, a confiscación de objetos determinados por la ley, a costas procesales y a resarcimiento de daños, mantendrá su efecto contra los herederos de dicho delincuente.

Artículo 87.- Contra el que haya sido absuelto o declarado absolutamente libre de juicio, o haya sido condenado, o haya obtenido gracia o amnistía, no podrá haber lugar a un nuevo juicio criminal a causa del mismo hecho.

Artículo 88.- En los delitos que se persiguen por querrela de parte, se extinguirá la acción penal siempre que antes de la sentencia se haya presentado y ratificado el desistimiento, sin que el querrellado lo hubiere rechazado.

Artículo 89.- La acción penal prescribirá mediante el transcurso:

- a) De veinte años, en los delitos conminados con la muerte;
- b) De quince años, en los delitos conminados con presidio;
- c) De diez años, en los demás delitos que se persiguen de oficio; y
- d) De tres años, en los delitos que se persiguen por querrela de parte.

Artículo 90.- Siempre que con un delito vaya conexa una transgresión, ésta no prescribirá sino juntamente con aquél.

Artículo 91.- Las disposiciones contenidas en el artículo 88 y bajo el literal d) del artículo 89, no se aplicarán a aquellos delitos que, a tenor del párrafo 2 del artículo 4 y del párrafo 2 del artículo 5, se persigan excepcionalmente por querrela de parte, por haber sido cometidos fuera del territorio toscano.

Artículo 92.- Mientras la ley no ordene de otra manera, la prescripción comenzará a transcurrir:

- a) En los delitos consumados, desde el día de su consumación;
- b) En los delitos intentados, desde el día del último acto de tentativa;
- c) En los delitos continuados, desde el día del último hecho criminoso.

Artículo 93.- Cuando una causa civil prejuzgue a la causa criminal, el curso de la prescripción de la acción penal quedará suspendido hasta que la causa civil haya sido resuelta irretractablemente.

Artículo 94.- El curso de la prescripción de la acción penal cesará al ser pronunciada la condena, sea en juicio contradictorio o de contumacia, aunque la sentencia, por cualquier remedio jurídico, permanezca sin eficacia.

Artículo 95.- Contra las condenas no se dará prescripción.

17.- CÓDIGO PENAL DE GUATEMALA⁵⁹¹. (Decreto N° 17-73)(Código Penal, 1996b)

LIBRO I

TÍTULO VIII: DE LA EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL Y DE LA PENA

Artículo 101.- (Extinción de la responsabilidad penal). La responsabilidad penal se extingue:

1. Por muerte del procesado o condenado;
2. Por amnistía
3. Por perdón del ofendido, en los casos en que la ley lo permita expresamente.
4. Por prescripción;
5. Por cumplimiento de la pena.

Artículo 102.- (Extinción de la pena). La pena se extingue:

1. Por su cumplimiento,
2. Por muerte del reo;
3. Por amnistía;
4. Por indulto;
5. Por perdón del ofendido, en los casos señalados por la ley;.
6. Por prescripción.

Artículo 103.- (Extinción por muerte). La muerte de quien ha sido condenado, extingue también la pena pecuniaria impuesta pendiente de satisfacer y todas las consecuencias penales de la misma.

Artículo 104.- (Amnistía). La amnistía extingue por completo la pena y todos sus efectos.

Artículo 105.- (Indulto). El indulto sólo extingue la pena principal.

Artículo 106.- (Perdón del ofendido). El perdón del ofendido extingue la responsabilidad penal y la pena si ya se hubiere impuesto, por delitos solamente perseguibles mediante denuncia o querrela.

En los delitos cometidos contra menores o incapacitados, el tribunal podrá rechazar la eficacia del perdón otorgado por los representantes de aquellos, ordenando la continuación del proceso o el cumplimiento de la condena, a solicitud o con intervención del Ministerio Público.

Artículo 107.- (Prescripción de la responsabilidad). La responsabilidad penal prescribe:

1. A los veinticinco años, cuando correspondiere pena de muerte;
2. Por el transcurso de un período igual al máximo de duración de la pena señalada, aumentada en una tercera parte, no pudiendo exceder de dicho término de veinte años, ni ser inferior a tres;
3. A los cinco años en los delitos penados con multa;
4. A los seis meses si se tratare de faltas.

Artículo 108.- (Comienzo del término). La prescripción de la responsabilidad penal comenzará a contarse:

1. Para los delitos consumados, desde el día de su consumación;
2. Para el caso de tentativa, desde el día en que se suspendió la ejecución;
3. Para los delitos continuados, desde el día en que se ejecuto el último hecho;
4. Para los delitos permanentes, desde el día en que cesaron sus efectos;
5. Para la conspiración, la proposición, la provocación, la instigación y la inducción, cuando éstas sean punibles, desde 1 día en que se haya ejecutado el último acto.

Artículo 109.- (Interrupción). La prescripción de la acción penal se interrumpe desde que se inicie proceso contra el imputado, corriendo de nuevo el tiempo de la prescripción desde que se paralice su prosecución por cualquier circunstancia.

También se interrumpe respecto a quien cometiere otro delito.

⁵⁹¹ De 5 de Junio de 1973.

Artículo 110.- (Prescripción de la pena). Las penas impuestas por sentencia firme prescriben por el transcurso de un tiempo doble de la pena fijada sin que pueda exceder de treinta años.

Esta prescripción empezará a contarse desde la fecha en que la sentencia quede firme o desde el día del quebrantamiento de la condena.

Artículo 111.- (Interrupción). La prescripción de la pena se interrumpe, quedando sin efecto el tiempo transcurrido, por la comisión de un nuevo delito, o porque el reo se presente o fuere habido.

TÍTULO IX: DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL

Artículo 122.- (Remisión a leyes civiles). En cuanto a lo no previsto en este título, se aplicarán las disposiciones que sobre materia contienen el Código Civil y el Código Procesal Civil y Mercantil.

18. CÓDIGO PENAL DE HONDURAS⁵⁹². (Decreto N° 144-83)

TÍTULO VIII: EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL Y SUS EFECTOS

Art. 96.- La responsabilidad penal se extingue:

1. Por la muerte del reo;
2. Por el cumplimiento de la condena, la cual produce de derecho la rehabilitación del penado;
3. Por amnistía, la cual extingue la pena y por completo todos sus efectos jurídicos, salvo lo dispuesto en el Artículo 103;
4. Por indulto, el cual sólo extingue la pena principal cuando no comprende las accesorias; pero no favorece al indultado en cuanto a la reincidencia y demás efectos de las penas que las leyes determinan expresamente. El indultado no podrá habitar, sin el consentimiento del ofendido, en el domicilio en que éste viva, o, en su defecto, su cónyuge, ascendientes, descendientes y hermanos. Esta prohibición durará por todo el tiempo que, de no haber sido indultado debiera durar la condena.
5. Por el perdón expreso del ofendido o de quien tenga su representación legal en los delitos que sólo son perseguibles en virtud de querrela o denuncia del agraviado. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable a los responsables del delito de violación ni a los responsables de delitos o faltas cometidos en perjuicio de niños o niñas.

En los delitos o faltas cometidos contra personas incapaces no comprendidas en la última parte del párrafo anterior, los jueces o tribunales rechazarán la eficacia del perdón otorgado por los representantes de aquéllos si existen motivos racionales para pensar que fue otorgado atendiendo intereses pecuniarios o personales directos del respectivo representante. En tal caso, ordenarán la continuación del procedimiento con intervención del Ministerio Público o el cumplimiento de la condena.

Para rechazar el perdón a que se refiere el párrafo anterior, el juez o tribunal deberá oír al representante del incapaz.

6. Por la prescripción de la acción penal; y,
7. Por la prescripción de la pena.

No obstante, lo dispuesto en los numerales 6) y 7) del presente Artículo, son imprescriptibles la acción penal y la pena en aquellos delitos que le sea aplicable a privación de la libertad por vida o que se consigne ésta como su límite máximo.

Art. 97.- La acción penal prescribe:

- 1) Por el transcurso de un período igual al máximo de duración de la sanción señalada para el delito, aumentado en la mitad, si fuere la de reclusión. Sin embargo, el término de prescripción no será, en ningún caso, inferior a dos (2) años;
- 2) A los cinco (5) años cuando se tratare de un hecho para el cual estuviere establecida, como pena principal, la de inhabilitación.
- 3) En tres (3) años, cuando la multa se imponga como pena principal; y
- 4) A los seis (6) meses, si se tratare de faltas.

Las reglas precedentes se entienden sin perjuicio de las que establecen la Constitución de la República.

Art. 98.- La prescripción de la acción penal empezará a correr desde el día en que se cometió la infracción; y en los delitos continuados, desde el día en que se ejecutare el último hecho o se realizare la última acción.

En el caso de tentativa, la prescripción se contará desde el día en que se suspendió su ejecución. La prescripción de la acción penal en el delito de quiebra, correrá desde el día en que haya quedado firme la declaratoria de insolvencia fraudulenta o culpable.

⁵⁹² De 1983.

Art. 99.- La prescripción de la acción penal se interrumpirá desde que se inicie procedimiento contra el culpable, corriendo de nuevo el tiempo de la prescripción desde que se paralice su prosecución por cualquier circunstancia.

Art. 100.- Las penas impuestas por sentencia firme prescriben en los términos señalados en el Artículo 97.

El tiempo de esta prescripción se contará desde la fecha en que la sentencia quede firme, o desde el día del quebrantamiento de la condena, en su caso.

Art. 101.- La prescripción de la pena se interrumpirá quedando sin efecto el tiempo transcurrido, cuando el reo cometiere otro delito, sin perjuicio de que comience a correr de nuevo.

Art. 102.- El ejercicio de la acción para reclamar las responsabilidades civiles derivadas del delito no interrumpe su prescripción, la de la acción penal o de la pena.

Art. 103.- La amnistía y el indulto no extinguen el derecho a la indemnización del daño causado por el delito.

Art. 104.- Cuando el reo se presente o sea habido después de transcurrido la mitad del tiempo necesario para prescribir la acción penal o la pena, el Juez deberá tener en cuenta dicho lapso para hacer una disminución de un tercio a la mitad en la pena que corresponde aplicar o en la impuesta por la sentencia.

Esta disminución no se aplicará a las prescripciones que no excedan de un año.

TITULO IX: RESPONSABILIDAD CIVIL

Art. 105.- Todo aquél que incurra en responsabilidad penal por un delito o falta, lo es también civilmente.

Art. 106.- La exención de responsabilidad penal declarada en los numerales 2 y 3 del Artículo 23, en el numeral 2 del Artículo 24 y en el numeral 1 del Artículo 25, no comprende la de la responsabilidad civil, la cual se hará efectiva con sujeción a las reglas siguientes:

1) En los casos de inimputabilidad mencionados en el párrafo precedente, son responsables con sus bienes los enfermos y deficientes mentales o sordomudos por los daños que causaren. Si fueren insolventes, responderán subsidiariamente quienes los tengan bajo su potestad o guarda legal, a no ser que demuestren su inculpabilidad.

En ambas situaciones habrá lugar al beneficio de competencia.

2) En el caso del numeral 2 del Artículo 24, son responsables las personas en cuyo favor se haya precavido el mal en proporción al beneficio que hubieren reportado.

Los tribunales señalarán, según su prudente arbitrio, la cuota proporcional por la cual cada interesado deba responder.

3) En el caso del numeral 1 del Artículo 25 responderán los que hubieren causado el miedo o ejercido la fuerza.

Art. 115.- La responsabilidad civil por delito se extingue según los modos establecidos por el Código Civil respecto de las obligaciones de esta naturaleza.

19. CÓDIGO PENAL ITALIANO DE 1930⁵⁹³.

LIBRO I: DE LOS DELITOS EN GENERAL

TÍTULO VI: DE LA EXTINCIÓN DEL DELITO Y DE LA PENA

CAPITULO I: DE LA EXTINCIÓN DEL DELITO

Artículo 150º: MUERTE DEL REO ANTES DE LA CONDENA.

La muerte del reo, efectuada antes de la condena, extingue la infracción.

Art. 151º: Amnistía.

La Amnistía extingue la infracción, y si hubiere habido condena, hará que cese la ejecución de esta y las penas accesorias.

En concurso de varias infracciones, la amnistía se aplicará a cada una de las infracciones para las cuales fue concedida.

La extinción de la infracción por efecto de amnistía se limitará a las infracciones cometidas en tiempo anterior a la fecha del decreto, a menos que este determine una fecha distinta.

La amnistía podrá ser sometida a condiciones o a obligaciones.

No se aplicará amnistía a los reincidentes, en los apartados del artículo 99, ni a los delincuentes habituales o profesionales o por tendencia, a menos que el decreto dispusiere de otra manera.

⁵⁹³ Vigente desde el 1º de Julio de 1931. Modificado por Ley N° 251, de 05 De diciembre de 2005, publicado en el Diario Oficial N° 285 de 07 de diciembre de 2005.

Art. 152º: Remisión de la querella.

En los delitos punibles por querella de la persona injuriada, la remisión extingue la infracción.

La remisión será procesal o extraprocesal, y esta será expresa o tácita. Habrá remisión tácita cuando el querellante hubiere realizado hechos incompatibles con la voluntad de persistir en la querella.

Sólo podrá haber remisión antes de la condena, exceptuados los casos para los cuales la ley disponga de otro modo.

La remisión no podrá ser sometida a términos o condiciones. En el caso de remisión podrá hacerse renuncia del derecho a la restitución y al resarcimiento de daños.

Art. 157.- Prescripción. Tiempo necesario para prescribir. (1)

El plazo de prescripción cancela el crimen, al haber transcurrido el tiempo superior correspondiente a la pena máxima establecida por la ley impuesta, y no menos de seis años en el caso del delito, y a cuatro años si se trata de una contravención, incluso si la sanción es a una pena de multa.

Para determinar el tiempo necesario para la prescripción con respecto a la pena establecida por la ley para el delito consumado o intentado, sin tomar en cuenta la reducción de las circunstancias de atenuación y del aumento por las circunstancias agravantes, salvo que por las agravantes, por las cuales la ley establece una pena distinta a las penas de aquella ordinaria, y por aquella de efecto especial, en cuyo caso se tiene en cuenta el aumento del máximo de la pena prevista por la agravante (de la 56 a la 64 y ss.).

No se aplican las disposiciones del artículo 69 y el tiempo necesario para prescribir es determinado por el segundo párrafo.

Cuando para el delito la ley establece conjunta o alternativamente el encarcelamiento y la multa, para determinar el tiempo necesario de la prescripción se considera solo el encarcelamiento.

Cuando la ley dispone para el delito penas distintas al encarcelamiento y al pago de una indemnización, se aplica el término de tres años.

Los términos mencionados en los párrafos precedentes se duplican para los delitos contemplados en los artículos 449 y 589, segundo, tercero y cuarto párrafos (2), así como para los delitos contemplados en el artículo 51, párrafos 3- bis y 3- quater, del código de procedimiento penal.

La prescripción siempre es expresamente renunciable por el acusado.

La prescripción no extingue los delitos sancionados por ley con la pena de cadena perpetua, así como por el efecto de la aplicación de circunstancias agravantes (243, 244, 258, 261, 265, 280, 287, 295).

(1) Artículo reemplazado por art. 6, apartado 1, de la ley del 05 de diciembre de 2005, n. 251.

El texto anterior era: art. 157. Tiempo necesario para prescribir.

Prescripción caduca en su ofensiva:

1) en los 20 años, si se trata de un delito que la ley establece la pena de prisión de no menos de veinticuatro años;

2) en los quince años, si se trata de un delito que la ley establece la pena de prisión de no menos de diez años;

3) en diez años, si se trata de un delito que la ley prescribe la pena de prisión inferior a cinco años, o la pena de multa.

4) en cinco años si se trata de un delito que la ley establece una pena de prisión de menos de cinco años, o la pena de multa;

5) en tres años, en el caso de contravención de la ley estipula la pena de arresto;

6) en dos años, en el caso de contravención de la ley estipula la pena de multa.

Para determinar el tiempo necesario para prescribe con respecto a la pena máxima establecida por la ley para el delito, consumido o intentado, en vista del aumento de la pena máxima prevista circunstancias agravantes y de la reducción mínima establecida para atenuar las circunstancias.

En el caso de concurso de agravantes y atenuantes circunstancias aplican también a este efecto las disposiciones del artículo 69.

Cuando la ley estipula el delito conjuntamente o alternativamente la prisión y el pago de la indemnización, como resultado en el tiempo necesario para le prescriben con respecto únicamente a prisión.

(2) Palabras modificadas del art. 1, párrafo 1, literal. c-bis) del Decreto Ley N° 92 del 23 mayo de 2008, convertida con las enmiendas a la ley de 24 de julio de 2008, N° 125

Art. 158.- Comienzo del plazo de prescripción.

El plazo de prescripción comienza, por el delito consumado, desde el día de la consumación; para la tentativa, desde el día en que ha cesado la actividad del culpable; para el delito permanente desde el día en el cual ha terminado la permanencia. (2)

Cuando la ley hace depender la punibilidad del delito al verificarse una condición, el plazo de prescripción comenzará el día en que se verifica la condición. Sin embargo, en delitos punibles por querrela a instancia o petición, el plazo de prescripción comenzará desde el día de comisión del delito.

(1) las palabras: o continuado fueron suprimidos por el art. 6, párrafo 2, de Ley del 05 de diciembre de 2005, N° 251

(2) las palabras: o la continuación fueron suprimidos por el art. 6, párrafo 2, de la Ley del 05 de diciembre de 2005, N° 251.

Art. 159.- Suspensión de la prescripción.

El curso de la prescripción se suspende en los casos en los cuales la suspensión del procedimiento o del proceso penal o de los términos de custodia cautelar, es impuesta por una disposición especial de ley, así como en los casos de (art. 313; Código de Procedimiento Penal arts. 3, 71, 304, 343, 479, 509):

1) autorización para proceder (art. 313);

2) remisión del asunto a otro juzgado (o cuestión diferida por otro juicio, Código de Procedimiento Penal arts. 3, 479);

3) suspensión del procedimiento o del proceso penal por razones de impedimento de las partes y sus defensores o a petición del imputado o su abogado. En caso de suspensión del juicio por obstrucción de las partes o de los defensores, la audiencia no podrá retrasarse más allá el sexagésimo día después de la terminación previsible del impedimento, debiendo considerarse en caso contrario el tiempo del impedimento incrementado en 60 días. Se exceptúan las facultades establecidas en el artículo 71, párrafos 1 y 5 del Código de Procedimiento Penal.

En el caso de la autorización para proceder, la suspensión de la prescripción se produce cuando el fiscal presenta la solicitud, y el curso de la prescripción se reanuda desde el día en que la autoridad competente reciba la solicitud (Código del Procedimiento Penal arts. 343, 344).

La prescripción se reanuda desde el día en que cesó la causa de la suspensión.

Art.160º: Interrupción de la prescripción.

El curso de la prescripción se interrumpe por la sentencia de condena o por decreto de condena (Código de Procedimiento Penal arts. 460, 533).

Interrumpe también la prescripción la ordenanza que aplica las medidas cautelares personales y la de convalidación de la captura o del arresto, el interrogatorio rendido ante el ministerio público o el juez, la invitación para presentarse al ministerio público para prestar el interrogatorio, la providencia del juez de fijación de la audiencia en la cámara del consejo para la decisión sobre la solicitud de archivo, la solicitud de reenvío a juicio, el decreto de fijación de la audiencia preliminar, la orden que dispone el juicio abreviado, el decreto de fijación de la audiencia para la decisión sobre la solicitud de aplicación de la pena, la presentación o la citación para el juicio urgente, el decreto que dispone el juicio inmediato, el decreto que dispone el juicio, y el decreto de citación para el juicio (Código de Procedimiento Penal arts. 292, 294, 375, 388, 391, 409, 416-418, 429, 447, 450, 456, 556). (1)

La prescripción interrumpida comienza a correr desde el día de la interrupción. Si son varios los actos procesales que interrumpen, la prescripción comienza desde el último de ellos; pero en ningún caso, los términos establecidas en el artículo 157 pueden extenderse más allá del plazo prescrito en el artículo 161, segundo párrafo, con excepción de los delitos contemplados en el artículo 51, párrafos 3-bis y 3-quater del Código de Procedimiento Penal.

(1) período así reemplazado por art. 6, párrafo 4, de la ley del 05 de diciembre de 2005, N° 251

Art. 161.- Efectos de la suspensión e interrupción.

La suspensión y la interrupción de la prescripción tienen efecto para todos aquellos que han cometido el delito (110 y 182).

A menos que esto se proceda por los delitos contemplados en el artículo 51, 3-bis, 3-quater del Código de Procedimiento Penal, en ningún caso, la interrupción de la prescripción puede llevar a un aumento de más de un cuarto de tiempo necesario para prescribir, de la mitad en los casos contemplados en el artículo 99,

segundo párrafo, de dos tercios en los casos contemplados en el artículo 99, cuarto párrafo, y del doble en los casos contemplados por los artículos 102, 103 y 105 (170; Código de Procedimiento Penal art. 12 ss.).

Artículo 162º: Oblación en las contravenciones.

En las contravenciones para las cuales establezca la ley únicamente pena de multa, el contraventor será admitido a pagar, antes de la apertura del debate, una suma correspondiente a la tercera parte del máximo de la pena establecida por la ley para la contravención cometida, además de los gastos del proceso.

Ese pago extingue la infracción.

Art. 162-bis.- Oblation en automovilismo delitos castigados con penas alternativas.

En delitos de automovilismo para que la ley estipule la pena alternativa de arresto o multa, el infractor podrá autorizarse a pagar, previo a la apertura de la audiencia, ante el decreto de condena, un importe equivalente a la mitad la pena máxima establecida por la ley por violación cometido, así como los costes de las actuaciones. Con la cuestión de ofrecer el delincuente debe depositar la cantidad correspondiente a la mitad la multa máxima.

No está permitida la oblation cuando se utiliza en los casos previstos por el párrafo tercero del artículo 99, artículo 104 o 105, n cuando hay consecuencias peligrosas o nocivas del crimen por el delincuente.

En cualquier otro caso, el Tribunal podrá por orden de destituir la cuestión de la oferta, teniendo en cuenta la gravedad del incidente.

La pregunta podría estar cubierta hasta el comienzo de la discusión final de la audiencia en primera instancia.

El pago de las sumas mencionadas en la primera parte de este artículo expirará en ofensiva.

Art. 163.- Suspensión condicional de la pena.

Al pronunciarse la sentencia de condena a prisión o arresto por un período no superior a dos años o una multa que, por sí sola o conjuntamente a la prisión informo en virtud del artículo 135, sea equivalente a una privación de libertad por un período que no debe exceder, en total, a dos años, el juez podrá ordenar que la ejecución de la pena queda suspendida por un período de cinco años si la condena por homicidio y dos años si la condena por violación. En el caso de una condena o una sanción monetaria conjunta a pena de prisión no superior a dos años, cuando valía general, informo en virtud del artículo 135, exceder de dos años, el juez podrá ordenar que se suspende la ejecución de la pena de prisión.(1)

Si el delito fue cometido por un menor de 18 años, la suspensión podrá pedirse al infligir una pena de privación de libertad personal no superior a tres años o una multa que, por sí sola o conjuntamente a la prisión informo en virtud del artículo 135, equivale a una privación de libertad por un período de no más generales, tres años. En el caso de una condena o una sanción monetaria conjunta a prisión no superior a tres años, cuando el valor general, informo en virtud del artículo 135, supera los tres años, el juez podrá ordenar que se suspenda la ejecución de la pena de prisión. (2)

Si el delito fue cometido por una persona de 18 años superior a et pero menor de 21 años o que ha completado en la década de 1970, la suspensión podrá pedirse al infligir una pena de privación de libertad personal de no más de dos años y seis meses o una multa que, por sí sola o conjuntamente a la prisión y informado de conformidad con el artículo 135, es equivalente a una privación de libertad por un período no debe exceder, en total, a dos años y seis meses. En el caso de una condena o una sanción monetaria conjunta a pena de prisión no superior a dos años y seis meses, cuando valía general, informo en virtud del artículo 135, superar los dos años y seis meses, el Tribunal podrá ordenar que se suspende la ejecución de la pena de prisión.(3)

Si la pena no es más de un año y ha sido totalmente reparan el daño, antes de se ha pronunciado la sentencia de primera instancia, a través de una indemnización y, si posible, reembolsos, así como los culpables, en el mismo período y por el caso previsto en el párrafo cuarto del artículo 56, utilizaron eficazmente y espontáneamente a elidire o atenuar las consecuencias nocivas o peligrosas del delito que eliminó el Tribunal podrá ordenar que la ejecución de la sentencia, en el caso de ragguagliandola pena monetaria con arreglo al artículo 135, permanecerá suspendida durante un período de un año.(4)

(1) la última oración de este párrafo fue añadida por el art. 1, coma 1, lett. una), L. 11 de junio de 2004, N° 145

(2) la última oración de este párrafo fue añadida por el art. 1, coma 1, lett. (b)), L. 11 de junio de 2004, N° 145

(3) la última oración de este párrafo fue añadida por el art. 1, coma 1, lett. (c)), L. 11 de junio de 2004, N° 145

(4) Este párrafo fue añadido por el art. 1, coma 1, lett. (d)), L. 11 de junio de 2004, N° 145

Art. 164.- Medida en que permite la suspensión condicional de la pena.

La suspensión condicional de la pena, sólo si, teniendo en cuenta las circunstancias establecidas en el artículo 133, el Tribunal asume que el culpable será aserr de cometer más crímenes.

No podrá autorizarse la suspensión condicional de la pena:

- 1) quien tiene una condena anterior a prisión por un crimen, incluso si toman rehabilitación n delincuente habitual o delincuente o profesional (102 s., 105, 178 s.);
- 2) impuesto debe agregarse una medida de seguridad debido a que el reo personal persona que la ley presume ser socialmente peligroso.

La suspensión condicional de la pena hace inaplicable las medidas de seguridad, salvo que se decomiso.

La suspensión condicional de la pena no puede darse más de una vez. Sin embargo, el Tribunal en la imposición de una sentencia, puede tener suspensión condicional si la pena a imponerse, acumularse con que impuestas por condena anterior por un crimen, no exceder los límites establecidos en el artículo 163.

Art. 165.- Obligaciones de los condenados.

La suspensión condicional de la pena puede estar sujetos a la obligación de restitución, el pago de la suma pagada por concepto de indemnización por daños o asignado provisionalmente la cantidad y la publicación de la sentencia de reparación de daños; puede también ser empleado, salvo que la ley disponga lo contrario, la eliminación de consecuencias peligrosas o nocivas del delito o, si el condenado no se opone a la prestación de actividades no remuneradas en favor de collettivit por un período no superior a la duración de la condena condicional (1), de conformidad con las disposiciones establecidas por el Tribunal en su sentencia de condena.

La suspensión condicional de la pena cuando se concede a alguien que ya ha utilizado, debe supeditarse en el cumplimiento de una de las obligaciones previstas en el párrafo anterior. (2)

El segundo párrafo no se aplicará si se ha concedido la suspensión condicional de la pena en el sentido del párrafo cuarto del artículo 163. (3)

El Tribunal en su sentencia fijará el plazo dentro del cual las obligaciones deben cumplirse.

(1) Tiempo cambió de arte. 2, párrafo 1, lett. una), l 11 de junio de 2004, N° 145..

(2) las palabras: a menos que sea imposible que se han eliminado del artículo. 2, párrafo 1, lett. b) de 11 de junio de 2004, Ley N° 145.

(3) Párrafo insertado por el art. 2, párrafo 1, lett. c), l 11 de junio de 2004, N° 145..

Art. 166.- Efectos de la suspensión.

La suspensión condicional de la pena se extiende a las penas accesorias.

Sentencia de pena no condicionalmente suspenderse en cualquier caso por s sola, por eso la aplicación de medidas preventivas, ningún obstáculo para el acceso a puestos de trabajo en público o privado, excepto en los casos específicamente previstos por la ley, para negar concesiones, licencias o permisos necesarios para llevar a cabo actividades de trabajo.

Art. 167.- Extinción del delito.

Si, dentro del plazo prescrito, la persona condenada no cometió un delito o una infracción de la misma naturaleza, y a cumplir las obligaciones impuestas sobre él, el extinto.

En ese caso no colocar la ejecución de sentencias.

Art. 168.- Revocación de la suspensión.

Guardar el diseño del último párrafo del art. 164, suspensión condicional de la sentencia revocada por la ley si, dentro del plazo prescrito, la persona condenada:

1. comete un delito o una infracción de la misma naturaleza, que se impone una pena de prisión, o no cumpla con sus obligaciones;
2. lleva otra condena por un delito cometido antes de esa pena en el acumulado previamente suspendido, supera los límites establecidos en el artículo 163.

Si la persona condenada tiene otra condena por un delito cometido antes de esa pena en el acumulado previamente suspendido no supere los límites establecidos por el art. 163, la Corte, teniendo en cuenta la naturaleza y gravedad del delito, podrá revocar la suspensión condicional de la orden de sentencia.

La suspensión condicional de la pena también levantó cuando concedió en violación del artículo 164, cuarto párrafo, de las causas que obstaculizan. La retirada ordenada aunque la suspensión fue concedida con arreglo al apartado 3 del artículo 444 del código de procedimiento penal. (1)

(1) párrafo añadido por el art. 1 de la ley de 26 de marzo de 2001, N° 128

Art. 169°: Perdón judicial para personas menores de dieciocho años.

Si, para una infracción cometida para persona menor de dieciocho años, la ley estableciere una pena restrictiva de la libertad personal, no superior en su máximo a dos años, o una pena pecuniaria no superior a su máximo a diez mil liras, aunque estuviere unida a dicha pena, el juez podrá abstenerse de pronunciar el llamamiento a juicio, cuando, tenidas en cuenta las circunstancias indicadas en el artículo 133, presumiere que el culpable se abstendrá de cometer infracciones posteriores, cuando se procediere al juicio, el juez podrá, en la sentencia, y por los mismos motivos abstenerse de pronunciar condena.

No se aplicarán las disposiciones precedentes en los casos previstos en el número 1 del segundo apartado del artículo 164.

El perdón judicial no podrá concederse más de una vez.

Art.170º: Extinción de una infracción que se presuponga elemento constitutivo o circunstancia agravante de otra infracción.

Cuando una infracción fuere presupuesto de otra infracción, la causa que la extingue no se extenderá a la otra infracción.

La causa extintiva de una infracción que fuere elemento constitutivo o circunstancia agravante de una infracción compleja, no se extenderá a esta.

La extinción de alguna entre varias infracciones conexas, no excluirá, para las demás, el agravamiento de pena que de la conexión se derive.

CAPÍTULO II: DE LA EXTINCIÓN DE LA PENA

Art. 171º: Muerte del reo después de la condena.

La pena se extinguirá por la muerte del reo efectuada después de la condena.

Art. 172º: Extinción de las penas de reclusión y de la multa para un transcurso del tiempo.

La pena de reclusión se extingue con el transcurso de un tiempo igual al doble de la pena infligida y, en cada caso, no superior a treinta y no inferior a diez años. La pena de multa se extingue en el transcurso de diez años⁵⁹⁴.

Cuando conjuntamente a la pena de la reclusión, es infligida la pena de multa, para la extinción de una y otra pena, se ha mirado solamente el curso del tiempo establecido para la reclusión.

El término transcurre desde el día en que la condena ha devenido irrevocable (c.p.p. 648,650) o del día en que condenado se ha sustraído voluntariamente a la ejecución ya iniciada la pena (c.p.p. 296).

Si la ejecución de la pena está subordinada a la decadencia de un término o a la verificación de una condición, el tiempo necesario para la extinción de la pena transcurre del día en que al término ha decaído o la condición se ha verificado.

En caso de concurso de delitos (71) se tiene en vista, para la extinción de la pena a cada uno de ellos, también si las penas han sido infligidas con la misma sentencia.

La extinción de las penas no tiene lugar si se trata de reincidentes, en los casos previstos ab initio del artículo 99, o de delincuentes habituales (102-104), profesionales (105) o por tendencia (108), o si el condenado, durante el tiempo necesario para la extinción de la pena, reporta una condena a reclusión por un delito de la misma índole.

Art. 173: Extinción de las penas del arresto y de la enmienda por el transcurso del tiempo.

Las penas del arresto y de la enmienda se extinguen en el término de cinco años. Tales términos son doblados si se trata de reincidentes en los casos previstos ab initio del art. 99, o de delincuentes habituales (102-104) profesionales (105) o por tendencia (108);

Si conjuntamente a la pena del arresto, es infligida la pena de la enmienda, para la extinción de una y de otra pena se tiene en vista solamente el transcurso del término establecido para el arresto.

Para el transcurso del término se aplican las disposiciones del tercio, cuarto y quinto «ab initio» del artículo precedente.

⁵⁹⁴ Para una derogación (con eficacia transitoria) y el art. 111 n 689/1981, el cual impone que “...en derogatoria a cuanto lo dispuesto en el art. 172 del Código Penal, la pena de multa infligida también conjuntamente a aquella de la reclusión, para delitos cometidos antes de la entrada en vigor de la presente ley, si todavía la sentencia de condena ha devenido revocable sucesivamente a la fecha de entrada en vigor de la presente ley, la pena de la multa se extingue con el curso de diez años desde del paso de la sentencia en juzgado”.

Art. 174: Indulto y gracia.

El indulto o la gracia condonarán, en todo o en parte, la pena infligida, o la conmutarán en otra clase de pena determinada por la ley. Pero no extinguirán las penas accesorias, a menos que el decreto disponga de otra manera, ni tampoco los efectos penales de una condena.

En concurso de varias infracciones, el indulto se aplicará una sola vez, después de acumuladas las penas, según las normas relativas al concurso de infracciones.

Para el indulto se observarán las disposiciones contenidas en los tres últimos apartados del artículo 151.

CAPÍTULO III: DISPOSICIONES COMUNES.**Art. 182º: Efectos de las causas de extinción de la infracción o de la pena.**

A menos que la ley lo dispusiere de otro modo, la extinción de la infracción o de la pena únicamente tendrá efecto para aquellos a quienes la causa de extinción se refiera.

Art. 183º: Concurso de causas extintivas.

Las causas extintivas de la infracción o de la pena obrarán en el momento en que intervinieren.

En concurso de una causa extintiva de la pena, prevalecerá la causa extintiva de la infracción, aunque hubiere intervenido posteriormente.

Cuando intervinieren en tiempos distintos varias causas extintivas de la infracción o de la pena, y las subsiguientes harán cesar los efectos que todavía no se hubieren extinguido como consecuencia de la causa antecedente.

Si intervinieren simultáneamente diversas causas, la causa más favorable producirá la extinción de la infracción o de la pena; pero también en este caso, para los efectos que no hubieren sido extinguidos como consecuencia de la causa más favorable, se aplicará el apartado precedente.

Art. 184º: Extinción de las penas de muerte y de prisión de por vida o de las penas temporales en caso de concurso de infracciones.

Cuando, por causa de amnistía, indulto o gracia se extinguieren las penas de muerte⁵⁹⁵ o de prisión de por vida, la pena de detención temporal, infligida para la infracción concurrente, será íntegramente ejecutada. Sin embargo, si el condenado ya hubiere pagado íntegro el aislamiento diurno, aplicado el apartado segundo del artículo 72, la pena por la infracción concurrente se reducirá a la mitad; y quedará extinguida, si el condenado hubiere sido detenido por más de treinta años. Si, en virtud de alguna de dichas causas extintivas, no se deba descontar la pena de detención temporal infligida, por la infracción concurrente, al condenado a prisión de por vida, no se aplicará el aislamiento diurno establecido en el apartado segundo del artículo 72. Si la pena de detención solo debe ser descontada en parte, el período de aislamiento diurno, aplicado conforme al mencionado artículo, podrá ser reducido hasta tres meses.

TÍTULO VII: DE LAS SANCIONES CIVILES.**Art. 198º: Efectos de la extinción de la infracción o de la pena sobre las obligaciones civiles.**

La extinción de la infracción o de la pena no supone la extinción de las obligaciones civiles provenientes de la infracción, a menos que se trate de las obligaciones indicadas en los dos artículos precedentes.

TÍTULO VIII: DE LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS DE SEGURIDAD**CAPÍTULO I: DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PERSONALES.****Sección Primera:****Art. 210º: Efectos de la extinción de la infracción o de la pena.**

La extinción de la infracción impedirá la aplicación de medidas de seguridad y hará cesar la ejecución de ellas.

La extinción de la pena impedirá la aplicación de medidas de seguridad, exceptuadas aquellas que, por disposición legal, pueden ser ordenadas en todo tiempo; pero no impedirá la ejecución de las medidas de seguridad que hubieren sido ya ordenadas por el juez como medidas accesorias de alguna condena a pena de reclusión por más de diez años. Sin embargo, se reemplazarán la colonia agrícola o la casa de trabajo por la

⁵⁹⁵ La pena de muerte para delitos en el Código Penal fue derogada por la D.L. N° 224/1944.

libertad vigilada. Cuando, por efecto de indulto o de gracia, no deba ejecutarse la pena de muerte⁵⁹⁶, o, en todo o en parte, la de prisión de por vida, el condenado será sometido a libertad vigilada por un tiempo no inferior a tres años.

19.1.- Código Penal italiano de 1889 (Derogado).

LIBRO PRIMERO: DE LAS INFRACCIONES (REATI) Y DE LAS PENAS EN GENERAL

TÍTULO IX: EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL Y DE LAS CONDENAS PENALES

Art. 91°.- La prescripción, salvo en los casos para los que la ley disponga otra cosa, extingue la acción penal:

1° A los veinte años, si hubiera sido aplicable al inculcado la pena de trabajos forzados

2° A los quince años, si hubiera sido aplicable la pena de reclusión por tiempo que no baje de veinte años;

3° A los diez años, si hubiera sido aplicable la pena de reclusión por más de cinco hasta veinte años, ó la de prisión por más de cinco ó la de inhabilitación perpetua para los cargos públicos;

4° A los cinco años, si hubiera sido aplicable la pena de reclusión ó prisión por tiempo que no exceda de cinco años, ó la pena de confinamiento, ó la de inhabilitación temporal, para los cargos públicos, o la de multa;

5° A los dos años, si hubiera sido aplicable la pena de arresto por más de un mes o la de multa de más de 300 liras;

6° A los seis meses, si hubiera sido aplicable la pena de arresto ó de multa, en menor grado que el indicado en el número anterior, ó la suspensión en el ejercicio de una profesión o arte.

Art. 92°.- Comenzará la prescripción para las infracciones consumadas, desde el día de la consumación; para las infracciones intentadas ó fracasadas, desde el día en que se realizó el último acto de la ejecución; para las infracciones continuadas ó permanentes, desde el día en que cesó la continuación ó permanencia del hecho.

Si no pudiera promoverse ó proseguirse la acción penal sino después de autorización especial, ó después de resuelta una cuestión diferida á otro juicio, quedará en suspenso la prescripción, y no volverá a correr hasta el día en que se dé la autorización ó se defina la cuestión.

Art. 93°.- Se interrumpirá el curso de la prescripción de la acción penal, por el pronunciamiento de la sentencia de condena en juicio contradictorio ó en rebeldía.

Interrumpirán también la prescripción el mandato de captura, aún cuando haya quedado sin efecto por libertad del inculcado, y por cualquiera providencia del Juez dirigida contra éste y notificada legalmente al mismo, por el hecho que se le imputa; pero el efecto del mandato ó de la providencia, no puede prolongar la duración de la acción penal, por un tiempo que exceda de la mitad de los plazos respectivamente establecidos en el art. 91.

Si se establece la ley un término de prescripción más breve que el de un año, quedará ésta interrumpida por cualquier acto de procedimiento; pero si en el término de un año desde el día en que comenzó á correr la prescripción, según el art. 92 no se dictare sentencia condenatoria, se tendrá por prescrita la acción penal.

La prescripción interrumpida comenzará á correr nuevamente desde el día de la interrupción.

La interrupción de la prescripción surte efecto para todos los que han concurrido á la infracción aun cuando los actos que interrompan la prescripción no se refieran más que á uno.

Art. 94°.- Cuando un condenado sea sometido por cualquier motivo jurídico á nuevo juicio, se computará la prescripción según la pena que debería imponerse con la nueva sentencia, cuando resulte inferior a la impuesta en la anterior.

Art. 95°.- Prescribe la condena:

1° A los treinta años, si se impuso la reclusión por treinta años;

2° A los veinte años, si se impuso la reclusión ó prisión por más de cinco años;

3° A los diez años, si se impuso la pena de reclusión ó prisión, que no exceda de cinco años, ó la de confinamiento, ó la de inhabilitación temporal para cargos públicos ó la de multa;

4° A los cuatro años, si se impuso la pena de arresto ó suspensión en el ejercicio de una profesión ó arte por más de un mes ó la de multa de más de trescientas liras;

5° A los dieciocho meses, si se impuso la pena de arresto ó suspensión en el ejercicio de una profesión ó arte, ó la de indemnización (*ammenda*) en grado inferior á la indicada en el número anterior.

La condena á varias clases de penas prescribirá en el plazo establecido para la pena más grave.

La sumisión á la vigilancia especial de la autoridad, no surtirá efecto cuando la condena haya prescrito.

⁵⁹⁶ La pena de muerte para delitos en el Código Penal fue derogada por la D.L. N° 224/1944.

Art. 96°.- Comenzará á correr la prescripción de la condena, desde el día en que la sentencia se haga firme, ó desde aquel en que de cualquier modo se interrumpa la ejecución, ya comenzada, de la condena.

Cualquier acto de la autoridad competente para la ejecución de la sentencia notificado legalmente al penado, interrumpe la prescripción; en las penas restrictivas de la libertad la interrumpe también el arresto del condenado á que se haya procedido para la ejecución de dicha sentencia.

Se interrumpe también la prescripción de la condena, si durante su curso cometiere el condenado una infracción de la misma índole.

Art. 97°.- Cuando la inhabilitación temporal para los cargos públicos, ú otra incapacidad temporal, ó la suspensión en el ejercicio de una profesión ó arte sea accesoria de otra pena ó efecto de una condena, la prescripción respecto de la inhabilitación, de la incapacidad ó de la suspensión antedichas no se efectúa sino transcurrido un tiempo igual al duplo de la respectiva duración, el cual comenzará á correr desde el día en que la otra pena esté cumplida ó haya prescrito la condena á dicha pena ó extinguiéndose de otro cualquier modo.

Art. 98°.- El tiempo establecido para la prescripción de la acción penal y de las condenas se computará con arreglo al art. 30.

Art. 99°.- La prescripción de la acción penal y de la condena se aplicará de oficio, pero el inculpado o condenado puede renunciar á ella.

20.- CÓDIGO PENAL JAPONÉS⁵⁹⁷ (Ley Nro. 45)(Vílchez, 1999)

LIBRO I: DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO VI: PRESCRIPCIÓN Y EXTENSIÓN DE LA PENA

Artículo 31.- Prescripción de la pena.- La persona que ha sido sentenciada al cumplimiento de una pena, puede eximirse de su ejecución por prescripción.

Artículo 32.- Periodo de la pena.- La prescripción se cumplirá sin la ejecución de la sentencia en los siguientes casos y siempre y cuando la sentencia haya quedado consentida y ejecutoriada.

1.- Treinta años para la pena de muerte.

2.- Veinte años para la pena de cadena perpetua con trabajo forzado o sin trabajo forzado.

3.- Quince años para la pena de encarcelamiento con o sin trabajo forzado.

CAPÍTULO VI: PRESCRIPCIÓN Y EXTENSIÓN DE LA PENA

Artículo 52.- Tratamiento de los casos de amnistía a unos delitos.- Cuando a una persona a la que se le dicto sentencia de acuerdo con los delitos acumulativos se le ha dado amnistía para uno de los delitos, se deberá imponer pena nuevamente por los otros delitos.

21.- CÓDIGO PENAL DE MÉXICO PARA EL D.F. - (Législación Penal D.F. y Federal, 2005)

TÍTULO QUINTO: EXTINCIÓN DE LA PRETENSIÓN PUNITIVA Y DE LA POTESTAD DE EJECUTAR LAS PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

CAPÍTULO I: REGLAS GENERALES

Artículo 94.- (Causas de extinción). La pretensión punitiva y la potestad para ejecutar las penas y medidas de seguridad, se extinguen por:

I. Cumplimiento de la pena o medida de seguridad;

II. Muerte del inculpado o sentenciado;

III. Reconocimiento de la inocencia del sentenciado;

IV. Perdón del ofendido en los delitos de querrela o por cualquier otro acto equivalente;

V. Rehabilitación;

VI. Conclusión del tratamiento de inimputables;

VII. Indulto;

VIII. Amnistía;

IX. Prescripción;

X. Supresión del tipo; y

XI. Existencia de una sentencia anterior dictada en proceso seguido por los mismo (sic) hechos.

Artículo 95.- (Procedencia de la extinción). La resolución sobre la extinción punitiva se dictará de oficio o a solicitud de parte.

⁵⁹⁷ De 24 de abril de 1907.

Artículo 96.- (Alcances de la extinción). La extinción que se produzca en los términos del artículo 94 no abarca el decomiso de instrumentos, objetos, y productos del delito, ni afecta la reparación de daños y perjuicios, salvo disposición legal expresa o cuando la potestad para ejecutar dicha sanción pecuniaria se extinga por alguna causa.

CAPÍTULO II: CUMPLIMIENTO DE LA PENA O MEDIDA DE SEGURIDAD

Artículo 97. (Efectos del cumplimiento). La potestad para ejecutar la pena o la medida de seguridad impuesta, se extingue por cumplimiento de las mismas o de las penas por las que se hubiese sustituido o conmutado. Asimismo, la sanción que se hubiese suspendido se extinguirá por el cumplimiento de los requisitos establecidos por el otorgamiento de la suspensión, en los términos y dentro de los plazos legalmente aplicables.

CAPÍTULO III: MUERTE DEL INculpADO O SENTENCIADO

Artículo 98. (Extinción por muerte). La muerte del inculpado extingue la pretensión punitiva; la del sentenciado, las penas o las medidas de seguridad impuestas, a excepción del decomiso y la reparación del daño.

CAPÍTULO IV: RECONOCIMIENTO DE INOCENCIA

Artículo 99. (Pérdida del efecto de la sentencia por reconocimiento de la inocencia del sentenciado). Cualquiera que sea la pena o la medida de seguridad impuesta en sentencia que cause ejecutoria, procederá la anulación de ésta, cuando se pruebe que el sentenciado es inocente del delito por el que se le juzgó. El reconocimiento de inocencia produce la extinción de las penas o medidas de seguridad impuestas y de todos sus efectos. El reconocimiento de inocencia del sentenciado extingue la obligación de reparar el daño.

CAPÍTULO V: EL PERDÓN QUE OTORGA EL OFENDIDO EN LOS DELITOS DE QUERRELLA

Artículo 100. (Extinción por perdón del ofendido). El perdón del ofendido o del legitimado para otorgarlo, extingue la pretensión punitiva respecto de los delitos que se persiguen por querrella, siempre que se conceda ante el Ministerio Público si éste no ha ejercido la acción penal, o ante el órgano jurisdiccional antes de que cause ejecutoria la sentencia. En caso de que la sentencia haya causado ejecutoria, el ofendido podrá acudir ante la autoridad judicial a otorgar el perdón, esta deberá proceder de inmediato a decretar la extinción de la potestad de ejecutar las penas y medidas de seguridad.

Una vez otorgado el perdón, éste no podrá revocarse.

Lo dispuesto en el párrafo anterior es igualmente aplicable a los delitos que solo pueden ser perseguidos por declaratoria de perjuicio o por un acto equivalente a la querrella. Para la extinción de la pretensión punitiva es suficiente la manifestación de quien está autorizado para ello, de que el interés afectado ha sido satisfecho.

El perdón solo beneficia al inculpado en cuyo favor se otorga. Cuando sean varios los ofendidos y cada uno pueda ejercer separadamente la facultad de perdonar al responsable del delito y al encubridor, el perdón solo surtirá efectos por lo que hace a quien se lo otorga.

CAPÍTULO VI: REHABILITACIÓN

Artículo 101. (Objeto de la rehabilitación). La rehabilitación tiene por objeto reintegrar al sentenciado en el goce de los derechos, funciones o empleo de cuyo ejercicio se le hubiere suspendido o inhabilitado en virtud de sentencia firme.

CAPÍTULO VII: CONCLUSIÓN DEL TRATAMIENTO DE INIMPUTABLES

Artículo 102. (Extinción de las medidas de tratamiento de inimputables). La potestad para la ejecución de las medidas de tratamiento a inimputables, se considerará extinguida si se acredita que el sujeto ya no requiere tratamiento. Si el inimputable sujeto a una medida de seguridad se encontrare prófugo y posteriormente fuere detenido, la potestad para la ejecución de dicha medida de seguridad se considerará extinguida, si se acredita que las condiciones personales del sujeto que dieron origen a su imposición, ya han cesado.

CAPÍTULO VIII: INDULTO

Artículo 103. (Efectos y procedencia del indulto). El indulto extingue la potestad de ejecutar las penas y las medidas de seguridad impuestas en sentencia ejecutoria, salvo el decomiso de instrumentos, objetos y productos relacionados con el delito, así como la preparación del daño.

Es facultad discrecional del Titular del Ejecutivo conceder el indulto.

CAPÍTULO IX: AMNISTÍA

Artículo 104. (Extinción por amnistía). La amnistía extingue la pretensión punitiva o la potestad de ejecutar las penas y medidas de seguridad impuestas, en los términos de la ley que se dictare concediéndola.

CAPÍTULO X: PRESCRIPCIÓN

Artículo 105. (Efectos y características de la prescripción). La prescripción es personal y extingue la pretensión punitiva y la potestad de ejecutar las penas y las medidas de seguridad y para ello bastará el transcurso del tiempo señalado por la ley.

Artículo 106. (La resolución en torno a la prescripción se dictará de oficio o a petición de parte). La resolución en torno de la prescripción se dictará de oficio o a petición de parte.

Artículo 107. (Duplicación de los plazos para la prescripción). Los plazos para que opere la prescripción se duplicarán respecto de quienes de encuentren fuera del territorio del Distrito Federal, si por esta circunstancia no es posible concluir la averiguación previa, el proceso o la ejecución de la sentencia.

Artículo 108. (Plazos para la prescripción de la pretensión punitiva). Los plazos para la prescripción de la pretensión punitiva serán continuos; en ellos se considerará el delito con sus modalidades y se contarán a partir de:

- I. El momento en que se consumó el delito, si es instantáneo;
- II. El momento en que cesó la consumación, si el delito es permanente;
- III. El día en que se realizó la última conducta, si el delito es continuado;
- IV. El momento en que se realizó el último acto de ejecución o se omitió la conducta debida, si se trata de tentativa; y
- V. El día en que el ministerio Público de la adscripción haya recibido el oficio correspondiente, en los casos en que se hubiere librado orden de reaprehensión o presentación, respecto del procesado que se haya sustraído de la acción de la justicia.

Artículo 109. (Plazos para la prescripción de la potestad para ejecutar las penas y medidas de seguridad). Los plazos para la prescripción de la potestad para ejecutar las penas y las medidas de seguridad, serán continuos y correrán desde el día siguiente a aquél en que el sentenciado se sustraiga de la acción de la justicia, si las penas o las medidas de seguridad fueren privadas o restrictivas de la libertad. En caso contrario, desde la fecha en que cause ejecutoria la sentencia.

Artículo 110. (Prescripción de la potestad punitiva en los casos de delito de querrela). Salvo disposición en contrario, la pretensión punitiva que nazca de un delito que solo puede perseguirse por querrela del ofendido o algún otro acto equivalente, prescribirá en un año, contado desde el día en que quienes puedan formular la querrela o el acto equivalente tengan conocimiento del delito y del delincuente, y en tres años fuera de esta circunstancia.

Una vez cumplido el requisito de procedibilidad dentro de un plazo antes mencionado, la prescripción seguirá corriendo según las reglas para los delitos perseguibles de oficio.

Artículo 111. (Prescripción de la pretensión punitiva según el tipo de pena). La pretensión punitiva respecto de los delitos que se persigan de oficio prescribirá:

- I. En un plazo igual al término medio aritmético de una pena privada de la libertad, incluidas las modalidades del delito cometido, pero en ningún caso será menor de tres años.
Esta regla se aplicará cuando la pena privativa de la libertad esté señalada en forma conjunta o alterna con otra diversa.
- II. En un año, si el delito se sanciona con pena privativa de la libertad.

Artículo 112. (Prescripción de la pretensión punitiva en caso de concurso de delitos). En los casos de concurso ideal de delitos, la pretensión punitiva prescribirá conforme a las reglas para el delito que merezca la pena mayor.

En los casos de concurso real de delitos, los plazos para la prescripción punitiva empezarán a correr simultáneamente y prescribirán separadamente para cada uno de los delitos.

Artículo 113. (Necesidad de resolución o declaración previa). Cuando para ejercitar o continuar la pretensión punitiva sea necesaria una resolución previa de autoridad jurisdiccional, la prescripción comenzará a correr desde que se dicte la sentencia irrevocable.

Si para deducir la pretensión punitiva la ley exigiere previa declaración o resolución de alguna autoridad, las gestiones que con ese fin se practiquen dentro de los términos señalados en el artículo 111 de este Código, interrumpirán las prescripciones.

Artículo 114. (Interrupción de la prescripción de la pretensión punitiva). La prescripción de la pretensión punitiva se interrumpirá por las actuaciones que se practiquen en averiguación del delito y de los delincuentes, aunque por ignorarse quiénes sean éstos, no se practiquen las diligencias contra persona determinada.

La prescripción de la pretensión punitiva se interrumpirá también por el requerimiento de auxilio en la investigación del delito o del delincuente, por las diligencias que se practiquen para obtener la extradición internacional, y por el requerimiento de entrega del inculcado que formalmente haga el Ministerio Público al de otra entidad federativa, donde aquél se refugie, se localice o se encuentre detenido por el mismo delito o por otro. En primer caso también se interrumpirá con las actuaciones que practique la autoridad requerida y en el segundo subsistirá la interrupción, hasta en tanto esta niegue la entrega o desaparezca la situación legal del detenido que de motivo al aplazamiento de su entrega.

Si se dejare de actuar, la prescripción empezará a correr de nuevo desde el día siguiente al de la última diligencia.

Artículo 115. (Excepción de la interrupción). No operará la interrupción de la prescripción de la pretensión punitiva, cuando las actuaciones se practiquen después de que haya transcurrido la mitad del lapso necesario para la prescripción, contando a partir de los momentos a que se refieren las fracciones I a IV del artículo 108 de este Código.

Artículo 116. (Lapso de prescripción de la potestad de ejecutar las penas). Salvo disposición legal en contrario para ejecutar la pena privativa de libertad o medida de seguridad, prescribirá en un tiempo igual al fijado en la condena, pero no podrá ser inferior a tres años.

La potestad para ejecutar la pena de multa prescribirá en un año. Para las demás sanciones prescribirá en un plazo igual al que deberían durar éstas, sin que pueda ser inferior a dos años.

La potestad para ejecutar las penas que no tengan temporalidad prescribirán en dos años y la de reparación del daño en un tiempo igual al de la pena privativa de libertad impuesta.

Los plazos serán contados a partir de la fecha en que cause ejecutoria la resolución.

Artículo 117. (Cuando el sentenciado hubiere extinguido ya una parte de su sanción, se necesitará para la prescripción tanto tiempo como el que falte de la condena). Cuando el sentenciado hubiere extinguido ya una parte de su sanción, se necesitará para la prescripción tanto tiempo como el que falte de la condena

Artículo 118. (Interrupción de la prescripción de la potestad para ejecutar la pena o medida de seguridad). La prescripción de la potestad para ejecutar la pena o medida privativa de la libertad, sólo se interrumpe con la aprehensión del sentenciado, aunque se ejecute por otro delito diverso o por la formal solicitud de entrega que el Ministerio Público haga al de otra entidad federativa, en aquél que se encuentre detenido, en cuyo caso subsistirá la interrupción hasta en tanto la autoridad requerida niegue dicha entrega o desaparezca la situación legal del detenido que motive aplazar su cumplimiento.

La prescripción de la potestad de las demás sanciones se interrumpirá por cualquier acto de autoridad competente para hacerlas efectivas. También se interrumpirá la prescripción de las penas pecuniarias, por las promociones que el ofendido o persona a cuyo favor se haya decretado dicha reparación, haga ante la autoridad correspondiente y por las actuaciones que esa autoridad correspondiente y por las actuaciones que esa autoridad realice para ejecutarlas, así como por el inicio de juicio ante autoridad civil usado como título la sentencia condenatoria correspondiente.

Artículo 119. (Autoridad competente para resolver la extinción). La extinción de la pretensión punitiva será resuelta por el titular del Ministerio Público durante la averiguación previa o por el órgano jurisdiccional en cualquier etapa del proceso.

Artículo 120. (Facultad jurisdiccional en la ejecución). Si durante la ejecución de las penas o medidas de seguridad se advierte que se había extinguido la pretensión punitiva o la potestad de ejecutarlas, tales circunstancias se plantearán por la vía incidental ante el órgano jurisdiccional que hubiere conocido del asunto y éste resolverá lo precedente.

CAPÍTULO XI: SUPRESIÓN DEL TIPO PENAL

Artículo 121.- (Extinción por supresión del tipo penal). Cuando la ley suprima un tipo penal se extinguirá la potestad punitiva respectiva o la de ejecutar las penas o medidas de seguridad impuestas, se pondrá en absoluta e inmediata libertad al inculcado al sentenciado y cesarán de derecho todos los efectos del procedimiento penal o de la sentencia.

CAPÍTULO XII: EXISTENCIA DE UNA SENTENCIA ANTERIOR DICTADA EN PROCESO SEGUIDO POR LOS MISMIOS HECHOS.

Artículo 122. (Non bis in idem). Nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene.

Cuando existan en contra de la misma persona y por la misma conducta:

- I. Dos procedimientos distintos, se archivará o sobreseerá de oficio el que se haya iniciado en segundo término;
- II. Una sentencia y procedimiento distinto, se archivara o sobreseerá de oficio el procedimiento distinto; o
- III. Dos sentencias, dictadas en procesos distintos, se hará la declaratoria de nulidad de la sentencia que corresponda al proceso que se inició en segundo término y se extinguirán sus efectos.

21.1 Código Penal de México Federal de 1993. (Código Penal. Para el distrito federal, 1993)

TÍTULO V: EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL

CAPÍTULO VI: PRESCRIPCIÓN

Artículo 100.- Por la prescripción se extinguen la acción penal y las sanciones, conforme a los siguientes artículos.

Artículo 101.- La prescripción es personal y para ella bastará el simple transcurso del tiempo señalado por la ley.

Los plazos para la prescripción se duplicarán respecto de quienes se encuentren fuera del territorio nacional, si por esta circunstancia no es posible integrar una averiguación previa, concluir un proceso o ejecutar una sanción.

La prescripción producirá su efecto, aunque no la alegue como excepción el acusado. Los jueces la suplirán de oficio en todo caso, tan luego como tengan conocimiento de ella, sea cual fuere el estado del proceso.

Artículo 102.- Los plazos para la prescripción de la acción penal serán continuos; en ellos se considerará el delito con sus modalidades, y se contarán:

- I. A partir del momento en que se consumó el delito, si fuere instantáneo.
- II. A partir del día en que se realizó el último acto de ejecución o se omitió la conducta debida, si el delito fuere en grado de tentativa;
- III. Desde el día en que se realizó la última conducta, tratándose del delito continuado; y
- IV. Desde la cesación de la consumación en el delito permanente.

Artículo 103.- Los plazos para la prescripción de las sanciones serán igualmente continuos y correrán desde el día siguiente a aquél en que el condenado se sustraiga a la acción de la justicia, si las sanciones son privativas o restrictivas de libertad, y si no lo son, desde la fecha de la sentencia ejecutoria.

Artículo 104.- La acción penal prescribe en un año, si el delito sólo mereciere multa; si el delito mereciere, además de esta sanción, pena privativa de libertad o alternativa, se atenderá a la prescripción de la acción para perseguir la pena privativa de libertad; lo mismo se observará cuando corresponda imponer alguna otra sanción accesoria.

Artículo 105.- La acción penal prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa de la libertad que señala la ley para el delito de que se trate, pero en ningún caso será menor de tres años.

Artículo 106.- La acción penal prescribirá en dos años, si el delito solo mereciere destitución, suspensión, privación de derecho o inhabilitación, salvo lo previsto en otras normas.

Artículo 107.- Cuando la ley no prevenga otra cosa la acción penal que nazca de un delito que sólo pueda perseguirse por querrela del ofendido o de algún otro acto equivalente, prescribirá en un año, contado desde el día en que quienes puedan formular la querrela o el acto equivalente, tengan conocimiento del delito y del delincuente, y en tres, fuera de esta circunstancia.

Pero si llenado el requisito inicial de la querrela, ya se hubiese deducido la acción ante los tribunales, se observarán las reglas señaladas por la ley para los delitos que se persiguen de oficio.

Artículo 108.- En los casos de concurso de delitos, las acciones penales que de ellos resulten, prescribirán cuando prescriba la del delito que merezca pena mayor.

Artículo 109.- Cuando para ejercitar o continuar la acción penal sea necesaria una resolución previa de autoridad jurisdiccional, la prescripción comenzará a correr desde que se dicte la sentencia irrevocable.

Artículo 110.- La prescripción de las acciones se interrumpirá por las actuaciones que se practiquen después de que haya transcurrido la mitad del lapso necesario para la aprehensión del inculpado.

Artículo 111.- Las prevenciones contenidas en el artículo anterior, no comprenden el caso en que las actuaciones se practiquen después de que haya transcurrido la mitad del lapso necesario para la aprehensión del inculpado.

Artículo 112.- Si para deducir una acción penal exigiere la ley previa declaración o resolución de alguna autoridad, las gestiones que con esos fin se practiquen, antes del término señalado en el artículo precedente, interrumpirán la prescripción.

Artículo 113.- Salvo que la ley disponga otra cosa, la pena privativa de libertad prescribirá en un tiempo igual al fijado en la condena y una cuarta parte más, pero no podrá ser inferior a tres años; la pena de multa prescribirá en un año; las demás sanciones prescribirán en un plazo igual al que deberían durar y una cuarta parte más, sin que pueda ser inferior a dos años; las que no tengan temporalidad, prescribirán en dos años. Los plazos serán contados a partir de la fecha en que cause ejecutoria la resolución.

Artículo 114.- Cuando el reo hubiere ya extinguido una parte de su sanción, se necesitara para la prescripción tanto tiempo como el que falte de la condena y una cuarta parte más, pero no podrá ser menor de un año.

Artículo 115.- La prescripción de la sanción privativa de libertad, sólo se interrumpe aprehendiendo al reo, aunque la aprehensión se ejecute por otro delito diverso. Si se dejare de actuar, la prescripción comenzará a correr de nuevo desde el día siguiente al de la última diligencia.

La prescripción de las demás sanciones se interrumpirá, por cualquier acto de autoridad competente para hacerlas efectivas.

CAPÍTULO VII: CUMPLIMIENTO DE LA PENA O MEDIDA DE SEGURIDAD

Artículo 116.- La pena o la medida de seguridad se extinguen, con todos sus efectos, por cumplimiento de aquellas o de las sanciones por las que hubiesen sido sustituidas o conmutadas. Asimismo, la sanción que se hubiese suspendido se extinguirá por el cumplimiento de los requisitos establecidos al otorgarla, en los términos y dentro de los plazos legalmente aplicables.

22. CÓDIGO PENAL DE NICARAGUA (LEY N° 641)⁵⁹⁸

LIBRO PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES SOBRE DELITOS, FALTAS, PENAS, MEDIDAS DE SEGURIDAD, CONSECUENCIAS ACCESORIAS DE LA INFRACCIÓN PENAL Y DE LAS PERSONAS RESPONSABLES

TÍTULO VII: EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL Y SUS EFECTOS

CAPÍTULO I: CAUSAS QUE EXTINGUEN LA RESPONSABILIDAD PENAL

Art. 130.- Extinción.- La responsabilidad penal se extingue por:

- a) La muerte del imputado, acusado o sentenciado;
- b) El cumplimiento de la condena;
- c) El indulto, cuyo efecto se limita a la extinción total o parcial de la pena, será determinado en cada caso por la Asamblea Nacional. Se excluye de este beneficio a los sentenciados por delitos contra el orden internacional;
- d) La amnistía, la cual extingue por completo las penas principales y accesorias y todos sus efectos. Se excluye de este beneficio a los sentenciados por delitos contra el orden internacional;
- e) El perdón del ofendido, cuando la ley así lo prevea;
- f) La prescripción de la acción penal;
- g) La prescripción de la pena;
- h) La aplicación firme de una de las manifestaciones del principio de oportunidad; y
- i) Los demás casos expresamente señalados por la ley.

En los casos en que la ley lo permita, el perdón del ofendido podrá ser otorgado en cualquier momento del proceso y de la ejecución de la pena.

En los delitos o faltas contra niñas, niños, adolescentes menores de dieciocho años o personas con problemas de discapacidad, los jueces o tribunales, oído el Ministerio Público, podrán rechazar la eficacia del perdón otorgado por los representantes de aquéllos, y ordenar el cumplimiento de la condena o la continuación del procedimiento. Ley No. 641

Para rechazar el perdón a que se refiere el párrafo anterior, el Juez o Tribunal deberá oír nuevamente al representante de los niños, niñas, adolescentes o discapacitados.

Art. 131.- Prescripción de la acción penal.- La acción penal prescribe:

- a) A los veinte años, cuando la pena máxima señalada al delito sea prisión de quince o más años;

⁵⁹⁸ De 2007.

- b) A los quince años, cuando la pena máxima señalada por la ley sea de prisión de entre más de diez años y menos de quince años; a los diez años, cuando la pena máxima señalada por la ley sea de prisión de entre más de cinco y menos de diez años;
- c) A los cinco años, los restantes delitos graves;
- d) A los tres años, los delitos menos graves;
- e) Los delitos de calumnia e injuria prescriben a los treinta días.

Las faltas prescriben a los tres meses.

Cuando la pena señalada por la ley es compuesta, se usará para la aplicación de las penas comprendidas en este artículo, la que exija mayor tiempo para la prescripción.

La acción penal en los delitos señalados en el artículo 16 de este Código, no prescribirán en ningún caso.

Cuando se trate de delitos cometidos por autoridad, funcionario o empleado público con ocasión del ejercicio de sus funciones, se interrumpirá el plazo de prescripción de la acción penal mientras la persona disfrute de inmunidad o se sustraiga a la justicia.

Art. 132.- Cómputo de los plazos.- Los plazos previstos en el artículo precedente se computarán desde el día en que se haya cometido la infracción punible. En los casos de delito continuado y delito permanente, tales plazos se computarán respectivamente, desde el día en que se realizó la última infracción y desde que se eliminó la situación ilícita.

La prescripción se interrumpirá, quedando sin efecto el tiempo transcurrido, cuando el procedimiento se dirija contra el culpable, y comenzará a correr de nuevo el término de la prescripción desde que se paralice el procedimiento o se termine sin condena, sin perjuicio de las otras causales que establece el Código Procesal Penal.

En caso de que no se ejerza oportunamente la acción penal en los delitos contra la libertad e integridad sexual, cometidos en perjuicio de niños, niñas o adolescentes, el plazo de prescripción de la acción penal iniciará a partir del día en que el ofendido adquiriera la mayoría de edad. Ley No. 641

Art. 133.- Prescripción de penas.- Las penas impuestas por sentencia firme prescriben:

- a) A los veinticinco años, las de prisión de quince o más años;
- b) A los veinte años, las de inhabilitación por más de diez años y las de prisión por más de diez y menos de quince años;
- c) A los quince años, las de inhabilitación por más de seis y menos de diez años y las de prisión por más de cinco y menos de diez años;
- d) A los diez años, las restantes penas graves;
- e) A los cinco años, las penas menos graves.
- f) Al año, las penas leves y faltas.

Las penas impuestas por los delitos señalados en el artículo 16 de este Código no prescribirán en ningún caso.

Art. 134.- Cómputo.- El tiempo de la prescripción de la pena se computará desde la fecha de la sentencia firme, o desde el quebrantamiento de la condena, si ésta se comenzó a cumplir; o, desde que se revoque la condena de ejecución condicional o la libertad condicional.

Art. 135.- Prescripción de las medidas de seguridad.- Las medidas de seguridad prescribirán a los diez años, si son privativas de libertad superiores a tres años, y a los cinco años si son privativas de libertad iguales o inferiores a tres años o tuvieran otro contenido.

El tiempo de la prescripción se computará desde el día en que quedó firme la resolución en la que se impuso la medida o, en caso de cumplimiento sucesivo, desde que debió empezar a cumplirse.

Si el cumplimiento de una medida de seguridad es posterior al de una pena, el plazo se computará desde la extinción de ésta.

23. CÓDIGO PENAL DE PANAMÁ⁵⁹⁹ (Ley N° 14 de 2007 y adiciones introducidas por la Ley 26 de 2008, la Ley 5 de 2009, la Ley 68 de 2009 y la Ley 14 de 2010)

TÍTULO V: EXTINCIÓN DE LA PENA

CAPÍTULO 1: CAUSAS DE EXTINCIÓN

Art. 115.- La pena se extingue:

1. Por la muerte del sentenciado.
2. Por el cumplimiento de la pena
3. Por el perdón de la víctima, en los casos autorizados por la ley.

⁵⁹⁹ De 2007.

4. Por el indulto.
5. Por la amnistía.
6. Por la prescripción.
7. Por la rehabilitación.
8. En los demás casos que establezca la ley.

Art. 116.- El indulto es una causa de extinción de la pena, de carácter individual, cuya potestad corresponde al Presidente de la República con el Ministro respectivo. Solo es aplicable a delitos políticos y extingue la pena.

La amnistía es una gracia que beneficia a todas las personas vinculadas a un delito de naturaleza política, cuyo otorgamiento es privativo del Órgano Legislativo y extingue la acción penal y la pena.

No se aplicará el indulto ni la amnistía en los delitos contra la Humanidad y en el delito de desaparición forzada de personas.

Art. 117.- Cuando sean varios los ofendidos, cada uno de ellos podrá otorgar el perdón separadamente. Si uno o más ofendidos no perdonaran, el proceso continuará en lo que respecta a estos. Cuando sean varios los imputados y el ofendido sea uno, el perdón de este beneficiará a todos.

Nº 26519 Gaceta Oficial Digital, lunes 26 de abril de 2010

Artículo 118.- La rehabilitación extingue la pena accesoria de inhabilitación. Solo podrá otorgarse a solicitud del sancionado siempre que haya observado buena conducta que haga presumir su arrepentimiento y después de dos años, contados a partir del día en que quedó cumplida o extinguida la pena principal.

CAPÍTULO 2: TIEMPO DE LA PRESCRIPCIÓN

Art. 119.- La pena privativa de la libertad impuesta por sentencia ejecutoriada prescribe en un término igual al de la pena señalada en la sentencia.

Las penas de días-multa o de arresto de fines de semana impuestas por sentencia ejecutoriada prescriben a los tres años.

Art. 120.- Se interrumpirá la prescripción de la pena por cualquier acto del Juez de Cumplimiento que tienda a la ejecución de la sentencia y por el pedido de extradición.

La interrupción así efectuada se mantendrá hasta un año después de lo actuado por el Juez de Cumplimiento.

Cuando se trate de una pena que sea el resultado de un concurso de delitos, se suspenderá la prescripción de la pena durante el periodo de cumplimiento de una pena previamente impuesta.

Art. 121.- No prescribirá la pena en los delitos de terrorismo, contra la Humanidad y de desaparición forzada de personas.

Art. 122.- La extinción de la pena no impide el comiso de los instrumentos con los cuales se cometió el hecho punible y los efectos que de él provengan.

TÍTULO VII: RESPONSABILIDAD CIVIL

CAPÍTULO I: PERSONAS QUE RESPONDEN CIVILMENTE

Art. 128.- De todo delito se deriva responsabilidad civil para:

1. Quienes sean culpables como autores, instigadores o partícipes; y
2. Quienes hayan sido favorecidos con eximente de culpabilidad.

Las causas de justificación exoneran de responsabilidad civil, excepto el estado de necesidad siempre que el favorecido no se haya beneficiado patrimonialmente.

No exoneran de responsabilidad civil la extinción de la acción penal ni de la pena.

24. CÓDIGO PENAL DE PARAGUAY⁶⁰⁰ (Ley Nº 1160)

LIBRO PRIMERO: PARTE GENERAL

TÍTULO I: LA LEY PENAL

CAPÍTULO II: APLICACION DE LA LEY

Art. 6.- Hechos realizados en el territorio nacional

1º La ley penal paraguaya se aplicará a todos los hechos punibles realizados en el territorio nacional o a bordo de buques o aeronaves paraguayos.

⁶⁰⁰ De 1997.

2° Un hecho punible realizado en territorio nacional y, también en el extranjero, quedará eximido de sanción cuando por ello el autor haya sido juzgado en dicho país, y:

1. absuelto, o
2. condenado a una pena o medida privativa de libertad y ésta haya sido ejecutada, prescrita o indultada.

TITULO VII: LA PRESCRIPCION

CAPITULO UNICO: CARACTERISTICAS DE LA PRESCRIPCION

Art. 101.- Efectos

1° La prescripción extingue la sanción penal. Esto no se aplicará a lo dispuesto en el artículo 96.

Art. 102.- Plazos

1° Los hechos punibles prescriben en:

1. quince años, cuando el límite máximo del marco penal previsto sea de quince años o más de pena privativa de libertad;
2. tres años, cuando el límite máximo del marco penal previsto sea pena privativa de libertad de hasta tres años o pena de multa;
3. en un tiempo igual al máximo de la pena privativa de libertad en los demás casos.

2° El plazo correrá desde el momento en que termine la conducta punible. En caso de ocurrir posteriormente un resultado que pertenezca al tipo legal, el plazo correrá desde ese momento.

3° Son imprescriptibles los hechos punibles, previstos en el artículo 5 de la Constitución.

Art. 103.- Suspensión

1° El plazo para la prescripción se suspenderá cuando, por circunstancias objetivamente insuperables, la persecución penal no pueda ser iniciada o continuada. Esto no regirá cuando el obstáculo para la persecución penal consista en la falta de instancia o de la autorización prevista en el artículo 100.

2° Superado el obstáculo, el plazo continuará computándose.

Art. 104.- Interrupción

1° La prescripción será interrumpida por:

1. un auto de instrucción sumarial;
2. una citación para indagatoria del inculpado;
3. un auto de declaración de rebeldía y contumacia;
4. un auto de prisión preventiva;
5. un auto de elevación de la causa al estado plenario;
6. un escrito de fiscal peticionando la investigación; y
7. una diligencia judicial para actos de investigación en el extranjero.

2° Después de cada interrupción, la prescripción correrá de nuevo. Sin embargo, operará la prescripción, independientemente de las interrupciones, una vez transcurrido el doble del plazo de la prescripción.

25. CÓDIGO PENAL DE PORTUGAL⁶⁰¹ (originalmente vía Decreto Ley N° 400/82):

TÍTULO V: Extinção da responsabilidade criminal

CAPÍTULO I: Prescrição do procedimento criminal

Artigo 118.- Prazos de prescrição

1 - O procedimento criminal extingue-se, por efeito de prescrição, logo que sobre a prática do crime tiverem decorrido os seguintes prazos:

- a) 15 anos, quando se tratar de crimes puníveis com pena de prisão cujo limite máximo for superior a 10 anos;
- b) 10 anos, quando se tratar de crimes puníveis com pena de prisão cujo limite máximo for igual ou superior a 5 anos, mas que não exceda 10 anos;
- c) 5 anos, quando se tratar de crimes puníveis com pena de prisão cujo limite máximo for igual ou superior a 1 ano, mas inferior a 5 anos;
- d) 2 anos, nos casos restantes.

2 - Para efeito do disposto no número anterior, na determinação do máximo da pena aplicável a cada crime são tomados em conta os elementos que pertençam ao tipo de crime, mas não as circunstâncias agravantes ou atenuantes.

⁶⁰¹ Del 23 de septiembre de 1982 modificado por ley n° 65/98 del 02 de septiembre de 1998.

3 - Quando a lei estabelecer para qualquer crime, em alternativa, pena de prisão ou de multa, só a primeira é considerada para efeito do disposto neste artigo.

Artigo 119.- Início do prazo

1 - O prazo de prescrição do procedimento criminal corre desde o dia em que o facto se tiver consumado.

2 - O prazo de prescrição só corre:

- a) Nos crimes permanentes, desde o dia em que cessar a consumação;
- b) Nos crimes continuados e nos crimes habituais, desde o dia da prática do último acto;
- c) Nos crimes não consumados, desde o dia do último acto de execução.

3 - No caso de cumplicidade atende-se sempre, para efeitos deste artigo, ao facto do autor.

4 - Quando for relevante a verificação do resultado não compreendido no tipo de crime, o prazo de prescrição só corre a partir do dia em que aquele resultado se verificar.

Artigo 120.- Suspensão da prescrição

1 - A prescrição do procedimento criminal suspende-se, para além dos casos especialmente previstos na lei, durante o tempo em que:

- a) O procedimento criminal não puder legalmente iniciar-se ou continuar por falta de autorização legal ou de sentença a proferir por tribunal não penal, ou por efeito da devolução de uma questão prejudicial a juízo não penal;
- b) O procedimento criminal estiver pendente a partir da notificação da acusação ou, não tendo esta sido deduzida, a partir da notificação da decisão instrutória que pronunciar o arguido ou do requerimento para aplicação de sanção em processo sumário;
- c) Vigorar a declaração de contumácia; ou
- d) A sentença não puder ser notificada ao arguido julgado na ausência;
- e) O delinquento cumprir no estrangeiro pena ou medida de segurança privativas da liberdade.

2 - No caso previsto na alínea b) do número anterior a suspensão não pode ultrapassar 3 anos.

3 - A prescrição volta a correr a partir do dia em que cessar a causa da suspensão.

(Redacção da Lei nº 65/98, de 2 de Setembro)

Artigo 121.- Interrupção da prescrição

1 - A prescrição do procedimento criminal interrompe-se:

- a) Com a constituição de arguido;
- b) Com a notificação da acusação ou, não tendo esta sido deduzida, com a notificação da decisão instrutória que pronunciar o arguido ou com a notificação do requerimento para aplicação da sanção em processo sumário;
- c) Com a declaração de contumácia;
- d) Com a notificação do despacho que designa dia para audiência na ausência do arguido.

2 - Depois de cada interrupção começa a correr novo prazo de prescrição.

3 - A prescrição do procedimento criminal tem sempre lugar quando, desde o seu início e ressalvado o tempo de suspensão, tiver decorrido o prazo normal de prescrição acrescido de metade. Quando, por força de disposição especial, o prazo de prescrição for inferior a 2 anos o limite máximo da prescrição corresponde ao dobro desse prazo.

(Redacção da Lei nº 65/98, de 2 de Setembro)

CAPÍTULO II: Prescrição das penas e das medidas de segurança

Artigo 122.- Prazos de prescrição das penas

1 - As penas prescrevem nos prazos seguintes:

- a) 20 anos, se forem superiores a 10 anos de prisão;
- b) 15 anos, se forem iguais ou superiores a 5 anos de prisão;
- c) 10 anos, se forem iguais ou superiores a 2 anos de prisão;
- d) 4 anos, nos casos restantes.

2 - O prazo de prescrição começa a correr no dia em que transitar em julgado a decisão que tiver aplicado a pena.

Artigo 123.- Efeitos da prescrição da pena principal

A prescrição da pena principal envolve a prescrição da pena acessória que não tiver sido executada bem como dos efeitos da pena que ainda se não tiverem verificado.

Artigo 124.- Prazos de prescrição das medidas de segurança

1 - As medidas de segurança prescrevem no prazo de 15 ou de 10 anos, consoante se trate de medidas de segurança privativas ou não privativas da liberdade.

2 - A medida de segurança de cassação da licença de condução prescreve no prazo de 5 anos.

Artigo 125.- Suspensão da prescrição

1 - A prescrição da pena e da medida de segurança suspende-se, para além dos casos especialmente previstos na lei, durante o tempo em que:

- a) Por força da lei, a execução não puder ter começado ou continuar a ter lugar;
- b) Vigorar a declaração de contumácia;
- c) O condenado estiver a cumprir outra pena ou medida de segurança privativas da liberdade; ou
- d) Perdurar a dilação do pagamento da multa.

2 - A prescrição volta a correr a partir do dia em que cessar a causa da suspensão.

Artigo 126.- Interrupção da prescrição

1 - A prescrição da pena e da medida de segurança interrompe-se:

- a) Com a sua execução; ou
- b) Com a declaração de contumácia.

2 - Depois de cada interrupção começa a correr novo prazo de prescrição.

3 - A prescrição da pena e da medida de segurança tem sempre lugar quando, desde o seu início e ressalvado o tempo de suspensão, tiver decorrido o prazo normal da prescrição acrescido de metade.

CAPÍTULO III: Outras causas de extinção

Artigo 127.- Morte, amnistia, perdão genérico e indulto

A responsabilidade criminal extingue-se ainda pela morte, pela amnistia, pelo perdão genérico e pelo indulto.

Artigo 128.- Efeitos

1 - A morte do agente extingue tanto o procedimento criminal como a pena ou a medida de segurança.

2 - A amnistia extingue o procedimento criminal e, no caso de ter habido condenação, faz cessar a execução tanto da pena e dos seus efeitos como da medida de segurança.

3 - O perdão genérico extingue a pena, no todo ou em parte.

4 - O indulto extingue a pena, no todo ou em parte, ou substitui-a por outra mais favorável prevista na lei.

TÍTULO VI: Indemnização de perdas e danos por crime

Artigo 129.- Responsabilidade civil emergente de crime

A indemnização de perdas e danos emergentes de crime é regulada pela lei civil.

25.1 Código Penal De Portugal.

TÍTULO IX: DE LA EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL

CAPÍTULO I: PRESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO CRIMINAL

Artículo 117.- (Plazos de prescripción).- 1. El procedimiento criminal se extingue, por efecto de la prescripción, luego que hayan transcurrido desde la comisión del delito los siguientes plazos:

- a) 15 años, cuando se trate de delitos a los cuales correspondan pena de prisión con un límite máximo superior a 10 años;
- b) 10 años, cuando se trate de delitos a los cuales corresponda pena de prisión con un límite máximo igual o superior a 5 años, pero que no exceda de 10 años;
- c) 5 años cuando se trate de delitos a los cuales corresponda pena de prisión con un límite máximo igual o superior a 1 año, pero que no exceda de 5 años;
- d) 2 años en los restantes casos.

2. Para la determinación del máximo de la pena aplicable a cada delito a que se refiere el número anterior, no se consideran los agravantes o atenuantes que, dentro del mismo tipo de delito, modifiquen los límites de la pena.

3. Cuando la ley determine para cualquier delito, en forma alternativa o conjunta, pena de prisión o multa, sólo la primera será considerada a los efectos de este artículo.

Artículo 118.- (Comienzo del plazo).- 1. El plazo de prescripción del procedimiento criminal corre desde el día en que el hecho se consumó.

2. No obstante, el plazo de prescripción sólo corre:

- a) En los delitos permanentes, desde el día en que cesa la consumación;
- b) En los delitos continuados y en los delitos habituales, desde el día de la realización del último acto delictuoso;

- c) En los delitos no consumados, desde el día del último acto de ejecución.
- 3. En caso de complicidad, se considerará siempre, a los efectos de este artículo, el hecho del autor.
- 4. Cuando la producción de cierto resultado no forma parte del tipo de delito, el plazo de prescripción sólo corre a partir del día en que el resultado se verifique.

Artículo 119.- (Suspensión de la prescripción).- 1. La prescripción del procedimiento criminal se suspende, además de los casos especialmente previstos en la ley, durante el tiempo en que:

- a) El procedimiento legal no puede legalmente iniciarse o no pueda continuar por falta de una autorización legal o de una sentencia previa a dictar por tribunal no penal, o por efecto de la devolución de una cuestión prejudicial para un juicio no penal;
 - b) El procedimiento criminal esté pendiente, a partir de la notificación del *auto para resolver* o equivalente, salvo en el caso de proceso de ausentes;
 - c) El delincuente cumpla en el extranjero una pena o una medida de seguridad privativa de libertad.
2. En el caso previsto en letra b) del número anterior, la suspensión no puede pasar de dos años, cuando no haya lugar a recurso, o 3 años habiéndolo.
3. La prescripción corre nuevamente a partir del día en que cesa la causa de la suspensión.

Artículo 120.- 1. La prescripción del procedimiento criminal se interrumpe:

- a) Con la notificación a las primeras declaraciones para la comparecencia o interrogatorio del agente, como acusado, en la instrucción preparatoria;
 - b) Con la prisión;
 - c) Con la notificación del *auto para resolver* o equivalente;
 - d) Con la fijación del día para el juicio en el proceso a ausentes.
2. Después de cada interrupción comienza a correr nuevamente el plazo de prescripción.
3. La prescripción del procedimiento criminal siempre tendrá lugar cuando, desde su inicio y descontando el tiempo de suspensión hubiera transcurrido el plazo normal de prescripción aumentado en la mitad. Cuando a causa de disposición especial, el plazo de prescripción fuese inferior a 2 años, el límite máximo de la prescripción corresponderá al doble de ese plazo.

CAPÍTULO II: PRESCRIPCIÓN DE LAS PENAS

Artículo 121.- (Plazos de prescripción).- 1. Las penas prescriben en los siguientes plazos:

- a) 20 años si fuesen superior a 10 años de prisión;
 - b) 15 años si fuesen iguales o superiores a 5 años de prisión;
 - c) 10 años si fuesen iguales o superiores a 2 años de prisión;
 - d) 4 años, en los casos restantes.
2. Cuando al delito le fueren aplicables penas de varias especies, la prescripción de cualquiera de ellas no se completa sin que las restantes hayan prescrito también.
3. El plazo de prescripción comienza a correr desde el día en que quede firme la decisión que aplicó la pena.

Artículo 122.- (Efectos de la prescripción de la pena principal).- La prescripción de la pena principal implica la prescripción de la pena accesoria que aún no se hubiese ejecutado, así como también de los efectos de la pena que aún no se hayan verificado.

Artículo 123.- (Suspensión de la prescripción).- 1. La prescripción de la pena se suspende, además de los casos especialmente previstos en la ley, durante el tiempo en que:

- a) Por fuerza de la ley, la ejecución no pueda comenzar a tener lugar o continuar;
 - b) El condenado deba cumplir otra pena, o esté en libertad condicional, en régimen de prueba, o con suspensión de ejecución de la pena;
 - c) Se mantenga la *dilación* en el pago de la multa.
2. La prescripción vuelve a correr a partir del día en que case la causa de la suspensión.

Artículo 124.- (Interrupción de la prescripción).- 1. La prescripción de la pena se interrumpe:

- a) Con su ejecución;
 - b) Con la realización, por la autoridad competente, de los actos destinados a hacerla ejecutar, si la ejecución se torna imposible porque el condenado se halla en lugar de donde no puede ser extraditado o donde no pueda ser alcanzado.
2. Después de cada interrupción comienza nuevamente el plazo de prescripción.
3. La prescripción de la pena tendrá lugar siempre que, desde el principio de aquella y relevado el tiempo de suspensión, hubiere transcurrido el plazo normal de la prescripción aumentada en la mitad.

26. CÓDIGO PENAL DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO⁶⁰² (Ley N° 149)

LIBRO PRIMERO: PARTE GENERAL

TÍTULO III: DE LAS CONSECUENCIAS DEL DELITO

CAPÍTULO V: DE LA EXTINCIÓN DE LAS ACCIONES Y DE LAS PENAS

SECCIÓN PRIMERA: DE LA EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL

Artículo 97. Extinción de la acción penal. La acción penal se extingue por:

- (a) muerte
- (b) indulto
- (c) prescripción
- (d) reparación de los daños.

Artículo 98. Reparación de los daños. En los delitos graves de tercer grado, en los delitos graves de cuarto grado y en los delitos menos graves, cuando el autor se haya esforzado por acordar una compensación con el perjudicado y le haya restablecido en su mayor parte a la situación jurídica anterior al hecho delictivo, o lo haya indemnizado total o sustancialmente, en una situación en la que la reparación de los daños le exija notables prestaciones o renunciaciones personales, el tribunal podrá con el consentimiento del perjudicado y del fiscal decretar el archivo y sobreseimiento de la acción penal.

Artículo 99. Prescripción. La acción penal prescribirá:

- (a) A los cinco (5) años en los delitos graves de segundo a cuarto grado, y en los graves según clasificados en ley especial o en el Código Penal derogado.
- (b) Al año en los delitos menos graves, salvo los provenientes de infracciones a las leyes fiscales y todo delito menos grave cometido por funcionarios o empleados públicos en el desempeño de sus funciones, que prescribirán a los cinco (5) años.
- (c) Los delitos de encubrimiento y conspiración prescribirán a los diez (10) años cuando se cometan en relación al delito de asesinato en todas sus modalidades.
- (d) Lo dispuesto en los incisos (a) y (b) de este Artículo no aplica a las leyes especiales cuyos delitos tengan un período prescriptivo mayor al aquí propuesto.

Artículo 100. Delitos que no prescriben. En los siguientes delitos la acción penal no prescribe: delito grave de primer grado, genocidio, crimen de lesa humanidad, asesinato, secuestro y secuestro de menores, malversación de fondos públicos, falsificación de documentos públicos y todo delito grave tipificado en este Código o en ley especial cometido por un funcionario o empleado público en el desempeño de la función pública.

Artículo 101. Cómputo del término de prescripción. El término de prescripción se computará desde el día de la comisión del delito hasta la fecha en que se determine causa probable para el arresto o citación. En aquellos casos en que sea necesario recurrir en alzada, la celebración de una audiencia para la determinación de causa probable para el arresto o citación interrumpirá el término prescriptivo.

No obstante, en los delitos de agresión sexual o su tentativa o aquellos delitos en que la víctima no ha cumplido dieciocho (18) años, el término de prescripción se computará a partir de que la víctima cumpla sus dieciocho (18) años.

Artículo 102. Participación. El término prescriptivo se computará separadamente para cada uno de los partícipes.

SECCIÓN SEGUNDA: DE LA EXTINCIÓN DE LAS PENAS

Artículo 103. Extinción de las penas. Las penas se extinguen por:

- (a) muerte del sentenciado
- (b) indulto u otra acción de clemencia ejecutiva
- (c) cumplimiento de la sentencia impuesta
- (d) rehabilitación del sentenciado.

Artículo 104. Rehabilitación del sentenciado. De concluir el Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación, a base de las evaluaciones realizadas, que el sentenciado recluido en una institución penal se ha rehabilitado, levantará una certificación y radicará a nombre del sentenciado y en consulta con el Secretario de Justicia una solicitud ante el tribunal para que se dé por cumplida el resto de la pena privativa de libertad.

⁶⁰² Del 18 de junio de 2004.

Será requisito para la expedición de dicha certificación, que el Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación cuente con una evaluación y recomendación psicológica a los efectos de que el sentenciado está capacitado para convivir libremente en la sociedad y de que los otros profesionales que lo evaluaron informen detalladamente y por escrito sus determinaciones de la condición de rehabilitado del sentenciado; especialmente si ya no existe ningún peligro de que se manifieste la peligrosidad representada por el acto por el cual cumple sentencia. Para ser elegible a este procedimiento, en los delitos graves de primer grado el sentenciado deberá haber cumplido por lo menos doce (12) años de reclusión y por lo menos ocho (8) años cuando se trate de un menor juzgado como adulto. En los delitos graves de segundo grado, el sentenciado deberá haber cumplido en reclusión por lo menos el cincuenta (50) por ciento de la sentencia impuesta por el tribunal.

El Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación y el Secretario de Justicia conjuntamente adoptarán la reglamentación que establezca el procedimiento para evaluar el ajuste del confinado, y para expedir y tramitar la certificación de rehabilitación.

El tribunal celebrará vista y tendrá plena facultad para decidir la solicitud tomando en consideración la prueba que se le presente, la opinión de la víctima o sus familiares, y las objeciones que el Secretario de Justicia pueda plantear. Dicha prueba contendrá necesariamente la certificación del Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación debidamente justificada mediante una evaluación del ajuste integral y del comportamiento social durante la reclusión y el cumplimiento del plan de rehabilitación. De resolver favorablemente la certificación de rehabilitación, el tribunal ordenará al Superintendente de la Policía que no incluya la convicción en el Certificado de Antecedentes Penales, pero mantenga la misma en el historial del convicto únicamente para fines de reincidencia.

26.1. Código Penal de Puerto Rico⁶⁰³ (Peña, 1994).

PARTE GENERAL

SECCIÓN VII: DE LA EXTINCIONES DE LAS ACCIONES, DE LAS PENAS Y DE LA PRESCRIPCIÓN

CAPITULO I

Art. 77º.- Extinción de la Acción Penal

Muerte del imputado.

Indulto.

El matrimonio entre el seductor y la seducida.

Prescripción. Según enmendado por la Ley Núm. 101 de 4 de junio de 1980.

Art. 78º.- Prescripción.- La acción penal prescribirá:

(a) A los cinco (5) años en los delitos graves, salvo los delitos de asesinato, malversación de fondos públicos, secuestro, robo de niños y falsificación de documentos públicos, que no prescriben. Tampoco prescribirán los siguientes delitos, identificados como delitos contra la propiedad pública, la función pública, el erario público, la función judicial o la fe pública; apropiación ilegal agravada; escalamiento agravado; extorsión; daño agravado; sabotaje de servicios públicos esenciales; fraude en las construcciones en su modalidad de grave; fraude en la ejecución de obras de construcción en su modalidad de grave; fraude en la entrega de cosas; aprovechamiento por funcionario de trabajos o servicios públicos; negociación incompatible con el ejercicio del cargo público; intervención indebida en los procesos de contratación de subastas o en las operaciones del Gobierno; retención de documentos que debe entregarse al sucesor; destrucción o mutilación de documentos por funcionarios públicos, destrucción o mutilación de documentos por personas que no sean funcionarios públicos; archivos de documentos falsificados; soborno; soborno (delito agravado); soborno de testigo; oferta de soborno; influencia indebida; delitos contra fondos públicos; posesión ilegal de recibos de contribuciones; preparación de escritos falsos; presentación de escritos falsos; falsificación de documentos; posesión y traspaso de documentos falsificados; falsificación de asientos en registros; falsificación de sellos; falsificación de licencia, certificado y otra documentación; y posesión de instrumentos para falsificación siempre que se refieran a delitos cometidos por funcionarios o empleados públicos en el desempeño de sus funciones. Estos

⁶⁰³ Vigente desde el 22 de enero de 1975.

delitos están estatuidos en los Artículos 166, 171, 175, 180, 182, 188 (en su modalidad de grave), 188A (en su modalidad de grave), 189, 201, 202, 202A, 204, 205, 206, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 216, 221, 241, 242, 271, 272, 273, 274, 275, y 276, respectivamente, de esta ley.

(b) Al año en los delitos menos graves, salvo los provenientes de infracciones a las leyes fiscales y a los artículos 177, 188 en su modalidad de menos grave, 188A en su modalidad de menos grave, 191, 200, 203, 207, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 222, 223, y 224 de esta ley que se refieren a usurpación; fraude en las construcciones (en su modalidad de menos grave); fraude en la ejecución de obras de construcción (en su modalidad de menos grave), impostura; enriquecimiento ilícito de funcionario público; usurpación de cargo público; certificaciones falsas expedidas por funcionarios públicos; omisión en el cumplimiento del deber; negligencia en el cumplimiento del deber; listas fraudulentas y otros actos ilegales; negativa a presentar lista de bienes o nombre; entorpecer a funcionario público en el cobro de deudas; incumplimiento en cuanto a dar recibo; compra de colector de bienes vendidos para pagar contribuciones; venta ilegal de bienes; y no permitir inspección de libros y documentos, respectivamente, siempre que se refieren a delitos cometidos por funcionarios o empleados públicos en el desempeño de sus funciones, que prescribirán a los cinco años. Según enmendado por la Ley Núm. 42 de 3 de junio de 1982; la Ley Núm. 46 de 1 de junio de 1983; y la Ley Núm. 32 de 24 de mayo de 1988 y la Ley Núm. 51 de 5 de agosto de 1993.

Art. 79º.- Cómputo del Término de Prescripción.- El término de prescripción se computará desde el día de la comisión del delito hasta la fecha en que se expida el mandamiento de arresto o de citación.

Art. 80º.- Participación.- El término prescriptivo se computará separadamente para cada uno de los partícipes.

CAPITULO II

Art. 81º.- Extinción de las penas.- Las penas se extinguen por:
Muerte del penado.

Indulto u otra acción de clemencia ejecutiva.

Cumplimiento de la sentencia impuesta.

26.2. Código Penal Modelo (Apéndice; Texto en español de la Parte General del C. P. M. [*]).- Ernesto Chiesa Aponte y Jaime E. Granados Peña). PUERTO RICO.

PARTE I: PARTE GENERAL

§ 1.06 PRESCRIPCIÓN

1. Un enjuiciamiento por asesinato puede iniciarse en cualquier momento.
2. Excepto lo dispuesto en esta sección un enjuiciamiento por otras ofensas, está sujeto a los siguientes términos de prescripción:
 - a. Un enjuiciamiento por un delito grave de primer grado deberá iniciarse dentro de los seis años siguientes a su comisión;
 - b. Un enjuiciamiento por cualquier otro delito grave deberá iniciarse dentro de los tres años siguientes a su comisión;
 - c. Un enjuiciamiento por delito menos grave deberá iniciarse dentro de los dos años siguientes a su comisión.
 - d. Un enjuiciamiento por delito leve o una violación deberá iniciarse dentro de los seis meses siguientes a su comisión.

3. Aunque el período establecido en la sub-sección (2) haya expirado, puede iniciarse un enjuiciamiento por: Una ofensa, si alguno de sus elementos, materiales, conlleva fraude o incumplimiento de una obligación fiduciaria, dentro de un año después de conocida la ofensa por la parte agraviada, o por quien tiene la capacidad legal para representarla y que no haya participado en la ofensa, pero en ningún caso podrá esta disposición extender el término de prescripción de otra manera aplicable, por más de tres años.

Una ofensa basada en una conducta ilegal por un funcionario o empleado público en el desempeño de su cargo, se evaluará mientras el acusado permanezca en el cargo o empleo público o dentro de los dos años siguientes, pero en ningún caso podrá esta disposición extender el término de prescripción por más de tres años .

Una ofensa es cometida cuando se completan todos sus elementos o si surge claramente el propósito legislativo de prohibir un curso continuo de conducta, al tiempo que finaliza tal curso de conducta o la complicidad del acusado en éste. El término comienza a correr el día siguiente de la comisión de la ofensa.

Un enjuiciamiento se inicia cuando se presenta una acusación o denuncia/ o cuando se expide una orden judicial de arresto o citación siempre que dicha orden o proceso sea diligenciada sin demora irrazonable.

El término de prescripción no transcurre:

Durante el tiempo que el acusado se encuentre continuamente ausente del estado o no se tenga certeza razonable del lugar del domicilio o de trabajo dentro del estado; pero en ningún caso podrá esta disposición extender el término de prescripción a uno mayor de tres años; o

Durante el tiempo que esté pendiente en este estado un enjuiciamiento contra el acusado por la misma conducta.

§ 1.08 Cuando el enjuiciamiento está impedido por uno anterior por la misma ofensa

Cuando un enjuiciamiento es por una violación de la misma disposición estatutaria y está basada en los mismos hechos de un anterior enjuiciamiento; éste está impedido por el enjuiciamiento anterior bajo las siguientes circunstancias:

El enjuiciamiento anterior resultó en una absolución. Hay una absolución, si el enjuiciamiento resulta en determinación de no culpable por el juzgador de los hechos, o en una determinación de insuficiencia de prueba para sostener una convicción. Una determinación de culpabilidad por ofensa incluida es una absolución por la ofensa mayor incluyente, aunque la convicción fuera dejada posteriormente sin efecto.

El enjuiciamiento anterior finalizó a favor del imputado, tras haberse presentado denuncia o acusación mediante orden final o sentencia que no haya sido revocada o declarada sin efecto y que necesariamente requiere una determinación incompatible con un hecho o proposición de derecho que deba ser establecida para la convicción de la ofensa.

El enjuiciamiento anterior resultó en una convicción. Hay una convicción si el enjuiciamiento resultó en una sentencia de convicción que no ha sido revocada o anulada o en veredicto de culpabilidad que no ha sido dejado sin efecto y es suficiente para sostener una sentencia o en una alegación de culpabilidad aceptada por el tribunal. En los últimos dos casos, el no haberse dictado sentencia no debe haber sido en virtud de moción del imputado.

El enjuiciamiento anterior finalizó impropriamente. Excepto lo dispuesto en esta sub-sección, hay una finalización impropia de un enjuiciamiento, si fue por razones no relevantes a una absolución, y que tiene lugar luego del juramento del primer testigo, pero antes del veredicto. La finalización no se considera impropia bajo cualquiera de las siguientes circunstancias.

El imputado consiente a ello o renuncia, mediante moción de desestimación o de otra manera análoga a su derecho de objetar la finalización.

El Tribunal estima la finalización es necesaria debido a que:

Resulta físicamente imposible proseguir con el juicio de conformidad con la ley; o

Hay un defecto legal en los procedimientos que acarrearía como cuestión de derecho la revocación de la sentencia que se dictare tras el veredicto; o

Ha habido conducta perjudicial, dentro o fuera de la sala que hace imposible proseguir con el juicio sin que resulte injusto para el imputado o el estado; o

El jurado no puede ponerse de acuerdo para un veredicto; o

Falsas declaraciones de un miembro del jurado en el procedimiento de desinsaculación impidan un juicio justo.

27. CÓDIGO PENAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA⁶⁰⁴ (Modificado por la ley N° 12-07 del 05 de enero del 2007, promulgada por el poder ejecutivo de fecha 24 de enero del 2007)

Art. 46.- (Modificado por las Leyes 224 del 26 de junio del 1984 y 46-99 del 20 de mayo del 1999). En ningún caso podrá exceder de cinco años la duración de la pena bajo la vigilancia de la alta policía. Los condenados a reclusión mayor, a la detención y a la reclusión menor, quedarán de pleno derecho, después que hayan sufrido su condena y durante cinco años, bajo la vigilancia de la alta policía. No obstante, el fallo condenatorio podrá reducir este término, y aún declarar que el condenado no estará sometido a la vigilancia

⁶⁰⁴ Promulgado por decreto del 20 de agosto de 1884

de la alta policía. Todo condenado al máximum de la pena de reclusión mayor, que obtuviere conmutación o remisión de su pena, quedará, de pleno derecho, sometido a la vigilancia de la alta policía, durante cinco años, si no se ha resuelto otra cosa por el decreto de indulto.

Art. 47.- La vigilancia bajo la alta policía podrá ser perdonada o reducida por indulto; y podrá ser suspendida por disposición gubernativa.

Art. 48.- La prescripción de la pena no releva al condenado de la vigilancia bajo la alta policía, a que esté sometido. En el caso de prescripción de la mayor pena aflictiva, el condenado estará, de pleno derecho, bajo la vigilancia de la alta policía, durante cinco años; y no producirá sus efectos, sino desde el día en que se cumpla la prescripción.

28. CÓDIGO PENAL DE LA FEDERACIÓN RUSA⁶⁰⁵ (1996)⁶⁰⁶

PARTE GENERAL:

TÍTULO IV: EXENCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL Y DE LA PENA

CAPÍTULO 11: EXENCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL

Art. 75: Exención (liberación) de la responsabilidad penal en relación con un enérgico (activo) arrepentimiento.

1. La persona (sujeto), que ejecuta por primera vez el delito de no mayor gravedad, puede ser exento (liberado) de la responsabilidad penal, si después de la ejecución del delito voluntariamente se presentó con él culpable, contribuyó con el descubrimiento del delito, indemnizó los daños causados u otros modos corrigió el daño, causado en resultado del delito.

2. La persona (sujeto), que ejecuta el delito de otras categorías, bajo la existencia de las condiciones, observadas en la parte primera del presente artículo, puede ser exento de la responsabilidad penal solo en casos, especialmente estipuladas en los correspondientes artículos de la Parte Especial del presente Código.

Art. 76: Exención de la responsabilidad penal en relación con la reconciliación con el agraviado.

La persona (sujeto), que ejecuta por primera vez el delito de no mayor gravedad, puede ser liberada de la responsabilidad penal, si se reconcilió con el agraviado y corrigió los daños causados al agraviado.

Art. 77: Exención de la responsabilidad penal en relación con la variación de las situaciones (coyuntura).

La persona (sujeto) que ejecuta por primera vez el delito de no mayor gravedad o media gravedad, puede ser exento (liberado) de la responsabilidad penal, si se estableciera, que por consecuencia de los cambios de las situaciones (coyuntura) esta persona o acciones realizadas por ella dejaron ser de peligro social.

Art. 78: Exención de la responsabilidad penal en relación con la expiración (cumplimiento) de plazos de la prescripción.

1. La persona (sujeto) se exenta (libera) de la responsabilidad penal, si desde el día de la ejecución del delito se cumplió los siguientes plazos:

- a) dos años después de la comisión de un delito de gravedad pequeña;
- b) seis años después de la comisión de un delito de gravedad media
- c) diez años después de la comisión de un delito grave;
- d) Quince años después de la comisión de un delito especialmente grave.

2. Los plazos de prescripción se calculan desde el día de la ejecución del delito y hasta el momento del ingreso de la sentencia del Juez (Tribunal) en rigor de ley. En caso de la ejecución por la persona del nuevo delito el plazo de prescripción por cada delito se calcula independientemente.

3. El transcurso de los plazos de prescripción se interrumpe, si la persona, la cual ejecuta el delito, se abstiene (desvía) de la instrucción o el juicio. En este caso el transcurso de los plazos de prescripción se reanuda (restaura) desde el momento de la detención de la persona indicada o su comparecencia con el culpable.

4. La cuestión sobre la aplicación de los plazos de la prescripción hacia la persona, a quien ejecuta el delito, penada con la pena de muerte o perpetua privación de la libertad (cadena perpetua), se determina por el Juez (Tribunal). Si el Juez (Tribunal) no considera la posibilidad de exentar (liberar) a la indicada persona de la responsabilidad penal en relación con la expiración de los plazos de prescripción, entonces la pena de muerte y la perpetua liberación de la libertad (cadena perpetua) no se aplican.

⁶⁰⁵ Traducido por Viviana Natalia Saravia Bonifacio.

⁶⁰⁶ Aprobada por la Duma del Estado el 24 de Mayo de 1996 y confirmada por el Consejo de la Federación el 5 de Junio de 1996.

5. Hacia la persona, quien ejecuta el delito contra la paz y la seguridad de la humanidad, se le estipulan los artículos 353, 356, 357, 358 del presente Código, los plazos de prescripción no se aplican.

Art. 81: Exención de la pena en relación con la enfermedad.

1. La persona (sujeto), a la cual después de la ejecución de la pena amenazó desorden síquico, privada de su posibilidad de tener conciencia del carácter real y del peligro social de sus acciones (inacción) o dirigir a ellos, sé exenta (libera) de la pena, pero la persona, la cual cumple la pena, se le libera de lo que sigue a su cumplimiento. A tal persona el Juez (Tribunal) le puede fijar medidas coercitivas de carácter médico.

2. La persona (sujeto), la cual padece después de la ejecución del delito de otras graves enfermedades, lo cual obstaculiza el cumplimiento de la pena, puede ser por exento (liberado) del cumplimiento de la pena el juez (Tribunal).

3. Los servidores militares, que cumplen arresto o mantenimiento en la sección disciplinario militar, se exentan (liberan) del siguiente cumplimiento de la pena en caso de enfermedad, que lo hacen a ellos inservibles para el servicio militar. La parte no cumplida de la pena puede ser anulada a él por el más suave tipo de pena.

4. Las personas (sujetos), indicadas en las partes primera y segunda del presente artículo, en caso de sus mejoramientos pueden estar sujeto a la responsabilidad penal y a la pena, si no expiraron los plazos de prescripción, estipulados en los artículos 78 y 83 del presente Código.

Art. 82: Aplazamiento del cumplimiento de la pena a las mujeres embarazadas y a las mujeres, que tienen niños menores de edad.

1. A la condenada mujer embarazada y a la mujer que tenga niños en edad hasta los ocho años, excepto a las condenadas para la privación de libertad en el plazo superior a los cinco (5) años por delitos graves y especialmente graves delitos contra la persona, el Juez (Tribunal) puede diferir (aplazar) el cumplimiento de la pena hasta la obtención del niño de los ocho años de edad.

2. En el caso, si la condenada, indicada en la parte primera del presente artículo, se niega al niño o continua abstenerse de la crianza (educación) del niño después de la advertencia, de la notificación por el órgano, el cual realiza el control por la conducta de la condenada, en relación de la cual el cumplimiento de la pena es aplazado (diferido), el Juez (Tribunal) puede por presentación de este órgano anular el aplazado cumplimiento de la pena y dirigir a la condenada para el cumplimiento de la pena en el lugar, fijado en correspondencia con la sentencia del Juez (Tribunal).

3. Por la obtención de los ocho años del niño el Juez (Tribunal) exenta (libera) a la condenada del cumplimiento de la parte que resta de la pena por el más suave tipo de pena, o cambia la que resta de la parte de la pena por el más suave tipo de pena, o aplica la decisión sobre el retorno de la condenada en la correspondiente institución para el cumplimiento de la parte que resta de la pena.

4. Si en el periodo de aplazamiento del cumplimiento de la pena la condenada ejecuta nuevo delito, el Juez (Tribunal) fija a ella la pena por regla, estipuladas en el artículo 70 del presente Código.

Art. 83: Exención del cumplimiento de la pena en relación con la expiración de los plazos de la prescripción de la sentencia acusatoria del Juez (Tribunal).

1. La persona (sujeto), condenada por la ejecución del delito, sé exenta (libera) del cumplimiento de la pena, sí la sentencia acusatoria del Juez (Tribunal) no fue puesta en ejecución en el siguiente plazo desde el día de su ingreso en rigor de ley;

- a) Dos (2) años junto la condena por delito de gravedad no mayor;
- b) Seis (6) años junto la condena por delito de mediana gravedad;
- c) Diez (10) años junto a la condena por delito grave;
- d) Quince (15) años junto a la condena por especialmente delito grave.

2. El transcurso de los plazos de la prescripción se interrumpe, si el condenado se abstiene (desvía) del cumplimiento de la pena. En este caso el transcurso de los plazos de la prescripción se restaura desde el momento de la detención del condenado o su comparecencia con el culpable. Los plazos de la prescripción, el cual expira hacia el momento de la abstención (desvío) del condenado del cumplimiento de la pena, están sujetos a la imputación (prueba).

3. La cuestión sobre la aplicación de los plazos de prescripción hacia la persona, condenada para la pena de muerte o perpetua privación de la libertad (cadena perpetua), se decide por el Juez (Tribunal). Si el Juez (Tribunal) no considera la posibilidad de aplicar los plazos de prescripción, estos tipos de pena se cambian por la privación de la libertad sobre determinado plazo.

4. Hacia la persona (sujeto), condenada por la ejecución del delito contra la paz y seguridad de la humanidad, estipuladas en los artículos 352, 356, 357 y 358 del presente Código, los plazos de la prescripción no se aplican.

CAPÍTULO 13: AMNISTÍA, INDULTO, CONDENA.

Art. 84: Amnistía.

1. La amnistía se pronuncia por la Duma del Estado de la Federación Rusa individualmente en relación de un no determinado grupo de personas.
2. Por el acto sobre la amnistía las personas, las cuales ejecutaron el delito, pueden ser exentas (liberadas) de la responsabilidad penal. Las personas, condenadas por la ejecución del delito, pueden ser exentas (liberadas) de la pena, o fijadas a ella la pena puede ser conservada o cambiada por el más suave tipo de pena, o tales personas pueden ser exentas (liberadas) del complementario tipo de pena. Con las personas, las cuales cumplen la pena, por el acto sobre la amnistía puede ser abolida la condena.

Art. 85: Indulto.

1. El indulto se ejecuta por el Presidente de la Federación de Rusia individualmente en relación de determinada persona.
2. Por el acto de indulto la persona, condenada por el delito, puede ser exenta (liberada) del siguiente cumplimiento de la pena o fijada a ella la pena puede ser reducida o cambiada por el más suave tipo de pena. Con la persona, la cual cumple la pena, por el acto de indulto puede ser abolida la condena.

Art. 94: Prescripción.⁶⁰⁷

Los plazos de prescripción establecidos en el artículo 78 y 83 de este Código se reducirán a la mitad en caso de liberación de los menores de edad de responsabilidad penal o la pena.

29. CÓDIGO PENAL DE SUECIA⁶⁰⁸

PARTE I: DISPOSICIONES GENERALES

TERCERA PARTE: EN LAS SANCIONES

Capítulo 35: Sobre las limitaciones relativas a las sanciones.

Sección 1

Ninguna sanción puede ser impuesta a menos que el sospechoso ha sido remitido en custodia o recibió el aviso de la acción penal por el delito dentro de:

1. dos años, si el delito se castiga con pena de prisión como máximo durante un año,
2. cinco años, si el castigo más severo es la cadena de más de una pena de prisión, pero no más de dos años,
3. diez años, si el castigo más severo es la cadena de más de dos pero no más de ocho años,
4. quince años, si el castigo más severo es la prisión por un plazo fijo de más de ocho años,
5. veinticinco años, si la cadena perpetua puede ser impuesta por el crimen.

Si un acto incluye varios delitos, entonces, independientemente de lo que es se ha dicho, una sanción puede ser impuesta por todos los crímenes, siempre que una sanción puede ser impuesta por cualquiera de ellos.

Sección 2. Derogada (Ley 1975:667)

Sección 3

Si una persona está en prisión preventiva en libertad sin haber recibido aviso de la acción penal por el delito o si el caso en contra de alguien es rechazado o despedido después de haber recibido dicha notificación, la prisión preventiva en la custodia o el servicio de notificación se considerará como no tener ocurrido si la posibilidad de imponer una sanción surge.

Sección 4

Los tiempos especificados en la Sección 1 se contará desde la fecha cuando el delito se cometió. Si la ocurrencia de un cierto efecto de la ley es un requisito previo para la imposición de una sanción, el tiempo se contará desde la fecha en que se produjo tal efecto. Si el delito descrito en el Capítulo 6, Secciones 1-4 y 6 o un intento de cometer un crimen ha sido cometido contra un niño menores de quince años de edad, los tiempos especificados en la Sección 1 se contará a partir de la fecha en que la parte perjudicada alcanza, o lo haría han alcanzado quince años de edad.

Si, en un crimen de contabilidad que no es menor, la persona responsable de la contabilidad ha sido declarado en quiebra, ha sido concedido o se ha ofrecido una composición o ha suspendido los pagos dentro de los cinco años del crimen, el tiempo será contado desde la fecha cuando esto ocurrió. Si la persona responsable de la

⁶⁰⁷ Nota nuestra: Se podría plantear la suspensión de la pena para casos de mujeres embarazadas o que tengan niños menores de catorce años cuando con el efecto de que aquí no corre ningún plazo de prescripción de la misma atendiendo a que un embarazo solo sea de nueve meses, y luego seguiría cumpliendo su pena, es obvio que se trata de condenas a penas leves. Esto se desprende del derecho comparado ruso (art. 82 Código Penal).

⁶⁰⁸ Ds.1999: 36. El Código Penal de Suecia fue adoptado en 1962 y entró en vigor el 1 de enero de 1965.

contabilidad ha sido objeto de una inspección fiscal o auditoría fiscal dentro de la evaluación cinco años después del delito, el tiempo se contará desde el día cuando la auditoría se decidió. (Ley 1996:659)

Sección 5

Derogada (Ley 1971:964)

Sección 6

En ningún caso la sanción se impondrá cuando, a partir de la fecha mencionada en la sección 4, los siguientes períodos que hayan transcurrido:

1. cinco años, si el delito no está sujeto a un castigo de más de una multa y el tiempo para la imposición de una sanción por la delincuencia se determina en la sección 1, punto 1,
2. quince años si, en casos distintos de los comprendidos en la primera párrafo, el delito no está sujeto a la pena de prisión de más de dos años,
3. treinta años en los demás casos. (Ley 1971:964)

Sección 7

Las sentencias a las multas lapso después de cinco años se cumplan a partir de la fecha cuando la sentencia adquirió fuerza de ley final. Esto no se aplica si, al vencimiento del plazo señalado, la persona condenada haya sido notificada de la solicitud de conversión de la multa y esta solicitud no hubiere sido fijada definitivamente. Si la aplicación no conduce a la conversión de la multa, quedará sin efecto cuando el tribunal la decisión final en el caso adquiere fuerza de ley final. Especiales disposiciones regulan la caducidad de una sentencia que impone la conversión de un bien.

Si el condenado muere, un lapsus multa impuesta. Si la sentencia adquirió fuerza de ley durante el final de la persona condenada Propiedad vida y movable ha sido embargadas o colocados en custodia pública con el fin de garantizar el pago de la multa, deberá, sin embargo, a pagar con esos bienes. En las secciones anteriores relativas a las multas se aplican por igual a un condicional sujeta bien a una orden de pago. (Ley 1983:351)

Sección 8

Una sentencia a los lapsos de cárcel si su ejecución no ha comenzado antes de que el período indicado a continuación ha transcurrido desde el momento en el que la sentencia adquirió fuerza de ley final:

1. cinco años, si el encarcelamiento por no más de un año fue de impuesto,
2. diez años, si pena de prisión de más de un año, pero no más de cuatro años se impuso,
3. quince años, si el encarcelamiento por más de cuatro años, pero no más de ocho años se impuso,
4. veinte años, si el encarcelamiento por un término fijo de más de ocho años se impuso,
5. treinta años, si la cadena perpetua impuesta. (Ley 1971:964)

Sección 9

Si el cumplimiento de reclusión por un término fijo se interrumpe, las disposiciones del Artículo 8 serán de aplicación en consecuencia relativa a la continuación de la aplicación de tales medidas y el tiempo se calcula teniendo en cuenta lo que queda del impuesto castigo. El tiempo se contará desde la fecha de la produjo la interrupción o, si la libertad condicional ha sido concedida, pero declaró revocada, a partir de la fecha en que la resolución de caducidad adquirió fuerza de ley final.

Sección 10

Una frase que cierra los lapsos de atención de menores de edad, si su ejecución no tiene comenzado el plazo de cinco años desde el momento en la sentencia definitiva adquirió fuerza legal.

Si la ejecución de la sentencia se ha interrumpido entonces, que es prevista en el párrafo primero será aplicable en materia de la aplicación continua. El tiempo se contará desde el día de la interrupción. (Ley 1998:604)

Sección 11. Derogada (Ley 1986:645)

29.1. El Anteproyecto de Código Penal Sueco de 1916

CAPITULO XIII: DE LA EXTINCIÓN (*boridallande*) DE LA PENA

§ 1. Se extingue la pena del delito que no fue perseguido:

1. antes de los veinticinco años, si el delito está castigado por la ley con pena perpetua de privación de libertad;
2. antes de los veinte años, si el máximo de la pena, con que se halla castigado el delito por la ley, es de privación temporal de libertad superior a quince años;
3. antes de los quince años, si el máximo de la pena es de privación de libertad superior a ocho años, pero no a quince.

4. antes de los diez años, si el máximo de la pena es de privación de libertad superior a tres años, pero no a ocho;

5. antes de los cinco años, si el máximo de la pena es de privación de libertad superior a un año, pero no a tres; y

6. antes de los dos años, si el máximo de la pena es menor que el establecido en el núm. 5.

§ 2. Cuando la Ley - en los Caps. IV ó V - en razón de las especiales circunstancias personales del delincuente, atenúa o agrava el máximo de la pena, con que el delito, en otro caso, hubiera sido castigado, se estimará la duración, de que se hace mención en el § 1, según el máximo de la pena de tal modo atenuada o agravada.

§ 3. Con respecto al delito, que está solamente castigado en la ley con la pena de que se hace mención en el § 27 del Cap. II, se extinguirá la pena cuando el delito no fue perseguido antes de los diez años. Cuando el delito está, a la vez castigado por la ley con esta pena y con pena principal común, el plazo para la interposición del procedimiento, será también de diez años; pero cuando la pena común sea aquella de que se hace mención en los párrafos 1º, 2º ó 3º del § 1 de este capítulo, se aplicará respecto del plazo para la interposición del procedimiento, lo que allí se encuentra establecido para cada caso.

§ 4. Cuando es castigado un delito con la agravación, que para el caso especial se establece en el § 17 del Cap. II, se contará el plazo para la interposición del procedimiento, en vista de la pena, con que el delito es castigado de ordinario.

§ 5. Los términos marcados en los §§ 1 y 3, se contarán, cuando no se disponga otra cosa, desde el día en que el acto del delincuente fue cometido; en el caso de que la tipicidad legal del delito esté en relación con algún resultado del acto, se contarán desde el día en que hubiese sido consumado el delito por la producción del resultado.

Quando en el modo de obrar sean varias las acciones delictivas que reunidas constituyen un delito, se contarán los términos desde que tuvo lugar el último acto o resultado de que se habla en el párrafo 1º.

Quando el resultado delictivo del acto consistiese en haber privado a un individuo de su libertad injustamente, por sentencia o por otro medio, los términos de que aquí se hace mención, no se contarán hasta que hubiere recobrado la libertad o hubiese muerto.

§ 6. Se considerará iniciado el procedimiento, cuando se requiera en forma legal al acusado para que conteste a los cargos (*hållelse till svaromål*).

Quando el procedimiento, que fue iniciado en tiempo oportuno, se interrumpe sin culpa del acusado, pero de tal modo que pueda reanudarse el mismo procedimiento, no se considerará extinguido el derecho de continuarle hasta que transcurran los plazos establecidos para cada caso en los §§ 1 y 3, a partir del día en que tuvo lugar la interrupción.

Quando el procedimiento se interrumpe, sin culpa del acusado, de tal modo que el mismo proceso no pueda reanudarse, se estimará, respecto de la extinción de la pena, que no tuvo lugar acusación alguna.

Quando el procedimiento se interrumpe por culpa del acusado, no se extinguirá la pena hasta que transcurra el plazo que se encuentra establecido en el § 9.

§ 8. Cuando el individuo que ha cometido alguno de los delitos de que se hace mención en los párrafos 1º, 2º ó 3º del § 1, comete después otro delito, que está castigado en la ley con pena de reclusión, antes de que hayan transcurrido los plazos para la persecución marcados en cada caso, a partir de la comisión del delito o de la interrupción de que se trata en el párrafo 2º del § 6, el plazo referente al derecho de perseguir el primer delito se contará desde el último delito, y se aplicará, con respecto a la persecución que tenga lugar dentro de este plazo, lo que se dispone en el § 6.

§ 9. En ningún caso podrá perseguirse un delito después de transcurridos treinta años, o veinte cuando el delito no esté castigado por la ley con pena de reclusión, a partir del momento que se fija en el § 5.

§ 10. Cuando muere el culpable se extingue toda pena.

§ 11. Cuando durante la vida del culpable, la condena en que la multa fue impuesta, hubiera adquirido fuerza de ley y se hubiera embargado o puesto en depósito judicial (*allmänt förvar* para el pago de la multa, el dinero, u otros bienes muebles, la multa se hace efectiva en esos bienes.

§ 12. Cuando se hubieran embargado bienes inmuebles para el pago de la multa, pero no se hubiere realizado la adjudicación (*fördelning au köpeskillingen*), en vida del culpable, la multa no se tendrá que hacer efectiva, aunque los bienes hubieran sido puestos en venta antes de su muerte.

§ 13. Cuando, durante la vida del delincuente, hubiera adquirido fuerza de ley, la sentencia en que se hubiese impuesto la pena accesoria de que se trata en el § 34 del Cap. II se aplicará, también, la pena accesoria cuando fuese posible.

§ 14. La pena se extinguirá cuando la sentencia no se hubiese ejecutado antes de que hubiesen transcurrido los plazos que a continuación se expresan, a contar desde que la sentencia hubiera sido firme:

1. treinta años, cuando se hubiera impuesto pena perpetua de privación de libertad;
2. veinticinco años, cuando se hubiera impuesto pena temporal de privación de libertad superior a quince años;
3. veinte años, cuando se hubiera impuesto pena de privación de libertad de más de ocho años y de quince como máximo;
4. quince años, cuando se hubiera impuesto pena de privación de libertad de más de tres años y de ocho como máximo;
5. diez años, cuando se hubiera impuesto pena de privación de libertad de más de un año y de tres como máximo; y
6. cinco años, si la pena fuera inferior a la mencionada en el núm. 5.

§ 15. Con respecto a la pena establecida en el § 27 del Cap. II, no es aplicable el plazo marcado para la ejecución de la condena.

§ 16. Cuando se hubiera impuesto una pena temporal de privación de libertad y se hubiese interrumpido la ejecución, después de haberse cumplido una parte de la misma, se contará el nuevo plazo, para la continuación de la ejecución, desde el día en que tuvo lugar la interrupción, ó, cuando se trate del caso mencionado en los §§ 2 ó 3 del Cap. XII, desde que la sentencia o la resolución, de que allí se habla, hubieran adquirido fuerza de ley; y el plazo a que se refiere el § 14, se determinará en consideración a la duración de la parte de la pena que quede después de la computación de lo que ya se hubiese cumplido.

§ 17. Cuando la multa impuesta se hubiera hecho efectiva en parte, pero no enteramente, y no se hubiera convertido en prisión, se extinguirá lo que quede por pagar si transcurren cinco años desde que la condena de multa fuere firme.

§ 18. Cuando fue impuesta la pena de que se trata en los párrafos 1º, 2º, 3º ó 4º del § 14, pero no se llegó a ejecutar, y el condenado comete un nuevo delito, que está castigado en la ley con pena de reclusión, antes de transcurrir el plazo que allí se establece para cada caso, el plazo para la ejecución de la primera sentencia será igual que el mencionado anteriormente, a contar desde el último delito.

Cuando tuviese lugar una interrupción en la ejecución de dicha pena, y el condenado cometiese el delito de que aquí se trata, antes de haber transcurrido el plazo marcado en el § 16, el plazo para la continuación de la ejecución de la pena se contará también desde la comisión del delito.

§ 19. Cuando un individuo fue condenado a custodia en un establecimiento de que se hace mención en los §§ 4 y 5 del Capítulo III, y no se hubiese ejecutado la condena antes de veinte años, desde que ésta hubiera sido firme, se considerará extinguida aquélla.

Cuando la custodia que comenzó a ejecutarse dentro del plazo, se interrumpe después, no podrá continuarse en ningún caso, la ejecución, si hubieran transcurrido treinta años desde que la sentencia hubiera sido firme.

30. CÓDIGO PENAL DE SUIZA⁶⁰⁹:

LIBRO UNO: DISPOSICIONES GENERALES.

PRIMERA PARTE: LOS CRÍMENES Y DELITOS.

Art.10.- Delitos y faltas.

Definición:

1. En el presente Código, los delitos mayores se distinguen de los delitos de acuerdo con la severidad de las sanciones que el delito puede acarrear.
2. Los delitos graves son delitos que conllevan una pena de prisión de más de tres años.
3. Faltas son delitos que llevan a una pena privativa de libertad no superior a tres años o una multa monetaria.

Título Sexto: De la Prescripción.

Art. 97.- Prescripción de la acción penal. Término.

1. La acción penal prescribe a los:
 - a. Treinta años si el delito es punible con una pena privativa de libertad;
 - b. Quince años, si el delito es punible con una pena privativa de libertad de más de tres años;
 - c. Siete años, si el delito es punible con una pena distinta.

⁶⁰⁹ Código Penal de Suiza, de 21 de diciembre de 1937 (Situación al 1 de enero de 2012).

2. En el caso de actos sexuales con niños (art. 187) y los menores (art. 188) y en el caso de los delitos previstos en los artículos 111, 113, 122, 182, 189-191 y 195 que involucran a un niño menor de 16 años, el plazo de prescripción en cada caso se ejecuta al menos hasta que la víctima haya alcanzado la edad de 25 años.
3. Si la sentencia es dictada por un tribunal de primera instancia antes de la expiración del plazo de prescripción, el plazo no se aplica.
4. La limitación del derecho a enjuiciar en el caso de actos sexuales con niños (art. 187) y los menores (art. 188) y los delitos previstos en los artículos 111-113, 122, 182, 189-191 y 195 que involucran a un niño menor de 16 se rige por los párrafos 1-3, si el delito fue cometido antes de la modificación de 05 de octubre 2001 entró en vigor y la limitación del derecho a enjuiciar no había entrado en vigor.

Art. 98.- Comienzo.

El plazo de prescripción comienza:

- a. en el día en que el infractor haya cometido la infracción;
- b. el día en que se llevó a cabo el acto final, si el delito se compone de una serie de actos llevados a cabo en diferentes momentos;
- c. en el día en que la conducta criminal se extingue si la conducta delictiva se mantiene durante un período de tiempo.

Art. 99.- Plazo de prescripción para la ejecución de una sentencia. Períodos.

1. El derecho a ejecutar una sentencia está sujeta a un plazo de prescripción de:
 - a. 30 años si es una pena privativa de la vida ha sido impuesta;
 - b. 25 años, si una pena de prisión de diez o más años se ha impuesto;
 - c. 20 años si una pena privativa de libertad por lo menos cinco años y menos de diez ha sido impuesta;
 - d. 15 años, si una pena privativa de libertad de más de uno y menos de cinco años se ha impuesto;
 - e. cinco años si ninguna otra sentencia ha sido impuesta.
2. El plazo de prescripción de la pena de prisión es suspendida:
 - a. Durante la ejecución de esta sentencia sin interrupción o de otra pena privativa de libertad o la detención de inmediato se ejecuta en primer lugar la detención.
 - b. El caso de la libertad condicional durante el período de prueba

Art. 100.- Comienzo.

El plazo de prescripción comenzará el día en que la sentencia sea legalmente exigible, y en el caso de suspensión de la condena o la ejecución de una medida, en el día en que se ordenó la ejecución de la pena.

Art.101.- Imprescriptibilidad.

1. No existe ninguna limitación del derecho a enjuiciar a los delitos de:
 - a. El genocidio (art. 264);
 - b. Crímenes de lesa humanidad (art. 264a párrafo 1 y 2.);
 - c. Crímenes de guerra (art. 264c párrafo 1-3, 264d del párrafo 1 y 2, 264e del párrafo 1 y 2, 264f, 264g del párrafo 1 y 2 y 264 h);
 - d. Delitos graves que hayan causado o amenaza causar un peligro para la vida y la integridad física de un gran número de personas como un método de extorsión o coacción, en particular mediante el uso de medios de destrucción masiva, la causa de las catástrofes, o como parte de una toma de rehenes delito.
2. Si el derecho de perseguir el delito habría sido prescrito tenía los artículos 97 y 98 aplicadas, el tribunal podrá a su discreción, imponer una pena más leve.
3. Los apartados 1 letras A, C y D y el apartado 2 se aplican si el derecho de enjuiciar o ejecutar la sentencia no habrían prescrito al 1º de enero de 1983, en conformidad con la legislación vigente hasta ese momento. El apartado 1 letra b se aplica si al momento de la entrada en vigencia de la enmienda o modificación del 18 de junio de 2010 de la presente ley, la acción penal o la pena no había prescrito en virtud de la ley hasta en aquel entonces vigente.

30.1. Código Penal de Suiza⁶¹⁰.

CAPÍTULO III: LA PRESCRIPCIÓN

70. Plazos de prescripción de la acción penal.- La acción penal prescribe:

- A los veinte años si la infracción se sanciona con reclusión perpetua;
- A los diez años si ella está sancionada con reclusión;
- A los cinco años si está sancionada con otras penas.

71. Comienzo.- La prescripción se inicia:

- El día en que el delincuente ha realizado su actividad culpable;
- Si esta actividad se realiza en varias ocasiones, a partir del día del último acto;
- Si los actos culpables tienen una determinada duración, a partir del día en que ellas cesan.

72. Suspensión e interrupción.- 1. Si el delincuente sufre en el extranjero una pena privativa de la libertad, la prescripción se suspende dependiendo de la ejecución de dicha pena.

2. La prescripción se interrumpe por todo acto de investigación de una autoridad encargada de la ejecución o por toda decisión del juez dirigida contra el autor, particularmente por las citaciones e interrogatorio, las órdenes de arresto o de visita domiciliaria, por las resoluciones periciales, asimismo por todo recurso contra una resolución.

A cada interrupción un nuevo plazo de prescripción comenzará a correr. Sin embargo, la acción penal prescribirá en todo caso cuando el plazo ordinario haya excedido una mitad, y para las infracciones contra el honor y las contravenciones, a la finalización de un plazo del doble de la duración normal.

73. Plazos.- 1. Las penas prescriben:

- La reclusión perpetua a los treinta años;
- La reclusión por encima de los diez años a los veinticinco años;
- La reclusión de cinco a diez años, a los veinte años;
- La reclusión por debajo de los cinco años a los quince años;
- La prisión por más de un año a los diez años;
- Todas las otras penas a los cinco años.

2. La prescripción de la pena principal lleva consigo la prescripción de las penas accesorias.

74. Comienzo.- La prescripción se inicia el día en que a criterio judicial los actos son ejecutados y, en caso de condena con sobreseimiento o de ejecución de una medida de seguridad, a partir del día en que la ejecución de la pena es ordenada.

75. 1) Suspensión e interrupción.- 1. La prescripción de una pena privativa de la libertad se suspende dependiendo de la ejecución ininterrumpida de esta pena, de la ejecución inmediatamente anterior de otra pena privativa de libertad o de una medida de seguridad y condicionada por el plazo de prueba en caso de liberación condicional.

2. La prescripción se interrumpe por la ejecución de la pena y por todo acto hecho en vía de ejecución por la autoridad encargada.

A cada interrupción, un nuevo plazo de prescripción comenzará a correr. Sin embargo, la pena prescribirá en todo caso cuando el plazo ordinario haya excedido en una mitad.

75 bis 2) Imprescriptibilidad.- 1. Son imprescriptibles:

1. Los crímenes dirigidos a exterminar u oprimir un grupo de la población en razón a su nacionalidad, de su raza, de su confesión o de su pertenencia étnica, social o política.
2. Los delitos graves previstos por la Convención de Génova del 12 de Agosto de 1949 y por los demás acuerdos internacionales concernientes a la protección de las víctimas de guerra, de los cuales Suiza es parte, cuando la infracción considerada específicamente presente una gravedad particular a causa de las condiciones en las cuales ella ha sido cometida.
3. Los delitos perpetuos realizados con violencia o extorsión y que colocan en peligro o amenazan colocar en peligro la vida y la integridad corporal de las personas particularmente por la utilización de medios de exterminación masiva, por el desencadenamiento de una catástrofe o por captura de rehenes.

2. El juez podrá atenuar libremente la pena dentro de los casos donde la acción penal haya prescrito en aplicación de los artículos 70 a 72.

⁶¹⁰ Del 21 de diciembre 1937, versión original.

30.2.- Anteproyecto de 1916.

LA PRESCRIPCIÓN

70. Prescripción de la acción penal. Plazo de prescripción.- La acción penal prescribe:

- A los veinte años si el delito está penado con reclusión perpetua;
- A los diez años si el delito está castigado con reclusión;
- A los cinco años si el delito se castiga con otra pena.

71. Comienzo de la prescripción.- La prescripción se inicia:

- A partir del día que el delincuente realiza su actividad culpable;
- Si esta actividad se desarrolla en múltiples ocasiones, a partir del día del último acto;
- Si los actos culpables tienen una determinada duración, a partir del día en que ellos cesan.

72. Suspensión e interrupción de la prescripción. - 1. Si el delincuente sufre en el extranjero una pena privativa de libertad, la prescripción se suspende dependiendo de la ejecución de dicha pena.

2. La prescripción se interrumpe por toda citación del inculcado ante un juez de instrucción o ante un tribunal suizo para responder del delito.

3. Sin embargo, la acción penal prescribe en todo caso cuando la duración del plazo ordinario de prescripción exceda en una mitad.

73. Prescripción de la pena. Plazos de prescripción. - Las penas prescriben:

- La reclusión perpetua a los treinta años;
- La reclusión por encima de diez años a los veinticinco años;
- La reclusión de cinco a diez años a los veinte años;
- La reclusión por debajo de los cinco años, a los quince años;
- La prisión por más de un año, a los diez años;
- Todas las otras penas a los cinco años.

74. Comienzo de la prescripción.- La prescripción se inicia a partir del día de la condena; si existe condena condicional, a partir del vencimiento del plazo de prueba.

75. Interrupción de la prescripción.- 1. La prescripción se interrumpe por la ejecución de la pena y por todo acto hecho en vía de ejecución por la autoridad encargada de esta última.

2. Sin embargo, la pena prescribe en todo caso cuando la duración del plazo ordinario de prescripción exceda en una mitad.

30.3. Proyecto de Código Penal Federal Suizo de 1918

LIBRO PRIMERO. DE LOS DELITOS

PARTE GENERAL

CAPÍTULO III: PENAS, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y OTRAS MEDIDAS

I.- DE LAS DIFERENTES PENAS Y MEDIDAS

Artículo 40.- Internamiento de los delincuentes habituales.-

(...)

8.- Si el internamiento no se hubiere podido llevar a cabo antes de prescribir la pena, dejará de ser aplicable. Transcurridos más de diez años, después de la condena, la autoridad competente decidirá si procede el cumplimiento de la pena impuesta o el internamiento.

III.- DE LA PRESCRIPCIÓN

1.- Plazos de prescripción

Artículo 67.- La acción penal prescribirá:

- A los años veinte, si el delito está penado con reclusión perpetua;
- A los diez años, si está penado con reclusión;
- A los cinco años, si está castigado con otra pena.
- Punto de partida de la prescripción.

Artículo 68.- La prescripción empezará a correr:

- A partir del día en que el delincuente haya realizado el acto punible;
- Si dicha actividad se hubiera desplegado en varias ocasiones, a partir de la fecha del último acto realizado;
- Si los manejos punibles hubieran sido de cierta duración, a partir del día en que hayan cesado.
- Suspensión e interrupción de la prescripción.

Artículo 69.- Cuando el delincuente esté sufriendo en el extranjero una pena de privación de libertad, la prescripción quedará suspendida durante el cumplimiento de dicha pena.

La prescripción quedará interrumpida por cualquier citación del acusado ante un juez de instrucción o un tribunal suizo para responder del delito de que se trate.

Esto no obstante, la acción penal prescribirá en todo caso cuando la duración del período ordinario de prescripción haya pasado de la mitad.

Artículo 70.- Plazo de prescripción.- Las penas prescribirán como sigue:

- La reclusión perpetua, a los treinta años;
- La reclusión de diez años o mas (sic), a los veinticinco años;
- La reclusión de cin(sic) a diez años, a los veinte años;
- La reclusión por menos de cinco años, a los quince años;
- La prisión por menos de un año, a los diez años;
- Todas las demás penas, a los cinco años.

Artículo 71.- Punto de partida de la prescripción.- La prescripción empezará a correr a partir de la fecha en que quede firme la sentencia; y en caso de condena condicional, a partir de la terminación del período de prueba.

Artículo 72.- Interrupción de la prescripción.- La Prescripción quedará interrumpida por la ejecución de la pena y por acto encaminado a la ejecución de la misma, realizado por la autoridad encargada de dicha ejecución.

Esto no obstante, la pena prescribirá en todo caso cuando la duración del plazo ordinario de prescripción haya pasado de la mitad.

V.- DE LOS MENORES DE DIEZ Y OCHO A VEINTE AÑOS

Artículo 79.- Disposiciones especiales.- Si en el momento de cometerse un delito su autor tuviere más de diez y ocho años de edad, pero no hubiere cumplido los veinte. El juez aplicará las disposiciones siguientes:

1. La reclusión perpetua será substituida por la reclusión por cinco años, por lo menos.
2. Si la ley señala para el delito una pena de privación de libertad con un mínimo determinado, el juez podrá imponer una pena de duración menor.
3. En caso de que existan circunstancias atenuantes, el juez podrá convertir cualquier pena de reclusión en pena de prisión, de seis meses a cinco años, y toda pena de prisión en arresto.
4. Los plazos de prescripción se reducirán a la mitad.
5. En todo caso los condenados estarán durante su menor edad absolutamente separados de los demás detenidos mayores de edad.

LIBRO SEGUNDO.DE LAS FALTAS

PARTE GENERAL

Prescripción

Artículo 294.- La acción penal prescribirá a los seis meses y la pena, al año.

LIBRO TERCERO. ENTRADA EN VIGOR Y APLICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL

CAPÍTULO PRIMERO

3. RELACIÓN ENTRE EL CÓDIGO PENAL Y LA LEGISLACIÓN ANTERIOR

Artículo 354.- Prescripción.- Las disposiciones del presente Código relativas a la prescripción de la acción penal y de las penas, serán aplicables a las infracciones cometidas y a las penas impuestas antes de la entrada en vigor de este Código, siempre que dichas disposiciones sean más favorables al autor de la infracción que las de la ley anterior. Se tendrá en cuenta el tiempo durante el cual haya corrido la prescripción antes de la entrega en vigor del presente Código.

31. CÓDIGO PENAL DE URUGUAY⁶¹¹

LIBRO I: PARTE GENERAL

TÍTULO VIII: DE LA EXTINCIÓN DE LOS DELITOS Y DE LAS PENAS

CAPÍTULO I: DE LA EXTINCIÓN DEL DELITO

Art. 107.- Muerte del reo antes de la condena. La muerte del reo sobreviniendo con anterioridad a la condena, extingue el delito y si ocurriera después de ella, hace cesar sus efectos.

Art. 108.- De la amnistía. La amnistía extingue el delito y si mediara condena hace cesar sus efectos.

No alcanza, sin embargo, a los reincidentes ni a los habituales, salvo que en la ley se estableciera expresamente lo contrario.

Art. 109.- Gracia. La gracia extingue el delito cuando fuere otorgada por la Alta Corte de Justicia de acuerdo con lo que prescribe el artículo 14 de la ley de 28 de octubre de 1907. No procede respecto de los reincidentes y habituales. (21)

Art. 110.- Remisión. La remisión extingue el delito tratándose de las infracciones que no pueden perseguirse sino mediante denuncia del particular ofendido o a querella de parte.

Art. 111.- Formas de la remisión y oportunidad para su otorgamiento. La remisión es expresa o tácita y sólo puede surtir efectos cuando sobreviniere antes de la acusación Fiscal, en los delitos que se siguen de oficio, o mediante denuncia del ofendido y previamente a la condena, en los que se siguen a querella de parte.

Art. 112.- De la remisión tácita. La remisión es tácita cuando el ofendido o el querellante hubieran realizado actos incompatibles con el mantenimiento de la querella o la perduración del agravio.

Art. 113.- Titulares de la remisión. La remisión sólo puede otorgarse por los representantes legales de las personas incapaces. La remisión otorgada por el incapaz, contra la voluntad de su representante será tomada en cuenta por el Juez para decretar o no la extinción del delito, según las condiciones personales del primero y los motivos que determinaron el perdón.

Art. 114.- Pluralidad de ofensores y ofendidos. Cuando fueren varios los ofensores, la remisión acordada en forma a uno de ellos, aprovecha a los demás.

Cuando fueren varios los ofendidos, se requiere el perdón de todos ellos para que se extinga el delito.

Art. 115.- De la aceptación de la remisión, de sus formas y de los casos de conflicto. La remisión no puede ser condicional ni a término y sólo surte efecto en cuanto no haya sido expresa o tácitamente desechada.

Se considera aceptación tácita, la falta de oposición al desistimiento dentro de tercero día, además de cualquier otro acto incompatible con la voluntad del procesado de continuar el proceso.

Si mediara oposición entre el ofensor y su representante legal en cuanto a la aceptación de la remisión, el conflicto será resuelto de acuerdo con el principio que rige el otorgamiento de la remisión.

Art. 116.- Extinción del delito por casamiento. El matrimonio del ofensor con la ofendida extingue el delito o la pena en su caso, tratándose de los delitos de violación, atentado violento al pudor, estupro y rapto. (22)

Art. 117.- Del término de la prescripción de los delitos. Los delitos prescriben:

1° Hechos que se castigan con pena de penitenciaría:

- a) Si el máximo fijado por la ley es mayor de veinte años, hasta los treinta años, a los veinte años,
- b) Si el máximo es mayor de diez, hasta los veinte, a los quince años.
- c) Si el máximo es mayor de dos hasta los diez, a los diez años.

2° Hechos que se castigan con pena de inhabilitación absoluta para cargos, oficios públicos y derechos políticos, prisión o multa, a los cuatro años.

3° Hechos que se castigan con inhabilitación especial para cargos, oficios públicos, profesiones académicas, comerciales o industriales, y suspensión de cargos u oficios públicos, a los dos años.

Cuando hubiera comenzado a correr la prescripción del delito existiendo acusación o sentencia condenatoria no ejecutoriada, será la pena pedida o la impuesta en el fallo, en su caso, la que se tendrá en cuenta para la fijación de las reglas que preceden.

Las disposiciones que anteceden no se aplican a los casos en que procede la adopción de medidas de seguridad, respecto de tales medidas, ni a los delitos en que por la ley, se fijan términos especiales de prescripción. (23)

Art. 118.- Del término para la prescripción de las faltas.

Las faltas prescriben a los dos meses.

Art. 119.- Punto de partida para la computación de los delitos.

⁶¹¹ Ley 9,155.

El término empieza a correr, para los delitos consumados, desde el día de la consumación; para los delitos tentados, desde el día en que se suspendió la ejecución; para los delitos cuya existencia o modalidad requiere diversos actos o diversas acciones -delitos colectivos y continuados- desde el día en que se ejecuta el último hecho o se realiza la última acción; para los delitos permanentes desde el día en que cesa la ejecución.

Art. 120.- De la interrupción de la prescripción por actos de procedimiento.

El término de la acción penal se interrumpe por la orden judicial de arresto, empezando a correr de nuevo, desde que el proceso se paraliza. En los delitos en que no procede el arresto, el término se interrumpe por la simple interposición de la denuncia.

Art. 121.- De la interrupción de la prescripción por nuevo delito.

Interrumpe la prescripción cualquier transgresión penal cometida el país o fuera de él, con excepción de los delitos políticos, de los delitos culpables y de las faltas.

Art. 122.- De la suspensión de la prescripción.

La prescripción no se suspende, salvo en los casos en que la ley hiciera depender la iniciación de la acción penal o la continuación del juicio, de la terminación de otro juicio civil, comercial o administrativo.

Art. 123.- De la elevación del término de la prescripción.

El término de la prescripción se eleva en un tercio, tratándose de los delincuentes reincidentes, de los habituales y de los homicidas que, por la gravedad del hecho, en sí mismo, la naturaleza de los móviles o sus antecedentes personales, se perfilan en concepto del Juez, como sujetos peligrosos.

Art. 124.- Declaración de oficio.

La prescripción será declarada de oficio, aun cuando el reo no la hubiere alegado.

Art. 125.- Prescripción de la acción civil.

Rigen para la prescripción de la acción civil, los mismos términos que para la prescripción de los delitos.

Art. 126.- De La suspensión condicional de la pena.

Se extingue el delito cuando el Juez, al dictar sentencia, resuelve suspender la condena, siempre que el beneficiado, además de cumplir las obligaciones que le fueren impuestas por la ley o judicialmente, se abstuviere de cometer delitos, durante un período de cinco años.

Para que la condena pueda ser expedida se requiere:

1° Que se trate de penas de prisión o de multa, cuando por defecto de cumplimiento, deba ésta transformarse en pena de prisión.

2° Que trate de delincuentes que no hayan cometido en el pasado otros delitos y que el Juez prevea, por el examen de sus antecedentes, que no han de cometerlos en el porvenir.

Las obligaciones que el Juez puede imponer son las siguientes:

- a) Restitución de las cosas provenientes del delito;
- b) Pago de las indemnizaciones civiles emanadas del mismo;
- c) Prohibición de domiciliarse en ciertos lugares o de concurrir a ciertos sitios. (24)

Art. 127.- Del perdón judicial.

Los Jueces pueden hacer uso de esta facultad en los casos previstos en los artículos 36, 37, 39, 40 y 45 del Código.

CAPÍTULO II: DE LA EXTINCIÓN DE LA PENA

Art. 128.- Del indulto. El indulto extingue la pena, con las mismas limitaciones establecidas para la amnistía, respecto de la clase de delincuentes excluidos de este beneficio por el artículo 108 de este Código.

Art. 129.- De la prescripción de la condena. La pena se extingue por un transcurso de tiempo superior a un tercio del que se requiere para la extinción del delito, debiendo empezar a contarse dicho término desde el día en que recayó sentencia ejecutoriada o se quebrantó la condena.

Es aplicable a la prescripción de las penas el artículo 123 relativo a la prescripción de los delitos.

Art. 130.- De la interrupción de la prescripción por nuevo delito o por la detención. Esta prescripción se interrumpe por la ejecución de nuevo delito cometido en el país o fuera de él, así como por la detención del reo.

Art. 131.- A) Libertad anticipada: La Suprema Corte de Justicia, previo informe del Director del Establecimiento Penal, del Instituto Técnico Forense y del Fiscal de Corte, y siempre que se den pruebas de corrección moral y que los Jueces no hayan pronunciado una medida de seguridad, podrá con ceder la libertad anticipada, en los siguientes casos:

1° Si la condena es de penitenciaría, deberá el reo haber cumplido la mitad de la pena impuesta, computándose siempre un día de libertad por cada día de buena conducta.

2° Si la pena recaída es de prisión o multa, podrá concederse sea cual fuese el tiempo de reclusión sufrida.

B) Libertad condicional: Si al quedar ejecutoriada la sentencia condenatoria el penado se hallare en libertad provisional, se suspenderá su reingreso a la cárcel mientras la Suprema Corte, previos los informes a que se refiere la primera parte de este artículo, resuelva de oficio si otorga o no la libertad condicional; a ese efecto el Juzgado respectivo elevará los autos inmediatamente de aprobada la liquidación de la pena.

La libertad condicional podrá ser otorgada cualquiera haya sido el tiempo de detención, y se revocará sólo por quebrantamiento de la vigilancia de la autoridad o por la mala conducta del liberado. (25)

32. CÓDIGO PENAL TIPO PARA LATINOAMÉRICA (Publicado bajo la dirección del Profesor Gissolfá, Ed. Jurídica de Chile, Año 1974 Abril, Santiago de Chile).

PARTE GENERAL

TOMO I

Artículo 98.- La muerte del procesado extingue a su respecto la acción penal, y la del condenado, toda pena que le haya sido impuesta.

Artículo 99.- La amnistía extingue la acción penal y la pena, ahí como todas las consecuencias penales de esta última.

Artículo 100.- El indulto extingue en todo en parte la pena impuesta por sentencia ejecutoriada, o la conmuta por otra más benigna. El indulto que condena toda la pena no priva de la condición del condenado para los demás efectos legales.

Las penas accesorias solamente se extinguen por el indulto cuando son expresamente comprendidas en él.

No puede ser objeto de indulto la inhabilitación para ejercer una profesión o algún derecho civil o político, o para desempeñar algún cargo, comisión o empleo.

No es procedente el indulto sin el previo informe favorable de los órganos jurisdiccionales y técnicas correspondientes.

Artículo 101.- El perdón del ofendido o de sus representantes legales, si fuese incapaz, extingue la acción penal por delitos de acción privada, pero no impide la ejecución de la condena firme.

Cada uno de los ofendidos puede ejercitar separadamente la facultad de perdonar el delito y ella tendrá afectar solamente a su respecto.

El perdón otorgado a uno o algunos beneficia a todos los que resultan penalmente responsables; pero no produce efectos respecto de aquél que se niegue a aceptarlo.

Artículo 102.- La acción penal prescribe:

1° A los veinte años, si la pena fijada para el delito es de prisión que no exceda de quince años.

2° Transcurrido un tiempo igual al máximo de la pena de prisión fijada para el delito, el que no podrá ser inferior a un año ni superior a quince.

3° A los tres años, en los delitos penados con multa o inhabilitación.

Artículo 103.- La prescripción de la acción penal comenzará a correr desde el día de la consumación del delito; o desde aquél en que cesó de cometerse, si fuese permanente; o cuando tuvo lugar el último acto de ejecución, en caso de tentativa.

Artículo 104.- La prescripción de la acción penal se suspende:

1° Cuando el juzgamiento no puede promoverse o proseguirse si no después de una autorización especial, o cuando depende de cuestiones previas o prejudiciales que deban ser resueltas en otro juicio.

2° Por toda resolución judicial contra persona determinada que sirva de base a la relación procesal, siempre que existen respecto de su responsabilidad.

Producida la autorización, decidida la cuestión previa o judicial o dictada una resolución judicial que detenga la tramitación del proceso o le ponga término, no siendo una sentencia condenatoria, la prescripción seguirá su curso.

Artículo 105.- La prescripción de la acción penal se interrumpe por la comisión de un nuevo delito.

La prescripción interrumpida comenzará a correr nuevamente desde el día de la interrupción.

Artículo 106.- La prescripción comienza a correr, se suspende o se interrumpe, separadamente, para cada uno de los que han intervenido en el delito.

Artículo 107.- Cuando se tratan del juzgamiento de varios delitos, las respectivas acciones penales prescribirán separadamente para cada uno de ellas según el término legal que les corresponda.

Artículo 108.- La pena de prisión prescribe en un lapso equivalente al de la pena impuesta en la sentencia, aumentando en un tercio. En ningún caso podrá ser inferior a cinco años ni superior a veinticinco años.

Las penas de inhabilitación y de multa prescriben en cinco años.

Los plazos para la prescripción de penas de diferente naturaleza o de distinta duración, impuestas en una misma sentencia, se computarán separadamente según el término señalado para cada una.

Artículo 109.- El plazo para la prescripción de la pena comenzará a correr desde el día en que quedó firme la sentencia, o desde el día del quebrantamiento de la pena, si esta hubiese comenzado ejecutarse. En caso de quebrantamiento; la parte de la pena cumplida se computará a favor del reo.

Artículo 110.- La prescripción de la pena se interrumpe, quedando sin efecto el tiempo transcurrido, cuando el condenado cometen un nuevo delito antes de vencido el término para la prescripción o cuando se presentarse espontáneamente o fuese capturado.

Artículo 111.- La prescripción de la acción penal y de la pena deberá declararse de oficio o a petición de parte por el tribunal.

Artículo 112.- La extinción de la acción penal o de la pena no afecta lo dispuesto en el artículo 97 ni otras afectos no penales del delito.

33. CÓDIGO PENAL PARA EL REINO DE BAVIERA DE 1813⁶¹²

LIBRO PRIMERO: DISPOSICIONES LEGALES GENERALES SOBRE CRIMENES Y DELITOS

CAPÍTULO V: DE LAS CAUSAS QUE SUPRIMEN LA PUNIBILIDAD

Art. 137 [B. Medios de cancelación de la punibilidad. I, conocimiento judicial y pena cumplida].- Nadie podrá ser penado más de una vez por el mismo crimen, salvo en los casos previstos en la segunda parte, art. 399.

La medida en que tenga lugar una readmisión de la investigación contra los que hubiesen sido absueltos por una sentencia firme, la determinan los arts. 394 a 396 de la segunda parte.

Art. 138 [II, muerte del infractor. De la obligación de los herederos].- La muerte del infractor cancela la pena.

Sin embargo, pasan a sus herederos las penas patrimoniales dictadas durante el tiempo de su vida.

Si el mismo hubiese muerto después de interponer recurso contra la sentencia de primera instancia y antes de la consiguiente segunda instancia, estarás obligados los herederos por el juicio de la segunda instancia, en tanto comprometa al patrimonio.

Los herederos responden sin limitaciones ni condición por las restituciones, reparaciones de daños y costas procesales.

Art. 139 [III, de la prescripción].- El transcurso de un tiempo determinado no es por sí solo ninguna razón jurídica para cancelar el crimen ni su pena.

Sin embargo, si el autor permaneciese desconocido para el tribunal o la investigación o resolución resultante es omitida por culpa del juez, y si desde el momento de la comisión de la infracción hubiesen transcurrido los términos establecidos en el siguiente art. 140 y, además, el infractor hubiese demostrado durante su transcurso una buena conducta ininterrumpida, deberá, entonces, ser declarado libre de pena, quedando a salvo los derechos del afectado a la satisfacción privada.

Art. 140.- Los términos referidos en el precedente art. 139 son: I) En contravenciones que tengan sólo prisión o una pena leve, dos años; II) En crímenes a los que corresponda casa de trabajo, cinco años, III) En aquellos que estuviesen sometidos a presidio, aunque no mayor a doce años, diez años; IV) En crímenes que tuviesen establecida una pena de presidio más larga o la muerte, veinte años, computados desde la comisión del crimen.

34. CÓDIGO DE HAMMURABI

§25. Si se declara un incendio (fortuito) en la casa de un señor y (si) un señor que acudió a apagarlo pone los ojos sobre algún bien del dueño de la casa y se apropia de algún bien del dueño de la casa, ese señor será lanzado al fuego.

§129. Si la esposa de un señor es (sor)prendida acostada con otro hombre, los ligarán (uno a otro) y los arrojarán al agua. Si el marido de la mujer desea perdonar a su mujer, entonces el rey puede (a su vez) perdonar a su súbdito.

§131. Si la mujer de un señor es acusada por su marido, pero no se la (sor)prende cohabitando con otro hombre, pronunciará el juramento por el dios y volverá a su casa.

§196. Si un señor ha reventado el ojo de (otro) señor, se le reventará su ojo.

§198. Si ha reventado el ojo de un subalterno o ha roto el hueso de un subalterno, pesará una *mina* de plata.

§199. Si ha reventado el ojo del esclavo de un particular o ha roto el hueso del esclavo de un particular, pesará la mitad de su precio.

⁶¹² Promulgado por el Rey Maximiliano José en Múnich, el 16 de mayo de 1813.

§209. Si un señor ha golpeado a la hija de (otro) señor y motiva que aborte pesará diez *siclos* de plata por el aborto causado.

§210. Si esta mujer muere, su hija recibirá la muerte.

§212. Si esta mujer muere, pesará media *mina* de plata.

§214. Si esta esclava muere, pesará un tercio de *mina* de plata.

35. CODIGO DE DERECHO CANÓNICO⁶¹³ de 1983⁶¹⁴

LIBRO I: DE LAS NORMAS GENERALES

TÍTULO X: DE LA PRESCRIPCIÓN

197.- La Iglesia recibe, tal como está regulada en la legislación civil de la nación respectiva, la prescripción como modo de adquirir o perder un derecho subjetivo, así como de liberarse de obligaciones, quedando a salvo las excepciones que determinan los cánones de este Código.

198.- Ninguna prescripción tiene validez si no se funda en la buena fe, no sólo al comienzo, sino durante todo el decurso de tiempo requerido para la misma, salvo lo establecido en el c. 1362.

199.- No están sujetos a prescripción:

1. los derechos y obligaciones que son de ley divina natural o positiva;
2. los derechos que sólo pueden obtenerse por privilegio apostólico;
3. los derechos y obligaciones que se refieren directamente a la vida espiritual de los fieles;
4. los límites ciertos e indudables de las circunscripciones eclesiásticas;
5. los estipendios y cargas de Misas;
6. la provisión de un oficio eclesiástico que, por derecho, requiere el ejercicio del orden sagrado;
7. el derecho de visita y el deber de obediencia, cuya prescripción haría que los fieles no pudieran ya ser visitados por ninguna autoridad eclesiástica, ni quedasen sometidos a autoridad alguna.

TÍTULO XI: DEL CÓMPUTO DEL TIEMPO

200.- A no ser que el derecho disponga expresamente otra cosa, el tiempo debe computarse de acuerdo con los cánones que siguen.

201.-

§ 1. Por tiempo continuo se entiende aquel que no admite ninguna interrupción.

§ 2. Por tiempo útil se entiende el que concierne a quien usa o reclama su derecho, de tal manera que no corre para quien ignora o no puede reclamar.

202.-

§ 1. En derecho, se entiende por día el espacio de 24 horas contadas como continuas, y comienza a la media noche, a no ser que se disponga expresamente otra cosa; la semana es un espacio de siete días; el mes, un espacio de 30, y el año, un espacio de 365 días, a no ser que se diga que el mes y el año hayan de tomarse según el calendario.

§ 2. Si el tiempo es continuo, el mes y el año se han de computar siempre según el calendario.

203.-

§ 1. El día a quo no se cuenta en el plazo, a no ser que su inicio coincida con el principio del día o que el derecho disponga expresamente otra cosa.

§ 2. Si no se establece lo contrario, el día *ad quem* se incluye en el plazo, el cual, si consta de uno o más meses o años, o de una o más semanas, termina al cumplirse el último día del mismo número o, si el mes carece de día del mismo número, al acabar el último día del mes.

1362.-

§ 1. La acción criminal se extingue por prescripción a los tres años, a no ser que se trate:

1. de los delitos reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe;
2. de la acción por los delitos de los que se trata en los cc. 1394, 1395, 1397 y 1398, la cual prescribe a los cinco años;
3. de los delitos que no se castigan por el derecho común, si la ley particular determina otro plazo para la prescripción.

⁶¹³ Dado en Roma, el día 25 de Enero de 1983.

⁶¹⁴ Promulgado por la Autoridad de Juan Pablo II, Papa.

§ 2. El tiempo para la prescripción comienza a contarse a partir del día en el que se cometió el delito, o, cuando se trata de un delito continuado o habitual, a partir del día en que cesó.

36. CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Artículo XIX

Aplicación en el tiempo

Con sujeción a los principios constitucionales, al ordenamiento interno de cada Estado y a los tratados vigentes entre los Estados Partes, el hecho de que el presunto acto de corrupción se hubiese cometido con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Convención, no impedirá la cooperación procesal penal internacional entre los Estados Partes. La presente disposición en ningún caso afectará el principio de la irretroactividad de la ley penal ni su aplicación interrumpirá los plazos de prescripción en curso relativos a los delitos anteriores a la fecha de la entrada en vigor de esta Convención.

37.- LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN

Artículo 29

Prescripción

Cada Estado parte establecerá, cuando proceda, con arreglo a su derecho interno, un plazo de prescripción amplio para iniciar procesos por cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención y establecerá un plazo mayor o interrumpirá la prescripción cuando el presunto delincuente haya eludido la administración de justicia.

**ANEXO 3: EJECUTORIAS DE LA
CORTE SUPREMA DE LA
REPÚBLICA (PROCESADAS)**

EJECUTORIAS DE LA CORTE SUPREMA PROCESADAS

Nº	ARTÍCULOS Y TEMAS	SALA	EJECUTORIA	FECHA	PROVIENE DEL D.J.	FUNDAMENTOS	FALLO	MODIF.	PRESCRIP.	VOTO
1	I. Prescripción extraordinaria de la persecución penal	1º SPT	R.N.º3002-2007		Lima	Tercero: "...pues el delito de receptación... se encuentra sancionado con pena no menor de un año, ni mayor de tres años de privación de la libertad, por lo que estando a lo dispuesto en los artículos ochenta...y ochenta y tres...establece de manera indubitable que la extinción por prescripción extraordinaria en el presente caso se efectivizaría a los cuatro años y seis meses de ocurrido el evento presuntamente delictivo... Quinto: ...desde que los hechos denunciados se habrían perpetrado, esto es el diez de diciembre de dos mil dos, se tienen que la acción penal ha prescrito indefectiblemente el diez de junio de dos mil siete, plazo que ha sido excedido(...)" (pp.2 y 3).	Haber nulidad de sentencia	Reformándola	Prescrita la acción penal	Unánime
2		1º SPT	R.N.º3129-2007	2007	Lima	Quinto: "...el tipo penal materia de imputación es el comprendido en el artículo trescientos setenta y seis del Código Penal ...conducta que reprime el hecho delictivo con una sanción no mayor a los dos años de pena privativa de la libertad, término que se elevaría a tres años de conformidad a los alcances del último párrafo del artículo ochenta y tres del mencionado texto sustantivo, que constituiría el plazo de prescripción extraordinario, esto es, equivale al plazo ordinario de prescripción más una mitad, lo que conllevaría a colegir que desde el quince de junio de dos mil cuatro, a la fecha ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extraordinario... NULA la sentencia que condenó por delito contra la administración pública-abuso de autoridad" (pp.3).	Haber nulidad de sentencia	Reformándola	Fundada la Excepción de prescripción	Unánime

EJECUTORIAS DE LA CORTE SUPREMA PROCESADAS

Nº	ARTÍCULOS Y TEMAS	SALA	EJECUTORIA	FECHA	PROVIENE DEL D.J.	FUNDAMENTOS	FALLO	MODIF.	PRESCRIP.	VOTO
3		1º SPT	Queja.Nº1305-2009	2005	Arequipa	<p>"Segundo: Que se debe precisar que el recurso de queja excepcional es aquel que se interpone ante la Sala Penal Superior respecto de la denegatoria del recurso de nulidad, el cual resulta fundado siempre que se acredite que la resolución impugnada o el procedimiento que lo precedió infringió normas constitucionales o normas con rango de ley (...) Tercero: (...) no se ha observado que en el decurso del proceso para emitir la resolución en cuestión, se haya vulnerado normas constitucionales o procesales...al declarar extinguida la acción penal por prescripción, a favor de los procesados por el delito de usurpación en agravio del recurrente, ha cumplido conforme a los lineamientos establecidos conforme lo detalla en sus considerandos octavo y noveno, por lo que, al no haberse infringido norma con rango constitucional y procesal, no resulta admisible el recurso de nulidad vía excepcional(...)"(pp.2).</p>	Infundada a la queja			Unánime
4		1º SPT	R.N.Nº3513-2009	2009	Lima	<p>"Sétimo: Que, en virtud de lo glosado ut supra, y conforme a lo dispuesto en el artículo ochenta y ochenta y tres del Código Penal, el plazo prescriptorio extraordinario de la acción penal a que refieren el numeral ochenta del código sustantivo, debe computarse a partir de producidos los actos ilícitos, es decir, setiembre de mil novecientos noventa y siete, fecha que utilizó la escritura pública para vender el terreno sub litis; y que hasta la fecha no ha transcurrido el plazo de prescripción de la acción penal" (pp. 7 y 8).</p>	No haber nulidad de sentencia			Unánime

EJECUTORIAS DE LA CORTE SUPREMA PROCESADAS

N°	ARTÍCULOS Y TEMAS	SALA	EJECUTORIA	FECHA	PROVIENE DEL D.J.	FUNDAMENTOS	FALLO	MODIF.	PRESCRIP.	VOTO
5		1° SPT	R.N.N°381-2009	2009	Puno	<p>"Cuarto: Que en virtud de lo glosado ut supra, y conforme lo dispuesto en el inciso segundo del numeral ochenta y dos del Código Penal el plazo prescriptorio extraordinario de la acción penal a que se refieren los numerales ochenta tres in fine del citado cuerpo legal, deben computarse a partir de producidos los actos ilícitos del procesado-que según la imputación fiscal datan de los años mil novecientos noventa y dos a mil novecientos noventa y tres-y que hasta la fecha han transcurrido más de doce años. Quinto: Que, siendo esto así, se ha cumplido en exceso el plazo prescriptorio extraordinario de la acción penal para el delito de peculado materia de incriminación, el que es de dos a ocho años en atención al extremo máximo de la pena para dicho delito, razón por la cual la acción liberadora del tiempo ha operado, extinguiendo de pleno derecho la acción penal incoada (...)"(pp.3 y 4).</p>	No haber nulidad de sentencia		Prescrita la acción penal	Unánime

EJECUTORIAS DE LA CORTE SUPREMA PROCESADAS

N°	ARTÍCULOS Y TEMAS	SALA	EJECUTORIA	FECHA	PROVIENE DEL D.J.	FUNDAMENTOS	FALLO	MODIF.	PRESCRIP.	VOTO
6		1° SPT	R.N.N°3974-2009	2009	Lima	<p>"Sexto: ..se advierte que desde el inicio del proceso penal se procesó a la encausada...por el delito de lesiones culposas leves previsto en el primer párrafo del artículo ciento veinticuatro del Código Penal, no existiendo ninguna resolución judicial que disponga contra ella la ampliación del auto de apertura de instrucción por el delito de lesiones culposas previsto en el tercer párrafo del artículo ciento veinticuatro del acotado catálogo punitivo, como sí sucedió con el encausado Segundo Alberto Ruíz Aponte, por ello, el Tribunal de alzada al absolver el grado se circunscribió a analizar no sólo lo que era materia de grado, sino a determinar si la acción penal por la que se le instauró proceso penal a la citada encausada se encontraba habilitada en razón al tiempo transcurrido, lo cual como bien señala en su quinto fundamento jurídico imposibilitó emitir pronunciamiento respecto al fondo de la resolución impugnada y también mandar ampliar el auto de apertura de instrucción para agravar el tipo penal contra la encausada...circunstancia de hecho que incluso ya había operado al momento que el señor Fiscal Superior emitió dictamen, es decir, que la persecución penal por el delito de lesiones culposas leves ya había cesado por transcurso del tiempo. Por estos fundamentos: declararon NO HABER NULIDAD en el auto de vista de fojas doscientos siete, de fecha treinta y uno de octubre de dos mil ocho, que revocando la resolución de fojas ciento cincuenta y siete, de fecha catorce de setiembre de dos mil siete, que declaró sobreeséda la acción penal...la reformó y declaró fundada de oficio la excepción de prescripción de la acción penal..."(pp. 4 y 5).</p>	No haber nulidad de resolución			Unánime

EJECUTORIAS DE LA CORTE SUPREMA PROCESADAS

N°	ARTÍCULOS Y TEMAS	SALA	EJECUTORIA	FECHA	PROVIENE DEL D.J.	FUNDAMENTOS	FALLO	MODIF.	PRESCRIP.	VOTO
7		1° SPT	R.N.º464-2008	2008	Lima	<p>"Cuarto: Que, habiéndose determinado la calidad de los documentos privados-, y como fecha cierta por efectos de la legalización el ocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve, se asume que en esa ocasión se confeccionaron los documentos; por tanto, desde aquella fecha hasta la emisión de sentencia...transcurrieron siete años con veintidós días, cuando ya había prescrito el ejercicio de la acción penal, por cuanto el delito de falsedad documental contempla una pena abstracta máxima de cuatro años cuando se trate de documentos privados, siendo necesario el transcurso de seis años para que opere la prescripción extraordinaria de la acción penal, conforme a los artículos ochenta y ochenta y tres del Código Penal; en consecuencia debe declararse de oficio la prescripción de la acción penal a favor de los encausados..."Quinto: Que, respecto al delito de falsedad genérica, imputado a la encausada ..., observamos también, que el ejercicio de la acción penal había prescrito cuando se emitió la sentencia de vista, pues contempla una pena abstracta máxima de cuatro años, requiriéndose seis años para que opere la prescripción extraordinaria.(...)" (pp.3 y 4).</p>	<p>Haber nulidad de sentencia</p>	<p>Reformándola</p>	<p>Fundada la Excepción de prescripción</p>	<p>Unánime</p>

EJECUTORIAS DE LA CORTE SUPREMA PROCESADAS

N°	ARTÍCULOS Y TEMAS	SALA	EJECUTORIA	FECHA	PROVIENE DEL D.J.	FUNDAMENTOS	FALLO	MODIF.	PRESCRIP.	VOTO
8		1° SPT	R.N.º4072-2007	2007	La Libertad	<p>"Tercero: Que, del análisis correspondiente de los autos sub materia, se aprecia que se formuló acusación por el delito de receptación, conforme fluye del dictamen fiscal de fojas doscientos veintiocho, ilícito que se encuentra previsto y penado en el artículo ciento noventa y cuatro del Código Penal, que sanciona dicha infracción punible con una pena privativa de libertad no mayor de uno ni mayor de tres años, que en ese contexto fáctico y normativo, se señaló como fecha de la comisión del citado delito el veintiséis de agosto de dos mil cuatro, de donde se colige que a la fecha han transcurrido más de cuatro años y ocho meses; que, por tanto, estando a los dispuesto en los artículos ochenta y ochenta y tres del Código Penal, han transcurrido en exceso los plazos ordinario y extraordinario de prescripción de la acción penal, en este caso, alcanzan a cuatro años y seis meses, cesando la potestad persecutoria por el transcurso del tiempo(...)" (pp.2).</p>	Haber nulidad de sentencia	Reformándola	Prescrita la acción penal	Unánime
9		1° SPT	R.N.º65-2009	2009	Cajamarca	<p>"Cuarto: ...el plazo prescriptorio extraordinario de la acción penal a que se refieren los numerales ochenta y ochenta y tres in fine del citado cuerpo legal, debe computarse a partir de producidos los actos ilícitos del procesado,--que según la imputación fiscal datan del diez de diciembre de dos mil seis--; y que hasta la fecha han transcurrido más de tres años. Quinto: Que siendo esto así se ha cumplido con exceso el plazo prescriptorio extraordinario de la acción penal para el delito de coacción materia de incriminación, el que es de dos años de atención al extremo máximo de la pena para dicho delito, razón por la cual la acción liberadora del tiempo ha operado, extinguiendo de pleno derecho la acción penal incoada..."(pp.3).</p>	Haber nulidad de sentencia	Reformándola	Prescrita la acción penal	Unánime

EJECUTORIAS DE LA CORTE SUPREMA PROCESADAS

N°	ARTÍCULOS Y TEMAS	SALA	EJECUTORIA	FECHA	PROVIENE DEL D.J.	FUNDAMENTOS	FALLO	MODIF.	PRESCRIP.	VOTO
10		1° SPT	R. N. N° 1610-2008	2008	Cajamarca	Sétimo: Que de otro lado, cabe resaltar que con relación a los delitos de abuso de autoridad y omisión de actos funcionales, a la fecha se encuentra prescrita la acción penal, tomando en consideración las penas conminadas en los preceptos legales de los artículos trescientos setenta y seis y trescientos setenta y siete, respectivamente del código Penal, de no mayor de dos años de pena privativa de la libertad; en concordancia con el primer párrafo del artículo ochenta y tres del acotado Código, resulta que se encuentra vencido el plazo de prescripción de tres años, por ende resulta imposible el juspuniedi estatal" (pp.6).	No haber nulidad de resolución			Unánime
11		1° SPT	R. N. N° 2414-2009	2009	Lima	"Cuarto: Que, de otro lado, se encuentra acreditada la materialidad del delito contra la Fe Pública-fabricación o falsificación de marcas o contraseñas oficiales(placas vehiculares) y la responsabilidad penal(...)por el mérito de lo reseñado en el considerando anterior y el dictamen pericial número cero ochenta y siete-dos mil, obrante a fojas veintisiete, que concluyó que las placas de rodaje examinadas SGR-cuatrocientos treinta y dos, son falsas; sin embargo estando a que dicho delito previsto en el artículo cuatrocientos treinta y cinco del Código Penal, se encuentra sancionado con una pena no mayor de tres años de pena privativa de la libertad y teniéndose en cuenta que éste se habría cometido con	Haber nulidad de sentencia	Reformándola	Prescrita la acción penal	Unánime

EJECUTORIAS DE LA CORTE SUPREMA PROCESADAS

N°	ARTÍCULOS Y TEMAS	SALA	EJECUTORIA	FECHA	PROVIENE DEL D.J.	FUNDAMENTOS	FALLO	MODIF.	PRESCRIP.	VOTO
						posterioridad al día del robo del vehículo en cuestión y antes del día en que fue intervenido(...)a la fecha ha transcurrido en exceso el plazo ordinario y extraordinario de prescripción de la acción penal, previstos en los artículos ochenta y ochenta y tres del Código Penal, respectivamente" (pp. 4 y 5).				
12		1° SPT	R.N.N°723-2007	2007	Junín	<p>"Primero: Que, el Señor Procurador Público del Ministerio de Agricultura, a fojas mil ciento setenta y siete, fundamenta su recurso de agravio, señalando que el encausado..., en su condición de Ex Director Regional de Agricultura-Junín, se apropió ilícitamente de dinero en efectivo que pertenece al Estado...Segundo: Que, la acusación fiscal obrante a fojas novecientos seis señala que los hechos ilícitos imputados al encausado ...ocurrieron entre el veinticinco de julio al tres de agosto de mil novecientos noventa y siete, igualmente en dicho instrumental se tipificó la conducta del referido encausado dentro de los alcances del primer párrafo del artículo ciento noventa del Código Penal vigente, el mismo que al momento de la comisión del delito se sancionaba con una pena máxima de cuatro años de pena privativa de libertad;</p> <p>Tercero: Que en este orden de ideas, se advierte que los hechos ilícitos materia de imputación sucedieron entre el veinticinco de julio al tres de agosto de mil novecientos noventa y siete;</p>	No haber nulidad de resolución			Unánime

EJECUTORIAS DE LA CORTE SUPREMA PROCESADAS

N°	ARTÍCULOS Y TEMAS	SALA	EJECUTORIA	FECHA	PROVIENE DEL D.J.	FUNDAMENTOS	FALLO	MODIF.	PRESCRIP.	VOTO
						transcurriendo el lapso de nueve años cuatro meses, término que conforme lo señalan los artículos ochenta y ochenta y tres del Código Penal, abría excedido el plazo ordinario y extraordinario requerido para la extinción de la acción penal(...) (pp.1 y 2).				
13		1° SPT	R.N.º49-2010	2011	Pisco	<p>"Décimo tercero: Que la conducta del acusado RONALD WILDER CAYOTOPA ACOSTA fue tipificada como delito contra la fe pública, en su modalidad de falsedad genérica, previsto en el artículo cuatrocientos treinta y ocho del Código Penal: se le imputó haber suscrito el acta de recepción de la obra el catorce de marzo de dos mil cuatro; que ese ilícito penal establece una pena privativa de libertad máxima de cuatro años. Décimo cuarto: Que la prescripción ordinaria para el delito de falsedad genérica opera cuando transcurre un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley para el delito ?cuatro años?, sin embargo al existir actuaciones judiciales y del representante del Ministerio Público el plazo prescriptorio se interrumpe y para que se extinga la acción penal debe adicionarse un tiempo igual a la mitad del plazo ordinario de prescripción ?dos años, respectivamente?, como estipula el último párrafo del artículo ochenta y tres del Código Penal. Décimo quinto: Que, en ese contexto, a la fecha ha sobrepasado el plazo ordinario y extraordinario de prescripción establecido en la norma sustantiva para el delito imputado, extinguiéndose la acción penal ejercitada</p>	Haber nulidad de sentencia	Reformándola	Prescrita la acción penal	Unánime

EJECUTORIAS DE LA CORTE SUPREMA PROCESADAS

N°	ARTÍCULOS Y TEMAS	SALA	EJECUTORIA	FECHA	PROVIENE DEL D.J.	FUNDAMENTOS	FALLO	MODIF.	PRESCRIP.	VOTO
						en la presente causa contra el citado imputado; que, por tanto, es procedente declarar nula la sentencia en ese extremo y declarar extinguida la acción penal por prescripción (...)” (pp. 15 y 16).				
14	II. Prescripción del delito de denuncia calumniosa	1° SPP	R.N.N°1548-2009	2010	Lima	<p>“Segundo: Que los hechos incriminados al encausado Solís Llapa con relación al delito de denuncia calumniosa ocurrieron en el mes de junio de dos mil dos y se encuentra previsto en el artículo cuatrocientos dos del Código Penal, ilícito sancionado con pena privativa de libertad no mayor de tres años. Tercero: Que los plazos prescriptorios están contemplados en el artículo ochenta del Código Penal, que establece que la acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley para el delito, si es privativa de libertad, al que debe agregarse una mitad más a efectos de determinar el plazo extraordinario de prescripción, acorde a lo preceptuado en el artículo ochenta y tres del Código sustantivo, esto es, el plazo prescriptorio sería de cuatro años y medio. Cuarto: Que, aunado a ello, la causa prescribió en el mes de diciembre de dos mil seis, sin embargo, la sentencia de vista de fojas quinientos cincuenta y nueve se expidió cuando ya se había cumplido el plazo prescriptorio antes citado, por lo que dicha sentencia en ese extremo es ineficaz procesalmente al haber perdido el Estado su potestad sancionadora en razón al tiempo transcurrido, por lo que es de aplicación el inciso uno del artículo doscientos noventa y ocho del Código de Procedimientos Penales” (pp.30 y 31).</p>	Haber nulidad de sentencia	Reformándola	Prescrita la acción penal	Unánime

EJECUTORIAS DE LA CORTE SUPREMA PROCESADAS

N°	ARTÍCULOS Y TEMAS	SALA	EJECUTORIA	FECHA	PROVIENE DEL D.J.	FUNDAMENTOS	FALLO	MODIF.	PRESCRIP.	VOTO
15		1° SPP	R.N.N°1591-2009	2010	Tacna	<p>“Cuarto: Que, al respecto, el delito de falsedad ideológica -previsto y sancionado en el artículo cuatrocientos veintiocho del Código Penal-, se configura cuando el agente inserta o hace insertar, en instrumento público, declaraciones falsas concernientes a hechos que deban probarse con el documento, con el objeto de emplearlo como si la declaración fuera conforme a la verdad; que, siendo así, y estando a lo expuesto precedentemente, en el caso de autos, es de advertir que la imputación contra los procesados(...) básicamente consiste en haber insertado datos falsos en la escritura pública celebrada ante Notario Público de Tarata del treinta de enero de mil novecientos noventa y ocho -fojas ciento cuarenta y seis-, la que fue aclarada, rectificada y ratificada ante dicha Notaría el diecisiete de setiembre de mil novecientos noventa y ocho -fojas ciento cincuenta-, siendo la fecha cierta la contenida en éste último testimonio, la que debe tenerse en cuenta para los efectos de computarse la prescripción de la acción penal. Quinto: Que desde el momento consumativo del delito -diecisiete de setiembre de mil novecientos noventa y ocho- a la fecha de haberse expedido la sentencia de vista que se cuestiona, la acción penal que generó la conducta dolosa incriminada a los procesados se vio afectada extintivamente, pues según la pena máxima de seis años prevista en el artículo cuatrocientos veintiocho del Código Penal y estando a lo dispuesto por los artículos ochenta y</p>	No haber nulidad de sentencia			Unánime

EJECUTORIAS DE LA CORTE SUPREMA PROCESADAS

N°	ARTÍCULOS Y TEMAS	SALA	EJECUTORIA	FECHA	PROVIENE DEL D.J.	FUNDAMENTOS	FALLO	MODIF.	PRESCRIP.	VOTO
						ochenta y tres -in fine- del citado cuerpo legal, la vigencia de la acción penal quedó limitada al plazo de nueve años, lo que quiere decir, que a la fecha de emitirse la sentencia de vista -catorce de diciembre de dos mil siete-, habían transcurrido nueve años, dos meses y veintiocho días, tiempo suficiente para operar la prescripción de la acción penal en la presente causa; por lo que, resulta evidente que el fallo expedido por la Sala Penal Superior se encuentra arreglada a Ley”(pp.41).				
16	III. Prescripción de imputables restringidos	1° SPT	R.N.N°3635-2008	2008	Junín	“ Décimo: ...el citado Ricapa Rojas ha interpuesto ante esta Suprema Sala excepción de prescripción, argumentando que a la fecha cuenta con setenta y tres años de edad, por lo que debe reducirse a la mitad el plazo de prescripción, en tal consideración, habiendo transcurrido desde la fecha del evento delictivo hasta la actualidad once años, la acción penal ha prescrito; que al respecto debe precisarse que no resulta atendible lo alegado por el recurrente, pues el delito de colusión tiene como pena máxima quince años de privación de la libertad y habiéndose sucedido el delito materia de análisis en el año de mil novecientos noventa y siete, resulta evidente que a la fecha no ha transcurrido dicho plazo, ello incluso sin tomar en cuenta el plazo de prescripción extraordinaria y el supuesto de duplicación previsto ...además, el recurrente a la fecha de los hechos denunciados contaba con sesenta y dos años, por lo que no se	No haber nulidad de sentencia		Infundada la Excepción de prescripción	Unánime

EJECUTORIAS DE LA CORTE SUPREMA PROCESADAS

Nº	ARTÍCULOS Y TEMAS	SALA	EJECUTORIA	FECHA	PROVIENE DEL D.J.	FUNDAMENTOS	FALLO	MODIF.	PRESCRIP.	VOTO
						encuentra dentro de los alcances del artículo ochenta y uno del citado Cuerpo legal , que para su aplicación establece que el encausado a la fecha del hecho delictivo debe contar con más de sesenta y cinco años, supuesto que no se presenta en el caso sub examine(...)" (pp.7 y 8).				
17		1º SPP	R.N.Nº1600-2009	2010	Lima	<p>“Segundo: Que, según el dictamen fiscal de fojas cuarenta y uno, se le imputa a la encausada...haber presentado el día once de noviembre de dos mil dos una carta poder falsa -de fecha dieciocho de octubre de dos mil dos-en la que supuestamente...- representante de la Congregación Misioneras de Nuestra Señora del Pilar y Santiago Apóstol- le otorgó facultades para que en su nombre y representación se apersona ante cualquier institución pública o privada para tramitar los documentos necesarios para la adjudicación de enseres y otros, logrando con engaño y astucia conseguir que los funcionarios de la Dirección General de Salud - DIGESA le entreguen un camión con maquina perforadora con fecha doce de noviembre de dos mil dos sin haber verificado la autenticidad del aludido poder, obteniendo un provecho económico ilícito, toda vez que le dio uso distinto para el cual había sido adquirido, colocándolo en una asociación con fines de lucro. Tercero: Que el Colegiado Superior no incurrió en error como lo alega el recurrente pues de una interpretación estricta del artículo ochenta y uno del Código Penal respecto a</p>	No haber nulidad de resolución			Unánime

EJECUTORIAS DE LA CORTE SUPREMA PROCESADAS

Nº	ARTÍCULOS Y TEMAS	SALA	EJECUTORIA	FECHA	PROVIENE DEL D.J.	FUNDAMENTOS	FALLO	MODIF.	PRESCRIP.	VOTO
						la reducción del plazo prescriptorio en razón de la edad de la encausada, esta - atento a su carácter de orden público- no resulta ser facultativa en tanto señala que "los plazos de prescripción se reducen a la mitad cuando el agente tenía (...) mas de sesenticinco años al tiempo de la comisión del hecho punible"; en cuanto a lo alegado respecto a los efectos de la interrupción de la prescripción es del caso precisar que consolidada jurisprudencia emitida por esta Suprema Corte interpreta que si bien el primer párrafo del artículo ochenta y tres del Código sustantivo hace alusión a la institución de la interrupción de la prescripción de la acción penal, también lo es que el último párrafo del mismo dispositivo legal de modo extensivo establece, sin excepción, un criterio para su cómputo que abarca aún los casos de interrupción pues utiliza la fórmula "la acción penal prescribe, en todo caso, cuando el tiempo transcurrido sobrepasa en una mitad al plazo ordinario de prescripción"; que en mérito a lo expuesto y considerando que el delito de falsificación de documento privado tiene como pena conminada en su extremo máximo cuatro años, en el presente caso, la acción penal prescribe cuando el tiempo transcurrido sobrepasa en una mitad al plazo ordinario de prescripción por lo que el plazo de prescripción es de seis años -y no nueve como erróneamente lo señaló el recurrente-, máxime si se considera que la encausada...se encontraba en el supuesto de imputabilidad restringida porque tenía				

EJECUTORIAS DE LA CORTE SUPREMA PROCESADAS

Nº	ARTÍCULOS Y TEMAS	SALA	EJECUTORIA	FECHA	PROVIENE DEL D.J.	FUNDAMENTOS	FALLO	MODIF.	PRESCRIP.	VOTO
						más de sesenta y cinco años en el momento de la comisión del hecho delictivo correspondiéndole reducir a la mitad el plazo de prescripción, que computado desde el dieciocho de octubre de dos mil dos a la fecha, ha transcurrido en exceso el término de prescripción respecto a la encausada”(pp. 56 y 57).				
18	IV. Prescripción para el cómplice secundario.	1º SPP	R.N.Nº5388-2008	2010	Lima	<p>“Séptimo.- Que se atribuye al encausado Alva Odría dos modalidades delictivas similares y con igual propósito:</p> <p>(i) Haber celebrado cinco contratos de préstamo ideológicamente falsos con la empresa H & Metales SA (...) Cabe agregar que similares contratos fueron suscritos por H & E Metales SA con otras dos personas naturales. Los contratos en mención estaban destinados a sustentar una aparente liquidez de la mencionada empresa.</p> <p>(ii) Haber proporcionado cuatro facturas no reales a la referida empresa H & Metales SA, de fechas uno, dos, tres y veintinueve de marzo de mil novecientos noventa y nueve. Éstas entre otras permitieron que H & E Metales SA obtenga un crédito fiscal...La Compañía Minera Aurífera Pallamayo SRL, a cargo del imputado Alva Odría, no registraba la existencia de oro en los ejercicios de mil novecientos noventa y ocho y mil novecientos noventa y nueve (enero-marzo), al punto de permitir la exportación por H & Metales SA exporte oro y solicite una devolución de treinta y un mil cuatrocientos cincuenta y cuatro y sesenta</p>	<p>Haber nulidad de sentencia</p>	Reformándola	Prescrita la acción penal	Unánime

EJECUTORIAS DE LA CORTE SUPREMA PROCESADAS

Nº	ARTÍCULOS Y TEMAS	SALA	EJECUTORIA	FECHA	PROVIENE DEL D.J.	FUNDAMENTOS	FALLO	MODIF.	PRESCRIP.	VOTO
						y ocho mil novecientos treinta y siete nuevos soles. Estas constataciones de la Fiscalización Tributaria no han sido enervadas por el citado imputado, quien inicialmente negó la existencia de los contratos, pero siempre admitió la relación con H & E Metales SA y la encausada contumaz Gambini Velásquez” (pp.).				
						Octavo.- Que, por otro lado, el imputado ha deducido una excepción de prescripción. Al respecto, se tiene en cuenta: a) Que según la partida de nacimiento de fojas seis mil seiscientos noventa y seis nació el veintiséis de diciembre de mil novecientos treinta. b) Que en la fecha de la entrega de las facturas y de los contratos cuestionados tenía sesenta y siete y sesenta y ocho años, respectivamente. Empero, en los actos de cooperación o complicidad el dies a quo está en función al momento de la efectiva comisión del delito, del hecho principal o de la actuación del autor. Los actos de cooperación no están sujetos a un plazo autónomo -no puede prescribir aquello que todavía no es delito, esos actos sólo son penalmente relevantes si se comete el hecho principal, por ende, hasta que éste no se lleve a cabo no empezará a prescribir la responsabilidad de los partícipes [RAGÜES Y VALLES, RAMÓN: La prescripción penal, Atelier, Barcelona, dos mil cuatro, página ciento treinta]-. Así, el plazo de la prescripción en el presente				

EJECUTORIAS DE LA CORTE SUPREMA PROCESADAS

N°	ARTÍCULOS Y TEMAS	SALA	EJECUTORIA	FECHA	PROVIENE DEL D.J.	FUNDAMENTOS	FALLO	MODIF.	PRESCRIP.	VOTO
						<p>caso, como se indicó en la sentencia recurrida, se inició luego del año mil novecientos noventa y nueve, propiamente en enero de dos mil.</p> <p>c) Que el artículo 81° del Código Penal establece que en estos casos el plazo de prescripción se reduce a la mitad. El delito de defraudación tributaria cometido como cómplice (artículos 1o y 4o, inciso 'a' del Decreto Legislativo número 813) está reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de doce años. En tal virtud, el plazo ordinario de prescripción es de doce años, al que se agrega la mitad por la interrupción sufrida por la incoación de la investigación y el proceso penal (artículos 80° y 83° del Código Penal), lo que hace un total de dieciocho años, que en el caso del imputado...se reducen a nueve años.</p> <p>d) Que, entonces, si el plazo prescriptorio se inició en enero de dos mil la acción penal se extinguió por acción del tiempo transcurrido en enero de dos mil nueve - fecha posterior a la sentencia recurrida-. Estando al tiempo transcurrido, pese al recurso impugnatorio, el delito ya prescribió.</p> <p>En consecuencia, debe ampararse la excepción de prescripción en atención a los motivos específicos antes citados" (pp.70,71 y 72).</p>				

EJECUTORIAS DE LA CORTE SUPREMA PROCESADAS

N°	ARTÍCULOS Y TEMAS	SALA	EJECUTORIA	FECHA	PROVIENE DEL D.J.	FUNDAMENTOS	FALLO	MODIF.	PRESCRIP.	VOTO
19	V. Prescripción para delitos continuados	1° SPP	R.N.º46-2010	2010	Cusco	<p>“Cuarto: Que, en este sentido, el análisis de los agravios expuestos por los recurrentes se realizará, en primer lugar, en cuanto a la responsabilidad penal por el delito contra la administración pública - corrupción de funcionarios -negociación incompatible con el cargo-; luego, respecto del delito contra la administración pública - malversación de fondos-; y, finalmente, sobre el delito contra la fe pública - falsedad ideológica-. Quinto: Que, teniendo en cuenta que los hechos delictivos descritos en el acápite "a)" del segundo considerando de esta resolución imputados a los indicados encausados y calificados como delito de negociación incompatible con el cargo, previsto en el artículo trescientos noventa y siete del Código Penal -vigente al momento de los hechos, esto es, antes de su modificación por el artículo uno de la Ley número veintiocho mil trescientos cincuenta y cinco, publicada el seis de octubre de dos mil cuatro-, sucedieron desde el año de mil novecientos noventa y siete hasta enero de dos mil dos, conforme se aprecia del contenido del Informe Especial número doscientos noventa y cinco - dos mil tres CG/ORGU de fojas trescientos diez a trescientos catorce -que obra aparte del expediente principal-, constituyendo un delito continuado porque los agentes activos de manera repetida desarrollaron la misma revolución criminal; y advirtiéndose que el indicado delito en su extremo máximo se encontraba conminado</p>	Haber nulidad de sentencia	Reformándola	Fundada la Excepción de prescripción	Unánime

EJECUTORIAS DE LA CORTE SUPREMA PROCESADAS

Nº	ARTÍCULOS Y TEMAS	SALA	EJECUTORIA	FECHA	PROVIENE DEL D.J.	FUNDAMENTOS	FALLO	MODIF.	PRESCRIP.	VOTO
						con pena privativa de libertad no mayor de cinco años, haciendo el cómputo correspondiente hasta la fecha de expedida la recurrida, ha transcurrido en exceso el plazo extraordinario de prescripción establecido en el artículo ochenta y tres del aludido cuerpo legal -figura penal apreciada por haberse interrumpido el plazo ordinario de prescripción debido a la intervención de la autoridad competente; no resultando aplicable la duplicidad dispuesta en el parágrafo "in fine" del artículo ochenta del indicado Código y en el artículo cuarenta y uno de la Constitución Política del Estado, al no ser exigible para la consumación de esta clase de delitos que se "... produzca un resultado material o un perjuicio patrimonial", pues no busca tutelar directamente la buena administración del patrimonio estatal, como ocurre con los delitos de peculado, malversación de fondos, entre otros, sino que el objeto de la tutela penal es garantizar "el normal desenvolvimiento y funcionamiento de la administración pública, en cuanto oportunidad y eficacia en el cumplimiento de la función pública"; por tanto, ha operado la extinción de la acción penal del indicado delito y en concordancia con lo establecido por el artículo quinto del Código de Procedimientos Penales, se debe proceder a estimar la solicitud propuesta por los encausados... así mismo, se debe hacer extensiva esta conclusión a favor de la situación jurídica de los encausados... en atención al principio de favorabilidad que				

EJECUTORIAS DE LA CORTE SUPREMA PROCESADAS

N°	ARTÍCULOS Y TEMAS	SALA	EJECUTORIA	FECHA	PROVIENE DEL D.J.	FUNDAMENTOS	FALLO	MODIF.	PRESCRIP.	VOTO
						informa el artículo trescientos uno del Código de Procedimientos Penales, en consecuencia, debe declararse de oficio la prescripción de la acción penal por el indicado delito. Pág.35-36[...].I.- HABER NULIDAD en la sentencia de fojas mil seiscientos treinta y nueve, del veinte de noviembre de dos mil nueve, integrada por resolución de fojas mil setecientos seis, del treinta de noviembre de dos mil nueve, en el extremo que declaró improcedente la excepción de prescripción de la acción penal promovida por los encausados....contra el delito contra la administración pública -corrupción de funcionarios -negociación incompatible con el cargo-en agravio del Estado representado por la Municipalidad Distrital de Santiago: reformándola declararon FUNDADA LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL ...por el delito contra la administración pública - corrupción de funcionarios -negociación incompatible con el cargo- en agravio del Estado representado por la Municipalidad Distrital de Santiago(...)" (pp. 37 y 38).				
20		1° SPT	R.N.N°2177-2008	2008	Puno	" Cuarto: Que, acorde a la acusación fiscal de fojas cuatrocientos veinticinco, la conducta atribuida al recurrente se encuentra prevista en el artículo ciento noventa del Código Penal, la que prevé como sanción a la conducta de apropiación ilícita, no menos de dos ni más de cuatro años de pena privativa de libertad... Sexto: Que en aplicación de estas reglas al caso	Haber nulidad de sentencia	Reformándola	Fundada la Excepción de prescripción	Unánime

EJECUTORIAS DE LA CORTE SUPREMA PROCESADAS

N°	ARTÍCULOS Y TEMAS	SALA	EJECUTORIA	FECHA	PROVIENE DEL D.J.	FUNDAMENTOS	FALLO	MODIF.	PRESCRIP.	VOTO
						de autos, se tiene que al haberse desarrollado actividad de investigación antes de vencerse el plazo ordinario, viéndose en consecuencia interrumpido éste, debe sumarse una mitad al máximo de la pena prevista en la ley para dicho delito, de lo que resulta que el plazo de prescripción en el presente caso es de seis años. Séptimo: Que, efectuando el cómputo del plazo desde la fecha de cese laboral del procesado que el Fiscal atribuyó como última fecha de consumación del delito, esto es, a partir del veintidós de julio de dos mil, y considerando su naturaleza de delito instantáneo, a la fecha en que se expidió la resolución de vista impugnada la acción ya había prescrito..." (pp.3).				
21		1° SPT	R.N.N°14-2008	2008	Lambayeque	" Tercero: Que, acorde a la acusación fiscal de fojas cuatrocientos veinticinco, la conducta atribuida a la encausada se encuentra prevista en el artículo ciento cuarenta y siete del Código Penal, la que prevé como sanción a la conducta de sustracción de menor, nomás de dos años de pena privativa de libertad.[...] Quinto: Que en aplicación de estas reglas al caso de autos, se tiene que al haberse desarrollado actividad de investigación antes de vencerse el plazo ordinario, viéndose en consecuencia interrumpido éste, debe sumarse una mitad al máximo de la pena prevista en la ley para dicho delito , de lo que resulta que el plazo de prescripción extraordinario es de tres años; Sexto: Que, efectuando el cómputo del plazo desde la fecha en que sucedieron los	Haber nulidad de sentencia	Reformándola	Prescrita la acción penal	Unánime

EJECUTORIAS DE LA CORTE SUPREMA PROCESADAS

N°	ARTÍCULOS Y TEMAS	SALA	EJECUTORIA	FECHA	PROVIENE DEL D.J.	FUNDAMENTOS	FALLO	MODIF.	PRESCRIP.	VOTO
						<p>fundamento jurídico cuarto, y doce años para los comprendidos en el punto...Sexto: Que, a la fecha, se ha sobrepasado el plazo ordinario y extraordinario establecido en la norma sustantiva para el delito de defraudación tributaria por los hechos sucedidos durante el periodo fiscal de mil novecientos noventa y cuatro y mil novecientos noventa y cinco - comprendidos en el artículo doscientos sesenta y ocho e inciso dos del numeral doscientos sesenta y nueve del Código Penal-, por lo que se ha extinguido la acción penal ejercitada en la presente causa contra el citado encausado por esos hechos, y sólo esta vigente por los hechos sucedidos durante el periodo fiscal de mil novecientos noventa y seis -tipificados en los incisos uno y cuatro del Decreto Legislativo número ochocientos trece...I. Declararon NO HABER NULIDAD en la resolución de fojas ciento setenta y cinco, del veintinueve de agosto de dos mil seis, en el extremo que declaró fundada la excepción de prescripción deducida por el acusado ...por delito de defraudación tributaria por los hechos ocurridos durante el periodo fiscal de mil novecientos noventa y cuatro y mil novecientos noventa y cinco y tipificado en el artículo doscientos sesenta y ocho e inciso dos del numeral doscientos sesenta y nueve del Código Penal. II. Declararon HABER NULIDAD en la misma resolución en cuanto declaró fundada la excepción de prescripción deducida por el citado acusado por delito de defraudación</p>				

EJECUTORIAS DE LA CORTE SUPREMA PROCESADAS

Nº	ARTÍCULOS Y TEMAS	SALA	EJECUTORIA	FECHA	PROVIENE DEL D.J.	FUNDAMENTOS	FALLO	MODIF.	PRESCRIP.	VOTO
						tributaria por los hechos sucedidos durante el periodo fiscal de mil novecientos noventa y seis y tipificado en los incisos uno y cuatro del Decreto Legislativo número ochocientos trece; reformándola; declararon infundada dicha excepción (...)” (pp.92 y 91).				
23	VII. Prescripción para delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos	1º SPT	R.N.Nº611-2009	2009	Huánuco	<p>“Tercero: Que posterior a la interposición del recurso de nulidad, el recurrente ha deducido la excepción de la prescripción de la acción penal, consecuentemente, este Supremo Tribunal estima en primer término verificar si efectivamente la acción liberadora del tiempo ha operado en el presente proceso...; teniendo en cuenta que el delito de abuso de autoridad regulado en el artículo trescientos setenta y seis del Código Penal señala: “El funcionario público que, abusando de sus atribuciones, comete u ordena u en perjuicio de alguien, un acto arbitrario cualquiera, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años...Cuarto:...el plazo prescriptorio extraordinario de la acción penal a que se refieren los numerales ochenta y ochenta y tres...debe computarse a partir de producidos los actos ilícitos del procesado,- que según la imputación fiscal datan del cinco de febrero de dos mil seis-; y que hasta la fecha han transcurrido más de tres años. Quinto: Que, siendo esto así se ha cumplido con exceso el plazo prescriptorio extraordinario de la acción penal para el delito de abuso de autoridad materia de incriminación, el que es de dos</p>	Haber nulidad de sentencia	Reformándola	Prescrita la acción penal	Unánime

EJECUTORIAS DE LA CORTE SUPREMA PROCESADAS

N°	ARTÍCULOS Y TEMAS	SALA	EJECUTORIA	FECHA	PROVIENE DEL D.J.	FUNDAMENTOS	FALLO	MODIF.	PRESCRIP.	VOTO
						años en atención al extremo máximo de la pena para dicho delito, razón por la cual la acción liberadora del tiempo ha operado, extinguiendo de pleno derecho la acción penal incoada..." (pp.3 y 4).				
24		1° SPT	R.N.º3273-2007	2007	Ancash	<p>"Quinto: ...resulta claro que temporalmente no corresponde a dichos hechos la aplicación del segundo párrafo del artículo ochenta y siete del Código Penal, ni el último párrafo del artículo ochenta del mencionado Código, que permitiría extender el plazo de prescripción de la acción penal, pues constitucionalmente está proscrita la retroactividad de la ley Penal contra reo. En tal virtud, se advierte que el accionar del procesado...se encuentra previsto en el artículo ochenta y siete del Código Penal en su texto original, que sancionaba al agente con pena privativa de libertad no mayor de ocho años, a la que adicionándole una mitad a dicho máximo punitivo en virtud a lo dispuesto por el artículo ochenta y tres del Código Penal, la acción prescribe a los doce años, plazo que ha transcurrido con exceso en el caso de autos(...)" (pp.3).</p>	No haber nulidad de resolución			Unánime
25		1° SPT	R.N.º939-2009	2009	Lima	<p>"Segundo: Que, conforme al dictamen acusatorio, de fojas siete mil cuarenta y tres, integrado a fojas diez mil trescientos cincuenta y tres, así como de la requisitoria oral de fojas doce mil cincuenta y cinco-reverso-, fluye que: a) en la inicial acusación de fojas siete mil cuarenta y tres, se imputa al encausado</p>	Haber nulidad de sentencia	Reformándola	Prescrita la acción penal	Unánime

EJECUTORIAS DE LA CORTE SUPREMA PROCESADAS

Nº	ARTÍCULOS Y TEMAS	SALA	EJECUTORIA	FECHA	PROVIENE DEL D.J.	FUNDAMENTOS	FALLO	MODIF.	PRESCRIP.	VOTO
						<p>Vladimiro Montesinos Torres, en su condición de abogado, ex asesor del exPresidente de la República Alberto Fujimori, y de la Alta Dirección del Servicio de Inteligencia Nacional, haber hecho donativo, promesa u otorgar ventajas, tanto a funcionarios públicos de Migraciones, personal de la Policía Nacional y Magistrados del Poder Judicial, que intervinieron en los procesos administrativos y judiciales instaurados, con relación a Baruch Ivcher Bronstein, con el objeto de ejercer influencia en los procesos pendientes de fallo para perjudicarlo....Estos ilícitos se habrían cometido dentro del contexto global del concertado despojo que se produjo por intermedio de funcionarios y servidores públicos de las Fuerzas Armadas....a efecto de que el gobierno de ese entonces asumiera el control de la línea editorial de este medio de comunicación(...)" (pp. 2 y 3).</p> <p>“Sexto: Que, los hechos imputados habrían sucedido durante el año mil novecientos noventa y siete, siendo la última con fecha veintidós de diciembre del año referido; en ese sentido, conteniendo el delito de cohecho activo específico la pena abstracta máxima de ocho años de pena privativa de la libertad(artículo trescientos noventa y ocho del Código Penal modificado por la Ley número veintiséis mil seiscientos cuarenta y tres, vigente al momento de sucedidos los hechos), ha operado la prescripción ordinaria y extraordinaria del</p>				

EJECUTORIAS DE LA CORTE SUPREMA PROCESADAS

N°	ARTÍCULOS Y TEMAS	SALA	EJECUTORIA	FECHA	PROVIENE DEL D.J.	FUNDAMENTOS	FALLO	MODIF.	PRESCRIP.	VOTO
						ejercicio de la acción penal, pues para que se configure la última, conforme al artículo ochenta y tres, in fine, del Código Penal, se necesitaría el lapso de doce años, plazo que ha sido satisfecho, no siendo aplicable lo establecido en el artículo ochenta, in fine, por cuanto, la duplicidad establecida se corresponde con supuestos en los que las funciones o roles de los servidores o funcionarios públicos están ligados directamente con el manejo de dinero u otros bienes patrimoniales del Estado, tales como peculado y malversación de fondos... HABER NULIDAD en la sentencia...que condenó a Vladimiro Montesinos Torres como autor del delito contra la Administración Pública-en la modalidad de cohecho activo agravado... REFORMÁNDOLA declararon de oficio prescrita la acción penal a favor del imputado Vladimiro Montesinos Torres por el delito contra la Administración Pública(...)" (pp. 9 y 10).				
26		1° SPT	R.N.º3243-2007	2007	Lima	“ Sexto: Que, para efectos de resolver los extremos de la recurrida que declara prescrita la acción penal, debe tenerse en cuenta el sustento fáctico de la acusación fiscal, así como lo previsto en los artículos ochenta y ochenta y tres del Código Penal...así de autos se advierte que: i) Delito contra la Administración Pública - abuso de autoridad en su modalidad de acto arbitrario... así como el delito contra la Administración Pública-peculado de uso imputado a los procesados...se encuentran previstos en los artículos trescientos setenta y seis y trescientos	No haber nulidad de resolución	Reformándola	Fundada la Excepción de prescripción	Unánime

EJECUTORIAS DE LA CORTE SUPREMA PROCESADAS

Nº	ARTÍCULOS Y TEMAS	SALA	EJECUTORIA	FECHA	PROVIENE DEL D.J.	FUNDAMENTOS	FALLO	MODIF.	PRESCRIP.	VOTO
						<p>ochenta y ocho del Código Penal, que sancionan al agente con penas privativas de la libertad no mayor de dos y cuatro años, respectivamente, por tanto, atendiendo que el hecho ilícito atribuido data del años mil novecientos noventa y tres... a la fecha de emitida la recurrida ha transcurrido en exceso el plazo extraordinario de prescripción de la acción penal.</p> <p>ii) El delito contra la Administración Pública-concusión en su modalidad de patrocinio ilegal...se encuentra previsto en el artículo trescientos ochenta y cinco del Código Penal, que sanciona al agente con pena privativa de la libertad no mayor de dos años, por tanto, atendiendo a que el hecho ilícito atribuido data de mil novecientos noventa y cuatro...ha transcurrido en exceso el plazo extraordinario de la acción penal.</p> <p>iii) El delito contra la administración pública-abuso de autoridad en su modalidad de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales imputados a los encausados....se encuentra previsto en el artículo trescientos setenta y siete del Código Penal, que sanciona al agente con pena privativa de la libertad no mayor de dos años, por tanto atendiendo a que la conducta imputada data del año mil novecientos noventa y cinco...a la fecha de emitida la recurrida ha transcurrido en exceso el plazo extraordinario de la acción penal.</p> <p>iv)El delito contra el orden financiero y monetario en su modalidad de omisión de las provisiones</p>				

EJECUTORIAS DE LA CORTE SUPREMA PROCESADAS

Nº	ARTÍCULOS Y TEMAS	SALA	EJECUTORIA	FECHA	PROVIENE DEL D.J.	FUNDAMENTOS	FALLO	MODIF.	PRESCRIP.	VOTO
						<p>específicas...se encuentra prevista en el artículo doscientos cincuenta del Código Penal, que sanciona al agente con pena privativa de la libertad no mayor de tres años, por tanto, atendiendo que la conducta imputada acaeció en el año mil novecientos noventa y cinco...a la fecha de emitida la recurrida ha transcurrido en exceso el plazo extraordinario de la acción penal. v) El delito contra la Administración Pública-Peculado en su modalidad de malversación de fondos...se encuentra previsto en el artículo trescientos ochenta y nueve del Código Penal que sanciona al agente con pena privativa de la libertad no mayor de cuatro años, por tanto, atendiendo que la conducta imputada data de mil novecientos noventa y tres a mil novecientos ochenta y cinco,...a la fecha de emitida la recurrida ha transcurrido en exceso el plazo extraordinario de la acción penal.vi) El delito contra la Administración Pública-abuso de autoridad en su modalidad de acto arbitrario...a la fecha de emitida la recurrida ha transcurrido en exceso el plazo extraordinario de la acción penal. . vii) El delito contra la Administración Pública-usurpación de autoridad,...que sanciona al agente con pena privativa de libertad no mayor de siete años...a la fecha de emitida la recurrida ha transcurrido en exceso el plazo extraordinario de la acción penal. . viii) El delito contra el orden económico y contra la Administración Pública-cohecho propio,...que sancionan al agente con pena privativa de la libertad</p>				

EJECUTORIAS DE LA CORTE SUPREMA PROCESADAS

Nº	ARTÍCULOS Y TEMAS	SALA	EJECUTORIA	FECHA	PROVIENE DEL D.J.	FUNDAMENTOS	FALLO	MODIF.	PRESCRIP.	VOTO
						no mayor de tres y seis años...a la fecha de emitida la recurrida ha transcurrido en exceso el plazo extraordinario de la acción penal. ix) El delito contra la Administración Pública-corrupción de funcionarios públicos... ha transcurrido en exceso el plazo extraordinario de la acción penal. x) Los delitos contra el patrimonio contra el orden económico...que sanciona al agente con penas privativas de la libertad no mayor e seis, tres y cinco años, a la fecha de emitida la recurrida ha transcurrido en exceso el plazo extraordinario de la acción penal. x) El delito contra la Administración Pública. Funcionarios en su modalidad de corrupción activa, la fecha de emitida la recurrida ha transcurrido en exceso el plazo extraordinario de la acción penal. xi) El delito contra la Administración Pública. Corrupción de a la fecha de emitida la recurrida ha transcurrido en exceso el plazo extraordinario de la acción penal. xii) Delito contra la administración de la República-corrupción de funcionarios en su modalidad de corrupción...activa exceso el plazo extraordinario de la acción penal” (pp. 6 y 12).				
27		1º SPT	R.N.º3905-2008	2008	Cusco	" Quinto: Que, asimismo, en cuanto al delito de abuso de autoridad, debe indicarse que la imputación en este extremo...se refiere al hecho que éste de manera indebida ordenó y permitió que los pobladores de la Comunidad Campesina pudieran apoderarse de bienes pertenecientes a una empresa privada; que	No haber nulidad de sentencia			Unánime

EJECUTORIAS DE LA CORTE SUPREMA PROCESADAS

N°	ARTÍCULOS Y TEMAS	SALA	EJECUTORIA	FECHA	PROVIENE DEL D.J.	FUNDAMENTOS	FALLO	MODIF.	PRESCRIP.	VOTO
						al respecto debe precisarse que dicho acto de acuerdo a los términos de la acusación fiscal, se habría efectuado en el mes de febrero de dos mil cinco, por lo que encontrándose sancionado dicho delito- previsto en el artículo trescientos setenta y seis del Código Penal- con pena privativa de la libertad no mayor de dos años, en virtud al último párrafo del artículo ochenta y tres del Código Penal, el plazo de prescripción es de tres años, por tanto es de concluirse que a la fecha dicho plazo ha vencido en exceso, en tal consideración, lo resuelto también en este extremo por el Colegiado Superior se encuentra arreglado a ley, no aplicándose a este tipo penal o el supuesto de duplica del plazo de prescripción, pues el bien jurídico protegido en este ilícito no es el patrimonio del Estado, sino el buen funcionamiento de la administración pública, específicamente la legalidad de los actos administrativos" (pp.4 y 5).				
28	VIII. Duplicidad del plazo de prescripción para delitos cometidos por funcionarios o servidores públicos en contra del patrimonio del Estado.	1° SPP	R.N.N°238-2009	2010	Puno	<p>"Quinto: Que del acta de internamiento del vehículo al depósito municipal y del acta de constatación de pérdidas se acredita que falta sólo un alternador y un relay - y no todo lo que indica el agraviado Mamani Huanca-; sin embargo, por la situación de los objetos -un alternador y un relay- es preciso indicar que se debe aplicar el principio de intervención mínima del Derecho Penal que consiste en que el Derecho Penal deja de ser necesario para proteger a la sociedad cuando dicha protección puede conseguirse por otros medios, que serán preferibles en cuanto</p>	Haber nulidad de sentencia	Reformándola	Prescrita la acción penal	Unánime

EJECUTORIAS DE LA CORTE SUPREMA PROCESADAS

Nº	ARTÍCULOS Y TEMAS	SALA	EJECUTORIA	FECHA	PROVIENE DEL D.J.	FUNDAMENTOS	FALLO	MODIF.	PRESCRIP.	VOTO
						sean menos lesivos para los derechos individuales; que en el caso concreto es relevante y aplicable el principio de subsidiariedad [...]Sexto: Que, en lo que respecta al delito de omisión de actos funcionales atribuido..., se le imputa que en su condición de Jefe de la Oficina de Personal de la Municipalidad Provincial de San Román omitió dar el trámite correspondiente al reclamo que formuló el agraviado... por la pérdida de los accesorios mencionados anteriormente; que aun cuando el indicado encausado no llevó a esto las acciones necesarias para viabilizar el reclamo del agraviado, resulta necesario verificar si a la fecha se encuentra vigente la acción penal para su persecución; que el ilícito en referencia está previsto en el artículo trescientos setenta y siete del Código sustantivo, que lo sanciona con dos años de pena privativa de libertad, lo que significa que la acción penal prescribe a los tres años de su comisión, conforme a lo dispuesto por los artículos ochenta y ochenta y tres del acotado Código; que es de precisar que en el presente caso no se puede aplicar la última parte del artículo ochenta del Código Penal -duplicidad del plazo ordinario- por no tratarse de un hecho punible cometido contra el patrimonio del Estado. Séptimo: Que conforme a la acusación fiscal el delito atribuido...ocurrió el diez de octubre de dos mil cinco, por lo que a la fecha que se emite la presente Ejecutoria ha transcurrido en exceso el plazo de				

EJECUTORIAS DE LA CORTE SUPREMA PROCESADAS

N°	ARTÍCULOS Y TEMAS	SALA	EJECUTORIA	FECHA	PROVIENE DEL D.J.	FUNDAMENTOS	FALLO	MODIF.	PRESCRIP.	VOTO
						prescripción de la acción penal, por lo que es procedente emitir pronunciamiento en ese sentido conforme lo autoriza el artículo trescientos uno del Código de Procedimientos Penales”(pp.83 y 84).				
29		1° SPT	R.N.N°1587-2010	2011	Arequipa	<p>"Cuarto: Que en orden al extremo máximo de la pena conminada, el delito de incumplimiento de funciones acoge como plazo de prescripción ordinaria dos años en tanto que el plazo de prescripción extraordinaria es de tres años, conforme a los parámetros establecidos en el artículo ochenta y tres del Código Penal. Quinto: Que si bien es cierto el procesado ha ostentado la condición de funcionario público, sin embargo, no es posible establecer que en el presente caso se haya afectado el patrimonio público para los efectos de la aplicación de la duplicidad del plazo de prescripción al caso concreto de autos, ello teniendo en cuenta que el delito de incumplimiento de funciones afecta el oportuno y debido funcionamiento de la administración pública cuya titularidad le corresponde al Estado, sin embargo, no constituye per se un delito que afecta de manera directa y específica el patrimonio del Estado, por ende, no resulta aplicable la duplicidad del plazo de prescripción establecida en el artículo ochenta del Código Penal. Sexto: Que si bien es cierto el delito que es materia de examen constituye un tipo penal de carácter permanente no es menos cierto que la permanencia del delito -que implica la prórroga de la acción antijurídica por voluntad del agente- cesa</p>	No haber nulidad de auto			Unánime

EJECUTORIAS DE LA CORTE SUPREMA PROCESADAS

N°	ARTÍCULOS Y TEMAS	SALA	EJECUTORIA	FECHA	PROVIENE DEL D.J.	FUNDAMENTOS	FALLO	MODIF.	PRESCRIP.	VOTO
						en cuanto se desvanecen los elementos del tipo penal, que en el presente caso la condición de funcionario público del procesado Juan Onofre Málaga-como alcalde de la Municipalidad Distrital de Coporaque-, no se encuentra actualmente vigente, por lo tanto no es posible apreciar la permanencia de la comisión delictiva. Séptimo: Que, teniéndose en cuenta el momento de los hechos -enero y febrero del dos mil siete- a la fecha han transcurrido más de cuatro años, por lo que ha operado la prescripción de la acción penal. Por estos fundamentos: declararon NO HABER NULIDAD en el auto superior.(..“(pp.18).				
30		1° SPT	R.N.N°3122-2007	2007	Madre de Dios	<p>Cuarto: Que debemos considerar como fecha de realización del delito el trece de julio de mil novecientos noventa y cuatro, y no el veintiuno de mayo de mil novecientos noventa y tres, como erróneamente lo consignó la Sala Penal Superior, por cuanto, en aquella fecha se suscribió el convenio número mil doscientos treinta y uno-noventa y cuatro, entre el núcleo Ejecutor y FONCODES,...siendo el caso que a partir de ella, recién, se podía disponer de los caudales públicos otorgados para la ejecución de la obra(.).</p> <p>Quinto: "Que, resulta aplicable los artículos ochenta-última parte - y ochenta y tres del Código Penal, haciéndose mención además a la duplicidad del plazo ordinario cuando se afecte al patrimonio del Estado del Código Penal, en</p>	<p>Haber nulidad de resolución</p>	<p>Reformándola</p>	<p>Infundada la Excepción de prescripción</p>	Unánime

EJECUTORIAS DE LA CORTE SUPREMA PROCESADAS

N°	ARTÍCULOS Y TEMAS	SALA	EJECUTORIA	FECHA	PROVIENE DEL D.J.	FUNDAMENTOS	FALLO	MODIF.	PRESCRIP.	VOTO
						consecuencia, habiéndose producido el hecho ilícito el trece de julio de mil novecientos noventa y cuatro conteniendo el tipo penal de peculado agravado la pena abstracta máxima de diez años de pena privativa de libertad y en aplicación de los artículos señalados al introito del presente considerado se necesitaría un plazo de treinta años para la prescripción del ejercicio de la acción penal, lapso que aún no se ha satisfecho, por cuanto, a la fecha han transcurrido catorce años y diez meses" (pp. 2 y 3).				
31		1° SPT	R.N.N°3159-2007	2007	Junín	<p>"Cuarto: Que en atención a lo precedentemente expuesto, se debe precisar que la resolución materia de grado se encuentra bien dictada, pues los hechos imputados... se retrotraen al treinta de marzo del dos mil uno, fecha en la que estaba vigente el texto original del artículo cuatrocientos del Código Penal-delito de tráfico de influencias-, en el que no se proveía la agravante concerniente a cuando el hecho era cometido por funcionario o servidor público, en tal sentido la pena máxima que preveía el citado dispositivo legal era de privación de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años-esto es que el plazo de prescripción extraordinaria era de seis años, por ende, el citado delito prescribía el treinta de marzo de dos mil siete-, por lo que se concluye que al momento de expedirse la resolución materia de grado-quince de junio de dos mil siete-el plazo de prescripción ya se había vencido(..)" (pp.2).</p>	No haber nulidad de resolución			Unánime

EJECUTORIAS DE LA CORTE SUPREMA PROCESADAS

N°	ARTÍCULOS Y TEMAS	SALA	EJECUTORIA	FECHA	PROVIENE DEL D.J.	FUNDAMENTOS	FALLO	MODIF.	PRESCRIP.	VOTO
32		1° SPT	R.N.º3932-2009	2009	Callao	<p>"Cuarto: Que los hechos denunciados, se encuentran sancionados con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años; y los hechos delictivos ocurrieron en el mes de diciembre de mil novecientos noventa y nueve; a partir del cual han transcurrido más de nueve años, consecuentemente ha operado los plazos de prescripción de la acción penal.</p> <p>Quinto: Que, con relación a los argumentos del Procurador Público respecto de la aplicación de la duplicidad del plazo de prescripción de la acción penal prevista en el artículo ochenta del Código Penal, estando a la descripción típica del aspecto objetivo y subjetivo del delito instruido, no resulta de aplicación al caso de autos, estando además que en este tipo de delitos el bien jurídico protegido es el correcto funcionamiento de la administración pública- de carácter ético como probidad, integridad y honradez de los funcionarios; y no la correcta administración de los fondos del erario, por consiguiente la resolución recurrida se encuentra arreglada a ley" (pp.2 y 3).</p>	No haber nulidad de resolución			UNÁNIME

EJECUTORIAS DE LA CORTE SUPREMA PROCESADAS

N°	ARTÍCULOS Y TEMAS	SALA	EJECUTORIA	FECHA	PROVIENE DEL D.J.	FUNDAMENTOS	FALLO	MODIF.	PREScrip.	VOTO
33		1° SPT	R.N.N°2687-2008	2008	Lima	" Segundo: Qué, tratándose de los delitos contra la Administración Pública en las modalidades de peculado y malversación de fondos, es tener como referente normativo lo establecido en el último párrafo del artículo ochenta del Código Penal concordante con el artículo cuarenta y uno de la Constitución Política del Estado, esto es, cuando el ilícito penal ha sido cometido por funcionarios y servidores públicos contra el patrimonio del Estado o de organismos sostenidos por éste, el plazo de prescripción se duplica.[...] Cuarto: Que, por otro lado, dado que los hechos atribuidos ocurrieron en el periodo comprendido entre los años mil novecientos noventa y tres a mil novecientos noventa y cuatro, se deberá establecer las bases fácticas acaecidas con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley número veintiséis mil trescientos catorce, de fecha veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, razón por la cual estando de conformidad con lo dispuesto por el artículo trescientos uno-in fine-del Código de Procedimientos Penales, en consecuencia se ha incurrido en causal de nulidad " (pp.1 y 2).	Nulo la resolución			UNÁNIME
34		1° SPT	R.N.N°3561-2007	2007	Ayacucho	" Sexto: Que, debemos considerar como fecha de realización del delito entre los meses de julio y agosto de mil novecientos noventa y nueve, circunscribiéndose el hecho imputado en el artículo trescientos noventa y dos, concordante con el tercer párrafo, in fine, del artículo trescientos ochenta y siete del Código Penal, modificado por la ley número veintiséis	Haber nulidad de sentencia	Reformándola	Infundada la Excepción de prescripción	Unánime

EJECUTORIAS DE LA CORTE SUPREMA PROCESADAS

Nº	ARTÍCULOS Y TEMAS	SALA	EJECUTORIA	FECHA	PROVIENE DEL D.J.	FUNDAMENTOS	FALLO	MODIF.	PRESCRIP.	VOTO
						<p>mil ciento noventa y ocho, es decir peculado por extensión concordante con el peculado culposo agravado, siendo la pena abstracta máxima para el presente caso de cinco años por la agravante contenida del tipo penal de peculado culposo. Séptimo: Que, resulta aplicable los artículos ochenta-última parte- y ochenta y tres del Código Penal, pues regulan la prescripción ordinaria y extraordinaria del ejercicio de la acción penal, haciéndose mención además a la duplicidad del plazo ordinaria cuando el delito cometido por un funcionario público...afecte al patrimonio del Estado; en consecuencia habiéndose producido el hecho ilícito entre los meses de julio y setiembre de mil novecientos noventa y nueve, conteniendo el tipo penal imputado la pena abstracta máxima de cinco años de pena privativa de libertad y en aplicación de los artículos señalados al introito del presenta considerando se necesitaría un plazo de quince años para la prescripción del ejercicio de la acción penal lapso que aún no se ha satisfecho...declararon: HABER NULIDAD en la sentencia de fecha treinta y uno de enero de dos mil siete...que declaró fundada la excepción de prescripción de la acción penal(...)" (pp. 4 y 5).</p> <p>"Tercero: Que en el caso de autos, los delitos de abuso de autoridad y omisión de actos funcionales, previstos en los artículos trescientos setenta y seis y trescientos setenta y siete, respectivamente del Código Penal, establecen como</p>				
35		1º SPT	R.N.º4833-2007	2007	Ucayali		No haber nulidad de resolución			Unánime

EJECUTORIAS DE LA CORTE SUPREMA PROCESADAS

N°	ARTÍCULOS Y TEMAS	SALA	EJECUTORIA	FECHA	PROVIENE DEL D.J.	FUNDAMENTOS	FALLO	MODIF.	PREScrip.	VOTO
						sanción a sus autores, con pena abstracta no mayor de dos años de pena privativa de libertad en ambos casos; que, teniendo en cuenta que los hechos sub materia, se produjeron en el lapso comprendido entre el mes de enero a diciembre de dos mil dos; a la fecha ha transcurrido con exceso los plazos de prescripción ordinaria y extraordinaria...de otro lado, respecto a duplica de plazo de prescripción que se alega, este agravio no resulta de aplicación al caso de autos, por cuanto el tipo objetivo de los delitos materia de autos, están relacionados con el adecuado ejercicio de los deberes funcionales y no en la administración de fondos que atente contra el patrimonio del Estado(...)" (pp.2).				
36	IX. Conteo del plazo de prescripción en los delitos que han sido adecuados a uno diferente	2SPT	R. N. N.º 2212-04	2004	Lambayeque	"Sétimo.-Que resolviendo el caso sub iudice, se debe considerar lo siguiente: a) Que se le imputa a la procesada, haber sido requerida por el Segundo Juzgado de Paz letrado de Chiclayo para que cumpla con poner a disposición los bienes que fueron entregados en calidad de depositaria judicial, sin embargo y pese a tal requerimiento, la inculpada no ha cumplido con dicho mandato; b) Que conforme al auto de apertura de instrucción de fojas cuarentidós (sic) y al auto de enjuiciamiento de fojas ciento treintuno, la encausada...fue procesada por el delito de peculado por extensión, previsto y sancionada por el artículo trescientos ochentisiete en concordancia con el artículo trescientos noventidós (sic)	Haber nulidad de sentencia	Reformándola	Prescrita la acción penal	

EJECUTORIAS DE LA CORTE SUPREMA PROCESADAS

N°	ARTÍCULOS Y TEMAS	SALA	EJECUTORIA	FECHA	PROVIENE DEL D.J.	FUNDAMENTOS	FALLO	MODIF.	PRESCRIP.	VOTO
						<p>del Código Penal; no obstante, el comportamiento ilícito realizado por la precitada encausada se adecúa al delito de rehusamiento a la entrega de bienes a la autoridad previsto y sancionado por el artículo trescientos noventiuno (sic) del Código sustantivo; c) Que según el artículo cuatrocientos veinticinco, inciso cuatro, del Código Penal, también se considerar funcionario o servidor público a un particular vinculado circunstancial y temporalmente con la administración pública través de la administración o custodia de dinero o bienes con destino social, o dispuesta por la autoridad competente[...]</p> <p>e)Que la procesada...tenía la calidad de depositaria judicial según acta de diligencia de embargo con secuestro conservativo del dieciséis de noviembre de dos mil, obrante a fojas veintisiete; que, en tal condición, la procesada no se apropió ni utilizó como propios los bienes recibidos, sino que como se ha acreditado en autos, de modo renuente no acató la resolución judicial de requerimiento del veinte de agosto del dos mil uno, que le señalaba que dentro del tercer día de notificada, cumpliera con poner a disposición del Juzgado, los bienes dados en su custodia, tal como consta en fojas treinta y tres (Sic) [...]</p> <p>Noveno.- Que tomando en cuenta el tiempo transcurrido desde la comisión de los hechos sub judice, esto es, el tres de setiembre del dos mil uno, y las penas previstas en la ley para el delito de rehusamiento a la entrega de bienes a la autoridad conforme al</p>				

EJECUTORIAS DE LA CORTE SUPREMA PROCESADAS

N°	ARTÍCULOS Y TEMAS	SALA	EJECUTORIA	FECHA	PROVIENE DEL D.J.	FUNDAMENTOS	FALLO	MODIF.	PRESCRIP.	VOTO
						artículo trescientos noventauno(sic) del Código Penal, es de inferir que el plazo extraordinario de prescripción a la fecha se encuentra vencido en exceso. Que no tratándose de un delito que afecta el patrimonio del Estado, sino el mandato de la autoridad, no es de aplicación el párrafo in fine del artículo ochenta para el cómputo de la prescripción" (pp.5).				
37		1° SPT	R.N.N°1409-2010	2011	Ancash	"Cuarto: ...la norma penal pertinente para el caso de autos es el artículo trescientos noventa y cuatro en su formulación primigenia, el que no diferencia supuestos de cohecho impropio en párrafos distintos y sanciona dicho delito con una sola pena no menor de dos ni mayor de cuatro altos - disposición que fue modificada por Ley número veintiocho mil trescientos cincuenta y cinco, publicado el seis de octubre de dicho año - Consiguientemente, confrontando la data de los hechos incriminados (setiembre de dos mil cuatro) con el plazo extraordinario de prescripción -regulado en el artículo ochenta y tres del Código Penal- resultante de la pena máxima antes indicada pues su mitad: seis años, se comprueba que a la fecha de emisión de la presente Ejecutoria dicho plazo se encuentra vencido en exceso; debiendo añadirse, a mayor abundamiento que la agravante prevista en el artículo cuarenta y seis - A del Código Penal no es de recibo en el caso de autos, por dos motivos: uno, porque la condición de funcionario público del agente es inherente al delito imputado (delito contra la	Haber nulidad de sentencia	Reformándola	Prescrita la acción penal	Unánime

EJECUTORIAS DE LA CORTE SUPREMA PROCESADAS

N°	ARTÍCULOS Y TEMAS	SALA	EJECUTORIA	FECHA	PROVIENE DEL D.J.	FUNDAMENTOS	FALLO	MODIF.	PRESCRIP.	VOTO
						administración pública), y, por tanto, no puede generar una circunstancia agravante independiente; y dos, porque conforme lo tiene establecido el Acuerdo Plenario número cero ocho - dos mil nueve /CJ - ciento dieciséis (FJ doce) la calidad funcional del sujeto activo solo opera para efectos de la determinación de la pena, mas no para el cómputo de la prescripción; resultando, por lo demás, inoficioso abordar los argumentos de fondo esgrimidos por el recurrente -ver Considerando Primero-; Por estos fundamentos, declararon, de oficio, PRESCRITA la acción penal.)." (pp.2 y 3).				
38	X. El delito instantáneo	1SPT	R. N. N° 4166-2004	2004	Lima	"Primero: Que, se conoce la presente causa en virtud de lo resuelto por la Sexta Sala Penal con reos libres, en el proceso constitucional signado con el número setenta y cuatro guion dos mil cinco, donde se dictó la sentencia de fecha treinta y uno de octubre del año dos mil cinco, la que declaró fundada la acción de hábeas corpus interpuestas por Andronico Luksic Craig..y declara en consecuencia nula la ejecutoria suprema de fecha veintisiete de abril del dos mil cinco expedida en el presente recurso de nulidad; ordenando "que se emita nuevo pronunciamiento teniendo en consideración lo expuesto por este órgano jurisdiccional que, en el presente asunto, actúa como órgano o instancia constitucional" , <u>Segundo:</u> "a) el delito de tráfico de influencias del artículo cuatrocientos del Código Penal es un delito común y que la agravante del	Haber nulidad de resolución	Reformándola	Fundada la Excepción de prescripción	

EJECUTORIAS DE LA CORTE SUPREMA PROCESADAS

Nº	ARTÍCULOS Y TEMAS	SALA	EJECUTORIA	FECHA	PROVIENE DEL D.J.	FUNDAMENTOS	FALLO	MODIF.	PRESCRIP.	VOTO
						<p>artículo cuarenta y seis-A del citado Código se aplica a todo aquel que se aprovecha de su condición especial de funcionario público para cometer el delito, con lo que tal agravante debe aplicarse sólo al autor o partícipe que tenga la calidad de funcionario público, condición ajena al encausado Luksic Craig (considerando octavo); b) que por lo anterior no puede aplicarse al citado encausado la referida agravante del artículo cuarenta y seis-A para el cómputo del plazo de prescripción, porque de lo contrario se violaría el principio de incommunicabilidad del artículo veintiséis del Código Penal, el principio de legalidad penal, se asumiría una interpretación in malam partem, contraria al principio "Favor rei" (considerando noveno) y se violaría el principio de culpabilidad al extenderse "la condición gravosa de la pena respecto del autor a los partícipes del delito, sin tomar en cuenta que la responsabilidad es por el hecho"(considerando décimo), razones por las cuales la sentencia de habeas corpus entiende que la prescripción extraordinaria opera para el procesado Luksic Craig a los seis años necesariamente, argumento que estaría avalado por diversos precedentes..., c) por otra parte la sentencia indica que conforme a la doctrina "el delito de tráfico de influencias es de comisión instantánea" y que "no requiere la consumación de la influencia para que se tipifique el delito, el cual se produjo por parte de los acusados</p>				

EJECUTORIAS DE LA CORTE SUPREMA PROCESADAS

Nº	ARTÍCULOS Y TEMAS	SALA	EJECUTORIA	FECHA	PROVIENE DEL D.J.	FUNDAMENTOS	FALLO	MODIF.	PRESCRIP.	VOTO
						Andrónico Luksic y Montesinos Torres con sólo la entrevista realizada por ambos el seis de marzo de mil novecientos noventa y ocho", por lo que la prescripción debería computarse desde esa fecha y no desde el momento en que la empresa Lucchetti obtuvo la licencia de funcionamiento por parte de la Municipalidad de Chorrillos, es decir desde el veintinueve de diciembre del año mil novecientos noventa y ocho (considerando décimo);..." (pp.1 y 2).				
39	XI. Art.84. y ley Nº 26641 art.1 Suspensión y contumacia	1º SPT	R.N.º3944-2008	2008	Arequipa	"Sétimo: Que en cuanto a la viabilidad de suspender los plazos de prescripción del reo contumaz, la impugnada consideró que la Ley veintiséis mil seiscientos cuarenta y uno colisiona con los artículos ochenta y ochenta y tres del Código Penal, y solucionó el aparente conflicto aplicando el principio de favorabilidad y escogiendo las normas del código sustantivo...Al respecto emerge de la sesión de juicio oral de fecha treinta de abril del dos mil ocho...que la Sala Penal Superior declaró reo contumaz...Ahora bien el artículo uno de la Ley número veintiséis mil seiscientos y cuarenta y uno, introduce como causal de prolongación el plazo de prescripción la declaración de contumacia del imputado...Jurisprudencia consolidada interpreta que un supuesto absolutamente legítimo de prolongar el plazo de prescripción es la fuga o alejamiento del imputado, pues lo indebido del retraso se relaciona causalmente, como factor preponderante, con la actitud del imputado...Debemos precisar que la Ley	Haber nulidad de resolución	Reformándola	Suspensión de plazos	Unánime

EJECUTORIAS DE LA CORTE SUPREMA PROCESADAS

Nº	ARTÍCULOS Y TEMAS	SALA	EJECUTORIA	FECHA	PROVIENE DEL D.J.	FUNDAMENTOS	FALLO	MODIF.	PRESCRIP.	VOTO
						número veintiséis mil seiscientos cuarenta y uno,...constituye una excepción a la prescripción ordinaria como mecanismo de extensión temporal de la persecución penal, en tanto, se integró legalmente como una causa adicional de suspensión de la acción penal y no de interrupción... de lo que se desprende además que la declaración de contumacia no aparejada por la suspensión de la prescripción constituye una omisión meramente formal, pues se trata de un efecto jurídico necesario de la prolongación del plazo de prescripción, de suerte que declarada la contumacia automáticamente se une, por ministerio de la ley, el efecto de la suspensión del plazo de prescripción...En consecuencia, al considerar incorrecta la interpretación efectuada por el Colegiado Superior en este extremo, corresponde admitir los argumentos del Fiscal Superior recurrente y revocar la decisión, en mayoría, de la Sala Penal Superior de declarar No Ha Lugar la solicitud del Ministerio Público de suspender los plazos de prescripción(...)" (pp.6,7 y 8).				
40		1º SPT	R.N.º4209-2008	2008	Arequipa	" Tercero: Que de la revisión de actuados, se advierte que fue el propio procesado quien se ha mostrado renuente a su juzgamiento-conducta procesal que ha sido la razón para que la causa se dilate-lo cual revela una actividad procesal dilatoria, por lo que la Sala Superior, resolvió declarar al encausado... reo contumaz...no obstante ello, la Sala Superior al momento de expedir la sentencia declaró prescrita la acción penal bajo el argumento que la Ley	Nula la sentencia			Unánime

EJECUTORIAS DE LA CORTE SUPREMA PROCESADAS

Nº	ARTÍCULOS Y TEMAS	SALA	EJECUTORIA	FECHA	PROVIENE DEL D.J.	FUNDAMENTOS	FALLO	MODIF.	PRESCRIP.	VOTO
						número veintisiete mil seiscientos cuarenta y uno, vulnera el derecho al plazo razonable, y por ende, no le es aplicable. Sin embargo, conforme al criterio del Tribunal Constitucional en estos casos se permite aplicar la suspensión del plazo prescriptorio sin que constituya inconstitucional la aplicación de la precitada ley, por cuanto no resulta imputable al Órgano Jurisdiccional dicha demora, y por consiguiente, se estaría favoreciendo a un justiciable quien con su conducta ha contribuido a la dilatación del proceso...razón por la cual a consideración de este Supremo Tribunal la acción penal contra el procesado no se encuentra prescrita...Nula la sentencia ...que por mayoría declaró fundada de oficio la excepción de prescripción de la acción penal, a favor del procesado ...por el delito contra la Administración Pública-en agravio del Estado" (pp.3).				
41		1º SPT	R.N.Nº4095-2008	2008	Arequipa	" Cuarto: Que en el caso de autos, aun cuando las frases que aparecen del precitado artículo periodístico pueden considerarse ofensivas al honor y la reputación del querellado; empero es de precisar que las normas contenidas en el Código Penal son de orden público y de estricto cumplimiento; bajo esta premisa, se advierte de autos que los hechos imputados al querellado...se produjeron el siete de mayo de dos mil cuatro...que el artículo ciento treinta y dos del Código Penal aplicable al presente caso, sancionar a sus autores con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años, en	Haber nulidad de sentencia			Unánime

EJECUTORIAS DE LA CORTE SUPREMA PROCESADAS

Nº	ARTÍCULOS Y TEMAS	SALA	EJECUTORIA	FECHA	PROVIENE DEL D.J.	FUNDAMENTOS	FALLO	MODIF.	PRESCRIP.	VOTO
						cuyo caso la prescripción de la acción penal opera cuando transcurra cuatro años y seis meses. Quinto: Que, en ese contexto de la revisión de los actuados se advierte que desde la fecha de la comisión de los hechos, ha transcurrido con exceso los plazos para determinar la prescripción de la acción penal en virtud de lo establecidos por los artículos ochenta y ochenta y tres in fine del Código Penal, aun considerando la suspensión del plazo en su condición de imputado contumaz durante catorce meses... HABER NULIDAD en la sentencia...que revocando...absolvió...de la querella formulada en su contra; y reformándola de oficio declararon prescrita al acción penal, a favor del citado querrellado por el delito contra el Honor, en la modalidad de difamación agravada(...)" (pp.2 y 3).				
42		1º SPT	R.N.º4607-2008	2008	Cañete	" Tercero: Que, respecto al recurso interpuesto por la encausada referente al delito contra la Administración Pública - corrupción de funcionarios-modalidad de corrupción pasiva de auxiliar jurisdiccional...b)que en ese contexto fáctico y normativo, se señaló como fecha de comisión del citado delito el mes de setiembre del dos mil uno, de donde se colige que a la fecha han transcurrido más de ocho años; por tanto, estando a lo dispuesto en los artículos ochenta y ochenta y tres del Código Penal, han transcurrido en exceso los plazos ordinario y extraordinario de prescripción de la acción penal, en este caso, alcanzan a seis años, cesando la potestad persecutora por	Haber nulidad de resolución	Reformándola	Prescrita la acción penal	Dividido Voto Dirimente: Jueza Elvira Barrios Alvarado

EJECUTORIAS DE LA CORTE SUPREMA PROCESADAS

Nº	ARTÍCULOS Y TEMAS	SALA	EJECUTORIA	FECHA	PROVIENE DEL D.J.	FUNDAMENTOS	FALLO	MODIF.	PRESCRIP.	VOTO
						<p>el transcurso del tiempo. Cuarto: Que, respecto a los hechos objeto de impugnación, es de advertirse lo siguiente:</p> <p>a) la encausada fue declarada reo contumaz, según se advierte del auto que en copia certificada a fojas veintinueve, de fecha dieciséis de mayo de dos mil tres...b)...en el caso de autos la Sala Penal Superior emitió un auto...que declaró contumaz a la encausada...sin embargo para surtir sus efectos la suspensión de dicho plazo debe ser declarada por resolución expresa de acuerdo a la norma antes citada, ya que no es suficiente con la sola declaración de contumaz para que se suspendan los plazos prescriptivos, por lo que el Colegiado Superior omitió pronunciarse, lo que no interrumpe la prescripción de la acción penal, conforme lo establece el Tribunal Constitucional(expediente número cuatro mil ciento dieciocho-dos mil cuatro-cinco), pues afirma lo contrario implicaría prolongar arbitrariamente la persecución penal contra la encausada(...)"(pp.4 y 3).</p>				
43	XII. Prescripción extraordinaria para faltas	1º SPT	R.N.º3966-2007	2007	Cusco	<p>"Cuarto: Que del peritaje judicial obrante a fojas ciento cincuenta se advierte que la valorización de los daños atribuidos a los recurrentes asciende a mil doscientos veinticinco punto setenta y ocho nuevos soles, cuantía que resultaba inferior a la mínima establecida en el artículo cuatrocientos cuarenta y cuatro del Código penal, modificada por la Ley veintisiete</p>	<p>Haber nulidad de sentencia</p>	<p>Reformándola</p>	<p>Prescrita la acción penal</p>	<p>Unánime</p>

EJECUTORIAS DE LA CORTE SUPREMA PROCESADAS

N°	ARTÍCULOS Y TEMAS	SALA	EJECUTORIA	FECHA	PROVIENE DEL D.J.	FUNDAMENTOS	FALLO	MODIF.	PRESCRIP.	VOTO
						novecientos treinta y nueve, del nueve de febrero del dos mil tres, vigente a la fecha de los hechos, en consecuencia el hecho no constituye delito contra el patrimonio sino faltas por daños, que a tenor de lo prescrito en el artículo 440 de la misma norma sustantiva, el plazo extraordinario de prescripción es de un año y seis meses, el que ha transcurrido en exceso, por lo que a este respecto dicha conducta ya no es pasible de persecución penal(...)” (pp.5).				
44	XIII. Imprescriptibilidad	1° SPT	R.N.N°4065-2007	2007	Puno	<p>“Cuarto: Que delimitada así la fecha en que se perpetraron las acciones presuntamente delictivas, debe dilucidarse si la acción penal ha prescrito o si a la fecha se encuentra expedita para efectuar el análisis de fondo en el presente caso, en tal virtud se advierte que al veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y tres la redacción del artículo trescientos ochenta y siete del Código Penal, que sanciona el delito de peculado doloso, establecía lo siguiente”...el funcionario o servidor público que se apropia o utiliza, en cualquier forma para sí o para otro, caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de dos ni mayor de ocho años.; además el supuesto de duplicación de plazo de prescripción en caso de delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos contra el patrimonio del Estado, recién entró en vigencia en nuestro</p>	<p> Haber nulidad de sentencia</p>	<p>Reformándola</p>	<p>Fundada la Excepción de prescripción</p>	Unánime

EJECUTORIAS DE LA CORTE SUPREMA PROCESADAS

Nº	ARTÍCULOS Y TEMAS	SALA	EJECUTORIA	FECHA	PROVIENE DEL D.J.	FUNDAMENTOS	FALLO	MODIF.	PRESCRIP.	VOTO
						ordenamiento legal a través de la Ley número veintiséis mil trescientos catorce del veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, por lo que este dispositivo legal tampoco es de aplicación al presente caso; en conclusión verificado así los hechos imputados a los mencionados procesados, se tiene que de acuerdo al artículo ochenta...y artículo ochenta y tres, última parte. Y, siendo el límite máximo de la pena aplicable al delito <i>sub examine</i> , de acuerdo al razonamiento precedente, es de ocho años de privación de la libertad, se concluye que extraordinariamente por haber intervenido el Ministerio Público y el Poder Judicial la acción penal prescribe indefectiblemente a los doce años,...a la fecha se ha excedido el tiempo para la persecución penal del delito por parte del Estado (...)” (pp.6).				
45	XIV. Prescripción en concurso real de delitos	1º SPT	R.N.º4836-2007	2007	Ayacucho	<p>"Cuarto: Que según la tesis inmutativa del señor Fiscal Superior los encausados...habrían perpetrado el delito de omisión de deberes funcionales y peculado doloso agravado (...)</p> <p>Quinto: Que en el caso de autos, se advierte que concurren dos hechos punibles que deben considerarse como delitos independientes, por lo que opera el concurso real de delitos según lo previsto por el texto original del artículo cincuenta del Código Penal, que acorde con el segundo párrafo del artículo ochenta del citado catálogo punitivo las acciones prescriben separadamente en el plazo señalado para cada uno; que como uno de</p>	Haber nulidad de sentencia	Reformándola	Prescrita la acción penal	Unánime

EJECUTORIAS DE LA CORTE SUPREMA PROCESADAS

N°	ARTÍCULOS Y TEMAS	SALA	EJECUTORIA	FECHA	PROVIENE DEL D.J.	FUNDAMENTOS	FALLO	MODIF.	PRESCRIP.	VOTO
						<p>los hechos delictivos que se les atribuyó a los citados encausados configuraría el delito de omisión de deberes funcionales tipificado en el artículo trescientos setenta y siete del Código Penal, este reprime la conducta delictiva que describe con pena privativa de libertad no mayor a los dos años; que conforme al artículo ochenta del acotado Código Penal el plazo ordinario de prescripción de la acción penal es igual al máximo de la pena fijada por la ley para el delito, si es privativa de libertad y, su plazo extraordinario, en tanto la acción se interrumpió por las actuaciones del Ministerio Público y de las autoridades judiciales, opera conforme al artículo ochenta y tres del mismo Código cuando el tiempo transcurrido sobrepasa en una mitad al plazo ordinario de prescripción.</p> <p>Sexto: Que, en consecuencia, el plazo extraordinario de prescripción de la acción penal opera en este caso para el delito de omisión de deberes funcionales a los tres años; que tomando en cuenta el tiempo transcurrido en que se habría perpetrado el hecho punible, indicado en los fundamentos jurídicos precedentes, dicho plazo a la fecha venció con exceso, por lo que de oficio debe declararse prescrita la acción penal por el citado delito" (pp.4 y 5).</p>				
46		1° SPT	R.N.º5262-2008	2008	Arequipa	<p>"Tercero: Que, considerando la incriminación fiscal, se advierte la concurrencia de dos injustos penales, por lo que nos encontramos frente a un concurso real de delitos, el cual importa una pluralidad de acciones, es decir, se</p>	<p> Haber nulidad de sentencia</p>	<p>Reformándola</p>	<p>Prescrita la acción penal</p>	<p>Unánime</p>

EJECUTORIAS DE LA CORTE SUPREMA PROCESADAS

Nº	ARTÍCULOS Y TEMAS	SALA	EJECUTORIA	FECHA	PROVIENE DEL D.J.	FUNDAMENTOS	FALLO	MODIF.	PRESCRIP.	VOTO
						trata de una imputación acumulada al autor de todos los delitos realizados dentro de un determinado espacio de tiempo; que en el caso de autos el procesado..realizó las conductas típicas del delito de cohecho y de falsificación de documentos, pues desde el propio marco histórico de lo sucedido, ambos se dieron en espacios de tiempo diferentes, razón por la que, dado el tiempo transcurrido, es necesario establecer el mecanismo de cómputo de la acción penal en caso de concurso real, para lo cual es necesario remitirnos al artículo ochenta del Código Penal-vigente al momento de la comisión de los hechos- según el cual "en caso de concurso real de delitos, las acciones prescriben separadamente en el plazo señalado para cada uno"; que respecto al delito de cohecho, tenemos que la norma penal vigente al momento de la comisión de los hechos-artículo trescientos noventa y tres del Código Penal-sancionaba su comisión con una pena privativa no menor de tres ni mayor de seis años, por lo tanto, de acuerdo con lo establecido en el artículo ochenta tres del Código Penal, la pretensión persecutoria del Estado debe cesar(...)" (pp.1 y 2).				

EJECUTORIAS DE LA CORTE SUPREMA PROCESADAS

N°	ARTÍCULOS Y TEMAS	SALA	EJECUTORIA	FECHA	PROVIENE DEL D.J.	FUNDAMENTOS	FALLO	MODIF.	PRESCRIP.	VOTO
47	XV. Concurso ideal	1° SPP	R.N.N°1582-2009	2010	Lima	<p>“Tercero: Que el denominado concurso aparente de leyes invocado en la sentencia recurrida, se presenta cuando varias disposiciones legales parecieran ser aplicables al mismo hecho, pero en puridad sólo una de ellas corresponde ser aplicada al caso concreto, atendiendo a razones de especialidad, subsidiaridad o consunción; que, el concurso antes aludido tiene como presupuestos básicos: a) la unidad de acción, esto es, que se trate de una sola conducta que encuadra formalmente en varias descripciones típicas; b) que la acción desplegada por el agente persiga una única finalidad; y c) que lesione o ponga en peligro un solo bien jurídico. Cuarto: Que el bien jurídico protegido en el delito de usurpación de funciones, específicamente es el de garantizar la exclusividad en la titularidad y ejercicio de las funciones públicas como garantía del correcto funcionamiento de la Administración Pública, en tanto que en el delito de abuso de autoridad se busca preservar la regularidad del funcionamiento de la administración pública, es decir, la legalidad de los actos administrativos; que, siendo así, en el caso de estudio se lesionaron dos bienes jurídicos distintos, de modo que la conducta atribuida al encausado...Debe calificarse como un concurso ideal heterogéneo, pues el avocamiento al proceso de ejecución coactiva y la acción de expedir la resolución que trabó embargo no tienen autonomía ni son independientes entre sí, sino que los actos</p>	<p>Haber nulidad de sentencia</p>	Reformándola	<p>Fundada la Excepción de prescripción</p>	Unánime

EJECUTORIAS DE LA CORTE SUPREMA PROCESADAS

N°	ARTÍCULOS Y TEMAS	SALA	EJECUTORIA	FECHA	PROVIENE DEL D.J.	FUNDAMENTOS	FALLO	MODIF.	PRESCRIP.	VOTO
						desplegados constituyen una unidad de acción desde el punto de vista jurídico. Por estos fundamentos: declararon NULA la sentencia de vista..., que por mayoría adecuó el delito de usurpación de funciones imputado .. al delito de abuso de autoridad reformándola declaró fundada la excepción de prescripción ... por el precitado delito e indicados agravios; con lo demás que al respecto contiene; ORDENARON se expida nuevo pronunciamiento por otra Sala Superior; y los devolvieron” (pp. 3 y 4).				
48	XVI. Concurso real	1° SPP	R.N.N°262-2010	2008	Piura	“Sexto: Que, no obstante lo anotado, se aprecia que en lo atinente al delito de negativa de cumplimiento de obligaciones, tal ilícito se cometió en concurso real en relación del resto de delitos juzgados, por lo que el plazo de prescripción debe ser computado de manera separada; que, en tal orden de ideas, como el delito de incumplimiento de obligaciones, previsto en el artículo cuatrocientos veintitrés del Código Penal, es sancionado con pena privativa de la libertad no mayor de un año, en aplicación de los artículos ochenta y ochenta y tres del citado Código Sustantivo, el plazo máximo de prescripción resulta ser de un año y seis meses; que, en consecuencia, en atención a que la fecha de comisión del mencionado delito se remonta a los años dos mil cuatro y dos mil cinco -ver Informe de fojas doscientos catorce- se verifica que a la fecha de expedición de la sentencia impugnada ya había operado la prescripción de la acción penal a favor del	Haber nulidad de sentencia	Reformándola	Prescrita la acción penal	Unánime

EJECUTORIAS DE LA CORTE SUPREMA PROCESADAS

N°	ARTÍCULOS Y TEMAS	SALA	EJECUTORIA	FECHA	PROVIENE DEL D.J.	FUNDAMENTOS	FALLO	MODIF.	PRESCRIP.	VOTO
						encausado Díaz Cantera por el indicado ilícito, razón por la cual es del caso declarar fundada de oficio la excepción de prescripción respecto al delito en mención y en consecuencia extinguida la acción penal" (pp. 3 y 4).				
49		1° SPT	R.N.N°1643-2009	2009	Lima	<p>"Quinto: Que, estando a lo reseñado precedentemente y atendiendo al sustento fáctico de la acusación fiscal consideramos que los delitos contra la Administración Pública, en las modalidades de peculado y corrupción activa y el delito contra la Tranquilidad Pública - asociación ilícita para delinquir, imputados al encausado Oscar Enrique Dufour Cattaneo en el presente proceso penal, constituyen un concurso real de delitos, por lo cual las acciones penales prescriben separadamente, por tanto, conforme a lo dispuesto en los artículos ochenta y ochenta y tres del Código Penal, que establecen que la acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley para el delito, si es privativa de libertad (plazo ordinario), o en todo caso, cuando el tiempo transcurrido sobrepasa en una mitad al plazo ordinario de prescripción(plazo extraordinario), en el presente caso ha transcurrido en exceso del plazo extraordinario de la acción penal respecto al delito contra la Tranquilidad Pública- asociación ilícita para delinquir, atendiendo a que los hechos investigados datan del mes de mayo del año dos mil" (pp.9).</p> <p>"Por estos fundamentos: declararon HABER NULIDAD en la sentencia de</p>	<p>Haber nulidad de sentencia</p>	Reformándola	Prescrita la acción penal	

EJECUTORIAS DE LA CORTE SUPREMA PROCESADAS

Nº	ARTÍCULOS Y TEMAS	SALA	EJECUTORIA	FECHA	PROVIENE DEL D.J.	FUNDAMENTOS	FALLO	MODIF.	PRESCRIP.	VOTO
						fecha nueve de febrero de dos mil nueve, obrante a fojas once mil ciento cuarenta y seis, en el extremo que absolvió por mayoría a Oscar Enrique Dufour Cataneo, de la acusación fiscal como autor del delito contra la Administración Pública-asociación ilícita para delinquir, en agravio del Estado, y reformándola: declararon prescrita la acción penal seguida en contra del encausado mencionado por el referido delito en perjuicio del citado agraviado(...)" (pp.13).				
50	XVII. Suspensión de la acción penal	1º SPT	R.N.Nº2547-2007	2007	Callao	" Quinto: Que el acuerdo plenario número seis-dos mil siete/CJ-ciento dieciséis de fecha dieciséis de noviembre de dos mil siete-Pleno Jurisdiccional de las Salas Permanentes y Transitorias de la Corte Suprema de Justicia, ha señalado que el recurso de queja excepcional es uno de los supuestos materiales de "suspensión de los términos de prescripción" "...; que siendo así, el término de suspensión a criterio de este Supremo Tribunal corresponde a la interposición del recurso de queja excepcional el día treinta de marzo de dos mil seis, hasta la fecha en que la Sala Penal Superior recibió la copia certificada de la Ejecutoria Suprema que declaró fundado el recurso, el veintinueve de mayo de dos mil siete, tiempo que comprende un año, un mes y veintinueve días...Sexto: Que los tipos penales materia de la acusación fiscal son ...(Estafa) y (Falsedad Genérica)...que reprimen los hechos delictivos con sanciones no mayores de seis y cuatro años de pena privativa de	Haber nulidad de sentencia	Reformándola	Fundada la Excepción de prescripción	Unánime

EJECUTORIAS DE LA CORTE SUPREMA PROCESADAS

Nº	ARTÍCULOS Y TEMAS	SALA	EJECUTORIA	FECHA	PROVIENE DEL D.J.	FUNDAMENTOS	FALLO	MODIF.	PRESCRIP.	VOTO
						<p>libertad, respectivamente, términos que se elevarían a nueve y seis años, respectivamente, de conformidad a los alcances del numeral ochenta y tres (...) Sétimo: (...) estando a que el término de prescripción extraordinario en el delito de estafa es de nueve años a los que habría de adicionarse el "el plazo de suspensión" (un año, un mes y veintinueve días) se concluye, que desde el veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y ocho a la fecha han transcurrido diez años, un mes y veintinueve días; de manera similar, en el caso del delito de falsedad genérica cuyo término de prescripción extraordinario corresponde a seis años a los que también se tiene que adicionar el plazo de suspensión....conlleva a colegir que desde el siete de agosto de mil novecientos noventa y ocho, han transcurrido siete años, un mes y veintinueve días, lo que demuestra que a la fecha han vencido en exceso los plazos de prescripción..." NULA la sentencia que condenó al recurrente por el delito de falsedad genérica y estafa, ya que pese a la suspensión del plazo, este ya ha prescrito" (pp.3, 4 y 5).</p> <p>"Cuarto:...que revisados los autos se advierte que carece de objeto la pretensión del encausado recurrente, debido a que...se declaró el quiebre del juicio oral, lo cual acarrió como consecuencia la nulidad de lo actuado desde el inicio del juicio oral, hasta antes de la emisión de la aludida resolución (lo cual incluye la</p>				
51		1º SPT	R.N. Nº 551-2009	2009	Arequipa		<p>Improcede nte el recurso de nulidad</p>			Unánime

EJECUTORIAS DE LA CORTE SUPREMA PROCESADAS

N°	ARTÍCULOS Y TEMAS	SALA	EJECUTORIA	FECHA	PROVIENE DEL D.J.	FUNDAMENTOS	FALLO	MODIF.	PRESCRIP.	VOTO
						<p>resolución cuestionada)" (pp.2).</p> <p>RESOLUCION que lo declaraba reo contumaz y la suspensión de los plazos de prescripción.</p> <p>"Sexto: Que, en el presente caso, se advierte que el plazo extraordinario de prescripción de la acción penal para el delito de abuso de autoridad opera a los tres años; por lo que, entonces dicho ilícito penal desde la supuesta comisión del hecho punible-treinta de noviembre de dos mil cuatro,-esto es , desde el momento en que se habrían cometido los actos arbitrarios en perjuicio del agraviado, han prescrito al haber transcurrido con exceso el citado plazo extraordinario de prescripción; por lo que, de oficio debe declararse extinguida por prescripción la acción penal. Sétimo: Que, por otro lado, si bien, con arreglo a lo previsto por el Acuerdo Plenario número seis-dos mil siete/CJ-ciento dieciséis, de fecha dieciséis de noviembre de dos mil siete, se suspende el plazo de prescripción cuando existe recurso de nulidad concedido vía queja excepcional en resoluciones que ponen fin a la instancia ...también lo es, que no sólo dicho acuerdo Plenario fue publicado el siete de febrero de dos mil ocho en el portal de Internet del Poder Judicial, por tanto, no es de aplicación, sino que aun aplicándose el citado criterio jurisdiccional, la acción penal por la que se le instauró proceso penal al referido encausado, a la fecha, ya no se encuentre habilitada en razón al tiempo transcurrido(...)" (pp.2 y 3).</p>				
52		1° SPT	R.N. N° 359-2009	2009	Tacna	<p>que se habrían cometido los actos arbitrarios en perjuicio del agraviado, han prescrito al haber transcurrido con exceso el citado plazo extraordinario de prescripción; por lo que, de oficio debe declararse extinguida por prescripción la acción penal. Sétimo: Que, por otro lado, si bien, con arreglo a lo previsto por el Acuerdo Plenario número seis-dos mil siete/CJ-ciento dieciséis, de fecha dieciséis de noviembre de dos mil siete, se suspende el plazo de prescripción cuando existe recurso de nulidad concedido vía queja excepcional en resoluciones que ponen fin a la instancia ...también lo es, que no sólo dicho acuerdo Plenario fue publicado el siete de febrero de dos mil ocho en el portal de Internet del Poder Judicial, por tanto, no es de aplicación, sino que aun aplicándose el citado criterio jurisdiccional, la acción penal por la que se le instauró proceso penal al referido encausado, a la fecha, ya no se encuentre habilitada en razón al tiempo transcurrido(...)" (pp.2 y 3).</p>	<p> Haber nulidad de sentencia</p>	Reformándola	Prescrita la acción penal	Unánime

EJECUTORIAS DE LA CORTE SUPREMA PROCESADAS

Nº	ARTÍCULOS Y TEMAS	SALA	EJECUTORIA	FECHA	PROVIENE DEL D.J.	FUNDAMENTOS	FALLO	MODIF.	PREScrip.	VOTO
53		1º SPT	R.N. Nº 392-2009	2009	Lima	<p>"Quinto: Que, el Acuerdo Plenario número seis-dos mil siete/CJ-ciento dieciséis de fecha dieciséis de noviembre de dos mil siete-Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales y Transitorias de la Corte Suprema de Justicia ha señalado que el recurso de queja excepcional es uno de los supuestos materiales de "suspensión de los términos de prescripción...que siendo así, el término de suspensión a criterio de este Supremo Tribunal corresponde a la interposición del recurso de queja excepcional, esto es, el día veintitrés de agosto de dos mil siete...hasta la fecha del oficio de remisión de la copia certificada de la Ejecutoria Suprema que declaró fundado el recurso, esto es, el diecinueve de setiembre de dos mil ocho...término que comprende un año y veintisiete días; y que en todo caso, para los efectos del cómputo de los plazos de prescripción, con fines prácticos y evitar confusiones, deberá ser adicionado al plazo extraordinario de prescripción que regula el último párrafo del artículo ochenta y tres del Código Penal...Sexto: Que, el tipo penal materia de la acusación fiscal es el comprendido en el artículo doscientos cuatro, inciso dos del Código Penal, que reprime el hecho delictivo con una sanción no mayor de seis años de pena privativa de libertad, término que se elevaría a nueve años, de conformidad con la norma sustantiva, que regula el término de prescripción extraordinaria...Sétimo: Que en ese sentido, podemos afirmar que la fecha de inicio del cómputo de la prescripción es el</p>	Haber nulidad de sentencia	Reformándola	Fundada la Excepción de prescripción	Unánime

EJECUTORIAS DE LA CORTE SUPREMA PROCESADAS

Nº	ARTÍCULOS Y TEMAS	SALA	EJECUTORIA	FECHA	PROVIENE DEL D.J.	FUNDAMENTOS	FALLO	MODIF.	PRESCRIP.	VOTO
						día dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.....;ahora bien, estando a que el término de prescripción extraordinaria en el delito materia de litis es nueve años, a los que habría que adicionarse el "plazo de suspensión ", es decir un año y veintisiete días(resultando un plazo máximo de prescripción extraordinaria de diez años y veintisiete días),se concluye que dicho plazo habría concluido el doce de enero de dos mil diez, cuando los actuados se encontraban en el Ministerio Público(....)" (pp.3,4 y5).				
54		1º SPT	R.N. Nº 419-2009	2009	Lima	" Quinto: Que, el Acuerdo Plenario número seis-dos mil siete/CJ-ciento dieciséis de fecha dieciséis de noviembre de dos mil siete-Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales y Transitorias de la Corte Suprema de Justicia ha señalado que el recurso de queja excepcional es uno de los supuestos materiales de "suspensión de los términos de prescripción...que siendo así, el término de suspensión que a criterio de este Supremo Tribunal corresponde a la interposición del recurso de queja excepcional con fecha diez de enero de dos mil ocho hasta la fecha en que la Sala Penal Superior recibió físicamente los actuados principales, es decir, el diecinueve de diciembre de dos mil ocho...tiempo que comprende nueve años y cinco meses aproximadamente, que en todo caso, para los efectos del cómputo de los plazos de prescripción, con fines	Haber nulidad de sentencia	Reformándola	Fundada la Excepción de prescripción	Unánime

EJECUTORIAS DE LA CORTE SUPREMA PROCESADAS

Nº	ARTÍCULOS Y TEMAS	SALA	EJECUTORIA	FECHA	PROVIENE DEL D.J.	FUNDAMENTOS	FALLO	MODIF.	PRESCRIP.	VOTO
						<p>prácticos y evitar confusiones, deberá ser adicionado al plazo extraordinario de prescripción que regula el último párrafo del artículo ochenta y tres del Código Penal. Sexto: Que, los tipos penales materia de la acusación fiscal...insolvencia fraudulenta... ilicitud de la suspensión de las obligaciones del deudor...que reprimen los hechos delictivos, en ambos casos, con sanciones no mayores de seis años de pena privativa de libertad, términos que se elevarían a nueve años de conformidad a los alcances del numeral ochenta y tres[...] que a todo ello, debemos adicionar el tiempo en que "se suspendió el plazo de prescripción" y que se aludió en el considerando precedente. Sétimo: Que, en ese sentido, y atendiendo a que los hechos se iniciaron con la presentación de la solicitud de concurso preventivo de fecha veintuno de setiembre de mil novecientos noventa y nueve...podemos colegir que la fecha de inicio del cómputo de la prescripción corresponde a ésta última data; ahora bien estando a que el término de prescripción extraordinario en los delitos submatéria es de nueve años a los que habría de adicionarse el "plazo de suspensión"(once meses y nueve días)se concluye, que desde el uno de noviembre de mil novecientos noventa y nueve a la fecha han transcurrido más de diez años y seis meses, lo cual conlleva a colegir que a la fecha han vencido en exceso los plazos de prescripción(...) (pp.4,5 y 6).</p>				

EJECUTORIAS DE LA CORTE SUPREMA PROCESADAS

N°	ARTÍCULOS Y TEMAS	SALA	EJECUTORIA	FECHA	PROVIENE DEL D.J.	FUNDAMENTOS	FALLO	MODIF.	PRESCRIP.	VOTO
55		1° SPT	R.N. N° 908-2009	2009	Lima	" Cuarto: ...se aprecia que se formuló acusación por delito contra la libertad-violación de la libertad del trabajo...ilícito que se encuentra previsto y penado en el artículo ciento sesenta y ocho del Código Penal, que sanciona dicha infracción punible con pena privativa de libertad no mayor de dos años; que en ese contexto fáctico y normativo, se señaló como fecha de la comisión del citado delito el tres de diciembre de dos mil uno...de donde se colige que a la fecha han transcurrido más de cinco años(teniendo en consideración la suspensión de los plazos de prescripción de la acción por haberse declarado fundada el recurso de queja excepcional interpuesto por el recurrente);que, por tanto, estando a lo dispuesto en los artículos ochenta y ochenta y tres del Código Penal, han transcurrido los plazos ordinario y extraordinario de prescripción de la acción penal, en este caso, alcanzan a tres años cesando la potestad persecutoria por el transcurso del tiempo(...)" (pp. 29).	No haber nulidad de resolución	Reformándola	Fundada la Excepción de prescripción	Unánime
56		1° SPT	R.N. N° 251-2008	2008	Lambayeque	" Tercero: Que es de puntualizar, que la Sala Superior al revocar la resolución apelada ha tomado como la consumación del delito, la fecha que registra el documento cuestionada consistente en la minuta de compra venta cuya copia certificada obra a fojas nueve y en su original a fojas noventa , en el que se consigna: veintitrés de agosto de mil novecientos noventa y nueve,...el delito de	Haber nulidad de resolución	Reformándola	Infundada la Excepción de prescripción	Unánime

EJECUTORIAS DE LA CORTE SUPREMA PROCESADAS

Nº	ARTÍCULOS Y TEMAS	SALA	EJECUTORIA	FECHA	PROVIENE DEL D.J.	FUNDAMENTOS	FALLO	MODIF.	PRESCRIP.	VOTO
						falsificación de documentos se configura desde el momento en que se hace uso de un documento falsificado o se pone en tráfico jurídico, con el cual se ocasiona un perjuicio;...que el procesado ..Utilizó dicho documento el veintinueve de octubre de dos mil tres...y es desde esta fecha, que debe realizarse el cómputo para los efectos de la prescripción de la acción penal. Cuarto: Que, en ese contexto, teniendo en cuenta que se trata de un delito sancionado con pena no mayor de cuatro años, a la fecha aún no ha operado los plazos de prescripción, tanto más que de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo Plenario número seis-dos mil siete /CJ-ciento dieciséis de fecha dieciséis de noviembre de dos mil siete, se suspende los plazos de prescripción cuando existe recurso de nulidad concedido vía queja excepcional" (pp.2y 3).				
57		1º SPP	R.N. Nº 1534-2008	2010	Cusco	“Tercero: Que, ahora bien, el delito contra la Administración de Justicia en la modalidad de ejercicio arbitrario del derecho por mano propia se encuentra previsto y penado en el artículo cuatrocientos diecisiete del Código Penal con prestación de servicio comunitario; que, en este sentido, si se tiene en cuenta que el evento materia de imputación ocurrió el dieciséis y diecisiete de mayo de dos mil cinco, deberá tenerse en consideración los artículos ochenta y ochenta y tres del acotado Código, de suerte que, al efectuar el cómputo de los	Haber nulidad de sentencia	Reformándola	Fundada la Excepción de prescripción	Unánime

EJECUTORIAS DE LA CORTE SUPREMA PROCESADAS

Nº	ARTÍCULOS Y TEMAS	SALA	EJECUTORIA	FECHA	PROVIENE DEL D.J.	FUNDAMENTOS	FALLO	MODIF.	PRESCRIP.	VOTO
						plazos, ha transcurrido el lapso ordinario y extraordinario de prescripción, e incluso descontando el término que estuvo suspendido dicho plazo, esto es, entre la interposición del recurso de queja excepcional - escrito de fojas quinientos diez, presentado el veintiuno de noviembre de dos mil seis- y la remisión de la copia certificada de la Ejecutoria Suprema que estimó el recurso de queja y concedió el recurso de nulidad -oficio de fojas quinientos sesenta y tres, recibido el quince de enero de dos mil ocho- a que se refiere el Acuerdo Plenario número cero seis-dos mil siete/CJ-ciento dieciséis, por lo que en todo caso la acción penal prescribió en mayo de dos mil nueve; que por tanto, resulta procedente declarar de oficio fundada la excepción de prescripción de la acción penal, conforme a la facultad conferida por el artículo quinto del Código de Procedimientos Penales, modificado por el Decreto Legislativo ciento veintiséis. Por estos fundamentos: declararon de oficio FUNDADA la excepción de prescripción de la acción penal (...)” (pp.1 y 2).				
58		1SPT	R.N. N° 2053-2009	2010	Piura	“TERCERO: Que si bien el cómputo del plazo de prescripción de la acción penal se suspende desde la interposición del recurso de queja excepcional -como consecuencia del denegatorio del recurso de nulidad- hasta la remisión al Tribunal Superior de la copia certificada de la Ejecutoria Suprema que estima el recurso en cuestión y concede el recurso de nulidad respectivo	Haber nulidad de sentencia	Reformándola	Fundada la Excepción de prescripción	Unánime

EJECUTORIAS DE LA CORTE SUPREMA PROCESADAS

Nº	ARTÍCULOS Y TEMAS	SALA	EJECUTORIA	FECHA	PROVIENE DEL D.J.	FUNDAMENTOS	FALLO	MODIF.	PREScrip.	VOTO
						(Acuerdo Plenario número seis guion dos mil siete / CJ guion ciento dieciséis); y, que el tiempo que no debe contabilizarse para efectos prescriptivos es once meses y diez días, tal como se desprende del recurso de queja excepcional de fojas ciento catorce, del veintiséis de febrero de dos mil ocho, y del oficio -obrante el cuaderno de queja excepcional- mediante el cual la Corte Suprema remite al Tribunal Superior la Ejecutoria Suprema, recepcionado el nueve de febrero del dos mil nueve; sin embargo, desde la fecha de comisión de los hechos -catorce de noviembre de dos mil tres-, descontando el tiempo de suspensión de la acción penal, a la fecha ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción de la acción penal(...)” (pp. 2).				
59	XVIII. Aplicación del plazo de prescripción más favorable al reo	1º SPT	R.N. Nº 4998-2007	2007	Callao	“ Tercero: Que, se advierte de la denuncia fiscal y dictamen del Fiscal Superior de fojas ciento siete y mil sesenta y nueve, respectivamente, que la conducta imputada a la procesada...se encuentra subsumida en el tipo penal previsto en el artículo cincuenta y cinco-A del Decreto Legislativo número ciento veintidós, (vigente al momento de suscitarse los hechos investigados), dispositivo penal, que preveía la pena de internamiento o penitenciaría no menor de quince años” Cuarto a) el Código Penal de mil novecientos veinticuatro regula en su Título décimo quinto, la extinción de la acción penal y de la pena, estableciéndose en el inciso tercero del artículo ciento diecinueve, que la acción penal prescribe	No haber nulidad de resolución			Unánime

EJECUTORIAS DE LA CORTE SUPREMA PROCESADAS

Nº	ARTÍCULOS Y TEMAS	SALA	EJECUTORIA	FECHA	PROVIENE DEL D.J.	FUNDAMENTOS	FALLO	MODIF.	PRESCRIP.	VOTO
						"a los diez años por delitos que merezcan penitenciaría o relegación"...b) el Código Penal de mil novecientos noventa y uno regula en su Título quinto, la extinción de la acción penal y de la pena, estableciendo el artículo ochenta, que "la acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley para el delito, si es privativa de libertad"(...) Quinto: Que, el Acuerdo Plenario de las Salas Penales Permanentes y Transitorias número dos-dos mil seis/CJ-ciento dieciséis, de fecha trece de octubre de dos mil seis, establece como doctrina legal, que resulta posible elegir entre dos leyes penales sucesivas en el tiempo los preceptos más favorables, en virtud al "principio de combinación" que permite al juzgador poder establecer una mayor benignidad penal a favor del reo(...) Sexto: Que, siendo ello así, resulta aplicable al presente caso, la legislación sobre prescripción de la acción penal regulada en el Código Penal de mil novecientos veinticuatro (...) Sétimo: (...) establece que en caso de delitos que merezcan penitenciaría como el presente caso,-por ser la pena más favorable- la acción penal prescribe a los diez años (plazo ordinario); plazo al cual, conforme al artículo ciento veintinueve del mismo texto legal, al haberse producido la interrupción de la acción penal por intervención de los operadores jurisdiccionales, corresponde aumentar como máximo en una mitad (plazo extraordinario), esto es, que en el presente caso debe transcurrir quince años para que				

EJECUTORIAS DE LA CORTE SUPREMA PROCESADAS

N°	ARTÍCULOS Y TEMAS	SALA	EJECUTORIA	FECHA	PROVIENE DEL D.J.	FUNDAMENTOS	FALLO	MODIF.	PRESCRIP.	VOTO
						opere la prescripción de la acción penal, lo que a la fecha ha transcurrido en exceso... NO HABER NULIDAD en el extremo que declaró de oficio extinguida la acción penal por prescripción „En el proceso penal seguido en su contra por el delito contra la Salud Pública-tráfico ilícito de drogas (...)” (pp.2,3 y 4).				
60		1° SPT	R.N. N° 5057-2008	2008	Lima	<p>”Tercero: Que el Código de mil novecientos veinticuatro aplicable por ser la norma que estuvo vigente al momento de ocurridos los hechos, establecía en su artículo ciento diecinueve los plazos de prescripción de la acción penal de acuerdo al tipo de pena correspondiente al delito, a los cuales conforme al artículo ciento veintuno del Código acotado debía adicionarse una mitad si se hubiera producido al interrupción de la acción penal. Cuarto: Que, si bien, el penúltimo párrafo del citado artículo ciento diecinueve también determina que tratándose de delitos cometidos en agravio del Estado, el pazo de prescripción se aumentaba en una mitad, esta regulación no fue introducida en el texto original del Código Penal de mil novecientos noventa y uno, en cuyo artículo ochenta sólo se regula la duplicidad del plazo de prescripción para los casos de delitos cometidos por funcionarios o servidores contra el patrimonio del Estado o de organismos sostenidos por éste, supuesto último que no es el caso de autos. Quinto: Que, en tal sentido, en virtud al principio de favorabilidad, previsto en el inciso once</p>	No haber nulidad de resolución			Unánime

EJECUTORIAS DE LA CORTE SUPREMA PROCESADAS

N°	ARTÍCULOS Y TEMAS	SALA	EJECUTORIA	FECHA	PROVIENE DEL D.J.	FUNDAMENTOS	FALLO	MODIF.	PRESCRIP.	VOTO
						del artículo ciento treinta y nueve de la Constitución Política del Estado, concordante con los artículos seis y nueve del Código Penal vigente, no corresponde su aplicación, tal como este Supremo Tribunal ha dejado establecido a través del Acuerdo Plenario número dos-dos mil seis/CJ-ciento dieciséis; que en consecuencia, habiendo transcurrido desde la fecha de la comisión de los hechos, más de veinte años; la potestad punitiva del Estado se ha extinguido al haber transcurrido con exceso tanto el plazo ordinario como extraordinario de prescripción(...)” (pp.2 y 3).				
61		1° SPT	R.N.N°-5213-2008	2008	Lima	<p>"Cuarto: Que, el Acuerdo Plenario de las Salas Permanentes y transitorias número dos-dos mil seis/CJ-ciento dieciséis, de fecha trece de octubre de dos mil seis, establece como doctrina legal, que resulta posible elegir de entre dos leyes penales sucesivas en el tiempo los preceptos más favorables, en virtud al "principio de combinación" que permite al Juzgador poder establecer una mayor benignidad penal a favor del reo...Quinto: Que, siendo ello así, resulta aplicable al presente caso, la legislación sobre prescripción de la acción penal regulada en el Código Penal de mil novecientos veinticuatro, debiendo tenerse en cuenta, en atención al principio de combinación aludido, que no resulta aplicable la dúplica del plazo de prescripción, por cuanto, el Código Penal</p>	No haber nulidad de resolución			Unánime

EJECUTORIAS DE LA CORTE SUPREMA PROCESADAS

N°	ARTÍCULOS Y TEMAS	SALA	EJECUTORIA	FECHA	PROVIENE DEL D.J.	FUNDAMENTOS	FALLO	MODIF.	PRESCRIP.	VOTO
						vigente solo la admite bajo determinados supuestos que no se presentan en el caso de la imputada. Sexto: Que, el inciso tercer del artículo ciento diecinueve del Código Penal de mil novecientos veinticuatro, establece que en caso de delitos que merezcan penitenciaría como el presente caso, la acción penal prescribe a los diez años (plazo ordinario); plazo al cual, conforme al artículo ciento veintiuno del mismo texto legal, al haberse producido la interrupción de la acción penal por intervención de los operadores jurisdiccionales, corresponde aumentar como máximo en una mitad (plazo extraordinario); plazo al cual, conforme al artículo ciento veintiuno del mismo texto legal, al haberse producido la interrupción de la acción penal por intervención de los operadores jurisdiccionales, corresponde aumentar como máximo en una mitad (plazo extraordinario), esto es, que en el presente caso debía transcurrir quince años para que opere la prescripción de la acción penal, lo que a la fecha ha transcurrido en exceso(...)...." (pp.3 y 4).				
62		1° SPT	R.N. N° 2960-2009	2009	Junín	" Cuarto: los hechos materia de imputación se retrotraen al trece de setiembre de mil novecientos ochenta y nueve, cuando estaba vigente el Código Penal de mil novecientos veinticuatro que en su artículo ciento noventa nueve establecía" ...Será reprimido con pena de muerte el que hubiera hecho sufrir el acto sexual o un acto análogo a un menor de siete o menos años de edad...", sin	No haber nulidad de resolución			Unánime

EJECUTORIAS DE LA CORTE SUPREMA PROCESADAS

Nº	ARTÍCULOS Y TEMAS	SALA	EJECUTORIA	FECHA	PROVIENE DEL D.J.	FUNDAMENTOS	FALLO	MODIF.	PRESCRIP.	VOTO
						<p>embargo debe indicarse que la Constitución Política del Estado de mil novecientos setenta y nueve, proscribió la pena de muerte para los delitos de violación, por tanto debe entenderse que correspondería aplicarse al presente caso la pena de internamiento, ello si se advierte que ésta es la inmediata inferior en gravedad a la pena de muerte...la pena de internamiento era indeterminada, estableciéndose como límite mínimo veinticinco años; asimismo, el texto primigenio del Código Penal de mil novecientos noventa y uno señalaba en su artículo ciento setenta y tres:"El que practica el acto sexual u otro análogo con un menor de catorce años, será reprimido con las siguientes penas privativas de libertad:(uno).Si la víctima tiene menos de siete años, la pena será no menor de quince años..."y la pena en su extremo máximo..."tendrá una duración mínima de dos días y una máxima de veinticinco años..." , que en tal sentido, se advierte que la norma que más le beneficia al encausado es la del Código Penal de mil novecientos noventa y uno, resultando ésta aplicable al presente caso en virtud del principio de combinación y retroactividad benigna, regulado en el artículo seis del citado texto legal. Quinto: Que, teniéndose en el presente caso como límites punitivos (mínimo y máximo respectivamente): quince y veinticinco años...esto significa que en el presente caso el plazo de prescripción extraordinaria sería treinta y siete años y</p>				

EJECUTORIAS DE LA CORTE SUPREMA PROCESADAS

Nº	ARTÍCULOS Y TEMAS	SALA	EJECUTORIA	FECHA	PROVIENE DEL D.J.	FUNDAMENTOS	FALLO	MODIF.	PRESCRIP.	VOTO
						medio, sin embargo el Acuerdo Plenario número nueve-dos mil siete/CJ-ciento dieciséis, de fecha dieciséis de noviembre de dos mil siete ha establecido lo siguiente " ...que el plazo ordinario de prescripción para delitos sancionados con pena privativa de libertad temporal siempre será de veinte años...", agregando, "...que ello no afecta en nada, ni menos excluye la operatividad de las reglas que regulan el cómputo del plazo de prescripción extraordinario..."de lo que se infiere que en tal supuesto este último plazo será siempre de treinta años:...por lo que siendo los hechos materia de imputación de fecha trece de setiembre de mil novecientos ochenta y nueve, se concluye que a la fecha la acción penal no ha prescrito..." (pp.4,5 y6).				
63		1º SPP	R.N. Nº 1297-2009	2010	Lima	“Cuarto: Que de conformidad con el artículo ciento diecinueve del Código Penal de mil novecientos veinticuatro, modificado por el Decreto Legislativo número ciento veintuno, del quince de junio de mil novecientos ochenta y uno, el plazo ordinario de prescripción para los delitos que merecían penitenciaría era diez años; que, asimismo, el artículo ciento veintuno del citado cuerpo normativo establecía que el plazo de prescripción extraordinario se producía "... cuando la duración del plazo ordinario de la prescripción sobrepasa en una mitad", de lo que se infiere que el plazo de prescripción total de la acción penal	No haber nulidad de auto			Unánime

EJECUTORIAS DE LA CORTE SUPREMA PROCESADAS

Nº	ARTÍCULOS Y TEMAS	SALA	EJECUTORIA	FECHA	PROVIENE DEL D.J.	FUNDAMENTOS	FALLO	MODIF.	PRESCRIP.	VOTO
						<p>conforme a las normas del mencionado Código Penal era de quince años. Quinto: Que el delito de terrorismo atribuido a los encausados se consumió el cinco de febrero de mil novecientos noventa, por lo que a la fecha transcurrieron exceso el plazo de prescripción de la acción penal; que no resulta amparable lo alegado por el representante de la Procuraduría Pública en el sentido de aplicar el segundo párrafo del artículo ciento diecinueve del Código Penal de mil novecientos veinticuatro, que establece "... el plazo de prescripción aumentara en una mitad tratándose de delitos en agravio del Estado", tanto porque la norma penal aplicable debe ser la más favorable cuando existe conflicto en el tiempo de leyes penales -principio de favorabilidad contenido en los artículos ciento tres y ciento treinta y nueve, inciso once de la Constitución Política del Estado, concordante con el artículo seis del Código Penal-, cuanto porque al entrar en vigor el Código Penal de mil novecientos noventa y uno no acogió dicha causal de extensión del plazo prescriptorio, la que en la actualidad -a partir de la Ley número veintiséis mil trescientos sesenta del veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro- sólo esta configurada cuando se trata de funcionarios o servidores públicos por delito en agravio del patrimonio del Estado; que, por tanto la resolución impugnada se encuentra conforme a ley" (pp.2 y 3).</p>				

EJECUTORIAS DE LA CORTE SUPREMA PROCESADAS

N°	ARTÍCULOS Y TEMAS	SALA	EJECUTORIA	FECHA	PROVIENE DEL D.J.	FUNDAMENTOS	FALLO	MODIF.	PRESCRIP.	VOTO
64		1° SPP	R. N. N° 1495-2009	2010	Lima	<p>“Segundo: Que se atribuye a Alvarado Pinedo que el dieciséis de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, en compañía de otros sujetos provistos de armas de fuego, incursionaron en el Caserío de Consuelo [a treinta kilómetros de Tarapoto], pidiendo cupos a los pobladores del lugar, ya sea en dinero o prendas de vestir, para luego darse a la fuga. Tercero: Que según el Acuerdo Plenario número dos - dos mil seis / CJ - ciento dieciséis, inspirado en el principio de combinación de leyes, es posible elegir de entre dos leyes penales sucesivas en el tiempo los preceptos más favorables que permitan al juzgador establecer una mayor benignidad penal a favor del reo; que, ahora bien, en materia de prescripción de la acción penal, para el Código Penal de mil novecientos veinticuatro los delitos sancionados con penalidad de carácter penitenciaria señalaban el plazo de prescripción ordinaria de la acción penal diez años y la extraordinaria quince años; que además el plazo de prescripción de la acción penal -ordinaria o extraordinaria- se incrementaba en una mitad cuando el agraviado sea el Estado, sin embargo este último supuesto no fue incorporado por el Código Penal de mil novecientos noventa y uno -norma posterior más favorable-, consecuentemente en aplicación del principio constitucional de favorabilidad y de combinación de leyes resulta aplicable este último Código al no extender el plazo de prescripción cuando resulte agraviado</p>	No haber nulidad de resolución			Unánime

EJECUTORIAS DE LA CORTE SUPREMA PROCESADAS

Nº	ARTÍCULOS Y TEMAS	SALA	EJECUTORIA	FECHA	PROVIENE DEL D.J.	FUNDAMENTOS	FALLO	MODIF.	PRESCRIP.	VOTO
						el Estado; que, siendo así, en el caso de autos -desde la fecha de los hechos imputados-, el plazo de prescripción extraordinaria de la acción penal es de quince años, tiempo que a la fecha ha transcurrido en exceso”(pp.1).				
65		1º SPP	R.N. Nº 1378-2009	2010	Lima	<p>“Tercero: Que el control difuso como derecho y obligación constitucionalmente reconocido a todos los jueces para el caso concreto está reservado para las "normas legales y leyes y normas de rango inferior", y los acuerdos plenarios no tienen dicha categoría; sin embargo, ello no es óbice para reconocer que, en el presente caso, al aplicar el principio de combinación de leyes penales no se verificó trasgresión alguna a la norma constitucional en tanto que dicho principio se caracteriza porque: i) es congruente con la finalidad esencial de favorabilidad frente a sucesión de leyes penales -regla interpretativa recogida en el ámbito nacional...el ámbito internacional...-; ii) no crea una tercera Ley o Lextertia, sino que efectiviza un proceso de integración de normas más favorables al reo, que no colisiona con los contenidos del principio de legalidad; y iii) guarda concordancia con el principio de necesidad de la intervención penal, porque cuando se producen variaciones en los preceptos que integran las normas penales y que favorecen al reo, es evidente que el legislador ha estimado necesario regular - en sentido benéfico- la intervención penal; en este entendido, en nada se afecta la</p>	No haber nulidad de resolución	Reformándola	Prescrita la acción penal	Unánime

EJECUTORIAS DE LA CORTE SUPREMA PROCESADAS

Nº	ARTÍCULOS Y TEMAS	SALA	EJECUTORIA	FECHA	PROVIENE DEL D.J.	FUNDAMENTOS	FALLO	MODIF.	PRESCRIP.	VOTO
						división de trabajo de los distintos poderes estatales, por el contrario, se reafirma y consolida. Cuarto: Que, en este contexto, en aplicación del principio de combinación de leyes , para efectos de establecer el plazo de prescripción de la acción penal se tuvo en cuenta la ley anterior -vigente al momento de los hechos- más favorable en el cómputo del plazo de prescripción en función del tipo de pena -desfavorable desde la actual norma que determina la prescripción de la pena en función a los topes máximos legales-; así como la aplicación de la ley Intermedia del Código Penal de mil novecientos noventa y uno, consistente en la derogación del incremento en una mitad al plazo de prescripción cuando el agraviado es el Estado -regulado en el artículo ciento diecinueve del Código Penal abolido-; que aplicado al caso sub judice tenemos que el juicio jurídico y el cómputo de prescripción efectuado por la Sala Penal Nacional se ajusta a ley, en tanto que los hechos imputados a los encausados al momento de su comisión se encontraban previstos en el artículo doscientos ochenta y ocho - A, doscientos ochenta y ocho - B inciso a y doscientos ochenta y ocho - F del Código Penal de mil novecientos veinticuatro, incorporados a través de la Ley veinticuatro mil novecientos cincuenta y tres, que sancionaba el delito con pena de penitenciaría, y conforme a lo establecido en el numeral tres del artículo ciento diecinueve del mismo Cuerpo Legal,				

EJECUTORIAS DE LA CORTE SUPREMA PROCESADAS

Nº	ARTÍCULOS Y TEMAS	SALA	EJECUTORIA	FECHA	PROVIENE DEL D.J.	FUNDAMENTOS	FALLO	MODIF.	PRESCRIP.	VOTO
						disponía que tratándose de esta clase de pena, la acción penal prescribía a los diez años, como plazo ordinario, y extraordinariamente -por actos judiciales de instrucción o de juzgamiento, de acuerdo al último párrafo del artículo ciento veintiuno del referido Código- se le añade una mitad, -sin aplicar el sexto párrafo del artículo ciento diecinueve del Código Penal de mil novecientos veinticuatro- por lo que el plazo de prescripción en el presente caso es de quince años; y considerando que los hechos son ubicados temporalmente entre los años mil novecientos ochenta y nueve y mil novecientos noventa, a la fecha la acción penal ha prescrito con exceso. Por estos fundamentos: declararon NO HABER NULIDAD en la resolución de fojas quinientos cuarenta y cuatro, del diez de febrero de dos mil nueve, que declaró de oficio fundada la excepción de prescripción..."(pp. 2,3 y 4).				
66		1SPT	R.N. EXP. N° 1305-2005	2005	Lima	“Cuarto: Que teniendo en cuenta que los delitos contra la administración pública (Malversación de Fondos) y Violencia y resistencia a la autoridad que se le imputa al procesado, se encuentran previstos en el artículo trescientos ochentinueve y trescientos sesentiocho del Código Penal, los cuales sancionan estos ilícitos con pena privativa de la libertad no mayor de cuatro y dos años respectivamente, es de concluir que la acción penal ha prescrito pues desde la fecha de su comisión a la	No haber nulidad de resolución		Fundada la Excepción de prescripción	Unánime

EJECUTORIAS DE LA CORTE SUPREMA PROCESADAS

N°	ARTÍCULOS Y TEMAS	SALA	EJECUTORIA	FECHA	PROVIENE DEL D.J.	FUNDAMENTOS	FALLO	MODIF.	PRESCRIP.	VOTO
						actualidad ha transcurrido más de diez años y conforme a lo dispuesto el artículo ochenta y ochentitres del Código Penal, la acción penal prescribe cuando ha transcurrido un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la Ley y en todo caso, cuando sobrepasa en una mitad al plazo ordinario de prescripción: no siendo de aplicación el incremento de una mitad adicional al plazo ordinario de prescripción a que hace referencia el impugnante, por cuanto, la Ley veintiséis mil trescientos catorce que lo incorpora al citado artículo ochenta fue publicada el veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, esto es con posterioridad a la fecha de comisión del ilícito y a tenor de los dispuesto por el artículo ciento tres, ciento treinta y nueve numeral once de la Constitución Política y el “principio de combinación y favorabilidad de la ley penal en caso de conflicto de leyes” (pp. 2).				
67		2SPT	R. N. N° 2426-04	2005	Tumbes	“CUARTO: Que, en el caso sub iudice, el delito de peculado se encuentra previsto y sancionado en el artículo trescientos ochentisiete del Código Penal; que, además, se debe considerar que cuando ocurrieron los hechos el artículo ochenta del Código Penal, no establecía la duplicidad del plazo para la prescripción de los delitos cometidos por funcionarios o servidores públicos que afectan el patrimonio del Estado o de organismos sostenidos por éste, la cual fue recién	Haber nulidad de sentencia	Reformándola	Fundada la prescripción	

EJECUTORIAS DE LA CORTE SUPREMA PROCESADAS

Nº	ARTÍCULOS Y TEMAS	SALA	EJECUTORIA	FECHA	PROVIENE DEL D.J.	FUNDAMENTOS	FALLO	MODIF.	PRESCRIP.	VOTO
						<p>incorporada por el artículo dos de la ley número veintiséis mil trescientos sesenta del veintinueve de setiembre del año mil novecientos novecicuatro.</p> <p>QUINTO: Que tomando en cuenta el tiempo transcurrido desde la comisión del último hecho imputado, esto es, el seis de octubre de mil novecientos noventidós, y las penas previstas en la ley para el delito de peculado doloso conforme al artículo trescientos ochentisiete del Código Penal, es de inferir que el plazo extraordinario de prescripción ha vencido en exceso...” (pp. 2).</p>				
68		SPP	R.N. N° 2860-2006	2007	Ancash	<p>“Tercero: Que, ahora bien, el artículo ciento setenta y tres del Código Penal prevé la penalidad que corresponde aplicar al autor de un delito de violación de menores y establece distintas escalas penales que toman en cuenta para su mayor o menor gravedad la edad concreta del sujeto pasivo al momento de comisión del delito; que en su texto original el artículo ciento setenta y tres del Código Penal conminaba en sus tres incisos penas de diferente duración, según el grupo etareo que se señalaba en cada uno de ellos, sin embargo, sólo consignaba el mínimo de la pena legal y omitía toda referencia expresa a su límite máximo; que, no obstante ello, tal opción legislativa –por una ineludible aplicación del principio de proporcionalidad de las penas y de coherencia y autolimitación interna entre las circunstancias agravantes legalmente incorporadas– no autoriza a</p>	No Haber nulidad en la resolución		Fundada la prescripción	

EJECUTORIAS DE LA CORTE SUPREMA PROCESADAS

Nº	ARTÍCULOS Y TEMAS	SALA	EJECUTORIA	FECHA	PROVIENE DEL D.J.	FUNDAMENTOS	FALLO	MODIF.	PRESCRIP.	VOTO
						concluir que el extremo superior de penalidad legal no existe y que, por ello, deba acudirse al límite general o abstracto de la pena privativa de libertad; que, por el contrario, y –como se ha expuesto precedentemente– por estrictas razones sistemáticas entre las aludidas circunstancias definidas en cada inciso del tipo legal , éste debe corresponder al mínimo legal previsto para el grupo etario precedente; que, por consiguiente, para el inciso tercero el máximo de pena aplicable era el mínimo señalado en el inciso segundo, y para el inciso segundo el máximo legal corresponde al extremo mínimo de pena conminada establecido en el inciso primero , que en relación a este último inciso el máximo legal de la pena conminada sería el genérico que establecía el hoy suprimido artículo veintinueve del Código Penal, también en su texto original, para la pena privativa de libertad y que era de veinticinco años”. Cuarto: Que en la redacción actual del artículo ciento setenta y tres del Código Penal...si se consignó para cada inciso un límite mínimo y máximo de pena conminada; que con relación a la agravante especial que describe el párrafo final texto vigente del artículo ciento setenta y tres del Código Penal, la pena aplicable a los casos de los incisos dos y tres es de cadena perpetua; que no obstante ello, en la redacción precedente que introdujo la Ley número veintiocho mil doscientos cincuenta y uno,...para dicho supuesto agravado la pena privativa de libertad				

EJECUTORIAS DE LA CORTE SUPREMA PROCESADAS

Nº	ARTÍCULOS Y TEMAS	SALA	EJECUTORIA	FECHA	PROVIENE DEL D.J.	FUNDAMENTOS	FALLO	MODIF.	PRESCRIP.	VOTO
						<p>señalaba solamente un mínimo de treinta años, por lo que para los supuestos contenidos en los incisos antes mencionados el máximo de pena privativa de libertad aplicable era de treinta cinco años, pues el inciso uno consignaba como pena exclusiva la de cadena perpetua.</p> <p>Quinto: Que conforme al artículo ochenta del Código Penal el plazo ordinario de prescripción de la acción penal es igual al máximo de la pena fijada por la ley para el delito, si es privativa de libertad y, su plazo extraordinario opera conforme a la parte in fine del artículo ochenta y tres del acotado Código cuando el tiempo transcurrido sobrepasa en una mitad al plazo ordinario de prescripción. Sexto: Que en aplicación del tercer y cuarto fundamento jurídico de la presente Ejecutoria Suprema y en atención a la pena conminada para el supuesto de hecho descrito en el texto original del inciso dos del artículo ciento setenta y res del Código Penal, esto es, ocho años de privación de libertad, la prescripción extraordinaria de la acción penal opera a los doce años; que, por consiguiente, desde la fecha de la comisión del delito inculminado-abril de mil novecientos noventa y tres- a la actualidad dicho plazo ha transcurrido en exceso...” (pp. 1, 2 y 3).</p>				

EJECUTORIAS DE LA CORTE SUPREMA PROCESADAS

Nº	ARTÍCULOS Y TEMAS	SALA	EJECUTORIA	FECHA	PROVIENE DEL D.J.	FUNDAMENTOS	FALLO	MODIF.	PRESCRIP.	VOTO
69	XIX. El antejuicio como causa de suspensión de la acción penal	1º SPP	CASACIÓN Nº 76-2010	2011	Arequipa	<p>“CONSIDERANDO</p> <p>Tercero: Que, el Acuerdo Plenario número uno guion dos mil diez oblicua CJ guion ciento dieciséis, al referirse a la suspensión de la prescripción de un proceso, sostiene que su continuación dependerá de la decisión que arribará por parte de un autoridad extrapenal, que puede ser un Juez del ámbito civil, administrativo, comercial, de familia.</p> <p>Cuarto: Que, el Tribunal Constitucional en el Expediente número cinco mil sesenta y ocho guion dos mil seis guion PHC oblicua TC, seguido por César Humberto Tineo Cabrera, que tenía la prerrogativa del antejuicio, en el Fundamento Jurídico número doce, indicó que dicho procedimiento parlamentario suspende la prescripción penal... "En el caso concreto, dado que el recurrente gozaba de la prerrogativa del antejuicio político, es evidente que aquel era un trámite indispensable, como paso previo, para que se diera inicio al proceso penal". Siendo por ello, que en el Fundamento Jurídico número trece efectúa un análisis del tiempo de la suspensión de la prescripción indicando "(...) si los hechos investigados ocurrieron el catorce de mayo de mil novecientos noventa y siete, y antes de iniciado el proceso penal debía llevarse a cabo el Antejuicio Político en el Congreso de la República, que constituye una 'cuestión' que implica un procedimiento distinto y que por ende constituye un</p>	Haber nulidad de sentencia			Dividido Voto Dirimente: Juez Supremo Jorge Calderón Castillo

EJECUTORIAS DE LA CORTE SUPREMA PROCESADAS

Nº	ARTÍCULOS Y TEMAS	SALA	EJECUTORIA	FECHA	PROVIENE DEL D.J.	FUNDAMENTOS	FALLO	MODIF.	PRESCRIP.	VOTO
						<p>motivo de suspensión del plazo prescriptorio, durante el periodo comprendido en la denuncia formalizada por la Fiscalía de la Nación de fojas sesenta y cinco y siguientes, estos son, ocho de marzo de mil novecientos noventa y ocho en que se expidió el Dictamen Acusatorio de la Subcomisión encargada de la Acusación Constitucional, en los términos aprobados por el Pleno del Congreso de la República de fecha tres de diciembre de mil novecientos noventa y ocho (en cuyo Ínterin operó la suspensión del plazo de la prescripción durante ocho meses y veinticinco días), reiniciándose el conteo del plazo en esta última fecha, por lo que al momento de emisión de la sentencia de vista (el diez de setiembre de dos mil tres) sólo habían transcurrido cinco años seis meses y veintinueve días (lo que se colige de la sumatoria del plazo transcurrido desde la fecha de comisión de los hechos hasta el día en que se inició la suspensión acotada y el plazo transcurrido después [de] finalizado el periodo de suspensión hasta el momento de la sentencia de vista); por consiguiente no se encontraba prescrita la acción penal y el Estado no perdió su facultad punitiva y, con ello, la posibilidad de investigar y sancionar” (pp. 4 y 5).</p>				

EJECUTORIAS DE LA CORTE SUPREMA PROCESADAS

N°	ARTÍCULOS Y TEMAS	SALA	EJECUTORIA	FECHA	PROVIENE DEL D.J.	FUNDAMENTOS	FALLO	MODIF.	PRESCRIP.	VOTO
70	XX. Prescripción de la querrela	1° SPT	R.N. N° 2162-2008	2008	Lambayeque	<p>Cuarto: Que, el tipo penal materia de imputación es el comprendido en el artículo ciento treinta y dos del Código Penal, que reprime el hecho delictivo con una sanción no mayor a los tres años de pena privativa de la libertad, término que constituiría el plazo de prescripción ordinaria para extinguir la acción penal, sin embargo, conforme a lo dispuesto a la última parte del artículo ochenta y tres del Código sustantivo, debe adicionarse el plazo de un año y medio más para concurrir la prescripción extraordinaria, lo que nos conlleva a colegir que el plazo definitivo para que la acción penal se extinga es de cuatro años y seis meses, lo que equivale al plazo ordinario de prescripción más la mitad, plazo que computado desde el día de los hechos, es decir el veinticinco de agosto de dos mil cuatro a la fecha ha transcurrido en exceso; que siendo así, es evidente que se ha extinguido la potestad punitiva del Estado, tanto, para investigar el hecho criminal como para sancionar al querrellado..REFORMANDOLA:...declararon de oficio Fundada la Excepción de Prescripción, consecuentemente, extinguida la acción penal...por su presunta responsabilidad en el delito contra el Honor-difamación agravada por medio de prensa..." (pp.2).</p>	No haber nulidad de resolución	Reformándola	Fundada la Excepción de prescripción	Unánime

EJECUTORIAS DE LA CORTE SUPREMA PROCESADAS

Nº	ARTÍCULOS Y TEMAS	SALA	EJECUTORIA	FECHA	PROVIENE DEL D.J.	FUNDAMENTOS	FALLO	MODIF.	PRESCRIP.	VOTO
71		1º SPT	R.N. Nº 2108-2008	2008	Lima	<p>"Quinto: Que, habiendo acontecido el hecho imputado el dos de abril de dos mil tres, resulta aplicable los artículos ochenta y ochenta y tres del Código Penal de mil novecientos noventa y uno, los cuales regulan los plazos de la prescripción ordinario y extraordinario del ejercicio de la acción penal, respectivamente, siendo el caso que la primera se configura cuando transurre un día más de la pena abstracta máxima más su mitad; que el tipo penal de difamación agravada contempla una pena abstracta máxima de tres años de pena privativa de libertad, siendo el caso que para la configuración de la prescripción extraordinaria, en virtud a los artículos referidos, se necesitaría que transcurra más de cuatro años y seis meses, lapso que ha sido cumplido en demasía, por lo que corresponde declarar fundada la excepción de prescripción del ejercicio de la acción penal deducida por el querellado" (pp.2).</p>	No haber nulidad de resolución	Reformándola	Prescrita la acción penal	Unánime
72	XXI. Prescripción de penas accesorias	1º SPT	R.N. Nº 89-2009	2009	Apurímac	<p>"Primero: Que, el impugnante en su recurso fundamentado de fojas cuarenta y cuatro, sostiene que la pena accesoria de inhabilitación por el plazo de un año sostiene que la pena accesoria de inhabilitación por el plazo de un año-que se le impuso, a la fecha habría prescrito, en razón de que la sentencia fue dictada con fecha veintiséis de julio de dos mil cinco.</p> <p>“Tercero: Que, la prescripción de la pena implica la imposibilidad jurídica de materializar la sanción penal impuesta al responsable de una infracción y la extinción, por tanto, de responsabilidad criminal adquirida...Cuarto: Que, en ese</p>	No haber nulidad de resolución			Unánime

EJECUTORIAS DE LA CORTE SUPREMA PROCESADAS

Nº	ARTÍCULOS Y TEMAS	SALA	EJECUTORIA	FECHA	PROVIENE DEL D.J.	FUNDAMENTOS	FALLO	MODIF.	PRESCRIP.	VOTO
						contexto, en el caso de autos, la sentencia que definió la situación jurídica del encausado quedó firme luego de expedida la Ejecutoria Suprema ya citada de fojas diecisiete, que la norma vigente al momento de los hechos fue la Ley número veintiséis mil trescientos catorce que duplica el plazo de prescripción en los delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos contra el patrimonio del Estado, y que la pena impuesta al sentenciado fue de dos años de pena privativa de libertad e inhabilitación por el término de un año, a la que se debe adicionar la duplicidad que prescribe el último párrafo del artículo ochenta del Código Penal, es de concluir que aún no se ha cumplido el plazo prescriptorio que alude el recurrente" (pp.5).				
73	XXII. Nulidad de sentencia por omitir resolver excepción.	1º SPT	R.N. Nº 59-2008	2008	Pasco	"Tercero: Que el artículo doscientos noventa y ocho, inciso uno del Código de Procedimientos Penales señala que <i>"La Corte Suprema declarará la nulidad: Cuando en la sustanciación de la instrucción en la del proceso de juzgamiento, se hubiera incurrido en graves irregularidades u omisiones de trámites o garantías establecidas por la Ley Procesal Penal.</i> "Sexto: Que, asimismo, se advierte que a fojas setecientos treinta tres, la defensa del procesado Oscar López Gutiérrez al presentar sus conclusiones respectivas, dedujo la excepción de prescripción de la acción penal por el delito de	Nula la sentencia			Unánime

EJECUTORIAS DE LA CORTE SUPREMA PROCESADAS

Nº	ARTÍCULOS Y TEMAS	SALA	EJECUTORIA	FECHA	PROVIENE DEL D.J.	FUNDAMENTOS	FALLO	MODIF.	PRESCRIP.	VOTO
						incumplimiento de funciones, sin embargo, la Sala Penal Superior emitió sentencia sin haber dado respuesta jurídica alguna a dicho pedido, lo que evidentemente transgrede el derecho de todo justiciable a la tutela jurisdiccional efectiva, en tal sentido se evidencia que en el trámite procesal realizado, se han incurrido en vicios insubsanables, que conllevan a la nulidad de la sentencia expedida..." (pp.5).				
74	XXIII. Nulidad de sentencia por omitir resolver la imputación por uno de los delitos.	1º SPP	R.N. Nº 127-2009	2010	Ayacucho	<p>“Tercero: Que conforme se verifica del auto ampliatorio de instrucción de fojas trescientos treinta se amplió la causa contra la imputada... por los delitos de peculado y rehusamiento de entregar bienes en custodia, tipificándose los hechos en los artículos trescientos ochenta y siete primer párrafo y trescientos noventa y uno del Código Penal; y en la misma resolución se aclaró el auto apertorio de instrucción de fojas ciento tres -que corresponde al encausado- para precisarse que a este también le alcanza la tipificación de las referidas normas legales. Cuarto: Que, posteriormente, cuando el representante del Ministerio Público formuló su acusación fiscal circunscribió los cargos en los citados delitos de peculado y rehusamiento de entregar bienes en custodia, ilícitos penales...”Quinto: Que, sin embargo el auto recurrido se limitó a pronunciarse solamente con relación a la segunda figura penal mencionada, y sobre esa base</p>	Haber nulidad de resolución			Unánime

EJECUTORIAS DE LA CORTE SUPREMA PROCESADAS

Nº	ARTÍCULOS Y TEMAS	SALA	EJECUTORIA	FECHA	PROVIENE DEL D.J.	FUNDAMENTOS	FALLO	MODIF.	PRESCRIP.	VOTO
						declaró prescrita la acción penal incoada contra los referidos imputados, omitiendo pronunciarse por el delito de peculado, por lo que siendo así, se ha incurrido en la causal de nulidad prevista en el inciso primero del artículo doscientos noventa y ocho del Código de Procedimientos Penales. Por estos fundamentos: declararon NULA la resolución de fojas quinientos cincuenta y uno, del veintiuno de noviembre de dos mil ocho, que declaró fundada de oficio la excepción de prescripción de la acción penal” (pp. 4 y 5).				
75		1º SPP	R.N. Nº 942-2009	2010	Callao	Quinto: Que, en cuanto a este mismo hecho, se advierte que no es correcta la desvinculación de la tesis de imputación respecto de la responsabilidad de los encausados Jorge Ramírez Gudiel - Director Municipal-, Luis Fernández Bances -Director de Administración- y Bernardo Muníves Parreño -Tesorero- por el delito de peculado culposo, pues en las acciones realizadas por los indicados encausados no se aprecia actuación por negligencia que haya dado ocasión a la sustracción del bien por parte de un tercero, sino que ellos de manera activa y directa estaban vinculados en este hecho, apropiándose de parte del dinero cobrado indebidamente por Rosier Alexander Oblitas Díaz y Víctor Abraham Huambachano Espejo, respectivamente, pues estos encausados dentro de sus funciones tenían la obligación de autorizar	Haber nulidad de sentencia			Unánime

EJECUTORIAS DE LA CORTE SUPREMA PROCESADAS

N°	ARTÍCULOS Y TEMAS	SALA	EJECUTORIA	FECHA	PROVIENE DEL D.J.	FUNDAMENTOS	FALLO	MODIF.	PRESCRIP.	VOTO
						y verificar el debido cumplimiento del procedimiento para formular órdenes de pago y girar los respectivos cheques; imputación que se encontraría probada con el Informe cero cero cuatro - noventa y nueve /MDLP/OAI, de fojas sesenta y dos, elaborado por la Oficina de Auditoría Interna de la Municipalidad Distrital de la Perla, y con la pericia contable de fojas dos mil cincuenta y siete; elementos probatorios que debieron ser valorados de manera conjunta y no aislada, conforme lo informan los criterios jurisprudenciales precisados en el Acuerdo Plenario número cuatro - dos mil cinco / CJ-ciento dieciséis, referido a la "definición y estructura del delito de peculado"; en consecuencia, en este extremo debe anularse la sentencia recurrida conforme a la facultad contenida en el artículo doscientos noventa y nueve del Código de Procedimientos Penales, y se disponga se lleve a cabo un nuevo juicio oral. [...]III. Declararon NULA la indicada sentencia en el extremo que declaró Fundada de oficio la excepción de prescripción de la acción penal incoada contrapor el delito contra la Administración Pública - peculado por negligencia en agravio de la Municipalidad Distrital de la Perla y del Estado -en el caso de la Empresa J.MZ con relación al cheque indebidamente girado a su nombre- ; MANDARON que se realice un nuevo juzgamiento por otro Colegiado y se emita sentencia teniendo en cuenta la parte considerativa de la presente Ejecutoria; y los devolvieron" (pp. 8 y 9).				

ANEXO 4: CUADRO DE LOS ACUERDOS PLENARIOS PROCESADOS

El criterio de orden de cada uno de los acuerdos es desde el más actual al más antiguo

CUADRO DE LOS ACUERDOS PLENARIOS PROCESADOS

ACUERDOS PLENARIOS	CRITERIO	FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA APROBADA	FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA DESAPROBADA O EN MINORÍA	CONCLUSIÓN (FUNDAMENTOS QUE SE CONCLUYERON)
<p><i>1/Acuerdo Plenario N° 2-2011/CJ-116</i></p>	<p>Plazos de prescripción en los delitos contra la administración pública para los cómplices <i>extraneus</i></p>	<p>“16°. De la lectura de estas dos proposiciones es evidente que la calidad de funcionario o servidor público del autor ha sido prevista como una condición especial de deberes que fundamenta la mayor extensión del término de la prescripción, por la distinta posición que éstos ocupan en la sociedad y porque de ellos se espera una actitud de compromiso especial frente a la Administración Pública. Ello implica deberes de protección, ausencia de defraudación de la confianza pública depositada en él y compromiso real con el ente estatal por la situación de mayor riesgo para el bien jurídico que tienen por el poder que ostentan.</p> <p>En consecuencia, los que no detentan esas condiciones, no infringen el deber jurídico especial que vincula al funcionario o servidor público y, en ese sentido, no son merecedores de un mayor reproche penal en vinculación con la extensión del plazo de la prescripción. Es ese contexto, el marco concretado para el autor de un delito de infracción de deber, en términos de prescripción, no puede sostener una mayor extensión de los mismos para el <i>extraneus</i>.</p> <p>17°. Desde esta perspectiva y al amparo de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, es necesario que exista una diferenciación entre el <i>intranei</i> y <i>extraneus</i> derivada de la diferente condición y ausencia del deber jurídico especial. Esta distinción entre intervenciones principales y accesorias tiene el efecto de la escisión del término de la prescripción, pues con ello se va conseguir una justicia justa y un equilibrio punitivo en función a la real magnitud de la participación del agente. Esta posición, asimismo, guarda absoluta coherencia con la regulación prescrita en el artículo 88° CP que estatuye “La prescripción corre, se suspende o se interrumpe separadamente para cada uno de los partícipes del hecho punible”.</p> <p>18°. En suma, los <i>extraneus</i> se registrarán por la pena correspondiente al delito ejecutado por el autor -dentro de los comprendidos en el</p>		

CUADRO DE LOS ACUERDOS PLENARIOS PROCESADOS

ACUERDOS PLENARIOS	CRITERIO	FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA APROBADA	FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA DESAPROBADA O EN MINORÍA	CONCLUSIÓN (FUNDAMENTOS QUE SE CONCLUYERON)
		<p>Capítulo II, Título XVIII, del Libro Segundo del CP-, pero para los efectos del cómputo de la prescripción no se les extenderá el término del plazo previsto para los autores, pues a ellos no les alcanza la circunstancia agravante que sólo corresponde al autor.</p> <p>19°. Se estima que lo precedentemente desarrollado es la forma correcta de abordar la cuestión. No se puede desconocer que los partícipes que no ostentan los deberes especiales, sólo responden por el delito de infracción de deber en calidad de inductores o cómplices -sin que ello implique la ruptura del título de imputación, como ya se explicó-, en tanto, no pueden realizar materialmente la conducta por un defecto esencial a nivel de imputación como autor.</p> <p>En tal virtud, el extraneus no infringe ningún deber jurídico especial que se corresponda con el bien jurídico que es objeto de tutela penal. El principio de proporcionalidad demanda que esa diferencia se justifique en un trato distinto de los plazos de prescripción de la acción penal.”</p>		
<p>2)Acuerdo Plenario N° 1-2010/CJ-116</p>	<p>A) Duplicidad del plazo de prescripción para los delitos cometidos por Funcionarios públicos en contra del Patrimonio del Estado</p>	<p>A) “§ 3. Desarrollo del primer tema.</p> <p>12°. El legislador incrementó el plazo de prescripción —duplicó— en el último párrafo del artículo ochenta del Código Penal y destacó la mayor gravedad cuando el delito es cometido por un funcionario o servidor público contra el patrimonio del Estado, ello en concordancia con el último párrafo del artículo 41° de la Constitución Política del Perú —“el plazo de prescripción se duplica en caso de delitos cometidos contra el patrimonio del Estado por funcionarios y servidores públicos ”—. La ley consideró que tenía que reconocerse un mayor reproche, traducido en el plazo de la prescripción, por tratarse de un atentado contra el normal funcionamiento de la Administración Pública, la seguridad de los bienes pertenecientes a la Administración Pública y la inobservancia del deber de fidelidad del funcionario o servidor público hacía el patrimonio público desde la perspectiva de las obligaciones del</p>		

CUADRO DE LOS ACUERDOS PLENARIOS PROCESADOS

ACUERDOS PLENARIOS	CRITERIO	FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA APROBADA	FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA DESAPROBADA O EN MINORÍA	CONCLUSIÓN (FUNDAMENTOS QUE SE CONCLUYERON)
	<p>B) Los plazos de prescripción extraordinaria de la pena son aplicables para el caso de las faltas</p> <p>C) La suspensión “sui generis” causada por la formalización de la investigación preparatoria (art.339 del Código Procesal Penal)</p>	<p>cargo o función que ejerce y abusa. En tal sentido, el ataque contra el patrimonio público es ejecutado por personas que integran la Administración Pública a las que se le confió el patrimonio y se colocó al bien en una posición de especial vulnerabilidad por aquéllos. Esto implica un mayor desvalor de la acción —como conducta peligrosa para los bienes jurídicos— complementado con el desvalor de resultado derivado de la específica función de protección que tienen esas personas respecto del patrimonio del Estado, de la lesión que proviene de la acción desvalorada y de la mayor posibilidad que tienen para encubrir sus actividades ilícitas.</p> <p>13°. Por tanto, se incrementó el plazo de prescripción para obtener una variante en cuanto a la acción persecutoria o ejecución de la pena y dar a estos casos concretos una regla especial con la finalidad de otorgar al organismo encargado de la persecución del delito un mayor tiempo para que pueda perseguir el hecho punible y establecer una mayor dificultad para que el delito no quede impune.</p> <p>14°. Es necesario complementar esta circunstancia prevista en la norma para limitar su aplicación sobre determinadas situaciones concretas e interpretar el sentido de la Ley desde la perspectiva de su coherencia con el ordenamiento jurídico y el contexto en que se utilizó —método lógico-sistemático—. Así, debe entenderse que la opción normativa, de carácter especial, descrita en el último párrafo del artículo 80° del Código Penal se orienta al Capítulo II, Título XVIII, del Libro Segundo del mismo cuerpo legal, “Delitos contra la Administración Pública cometidos por Funcionarios Públicos”, atendiendo a dos aspectos concretos:</p> <p>A. En este Capítulo se regulan los delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos.</p> <p>B. Dicho Capítulo protege además el patrimonio público vulnerado por esos sujetos especiales, que es lo que exige la norma sustantiva de acuerdo a la interpretación con la norma constitucional prevista en el artículo cuarenta y uno de la Constitución que contiene como</p>		

CUADRO DE LOS ACUERDOS PLENARIOS PROCESADOS

ACUERDOS PLENARIOS	CRITERIO	FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA APROBADA	FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA DESAPROBADA O EN MINORÍA	CONCLUSIÓN (FUNDAMENTOS QUE SE CONCLUYERON)
		<p>mandato concreto que el plazo de prescripción se duplica en caso de delitos cometidos contra el patrimonio del Estado por funcionarios y servidores públicos. Es de resaltar que no todos los delitos comprendidos allí tienen contenido patrimonial, por lo que en cada tipo legal se tiene que analizar si se cumple con el presupuesto establecido para prolongar el plazo de prescripción en función a la afectación de los bienes jurídicos tutelados vinculados directamente con el patrimonio público o sólo afectan el correcto funcionamiento de la Administración Pública propiamente dicha, vulnerando el ejercicio de funciones y servicios públicos bajo pautas de corrección y sometimiento a la legalidad, la observancia de los deberes del cargo como empleo, regularidad y desenvolvimiento normal de tal ejercicio, el prestigio y dignidad de la función, la imparcialidad en el desenvolvimiento decisonal, y otros, desvinculados totalmente de la afectación del patrimonio del Estado como tal y excluidos.</p> <p>15°. Si el fundamento esencial de la duplicidad de la prescripción es la lesión efectiva del patrimonio del Estado realizada por los funcionarios o servidores públicos, es necesario que exista una vinculación directa entre estos. Tal fundamento exige el concurso de tres presupuestos concretos:</p> <p>A. Que exista una relación funcional entre el agente infractor especial del delito —funcionario o servidor público— y el patrimonio del Estado.</p> <p>B. El vínculo del funcionario o servidor público con el patrimonio del Estado implica que este ejerza o pueda ejercer actos de administración, percepción o custodia sobre bienes públicos.</p> <p>C. Puede servir como fuente de atribución de dicha posición y facultad funcional una orden administrativa y, por tanto, es posible que a través de una disposición verbal se pueda también transferir o delegar total o parcialmente el ejercicio de funciones concretas de administración, percepción o custodia sobre bienes públicos al funcionario o servidor que originalmente por su nivel y facultades</p>		

CUADRO DE LOS ACUERDOS PLENARIOS PROCESADOS

ACUERDOS PLENARIOS	CRITERIO	FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA APROBADA	FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA DESAPROBADA O EN MINORÍA	CONCLUSIÓN (FUNDAMENTOS QUE SE CONCLUYERON)
		<p>específicas no poseía.</p> <p>16°. Una interpretación distinta sería irrazonable y vaciaría de contenido la gravedad de la conducta de los funcionarios y servidores públicos respecto del patrimonio del Estado y asimilaría el hecho a delitos comunes sin ninguna diferenciación que le otorgue sentido a la disposición legal.</p> <p>17°. Debe destacarse que los bienes sobre los cuales puede recaer la acción material pueden ser del Estado, parcialmente del Estado o de propiedad privada.</p> <p>A. En cuanto a la primera modalidad, se trata de bienes íntegramente del Estado.</p> <p>B. La segunda modalidad se refiere a bienes de Sociedades de economía mixta donde el Estado tiene parte por estar integrado con capital proveniente tanto del sector público como del sector privado y se comparte la propiedad de los bienes. Este tipo de Régimen Económico está reconocido en el artículo 40° y 60° de la Constitución Política del Perú y en el artículo 2° del Decreto Legislativo número 674, del 27 de setiembre de 1991, que contiene las normas sobre la promoción de la inversión privada en las empresas del Estado.</p> <p>C. La tercera modalidad se refiere a bienes de propiedad privada que se encuentren en posesión directa del Estado, que ejerce la administración temporal para fines institucionales o de servicio a través de un acto jurídico legalmente válido.</p> <p>18°. El patrimonio del Estado, parcialmente del Estado o privado está constituido por bienes muebles o inmuebles con valor económico, como los caudales y efectos, lo que se traduce en la presencia de un perjuicio patrimonial real y efectivo en la entidad estatal.</p> <p>B) § 4. Desarrollo del segundo tema.</p> <p>19°. El Libro Tercero del Código Penal está dedicado a las faltas.</p>		

CUADRO DE LOS ACUERDOS PLENARIOS PROCESADOS

ACUERDOS PLENARIOS	CRITERIO	FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA APROBADA	FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA DESAPROBADA O EN MINORÍA	CONCLUSIÓN (FUNDAMENTOS QUE SE CONCLUYERON)
		<p>Esta clase de infracciones penales no incluyen en su penalidad conminada penas privativas de libertad. Ellas son sancionadas sólo con penas principales de multa o de prestación de servicios a la comunidad. En lo que respecta al plazo ordinario de la prescripción de la acción penal y de la pena en las faltas, el inciso 5 del artículo 440° señala de manera específica en un año. Además, dicha disposición consigna también que "la acción penal y la pena prescriben en caso de reincidencia a los dos años".</p> <p>20°. Sin embargo, el citado artículo no ha precisado cuáles son las reglas especiales sobre los plazos extraordinarios de prescripción de la acción penal ni sobre los presupuestos que identifican la reincidencia en las faltas. Por consiguiente, dado que el mismo numeral 440° <i>ab initio</i> establece que: "<i>Son aplicables a las faltas las disposiciones contenidas en el Libro Primero (. . .)</i>", es pertinente delinear los alcances de esa regulación supletoria para tales casos.</p> <p>21° Al respecto cabe asumir, sin mayor contradicción ni implicaciones normativas, que para efectos los plazos de la prescripción de la acción penal ni sobre los presupuestos que identifican la reincidencia en las faltas. Por consiguiente, dado que el mismo numeral 440° <i>ab initio</i> establece que: "Son aplicables a las faltas las disposiciones contenidas en el Libro Primero (. . .)", es pertinente delinear los alcances de esa regulación supletoria para tales casos.</p> <p>22. Ahora bien, el artículo 440°, inciso 5, señala también que en caso de reincidencia el plazo ordinario de prescripción de la acción penal y de la pena para las faltas es de dos años, por lo que en tales supuestos el plazo extraordinario será de tres años. No obstante, dicho artículo no identifica en su contenido los presupuestos y requisitos que posibilitan la configuración de la reincidencia en las faltas. Es en el artículo 46°-B del Código Penal en donde luego de regular los requerimientos legales para la reincidencia en los delitos dolosos, se alude, con escasa claridad, a la reincidencia en las faltas</p>		

CUADRO DE LOS ACUERDOS PLENARIOS PROCESADOS

ACUERDOS PLENARIOS	CRITERIO	FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA APROBADA	FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA DESAPROBADA O EN MINORÍA	CONCLUSIÓN (FUNDAMENTOS QUE SE CONCLUYERON)
		<p>en los términos siguientes: "Igual condición tiene quien haya sido condenado por comisión de faltas dolosas". Corresponde, pues, sobre la base de las disposiciones legales mencionadas desarrollar fórmulas de interpretación que las hagan compatibles y funcionales. Para tales efectos se adoptan los siguientes criterios:</p> <p>A. La reincidencia en faltas se produce cuando quien habiendo sido condenado como autor o partícipe de esta clase de infracción penal, incurre luego de que la condena adquiere firmeza en la comisión de una nueva falta. Se trata, pues, de una modalidad de reincidencia ficta que no exige que se haya cumplido en todo o en parte la pena impuesta.</p> <p>B. La reincidencia en faltas determina modificaciones en la pena conminada para la nueva falta cometida. En tal sentido, el máximo de pena originalmente establecido por la ley se convertirá en mínimo y se configurará un nuevo límite máximo que será equivalente a la mitad por encima del máximo original.</p> <p>C. Para que se configure la reincidencia la nueva falta debe ser cometida en un plazo no mayor a dos años de quedar firme la condena anterior. De esa manera la reincidencia será compatible con los plazos ordinarios de prescripción de la acción penal y de la pena estipulados en la segunda parte del inciso 5 del artículo 440°.</p> <p>C) § 6. Desarrollo del tercer tema.</p> <p>23°. Tercer tema. El apartado uno del artículo 339° del nuevo Código Procesal Penal prescribe que <i>"la Formalización de la Investigación Preparatoria suspende el curso de la prescripción de la acción penal"</i>. Entonces la discusión de ese párrafo está centrada en las cuestiones de legitimidad, legalidad y razonabilidad.</p> <p>24°. La "suspensión" de la prescripción prevista en el artículo 84° del Código Penal consiste en la creación de un estado en el cual el tiempo deja de correr porque se presenta una situación particular determinada por la Ley que impide la persecución penal -constituye la excepción al principio general de la continuidad del tiempo en el</p>		

CUADRO DE LOS ACUERDOS PLENARIOS PROCESADOS

ACUERDOS PLENARIOS	CRITERIO	FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA APROBADA	FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA DESAPROBADA O EN MINORÍA	CONCLUSIÓN (FUNDAMENTOS QUE SE CONCLUYERON)
		<p>proceso-. La continuación del proceso dependerá de la decisión de una autoridad extra penal, que puede ser un Juez del ámbito civil, administrativo, comercial, de familia y en todos los casos se paraliza el inicio o la continuación del proceso desde que se presenta la circunstancia que amerita la imposibilidad de su prosecución y se reiniciara cuando se resuelva esa cuestión. Por consiguiente, el término de la prescripción sufre una prolongación temporal.</p> <p>25°. La consecuencia más significativa es que el tiempo transcurrido con anterioridad al momento en que se presentó la causa que suspendió el proceso no se pierde y se sumará al que transcurra después de su reiniciación, pero el tiempo cumplido durante la vigencia de la suspensión no se computa para los efectos de la prescripción extraordinaria.</p> <p>26°. Sin embargo, la literalidad del inciso 1 del artículo 339° del Código Procesal Penal evidencia que regula expresamente una suspensión "sui generis", diferente a la ya señalada, porque afirma que la Formalización de la Investigación Preparatoria emitida por el Fiscal, como director y coordinador de esta etapa procesal –quien adquiere las funciones de las que actualmente goza el Juez de instrucción-, suspende el curso de la prescripción de la acción penal. Con la formulación de la imputación se judicializa el proceso por la comunicación directa entre el Fiscal y el Juez de la Investigación Preparatoria y culmina la etapa preliminar de investigación practicada por el Fiscal. En consecuencia, queda sin efecto el tiempo que transcorre desde éste acto Fiscal hasta la culminación del proceso con una sentencia o resolución judicial que le ponga fin o en su caso hasta que sea aceptada la solicitud de sobreseimiento del Fiscal.</p> <p>27°. La redacción y el sentido del texto es claro, en cuanto regula la institución de la "suspensión" con todas las consecuencias y matices que conlleva y no es posible deducir que el legislador quiso reglamentar un supuesto de "interrupción" de la prescripción,</p>		

CUADRO DE LOS ACUERDOS PLENARIOS PROCESADOS

ACUERDOS PLENARIOS	CRITERIO	FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA APROBADA	FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA DESAPROBADA O EN MINORÍA	CONCLUSIÓN (FUNDAMENTOS QUE SE CONCLUYERON)
		<p>porque la voluntad fue establecer que ese acto del Fiscal es motivo de suspensión. En la práctica, el principal efecto de esta norma es la prolongación del tiempo necesario para considerar extinguida la responsabilidad penal por un determinado hecho y, en ese sentido, cuando existe actividad procesal del Fiscal -formalizando la investigación- el plazo de prescripción deja de computarse desde que se declara.</p> <p>28°. Esta previsión legal tiene que ser analizada desde dos aspectos concretos:</p> <p>A. Que es obligación del Estado proveer de los mecanismos necesarios para la realización de la pretensión punitiva derivada de un delito, pues los intereses tutelados por las normas penales son eminentemente públicos, y en ese contexto pre-ordena el proceso penal para asegurar la persecución del delito contra todo ilegítimo obstáculo.</p> <p>B. El Estado por medio del Ministerio Público ejerce la pretensión punitiva que se deriva de un delito, promueve la aplicación de la sanción correspondiente y solicita que se ejecute el fallo.</p> <p>29°. Desde esta perspectiva el fundamento de la posibilidad de suspender el plazo de prescripción dirigiendo el procedimiento contra el presunto culpable constituye el instrumento que tiene el Estado y ejecuta el órgano judicial para poner de manifiesto que aún se vislumbran posibilidades de éxito en la investigación del presunto delito y que la infracción pueda ser castigada -el acto del Fiscal que constituye la formalización del proceso se realiza después que se identificó e individualizó plenamente al imputado, se describió los hechos, se tipificó la conducta en la norma correspondiente y se reunió indicios reveladores de la comisión del delito, valorando adecuadamente todas las circunstancias del caso- para evitar la sensación de impunidad en la sociedad, como marco de la política criminal del Estado.</p> <p>30°. Por tanto, la suspensión del plazo de prescripción significa que</p>		

CUADRO DE LOS ACUERDOS PLENARIOS PROCESADOS

ACUERDOS PLENARIOS	CRITERIO	FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA APROBADA	FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA DESAPROBADA O EN MINORÍA	CONCLUSIÓN (FUNDAMENTOS QUE SE CONCLUYERON)
		<p>la ley otorga más tiempo a la autoridad para que persiga el delito. Constituye la manifestación de voluntad objetivamente idónea del Estado para asegurar el éxito en la persecución del hecho delictivo y contribuye a consolidar el principio constitucional de obligatoriedad en el ejercicio de la persecución penal que tiene el Ministerio Público prescrita en el artículo 159° de la Carta Política.</p> <p>31°. La aplicación de esta regulación legal no vulnera el derecho fundamental del imputado a un proceso sin dilaciones indebidas programado en el inciso tres del artículo 139° de la Constitución - inserto en la garantía del debido proceso- y tampoco se afecta el derecho a que la causa se resuelva por el Juez Penal en un tiempo razonable, por lo siguiente:</p> <p>A. El fenómeno de la prescripción regulado en la norma constitucional y sustantiva está determinado esencialmente por una autolimitación del Estado "para ejercer su potestad represiva cuando no ejerce la acción eficaz y oportunamente en un tiempo determinado. Por tanto, el legislador es el que decide si los actos que se realizan para iniciar la persecución penal, como "la Formalización de la Investigación Preparatoria" es una causa que suspende el curso de la prescripción.</p> <p>B. Dicha institución sustantiva está inspirada en el interés de la sociedad de que no haya delitos impunes, pero limitando a los órganos encargados de la persecución penal. Una interpretación distinta, supone aceptar que la prescripción es un derecho establecido a favor del imputado y el rechazo a la existencia de causas procesales que suspendan el curso de la prescripción. Sin embargo, esto implica olvidar el interés social en la persecución de los delitos.</p> <p>C. La suspensión del plazo de la prescripción no origina un problema de condiciones de desigualdad entre el Ministerio Público y el imputado por la creación de una posibilidad que afecta derechos fundamentales, pues cuando el hecho imputado de carácter delictivo</p>		

CUADRO DE LOS ACUERDOS PLENARIOS PROCESADOS

ACUERDOS PLENARIOS	CRITERIO	FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA APROBADA	FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA DESAPROBADA O EN MINORÍA	CONCLUSIÓN (FUNDAMENTOS QUE SE CONCLUYERON)
		<p>conserva su contenido de lesividad, es necesario una sanción a su autor por ser legítima. En ese sentido, no se puede sostener la existencia de desigualdad -relevante jurídicamente- cuando se persigue y castiga una infracción punible.</p> <p>D. No puede concebirse que los imputados tengan derecho a la resolución del proceso en un plazo razonable en los que el retraso pueda ser provocado por su propia actitud procesal para evitar el avance del procedimiento y prescribir el delito, lo que debe evitarse.</p> <p>E. La reforma del sistema procesal implicó cambios radicales e importantes constituyendo uno de los más significativos relevar a los jueces de las labores de investigación dentro del proceso penal - propio de un sistema acusatorio- y por otro lado, la reforma de la aplicación de instituciones dentro del nuevo sistema. En ese contexto, en el ordenamiento procesal la "suspensión de la prescripción" se forja en un proceso estructurado que respeta las garantías del debido proceso, promueve valores constitucionales medulares y definitivos para la protección jurisdiccional efectiva.</p> <p>F. En el Nuevo Código Procesal Penal las etapas del proceso tienen un plazo establecido: La Investigación Policial o Fiscal veinte días, la Investigación Preparatoria ciento veinte días, ampliado a sesenta días y para casos complejos hasta ocho meses y si bien el juzgamiento no tiene plazo definido, no obstante una de sus características principales como innovación del nuevo modelo procesal es su celeridad y continuación ininterrumpida hasta su conclusión, evitando dilaciones y pérdida de concentración, como la propia Ley lo señala en el artículo 360° [inciso 1 y 5] -"si no fuera posible realizar el debate en un solo día, éste continuará durante los días consecutivos que fueran necesarios hasta su conclusión y no podrá realizarse otros juicios hasta su culminación". Es evidente que el nuevo sistema procesal busca simplificar, descongestionar, acelerar y hacer más eficiente la Administración de Justicia penal, asegurando una mayor eficiencia y eficacia en tanto en cuanto a la</p>		

CUADRO DE LOS ACUERDOS PLENARIOS PROCESADOS

ACUERDOS PLENARIOS	CRITERIO	FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA APROBADA	FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA DESAPROBADA O EN MINORÍA	CONCLUSIÓN (FUNDAMENTOS QUE SE CONCLUYERON)
		<p>decisión de los jueces sólo se someten las causas que están en capacidad de resolver oportunamente.</p> <p>G. Por otro lado, la propia norma procesal en los artículos 334° [inciso 2] y 343° regula las situaciones en las que el plazo de la investigación preliminar y preparatoria exceda su duración y reconoce al afectado el derecho de acudir al Juez de la Investigación Preparatoria -Juez de Garantías considerado como el custodio de la legalidad del procedimiento de investigación que realiza el Ministerio Público y tiene como función esencial tutelar las garantías del imputado- para que resuelva el conflicto y ordene la culminación de esas etapas procesales cuando las considere excesivas – se materializa por medio de una audiencia de control de plazos-. Es evidente el interés y voluntad del legislador de someter a control el plazo del proceso por el Juez que ejerce las funciones del control de garantías -y reglado en el sistema procesal penal- en virtud del principio modular del Estado de Derecho para no dejar a completo arbitrio del Fiscal la duración de la investigación.</p> <p>32°. En ese contexto, es claro que el plazo de la suspensión del proceso se produce dentro del marco impuesto por la Ley, no es ilimitado y eterno y se corresponde con la realidad legislativa de la nueva norma procesal y el marco de política criminal del Estado.</p> <p>Por tanto, con los límites racionales regulados no habría un exceso de tiempo hasta la culminación del proceso con un pronunciamiento que ponga término del modo más rápido posible a la situación de incertidumbre porque con la previsión de la ley fijando pautas de duración de los procesos no debería existir menoscabo a un juicio justo en un tiempo razonable y donde el derecho de la sociedad a defenderse del delito se armoniza con el del imputado, de modo que no se sacrifica a ninguno de ellos a favor del otro. Con esto debe resaltarse que si bien los actos del procedimiento suspenden el curso de la prescripción de la acción persecutoria, no obstante lo hacen hasta cierto límite.”</p>		

CUADRO DE LOS ACUERDOS PLENARIOS PROCESADOS

ACUERDOS PLENARIOS	CRITERIO	FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA APROBADA	FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA DESAPROBADA O EN MINORÍA	CONCLUSIÓN (FUNDAMENTOS QUE SE CONCLUYERON)
3) Acuerdo Plenario N° 8-2009/CJ-116		<p>“§ 1. Los artículos 46° -A y 49° CP.</p> <p>6°. El artículo 46°-A CP regula una circunstancia agravante genérica por la condición del sujeto activo –funcionario público-. El texto legal de dicha norma fue introducido por la Ley número 26758, del 14 de marzo de 1997, modificado por el Decreto Legislativo número 982, del 22 julio de 2007. El referido artículo 46°-A CP posibilita al Juez incrementar la pena hasta un tercio por encima del máximo legal fijado para el delito cometido –segundo párrafo del artículo mencionado-. Asimismo fija un límite, al precisar que ésta no puede exceder del máximo de pena privativa de libertad temporal establecida en el artículo 29° CP –35 años-. La norma penal, que es de naturaleza <i>abstracta</i> – <i>concreta</i>, fija criterios adicionales propios y legitimadores del incremento de una mayor culpabilidad por el hecho –con la consiguiente agravación de la pena-. Así la ostentación de una determinada condición profesional, incrementará la culpabilidad, cuando existe una relación interna (<i>innereBeziehung</i>) entre la profesión o posición del sujeto y el propio hecho delictivo. Empero, no existe un principio jurídico general según el cual los integrantes de determinados grupos profesionales tengan un deber intensificado de comportarse de conformidad con la norma. [JESÚS MARÍA SILVA SANCHEZ: <i>Teoría de la determinación de la pena como sistema (dogmático)</i>: <i>Un primer esbozo</i>, página 4]. Acorde con dicho criterio nuestra norma penal –artículo 46°-A CP–, se sujetará a dichas exigencias: subjetivo y objetivo. Se incrementará la pena, sólo si el sujeto activo se aprovecha de su condición de <i>miembro</i> de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, autoridad, funcionario o servidor público, para <i>cometer</i> un hecho punible, o utiliza para ello armas proporcionadas por el Estado o cuyo uso le sea autorizado por su condición de funcionario público o cuando el sujeto haya desempeñado cargos – haber sido autoridad, funcionario o servidor público– y se aprovecha de los conocimientos adquiridos en el ejercicio de su función para</p>	<p>§ 1. Sobre la función y eficacia del artículo 46°-A CP. 1°. El artículo 46°-A CP fue introducido por la Ley número 26758, del 14 de marzo de 1997. Inicialmente reguló una circunstancia agravante genérica, pero cualificada, que tenía como supuesto calificador la condición especial del sujeto activo quien debía ser un funcionario público. Posteriormente el contenido legal de dicha norma fue ampliado en sus circunstancias y alcances por el Decreto Legislativo número 982, del 22 julio de 2007. Sin embargo, desde su texto original, el aludido dispositivo producía como efecto punitivo un incremento de la pena conminada hasta un tercio por encima del máximo legal fijado para el delito cometido. Es decir, el efecto de la configuración de los supuestos agravantes contemplados en el artículo 46°-A CP fue siempre una modificación formal del</p>	

CUADRO DE LOS ACUERDOS PLENARIOS PROCESADOS

ACUERDOS PLENARIOS	CRITERIO	FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA APROBADA	FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA DESAPROBADA O EN MINORÍA	CONCLUSIÓN (FUNDAMENTOS QUE SE CONCLUYERON)
		<p>cometer el hecho punible. Y cuando el sujeto activo, desde un establecimiento penitenciario –se entiende privado ya de su libertad–, comete en calidad de autor o partícipe el delito de tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, trata de personas, terrorismo, extorsión o secuestro (de conformidad al segundo y tercer párrafo de la modificatoria introducida por el Decreto Legislativo número 982). Aunque con los criterios fijados, se tendrá que tener especiales consideraciones con la última referencia.</p> <p>7°. El artículo 49° CP, cuyo texto fue modificado por la Ley número 26683, del 11 de noviembre de 1996, prevé el denominado delito continuado: sucesivas violaciones de la misma ley, igual o semejante, cometidas con actos ejecutivos de la misma resolución criminal, consideradas como un solo delito “continuado”. Asimismo, identifica en el último inciso de su primer párrafo la denominada circunstancia agravante específica por pluralidad de personas perjudicadas por el delito continuado: el “delito masa”. En este último caso hace referencia al supuesto en el que con las sucesivas violaciones de la misma ley –delito continuado– por parte del agente, hubieran resultado perjudicadas una pluralidad de personas; supuesto en el que el Juez aumentará la pena hasta un tercio de la máxima prevista para el delito más grave.</p> <p>El delito continuado consiste en la realización de acciones similares u homogéneas en diversos momentos pero que transgreden el mismo tipo legal [RAÚL PEÑA CABRERA, autor citado por FELIPE VILLAVICENCIO TERREROS: <i>Derecho Penal Parte General</i>, Editorial Grijley, Lima, 2006, página 686]. Ello implica que aquellas conductas entre las que existe relación de continuidad deben ser percibidas como parte de un único fenómeno global [RAMÓN RAGUÉS Y VALLÉS: <i>La prescripción penal: fundamentos y aplicación</i>, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 2004. Página 126].</p>	<p>marco de conminación de la pena prevista para el delito cometido, posibilitando y que se expresaba en un nuevo máximo legal cuyo límite final se extendía a un tercio por encima del máximo original. Así, por ejemplo, en el delito de cohecho activo genérico, tipificado en el artículo 397° <i>ab initio</i> CP la pena conminada tiene un máximo legal original de seis años de pena privativa de libertad. Sin embargo, si dicho delito es cometido por un funcionario público aprovechándose de su condición, el nuevo máximo legal de la pena conminada, para dicho caso, será de ocho años, al extenderse aquel un tercio (dos años) por encima del límite máximo original (seis años). Igual modificación de la extensión máxima de la pena conminada se produciría de presentarse los demás supuestos de agravación regulados en el texto vigente del artículo 46°-A CP. Por</p>	

CUADRO DE LOS ACUERDOS PLENARIOS PROCESADOS

ACUERDOS PLENARIOS	CRITERIO	FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA APROBADA	FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA DESAPROBADA O EN MINORÍA	CONCLUSIÓN (FUNDAMENTOS QUE SE CONCLUYERON)
		<p>No todos los delitos admiten la figura del delito continuado. En este sentido, “sólo es viable, entonces, en los delitos cuyo injusto sea cuantificable, susceptible de agravación con actos que se realizan en sucesión progresiva (...). No tiene cabida allí donde el injusto se agote necesariamente con un acto único e indivisible, como es el caso de la vida o de los llamados bienes personalísimos, de cuyo inacumulables cuando la lesión pasa de un titular a otro” [JUAN FERNÁNDEZ CARRASQUILLA, autor citado por FELIPE VILLAVICENCIO TERREROS, <i>Obra citada</i>, página 689]</p> <p>Lo que determina la diferencia entre uno y otro instituto jurídico es que en el delito masa la denominada “pena de arranque” será la pena base del delito continuado [ROCÍO CANTARERO BRANDES, autora citada por IGNACIO GÓMEZ AYALA: <i>El delito masa</i>. En Consejo General del Poder Judicial: Unidad y Pluralidad de delitos, Cuadernos y Estudios de Derecho Judicial, página 14], y que podría elevarse hasta un tercio de la máxima prevista para el delito más grave, por lo que sigue considerándose al delito masa como una “subespecie del delito continuado” [ROCÍO CANTARERO BRANDES, autora citada por IGNACIO GÓMEZ AYALA: <i>Obra citada</i>, página 16]. El fundamento de la agravación punitiva del delito masa se construye sobre la existencia de un <i>injusto de mayor gravedad</i> [IGNACIO GÓMEZ AYALA, <i>Obra citada</i>, página 10] al que informa, según nuestra legislación, la pluralidad de personas a las que afecta. El efecto <i>plus</i> punitivo de esta figura radica, precisamente, en la posibilidad de aglutinar distintos resultados o perjuicios a fin de erigir una “unidad” sustrayendo de este modo el supuesto a las reglas de los concursos de cuya naturaleza no participa el delito masa. Son elementos del delito masa:</p> <p>a) la realización de un delito continuado; y, b) pluralidad de personas perjudicadas por el delito.</p> <p>Cabe destacar que, al igual que en el delito continuado, la ley</p>	<p>ejemplo, si el agente desde un establecimiento penitenciario, donde se encuentra recluso, resulta involucrado, como autor o partícipe, en delitos de tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, trata de personas, terrorismo, extorsión o secuestro.</p> <p>§ 2. <i>La prescripción de la acción penal y el artículo 46°-A CP.</i></p> <p>2°. De manera concreta, la prescripción de la acción penal puede definirse como el transcurso del tiempo que extingue la persecución de un delito. No obstante, en un plano más técnico se le identifica como la pérdida, por parte del Estado, de la facultad de ejercitar en un caso concreto el <i>iuspuniendi</i>.</p> <p>Otros conceptos de prescripción aluden más bien a los efectos que aquella produce sobre la antijuricidad de un hecho punible y sobre la culpabilidad o responsabilidad de su autor. Señalándose que aquella tendría la condición de</p>	

CUADRO DE LOS ACUERDOS PLENARIOS PROCESADOS

ACUERDOS PLENARIOS	CRITERIO	FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA APROBADA	FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA DESAPROBADA O EN MINORÍA	CONCLUSIÓN (FUNDAMENTOS QUE SE CONCLUYERON)
		<p>excluye la aplicación de las reglas sobre delito masa, en caso de que “resulten afectados bienes jurídicos de naturaleza eminentemente personal pertenecientes a sujetos distintos”. Se estima como tales a la vida y la salud individual (VÍCTOR PRADO SالدARRIAGA, VÍCTOR: <i>Las consecuencias jurídicas del delito en el Perú</i>, editorial Gaceta Jurídica, Lima, 2000, página 144).</p> <p>De modo que, el delito masa viene a ser una circunstancia agravante específica del delito continuado. Se basa en la pluralidad de personas perjudicadas por el delito continuado que ejecuta el agente. En este caso, la pena será aumentada en un tercio de la máxima prevista para el delito más grave.</p> <p>§ 2. La Determinación Judicial de la Pena.</p> <p>8°. La determinación judicial de la pena viene a ser un procedimiento técnico y valorativo que ha de permitir la concreción cualitativa, cuantitativa y, a veces, ejecutiva de la sanción penal [VÍCTOR PRADO SالدARRIAGA: <i>Obra citada</i>, página 95]. Dicha actividad se realiza al final del proceso, es decir, una vez que se han actuado y contradicho las pruebas; sobre este fundamento el Juez considera el hecho acusado como típico antijurídico y culpable. En base a estos dos criterios el Juez se abocará, tal como explica la doctrina, primero, a construir el ámbito abstracto de la pena – identificación de la pena básica-, sobre el que tendrá esfera de movilidad; y segundo, a examinar la posibilidad de una mayor concreción en la pena abstracta –individualización de la pena concreta-. Finalmente entrará en consideración la verificación de la presencia de las “circunstancias” que concurren en el caso concreto.</p> <p>9°. Las circunstancias del delito son elementos accidentales nominados o innominados dentro de la estructura del delito que influyen en la determinación de la pena. Su carácter accidental implica entonces que no constituyen (ni son co-constitutivas) del injusto ni de la responsabilidad del sujeto. Por eso hay que diferenciarlas de aquellas que han pasado a formar parte del injusto</p>	<p>circunstancia que invalida el delito y sus consecuencias. Tradicionalmente en el Derecho penal peruano, el legislador ha elaborado un sistema normativo sobre la prescripción, en el cual se han diferenciado los plazos de extinción en función de la naturaleza de las penas conminadas y de su duración legal. Ese fue, por ejemplo, el criterio que predominó en el Código Penal de 1924, y que era coherente con la pluralidad de tipos de penas privativas de libertad que en él coexistían (Confrontar: artículos 119° y siguientes ACP). En el Código Penal de 1991 se adoptó un régimen legal diferente e inspirado en el derecho penal colombiano y alemán. Según él, la regla general dispone que para la determinación del plazo de prescripción de la acción penal debe tomarse en cuenta al límite máximo de la pena privativa de libertad conminada en la ley para el delito cometido. Esto es,</p>	

CUADRO DE LOS ACUERDOS PLENARIOS PROCESADOS

ACUERDOS PLENARIOS	CRITERIO	FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA APROBADA	FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA DESAPROBADA O EN MINORÍA	CONCLUSIÓN (FUNDAMENTOS QUE SE CONCLUYERON)
		<p>del respectivo delito como en el asesinato, y en general de la mayoría de los delitos, ya que un tipo legal, como es la descripción de un ámbito situacional, requiere ser circunstanciado [JUAN BUSTOS RAMÍREZ: <i>Derecho Penal - Parte General</i>, Obra Completas, Tomo I, Ara Editores, Lima, 2004, página 1192]. En virtud a ello es que se señala que sólo se pueden considerar las circunstancias (agravantes o atenuantes) a efectos de la individualización de la pena, cuando no sean específicamente constitutivas del hecho punible o modificatorias de la responsabilidad.</p> <p>Entre las clases de circunstancias, encontramos:</p> <p>a) Las “circunstancias comunes o genéricas”, que son aquellas que operan en el proceso de determinación de la pena de cualquier delito -como es el caso de las previstas en el artículo 46° y el artículo 46°- A del CP-, con la salvedad de que sólo se pueden considerar dichas agravantes a efectos de la individualización de la pena, cuando no sean específicamente constitutivas del hecho punible o modificatorias de la propia estructura del tipo legal no se pueden aplicar. Con ello se respeta la prohibición del principio de la doble valoración del injusto y del reproche penal. En el caso específico del artículo 46° - A del CP, su aplicación es exclusivamente para delitos donde no se requiera una cualidad especial en el sujeto activo -miembro de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, autoridad, funcionario o servidor público-.</p> <p>b) Las “circunstancias especiales o específicas” que son aquellas que están señaladas para un delito determinado o un grupo de delitos solamente. Así por ejemplo, las previstas en el artículo 189° CP, que operan únicamente con el delito de robo; en el artículo 186° que operan solamente con el delito de hurto; en el artículo 297° que operan solamente con el delito de tráfico ilícito de drogas; y el “delito masa” -regulado en el último inciso del primer párrafo del</p>	<p>dicho límite máximo de pena legal identifica al término del plazo de la prescripción ordinaria. Sin embargo, se ha establecido que, en ningún caso, dicho plazo será superior a veinte años. Ahora bien, tratándose de penas conminadas no privativas de libertad (multas, limitativas de derechos, restrictivas de la libertad), conjuntas o alternativas, el plazo ordinario de prescripción será de dos años.</p> <p>3°. Estando a lo antes expuesto queda, pues, por determinar, si al plazo de vencimiento de la prescripción de la acción penal y que corresponde, según el precitado artículo 80° CP, al “fijado por la ley para el delito” imputado, materia del proceso penal incoado, es posible adicionarle el incremento de pena la conminada que dispone la concurrencia en el caso de una circunstancia agravante genérica y cualificada contemplada por</p>	

CUADRO DE LOS ACUERDOS PLENARIOS PROCESADOS

ACUERDOS PLENARIOS	CRITERIO	FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA APROBADA	FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA DESAPROBADA O EN MINORÍA	CONCLUSIÓN (FUNDAMENTOS QUE SE CONCLUYERON)
		<p>artículo 49° del CP-, que opera únicamente con el delito continuado.</p> <p>Y,</p> <p>c) Las circunstancias denominadas “elementos típicos accidentales”, son aquellas que concurren con una conducta típica. Esta (la circunstancia) se anexa a una conducta típica y forma un tipo penal derivado, prototipo es el parricidio [VÍCTOR PRADO SالدARRIAGA: <i>La determinación judicial de la pena. Nuevos criterios para la determinación judicial de la pena</i>, Centro de Investigaciones Judiciales, Investigación y Publicaciones, Lima, páginas 35 - 37].</p> <p>Las circunstancias tienen, pues, por objeto una mayor precisión del injusto, es decir, están dirigidas a una mejor consideración graduacional de las valoraciones que lo componen e, igualmente, están en relación al sujeto responsable, se trata de una mejor graduación de su responsabilidad, sobre la base de determinar las circunstancias que han influido en su conciencia y en sus estados motivacionales [JUAN BUSTOS RAMÍREZ/HERNÁN HORMAZABAL MALARÉ: <i>Lecciones de Derecho Penal</i>, Volumen II, Editorial Trotta, Madrid, 1999, páginas 396-397].</p> <p>La función de las circunstancias es determinar el <i>quantum</i> de la pena, es decir, afectan su medida, ya sea para aumentarla o disminuirla. Por eso mismo, aquellas que por sí mismas constituyen ya un delito (un injusto) o son cofundantes del injusto, no pueden ser tenidas en cuenta, ya que han servido para fijar el marco penal y, por tanto, no podrían nuevamente ser consideradas para su medida [JUAN BUSTOS RAMÍREZ, <i>Obra citada</i>, página 1195].</p> <p>§ 3. La prescripción de la acción penal.</p> <p>10°. El CP reconoce la prescripción como uno de los supuestos de extinción de la acción penal. La presencia de la prescripción en el ordenamiento jurídico solamente puede explicarse de manera satisfactoria si se tiene en cuenta la función del Derecho penal, es</p>	<p>el artículo 46°-A. CP. Al respecto, es pertinente señalar que las circunstancias agravantes y sus efectos están también sometidos a iguales principios y garantías, que derivan del principio de legalidad (taxatividad, regulación expresa y previa, certeza en la descripción legal de sus componentes). Sobre todo aquellas que como las reguladas en los artículos 46°-A CP modifican los estándares de la pena máxima abstracta o conminada originalmente para el delito. Esto es, por imperio del principio de legalidad, las circunstancias agravantes cualificadas y sus efectos punitivos deben tener una presencia formal o abstracta igual que la prevista y regulada en la penalidad de cada hecho punible. Esta exigencia garantista demanda que, de antemano, el delincuente y el juez deben tener siempre previsto por la ley un espacio potencial de sanción o pena básica.</p>	

CUADRO DE LOS ACUERDOS PLENARIOS PROCESADOS

ACUERDOS PLENARIOS	CRITERIO	FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA APROBADA	FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA DESAPROBADA O EN MINORÍA	CONCLUSIÓN (FUNDAMENTOS QUE SE CONCLUYERON)
		<p>decir aquellas razones que explican la creación y el mantenimiento a lo largo del tiempo del sistema de normas y sanciones penales del Estado [RAMÓN RAGUÉS Y VALLÉS, Obra citada, página 126].</p> <p>Mediante la prescripción de la acción penal se limita la potestad punitiva del Estado, dado que se extingue la posibilidad de investigar un hecho criminal y, con él, la responsabilidad del supuesto autor o autores. Su justificación no se encuentra en la imposibilidad de generar determinados efectos futuros castigando hechos pretéritos, como pretenden los planteamientos basados en la función de la pena, sino por la falta de lesividad de tales hechos: los acontecimientos que ya forman parte del pasado no ponen en peligro el modelo social vigente y, por tanto, carecen de contenido lesivo que justifique su sanción [RAMÓN RAGUÉS Y VALLÉS, Obra Citada, página 45].</p> <p>Dicha institución jurídica se encuentra regulada en el artículo 80º CP, que fija el plazo en el que prescribe la acción penal, el mismo que será igual “...al máximo de la pena -abstracta- fijada por la ley para el delito” -prescripción ordinaria-, mientras que el artículo 83º CP reconoce la denominada prescripción extraordinaria de la acción penal, que se produce cuando el tiempo transcurrido sobrepasa en una mitad al plazo ordinario de prescripción.</p> <p>Como es sabido, la regulación de la prescripción de la acción penal está vinculada a la política criminal que adopta el Estado a través del órgano competente –el Congreso o en su caso el Poder Ejecutivo vía facultades delegadas por aquél– conforme a sus potestades. El legislador a la hora de regular la prescripción de los delitos escogió ciertos parámetros objetivos como el tipo de pena y el extremo mayor de la sanción, todo con el fin de procurar, de acuerdo a las características propias de cada delito, un normal desarrollo de la prosecución de la acción penal y del proceso en caso llegue a ejercerse. En nuestra legislación se ha optado que para efectos de la prescripción de la acción penal se ha de tomar en cuenta la pena</p>	<p>Por consiguiente, no puede haber pena concreta posterior que difiera de los límites precedentes de una pena conminada o básica. El juez sólo puede evaluar y aplicar procesalmente la pena que la ley considera (en abstracto) como posibilidad cierta y previamente regulada para el caso global imputado (delito y circunstancias). En tal sentido, si la posibilidad de extensión de la pena se amplía por las circunstancias agravantes cualificadas también debe ampliarse el plazo de persecución del delito circunstanciado cometido. Siendo así, resulta coherente y legal sostener que la prescripción formal en la imputación de las circunstancias agravantes del artículo 46º-A CP crean un nuevo marco penal abstracto o conminado cuyo extremo máximo corresponde a un tercio por encima del máximo de la pena fijada para el delito imputado. Por tanto, para determinar la prescripción de</p>	

CUADRO DE LOS ACUERDOS PLENARIOS PROCESADOS

ACUERDOS PLENARIOS	CRITERIO	FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA APROBADA	FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA DESAPROBADA O EN MINORÍA	CONCLUSIÓN (FUNDAMENTOS QUE SE CONCLUYERON)
		<p>abstracta fijada para el delito. Dicho factor, en términos de legitimación, servirá de parámetro para conciliar los intereses del Estado en la persecución del delito y los derechos del ciudadano frente a su poder punitivo.</p> <p>Así entendido, no hay un derecho a la prescripción, sino más bien el derecho a la seguridad jurídica, a la legalidad, a la tutela jurisdiccional y a la igualdad –como consecuencia de la regulación de la prescripción–, principios que no resultan lesionados por el Estado en tanto los plazos establecidos para la denuncia, investigación y juzgamiento de los delitos establecidos por el legislador sean razonables y estén definidos y limitados por la ley.</p> <p>Desde el punto de vista material la prescripción importa la derogación del poder penal del Estado por el transcurso del tiempo, en consecuencia, dicho instrumento jurídico es el realizador del derecho fundamental a la definición del proceso penal en un plazo razonable, confirmando el vínculo que tiene este instituto con el Estado de Derecho. Por tanto, la interpretación de la prescripción siempre partirá de criterios de favorabilidad [JOSE HURTADO POZO: Manual de Derecho Penal - Parte General I, 3ª Edición, Editorial Grijley, Lima, 2005, página 330].</p> <p>11°. Estando a lo expuesto, queda por determinar si al plazo de prescripción de la acción "...fijado por la ley para el delito" [artículo 80° CP], es posible adicionarle el incremento de pena prevista en la circunstancia agravante genérica por condición del sujeto activo (artículo 46°-A CP) o la circunstancia agravante específica por pluralidad de personas perjudicadas por el delito continuado (artículo 49° CP). Según se ha indicado precedentemente, para efectos de determinar la prescripción de la acción penal nuestra legislación ha optado por tomar en cuenta la pena abstracta fijada para el delito. Ésta se configura como la respuesta pre constituida a un conjunto de hechos que coinciden en construir un determinado tipo de injusto penal, culpable y punible,</p>	<p>la acción penal en tales supuestos deberá tomarse también como base ese nuevo marco punitivo abstracto o conminado.</p> <p>Ahora bien, será menester exigir que el Fiscal en su denuncia o acusación escrita refiera expresamente que le son también imputadas al procesado las circunstancias del artículo 46°-A CP, para que el juez evalúe, en tales casos, la prescripción de la acción penal en función a los efectos que aquellas producen en la pena conminada del delito.</p> <p>4°. Por otro lado, es del caso reiterar que similares razonamientos corresponde al artículo 49° <i>in fine</i> CP. Ambas circunstancias agravantes, por la manera como han sido reguladas por el legislador, han creado un nuevo marco penal abstracto - la pena abstracta o conminada en estos casos corresponde a un tercio por encima del máximo de la pena fijada para el delito imputado- o del</p>	

CUADRO DE LOS ACUERDOS PLENARIOS PROCESADOS

ACUERDOS PLENARIOS	CRITERIO	FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA APROBADA	FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA DESAPROBADA O EN MINORÍA	CONCLUSIÓN (FUNDAMENTOS QUE SE CONCLUYERON)
		<p>en el que se contienen los elementos que fundamentan el merecimiento y necesidad de aquella pena-marco. Por ende, su determinación sucede en un estadio previo al hecho delictivo mismo, propio de un sistema penal garantista, regido por el principio de legalidad. Este principio constituye una garantía básica de todo ciudadano en un Estado de Derecho, que abona el derecho a saber no solo qué está prohibido: conductas que constituyen delito, sino las consecuencias que tendrá la realización de la conducta delictiva: forma y característica de la reacción penal, lo que deriva en dos garantías puntuales: la criminal –que exige que la conducta este prevista en la ley con suficiente precisión o determinación– y la penal –que exige la previsibilidad de las penas en la ley y que sean determinadas–.</p> <p>La pena concreta, por el contrario, sucede en un estadio posterior y final. Por ello se señala que la determinación judicial de la pena es el acto por el cual el Juez pondera la infracción a la norma y la transforma en una medida de pena determinada (pena concreta), y su magnitud es siempre expresión de la ponderación del ilícito culpable (cuantificación de la culpabilidad) [PATRICIA S. ZIFFER. En: Determinación judicial de la pena, (CLAUS ROXIN, MARY BELOFF, MARIO MAGARIÑOS, PATRICIA S. ZIFFER, EDUARDO ANDRÉS BERTONI y RAMÓN TEODORO RÍOS), Editores del Puerto, Buenos Aires, 1993, página 91]. Es recién en este momento en el que actuarán las denominadas “circunstancias” (agravantes o atenuantes), siempre y cuando por sí mismas no constituyan ya un delito (un injusto), sean cofundantes del injusto, y en general no estén ya descritas en el tipo penal, puesto que de ser así, debe entenderse que ya habrían servido al legislador para fijar el marco penal abstracto; y, por tanto, no podrían nuevamente ser consideradas para la medida de la pena concreta.</p> <p>12°. En este sentido, la circunstancia prevista en el artículo 46°-A CP viene a ser una agravante genérica del delito por la condición del</p>	<p>delito más grave en el delito masa cuando los actos realizados por el agente fueran de diferente naturaleza-.</p>	

CUADRO DE LOS ACUERDOS PLENARIOS PROCESADOS

ACUERDOS PLENARIOS	CRITERIO	FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA APROBADA	FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA DESAPROBADA O EN MINORÍA	CONCLUSIÓN (FUNDAMENTOS QUE SE CONCLUYERON)
		<p>sujeto activo –funcionario público- y, como tal, se trata de un elemento accidental dentro de la estructura del delito, que influye en la determinación judicial de la pena –pena concreta-, mas no en la pena abstracta. Su carácter accidental implica que no constituye el injusto ni la responsabilidad del sujeto. Por eso hay que diferenciarla de aquellas circunstancias que han pasado a formar parte del injusto del respectivo delito. Sin duda, el artículo 46°-A CP prevé un incremento punitivo que mira las especiales calidades del sujeto activo de la conducta típica y antijurídica, a quien se ha investido de especiales deberes de lealtad para con la organización social, lo cual implica un mayor desvalor de acción, que se traduce, al mismo tiempo, en un más elevado desvalor de resultado. Empero, tal incremento punitivo sólo se expresa al momento de la determinación de la pena por el Juez, específicamente cuando corresponde verificar la presencia de circunstancias que concurren al caso concreto. De modo que el incremento de pena que implica dicha agravante no puede ser adicionada para efectos de determinar el plazo de prescripción de la acción penal. Por tanto, el único momento donde puede estar justificado su análisis e injerencia es al determinar judicialmente la pena.</p> <p>13°. Situación distinta se presenta en el caso de la denominada agravante por pluralidad de personas perjudicadas por el delito continuado -delito masa-, porque si bien se la cataloga como una circunstancia agravante específica del delito continuado, debe tenerse en cuenta que por la forma como ha sido regulada en el artículo 49° CP, constituye ya un delito en sí –delito masa-. Por consiguiente, en su regulación se ha creado un nuevo marco penal abstracto –la pena correspondiente al delito más grave más el incremento de un tercio de la máxima prevista para dicho delito-, por lo que para determinar la prescripción de la acción penal en esta clase de delitos debe tomarse como base dicho marco punitivo abstracto.”</p>		

CUADRO DE LOS ACUERDOS PLENARIOS PROCESADOS

ACUERDOS PLENARIOS	CRITERIO	FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA APROBADA	FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA DESAPROBADA O EN MINORÍA	CONCLUSIÓN (FUNDAMENTOS QUE SE CONCLUYERON)
4) <i>Acuerdo Plenario N° 1-2008/CJ-116</i>		<p>“Para este caso de la habitualidad y de la reincidencia se señala en el literal d) y g) in fine que: “Esa excepción solo debe ser aplicable a condenas que se haya impuesto y cumplido con posterioridad a la ya citada reforma del numeral 69 del Código Penal. En todo caso, cuando se haya vencido el plazo de prescripción de la reincidencia acordado en cinco años posteriores a la excarcelación (ver literal d), operará definitivamente la cancelación de los antecedentes generados por esa condena”.</p>		
5) <i>Acuerdo Plenario N° 6-2007/CJ-116</i>		<p>“6. El Título V “Extinción de la acción penal y de la pena” del Libro Primero “Parte General” del Código Penal regula, entre otros aspectos, la suspensión de la prescripción de la acción penal. Según estatuye el artículo 84° del citado Código “Si el comienzo o la continuación del proceso penal depende de cualquier cuestión que deba resolverse en otro procedimiento, se considera en suspenso la prescripción hasta que aquél quede concluido”. La citada disposición legal, así expuesta, existe como presupuestos que determinan el efecto suspensivo del plazo de prescripción, en primer lugar, que preexista o surja ulteriormente una cuestión jurídica controvertida que impida la iniciación o la continuación del proceso penal incoado; y, en segundo lugar, que la decisión que incida sobre la iniciación o continuación del proceso se realice en otro procedimiento, obviamente distinto del que se ve impedido de continuar o del que, por lo anterior, no pueda instaurarse.</p> <p>7. La posibilidad de que el Supremo Tribunal conozca de las resoluciones que ponen fin a la instancia en los procesos sumarios – vía recurso de nulidad- pasa por el filtro del recurso de queja excepcional conforme a lo dispuesto por el apartado dos del artículo 297° del Código de Procedimientos Penales, modificado por el Decreto Legislativo número 959. El objeto de este recurso</p>		

CUADRO DE LOS ACUERDOS PLENARIOS PROCESADOS

ACUERDOS PLENARIOS	CRITERIO	FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA APROBADA	FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA DESAPROBADA O EN MINORÍA	CONCLUSIÓN (FUNDAMENTOS QUE SE CONCLUYERON)
		<p>extraordinario es, claro está, que la Sala Penal Suprema resuelva la admisibilidad de un recurso de nulidad rechazado por la Sala Penal Superior que actuó como Tribunal Ad Quem. El mencionado recurso será estimado siempre que "...se acredite que la resolución impugnada o el procedimiento que la precedió infringió normas constitucionales o normas con rango de ley directamente derivadas de aquéllas".</p> <p>Es importante precisar que, como consecuencia de la interposición del recurso de queja, el Superior Tribunal dicta el auto concesorio respectivo y ordena la formación del cuaderno de queja. Éste se eleva al Supremo Tribunal, que absuelve el grado previo dictamen fiscal, y remite copia certificada de la respectiva Ejecutoria Suprema al Colegiado Superior, el que de estimarse el recurso interpuesto concede el recurso de nulidad antes denegado.</p> <p>En este sentido, se debe dilucidar si la interposición del recurso de queja excepcional suspende los plazos de prescripción.</p> <p>8. El primer presupuesto material que determina la suspensión del plazo de prescripción –indicado en el párrafo 6– se presenta, con toda evidencia, puesto que la interposición del recurso de queja da origen a una cuestión jurídica inédita, centrada en definir si el órgano jurisdiccional de mérito –en concreto, el Tribunal Ad Quem– vulneró la Constitución o, en un sentido más amplio, el bloque de constitucionalidad, de suerte que su dilucidación, más allá o independientemente del propio efecto del recurso en análisis, obliga a establecer si la causa debe o no continuar, si se abre o no una instancia jurisdiccional excepcional. Es decir, impide hasta su dilucidación el archivo definitivo del proceso penal incoado, el mismo que habría operado de no haberse interpuesto el citado recurso.</p> <p>9. El segundo presupuesto material que ocasiona la suspensión del</p>		

CUADRO DE LOS ACUERDOS PLENARIOS PROCESADOS

ACUERDOS PLENARIOS	CRITERIO	FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA APROBADA	FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA DESAPROBADA O EN MINORÍA	CONCLUSIÓN (FUNDAMENTOS QUE SE CONCLUYERON)
		<p>plazo de prescripción –precisado, igualmente, en el párrafo 6- también concurre en el presente caso. En efecto, como consecuencia de su interposición se forma un cuaderno de queja, que opera de forma independiente al expediente principal a través de un procedimiento, sin duda excepcional y autónomo, a mérito del cual el archivo de la causa se suspende hasta que no se resuelva el recurso de queja.</p> <p>10. Por tanto, la incoación y trámite del recurso de queja respecto de las resoluciones que ponen fin a la instancia en los procesos sumarios se adecua a las exigencias de los procedimientos que suspenden la prescripción de la acción penal. En consecuencia, para el cómputo de los plazos de prescripción en el referido supuesto no puede considerarse el lapso comprendido entre la interposición del recurso de queja excepcional, como consecuencia del denegatorio del recurso de nulidad, y la remisión al Tribunal Superior de la copia certificada de la Ejecutoria Suprema que estima el recurso en cuestión y concede el recurso de nulidad respectivo...”</p> <p>DECISIÓN:...por unanimidad;</p> <p>ACORDARON:</p> <p>12. ESTABLECER como doctrina legal, conforme a los fundamentos seis a diez, que para el cómputo de los plazos de prescripción en los procesos sumarios no se considera el lapso comprendido entre la interposición del recurso de queja excepción- contra la resolución que pone fin a la instancia- y la remisión de la copia certificada de la Ejecutoria Suprema que estima el recurso de queja y concede el recurso de nulidad respectivo al Superior Tribunal. A estos efectos, los Jueces y Salas Penales Superiores deberán tener en cuenta, obligatoriamente, los criterios indicados en dichos párrafos.</p>		

CUADRO DE LOS ACUERDOS PLENARIOS PROCESADOS

ACUERDOS PLENARIOS	CRITERIO	FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA APROBADA	FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA DESAPROBADA O EN MINORÍA	CONCLUSIÓN (FUNDAMENTOS QUE SE CONCLUYERON)
6)Acuerdo Plenario N° 9-2007/CJ-116		<p>“6. El Código Penal distingue de manera sistemática y funcional dos clases de plazos para la prescripción de la acción penal. Es así que en el artículo 80° regula lo concerniente al plazo ordinario y en el artículo 83° in fine hace referencia al plazo extraordinario.</p> <p>7. Con relación al plazo extraordinario, la norma antes mencionada precisa que éste se vence cuando “el tiempo transcurrido sobrepasa en una mitad el plazo ordinario de prescripción”. Cabe señalar que para ambos tipos de plazos de prescripción el cómputo se inicia observando las reglas que se definen en el artículo 82° del Código Penal.</p> <p>8. Ahora bien, tratándose de delitos sancionados con pena privativa de libertad temporal, el plazo ordinario de prescripción corresponde al máximo de la pena conminada en la ley para el delito cometido. Sin embargo, existiendo en el artículo 29° o en diferentes delitos tipificados en la Parte Especial del Código Penal y en leyes penales complementarias la posibilidad legal de que la pena privativa de libertad temporal conminada pueda alcanzar un máximo de 35 años, el artículo 80° del referido Código incluye en su párrafo cuarto un límite cuantitativo excepcional para la prescripción ordinaria en tales casos. Lo mismo ocurre cuando la pena conminada privativa de libertad es la de cadena perpetua.</p> <p>9. Al respecto, el legislador ha precisado en dicho párrafo que el plazo ordinario de prescripción para delitos sancionados con pena privativa de libertad temporal siempre será de veinte años y en hechos punibles reprimidos con pena de cadena perpetua de treinta años. No obstante, es de destacar que tales límites excepcionales sólo operan en relación al plazo ordinario de prescripción de la acción penal; no afectan en nada, ni menos excluyen la operatividad de las reglas que regulan el cómputo del plazo extraordinario de prescripción de la acción penal, y que se precisan en el párrafo final del artículo 83° del Código Penal.</p>		

CUADRO DE LOS ACUERDOS PLENARIOS PROCESADOS

ACUERDOS PLENARIOS	CRITERIO	FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA APROBADA	FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA DESAPROBADA O EN MINORÍA	CONCLUSIÓN (FUNDAMENTOS QUE SE CONCLUYERON)
		<p>10. En consecuencia, cuando se trate de delitos cuya pena conminada privativa de libertad tiene un máximo legal superior a veinte años, el plazo ordinario de prescripción de la acción penal será de veinte años. En tales supuestos el plazo extraordinario de prescripción de la acción penal será de treinta años. Y, cuando la pena que reprime el delito sea la de cadena perpetua, el plazo ordinario de prescripción de la acción penal será de treinta años. Para estos delitos el plazo extraordinario de prescripción de la acción penal será de cuarenta y cinco años.”</p> <p>DECISIÓN:...por unanimidad;</p> <p>ACORDARON:</p> <p>12. ESTABLECER como doctrina legal, conforme a los fundamentos jurídicos seis al diez, los criterios para la interpretación y aplicación de los alcances del párrafo cuarto del artículo 80° del Código Penal, así como sobre la eficacia de dicha disposición en relación a lo dispuesto en el párrafo final del artículo 83° del citado cuerpo legal. A estos efectos, los Jueces y Salas Penales deberán tener en cuenta, obligatoriamente, los criterios indicados en dichos párrafos.</p>		
7) Plenos 1999		<p>“Caso de la extinción de la reparación civil.</p> <p>TEMA 5: Reparación Civil</p> <p>En consecuencia, el Pleno ACUERDA declarar que:</p> <p>PRIMERO. Por aclamación. En sede penal es procedente aplicar a la reparación civil los intereses compensatorios devengados desde la fecha en que se provocó el daño al agraviado.</p> <p>SEGUNDO.- Por aclamación. El monto de la reparación civil debe determinarse en atención al daño económico, moral y personal, comprendiendo inclusive el lucro cesante. No procede reducir o elevar el monto correspondiente en atención a la gravedad del delito</p>		

CUADRO DE LOS ACUERDOS PLENARIOS PROCESADOS

ACUERDOS PLENARIOS	CRITERIO	FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA APROBADA	FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA DESAPROBADA O EN MINORÍA	CONCLUSIÓN (FUNDAMENTOS QUE SE CONCLUYERON)
		<p>o la capacidad económica del agente.</p> <p>TERCERO.- Por aclamación. Consentida la sentencia, sus extremos penales y civiles se deben cumplir o extinguir por separado. En consecuencia, la ejecución no concluirá hasta que se cumpla con ambos o se extingan ambos según las reglas que corresponden al derecho penal, en lo que toca a las penas, y al derecho civil, en lo que toca a la reparación civil.</p> <p>CUARTO. Por mayoría. En caso de sentencias civiles y penales que concurren a fijar obligaciones de pago en relación con un mismo hecho, prevalece la primera sentencia ejecutada.</p> <p>El Juez a cargo de la ejecución de la segunda debe descontar, como pagado, el monto que haya sido cobrado en la primera ejecución. En caso de que la primera ejecución comprenda un monto mayor, el Juez de la segunda causa debe dar por cumplida la obligación estipulada en la sentencia. En caso que la primera comprenda un monto menor, el Juez de la segunda causa estará autorizado a proceder sólo por la diferencia.</p> <p>QUINTO. Por aclamación. Las normas del procedimiento civil no permiten que se imponga al agraviado el deber de abonar una contra cautela como condición para admitir su pedido de embargo.</p> <p>SEXTO. Por aclamación. En caso de condena por delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias el Juez debe ordenar el pago de cuanto se tenía por incumplido al momento de formalizar la denuncia.</p> <p>SÉTIMO.- Por mayoría de 26 votos contra 19. También puede ordenar el pago de las obligaciones laborales incumplidas que se encuentre liquidadas si el proceso por delito contra la libertad de trabajo se refiere al incumplimiento de resoluciones que han ordenado su pago.”</p>		

CUADRO DE LOS ACUERDOS PLENARIOS PROCESADOS

ACUERDOS PLENARIOS	CRITERIO	FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA APROBADA	FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA DESAPROBADA O EN MINORÍA	CONCLUSIÓN (FUNDAMENTOS QUE SE CONCLUYERON)
8) Plenos 1998		<p>“Casos especiales de prescripción de la acción penal tratándose de delitos continuados, permanentes, instantáneos y prescripción.</p> <p>TEMA 2: DELITOS CONTINUADOS, DELITOS PERMANENTES y DELITOS INSTANTÁNEOS.</p> <p>MODIFICACIÓN DE LA LEY PENAL EN EL TIEMPO Y PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN.</p> <p>EL PLENO ACUERDA:</p> <p>PRIMERO.- Por unanimidad, declarar que los hechos consumados en un sólo acto debe reputarse como delitos instantáneos, independientemente de la permanencia en el tiempo que puedan mostrar sus efectos. Debe estimarse el hecho como delito continuado si él consiste en varias infracciones a la ley que responden a una única resolución criminal fraccionada en su ejecución.</p> <p>SEGUNDO.- Por unanimidad, declarar que sólo debe estimarse el hecho como un delito permanente si, producida la consumación, ésta se mantiene en el tiempo durante un período cuya duración está puesta bajo la esfera de dominio del agente.</p> <p>TERCERO.- Por mayoría de treinta y dos votos contra doce, declarar que la ley aplicable a los delitos permanentes es la vigente al inicio del período consumativo, y que, en consecuencia, concurren a la sanción de este tipo de hechos todas las leyes vigentes mientras dura el estado consumativo.</p> <p>CUARTO.- Por aclamación, declarar que en el caso de delitos continuados procede aplicar la ley vigente a la terminación del período de realización de la conducta criminal.</p> <p>QUINTO.- Por aclamación, que las diversas modalidades del delito de lavado de dinero deben reputarse como delitos instantáneos de efectos permanentes.</p> <p>SEXTO.- Por treintitún votos contra trece, que los delitos de resistencia a la autoridad y los delitos de omisión a la asistencia familiar deben ser reputados como instantáneos de efectos</p>		

CUADRO DE LOS ACUERDOS PLENARIOS PROCESADOS

ACUERDOS PLENARIOS	CRITERIO	FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA APROBADA	FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA DESAPROBADA O EN MINORÍA	CONCLUSIÓN (FUNDAMENTOS QUE SE CONCLUYERON)
		<p>permanentes.</p> <p>SÉTIMO.- Por unanimidad, que la figura de distorsiones en la producción o en el cierre de empresas debe ser calificada como instantáneo de efectos permanentes.</p> <p>OCTAVO.- Por mayoría, salvo dos votos, que la figura de incumplimiento de resoluciones judiciales laborales debe ser estimada un delito instantáneo de efectos permanentes.</p> <p>NOVENO.- Por mayoría, menos un voto, que la figura del inciso primero del artículo 168 del Código Penal corresponde a un delito instantáneo de efectos permanentes.</p> <p>DÉCIMO.- Por treinta votos contra once, que las figuras de los incisos 2 y 3 del artículo 168 del Código Penal corresponden a delitos permanentes.</p> <p>UNDÉCIMO.- Por mayoría menos nueve votos, que el delito de usurpación debe ser reputado instantáneo de efectos permanentes.</p> <p>DUODECIMO.- Por aclamación, que en todos los casos la prescripción debe computarse desde la conclusión del periodo consumativo o continuado”.</p>		
<p>9) Plenos 1997</p> <p>Acuerdo</p> <p>Plenario 5/97</p> <p>Arequipa</p>		<p>Conclusión:</p> <p>“PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL PARA DELITOS CONMINADOS CON PENAS CONJUNTAS Y ALTERNATIVAS</p> <p>PRIMERO: Que el término de prescripción de la acción para los delitos conminados con penas conjuntas debe fijarse atendiendo al plazo que corresponda al elemento más grave integrado a la sanción, que en su caso será la pena privativa de la libertad, incluso aunque ésta sea no mayor a dos años.</p> <p>SEGUNDO: Que en el caso de delitos conminados con penas alternativas la acción penal sólo debe considerarse prescrita cuando se haya cumplido el plazo más largo que resulte de las penas susceptibles de imposición”.</p>		

CUADRO DE LOS ACUERDOS PLENARIOS PROCESADOS

ACUERDOS PLENARIOS	CRITERIO	FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA APROBADA	FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA DESAPROBADA O EN MINORÍA	CONCLUSIÓN (FUNDAMENTOS QUE SE CONCLUYERON)
<p style="text-align: center;"><i>10) II Pleno Jurisdiccional Distrital 2009 en la ciudad de Ica</i></p>		<p>TEMA 01: CÓMPUTO DEL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN EL CASO DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS</p> <p>A. Primera posición: La pena máxima del delito se duplica (plazo de prescripción ordinario) y en su caso, a este plazo (resultado) se le incrementa una mitad del mismo (plazo duplicado)</p> <p>04 años x 2= 08 años (plazo ordinario, duplicado)</p> <p>08 años + 4=12 años (suma del plazo ordinario duplicado, más la mitad del mismo)</p> <p>B. Segunda posición: A la pena máxima (plazo ordinario) se le suma una mitad (prescripción extraordinaria) y luego, este plazo se duplica.</p> <p>4 años x 2=08 años (plazo ordinario, duplicado)</p> <p>08 años + 2=10 años (suma del plazo ordinario duplicado, más la mitad del plazo ordinario)</p> <p>C. Tercera posición: En caso de delitos cometidos por Funcionarios Públicos contra el patrimonio del Estado, conforme lo establece la norma pertinente de la Constitución y el artículo 83° del Código Penal, el plazo ordinario de prescripción es el mismo fijado por la ley por el delito y cuando se alude al plazo extraordinario, este debe ser estimado no en función al último párrafo del precitado artículo 83°, que establece la sumatoria de la mitad del término ordinario, sino, el doble de dicho plazo, ya que de lo contrario se estaría afectando el principio de favorabilidad que asiste al reo, además, que de asumirse una posición distinta se estaría generando un plazo especial y por ende ya extraordinario sobre los extraordinarios existentes. Ya la Constitución fija un plazo extraordinario para ese</p>		

CUADRO DE LOS ACUERDOS PLENARIOS PROCESADOS

ACUERDOS PLENARIOS	CRITERIO	FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA APROBADA	FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA DESAPROBADA O EN MINORÍA	CONCLUSIÓN (FUNDAMENTOS QUE SE CONCLUYERON)
		<p>tipo de delitos Votación</p> <p>4. Conclusión Plenaria El Pleno adoptó por mayoría la Tercera Posición que enuncia lo siguiente: En caso de delitos cometidos por Funcionarios Públicos contra el patrimonio del Estado, conforme lo establece la norma pertinente de la Constitución y el artículo 83° del Código Penal, el plazo ordinario de prescripción es el mismo fijado por la ley por el delito y cuando se alude al plazo extraordinario, este debe ser estimado no en función al último párrafo del precitado artículo 83°, que establece la sumatoria de la mitad del término ordinario, sino, el doble de dicho plazo, ya que de lo contrario se estaría afectando el principio de favorabilidad que asiste al reo, además, que de asumirse una posición distinta se estaría generando un plazo especial y por ende ya extraordinario sobre los extraordinarios existentes. Ya la Constitución fija un plazo extraordinario para ese tipo de delitos. Así tenemos: 4 años (plazo ordinario) x 2=08 años (plazo extraordinario)</p>		
<p><i>II) I Pleno Jurisdiccional Penal Nacional Acuerdo Plenario N°5/97 AREQUIPA</i></p>	<p>A) Si se trata de penas conjuntas la prescripción debe fijarse atendiendo a la pena conminada más grave.</p> <p>B) En caso de penas</p>	<p>FUNDAMENTOS Y CONCLUSIÓN: PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL PARA DELITOS CONMINADOS CON PENAS CONJUNTAS Y ALTERNATIVAS I. ANTECEDENTES Es materia de reunión en Pleno Jurisdiccional la determinación de las reglas que deban emplearse para fijar el plazo de prescripción que corresponde a los casos de penas conminadas conjuntas y alternativas. Al iniciar la plenaria se plantearon dos tendencias jurisprudenciales: 1. La que considera que debe darse un tratamiento diferenciado a ambos casos: Si se trata de penas conjuntas la prescripción debe</p>		

CUADRO DE LOS ACUERDOS PLENARIOS PROCESADOS

ACUERDOS PLENARIOS	CRITERIO	FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA APROBADA	FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA DESAPROBADA O EN MINORÍA	CONCLUSIÓN (FUNDAMENTOS QUE SE CONCLUYERON)
	complejas (conjuntas o alternativas) la prescripción debe establecerse atendiendo de manera integral a los plazos concurrentes en la sanción.	<p>fijarse atendiendo a la pena conminada más grave, según el orden establecido por el artículo 28° del Código Penal. En cambio, si se trata de penas alternativas, la prescripción debe fijarse atendiendo al plazo más largo que a ellas corresponda.</p> <p>2. La que sostienen que, en caso de penas complejas (conjuntas o alternativas) la prescripción debe establecerse atendiendo de manera integral a los plazos concurrentes en la sanción. Para esta posición las penas complejas deben ser consideradas más graves que las equivalentes penas simples en las que se establece una sola sanción, por tanto, en algunos casos, podrá ser la pena conjunta a la privativa de la libertad la que determine el plazo de prescripción aplicable al caso.</p> <p>PRIMERO. Por mayoría simple de 42 contra 24 votos, el pleno adoptó la posición de la Comisión N°2, que considera que, en el caso de penas conjuntas el término de prescripción debe determinarse en función a la pena más grave, y que la gravedad de las penas debe fijarse según el orden de prelación establecido por el artículo 28° del Código Penal.</p> <p>SEGUNDO. Por mayoría simple de 31 contra 30 votos, el pleno adoptó el acuerdo producido entre las Comisiones N°1 y N°2, que consideraron que en el caso de las penas alternativas el término de prescripción deberá fijarse atendiendo al plazo más largo contenido en la sanción conminada.</p> <p>III. ACUERDA</p> <p>PRIMERO: Que el término de prescripción de la acción para los delitos conminados con penas conjuntas debe fijarse atendiendo al plazo que corresponda al elemento más grave integrado a la sanción, que en su caso será la pena privativa de la libertad, incluso aunque ésta sea no mayor a dos años.</p> <p>SEGUNDO: Que en el caso de delitos conminados con penas</p>		

CUADRO DE LOS ACUERDOS PLENARIOS PROCESADOS

ACUERDOS PLENARIOS	CRITERIO	FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA APROBADA	FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA DESAPROBADA O EN MINORÍA	CONCLUSIÓN (FUNDAMENTOS QUE SE CONCLUYERON)
		alternativas la acción penal sólo debe considerarse prescrita cuando se haya cumplido el plazo más largo que resulte de las penas susceptibles de imposición.		
<p style="text-align: center;">12) Pleno Jurisdiccional Penal Nacional ICA-1998</p>	<p>A) hechos consumados en un solo acto deben reputarse como delitos instantáneos</p> <p>B) el hecho como un delito permanente si, producida la consumación, ésta se mantiene en el tiempo durante un período cuya duración está puesta bajo la esfera de dominio del agente.</p>	<p>TEMA 2 DELITOS CONTINUADOS, DELITOS PERMANENTES Y DELITOS INSTANTÁNEOS. MODIFICACIÓN DE LA LEY PENAL EN EL TIEMPO Y PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN EL PLENO ACUERDA:</p> <p>PRIMERO.-Por unanimidad, declarar que los hechos consumados en un solo acto deben reputarse como delitos instantáneos, independientemente de la permanencia en el tiempo que puedan mostrar sus efectos. Debe estimarse el hecho como delito continuado si él consiste en varias infracciones a la ley que responden a una única resolución criminal fraccionada en su ejecución.</p> <p>SEGUNDO.-Por unanimidad, declarar que sólo debe estimarse el hecho como un delito permanente si, producida la consumación, ésta se mantiene en el tiempo durante un período cuya duración está puesta bajo la esfera de dominio del agente.</p> <p>TERCERO.- Por mayoría de treinta y dos votos contra doce, declarar que la ley aplicable a los delitos permanentes es la vigente al inicio del periodo consumativo, y que, en consecuencia, concurren a la sanción de este tipo de hechos todas las leyes vigentes mientras dura el estado consumativo.</p> <p>CUARTO.- Por aclamación, declarar que en el caso de delitos continuados procede aplicar la ley vigente a la terminación del</p>		

CUADRO DE LOS ACUERDOS PLENARIOS PROCESADOS

ACUERDOS PLENARIOS	CRITERIO	FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA APROBADA	FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA DESAPROBADA O EN MINORÍA	CONCLUSIÓN (FUNDAMENTOS QUE SE CONCLUYERON)
		<p>período de realización de la conducta criminal.</p> <p>QUINTO.-Por aclamación, que las diversas modalidades del delito de lavado de dinero deben reputarse como delitos instantáneos de efectos permanentes.</p> <p>SEXTO.-Por treintín(sic) votos contra trece, que los delitos de resistencia a la autoridad y los delitos de omisión a la asistencia familiar deben ser reputados como instantáneos de efectos permanentes.</p> <p>SÉTIMO.- Por unanimidad, que la figura de distorsiones en la producción o en el cierre de empresas debe ser calificada como instantáneo de efectos permanentes.</p> <p>OCTAVO.- Por mayoría, salvo dos votos, que la figura de incumplimiento de resoluciones judiciales laborales debe ser estimada un delito instantáneo de efectos permanentes.</p> <p>NOVENO.-Por mayoría, menos un voto, que la figura del inciso primero del artículo 168 del Código Penal corresponde a un delito instantáneo de efectos permanentes.</p> <p>DÉCIMO.-Por treinta votos contra once, que las figuras de los incisos 2 y 3 del artículo 168 del Código Penal corresponden a delitos permanentes.</p> <p>UNDECIMO.-Por mayoría menos nueve votos, que el delito de usurpación debe ser reputado instantáneo de efectos permanentes.</p> <p>DUODECIMO.-Por aclamación, que en todos los casos la prescripción debe computarse desde la conclusión del periodo consumativo o continuado.</p>		
13) Pleno Jurisdiccional Penal Nacional ICA-1998	Que, la prescripción de la acción penal no es aplicable a delitos de lesa	TEMA 3: SUSPENSIÓN DE LOS TÉRMINOS DE PRESCRIPCIÓN POR LA DECLARACIÓN DE CONTUMACIA		

CUADRO DE LOS ACUERDOS PLENARIOS PROCESADOS

ACUERDOS PLENARIOS	CRITERIO	FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA APROBADA	FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA DESAPROBADA O EN MINORÍA	CONCLUSIÓN (FUNDAMENTOS QUE SE CONCLUYERON)
	humanidad, por tanto tratándose de dichos delitos, la declaración de contumacia si debe ser acompañada de la declaración de suspensión del plazo prescriptorio.	<p>CONSIDERACIONES</p> <p>1.-La prohibición de prescripción de la acción penal, que contiene la declaración de contumacia, conforme al artículo 1 de la Ley 26641, afecta la estructura misma del debido proceso, el principio de seguridad jurídica, el de igualdad ante la Ley, el de presunción de inocencia, el de definición de un proceso dentro de un plazo razonable por la temporalidad de la pena, que forman parte del debido proceso consagrado en el artículo 139 de la Constitución Política del Estado, así como el principio de respeto a la dignidad humana consagrado en el artículo 2º inciso 24) literales “a” y “e”, de la norma fundamental y finalmente debe considerarse que no puede eternizarse la persecución punitiva, por lo que en ese sentido la suspensión de la prescripción de la acción penal por la declaración de contumacia es inconstitucional.</p> <p>[...]</p> <p>SE ACUERDA</p> <p>Por mayoría:</p> <p>1.-Que la suspensión de los plazos de prescripción por la declaración de contumacia a que se refiere el artículo 1 de la ley 26641, no se ajusta a la interpretación de la misma conforme a la constitución por lo que al declararse ésta no debe acompañarse de la suspensión de los plazos prescriptorios.</p> <p>2.- Que, la prescripción de la acción penal no es aplicable a delitos de lesa humanidad, por tanto tratándose de dichos delitos, la declaración de contumacia si debe ser acompañada de la declaración de suspensión del plazo prescriptorio.</p> <p>3.-Que en tal sentido, el Juez debe realizar en cada caso concreto, el juicio de validez correspondiente e inaplicar la norma legal cuando corresponda.</p>		

ANEXO 5: CUADRO DE LAS RESOLUCIONES PROCESADAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA PRESCRIPCIÓN

*El criterio de orden es por los temas de prescripción

CUADRO DE LAS RESOLUCIONES PROCESADAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA PRESCRIPCIÓN

#	MATERIA	EXP.	FECHA	PRONUNC.	DECISIÓN	VOTO 1	VOTO 2	VOTO 3	FUNDAMENTOS
1	I. Prescripción extraordinaria de la persecución penal	EXP. Nº 03329- 2010- PHC/T C	Lunes, 22 de noviembre del 2010	Infundada	Unanimidad				<p>“1. Lo que en puridad cuestiona la recurrente es la ausencia de motivación de la resolución suprema de fecha 25 de abril de 2007 que declaró no haber nulidad de la sentencia de vista de fecha 10 de febrero de 2005, porque no consideró que a la fecha de expedición de la citada resolución suprema ya había operado la prescripción de la acción por el delito de fraude procesal (...)</p> <p>3...Del mismo modo, el artículo 83 del Código Penal prevé que en caso de que hubiere operado una de las causales de interrupción de la prescripción, a saber: las actuaciones del Ministerio Público o de las autoridades judiciales o la comisión de un nuevo delito doloso, será de aplicación el plazo extraordinario de prescripción, el cual equivale al plazo ordinario de prescripción más la mitad...” (pp.3).</p> <p>“4...la necesidad de que las resoluciones judiciales sean motivadas responde a un principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional y es al mismo tiempo un derecho constitucional de los justiciables (...)</p> <p>5...la resolución Nº 63 fue confirmada por la resolución de fecha 26 de abril de 2001 emitida por la Sala Civil para Procesos Ejecutivos y Cautelares de la Corte Superior de Justicia de Lima, siendo que hasta ésta última resolución se habría pretendido seguir induciendo a error al órgano jurisdiccional al solicitar se revoque la decisión que desestimaba la adjudicación del aludido inmueble por lo que a partir del 26 de abril de 2001 comenzó a correr el plazo extraordinario prescriptorio de la acción penal por el delito de fraude procesal que venció el 26 de abril de 2007, fecha posterior a la emisión de la resolución suprema de fecha 25 de enero de 2007 (f.32), que declaró no haber nulidad de la sentencia de vista, y teniendo en cuenta que el delito de</p>

CUADRO DE LAS RESOLUCIONES PROCESADAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA PRESCRIPCIÓN

#	MATERIA	EXP.	FECHA	PRONUNC.	DECISIÓN	VOTO 1	VOTO 2	VOTO 3	FUNDAMENTOS
									fraude procesal establece una pena privativa de libertad de hasta cuatro años conforme lo señala el art. 416° del Código Penal y que el plazo extraordinario de prescripción vence a los seis años, a la fecha de imposición de condena, no habría operado la prescripción de la acción penal” (pp.4).
2		EXP. N° 2466- 2006- PHC/T C	lunes, 17 de julio de 2006	Infundada	unanimidad				<p>“5. ...resulta lesivo a los principios de economía y celeridad procesal, vinculados al derecho al debido proceso, que el representante del Ministerio Público, titular de la acción penal, sostenga una imputación cuando ésta se ha extinguido o que formule denuncia penal cuando la potestad persecutoria del Estado, por el transcurso del tiempo se encuentra extinguida, y que el órgano jurisdiccional abra instrucción en tales supuestos...9...se advierte que los hechos investigados en el proceso acaecieron el 28 de setiembre de 1991, es decir cuando el Código Penal actual (publicado el 8 de abril de 1991) se encontraba vigente. Asimismo el recurrente fue sentenciado por el delito de tráfico ilícito de drogas (posesión de drogas para su comercialización) sobre la base del artículo 296, segundo párrafo, del Código Penal.”Pág.2.</p> <p>“10. Conforme a lo previsto, en el artículo 296, segundo párrafo, del Código Penal, el delito por el cual fue condenado al recurrente (posesión de drogas para su comercialización) tiene prevista una pena privativa de libertad de hasta 12 años. En ese sentido el plazo de prescripción ordinario aplicable al presente caso vencería el 8 de abril de 2003 (como consta a fojas 156), de conformidad con el artículo 83 del Código Penal, resulta de aplicación el plazo extraordinario de prescripción, el cual es de 18 años, plazo que al dictarse la resolución mediante la cual se confirma la condena impuesta, con fecha 9 de setiembre de 2005, aún no había transcurrido. Por lo tanto, este extremo de la demanda debe ser también desestimado” (pp.2 y 3).</p>

CUADRO DE LAS RESOLUCIONES PROCESADAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA PRESCRIPCIÓN

#	MATERIA	EXP.	FECHA	PRONUNC.	DECISIÓN	VOTO 1	VOTO 2	VOTO 3	FUNDAMENTOS
3	II. Plazo de prescripción del nuevo delito, ampliado durante la etapa de instrucción	EXP. N° 2506-2005-PHC/T C	lunes, 02 de julio de 2007	Infundada	unanimidad				<p>“4....resulta lesivo a los principios de economía y celeridad procesal, vinculados al derecho al debido proceso, que el representante del Ministerio Público, titular de la acción penal, sostenga una imputación cuando ésta se ha extinguido o que formule denuncia penal cuando la potestad persecutoria del Estado, por el transcurso del tiempo se encuentra extinguida, y que el órgano jurisdiccional abra instrucción en tales supuestos (...)”(pp.3).</p> <p>“8. En autos obra, a fojas 26, el auto de apertura de instrucción de fecha 1 de setiembre de 1997, donde consta que al accionante se le abrió instrucción por el delito de usurpación, por hechos ocurridos el 16 de mayo de 1997(...)</p> <p>9. Asimismo obra a fojas 46 y 47, tanto el dictamen fiscal, de fecha 29 de setiembre del 2003, en donde se solicita la ampliación de apertura de instrucción para comprender al accionante como presunto autor del delito de usurpación agravada, así como la resolución de fecha 3 de octubre del 2003 en donde el Noveno Juzgado Penal de Lima resuelve ampliar el auto de apertura de instrucción contra el accionante por el delito de usurpación agravada. [...] 11. El artículo 202 del Código Penal sanciona al delito de usurpación simple con una pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de 3 años; asimismo se tiene que según el artículo 204 del mismo cuerpo legal, la pena privativa de libertad para el delito de usurpación agravada es no menor de 2 años ni mayor de 6 años. Por tanto, de conformidad con el artículo 83 del Código Penal, el plazo de prescripción extraordinaria sería de nueve años. Como se ha señalado, si bien se abrió instrucción contra el accionante por el delito de usurpación simple, luego se amplió la instrucción por el delito de usurpación agravada. Siendo así, habiendo ocurrido los hechos, según el auto de apertura de instrucción, el 16 de mayo de 1997, la acción penal no habría prescrito al momento de interponerse la demanda, por lo que la pretensión no puede ser estimada” (pp.4).</p>

CUADRO DE LAS RESOLUCIONES PROCESADAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA PRESCRIPCIÓN

#	MATERIA	EXP.	FECHA	PRONUNC.	DECISIÓN	VOTO 1	VOTO 2	VOTO 3	FUNDAMENTOS
4	III. Excepción que debe ser resuelta antes de la sentencia	EXP. Nº 2522- 2005- PHC/T C	jueves, 09 de junio de 2005	Fundada	unanimidad				<p>“6. Por tanto, será materia de análisis constitucional si la resolución judicial cuestionada, al disponer que la excepción de prescripción sea resuelta conjuntamente con la sentencia, transgrede el principio de legalidad procesal e incide en la libertad personal del demandante.</p> <p>7. Conforme a lo expresado en anterior oportunidad por este Tribunal, “[L]a prescripción, desde un punto de vista general, es la institución jurídica mediante la cual, por el transcurso del tiempo, la persona adquiere derechos o se libera de obligaciones (...)” (pp. 3).</p> <p>“8. Del estudio de autos se advierte que el demandante es procesado por el delito de defraudación en la modalidad de estelionato, ilícito penal para el cual el artículo 197º inciso 4 del Código Penal, prevé una pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años. Porque “a sabiendas que no le correspondía la propiedad del inmueble, el 14 de octubre de 1998, constituye hipoteca sobre el mismo a favor de la entidad agraviada” (pp. 30). “9. Por disposición del artículo 80.º del Código Sustantivo, la acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley para el delito, si es privativa de libertad (prescripción ordinaria); y, en todo caso, prescribe cuando el tiempo transcurrido sobrepasa en una mitad al plazo ordinario de prescripción, conforme lo señala el artículo 83.º del acotado (prescripción extraordinaria).</p> <p>En tal sentido, si los hechos investigados ocurrieron el 14 de octubre de 1998, a la fecha en que se solicitó la prescripción de la acción penal habían transcurrido 6 años y 4 meses de la presunta comisión del delito, de modo que los plazos máximos establecidos por ley se encontraban vencidos, ya que, por el tiempo transcurrido, el Estado perdió su facultad punitiva y, con ello, la posibilidad de investigar y sancionar.</p> <p>10. En este orden de ideas, no tiene objeto que el órgano jurisdiccional prosiga con la tramitación del proceso y, por ende, con la determinación de la responsabilidad de los supuestos autores, si por mandato legal dicha responsabilidad se encuentra extinguida.” (pp. 4).</p>

CUADRO DE LAS RESOLUCIONES PROCESADAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA PRESCRIPCIÓN

#	MATERIA	EXP.	FECHA	PRONUNC.	DECISIÓN	VOTO 1	VOTO 2	VOTO 3	FUNDAMENTOS
5	IV. Prescripción de imputables restringidos	EXP. Nº 6063- 2006- HC/TC	domingo, 19 de octubre de 2008	Infundada	unanimidad				<p>“7. Por otro lado es preciso tomar en cuenta que conforme al artículo 83º del Código Penal, en caso de que hubiere operado una de las causales de interrupción de la prescripción, a saber, las actuaciones del Ministerio Público o de las autoridades judiciales o la comisión de un nuevo delito doloso, será de aplicación el plazo ordinario de prescripción, que equivale al plazo ordinario de prescripción más la mitad.</p> <p style="text-align: center;">8. Asimismo el artículo 81 del Código Penal establece que los plazos de prescripción se reducen a la mitad cuando el agente tenga menos de 21 o más de 65 años al tiempo de la comisión del hecho punible” (pp.3).</p> <p style="text-align: center;">Análisis del caso</p> <p>“Conforme a la sentencia condenatoria y su confirmatoria, el recurrente fue condenado por la comisión del delito de terrorismo previsto en el artículo 3º, literales b) y c) del Decreto Ley Nº 25475, los cuales tienen una pena prevista de hasta 30 años. Asimismo, conforme a lo determinado en la referida sentencia condenatoria, los hechos cometidos por el accionante ocurrieron entre el 30 de julio y el 16 de setiembre del año 1993. Tales hechos ocurrieron cuando el accionante contaba con más de 18 años y menos de 21 años, lo que puede ser corroborado en la partida de nacimiento (a fojas 62). Por tanto, siendo el plazo ordinario de prescripción de 30 años, en atención a la edad con que contaba el accionante al momento de producidos los hechos, el plazo prescriptorio será de 15 años.</p> <p>10. Es así que, contabilizado el plazo desde el momento de producidos los hechos, conforme a lo determinado en la sentencia, hasta la fecha en que la Corte Suprema de Justicia declaró no haber nulidad en la sentencia condenatoria (11 de mayo de 2005) el mismo no supera los 15 años de prescripción, por lo que no se advierte la vulneración alegada” (pp. 3).</p>

CUADRO DE LAS RESOLUCIONES PROCESADAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA PRESCRIPCIÓN

#	MATERIA	EXP.	FECHA	PRONUNC.	DECISIÓN	VOTO 1	VOTO 2	VOTO 3	FUNDAMENTOS
6		EXP. N° 4118- 2004- HC/TC	lunes, 06 de junio de 2005	Fundada	unanimidad				<p>“6.6. Las causales de interrupción del plazo de la prescripción se encuentran reguladas en el artículo 83 del Código Penal, y son las siguientes:</p> <p>a) Las actuaciones del Ministerio Público o de las autoridades judiciales.</p> <p>b) La comisión de un nuevo delito doloso.</p> <p>7.7. La suspensión de la prescripción de la acción penal, se encuentra definida en el artículo 84 del Código Penal. A diferencia de la interrupción de la prescripción de la acción penal, la suspensión no cuenta con causales establecidas en el Código, sino que se dispone que "Si el comienzo o la continuación del proceso penal depende cualquier cuestión que deba resolverse en otro procedimiento, ser considera en suspenso la prescripción hasta que aquel quede concluido".</p> <p>En tal sentido, puede considerarse como causal de prescripción, por ejemplo, la cuestión prejudicial, regulada en el artículo 4 del Código de Procedimientos Penales. Se puede considerar, también, la prerrogativa del antejuicio" (pp. 2).</p> <p>“8.8. Por último, la prescripción de la acción, según la regulación establecida en nuestro Código Penal, puede ser contabilizada a través del plazo ordinario y el plazo extraordinario. En primer lugar, el plazo ordinario de prescripción, regulado en el artículo 80° del Código Penal, es el equivalente al máximo de la pena fijada en la ley, en caso de ser privativa de libertad. En caso de que la pena no sea privativa de libertad, la acción prescribe a los dos años. Asimismo en caso de delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos contra el patrimonio del Estado o de organismos sometidos por este, el plazo de prescripción se duplica.</p>

CUADRO DE LAS RESOLUCIONES PROCESADAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA PRESCRIPCIÓN

#	MATERIA	EXP.	FECHA	PRONUNC.	DECISIÓN	VOTO 1	VOTO 2	VOTO 3	FUNDAMENTOS
									<p>10.10. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 81 del Código Penal, los plazos de prescripción se reducirán a la mitad si el agente tenía menos de 21 años o más de 65 al tiempo de la comisión del hecho punible.</p> <p>11.11 Finalmente, tratándose de reos contumaces, los plazos de prescripción se interrumpen si es que existen evidencias irrefutables que el acusado rehúye del proceso y hasta que el mismo se ponga a derecho, debiendo el juez declara dicha suspensión, de conformidad con el artículo 1° de la Ley N° 26641.</p> <p>12.12. Contra el accionante se sigue un proceso penal por delito de robo agravado, el cual está contemplado en el artículo 189° del Código Penal y ha sufrido varias modificaciones. En efecto, el Código Penal, al momento de la comisión del acto delictivo imputado, preveía una pena privativa de libertad no menor de tres años ni mayor de ocho años, de lo que se infiere que el plazo de prescripción en el presente caso, tratándose que el accionante aún no había cumplido 21 años de edad y de conformidad con lo establecido en el Artículo 81° del Código Penal, se reduce a la mitad (...)</p> <p>14. En consecuencia, le corresponde la aplicación del beneficio establecido en el artículo 81° del Código Penal, que prescribe que, de tratarse de una persona menor de 21 años, el plazo de prescripción para el delito de robo agravado se reduce a la mitad, resultando que, a los seis años de transcurrida la acción, ésta prescribió el 15 de setiembre de 1999”, (pp. 3).</p> <p>“23.23. Los criterios en los que se funda esta sentencia tienen efectos vinculantes para todos los operadores jurídicos conforme al artículo 6 del título preliminar del Código Procesal Constitucional” (pp.5).</p>

CUADRO DE LAS RESOLUCIONES PROCESADAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA PRESCRIPCIÓN

#	MATERIA	EXP.	FECHA	PRONUNC.	DECISIÓN	VOTO 1	VOTO 2	VOTO 3	FUNDAMENTOS
7	V. Prescripción para el cómplice secundario.	EXP. Nº 9291-2006-PHC/T C	martes, 27 de marzo de 2007	Infundada	unanimidad				<p>“10.10. Respecto de lo alegado por los demandantes en el sentido de que se habría cumplido el plazo prescriptorio para el delito por el cual fueron condenados en calidad de cómplices secundarios, el cual sería menor que el establecido para el autor, es preciso indicar que si bien, tal como consta a fojas 11 de autos, los demandantes habrían sido condenados como cómplices secundarios del delito de cohecho pasivo propio (artículo 393º CP) y a su vez el artículo 25º del Código Penal señala que a los cómplices <i>secundarios se les disminuirá prudentemente la pena</i> en la medida en que su actividad no es indispensable para la consumación del delito, la prescripción de la acción penal, entendida como supuesto de extinción de la acción penal, se rige por los artículos 80º y 83º del Código Penal ya citado, fijándose que el plazo de la prescripción en caso de delitos conminados con pena privativa de libertad será igual al máximo de la pena establecidas en la ley para el plazo ordinario y el plazo más la mitad para el plazo extraordinario.</p> <p>11.11. Sentado lo anterior, si bien la condena a imponerse en un proceso penal puede ser variable en atención al grado de participación del agente, el plazo de prescripción de delito se computa sobre la base del plazo máximo legal establecido para el delito imputado, siendo éste el único referente válido” (pp. 3).</p> <p>“12.12. Se aprecia de autos que, de acuerdo con el propio texto de la demanda de fojas 1, así como la copia de la sentencia condenatoria, de fojas 89 a 93, el último depósito de dinero de fondos públicos en la cuenta de los accionantes y con el consentimiento de estos se efectuó el 17 de julio de 1997...Es a partir de las fechas en mención que se habría consumado el delito, y de las cuales empezaría a correr el plazo de prescripción ordinaria, que para el caso de cohecho propio de 6 años...Sin embargo, tal como consta en el texto de la copia de la sentencia de fojas 44 y 45 de autos, el</p>

CUADRO DE LAS RESOLUCIONES PROCESADAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA PRESCRIPCIÓN

#	MATERIA	EXP.	FECHA	PRONUNC.	DECISIÓN	VOTO 1	VOTO 2	VOTO 3	FUNDAMENTOS
									Procurador Público formula denuncia contra los recurrentes con fecha 16 de abril de 2001,...por lo que habría operado el plazo de prescripción extraordinario, equivalente a 9 años; es decir, hasta el 17 y 18 de julio de 2006. En consecuencia, habiéndose dictado sentencia condenatoria con fecha 16 de mayo de 2005 no habría prescrito la acción penal, razón por la cual se debe declarar infundada la demanda” (pp. 3 y 4).
8		EXP.85 95- 2006- PHC/T C	Jueves, 23 del mes de febrero de 2006	Infundada	Unanimidad				“11.11. Conforme a la sentencia condenatoria cuya copia aporta la misma parte demandante y que obra a fojas 26 a fojas 58 del cuadernillo del Tribunal Constitucional, con fecha 13 de noviembre de 2006 el recurrente fue condenado únicamente pro el delito de asociación ilícita, por lo que respecto de la pretendida prescripción de la acción penal del delito de encubrimiento personal ha operado la sustracción de la materia. 12.12. Por otro lado cabe mencionar que la mencionada sentencia establece que el delito de asociación ilícita tiene carácter permanente (fojas 55 del cuadernillo del Tribunal Constitucional), por lo que, siguiendo la regla del artículo 82, inciso 4), el plazo de prescripción comienza desde que cesa la permanencia. 13.13. Respecto al momento en que cesó la permanencia, la ejecutoria cuestionada establece de manera clara que el cese de la asociación ilícita se produjo en el momento en que fueron detenidos los inculcados, es decir, el 25 de abril de 2002. En tal sentido, contabilizado el plazo de prescripción para el delito de asociación ilícita desde la referida fecha, éste aún no ha vencido, por lo que la pretensión debe ser desestimada. Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú HA RESUELTO Declarar INFUNDADA la demanda de autos” (pp. 4 y 5).

CUADRO DE LAS RESOLUCIONES PROCESADAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA PRESCRIPCIÓN

#	MATERIA	EXP.	FECHA	PRONUNC.	DECISIÓN	VOTO 1	VOTO 2	VOTO 3	FUNDAMENTOS
9	VI. Prescripción para delitos con efectos permanentes	EPX. N° 3523-2008-PHC/T C	Miércoles, 07 de enero de 2009	Improcedente	unanimidad				<p>"9. Sin embargo, es preciso indicar que no obstante la importancia constitucional de la prescripción de la acción penal, el cálculo de d. lapso requiere, en algunas ocasiones, la dilucidación de aspectos que no corresponde determinar a la justicia constitucional. En efecto, conforme artículo 82° del Código Penal el cómputo del plazo de prescripción se cuenta desde la fecha en que se consumó el delito (para el delito instantáneo) o desde el momento en que cesó la actividad delictuosa (en los demás casos). Como es de verse, la determinación de la prescripción de la acción penal requerirá previamente dilucidar la fecha en la que cesó la actividad delictiva o el momento de la consumación, lo que es competencia de la justicia ordinaria.</p> <p>10. En caso que la justicia penal hubiera determinado todos los elementos que permiten el cómputo del plazo de prescripción, podrá cuestionarse ante la justicia constitucional la prosecución de un proceso penal a pesar de que hubiera prescrito la acción penal. En caso contrario, la pretensión deberá ser rechazada. Así, este Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Exp. N. 0 5890-2006-PHC/TC, no obstante la relevancia constitucional que ostenta la prescripción de la acción penal, no pudo estimar la pretensión incoada toda vez que la justicia ordinaria no había establecido la fecha de consumación del ilícito, aspecto crucial para determinar el plazo de prescripción de la acción penal y que no puede ser dilucidado por la justicia constitucional(...)" (pp. 4)</p> <p>"12. En el caso de autos, el recurrente alega que habría vencido el plazo de prescripción del delito de tráfico de influencias por el cual fue condenado (Art. 400 del C.P.), a la fecha de expedición de la ejecutoria suprema cuestionada. Así, sostiene en su escrito de demanda (a fojas 41) que dicho plazo habría iniciado con fecha 25 de agosto de 2001; sin</p>

CUADRO DE LAS RESOLUCIONES PROCESADAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA PRESCRIPCIÓN

#	MATERIA	EXP.	FECHA	PRONUNC.	DECISIÓN	VOTO 1	VOTO 2	VOTO 3	FUNDAMENTOS
									<p>embargo, tal como se advierte de la ejecutoria cuestionada de fecha 9 de noviembre de 2007 (a fojas 194 de autos), la Sala Suprema emplazada no establece de manera categórica fecha alguna en la cual habría iniciado el plazo de prescripción. Asimismo el demandante cuestiona que la Sala Suprema haya considerado que el hecho delictivo que se le atribuye tendría naturaleza permanente, a pesar de que la doctrina penal es uniforme en señalar que el delito de tráfico de influencias es de naturaleza instantánea</p> <p>13. De lo señalado es posible concluir que el recurrente pretende que este Tribunal determine la fecha en la cual se habría cometido el hecho activo, así como si el tipo penal por el que fue condenado tiene naturaleza instantánea o permanente; pretensiones que, de acuerdo a los fundamentos expuestos precedentemente, no corresponde resolver a la justicia constitucional " (pp. 5).</p>

CUADRO DE LAS RESOLUCIONES PROCESADAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA PRESCRIPCIÓN

#	MATERIA	EXP.	FECHA	PRONUNC.	DECISIÓN	VOTO 1	VOTO 2	VOTO 3	FUNDAMENTOS
10		EXP. N° 174- 2009- PHC	lunes, 06 de abril de 2009	Infundada	unanimidad				<p>1. El objeto de la demanda es que se declare sin efecto la sentencia expedida por la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del Cusco de fecha 7 de julio del 2008, aduciendo que en el proceso penal seguido...por delito contra la familia en la modalidad de omisión de asistencia familiar no se cumplió con un requisito de procedibilidad para el inicio del proceso y porque la acción se encuentra prescrita." ...</p> <p>3. En la sentencia recaída en el N°3523-2008-HC/TC este Tribunal señaló que (...) "la prescripción de la acción penal tienen relevancia constitucional, toda vez que se encuentra vinculada con el contenido de derecho al plazo razonable del proceso, el cual forma parte del derecho fundamental del debido</p> <p>"5...a) el artículo 149° del Código Penal establece como único requisito para el inicio del proceso penal el incumplimiento de la obligación de prestar alimentos que fuera determinada en una resolución judicial; lo que en el caso de autos ha ocurrido con la sentencia de fecha 8 de setiembre de 1994...b) tanto la sentencia de fecha 19 de noviembre del 2007 como su confirmatoria de fecha 7 de julio del 2008, señalan las diversas notificaciones que se realizaron al demandante en el proceso civil; ...c) idea fojas 34 y 35 obran los requerimientos de pago de fechas 22 de setiembre de 1998 y del 12 de noviembre del 2004, respectivamente...e) respecto de la prescripción debe precisarse que al ser el delito de omisión de asistencia familiar un delito instantáneo de efectos permanentes , es válido que el computo del plazo de prescripción se realice desde el requerimiento de fecha 12 de noviembre del 2004. En consecuencia, es de aplicación, a contrario sensu, el artículo 2° del Código Procesal Constitucional" (pp. 3).</p>

CUADRO DE LAS RESOLUCIONES PROCESADAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA PRESCRIPCIÓN

#	MATERIA	EXP.	FECHA	PRONUNC.	DECISIÓN	VOTO 1	VOTO 2	VOTO 3	FUNDAMENTOS
11	VII. Prescripción para delitos con efectos instantáneos	EXP. N° 05922-2009-PHC/T C	lunes, 29 de noviembre de 2010	Fundada	unanimidad				<p>Delito por uso de documento falsificado (Art.427) “2...a) A que el delito por el cual el actor ha sido condenado es, de acuerdo al criterio esgrimido por la Sala suprema demandada, de naturaleza permanente, a pesar de que, según la dogmática penal, tendría más bien naturaleza instantánea b) A que la Sala Suprema expidió la ejecutoria cuestionada cuando ya había vencido en exceso el plazo de prescripción de la acción penal...” (pp. 2).</p> <p>“7. Sin embargo, es preciso indicar que, no obstante la relevancia constitucional de la prescripción penal, el cálculo de dicho lapso requiere en algunas ocasiones, la dilucidación de aspectos que no corresponde a la justicia constitucional. En efecto, conforme al artículo 82° del Código Penal el plazo de prescripción se cuenta desde la fecha en que se consumó el delito (para el delito instantáneo) o desde el momento en que cesó la actividad delictuosa (en los demás casos). Como es de verse, determinar la prescripción de la acción penal requerirá previamente establecer la fecha en que cesó la actividad delictiva o el momento de la consumación, lo que es competencia de la justicia ordinaria(...)” (pp.3).</p> <p>“12. Se observa de autos que el recurrente es procesado por el delito de falsificación de documentos sancionado con pena privativa de libertad máxima de 10 años conforme lo establece el artículo 427° del Código Penal.</p> <p>13. El actor se encuentra procesado por haber participado en la adulteración de una letra de cambio, título valor que fue entregado a los agraviados el 1 de marzo de 1995. Conforme se expresa en la resolución de fecha 15 de Julio de 2008 (a fojas 22 de autos), que confirma la desestimatoria de la excepción de prescripción, es la referida fecha la que se debe considerar como fecha de comisión del delito. Entonces el plazo prescriptorio recién empezaría a computarse desde el 1 de marzo de 1995, fecha en la cual se entregó la letra de cambio falsificada, por lo que en consonancia con el artículo 427° aludido, concordado con los artículos 80° y 83°, del mismo cuerpo normativo , el plazo ordinario sería de 10 años; y el extraordinario, de 15 años. Por lo expuesto, a la fecha los plazos señalados han transcurrido en exceso, habiéndose afectado el derecho al plazo razonable del recurrente” (pp.4).</p>

CUADRO DE LAS RESOLUCIONES PROCESADAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA PRESCRIPCIÓN

#	MATERIA	EXP.	FECHA	PRONUNC.	DECISIÓN	VOTO 1	VOTO 2	VOTO 3	FUNDAMENTOS
12		EXP. Nº 4900- 2006- PHC/T C	lunes, 05 de febrero de 2007	Infundada	unanimidad				“14...se desprende que se procesa al actor por haber utilizado una minuta de compraventa falsificada, que previamente había sido legalizada, para contestar la demanda de desalojo que el interpusieron Pedro Emiliano Vicente Vásquez y Alejandrina Flora Ibáñez viuda de Vicente, por su condición de precario, y así acreditar que es propietario. Ello indicaría que el hecho delictivo que fundamenta el proceso penal cuestionado hace referencia a la conducta contenida en el segundo párrafo del artículo 427º del Código Penal, que sanciona el uso de un documento falsificado como si fuese legítimo, y del cual pueda resultar algún perjuicio. Por otro lado, de conformidad con el artículo 83º, concordado con el artículo 427º segundo párrafo del CP, el plazo extraordinario de prescripción que corresponde a la conducta realizada por el agente es de 6 años.” 15. De allí que desde la fecha en que se utilizó la minuta supuestamente falsificada dentro del proceso de desalojo, que data el 20 de diciembre de 2001 (y cuya copia de la demanda obra de fojas 52 a 63 del expediente penal Nº 2002-23029), hasta la expedición de la sentencia confirmatoria...de fecha 16 de diciembre de 2005, no habían transcurrido los 6 años del plazo de prescripción que establece el ordenamiento penal” (pp. 5).
13		EXP. Nº 0331- 2007- PHC/T C	viernes, 30 de marzo de 2007	Infundada	unanimidad				Delito por uso de documento falsificado (Art.427) "8. De la copia de la sentencia condenatoria impuesta a la recurrente (que consta de fojas 47 a 54), su resolución confirmatoria (a fojas 57) así como del propio texto de la demanda, se advierte que el hecho por el cual el órgano jurisdiccional condena a la recurrente es la utilización de una constancia de trabajo falsificada dentro del concurso público convocado por Essalud, logrando obtener una vacante. En ese sentido, la conducta imputada se subsume en el tipo penal contenido en el artículo 427, segundo párrafo, del Código Penal, por lo que el acto delictivo recién se habría consumado en el momento de hacer uso del documento adulterado para poder obtener la plaza administrativa en convocatoria.

CUADRO DE LAS RESOLUCIONES PROCESADAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA PRESCRIPCIÓN

#	MATERIA	EXP.	FECHA	PRONUNC.	DECISIÓN	VOTO 1	VOTO 2	VOTO 3	FUNDAMENTOS
									<p>9. Entonces, el plazo prescriptorio recién empezaría a computarse desde el 14 de octubre de 2002, que es la fecha en la cual la demandante hizo uso de la constancia de trabajo para demostrar la suficiencia profesional que el puesto exigía. De allí que...el plazo ordinario sería de 4 años y el extraordinario, de 6 años, plazos que en ningún caso habían vencido al tiempo en que se dictó la sentencia condenatoria, de fecha 15 de mayo de 2006, y su confirmatoria del 26 de julio del mismo año. En consecuencia la demanda debe ser desestimada" (pp. 3).</p>
14	VIII. Prescripción para delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos en contra del patrimonio del Estado	EXP. N° 1805-2005-HC/TC	viernes, 29 de abril de 2005	Infundada	unanimidad				<p>"15.15. Sin embargo resulta importante resaltar que hay hechos criminales que perjudican a la sociedad en su conjunto, afectando el mundo social, político, económico y cultural de un país, y con ello nuestra democracia y al Estado de Derecho.</p> <p>16.16. Esta realidad ha acompañado nuestra historia como país, pues estamos de manera permanente viviendo y sufriendo un conjunto de hechos de criminalidad organizada en los que se afecta al patrimonio del Estado, que no es otro que el patrimonio de todos los peruanos. En un país que vive en extrema pobreza, con millones de niños y adolescentes en situación de miseria, no es posible aceptar la impunidad ni la corrupción, porque el accionar del Estado no los alcanzó, o porque se recurre a argucias legales para impedirlo.</p> <p>17.17. Es por ello que la Norma Suprema establece que "el plazo de prescripción se duplica en caso de delitos cometidos contra el patrimonio del Estado. La redacción del texto constitucional no es clara; pareciera que se refiere a todos los delitos cometidos en agravio del Estado, pero consideramos que no es así, ya que, por el principio de legalidad y seguridad jurídica, debe entenderse</p>

CUADRO DE LAS RESOLUCIONES PROCESADAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA PRESCRIPCIÓN

#	MATERIA	EXP.	FECHA	PRONUNC.	DECISIÓN	VOTO 1	VOTO 2	VOTO 3	FUNDAMENTOS
									<p>tal plazo de prescripción en el contexto de todo el artículo, y mejor aún, en el contexto de todo el capítulo que trata exclusivamente de los funcionarios y servidores públicos. 18.18. Este Supremo Colegiado considera que duplicar el plazo de prescripción en todos los delitos cometidos en agravio del Estado, sería atentar contra el principio de legalidad, de cuya interpretación pro homine se infiere que aplicarlo a todos los imputados a los que se procese es extender in <i>malam parte</i> lo que pudiera afectar a este, cuando por el contrario su aplicación debe ser in <i>bonam parte</i>.</p> <p>En consecuencia, dicha duplicidad sólo es aplicable en el caso de delitos cometidos contra el patrimonio del Estado de organismos sometidos por este, de conformidad con el artículo 41ª, in fine, de la Constitución.”(…) 20.20. Es decir, se imputa al recurrente el haber formado parte de una agrupación ilícita para delinquir por el hecho de haber contribuido a la concertación de los altos oficiales del Ejército Peruano con los efectivos de su institución integrantes del Grupo Colina, pues en su condición de comandante EP, Jefe de Economía del Servicio de Inteligencia habría autorizado beneficios económicos como gastos operativos y la remuneración de dichos efectivos, así como financiar sus “propias estrategias”, consistentes en seguimiento, detención, interrogación mediante tortura, aniquilamiento y desaparición física” (pp. 4 y 5).</p> <p>“21.21. Los delitos contra la tranquilidad pública se encuentran previstos en el título XIV del Código Penal, y la modalidad del presente caso está precisada en el segundo párrafo del artículo 317º, que establece “que cuando la organización esté destinada a cometer los delitos de genocidio, contra la seguridad y tranquilidad públicas [...], la pena será no menor de 8 años y no mayor de 35 años. 22.22[...].En tal sentido, si los hechos investigados ocurrieron el día 24 de junio de 1992, a la fecha han transcurrido 12 años y 10 meses de la presunta comisión del delito, de lo cual</p>

CUADRO DE LAS RESOLUCIONES PROCESADAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA PRESCRIPCIÓN

#	MATERIA	EXP.	FECHA	PRONUNC.	DECISIÓN	VOTO 1	VOTO 2	VOTO 3	FUNDAMENTOS
15		EPX. Nº 1279- 2010- PHC/T C	Lunes, 18 de octubre de 2010	Infundada	unanimidad				<p>se colige que no ha vencido el plazo ordinario de prescripción por delito de asociación ilícita para delinquir agravada. En consecuencia, la resolución judicial cuestionada que desestima la excepción de prescripción de la acción penal deducida por el favorecido no vulnera sus derechos fundamentales" (pp. 5 y 6).</p> <p>"5. En el caso, la justicia ordinaria ha determinado la fecha de comisión del ilícito. En efecto, de la resolución en cuestión, se advierte que, <i>"el día 28 de mayo de 1998, personal de la aduana de Pisco, intervino al camión remolque (...) transportando un total de 18 fardos de telas de procedencia boliviana, portando las pólizas sólo de 17 de ellas, careciendo el resto de documentación sustentatoria.</i> Asimismo, se señala claramente que "el juez de la causa abre instrucción... por la comisión del delito de contrabando (...) tipificándose el hecho en el artículo 3º de la Ley 26461, vigente en aquella oportunidad.</p> <p>6...se procederá a efectuar un análisis de fondo sobre la controversia, no sin antes recordar que este no sin antes recordar que este Tribunal ya ha precisado que <i>"La Ley Nº 26641, que dispone la suspensión de los plazos de prescrito de la acción penal para los reos contumaces, sólo puede ser de aplicación en caso la misma no resulte vulneratoria del derecho al plazo razonable del proceso (Exp. Nº 4959-2008-PHC/TC, fundamento 16)"</i>(pp.3).</p> <p>"(...) 10. En el caso concreto, en cuanto a la actividad del órgano jurisdiccional, no se advierte dilaciones causadas o atribuibles al órgano jurisdiccional. En cuanto se refiere a la complejidad del proceso, se advierte que este por sus características no reviste mayor complejidad (pues si bien son 3 coprocesados, se trata de un solo delito, que cuya probanza de los hechos no requiere de una investigación judicial especial). Estos dos primeros aspectos redundarían en contra de una del proceso. Sin embargo respecto a la</p>

CUADRO DE LAS RESOLUCIONES PROCESADAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA PRESCRIPCIÓN

#	MATERIA	EXP.	FECHA	PRONUNC.	DECISIÓN	VOTO 1	VOTO 2	VOTO 3	FUNDAMENTOS
									<p>actividad procesal del favorecido, se advierte que... v) ante la inconcurrencia del favorecido, mediante resolución de fecha 12 de noviembre de 2007, la Sala Superior emplazada dispuso revocar la comparecencia restringida, y reformándola decretó mandato de detención en su contra. Sobre esta base, en la misma resolución lo declararon reo contumaz, disponiendo la SUSPENSIÓN del plazo de la prescripción de la acción penal (...)" (pp. 2,3 y 4).</p> <p>"11. De lo expuesto, se advierte de manera objetiva que el inicio del juicio oral respecto del favorecido (programado para el 27 de mayo de 1999) no se ha podido llevar a cabo a la fecha, precisamente debido a la inconcurrencia de éste a la audiencia, habiendo sido reprogramada en varias oportunidades, lo que por inexorables razones lógicas ha generado el transcurso de más de 11 años, sin que el proceso penal concluya a la fecha, por lo que resulta válido afirmar que, en el presente caso, la dilación que ha sufrido el proceso es imputable al propio procesado; asimismo, la suspensión del plazo de la prescripción en virtud de la Ley N° 26641 no resulta vulneratoria del derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas y, por tanto, resulta aplicable al caso. En tal virtud, es en aplicación de dicha suspensión del plazo de prescripción de la acción penal que el plazo extraordinario (10 años y 6 meses) aún no ha vencido, por lo que no se configura la vulneración del plazo razonable del proceso (debido proceso) y la amenaza a la libertad individual carece de justificación constitucional, por lo que la pretensión debe ser desestimada" (pp. 4).</p>
16		EXP. N° 4352- 2009- PHC/T C	Jueves, 18 de marzo de 2010	Infundada	unanimidad				<p>"5. Cabe señalar que el artículo 1° de la Ley N° 26641 dispone la suspensión de los plazos de prescripción de la acción penal para los reos contumaces. No obstante ello, este Tribunal Constitucional estima necesario reiterar, conforme ha precisado anteriormente, que la suspensión de los plazos de prescripción, en aplicación de la referida Ley N° 26641,</p>

CUADRO DE LAS RESOLUCIONES PROCESADAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA PRESCRIPCIÓN

#	MATERIA	EXP.	FECHA	PRONUNC.	DECISIÓN	VOTO 1	VOTO 2	VOTO 3	FUNDAMENTOS
									<p>en caso de mantener vigente la acción penal ad infinitum, resulta vulneratoria del derecho al plazo razonable del proceso y, en tal sentido, inconstitucional su aplicación (...)” (pp. 2).</p> <p>“6. En este sentido, este Tribunal Constitucional ha precisado que para determinar la razonabilidad del plazo del proceso, deben tenerse en cuenta criterios como: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) actuación de los órganos judiciales [los cuales originalmente estuvieron determinados a la evaluación de la razonabilidad del plazo de la detención].</p> <p>7. En el presente caso, este Tribunal considera que la demanda debe ser desestimada pues del estudio de autos se desprende que la dilatación del proceso, que tiene como objeto hechos ocurridos en el año 2006, no se ha producido debido a una mora judicial (ello si se tiene en cuenta que se ha programado audiencia de lectura de sentencia en el mismo año que producidos los hechos imputados), sino que dicha demora se debe a que el favorecido, conforme consta de la resolución N° 22 (FOJAS 117), de fecha 27 de marzo de 2008, viene rehuyendo el proceso desde del año 2006, fecha en que se le programó audiencia de lectura de sentencia, a la cual no se presentó.</p> <p>8. De lo anteriormente expuesto se infiere que es la propia actividad del interesado (como consecuencia de su renuencia a presentarse ante el órgano judicial competente) la que ha dilatado hasta el momento la duración del proceso penal llevado en su contra, de lo que se desprende que no se ha vulnerado los derechos constitucionales alegados” (pp. 3).</p>
17		EXP. N° 2857-2009-PHC/TC	Jueves, 03 de diciembre de 2009	Improcedente	unanimidad				<p>“4. Que este Tribunal ha señalado que la suspensión de los plazos de prescripción por contumacia, en aplicación de la Ley N° 26641, podría resultar inconstitucional, en caso de mantenerse vigente la acción penal ad infinitum, por cuanto resultaría vulneratoria del derecho al plazo razonable del proceso [Cfr. Exp. N° 4959-2008-PHC/TC Caso Benedicto</p>

CUADRO DE LAS RESOLUCIONES PROCESADAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA PRESCRIPCIÓN

#	MATERIA	EXP.	FECHA	PRONUNC.	DECISIÓN	VOTO 1	VOTO 2	VOTO 3	FUNDAMENTOS
									<p>Nemesio Jiménez Bacca] En este sentido, este parámetro (el derecho al plazo razonable del proceso) permitirá cuestionar ante la justicia constitucional una resolución que disponga la suspensión del plazo de prescripción por contumacia.</p> <p>5. Que no obstante lo antes expresado, la vulneración del derecho al plazo razonable del proceso cesa cuando se produce la emisión de resolución que lo dé por concluido...Por tanto, este Tribunal considera que la presente demanda de hábeas corpus debe ser rechazada, pues conforme se ha expresado ut supra, con fecha 6 de agosto de 2008 se confirmó la sentencia condenatoria emitida en contra del favorecido, por lo que antes de la interposición de la demanda se habría producido el cese de la presunta agresión, consistente en la suspensión indefinida de los plazos de prescripción de la acción penal, presuntamente vulneratoria del derecho al plazo razonable del proceso; por lo tanto resulta de aplicación la causal de improcedencia (...)” (pp. 1 y 2).</p>
18		EXP. Nº 4959- 2008- PHC/T C	Martes, 01 de septiembre de 2009	Infundada	unanimidad				<p>“12. En el presente caso, tal como consta de autos, se imputa al recurrente el delito de difamación previsto en el tercer párrafo del artículo 132º del Código Penal, el cual tiene prevista una pena privativa de libertad de tres años, por lo que conforme con el artículo 80º del Código Penal, el plazo ordinario de prescripción sería de tres años, y el plazo extraordinario de prescripción, de cuatro años y medio, conforme al artículo 83º in fine del Código Penal(...)”(p.3).</p> <p>“14. Por otro lado cabe señalar que si bien la contabilización del plazo de prescripción desde el momento en que- conforme se ha determinado en el proceso penal- se cometió el hecho materia de querrela, el plazo extraordinario de prescripción habría vencido el 22 de diciembre de 2008, es preciso señalar que el artículo 1º de la Ley Nº 26641 dispone la suspensión de los plazos de prescripción de la acción penal para los reos contumaces. En efecto, conforme</p>

CUADRO DE LAS RESOLUCIONES PROCESADAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA PRESCRIPCIÓN

#	MATERIA	EXP.	FECHA	PRONUNC.	DECISIÓN	VOTO 1	VOTO 2	VOTO 3	FUNDAMENTOS
									<p>consta a fojas 127 de autos, con fecha 4 de octubre de 2007, se declaró contumaz al recurrente, disponiéndose, entre otras medidas, la suspensión de los plazos de prescripción hasta que el querellado sea puesto a disposición del juzgado o se presente de forma voluntaria [...]</p> <p>16. En este sentido este Tribunal Constitucional considera que la Ley N°26641, que dispone la suspensión de los plazos de prescripción de la acción penal para los reos contumaces, sólo puede ser de aplicación en caso la misma no resulte vulneratoria del derecho al plazo razonable del proceso [...]</p> <p>19. En el presente caso cabe señalar que en cuanto a la actividad del órgano jurisdiccional, del análisis de lo actuado, no se advierte dilaciones causadas por el propio órgano jurisdiccional. Por otro lado, respecto del criterio atinente a la complejidad del proceso se advierte que éste, por sus características no reviste mayor complejidad...Sin embargo, respecto de la actividad procesal del querellado se advierte que habiéndose fijado fecha de lectura de sentencia para el 23 de julio de 2007, la que no se pudo llevar acabo y ha tenido que ser reprogramado e varias oportunidades por la inconcurrencia del propio recurrente...por lo que puede afirmarse que en el presente caso la dilación que ha sufrido el proceso es imputable al propio procesado, por lo que no se configura una vulneración del plazo razonable del proceso" (pp. 3, 4 y 5).</p> <p>"22. Asimismo, del análisis efectuado es posible afirmar en el presente caso que la suspensión del plazo de prescripción en virtud de la ley N°26641 no resulta vulneratoria del derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas y en tal sentido resulta aplicable al caso. Y es en aplicación de dicha suspensión del plazo de prescripción de la acción penal que el referido plazo aun no ha vencido, por lo que la pretensión debe ser desestimada" (pp.5).</p>

CUADRO DE LAS RESOLUCIONES PROCESADAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA PRESCRIPCIÓN

#	MATERIA	EXP.	FECHA	PRONUNC.	DECISIÓN	VOTO 1	VOTO 2	VOTO 3	FUNDAMENTOS
18-A	SENTENCIA CÉSAR SHUTZ	EXP. Nº 03681- 2010- PHC/T C	Viernes, 20 de abril del 2012	Fundada	Mayoría	Urviola Hani	Beaumont Callirgos	Vergara Gotelli	<p>“FUNDAMENTOS</p> <p>I. La demanda tiene por finalidad que se declare inaplicables:</p> <p>i) la Resolución de fecha 21 de noviembre de 2006, emitida por la Sala Penal emplazada, que dispuso suspender los términos prescriptorios de la acción penal instaurada contra el favorecido por los delitos de asociación ilícita para delinquir peculado y tráfico de influencias; y ii) la Resolución de fecha 1 de octubre de 2001, emitida por el Juzgado Penal emplazado, en los extremos que dispone ampliar el auto de apertura de instrucción para incluir al favorecido como cómplice primario en el delito de peculado y como autor en el delito de asociación ilícita para delinquir” (pp. 2 y 3).</p> <p>“3. En los considerandos octavo y noveno de la Resolución de fecha 21 de noviembre de 2006, la Sala Penal emplazada expone las razones para suspender la prescripción de la acción penal, cuyo texto señala:</p> <p>OCTAVO: En atención al principio de favorabilidad y a la circunstancia de que el juzgamiento del acusado depende de la extradición, resulta legítimo optar por suspender el plazo prescriptorio de la acción penal conforme a lo previsto en el artículo 84 del Código Penal, pues el imputado, conocedor de las consecuencias de su conducta procesal, incurrió en la causal de contumacia legislada anteladamente, y por ende, consciente de su prohibición y efectos jurídicos.</p> <p>NOVENO: No está de más señalar que con esta opción, no se vulnera derecho constitucional reconocido al imputado, en la medida que no se restringe de manera arbitraria su libertad personal ni derechos conexos a ella; por lo que resulta razonable y compatible con la potestad punitiva del Estado, suspender el plazo prescriptorio de la acción penal, desde el momento de la declaratoria de contumacia que nos ocupa” (pp. 3 y 4).</p>

CUADRO DE LAS RESOLUCIONES PROCESADAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA PRESCRIPCIÓN

#	MATERIA	EXP.	FECHA	PRONUNC.	DECISIÓN	VOTO 1	VOTO 2	VOTO 3	FUNDAMENTOS
									<p>"5. La motivación esgrimida en la Resolución de fecha 21 de noviembre de 2006 no es conforme con el supuesto previsto en el artículo 84° del Código Penal, para que legítimamente se declare la suspensión de la prescripción de la acción penal. Este Tribunal considera que su motivación es arbitraria, por cuanto no justifica adecuadamente las razones por las cuales debe suspenderse el plazo de prescripción de la acción penal y porque la contumacia no puede ser entendida como otro procedimiento ajeno y distinto al proceso penal, para que pueda justificarse la suspensión de la prescripción de la acción penal. Tampoco resulta racional considerar que la contumacia en el caso del favorecido incida en la iniciación del proceso penal que se le sigue [...]"</p> <p>6. En tal escenario, este Tribunal considera que la Resolución de fecha 21 de noviembre de 2006 vulnera el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, en la medida que su argumentación no es acorde con lo prescrito en el artículo 84° del Código Penal, ya que ordenó -mecánicamente- la suspensión del plazo de prescripción de la acción penal sobre la base de una declaratoria de contumacia, sin tener presente que en la STC 04959-2008-PHC/TC se precisó que "la Ley N.º26641, que dispone la suspensión de los plazos de prescripción de la acción penal para los reos contumaces, sólo puede ser de aplicación en caso la misma no resulte vulneratoria del derecho al plazo razonable del proceso"(pp. 4 y 5).</p>
19		EXP. Nº 872- 2009- PHC/T C	Martes, 05 de mayo de 2009	Infundada	unanimidad				<p>" 1. El objeto de la demanda es que se deje sin efecto las resoluciones N° 89, de fecha 2 de octubre del 2007, y la N° 6, de fecha 22 de febrero del 2008, esta última resolución que confirmó la declaración de reo contumaz...que a su vez dispuso la suspensión del plazo de prescripción, y no se pronuncia respecto de la excepción de incompetencia planteada"[...]"</p>

CUADRO DE LAS RESOLUCIONES PROCESADAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA PRESCRIPCIÓN

#	MATERIA	EXP.	FECHA	PRONUNC.	DECISIÓN	VOTO 1	VOTO 2	VOTO 3	FUNDAMENTOS
									<p>4. El Tribunal precisó en el expediente N° 4303-2004-AA/TC que la notificación es un acto procesal cuyo cuestionamiento o anomalía no genera, <i>per se</i>, violación del derecho al debido proceso...para que ello ocurra resulta indispensable la constatación...de que con la falta de una debida notificación se ha visto afectado de modo real y concreto el derecho de defensa..." (pp.2).</p> <p>"5. [...]</p> <p>c) Si bien la Resolución N° 89 no le fue notificada en el nuevo domicilio procesal (fojas 91), la defensa del favorecido, con fecha 15 de octubre del 2007, sí presentó apelación contra ésta, señalando en su escrito de apelación que la misma fue notificada el 12 de octubre del 2007 (con lo que se subsana el vicio).</p> <p>d) A fojas 7 obra la Resolución 85, por la que se cita para el 2 de octubre del 2007 al favorecido para la lectura de sentencia, bajo apercibimiento de declararlo reo contumaz; y a fojas 17 obra la Resolución No 89, que haciendo efectivo el precitado apercibimiento declara al favorecido reo contumaz.</p> <p>e) Según se aprecia a fojas 17 y 22 de autos, las resoluciones cuestionadas expresan en forma clara y motivada las razones fácticas y jurídicas por las que se declaró reo contumaz al favorecido y se suspendió el plazo de prescripción" (pp. 3).</p>
20		EXP. N° 7451- 2005- PHC/T C	lunes, 17 de octubre de 2005	Infundada	unanimidad				<p>"9. En el presente caso, el recurrente sostiene que se ha configurado un supuesto de prescripción de la acción penal, lo que implica la imposibilidad de continuar con la tramitación del proceso que se le sigue por la comisión del delito de Falsedad Ideológica (...)</p> <p>11..Ahora bien, en anterior sentencia (Exp. 4118-2004-HC) este Colegiado ha señalado que existen causas</p>

CUADRO DE LAS RESOLUCIONES PROCESADAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA PRESCRIPCIÓN

#	MATERIA	EXP.	FECHA	PRONUNC.	DECISIÓN	VOTO 1	VOTO 2	VOTO 3	FUNDAMENTOS
									<p>establecidas en la ley que tienen por efecto interrumpir o suspender el plazo de prescripción de la acción penal. La interrupción y la suspensión del plazo se distinguen en el hecho de que producida la interrupción el plazo vuelve a contabilizarse. En cambio, la suspensión sólo detiene el cómputo del plazo y, superada la causal de suspensión, el plazo transcurrido se mantiene y se continúa contabilizando(...)"(pp.4).</p> <p>"12... Finalmente, tratándose de reos contumaces, los plazos de prescripción se interrumpen si es que existen evidencias irrefutables de que el acusado rehúye del proceso y hasta que se ponga a derecho, debiendo el juez declarar dicha suspensión de conformidad con el artículo 1º de la Ley N° 26641, que establece que: "Interprétese por la vía auténtica que, tratándose de contumaces, el principio de la función jurisdiccional de no ser condenado en ausencia, se aplica sin perjuicio de la interrupción de los términos prescriptorios, la misma que opera desde que existen evidencias irrefutables que el acusado rehúye del proceso y hasta que el mismo se ponga a derecho. El Juez encargado del proceso declara la condición de contumaz y la suspensión de la prescripción". En el caso de autos, la resolución judicial de fecha 22 de enero de 2004 (a fojas 34), declaró al demandante reo contumaz, situación que no ha variado... Por lo tanto y de acuerdo a lo señalado, este Colegiado considera que no existe vulneración del derecho fundamental a la libertad personal alegado por el demandante" (pp.5).</p>
21		EXP. N° 552- 2003- HC/TC	Jueves, 10 de abril de 2003	Infundada	unanimidad				<p>"1. No se evidencia que la declaración de reo contumaz y por lo tanto la detención de la accionante sean arbitrarias, ya que obedecen a una resolución judicial previa en la cual se le apercibía que de no presentarse a la audiencia sería declarada contumaz (fojas 24) y se ordenaría su captura, lo que está conforme a lo establecido por la Ley N° 26641; es decir, el</p>

CUADRO DE LAS RESOLUCIONES PROCESADAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA PRESCRIPCIÓN

#	MATERIA	EXP.	FECHA	PRONUNC.	DECISIÓN	VOTO 1	VOTO 2	VOTO 3	FUNDAMENTOS
									<p>mandato obedece a las causas fijadas por la ley y se ha efectuado con arreglo al procedimiento establecido en la misma.”</p> <p>2. La accionante no ha expresado ni ha hecho conocer a la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, que dispuso su internamiento, ni a este Tribunal Constitucional, el motivo que tuvo para no asistir a la audiencia y así quebrarla, ya que de haber sido un motivo razonable y urgente podría considerarse que tenía impedimento inevitable y así evitar el mandato de detención, teniendo presente que el delito por el cual se le acusa y juzga es grave” (pp.2).</p>
22		EXP. N°3711 -2011- PHC/T C	Miércoles, 19 de octubre de 2011	Infundada	unanimidad				<p>“3. El artículo 1 de la Ley N° 26641 dispone la suspensión de los plazos de prescripción de la acción penal para los reos contumaces. Respecto a la suspensión de los plazos de prescripción, en aplicación de la referida Ley N° 26641, el Tribunal Constitucional ha señalado que en caso de mantener vigente la acción penal ad infinitum resulta vulneradora del derecho al plazo razonable del proceso y, en tal sentido, inconstitucional su aplicación...”(pp.2).</p> <p>“4...para determinar la razonabilidad del plazo del proceso, deben tenerse en cuenta criterios como: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) actuación de los órganos judiciales...” (pp.2).</p> <p>“7. Por consiguiente la Resolución de fecha 16 de noviembre de 2009 (fojas 65) así como su confirmatoria, Resolución de fecha 19 de enero de 2011 a fojas 6 de autos, por la que se declaró reo contumaz al recurrente y suspendió el plazo de prescripción, no vulnera ninguno de los derechos invocados puesto que es la propia actividad del interesado (como consecuencia de su renuencia a presentarse ante el órgano judicial competente) la que ha dilatado hasta el momento la duración del proceso penal llevado en su contra” (pp. 2).</p>

CUADRO DE LAS RESOLUCIONES PROCESADAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA PRESCRIPCIÓN

#	MATERIA	EXP.	FECHA	PRONUNC.	DECISIÓN	VOTO 1	VOTO 2	VOTO 3	FUNDAMENTOS
23	IX. Caución económica para los Contumaces	EXP. Nº 0024-2010-PI/TC	lunes, 21 de marzo de 2011	Fundada	Mayoría	Álvarez Miranda	Vergara Gotelli	Calle Hayen	<p>"§5Contumacia en los procesos por delitos de lesa humanidad. Análisis constitucional del artículo 4.2 del Decreto Legislativo Nº1097</p> <p>"26. El artículo 4.2 del Decreto Legislativo Nº1097, dispone lo siguiente: "Con relación a los procesados declarados ausentes o contumaces, y que expresen su voluntad de ponerse a derecho, el juez puede variar la orden de detención para resolver su condición de ausente o contumaz, imponiendo caución económica si los ingresos del procesado lo permiten, la que podrá ser sustituida por una fianza personal natural o jurídica o la institución militar o policial a la que pertenece" (pp.17).</p> <p>"[...] 28. Se ha mencionado ya que la situación de contumacia es denotativa de un elemento objetivo que permite presumir, con un alto grado de razonabilidad, el peligro de fuga, y en cierta medida, también el riesgo de perturbación en la averiguación de la verdad. Se trata de una persona que teniendo certeza de su condición de imputada, se muestra reacia a someterse a los requerimientos formulados por el juez penal y a colaborar en el procesamiento. Desde luego, dicha conducta afecta al adecuado desarrollo del proceso penal y, por consiguiente, el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, reconocidos en el artículo 139º, inciso 3, de la Constitución.</p> <p>[...]30. No obstante ello, el artículo 4.2 del Decreto Legislativo Nº 1097, permite al juez penal subrogar el mandato de detención dictado contra un procesado contumaz- y por ende, sustentado en un dato que permite concluir razonable y objetivamente el peligro de fuga-por una medida de caución económica, sobre la base e la subjetiva manifestación de voluntad por parte del procesado "de ponerse a derecho", la cual, antes bien, se encuentra inequívocamente contradicha por su conducta. Se trata pues</p>

CUADRO DE LAS RESOLUCIONES PROCESADAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA PRESCRIPCIÓN

#	MATERIA	EXP.	FECHA	PRONUNC.	DECISIÓN	VOTO 1	VOTO 2	VOTO 3	FUNDAMENTOS
									de un permiso irracional que, a juicio de este Tribunal, sitúa en claro riesgo el éxito del proceso penal, afectando el derecho fundamental a la verdad, el debido proceso, la tutela jurisdiccional efectiva de a las víctimas..." (pp.18).
24	X. Plazo razonable y plazo de prescripción	EXP. Nº 0024-2010-PI/TC	lunes, 21 de marzo de 2011	Fundada	Mayoría	Álvarez Miranda	Vergara Gotelli	Calle Hayen	<p>"36... Decreto Legislativo Nº 1097 dispone, es que, en caso de que se venza el plazo máximo de instrucción seguida contra militares o procesados por los delitos enunciados en el artículo 2º del mismo Decreto Legislativo sin importar la etapa en la que se encuentre el proceso, deberá declararse extinguida la acción penal seguida en su contra..."37. El referido precepto parece haber pretendido tener sentido al amparo del derecho fundamental a que la duración del proceso no supere un plazo razonable (...)" (pp. 20).</p> <p>"38... Por ello, la determinación de la violación de la referida razonabilidad exige la consideración de una serie de factores estrecha e indisolublemente ligados a las particularidades de cada caso. Tales factores son: a) La complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado, y c) la conducta de las autoridades judiciales" (pp.21).</p> <p>"40. a) A pesar de que, en apariencia el precepto pretende proteger el contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental, a que el proceso penal no se extienda más allá de un plazo razonable, exige al juez penal dictar el sobreseimiento por la sola superación del plazo máximo de la instrucción. Ello tal como se ha referido, no guarda correspondencia con el contenido del aludido derecho-el cual se encuentra relacionado con la duración del proceso <i>inito</i> (...)" (pp. 22). "b)...el artículo exige que presentada una afectación del sistema de carácter meramente legal, se archive el procesamiento por una causa en la que se investigan sucesos y se busca determinar a los responsables por la muy grave afectación del cuadro más esencial de</p>

CUADRO DE LAS RESOLUCIONES PROCESADAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA PRESCRIPCIÓN

#	MATERIA	EXP.	FECHA	PRONUNC.	DECISIÓN	VOTO 1	VOTO 2	VOTO 3	FUNDAMENTOS
									<p>valores que reconoce la norma fundamental (...)” (pp. 23).</p> <p>“c) Por otra parte, por vía del precepto en cuestión, el plazo razonable ha pretendido ser fijado en abstracto, es decir, renunciando a toda valoración en función de las características de cada caso lo cual no guarda correspondencia con las características del derecho fundamental que supuestamente se pretende proteger, y viola el principio de independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional” (pp. 23).</p> <p>“e) (...)En otras palabras, aun cuando haya precluido la etapa instructiva o de investigación y el proceso se encuentre, por ejemplo, en la etapa del juicio oral o juzgamiento, la causal podría ser alegada y el sobreseimiento alegado. A juicio del Tribunal, ello supone una flagrante violación del artículo 103° de la Constitución que prohíbe salvo determinadas excepciones, la aplicación retroactiva de la ley, máxime si, tratándose de una regla procesal atenta contra el principio <i>tempus regit actum</i>” (pp. 23).</p>
25		EXP. N.º350 9- 2009- PHC/T C AÑO 2009	Lunes, 19 de octubre de 2009	Fundada	Unanimidad				<p>8. Por su parte el Tribunal Constitucional desarrollando dicho artículo ha precisado que: “...es un privilegio jurídico-político al cual tienen derecho ciertos funcionarios del Estado como: el Presidente de la República, los Congresistas, los Ministros de Estado, los miembros del Tribunal Constitucional, los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, los Vocales de la Corte Suprema, los Fiscales Supremos, el Defensor del Pueblo y el Contralor General de la República...” (STC. 0006-2003-AI/TC), a mayor abundamiento ha señalado que: “... El antejuicio político es una prerrogativa funcional de naturaleza formal consistente en que los altos funcionarios del Estado señalados en el artículo 99° de la Constitución no sean procesados penalmente por supuestos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, sin haber sido previamente despojados de la prerrogativa funcional en un procedimiento seguido con las</p>

CUADRO DE LAS RESOLUCIONES PROCESADAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA PRESCRIPCIÓN

#	MATERIA	EXP.	FECHA	PRONUNC.	DECISIÓN	VOTO 1	VOTO 2	VOTO 3	FUNDAMENTOS
									<p>debidas garantías procesales en el seno del Congreso de la República... (STC. 2364-2008-PHC/TC) [...]</p> <p>10. En este excuso de razonamiento, este Tribunal considera necesario establecer que la prerrogativa del antejuicio político o, si se quiere, el procedimiento de acusación constitucional, es una institución jurídico-política que se instaura por la comisión de un delito en el ejercicio de sus funciones, mas no está diseñado o configurado respecto de la comisión de delitos comunes(...)”(pp. 5).</p> <p>“11. [...] si tenemos en cuenta el auto ampliatorio de instrucción obrante a fojas 38, por medio del cual se resolvió ampliar la instrucción por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito, afirma que el evento fáctico que permite sostener la imputación formulada, está representada por el desbalance patrimonial del hoy recurrente cuando éste desempeñaba diversos cargos estratégicos en su condición de General del Ejército Peruano” (pp. 5 y 6).</p> <p>“12. Ello evidencia que la instrucción que se le siguió y el juicio oral que a la fecha de presentación del presente proceso constitucional sigue vigente, no ha sido consecuencia de su accionar como Ministro de Estado, por lo que no está comprendido dentro de los alcances de la prerrogativa del antejuicio político”. (pp.6)</p> <p>“20. Habiéndose planteado en el presente caso, la eventual violación del derecho al plazo razonable del proceso o, lo que es lo mismo, que éste no sufra dilaciones indebidas, la determinación de si se violó o no su contenido constitucionalmente protegido es un tema que solo puede obtenerse a partir del análisis de los siguientes criterios: a) la actividad procesal del interesado; b) la conducta de las autoridades judiciales, y c) la complejidad del asunto[...]” (pp. 8).</p>

CUADRO DE LAS RESOLUCIONES PROCESADAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA PRESCRIPCIÓN

#	MATERIA	EXP.	FECHA	PRONUNC.	DECISIÓN	VOTO 1	VOTO 2	VOTO 3	FUNDAMENTOS
									<p>“28...El hecho objetivo a partir del cual debe empezar a computarse el plazo dentro de este proceso es la apertura de investigación fiscal, por constituir el primer acto de carácter <i>cuasi jurisdiccional</i> por medio del cual el hoy recurrente tomó conocimiento de que el Estado había activado al aparato persecutor, es decir el cómputo del plazo de duración del proceso, data del 28 de noviembre del año 2000. En tal sentido, el presente proceso lleva a la fecha de expedición de la presente sentencia, un total de ocho años, diez meses y veinte días. Seguidamente se procederá a analizar dicho plazo (...)” (pp.10).</p> <p>“31...dicha desacumulación pone de manifiesto que por la naturaleza de las imputaciones ventiladas en el proceso seguido contra el recurrente era posible seguir varios procesos distintos con menos imputados, lo que en definitiva haría menos complejo el proceso penal. Sin embargo, que siendo ello posible, llama la atención que la referida desacumulación se haya dado recién a partir del 2007, cuando el proceso penal tenía ya seis años de iniciado. De modo tal que es posible advertir que en el presente caso, la gran cantidad de imputados, elemento que incidió en gran medida en la complejidad del proceso, en realidad constituye una imputable al propio órgano jurisdiccional.</p> <p>32. Finalmente, en cuanto a la actuación procesal del imputado, cabe señalar que de los actuados no se aprecia ninguna actuación dilatoria por parte del recurrente, lo que tampoco ha sido indicado en el referido informe expedido por la presidenta de la Sala Penal emplazada. En este sentido, se advierte que la excesiva duración del proceso no puede ser imputada al procesado, sino más bien ha sido consecuencia de una tramitación negligente del proceso por parte del órgano jurisdiccional...” (pp. 11).</p>

CUADRO DE LAS RESOLUCIONES PROCESADAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA PRESCRIPCIÓN

#	MATERIA	EXP.	FECHA	PRONUNC.	DECISIÓN	VOTO 1	VOTO 2	VOTO 3	FUNDAMENTOS
26	XI. El plazo de prescripción de la acción penal deja de correr con sentencia firme	EXP. Nº 6714- 2006- PHC/T C	viernes, 23 de marzo de 2007	Fundada	Unanimidad				<p>“5. De los actuados en el proceso penal materia de la presente demanda se tiene que: a) con fecha 25 de marzo de 1999, a fojas 77, la Policía Judicial de Lambayeque formula atestado Nº 130-DIVPOJ.SPMP.CH, dando cuenta al representante del Ministerio Público de la presunta comisión del delito de estafa por parte de los beneficiarios, citando como fecha de comisión del ilícito el 26 de noviembre de 1996...e) con fecha 16 de junio de 2004 (fojas 135), el Noveno Juzgado Especializado en lo Penal de Chiclayo condena a los beneficiarios a tres años de pena privativa de libertad suspendida por delito de estafa, consignando como fecha de comisión del delito la fecha suscripción de la escritura pública, es decir 26 de noviembre de 1996(...)</p> <p>[...]7...En este orden de ideas se tiene de las instrumentales obrantes en autos que la extinción de la acción penal por prescripción en el presente caso no habría operado si se asume que el plazo prescriptorio se interrumpe con la sentencia que condenó a los beneficiarios en primera instancia; y de otro lado, que ello sí habría ocurrido si se parte de la premisa de que la prescripción puede operar- debiendo ser declarada de oficio por el juez ordinario-hasta la fecha en que una sentencia condenatoria es declarada firme por el superior</p> <p>8...los artículos 293 y 330 del Código de Procedimientos Penales disponen que la sentencia condenatoria se cumplirá así se interponga recurso de nulidad, debe entenderse dicha disposición como la facultad que otorga la ley al juez penal para disponer la ejecución de la sentencia, sin que esto impida que se apliquen otras consecuencias jurídicas ajenas a la pena impuesta, como la prescripción. Esto, partiendo de una interpretación pro homine, lleva a concluir que resulta arbitrario asumir que un mandato de ejecución como el contenido en el artículo 293ª del Código adjetivo implique</p>

CUADRO DE LAS RESOLUCIONES PROCESADAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA PRESCRIPCIÓN

#	MATERIA	EXP.	FECHA	PRONUNC.	DECISIÓN	VOTO 1	VOTO 2	VOTO 3	FUNDAMENTOS
									también un supuesto de extinción del plazo prescriptorio de la acción penal; así, en un caso en el que, por ejemplo, el superior en grado demore años en resolver un recurso de nulidad, resulta irrazonable concluir que el justiciable deba cumplir una pena que se ha extinguido por el paso del tiempo, aun cuando dicha extinción se haya producido luego de emitida la sentencia en primera instancia... Por ende, este Tribunal considera que en la prescripción de la acción penal, la presunta responsabilidad criminal del procesado se extingue cuando no haya sido declarada previamente por una sentencia condenatoria
									9. En ese sentido se tiene que en el presente caso se ha producido la prescripción de la acción penal y, por ende, la extinción de la potestad persecutoria del Estado, puesto que desde la fecha de comisión del delito, esto es, el 26 de noviembre de 1996, a la fecha en que se emitió la resolución cuestionada que consintió la sentencia dictada en primera instancia, es decir, 12 de abril de 2006, han transcurrido más de los 9 años que constituyen el plazo máximo extraordinario de prescripción para este delito(...)" (pp.4).
27	XII. Prescripción extraordinaria para faltas	EXP. N° 02203-2008-PHC/T C	viernes, 12 de septiembre de 2008	Improcedente	unanimidad				<p>Análisis del caso</p> <p>"10. En el presente caso, los recurrentes alegan que se habría vencido el plazo prescriptorio previsto para la falta que habían cometido, toda vez que, de acuerdo a su criterio, es de aplicación lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley N° 27939, que modifica el artículo 440 del Código Penal, estableciendo que las faltas prescriben al año. Sin embargo, de autos se advierte que el órgano jurisdiccional emplazado ha confirmado la condena impuesta contra los demandantes, en razón de que el plazo de prescripción aún no había vencido por aplicación de la interpretación de la prescripción aún no había vencido por aplicación de la interpretación de la prescripción prevista en el artículo 83 del Código Penal.</p>

CUADRO DE LAS RESOLUCIONES PROCESADAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA PRESCRIPCIÓN

#	MATERIA	EXP.	FECHA	PRONUNC.	DECISIÓN	VOTO 1	VOTO 2	VOTO 3	FUNDAMENTOS
									11. De ello se infiere que si bien la prescripción de la acción tienen relevancia constitucional, lo controvertido en la presente demanda de hábeas corpus consiste en dilucidar si las reglas de prescripción previstas en la parte general del Código Penal resultan aplicables a las faltas (mediante una interpretación sistemática), o si, por el contrario, para el caso de las faltas únicamente opera el artículo 440 del Código Penal, sin referencia alguna a las normas generales de prescripción de la acción penal, aspecto que no corresponde ser meritado por la justicia constitucional, por lo que la presente demanda debe ser declarada improcedente en aplicación del artículo 5 inciso 1 del Código Procesal Constitucional, que establece que: "No proceden los procesos constitucionales cuándo: 1. Los hechos y el petitio no están referidos directamente referidos de manera directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado" (pp. 3 y 4).
28	XIII. Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad	EXP. N°00018-2009-PI/TC AÑO 2010	Martes, 23 de marzo de 2010	improcedente	Mayoría	Vergara Gotelli	Calle Hayen		<p>"2 (...) Que el accionante señala que la Resolución Legislativa N° 27998, que aprueba la adhesión del Perú a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad sido aprobada contraviniendo el <i>segundo párrafo</i> del artículo 57° y el artículo 2 6° de la Constitución que establecen que, si un tratado afecta disposiciones constitucionales, debe ser aprobado por el mismo procedimiento que rige para la reforma de la Constitución antes de ser ratificado por el Presidente de la República"(pp. 1 y 2).</p> <p>"5. Que el artículo 200°, inciso 4 de la Carta Fundamental señala expresamente que la acción de inconstitucionalidad procede contra las normas que tienen rango de ley... Una interpretación literal de esta disposición constitucional podría generar la conclusión de que las resoluciones legislativas-</p>

CUADRO DE LAS RESOLUCIONES PROCESADAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA PRESCRIPCIÓN

#	MATERIA	EXP.	FECHA	PRONUNC.	DECISIÓN	VOTO 1	VOTO 2	VOTO 3	FUNDAMENTOS
									<p>expedidas por el Congreso no tendrían rango de ley, y que por ello no podrían ser impugnadas a través de un proceso de inconstitucionalidad. Sobre el particular, cabe señalar que este Tribunal en anterior oportunidad ya ha precisado que las resoluciones legislativas tienen rango de ley sin embargo para el caso concreto resulta necesario establecer si es que éstas, además, tienen fuerza de ley” (pp. 2).</p> <p>“8(...) En el caso peruano, la regla es que los tratados deben ser previamente aprobados por el Congreso antes de su ratificación por el Presidente de la República (artículo 56° de la Constitución), con la excepción del tratado administrativo (artículo 57° de la Constitución). Bajo tal perspectiva, se entiende que la aprobación de un tratado-ley por el Congreso constituye <i>solo</i> un acto parlamentario del proceso complejo de celebración de un tratado (...)</p> <p>9. [...]Sobre la base de todo lo antes expuesto se aprecia de manera objetiva que no todos los actos parlamentarios que se aprueban mediante resoluciones legislativas tienen fuerza de ley (en su versión activo), siendo una de ellas la resolución legislativa que aprueba los tratados, conforme al artículo 56° de la Constitución” (pp. 3 y 4).</p> <p>“11. Que ahora bien, dado que la Resolución Legislativa N° 27998 carece del requisito de fuerza de ley, y además dada la relación indisoluble entre ésta y el tratado, este Tribunal advierte que lo que en puridad se cuestiona es el <u>instrumento internacional (tratado)</u>. Esta afirmación además se encuentra sustentada en la propia demanda, cuando expresamente se señala que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de lesa Humanidad afecta el artículo 139°, inciso 13, de la Constitución de 1993, por cuanto excluye la institución de la prescripción de la acción penal para los delitos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad (inconstitucionalidad por el</p>

CUADRO DE LAS RESOLUCIONES PROCESADAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA PRESCRIPCIÓN

#	MATERIA	EXP.	FECHA	PRONUNC.	DECISIÓN	VOTO 1	VOTO 2	VOTO 3	FUNDAMENTOS
									fondo) [...] 13. Que en el caso, si bien no se está ante acto consumado de fraude a la ley, si se advierte un acto con un objetivo fraudulento. Y la intención fraudulenta se concretiza en la interposición de la demanda de inconstitucionalidad contra la Resolución Legislativa que aprueba la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad sobre la base de lo dispuesto en el artículo 100° del Código Procesal Constitucional (norma cobertura), cuyo plazo de prescripción es de 6 años, con el evidente propósito de conseguir un resultado contrario a lo que la excepción del propio artículo 100° del Código Procesal Constitucional no lo permite (norma defraudada), pues señala que en el caso de los tratados el plazo de prescripción es de 6 meses” (pp. 4 y 5). “15(...) Así pues, advirtiéndose que la demanda de inconstitucionalidad ha sido interpuesta con fecha 5 de junio de 2009, se tiene que el plazo prescriptivo de seis (6) meses para solicitar la inconstitucionalidad del tratado antes mencionado ha vencido en demasía, habiéndose producido la prescripción de la pretensión” (pp. 6).
29		EXP. N° 03173- 2008- PHC/T C	Jueves, 11 de diciembre de 2008	Improcedente	Mayoría	Beaumont Callirgos	Landa Arroyo		“6. Que al amparo del referido fundamento 40, el Instituto de Defensa Legal interpuso Recurso de Agravio Constitucional. Como no se le concedió este medio impugnatorio, recurrió ante el Tribunal Constitucional, en vía de recurso de queja, argumentando la supuesta violación de un precedente vinculante: “De conformidad con las nuevas reglas fijadas por el TC en la sentencia recaída en el Exp. N° 04853-2004-AAJ/TC], fundamento jurídico 40[...], procede Recurso de Agravio Constitucional excepcional contra aquellas resoluciones “estimatorias” de segundo grado expedidas en procesos constitucionales, cuando estas violen o desconozcan precedentes vinculantes” (fojas 2 y 3 del escrito)” (pp. 3).

CUADRO DE LAS RESOLUCIONES PROCESADAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA PRESCRIPCIÓN

#	MATERIA	EXP.	FECHA	PRONUNC.	DECISIÓN	VOTO 1	VOTO 2	VOTO 3	FUNDAMENTOS
									<p>“7. (iii). Invocaron como precedentes vinculantes sentencias del Tribunal Constitucional que sólo constituían doctrina jurisprudencial (STC 2663-2003-HC/TC, Tipología del Hábeas Corpus; y STC 2488-2002-HC/TC, sobre el derecho a la verdad). (iv) La invocación mecánica de doctrina jurisprudencial como si se tratase de precedentes vinculantes, tenía como propósito obviar la interposición de una demanda de amparo para enervar la resolución de segundo grado que declara fundada la demanda de hábeas corpus de don Teodorico Bernabé Montoya. Para ello decidieron utilizar la vía más expeditiva del Recurso de Agravio Constitucional, que el referido fundamento 40 sólo habilitaba en casos de trasgresión de un precedente vinculante. Por tanto esta actividad procesal constituye una abierta festinación de trámites que no se condice con la Constitución, el Código Procesal Constitucional y el precedente vinculante invocado. Es una clara violación de la probidad procesal en perjuicio del derecho al debido proceso del demandante, tanto la actuación procesal de las partes, del <i>amicus curiae</i> y la del juez deben constituir siempre una afirmación de los valores, principios y derechos que informan el ordenamiento constitucional, en el cual el debido proceso goza de una importancia capital para la existencia de un verdadero Estado democrático y constitucional” (pp. 3).</p> <p>“8. Que por ello, este Tribunal considera que la sentencia de segunda instancia del presente proceso de hábeas corpus tiene la calidad de cosa juzgada (...)” (pp.4).</p>

CUADRO DE LAS RESOLUCIONES PROCESADAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA PRESCRIPCIÓN

#	MATERIA	EXP.	FECHA	PRONUNC.	DECISIÓN	VOTO 1	VOTO 2	VOTO 3	FUNDAMENTOS
30	XIV. Retroactividad Del Convenio Lesas Humanidad	EXP. Nº 0024- 2010- PI/TC	lunes, 21 de marzo de 2011	Fundada	Mayoría	Álvarez Miranda	Vergara Gotelli	Calle Hayen	<p>"42. La segunda parte del artículo 6.4 del Decreto Legislativo Nº 1097, establece que las reglas de prescripción de la acción penal, en los procesos penales seguidos contra militares y policías acusados de la comisión de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud previstos en el Código Penal de 1991, se rigen por "la ley penal aplicable a la fecha de ocurrencia de los hechos a investigar. Por su parte, la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1097 establece lo siguiente: Para efectos procesales, precisase que la Convención de Lesas Humanidad, aprobada por Resolución Legislativa Nº 27998, surte efectos y rige para el Perú a partir del 09 de noviembre de 2003, conforme a la declaración realizada por el Perú a partir del 09 de noviembre de 2003 [...] (pp. 2 y 4).</p> <p>"[...]53. La esencial ontología de los derechos humanos afectados por los crímenes de lesa humanidad, y las graves condiciones y circunstancias que caracterizan la realización de estos, lleva a considerar que, en estos casos, la necesidad de la averiguación de la verdad, así como el procesamiento y posterior sanción de los responsables, constituye una norma de jus cogens, es decir, una norma imperativa de Derecho Internacional susceptible de aplicarse erga omnes y que no admite pacto en contrario(...)</p> <p>54.[...]el artículo 15º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece lo siguiente:</p> <p>1. "Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional(...)</p> <p>2.Nada de lo dispuesto en este artículo se opondrá al juicio ni a la condena de una persona por actos u omisiones que, en el momento de cometerse, fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional"</p> <p>Como se aprecia, el precepto alude claramente a la posibilidad de procesar y condenar penalmente por la</p>

CUADRO DE LAS RESOLUCIONES PROCESADAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA PRESCRIPCIÓN

#	MATERIA	EXP.	FECHA	PRONUNC.	DECISIÓN	VOTO 1	VOTO 2	VOTO 3	FUNDAMENTOS
									comisión de un acto, a pesar de no encontrarse previamente prohibido y penado por el Derecho escrito, siempre que tal acto resulte delictivo “según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional...” “62...debe quedar claro que la regla de imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, y consecuentemente, el mandato de su persecución, con prescendencia de la fecha en que aquellos se hayan cometido, no tiene vigencia en el ordenamiento jurídico peruano como consecuencia de la entrada en vigor de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad(9 de noviembre de 2003), sino que surge en virtud de una norma imperativa de derecho internacional general ...En definitiva, aunque la pena aplicable a la conducta típica es la que se encontraba vigente en el tiempo en que ella se produjo (a menos que sobrevenga una más favorable), si tal conducta reviste las características de un crimen de lesa humanidad, por el mandato constitucional e internacional, la acción penal susceptible de entablarse contra ella, con prescendencia de la fecha en que se haya cometido, es imprescriptible(...)” (pp. 32 y 33).
31	XV. Las causales de extinción nulas no extinguen ni la acción ni la pena	EPX. Nº 00021- 2010- PHC/T C	Jueves, 21 de octubre de 2010	Infundada	unanimidad				<p>“2. La norma fundamental, en su artículo 139º, señala los principios y derechos de la función jurisdiccional, precisando en el inciso 13) “la prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada. La amnistía, el indulto, el sobreseimiento definitivo y la prescripción producen los efectos de cosa juzgada”. La norma precisa, taxativamente, cuales son las instituciones que producen los efectos de cosa juzgada” (pp. 3).</p> <p>“7. En el presente caso, revisados los documentos que obran a fojas 22 a la 52, este Tribunal aprecia que en el proceso realizado en el fuero militar y en el proceso penal iniciado en el fuero penal ordinaria se imputó al recurrente y</p>

CUADRO DE LAS RESOLUCIONES PROCESADAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA PRESCRIPCIÓN

#	MATERIA	EXP.	FECHA	PRONUNC.	DECISIÓN	VOTO 1	VOTO 2	VOTO 3	FUNDAMENTOS
									<p>otros los delitos de secuestro, desaparición de personas y homicidio calificado. Sin embargo, conforme a lo señalado en el fundamento 4, habiendo el Tribunal Constitucional determinado que no resulta vulneratorio del ne bis in idem el doble juzgamiento si el primer proceso se llevo a cabo ante un juez incompetente ratione materiae, en el presente caso, en tanto el fuero militar era incompetente para conocer de los delitos de homicidio, secuestro y desaparición forzada se le imputa al recurrente, el nuevo juzgamiento ante el fuero común por los hechos constituye ninguna vulneración a los derechos invocados.</p> <p>8. El Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en Expediente N.º 679-2005-PA/TC, concluyó que...las leyes de amnistía N.º 79 y N.º 26492 son nulas y carecen, ab initio, de efectos jurídicos. Por tanto, también son nulas las resoluciones judiciales dictadas con el propósito de garantizar la impunidad de la violación de derechos humanos cometidas por integrantes del denominado Grupo Colina. Condición de resoluciones judiciales nulas, ellas no dan lugar a la configuración de la cosa juzgada constitucional garantizada para los artículos 102, inciso 6 y el artículo 139, inciso 13, de la Constitución, en la medida en que no existe conformidad con el orden objetivo de valores, con los principios constitucionales y con los derechos fundamentales que la Constitución consagra” (pp. 4 y 5).</p> <p>“9. En consecuencia, es de aplicación, a contrario sensu, el artículo 2.0 del Código Procesal Constitucional...Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional...HA RESUELTO... Declarar INFUNDADA la demanda porque no se ha acreditado la vulneración de los derechos a la libertad individual, al debido proceso y del principio de cosa juzgada” (pp.5).</p>

CUADRO DE LAS RESOLUCIONES PROCESADAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA PRESCRIPCIÓN

#	MATERIA	EXP.	FECHA	PRONUNC.	DECISIÓN	VOTO 1	VOTO 2	VOTO 3	FUNDAMENTOS
32		EPX. Nº 679- 2005- PA/TC	Viernes, 02 de marzo de 2007	Improcedente	unanimidad				<p>"7. El demandante sostiene que el órgano emplazado dejó sin efecto la resolución de archivo definitivo de la Causa Nº 157-V -93 (La Cantuta) dictada al amparo de las leyes de amnistía Nº. 26479 y 26492. Recuerda que en base a la Constitución y al Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra, relativo a conflictos armados sin carácter internacional, el Congreso dictó las referidas leyes, (...) concediendo el Derecho de Amnistía a las personas civiles, militares o policías comprendidos o simplemente relacionados en la aludida lucha interna o conflicto armado sin carácter internacional" (pp.4).</p> <p>"13. El artículo 139, inciso 13, de la Ley Fundamental reconoce el derecho a la cosa juzgada. Según este: Son principios y derechos de la función jurisdiccional:(...)</p> <p>13. La prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada. La amnistía, el indulto, el sobreseimiento definitivo y la prescripción producen los efectos de cosa juzgada" (pp.6).</p> <p>"16. Es evidente que el derecho a la cosa juzgada también se configura a partir de resoluciones judiciales dictadas en aplicación de una ley de amnistía, según el artículo 139, inciso 13, de la Constitución. Para ello, sin embargo, es preciso que la ley de amnistía no solo deba ser válida sino también constitucionalmente legítima [...]</p> <p>17. Un criterio semejante fue expuesto por el Tribunal en la STC 4587-2004-ANTC, donde se invocó el carácter de cosa juzgada de una resolución judicial dictada por un tribunal militar que no era competente <i>ratione materiae</i>. En dicho caso, este Tribunal expuso que una resolución judicial emanada de un proceso seguido ante un órgano jurisdiccional incompetente no formaba parte del ámbito normativo del</p>

CUADRO DE LAS RESOLUCIONES PROCESADAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA PRESCRIPCIÓN

#	MATERIA	EXP.	FECHA	PRONUNC.	DECISIÓN	VOTO 1	VOTO 2	VOTO 3	FUNDAMENTOS
									<p>derecho fundamental a la cosa juzgada y a la prohibición del ne bis in ídem” (pp.6 y 7).</p> <p>“33. En el ámbito del sistema regional de protección de los derechos humanos, la Corte Interamericana ha destacado que: “Son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos” (pp.11 y 12).</p> <p>“58. Siendo ello así, cabe señalar que si bien el Poder Legislativo tiene la atribución de ejercer el derecho de amnistiar, es decir olvidar el delito cometido por determinadas personas, lo que produce los efectos de la cosa juzgada, según los artículos 102, inciso 6, y 139, inciso 13, de la Constitución, ello no significa que el Congreso pueda cobijar en las leyes de amnistía a delitos de lesa humanidad - como el secuestro, tortura y ejecución sumaria de personas, por ejemplo-; por cuanto la legitimidad de la Constitución reposa en la defensa de la persona humana y en el respeto de su dignidad, como fin supremo de la sociedad y del Estado, según el artículo 1 de la Constitución”(pp.18 y19).</p> <p>“60. El Tribunal considera que las leyes de amnistía N° 26479 y N° 26492 son nulas y carecen, ab initio, de efectos jurídicos. Por tanto, también son nulas las resoluciones judiciales dictadas con el propósito de garantizar la impunidad de la violación de derechos humanos cometida por los integrantes del denominado Grupo Colina. En su condición de resoluciones judiciales nulas, ellas no dan lugar a la configuración de la cosa juzgada constitucional garantizada por los artículos 102, inciso 6 y el artículo 139,</p>

CUADRO DE LAS RESOLUCIONES PROCESADAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA PRESCRIPCIÓN

#	MATERIA	EXP.	FECHA	PRONUNC.	DECISIÓN	VOTO 1	VOTO 2	VOTO 3	FUNDAMENTOS
									inciso 13, de la Constitución, en la medida en que no existe conformidad con el orden objetivo de valores, con los principios constitucionales y con los derechos fundamentales que la Constitución consagra" (pp.19). Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional...HA RESUELTO... Declarar INFUNDADA la demanda.
33		EPX. Nº 4587- 2004- AA/TC	Miércoles, 29 de noviembre de 2005	Improcedente	Mayoría	Vergara Gotelli			"28. El recurrente sostiene que tras culminar la etapa de investigación del proceso penal abierto por los hechos conocidos como "Barrios Altos", la Sala de Guerra del Consejo Supremo de Justicia Militar declaró el sobreseimiento definitivo de los actuados al no encontrarse responsabilidad penal. Recuerda que dicha resolución fue confirmada por la Sala Revisora del Consejo Supremo de Justicia Militar, mediante resolución de 26 de julio de 1995, la misma que, por ese hecho, considera que: "(...) alcanzó el carácter de cosa juzgada y por tanto estando a la cantidad de la cosa juzgada y el principio de seguridad jurídica es inamovible" (pp.8). "49(...) En ese sentido, sostiene que, en la medida que la resolución de sobreseimiento no se sustentó en la aplicación de las leyes de amnistía N.º 26479 y 26492, la Sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Barrios Altos, de 14 de marzo de 2001, resulta, por así decirlo, inaplicable a su caso. 51. A efectos de esclarecer si en el caso se lesionó el derecho del recurrente a no ser enjuiciado dos o más veces por un mismo hecho, este Tribunal debe advertir que, pese a que se ha alegado que las resoluciones que sobreyeron la causa penal que se le siguiera al recurrente ante los tribunales militares no se dictaron en aplicación de las leyes de amnistía N.º 26479 y 26492, sino como consecuencia de no haberse encontrado responsabilidad penal, sin embargo, éstas no se han adjuntado como prueba anexa a la demanda por el demandante". "52. Tal hecho, si bien impide que este Tribunal pueda emitir

CUADRO DE LAS RESOLUCIONES PROCESADAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA PRESCRIPCIÓN

#	MATERIA	EXP.	FECHA	PRONUNC.	DECISIÓN	VOTO 1	VOTO 2	VOTO 3	FUNDAMENTOS
									<p>un pronunciamiento sobre la veracidad de tales afirmaciones, sin embargo, no restringe la posibilidad de que pueda emitir un pronunciamiento sobre el fondo, habida cuenta que, con la demanda se ha adjuntado la resolución expedida por la Sala Revisora del Consejo Supremo de Justicia Militar, de fecha 4 de junio de 2001, en cuya parte resolutive se declara: "(...) NULAS las resoluciones de sobreseimiento expedidas por la Sala de Guerra del Consejo Supremo de Justicia Militar, de fecha veintuno de octubre de mil novecientos noventa y cuatro y seis de julio de mil noventa y cinco [sic] (...)”</p> <p>“60. En mérito de ello, la Corte Interamericana decidió por unanimidad: [...] 5. Declarar que el Estado del Perú debe investigar los hechos para determinar las personas responsables de las violaciones de los derechos humanos a los que se ha hecho referencia en esta Sentencia, así como divulgar públicamente los resultados de dicha investigación y sancionar a los responsables. [Negritas añadidas]...” (pp.15 y 16).</p> <p>“63. En mérito de ello, el Tribunal Constitucional considera que la obligación del Estado de investigar los hechos y sancionar a los responsables por la violación de los derechos humanos declarados en la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no sólo comprende la nulidad de aquellos procesos donde se hubiese aplicado las leyes de amnistía N.º 26479 y N.º 26492, tras haberse declarado que dichas leyes no tienen efectos jurídicos, sino también toda práctica destinada a impedir la investigación y sanción por la violación de los derechos a la vida e integridad personal, entre las cuales se encuentran las resoluciones de sobreseimiento definitivo como las que se dictaron a favor del recurrente” (pp.17).</p> <p>“86. Tales elementos objetivos evidencian que el proceso penal militar que originalmente se siguió contra el recurrente era nulo y, por tanto, que carecía de efectos jurídicos las resoluciones que en su seno se hubieran dictado, entre ellas,</p>

CUADRO DE LAS RESOLUCIONES PROCESADAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA PRESCRIPCIÓN

#	MATERIA	EXP.	FECHA	PRONUNC.	DECISIÓN	VOTO 1	VOTO 2	VOTO 3	FUNDAMENTOS
									la que declaró el sobreseimiento de dicho proceso. 87. Por ello, en la medida que dicha resolución de sobreseimiento carece de efectos jurídicos, el Tribunal Constitucional considera que la iniciación de un nuevo proceso penal, esta vez ante los órganos de la jurisdicción ordinaria, no viola el contenido constitucionalmente protegido del derecho a no ser enjuiciado dos veces por el mismo hecho y, por tanto, el derecho a la cosa juzgada” (pp. 20).
34	XVI. Suspensión (“disimulada”) por nulidad de causal de extinción diferente a la prescripción y por otro proceso en el fuero privativo militar declarado nulo	EXP. N° 03693-2008-PHC/TC	jueves, 05 de mayo de 2011	Infundada	unanimidad				<p>”8. Conforme consta de autos, los hechos que son materia del proceso penal que se cuestiona tuvieron lugar en el marco de una incursión armada de la patrulla Lince-7 del Ejército peruano el 14 de agosto de 1985 en la localidad de Lloclopampa, distrito de Accomarca, Ayacucho [...]” (pp.3).</p> <p>”9. Tales hechos, como es de público conocimiento, fueron juzgados, ante el Fuero Militar, que absolvió a todos los encausados de homicidio calificado [...]”</p> <p>12. Se advierte, entonces, que desde la ocurrencia de los hechos hasta enero de 2002, el propio Estado había instaurado un proceso ante un órgano jurisdiccional abiertamente incompetente que demostró su intención de encubrir los hechos criminosos, permisión que fue consumada luego con la promulgación de leyes de amnistía destinadas a impedir toda persecución penal. Ello ya ha sido advertido por este Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente N° 018-2009-PHC/TC. [...]”</p> <p>14. Así, la prescripción de la acción penal, que supone la defensa del individuo contra los excesos del Poder estatal, no puede ser utilizada con la finalidad de avalar el encubrimiento que el Estado haya realizado de hechos que deben ser investigados” (pp.4).</p> <p>”17. De este modo, como ya lo ha sentado este Colegiado en la sentencia recaída en el expediente N° 00218-2009-PHC/TC, referida a la pretendida prescripción de la acción</p>

CUADRO DE LAS RESOLUCIONES PROCESADAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA PRESCRIPCIÓN

#	MATERIA	EXP.	FECHA	PRONUNC.	DECISIÓN	VOTO 1	VOTO 2	VOTO 3	FUNDAMENTOS
									<p>penal de un coprocesado del accionante, una interpretación conforme con la Constitución de las normas de prescripción de la acción penal a la que ha arribado este Tribunal implica dejar de contabilizar todo el lapso en que se sustrajeron los hechos de una efectiva investigación, a través de órganos judiciales incompetentes y leyes de amnistía inconstitucionales. A su vez, en caso que se determine que tales hechos constituyen crímenes de lesa humanidad no opera el plazo de prescripción de la acción penal. Así lo ha reconocido este Tribunal constitucional (Exp. N°024-2010-PI/TC)[...]</p> <p>19. Conforme consta de los actuados judiciales adjuntados al expediente de hábeas corpus, se sigue proceso contra el favorecido por delito de asesinato (fojas 14), previsto en el artículo 152 del Código Penal de 1924-vigente en el momento en que se habrían cometido los hechos delictivos- con pena de internamiento...en principio, una prescripción de la acción penal de veinte años, que se reduciría a la mitad, en aplicación del artículo 148 de dicho cuerpo normativo, por haber tenido al momento de la comisión de los hechos menos de 21 años[...]</p> <p>20. Sin embargo, según lo interpretado por este Tribunal, los obstáculos para el procesamiento de los hechos fueron recién removidos por el Estado en enero de 2002, cuando se anuló el proceso seguido ante el Fuero Militar. En efecto, conforme a lo ya mencionado supra, no pueden contabilizarse los plazos de prescripción de la acción penal cuando el ordenamiento jurídico o el accionar del Estado representen un obstáculo para el procesamiento de hechos tan graves como los que motivan el proceso penal que se cuestiona en la demanda. Ahora bien, cualquiera que sea la opción interpretativa que se tome, esto es, considerar la imprescriptibilidad de los delitos que se imputan, o bien la aplicabilidad de las normas de prescripción a partir de enero de 2002, a la fecha, la acción penal se encuentra todavía vigente, por lo que la demanda debe ser desestimada” (pp.5).</p>

CUADRO DE LAS RESOLUCIONES PROCESADAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA PRESCRIPCIÓN

#	MATERIA	EXP.	FECHA	PRONUNC.	DECISIÓN	VOTO 1	VOTO 2	VOTO 3	FUNDAMENTOS
35		EPX. N° 218- 2009- PHC/T C	Jueves, 11 de noviembre de 2010	Infundada	Mayoría	Beaumont t Callirgos	Vergara Gotelli	Álvarez Miranda	<p>“ANTECEDENTES</p> <p>[...] Señala que el plazo de la prescripción de la acción penal para el delito imputado (20 años), rige desde el momento de la perpetración de la conducta típica (14 de agosto de 1985), y que en el caso, dado que el beneficiario tenía 19 años de edad, y por tanto, tenía responsabilidad restringida, dicho plazo se reduce a la mitad (10 años), los mismos que a la fecha se han excedido en demasía” (pp. 1).</p> <p>“FUNDAMENTOS</p> <p>7. No obstante que por regla general, la prescripción de la acción penal se contabiliza desde la comisión del ilícito, este Tribunal advierte características especiales en el caso de autos, atinentes a la renuencia del Estado peruano a investigar lo ocurrido. Como se verá, el Estado peruano encubrió los hechos a través de concurso de órganos jurisdiccionales incompetentes y de leyes de amnistía inconstitucionales” (pp.4).</p> <p>“13. El artículo 139,13 de la Constitución prevé que la “(l)a amnistía, el indulto, el sobreseimiento definitivo y la prescripción producen los efectos de cosa juzgada”.</p> <p>Así, la prescripción de la acción penal constituye una garantía del individuo ante la persecución penal estatal, que no puede prolongarse ad infinitum. Sin embargo, este Tribunal debe reiterar que ninguna disposición constitucional, puede ser interpretada aisladamente. En la medida en que forma parte de la Ley Fundamental, la determinación de sus alcances y límites debe realizarse bajo el principio de unidad de la Constitución.</p> <p>14. Así, la prescripción de la acción penal, que supone la defensa del individuo contra los excesos del Poder estatal, no puede ser utilizada con la finalidad de avalar el encubrimiento que el Estado haya realizado de hechos que deben ser investigado” (pp. 6).</p> <p>“17. De este modo, una interpretación conforme a la Constitución de las normas de prescripción de la acción penal implica dejar de contabilizar todo el lapso en que se</p>

CUADRO DE LAS RESOLUCIONES PROCESADAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA PRESCRIPCIÓN

#	MATERIA	EXP.	FECHA	PRONUNC.	DECISIÓN	VOTO 1	VOTO 2	VOTO 3	FUNDAMENTOS
									<p>sustrajeron los hechos de una efectiva investigación, a través de órganos judiciales incompetentes y leyes de amnistía inconstitucionales" (pp. 6).</p> <p>"19. Sin embargo, según lo interpretado por este Tribunal, los obstáculos para el procesamiento de los hechos fueron recién removidos por el Estado en enero de 2002, cuando se anuló el proceso seguido ante el Fuero Militar. En efecto, conforme a lo ya mencionado supra, no pueden contabilizarse los plazos de prescripción de la acción penal cuando el ordenamiento jurídico o el accionar del Estado representen un obstáculo para el procesamiento de hechos través como los que motivan el proceso penal que se cuestiona en la demanda. Ahora bien, cualquiera que sea la opción interpretativa que se tome, esto es, considerar la imprescriptibilidad de los delitos que se imputan, o bien la aplicabilidad de las normas de prescripción a partir de enero de 2002, a la fecha, la acción penal e encuentra todavía vigente, por lo que la demanda debe ser desestimada" (pp.7).</p>
36	XVII. Prescripción en concurso de delitos	EXP. Nº 0616- 2008- HC/TC	lunes, 08 de septiembre de 2008	Infundada	unanimidad				<p>"13. Es preciso señalar que los hechos materia de investigación habrían acontecido en el mes de setiembre de 1995 (tal como se señala en la sentencia de fecha 9 de septiembre de 2003, a fojas 194), imputándosele al recurrente la comisión de los delitos de estafa (Art.196 del C.P) y defraudación(Art.197 inciso 4 del C.P.), mediante auto apertura de instrucción de fecha 18 de octubre de 2001[...]</p> <p>15. Asimismo, cabe señalar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 80, tercer párrafo, del Código Penal, en el caso de concurso ideal de delitos, las acciones prescriben cuando haya transcurrido un plazo igual al máximo correspondiente al delito más grave. En atención a ello, es posible colegir que en el caso de autos, toda vez que sobre un mismo hecho se ha imputado la comisión de los delitos distintos entre sí, corresponde contabilizar el plazo de prescripción tomando en cuenta el delito que establece la penalidad más grave, esto es, el delito de estafa (que</p>

CUADRO DE LAS RESOLUCIONES PROCESADAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA PRESCRIPCIÓN

#	MATERIA	EXP.	FECHA	PRONUNC.	DECISIÓN	VOTO 1	VOTO 2	VOTO 3	FUNDAMENTOS
									<p>establece una pena máxima de 6 años de pena privativa de libertad), el cual además se deberá computar desde la fecha en que se cometieron los hechos delictivos (es decir, desde septiembre de 1995); por lo cual el plazo de prescripción ordinaria recién se habría cumplido con fecha septiembre de 2001" (pp.6).</p> <p>"17. De ello es posible advertir que las actuaciones de investigación del Ministerio Público respecto de los hechos delictivos se habrían iniciado antes de septiembre de 2001 (fecha en la que habría vencido el plazo ordinario de prescripción previsto para el delito de estafa)...empezando a correr el plazo de prescripción extraordinario (...) (que para el caso concreto sería de 9 años).</p> <p>18. En esa medida, toda vez que el accionante fue condenado con fecha 9 de septiembre de 2003, no se habría configurado el plazo de prescripción extraordinario en el presente caso, por lo que dicho extremo de la demanda también de ser desestimado" (pp. 7).</p>
37	XVIII. Suspensión de la acción penal	EPX. Nº 5048- 2009- PHC/T C	Viernes, 04 de diciembre de 2009	Infundada	unanimidad				<p>FUNDAMENTOS</p> <p>"1. Objeto de la presente demanda es que este Tribunal declare la nulidad de la Resolución Nº52, de fecha 8 de setiembre del 2008, por la que se revoca la Resolución de fecha 20 de mayo del 2008, que declaró prescrita de oficio la acción penal seguida contra la beneficiaria por el delito de encubrimiento real en agravio del Estado (Expediente Nº 025-2004), por vulneración del derecho al debido proceso y amenaza del derecho a la libertad individual" (pp.2). "3. En el caso de autos, según se aprecia en el fundamento sétimo de la Resolución Nº 52, de fecha 8 de setiembre del 2008, el plazo de prescripción se comienza a contar desde diciembre del 2001; es decir, desde el momento en que la autoridad encargada de la persecución del delito toma conocimiento de los actos presuntamente ilícitos, pues se trata del delito de encubrimiento real; y al haberse dispuesto por Resolución</p>

CUADRO DE LAS RESOLUCIONES PROCESADAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA PRESCRIPCIÓN

#	MATERIA	EXP.	FECHA	PRONUNC.	DECISIÓN	VOTO 1	VOTO 2	VOTO 3	FUNDAMENTOS
									Suprema N° 099-2007-JUS, de fecha 18 de mayo de 2007, la presentación del pedido de extradición contra la beneficiaria, se habría producido la suspensión del plazo conforme al artículo 84° del Código Penal; en consecuencia, no ha operado la prescripción de la acción(...)” (pp.2).
38		EXP. N° 0026- 2006- PI/TC	jueves, 08 de marzo de 2007	Infundada	Mayoría	Alva Orlandini			<p>“14. Este Colegiado ha venido a definir, la inmunidad parlamentaria, en el fundamento 5 de la sentencia recaída en el expediente N° 0006-2003- AI/TC, como una garantía procesal penal de carácter político de la que son titulares los cuerpos legislativos de un Estado a favor de sus miembros, de forma tal que no puedan ser detenidos ni procesados penalmente, sin la aprobación previa del Parlamento (...) 15. En conclusión, lo que se reconoce constitucionalmente como inmunidad parlamentaria son las inmunidades de arresto y proceso. Es posible entender ésta, entonces, como una garantía que busca proteger la libertad personal de los parlamentarios contra detenciones y procesos judiciales que tienen una evidente motivación y finalidad política. Con dicha protección se salvaguarda la conformación y funcionamiento del Parlamento. Por ello, corresponde al Poder Legislativo efectuar la valoración de los móviles políticos que puedan existir a través del procedimiento de levantamiento de la inmunidad parlamentaria, a fin de garantizar la autonomía del Parlamento y la plena vigencia del principio de separación de poderes (...)” (pp.13 y14).</p> <p>“17. La inmunidad parlamentaria, por tanto, sólo tendrá sentido si coadyuva con el funcionamiento del Congreso, lo que está en íntima relación con el desarrollo democrático de un país...Pero, ¿qué pasaría si la inmunidad parlamentaria atenta o no contribuye con el ejercicio democrático del Estado, y por el contrario, se convierte en un factor de deslegitimación del Congreso? Es evidentemente ahí cuando la inmunidad deja de tener sentido y, por el contrario,</p>

CUADRO DE LAS RESOLUCIONES PROCESADAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA PRESCRIPCIÓN

#	MATERIA	EXP.	FECHA	PRONUNC.	DECISIÓN	VOTO 1	VOTO 2	VOTO 3	FUNDAMENTOS
									<p>desacredita el actuar de uno de los Poderes del Estado...La inmunidad parlamentaria, por ello, no puede concebirse como una entidad aislada dentro del cuerpo constitucional. Únicamente adquiere significado si se le conjuga con la democracia (artículo 3), con la configuración del Estado social y democrático de derecho (...)” (pp. 14 y 15).</p> <p>“24. El punto controvertido respecto al segundo párrafo del artículo 16 del Reglamento del Congreso es el referido al ámbito temporal de la inmunidad parlamentaria. La norma señala que: La inmunidad parlamentaria no protege los Congresistas contra (...) los procesos penales iniciados con anterioridad a la elección como a los iniciados con posterioridad a la elección, los que no se paralizan ni suspenden (...)”(pp. 20).</p> <p>“27(...)este Colegiado estima que, conforme al artículo 93º de la Constitución, caben las dos posibilidades de protección (inmunidad de proceso amplia y estricta), y que corresponde al Congreso de la República adoptar cualquiera de ellas conforme a la natural evolución de las instituciones parlamentarias y al fin constitucional que se persigue...lo que ocurre es que la extensión de la protección (todo proceso penal independientemente del momento de su inicio o sólo los procesos penales iniciados con posterioridad a la elección) es lo que conforma el contenido no esencial, sobre el cual el legislador ordinario tiene un amplio margen de regulación...Es por ello y por las consideraciones expuestas que este Colegiado considera que la norma impugnada no vulnera el ámbito constitucionalmente protegido por el artículo 93º de la constitución” (pp. 20 y 21).</p> <p>“30. Finalmente, debe destacarse que también se ha discutido en el presente proceso sobre si es factible, o no, la suspensión de la prescripción de la acción penal en el caso de los congresistas protegidos por la inmunidad de proceso. Al respecto, el artículo 84 del Código Penal dispone que: Si el comienzo o continuación del proceso penal depende de cualquier cuestión que deba resolverse en otro</p>

CUADRO DE LAS RESOLUCIONES PROCESADAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA PRESCRIPCIÓN

#	MATERIA	EXP.	FECHA	PRONUNC.	DECISIÓN	VOTO 1	VOTO 2	VOTO 3	FUNDAMENTOS
									procedimiento, se considera en suspenso la prescripción hasta que aquel quede concluido.... Este Colegiado considera que este artículo de la normatividad penal es la norma aplicable para aquel caso de los Congresistas protegidos por la inmunidad de proceso” (pp. 22).
39	XIX. Retroactividad del plazo de prescripción	EXP. N° 10302-2006-PHC/T C	sábado, 09 de agosto de 2008	Fundada	Mayoría	Vergara Gotelli	González Ojeda		<p>“2. [...] Se alega afectación del derecho a la libertad personal, del principio de irretroactividad de la ley y debido proceso en su acepción de motivación de resoluciones judiciales, pues se le habría aplicado al recurrente la modificatoria, respecto a los plazos de prescripción, establecida mediante Ley N° 26360” (pp.2).</p> <p>“7 No obstante ello, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional. “[L]a aplicación retroactiva de las normas se produce cuando a un hecho, relación o situación jurídica se les aplica una norma que entró en vigencia después que éstos se produjeron. Nuestro ordenamiento prohíbe la aplicación retroactiva de las normas... Como excepción a la regla se permite la aplicación retroactiva en materia penal, cuando favorece al reo [...]”</p> <p>8. Respecto al caso de los autos el texto primigenio del artículo 80° del Código Penal, promulgado mediante Decreto Legislativo N.° 635 y publicado el 8 de abril de 1991, establece:</p> <p>“En ningún caso, la prescripción será mayor a veinte años.”</p> <p>Posteriormente, en cuanto al cuarto párrafo-materia de controversia-, mediante modificación establecida por el artículo 2° de la Ley N° 26360, publicada el 29 de setiembre de 1994, señaló que:</p> <p>“La prescripción no será mayor a veinte años. Tratándose de delitos sancionados con pena de cadena perpetua se extingue la acción penal a los treinta años.”” (pp.4).</p> <p>“9.En el presente caso se advierte de las instrumentales que corren en los autos que el Cuarto Juzgado Penal de Terrorismo, mediante resolución de fecha 12 de mayo de</p>

CUADRO DE LAS RESOLUCIONES PROCESADAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA PRESCRIPCIÓN

#	MATERIA	EXP.	FECHA	PRONUNC.	DECISIÓN	VOTO 1	VOTO 2	VOTO 3	FUNDAMENTOS
									<p>2003, amplió la instrucción N ° 327-03 en contra del recurrente, como presunto autor del delito de terrorismo, atribuyéndole la calidad de “responsable o mando político”, por hechos realizados entre agosto y octubre de 1992..., de otro lado mediante resolución de fecha 10 de mayo, declaró infundada la excepción de prescripción de la acción penal...considerando que: “en los delitos sancionados con cadena perpetua la acción penal se extingue a los treinta años” (pp. 5).</p> <p>“10. De lo antes glosado se aprecia que la Sala Penal Nacional demandada, a efectos de confirmar la resolución que declara infundada la excepción de prescripción de la acción penal deducida, aplicó la modificatoria aludida cuando ésta no estaba vigente al momento de los hechos que se imputan al demandante. Por lo tanto corresponde ampara la demanda, en este extremo, al haberse acreditado que la resolución impugnada vulnera los derechos a la motivación, irretroactividad de la ley y libertad personal del recurrente, debiéndose dictar nueva resolución conforme a la ley (...)” (pp. 5).</p>

CUADRO DE LAS RESOLUCIONES PROCESADAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA PRESCRIPCIÓN

#	MATERIA	EXP.	FECHA	PRONUNC.	DECISIÓN	VOTO 1	VOTO 2	VOTO 3	FUNDAMENTOS
40	XX. Prescripción del plazo de detención	EPX. N° 2798- 2004- HC/TC	Jueves, 09 de diciembre de 2004	Infundada	unanimidad				<p>"5. Los hechos que son materia de los procesos penales seguidos contra el recurrente forman parte de un conjunto atribuido al autodenominado Grupo Colina, todos ellos cometidos bajo una modalidad delictiva que ha motivado el rechazo y la condena de la Comunidad Nacional e Internacional. El Estado Peruano no debe tolerar la impunidad de éstos y otros graves crímenes y violaciones a los derechos humanos, tanto por una obligación ética fundamental derivada del Estado de Derecho, como por el debido cumplimiento de compromisos expresos adquiridos por el Perú ante la Comunidad Internacional"(pp.3).</p> <p>"10.... la Corte indica que el deber de garantía implica que el Estado debe prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos, y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos. La obligación del Estado consiste en el ejercicio de la acción penal correspondiente contra aquellos funcionarios públicos, o cualquier individuo, que sea presuntamente responsable de la violación alegada. El Derecho Internacional de los Derechos Humanos, de esta manera vela por la protección de los derechos de las personas, pero simultáneamente exige la intervención del Derecho Penal contra aquellos que resulten responsables de la infracción"</p> <p>"28. La determinación de plazo máximo de la detención en el caso deberá realizarse de conformidad con el derecho a la razonabilidad del plazo de la detención. Asimismo, como ya lo ha señalado este Tribunal, no es posible que en abstracto se establezca un único plazo a partir del cual la prisión provisional pueda reputarse como irrazonable. Ello implicaría asignar a los procesos penales una uniformidad objetiva e incontrovertida [...]"</p> <p>30. Es necesario tomar en cuenta que cada uno de los procesos abiertos contra el recurrente reviste complejidad,</p>

CUADRO DE LAS RESOLUCIONES PROCESADAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA PRESCRIPCIÓN

#	MATERIA	EXP.	FECHA	PRONUNC.	DECISIÓN	VOTO 1	VOTO 2	VOTO 3	FUNDAMENTOS
									<p>dado el número de procesados y de víctimas, por lo que el plazo de detención en cada uno de ellos por separado, de conformidad con lo señalado en el artículo 137 del Código procesal Penal, es el máximo previsto en la ley" (pp. 7).</p> <p>"32. Por lo tanto, este Tribunal considera que la acumulación de procesos decretada no puede tener como consecuencia que, para efectos de contabilizar el cumplimiento del plazo máximo de la detención, se tome en cuenta únicamente el mandato de detención dictado en el proceso más antiguo, sino más bien que deben ser tomados en cuenta los mandatos de detención dictados en cada uno de los procesos que se siguen en su contra.</p> <p>33. Es necesario recalcar que, tal como ya lo señaló este Tribunal [Expediente N° 2915-2004-HC/TC], una vez vencido el plazo máximo de la detención, éste podrá ser prolongado en caso la demora en el proceso sea atribuible al imputado, a través de una defensa obstruccionista, atentatoria de la celeridad y éxito judicial" (pp. 8).</p>
41	No se pronuncia sobre la prescripción-basándose en la falta de fecha de consumación del delito	EXP. N° 5890-2006-PHC/TC	11 de setiembre de 2006	Infundada	Unanimidad				<p>"6.6.(...) e) sin embargo, con fecha 25 de mayo de 2005, la demandada emitió la resolución cuestionada en el presente proceso declarando a los beneficiarios como culpables de ambos delitos, y condenándolos a 3 años de pena privativa de la libertad suspendida condicionalmente; f)posteriormente, con fecha 31 de agosto de 2005, dicha sentencia fue anulada por la misma sala, la cual declaró extinguida la acción penal por prescripción, en lo que se refiere al delito contra la fe pública-falsedad genérica, manteniendo, sin embargo, los efectos jurídicos de la sentencia en lo que se refiere al delito contra el patrimonio-estafa.</p> <p>7.7. Por tanto habiéndose declarado la prescripción de la acción penal por el delito contra la fe pública, corresponde únicamente emitir pronunciamiento sobre la prescripción del delito de estafa.</p> <p>9.9.(...)</p> <p>En el presente caso, conforme a lo indicado, la prescripción de la acción penal para el delito deberá computarse desde el</p>

CUADRO DE LAS RESOLUCIONES PROCESADAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA PRESCRIPCIÓN

#	MATERIA	EXP.	FECHA	PRONUNC.	DECISIÓN	VOTO 1	VOTO 2	VOTO 3	FUNDAMENTOS
									momento en que se consumó. Sin embargo en que el agraviado suscribió el pagaré con vicios de nulidad, cuya fecha es la que el accionante propone para contabilizar el inicio del cómputo del plazo de la prescripción, no se indica la fecha de consumación del ilícito, esto es el momento en que se produjo el perjuicio económico. Al respecto es de tenerse presente, como ya lo ha señalado este Tribunal en repetidas oportunidades, que no es competencia de la justicia constitucional el determinar la responsabilidad penal ni de hacer una valoración de las pruebas que a tal efecto se incorporen al proceso penal. Asimismo, tampoco constituye competencia de la justicia constitucional el determinar la configuración del ilícito dilucidando aspectos tales como el momento en que se produjo la consumación del mismo. Es por ello que en el caso de autos al no haber pronunciamiento en sede penal sobre el momento de la consumación del delito de estafa no es posible advertir de manera manifiesta que al momento de emitir resolución mediante la cual se confirma la sentencia condenatoria se haya producido la prescripción de la acción penal respecto del mismo. Por tanto, la presente demanda debe ser desestimada” (pp. 3 y 4).

CUADRO DE LAS RESOLUCIONES PROCESADAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA PRESCRIPCIÓN

#	MATERIA	EXP.	FECHA	PRONUNC.	DECISIÓN	VOTO 1	VOTO 2	VOTO 3	FUNDAMENTOS
42		EXP. N.º 0014- 2006- PI/TC	19 de enero de 2007	Infundada	Mayoría	Vergara Gotelli	Alva Orlandi ni		<p>“13. La reincidencia.</p> <p>Artículo 2.- Incorpora artículos al Código Penal Incorpórense al Código Penal los artículos 46-B y 46-C, con el siguiente tenor:</p> <p>“Artículo 46-B.- Reincidencia</p> <p>El que, después de haber cumplido en todo o en parte una condena privativa de libertad, incurra en nuevo delito doloso, tendrá la condición de reincidente. Constituye circunstancia agravante la reincidencia. El juez podrá aumentar la pena hasta en un tercio por encima del máximo legal fijado para el tipo penal. A los efectos de esta circunstancia no se computarán los antecedentes penales cancelados.</p> <p>Artículo 46-C.- Habitualidad</p> <p>Si el agente comete un nuevo delito doloso, será considerado delincuente habitual, siempre que se trate al menos de tres hechos punibles que se hayan perpetrado en un lapso que no exceda de cinco años. La habitualidad en el delito constituye circunstancia agravante. El juez podrá aumentar la pena hasta en una mitad por encima del máximo legal fijado para el tipo penal”.</p> <p><i>“Análisis de constitucionalidad de la Ley N° 28726 que incorpora la reincidencia y la habitualidad</i></p> <p>14. (...)</p> <p>15. El análisis de la Ley N ° 28726, que incorpora la reincidencia y la habitualidad como criterios para la determinación de la pena operando como agravantes genéricos, comportará determinar su correspondencia o contradicción con el principio constitucional del <i>ne bis in idem</i>. Ello en razón de que constituye el cuestionamiento principal enarbolado por el demandante. Este cometido se abordará constitucionalmente, para lo cual habrá de</p>

CUADRO DE LAS RESOLUCIONES PROCESADAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA PRESCRIPCIÓN

#	MATERIA	EXP.	FECHA	PRONUNC.	DECISIÓN	VOTO 1	VOTO 2	VOTO 3	FUNDAMENTOS
									<p>determinarse la noción de reincidencia y habitualidad, los alcances de sus configuraciones en el ordenamiento jurídico nacional y el análisis de su incidencia en cada uno de los intereses constitucionales que pudieran ser vulnerados. Esto permitirá conocer aquellas aristas que guarden arreglo constitucional y aquellas que no lo hagan” (pp. 20 y 21).</p> <p>“23. Con tales alcances, debe enfatizarse que el análisis para determinar si el principio es objeto de vulneración debe circunscribirse a un solo acto delictivo y a un solo sujeto perpetrador. Si se constata que sobre el mismo sujeto y respecto a un mismo delito concurren las aplicaciones de dos penas, se configurará un supuesto de vulneración del principio <i>ne bis in ídem</i>. Pero no será así en el caso de que se trate de una pena con sanciones múltiples. Desde esta lógica, lo que comporta la reincidencia es la manera como se ha constatado anteriormente la agravación de la pena impuesta para un mismo acto delictivo y para un mismo sujeto, sobre la base de valorar la existencia de antecedentes de comisión del mismo delito en una oportunidad anterior.</p> <p>24. El primer delito cometido –aquel que es objeto de consideración– no recibe una pena adicional ni una agravación de ésta; simplemente se toma en consideración para efectos de graduar la pena que se atribuirá a un acto delictivo distinto. Por su parte, el acto delictivo reincidente –es decir el acto delictivo perpetrado en un segundo momento– no es tampoco objeto de una doble imposición de pena, sino de una sola, aquella prevista por el dispositivo que consagra su tipo penal, aunque agravada como consecuencia de la existencia de antecedentes respecto al mismo tipo penal. Atendiendo al razonamiento expuesto, este Tribunal considera que la consagración de la reincidencia como causal genérica agravante de la pena no constituye un supuesto de afectación al principio <i>ne bis in ídem</i>”(pp. 23).</p> <p>“37. Ha sido señalado que la reincidencia consiste en una circunstancia en la cual se constata la existencia de antecedentes delictivos en la persona que está siendo</p>

CUADRO DE LAS RESOLUCIONES PROCESADAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA PRESCRIPCIÓN

#	MATERIA	EXP.	FECHA	PRONUNC.	DECISIÓN	VOTO 1	VOTO 2	VOTO 3	FUNDAMENTOS
									juzgada, para efectos de agravar la pena que se le pretende imponer como consecuencia de haber cometido un delito. Se trata, pues, de una comprobación desde la criminología de la forma de vida delictiva del procesado, que posibilita la imposición de una mayor punición a una persona, allende a la que le corresponde por la comisión del delito, considerada de modo aislado. El principio de culpabilidad clásico previsto para delitos comunes exige que el grado de reprobación de una persona por un acto ilícito sea configurado desde la valoración de tal acto y no de otro. En virtud de este principio, el límite para saber qué conductas deben evaluarse y cuáles no, lo establece el propio tipo penal que subsuma la conducta. Esto acarrea la proscripción de evaluar circunstancias ajenas a la conducta descrita en el tipo penal, como podrían ser otros delitos anteriormente perpetrados” (pp. 27).
									47. La cuestión, por tanto, de si la adjudicación de una pena a una persona reincidente ha cumplido o no su finalidad, no es una cuestión ajena a la sociedad democrática. Ella tiene un interés sustancial en conocer si la ejecución de la pena ha cumplido con los objetivos perseguidos por el inciso 22) del artículo 139° de la Constitución. En definitiva, el Tribunal es de la opinión que la intervención del legislador en el derecho a la libertad personal, a través de las disposiciones modificatorias en la Ley N° 28726, no infringe el principio de proporcionalidad, en su variante de prohibición o interdicción de exceso; por lo que dicha ley ha de ser considerada como constitucionalmente legítima” (pp. 29).

CUADRO DE LAS RESOLUCIONES PROCESADAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA PRESCRIPCIÓN

#	MATERIA	EXP.	FECHA	PRONUNC.	DECISIÓN	VOTO 1	VOTO 2	VOTO 3	FUNDAMENTOS
43	El antejuicio como causa de suspensión de la acción penal	EXP. Nº 5068- 2006- PHC/T C	15 de noviembre de 2006	Infundada	Unanimidad				<p>“11.11. En cuarto lugar, el recurrente también aduce que a su criterio, la acción penal ya había prescrito, toda vez que no existe ningún supuesto que haya interrumpido o suspendido el plazo de la prescripción relativa a la acción penal. Como ha señalado el Tribunal Constitucional en anterior oportunidad (Exp. Nº1805-2005-HC/TC) (...) mediante la prescripción se limita la potestad punitiva del Estado, dado que extingue la posibilidad de investigar un hecho criminal y, con él, la responsabilidad del supuesto autor o autores del mismo.</p> <p>12.12. No obstante, este Colegiado no comparte tal afirmación del recurrente, toda vez que el trámite parlamentario en el antejuicio político suspende la prescripción penal. En efecto, de acuerdo con el artículo 84 del Código Penal, “[s]i el comienzo o la continuación del proceso penal depende de cualquier cuestión que deba resolverse en otro procedimiento, se considera en suspenso la prescripción hasta que aquel quede concluido”. En el caso concreto, dado que el recurrente gozaba de la prerrogativa del antejuicio político, es evidente que aquel era un trámite indispensable, como paso previo, para que se diera inicio al proceso penal.</p> <p>13.13. Por ello, relevándose de realizar mayor argumentación al respecto debido a la claridad en este extremo, el Tribunal Constitucional estima pertinente remitir a la sentencia de hábeas corpus de segundo grado, la cual señala (fojas 496 reverso):</p> <p>(...)si los hechos investigados ocurrieron el 14 de mayo de 1997, y antes de iniciado el proceso penal debía llevarse a cabo el Antejuicio Político en el Congreso de la República, que constituye una “cuestión” que implica un procedimiento distinto y que por ende constituye un motivo de suspensión del plazo prescriptorio, durante el periodo comprendido en la denuncia formalizada por la Fiscalía de la Nación de fojas sesenta y cinco y siguientes, estos son, 08 de marzo de 1998 en que se expidió el Dictamen acusatorio de la Subcomisión</p>

CUADRO DE LAS RESOLUCIONES PROCESADAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA PRESCRIPCIÓN

#	MATERIA	EXP.	FECHA	PRONUNC.	DECISIÓN	VOTO 1	VOTO 2	VOTO 3	FUNDAMENTOS
									<p>encargada de la Acusación Constitucional, en los términos aprobados por el Pleno del Congreso de la República de fecha 03 de diciembre de 1998 (en cuyo ínterin operó la suspensión del plazo de la prescripción durante 8 meses y 25 días), reiniciándose el conteo del plazo en esta última fecha, por lo que al momento de emisión de la sentencia de vista (el diez de septiembre de dos mil tres) sólo habían transcurrido cinco años seis meses y veintinueve días...por consiguientes no se encontraba prescrita la acción penal y el Estado perdió su facultad punitiva y, con ello, la posibilidad de investigar y sancionar(...)” (pp. 5 y 6).</p>
24a	SENTENCIA CÉSAR SHUTZ	EXP. Nº 03681- 2010- PHC/T C	Viernes, 20 de abril del 2012	Fundada	Mayoría	Urviola Hani	Beaumont Callirgos	Vergara Gotelli	<p>“FUNDAMENTOS</p> <p>I. La demanda tiene por finalidad que se declare inaplicables:</p> <p>i) la Resolución de fecha 21 de noviembre de 2006, emitida por la Sala Penal emplazada, que dispuso suspender los términos prescriptorios de la acción penal instaurada contra el favorecido por los delitos de asociación ilícita para delinquir peculado y tráfico de influencias; y ii) la Resolución de fecha 1 de octubre de 2001, emitida por el Juzgado Penal emplazado, en los extremos que dispone ampliar el auto de apertura de instrucción para incluir al favorecido como cómplice primario en el delito de peculado y como autor en el delito de asociación ilícita para delinquir” (pp. 2 y 3).</p> <p>“3. En los considerandos octavo y noveno de la Resolución de fecha 21 de noviembre de 2006, la Sala Penal emplazada expone las razones para suspender la prescripción de la acción penal, cuyo texto señala:</p> <p>OCTAVO: En atención al principio de favorabilidad y a la circunstancia de que el juzgamiento del acusado depende de la extradición, resulta legítimo optar por suspender el plazo prescriptorio de la acción penal conforme a lo previsto en el artículo 84 del Código Penal, pues el imputado, conocedor de las consecuencias de su conducta procesal, incurrió en la causal de contumacia legislada anteladamente, y por ende,</p>

CUADRO DE LAS RESOLUCIONES PROCESADAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA PRESCRIPCIÓN

#	MATERIA	EXP.	FECHA	PRONUNC.	DECISIÓN	VOTO 1	VOTO 2	VOTO 3	FUNDAMENTOS
									<p>consistente de su prohibición y efectos jurídicos.</p> <p>NOVENO: No está de más señalar que con esta opción, no se vulnera derecho constitucional reconocido al imputado, en la medida que no se restringe de manera arbitraria su libertad personal ni derechos conexos a ella; por lo que resulta razonable y compatible con la potestad punitiva del Estado, suspender el plazo prescriptorio de la acción penal, desde el momento de la declaratoria de contumacia que nos ocupa” (pp. 3 y 4).</p> <p>“5. La motivación esgrimida en la Resolución de fecha 21 de noviembre de 2006 no es conforme con el supuesto previsto en el artículo 84° del Código Penal, para que legítimamente se declare la suspensión de la prescripción de la acción penal. Este Tribunal considera que su motivación es arbitraria, por cuanto no justifica adecuadamente las razones por las cuales debe suspenderse el plazo de prescripción de la acción penal y porque la contumacia no puede ser entendida como otro procedimiento ajeno y distinto al proceso penal, para que pueda justificarse la suspensión de la prescripción de la acción penal. Tampoco resulta racional considerar que la contumacia en el caso del favorecido incida en la iniciación del proceso penal que se le sigue [...]</p> <p>6. En tal escenario, este Tribunal considera que la Resolución de fecha 21 de noviembre de 2006 vulnera el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, en la medida que su argumentación no es acorde con lo prescrito en el artículo 84° del Código Penal, ya que ordenó -mecánicamente- la suspensión del plazo de prescripción de la acción penal sobre la base de una declaratoria de contumacia, sin tener presente que en la STC 04959-2008-PHC/TC se precisó que “la Ley N.º26641. que dispone la suspensión de los plazos de prescripción de la acción penal para los reos contumaces, sólo puede ser de aplicación en caso la misma no resulte vulneratoria del derecho al plazo razonable del proceso” (pp. 4 y 5).</p>

CUADRO DE LAS RESOLUCIONES PROCESADAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA PRESCRIPCIÓN

#	MATERIA	EXP.	FECHA	PRONUNC.	DECISIÓN	VOTO 1	VOTO 2	VOTO 3	FUNDAMENTOS
24-b	SENTENCIA CÉSAR SHUTZ	EXP. Nº 03681- 2010- PHC/T C	Martes, 22 de mayo del 2012	Improcedenci a	mayoría	CALLE HAYEN			“que habiendo el recurrente impugnado en forma extemporánea la resolución que ahora cuestiona a través del habeas corpus, dejó consentir la resolución que ahora refiere le causa agravio; y ello porque –reitero- aparece de autos que el recurrente no cumplió con interponer los recursos impugnatorios que le faculta la ley para cuestionar una resolución judicial que consideraba vulneratoria de su derecho a la libertad individual, lo cual la hubiera habilitado para su examen en sede constitucional” (fundamento 3).

ANEXO 6: CUADRO DE TRATADOS Y CONVENIOS DE EXTRADICIÓN SUSCRITOS POR EL ESTADO DEL PERÚ (PROCESADOS)

***Ordenados por el criterio del más antiguo al más actualizado**

CUADRO DE TRATADOS Y CONVENIOS DE EXTRADICIÓN SUSCRITOS POR EL ESTADO DEL PERÚ (PROCESADOS)

PAISES QUE TIENEN TRATADOS DE EXTRADICIÓN U OTRAS NORMAS INTERNACIONALES CON EL PERÚ				
Nº	PAÍS	NOMBRE	REGLA DE PRESCRIPCIÓN	FECHA (SUSCRIPCIÓN, APROBACIÓN, PROMULGACIÓN, RATIFICACIÓN Y VIGENCIA)
1	Francia	Convención de extradición con Francia	"Art. IX.- No podrá verificarse la extradición si después de los hechos imputados, del proceso o la condena, ha pasado tiempo suficiente para que el perseguido ó condenado pueda oponer la prescripción de la pena ó de la acción según las leyes del país donde se ha refugiado."	<ul style="list-style-type: none"> - Suscrito: París, 30 de septiembre de 1874. - Aprobado: Resolución Legislativa el 08 de Junio de 1875. - Promulgada: 15 de junio de 1875. - Ratificación: París, 19 de enero de 1876. - Vigencia: 19 de enero de 1876.
2	Bélgica	Convención de extradición con el Reino Unido de Bélgica.	"Art. V.- La extradición no podrá tener lugar en el caso en que hubiese expirado, término fijado para la prescripción de la acción o de la ejecución de la sentencia, por las leyes del país en que el individuo se ha refugiado."	<ul style="list-style-type: none"> - Suscrito: Bruselas, 23 de noviembre de 1888. - Aprobado: Resolución Legislativa el 25 de octubre de 1889. - Promulgada: 04 de noviembre de 1889. - Ratificación: Bruselas, el 23 de agosto de 1890. - Vigencia: 23 de octubre de 1890.
3	Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda	Tratado de extradición con el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda ampliado a los Estados bajo mandato Británico: Palestina, Camerouns, Tanganika, Nueva Guinea, Samoa Occidental, África Occidental, Nauru; los protectorados de Zanzibar y de las Islas Británicas de Salomón así como los Estados independizados de Kenia, Malawi, Fiji, Comunidad de las Bahamas y Canadá, según notas intercambiadas con el Perú.	"Art V.- No será procedente la extradición, si después de la perpetración del crimen, o instauración del juicio criminal, o de ser declarado convicto el reo, resultare éste exento de enjuiciamiento o castigo, por haber transcurrido el tiempo de la prescripción, según las leyes del Estado solicitante o solicitado."	<ul style="list-style-type: none"> - Suscrito: 26 de enero de 1904. - Aprobado: Resolución Legislativa N° 226 de 29 de septiembre de 1906. - Ratificación: 30 de noviembre de 1906. - Vigencia: 20 de mayo de 1907.

CUADRO DE TRATADOS Y CONVENIOS DE EXTRADICIÓN SUSCRITOS POR EL ESTADO DEL PERÚ (PROCESADOS)

PAISES QUE TIENEN TRATADOS DE EXTRADICIÓN U OTRAS NORMAS INTERNACIONALES CON EL PERÚ				
Nº	PAÍS	NOMBRE	REGLA DE PRESCRIPCIÓN	FECHA (SUSCRIPCIÓN, APROBACIÓN, PROMULGACIÓN, RATIFICACIÓN Y VIGENCIA)
4	Chile	Tratado de extradición con la República de Chile	"Art. V.- No será procedente la extradición.- (...) 2. Cuando, según las leyes del país requerido, la pena o la acción se encontraran prescritas. Art. VI.- (...) La entrega se hará aun cuando para entonces estuviere prescrita la acción penal o la pena, conforme a la legislación del país requerido."	- Suscrito: 5 de noviembre de 1932. - Aprobado: Resolución Legislativa Nº 8374 de 16 de junio de 1936. - Ratificación: Lima, 15 de julio de 1936. - Vigencia: 15 de julio de 1936.
5	España	Tratado de extradición entre la República del Perú y el Reino de España	"Art. 9.- No se concederá la extradición: (...) b) Cuando de acuerdo a la ley de alguna de las Partes se hubiera extinguido la pena o la acción penal correspondiente al delito por el cual se solicita la extradición"	- Suscrito: Madrid, 28 de junio de 1989. - Aprobado: Resolución Legislativa Nº 25347 de 31 de octubre de 1991. - Ratificación: Lima, 17 de diciembre de 1993. - Vigencia: 31 de enero de 1994.
6	México	Tratado de extradición entre la República de Perú y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos	"Art. IV.- Negativa de la extradición.- 1. La extradición no se concederá si: (...) b) a la fecha de la solicitud hubiera prescrito, según la legislación de una de las Partes, la pena o la acción penal correspondiente al delito por el cual se solicita la extradición."	- Suscrito: Ciudad de México, DF, 2 de mayo de 2000. - Aprobado: Resolución Legislativa Nº 27428 de 22 febrero de 2001. - Ratificación: Decreto Supremo Nº 017-2001-RE de 5 de marzo de 2001. - Vigencia: 10 de abril de 2001.
7	Ecuador	Tratado de extradición entre la República de Perú y la República del Ecuador	"Art. III.- Motivos para denegar la extradición.- 1. La extradición no será concedida: (...) b) si el delito o la pena hubiere prescrito con arreglo a la legislación de ambos Estados; o"	- Suscrito: Quito, 4 de abril de 2001. - Aprobado: Resolución Legislativa Nº 27582 de 05 de diciembre de 2001. - Ratificación: Decreto Supremo Nº 099-2001-RE de diciembre de 2001. - Vigencia: 12 de diciembre de 2002.

CUADRO DE TRATADOS Y CONVENIOS DE EXTRADICIÓN SUSCRITOS POR EL ESTADO DEL PERÚ (PROCESADOS)

PAISES QUE TIENEN TRATADOS DE EXTRADICIÓN U OTRAS NORMAS INTERNACIONALES CON EL PERÚ				
Nº	PAÍS	NOMBRE	REGLA DE PRESCRIPCIÓN	FECHA (SUSCRIPCIÓN, APROBACIÓN, PROMULGACIÓN, RATIFICACIÓN Y VIGENCIA)
8	China	Tratado de extradición entre la República de Perú y la República Popular de China	"Art. 3.- Fundamentos obligatorios para el rechazo.- Se rechazará la extradición si: (...) (d) La persona reclamada, según las leyes de la Parte Requirente, goza de inmunidad respecto del proceso o de la ejecución de la sentencia por cualquier razón, incluyendo la prescripción, el indulto o la amnistía."	- Suscrito: Beijing, 05 de noviembre de 2001. - Aprobado: Resolución Legislativa N° 27732 de 21 de mayo de 2002. - Ratificación: Decreto Supremo N° 055-2002-RE de 13 de junio de 2002. - Vigencia: 05 de abril de 2003.
9	EEUU	Tratado de extradición entre la República de Perú y Los Estados Unidos de América	"Art. IV.- Motivos para denegar la extradición.- 1. La extradición no será concedida: (...) b.- si el delito o la pena hubiera prescrito con arreglo a la legislación del Estado requiriente."	- Suscrito: Lima, 25 de julio de 2001. - Aprobado: Resolución Legislativa N° 27827 de 22 de agosto de 2002. - Ratificación: Decreto Supremo N° 085-2002-RE de 01 de octubre de 2002. - Vigencia: 25 de agosto de 2003.
10	Italia	Tratado de extradición entre el Gobierno de la República de Perú y el Gobierno de la República Italiana	"Art. 4.- Rechazo de la extradición.-1. La extradición no es concedida: (...) b. Si a la fecha de recepción de la solicitud hubiere prescrito, según la ley de una de las Partes, la pena o la acción penal correspondiente al delito por el cual se solicita la extradición."	- Suscrito: Roma, 24 de noviembre de 1994. - Aprobado: Resolución Legislativa N° 26759 de 6 de marzo de 1997. - Ratificación: Decreto Supremo N° 011-97-RE de 21 marzo de 1997. - Vigencia: 07 de abril de 2005.
11	Panamá	Tratado de extradición entre la República del Perú y la República de Panamá	"Art. 3.- Denegación de extradición.- 1. La extradición no se concederá: (...) c) Si a la fecha de recepción de la solicitud hubiere prescrito, según la ley de una de las Partes, la pena o la acción penal correspondiente al delito por el cual se solicita la extradición."	- Suscrito: Lima, 08 de septiembre de 2003. - Aprobado: Resolución Legislativa N° 28387 de 29 de octubre de 2003. - Ratificación: Decreto Supremo N° 079-2004-RE de 03 de diciembre de 2004. - Vigencia: 08 de julio de 2005.

CUADRO DE TRATADOS Y CONVENIOS DE EXTRADICIÓN SUSCRITOS POR EL ESTADO DEL PERÚ (PROCESADOS)

PAISES QUE TIENEN TRATADOS DE EXTRADICIÓN U OTRAS NORMAS INTERNACIONALES CON EL PERÚ				
Nº	PAÍS	NOMBRE	REGLA DE PRESCRIPCIÓN	FECHA (SUSCRIPCIÓN, APROBACIÓN, PROMULGACIÓN, RATIFICACIÓN Y VIGENCIA)
12	Corea	Tratado de extradición entre la República de Perú y la República de Corea	"Art. 3.- Denegación de extradición.- 3. Cuando un procesamiento o la pena por delito por el cual la extradición es solicitada hubiere prescrito de acuerdo a lo establecido por la ley de la Parte Requerida para la comisión del mismo delito. Los hechos o circunstancias que suspenderían la prescripción bajo la ley de la Parte Requirente serán acogidos por la Parte Requerida, en este caso la Parte Requirente proveerá de una declaración escrita exponiendo sus disposiciones legales relevantes en relación a la prescripción."	- Suscrito: Lima, 05 de diciembre de 2003. - Aprobado: Resolución Legislativa N° 28432 de 23 de diciembre de 2004. - Ratificación: Decreto Supremo N° 008-2005-RE de 27 de enero de 2005 - Vigencia: 16 de noviembre de 2005.
13	Paraguay	Tratado de extradición entre el Gobierno de la República de Perú y el Gobierno de la República de Paraguay	"Art. 4.- Denegación de extradición.-1. La extradición no se concederá: (...) b. Si la fecha de recepción de la solicitud hubiere prescrito, según la ley de una de las Partes, la pena o la acción penal correspondiente al delito por el cual se solicita la extradición. Art. 11.- El aplazamiento de la entrega.- (...) 4.- El aplazamiento de la entrega suspenderá el cómputo del plazo de prescripción en las actuaciones judiciales que tienen lugar en el territorio de la Parte requirente por los hechos que motivan la solicitud de extradición."	- Suscrito: Lima, 17 de octubre de 1997. - Aprobado: Resolución Legislativa N° 28248 de 7 de junio de 2004. - Ratificación: Decreto Supremo N° 064-2004-RE de 5 de octubre de 2004. - Vigencia: 29 de noviembre de 2005.
14	Brasil	Tratado de extradición entre la República de Perú y la República Federativa del Brasil	"Capítulo IV.- De la denegación facultativa.- (...) Art. 7.- La prescripción de la acción o de la pena de los delitos por las cuales se solicita la extradición será regulada por la ley de la Parte requirente. La Parte requerida además, podrá denegar la extradición si la acción o la pena hubiere prescrito según su legislación."	- Suscrito: Lima, 25 de agosto de 2003. - Aprobado: Resolución Legislativa N° 28157 de 11 de diciembre de 2003. - Ratificación: Decreto Supremo N° 030-2004-RE de 05 de mayo de 2004. - Vigencia: 30 de junio de 2006.
15	Argentina	Tratado de extradición entre la República del Perú y la República de Argentina	"Art. IV.- Motivos para denegar la extradición.- 1. La extradición no será concedida: (...) b.- si el delito o la pena hubiera prescrito con arreglo a la legislación del Estado requirente. Art. X.- (...) 3.- A los efectos de este tratado, el aplazamiento del proceso de extradición o la entrega por el Estado Requerido, suspenderá el plazo de la prescripción en las actuaciones judiciales que tuvieron lugar en el Estado Requirente por el delito o los delitos que motivaron la solicitud de extradición."	- Suscrito: Buenos Aires, 11 de junio de 2004 - Aprobado: Resolución Legislativa N° 28433 de 23 de diciembre de 2004. - Ratificación: Decreto Supremo N° 009-2005-RE de 25 de enero de 2005. - Vigencia: 19 de julio de 2006.

CUADRO DE TRATADOS Y CONVENIOS DE EXTRADICIÓN SUSCRITOS POR EL ESTADO DEL PERÚ (PROCESADOS)

PAISES QUE TIENEN TRATADOS DE EXTRADICIÓN U OTRAS NORMAS INTERNACIONALES CON EL PERÚ				
Nº	PAÍS	NOMBRE	REGLA DE PRESCRIPCIÓN	FECHA (SUSCRIPCIÓN, APROBACIÓN, PROMULGACIÓN, RATIFICACIÓN Y VIGENCIA)
16	Costa Rica	Tratado de extradición entre la República del Perú y la República de Costa Rica	"Art. III.- Motivos para denegar la extradición.- 1. La extradición no será concedida: (...) b) si el delito o la pena hubiere prescrito con arreglo a la legislación del Estado requirente,"	- Suscrito: San José, 14 de enero de 2002 - Aprobado: Resolución Legislativa N° 27828 de 22 de agosto de 2002. - Ratificación: Decreto Supremo N° 084-2002-RE de 1 de octubre de 2002.
17	Bolivia	Tratado de extradición entre la República del Perú y la República de Bolivia	"Art. IV.- Motivos para denegar la extradición.- 1. La extradición no será concedida: (...) b) si el delito o la pena hubiere prescrito con arreglo a la legislación del Estado requirente,"	- Suscrito: Lima, 27 de agosto de 2003 - Aprobado: Resolución Legislativa N° 28936 de 16 de diciembre de 2006.
18	El Salvador	Tratado de extradición entre la República del Perú y la República de El Salvador	Art. 4.- Denegación de extradición.-1. La extradición no se concederá: (...) b. Si la fecha de recepción de la solicitud hubiere prescrito, según la ley de una de las Partes, la pena o la acción penal correspondiente al delito por el cual se solicita la extradición. Art. 11.- (...) 4.- El aplazamiento de la entrega suspenderá el cómputo del plazo de prescripción en las actuaciones judiciales que tienen lugar en el territorio de la Parte Requirente por los hechos que motivan la solicitud de extradición.	- Suscrito: Lima, 27 de julio de 2005 - Aprobado: Resolución Legislativa N° 28837 de 23 de julio de 2006. - Ratificación: Decreto Supremo N° 049-2006-RE de 26 de julio del 2006.
19	Guatemala	Tratado de extradición entre la República del Perú y la República de Guatemala	"Capítulo III: De la denegación.- Art. 3.- No será concedida la extradición: (...) g) Si la fecha de la solicitud hubiera prescrito, según la ley de una de las Partes, la pena o la acción penal correspondiente al delito por el cual se solicita la extradición."	- Suscrito: Lima, 8 de mayo de 2007. - Aprobado: PENDIENTE DE APROBACIÓN - Ratificación: PENDIENTE DE RATIFICACIÓN.
20	Uruguay	Tratado de extradición entre la República del Perú y la República Oriental del Uruguay	"Art. 9.- Prescripción.- No se concederá la extradición cuando la acción penal o la pena estuvieren prescritas conforme a la legislación del estado requirente o del Estado requerido. Art. 22.- El Aplazamiento de la entrega.- (...) 4.- El aplazamiento de la entrega suspenderá el cómputo del plazo de prescripción en las actuaciones judiciales que tienen lugar en el territorio de la Parte Requirente por los hechos que motivan la solicitud de extradición."	- Suscrito: Lima, 9 de julio de 2007. - Aprobado: PENDIENTE DE APROBACIÓN - Ratificación: PENDIENTE DE RATIFICACIÓN.

CUADRO DE TRATADOS Y CONVENIOS DE EXTRADICIÓN SUSCRITOS POR EL ESTADO DEL PERÚ (PROCESADOS)

TRATADOS MULTILATERALES			
21	Tratado de Derecho Penal de Montevideo de 1889	"Título III.- Del régimen de extradición.- Art. 19.- Los estados signatarios se obligan a entregarse los delincuentes refugiados en su territorio, siempre que concurran las siguientes circunstancias: (...) 4. Que el delito no esté prescrito con arreglo a la ley del país reclamante."	- Suscrito: Montevideo, 23 de enero de 1889. - Aprobado: Resolución Legislativa de 25 de octubre de 1889. - Aceptado: 16 de mayo de 1890.
22	Acuerdo de Extradición adoptado por el Congreso Internacional de Caracas	"Art. 5.- No será concedida la extradición: (...) e) Cuando según la legislación del Estado requirente, la acción o la pena hubiere prescrito."	- Suscrito: Caracas, 18 de julio de 1911. - Aprobado: Resolución Legislativa N° 2154 de 22 de octubre de 1915. - Ratificación: 22 de agosto de 1915. - Modificado: Resolución Legislativa N° 28729 de 9 de mayo de 2006.
23	Código de Derecho Internacional Privado - "Código Bustamante"	"Título Tercero.- de la extradición.- (...) Art. 359.- Tampoco debe accederse a ella si han prescrito el delito o la pena conforme a las leyes del Estado requirente o del requerido."	- Suscrito: La Habana, 20 de febrero de 1928. - Aprobado: Resolución Legislativa N° 6442 de 31 de diciembre de 1928. - Promulgado: 8 de enero de 1929, - Vigencia: 18 de setiembre de 1929.
24	Tratado de extradición y protección contra el anarquismo	"Art. 1.- Las Altas Partes Contratantes convienen en entregarse recíprocamente a las personas acusadas o sentenciadas por autoridad competente, siempre que concurran las siguientes circunstancias: (...) V.- Que el delito o la pena no estén prescritos, según las leyes de ambos países."	- Suscrito: México, 28 de enero de 1902.
25	Convención Interamericana sobre la extradición	"Art. 4.- Improcedencia de la extradición.- La extradición no es procedente: (...)2.- Cuando esté prescrita la acción penal o la pena, sea de conformidad con la legislación del Estado requirente o con la del Estado requerido, con anterioridad a la presentación de la solicitud de extradición."	- Suscrito: Caracas, 25 de febrero de 1981. - Ratificación: No ratificó.

ANEXO 7: CUADRO DE TRATADOS, ACUERDOS Y CONVENIOS SOBRE ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL SUSCRITOS POR EL ESTADO DEL PERÚ (PROCESADOS)

***Ordenados por el criterio del más antiguo al más actualizado, B = Bilateral y M = Multilateral**

CUADRO DE TRATADOS, ACUERDOS Y CONVENIOS SOBRE ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL SUSCRITOS POR EL ESTADO DEL PERÚ (PROCESADOS)

Causales de extinción de la persecución penal y de la ejecución de la pena.					
	NOMBRE	PAÍS	B/M	ARTÍCULO	VIGENCIA Y FECHA DE LA FIRMA
1	Convenio entre la República del Perú y la República de Colombia sobre asistencia judicial en materia penal	Colombia	B	No existe una regla expresa que se refiera a la prescripción como causal de denegación de la asistencia, sin embargo en el artículo 3, numeral 1, literal a), se señala "Si las acciones solicitadas se hallan prohibidas por la legislación de la parte requerida, o son contrarias a los principios fundamentales del ordenamiento jurídico de dicha parte;"	- Suscrito: Lima, 12 de julio de 1994. - Aprobado: Decreto Supremo N° 24-94-RE. - Vigencia: 13 de noviembre de 1999.
2	Convenio sobre asistencia judicial en materia penal entre la República del Perú y la República de El Salvador	El Salvador	B	No existe una regla expresa que se refiera a la prescripción como causal de denegación de la asistencia, sin embargo en el artículo 3, numeral 1, literal a), se señala "Si las acciones solicitadas se hallan prohibidas por la legislación de la parte requerida, o son contrarias a los principios fundamentales del ordenamiento jurídico de dicha parte;"	- Suscrito: Lima, 13 de junio de 1996. - Ratificación: Decreto Supremo N° 029-96-RE, de 26 de julio de 1996. - Vigencia: 14 de enero de 1997.
3	Convenio entre la República del Perú y la República de Bolivia sobre asistencia judicial en materia penal	Bolivia	B	No existe una regla expresa que se refiera a la prescripción como causal de denegación de la asistencia, sin embargo en el artículo 3, numeral 1, literal a), se señala "Si las acciones solicitadas se hallan prohibidas por la legislación de la parte requerida, o son contrarias a los principios fundamentales del ordenamiento jurídico de dicha parte;"	- Suscrito: Lima, 27 de julio de 1996. - Ratificación: Decreto Supremo N° 034-96-RE, de 31 de agosto de 1996. - Vigencia: 05 de enero de 1997.
4	Convenio entre la República del Perú y la República del Paraguay sobre asistencia judicial en materia penal	Paraguay	B	No existe una regla expresa que se refiera a la prescripción como causal de denegación de la asistencia, sin embargo en el artículo 3, numeral 1, literal a), se señala "Si las acciones solicitadas se hallan prohibidas por la legislación de la parte requerida, o son contrarias a los principios fundamentales del ordenamiento jurídico de dicha parte;"	- Suscrito: Asunción, 07 de agosto de 1996. - Ratificación: Decreto Supremo N° 039-96-RE. - Vigencia: 1 de diciembre de 1997.

CUADRO DE TRATADOS, ACUERDOS Y CONVENIOS SOBRE ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL SUSCRITOS POR EL ESTADO DEL PERÚ (PROCESADOS)

Causales de extinción de la persecución penal y de la ejecución de la pena.				
	NOMBRE	PAÍS	B/M	ARTÍCULO
5	Tratado de asistencia judicial en materia penal entre el gobierno de la República del Perú y el gobierno de la República Italiana	Italia		No existe una regla expresa que se refiera a la prescripción como causal de denegación de la asistencia, sin embargo en el artículo 4, numeral 1, literal a), se señala "Si las acciones solicitadas se hallan prohibidas por la legislación de la parte requerida, o son contrarias a los principios fundamentales del ordenamiento jurídico de dicha parte;"
6	Convenio de asistencia judicial en materia penal entre la República del Perú y la Confederación Suiza	Suiza	B	No existe una regla expresa que se refiera a la prescripción como causal de denegación de la asistencia, sin embargo en el artículo 4, numeral 1, literal b), se señala la asistencia judicial será denegada: "Si el Estado requerido estima que la ejecución del pedido pudiera atentar contra la soberanía, la seguridad, el orden público u otros intereses fundamentales de su país;"
7	Acuerdo de asistencia judicial en materia penal entre la República del Perú y la República de Argentina	Argentina	B	No existe una regla expresa que se refiera a la prescripción como causal de denegación de la asistencia, sin embargo en el artículo 6, numeral 1, literal a), se señala que "La solicitud de asistencia judicial sea contraria a su ordenamiento jurídico o no sea conforme a las disposiciones de este acuerdo;"
8	Convenio entre la República del Perú y la República de Guatemala sobre asistencia judicial en materia penal	Guatemala	B	No existe una regla expresa que se refiera a la prescripción como causal de denegación de la asistencia, sin embargo en el artículo 3, numeral 1, literal a), se señala "Si las acciones solicitadas se hallan prohibidas por la legislación de la parte requerida, o son contrarias a los principios fundamentales del ordenamiento jurídico de dicha parte;"
				VIGENCIA Y FECHA DE LA FIRMA
				- Suscrito: Roma, 24 de noviembre de 1994. - Ratificación: Decreto Supremo N° 048-96-RE, de 11 de diciembre de 1996. - Vigencia: 1 de octubre de 1999.
				- Suscrito: Lima, 21 de abril de 1997. - Ratificación: Decreto Supremo N° 025-97-RE, de 26 de junio de 1997. - Vigencia: 2 de diciembre de 1998.
				- Suscrito: Lima, 9 de febrero de 1999. - Ratificación: Decreto Supremo N° 021-99-RE, de 29 de abril de 1999. - Vigencia: 31 de marzo de 2001.
				- Suscrito: Lima, 16 de abril de 1998. - Ratificación: Decreto Supremo N° 041-99-RE. - Vigencia: POR RATIFICAR.

CUADRO DE TRATADOS, ACUERDOS Y CONVENIOS SOBRE ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL SUSCRITOS POR EL ESTADO DEL PERÚ (PROCESADOS)

Causales de extinción de la persecución penal y de la ejecución de la pena.					
	NOMBRE	PAÍS	B/M	ARTÍCULO	VIGENCIA Y FECHA DE LA FIRMA
9	Tratado de asistencia judicial en materia penal entre la República del Perú y el República de Cuba	Cuba	B	No existe una regla expresa que se refiera a la prescripción como causal de denegación de la asistencia, sin embargo en el artículo 4, numeral 1, literal b), se señala la asistencia judicial será denegada: "Si el Estado requerido estima que la ejecución del pedido pudiera atentar contra la soberanía, la seguridad, el orden público u otros intereses fundamentales de su país;"	- Suscrito: La Habana, 15 de Febrero de 1999. - Ratificación: Decreto Supremo N° 042-99-RE, de 10 de junio de 1999. - Vigencia: POR RATIFICAR.
10	Acuerdo de asistencia judicial en materia penal entre la República del Perú y la República Federativa de Brasil	Brasil	B	No existe una regla expresa que se refiera a la prescripción como causal de denegación de la asistencia, sin embargo en el artículo 6, numeral 1, literal a), se expresa "La solicitud de asistencia judicial sea contraria a su ordenamiento jurídico o no sea conforme a las disposiciones de este acuerdo;"	- Suscrito: Lima, 21 de julio de 1999. - Ratificación: Decreto Supremo N° 058-99-RE, de 30 de octubre de 1999. - Vigencia: POR RATIFICAR.
11	Tratado de asistencia judicial en materia penal entre el gobierno de la República del Perú y el gobierno de Canadá	Canadá	B	No existe una regla expresa que se refiera a la prescripción como causal de denegación de la asistencia, sin embargo en el artículo 3, numeral 1, literal a), se señala la asistencia judicial será denegada: "Si el Estado requerido estima que la ejecución del pedido pudiera atentar contra la soberanía, la seguridad, el orden público u otros intereses fundamentales de su país;"	- Suscrito: Ottawa, 27 de octubre de 1998. - Ratificación: Decreto Supremo N° 059-99-RE, de 10 de noviembre de 1999. - Vigencia: 25 de enero de 2000.
12	Acuerdo de asistencia judicial en materia penal entre la República del Perú y la República del Ecuador	Ecuador	B	No existe una regla expresa que se refiera a la prescripción como causal de denegación de la asistencia, sin embargo en el artículo 6, numeral 1, literal a), se expresa "La solicitud de asistencia judicial sea contraria a su ordenamiento jurídico o no sea conforme a las disposiciones de este acuerdo;"	- Suscrito: Quito, 26 de octubre de 1999. - Ratificación: Decreto Supremo N° 069-99-RE. De 2 de diciembre de 1999. - Vigencia: POR RATIFICAR.

CUADRO DE TRATADOS, ACUERDOS Y CONVENIOS SOBRE ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL SUSCRITOS POR EL ESTADO DEL PERÚ (PROCESADOS)

Causales de extinción de la persecución penal y de la ejecución de la pena.					
	NOMBRE	PAÍS	B/M	ARTÍCULO	VIGENCIA Y FECHA DE LA FIRMA
13	Convenio entre la República del Perú y los Estados Unidos Mexicanos sobre asistencia jurídica en materia penal	México	B	No existe una regla expresa que se refiera a la prescripción como causal de denegación de la asistencia, sin embargo en el artículo 3, numeral 1, literal a), se señala "las acciones solicitadas se hallan prohibidas por la legislación de la parte requerida, o son contrarias a los principios fundamentales del ordenamiento jurídico de dicha parte.	- Suscrito: México, 2 de mayo de 2000 - Ratificación: Decreto Supremo N° 031-2000-RE, de 13 de octubre del 2000. - Vigencia: 1 de marzo del 2001.
14	Tratado de asistencia judicial en materia penal entre la República del Perú y el Reino de España	España	B	No existe una regla expresa que se refiera a la prescripción como causal de denegación de la asistencia, sin embargo en el artículo III, numeral 1, literal a), se señala la asistencia judicial será denegada: "Si el Estado requerido estima que la ejecución del pedido pudiera atentar contra la soberanía, la seguridad, el orden público u otros intereses fundamentales de su país;"	- Suscrito: Madrid, 8 de noviembre de 2000. - Ratificación: Decreto Supremo N° 025-2001-RE, de 13 de octubre del 2000. - Vigencia: 12 de diciembre de 2001.
15	Acuerdo de asistencia judicial en materia penal entre La República Dominicana y la República del Perú	República Dominicana	B	No existe una regla expresa que se refiera a la prescripción como causal de denegación de la asistencia, sin embargo en el artículo 4, numeral 2, se señala que: "Este Acuerdo no facultará a las Partes para ejecutar, en el territorio de la Parte donde se realizan las diligencias, funciones reservadas exclusivamente a las autoridades de dicha Parte de conformidad con su legislación interna".	- Suscrito: Santo Domingo de Guzmán, 15 de marzo de 2002. - Ratificación: - Vigencia:
16	Tratado entre el gobierno de la República del Perú y el gobierno del Reino de Tailandia sobre asistencia mutua en materia penal	Tailandia		No existe una regla expresa que se refiera a la prescripción como causal de denegación de la asistencia, sin embargo en el artículo 6, numeral 1, se señala que: "Las solicitudes de asistencia deberán ser ejecutadas con celeridad de acuerdo con la Ley del Estado requerido y, en la medida que no fuera prohibido por la misma, en la forma solicitada por el Estado requirente."	- Suscrito: Lima, 03 de octubre de 2005. - Ratificación: - Vigencia: 03 de octubre de 2005.

**CUADRO DE TRATADOS, ACUERDOS Y CONVENIOS SOBRE ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL
SUSCRITOS POR EL ESTADO DEL PERÚ (PROCESADOS)**

Causales de extinción de la persecución penal y de la ejecución de la pena.					
	NOMBRE	PAÍS	B/M	ARTÍCULO	VIGENCIA Y FECHA DE LA FIRMA
17	Tratado entre la República del Perú y la República Popular China sobre asistencia judicial en materia penal	China	B	No existe una regla expresa que se refiera a la prescripción como causal de denegación de la asistencia, sin embargo en el artículo 5, numeral 2, se señala que: "La solicitud de asistencia podrá ser ejecutada por la Parte Requerida en la forma solicitada por la Parte Requerente, siempre que no sea contraria a su ordenamiento jurídico interno."	- Suscrito: Lima, 27 de enero de 2005 - Ratificación: - Vigencia:
18	Tratado de asistencia jurídica en materia penal entre la República de Panamá y la República del Perú	Panamá	B	No existe una regla expresa que se refiera a la prescripción como causal de denegación de la asistencia, sin embargo en el artículo 5, numeral 1, Literal a), se señala que hay una limitación en si " El cumplimiento de la solicitud pueda comprometer la soberanía, seguridad o los intereses públicos esenciales de la Parte Requerida "	- Suscrito: Panamá, 28 de mayo de 2004 - Ratificación: - Vigencia:
19	Tratado de asistencia jurídica mutua en Asuntos Penales entre la República del Perú y la República Oriental del Uruguay	Uruguay	B	No existe una regla expresa que se refiera a la prescripción como causal de denegación de la asistencia, sin embargo en el artículo 5, numeral 1, Literal e), se señala que hay una limitación en si " El cumplimiento de la solicitud sea contrario a la seguridad, el orden público u otros intereses esenciales del Estado Requerido "	- Suscrito: Panamá, 28 de marzo de 2008 - Ratificación: - Vigencia:
20	Convención Interamericana sobre asistencia mutua en Materia Penal		M	ARTÍCULO VI - NEGATIVA AL TRASLADO Cuando un Estado Parte no apruebe el traslado de una persona sentenciada, comunicará su decisión de inmediato al Estado solicitante explicando el motivo de su negativa, cuando esto sea posible y conveniente.	- Suscrito: Managua, 9 de junio de 1993 - Ratificación: 3 de abril de 1995 - Vigencia: 26 de abril de 1995

ANEXO 8: RESOLUCIONES DE CASOS RELEVANTES

8.1. CASO: Genaro Delgado Parker
EXP.: 0023-2001
Corte Superior de justicia de Lima
Fecha: 08 de abril del 2003

“...La señora Directora de Debate, comunica que se suspende la sesión por quince minutos, para que la Sala emita su pronunciamiento sobre la excepción propuesta. Reabierto la sesión, hace saber que la Sala va a expedir resolución en la incidencia promovida por la defensa del procesado Genaro Delgado Parker o Genaro Salvador Delgado Parker: Expediente veintitrés dos mil uno, lima ocho de abril del dos mil tres, **AUTOS Y VISTOS:** de conformidad con lo opinado con el señor Fiscal Superior, no habiendo renunciado el procesado Genaro Delgado Parker o Genaro Salvador Delgado Parker a la excepción de prescripción presentada por su defensa, con la partida de fojas mil novecientos noventa y seis que da fe de su nacimiento ocurrido el catorce de noviembre de mil novecientos veintinueve en esta ciudad; y, **ATENDIENDO: PRIMERO.-** Que por resolución de fojas mil trescientos doce, su fecha dieciséis de agosto de dos mil uno, en cumplimiento de lo ordenado por esta Sala Superior al resolver el medio impugnatorio propuesto por la señora Fiscal Provincial Penal lo instruyó por la comisión de ese ilícito penal tipificado por el artículo cuatrocientos del Código Penal, siendo el Estado el agraviado con su conducta; **SEGUNDO.-** Que dictado el auto de enjuiciamiento, el procesado interpuso la excepción de prescripción extintiva de la acción penal. Sustenta tal medio de defensa de forma en lo siguiente: a) que los hechos que dan lugar a su procesamiento penal, ocurrieron en el mes de abril de mil novecientos noventa y nueve; b) que, como aparece de la partida de nacimiento adjunta, en esa fecha contaba con más de sesenticinco años de edad; y c) que precisamente su edad le permite acogerse a la excepción propuesta, atendiendo a lo dispuesto por el artículo ochentinueve del Código Penal, que regula la reducción del plazo de prescripción extintiva a la mitad, beneficio al que se acoge; **TERCERO.-** Que, corresponde a la Sala destacar algunos hechos determinantes para resolver la antes citada defensa de forma. Así, a) que cuando se elevó el expediente, el veintisiete de marzo de dos mil dos, fue devuelto por deficiencias procesales; que cuando asumió el conocimiento del proceso el veintisiete de junio de dos mil dos, el plazo prescriptorio materia de alegación ya había operado; b) que en atención al principio lógico de no contradicción, la propuesta de la prescripción extintiva es excluyente de la renuncia del imputado a su plazo; y, c) que, por imperativo legal la Sala debe pronunciarse sobre la excepción deducida; **CUARTA.-** Que, como la señala la defensa del procesado Genaro Delgado Parker o Genaro Salvador Delgado Parker, los hechos constitutivos del Delito de Tráfico de Influencias por el que se ha decidido juzgarlo, imputándole la calidad de inductor o instigador, transcurrieron durante los días siete y veintiuno de abril de mil novecientos noventa y nueve, lapso durante el cual se reunió también con el procesado Vladimiro Montesinos Torres, según su declaración para solicitarle influya sobre los magistrados que conocían de un procedimiento cautelar que afectaba su patrimonio, impidiéndole realizar una operación en bolsa. Igualmente solicito ayuda para un familiar, quien se encontraba involucrado en un proceso penal; **QUINTO.-** Encontrándonos frente a un delito continuado –artículo ochentidós, inciso tres, del Código Penal- el plazo prescriptorio opera desde el día en que concluyó la actividad delictuosa, siendo este el veintiuno de abril de dos mil. Por otro lado, dado que el delito de Tráfico de influencias se sanciona con una pena máxima de cuatro años, la cual, a tenor de lo que

prevé el artículo ochenta del Código Penal en su primer párrafo, se constituye en plazo de prescripción. Sin embargo, este no resulta de aplicación al presente caso por haber operado la interrupción a la que alude el artículo ochentitrés del mismo cuerpo legal, el cual en su párrafo final, introduce lo que la doctrina nacional ha dado en denominar “plazo de prescripción extraordinario”, lo que en la práctica significa que cuando el tiempo transcurrido sobrepasa en una mitad al plazo ordinario de prescripción –que en el caso sub-judice resultaría de seis años- por mandato legal el referido plazo se reduce a la mitad, siempre que se presente el hecho de que el agente tenía de sesenticinco años al momento de la comisión del hecho configurante del ilícito penal materia de juzgamiento. **SEXTO.-** Atendiendo a que la hipótesis fáctica antes descrita se ha presentado en el caso de autos, resulta amparable la defensa de forma (excepción de prescripción extintiva) propuesta por el procesado; **SEPTIMO.-** Que la verificación de la hipótesis de hecho de la prescripción extintiva en sede penal, envía al juzgador –en el presente caso la Sala- la posibilidad de conocer el fondo de la controversia y, por tanto, expedir cualquier tipo de pronunciamiento sobre la culpabilidad o no del procesado.

Es decir, el examen de subsunción realizado entre los hechos configurantes del delito con el supuesto de hecho del tipo penal, queda absolutamente excluido, una vez advertida la circunstancia excepcional de que la prescripción extintiva opera como impedimento previo, pero a la vez definitivo, para pasar a calificar y posteriormente juzgar la presunta comisión del delito, en tanto aquella frustra la continuación del proceso penal e inhibe al juzgador de la posibilidad de realizar una declaración válida, en cualquier sentido, respecto a la imputación penal del procesado; **OCTAVO.-** Lo expresado en el considerando anterior permite apreciar que la institución procesal de la prescripción extintiva tiene por fundamento razones ligadas al principio de seguridad jurídica, en la medida en que tiene por objeto liberar al órgano jurisdiccional del deber de sancionar el ilícito penal, presumiendo que el tiempo transcurrido hace prescindible socialmente la represión del ilícito. Sin embargo, resulta imprescindible anotar que la institución amparada por la Sala en la presente resolución, está abandonada de contenido axiológico, en tanto, el órgano jurisdiccional no realiza un examen sustancial de los hechos configurantes del delito, sino únicamente del transcurso del tiempo necesario para dar por concluido el proceso sin un pronunciamiento sobre el fondo. Por eso afirma Carrara: “En materia penal el tiempo extingue la acción porque, además de la dificultad de la justificación del inocente, el tiempo ha hecho cesar el daño social en virtud del presunto olvido de la delincuencia, que conduce a la cesación de la impresión moral nacida de la misma, sea en los buenos, en quienes ha cesado el temor, sea en los malvados, en los cuales no tiene ya fuerza el mal ejemplo. Cesado el daño político, se hace inútil la reparación penal” (CARRARA, Francesco. “Programa del Curso de Derecho Criminal” N° quinientos setentiséis). En la misma tónica dice Ferri: “Si durante un período de tiempo, que el Código Penal – con renuncia previa al derecho-deber de castigar- fija en un término más o menos largo según la gravedad objetiva del delito o de la condena –pero que deberá subordinarse a la peligrosidad del delincuente- la acción penal no ha sido ejercitada, en la mayor parte de los casos este tiempo transcurrido, además de disminuir y hacer desaparecer la alarma social y el recuerdo del delito, haciendo más difícil la búsqueda de la prueba, puede asimismo demostrar que ha cesado la peligrosidad del procesado o condenado, si éste, en el entretanto, no ha cometido otro delito” (FERRI, Enrico. “Principios del Derecho Criminal”; pág. Ciento cincuentiuno); **NOVENO.-** Que, en consecuencia, la declaración de prescripción extintiva no libera al procesado de la responsabilidad moral derivada de actos

respecto de los cuales no se puede juzgar su participación. En todo caso, tampoco lo alcanza la duda que permita presumirlo inocente, en tanto tuvo dentro del ámbito de su voluntad decidir si continuaba el proceso a fin de que se establezca contundentemente su inocencia, a pesar de lo cual prefirió el escape jurídico, que no otra cosa es la prescripción extintiva, en tanto no renunció a sus efectos. Por estas razones declararon: **FUNDADA LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN** deducida por el procesado Genaro Delgado Parker o Genaro Salvador Delgado Parker; **MANDARON ARCHIVARSE** el proceso en lo que a él se refiere; **DISPUSIERON** la anulación de los antecedentes generados por este proceso.

El señor Fiscal Superior: no es necesario emitir opinión este momento.

La señorita representante de la Procuraduría: la Procuraduría va a se uso de sus derecho en forma escrita.

La señorita abogada del procesado Montesinos Torres: interpole recurso de apelación, fundamentándolo como sigue: En primer lugar, solamente hemos tenido quince minutos según lo que acordó la Dirección de Debates, sin embargo de la lectura de la resolución veo que en quince minutos se ha podido consultar hasta libros,..."

8.2. CASO: Lucchetti
R. N. N° 4166-2004
Corte Suprema de justicia de la República
Fecha: 27 de abril del 2005

Corte Suprema de Justicia de la República
Primera Sala Penal Transitoria
Recurso de Nulidad N° 4166-2004
Lima

Lima, veintisiete de abril del año dos mil cinco.-

VISTOS; con lo expuesto por la señora representante del Ministerio Público en su Dictamen obrante a fojas nueve del cuadernillo formado en esta instancia; y, **CONSIDERANDO además: Primero.-** Que, los integrantes de este Supremo Tribunal, circunscribiéndose al primer párrafo del artículo trescientos del Código de Procedimientos Penales, modificado por el Decreto Legislativo número novecientos cincuentinueve, sólo pueden pronunciarse con relación a los extremos impugnados debidamente, en este caso por parte del encausado **Andrónico Mariano Luksic Craig**, conforme es de verse del escrito anexado a fojas doscientos cuarenticinco del presente incidente, en observancia del principio de la no reforma en peor - "*non reformatio in peius*" - contenido en el indicado dispositivo legal; **Segundo.-** Que, se atribuye a los imputados Andrónico Mariano Luksic Craig, Gonzalo Menéndez Duque y Luis Fernando Pacheco Novoa, haber cometido el delito de tráfico de influencias al haberse coludido con Vladimiro Montesinos Torres para los efectos de obtener beneficios y resultados favorables en los problemas legales que venía afrontando la Empresa "**Lucchetti**" Perú Sociedad Anónima con la Municipalidad Provincial de Lima Metropolitana, para cuyo fin los dos primeros sostuvieron en forma directa una serie de reuniones, debido a que el último de los referidos, en su condición de Gerente General y Asesor Legal de la mencionada empresa, solamente es citado en tales conversaciones, las que en algunos casos fueron grabadas en cinta de video y audio, las mismas que datan del ocho de enero, diez de febrero, cinco y seis de marzo de mil novecientos noventaiocho, concretándose tal objetivo al dictarse la Resolución de Alcaldía número seis mil ochocientos cincuenta-noventaiocho, expedida por la Municipalidad Distrital de Chorrillos el veintinueve de diciembre de mil novecientos noventaiocho, a través de la cual se otorgó la licencia de funcionamiento a indicada empresa; **Tercero.-** Que, el artículo cuatrocientos del Código Penal, que prevé el delito de *Tráfico de Influencias*, señala taxativamente

Corte Suprema de Justicia de la República
Primera Sala Penal Transitoria
Recurso de Nulidad N° 4166-2004
Lima

los particulares sean considerados autores de delitos especiales (por que los tipos solo se dirigen a los funcionarios, salvo la corrupción del artículo cuatrocientos del Código Sustantivo en que puede ser cometido por cualquiera), *no restringe la participación* de ambos en la comisión de un delito especial; que la *calidad de agente no tiene relevancia en las reglas de participación*; el status de intraneus sólo es importante para los efectos de la autoría, en cambio, en la *participación lo que determina la imputación es la creación de riesgos de peligro o de lesión sobre el bien jurídico*; **Sétimo.-** Que en tal orden de ideas, no debe entenderse que el Código hace del instigador un autor, *sino que equipara en cuanto a la pena a los instigadores con los autores*; que, en efecto, se imputa a Andónico Luksic que, conociendo del poder real y político que tenía Montesinos Torres en el Poder Ejecutivo y, Judicial en particular, se contactó con él para motivarlo e instigarlo, sostenida y resueltamente, con ofertas dinerarias incluidas, a efecto de que los jueces fallaran a favor de la Empresa "Lucchetti" Perú Sociedad Anónima y en contra de la Municipalidad Provincial de Lima. En consecuencia no solo la pena, sino también la prescripción, ha de tener el mismo tratamiento que la que corresponde a Montesinos Torres, puesto que no existe en el caso sub materia, la incomunicabilidad de circunstancias y cualidades que solo afectan a los autores; en tal orden de ideas, se declara improcedentes los agravios del impugnante; **Octavo.-** Que, conforme a lo antes expuesto, no es pertinente pronunciarse sobre las peticiones formuladas en esta instancia por los abogados de Luis Fernando Pacheco Novoa, para que se resuelva esta incidencia conjuntamente con la número cuarentiuno treinta-dos mil cuatro y, de Gonzalo Menéndez Duque, adhiriéndose al presente recurso de nulidad; **Noveno.-** Que, en ese sentido, tenemos que los hechos denunciados se perpetraron entre el ocho de enero de mil novecientos noventa y ocho (fecha en que se produjo la reunión con Vladimiro Lenin Montesinos Torres en el Servicio Nacional de Inteligencia - SIN -) y el veintinueve de diciembre de mil novecientos noventa y ocho (fecha de la Resolución de Alcaldía número sesentiocho cincuenta-noventa y ocho-MDCH.,

Corte Suprema de Justicia de la República
Primera Sala Penal Transitoria
Recurso de Nulidad N° 4166-2004
Lima

*expedida por la Municipalidad Distrital de Chorrillos a través de la cual se otorgó la Licencia de Funcionamiento de la fábrica); que dentro de esa perspectiva, debe enfatizarse que el hecho del partcipe, en este caso del instigador, no es independiente al del autor, extendiéndose a aquél todos los elementos positivos y negativos del tipo penal realizado por este último, entre los cuales se encuentra la institución de la prescripción; por estos fundamentos y por mayoría; **declararon: NO HABER NULIDAD** en la resolución de fojas doscientos cuarentiuno, su fecha siete de diciembre del dos mil cuatro, que declara infundada la Excepción de Prescripción deducida por el imputado **Andrónico Mariano Luksic Craig** a través del escrito anexado a fojas ciento diez; cuaderno derivado de la instrucción que se le sigue, por el delito contra la Administración Pública – Tráfico de Influencias –, en agravio del Estado; **DISPUSIERON:** Que, la Sala Superior continúe con la secuela del proceso según su estado; con lo demás que contiene dicha resolución; y, los devolvieron.-*

S. S.

BALCÁZAR ZELADA

BARRIENTOS PEÑA

VEGA VEGA

PRÍNCIPE TRUJILLO

SE PUBLICO CONFORME A LEY

ROSA HERMINIA RODRIGUEZ
1ra. Sala Penal Transitoria
Corte Suprema de Justicia de la República

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
PRIMERA SALA PENAL TRANSITORIA
R.N. N° 4166-2004
CUAD. DE EXCEPCION DE PRESCRIPCION
LIMA**

LA SECRETARIA DE LA PRIMERA SALA PENAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CERTIFICA QUE EL VOTO SINGULAR DEL SEÑOR VOCAL SUPREMO ROBINSON OCTAVIO GONZALES CAMPOS ES COMO SIGUE:

Lima, veintisiete de abril
del año dos mil cinco.-

VISTOS: de conformidad con lo opinado por la señora representante del Ministerio Público en su Dictamen obrante a fojas nueve del cuadernillo formado en esta instancia; y, **CONSIDERANDO:** Primero.- Que, es materia de recurso de nulidad la resolución que en primera instancia emitió la Sala Penal Especial "A", de fecha siete de diciembre del dos mil cuatro que declaró *infundada* la excepción de prescripción deducida por el encausado **Andrónico Mariano Luksic Craig**; asimismo, la petición de los encausados **Gonzalo Menéndez Duque** y **Luis Fernando Pacheco Novoa**, invocando el efecto extensivo de la resolución, en caso que este Supremo Tribunal acogiera la excepción de prescripción. Segundo.- Que, en el presente caso, se atribuye a los imputados **Andrónico Mariano Luksic Craig**, **Gonzalo Menéndez Duque** y **Luis Fernando Pacheco Novoa**, la comisión del delito de tráfico de influencias que se sustenta en las reuniones que sostuvieron los dos primeros con el ex asesor presidencial, **Vladímir Montesinos**, con la finalidad de obtener beneficios y resultados favorables en los problemas legales que enfrentaba la empresa **Lucchetti Perú Sociedad Anónima** con la Municipalidad Provincial de Lima Metropolitana. Que, conforme consta de las cintas de video y audio existentes, en

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
PRIMERA SALA PENAL TRANSITORIA
R.N. N° 4166-2004
CUAD. DE EXCEPCION DE PRESCRIPCION
LIMA**

los que se menciona al tercero de los nombrados, estas reuniones se habrían producido los días ocho de enero, diez de febrero, y cinco y seis de marzo del año mil novecientos noventa y ocho. Que, de acuerdo con la imputación, la intercesión del ex asesor Montesinos a favor de la empresa Lucchetti se habría concretado en la expedición de la Resolución de Alcaldía número seis mil ochocientos cincuenta, guión noventa y ocho, de la Municipalidad Distrital de Chorrillos, de fecha veintinueve de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, la misma que otorgó licencia de funcionamiento a la indicada empresa. **Tercero.-** Que, es necesario precisar que la institución de la prescripción, según lo establece el inciso primero del artículo setenta y ocho del Código Penal, es una de las formas de extinción de la acción penal y conforme a lo previsto en el artículo Quinto del Código de Procedimientos Penales, dicho medio de defensa puede deducirse en cualquier estado del proceso y ser resuelto, inclusive, de oficio por el órgano jurisdiccional; **Cuarto.-** Que, conforme al artículo ochenta del Código Penal, el cómputo de la prescripción se realiza teniendo en cuenta el máximo de la pena fijada por la ley para el delito imputado; vale decir, teniendo en cuenta la pena abstracta. **Quinto.-** Que el artículo cuatrocientos del Código Penal (texto original, vigente al momento de los hechos), que prevé el delito de tráfico de influencias imputado al recurrente, establece una sanción máxima de cuatro años de pena privativa de la libertad, periodo que corresponde al plazo ordinario de prescripción. Que en el caso de autos el plazo ordinario se convierte en extraordinario con el incremento de dos años, conforme se desprende del artículo ochenta y tres del Código Penal. **Sexto.-** Que, los hechos denunciados se habrían cometido entre el ocho de enero de mil novecientos noventa y ocho (fecha en que se produjo la primera reunión entre el recurrente y Vladimiro Montesinos

4 años
plazo
ordinario
de prescripción

plazo
extraordinario

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
PRIMERA SALA PENAL TRANSITORIA
R.N. N° 4166-2004
CUAD. DE EXCEPCION DE PRESCRIPCION
LIMA**

Torres en el Servicio Nacional de Inteligencia – SIN) y el seis de marzo de mil novecientos noventa y ocho (fecha en que se produjo la última reunión con Vladimiro Montesinos Torres en el Servicio Nacional de Inteligencia – SIN); esto es, conforme al anterior considerando, en el caso de autos la prescripción extraordinaria habría operado el seis de marzo del año dos mil cuatro. **Sétimo.-** Que, en este caso no resulta aplicable el supuesto del artículo cuarenta y seis "A" del Código Penal que permite al juez "aumentar la pena hasta en un tercio por encima del máximo legal de pena privativa de libertad" en los casos en que un funcionario o servidor público, aprovechándose de su cargo, comete un hecho punible. Como es de verse, esta disposición se encuentra vinculada a la determinación judicial de la pena, es decir, a la individualización que hace el juez de la pena concreta a imponerse al condenado, en la sentencia. **Octavo.-** Que, aceptar que la agravante genérica descrita en el artículo cuarenta y seis "A" del Código Penal influye en la determinación de los plazos de prescripción, conduciría al absurdo de admitir que todas las agravaciones y atenuaciones, previstas en la ley penal (por ejemplo; el error vencible de prohibición) y aún en la ley procesal penal (por ejemplo; la colaboración eficaz) también influirían en los plazos de prescripción. **Noveno.-** Que, la pretensión de "extender los efectos de la agravante genérica descrita en el artículo cuarenta y seis "A" del Código Penal a los supuestos de prescripción afecta el principio de seguridad jurídica, que según nuestro Tribunal Constitucional (Expediente cero cero dieciséis - dos mil dos - AI/TC) es un derecho implícitamente reconocido en la Constitución y que "forma parte consubstancial del Estado Constitucional de Derecho". La predecibilidad de las conductas (en especial, las de los poderes públicos) frente a los supuestos previamente determinados por el Derecho, es la garantía que informa a todo el

aggravante
genérica
46 "A"

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
PRIMERA SALA PENAL TRANSITORIA
R.N. N° 4166-2004
CUAD. DE EXCEPCION DE PRESCRIPCION
LIMA**

ordenamiento jurídico y que consolida la interdicción de la arbitrariedad. En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional español declaró que, la seguridad jurídica supone 'la expectativa razonablemente fundada del ciudadano en cuál ha de ser la actuación del poder en aplicación del Derecho' (STCE treinta y seis/ mil novecientos noventiuno, FJ cinco)". Décimo.- Asimismo, calcular el plazo de la prescripción tomando como objeto de referencia la agravante genérica del artículo cuarenta y seis "A" del Código Penal atenta también contra el principio de legalidad penal sustantiva, en tanto la determinación del plazo de prescripción no se funda en la pena previamente determinada por el legislador (pena abstracta), sino en una circunstancia accidental del delito -en tanto no afecta su presencia ni su punibilidad, sino la gravedad o entidad de la pena (Ver: REVILLA Llaza, Percy. "Incomunicabilidad de las circunstancias y cualidades que afectan la responsabilidad de autores y partícipes". En: Código penal comentado. Tomo I. Gaceta Jurídica. Lima, 2004, p.972) - que forma parte de la individualización judicial de la sanción (pena concreta) y que es fijada al final del proceso. Undécimo.- Que, el artículo 26 del Código Penal prescribe que "*Las circunstancias y cualidades que afecten la responsabilidad de algunos de los autores o partícipes no modifican la de otros autores o partícipes del hecho punible*"; por tanto, al no tener el recurrente la condición de funcionario público, no se le pueden transferir las circunstancias personales que corresponden a su coimputado, Vladimiro Montesinos, menos aún si tienen la condición de instigador del delito instruido y se tratan de particulares. Duodécimo.- Que, en el presente caso no es factible aplicar el efecto extensivo de esta resolución a los encausados Gonzalo Menéndez Duque y Luis Fernando Pacheco Novoa, habida cuenta que se han formado cuadernos de recurso de nulidad para cada uno, las mismas que

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
PRIMERA SALA PENAL TRANSITORIA
R.N. N° 4166-2004
CUAD. DE EXCEPCION DE PRESCRIPCION
LIMA**

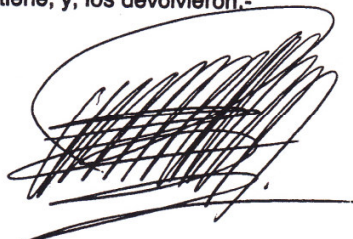
ordenamiento jurídico y que consolida la interdicción de la arbitrariedad. En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional español declaró que, la seguridad jurídica supone 'la expectativa razonablemente fundada del ciudadano en cuál ha de ser la actuación del poder en aplicación del Derecho' (STCE treinta y seis/ mil novecientos noventiuno, FJ cinco)". Décimo.- Asimismo, calcular el plazo de la prescripción tomando como objeto de referencia la agravante genérica del artículo cuarenta y seis "A" del Código Penal atenta también contra el principio de legalidad penal sustantiva, en tanto la determinación del plazo de prescripción no se funda en la pena previamente determinada por el legislador (pena abstracta), sino en una circunstancia accidental del delito -en tanto no afecta su presencia ni su punibilidad, sino la gravedad o entidad de la pena (Ver: REVILLA Llaza, Percy. "Incomunicabilidad de las circunstancias y cualidades que afectan la responsabilidad de autores y partícipes". En: Código penal comentado. Tomo I. Gaceta Jurídica. Lima, 2004, p.972) - que forma parte de la individualización judicial de la sanción (pena concreta) y que es fijada al final del proceso. Undécimo.- Que, el artículo 26 del Código Penal prescribe que "*Las circunstancias y cualidades que afecten la responsabilidad de algunos de los autores o partícipes no modifican la de otros autores o partícipes del hecho punible*"; por tanto, al no tener el recurrente la condición de funcionario público, no se le pueden transferir las circunstancias personales que corresponden a su coimputado, Vladimiro Montesinos, menos aún si tienen la condición de instigador del delito instruido y se tratan de particulares. Duodécimo.- Que, en el presente caso no es factible aplicar el efecto extensivo de esta resolución a los encausados Gonzalo Menéndez Duque y Luis Fernando Pacheco Novoa, habida cuenta que se han formado cuadernos de recurso de nulidad para cada uno, las mismas que

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
PRIMERA SALA PENAL TRANSITORIA
R.N. N° 4166-2004
CUAD. DE EXCEPCION DE PRESCRIPCION
LIMA**

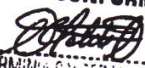
serán resueltas en su oportunidad; máxime si se tiene en cuenta lo dispuesto por el artículo ochentiocho del Código Penal en donde establece que la prescripción corre, se suspende o se interrumpe separadamente para cada uno de los partícipes del hecho punible; por los fundamentos antes expuestos, **MI VOTO** es porque se declare: **HABER NULIDAD** en la resolución de fojas doscientos cuarenta y uno, su fecha siete de diciembre del dos mil cuatro, que declara infundada la Excepción de Prescripción deducida por el imputado **ANDRÓNICO MARIANO LUKSIC CRAIG** a través del escrito anexado a fojas ciento diez; y, **REFORMÁNDOLA**, declararon: **FUNDADO** dicho medio de defensa a favor del referido **ANDRÓNICO MARIANO LUKSIC CRAIG**; cuaderno derivado de la instrucción que se le sigue, por el delito contra la Administración Pública – Tráfico de Influencias-, en agravio del Estado; **DISPUSIERON**: Que, se proceda con arreglo a lo dispuesto por el Decreto Ley número veinte mil quinientos setenta y nueve; con lo demás que contiene; y, los devolvieron.-

S.

GONZALES CAMPOS R. O.



SE PUBLICO CONFORME A LEY


ROSA HERMINDA CALDERÓN RODRÍGUEZ
SECRETARIA (a)
1ra. Sala Penal Transitoria
CORTE SUPREMA

8.2.1. CASO: Luksic Craig
H.C. 74-05
Corte Superior de justicia de Lima
Fecha: 31 de octubre de 2005

RESOLUCIÓN N° 11490

SS. NEYRA FLORES
CARRERA CONTI
RODRIGUEZ VEGA

H.C.74-05

Lima, treintiuno de octubre del
dos mil cinco.-

VISTOS; oído el informe oral, interviniendo como Vocal Ponente la doctora **Rodríguez Vega**; y **CONSIDERANDO**:
Primero: Que, viene en grado de apelación la sentencia que obra de fojas trescientos veintidós, su fecha seis de octubre del dos mil cinco, que declara Infundada el proceso constitucional de Habeas Corpus interpuesto por Andrónico Luksic Craig contra los señores Vocales integrantes de la Primera Sala Transitoria Penal de la Corte Suprema de la República: José María Balcazar Zelada, Pastor Barrientos Peña, César Vega Vega y Hugo Príncipe Trujillo; por haber vulnerado sus derechos constitucionales de defensa, motivación de resoluciones judiciales, presunción de inocencia, tutela jurisdiccional efectiva y vulneración al principio de Legalidad y culpabilidad, con la expedición de la resolución de fecha veintisiete de abril del dos mil cinco emitida por los accionados, que en mayoría declaró No Haber Nulidad de la resolución de la Primera Sala Penal Especial que declaró Infundada la Excepción de Prescripción deducida a su favor, en el proceso que se le sigue por delito de Tráfico de Influencias; solicitando se declare la nulidad de la citada resolución; **Segundo**: Que, el recurrente alega que se le viene procesando por delito de Corrupción de Funcionarios en la modalidad de **Tráfico de Influencias**, contemplado en el artículo cuatrocientos del Código Penal, que a la fecha en que acontecieron los hechos imputados, era sancionado con pena privativa de la libertad no mayor de cuatro años; consecuentemente, el plazo ordinario y extraordinario de la prescripción penal es de seis años para el presente caso, en atención a que al atribuirsele haber sostenido reuniones con su co-acusado Vladimiro Montesinos Torres

con la finalidad de obtener beneficios y resultados favorables en los problemas legales que enfrentaba la Empresa Lucchetti Perú Sociedad Anónima con la Municipalidad Provincial de Lima Metropolitana, este último lo concreta con la expedición de la Resolución de Alcaldía número seis mil ochocientos cincuenta - noventaiocho, expedido por la Municipalidad Distrital de Chorrillos, de fecha veintinueve de diciembre de mil novecientos noventaiocho, mediante la cual se otorgó licencia de funcionamiento a la indicada empresa; y que, pese haber fundamentado adecuadamente en la incidencia de excepción de prescripción, los demandados lo mantienen arraigado a un proceso penal, que ha prescrito por aplicación de la ley; **Tercero:** Que, los demandados, fundamentan la resolución materia de cuestionamiento constitucional, en que la institución de la prescripción no resulta aplicable al caso sub-examine porque: a) el delito imputado al ahora accionante es en calidad de instigador, y las conversaciones sostenidas por éste con el entonces asesor presidencial Vladimiro Torres, con el objeto de obtener beneficios y resultados favorables en los problemas legales de la empresa arriba citada, se produjeron con fecha ocho de enero, diez de febrero, cinco y seis de marzo de mil novecientos noventaiocho, **conforme a las grabaciones en cinta de video y audio**, el que se concretó con el otorgamiento de la licencia de funcionamiento de la Empresa "Lucchetti Perú Sociedad Anónima", mediante resolución de fecha veintinueve de diciembre del mismo año, estableciendo que este es el período en el que se perpetraron los hechos denunciados; b) que **la participación de los particulares en los delitos especiales**, se fundamentan en que la administración pública puede ser dañada no sólo por los *intraneus* que se encuentran en una situación prevalente en relación al bien jurídico, sino también por los particulares que se encuentran fuera del sistema administrativo, de ahí que **ambos** responden como **participes** por haber generado riesgos prohibidos, materializando con ello el principio constitucional de igualdad ante la ley, y por ende a

ser sancionados sin prelación alguna, esto es los funcionarios públicos como autores y los segundos como partícipes, y si bien en **los delitos especiales** los tipos penales sólo se dirigen a los funcionarios, el artículo cuatrocientos del Código Penal prevé que el delito de tráfico de influencias puede ser cometido por cualquier persona, consecuentemente, no restringe la participación de particulares y/o funcionarios en la comisión de un delito especial, esto es, que *la calidad de agente no tiene relevancia para los efectos de la autoría, por lo que el hecho del partícipe, en este caso del instigador, no es independiente al del autor*, y, amparándose en el artículo veinticuatro del Código Penal, equiparan la pena que le correspondería a los instigadores con la de los autores, extendiéndole a aquél todos los elementos positivos y negativos del tipo penal realizado por este último, entre los cuales se encuentra la institución de la prescripción, por ello *el recurrente ha de tener el mismo tratamiento que le corresponde a Montesinos Torres (autor)*, por lo que no se le aplica **la incommunicabilidad de circunstancias y cualidades** personales, prevista en el artículo veintiséis del Código Penal; **Cuarto:** Que, por su parte, la defensa del recurrente señaló en su informe oral, que los accionados al emitir la resolución referida, han vulnerado el debido proceso, porque confunden fechas, personajes, situaciones, citas y reuniones, lo que constituye consignación de datos falsos en la medida que el ocho de enero, diez de febrero y cinco de marzo de mil novecientos noventa y ocho, el accionante no se encontraba en el Perú, tal como lo acredita con el record migratorio obrante en autos; al establecer que el delito instruido tiene la calidad de "delito continuado" o "permanente", por cuanto señalan que el citado delito se perpetró entre el ocho de enero y el veintinueve de diciembre del mil novecientos noventa y ocho (*fecha de la resolución de alcaldía a través de la cual se otorgó la licencia de funcionamiento de la fábrica*), pese a que la única reunión que éste sostuviera con el ex asesor del Presidente de la República, Montesinos Torres se produjo el seis de marzo del citado año, por lo

que se estaría efectuando interpretaciones contrarias al derecho; que, la citada resolución al no aceptar la prescripción, no señala cuando prescribiría la acción penal materia del Incidental, en tanto que la resolución recurrida hacía mención que el plazo que debía transcurrir era de ocho años; que, los demandados otorgan al delito de tráfico de influencias la calidad de delito especial al considerarlo como un delito de infracción del deber de funcionario público, confundiendo los niveles de participación de los intervinientes en la acción típica, no efectuando una diferenciación entre la calidad de partícipe y la de autor del delito, vulnerándose con ello lo previsto en el artículo veintiséis del Código Penal, ya que la aplicación del artículo cuarentiséis -A del citado cuerpo de leyes a Vladimiro Montesinos en su calidad de autor, *no le resulta aplicable al recurrente, no solo porque la pena no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho y por consiguiente, no se le puede atribuir la calidad que ostenta el autor a un partícipe, sino que este numeral se encuentra vinculado únicamente a la determinación judicial de la pena y no al plazo prescriptorio de la acción penal;*

Quinto: Que, de otro lado, el A-quo resolvió declarando Infundada la presente demanda en atención a que no existe vulneración de los principios alegados por el recurrente, en tanto que no sólo es materia de análisis la prescripción de la acción penal (cómputo, plazo y condición del actor), sino también el tratamiento de la tesis de infracción de deber o de dominio del hecho al delito de tráfico de influencias; que, en cuanto a lo primero, el artículo ochenta del Código Penal prevé el parámetro del plazo de la acción penal, la cual dependerá del máximo de la pena fijada para cada delito (pena abstracta), recurriendo a ello diversas modificaciones como el plazo extraordinario fijado en el numeral ochentitrés, in fine, del mismo cuerpo de leyes, viéndose ambos afectados por las circunstancias previstas en el acotado, como los artículos ochentiuno (*reducción del plazo por la edad*), cuarentisés-A (*ampliación a un tercio por encima del máximo por la condición del agente*), y ochenta, último

párrafo, *(duplica del plazo por la afectación al patrimonio del Estado)*, constituyendo todos ellos márgenes que el Magistrado tomará en cuenta como criterio para la determinación del mínimo y máximo de la pena abstracta, y así determinar el plazo de prescripción para cada delito, siendo que la aplicación del artículo veinticuatro del Código Penal sustantivo, referida a la pena correspondiente al instigador, se aplica a la pena abstracta en tanto que en ese momento comienza el análisis jurídico del Juez para establecer las responsabilidades en el hecho denunciado como delito, y que la aplicación de la incommunicabilidad de las circunstancias que afectan la responsabilidad y punibilidad entre quienes intervienen en la comisión de un hecho punible, previsto en el numeral veintiséis del acotado, se determinará en la sentencia (pena en concreto), consecuentemente, resulta aplicable para la determinación de la pena abstracta, aplicable al plazo de prescripción de la acción penal, la ampliación prevista en el artículo cuarentiséis -A del Código Penal, en tanto que las condiciones previstas en el artículo veintiséis, cuarenticinco y cuarentiséis del acotado se verificará al momento de expedir resolución final; asimismo, que al tratar el delito de tráfico e influencias con la tesis de infracción de deber o de dominio del hecho, y por, consiguiente, la responsabilidad del extraneus frente a estos delitos, ello se debe a que existen diversas posturas doctrinarias, y que el criterio adoptado por la Sala Penal de la Corte Suprema accionada, tanto en su postura en mayoría como en minoría, no hace sino sustentarse en dos de las distintas posiciones, encontrándose ello dentro del margen de discrecionalidad que tienen todos los magistrados para resolver el caso concreto puesto en su conocimiento; que igual discrepancia ocurre en la doctrina respecto a la fecha de inicio del plazo de prescripción para este ilícito, por lo que dicha interpretación resulta manifiestamente razonable y compatible con las alternativas que ofrece la dogmática penal;

Sexto: Que, el proceso de Hábeas Corpus, es una garantía constitucional, que a tenor de lo dispuesto en los artículos dos y

veinticinco del Código Procesal Constitucional, Ley veintiocho mil doscientos treintisiete, procede ante el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos; que cuando se invoque la amenaza de violación, ***ésta debe ser cierta y de inminente realización***, siendo el objeto de las acciones de garantía el reponer al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional; asimismo, la norma invocada en su numeral cuarto prevé "el habeas corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva. Se entiende por tutela procesal efectiva aquella situación jurídica de una persona en la que se respetan, de modo enunciativo, sus derechos de libre acceso al órgano jurisdiccional, a probar, de defensa, al contradictorio e igualdad sustancial en el proceso, a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada ni sometido a procedimientos distintos de lo previstos por la ley, a la obtención de una resolución fundada en derecho"; **Sétimo:** Que, analizando la resolución apelada, así como los argumentos del demandante y demandados, se tiene que, si bien es cierto existen diversas doctrinas que enmarcan distintas posiciones, no sólo en los temas arriba citados sino en lo concerniente a toda materia jurídica, ello no impide que el juez constitucional fiscalice si uno o algunos de los derechos con valor constitucional están siendo vulnerados, no implicando ello una intromisión a lo resuelto por un juez ordinario, incluido los miembros de la Corte Suprema de la República en el ejercicio de su función; que, al respecto en reiterada jurisprudencia, emitida por el Tribunal Constitucional (STC-3282-2004-HC. Caso Almeida Tasayco), ha quedado plenamente establecido que si bien el juzgador constitucional no puede invadir el ámbito de lo que es propio y exclusivo del juez ordinario, dicha premisa tiene como única y obligada excepción la tutela de los derechos fundamentales, pues es evidente que allí donde el ejercicio de una atribución exclusiva

vulnera o amenaza un derecho reconocido por la Constitución, se tiene la posibilidad de reclamar protección especializada en tanto es el propósito por el que se legitima el proceso constitucional dentro del estado constitucional de derecho; que, asimismo para proceder a dicho control existen dos objetivos: la tutela judicial efectiva como marco y el debido proceso como expresión específica en sus respectivas dimensiones, entendida la primera como el derecho de acceso a los órganos de justicia, la segunda significa la observancia de los principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso;

Octavo: Que, frente a los argumentos del accionante, referente a que se rechaza el medio de defensa deducido por atribuir a la conducta imputada de partícipe (instigador), la misma calidad del autor y por ende le correspondería la misma pena, equiparándola específicamente a la desplegada por Vladimiro Montesinos Torres, en tanto que éste tenía la condición de funcionario público, queda claro para este Colegiado, en base a la dogmática penal, opinión de juristas locales y la aplicación jurisdiccional constante, en el sentido que el ilícito materia del proceso penal (tráfico de influencias), puede ser cometido "por cualquier persona", que no requiere condición especial; por lo que la aplicación de la circunstancia agravante por condición del **sujeto activo** prevista en el artículo cuarentiséis -A del Código Penal resulta aplicable a todo aquel que se aprovecha de su condición especial para perpetrar el delito, en este caso específico, de funcionario público, por haber sido en la fecha en que se perpetró el ilícito asesor del Presidente de la República del Perú, cargo del que se valió para cometer un hecho ilícito, por tanto dicha norma debe ser aplicada a todo autor del delito que revista dicha condición, y extensiva a todo partícipe de la misma conducta **bajo esa misma condición personal especial**, en aplicación de lo previsto en los artículos veinticuatro y veinticinco del citado cuerpo de leyes, en razón de que dicha conducta implica además una "infracción del deber", caso distinto al que se le da al recurrente, quien además de haber sido considerado partícipe particular

(extraneus), **no reviste esa cualidad especial, y a quien no se le puede aplicar cualquier agravante que exija una condición especial en el agente, cualidad que no ostenta**; por tanto, la aplicación del aumento de la pena para el autor, prevista en el artículo cuarentiséis -A del Código Penal, **no le es aplicable al recurrente**; **Noveno**: Que, frente al criterio de los accionados y el Juez Constitucional, que sostienen que la aplicación de numeral cuarentiséis-A del Código Penal, resulta aplicable para el cómputo de la pena abstracta y sirve de parámetro para el cómputo del plazo de prescripción, - criterio que comparte el Colegiado pero bajo el criterio establecido en el considerando anterior -, no es válido para sostener, que el instigador, que no posee la misma cualidad personal, deberá ser reprimido con la pena que le corresponda al autor que cometió el hecho valiéndose de su condición de funcionario público; consideramos que, aplicando la ley penal invocada así como la Constitución del Estado - que manda efectuar interpretación con sujeción a la ley (principio de legalidad) - y efectuando interpretaciones ante duda o vacío de la ley, de forma favorable al procesado (favor rei), la aplicación de las condiciones que califican y/o agravan la situación jurídica de un autor, le alcanza al partícipe únicamente **hasta donde su condición personal le permita ser aplicable**, esto es que el accionante Andrónico Luksic Graig al no ostentar la calidad de funcionario o servidor público solo le será aplicable la sanción prevista en el tipo penal señalado a la fecha de comisión del ilícito, y no la condición agravada de su co-procesado Montesinos Torres, por ende no se le puede prolongar el cómputo del plazo de la prescripción de la acción por una pena abstracta que no le correspondería jamás aplicar (artículo cuarentiséis-A), porque las circunstancias y cualidades que afecta la responsabilidad del autor o partícipe - en este caso de Vladimiro Montesinos -, no deben modificar la responsabilidad de los otros autores o partícipes del hecho punible, conforme lo prescribe el artículo veintiséis del Código Penal, que recoge la incomunicabilidad en las circunstancias de

participación, que los demandados expresamente han dejado de aplicar, conforme al séptimo considerando de su resolución cuestionada, en razón de que consideran que "el instigador tuvo conocimiento pleno del poder real y político que tenía Montesinos Torres en el Poder Ejecutivo y Judicial", interpretación que vulnera el Principio de Legalidad reconocido por nuestra Constitución Política en su artículo segundo, inciso veinticuatro, literal d), que prevé: *"Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley"*; principio recogido en el Título Preliminar, artículo II del Código Penal, además de una interpretación *in malam partem* de los dispositivos de nuestro Código Penal, significando con ello desconocer los criterios de política criminal que el Estado Peruano ha adoptado en el Código Penal a través del Poder Legislativo encargado de dictar las leyes en esa materia, y Tratados Internacionales de Protección de derechos fundamentales que establecen la aplicación del principio "Favor rei"; garantías que de ninguna manera pueden ser vulneradas para lograr contar con más tiempo por la demora en resolver definitivamente la situación jurídica del recurrente; **Décimo:** Que, en cuanto al inicio del cómputo del plazo de prescripción de la acción penal, que también es materia de cuestionamiento, de igual forma, la ley y la dogmática penal estudiada e impartida por los entes respectivos (Universidades, Academia de la Magistratura y juristas), señalan que ***el delito de tráfico de influencias es de comisión instantánea***, de naturaleza de peligro y simple actividad, cuyo núcleo de injusto se enfatiza en las influencias dirigidas al "interesado", cuyo bien jurídico protegido en el presente caso es el de una influencia real, que menoscaba el correcto y normal funcionamiento de la Administración Pública, cuyo prestigio debe ser preservado; que, no requiere la consumación de la influencia para que tipifique el delito, el cual se produjo por parte de los acusados Andrónico Luksic

y Montesinos Torres con sólo la entrevista realizada por ambos el seis de marzo de mil novecientos noventa y ocho y no la atribuida por los señores vocales accionados que la han extendido en el tiempo, desde el ocho de enero hasta el veintinueve de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, tomando como referencia el término de la acción, esto es el veintinueve de diciembre de mil novecientos noventa y ocho en que se concreta el tráfico de influencias con la dación de la resolución expedida a favor de la empresa Lucchetti, criterio que no compartimos pero que en todo caso, la acción penal ***prescribió bajo ese supuesto el veintiocho de diciembre del dos mil cuatro; en tanto que el plazo extraordinario previsto en nuestra norma penal para el presente caso es de seis años a partir de que el delito se perpetró y no desde que se descubrió;*** y, conforme a lo expuesto en el artículo ochenta y ocho del Código Penal, la prescripción corre, se suspende o se interrumpe *separadamente para cada uno de los partícipes del hecho punible;*

Undécimo: Que, en cuanto a los extremos alegados por el accionante, de vulneración de sus derechos constitucionales de defensa, motivación de resoluciones judiciales y tutela jurisdiccional efectiva, al confundir fechas, personajes, situaciones, citas y reuniones, consignar datos falsos, vulnerándose la presunción de inocencia, al no señalar cuando prescribiría la acción penal materia del incidente, se advierte que la resolución de fecha veintisiete de abril del dos mil cinco, incurre en grave infracción de la Constitución del Estado, por cuanto no solo vulnera el Principio de Legalidad citado en el noveno considerando, sino también el Principio de Culpabilidad, por cuanto contraviene lo dispuesto por los artículos VII y VIII del Título Preliminar del Código Penal, por cuanto dichas normas disponen, respectivamente, que: *"La pena requiere de la responsabilidad penal del autor"*, y *"La pena no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho"*, por cuanto ha extendido la condición gravosa de la pena respecto del autor a los partícipes del delito, sin tomar en cuenta que la responsabilidad penal es por el hecho; sino

además quebranta la garantía de **la motivación** de las resoluciones, recogida en el artículo ciento treintinueve, inciso quinto de la carta Fundamental del Estado que establece que "*Son principios y derechos de la función jurisdiccional: La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan*", la cual debe plasmarse en la obtención de una resolución con sólida argumentación jurídica, es decir, razonable, congruente y fundada en derecho;

— **Duodécimo:** Que, la alegación de atentado contra la libertad individual al verse sometido a un proceso penal en el cual la acción penal ya prescribió, ello también resulta atendible, conforme a lo expuesto en las consideraciones precedentes, la extinción de la acción penal se ha producido para el accionante, y si bien se ha suspendido la medida de impedimento de salida del país, ello no enerva que se encuentre arraigado a un proceso penal de manera injustificada e ilegítima, toda vez que la acción persecutoria por parte del Estado ha cesado y su aplicación es de puro derecho;

✓ **Décimo Tercero:** Que, aunado a lo expuesto, existe precedente en cuanto al criterio aplicable a los particulares en los casos de delitos de tráfico de influencias, donde no sólo concurren como **instigadores**, sino también le resulta aplicable la pena fijada en el tipo penal sin la concurrencia de alguna agravante **si los agentes no ostentaban dicha calidad**, conforme lo han resuelto Salas Penales Superiores de la misma especialidad que la que origina el pronunciamiento de la Sala Penal Suprema que se cuestiona con este Proceso Constitucional, como son los casos de los ciudadanos peruanos Dionisio Romero Seminario, auto de la Tercera Sala Penal Especial, Incidente número cero catorce-cero uno-G, de fecha treintinueve de octubre del dos mil cinco, Incidente treintidós-dos mil uno-D, auto de No ha lugar a abrir instrucción a Javier Valle Riestra Gonzáles Olaechea por prescripción de la acción penal, y Genaro Delgado Parker, expediente cero veintitrés-dos mil uno,

apartamiento del proceso por haber prescrito la acción penal, autos de la Sala Penal Superior Especial donde también han resuelto extinguir la acción penal por prescripción, pese a que conjuntamente con ello se le procesa a Vladimiro Montesinos Torres, funcionario público y otros en la misma condición funcional; así como lo dictaminado por el Fiscal Supremo en la incidencia de prescripción de la acción penal que motivó la resolución cuestionada, obrante a fojas treintisiete, y lo opinado por el Fiscal Superior en el expediente principal, en su dictamen acusatorio contra Andrónico Luksic Craig que en copia corre a fojas ciento cuarentitrés, solicitando se le imponga al ahora accionante cuatro años de pena privativa de la libertad (defensores de la legalidad del proceso), corroboran que es el máximo de la pena abstracta conminada en el artículo cuatrocientos del Código Penal por el delito de Tráfico de Influencias para el recurrente, atendiendo a que únicamente se encuentra investigado por dicho ilícito, y no por el delito de asociación ilícita para delinquir, como sí lo están sus co-procesados Montesinos Torres, Huertas Caballero, Solís Cano y Borobio Guede; **Décimo Cuarto:** Que, finalmente, resulta preocupante que procesos por delitos contra la administración pública en agravio del Estado -como el presente tráfico de influencias contra el accionante y otros -, no hayan merecido la atención oportuna que requerían y expedirse la sentencia que corresponda en plazo razonable, pues a la fecha han transcurrido más de **cuatro años** desde que se descubrió el hecho delictivo, se formuló la denuncia penal y se abrió instrucción, no habiendo llegado el proceso a tal estado; por lo que exige la necesidad de poner en conocimiento de los órganos de control del Ministerio Público y Poder Judicial, a fin que previa a las investigaciones, se esclarezcan las causas que han provocado ello y si esta demora tiene visos de reprochabilidad funcional; **Décimo Quinto:** Que, en cuanto a la aplicación del primer párrafo del artículo octavo del Código Procesal Constitucional, sobre la reprochabilidad que se les podría atribuir a los accionados por haber

expedido la resolución, materia de habeas corpus, infringiendo la Constitución Política como se ha fundamentado, no se advierte que su conducta haya sido con la intención de afectar al recurrente, sino que aplicaron un criterio jurisdiccional, buscando que no hubiere impunidad y se diera una respuesta adecuada a la sociedad, sin tener en cuenta las garantías constitucionales que hemos precisado en nuestros considerandos que vicia el "debido proceso" y produce nulidad insalvable, como ocurrió con las disposiciones de los Decretos Leyes: Veinticinco mil cuatrocientos setenticinco, "Normas sustantivas y procesales contra el Terrorismo", Veinticinco mil seiscientos cincuentinueve: "Traición a la Patria", Decretos Legislativos número Ochocientos noventicinco: "Terrorismo Especial"; y, Ochocientos noventisiete: "Delitos Agravados", cuya aplicación por los Jueces fueron declarados violatorios de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de nuestra Constitución Política del Estado, por sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional; por ello el artículo doscientos doce de la Ley Orgánica del Poder Judicial también prevé que no hay sanción por discrepancia de opinión o criterio; por estos fundamentos: **REVOCARON** la sentencia que obra a fojas trescientos veintidós, su fecha seis de octubre del dos mil cinco, que declara Infundada el proceso constitucional de Habeas Corpus interpuesto por Andrónico Luksic Craig contra los señores Vocales Supremos José María Balcazar Zelada, Pastor Barrientos Peña, César Vega Vega y Hugo Príncipe Trujillo, Magistrados de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de la República, por presunta vulneración de los Principios Constitucionales de derecho de Defensa, Motivación de Resoluciones Judiciales, Legalidad y Presunción de Inocencia; **REFORMANDOLA: DECLARARON FUNDADO** el proceso constitucional de Habeas Corpus interpuesto por Andrónico Luksic Craig contra los señores Vocales Supremos José María Balcazar Zelada, Pastor Barrientos Peña, César Vega Vega y Hugo Príncipe Trujillo, Magistrados de la

Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de la República, por atentado contra la libertad individual y vulneración al Debido Proceso - Principio de Legalidad; consecuentemente: **NULA** la resolución de fecha veintisiete de abril del dos mil cinco, que, por mayoría, declaró No Haber Nulidad de la resolución de fecha siete de diciembre del dos mil cuatro, emitida por la Primera Sala Penal Especial que declaró Infundada la Excepción de Prescripción deducida por Andrónico Mariano Luksic Craig, en el proceso que se le sigue por delito de Tráfico de Influencias; **MANDARON**: Que se emita nuevo pronunciamiento teniendo en consideración lo expuesto por este órgano jurisdiccional que, en el presente asunto, actúa como órgano o instancia constitucional; **ORDENARON**: Se remita copias de la presente a los órganos de control respectivos del Poder Judicial y Ministerio Público, conforme a lo expuesto en el penúltimo considerando; y, que, se publique en el Diario Oficial El Peruano conforme a lo dispuesto en el artículo cuarto de la Ley número veintiocho mil doscientos treintisiete; notificándose y los devolvieron.-

29 NOV 97

**8.3. CASO: Dionisio Romero Seminario
INC. N° 014-01-G
Corte Superior de Justicia de Lima
Fecha: 31 de octubre de 2005**

**CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
TERCERA SALA PENAL ESPECIAL**

SP3: C11.19.0

**S.S.: BACA CABRERA
CASTAÑEDA OTSU
CATACORA VILLASANTE**

R-306-5

Inc. N° 014-01-G

Lima, treintuno de octubre
del año dos mil cinco.-

AUTOS y VISTOS: Interviniendo como Vocal ponente la doctora Catacora Villasante, estando a lo señalado en el artículo ciento treinta y ocho de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con la constancia de la Vista de la causa emitida por Relatoría corriente a fojas ciento trece, de conformidad con lo opinado por el señor representante del Ministerio Público en su dictamen de fojas ciento dos y siguiente;

ATENDIENDO:

PRIMERO: AL ORIGEN DE LA INCIDENCIA: Que mediante escrito corriente de fojas ochenticuatro a ochentisiete, presentado con fecha diez de agosto del año dos mil cinco, conforme se acredita con el sello de recepción que obra en el escrito de la referencia a fojas ochenticuatro, se tiene que el abogado del procesado Dionisio Romero Seminario, dedujo a favor de su patrocinado la excepción de prescripción, por la supuesta comisión en calidad de instigador del delito de Tráfico de Influencias, previsto en el artículo cuatrocientos del Código Penal. Fundamenta su medio de defensa técnica en lo siguiente: a) Que a la fecha han transcurrido más de seis años, desde que, conforme a la denuncia Fiscal y el Auto Apertorio, supuestamente se habría consumado el delito de Tráfico de Influencias; proceso que tiene como origen la visualización de los videos mil quinientos ochentitrés y mil quinientos ochenticuatro, que da cuenta la reunión celebrada entre Vladimiro Montesinos Torres y Dionisio Romero Seminario el veintidós de junio de mil novecientos noventinueve; b) Que la denuncia fiscal le atribuye la presunta comisión del delito de instigación al Tráfico de Influencias, tipificado en el artículo cuatrocientos del Código Penal; c) Que, la prescripción, es la institución jurídica mediante la cual, por el transcurso del

tiempo, la persona adquiere derechos o se libera de las obligaciones. Y desde la óptica penal, es una causa de extinción de la responsabilidad criminal fundada en la acción del tiempo sobre los acontecimientos humanos o la renuncia del Estado al *ius punendi*, en razón que el tiempo transcurrido borra los efectos de la infracción; y d) Que, el primer párrafo del artículo ochenta del anotado Código sustantivo, establece el plazo de prescripción, que equivale al máximo de la pena prevista en el artículo cuatrocientos del mismo Código, esto es de cuatro años, además, en el presente proceso penal, la prescripción se interrumpió por actuaciones del representante del Ministerio Público y del Poder Judicial, pero que siguiendo la regla del artículo ochentitrés párrafo final la acción penal prescribe en todo caso a los seis años, cuando opera la prescripción extraordinaria;

SEGUNDO: A LOS ARGUMENTOS DE LA PROCURADURÍA:

Que, la Procuraduría Ad-hoc, en su escrito corriente de fojas noventaicinco a noventa y nueve, señala que el ilícito materia de autos es un delito permanente, y que la fecha a partir de la cual debería contabilizarse el plazo de prescripción no debe ser el veintidós de junio de mil novecientos noventa y nueve sino la fecha en que cesó la permanencia de la actividad delictuosa, puesto que los administradores judiciales en las empresas vinculadas al Grupo HAYDUK continuaron desempeñando dichos cargos con posterioridad al veintidós de junio de mil novecientos noventa y nueve;

TERCERO: AL ESTADO DEL PROCESO: Que del estudio de autos fluye, que mediante auto ampliatorio de instrucción de fecha veinticuatro de enero del dos mil tres, que obra en copias certificadas de fojas cincuenta a cincuentiséis, se abrió instrucción contra el procesado Dionisio Fernando Romero Seminario como presunto instigador del delito Contra la Administración Pública - Tráfico de Influencias- en agravio del Estado. Seguido el proceso de acuerdo a las reglas del procedimiento ordinario, y remitidos los autos al Despacho del señor Fiscal Superior, emitió su acusación con fecha diecisiete de octubre del dos mil tres, conforme es de verse de fojas cincuentisiete a setenta y nueve, dictándose el Auto superior de enjuiciamiento de fecha diez de junio del año dos mil cuatro, corriente de fojas ochenta a ochenta y tres, señalándose fecha para la realización del acto oral. Asimismo apareciendo de fojas

191
ciento
romero

ciento quince a ciento treinticuatro que con fecha veinticuatro de octubre del dos mil tres, el acusado Dionisio Romero Seminario, dedujo la Excepción de Naturaleza de Acción, en la cual recayó la Resolución Suprema de fecha cuatro de mayo del año en curso (cuyas copias han sido agregadas al presente incidente de fojas ciento cincuentiocho a ciento cincuentinueve), que señala entre otros: "que teniendo la excepción de naturaleza de acción incidencia respecto a la acusación fiscal...debe dilucidarse su pertinencia...antes de iniciado el juicio oral", es menester resolver la excepción propuesta antes de iniciado el juicio oral;

CUARTO: A LA BASE FACTICA DE LA IMPUTACIÓN: Que, en este orden de ideas, se tiene que el representante del Ministerio Público en su acusación corriente de fojas cincuentisiete a setentinueve, específicamente a fojas setentiséis, precisa que el procesado exepcionante, habría conversado con su co-procesado Montesinos Torres, para solicitar su intervención en el proceso que se seguía contra los directivos y funcionarios de las empresas del Grupo Hayduk, para que el Juez de Cuarto Juzgado Antidroga designe Administradores Judiciales para las empresas del mencionado grupo empresarial, y de esta manera evitar su quiebra, lo que perjudicaría a sus acreedores, entre ellos el Banco de Crédito del Perú, que tenía una acreencia aproximada de quince millones de dólares, proponiendo al mismo tiempo los nombres de las personas que debían administrar las principales empresas del Grupo Hayduk, **consignando en el dictamen del presente incidente, como la fecha en que ocurrieron los hechos el veintidós de junio de mil novecientos noventinueve;** teniéndose por tanto que el examen sobre la procedencia o no de la excepción de prescripción solicitada, se realiza teniendo como punto de referencia que el acaecimiento de los hechos se habría producido dicha fecha (veintidós de junio de mil novecientos noventinueve).

QUINTO: A LA NATURALEZA DE LA EXCEPCIÓN PROPUESTA: Que, conforme se señalara en el primer considerando, el procesado Dionisio Romero, interpuso una excepción de prescripción, la misma que abarca dos aspectos, el de la acción penal y el de la pena; y apareciendo que en el presente proceso no existe sentencia alguna, se hace imperativo procesar la evaluación del pedido desde la óptica

descrita como primer extremo, esto es el de la acción penal. Que, estando a lo prescrito en el artículo cinco del Código de Procedimientos Penales y setentiocho inciso primero del Código Penal vigente, se tiene que la prescripción constituye una forma de extinción de la acción, es decir que *el transcurso del tiempo y la inacción de los llamados a ejercitarla, son las condiciones para que ello se produzca... y lo que pasa es que se declara extinguida la posibilidad de ejercitarse la acción*¹, teniendo en consideración los plazos ordinarios (establecidos en el artículo ochenta del Código Penal) y extraordinarios (del artículo ochentitrés del mismo cuerpo legal).

Que encontrándose los plazos en la ley positiva, el inicio del cómputo de los mismos están determinados por el artículo ochentidós del Código sustantivo, donde además se hace una diferenciación en el inicio de su cómputo en las diferentes modalidades de consumación de los tipos penales, por lo que debe establecerse el inicio del plazo del delito materia de autos.

SEXTO: A LA NATURALEZA DEL ILICITO INSTRUIDO: Que, el artículo ochentidós del Código Penal, exige para su aplicación (cómputo del plazo de prescripción) que el delito previamente esté definido en una de las modalidades que taxativamente señala en sus inciso dos, tres y cuatro, y apareciendo del auto apertorio de instrucción corriente a fojas cincuentitrés que se ha calificado los hechos imputados al procesado excepcionante como el tipificado en el artículo cuatrocientos del Código Penal, se hace imperativo recordar que el delito de Tráfico de Influencias es *"...una figura compuesta de naturaleza activa, de consumación instantánea..."*², en razón a que técnicamente los términos "invocando influencias" (que denotan un hacer) definen los límites de actuación y por ende la consumación instantánea y de simple actividad del tipo instruido; criterio que además ya fue adoptado por este Colegiado en la resolución dictada en la sesión de audiencia de fecha dieciséis de setiembre del año en curso en el expediente número cero treintiséis- dos mil uno; Que siendo así, el momento de la consumación del hecho delictivo sub litis, está determinado por la acción de invocar influencias (por la mera actividad) mas no por la efectiva

¹ CATAFORRA GONZALEZ, Manuel S.: Manual de Derecho Procesal Penal, Editorial Rodhas, Lima, 1996. Pág. 243.

² RIVAS VARGAS, Fidel: Delitos contra la Administración Pública, Grijley, Lima 2003. Pág.

realización del resultado, de modo tal que apareciendo de la Acusación Fiscal (fojas veintisiete) que este Ministerio ha considerado que el delito de Tráfico de Influencias imputado al acusado Dionisio Romero Seminario tiene como sustento que la reunión **entre los procesados Vladimiro Montesinos Torres y Dionisio Romero Seminario, se produjo el veintidós de junio de mil novecientos noventa y nueve**, se tiene que el plazo de la prescripción se debe empezar a computar desde el día en que se consumó, esto es desde el veintidós de junio de mil novecientos noventa y nueve;

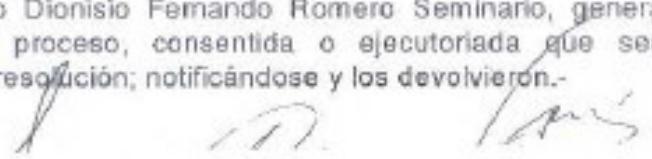
SEPTIMO: A LA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL VIGENTE:

Que encontrándose definido que el delito instruido es uno de realización inmediata, así como que el plazo de prescripción se computará desde el día en que se consumó (veintidós de junio de mil novecientos noventa y nueve), teniendo presente que el artículo cuatrocientos del Código Penal establecía una sanción máxima de cuatro años de pena privativa de libertad al momento en que se produjeron los hechos materia de autos, aplicando el último párrafo del artículo ochentitrés del Código Penal, el cómputo del plazo extraordinario de la prescripción para el caso de autos es el de seis años;

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN :

Que, habiéndose consignado los fundamentos expuestos por la defensa del acusado Dionisio Romero Seminario, en los puntos a), b), c) y d) del primer considerando, es posible concluirse que existe equivalencia con las conclusiones arribadas en los considerandos precedentes (omitiendo el segundo), pues habiéndose establecido que el delito de Tráfico de Influencias se consumó en la reunión del veintidós de junio de mil novecientos noventa y nueve, a la fecha han transcurrido más de seis años superando los plazos ordinario y extraordinario de prescripción, que disponen los artículos ochenta del Código Penal y el último párrafo del artículo ochentitrés del mismo cuerpo legal; por lo que al coincidir los fundamentos invocados por el acusado excepcionante con las conclusiones arribadas, debe ampararse la excepción de prescripción deducida por la defensa del procesado Dionisio Fernando Romero Seminario; en razón a que para el caso concreto, no se presentan los presupuestos descritos en el último párrafo del artículo ochenta del Código Penal y de igual manera, no es de aplicación el

artículo cuarentiséis – A del indicado Código sustantivo, pues este no se extiende al ámbito de la prescripción de la acción, sino que se aplica al momento de la determinación de la pena, lo que conlleva haberse establecido previamente la responsabilidad penal del procesado, lo que implica omitir cualquier tipo de pronunciamiento sobre su responsabilidad. Asimismo, si bien existe pronunciamiento divergente sobre la aplicación de este dispositivo en el Recurso de Nulidad Número 4166-2004 de fecha veintisiete de abril del año dos mil cinco, el Colegiado reafirmando en su posición considera que no constituye un precedente vinculante de conformidad con el artículo trescientos uno A del Código de Procedimientos Penales, modificado por el Decreto Legislativo Número 959. Razones por las cuales; **DECLARARON: FUNDADA** la Excepción de Prescripción deducida por el procesado **DIONISIO FERNANDO ROMERO SEMINARIO** y, en consecuencia por fenecido el proceso en este extremo; asimismo **MANDARON ARCHIVAR** la causa en lo que a él se refiere; **DISPUSIERON** la anulación de los antecedentes del procesado Dionisio Fernando Romero Seminario, generados por este proceso, consentida o ejecutoriada que sea la presente resolución; notificándose y los devolvieron.-



8.4. CASO: Manuel Hugo Delgado Parker
R. N. N° 3786-2005
Corte Suprema de justicia de la República
Fecha: 27 de julio de 2007

SALA PENAL
R.N. N° 3786-2005
LIMA.

Lima, veintiséis de julio de dos mil siete.-

VISTOS; interviniendo como ponente el señor Vocal Supremo Pedro Guillermo Urbina Ganvini; el recurso de nulidad interpuesto por: i) el Procurador Público Ad - Hoc contra la resolución de fojas dieciséis mil doscientos cincuenta y cuatro vuelta, del nueve de septiembre de dos mil cinco, que declaró fundada la excepción de prescripción deducida por el encausado Manuel Hugo Delgado Parker y, en consecuencia, extinguida la acción penal seguida en su contra como cómplice primario del delito contra la Administración Pública - tráfico de influencias en agravio del Estado; ii) el Procurador Público Ad - Hoc contra la resolución de fojas dieciséis mil doscientos ochenta y cinco, del dieciséis de septiembre de dos mil cinco, que declaró fundada la excepción de prescripción deducida por la defensa de los encausados Vladimiro Montesinos Torres o Vladimiro Lenin Montesinos Torres y Ernesto César Schütz Landázuri o Ernesto César Schütz Mertz y, en consecuencia, extinguida la acción penal seguida en su contra como autor y cómplice primario, respectivamente, del delito contra la Administración

Pública - tráfico de influencias en agravio del Estado; y iii) el Procurador Público Ad - Hoc y el representante del Ministerio Público contra la resolución de fojas dieciséis mil doscientos ochenta y siete, del dieciséis de septiembre de dos mil cinco, en el extremo que por mayoría declaró fundada la excepción de cosa juzgada deducida por la defensa del encausado Vladimiro Montesinos Torres o Vladimiro Lenin Montesinos Torres, respecto al delito contra la Tranquilidad Pública - asociación ilícita para delinquir en agravio del Estado; de conformidad en parte con el dictamen del señor Fiscal Supremo en lo Penal; y **CONSIDERANDO: Primero:** i) Que mediante Ejecutoria Suprema de fojas dieciséis mil cuatrocientos veintiocho, del treinta y uno de mayo de dos mil seis, y la resolución de fojas dieciséis mil cuatrocientos treinta y uno, del cuatro de septiembre del mismo año, se declaró haber nulidad en la sentencia anticipada de fojas dieciséis mil trescientos cuarenta y cuatro, del veintisiete de septiembre de dos mil cinco, en el extremo que fijó en veintiún millones doscientos mil nuevos soles el monto que por concepto de reparación civil deberá pagar el encausado Vladimiro Montesinos Torres, como autor del delito contra la Administración Pública - peculado en agravio del Estado y reformándola la fijó en veinticinco millones de nuevos soles; ii) Que en mérito al informe emitido por la Tercera Sala Penal Especial Anticorrupción de fojas dieciséis mil cuatrocientos treinta y dos, del veintisiete de septiembre de dos mil seis, los autos fueron devueltos a esta Corte Suprema porque existían extremos impugnatorios pendientes de pronunciamiento; y iii) Que en virtud al decreto de fojas sesenta y cinco del cuadernillo, del seis de octubre de dos mil seis, los autos fueron devueltos a la Fiscalía Suprema en lo Penal a fin de que proceda conforme a sus atribuciones; que devueltos los mismos corresponde a este Tribunal Supremo pronunciarse conforme a ley. **Segundo:** 1) Que el Procurador Público Ad - Hoc en sus recursos formalizados de fojas dieciséis mil doscientos sesenta y dieciséis mil doscientos noventa y tres, con relación a las excepciones de prescripción, alega que no se tuvo en cuenta que el agravante genérico del artículo cuarenta y seis guión A del Código Penal resulta aplicable a los partícipes y que, en virtud al principio de accesoriedad limitada, a los cómplices primarios o necesarios -a los encausados Manuel Delgado Parker y Ernesto Schütz Landázuri o Ernesto Cesar Schütz Mertz- les alcanzan los mismos plazos prescriptivos del autor -Vladimiro Montesinos Torres o Vladimiro Lenin Montesinos Torres-, los cuales a la fecha no se encuentran vencidos; ii) Que el Procurador Público Ad - Hoc en su recurso formalizado de fojas dieciséis mil trescientos nueve, con relación a la excepción de cosa juzgada, sostiene que el hecho incriminado en este proceso es diferente al que se tramitó ante la Segunda Sala Penal Especial -expediente número once guión dos mil uno- por lo que deben ser juzgados y sancionados en forma separada, que el tipo penal de asociación ilícita para delinquir no representa una figura que pueda extenderse para hechos no juzgados, y que los casos de corrupción liderados por Alberto Fujimori Fujimori y Vladimiro Montesinos

Torres son de carácter sui generis puesto que no se trata de una sola organización criminal sino de distintas asociaciones destinadas cada una a fines criminales muy específicos; iii) Que el señor Fiscal Superior en lo Penal en su recurso formalizado de fojas dieciséis mil trescientos trece alega que los hechos objeto de condena por la Segunda Sala Penal Especial Anticorrupción no son los mismos a los que son materia de este proceso pues en aquella causa no estaba incluido el encausado Ernesto César Schütz Landázuri (por lo que no existe la identidad de objeto), y que se estableció que las agrupaciones formadas por el encausado Montesinos Torres eran diferenciadas y cumplían cada una de ellas distintos roles. Tercero: Que del contenido de los videos número mil seiscientos setenta y siete, mil seiscientos setenta y ocho y mil seiscientos setenta y nueve rotulados “Reunión Doctor, Delgado Parker y Schütz,” de fecha veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y nueve, y tres casetes de audio número mil seiscientos ochenta, mil seiscientos ochenta y uno (A - uno y A - dos) sin rótulo y mil seiscientos ochenta y uno (B - uno y B - dos) sin rótulo, se aprecia que Manuel Hugo Delgado Parker y Ernesto César Schütz Landázuri o Ernesto César Schütz Mertz concurren el día veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y nueve a las instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional, donde se entrevistaron con el encausado Vladimiro Montesinos Torres o Vladimiro Lenin Montesinos Torres con la finalidad de solicitarle su intervención en los procesos judiciales de los cuales eran parte, para obtener resoluciones judiciales a su favor, admitiendo a cambio de ello el control de los medios de comunicación social Radio Programas del Perú y Panamericana Televisión; que, asimismo, se imputa a los encausados Vladimiro Montesinos Torres o Vladimiro Lenin Montesinos Torres y a Ernesto Cesar Schütz Landázuri o Ernesto César Schütz Mertz formar parte de una organización criminal destinada a cometer delitos con la finalidad de perpetuar el régimen del ex Presidente Fujimori Fujimori; que, en tal sentido, dichos encausados se pusieron de acuerdo para realizar conductas orientadas a manipular y direccionar la opinión pública a favor de la reelección de Fujimori Fujimori a través, principalmente, del canal Panamericana Televisión - Canal Cinco, para cuyo efecto el encausado Montesinos Torres entregó una elevada suma de dinero al encausado Schütz Landázuri o Schütz Mertz. Cuarto: Que, con relación a la excepción de cosa juzgada deducida por la defensa del encausado Montesinos Torres, fluye de autos que este fue anteriormente condenado por el delito de asociación ilícita para delinquir mediante sentencia de la Segunda Sala Penal Especial emitida el veintiocho de junio de dos mil cuatro (expediente número once guión dos mil uno), la que vía impugnación originó la Ejecutoria Suprema del nueve de junio de dos mil cinco (recurso de nulidad número dos mil seiscientos setenta y cuatro guión dos mil cuatro), la cual declaró, entre otros puntos, no haber nulidad en la citada sentencia en cuanto condena al encausado Montesinos Torres como autor del delito de asociación ilícita para delinquir, con lo que dicho pronunciamiento adquirió firmeza y calidad de

cosa juzgada; que, sobre la institución de la cosa juzgada -prevista en el inciso trece del artículo ciento treinta y nueve de la Constitución Política y en los artículos setenta y ocho inciso dos y noventa del Código Penal- el Acuerdo Plenario número cuatro guión dos mil seis barra CJ guión ciento dieciséis, del trece de octubre de dos mil seis (publicado en el diario oficial El Peruano el veintinueve de diciembre de dos mil seis) informa que tiene como límite subjetivo la existencia de identidad pasiva o del condenado, esto es, identidad de la persona a quien se le atribuye el hecho punible materia de condena firme, y en cuanto a sus límites objetivos requiere que exista: identidad del suceso histórico e identidad de fundamento -subsunción en tipos penales o administrativos de carácter homogéneo-; que en el presente caso no se cuestiona el límite subjetivo de la cosa juzgada (la identidad pasiva o del condenado), ni su límite objetivo referido a la identidad de fundamento, sino el límite objetivo referido a la identidad del suceso histórico -identidad de una conducta que sucedió en la realidad externa- (hechos que han sido objeto de la acusación y posterior juicio); que para apreciar este requisito debe verificarse que en la presente causa se atribuye al encausado Montesinos Torres formar parte de la misma organización de signo delictivo que la que se examinó en el mencionado proceso anterior, sin que sea relevante comprobar si los concretos delitos perpetrados a través de ella -dada su autonomía con relación a la asociación ilícita (en tanto implican sustratos fácticos y bienes jurídicos diferentes)- fueron objeto de procesamiento o condena previos; que el delito de asociación ilícita para delinquir en el presente proceso se basa en el hecho de que los encausados Montesinos Torres y Ernesto César Schütz Landázuri o Ernesto César Schütz Mertz sostuvieron diversas reuniones donde acordaron la realización de conductas ilícitas orientadas a manipular y direccionar la opinión pública a favor del régimen del ex Presidente Fujimori Fujimori; que esta imputación comporta que Ernesto César Schütz Landázuri o Ernesto César Schütz Mertz integre) la asociación ilícita encabezada por Montesinos Torres -y formada por otras personas, entre las que se encontraban funcionarios y empresarios de telecomunicaciones-, mas no que ambos encausados formaron en forma separada una distinta asociación ilícita con autonomía propia y finalidad disímil (a manera de una "microasociación" formada por dos personas); que la asociación ilícita compleja liderada por el encausado Montesinos Torres -y que se mantuvo en vigor hasta la renuncia del ex Presidente Fujimori Fujimori comprendía a distintos grupos de personas, con áreas de influencia específicas y que no siempre concertaron entre sí pero compartían una misma finalidad delictiva, que era la ilícita perpetuarían del régimen del mencionado ex Presidente; que la tipicidad de la integración de esta compleja y amplia asociación ilícita por parte del encausado Montesinos Torres es una sola (un solo sustrato fáctico) y no es legítimo -por respeto a la garantía del ne bis in Idem- fraccionarla tantas veces como componentes o subgrupos concertaron con él; que, además, la ilicitud del delito de asociación ilícita radica en la sola

pertenencia a una organización instituida con fines delictivos y, por tanto, es independiente a los ilícitos que a través de ella se cometan; que, por ende, el argumento de que el hecho incriminado (la compra de la línea periodística de canal cinco -o la entrega de dinero al encausado Ernesto César Schütz Landazuri o Ernesto César Schütz Mertz-), dadas sus particularidades de forma, tiempo y contraprestación, no fue objeto de anterior proceso o condena, no impide apreciar los requisitos de la cosa juzgada respecto al delito de asociación ilícita para delinquir atribuido al encausado Montesinos Torres; que, en tal sentido, el hecho imputado al encausado Montesinos Torres -esto es, haber integrado una agrupación de varias personas destinada a realizar conductas ilícitas tendientes a perpetuar en el poder al ex Presidente Fujimori Fujimori- ya fue materia de juzgamiento y condena definitiva anterior - aun cuando éstos no comprendieran a uno de los asociados (al encausado Ernesto César Schütz Landázuri o Ernesto César Schütz Mertz)-. Quinto: Que en virtud de la prescripción se extingue la posibilidad de persecución penal del hecho imputado por el transcurso del tiempo; que el tráfico de influencias es un delito de comisión instantánea, de naturaleza de peligro y de simple actividad, en el que basta, según el texto original del artículo cuatrocientos del Código Penal -aplicable al caso por ser más favorable al texto actual vigente e introducido por el artículo uno de la Ley número veintiocho mil trescientos cincuenta y cinco, publicada el seis de octubre de dos mil cuatro- que el sujeto activo haga dar o prometer para sí o para un tercero, donativo, promesa o cualquier otra ventaja con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que estuviese conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo, previa invocación de influencias, las cuales pueden ser reales o simuladas, sin que sea relevante para este fin si dicho acto de intercesión se concreta o no; que, según el Código Penal, la prescripción ordinaria de la acción penal opera en un plazo igual al máximo de la pena fijada por ley para el delito si es privativa de libertad (artículo ochenta), la prescripción extraordinaria opera al cumplirse el plazo de prescripción ordinaria más la adición de la mitad de dicho plazo (artículo ochenta y tres, párrafo in fine), y el plazo de prescripción en el caso de los delitos instantáneos - como es el de tráfico de influencias- comienza a computarse a partir del día en que éstos se consumaron; que respecto a la aplicabilidad del artículo cuarenta y seis guión A del Código Penal, cabe precisar que si bien constituye una circunstancia agravante de la responsabilidad penal (aplicable cuando el autor se aprovecha de su condición de miembro de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, autoridad, funcionario o servidor público para cometer un hecho punible), sin embargo, el incremento de la pena por dicha circunstancia -aumento de la pena hasta un tercio por encima del máximo legal- es de carácter facultativo -el juez puede, por razones que debe explicitar, no imponerla o imponerla en menor grado- y no imperativo, lo que se colige de la expresión "podrá aumentar la pena hasta en un tercio por encima del máximo legal"; que, además, dicha circunstancia agravante es

aplicable no cuando se verifica que el autor tiene la condición especial exigida en la ley, sino cuando se comprueba que se aprovechó o prevaleció de dicha condición para cometer un delito, lo que corresponde establecerse en una resolución final de fondo, por lo que anticipar su concurrencia para otorgarle efectos sobre la prescripción de la acción penal implicaría transgredir el principio de presunción de inocencia -en tanto implica un trato de condenado a quien aún esté siendo procesado-; que, asimismo, los efectos agravantes -modificativos del máximo legal- de esta circunstancia deben sopesarse con las demás circunstancias atenuantes -modificativas del mínimo legal- previstas en la ley, cuya efectiva concurrencia corresponde verificarse cuando se determina la pena en la sentencia que pone fin a la instancia; que, por ende, partiendo de que el artículo cuarenta y seis guión A del Código Penal no afecta los plazos de prescripción de la acción penal incoada contra el autor, menos se puede tomar en cuenta para ampliar los términos prescriptorios que corresponden al partícipe (al cómplice Manuel Hugo Delgado Parker); que, en tal sentido, si se toma en cuenta el tiempo transcurrido desde la comisión del hecho punible -esto es, el veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y nueve- y la pena privativa de libertad prevista para el delito de tráfico de influencias -no menor de dos ni mayor de cuatro años, conforme al artículo cuatrocientos del Código Penal (texto original)-, se infiere que el plazo extraordinario de prescripción a la fecha se encuentra vencido con relación al encausado Manuel Hugo Delgado Parker. Sexto: Que, respecto a la excepción de prescripción deducida por los abogados defensores de los encausados Montesinos Torres y Schütz Landázuri o Schütz Mertz, se observa que el comportamiento imputado a los citados encausados configura un concurso ideal de delitos al presentarse, en una unidad de acción, los elementos típicos de los delitos de asociación ilícita para delinquir y tráfico de influencias (ver tercer fundamento); que tal como lo precisa el párrafo tercero del artículo ochenta del Código Penal, tratándose de estos supuestos el plazo de prescripción se contabiliza en función de las penas conminadas para el delito más grave, que en este caso es el de asociación ilícita para delinquir; que, en tal sentido, al tomar en cuenta el tiempo transcurrido desde la comisión del evento delictivo -esto es, el veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y nueve- y la pena privativa de libertad prevista para el delito de asociación ilícita para delinquir -no menor de tres ni mayor de seis, conforme al artículo trescientos diecisiete del Código Penal-, cabe inferir que el plazo extraordinario de prescripción a la fecha no se encuentra vencido; que si bien la acusación fiscal señala que se configura un concurso real de delitos, debe entenderse que se refiere al que existe entre los delitos de asociación ilícita para delinquir y peculado, en tanto la entrega del dinero del Estado del encausado Montesinos Torres al encausado Schütz Landázuri o Schütz Mertz se produjo una vez conformada la organización delictiva, como parte de los acuerdos adoptados; que a mayor abundamiento fluye de autos que el encausado Schütz Landázuri o Schütz Mertz tiene la calidad de reo contumaz,

por lo que se ordenó la suspensión de los términos prescriptorios de la acción penal instaurada en su contra, como es de verse de la resolución de fojas mil trescientos treinta y dos). Por estos fundamentos: por mayoría declararon: **NO HABER NULIDAD** en la resolución de fojas dieciséis mil doscientos ochenta y siete, del dieciséis de septiembre de dos mil cinco, en el extremo que por mayoría declare) fundada la excepción de cosa juzgada deducida por el encausado Vladimiro Montesinos Torres o Vladimiro Lenin Montesinos Torres respecto al delito contra la tranquilidad pública - asociación ilícita para delinquir en agravio del Estado; declararon **NO HABER NULIDAD** en la resolución de fojas dieciséis mil doscientos cincuenta y cuatro vuelta, del nueve de septiembre de dos mil cinco, que declare fundada la excepción de prescripción deducida por el encausado Manuel Hugo Delgado Parker y, en consecuencia, extinguida la acción penal seguida en su contra como cómplice primario del delito contra la Administración Pública - tráfico de influencias en agravio del Estado; declararon **HABER NULIDAD** en la resolución de fojas dieciséis mil doscientos ochenta y cinco, del dieciséis de septiembre de dos mil cinco, que declare) fundada la excepción de prescripción deducida por la defensa de los encausados Vladimiro Montesinos Torres o Vladimiro Lenin Montesinos Torres y Ernesto César Schütz Landázuri o Ernesto César Schütz Mertz y, en consecuencia, extinguida la acción penal seguida en su contra como autor y cómplice primario, respectivamente, del delito contra la Administración Pública - tráfico de influencias en agravio del Estado; y reformándola: declararon **INFUNDADA** la referida excepción de prescripción; **MANDARON** se prosiga el proceso penal en este extremo respecto al encausado contumaz Ernesto César Schütz Landázuri o Ernesto César Schütz Mertz; **INTEGRARON** la Ejecutoria Suprema de fojas dieciséis mil cuatrocientos veintiocho, del treinta y uno de mayo de dos mil seis, a fin de tenerse también al encausado Vladimiro Montesinos Torres con el nombre de Vladimiro Lenin Montesinos Torres; y los devolvieron.

S.S.

SALAS GAMBOA
PRÍNCIPE TRUJILLO
CALDERÓN CASTILLO
URBINA GANVINI

LA SECRETARÍA DE LA SALA PENAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA QUE SUSCRIBE CERTIFICA QUE EL VOTO SINGULAR DEL SEÑOR VOCAL SUPREMO DOCTOR VÍCTOR PRADO SALDARRIAGA ES COMO SIGUE:

VISTOS; interviniendo como ponente el señor Prado Saldarriaga; el recurso de nulidad interpuesto por: a) el Procurador Público Ad - Hoc contra la resolución de fojas dieciséis mil doscientos cincuenta y cuatro vuelta, del nueve de septiembre de dos mil cinco, que declaró fundada la excepción de prescripción deducida por el acusado Manuel Hugo Delgado Parker y en consecuencia, extinguida la acción penal seguida en su contra como cómplice primario del delito contra la Administración Pública - Tráfico de Influencias en agravio del Estado; b) el Procurador Público Ad - Hoc contra la resolución de fojas dieciséis mil doscientos ochenta y cinco, del dieciséis de septiembre de dos mil cinco, que declaró fundada la excepción de prescripción deducida por la defensa de los encausados Vladimiro Montesinos Torres o Vladimiro Lenin Montesinos Torres y Ernesto César Schütz Landázuri o Ernesto César Schütz Mertz y en consecuencia, extinguida la acción penal seguida en su contra como autor y cómplice primario, respectivamente, del delito contra la Administración Pública - Tráfico de Influencias en agravio del Estado; y c) el Procurador Público Ad - Hoc y el representante del Ministerio Público contra la resolución de fojas dieciséis mil doscientos ochenta y siete, del dieciséis de septiembre de dos mil cinco, en el extremo que por mayoría declaró fundada la excepción de cosa juzgada deducida por la defensa del acusado Vladimiro Montesinos Torres o Vladimiro Lenin Montesinos Torres, respecto al delito contra la Tranquilidad Pública - Asociación ilícita para Delinquir en agravio del Estado; de conformidad en parte con lo opinado por el señor Fiscal Supremo en lo Penal; y **CONSIDERANDO: Primero:** a) Que mediante Ejecutoria Suprema de fojas dieciséis mil cuatrocientos veintiocho, del treinta y uno de mayo de dos mil seis, y la resolución de fojas dieciséis mil cuatrocientos treinta y uno, del cuatro de septiembre del mismo año, se declare) haber nulidad en la sentencia anticipada de fojas dieciséis mil trescientos cuarenta y cuatro, del veintisiete de septiembre de dos mil cinco, en el extremo que fijó en veintiún millones doscientos mil nuevos soles el monto de la reparación civil que deberá pagar el sentenciado Vladimiro Montesinos Torres, y reformándola la fijó en veinticinco millones de nuevos soles, en mérito a la condena dictada en su contra por delito contra la Administración Pública - Peculado en agravio del Estado; b) Que en mérito al informe emitido por la Tercera Sala Penal Especial Anticorrupción de fojas dieciséis mil cuatrocientos treinta y dos, del veintisiete de septiembre de dos mil seis, los autos fueron devueltos a esta Corte Suprema porque existían extremos impugnatorios pendientes de pronunciamiento; c) Que con el decreto de fojas sesenta y cinco del cuadernillo, del seis de octubre de dos mil seis, los autos fueron remitidos a la Fiscalía Suprema en lo Penal a

fin de que proceda conforme a sus atribuciones; que devueltos los mismos corresponde a este Supremo Tribunal pronunciarse conforme a ley. Segundo: a) Que el Procurador Público Ad - Hoc en sus recursos formalizados de fojas dieciséis mil doscientos sesenta y dieciséis mil doscientos noventa y tres, respectivamente, con relación a las excepciones de prescripción manifiesta que la Tercera Sala Penal Especial Anticorrupción al momento de resolver no ha tenido en consideración la agravante genérica del artículo cuarenta y seis -" A" del Código Penal que resulta aplicable a los partícipes, que por el principio de accesoriedad limitada (extraneus), a los encausados Manuel Hugo Delgado Parker y Ernesto César Schütz Landázuri o Ernesto César Schütz Mertz, en su calidad de cómplices primarios o necesarios, les alcanzan los mismos plazos prescriptorios para el autor -Vladimiro Montesinos Torres o Vladimiro Lenin Montesinos Torres-, los cuales a la fecha no se encuentran vencidos; b) Que el Procurador Público Ad - Hoc en su recurso formalizado de fojas dieciséis mil trescientos nueve, con relación a la excepción de cosa juzgada sostiene que los hechos incriminados en este proceso son totalmente diferentes al que se tramitó ante la Segunda Sala Penal Especial -expediente número once - dos mil uno-, por tanto, deben ser juzgados y sancionados en forma separada, pues el tipo penal de asociación ilícita para delinquir no representa una figura que pueda extenderse para hechos que no han sido juzgados, que los casos de corrupción liderados por Alberto Fujimori Fujimori y Vladimiro Montesinos Torres son de carácter sui generis, ya que no se trata de una sola organización criminal sino de distintas asociaciones destinadas cada una a fines criminales muy específicos; c) Que el señor Fiscal Superior en lo Penal en su recurso formalizado de fojas dieciséis mil trescientos trece señala que los hechos que han sido objeto de condena por la Segunda Sala Penal Especial Anticorrupción no son los mismos que en el caso sub júdice, pues en dicho proceso no estaba incluido el inculpado Ernesto César Schütz Landázuri, por ende, no se puede hablar de la existencia de identidad de objeto, que además se ha establecido que las agrupaciones formadas por el encausado Montesinos Torres eran diferenciadas cumpliendo cada una de ellas distintos roles. Tercero: Que del contenido de los videos número mil seiscientos setenta y siete, mil seiscientos setenta y ocho y mil seiscientos setenta y nueve rotulados "Reunión Doctor, Delgado Parker - Schütz" de fecha veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y nueve, y tres cassettes de audio número mil seiscientos ochenta, mil seiscientos ochenta y uno (A - uno y A - dos) y mil seiscientos ochenta y uno (B - uno y B - dos) sin rótulo, se aprecia que Manuel Hugo Delgado Parker y Ernesto César Schütz Landázuri o Ernesto César Schütz Mertz concurren el día veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y nueve a las instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional donde se entrevistaron con Vladimiro Montesinos Torres o Vladimiro Lenin Montesinos Torres con la finalidad de solicitarle su intervención en los procesos judiciales de los cuales eran parte para obtener resoluciones judiciales a su favor, concediendo a cambio de ello el dominio de

los medios de comunicación social masivos que administraban, Radio Programas del Perú) y Panamericana Televisión, respectivamente; que, asimismo, se les imputa a los encausados Vladimiro Montesinos Torres o Vladimiro Lenin Montesinos Torres y Ernesto César Schütz Landázuri o Ernesto César Schütz Mertz formar parte de una organización criminal destinada a cometer delitos con la finalidad de perpetuar el régimen del ex - presidente Fujimori Fujimori; que, en tal sentido, dichos encausados se pusieron de acuerdo para realizar políticas decisivas orientadas a manipular y direccionar la opinión pública a favor de la re - elección del ex - Presidente Alberto Fujimori Fujimori, siendo el medio principal para ello el Canal Panamericana Televisión "Canal Cinco", para cuyo efecto el encausado Montesinos Torres entregó una altísima suma de dinero a su coencausado . Schütz Mertz. Cuarto: Que la excepción de cosa juzgada es un medio de defensa técnico que busca evitar la doble punición del imputado cuando el hecho denunciado ha sido objeto de una resolución firme, nacional o extranjera, en proceso penal seguido en su contra, siendo necesario que se dé la presencia de una identidad en la persona perseguida, en el hecho punible y la causa; que la estructura de las organizaciones criminales no es uniforme, ella varía según su origen, el grado de desarrollo que han alcanzado, el tipo de actividades delictivas que ejecutan o el número de componentes que la integran, por consiguiente, hay organizaciones con estructuras altamente jerarquizadas y complejas que muestran una composición vertical con niveles de poder y gestión muy centralizados pero también coexisten otras agrupaciones delictivas con estructuras flexibles y roles de dirección colectiva o descentralizada que constituyen tantas organizaciones criminales diferentes con relación al fin ilícito que persiguen y a la oportunidad de su actuación, siendo lo primordial la presencia de varias estructuras criminales distintas a las que se incorpora el agente, que esta posibilidad es mucho mayor en las estructuras criminales flexibles como las de tipo red y donde el hombre clave puede constituir varios grupos criminales con propósitos delictivos diferentes, que en el caso sub júdice, nos encontramos ante una amplia red criminal que operó con grupos enquistados en las principales instancias del poder político, instituciones castrenses, del sistema de justicia y en algunos medios de comunicación, en la cual fungía como hombre clave el encausado Montesinos Torres, el cual constituyó e integró de manera simultánea o sucesiva más de una organización criminal destinada a cometer delitos en oportunidades y en contextos diferentes; que, en tal sentido, el sentenciado Montesinos Torres integró diversas organizaciones criminales distintas a la conformada por el encausado Ernesto César Schütz Landázuri o Ernesto César Schütz Mertz para controlar la línea periodística y editorial del Canal de Televisión Panamericana "Canal Cinco", a cambio del pago de importantes sumas de dinero; que, por ende, se trata de sucesos históricos distintos y diferentes organizaciones delictivas, que si bien tuvieron como hombre clave común al sentenciado Montesinos Torres,

fueron constituidas con fines e integrantes distintos, razón por la cual no existe una identidad de objeto, así como tampoco no se verifica una idéntica imputación a las recaídas en la resolución emitida por la Segunda Sala Penal Especial Anticorrupción dictada el veintiocho de junio de dos mil cuatro en el expediente número once - dos mil uno (caso José Francisco Crousillat Carreno y José Enrique Crousillat López Torres); que, lo anteriormente expuesto, constituye un supuesto diferente al abordado en el Acuerdo Plenario número cuatro - dos mil seis / C) - ciento dieciséis del Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y Transitorias, publicado el veintinueve de diciembre de dos mil seis, ya que el se refiere a la autonomía e independencia de la asociación ilícita en relación a los delitos que a través de ella se cometen, que en todo caso señala la existencia de un concurso de delitos siendo un contrasentido abordar el tipo legal de asociación ilícita para delinquir en función de los actos delictivos perpetrados, y no de la propia pertenencia a la misma; que el caso sub júdice está referido al momento de la configuración de la organización criminal y no a la concreción de los fines delictivos que con ella se persigue. Quinto: Que la excepción de prescripción es un mecanismo de defensa técnico que extingue la posibilidad de persecución procesal del hecho imputado por el transcurso del tiempo; que el tráfico de influencias es un delito de comisión instantánea, de naturaleza de peligro y de simple o mera actividad, donde resulta suficiente que el sujeto activo, al cual no se le exige una condición especial, realice la conducta concreta descrita en el tipo penal, que este delito se perfeccionaba, según el texto original del artículo cuatrocientos del Código Penal -aplicable al caso sub júdice por ser más favorable al texto actual vigente e introducido por el artículo uno de la Ley número veintiocho mil trescientos cincuenta y cinco, publicada el seis de octubre de dos mil cuatro-, cuando el agente hacía dar o prometer para sí o para un tercero, donativo, promesa o cualquier otra ventaja con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que estuviese conociendo o haya conocido, un caso judicial o administrativo, previa invocación de influencias, las cuales podían ser reales o simuladas, no siendo relevante para este fin, si dicho acto de interceder se concretaba o no; que la prescripción de la acción pena; opera en un plazo igual al máximo de la pena fijada por ley para el delito, si es privativa de libertad, y de dos años si el delito es sancionado con pena no privativa de libertad, caso de la denominada prescripción ordinaria; que, sin embargo, cuando el plazo ordinario de prescripción de la acción penal es interrumpido por actuaciones del Ministerio Público u Órgano judicial la acción penal prescribe de modo extraordinario al cumplirse cronológicamente el plazo de prescripción ordinario más la adición de la mitad de dicho plazo, tal como lo dispone el párrafo in fine del artículo ochenta y tres del Código Penal; que, en el caso de los delitos instantáneos -como el de tráfico de influencias-, los plazos de prescripción de la acción penal comienzan a computarse a partir del día en que estos se consumaron; que, respecto a la aplicabilidad del artículo cuarenta y seis - "A" del Código Penal,

cabe precisar que en el referido cuerpo de leyes la prescripción de los delitos sancionados con pena privativa de libertad se regula en función del plazo máximo de la pena conminada para el tipo de delito imputado, que el citado artículo regula una agravante genérica pero privilegiada que en base a la condición especial del sujeto activo, entre otros, ser funcionario público, y el abuso de tal condición eleva la pena conminada hasta un tercio por encima del máxima legal fijado para el delito cometido, que la determinación de la pena concreta que corresponde imponer al autor o partícipe de un delito tiene como límites los fijados para la pena básica o ámbito dentro de los cuales el juez decide la pena a aplicar evaluando las circunstancias concurrentes en el caso; que, en este contexto, solo las circunstancias privilegiadas permiten aplicar una pena concreta por encima del máximo conminado por el legislador o por debajo del mínimo de aquel, sin embargo, la operatividad de estas circunstancias no es facultativa para el juez, pues el siempre debe aplicar sus efectos, lo que es facultativo para el Órgano jurisdiccional es decidir hasta donde, desde el máximo o desde el mínimo, puede extender o disminuir la dimensión cuantitativa de la pena concreta, ese es el sentido de las normas del artículo cuarenta y seis - "A" y de los artículos veintiuno y veintidós del Código Penal; que, por lo demás, la aplicación de la circunstancia agravante por la condición del sujeto activo prevista en el artículo cuarenta y seis - "A" resulta aplicable a todo aquél que se aprovecha de su condición especial para perpetrar el delito, no obstante, dicho dispositivo legal debe ser aplicado sólo al autor o partícipe del delito que revista dicha condición agravante, que de la revisión de autos se aprecia que tomando en cuenta el tiempo transcurrido desde la comisión de los hechos sub júdice, esto es, el día veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y nueve, y las penas previstas en la ley para el delito de Tráfico de Influencias conforme al artículo cuatrocientos del Código Penal -texto original-, es de inferir que el plazo extraordinario de prescripción a la fecha se encuentra vencido en exceso con relación al encausado Manuel Hugo Delgado Parker, quien al no tener la condición especial del sujeto activo -funcionario o servidor público-, no le es de aplicación la agravante genérica prevista en el artículo cuarenta y seis - "A" del Código Penal, pues, como lo prevé el artículo veintiséis del Código Penal -incomunicabilidad de las circunstancias- las circunstancias y cualidades que afectan la responsabilidad de alguno de los autores y partícipes no modifican la de los otros autores o partícipes del mismo hecho punible. Sexto: Que, respecto a la excepción de prescripción deducida por los abogados defensores de los procesados Montesinos Torres y Schütz Landázuri o Schütz Mertz, conforme se precisó en el cuarto fundamento jurídico el primero de los nombrados constituye e integra de manera simultánea o sucesiva más de una organización criminal destinada a cometer delitos en oportunidades y en contextos diferentes, que de los hechos incriminados se aprecia que el comportamiento imputado a los citados procesados generaría una tipicidad que configura un concurso ideal de delitos al presentarse los

elementos típicos de los delitos de asociación ilícita y tráfico de influencias, que tal como lo precisa el artículo ochenta del Código Penal tratándose de estos supuestos el plazo de prescripción se contabiliza en función de las penas conminadas para el delito más grave, es decir, en este caso, el de asociación ilícita; que, en tal sentido, tomando en cuenta el tiempo transcurrido desde la comisión del hecho sub judice, esto es, el veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y nueve –fecha en que se acredita que el encausado Ernesto César Schütz Landázuri o Ernesto César Schütz Mertz concurrió a las instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional donde se entrevistó con Vladimiro Montesinos Torres o Vladimiro Lenin Montesinos Torres con la finalidad de solicitarle su intervención en los procesos judiciales de los cuales era parte, para así obtener resoluciones judiciales a su favor, concediendo a cambio de ello el dominio del medio de comunicación social masivo que administraba, Panamericana Televisión- y las penas previstas en la ley para el delito de asociación ilícita conforme al artículo trescientos diecisiete del Código Penal vigente a la fecha de comisión de los hechos, es de inferir que el plazo extraordinario de prescripción a la fecha, no se encuentra vencido; que si bien la acusación fiscal señala que nos encontramos frente a un concurso real de delitos debe entenderse que este va referido al delito de peculado, cuando una vez conformada la organización delictiva se hace la entrega de sendas sumas de dinero por parte del encausado Vladimiro Montesinos Torres o Vladimiro Lenin Montesinos Torres al acusado Ernesto César Schütz Landázuri o Ernesto César Schütz Mertz como parte de los acuerdos adoptados. Por estos fundamentos: **MI VOTO** es porque se declare **HABER NULIDAD** en la resolución de fojas dieciséis mil doscientos ochenta y siete, su fecha dieciséis de septiembre de dos mil cinco, en el extremo que por mayoría declaró fundada la excepción de cosa juzgada deducida por la defensa del procesado Vladimiro Montesinos Torres o Vladimiro Lenin Montesinos Torres respecto al delito contra la Tranquilidad Pública - Asociación Ilícita para Delinquir en agravio del Estado; y reformándola se declare **INFUNDADA** dicha excepción de cosa juzgada y se prosiga el juicio oral en este extremo; se declare **HABER NULIDAD** en la resolución de fojas dieciséis mil doscientos ochenta y cinco, su fecha dieciséis de septiembre de dos mil cinco, que declaró fundada la excepción de prescripción deducida por los abogados defensores de los procesados Vladimiro Montesinos Torres o Vladimiro Lenin Montesinos Torres y Ernesto César Schütz Landázuri o Ernesto César Schütz Mertz, y en consecuencia, extinguida la acción penal seguida en su contra como autor y cómplice primario, respectivamente, del delito contra la Administración Pública - Tráfico de Influencias en agravio del Estado, y reformándola se declare **INFUNDADA** la referida excepción de prescripción y se prosiga el juicio oral en este extremo; se declare **NO HABER NULIDAD** en la resolución de fojas dieciséis mil doscientos cincuenta y cuatro vuelta, su fecha nueve de septiembre de dos mil cinco, que declaró fundada la excepción de prescripción deducida por el

procesado Manuel Hugo Delgado Parker y en consecuencia extinguida la acción penal seguida en su contra como cómplice primario del delito contra la Administración Pública - Tráfico de Influencias en agravio del Estado; **INTEGRARON** la Ejecutoria Suprema de fojas dieciséis mil cuatrocientos veintiocho, del treinta y uno de mayo de dos mil seis, a fin de tenerse también al procesado Vladimiro Montesinos Torres como Vladimiro Lenin Montesinos Torres; y los devolvió.-

S.S

PRADO SALDARRIAGA

8.5. CASO: Alan García
Asuntos varios N°. 21-92
Sala penal especial
Fecha: 26 de diciembre de 2000

SALA PENAL ESPECIAL
ASUNTOS VARIOS No. 21-92

Lima, veintiséis de diciembre del dos mil.-

AUTOS Y VISTOS; con lo expuesto por la Señora Fiscal Supremo ante la Sala Penal Especial; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que de la denuncia penal, cuya copia corre de fojas trece a diecisiete, del auto de apertura de instrucción de fojas treinta a treintidós y de la acusación fiscal de fojas cuatrocientos treintiuno a cuatrocientos cincuentiocho, se desprende que contra el ex Presidente de la República Alan Gabriel García Pérez, pesa acusación como autor del delito de enriquecimiento ilícito, previsto en el artículo trescientos sesentiuono del Código Penal, presuntamente perpetrados entre los años mil novecientos ochentisiete y mil novecientos noventa; Segundo.- Que, encontrándose el proceso en estado de llevarse a cabo el juicio oral, la defensora del acusado Alan Gabriel García Pérez por escrito corriente de fojas uno a diez deduce la excepción de prescripción de la acción penal, con el fundamento de haber transcurrido con exceso el término establecido por los artículos ciento diecinueve y ciento veintiuno del Código Penal de mil novecientos veinticuatro para la prescripción de la acción penal de los delitos sancionados con pena de prisión, como es el del caso materia de autos, sosteniendo por otro lado, que a su defendido no le era de aplicación las disposiciones contenidas en la Ley veintiséis mil seiscientos cuarentiuno, que prescribe la suspensión de la prescripción para los

...///

///...

reos declarados contumaces, no obstante que el órgano jurisdiccional, por auto de fecha seis de setiembre de mil novecientos noventa y seis, ratificado por resolución de fecha cuatro de abril de mil novecientos noventa y siete lo había declarado como tal, aplicando retroactivamente una ley inconstitucional; que admitida la excepción propuesta, se corrió traslado al Procurador Público; quien por escrito de fojas quinientos dos solicita se declare improcedente, con el fundamento de que el término de prescripción ha quedado suspendido en atención a las resoluciones que declararon contumaz al acusado en aplicación precisamente de la citada Ley veintiséis mil seiscientos cuarentiuno; que solicitada la opinión de la Fiscalía Suprema ante la Sala Penal Especial, esta por dictamen de fojas quinientos once, si bien reconoce ser de aplicación al caso las disposiciones del Código Penal de mil novecientos veinticuatro, también sostiene no haber transcurrido el tiempo requerido por los artículos ciento diecinueve y ciento veintiuno de dicho Código, habida cuenta que, tratándose de delitos en perjuicio del Estado, debe agregarse una mitad más a los términos establecidos; que producidos los informes orales solicitados por los abogados de las partes, es el momento de expedir la resolución correspondiente; Tercero.- Que, la excepción deducida debe ser resuelta por la Sala, ateniéndose estrictamente a la Constitución y a la Ley, en tal sentido, en primer lugar debe determinarse si ha transcurrido o no el tiempo requerido para la prescripción de la acción penal, y en segundo lugar, si la suspensión del plazo prescriptorio establecido por el artículo primero de la Ley veintiséis mil seiscientos cuarentiuno es aplicable o no al acusado Alan Gabriel García Pérez, como anteriormente lo decidió la

...///

///...

Sala Penal Especial al declararlo Contumaz, en aplicación de la citada norma; que con relación al primer aspecto, no cabe duda de que la ley aplicable para las infracciones a la ley penal materia de este proceso son los artículos tercero y sétimo del Código Penal de mil novecientos veinticuatro, en concordancia con las garantías establecidas en la Constitución de mil novecientos setentinueve, especialmente la referida al segundo párrafo del artículo ciento ochentisiete, en el fondo reproducidas en el artículo ciento tres segundo párrafo de la Constitución Política de mil novecientos noventitrés y el artículo sexto del Código Penal vigente desde mil novecientos noventiuno, por ello, cualquier modificación posterior de la Ley Penal, no puede aplicarse retroactivamente, salvo que sea más favorable al imputado; que en el caso de autos se advierte que todos los delitos materia de acusación fiscal tienen como pena la de prisión, cuyo término de prescripción es de cinco años, que se amplía en dos años y seis meses al mediar interrupción por la interposición de la denuncia fiscal y actos procesales posteriores, como lo disponen los artículos ciento diecinueve y ciento veintiuno del Código acotado; que de este modo se concluye que de agosto de mil novecientos noventa, fecha probable de la comisión del último delito hasta el presente mes, han transcurrido más de diez años, esto es, excediendo los siete años y medio requeridos por la Ley; que pasando a examinar el segundo aspecto, referido a la aplicación de la Ley veintiséis mil seiscientos cuarentiuno al acusado García Pérez, cabe hacer notar el doble contenido de dicha Ley, uno de orden material, en cuanto modifica el artículo ochentitrés del Código Penal vigente e indirectamente el artículo ciento veintiuno del Código derogado, al establecer una

...///

///...

suspensión del término de la prescripción para los declarados contumaces y crear un nuevo delito para los mismos, y otro de contenido procesal, al modificar el trámite y las condiciones requeridas para la declaración de la contumacia, esto es, en cuanto modifica el Decreto Legislativo ciento veinticinco que disponía el requerimiento previo a la declaración de contumacia y determinando a quienes se les declaraba como tales; que en este contexto la Ley veintiséis mil seiscientos cuarentiuno en su contenido de derecho sustantivo no puede aplicarse al acusado Alan Gabriel García Pérez por contrariar normas Constitucionales y legales ya mencionadas al inicio de este considerando, en tanto que respecto al aspecto procesal carece de relevancia para el caso sub judice, dado que ya fue discutido y resuelto en anterior oportunidad por la propia Sala Penal Especial, empero, lo resuelto anteriormente tendría eficacia únicamente en lo adjetivo, puesto que en lo sustantivo el precepto Constitucional de la irretroactividad de la Ley Penal mantiene plena preponderancia sobre cualquier norma subalterna; por tanto, aún cuando se haya declarado contumaz al acusado, los términos de la prescripción siguieron corriendo a su favor; por lo demás, debe tenerse en cuenta que la situación jurídica del procesado antes de la promulgación de la Ley tantas veces citada, era la de reo ausente, infiriéndose por tanto de la lectura del artículo primero de la misma, que ella está destinada a los que fueron declarados contumaces; que en consecuencia, resulta evidente que la Ley veintiséis mil seiscientos cuarentiuno, colisiona con los artículos cincuentiuno, ciento tres segundo párrafo y el inciso once del artículo ciento treintinueve de la Constitución Política del Estado, casos en los cuáles, por imperio del

...///

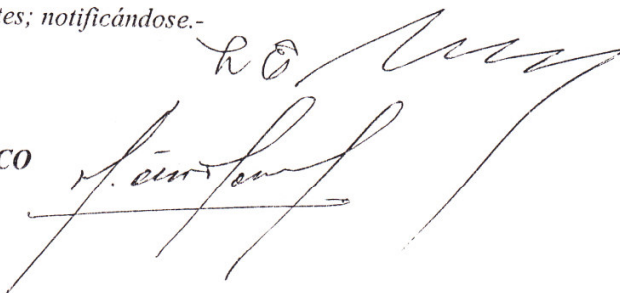
///...

artículo ciento treintiocho de la misma, concordante con el artículo catorce de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los jueces, ejerciendo la potestad jurisdiccional del control difuso deben aplicar preferentemente la norma Constitucional frente a cualquier otra norma legal, como en efecto se hace en el presente caso; por los fundamentos precedentes; por mayoría declararon: **FUNDADA** la Excepción de Prescripción deducida por la abogada del acusado **ALAN GABRIEL GARCIA PEREZ**; y, en consecuencia, **EXTINGUIDA POR PRESCRIPCION** la acción penal que se le sigue por delito de Enriquecimiento Ilícito, en agravio del Estado; y, como tal, consentida y/o ejecutoriada que sea la presente resolución, se archive definitivamente la causa y se levanten las órdenes de captura impartidas en su contra, dejándose asimismo sin efecto las medidas cautelares dictadas, elevándose previamente la presente resolución en consulta a la Sala Civil de la Corte Suprema de no ser apelada por las partes; notificándose.-

SS.

SERPA SEGURA

TORRES CARRASCO



EL SECRETARIO DE LA SALA PENAL ESPECIAL DE LA
CORTE SUPREMA CERTIFICA QUE :

...///

///...

LOS FUNDAMENTOS DEL VOTO DEL SEÑOR VOCAL CASTILLO LA ROSA SANCHEZ QUE CONCUERDA CON LA PRESCRIPCION DEL VOTO POR MAYORIA, SON LOS SIGUIENTES: con lo expuesto por la Señora Fiscal Supremo ante la Sala Penal Especial; y, **CONSIDERANDO:** *Que, en orden a la prescripción de la acción solicitada, es necesario en primer término diferenciar cuando se da la interrupción del término prescriptorio y cuando se da la suspensión del mismo; en el primer caso, se interrumpe la prescripción con el inicio de la investigación por el fiscal o el juez y producido este hecho, se inicia nuevamente el término; en cambio en el caso de la suspensión, se paraliza el término de prescripción entre tanto no desaparezca el hecho que determinó la suspensión, puede ser por tiempo indefinido, paralizando en esa forma la prescripción; que este segundo carácter tiene la disposición que, en vía de interpretación auténtica, contiene el artículo primero de la ley veintiséis mil seiscientos cuarentiuno, modificando no solo la aplicación del término prescriptorio, sino también el propio derecho a la prescripción y como esta ley fue dada mucho después de los hechos incriminados al Ex Presidente de la República Alan García Pérez, esa disposición no puede tener efecto retroactivo, desde que no es más benigna al reo, sino todo lo contrario; Que la irretroactividad de la ley penal, constituye un principio universal en resguardo de los Derechos Humanos, y se halla consagrado en el artículo ciento tres de la actual Constitución del Estado, artículo ciento ochentisiete de la anterior Carta Magna y debe ser amparado respecto de esas infracciones; que es del caso señalar, que el artículo segundo de la ley veintiséis mil seiscientoscuarentiuno, crea una nueva infracción*

...///

///...

típica penal, de acuerdo con las facultades que tiene el Estado de establecer por Ley nuevos tipos delictivos, en defensa de la correcta administración pública que interesa sustancialmente a la Nación y al Pueblo, y que si se incurre en esta nueva infracción después de la dación de la ley, su aplicación no entraña darle efecto retroactivo; que ese nuevo delito se le imputa a Alan García Pérez, cometido desde que habiendo sido declarado reo contumaz y reiterado su orden de captura a nivel nacional e internacional como se ve a fojas trece mil ciento cincuentiocho y trece mil ciento cincuentinueve, trece mil trescientos setentidós y trece mil trescientos setentitrés; y, trece mil trescientos ochentiocho y trece mil trescientos ochentinueve, persiste su negativa de ponerse a derecho, evadiendo intencionalmente la acción de la justicia; que este nuevo delito en que habría incurrido a partir del veintiséis de junio de mil novecientos noventa y seis, desde luego no ha prescrito, no solo porque no ha transcurrido el término prescriptorio establecido, sino porque se trata de un delito de omisión permanente, en cuyo caso dicho término solo empezará a correr cuando deje de cometerse, esto es, cuando el agente acate las órdenes judiciales de comparecencia y se sujete al juzgamiento; que no está demás graficar que el delito de contumacia en cuestión, no es instantáneo sino permanente, como son la gran mayoría de los delitos de omisión, pues no solo se prolonga en el tiempo los efectos del delito, como ocurre generalmente en los delitos instantáneos, sino que permanece el estado mismo de la consumación, como lo aclara muy bien Manzini en su Tratado de Derecho Penal, citado por Sebastián Soler en su Derecho Penal Argentino sección veintiuno-tercera; que la instauración del delito de contumacia mediante el

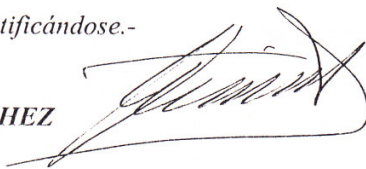
...///

///...

artículo segundo de la ley citada, responde a una necesidad social producto de la aspiración del pueblo y la propia justicia, de que no queden impunes delitos de corrupción y otros contra la administración pública que entrañan apoderamiento de dineros que los ciudadanos aportan para el funcionamiento del Estado, impunidad que ocurriría cuando los autores se fugan al extranjero y obstaculizan cualquier extradición, sea consiguiendo un asilo político o por tener otra nacionalidad más, como viene ocurriendo, en lugar de ponerse a derecho, defenderse de los cargos, desvanecerlos o demostrar su inocencia, en cuyo caso serán absueltos por los Tribunales peruanos, cuyos jueces respetamos y hacemos respetar nuestra autonomía y libertad de criterio absolutas para decir el derecho; **Que**, la incorporación de un nuevo delito al Código Penal, la aplicación que se le da no afecta dispositivo alguno de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que el Perú es suscriptor, especialmente los principios que consagra sobre legalidad, retroactividad de la ley e igualdad frente a todos; que no obstante este nuevo delito no ha sido materia de denuncia, no se ha abierto instrucción y no ha sido objeto de la prescripción solicitada; por estos fundamentos, **MI VOTO** es por que se declare **FUNDADA** la Excepción de Prescripción deducida por la apoderada de Alan Gabriel García Pérez en la causa que se le sigue por delito de Enriquecimiento Ilícito en agravio del Estado; y, se cumpla con cursar las copias ordenadas en el auto de fojas cuatrocientos setenticinco al Señor Fiscal para que proceda con arreglo a sus atribuciones; notificándose.-

S.

CASTILLO LA ROSA SANCHEZ



8.6. CASO: Aquiles Huamancaja Ramos y otros
CONSULTA EXP. N° 1354-2010
Corte Suprema de justicia de la República - Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente
Fecha: 22 de junio de 2010

Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente
Corte Suprema de Justicia de la República

CONSULTA
EXPEDIENTE N° 1354 - 2010
LIMA

Lima, veintidós de junio
de dos mil diez

VISTOS; y CONSIDERANDO:

Primero: Viene en consulta la resolución de fecha primero de julio de dos mil nueve, emitida por la Cuarta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres, en el extremo que declaró inaplicable al caso el artículo 1 de la Ley N° 26641.

Segundo: La resolución consultada ha inaplicado lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley N° 26641, por considerar que la citada norma resulta incompatible con el debido proceso, el principio de seguridad jurídica, el de igualdad ante la ley, presunción de inocencia y el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable y la temporalidad de la pena, todo lo cual forma parte del derecho al debido proceso consagrado en el artículo 139 de la Constitución Política del Estado.

Tercero: En el caso del control constitucional difuso de las normas, el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, prevé que cuando los jueces de cualquier especialidad, al momento de fallar el fondo de la cuestión, encuentren que hay incompatibilidad en su interpretación, de una disposición constitucional y una con rango de ley, deben resolver la causa con arreglo a la primera; pero además, atendiendo a la trascendencia jurídica del control constitucional, la misma ley ha previsto que todas las sentencias en las que un Juez Ordinario haya efectuado el control constitucional difuso, necesariamente debe ser elevada en consulta a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema, si la resolución no fuera impugnada.

*Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente
Corte Suprema de Justicia de la República*

CONSULTA
EXPEDIENTE N° 1354 - 2010
LIMA

Cuarto: La inaplicación de una norma legal, que se interpreta contraria a la Constitución, constituye una prerrogativa jurisdiccional de última ratio, por ésta razón, el control difuso no puede ser invocado a menudo en la actividad jurisdiccional; por el contrario, atendiendo a la trascendencia jurídica que ésta decisión implica, el juzgador debe tener en cuenta que, en principio, todas la leyes expedidas por el Congreso de la República, por el sólo hecho de haber sido expedidas por el órgano constitucional que tiene a su cargo la función legislativa, siguiendo para el efecto, todo un proceso de formación de la ley, que es conocido en la doctrina como el "iter legislativo", están amparadas por la presunción de constitucionalidad; por tanto *a priori* se presume que todas las leyes son constitucionales y que éstas guardan perfecta armonía entre sí y con la Carta Fundamental; por ésta razón, el artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, ha previsto que la inaplicación de una norma legal, sólo puede ser viable cuando no sea factible obtener una interpretación conforme a la Constitución.

Quinto: Efectuada la anterior precisión, conviene hacer notar que en el presente caso la Sala Superior antes referida encuentra que hay conflicto de normas entre el artículo 1 de la Ley N° 26641, con lo dispuesto en el artículo 139 inciso 3) de la Constitución Política del Estado, principalmente en lo que se refiere al plazo razonable para ser juzgado y el derecho a la igualdad ante la ley.

Sexto: Para dilucidar el tema relativo a la prescripción de la acción penal, la contumacia y la interrupción del plazo de prescripción, es preciso tener en cuenta el marco legislativo que resulta aplicable al caso. En tal sentido el artículo 80 del Código Penal modificado por el artículo 2 de la Ley N°

*Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente
Corte Suprema de Justicia de la República*

CONSULTA
EXPEDIENTE N° 1354 - 2010
LIMA

26360, luego por el artículo único de la Ley N° 26314, y el artículo 4 de la Ley N° 28117, prevé que la acción penal prescribe de manera ordinaria en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley para el delito cometido; consecuente con esta disposición legal, el Código Penal ha establecido que el plazo de prescripción puede ser interrumpido por las causales previstas en el artículo 83, o suspendido de acuerdo con lo establecido en el artículo 84 del Código Penal; en el primer caso una vez producida la interrupción el plazo de prescripción, éste debe volver a computarse, en tanto que en la segunda, una vez superada la causal que determinó la suspensión, se continúa computando el plazo de prescripción, es decir, que en éste último supuesto no se pierde el plazo de prescripción que se venía ganando.

Sétimo: En suma, la prescripción de la acción penal, puede ser objeto de interrupción y de suspensión por causas establecidas en la ley; pero además con relación a la contumacia y la interrupción del plazo de prescripción de la acción penal, el artículo 1 de la Ley N° 26641 ha precisado que tratándose de reos contumaces, los plazos de prescripción se interrumpen, desde que existan evidencias irrefutables de que el acusado rehuye del proceso y hasta que el mismo se ponga a derecho, correspondiendo al Juez encargado de tramitar el proceso declarar la suspensión del plazo de prescripción.

Octavo: Lo dispuesto por la Ley N° 26641 tiene sustento válido en el ejercicio de la potestad punitiva del Estado, el fin retributivo de la pena y el carácter preventivo especial de la misma, contemplados en el artículo IX del Título Preliminar del Código Penal vigente; pues resulta evidente que la interrupción del plazo, no está prevista en general para todos

*Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente
Corte Suprema de Justicia de la República*

CONSULTA
EXPEDIENTE N° 1354 - 2010
LIMA

aquellos casos en los que el procesado omite comparecer por ante el órgano jurisdiccional, sino específicamente para los supuestos en los que la instrucción penal ha sido conducida por sus causas normales y el proceso se muestra renuente a su juzgamiento.

Noveno: En el presente caso, se advierte que mediante resolución de fecha veintinueve de agosto de dos mil nueve, obrante a fojas ciento cuarenta y cinco del presente incidente, se declararon reos contumaces a los acusados al configurarse evidencias irrefutables que los acusados han denotado una actitud evidente de rehuir del proceso. No obstante ello, y encontrándose pendiente de emitir pronunciamiento respecto al primer otrosí del escrito de fecha veintiocho de agosto de dos mil ocho, solicitado por la parte civil, obrante a fojas ciento cuarenta y siete, que contiene el pedido de suspensión de la prescripción previsto en el artículo 1 de la Ley N° 26641, tanto el Décimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Penal de Lima como la Cuarta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de Lima declararon la inaplicabilidad al presente caso de lo dispuesto en el citado artículo 1 de la Ley N° 26641, por considerarlo violatorio del derecho al debido proceso y del plazo razonable, entre otros, sin tener en consideración la conducta renuente al juzgamiento asumida por los acusados en este proceso, según el propio Juzgado Penal respectivo lo determinó a través de la resolución de fecha veintinueve de agosto de dos mil ocho.

Décimo: En tal sentido, la declaración de reo contumaz del imputado trae consigo los efectos de la interrupción de la prescripción de la acción penal conforme a lo previsto en la Ley N° 26641 y no constituye afectación del derecho al debido proceso y los demás derechos y principios señalados

*Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente
Corte Suprema de Justicia de la República*

CONSULTA
EXPEDIENTE N° 1354 - 2010
LIMA

en la resolución materia de consulta, en la medida que no viene a ser otra cosa que la manifestación objetiva de las facultades de *vocatio y coertio* que tiene el Juez penal para hacer efectiva la comparecencia del acusado, y por ende, no se contrapone con lo dispuesto en el artículo 139 numeral 3) de la Constitución Política del Estado en tanto constituye una manifestación válida del ius puniendi del Estado antes las circunstancias que configuran la declaración de reo contumaz.

Décimo Primero: En lo que respecta al derecho de igualdad ante ley, como ha expresado éste Colegido en anteriores ocasiones, la igualdad prevista en la Constitución Política del Estado debe ser entendida como igualdad de trato entre los iguales y desigualdad entre los desiguales, según se desprende lo previsto en los artículos 2 incisos 2) y 103 de la Constitución Política del Estado. Al respecto la igualdad en la Constitución, se manifiesta en dos aspectos claramente identificados. El primero, se constituye como un principio rector de la organización y actuación del Estado de Derecho, implica un postulado con sentido y proyección normativa o deontológica, en virtud del cual queda proscrita toda acción legislativa o jurisdiccional tendiente a establecer una diferenciación arbitraria, injustificable y no razonable. En el segundo, se erige como un derecho fundamental de la persona, que implica el reconocimiento de un derecho subjetivo consustancial a la persona humana, que consiste en ser tratada igual que los demás situaciones semejantes.

Décimo Segundo: Al respecto, esta Suprema Sala considera que en el caso concreto del artículo 1 de la Ley N° 26641, la norma no establece un trato diferenciado arbitrario e injustificado respecto del universo de

*Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente
Corte Suprema de Justicia de la República*

CONSULTA
EXPEDIENTE N° 1354 - 2010
LIMA

procesados, puesto que si bien prevé la interrupción de los plazos de prescripción en el caso de los reos contumaces, la misma norma penal fija como elemento diferenciador el hecho que existan evidencias irrefutables de que el acusado rehúye del proceso, lo que se habría configurado en el presente caso ante la renuencia de los imputados a su juzgamiento, razón por la cual incluso se les declaró oportunamente reos contumaces.

Décimo Tercero: En este mismo sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en la sentencia de fecha seis de junio del dos mil cinco, expedida en el expediente N° 4118-2004-HC/TC, en el que ha establecido con efecto vinculante para todos los operadores jurídicos (expresamente hace constar ésta carácter en su fundamento número veintitrés) que: "tratándose de reos contumaces, los plazos de prescripción se interrumpen si es que existen evidencias irrefutables que el acusado rehúye del proceso y hasta que el mismo se ponga a derecho, debiendo el Juez declarar dicha suspensión de conformidad con el artículo 1 de la Ley N° 26641", criterio que ha mantenido en la sentencia de fecha diecisiete de octubre del dos mil cinco pronunciada en el expediente N° 07451-2005-PHC/TC, en la que se hace expresa referencia a lo establecido en la sentencia anterior, con relación a la suspensión de los plazos de prescripción en caso de reos contumaces.

Décimo Cuarto: En suma, al haber quedado claramente establecido que en el proceso penal, que es materia de la consulta, los acusados vienen rehuyendo su juzgamiento, debe desaprobarse la resolución consultada y ordenarse que se mantenga la suspensión de los plazos de prescripción; pues admitir lo contrario implicaría que el Juzgador estaría abdicando en sus funciones en materia penal.

*Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente
Corte Suprema de Justicia de la República*

CONSULTA
EXPEDIENTE N° 1354 - 2010
LIMA

Por tales consideraciones; **DESAPROBARON** la resolución consultada que corre a fojas ciento noventa y dos, su fecha primero de julio de dos mil nueve, en cuanto declaró **INAPLICABLE** al presente caso el artículo 1 de la Ley N° 26641; en los seguidos contra Aquiles Huamancaja Ramos, y otros, en agravio de la Asociación Mesa Redonda, sobre delito contra el patrimonio- apropiación ilícita y otros; y los devolvieron. Vocal Ponente: Acevedo Mena.-

SS.

VASQUEZ CORTEZ

TAVARA CORDOVA

RODRIGUEZ MENDOZA

ACEVEDO MENA

MAC RAE THAYS

mc/ptc

CARMEN ROSA DIAZ ACEVEDO
Secretaria
de la Sala de Derecho Constitucional y Social
Permanente de la Corte Suprema

28 JUN. 2011

LOS FUNDAMENTOS DE LA VOCAL SUPREMO VASQUEZ CORTEZ, ADEMAS DE LOS CONSIGNADOS EN LA RESOLUCION QUE ANTECEDE, SON LOS SIGUIENTES:-----

PRIMERO: Que mediante Ley N° 26641, e interpretándose por la vía auténtica, se estableció que, tratándose de contumaces, el principio de la función jurisdiccional de no ser condenado en ausencia, se aplica sin

*Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente
Corte Suprema de Justicia de la República*

**CONSULTA
EXPEDIENTE N° 1354 - 2010
LIMA**

perjuicio de la interrupción de los términos prescriptorios, la misma que opera desde que existen evidencias irrefutables que el acusado rehúye del proceso y hasta que el mismo se ponga a derecho, debiendo el Juez del proceso declarar la condición de contumaz y la suspensión de la prescripción.

SEGUNDO: Que al respecto, en la sentencia del Tribunal Constitucional N° 4118-2004-HC/TC, el máximo intérprete de la Constitución ha establecido con efecto vinculante para todos los operadores jurídicos que, tratándose de reos contumaces, los plazos de prescripción se interrumpen si es que existen evidencias irrefutables que el acusado rehúye del proceso y hasta que el mismo se ponga a derecho, tal y como lo prescribe el artículo 1 de la Ley N° 26641.

TERCERO: Que, en efecto, según lo expuesto por el Tribunal Constitucional, el artículo 1 de la Ley N° 26641 no vulnera los principios de proporcionalidad y de igualdad, y en tal sentido, la incorporación de un supuesto de prolongación del plazo de prescripción, no sólo no conspira contra la naturaleza de la prescripción, sino que, al estar referida a una conducta procesal del imputado, de alejarse o evadirse de la acción de la justicia, configura un supuesto claro y específico de una actuación de relevancia procesal que impide la prosecución normal de la causa, cuya sustanciación implica a su vez la exigencia de dotar a la justicia de instrumentos necesarios para la sanción de conductas penalmente antijurídicas que reflejan la actualidad y necesidad del esclarecimiento y eventual sanción; que en tal virtud, la causal de prolongación del plazo de prescripción por contumacia del imputado, en modo alguno constituye una

*Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente
Corte Suprema de Justicia de la República*

CONSULTA
EXPEDIENTE N° 1354 - 2010
LIMA

causal arbitraria, sin fundamento razonable, que distorsione gravemente el esclarecimiento de infracciones penales y el posible castigo de los autores o partícipes en su comisión, así como tampoco introduce una diferenciación arbitraria, no objetiva, entre imputados presentes y contumaces.

CUARTO: Que, en el caso concreto, aparece de autos que los coacusados Gricelda René Arratea Arenas, Gregorio Atencio Nina, Víctor Luzgardo Arratea Arenas y Aquiles Huamancaja Ramos, denunciados por delito contra el patrimonio en agravio de Edgar Santos Rojas, han venido rehusando su juzgamiento, razón por la que corresponde desaprobar la resolución consultada y ordenarse que se mantenga la suspensión de los plazos de prescripción, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley N° 26641 y demás normas pertinentes.

QUINTO: Que, por los fundamentos expuestos, la suscrita, en aplicación de lo dispuesto por el último párrafo del artículo 22 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se aparta del criterio jurisprudencial que se venía aplicando en esta Suprema Sala, en el sentido que se consideraba que el artículo 1 de la Ley N° 26641 colisionaba con la Constitución Política del Estado, al disponer la suspensión del plazo prescriptorio de la acción penal cuando el procesado sea declarado contumaz, al existir evidencias irrefutables de que rehúye el juzgamiento.

S.

VASQUEZ CORTEZ

CARMEN ROSA DÍAZ ACEVEDO
Secretaria
de la Sala de Derecho Constitucional y Social
Permanente de la Corte Suprema

28 JUN. 2011

8.7. CASO: Consuelo García Naranjo
EXP. 11190-1997
Corte Superior de justicia de Lima
Fecha: 06 de enero de 2012

13349
trece mil
trecentos
cuarenta y nueve

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA ESPECIALIZADA EN LO PENAL PARA
PROCESOS CON REOS LIBRES

EXP. N° 11190-1997
 DD. Dr. VÁSQUEZ ARANA

S E N T E N C I A

Lima, seis de enero
 del dos mil doce.-

VISTOS.- En audiencia pública la causa penal seguida contra AIDA DEL CARMEN JESUS CONSUELO GARCIA NARANJO MORALES, de sesenta años, identificada con número nacional de identidad número cero sesenta y seis cincuenta y ocho ciento once, natural de Lima, nacida el veinte de marzo de mil novecientos cincuenta y uno, hija de Juan y Aída, divorciada, tres hijos, con grado de instrucción superior completa, con domicilio en Calle Lancones manzana O, lote treintidos, La Capullana, Surco; DORIS VELARDE SOTO, de cincuenta y nueve años, identificada con documento nacional de identidad número cero nueve treinta y siete diez cincuenta y seis, natural de Lima, nacida el día veintiséis de julio de mil novecientos cincuenta y dos, hija de Luis Gastón Velarde Salinas y de doña Marcela Dora Soto Sánchez, soltera, una hija, grado de instrucción superior, egresada de Derecho, católica, con domicilio en avenida Nicolás Ayllón número once noventa, interior cinco- A, San Luis, al costado del camal de Yerbateros; NATIVIDAD ADELA TIMOTEO COLLANTES DE ALVAREZ, de sesenta y un años, identificada con documento nacional de identidad número cero ocho cuarenta y seis treinta y tres ochenta y cuatro, natural de Ancash, con fecha de nacimiento ocho de septiembre de mil novecientos cincuenta, hija de Julio y Margarita, casada, de religión católica, con grado de instrucción primaria completa, con domicilio en jirón Los Ruibares número dos ocho seis, Asociación de vivienda Naranjal, San Martín de Porres; ZADITH DORA ITURRARAN VIENA, de sesenta y un años, identificada con

PODER JUDICIAL
 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

1

13375

trece mil
trescientos
setenta y cinco

y físicamente no podrían participar cuatro, y que además el Ministerio Público no ha sustentado cuales son las pruebas para atribuir cargos, por el contrario, ha sido la acuciosidad del Colegiado de evaluar la gran cantidad de instrumentos obrantes en autos para verificar que por lo menos el año de mil novecientos noventa y cuatro sólo participó Timoteo Collantes.

D. MEDIOS TECNICOS DE DEFENSA

Durante el acto oral se ha deducido las siguientes excepciones:

a) La defensa del acusado FRANCISCO GUADALUPE AYALA ROJAS, ha deducido Excepción de Prescripción, argumentando que el delito que se le imputa está sancionado con una pena de seis años y que los hechos imputados se habrían producido el treinta y uno de mayo de mil novecientos noventa y cinco, y que desde esa fecha ha transcurrido en exceso el plazo legal de prescripción del ilícito incriminado; agregando el recurrente que su actuación se debe como miembro del Directorio de la Empresa Municipal Inmobiliaria EMILIMA, y que además resulta ser inocente de los actos que se le imputan debido a que él no interviene en la suscripción del documento que obra en autos, habiendo suscrito este documento sus coprocesados Granda Coianti, Lecaros Cuadros, Espinoza Bellido, Alva Manfredi, Rodríguez Ponce, Amanqui Amanqui, Mármol Vásquez Ruiz Portocarrero; agregado además que según certificado expedido por el gerente de Emilima tiene un contrato a plazo fijo que lo acredita como sujeto del régimen laboral de la actividad privada de conformidad con el Decreto Legislativo siete veintiocho, entonces mal se le puede considerar como funcionario o servidor público.

b) Asimismo, la defensa de la acusada AÍDA DEL CARMEN JESÚS CONSUELO GARCÍA NARANJO MORALES a deducido excepción de prescripción aduciendo que los cargos que se le imputan serían los realizados como miembro del Comité Directivo del Programa Metropolitano del Vaso de Leche de la Municipalidad de Lima, cargo que desempeñó desde el

PODER JUDICIAL
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

segundo semestre del año mil novecientos noventa hasta el año noventa y dos, precisando que los hechos imputados serían los consignados en las actas de fechas once y veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y dos; y que el Informe Especial de Contraloría número ciento cuarenta y nueve guión noventa y cinco se pronuncia por encontrar responsabilidad administrativa por no ejercer su función de fiscalización y vigilancia del los actos de la administración municipal en su calidad de regidora, precisando al respecto la defensa que su patrocinada ejerció el cargo de regidora de la Municipalidad de Lima Metropolitana durante la primera gestión del señor Ricardo Belmont Cassinelli, esto es, durante los años mil novecientos noventa a mil novecientos noventa y dos, mandato que se prorrogó hasta marzo de mil novecientos noventa y tres de acuerdo a lo establecido en la Ley veintiséis mil ciento sesenta y seis, de lo cual se establece que han transcurrido dieciocho años y cinco meses desde que dejó de ejercer el cargo de regidora, con lo cual le correspondería la aplicación de la prescripción solicitada.

c) En igual sentido la defensa de la acusada DORIS VELARDE SOTO, deduce excepción de prescripción de la acción penal a favor de su patrocinada, señalando que todo lo manifestado por su patrocinada en toda su declaración se ha acreditado que era parte de una organización de madres de familia que nada tenía que ver con la Comité Directivo de la Municipalidad de Lima que administraba y daba la concesión de las adjudicaciones del Vaso de Leche para la distribución del producto, eso es por un lado; en ese mismo sentido sus actividades no ha sido decisorias para poder ver esta situación, asimismo se ha demostrado con claridad que su coacusada Teresa Aparcana Arias, beneficiaria también de una excepción de prescripción de la acción penal, quien está en la misma condición, por tanto que los hechos que han motivado este proceso no revisten mayor fundamento para tener una sentencia penal condenatoria; el hecho es que la defensa solicita la excepción de prescripción por haber transcurrido el plazo prescriptorio al haber sido beneficiadas con la ley veintinueve mil setecientos cincuenta y ocho, que modifica el trescientos ochenta y cuatro del Código Penal, la defensa considera que la procesada es inocente y no reviste mayor abudamiento, por lo que a igual razón igual

13376

trece mil
trecentos
setenta y seis

derecho, y por el principio de legalidad la defensa solicita que se fundada la excepción de prescripción solicitada a favor de su patrocinada.

Se corre traslado a la señora Fiscal Superior, quien manifestó se le conceda una nueva fecha para emitir pronunciamiento.

d) Finalmente, la defensa de las acusadas NATIVIDAD ADELA TIMOTEO COLLANTES DE ALVAREZ, EULALIA GOMES VIUDA DE BLAS y ZADITH DORA ITURRARAN VIENA deduce Excepción de Prescripción a favor de sus patrocinadas, puesto que de conformidad con el artículo trescientos ochenta y cuatro, y que se ha configurado como colusión simple, la sanción para el hecho que se les atribuyen no son mayores a seis años, siendo que los hechos datan de más de diecisiete años, por lo que el término extraordinario sumándole tres años correspondería a nueve años y consecuentemente ha sobrepasado el término ordinario y extraordinario de la norma y por tanto la acción ha prescrito, y atendiendo además que el Colegiado ya calificó que sus patrocinadas estarían involucradas en la comisión de delito de Colusión Simple en aplicación retroactiva de la ley penal, ley veintinueve cinco seis ocho establece que la pena máxima es de seis años, habiendo en este caso sobrepasado en exceso los plazos de prescripción; por lo que la defensa solicita se declare fundada la excepción de prescripción planteada en este caso en lo que respecta a sus patrocinadas.

PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA:

1. Los medios técnicos de defensa constituyen mecanismos de oposición a la prosecución del proceso, por entender que éste carece de los presupuestos procesales establecidos en el ordenamiento jurídico procesal; buscando evitar procesos innecesarios por falta de objeto o finalidad. En las excepciones se invocan razones estrictamente procesales, que nada tienen que ver con el objeto fundamental del proceso.
2. Que, conforme a lo dispuesto en el sexto párrafo del artículo quinto del Código de Procedimientos Penales, la Excepción de Prescripción podrá deducirse cuando por el transcurso del tiempo, conforme a los plazos señalados por el Código Penal, se extingue la misma, tal como lo refiere

PODER JUDICIAL
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

César San Martín Castro, en su Libro Derecho Procesal Penal¹, "La prescripción constituye un supuesto de extinción de la pena y señala que el Código Penal fija las pautas en que opera la prescripción"; por lo que a efectos de resolver las excepciones planteadas se debe tener en cuenta los lineamientos establecidos en ese cuerpo normativo.

3. Es necesario puntualizar respecto a la institución de la prescripción, que nuestro máximo interprete de la Constitución se ha pronunciado en reiterada jurisprudencia, señalando... "*que la prescripción desde un punto de vista general, es la institución jurídica mediante la cual, por el transcurso del tiempo, la persona adquiere derechos o se libera de obligaciones. Y desde la óptica penal es una causa de extinción de la responsabilidad criminal fundada en la acción del tiempo sobre los acontecimientos humanos o en la renuncia del Estado al ius punendi, bajo el supuesto de que el tiempo transcurrido borra los efectos de la infracción, existiendo apenas memoria social de ella (...) la ley penal material atorga a la acción penal una función preventiva y resocializadora, en la cual el Estado autolimita su potestad punitiva, orientación que se funda en la necesidad de que, pasado cierto tiempo, se elimine toda incertidumbre jurídica y se abandone el castigo de quien lleva mucho tiempo viviendo honradamente, consagrando de esta manera el principio de seguridad jurídica*"²; en ese sentido, la prescripción opera al transcurrir un plazo igual al máximo de la pena prevista en la ley para el delito; y en forma extraordinaria, cuando el tiempo transcurrido sobrepasa en una mitad a dicho plazo, conforme a lo establecido en los artículos ochenta y ochenta y tres parte *in fine* del Código Penal.
4. Este Tribunal procediendo con objetividad y según el análisis efectuado en el razonamiento lógico, y en atención a que en nuestro régimen legal, el Estado dentro de su política de persecución criminal ha establecido distintos plazos de vigencia de la acción penal; así en el tipo penal de

¹ San Martín Castro César, Derecho Procesal Penal I, 2da Edición, Editora Jurídica GRIJLEY E.I.R.L.-*, Lima, 2003, pp. 392-393

² Sala Primera del Tribunal Constitucional.- Exp. N. 04352-2009-PHC/TC-LAMBAYEQUE de fecha 18-03-2010 -Prescripción de la acción penal y justicia constitucional - fundamento segundo [la **negrita** y el subrayado es nuestro]; véase en ese sentido: Exp. N. 2506-2005-PHC/TC; Exp. N. 4900-2006-PHC/TC; Exp. N. 2466-2006-PHC/TC; Exp. N. 331-2007-PHC/TC.

13377
trece mil
trecentos
setenta y siete

colusión se ha establecido la figura simple y la agravada; habiendo este Tribunal en este extremo por este delito aceptado la propuesta del Ministerio Público para que los sucesos se consideren colusión simple, tipo penal que según normas vigente merece una pena no mayor a seis años y que según lo dispuesto en el artículo ochenta y tres del Código Penal para establecer la prescripción extraordinaria a la pena máxima se debe agregar una mitad más, lo que nos arroja un total de nueve años; debiendo reflexionar que este Tribunal a fin de continuar con el juzgamiento de alguno de los acusados que han alegado en todo momento la prescripción de la acción penal, específicamente sobre los hechos ocurridos en el año de mil novecientos noventa y cuatro, en el sentido que el último párrafo del artículo ochenta de nuestro código sustantivo se modificó el veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y cuatro (*pautas establecidas en nuestra resolución de fecha veinticinco de agosto del año dos mil once*) en donde hemos considerado que si bien es cierto la dúplica se aplicaría desde mayo de mil novecientos noventa y cuatro, nuestra Constitución en vigencia desde el primero de enero de ese año, establece en el artículo cuarenta y uno que la acción penal en los casos de funcionarios públicos y en agravio del patrimonio del Estado se duplican, por lo que a nuestro criterio la acción, desde esa época, se mantiene en vigencia, por lo que las excepciones propuestas por ellos a la fecha deben ser declaradas improcedentes, y en consecuencia nos consideramos en aptitud de emitir pronunciamiento de fondo en lo que se refiera a los hechos ocurridos en el año mil novecientos noventa y cuatro.

Este Tribunal, como ya ha emitido opiniones en resoluciones anteriores que no se pronunciará por el fondo del asunto, así existan elementos de absolución, cuando la acción penal ya ha prescrito, esto es en respeto y para dejar a salvo el derecho de los ciudadanos que deseen exigir el pronunciamiento del órgano jurisdiccional, para lo cual deberán proceder de conformidad con el artículo noventa y uno del Código Penal, presentando renuncia a la prescripción de la acción penal, situación que corresponde a cada sujeto y evidentemente de este pronunciamiento.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PODER JUDICIAL
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

SONIA IRIS PÉREZ

A. TIPO PENAL

El delito de Colusión Simple se encuentra regulado en el primer párrafo del artículo trescientos ochenta y cuatro del Código Penal, vigente a la fecha, *el mismo que se configura cuando el funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente, por razón de su cargo, en cualquier etapa de las modalidades de adquisición o contratación pública de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado concerta con los interesados para defraudar al Estado o entidad u organismo del Estado; el delito de Cohecho Propio*, (vigente en la fecha de la comisión del ilícito) está tipificado en el artículo trescientos noventa y tres del código sustantivo, *el cual se configura cuando el funcionario o servidor público que solicita o acepta donativo, promesa o cualquier otra ventaja, para realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones o el que las acepta a consecuencia de haber faltado a sus deberes; delitos sancionados ambos además con pena de inhabilitación de acuerdo a lo previsto en el artículo cuatrocientos veintiséis en concordancia con los incisos uno y dos del artículo treinta y seis del citado cuerpo normativo.*

B. QUANTUM DE LA PENA

Para establecer el quantum de la pena, este Superior Colegiado debe tener en cuenta otros aspectos de tanta o igual importancia a los ya reseñados, como son:

- a) Los delitos materia de incriminación se encuentran regulados en el primer párrafo del artículo trescientos ochenta y cuatro y trescientos noventa y tres del Código Penal; sancionados ambos con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años. Asimismo, el artículo cuatrocientos veintiséis del citado cuerpo normativo establece además para los delitos de Colusión Simple y Cohecho Propio, la pena de inhabilitación de uno a tres años conforme el artículo treinta y seis, incisos uno y dos del Código Penal.
- b) El irrestricto respeto al principio de legalidad, debido a que por normas vigentes las penas han sido modificadas, inclusive el tipo en colusión simple y agravada, según la ley veintinueve mil setecientos cincuenta y ocho, que analizaremos en su oportunidad.
- c) El impacto social del hecho cometido (grado de nocividad social de la conducta incriminada).

3378
trece mil
trescientos
setenta y ocho

- d) Las cualidades personales de los autores, su grado de instrucción y el entorno social donde residen.
- e) Para efecto de graduar la pena se debe considerar los principios de proporcionalidad y razonabilidad, por los cuales la sanción no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho, consagrado en el numeral octavo del Título Preliminar del Código Penal.
- f) Es necesario tener en cuenta que determinados acusados se han limitado a negar los cargos, a pesar de la abundante prueba obrante en autos y a quienes se les ha tenido que probar judicialmente su responsabilidad, por lo que no pueden ser beneficiarios del derecho penal premial, sin perjuicio de valorar los principios de proporcionalidad y racionalidad de pena.

C. REPARACION CIVIL.

La imposición del monto de la reparación civil se fijará en relación y proporción a la lesión causada, puesto que la reparación civil se rige por el principio del daño causado, cuya unidad penal y civil protege la reparación y resarcimiento del bien jurídico tutelado, específicamente el de la víctima o agraviado que resulte lesionado; por lo que este Colegiado impondrá una reparación civil equitativa y proporcional.

D. INHABILITACIÓN

Esta pena está contenido como una de carácter accesorio según el artículo cuatrocientos veintiséis del Código Penal y que a la época de la comisión de los hechos estaba sancionada con inhabilitación de uno a tres años, y por reciente modificatoria de la Ley veintinueve mil setecientos cincuenta y ocho el tipo penal en comento está sancionado con una pena de inhabilitación en un tiempo igual al de la duración de la pena principal, según el primer párrafo del artículo cuatrocientos veintiséis; pero en atención al principio de favorabilidad resulta necesario considerar que la normatividad aplicable es la que estaba en aplicación al momento de la comisión de los hechos que es la que más favorece al reo en este caso.

PODER JUDICIAL
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

En consecuencia, en aplicación de lo dispuesto en el numeral VIII del Título Preliminar del Código Penal, así como los artículos seis, doce, veintitrés, incisos uno y dos del artículo treinta y seis, cuarenta y cinco, cuarenta y seis, noventa y dos, noventa y tres del Código Penal y el primer párrafo del artículo trescientos ochenta y cuatro, trescientos noventa y tres, y cuatrocientos veintiséis de la acotada norma Penal; en concordancia con los artículos doscientos ochenta, doscientos ochenta y tres, doscientos ochenta y cuatro, y doscientos ochenta y cinco del Código de Procedimientos Penales, apreciando los hechos y valorando las pruebas con criterio de conciencia que la ley autoriza, los señores Jueces Superiores integrantes de la Primera Sala Penal para Procesos con Reos Libres administrando Justicia a nombre del Pueblo;

FALLA:

DECLARANDO INFUNDADAS LAS EXCEPCIONES DE PRESCRIPCIÓN interpuestas por AIDA DEL CARMEN JESÚS CONSUELO GARCIA NARANJO MORALES, NATIVIDAD ADELA TIMOTEO COLLANTES DE ALVAREZ, EULALIA GOMES VIUDA DE BLAS, ZADITH DORA ITURRARAN VIENA y DORIS VELARDE SOTO, por el delito de Colusión Simple en agravio de la Municipalidad Provincial de Lima y el Estado, con referencia a los hechos ocurridos según la imputación fiscal en el año de mil novecientos noventa y cuatro; e INFUNDADA LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN interpuesta por FRANCISCO GUADALUPE AYALA ROJAS por delito contra la Administración Pública- Colusión simple y por delito de Corrupción de Funcionarios - Cohecho, en agravio de la Municipalidad Provincial de Lima y el Estado; Y FUNDADAS LAS EXCEPCIONES DE PRESCRIPCIÓN a favor de las acusadas AIDA DEL CARMEN JESÚS CONSUELO GARCIA NARANJO MORALES, NATIVIDAD ADELA TIMOTEO COLLANTES DE ALVAREZ, EULALIA GOMES VIUDA DE BLAS, ZADITH DORA ITURRARAN VIENA y DORIS VELARDE SOTO, por el delito de Colusión Simple en agravio de la Municipalidad Provincial de Lima y el Estado, en el extremo de los hechos ocurridos en los años mil novecientos noventa y dos y mil novecientos noventa y tres, en su condición de miembros del Comité Directivo del Programa Metropolitano del Vaso de Leche; ABSOLVIENDO a AIDA DEL CARMEN JESÚS CONSUELO GARCIA

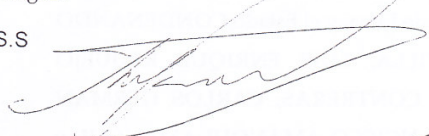
13379
trece mil
trecientos
Setenta y nueve

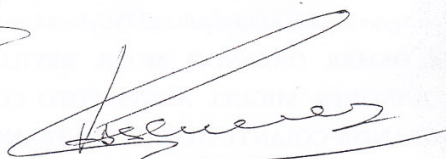
NARANJO MORALES, NATIVIDAD ADELA TIMOTEO COLLANTES DE ALVAREZ, EULALIA GOMES VIUDA DE BLAS, ZADITH DORA ITURRARAN VIENA y DORIS VELARDE SOTO, por el delito de Colusión Simple en agravio de la Municipalidad Provincial de Lima y el Estado, en el extremo de los hechos ocurridos en el año mil novecientos noventa y cuatro, en su condición de miembros del Comité Directivo del Programa Metropolitano del Vaso de Leche; y asimismo **ABSOLVIENDO** a JAVIER ALBERTO CACERES SAYAN y SALVADOR ENRIQUE EDUARDO TILLIT IBARRA por el delito de Colusión Simple en agravio de la Municipalidad Provincial de Lima y el Estado, por su participación en los actos de adquisición de equipo médico para el Programa de Postas Médicas y Control de la Toxicodependencia de la Municipalidad de Lima.; Y **ABSOLVIENDO** a CARLOS GERMAN GRANDA COIANTI, FRANCISCO GUADALUPE AYALA ROJAS y ALEJANDRO FRANCISCO AMANQUI AMANQUI por delito de Corrupción de Funcionarios - Cohecho, en agravio de la Municipalidad Provincial de Lima, Caja Municipal de Crédito Popular de Lima y el Estado, **ABSOLVIENDO A MIGUEL ANGEL POZO CONTRERAS** por delito de Corrupción de funcionarios- cohecho propio, en agravio de la Municipalidad Provincial de Lima, y el Estado; **CONDENANDO** a OSMAR ORLANDO MORA REVILLA, LUIS ENRIQUE REQUEJO QUIÑONES, MIGUEL ANGEL POZO CONTRERAS, CARLOS GERMAN GRANDA COIANTI, ALEJANDRO FRANCISCO AMANQUI AMANQUI, y FRANCISCO GUADALUPE AYALA ROJAS como autores del delito de Colusión Simple, en agravio de la Municipalidad Provincial de Lima, y como tal les **IMPUSIERON CUATRO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD** la misma que se **SUSPENDE** en su ejecución por el período de **TRES AÑOS** de conformidad con los artículos cincuenta y siete y cincuenta y ocho del Código Penal, bajo cumplimiento estricto de las siguientes reglas de conducta: a) No ausentarse del lugar de su residencia ni variar de domicilio sin conocimiento del Juzgado; b) Concurrir al local del Juzgado Penal de origen, a fin de registrar su firma en el cuaderno de control respectivo cada sesenta días para informar y justificar sus actividades personales, bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de revocarse la suspensión de la condena y hacerse efectiva conforme a lo dispuesto en el artículo cincuenta y nueve del Código Penal; e **INHABILITACION** por el término de **TRES AÑOS** contados a partir de la

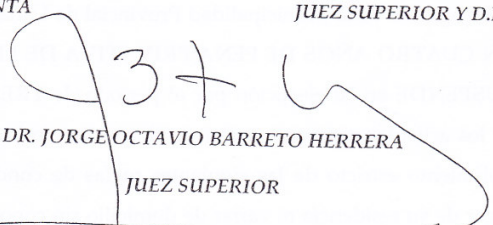
PODER JUDICIAL
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

fecha, de conformidad con los incisos uno y dos del artículo treinta y seis y cuatrocientos veintiséis del Código Penal, debiéndose inscribir la misma en el registro personal; **FIJARON:** En la suma de **SESENTA MIL NUEVOS SOLES** el monto que por concepto de reparación civil deberán abonar los condenados en forma solidaria a favor de los agraviados; **DISPUSIERON:** Que conforme a lo acordado en la sesión de audiencia de fecha ocho de septiembre del dos mil once, obrante de fojas doce mil seiscientos setenta y cuatro a doce mil seiscientos ochenta y tres, cúmplase en elevar al Superior jerárquico a fin de que se pronuncien respecto al recurso de nulidad interpuesto por la Procuraduría General de la República y la defensa del acusado Cáceres Sayán; **MANDARON:** Que, consentida y/o ejecutoriada que sea la presente sentencia se anulen los antecedentes policiales y judiciales que se hubieren generado de la presente causa en el extremo absolutorio; y se inscriba en el Registro respectivo, expidiéndose los testimonios y boletines de condena en el extremo condenatorio, remitiendo los autos al Juzgado Penal de origen para los fines pertinentes, archivándose definitivamente los autos con conocimiento del Juez de Origen.

S.S


DRA. LUISA ESTELA NAPA LEVANO
 PRESIDENTA


DR. CESAR AUGUSTO VASQUEZ ARANA
 JUEZ SUPERIOR Y D.D.


DR. JORGE OCTAVIO BARRETO HERRERA
 JUEZ SUPERIOR

PODER JUDICIAL
 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

SONIA IRIS SALVADOR LUDENA
 SECRETARIA DE ACTAS
 Primer Sala Penal para Procesos con Reos Libres

8.8. CASO: Enrique Crousillat
 R. N. N° 2674-2004
 Corte Suprema de justicia de la República
 Fecha: 9 de junio de 2005

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
 PRIMERA SALA PENAL TRANSITORIA
 R.N. No 2674-2004
 LIMA

000101

Lima, nueve de junio del año dos mil cinco

VISTOS; oído los *informes orales* de los abogados ~~defensores~~, y sobre *hechos*, de parte del acusado Roberto Edmundo Huamán Ascurra, y del agraviado Baruch Ivcher Bronstein; interviniendo como ponente el señor Vocal Supremo José María Balcázar Zelada; de conformidad en parte con el dictamen de la Fiscalía Suprema en lo Penal; por los fundamentos pertinentes de la resolución recurrida; y **CONSIDERANDO** además: **PRIMERO.-** Que, es materia de grado la sentencia de fecha veintiocho de junio del dos mil cuatro, corriente a fojas treinticuatro mil seiscientos cincuenticinco, por la que se condena a Vladimiro Lenin Montesinos Torres, Roberto Edmundo Huamán Ascurra, Manuel Tafur Ruiz y James Elliot Stone Cohen, por los delitos de peculado, corrupción activa y asociación ilícita, en agravio del estado y la sociedad; y a Samuel Rubén y Mendel Percy Winter Zuzunaga, por el delito de fraude en la administración de persona jurídica, en agravio de Baruch Ivcher Bronstein y otro. Los recursos de nulidad han sido interpuestos por, Vladimiro Montesinos Torres, Roberto Huamán Ascurra, Andina de Radiodifusión Sociedad Anónima Cerrada (tercero civilmente responsable, el Procurador Público Ad-hoc y el agraviado constituido en parte civil, Baruch Ivcher Bronstein. **SEGUNDO.-** *Agravios de Vladimiro Montesinos Torres.* Este acusado responde por los cargos que le resultan de los procesos acumulados: **a) Expediente número ocho mil doscientos sesenta – cero cero**, por peculado, corrupción de funcionarios y asociación ilícita para delinquir; se le imputa "haberse concertado con José Francisco Crousillat Carreño y Oscar Dufour Cattaneo para que el congresista recién electo Luis Alberto Kouri Bumachar renuncie a su partido y pase a pertenecer a la agrupación política "Perú dos mil" del presidente Alberto Fujimori Fujimori, objetivo que se concretizó el cinco de mayo del dos mil, en las oficinas del Servicio de Inteligencia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
PRIMERA SALA PENAL TRANSITORIA
R.N. No 2674-2004
LIMA

000100

Nacional - ~~SIN~~, donde Montesinos Torres le entregó al citado Kouri Bumachar la suma de quince mil dólares americanos a cuenta, firmando éste además, un documento de compromiso político de adhesión a "Perú dos mil". Montesinos Torres acogiendo al beneficio de la confesión sincera, ha admitido su responsabilidad en estos hechos, los mismos que aparecen filmados en el llamado "vídeo Kouri-Montesinos". No obstante tal confesión el citado acusado *tachó* dicho vídeo por considerar que Luis Iberico y Fernando Olivera Vega lo obtuvieron y exhibieron en forma ilícita, y además, por que el vídeo de autos es una *copia* y no el *original*, por lo que, invocando supletoriamente el artículo trescientos uno del código procesal civil -, solicitó se oficie al Congreso de la República para que remita dicho *original*; que en consecuencia si dicha prueba no se pudo actuar por negligencia del Colegiado, tal omisión no se le puede imputar como carga probatoria como se consigna en la sentencia". Estos criterios no son compartidos por este Supremo Tribunal por que, si bien el Congreso no remitió el vídeo original también es verdad que la *copia* antes citada constituye una reproducción exacta del original como se anota en su certificación oficial, razón por la que no existe traslado de carga probatoria que se aduce, máxime si lo solicitado no tenía como propósito demostrar que dicha copia constituía un "*vídeo editado*" - más todavía, si el propio Montesinos lo ha corroborado al acogerse *al beneficio de la confesión sincera*. De otro lado es menester puntualizar que, los criterios que el Colegiado ha tenido en cuenta para declarar infundada la *tacha* y por válida la copia del vídeo, constituyen actos discrecionales, congruentes de análisis y valoración probatoria. Correlación a que el Colegiado expidió sentencia antes del plazo establecido por la norma procesal, es del caso señalar que tal disposición no constituye contravención al debido proceso, sino más bien actos jurisdiccionales consentidos, luego de suspenderse la

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
PRIMERA SALA PENAL TRANSITORIA
R.N. No 2674-2004
LIMA

000039

audiencia para votar las cuestiones de hecho y el fallo; que no obstante lo anotado, tal disposición del Tribunal debe ser convalidada y subsanada de conformidad con lo previsto en el artículo doscientos noventiocho del Código de Procedimientos Penales. Por tales consideraciones, se declara *improcedente* estos agravios; **b) Expediente número dieciséis-dos mil uno.** Se acusa a Montesinos Torres, Roberto Huamán Ascurra y Luis Venero Garrido, por el delito de asociación ilícita para delinquir y corrupción activa de funcionarios, derivados del hecho de haber conformado una organización permanente para cometer delitos, como se evidencia del "vídeo mil ciento noventidós: entrevista Polo Gamarra y amigo Lucho". En dicha filmación se observa que el congresista Ernesto Gamarra Olivares recibe tres mil dólares. Montesinos Torres al rendir su declaración instructiva y acogerse al beneficio de la confesión sincera, ha admitido su responsabilidad en tales hechos, precisando inclusive los motivos y su planificación (en el Servicio de Inteligencia Nacional): día, lugar, forma de entrega del dinero y la filmación a cargo de Huamán Ascurra. Respecto de tales hechos no se ha formulado impugnación alguna; **c) Expediente número quince-dos mil uno,** contra Vladimiro Montesinos Torres y James Stone Cohen (cómplice), por el delito de corrupción activa de funcionarios en agravio del Estado. A Montesinos Torres se le acusa haber logrado convencer al Alcalde de Huancavelica Federico Salas Guevara para que acepte el cargo de Primer Ministro del gobierno del Presidente Fujimori, negociando inclusive para perciba una remuneración especial de treinta mil dólares americanos mensuales. La responsabilidad penal de Montesinos está suficientemente acreditada a través de su propia manifestación aceptando que lo hizo por "obediencia jerárquica al presidente Fujimori", versión que por lo demás, está corroborada con las declaraciones de Federico Salas Guevara, Villalobos Candela y Rozas

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
PRIMERA SALA PENAL TRANSITORIA
R.N. No 2674-2004
LIMA

000008

Bounucelli. La impugnación no comprende este extremo, por lo que no hay agravio que absolver; **d) Causa número diecinueve-dos mil uno**, seguida contra Vladimiro Montesinos Torres, por el delito de corrupción de funcionarios. Se le acusa haber entregado a Agustín Mantilla Campos la suma de treinta mil dólares americanos provenientes de los fondos del Estado, para que éste financie la campaña política del Partido Aprista Peruano. Instructivamente, el acusado ha admitido su responsabilidad reconociendo y ratificándose que, lo visto en el video corresponde a lo que realmente ocurrió. Sobre este extremo tampoco existe agravios que absolver. **e) Cargos contra Vladimiro Montesinos Torres, José Francisco Crousillat Carreño y José Enrique Crousillat López Torres**, por delito de asociación ilícita para delinquir. Se imputa al primero, concertarse con terceros, para lograr el sometimiento de América Televisión – Canal Cuatro, a los designios del gobierno del Presidente Fujimori. Los videos dan cuenta cómo los representantes del citado canal, sus coacusados Crousillat, aparecen recibiendo a cambio cuantiosas sumas de dinero. También se le imputa haber logrado montar una campaña periodística de desprestigio de personas que resultaban incómodas al régimen de Fujimori, como es el caso de César Hildebrandt, Mariela Balbi, Baruch Ivcher y Rodríguez Larraín, entre otros. Si bien la defensa de Montesinos ha negado que éste hubiere cometido tales hechos, en la impugnación no se hace mención a estos extremos, razón por la cual no existe agravios que absolver; **f) Proceso número diecisiete-dos mil uno –complejo y acumulado**, contra Vladimiro Montesinos Torres, Julio César Vera Abad y Daniel Borobio Guede, por el delito de asociación ilícita para delinquir, corrupción activa de funcionarios y peculado. Los cargos contra Montesinos Torres es por haber concertado con terceros, para someter a la empresa Andina de Radio Difusión – Canal Nueve, a los propósitos del Presidente Fujimori, a cambio de fuertes sumas

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
PRIMERA SALA PENAL TRANSITORIA
R.N. No 2674-2004
LIMA

000007

de dinero provenientes del Estado. En el juicio oral su defensa solicitó la absolución, no obstante que su patrocinado tras acogerse al ~~beneficio de la confesión sincera~~ había reconocido como ciertos y verdaderos los hechos que aparecen en los vídeos incriminatorios. Como el recurso impugnatorio no comprende estos extremos, no hay materia en grado que absolver; *g)* Cargos contra Vladimiro Montesinos Torres y a hermanos Mendel y Samuel Winter Zuzunaga, por delito de asociación ilícita para delinquir y peculado, derivados de "la suscripción de un contrato ilícito de locación de servicios para someter la línea periodística del Canal Frecuencia Latina – Canal Dos, a los objetivos ilícitos del Presidente Fujimori, a cambio de cuantiosas sumas de dinero". Los hechos están suficientemente acreditados, con la declaración del propio Montesinos aceptando su responsabilidad, y además precisado que los dineros que entregó provenían del tesoro público; versión que está corroborada con las declaraciones de sus co-acusados Winter Zuzunaga en el procedimiento de colaboración eficaz al que se han acogido. Sobre este extremo de la sentencia tampoco se ha consignado agravios que absolver; *h)* Agravios de Montesinos Torres, sobre la pena de quince años privativa de libertad y por los "temas de fondo" que alega. La Defensa ha denunciado que Montesinos Torres "no ha tenido, como sus co-acusados, un tratamiento de igualdad para ejercer su defensa, puesto que tenía que afrontar otros procesos en su contra; que el Colegiado ha evaluado las pruebas que lo perjudican y no las que le favorecen, dejando de considerar inclusive la descripción objetiva típica que contiene el artículo trescientos diecisiete del Código Penal (asociación ilícita), el mismo que por estar referido a un delito de peligro común no se le puede aplicar a un funcionario público, como bien se había establecido en el primer Dictamen Fiscal – desaprobado arbitrariamente por el Superior ordenando acusar -, opinando por no haber mérito para pasar

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
PRIMERA SALA PENAL TRANSITORIA
R.N. No 2674-2004
LIMA

000000

a juicio oral; que no se ha dado los tres elementos que exige la figura de la asociación ilícita: "acción de formar parte de una asociación o banda, ~~número mínimo de personas~~ para constituir dicha asociación y, ~~el propósito de todos y cada uno de ellos~~ para cometer delitos"; que por tanto no se puede aplicar la *agravante* que el citado tipo penal prevé, dado que la acusación fiscal, la requisitoria oral y las cuestiones de hecho, no han comprendido tal circunstancia; que la pena de quince años implica colocarlo a Montesinos Torres en un estado de *indefensión*, pues es evidente el atentado al derecho de defensa, a un contradictorio con igualdad de armas, al debido proceso y al principio de proporcionalidad, puesto que solo tenía que defenderse de los ocho años solicitada por el Ministerio Público; 1) **ABSOLUCIÓN DE AGRAVIOS.-** Este Supremo Tribunal no comparte los agravios antes citados, por las razones siguientes: 1.1) por que el Colegiado sí aparece haber cumplido con interpretar y aplicar correctamente el artículo trescientos diecisiete del código penal, respetando la identidad material expuesta en la descripción típica de la acusación fiscal y el auto de enjuiciamiento, bajo cuyos parámetros se desarrolló el contradictorio del juicio oral, con el derecho de defensa y el debido proceso, 1.2). por que el Tribunal de mérito ha dado como suficientemente probado, el extremo de la acusación fiscal por el delito de asociación ilícita para delinquir, mediante una motivación internamente congruente; esto es, remitiéndose a las características de *tipicidad objetiva* que exige el artículo trescientos diecisiete del código penal como son: *organización* con una estructura básica, con cohesión de grupo y en orden direccionado a perpetrar delitos comunes; la *permanencia* y *concertación*. Es más, la versión dada por el propio acusado hace corroborar la perpetración de tal ilícito penal, cuando admite explícitamente que: "el Presidente Alberto Fujimori me encargó *misiones*, como las *de reclutar congresistas* electos

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
PRIMERA SALA PENAL TRANSITORIA
R.N. No 2674-2004
LIMA

000005

(transfuguismo político) para conseguir mayoría en el Congreso y la Mesa Directiva; autorizándome a usar *métodos o procedimientos, sin límites, incluido hacer pagos* con dineros del estado (casos Kouri Boumachar, Gamarra Olivares); a comprar la línea periodística de ~~canales de televisión, dañar y difamar a los opositores políticos, etc."~~. Estos hechos materia de la acusación y del contradictorio, permiten formar convicción que, previo a la comisión de los delitos que se investigan, se había formado una organización permanente para delinquir, direccionada a apropiarse para sí y para terceros del patrimonio del Estado; que la estructura asociativa partió desde el interior de las más altas esferas del poder político en la que Montesinos Torres, desde el Servicio de Inteligencia Nacional, cumplió un rol protagónico para nuclearla y ampliarla hacia toda la administración pública y hacia el exterior, con la colaboración de sus cómplices e instigadores, 1.3) por que la pena impuesta de quince años, tiene básicamente como referente la agravación circunstanciada de la asociación ilícita para delinquir en la que ha incurrido el sentenciado. Este Supremo Tribunal entiende que, el *deber* de interpretar la ley corresponde a los magistrados, empero, cuando se tiene que condenar se debe respetar la correlación entre la acusación, la defensa y el fallo condenatorio); que, en el caso sub-examen la *igualdad de contenido* ha sido respetada por el Tribunal al no ampliar o cambiar el supuesto de hecho presentado por el acusador, al precisar las figuras delictivas e imponer la pena correspondiente; que tal pronunciamiento se corresponde de esta manera con un acertado ajuste a la ley y a los hechos *materia* del juicio, pues, los debates orales y los considerandos del fallo, dan cuenta que se cumplió regularmente con los *principios de congruencia y de imputación*, puesto que la base del juicio oral estaba delimitada por los artículos trescientos ochentisiete, trescientos noventinueve y trescientos

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
PRIMERA SALA PENAL TRANSITORIA
R.N. No 2674-2004
LIMA

000034

diecisiete del Código Penal; razón por la cual la denuncia de haberse hecho una distinta definición legal respecto al extremo del delito de asociación ilícita para delinquir, carece de todo amparo legal puesto que la circunstancia agravante de calificación imponía su cumplimiento. Tampoco es verdad, que la acusación fiscal hubiere tipificado dicho extremo delictivo en la primera parte del artículo trescientos diecisiete del código sustantivo, pues, el sólo hecho de haberse solicitado ocho años de pena para Montesinos Torres excluía su encuadramiento en la forma simple de asociación ilícita cuya pena máxima es de seis años. En puridad, tal forma de calificación agravada formó parte del principio de imputación, respecto de la cual el citado acusado también ha ejercido su actividad defensiva en forma adecuada y razonable. En conclusión, lo que se advierte es que, los jueces han cumplido con las normas sustantivas y procesales de rito, puesto que no podían dejar de aplicar la calificación legal del hecho circunstanciado por existir *agraviados especiales* (segunda parte del artículo trescientos diecisiete del Código Penal. "...*contra la tranquilidad pública, contra el Estado*"). **TERCERO.- Agravios del acusado Roberto Huamán Ascurra, en sus recursos de nulidad del nueve y doce de julio del dos mil cuatro, y su petición en esta Instancia de que se declare fundada la Excepción de Cosa Juzgada.** Este acusado solicita su absolución, por considerar que los hechos materia de la acusación fiscal no son constitutivos de los delitos de asociación ilícita y corrupción de funcionarios; que la pena de doce años que se le ha impuesto no está graduada con el criterio de proporcionalidad; que la tacha contra el vídeo número mil ciento noventidós (grabación del caso de congresista Gamarra Olivares) no ha sido resuelta en forma legal y pertinente; que la sentencia es nula por condenarlo con la agravante del artículo trescientos diecisiete del Código Penal no solicitada en la acusación fiscal, donde por el

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
PRIMERA SALA PENAL TRANSITORIA
R.N. No 2674-2004
LIMA

000093

contrario, se basa en la primera parte del citado artículo que fija como ~~máximo seis años de pena, mas los dos años~~ por aplicación del artículo ~~cuarentiséis-A~~ del Código Penal hacen justamente los ocho años peticionados; que su conducta está justificada, debido a que siendo funcionario de tercer orden en el Servicio de Inteligencia Nacional solo se limitó a cumplir órdenes de sus superiores Vladimiro Montesinos y el Presidente Fujimori, por lo que le asiste la exención de pena prevista en el art. veinte, inciso noveno del Código Penal. artículos ciento sesentisiete y ciento sesentiocho de la Constitución Política y artículos ciento cincuentidós y ciento cincuentiocho del Código de Justicia Militar. Que, en esta Instancia el citado impugnante ha deducido la **excepción de cosa juzgada por el delito de asociación ilícita para delinquir**, a mérito de la Ejecutoria Suprema emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de fecha dos de agosto del año dos mil cuatro (Expediente del recurso de nulidad número setecientos treinta – dos mil cuatro) en la que se le condenó a ocho años de pena privativa de libertad por el mismo delito. Que, efectivamente así aparece de las copias certificadas que se acompañan, por lo que en mérito de dicha instrumental se prueba objetivamente la articulación de cosa juzgada. Pues, el concepto del *mismo hecho*, designa del mismo modo, el *suceso histórico* que este Supremo Tribunal viene jurídicamente conociendo en alzada: la identidad del peligro abstracto de la asociación ilícita prevista en el artículo trescientos diecisiete del Código penal, impide una calificación jurídica distinta y una acusación complementaria a la ya producida en la sentencia de la Sala Penal Permanente. El principio del *ne bis idem*: según este postulado, que se deriva sin obstáculos del principio de legalidad, para cada delito unitario debe existir una pena legal unitaria, de modo que no se puede multiplicar la imputación para dar lugar con su ejecución a varios delitos y varias penas. Por tales consideraciones,

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
PRIMERA SALA PENAL TRANSITORIA
R.N. No 2674-2004
LIMA

debe declararse fundada dicha excepción respecto al extremo impugnado por el delito de asociación ilícita para delinquir, quedando subsistente el extremo por el delito de corrupción de funcionarios. Que, respecto a este extremo, este Supremo Tribunal estima que por la forma y circunstancias de cómo se produjeron los hechos y la participación que en dicho evento tuvo el acusado, deviene prudencial rebajarle la pena impuesta, de conformidad con lo previsto en el artículo trescientos del Código de Procedimientos Penales. **CUARTO: Agravios del condenado Manuel Tafur Ruiz por el delito de Corrupción activa de funcionarios (cuatro años de pena suspendida y diez mil nuevos soles de reparación civil).** En puridad, el impugnante no consigna agravios concretos, limitándose a "levantar cargos" en forma muy genérica, como que la reunión con su amigo congresista Gamarra Olivares fue para darle un donativo económico que ayude a solventar la campaña política de su esposa, mas no para que desvíe ilícitamente las investigaciones que venía haciendo como Congresista de la República. Contrariamente a lo que sostiene, en autos ha quedado probada su responsabilidad en forma objetiva y subjetiva, por lo que no procede agravios que atender. **QUINTO: Agravios de Mendel Percy y Samuel Rubén Winter Zuzunaga, condenados a dos años de pena privativa suspendida por el delito de fraude en la administración de personas jurídicas en agravio de Baruch Ivcher Bronstein y Remigio Morales Bermúdez Pedraglio.** La defensa de los citados acusados solicita la nulidad parcial de la sentencia por considerar que se les ha condenado por hechos atípicos, toda vez que el dinero que recibieron de Vladimiro Montesinos Torres en ejecución de un contrato criminalizado de locación de servicios, no fue objeto de derecho patrimonial de la Compañía Latinoamericana de Radiodifusión Sociedad Anónima; pues, el citado contrato fue nulo por tener fin ilícito, razón por la cual

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
PRIMERA SALA PENAL TRANSITORIA
R.N. No 2674-2004
LIMA

000036

que fija al citado procesado el monto de la reparación civil en diez mil nuevos soles; y **reformándola** fijaron dicho monto en **cincuenta mil** nuevos soles; 4) **NO HABER NULIDAD** en el extremo que **condena a SAMUEL RUBÉN WINTER ZUZUNAGA y MENDEL PERCY WINTER ZUZUNAGA** como autores del delito contra el patrimonio – fraude en la administración de personas jurídicas en la modalidad de uso en provecho propio del patrimonio de la empresa – en agravio de Baruch Ivcher Bronstein y Remigio Moraes Bermúdez Pedraglio, a dos años de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por el plazo de un año, bajo el cumplimiento de reglas de conducta; **NULO** el extremo de la sentencia que declara que no procede pronunciarse sobre la tacha de instrumentos planteada por el tercero responsable Andina de Radiodifusión Sociedad Anónima – Canal Nueve, hasta que se pongan a derecho o sean ubicados los procesados Julio César Vera Abad y Edgardo Daniel Borobio Guede (punto tercero de la resolución de grado), y **DISPUSIERON** que el Colegiado se pronuncie sobre dicha tacha, con arreglo a ley; **INFUNDADA** la **excepción de prescripción de la acción penal** deducida por la defensa del acusado **JOSÉ ENRIQUE CROUSILLAT LÓPEZ TORRES**; **NO HABER NULIDAD** en lo demás que contiene; y los devolvieron.-
S.S.

GONZALES CAMPOS R.O.

BALCAZAR ZELADA

BARRIENTOS PEÑA

VEGA VEGA

PRINCIPE TRUJILLO

SE PUBLICO CONFORME A LEY

ROSA HERMINIA CALDERON RODRIGUEZ
SECRETARIA (e)
1ra. Sala Penal Transitoria
CORTE SUPREMA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
PRIMERA SALA PENAL TRANSITORIA
R.N. N° 2674-2004
LIMA.

**Lima, dieciocho de mayo
del dos mil cinco.-**

VISTO el pedido de inhibición del señor Vocal Supremo José María Balcazar Zelada obrante a fojas ochocientos cuatro; y
CONSIDERANDO: Que el citado magistrado fundamenta su inhibición, al señalar que la presente causa tiene directa relación con los mismos hechos por los cuales la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República; en la que fue uno de sus miembros, sentenció a Luis Alberto Kouri Bumachar; que, de la revisión de autos se advierte que la presente causa trata de hechos totalmente distintos; aunado a ello, el citado magistrado no ha participado en ninguna etapa de la misma, situación que no impide que intervenga para resolver el presente proceso; consecuentemente la citada Inhibición no se encuentra dentro de los alcances previsto en el artículo veintinueve del Código de Procedimientos Penales; de otro lado, a efectos de no vulnerar el derecho de defensa que le asiste a los justiciables así como el debido proceso, debe señalarse nueva fecha para la vista de causa; por lo que, estando a las consideraciones antes descritas: Declararon: **INFUNDADA** la inhibición presentada por el señor Vocal Supremo José María Balcazar Zelada; en el conocimiento de la presente instrucción seguida contra Vladimiro Montesinos Torres y otros por delito contra la administración pública - corrupción de funcionarios - y otros, en agravio del Estado y otros; asimismo: **NULA** la vista de causa programada con fecha diez de febrero del año dos mil cinco; **MANDARON** se reprogramme en el más breve término la vista de causa; interviniendo el señor Vocal Supremo Antonio Pajares Paredes, de conformidad con el artículo ciento cuarenticinco del Texto Unico Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, tomándose razón donde corresponda; notificándose.-

SS.

PAJARES PAREDES

GONZALES CAMPOS. R. O.

BARRIENTOS PEÑA

VEGA VEGA

PRINCIPE TRUJILLO

ROSA HERMINIA CALDERON RODRIGUEZ
 SECRETARIA (e)
 1ra. Sala Penal Transitoria
 CORTE SUPREMA

- 8.9. **CASO: Mobotek**
EXP. N°: 20-2003-A.V.
Sala Penal Especial de la Corte Suprema
Fecha: 18 de octubre de 2005

RESOLUCIÓN DE LA SALA PENAL ESPECIAL DE LA CORTE SUPREMA, "CASO MOBETEK"

Por disposición de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia, la Dirección de Imagen y Prensa del Poder Judicial pone en conocimiento de la opinión pública la resolución emitida respecto al "Caso Mobetek".

EXP. N° 20-2003-A.V.
 SALA PENAL ESPECIAL ART. 17° CPP
 PON.: Sr. SAN MARTÍN CASTRO

SENTENCIA

Lima, dieciocho de octubre de dos mil cinco.-

VISTOS; en audiencia oral y pública, el juzgamiento a cargo de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, integrada por los Señores San Martín Castro, Presidente, Palacios Villar y Lecaros Cornejo, bajo la dirección de debates del Señor San Martín Castro, contra los acusados ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI y JORGE CAMET DICKMANN por delitos de asociación ilícita para delinquir, abuso de autoridad, colusión desleal y malversación de fondos en agravio del Estado; y, contra el acusado VÍCTOR CASO LAY por delitos de incumplimiento de deberes de función y omisión de denuncia en agravio del Estado.

Los acusados FUJIMORI FUJIMORI y CASO LAY se encuentran en la condición de reos contumaces según el mérito del auto de fojas mil ochocientos diez, en consecuencia, no tienen registradas sus generales de ley. Por el contrario, las generales de ley del acusado presente CAMET DICKMANN son las siguientes: es natural de Lima, nacido el veintitrés de septiembre de mil novecientos veintisiete, casado, con siete hijos, Ingeniero Civil, empresario, y con domicilio real en calle Pamplona número ciento setenta – Chacarilla del Estanque, Surco. Está sufriendo mandato de detención domiciliaria este proceso. No tiene condenas en su haber. Registra otros dos procesos, no culminados. Así consta del boletín de condenas y de la hoja carcelaria de fojas novecientos cuarenta y siete y novecientos cincuentidos.

ANTECEDENTES

I. PROCEDIMIENTO.

1°. En virtud de la denuncia constitucional, corriente de fojas quinientos cincuenta y seis a quinientos ochenticuatro, del seis de noviembre de dos mil uno, formulada por los integrantes de la Comisión Investigadora de la deuda pública externa mil novecientos noventa – dos mil, señores Congresistas Rafael Valencia Dongo

IV. OTROS PUNTOS PLANTEADOS Y DEBATIDOS.

37°. La defensa de los acusados Fujimori Fujimori y Camet Dickmann en sus alegatos finales, alternativamente, estimaron que determinados delitos se encuentran prescritos. Así, respecto del primero, se invoca tal situación en relación a los delitos de abuso de autoridad y malversación de fondos, y, en relación al segundo, se propone la extinción de la acción penal respecto de los delitos de asociación ilícita, malversación y abuso de autoridad –así incluso aparece de la cuadragésima conclusión-. Sobre el particular, aún cuando de autos fluye un claro supuesto de inexistencia de los hechos punibles acusados, es del caso –a fin de cumplir con una motivación integral de todas las pretensiones deducidas en juicio- un pronunciamiento sobre este punto.

38°. El inicio del cómputo del plazo de la prescripción para ambos imputados, en tanto se requería de una resolución acusatoria del Congreso para el procesamiento penal, por imperio del artículo 84° del Código Penal, tiene lugar luego que –de conformidad con el artículo 100° de la Constitución- se decide haber lugar a la formación de causa y, por tanto, quedó concluido, lo que en el presente caso ocurrió el catorce de mayo de dos mil tres, fecha de la Sesión del Congreso que la aprobó [no puede estimarse que existió un plazo anterior que debe contarse luego de la culminación del procedimiento parlamentario pues, legalmente, no podía incoarse proceso penal alguno sin contar con la autorización parlamentaria]. Los plazos extraordinarios, en virtud de la concordancia de los artículos 80° y 83° del Código Penal, operarán: a) para el delito de asociación ilícita, nueve años; b) para el delito de abuso de autoridad, tres años; c) para el delito de malversación, cuatro años y medio; y, d) para el delito de colusión, veintidós años y medio.

39°. En tal virtud, a partir de esa data –catorce de mayo de dos mil tres- hasta el día de la fecha, en el caso del acusado Fujimori Fujimori, en ninguno de los delitos invocados: abuso de autoridad y malversación de fondos, ha prescrito la acción penal, y así debe declararse. Asimismo, en lo atinente a Camet Dickmann, el delito de abuso de autoridad –si se lo atiende como una infracción independiente- es el único que habría prescrito –es de aclarar que a dicho imputado, por su edad, le es aplicable el artículo 81° del Código Penal, que estatuye que los plazos se reducen a la mitad-. Empero, como los cargos por los cuatro delitos objeto de imputación tienen lugar a partir de un cuadro de hechos común –aún cuando no haya sido consignado por el Ministerio Público [la potestad del órgano jurisdiccional de aplicar el derecho como corresponda al tema materia de decisión obliga a ello]- se estaría ante un supuesto de concurso ideal –más allá de la incorrección de esa tipificación, pero que es de obviar en este caso por la naturaleza formal de toda decisión que deba resolver una excepción de prescripción- y, según el artículo 80° del Código Penal, las acciones prescriben cuando haya transcurrido un plazo igual al máximo correspondiente al delito más grave, esto es, al delito de colusión, el cual –como es ostensible- aún no ha prescrito, y así debe declararse.

40°. El señor Fiscal Adjunto Supremo en su alegato final solicitó se remitan copias de lo actuado para su remisión al Ministerio Público, a los efectos de una posible incoación de la promoción de la acción penal respecto: a) a la intervención de los funcionarios del Sector Economía y Finanzas, incluida la del Vice Ministro de Hacienda Jaillie Awapara, en los presentes hechos, así como al propietario de Mobetek y a los funcionarios del Banco de la Nación; b) a la participación de los funcionarios del Sector Defensa, incluidos el Ministro de Defensa Malca Villanueva y el Comandante General, en relación a la Licitación Privada número 20/93-SMGE; y, c) la actuación de todos los involucrados en este proceso en la dación del Decreto Supremo número 183-94-EF.

41°. El artículo 265° del Código de Procedimientos Penales, modificado por el Decreto Legislativo número 126, condiciona la promoción de la acción penal que se debe disponer en la sentencia a que *"...los debates arrojen responsabilidad sobre persona no comprendida en la acusación escrita del Ministerio Público, o se descubra otro hecho delictuoso similar, distinto o conexo al que es materia del Juzgamiento, ..."*. Ahora bien, (a) en la medida en que se ha concluido que los hechos relacionados con la expedición de los Decretos Supremos número 184-94-EF y 164-95-EF no son constitutivos de delito, no cabe que se forme cuaderno aparte sobre el particular –lo que comprende a los Funcionarios de Economía y Finanzas, incluido el Vice Ministro de Hacienda, del Banco de la Nación y al titular de Mobetec-. (b) Respecto a los hechos vinculados al proceso licitario en el Sector Defensa, estando al mérito de la declaración del colaborador Gonzáles Ríos, en tanto que con posterioridad al otorgamiento de la buena pro se alteró el listado y valor de los bienes objeto de adquisición –en lo que, por lo demás, es ajeno el Sector Economía y Finanzas, y no existe evidencia de la participación de la Presidencia de la República-, corresponde en efecto que el Ministerio Público profundice las indagaciones preliminares para que, en su día, de ser pertinente, se promueva la acción penal. (c) En cuanto al Decreto Supremo número 183-94-EF aprobó, bajo las mismas características del Decreto Supremo número 184-94-EF, materia de este proceso penal, y en la medida en que ese último no es penalmente relevante y ante la falta de evidencias que el primero tenga los defectos que se le atribuyen, no es de rigor autorizar la promoción de la acción penal.

DECISIÓN

42°. Por estos fundamentos, administrando justicia a nombre de la Nación y con el criterio de conciencia que la Ley autoriza, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República;

FALLA:

43°. Declarando **INFUNDADAS** las excepciones de prescripción deducidas por la defensa de los acusados Alberto Fujimori Fujimori, respecto de los delitos de abuso de autoridad y malversación de fondos en agravio del Estado, y Jorge Camet Dickmann, en lo atinente a los delitos de asociación ilícita para delinquir, abuso de autoridad, colusión desleal y malversación de fondos en agravio del Estado.

44°. **ABSOLVIENDO** a ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI y JORGE CAMET DICKMANN de la acusación fiscal formulada en su contra por los delitos de asociación ilícita para delinquir –con las precisiones expuestas en la parte final del párrafo treinta y uno de la presente sentencia-, abuso de autoridad, colusión desleal y malversación de fondos en agravio del Estado; y, a VÍCTOR CASO LAY de la acusación fiscal formulada en su contra por los delitos de incumplimiento de deberes de función y omisión de denuncia en agravio del Estado.

45°. En tal virtud, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 264° del Código de Procedimientos Penales, modificado por el Decreto Ley número 20579, **ORDENARON** se archive lo actuado definitivamente, se anulen los antecedentes policiales y judiciales que por estos hechos registran los imputados, así como se levanten las requisitorias y órdenes de captura correspondiente. **DISPUSIERON** se cursen los oficios correspondientes.

46°. Asimismo, **MANDARON** se levanten las medidas de coerción dictadas contra todos los imputados, incluida –en aplicación extensiva del artículo 329° del Código de Procedimientos Penales– la detención domiciliaria dictada contra el encausado absuelto Camet Dickmann, que se ejecutará en el día.

47°. Declarando **SIN LUGAR** la formación de cuaderno aparte respecto tanto a la intervención de los Funcionarios de Economía y Finanzas, incluido el Vice Ministro de Hacienda, y del Banco de la Nación, así como del titular de Mobetek en la expedición de los Decretos Supremos número 184-94-EF y 164-95; cuanto a la intervención de todos los funcionarios y demás personas que intervinieron en el Decreto Supremo número 183-94-EF. Asimismo, **PROCEDENTE** la formación de cuaderno aparte y su remisión a la Fiscalía de la Nación respecto a los hechos vinculados al proceso licitatorio en el Sector Defensa, concretados a los hechos que surgieron luego del otorgamiento de la buena pro en orden a la alteración del listado y valor de los bienes objeto de adquisición.

48°. **ORDENARON** se dé lectura a la presente sentencia en audiencia pública y se tome razón donde corresponda.

\$\$.

SAN MARTÍN CASTRO

PALACIOS VILLAR

LECAROS CORNEJO

8.10. CASO: BTR**EXP.: 99-09 (527-09)****Segunda Sala Especializada en lo Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima****Fecha: 23 de marzo de 2012**

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
SEGUNDA SALA ESPECIALIZADA EN LO PENAL PARA
PROCESOS CON REOS EN CARCEL
EXP. N ° 99-09 (527-09)

EXP. N ° 99-09 (527-09)

SENTENCIA

Lima, veintitrés de Marzo
Del año dos mil doce.

VISTA; en Audiencia Oral y Pública, el Juzgamiento incoado contra: **ELÍAS MANUEL PONCE FEJOO, CARLOS ALBERTO TOMASIO DE LAMBARRI, GISELLE MAYRA GIANNOTTI GRADOS, MARTÍN ALBERTO FERNÁNDEZ VIRHUEZ, JESÚS MANUEL OJEDA ANGLES, JESÚS JUAN TIRADO SEGUÍN, ALBERTO OSWALDO SALAS CORTEZ Y PABLO ERIKS MARTELL ESPINOZA,** por el delito Contra la Libertad - Violación del Secreto de las Comunicaciones – Interceptación Telefónica en calidad de integrantes de una organización criminal en agravio de Rómulo Augusto León Alegría, Alberto Quimper Herrera, Alberto Fortunato Marcos Ortega, Roberto Enrique Paredes Chirinos, José María Revilla López, Estudio Aurelio García Sayán Abogados S.C.R.Ltda., Remigio H. Morales Bermúdez Pedraglio, Elizabeth Schwarz de Acha de Olcese, Virly del Carmen Torres Curvelo, Rogelio Canches Guzmán, Isabel Paiva Zárate, Genaro Delgado Parker, ONG GRUFIDES, Empresa AMBEV PERU, Agroindustria LAREDO, Estudio Quimper & Abogados Asociados, Estudio Jurídico Enrique Bardales & Asociados, Estudio Linares Abogados S.C.R.Ltda; contra: **ELÍAS MANUEL PONCE FEJOO, CARLOS ALBERTO TOMASIO DE LAMBARRI, GISELLE MAYRA GIANNOTTI GRADOS, MARTÍN ALBERTO FERNÁNDEZ VIRHUEZ, JESÚS MANUEL OJEDA ANGLES y JESÚS JUAN TIRADO SEGUÍN** por el delito contra la Libertad - Violación del Secreto de las Comunicaciones – Interceptación Telefónica en calidad de integrantes de una organización criminal en agravio del Estudio Jurídico Fernández Concha SCRL (Estudio Fernández – Concha Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada), Empresa Trupal S.A., Alexander Martín Kouri Bumachar, Municipalidad Provincial del Callao; y contra: **ELÍAS MANUEL PONCE FEJOO, CARLOS ALBERTO TOMASIO DE LAMBARRI, GISELLE MAYRA GIANNOTTI GRADOS, MARTÍN ALBERTO FERNÁNDEZ VIRHUEZ y JESÚS MANUEL OJEDA ANGLES** por el delito contra la Libertad – Violación del Secreto de las Comunicaciones – Violación de Correspondencia en calidad de integrantes de una organización criminal en agravio de Rómulo Augusto León Alegría, Alberto Alfonso Borea Odría, Francisco Ricardo Soberón Garrido, Alex Ganoza Céspedes, Isaac Alfredo Bamechea García, Aníbal Gonzalo Raúl Quiroga León, Blanca Rosa Rivera Talavera, Carlos Federico Rubina Burgos, César



Ángeles, señalando que dicha testigo carece de objetividad e imparcialidad al haber sido despedida de la empresa Business Track por incumplimiento de sus deberes laborales, habiendo incluso iniciado juicio por despido arbitrario ante el juzgado laboral, por lo que considera que su declaración está ligada a un sentimiento de venganza contra su patrocinado y los demás funcionarios de la empresa Business Track.

25.- En la sesión de audiencia número 39⁸⁰ de fecha 07 de Setiembre del 2011, la testigo Katherine Castro Ángeles, declaró haber laborado en la empresa Business Track como secretaria recepcionista desde Junio del año 2007 a Julio del año 2008, en que fue despedida por Carlos Barba Daza quien le manifestó que necesitaban una persona que tenga mejor carácter, por lo que ante la negativa de pagarle lo que le correspondía acudió al Ministerio de Trabajo; de otro lado, señaló que durante su permanencia en dicha empresa recibió un trato cordial.

26.- Si bien la testigo Castro Ángeles al prestar declaración en Juicio Oral ha corroborado el hecho que sirve de sustento para tachar su testimonio, esto es haber sido objeto de despido laboral de la empresa Business Track, también lo es que no se ha evidenciado que en virtud a dicha circunstancia su declaración esté motivada en un sentimiento de enemistad o ánimo de venganza; por el contrario dicha testigo ha señalado que durante su permanencia en la empresa Business Track recibió buen trato y que entre las razones de su despido estaba la necesidad de la empresa de contar con una persona con mejor carácter debido a que ella padecía de migraña, lo que evidencia que en el presente caso no concurre el supuesto de enemistad alegado; por lo que debe desestimarse la tacha contra ésta testigo.

EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN

1.- La defensa del procesado Ponce Feijoo, en la sesión de audiencia número 79 dedujo excepción de prescripción respecto del delito de Violación de la Correspondencia, señalando que el artículo 161 del Código Penal que lo tipifica prevé como pena a imponer 2 años de pena privativa de la libertad y 60 a 90 días multa, por lo que el plazo ordinario de prescripción es de 2 años, plazo al que debe añadirse la mitad del máximo de la pena al haberse judicializado los hechos, lo que da un total de 3 años, por lo que el plazo de prescripción extraordinario se ha cumplido; de otro lado, señala que el concurso real de delitos, delito continuado y delito masa, son discusiones que nada tienen que ver con el plazo máximo que el tipo penal sustantivo establece para cada hecho, toda vez que cuando el

⁸⁰ El acta de dicha audiencia obra a fojas 113347 del Tomo 95

artículo 80 del Código Penal aborda el tema de la prescripción lo único que establece, es la distinción entre un delito instantáneo y un delito permanente; que en este caso, en atención a los verbos rectores se trata de un delito instantáneo, por lo que habiendo transcurrido desde el 8 de enero de 2009, 3 años, solicita se declare Fundada la Excepción de Prescripción del delito de Violación de la Correspondencia.

2.- La defensa de la procesada Giannotti Grados, se adhirió a la Excepción de Prescripción formulada por la defensa del procesado Ponce Feijoo, señalando que el delito de Violación de la Correspondencia se encuentra definitivamente prescrito; que estando a que el Ministerio Público al formular su imputación sostiene que se trata de un concurso real y no un concurso ideal, se debe tener en cuenta que el artículo 80 del Código Penal señala taxativamente que en el caso de concurso real, el plazo de prescripción corre únicamente de acuerdo al delito por el que se deduce la excepción, en este caso, el plazo ordinario es 2 años, más el plazo extraordinario, sería un total de 3 años; hacer otro tipo de interpretaciones basados en el delito masa sería violar el principio de legalidad, por lo que apelando no sólo al Código Penal sino también a la Constitución que señala que la prescripción es una garantía de todo justiciable, solicita se declare Fundada la Excepción de Prescripción a favor de la señora Giselle Mayra Giannotti Grados.

3.- La defensa de los procesados Tomasio De Lambarri, Ojeda Ángles y Fernández Virhuez se adhirió a la excepción planteada, señalando que habiendo a la fecha transcurrido tres años, ha operado la prescripción de la acción penal.

4.- El representante del Ministerio Público, absolviendo el traslado solicitó se declare Infundada la Excepción de Prescripción deducida por la defensa de los procesados Ponce Feijoo, Giannotti Grados, Tomasio De Lambarri, Ojeda Ángles y, Fernández Virhuez, señalando que de acuerdo a la Acusación Fiscal el delito de Violación de la Correspondencia se realizó en diversos momentos con actos ejecutivos de la misma resolución criminal, por lo que se trata de un delito continuado y al haber una pluralidad de agraviados, también concurre el delito masa, que constituye una circunstancia agravante específica del delito continuado; por lo que el término de prescripción no se puede evaluar solamente a la luz de la penalidad consignada en el artículo 161 del Código Penal, sino también a lo normado en el artículo 49 del Código Penal y lo señalado en los Acuerdos Plenarios N° 8-2008/CJ y N° 4-2009/CJ – 116, de tal manera que si la pena conminada en el delito de Violación de la Correspondencia es de 2 años, en virtud al delito continuado y del delito masa habría que sumarle un tercio más de ese máximo, que sería 8 meses adicionales, lo que da un máximo de pena abstracta de 2 años 8 meses, al que habría que sumársele como término extraordinario de prescripción una mitad de la misma, vale decir 1



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
SEGUNDA SALA ESPECIALIZADA EN LO PENAL PARA
PROCESOS CON REOS EN CARCEL
 EXP. N° 99-09 (527-09)

año 4 meses, por tanto el término de prescripción es de 4 años; en cuanto al inicio del cómputo de prescripción considera que es a partir del 8 de enero del 2009, fecha en la que fueron intervenidos, en razón a que se trata de delito continuado, por lo que concluye que a la fecha aún no ha transcurrido el término de prescripción de la acción penal que precisa la ley con tal fin.

5.- El representante de la Procuraduría Pública absolviendo el traslado conferido refirió que la defensa de los procesados que han deducido excepción de prescripción olvidan que en la etapa de instrucción con los mismos fundamentos que ahora se discute plantearon la misma excepción; por lo que debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el Artículo 90 del Código de Procedimientos Penales que en su Inciso 2 señala que no se admitirán nuevas incidencias que se sustenten en los mismos hechos que fueron materia de una resolución anterior o que tuvieran el mismo objeto o la finalidad de aquellos ya resueltos; de otro lado, señaló que de acuerdo a la imputación Fiscal estamos ante un supuesto de concurso real de delitos (Violación de la Correspondencia, Interceptación Telefónica y Asociación Ilícita); por lo que solicita se declare Improcedente la excepción deducida.

6.- Estando a que el representante de la Procuraduría Pública sostiene que la acción penal no ha prescrito debido a que el delito de Violación de la Correspondencia concurre con los delitos de Interceptación Telefónica y Asociación Ilícita por lo que nos encontramos ante un supuesto de concurso real de delitos, debemos puntualizar que si bien el artículo 50 del Código Penal establece que cuando concurren varios hechos punibles la pena que se fije para cada uno deben sumarse, dicha mandato está referido al momento de la determinación judicial de la pena, tal es así que el artículo 80 del Código Penal, que regula el plazo de prescripción de la acción penal, prevé expresamente que en los supuestos de concurso real la acción penal prescribe separadamente en el plazo previsto para cada uno, por tanto para los efectos del plazo de prescripción de la acción penal planteada se debe tomar en cuenta, en principio, el máximo de la pena conminada para el delito de Violación de la Correspondencia.

7.- El representante del Ministerio Público ha planteado la no prescripción del delito de violación del secreto de las comunicaciones, en razón de que se trata de un delito continuado que adicionalmente tiene la agravante de ser delito masa y sustenta en los fundamentos que se adoptaron en el Acuerdo Plenario N° 8-2008/CJ-116 de fecha 13 de Noviembre del 2009 que en síntesis indica a partir del considerando 10 hasta el 13 inclusive, lo siguiente:

8.- Que si bien es verdad el Código Penal admite la extinción de la acción penal por prescripción, lo que está regulado entre los artículos 80 y 83, sin



embargo por razones de política criminal se ha escogido por el legislador ciertos parámetros objetivos como el tipo de pena y el extremo mayor de la sanción, con el fin de procurar, de acuerdo a las características propias del delito, un normal desarrollo de la prosecución de la acción penal y del proceso en caso llegue a ejercerse. Dice que se ha de tomar como referencia para la prescripción la pena abstracta fijada para el delito y de esa manera se puede conciliar el interés del estado en su potestad punitiva y el interés del ciudadano en la defensa de sus derechos.

9.- El acuerdo así entendido, dice que no hay derecho a la prescripción, sino mas bien el derecho a la seguridad jurídica, a la legalidad, a la tutela jurisdiccional y a la igualdad, principios que no resultan lesionados por el Estado "en tanto los plazos establecidos para la denuncia, investigación y juzgamiento de los delitos establecidos por el legislador sean razonables y estén definidos y limitados por la ley". Estando las cosas así expuestas dice el acuerdo plenario, queda por determinar si al plazo de prescripción de la acción, es posible adicionar el incremento de pena prevista en la circunstancia agravante genérica por condición del sujeto activo (artículo 46-A CP) o la circunstancia agravante específica por pluralidad de personas perjudicadas por el delito continuado (artículo 49 CP).

10.- Deslinda esta interrogante la Suprema Corte en el considerando 13, referido específicamente al delito masa y señala: *"Situación distinta se presenta en el caso de la denominada agravante por pluralidad de personas perjudicadas por el delito continuado delito masa- porque si bien se la cataloga como una circunstancia agravante específica del delito continuado, debe tenerse en cuenta que por la forma como ha sido regulada en el artículo 49 CP, constituye ya un delito en sí –delito masa-. Por consiguiente, en su regulación se ha creado un nuevo marco penal abstracto –la pena correspondiente al delito más grave más el incremento en un tercio de la máxima prevista para dicho delito -, por lo que para determinar la prescripción de la acción penal en esta clase de delitos debe tomarse como base dicho marco punitivo abstracto"*, debiendo concluirse entonces, desde este punto de vista, que para el computo de la prescripción en esta clase de delitos (masa) debe considerarse la pena abstracta que considera el Código Penal sistemáticamente entendido y no únicamente la pena conminada al delito específico.

11.-Dada la afirmación del Ministerio Público, en el sentido de que habiéndose realizado el delito de Violación de la Correspondencia en diversos momentos con actos ejecutivos de la misma resolución criminal y que por tanto se trata de un delito continuado por lo que debe aplicarse la circunstancia agravante del delito masa debido a la multiplicidad de agraviados, corresponde dilucidar si en este caso concurren dichos supuestos, en razón de que como ya se ha mencionado en el V Pleno



Jurisdiccional de las Salas Penales Permanentes y Transitorias de la Corte Suprema de Justicia de la República, mediante Acuerdo Plenario N° 8 – 2008/CJ-116 de fecha 13 de noviembre del 2009- se establecido, entre otros, como doctrina legal, que para determinar la prescripción de la acción penal en el caso de delito masa se debe tomar como base el marco punitivo abstracto que prevé el artículo 49 del Código Penal.

12.-El delito continuado se encuentra regulado en el artículo 49 del Código Penal, modificado mediante Ley N° 26683 de fecha 11 de noviembre del año 1996, norma que establece: *"Cuando varias violaciones de la misma ley penal o una de igual o semejante naturaleza hubiere sido cometidas en el momento de la acción o en momentos diversos, con actos ejecutivos de la misma resolución criminal, serán considerados como un solo delito continuado y se sancionarán con la pena correspondiente al más grave. Si con dichas violaciones el agente hubiera perjudicado a una pluralidad de personas, la pena será aumentada en un tercio de la máxima prevista para el delito más grave. La aplicación de las anteriores disposiciones quedará excluida cuando resulten afectados bienes jurídicos de naturaleza eminentemente personal pertenecientes a sujetos distintos"*.

13.- Yesid Reyes Alvarado citado por James Reátegui Sánchez en su libro "Derecho Penal – Parte General"⁸¹ señala: *"(...) surge la figura del delito continuado cuando desde un punto de vista naturalístico un sujeto desarrolla varios comportamientos que individualmente considerados constituirían por sí solos un hecho punible pero que son apreciados por el Derecho Penal como un delito único en cuanto guiados por una misma voluntad final lesionan todos el mismo bien jurídico protegido (...)".* Por su parte el doctor Javier Villa Stein en su libro Derecho Penal – Parte General⁸², al referirse al delito continuado señala: *"Aquí se da una continuidad de acciones lesionantes. Se trata de acciones sucesivas integradas en delito único por haberse lesionado una misma norma en distintas ocasiones dentro de una sola determinación criminal"*.

14.- De acuerdo al marco jurídico y doctrinario antes citado, el delito continuado es una creación del derecho para apreciar como un único delito una pluralidad de infracciones penales temporalmente discontinuas pero dependientes entre sí, en tanto han sido cometidas en un mismo contexto o similares situaciones que responden a un único dolo o a un único plan delictivo, por lo que el derecho finge la existencia de un único delito y lo sanciona como tal con la pena más grave; siendo por tanto sus elementos:

- a) Pluralidad de comportamientos de acción u omisión; b) Identidad del bien

⁸¹ James Reátegui Sánchez, "Derecho Penal – Parte General", Gaceta Jurídica, Primera Edición.

⁸² Javier Villa Stein, "Derecho Penal – Parte General", Grijley, Tercera Edición.



jurídico afectado con tales comportamientos; c) Unidad del sujeto activo; d) Conexión temporal y espacial; e) Existencia de un plan preconcebido por el autor, identificable por la finalidad; Mientras que el delito masa o también llamado delito colectivo, fue introducido en nuestro ordenamiento penal con la Ley N°26883, de fecha 11 de noviembre de 1996, norma que modificó el artículo 49 del Código Penal, al introducir en el supuesto de delito continuado, un incremento de pena cuando el sujeto pasivo de las diversas infracciones penales lo constituyen una pluralidad de sujetos, elevando la pena por encima del máximo legal del delito que corresponda. Si bien en la indicada norma no se define al delito masa limitándose a determinar la punibilidad en el caso de multiplicidad de sujetos pasivos en el supuesto de delito continuado, una lectura integral de la norma nos lleva a señalar en primer término que tiene por finalidad sancionar con mayor severidad los casos en que el sujeto activo de acuerdo a un plan criminal realiza una pluralidad de actos que genera una multiplicidad de infracciones a un tipo penal, accionar con el que afecta o defrauda a un colectivo humano; siendo por tanto sus elementos: a) la realización de un delito continuado, y b) una pluralidad de personas perjudicadas por el delito.

15.- En el presente caso estando a que la imputación Fiscal contra los procesados, es que en su condición de miembros de una organización criminal; dentro de un determinado periodo de tiempo, orientaron su accionar a abrir y/o apoderarse indebidamente de correos electrónicos, los que fueron clasificados, analizados e incluso comercializados, conducta con la cual se afectó a un gran número de personas, consideramos concurren los presupuestos normativos establecidos en el artículo 49 del Código Penal para el delito continuado, en tanto se afirma: a) la realización de una pluralidad de acciones que responden a un mismo designio o a un plan criminal; b) que con dicha acciones (abrir o apoderarse de las comunicaciones) se violó un mismo precepto penal, el artículo 161 del Código Penal, por lo que existe unidad del bien jurídico afectado; c) que sobre un mismo sujeto pasivo recayó diversas infracciones de la norma, esto es identidad del titular del bien jurídico; consecuentemente el proceder de los acusados – aunque compuesta de varias acciones naturalmente consideradas- debe asumirse como una única conducta, esto es como un delito continuado; con la agravante de haberse afectado, por la pluralidad de infracciones, a diversos titulares del bien jurídico protegido.

16.-No obstante lo señalado, atendiendo a que en el último párrafo del artículo 49 del Código Penal se establece una cláusula de exclusión específica que ha sido además uniforme y pacíficamente aceptada por la doctrina, que se aplica en los supuestos que la conducta típica afecte un bien jurídico de naturaleza eminentemente personal perteneciente a sujetos distintos; debemos precisar qué bienes jurídicos gozan de la condición de



altamente personales; al respecto Juan Bustos Ramírez⁸³, en su libro "Obras Completas – Control Social y otros estudios", señala "Hay bienes jurídicos que están referidos a las bases y condiciones de subsistencia del sistema y otros que están en relación al funcionamiento del sistema. Los primeros, en un Estado social y democrático de Derecho, están necesariamente constituidos por la persona y su dignidad; están directamente en relación a la persona, al individuo, tienen por ello un carácter microsocioal, ya que solo así se puede constituir toda la red socioal. El núcleo fundamental está dado por la relación entre una persona con otra, en que queda comprometida su persona y dignidad. De ahí que haya de incluirse aquí tanto los delitos contra la vida, la salud individual, la libertad, el honor, etc. En definitiva, todos aquellos bienes jurídicos tradicionalmente denominados individuales". Por su parte Alonso Raúl Peña Cabrera Freire⁸⁴ en su libro "Derecho Penal – Parte General", al referirse a los bienes jurídicos personalísimos, señala: "Son intereses jurídicos que forman parte del "Derecho Penal Nuclear", constituyen bienes que tanto el orden jurídico como socioal han catalogado como preponderantes, para la realización de la personalidad del individuo, como integrante del sistema socioal, así: la vida, integridad corporal, libertad personal, etc.". En igual sentido en el tercer párrafo del punto 7 del Acuerdo Plenario N°8-2008/CJ-116, se señala: "No todos los delitos admiten la figura del delito continuado. En este sentido, "sólo es viable, entonces, en los delitos cuyo injusto sea cuantificable, susceptible de agravación con actos que se realizan en sucesión progresiva (...). No tiene cabida allí donde el injusto se agote necesariamente con un acto único e indivisible, como es el caso de la vida o de los llamados bienes personalísimos, de cuyo inacumulables cuando la lesión pasa de un titular a otro" (JUAN FERNÁNDEZ CARRASQUILLA, autor citado por Felipe Villavicencio Terreros, Obra citada, página 689). Hecha esta precisión y atendiendo a que el delito de Violación de la Correspondencia se encuentra ubicada dentro del Título IV del Libro Segundo del Código Penal, que agrupa a los delitos que afectan la Libertad de las personas, y más específicamente dentro del Capítulo IV denominado "Violación del Secreto de las Comunicaciones", que tutela la información privada de las personas, esto es la libertad que tiene toda persona a controlar cualquier información que afecte su vida privada y por tanto su intimidad; nos encontramos ante un bien jurídico altamente personal, lo que sumado al hecho de existir – como ya se ha señalado- una pluralidad de personas perjudicadas por la pluralidad de acciones del mismo tipo penal, en el presente caso no es posible aplicar las disposiciones contenidas en el artículo 49 del Código Penal al concurrir los presupuestos de la cláusula de exclusión, que prevé dicha disposición en la parte in fine.

⁸³ Juan Bustos Ramírez, "Obras Completas – Control Social y otros Estudios", Tomo II, ARA Editores, Edición 2004, pg. 192.

⁸⁴ Alonso Raúl Peña Cabrera Freyre, "Derecho Penal – Parte General" Tomo I, Editorial IDEMSA, Edición 2004, pg.960.



17.-Tenemos que concluir de esta evaluación que el tipo penal de violación de la correspondencia, en base al bien jurídico protegido no califica dentro de la figura denominada delito masa, cuya naturaleza básicamente está referido a los delitos continuados de carácter patrimonial, por tanto la prescripción respecto de este delito no participa de los criterios establecidos en el Acuerdo Plenario, debido a que no cumple con las características del delito masa, que no solo adquiere esa calificación por la pluralidad de perjudicados, sino que además requiere otras condiciones legalmente establecidas.

18.-Una vez aclarado lo anterior, debemos precisar que la prescripción de la acción penal se encuentra regulada en el artículo 139 de la Constitución Política del Estado, artículo 5 del Código de Procedimientos Penales e inciso 1 del artículo 78 del Código Penal, normas en las que se establece que la prescripción es una causa de extinción de la acción penal debido al transcurso del tiempo; es decir, se extingue la potestad punitiva del Estado y con ello la posibilidad de persecución penal del hecho imputado; en tal sentido, la prescripción de la acción penal se erige como una garantía del proceso penal, en la medida que garantiza que transcurrido cierto tiempo debe eliminarse toda incertidumbre jurídica.

19.-Resulta importante señalar que el Tribunal Constitucional, en reciente sentencia reafirma su línea jurisprudencial en el sentido de que la prescripción de la acción penal constituye un límite a la facultad punitiva del estado, así en sentencia recaída en el expediente 024-2010-AI señala que: "la prescripción es una causa de extinción de la responsabilidad penal fundada en la acción del tiempo sobre los acontecimientos humanos o la renuncia del Estado al ius puniendi, en razón de que el tiempo transcurrido borra los efectos de la infracción, existiendo apenas memoria social de esta. Es decir, que mediante la prescripción se limita la potestad punitiva del Estado, dado que se extingue la posibilidad de investigar un hecho criminal y, con él, la responsabilidad del supuesto autor o autores del delito investigado. Dicho de otro modo, es una Norma Fundamental inspirada en el principio *pro homine*, la ley penal material otorga a la acción penal una función preventiva y resocializadora, a la vez que el Estado autolimita su potestad punitiva contemplando la necesidad de que, pasado cierto tiempo, se elimine la incertidumbre jurídica (...). Así las cosas, la prescripción de la acción penal es una institución a través de la cual, el legislador concretiza, dentro del marco de lo constitucionalmente posible, ciertos valores de rango constitucional, como la seguridad jurídica (...), el derecho a la resocialización del individuo culpable y el derecho a no ser perseguido penalmente más allá de un plazo razonable".



20.-Lo precedentemente señalado nos permite concluir que el instituto de la prescripción, en rigor, constituye un impedimento procesal para la persecución del delito ya sea para dar inicio a un proceso penal o para continuar procesando, de tal manera que vencido el plazo de prescripción por imperio de la ley debe archivar la investigación o el proceso, consecuencia procesal que no convierte al delito cometido en un hecho lícito, sino que, únicamente, este no puede ser perseguido.

21.- A efecto de resolver la excepción planteada debemos tener en cuenta los lineamientos generales que establecen los artículos 80, 82 y 83 del Código Penal, respecto de: a) Plazo de prescripción: los delitos sancionados con pena privativa de libertad prescriben cuando transcurre un tiempo igual al máximo de la pena prevista en el tipo penal; tratándose de concurso real la acción penal prescribe separadamente en el plazo señalado para cada uno y en caso de concurso ideal de delitos, las acciones prescriben cuando haya transcurrido un plazo igual al máximo correspondiente al delito más grave; b) Cómputo del plazo: en el delito instantáneo, comienza a partir del día en que se consumó; en el delito continuado, desde el día en que terminó la actividad delictuosa; y en el delito permanente, a partir del día en que cesó la permanencia; c) Interrupción del plazo de prescripción: Las actuaciones del Ministerio Público o de las autoridades judiciales, interrumpen el plazo de prescripción, debiendo comenzar a correr un nuevo término; sin embargo, la acción prescribe, en todo caso, cuando el tiempo transcurrido sobrepasa en una mitad el plazo ordinario de prescripción.

22.-Establecido el marco general y específico que el Código Penal prevé para la determinación de la prescripción de la acción penal, es del caso precisar que el delito de Violación de la Correspondencia previsto en el artículo 161 del Código Penal, se encuentra sancionado en su extremo máximo con 2 años de pena privativa de libertad y con noventa días multa; y el artículo 80 del mismo cuerpo legal refiere que la acción prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley para el delito, por tanto el plazo ordinario de prescripción en este caso es de dos años; plazo al que por razón de la interrupción del plazo de prescripción debido a la intervención del Ministerio Público debe añadirse la mitad, esto es 1 año, lo que da un total de 3 años, plazo que en virtud de lo dispuesto en el artículo 82 del Código Penal debe computarse desde el 08 de enero del año 2009, fecha en la que habría cesado la actividad delictiva debido a que los acusados fueron detenidos y se les incautó los elementos que habrían utilizado para sus propósitos delictivos; por lo que habiendo transcurrido desde entonces a la fecha más de tres años, la acción penal por el delito de Violación de la Correspondencia a prescrito.



20.-Lo precedentemente señalado nos permite concluir que el instituto de la prescripción, en rigor, constituye un impedimento procesal para la persecución del delito ya sea para dar inicio a un proceso penal o para continuar procesando, de tal manera que vencido el plazo de prescripción por imperio de la ley debe archivarse la investigación o el proceso, consecuencia procesal que no convierte al delito cometido en un hecho lícito, sino que, únicamente, este no puede ser perseguido.

21.- A efecto de resolver la excepción planteada debemos tener en cuenta los lineamientos generales que establecen los artículos 80, 82 y 83 del Código Penal, respecto de: a) Plazo de prescripción: los delitos sancionados con pena privativa de libertad prescriben cuando transcurre un tiempo igual al máximo de la pena prevista en el tipo penal; tratándose de concurso real la acción penal prescribe separadamente en el plazo señalado para cada uno y en caso de concurso ideal de delitos, las acciones prescriben cuando haya transcurrido un plazo igual al máximo correspondiente al delito más grave; b) Cómputo del plazo: en el delito instantáneo, comienza a partir del día en que se consumó; en el delito continuado, desde el día en que terminó la actividad delictuosa; y en el delito permanente, a partir del día en que cesa la permanencia; c) Interrupción del plazo de prescripción: Las actuaciones del Ministerio Público o de las autoridades judiciales, interrumpen el plazo de prescripción, debiendo comenzar a correr un nuevo término; sin embargo, la acción prescribe, en todo caso, cuando el tiempo transcurrido sobrepasa en una mitad el plazo ordinario de prescripción.

22.-Establecido el marco general y específico que el Código Penal prevé para la determinación de la prescripción de la acción penal, es del caso precisar que el delito de Violación de la Correspondencia previsto en el artículo 161 del Código Penal, se encuentra sancionado en su extremo máximo con 2 años de pena privativa de libertad y con noventa días multa; y el artículo 80 del mismo cuerpo legal refiere que la acción prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley para el delito, por tanto el plazo ordinario de prescripción en este caso es de dos años; plazo al que por razón de la interrupción del plazo de prescripción debido a la intervención del Ministerio Público debe añadirse la mitad, esto es 1 año, lo que da un total de 3 años, plazo que en virtud de lo dispuesto en el artículo 82 del Código Penal debe computarse desde el 08 de enero del año 2009, fecha en la que habría cesado la actividad delictiva debido a que los acusados fueron detenidos y se les incautó los elementos que habrían utilizado para sus propósitos delictivos; por lo que habiendo transcurrido desde entonces a la fecha más de tres años, la acción penal por el delito de Violación de la Correspondencia a prescrito.



49º del Código Penal, por lo que, la pena será aumentada en un tercio de la máxima prevista para el delito más grave.¹¹³

2044. Respecto del delito masa, según la doctrina es concebido como un delito continuado, cuando los actos llevados a cabo por el autor recaen sobre una "pluralidad de personas", a condición de que no se trate de bienes de naturaleza "eminentemente personal"; que en el presente caso, los delitos de Violación de Correspondencia y Violación del Secreto de las Comunicaciones – Interceptación Telefónica, como ya se ha desarrollado, el bien jurídico tutelado es la intimidad personal; por lo tanto, no resulta de aplicación el delito masa, tal como lo han sostenido los abogados de la defensa de los acusados Ponce Feijoo, Tomasio de Lambari, Giannotti Grados, Fernández Virhuez y Ojeda Angles, y que la Sala Penal ha acogido declarando en su oportunidad fundada la excepción de prescripción a favor de todos los acusados por el delito de Violación de Correspondencia.
2045. Que, en el presente caso concurren dos hechos punibles que deben ser considerados como otros tantos delitos independientes (interceptación telefónica y asociación ilícita para delinquir), resultando aplicable lo normado por el artículo 50º del Código Penal vigente, al configurarse un concurso real de delitos, que éste órgano jurisdiccional tomará en cuenta al momento de fijar la pena a imponerse.¹¹⁴
2046. Estamos ante un concurso real de delitos; cuando se han perpetrado varios resultados materiales mediante diversas acciones típicas independientes-pluralidad de actos de voluntad; tal disposición legal está contenida en el artículo 50º del Código Penal, modificada por la Ley número 28730, de fecha 13 de mayo del 2006
2047. Como lo señala la Corte Suprema: "...Según la modificación introducida, actualmente en vigencia, la pena concreta se decide en base a una suma de penas concretas parciales, que el juzgador va definiendo para cada delito integrante del concurso real y hasta una máximo equivalente al doble

¹¹³ Art.49 del CP. Cuando varias violaciones de la misma ley penal o una de igual o semejante naturaleza hubieran sido cometidas en el momento de la acción o en momentos diversos, con actos ejecutivos de la misma resolución criminal, serán considerados como un solo delito continuado y se sancionarán con la correspondiente a la pena mas grave. Si con dichas violaciones, el agente hubiera perjudicado a una pluralidad de personas, la pena será aumentada en un tercio de la máxima prevista para el delito más grave.

La aplicación de las anteriores disposiciones quedará excluida cuando resulten afectados bienes jurídicos de naturaleza eminentemente personal pertenecientes a sujetos distintos.

¹¹⁴ Art. 50. Cuando concurren varios hechos punibles que deban considerarse como otros tantos delitos independientes, se sumaran las penas privativas de la libertad que fije el juez para cada uno de ellos hasta un máximo del doble de la pena del delito más grave, no pudiendo exceder más de 35 años. Si alguno de estos delitos se encuentra reprimido con cadena perpetua se aplicará únicamente ésta.



PARTE TERCERA

DECISION

Por estos fundamentos administrando Justicia a nombre de la Nación y con el criterio de conciencia que la Ley autoriza, los señores Jueces integrantes de la Segunda Sala Penal Especializada para procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima: de conformidad con los artículos 138, e incisos 3; 5; 8; 10 ; 11; 12; 21 del artículo 139, de la Constitución Política del Estado y de los artículos 11, 12, 23, 25, 28, 29, 45, 46, 49, 50, 57, 80, 83, 82, 93, 161, 162 primer párrafo y 317 primer párrafo del Código Penal; en concordancia con los artículos 280, 284 y 285 del Código de Procedimientos Penales, e impartiendo justicia en nombre de la Nación:

RESUELVEN:

1.- **DECLARARON FUNDADAS** las TACHAS planteadas por GISELLE MAYRA GIANNOTTI GRADOS y CARLOS ALBERTO TOMASIO DE LAMBARRI, respecto de los elementos referidos en la parte considerativa respectiva, con excepción de la tacha contra el USB, cassettes y discos duros cuestionados por éste..

2.- **INFUNDADA** la TACHA deducida por la defensa del procesado CARLOS ALBERTO TOMASIO DE LAMBARRI contra la testigo Katherine Roxana Castro Ángeles.

3.- **DECLARARON EXTINGUIDA LA ACCION PENAL POR PRESCRIPCION** por el delito contra la Libertad – Violación del Secreto de las Comunicaciones – Violación de Correspondencia deducida por la defensa de los procesados ELÍAS MANUEL PONCE FEIJOO, GISELLE MAYRA GIANNOTTI GRADOS, CARLOS ALBERTO TOMASIO DE LAMBARRI, JESÚS MANUEL OJEDA ANGLES, MARTÍN ALBERTO FERNÁNDEZ VIRHUEZ, en agravio de Rómulo Augusto León Alegría, Alberto Alfonso Borea Odría, Francisco Ricardo Soberón Garrido, Alex Ganoza Céspedes, Isaac Alfredo Barnechea García, Aníbal Gonzalo Raúl Quiroga León, Blanca Rosa Rivera Talavera, Carlos Federico Rubina Burgos, César Antonio Silva Ygnacio, César Augusto Nakasaki Servigón, Cristina Matossian Osorio de Pardo, Carlos Motte Picote, Fernando



**CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
SEGUNDA SALA ESPECIALIZADA EN LO PENAL PARA
PROCESOS CON REOS EN CARCEL
EXP. N° 99-09 (527-09)**

Tuesta Soldevilla, Fernando Miguel Rospigliosi Capurro, Giovanna Fabiola Vélez Fernández, Guido Rodrigo Lucioni Struque, Gustavo Adolfo Díaz Palacios, Víctor Hiroshi Aritomi Shinto, Jaime Adolfo Crosby Russo, Javier Maximiliano Alfredo Valle Riestra González Olachea, Guillermo Javier Estela Bravo, Jorge Armando Zarate Sousa, José Antonio García Belaúnde, José Moisés Asca Montoya, Julio Alberto Ortiz Cerro, Luciana Milagros León Romero, Lucy Esther Calderón Bondani, Luis Juan Alva Castro, Luis Humberto Delgado Aparicio Porta, Alan Gabriel Ludwig García Pérez, Luis Kishimoto Higa, Luis Alberto Silva Santisteban, Marco Antonio Torrey Motta, Mario Díaz Lugo, María Luisa de Cossio De Gonzáles Posada, Mariella Natalia Trujillo Würtelle, Martín Carlos Alberto Ugarriza Wetzell, Miguel Aragón Gastón, Miguel Raúl Arbulú Alva, Raúl Enrique Ortecho Castillo, León Gonzalo Rivera Talavera, Víctor Rolando Sousa Huanambal, Ricardo Miguel Pinedo Caldas, Rómulo Diego León Romero, Rosario Urango Prado, Sintia Paniora Allica, Mark Vito Villanella, Rosa Yuri Kobayashi Seki, Aldo Eduardo Bresani Torres, Ana Mariela Edith Guimas Reyna, Luis Bernardo Guillermo Guimas Reyna, Augusto Raymundo Umutia Prugue, José Gabriel del Castillo Flores, Blanche Marie Arevalo Fernald, Guillermo Herrera Montesinos, Héctor Jesús Chunga Morales, Bertha Beatriz Somocurcio León, Javier Diez Canseco Montero, Jorge Alfonso Alejandro Del Castillo Gálvez, María del Pilar Tello Leyva, Carmen Marusia Ruiz Caro Reyes, Miroslav Lauer Holoubek, Pedro Saúl Castillo Camillo, Remigio H. Morales Bermúdez, Ricardo Letts Colmenares, Sally Bowen, Mariella Aida Balbi Scameo, Baruch Ivcher Bronstein, Eduardo Hochschild Beeck, Empresa Editora Gaceta Jurídica, Estudio Quimper & Abogados Asociados, Estudio Valle Riestra, Instituto Mundo Libre, Revista Caretas - Empresa Editora Multimedia S.A.C., Villarán & Rodrigo S.A.C., EPRODICA - Equipo de Promoción y Desarrollo de Ica, Asociación Civil Foro Democrático, Instituto para una Alternativa Agraria C., Perú Monitor S.A., ONG APRODEH, Sindicato Único de Telefonía, DEMUS - Estudio para la Defensa y los Derechos de la Mujer, Mitchell Kenneth Trigueros Vela, Jenniffer Karoll Miller Arbocco, Dora María Avendaño Arana, Claude Maurice Mulder Bedoya, Ketty Meyling Wong Ayon, Miguel Omar Alberto Reyes Custodio, Humberto Martín Ortiz Pajuelo, Yanina Del Pilar Pando León, Luis Almanzor Sánchez De La Puente, Julio Cesar Del Águila Aguirre, Estudio Jurídico Barturen & Castillo Abogados Sociedad De Responsabilidad Limitada, Heriberto Manuel Benitez Rivas, Juan Francisco Nino Boggio Ubillus, Jorge Arturo Nicolás Lucar De La Portilla, Hugo Ernesto Jiménez Torero, Juan Miguel Servigon Nakano, Flores Tijero & Abogados (Flores-Tijero & Asociados SAC), Carlos Fernando Raffo Arce, Javier Diez Canseco Cisneros;

4.- ABSOLVER de la acusación fiscal a ELÍAS MANUEL PONCE FEIJOO, CARLOS ALBERTO TOMASIO DE LAMBARRI, GISELLE MAYRA GIANNOTTI GRADOS, MARTÍN ALBERTO FERNÁNDEZ VIRHUEZ, JESÚS MANUEL OJEDA ANGLÉS, JESÚS JUAN TIRADO SEGUÍN, ALBERTO OSWALDO SALAS CORTEZ Y PABLO ERIKS MARTELL ESPINOZA, cuyas generales de



Ley obran en la parte introductoria de la presente sentencia, por la comisión del delito Contra la Libertad - Violación del Secreto de las Comunicaciones – Interceptación Telefónica en calidad de integrantes de una organización criminal en agravio del Estudio Aurelio García Sayán Abogados S.C.R.Ltda; Remigio H. Morales Bermúdez Pedraglio; Elizabeth Schwarz de Acha de Olcese; Virly Del Carmen Torres Curvelo; Genaro Delgado Parker; Estudio Jurídico Enrique Bardales & Asociados y Estudio Linares Abogados S.C.R.Ltda.

5.- ABSOLVER de la acusación fiscal a JESUS JUAN TIRADO SEGUIN como coautor del delito contra la Libertad – Violación del Secreto de las Comunicaciones- Interceptación Telefónica, en agravio de Rómulo León Alegría y otros.

6.- ABSOLVER: a ALBERTO OSWALDO SALAS CORTEZ Y PABLO ERIKS MARTELL ESPINOZA , por delito contra la Libertad –Violación del Secreto de las Comunicaciones- Interceptación Telefónica, en agravio de Rogelio Antenor Canchez Guzmán, Isabel Paiva Zarate, ONG Grufides, Empresa AMBEV Perú, Agroindustria Laredo.

7.- ABSOLVER a ALBERTO OSWALDO SALAS CORTEZ Y PABLO ERIKS MARTELL ESPINOZA, como autores del delito contra la Tranquilidad Pública-Asociación Ilícita para Delinquir en agravio del Estado.

8.- CONDENAR a ELÍAS MANUEL PONCE FEIJOO, CARLOS ALBERTO TOMASIO DE LAMBARRI, GISELLE MAYRA GIANNOTTI GRADOS, MARTÍN ALBERTO FERNÁNDEZ VIRHUEZ y JESÚS MANUEL OJEDA ANGLES, como coautores del delito Contra la Libertad - Violación del Secreto de las Comunicaciones – Interceptación Telefónica, en agravio de Rómulo Augusto León Alegría, Alberto Quimper Herrera, Alberto Fortunato Marcos Ortega, Roberto Enrique Paredes Chirinos, José María Revilla López, Rogelio Antenor Canches Guzmán, Isabel Paiva Zárate, ONG GRUFIDES, Empresa AMBEV PERU, Agroindustria LAREDO, Estudio Quimper & Abogados Asociados , Estudio Jurídico Fernández Concha SCRL (Estudio Fernández – Concha Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada); Alexander Martín Kouri Bumachar; Municipalidad Provincial del Callao; y, Augusto Oscar Rubini Vargas en su calidad de representante de la Empresa TRUPAL.

9.- CONDENAR a ALBERTO OSWALDO SALAS CORTEZ Y PABLO ERIKS MARTELL ESPINOZA, como cómplices primarios del delito Contra la Libertad - Violación del Secreto de las Comunicaciones – Interceptación Telefónica en agravio de Rómulo Augusto León Alegría, Alberto Quimper Herrera, Alberto Fortunato Marcos Ortega, Roberto Enrique Paredes Chirinos, José María Revilla López y Estudio Quimper & Abogados Asociados.



10.- CONDENAR: a ELÍAS MANUEL PONCE FEJOO, CARLOS ALBERTO TOMASIO DE LAMBARRI, GISELLE MAYRA GIANNOTTI GRADOS, MARTÍN ALBERTO FERNÁNDEZ VIRHUEZ, JESÚS MANUEL OJEDA ANGLES y JESÚS JUAN TIRADO SEGUÍN, como autores del delito contra la Tranquilidad Pública- Asociación Ilícita para Delinquir, en agravio del Estado:

Como tal les impusieron, las siguientes penas:

1.- A ELÍAS MANUEL PONCE FEJOO: SIETE AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD EFECTIVA LA MISMA QUE CON LA CARCELERIA QUE CUMPLIO DESDE EL OCHO DE ENERO DEL 2009, HASTA EL 10 DE ENERO DEL DOS MIL DOCE, (3 AÑOS CON 2 DIAS), Y DEL 23 DE MARZO DEL DOS MIL DOCE, VENCERA EL 20 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.

2.- A CARLOS ALBERTO TOMASIO DE LAMBARRI: SIETE AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD EFECTIVA, LA MISMA QUE CON DESCUENTO DE LA CARCELERIA QUE VENIA SUFRIENDO DESDE EL OCHO DE ENERO DEL DOS MIL NUEVE, HASTA EL DIEZ DE ENERO DEL DOS MIL DOCE (3 AÑOS CON 2 DIAS), Y DEL 23 DE MARZO DEL DOS MIL DOCE, VENCERA EL 20 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.

3.- A GISELLE MAYRA GIANNOTTI GRADOS, LA PENA DE CINCO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD EFECTIVA, QUE CON DESCUENTO DE LA CARCELERIA SUFRIDA DESDE EL OCHO DE ENERO DEL DOS MIL NUEVE, HASTA EL QUINCE DE DICIEMBRE DEL MISMO AÑO, (11 MESES CON 7 DIAS), Y A PARTIR DEL 23 DE MARZO DEL DOS MIL DOCE, VENCERA EL QUINCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.

4.- A MARTÍN ALBERTO FERNÁNDEZ VIRHUEZ, CINCO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD EFECTIVA, LA QUE CON DESCUENTO DE LA CARCELRIA SUFRIDA DESDE EL OCHO DE ENERO DEL DOS MIL NUEVE, HASTA EL DIECIOCHO DE ABRIL DEL DOS MIL NUEVE (3 MESES CON 10 DIAS), Y DEL 23 DE MARZO DEL DOS MIL DOCE, VENCERA EL DOCE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.

5.- A JESÚS MANUEL OJEDA ANGLES, CINCO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD EFECTIVA, LA QUE CON DESCUENTO DE LA CARCELERIA SUFRIDA DESDE EL NUEVE DE ENERO DEL DOS MIL NUEVE HASTA EL NUEVE DE ABRIL DEL DOS MIL DIEZ, (UN AÑO TRES MESES Y UN DÍA), Y DEL 23 DE MARZO DEL DOS MIL DOCE, VENCERA EL VEINTE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.



6.- A JESÚS JUAN TIRADO SEGUÍN: TRES AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, CUYA EJECUCION SE SUSPENDE POR EL TERMINO DE DOS AÑOS, BAJO REGLAS DE CONDUCTA.

7.- A ALBERTO OSWALDO SALAS CORTEZ, DOS AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, LA QUE SE SUSPENDE EN SU EJECUCION POR EL PLAZO DE UN AÑO SUJETO A REGLAS DE CONDUCTA.

8.- A PABLO ERIKS MARTELL ESPINOZA, DOS AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, LA QUE SE SUSPENDE EN SU EJECUCION POR EL TERMINO DE UN AÑO, SUJETO A REGLAS DE CONDUCTA.

IMPUSIERON COMO REGLAS DE CONDUCTA PARA LOS SENTENCIADOS A PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD SUSPENDIDA LAS SIGUIENTES: a) No variar de domicilio ni de lugar de residencia sin previo conocimiento del juez de ejecución; b) no salir fuera del país sin autorización del juez de ejecución; c) concurrir al local del juzgado de ejecución cada 60 días a dar cuenta de sus actividades y firmar el correspondiente registro de control; y d) reparar el daño ocasionado en los extremos señalados en esta sentencia; bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de aplicarse lo que dispone el artículo 59 del Código Penal.

FIJARON: por concepto de reparación civil la suma de VEINTE MIL NUEVOS SOLES QUE DEBERAN PAGAR SOLIDARIAMENTE LOS SENTENCIADOS POR DELITO DE INTERCEPTACIÓN TELEFÓNICA A FAVOR DE CADA UNO DE LOS AGRAVIADOS y la suma de DOSCIENTOS MIL NUEVOS SOLES QUE TAMBIÉN DEBERAN ABONAR EN FORMA SOLIDARIA A FAVOR DEL ESTADO, POR EL DELITO DE ASOCIACION ILÍCITA PARA DELINQUIR.

ORDENARON: remitir copias certificadas de las transcripciones de audio de fojas 35735 a 35737 del tomo 55 archivos HORMIGA 2006-06-14 11-16-27.WAV a la Fiscalía Superior Coordinadora de las Fiscalías Especializadas en Criminalidad Organizada a efectos de que proceda conforme a Ley;

DISPUSIERON: se remitan copias certificadas a la Fiscalía Superior Coordinadora de Criminalidad Organizada, respecto a que las personas de Miguel Rubini Vargas y Fernando Rubini Vargas se encontrarían en la condición de agraviados del delito de Interceptación Telefónica; se remita copia certificada de las piezas instrumentales solicitadas a la Tercera Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad Organizada, respecto a Pedro Martín Rosell Grijalba; se remita copia certificada de las piezas instrumentales solicitadas a la Fiscalía Superior Especializada en Criminalidad Organizada, respecto a Carlos Daniel Barba Daza; se remita copia certificada al Ministerio



Público de las piezas instrumentales solicitadas por el Fiscal Superior, respecto a la persona de José Marco Sandoval Jáuregui; se remita copia certificada de la declaración en Juicio Oral de Rómulo León Alegría a la Fiscalía Superior Coordinadora de las Fiscalías Anticorrupción; se remita copia certificada de las piezas instrumentales solicitadas a la Fiscalía Superior Coordinadora de las Fiscalías Anticorrupción; en relación a los Equipos TRIGGERFISH; se remita copia certificada de las piezas instrumentales solicitadas a la Segunda Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada; en relación a Francis James Allisson Oyague; se remitan copias certificadas al Ministerio Público de las declaraciones de Martín Alberto Fernández Virhuez realizadas durante las sesiones de Juicio Oral; así como copias de las partes pertinentes de la presente sentencia; en relación a Pedro Augusto García Llaque e Ismael Medardo Matta Uribe; se remitan copias al Ministerio Público y al Congreso de la República, para que en uso de sus atribuciones las investigaciones pertinentes respecto de: (1) Alán Gabriel García Pérez, (2) Jorge Alfonso Alejandro Del Castillo Gálvez; (3) Hernán Garrido Lecca; (4) Elmer Miguel Hidalgo Medina; (5) Carlos Morán Soto; (6) Mateo Castañeda Segovia y (7) Orestes Walter Milla López, en consecuencia; en consecuencia dispusieron, que por Secretaría de Mesa de Partes, se forme los cuadernos respectivos con copias de las partes pertinentes y de las piezas procesales citadas en la parte pertinente de la presente resolución.

RESOLVIERON: No ha lugar a la remisión de copias certificadas al Ministerio Público, respecto de Ruth Amparo Tenicela Calderón y Walter Enrique Capa Gurbillón;

SEÑALARON: carece de objeto lo solicitado por el Ministerio Público en relación a las personas de Remigio Morales Bermúdez y Elizabeth Schwarz de Acha de Olcese, conforme a los fundamentos en la presente resolución;

RESOLVIERON: No ha lugar comprenderse como agraviado directo al señor Enrique Bardales Mendoza del delito de interceptación telefónica por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

DISPUSIERON: La disolución de la empresa Business Track Sociedad Anónima Cerrada, debiendo anotarse este extremo en Registros Públicos, publicarse este extremo en el diario oficial y notificarse a la entidad correspondiente a fin de que proceda a la formalización de la liquidación con arreglo a ley.

ORDENARON: La devolución a la sentenciada GISELLE MAYRA GIANNOTTI GRADOS de los siguientes bienes: a).- Reloj pulsera marca IWC SCHAFFHAUSEN modelo cronógrafo, correa de plástico con número de serie 3078403 y b).- El adaptador de memoria MINI CARD marca DIGIPOWER, dejándose constancia en autos.



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
SEGUNDA SALA ESPECIALIZADA EN LO PENAL PARA
PROCESOS CON REOS EN CARCEL
EXP. N° 99-09 (527-09)

ORDENARON: EL ENCARCELAMIENTO DE LOS SENTENCIADOS A PENA EFECTIVA DE LA LIBERTAD, EN EL ESTABLECIMIENTO PENAL CORRESPONDIENTE, OFICIÁNDOSE.

DISPUSIERON: Que, consentida o ejecutoriada que sea la presente sentencia, se remitan los testimonios de condena y se proceda a los registros correspondientes;

DISPUSIERON: Que, consentida y/ o ejecutoriada que sea los extremos absolutorios y de prescripción se anulen los antecedentes penales y judiciales; oficiándose y archivándose en su oportunidad donde corresponda con arreglo a ley.

SS.

Sequeiros Vargas
Presidente y DD.

Mendoza Retamozo
Juez Superior

Saquicuray Sanchez
Juez Superior

ANEXO 9: TABLA DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE VARIABLES

CUADRO DE SISTEMATIZACIÓN DE VARIABLES					
clasificación de variables	VARIABLES	INDICADORES	SUBINDICADORES		RESULTADOS
VARIABLES ANALÍTICAS	ASPECTOS TAXATIVOS	Género de la infracción	delito		1097
			falta		43
		Clases de prescripción	de la acción penal		1138
			de la sanción penal		2
		Tipo del proceso	sumario		988
			ordinario		100
			querrela		8
		Tipo del proceso	Falta (iniciado como delito y terminado como falta)		43
			otros		1
			Lima		1091
	ASPECTOS FORMAL-ADMINISTRATIVOS	Distrito judicial	Otros		49
		Juzgados penales	19		1065
		Salas penales	Suprema		75
		Jueces penales			29
		expedientes			1140
		T. Ordinaria			11
		T. Extraordinaria			1080
VARIABLES EMPÍRICAS	PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL	Plazo legal	delitos-	penas diferentes a la privativa de la libertad	4
				penas temporales	0
				cadena perpetua	0
			faltas	para primarios	43
				para reincidentes	0
	PRESCRIPCIÓN DE LA SANCIÓN PENAL	T. Ordinaria	delitos	pena conminada	2
		T. Extraordinaria	delitos	de la pena conminada	0
		T. Plazo legal	faltas	para primarios	0
				para reincidentes	0

CUADRO DE SISTEMATIZACIÓN DE VARIABLES					
clasificación de variables	VARIABLES	INDICADORES	SUBINDICADORES	RESULTADOS	
VARIABLES INSTRUMENTALES	Cómputo del tiempo	Según el tipo de infracción penal	delito	tentativa instantáneo continuado permanente otros	3 1022 28 42 0
			falta	tentativa para los casos del art. 441 y 444, primer y segundo párrafo	0
				instantáneo	43
				continuado	0
				permanente	0
				otros	0
			pena	delitos	2 0 0 0 0
				faltas	0 0 0 0 0
					0
					0
			Según los tipos de sanción	medida de seguridad para delitos	0
				pena y medida de seguridad para delitos	0
				Por la edad del imputado (considerando delito y falta)	25
				Según las condiciones del agente	1095
				Por la cantidad de sujetos	20
				coautor	998
					137

CUADRO DE SISTEMATIZACIÓN DE VARIABLES					
clasificación de variables	VARIABLES	INDICADORES	SUBINDICADORES	RESULTADOS	
			cómplice primario	3	
			cómplice secundario	1	
			Instigador	1	
			cómplice psicológico	0	
			concurso ideal	28	
			concurso real	18	
			concurso ideal y real	0	
			concurso real e ideal	0	
				0	
				0	
		Por concursos (considerando delito y falta)	No concurso	1094	
			Habitualidad	0	
			Reincidencia	0	
			funcionario público	4	
		Por la función desempeñada	servidor público	0	
			delito común	1136	
	Según la continuidad o no del plazo de prescripción	Interrupción	acción penal	sólo para delito 1086	para falta y delito 1129
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
		de la sanción penal		0	
				0	
				0	
				0	

CUADRO DE SISTEMATIZACIÓN DE VARIABLES					
clasificación de variables	VARIABLES	INDICADORES	SUBINDICADORES	RESULTADOS	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				9	
				0	
		Suspensión	acción penal	0	
				0	
				0	

ÍNDICE ANALÍTICO

A

Absolución (61, 197)
 Acción (66, 100)
 Acción penal (84, 129)
 Acción privada (46, 70)
 Aceptación (62, 143)
 Actuaciones de las autoridades judiciales (144, 148)
 Actuaciones del Ministerio Público (123, 144)
 Amnistía (249, 254)
 Antejudio (164, 231)
 Anteproyecto de 1900-1902 (82, 177)
 Anteproyecto de Cornejo (88)
 Anteproyecto de 1916 (537)
 Aplicación (83, 96)
 Asistencia judicial (20, 113)

B

Bienes jurídicos (61, 188)

C

Calidad de la sentencia ejecutoriada condenatoria (196)
 Calidad de prófugo de la justicia (196)
 Casos especiales de prescripción (20, 220)
 Causa personal de exclusión de la pena (59)
 Causal absolutoria o personal de exclusión de pena (59)
 Causales personales de exclusión de pena (62)
 Causas de exclusión, anulación o excusas absolutorias (59)
 Causas de exclusión de la pena (59, 65)
 Causas de extinción de la responsabilidad penal (59, 66)
 Causas de la extinción punitiva del estado (65)
 Causas personales que cancelan la punibilidad (65)
 Causas personales que excluyen la punibilidad (59, 63)
 Causas políticas (o extrínsecas) (118)
 Circunstancias agravantes o atenuantes (genéricas o específicas) (154)
 Código Penal de 1863 (81, 82)
 Código de Justicia Militar (D.L. N° 23214) (97)
 Código de los Niños y Adolescentes (D.L. N° 26102) (99, 100)
 Código de Procedimientos (354) Penales de 1939 (dado por Ley N° 9014) (357, 408)
 Código Penal de 1924 (85, 254, 379)
 Código Penal de 1991 (88, 128, 283)
 Código Penal alemán de 1870 (derogado) (451)
 Código Penal colombiano de 2000 (473)
 Código Penal italiano (19 de octubre de 1930) (505)
 Código Penal italiano de 1889 (derogado) (364, 512)
 Código Penal alemán (136, 449, 451)
 Código Penal argentino de 1922 (454)
 Código Penal cubano de 1988 (Ley N° 62 del 30-12-87) (480)
 Código Penal chileno (476)
 Código Penal de Brasil de 1940 (reformado por Ley N° 7209 del 11-7-1984) (465)

Código Penal de Austria (Ley Federal sobre acciones sancionadas judicialmente con penas, 23 de enero de 1974) (461)
 Código Penal de Bolivia (462)
 Código Penal de Cuba (Ley 21. Código Penal, hoy ya derogado) (482)
 Código Penal de Francia: Ley Nº 92-683 del 22 de julio de 1992 (500)
 Código Penal de Guatemala (503)
 Código Penal de la República de Costa Rica (de 1970) (479)
 Código Penal de México (514)
 Código Penal de Panamá (520)
 Código Penal de Portugal (522)
 Código Penal de Puerto Rico (vigente desde el 22 de enero de 1975) (527)
 Código Penal de República Dominicana (No regula la prescripción) (529)
 Código Penal de Santa Cruz del Estado Sur-Peruano (80, 375)
 Código Penal del Brasil 1969 (363)
 Código Penal del Ecuador (484)
 Código Penal del Perú de 1863 (376)
 Código Penal español (25444. Ley Orgánica 10/1995, del 23 de noviembre, del Código Penal (493)
 Código Penal español (Texto refundido de 1983 - hoy derogado) (495)
 Código Penal para el Gran Ducado de Toscana (dado en Florencia, a los 20 días del mes de junio de 1854) (503)
 Código Penal suizo (213, 535)
 Código Penal Tipo para Latinoamérica (542)
 Combinar las causales de extinción (156)
 Comisión del delito (41, 172)
 Compensación (55, 203)
 Compuestas (220, 390)
 Concurrentes (223, 668)
 Concurso ideal (174, 322)
 Concurso real (93, 95, 177)
 Concurso real heterogéneo (177, 322)
 Concurso real homogéneo (177)
 Concursos (17, 174)
 Condena de ejecución condicional (195)
 Condiciones formales (105)
 Condiciones objetivas de punibilidad (61)
 Condiciones de procedibilidad o supuestos formales (59)
 Condiciones de procedibilidad (63)
 Condiciones objetivas de punibilidad o penalidad (59)
 Conflicto de leyes en el tiempo (211, 264)
 Conjuntas (139, 221)
 Conminación acumulativa (221)
 Conminación alternativa (220)
 Conminación conjunta o acumulativa (221)
 Conminación disyuntiva o “alternativa” (220)
 Consecuencia accesoria del comiso (55)
 Consecuencias accesorias (54, 209)
 Consecuencias jurídicas (19, 53)
 Consecuencias jurídicas del hecho punible (54, 55)
 Contumacia (257, 260)
 Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en materia penal (280)
 Convenio Europeo de Asistencia Judicial (280)
 Cosa juzgada (33, 69, 149)
 Crímenes (24, 97, 249)
 Criminalización-Decriminalización (19, 75)
 Criterios de la determinación judicial de la pena (60)
 Cuestión prejudicial (160, 162)

Cuestión previa (1159, 161, 167)
 Culpabilidad (58, 113, 182)
 Cumplimiento de la pena impuesta por sentencia (67)
 Cumplimiento de la pena impuesta vía sentencia (73)

D

D. L. N° 17388 (87, 384)
 D. L. N° 17106 (87, 385)
 D. Leg. 121 (384)
 Definiciones (29, 120)
 De la ejecución de la pena (193, 224)
 De la persecución penal (154, 171)
 De la prescripción de la persecución penal (Art. 83°) (121, 144)
 De oficio (269, 270)
 Declaración judicial firme de quiebra (64)
 Declaración de la prescripción (269)
 Declaración de parte (270)

F

Falta (92, 95)
 Funcionario (57, 186, 233)

I

Imprescriptibilidad (247, 282)

L

Ley N° 9014 (85, 408)
 Ley N° 10203 (86, 384)
 Ley N° 9014 (85, 383)
 Leyes Generales en el Código Criminal (80, 374)
 Libertad condicional (85, 195, 541)
 Libramientos indebidos (64)
 Los Anteproyectos de 1877 y 1900-1902 (375)
 Los casos de imprescriptibilidad (200, 247)
 Los delitos de actividad (179)

M

Medidas (100, 129)
 Medidas de seguridad (228, 321)
 Medios de reacción jurídico criminales (55)
 Merecimiento (58, 73)
 Mixtos (203, 273)
 Muerte (68, 72)

N

Naturaleza jurídica (103, 111)
 Naturaleza de cada pena (140)
 Ne bis in idem (262)
 Necesidad de pena (58, 120)
 Nomenclatura (102)
 Nulidad de lo actuado (160)

O

Obstáculos procesales (59, 159)
 Omisión (123, 147)
 Ordinaria (88, 130)
 Otras teorías mixtas (119)
 Otro procedimiento (161, 281)

P

Parte General del Proyecto de Código Penal para la República de Argentina 1937 (459)
 Pena alternativa (140, 226)
 Pena conminada (139, 204)
 Pena de inhabilitación (140, 224)
 Pena de multa (140, 227)
 Pena única principal (140)
 Penalidad (57, 59)
 Penas (139, 224)
 Penas conjuntas que prescriben considerando la pena de mayor gravedad (139)
 Penas conjuntas que prescriben independientemente (140)
 Penas conjuntas (139, 224)
 Penometría (55)
 Perdón del ofendido (74)
 Plazo de caducidad (23, 233)
 Plazo de prescripción (92, 154)
 Plazo de prescripción para funcionarios y servidores públicos (233)
 Por decisión jurisdiccional (73)
 Por el comienzo del cumplimiento (152)
 Por el comportamiento del autor (73)
 Por el comportamiento de la víctima (71, 74)
 Por el criterio de un hecho natural (68, 72)
 Por el efecto jurídico de los hechos sancionados penalmente (69)
 Por haber sido aprehendido el condenado a causa de la comisión de un nuevo delito doloso (143, 153)
 Por interrupción debido a cualquier causa, de la ejecución de la condena ya empezada a cumplir (195)
 Por la solución de conflictos privados (69)
 Por muerte del imputado (68)
 Por muerte del condenado (72)
 Por prescripción (68, 72)
 Por un acto de gracia (68, 72)
 Prescripción (112, 220)
 Prescripción absoluta (131, 264)
 Prescripción de la persecución penal (102, 154)
 Prescripción de la acción penal (79, 313)
 Prescripción de la ejecución penal (102, 120)
 Prescripción de la pena (102)
 Prescripción de la sanción (100, 154)
 Prescripción de las medidas de seguridad (228)
 Presupuestos procesales (59, 159)
 Presupuestos que apartan la punibilidad (60)
 Pretensión civil (197, 203)
 Pretensión penal (134, 201)
 Prevención general y especial (117, 120)
 Primer Anteproyecto de Código Penal de la comisión parlamentaria nombrada conforme a la Ley N° 5168 (380)
 Principio impersonal u objetivo (123)
 Principio de personalidad (122)

Principio o efecto impersonal (124)
 Privado (32, 71)
 Procedimiento criminal (102, 136)
 Procedimiento de Hábeas Corpus o Amparo (64)
 Procedimiento penal (64, 160)
 Procesal (77, 105)
 Proceso civil (161)
 Prohibición de toda responsabilidad objetiva (111)
 Proporcionalidad (61, 143)
 Propuesta Alternativa de la Parte General del Código Penal (495)
 Propuesta de Anteproyecto del nuevo Código Penal de 1984 (496)
 Provocado (71, 125)
 Proyecto de 1916 (84, 378)
 Proyecto alemán de 1962 (451)
 Proyecto alternativo de código penal alemán de 1966 (453)
 Proyecto de 1918 (Proyecto de C.P. suizo de 1918) (213)
 Proyecto de Código Procesal Penal (217, 409)
 Proyecto de Código (Corte Suprema de Justicia. Rep. de El Salvador, 1994) (491)
 Proyecto de Código de Procedimiento Penal (Dr. Walter Guerrero Vivanco. Presidente 1992, Quito-Ecuador) (488)
 Proyecto de Código Penal de setiembre de 1984 (385)
 Proyecto de Código Penal de noviembre de 1984 (386)
 Proyecto de Código Penal de agosto de 1985 (388)
 Proyecto de Código Penal de abril de 1986 (390)
 Proyecto de Código Penal de enero de 1991 (396)
 Proyecto de Código Penal de 1906 (458)
 Proyecto de Código Penal. Aprobado por la Comisión Revisora (Publicado en separata especial del diario “El Peruano” el 17 de julio de 1990) (394)
 Proyecto de Ley Orgánica del Código Penal (Ministerio de Justicia, 1992) (497)
 Proyecto de Manuel Lorenzo De Vidaurre de 1828 (80, 355, 374)
 Proyecto de reformas de la parte general del C.P. de Argentina (1987) (460)
 Proyecto del Libro Primero; parte general del Código Penal de setiembre de 1989 (392)
 Público (105, 115)
 Punibilidad (57, 59, 61)

Q

Querella (146, 311)

R

Rehabilitación (60, 208)
 Renuncia (55, 115)
 Renuncia a la pena (55)
 Reparación civil (55, 202)
 Reserva de pena (55)
 Responsabilidad (23, 53, 137)
 Responsabilidad civil derivada del delito (55)
 Responsabilidad objetiva (111, 233)
 Restrictivas de derechos (140)
 Retroactividad in bonam partem (24, 111)

S

Sanciones penales (38, 57)
 Seguridad jurídica (119, 238)
 Sistema de prescripción gradual (157)
 Sistema de la cláusula genérica (126)
 Sistemas (126)

Si el imputado comete nuevo delito doloso (147)
 Sobrecriminalización (75)
 Sobreseer (160)
 Suspensión (159, 167)
 Suspensión condicional de la pena (55)
 Suspensión en la prescripción extraordinaria (167)

T

Tácito (71, 259)
 Técnica legislativa (126, 286)
 Teoría civilista (201)
 Teoría de la coerción materialmente penal (59)
 Teoría de la independencia (107, 177)
 Teoría individualista (194)
 Teoría de la motivación normativa (212)
 Teoría de la negación (117)
 Teoría material (103, 107)
 Teoría mixta (107, 111)
 Teoría mixta: Del hecho natural y de la enmienda (118)
 Teoría penal (201)
 Teoría positivista del tiempo formalizado (115)
 Teoría Procesal (105, 111)
 Teoría unitaria (196)
 Teorías preventivas (117)
 Teorías que fundamentan o proscriben la prescripción (112)
 Texto de la Constitución de 1993 (404)
 Texto original del Código Penal de Brasil (468)
 Transacción (70, 74)
 Transcurso del tiempo (118, 106)

V

Vía casación (271)